REPUBLICA DE COLOMBIA

GACETA JUDICIAL

ORGANO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TOMO CXCI

1987



PRIMER SEMESTRE

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

BOGOTA, D. E., COLOMBIA - IMPRENTA NACIONAL - 1988

MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y DIGNATARIOS DE LA MISMA

1987

SALA PLENA

Doctores JUAN HERNANDEZ SAENZ, **Presidente.**
JAIRO DUQUE PEREZ, **Vicepresidente.**
Inés Galvis de Benavides,
Alfredo Beltrán Sierra,
Secretarios

SALA CIVIL

Doctores JOSE ALEJANDRO BONIVENTO FERNANDEZ, **Presidente.**
Inés Galvis de Benavides,
Alfredo Beltrán Sierra, Secretarios.

MAGISTRADOS:

Doctores **José Alejandro Bonivento Fernández.**
Eduardo García Sarmiento.
Héctor Gómez Uribe.
Héctor Marín Naranjo.
Alberto Ospina Botero.
Rafael Romero Sierra.

SALA PENAL

Doctores JORGE CARREÑO LUENGAS, **Presidente.**
Guillermo Salazar Otero, Secretario.

MAGISTRADOS:

Doctores **Jorge Carreño Luengas.**
Guillermo Dávila Muñoz.
Guillermo Duque Ruiz.
Jaime Giraldo Angel.

Gustavo Gómez Velásquez.
Rodolfo Mantilla Jácome.
Lisandro Martínez Zúñiga.
Edgar Saavedra Rojas.

SALA LABORAL

Doctores RAFAEL BAQUERO HERRERA, **Presidente.**
Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

MAGISTRADOS:

Doctores **Rafael Baquero Herrera.**
Nemesio Camacho Rodríguez.
Ramón Zúñiga Valverde.
Manuel Enrique Daza Alvarez.
Juan Hernández Sáenz.
Jorge Iván Palacio Palacio.
Jacobo Pérez Escobar.

SALA CONSTITUCIONAL

Doctores FABIO MORON DIAZ, **Presidente.**
Betty Cuervo Zárrate.
Luz Emilia Jiménez de Molina,
Secretarias.

MAGISTRADOS:

Doctores **Jairo E. Duque Pérez.**
Hernando Gómez Otálora
Fabio Morón Díaz.
Jesús Vallejo Mejía.

RELATORES

Doctores **Carmen Rosa Avella de Cortés** - Sala Civil.
Hilda Leonor Cortés Gómez - Sala Penal.
Esperanza Inés Márquez Ortiz -
Sala Laboral.
Miguel Antonio Roa Castelblanco -
Sala Constitucional

GACETA JUDICIAL

ORGANO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECTORES:

RELATORA SALA CIVIL	DOCTORA CARMEN ROSA AVELLA DE CORTES
RELATORA SALA PENAL	DOCTORA HILDA LEONOR CORTES GOMEZ
RELATORA SALA LABORAL	DOCTORA ESPERANZA INES MARQUEZ ORTIZ
RELATOR SALA CONSTITUCIONAL	DOCTOR MIGUEL ANTONIO ROA CASTELBLANCO

TOMO CXCI - Bogotá - Colombia - Enero a Junio de 1987 - Número 2340

POR LA ESTRUCTURA MIXTA DE NUESTRO PROCEDIMIENTO PENAL QUE NO SIGUE EL SISTEMA ACUSATORIO EN EL QUE EL DEBATE QUEDA CONCRETADO IRREMISIBLEMENTE A LOS TERMINOS EN QUE LAS PARTES LO PLANTEAN, SINO QUE SE INSPIRA EN EL PRINCIPIO INQUISITIVO, AL JUEZ COMO REPRESENTANTE DEL ESTADO, ES A QUIEN CORRESPONDE LA AVERIGUACION Y REPRESION DE LOS DELITOS. EL RECURSO DE APELACION OTORGA COMPETENCIA *AL JUEZ O TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA* PARA DECIDIR SIN LIMITACION ALGUNA SOBRE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

Exequible el art. 3o. de la ley 17 de 1975 en la parte demandada.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 1.

Referencia: Expediente número 1512.

Demanda de inexequibilidad parcial contra el artículo 3o. de la ley 17 de 1975 (artículo 197 bis del Código de Procedimiento Penal).

Actor: *Alfonso López Carrascal.*

Magistrado sustanciador: *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según acta No. 01.

Bogotá, D. E., enero veintidós (22) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. La acción

Haciendo uso del derecho que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano Alfonso López Carrascal solicita a la Corte declarar la inexequibilidad parcial del artículo 3º de la Ley 17 de 1975 que adicionó el Código de Procedimiento Penal (Decreto 409 de 1971) cuya vigencia fue restablecida por la Ley 2ª de 1982.

Agotados los trámites que son propios de estos procesos de inexequibilidad y obtenido el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre el fondo, previas las siguientes consideraciones.

II. Norma acusada

Se transcribe a continuación el texto del artículo 3º de la Ley 17 de 1975 anotando que la parte subrayada corresponde al fragmento materia de la acusación.

"LEY 17 DE 1975
(abril 2)

"Por la cual se modifican algunas normas del Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones".

"Artículo 3º. Llevará el No. 197 bis del Código de Procedimiento Penal y quedará así:

Artículo 197 bis. *Reformatio in pejus.* El recurso de apelación otorga competencia al juez o al Tribunal de segunda instancia para decidir *sin limitación alguna* sobre la providencia impugnada".

III. Normas violadas y Concepto de la violación

Considera el actor que la frase explicativa contenida en las expresiones acusadas, vulnera los artículos 16, 23 y 26 de la Constitución Política, con fundamento en las siguientes razones:

1. El quebranto del artículo 16 de la Carta lo plantea sobre la base de que los procedimientos son reglados y han sido establecidos para la efectividad de los derechos y por tanto el legislador "debe evitar dar facultades ilímites al juez", que admitan la posibilidad de interpretaciones arbitrarias.

"El Estado tiene deberes sociales que cumplir y entre ellos someter el proceso penal de las personas al llamado debido proceso y no perder de vista que se trata con el procedimiento de garantizar derechos particulares del reo. Choca igualmente contra

el esquema procesal penal, que mientras la Corte dentro del recurso extraordinario de revisión donde tiene la obligación de estudiar todo el proceso, no pueda empeorar la situación del procesado, en cambio en un recurso de apelación que apenas se va a estudiar la 'providencia impugnada', pueda el juez de segunda instancia decidir 'sin limitación alguna' ".

2. El artículo 23 de la Constitución se infringe porque "si el sistema procesal es reglado, no puede el juez de segunda instancia tener una competencia ilímite" para decidir sobre la providencia impugnada, toda vez que conforme al canon citado, el motivo debe estar previamente definido en la Ley y ajustado a las formalidades que en ella se señalen.

3. Afirma que el artículo 26 de la Constitución que "es la verdadera fuente del derecho penal garantiza el debido proceso para evitar la arbitrariedad del juzgador y por ello 'obliga al sistema reglado y no libre' y que, sus postulados se desconocen cuando se consagra una competencia ilimitada del juez de segunda instancia que rompe el principio de la favorabilidad, ya que, 'se apela para remediar una situación y no para empeorarla'. Y además, restringe el derecho de defensa del reo porque éste se abstiene de apelar 'temeroso de que se le empeore su situación, lo cual pugna con el espíritu del recurso de apelación que fue consagrado desde la Revolución Francesa para controlar la arbitrariedad del reo'; y en el derecho procesal contemporáneo para 'permitir al superior remediar una situación gravosa planteada por el inferior dentro de la jerarquía funcional del juzgamiento' ".

Que cuando la norma acusada estatuye que el *ad-quem* puede decidir "sin limitación alguna" no le pone cortapisa alguna a su decisión "lo que choca contra el esquema procesal del debido proceso y una restricción al derecho de defensa".

IV. Concepto del Procurador General

El Jefe del Ministerio Público se aparta de las argumentaciones del actor y solicita a la Corte que declare exequible las expresiones "sin limitación alguna" contenida en el artículo 3o. de la Ley 17 de 1975, con apoyo en los argumentos siguientes:

a) Que la prohibición de la *reformatio in pejus* "no se fundamenta en una rigurosa lógica jurídica, sino en una política criminal que se afianzó en las legislaciones penales de principios de este siglo, como una reacción contra los procedimientos antiguos que no garantizaban los derechos de los sindicados" y por ello tal prohibición es propia del proceso civil en que se ventila "un conflicto de intereses que pueden ser transados y aun renunciados por las partes, mientras que el proceso penal, salvo pocas excepciones se sigue oficiosamente en interés público, para que el Estado pueda ejercer el derecho punitivo contra la persona que haya infringido la ley penal".

Después de anotar las diferencias fundamentales entre los fines que persiguen el procedimiento civil y penal infiere que resulta obvio que en esta última disciplina sea menos importante la celeridad del juicio "que asegurar por todos los medios una sentencia justa que garantice la absolución del inocente y la condena del culpable" y que en contra de lo que piensan algunos el fin primordial, de todo proceso "es la equidad y por lo general el superior ofrece una mayor garantía, por tratarse de un juez

colegiado o de un funcionario que se supone con mayor experiencia y conocimiento que el *a-quo*";

b) Que la resolución de la apelación sin limitaciones, no atenta contra el derecho de defensa de los sindicados "pues si son inocentes ésta segunda opción sirve precisamente para el reconocimiento de la inocencia y si son culpables, para que la condena corresponda a la realidad de los hechos".

c) Rechaza las hipótesis carentes de fundamento que hace el actor por considerar que son contrarias a derecho, pues "la expresión 'sin limitación alguna' no significa sin limitaciones legales y constitucionales, pues todas las normas jurídicas deben interpretarse dentro del contexto de la legislación del país y no por fuera de él como pretende el actor".

Considera así mismo sin fundamento la apreciación, según la cual, se lesiona el principio de favorabilidad contenido en el artículo 26 Superior "puesto que éste se refiere a la aplicabilidad de una disposición legal y no de dos decisiones emitidas en distintas instancias".

d) Aclara finalmente, que el recurso de revisión es un recurso excepcional que procede contra sentencias ejecutoriadas, las que por tal razón ya han concedido un derecho en firme en favor del procesado, siendo por tanto lógico que el nuevo juicio no lo desconozca.

V. Consideraciones de la Corte

Primera. En virtud de la atribución que le confiere el ordinal 2° del artículo 214 de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la presente demanda y decidir definitivamente sobre la exequibilidad del fragmento impugnado, por cuanto forma parte del artículo de una ley; en el caso *sub judice* del artículo 3° Ley 17 de 1975.

Segunda. Dada la estructura mixta de nuestro procedimiento penal que no sigue el sistema acusatorio en el que el debate queda concretado irremisiblemente a los términos en que las partes lo plantean, sino que se inspira en el principio inquisitivo, al Juez como representante del Estado, es a quien corresponde la averiguación y represión de los delitos y concentra para el logro de esta finalidad amplios poderes de decisión que ejerce sin limitación alguna con mira a adecuar a la hipótesis normativa, los hechos materia del proceso, siendo por ende incompatible con esa misión cualquier restricción a su competencia distinta de la que resulte de los hechos debidamente valorados y plenamente evidenciados en la investigación.

Dentro del precedente esquema, al juez no le está vedada la consideración y calificación de todos los hechos que contribuyan a la adecuada concreción del reato y a derivar de ellos los efectos jurídicos-penales que le sean propios, con mayor razón si han sido indebida o insuficientemente valorados por el juez de primer grado; pero en el cumplimiento de esta misión debe acatar el ineludible requisito de que los medios de prueba que evidencien los mencionados hechos en sus distintas modalidades o efectos jurídico-penales, hayan sido controvertidos y al sindicado se le garantice frente a ellos, ejercer su derecho de defensa.

Si se trata pues de las facultades del juez de segundo grado en la decisión del recurso de apelación interpuesto por el imputado, no es óbice para el ejercicio de su plena competencia, la agravación o empeoramiento de la situación del recurrente cuando las circunstancias del proceso así lo exijan con las restricciones atrás señaladas. De esta manera se logra el justo equilibrio entre los intereses del sindicado y los de la sociedad que lo juzga ya que ésta quedaría desprotegida si el *ad-quem* no pudiese modificar la providencia apelada aún en perjuicio de los intereses del recurrente.

Tercera. Ciertamente como lo advierte el actor, fue doctrina de la Sala de Casación Penal de la Corte, acogida en fallos de 27 de noviembre y 13 de diciembre de 1972 y 21 de agosto de 1973, el primero con ponencia al Magistrado Mesa Velásquez, la de que "el control pleno del acto jurisdiccional recurrido en apelación sólo puede hacerse en cuanto al *thema decidendum* de naturaleza penal a través de la consulta, cuando la ley lo prescribe, o de la apelación interpuesta por el Ministerio Público y que 'sólo la consulta y apelación del Agente del Ministerio Público son los medios jurídicos de control ilimitado de las resoluciones judiciales, por lo que toca a la competencia decisoria del *ad-quem,* para garantía del interés público de la acción represora' ".

Pero el desarrollo jurisprudencial del citado criterio obedeció a que la ley procedimental entonces vigente al regular el recurso de apelación no había definido el alcance de los poderes del juez *ad-quem* y, en cambio, su artículo 8o. disponía que "son aplicables al procedimiento penal, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente código o en las leyes especiales, las disposiciones que rijan sobre la organización judicial y procedimiento civil". Esta remisión expresa del procedimiento penal al civil conjujo a que el vacío que se presentaba en la ley de rito penal hubiese sido colmado por aplicación analógica del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que prohibe la *reformatio in pejus,* limitando de esta manera el poder decisorio del fallador de segunda instancia al tema propuesto por el apelante.

Sin embargo el legislador en el artículo 3° de la Ley 17 de 1975 acusado, vino a definir en forma obligatoria la plena competencia del *ad-quem* para decidir sobre la providencia recurrida aun en aspectos que desmejoren la situación del apelante, lo cual sin duda se ciñe a los postulados de defensa social que busca como fin mediato el procedimiento penal para garantizar la supremacía de los bienes superiores de la equidad y la justicia.

Cuarta. El artículo 26 de la Constitución Nacional consagra en forma implícita el principio del debido proceso o las llamadas garantías procesales a través de distintas previsiones, tales como:

a) La preexistencia de la ley que regula el juzgamiento.

b) La legalidad de la jurisdicción;

c) El cumplimiento de la plenitud de las formas propias del juicio;

d) La aplicación de la Ley permisiva o favorable aun cuando sea posterior al acto incriminado.

Analizando el texto acusado frente a las garantías señaladas, no advierte la Corte en qué medida puedan verse afectadas por una disposición que como la que se acusa

sólo desarrolla la facultad constitucional que corresponde al legislador de determinar la legalidad de la jurisdicción al definir el alcance de la competencia del juez de segunda instancia para resolver el recurso de apelación y para lo cual puede la ley sin desacato del ordenamiento superior, prescribir lo referente a la medida de la competencia y los trámites y formalidades que considere aconsejables para la adecuada realización y efectividad de la justicia, fin superior del Estado.

El actor apoya el cargo de violación del artículo 26 de la Carta, en que desconoce el derecho de defensa del reo, pues considera que el *ad-quem* en ejercicio de la facultad que le confiere las expresiones de la norma acusada puede resolver sin sujeción a la ley y a las pruebas legalmente producidas que obran en el proceso, en una interpretación que conduce a atribuirle facultades omnímodas a una autoridad, lo que pugna con la estructura de nuestro estado de derecho. Sin embargo, la anterior argumentación corresponde al sentido de la norma, toda vez que ésta, en la parte acusada, está referida exclusivamente a la providencia recurrida para indicar que la decisión del juez de segundo grado puede rebasar los parámetros que señaló el de primera instancia, es decir que puede recaer sobre toda la actuación, sin limitarse al examen de los puntos propuestos por el recurrente, sino imprimiéndole a su decisión el contenido que estime más ajustado a derecho, de acuerdo con los hechos que aparezcan debidamente probados dentro del proceso, en relación con los cuales el procesado ha tenido o tiene una oportunidad de ejercer el derecho de defensa mediante los diversos mecanismos que consagra el Código de Procedimiento Penal. No es pues el otorgamiento de una facultad que pueda ser ejercida *ad libitum* por el juez o tribunal de segunda instancia, como lo plantea la demanda.

El principio de la favorabilidad de la ley penal que consagra el inciso 2º del artículo 26 de la Carta se refiere a la aplicación preferencial de la ley permisiva o favorable y supone un conflicto entre la ley anterior y la posterior llamada a regular la misma materia con diferente alcance. Ahora bien, en el caso sub-análisis no es de recibo hablar del quebranto de ese principio constitucional, pues el texto acusado hace referencia a la competencia que adquiere el juez de segunda instancia por virtud de la apelación, para decidir sobre la resolución judicial impugnada, por la cual la eventual discrepancia no se plantearía en los ámbitos material y espacial de las normas legales, sino en el de las decisiones judiciales, o como acertadamente lo advierte el Procurador, entre "dos decisiones emitidas en distintas instancias".

En orden a demostrar que la expresión acusada es absurda y rompe el esquema procesal penal, se refiere el acusador a la prohibición expresa de la *reformatio in pejus*, por vía del recurso extraordinario de revisión. Al respecto cabe señalar que a través de ese medio excepcional no se consagra una instancia más dentro del proceso penal, sino la oportunidad de impugnar sentencias ejecutoriadas; la alusión que hace el actor era de importancia antes de la consagración de la competencia del juez de segundo grado, como pauta o criterio de interpretación ante el vacío de la legislación procedimental penal, pero carece de entidad para determinar la inexequibilidad de un precepto que dispone en contrario respecto del recurso de apelación, pues nada se opone dentro del ordenamiento constitucional a que el legislador regule de manera distinta los diferentes medios de impugnación de las decisiones judiciales.

Quinta. Resulta igualmente infundado el cargo que se refiere a la violación del artículo 23 de la Constitución, pues es evidente que esta norma garantiza la libertad

personal, esto es, el derecho a no ser detenido o a no serlo sino ante ciertas y determinadas condiciones, lo cual constituye el señalamiento de los principios superiores que regulan la detención ordinaria de las personas que no pueden ser abrogadas por la ley. La razón de la violación la concreta el actor en que la competencia plena que le otorga al *ad-quem* la frase demandada implica atentado contra la seguridad individual, pues el motivo debe estar previamente definido en la ley.

A este respecto cabe advertir que en nada se desprotegen las garantías que tutela el citado precepto constitucional, pues la posibilidad de una reforma desfavorable al apelante, sólo reitera para la segunda instancia el amplio poder dispositivo que le corresponde al juez dentro del sistema que rige el procedimiento penal, orientado a la defensa social contra la delincuencia.

Sexta. Estima la Corte que con la norma impugnada no se vulnera el artículo 16 de la Constitución Política, puesto que a través de ella, no se desconocen o desprotegen los derechos individuales de las personas ni en particular los de los procesados, toda vez que la *reformatio in pejus* sólo resulta procedente cuando sea necesaria para adecuar la decisión judicial de primera instancia al derecho y a los hechos establecidos, en defensa del interés social que busca el castigo del delincuente y con ello la restauración del orden jurídico y la tranquilidad pública.

Adviértase que el mandato legal no se refiere a la condición personal del recurrente sino en forma impersonal o genérica a la providencia impugnada, en procura del imperio de la justicia.

VI. Decisión

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 17 de 1975 (artículo 197 Bis del Código de Procedimiento Penal) en la parte demandada que dice "sin limitación alguna".

Cópiese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Jorge Iván Palacio Palacio, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Jesús Vallejo Mejía, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

HAY PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA EN DOS CASOS DE OCURRENCIA ALTERNATIVA O SUMADA: A) CUANDO LA NORMA ACUSADA EN TODO O EN PARTE TORNE LOGICAMENTE IMPOSIBLE LA DECISION DEBIDO A IRREPARABLE RUPTURA ABSOLUTA DE LA CONTINENCIA NECESARIA DE LA CAUSA PETENDI O B) CUANDO EL PRECEPTO DEMANDADO NO SEA AUTONOMO POR ENCONTRARSE EN UNA INESCINDIBLE RELACION DE DEPENDENCIA CON OTRO U OTROS NO IMPUGNADOS QUE CONDICIONAN SU SIGNIFICADO, SU VIGENCIA, SU VALIDEZ O SU EFICACIA. FALLO INHIBITORIO. PROPIEDAD HORIZONTAL.

La Corte se declara inhibida para decidir sobre su fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 2.

Referencia: Expediente número 1509.

Acción de inexequibilidad parcial contra el artículo 1o. de la Ley 16 de 1985.

Actor: *Jorge Hernán Gil E.*

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según Acta número 01.

Bogotá, D. E., enero veintidós (22) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

En ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverry solicita a la Corte que declare parcialmente inexequible el artículo 1° de la Ley 16 de 1985, que define la propiedad horizontal por considerar que es lesivo del Ordenamiento Superior.

De la demanda se dio traslado al Procurador General de la Nación quien emitió su concepto en tiempo oportuno, por lo tanto corresponde a la Corte decidir sobre el asunto planteado y a ello se procede previas las siguientes consideraciones.

II. Norma acusada

Para mejor comprensión de lo acusado, se transcribe el texto completo del artículo 1o. y se subraya la parte impugnada.

"LEY 16 DE 1985
(enero 8)

"Por la cual se modifica la Ley 182 de 1984 sobre propiedad horizontal".

El Congreso de Colombia

D E C R E T A:

Artículo 1° Definición. La llamada propiedad horizontal que se rige por las normas de la Ley 182 de 1948 y del presente estatuto, es una forma de dominio que hace objeto de propiedad exclusiva o particular determinadas partes de un inmueble *y sujeta las áreas de éste destinadas al uso o servicio común de todos o parte de los propietarios de aquéllas al dominio de la persona jurídica que nace conforme con las disposiciones de esta Ley.*

III. Razones de la demanda

Estima el actor que el fragmento que acusa vulnera de manera "directa y evidente" el artículo 30 de la Constitución que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título; no pudiendo el Legislador "establecer una especie de expropiación privada sin indemnización, en favor de la persona jurídica creada por el régimen de propiedad horizontal".

Considera que no obstante, la transferencia del dominio de las zonas comunes opera con virtud de la ley, éste no es el justo título de que trata el artículo 30 precitado "puesto que priva a una persona de un derecho de dominio contra su voluntad y lo que es más grave aún, sin indemnización alguna, puesto que basta que se constituya el régimen de propiedad horizontal, para que automáticamente se transfiera el dominio".

Califica como "efectos jurídicos indirectos lamentables" del precepto impugnado, los que surgirían para la sociedad constructora una vez constituida la propiedad horizontal; en dos eventos: cuando trate de obtener un préstamo con garantía hipotecaria sobre el lote de terreno en que se construirá la edificación, pues la oficina de registro devolverá la escritura aduciendo que la constructora no es la dueña del lote sino la persona jurídica que nació al amparo del nuevo régimen de la propiedad horizontal. Y, para el caso en que la construcción se adelante sin financiación tendrá la sorpresa de que no sólo perdió el lote, sino todo el edificio ya que, "por efectos de la accesión, la persona jurídica que nació se hizo propietaria de lo que en lote se construyó".

Como conclusión de sus argumentaciones plantea que "el legislador antes de proteger la propiedad privada establece soterradamente un mecanismo más efectivo

que la expropiación o la confiscación para que dé pleno derecho, esto es, sin necesidad de proceso judicial, se prive al legítimo dueño del derecho de propiedad".

IV. Concepto del Procurador General

En concepto No. 1079 fechado el 18 de septiembre de 1986, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare exequible el artículo 1o. de la Ley 16 de 1985 en la parte que fue objeto de impugnación, por cuanto no advierte que "la creación de una persona jurídica que tendrá el dominio de las áreas de uso o servicio común de un inmueble, vulnere el derecho de propiedad protegido por el canon 30 constitucional", conforme a lo siguiente:

1. Que la Ley 16 de 1985 modificó la Ley 182 de 1948 sobre propiedad horizontal en el sentido de crear una persona jurídica a la cual pasa el dominio de las áreas de uso común y desarrolló en forma general todo lo relacionado con las facultades y modo de ejercicio de ese dominio por parte del ente que autoriza constituir.

2. Que los ejemplos propuestos por el actor no son de recibo "porque parten de un supuesto fáctico sin sustento real", pues si bien es cierto que el dominio de las áreas comunes pasa a la persona jurídica que se crea por la Ley 16 de 1985, no es menos cierto que su creación no es de obligatorio cumplimiento por parte del propietario o copropietarios del inmueble como expresamente lo señala el artículo 10 ibídem. Esa decisión corresponde exclusivamente a los dueños del inmueble, quienes pueden optar por acogerse a lo dispuesto en la Ley citada o a lo establecido en la Ley 182 de 1968, que creó el régimen de propiedad horizontal. Corresponde entonces a los propietarios en su libre albedrío determinar a qué legislación se acogen, haciendo uso del derecho de dominio.

3. Que "no puede perderse de vista que de conformidad con el artículo 4° ibídem, la dirección y administración de la persona jurídica creada por esa Ley *'corresponde a la asamblea general de propietarios que integran la totalidad de los dueños de los bienes de dominio exclusivo o particular del inmueble'* –subraya el Procurador–, con lo cual se reafirma que son todos los propietarios del inmueble quienes, en últimas, tienen en conjunto el manejo de esa persona jurídica, la cual actuará en consonancia con lo querido por la Asamblea General de Propietarios, cumpliendo para el efecto, con las funciones contempladas, en el artículo 3° de la Ley, en concordancia con el 7° ibídem".

4. Que una vez constituida legalmente la persona jurídica, y frente a terceros que deseen adquirir el dominio sobre un bien exclusivo y particular, resulta obvio que una vez transferido el dominio del apartamento también se transfieren los derechos y obligaciones del anterior propietario sobre las áreas de uso o servicio común, por cuanto ellos son inseparables del dominio, uso o goce del respectivo apartamento; como lo indica diáfanamente el inciso 2° del artículo 4° de la Ley 182 de 1948, no modificado en este asunto por la Ley 16 de 1985, por lo que ni aún ante terceros adquirentes, el vendedor ve afectado en modo alguno su derecho de propiedad privada, la cual transferirá en los términos que la ley civil establece.

V. Consideraciones de la Corte

El artículo 1° de la Ley 16 de 1985 define la propiedad horizontal como una forma de dominio de los bienes inmuebles. El actor limita su pretensión de inexequibilidad al fragmento final de la norma que radica el derecho de dominio de zonas o áreas afectadas al uso o servicio común, en cabeza de una persona jurídica que nace conforme a las disposiciones de la Ley.

Aunque la demanda de inexequibilidad fue admitida por cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 432 de 1969, ello no implica que la Corte esté obligada a decidir sobre su fondo, pues hay lugar a decisión inhibitoria cuando la demanda carece de aptitud sustantiva para fundar en ella un pronunciamiento de mérito; tal ocurre cuando la norma acusada no reúne en sí todos los elementos de una proposición jurídica completa, por estar estos dispersos en otras disposiciones no acusadas de la misma ley, lo que impide al juez constitucional extender la acusación a ellas en razón a que su jurisdicción se circunscribe y limita sólo a lo que se acusa.

Desde el fallo de marzo 29 de 1983 (proceso 1115), reiterado en Sentencia de marzo 14 de 1985 (proceso 1260) la Corte definió su jurisprudencia sobre la procedencia de las decisiones inhibitorias por proposición jurídica incompleta, señalando con toda precisión que lo que da lugar a ellos "no es la simple relación de conexidad, de similitud o de identidad de materia que se dé o que exista entre la disposición demandada y las que no, ni el mero criterio apreciativo del juzgador sobre la pretendida debilidad del fallo de mérito que se pueda derivar de la circunstancia de que lo acusado esté contenido en otra u otras normas no acusadas. Es decir, que ni la aparente inocuidad del fallo de fondo, ni la relación de similitud, conexidad o identidad existente entre preceptos demandados y no impugnados, son causa suficiente para que la Corte se abstenga de proferir decisión de fondo por carencia de unidad normativa". Igualmente, esta Corporación en las sentencias aludidas precisó que "sólo en dos casos de ocurrencia alternativa o sumada" es procedente la inhibición por carencia de unidad normativa, ellos son:

"A) Cuando la norma acusada en todo o en parte torne lógicamente imposible la decisión debido a irreparable ruptura absoluta de la continencia necesaria de la *causa petendi o*

B) Cuando el precepto demandado no sea autónomo por encontrarse en una inescindible relación de dependencia con otro u otros no impugnados que condicionan su significado, su vigencia, su validez o su eficacia".

Analizando el asunto sometido al juicio de la Corte frente al anterior criterio jurisprudencial se tiene que en él se tipifica una "proposición jurídica incompleta" ya que el fragmento de la norma, materia de la acusación, no es autónomo por hallarse en una inescindible relación de dependencia con el resto del artículo no impugnado y con otras disposiciones del mismo ordenamiento que condicionan su significado y alcance.

En efecto, la fracción acusada del artículo 1° de la Ley 16 de 1985, es sólo una parte de la definición que hace el legislador de la llamada propiedad horizontal, en el sentido de determinar que las áreas de uso o servicio común de todos o parte de los

propietarios que sujetan al dominio de una persona jurídica. Empero el alcance y verdadero significado de la norma no puede centrarse en esa "definición", pues su aplicación y eficacia están condicionadas por el artículo 10, de la misma Ley que señala cuáles inmuebles y en qué circunstancias quedan sometidos al nuevo sistema, dentro del cual, es la persona jurídica que sustituye al actual de la comunidad forzosa, la que adquiere el dominio de las áreas o zonas comunes.

Esta especial circunstancia demuestra en forma evidente la ausencia de autonomía del fragmento de la norma acusada, pues entre el texto demandado y el no acusado y entre aquél y otras disposiciones de la misma ley, existe una estrecha relación de subordinación, que obligaría a la Corte al confrontar su constitucionalidad, a examinar normas que no han sido objeto de acusación genérica ni específica de inconstitucionalidad lo que le está vedado como se anotó precedentemente.

De otra parte, el artículo 7° que se denomina "Integración con la Ley 182 de 1948" en cuando señala que "todos los derechos y obligaciones de los propietarios sobre los bienes de uso o servicio común consagrados en la Ley 182 de 1948 se transfieren a la persona jurídica encargada de su administración y manejo y, por lo tanto, tales derechos y obligaciones se radican en su patrimonio", se halla también en una relación de conexidad íntima con la parte impugnada del artículo 1°, pues contiene la misma regla de derecho respecto del traspaso de la propiedad de las zonas de uso común, al tiempo que determina las funciones que le competen a la persona jurídica sobre dichas zonas, por lo tanto no se trata de la simple coordinación y armonía que debe existir entre los preceptos de una misma ley.

Por lo anterior, la decisión que corresponde adoptar a la Corte será inhibitoria, dada la ineptitud sustantiva de la demanda, determinada por la carencia de unidad normativa de la disposición acusada.

VI. Decisión

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Por ineptitud sustantiva de la demanda incoada, SE DECLARA INHIBIDA para decidir sobre su fondo.

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Jorge Iván Palacio Palacio, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez*

Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Jesús Vallejo Mejía, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas.

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

LOS MANDATOS LEGISLATIVOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 32 DE LA CARTA, ENCAJAN DENTRO DEL CONCEPTO DE AUTORIZACIONES AL GOBIERNO "PARA EJERCER OTRAS FUNCIONES DENTRO DE LA ORBITA CONSTITUCIONAL", EN CONSECUENCIA LOS DECRETOS QUE SE DICTEN EN DESARROLLO DE DICHOS MANDATOS TIENEN FUERZA DE LEY Y SON COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. AUTORIZACIONES CONFERIDAS AL EJECUTIVO PARA INTERVENIR EN LA *INDUSTRIA DEL TRANSPORTE* Y OBTENER QUE ESTOS SERVICIOS SE PRESTEN EN FORMA ADECUADA Y SIN INTERRUPCIONES.

Exequible la totalidad del Decreto número 2624 de 1983.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 3.

Referencia: Expediente número 1515.

Acción de inconstitucionalidad contra el Decreto número 2624 de 1983 "Por el cual se toman unas medidas en materia de servicio público de transporte y se deroga el Decreto número 1459 de 1974".

Demandante: *Antonio Barrera Carbonell.*

Ponente doctor: *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 1 de 1987.

Bogotá, D. E., enero veintidós (22) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

El ciudadano Antonio Barrera Carbonell, en ejercicio del derecho conferido por el artículo 214 de la Constitución Nacional, ha demandando ante la Corte el texto íntegro del Decreto-Ley 2624 del 15 de septiembre de 1983.

Surtidos los trámites previstos en el Decreto 0432 de 1969, se procede a adoptar decisión de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto acusado, cuyo texto es el siguiente:

DECRETO NUMERO 2624 de 1983
(septiembre 15)

"Por el cual se toman unas medidas en materia de servicio público de transporte y se deroga el Decreto número 1459 de 1974.

"El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere la Ley 15 de 1959,

D E C R E T A:

"Artículo primero. Las alteraciones en la prestación del servicio público de transporte o de sus tarifas, serán sancionadas con arreglo al presente Decreto, por el Instituto Nacional del Transporte o por la entidad en la cual se deleguen estas funciones.

"Artículo segundo. Las empresas que alteren o permitan la alteración en la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en buses, busetas, microbuses o automóviles o modifiquen de cualquier manera sus tarifas, serán sancionados con multa equivalente al valor de tres (3) hasta ciento diez (110) salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Bogotá.

"Artículo tercero. La reincidencia en la transgresión de que trata el artículo anterior, en un período de dos años, se sancionará con la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento de la empresa respectiva.

"Artículo cuarto. Los propietarios de automotores de servicio público que alteren o permitan la alteración en la prestación del servicio público de transporte colectivo en buses, busetas, microbuses o automóviles o modifiquen de cualquier manera sus tarifas, serán sancionados con multa equivalente al valor de dos a cinco salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Bogotá.

"Artículo quinto. La reincidencia en la transgresión de que trata el artículo anterior, en un período de dos años, se sancionará con multa equivalente al valor de cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes en Bogotá.

"Artículo sexto. Cuando el Instituto Nacional del Transporte tenga conocimiento de que las agremiaciones de transportadores han propiciado alteraciones en la prestación del servicio público o en las tarifas establecidas, pondrá dicha circunstancia en conocimiento del Ministerio de Justicia a fin de que se proceda a cancelar su personería jurídica previo los trámites legales.

"Artículo séptimo. Para sancionar las infracciones de que trata este Decreto, el Instituto Nacional del Transporte se fundamentará en el informe oficial escrito por cualquier autoridad de transporte, de tránsito, o de policía que tenga conocimiento de la transgresión.

"Artículo octavo. Una vez recibido el informe oficial, el Instituto Nacional del Transporte o la entidad competente, solicitará mediante providencia no recurrible, los descargos a la empresa o al propietario, los cuales tendrán ocho (8) horas hábiles, contadas a partir de la comunicación pertinente, para rendirlos por escrito o en forma verbal.

"Transcurrido el término para descargos, se fallará dentro de las ocho (8) horas hábiles siguientes.

"Artículo noveno. Los recursos que proceden contra las providencias dictadas en desarrollo de este Decreto sólo serán concedidos previa cancelación de la multa y cuando, mediante certificación de autoridad competente, se compruebe que la alteración del servicio público de transporte o de sus tarifas ha cesado.

"Artículo décimo. En caso de cancelación de la licencia de funcionamiento, las rutas que servía la empresa sancionada se redistribuirán directamente por el Instituto Nacional del Transporte o la Entidad competente, sin necesidad de hacer publicaciones y los vehículos se vincularán a las empresas adjudicatarias.

"Artículo decimoprimero. Para los efectos legales pertinentes, de las providencias que impongan como sanción la cancelación de la licencia de funcionamiento, se enviará copia a las autoridades de tránsito, Superintendencia de Sociedades o Departamento Nacional de Cooperativas, según el caso.

"Artículo decimosegundo. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y en especial el Decreto número 1459 de 1974.

Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 15 de septiembre de 1983".

Afirma el demandante que el gobierno, mediante el Decreto transcrito, al legislar sobre imposición de sanciones y procedimiento especial para juzgar respecto de contravenciones, desbordó las autorizaciones conferidas, las cuales se referían al funcionamiento de las empresas de transporte, organización y patrimonio de empresas públicas, privadas o mixtas, importación de vehículos y respuestos y establecimiento de tarifas.

Dice que, siendo de competencia del Legislador expedir normas reguladoras de la conducta de las personas y, en general, ejercer el poder de policía, para que pudiera cumplir esas funciones el gobierno, requería facultades precisas y pro-témpore, al tenor del artículo 76, ordinal 12 de la Constitución.

Además, estas materias en nada se relacionan con la intervención económica prevista en el artículo 32 de la Carta, luego mal podían hallarse dentro del ámbito de autorizaciones otorgadas por la Ley 15 de 1959.

Por otra parte, en sentir del actor, resultan violados los artículos 20, 23, 26, 27 y 28 de la Constitución en cuanto a través de las normas acusadas se lesiona el derecho de defensa y los principios constitucionales del debido proceso, pues la imposición de sanciones por el INTRA parte de una prueba única y secreta, cual es el "informe oficial" sobre la contravención. Una vez recibido tal informe, el INTRA, mediante providencia no recurrible, solicita descargos al propietario, no a través de notificación personal sino de simple comunicación, que puede llegar o no llegar, y desde ese momento se principian a contar ocho (8) horas para rendir descargos, fallando el INTRA dentro de las ocho (8) horas hábiles siguientes. Todo este procedimiento, según la demanda, es abiertamente inconstitucional por la brevedad del término, la

imposibilidad práctica de defensa por la persona enjuiciada y la falta de motivación de las respectivas providencias.

También tilda de inconstitucionales aquellas normas del Decreto que facultan al INTRA para pedir al Ministerio de Justicia la cancelación de personerías jurídicas de las agremiaciones de transportadores cuando dicho Instituto tenga conocimiento de que ellas han propiciado alteraciones en la prestación del servicio público. Esto no solo conlleva regulación de una materia extraña a las facultades de intervención, sino que implica el ejercicio por el Ejecutivo de una atribución legislativa, cual es la de terminación del régimen de las personas jurídicas (art. 12 C.N.).

Finalmente subraya que ninguna de las conductas que pueden dar lugar a sanción se halla tipificada como lo ordena la Constitución Política.

Concepto del Procurador General

El señor Procurador General, mediante oficio PA-1084 del 22 de septiembre de 1986, sostiene la inconstitucionalidad del estatuto acusado en su texto íntegro por haberse destinado a establecer normas punitivas no siendo ello de competencia del Ejecutivo.

Afirma al respecto:

"Por mandato del artículo 26 constitucional, en concordancia con el artículo 28 *ibidem,* corresponde al legislador ordinario, o extraordinario, facultado en forma precisa y temporal, fijar las conductas punibles, determinar el funcionario competente para juzgarlas y señalar el procedimiento apropiado, que en todos los casos garantice al procesado los medios para su defensa. Por tanto, cuando el Ejecutivo expidió el decreto atacado con base en unas autorizaciones intemporales y no actuando como legislador extraordinario, resulta claro que ejerció funciones que son de exclusiva reserva legal.

"La Corte Suprema ha sostenido en distintos fallos, entre los cuales cabe resaltar los de fechas agosto 5 de 1970, abril 3 de 1973 y septiembre 20 del mismo año, que las autorizaciones conferidas con base en el artículo 76-11 de la Constitución Nacional, son exclusivamente referidas a funciones de carácter administrativo, mas no legal.

"……

"El anterior criterio fue reiterado en sentencia de 1984 y 1985 anteriormente citados, manteniéndose inmodificable el criterio del Juez Constitucional en cuanto a que de acuerdo con el artículo 76-11 *'la órbita constitucional'* de ejercicio autorizable por ley al gobierno... ha sido para esta Corporación la misma: *la que la Constitución señala al Ejecutivo en materia administrativa o mecánica de ejercicio, pero no los de naturaleza legislativa"* (Sent. de mayo 29 de 1984, subrayas del texto).

"En este orden de ideas, siendo del resorte de la ley, más no del Ejecutivo, la competencia para la fijación de las conductas punibles, así como de las autoridades encargadas de juzgarlas y el procedimiento a seguirse, resulta indudable que no podía el Gobierno en ejercicio de unas autorizaciones de carácter netamente administrativo, inmiscuirse en las atribuciones propias de otra rama del Poder Público, vulneran-

do los artículos 26, 28, 32, 76-11 y 118-8 constitucionales, como también los cánones 2°, 20 y 55 de la Ley Suprema.

".....

"Respecto de los artículos 1° a 5° del Decreto citado, considera el Despacho que no existe infracción de los cánones indicados en la demanda, porque lo que la ley exige en materia de tipicidad, entendida ésta como la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable y punible, es que ese hecho se encuentre descrito en la norma legal en forma concreta, pero en ningún caso obliga a que esa descripción sea exaustiva, y mucho menos procura hacer coincidir la tipicidad con la denominación del delito.

"Como la violación del artículo 6° se plantea por las mismas consideraciones hechas para el conjunto de las disposiciones del decreto, no se hará referencia en forma individual al mismo, remitiéndose el Despacho a lo dicho anteriormente.

"Frente a los artículos 7°, 8° y 9° del Decreto número 2624 de 1983, los cuales señalan el procedimiento a seguir para la imposición de las sanciones de que tratan los artículos 2° a 5° *ibídem*, cuya inconstitucionalidad deviene –según el demandante– de la violación del canon 26 Superior, no comparte el Despacho dichos argumentos, por cuanto el informe oficial de que trata el artículo 7° emanado de las autoridades del transporte, de tránsito o de policía que hayan tenido conocimiento de la transgresión, lo que hace es reiterar un deber legal de todas las autoridades de la Nación, como es la de que una vez tengan noticia de la comisión de un hecho punible, deben ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, sin que la existencia de ese informe suponga, de suyo, la culpabilidad del presunto infractor o infractores, ya que él sólo sirve de fundamento para iniciar el trámite administrativo, pero en ningún caso presupone la existencia de la falta que se le atribuye al transportador, sea empresa o propietario.

"A su vez, los preceptos 8° y 9° no vulneran ni el derecho de defensa ni el debido proceso, porque como lo ha sostenido esa Corporación, el procedimiento "puede ser sumario y brevísimo, cuando así lo requieren las funciones rápidas de la policía preventiva" (Sentencia de julio 22 de 1970, M.P.: doctor Eustorgio Sarria), y en el caso bajo examen, ese procedimiento es brevísimo dado que lo que se pretende restablecer es la prestación de un servicio público como lo es el del transporte. Aun cuando el procedimiento es sumario, no lo es únicamente para el acusado sino también para la Administración, y en el cual de todas maneras se le está permitiendo al infractor el ejercicio de su derecho de defensa, así sea en un término breve.

"Sobre los artículos 10, 11 y 12 del Decreto atacado, el actor no fija criterio de violación, limitándose a afirmar que si se declaran inexequibles los artículos 1° al 9°, como consecuencia de ello deben también declararse inconstitucionales los primeramente señalados. Por tanto, no existiendo concepto de violación respecto de esos preceptos, el Despacho se abstiene de conceptuar al respecto".

Con fundamento en las anteriores razones, el señor Procurador solicita a la Corte que declare inexequible el Decreto número 2624 de 1983, en su totalidad, por violación de las autorizaciones conferidas por la Ley 15 de 1959, y que, en caso de

estimar que dicho Decreto se ajusta a la ley de autorizaciones, declare que es exequible pero solamente en sus artículos 1° a 9°.

Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

El Decreto número 2624 de 1983, fue expedido por el Gobierno Nacional en desarrollo del mandato de intervención económica contenido en la Ley 15 de 1959, que a su vez se fundó en los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución Política.

Dice el artículo 1° de la mencionada Ley:

"Art. 1°. En desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución Nacional, el Gobierno, en representación del Estado y por mandato de esta Ley, intervendrá en la industria del transporte automotor, tanto en urbano como en servicio por carreteras, para la movilización de carga y pasajeros, con los siguientes objetivos:

a) Organizar y patrocinar empresas públicas, privadas o mixtas de carácter distrital, municipal, departamental o nacional, pudiendo expropiar o adquirir los equipos pertenecientes a particulares, previa indemnización o arreglo contractual sobre el pago;

b) Reglamentar el funcionamiento de dichas empresas y la prestación de sus servicios;

c) Hacer o autorizar importaciones de vehículos y repuestos, pudiendo modificar o eliminar las tarifas aduaneras, requisitos y demás gravámenes de importación de elementos destinados a ese servicio público. Además, el gobierno podrá intervenir para regular los precios de venta al público de todas estas mercancías;

d) Fijar para todas las ciudades del país las tarifas de transporte urbano, intermunicipal e interdepartamental, establecer la forma de pago o prestación del servicio de transporte que por esta Ley le corresponde al empleador en beneficio del empleado, y

e) Establecer cuando las necesidades del transporte urbano en otras ciudades del país lo exijan, y en forma transitoria mientras se establecen las tarifas definitivas, el sistema previsto en esta Ley para el Distrito Especial de Bogotá, y en consecuencia señalar el monto, forma de pago, distribución y recaudo del auxilio patronal por transporte allí previsto.

Parágrafo. La facultad establecida en el ordinal d) del artículo anterior (sic), y en cuanto hace relación al servicio urbano, podrá delegarla el gobierno en los gobernadores o en los alcaldes, cuando los respectivos municipios tengan una organización adecuada en sus dependencias del Tránsito y Transporte, de acuerdo con las reglamentaciones que dicte el gobierno sobre el particular. Para la aplicación de las determinaciones que se dicten en virtud de esta delegación, se requiere la previa autorización del Gobierno Nacional".

Afirma el señor Procurador, en los apartes transcritos de su concepto, que las autorizaciones conferidas con apoyo en el artículo 76, ordinal 11 de la Constitución son exclusivamente referidas a funciones de carácter administrativo mas no legal.

Sobre el tema debe recordarse que en efecto ello es así, pero tan solo respecto de las tres primeras funciones enunciadas en dicho precepto, cuales son la celebración de contratos, la negociación de empréstitos y la enajenación de bienes nacionales, todas las cuales tienen su perfeccionamiento y desarrollo a través de actos de típico carácter administrativo que deben cumplirse dentro de los límites trazados por el legislador.

Sin embargo no puede afirmarse lo mismo del ejercicio de "otras funciones dentro de la órbita constitucional" (parte final del numeral 11), pues varias normas de la Constitución interpretadas armónicamente llevan a la indudable conclusión de que en desarrollo de tales autorizaciones puede el Presidente de la República expedir decretos con fuerza y carácter de ley. Lo afirma así el artículo 118, ordinal 8°, cuando al enumerar las atribuciones del Jefe de Estado en relación con el Congreso, incluye el ejercicio de "las facultades a que se refieren los artículos 76, ordinales 11 y 12; 80, 121 y 122 y dictar los decretos *con la fuerza legislativa que ellos contemplan"* (subraya la Corte), y lo refrendan los artículos 214 y 216 de la Constitución cuando mencionan los decretos expedidos en virtud del referido ordinal entre aquellos que, precisamente por su fuerza legislativa, son de competencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto hace al fallo definitivo sobre su constitucionalidad.

Ahora bien, la jurisprudencia reciente, que ahora se reitera, ha entendido que los mandatos legislativos previstos en el artículo 32 de la Carta, encajan dentro del concepto de autorizaciones al gobierno "para ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional", a las que hace referencia el ordinal 11 del artículo 76 que se viene comentando (Sentencia del 7 de julio de 1983, Magistrado Ponente: doctor *Luis Carlos Sáchica).*

En consecuencia, como lo dispone el artículo 118, ordinal 8° de la Carta, los decretos que se dicten en desarrollo de dichos mandatos, tienen fuerza de ley y, el conocimiento acerca de su exequibilidad es de competencia de la Corte Suprema de Justicia, según precepto constitucional (214. 2a-).

2. *Las autorizaciones*

Esos decretos tienen carácter permanente y difieren de los dictados en ejercicio de facultades extraordinarias (art. 76, ordinal 12 C.N.) en que no se hallan sujetos a un límite máximo de tiempo para su expedición, por lo cual no procede estudio alguno sobre la oportunidad de ella, y en que el campo material de acción del Estado, por la misma naturaleza de la función, es mucho más amplio.

En efecto, por lo que hace a la órbita constitucional del artículo 32, los muy variados y complejos asuntos objeto de mandato legal de intervención se hallan relacionados con todas las etapas del proceso económico, desde la producción y distribución de los bienes hasta su utilización y consumo, pasando por la adecuada y oportuna prestación de los servicios tanto públicos como privados.

Varios son los fines señalados a la intervención por el mismo precepto constitucional, a saber: racionalizar y planificar la economía con el propósito de lograr el desarrollo integral; obtener la justicia social y alcanzar el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, en especial el de las clases proletarias, dentro de una

política de ingresos y salarios y el pleno empleo de los recursos humanos y naturales. Todo lo cual puede resumirse en el concepto del *bien común,* expresamente mencionado por el artículo 32 como límite de la libertad de empresa y de la iniciativa privada.

Haciendo uso del criterio teleológico en la interpretación de las instituciones, conforme al cual el contenido de ellas no se quede a la zaga de los fines que las inspiran –en especial cuando tratan de conseguir el bienestar de la comunidad y su predominio sobre el interés de los particulares–, estima la Corte que el marco de facultades radicadas en cabeza del Estado en materia de intervención económica, debe ser tal que le permita alcanzar los expresados fines con efectividad y certeza, desde luego sin cercenar las libertades ni los derechos de los individuos, pero encuadrando éstos y aquéllas dentro de los límites constitucionalmente fijados.

En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, las autorizaciones conferidas al Ejecutivo para intervenir en la industria del transporte así como para reglamentar el funcionamiento de las empresas públicas y privadas del ramo y la prestación de sus servicios (artículo 1° Ley 15 de 1959), aunque no pueden entenderse como transferencia ilimitada de la potestad legislativa propia del Congreso, ni como pretexto para desconocer garantías constitucionalmente tuteladas, sí deben interpretarse como suficientes para obtener el propósito estatal de que los servicios de transporte públicos y privados, se presten en forma adecuada y sin interrupciones. Por tanto, no es dable pensar que las autorizaciones legislativas hubieran de excluir el momento final y más importante en lo relacionado con el servicio de transporte a la comunidad, cual es el de su verdadera y eficaz prestación, puesto que de nada serviría la intervención en etapas anteriores –como la compra de equipos, la constitución de empresas, la importación de repuestos, la fijación de tarifas, para mencionar tan sólo algunas–, si a última hora la voluntad de los empresarios del transporte impidiera a los usuarios recibir el beneficio que para ellos ha buscado la actuación estatal.

Entonces, si de lo que se trata es de realizar el bien común, este criterio interpretativo sobre el radio de acción dentro del cual podrá moverse el gobierno, en uso del mandato legal de intervención, permite concluir que no solamente estaba habilitado para dictar normas en el puro terreno económico, sino todas aquéllas indispensables dentro de su órbitra constitucional de competencia, para garantizar la correcta y permanente prestación del servicio, entre otras, desde luego, las consistentes en la determinación de infracciones sobre la materia y en el establecimiento de sanciones para los responsables.

De lo anterior se concluye que son infundados los cargos que, por exceso en el ejercicio de las autorizaciones, formula el actor en la demanda.

Debe recordarse que la Constitución Nacional no señala un término para los descargos del acusado y que por lo tanto ha de entenderse que dejó este punto en manos de la ley con la limitación de que el plazo sea suficiente para oir al inculpado, pero sin perder de vista, de otra parte, la sugerencia de evitar que la acción punible afecte de manera irremediable los intereses de la sociedad, los cuales deben primar sobre los de los particulares. En cuanto a esto último, se estima que el plazo en referencia se halla plenamente justificado por la urgencia de restablecer el servicio de

transporte y de proteger efectivamente a la comunidad contra indebidas interrupciones del mismo.

El decreto demandado no viola ningún otro artículo de la Constitución.

DECISIÓN

Con fundamento en las razones anteriores, la Corte Suprema de Justicia Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

DECIDE:

Declarar EXEQUIBLE en su totalidad el Decreto número 2624 de 1983, "por el cual se toman unas medidas en materia de servicio público de transporte y se deroga el Decreto número 1459 de 1974".

Cópiese, publíquese, comuníquese, al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria General

LAS DECISIONES EN ASUNTOS DE CONSTITUCIONALIDAD SON DEFINITIVAS Y ESTAN REVESTIDAS DE LA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA CON EFECTOS ERGA OMNES. FACULTADES EXTRAORDINARIAS, LIMITES TEMPORAL Y MATERIAL FIJADOS POR EL LEGISLADOR. SEGURO QUE CUBRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE QUIEN CAUSE DAÑO A UN TERCERO EN ACCIDENTE DE TRANSITO. ACCION DIRECTA FRENTE AL ASEGURADOR. LIBERTADES DE CONTRATACION Y LOCOMOCION. LAS LIBERTADES INDIVIDUALES, FUERON CONCEBIDAS COMO ABSOLUTAS POR LOS DOCTRINANTES DEL SIGLO XVIII, PARA OPONERLAS AL OMNIMODO PODER DEL MONARCA, AHORA SE ENTIENDEN COMO ESENCIALMENTE RELATIVAS.

Exequibles los artículos 96 del Decreto número 1344 de 1970 y los arts. 115 y 116 de la ley 33 de 1986.

En cuanto a los arts. 117 y 118 de la ley 33 de 1986, estése a lo resuelto en sentencia del 21 de agosto de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 4.

Referencia: Expediente número 1499.

Acción de inexequibilidad contra el artículo 96 del Decreto número 1344 de 1970 y los artículos 115, 116, 117 y 118 de la Ley 33 de 1986.

Actor: *William Fernando León Moncaleano.*

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según Acta número 02.

Bogotá, D. E., enero veintinueve (29) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes.

Haciendo uso del derecho que confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional a todo ciudadano, e invocando dicha condición, William Fernando León Moncaleano solicita a la Corte que declare inexequibles el artículo 96 del Decreto Ley 1344 de 1970 por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y los

artículos 115, 116, 117 y 118 de la Ley 33 de 1986 por los cuales se modifica dicho Código y se "dictan otras disposiciones", por considerar que son violatorios de la Constitución Nacional.

Cumplidos a cabalidad los trámites propios del proceso constitucional y obtenido el concepto del Procurador General, corresponde a la Corte pronunciarse sobre el fondo de la demanda; y a ello se procede previas las siguientes consideraciones:

II. Normas acusadas

El siguiente es el texto literal de las disposiciones acusadas.

"DECRETO NUMERO 1344 DE 1970
(agosto 4)

"Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre.

".....

"Artículo 96. La vigencia de un seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a terceros ocasionados por él, es requisito indispensable para la concesión y la conservación de la licencia de tránsito.

"El gobierno reglamentará la naturaleza, cuantía y prestación del seguro y la vigencia de esta disposición.

"LEY 33 DE 1986
(febrero 3)

"Por el cual se modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".

"Artículo 115. El artículo 259 del Decreto-ley número 1344 de 1970, será el siguiente:

"Artículo 259. El seguro por daños a las personas causados en accidentes de tránsito será obligatorio y el perjudicado tendrá acción directa contra el asegurador".

"Artículo 116. El artículo 260 del Decreto-ley número 1344 de 1970, será el siguiente:

"Artículo 260. Las compañías de seguros establecidas en el país y que tengan autorización para operar en el ramo de automóviles, están obligadas a otorgar el seguro establecido en el artículo anterior".

"Artículo 117. El artículo 261 del Decreto-ley número 1344 de 1970, será el siguiente:

"Artículo 261. En la responsabilidad por el hecho ajeno cometido en el ejercicio de actividades peligrosas el demandado sólo se libera mediante la prueba de una causa extraña. No están exonerados de esta responsabilidad las personas de derecho público o privado.

"Artículo 118. El artículo 262 del Decreto-ley número 1344 de 1970, será el siguiente:

"Artículo 262. Las acciones a que se refiere el artículo precedente prescriben en cinco (5) años a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpen con la presentación de la demanda".

III. Razones de la demanda

Considera el actor que las disposiciones transcritas infringen los artículos 12, 32, 44, 45 y 46 de la Constitución Nacional por las razones que someramente se enuncian, así:

a) El artículo 96 del Decreto número 1344 de 1970 viola los artículos 44 y 46 de la Carta "pues para poder movilizar un carro es menester contratar una póliza de seguros; 'el Presidente de la República' debió excederse al promulgarlo, pues es seguro que las facultades extraordinarias serían para que legislara sobre el tránsito de las personas y vehículos pero no sobre una materia específica como es el seguro terrestre"; quebranta además, "la libertad de contratación no solamente de los particulares sino de las demás personas jurídicas" con lo cual desconoce el artículo 12 Superior;

b) En relación con los artículos 115 y 116 de la Ley 33 de 1986 plantea las mismas razones de inconstitucionalidad por estimar que ellos vulneran la "libertad de contratación", "la capacidad de ejercicio de las personas jurídicas" y la "libre iniciativa privada", en la medida en que obligan tanto a los particulares como a las compañías de seguros a celebrar contratos contra su voluntad.

Adicionalmente argumenta que el artículo 115 infringe el derecho de petición consagrado en el artículo 45 de la Constitución, toda vez que está "legitimando a una sola persona, el asegurador" para obtener la indemnización de los perjuicios originados en accidente de tránsito, con lo cual restringe la posibilidad de "recurrir a los organismos jurisdiccionales y demandar a quien se quiera".

Señala que los artículos 117 y 118 que acusa, son dos monstruos jurídicos "pues revelan que quienes los redactaron desconocen toda teoría sobre responsabilidad civil extracontractual", por cuanto niegan el derecho de defensa a las personas jurídicas o naturales que sean demandadas, al disponer que sólo pueden exonerarse de responsabilidad por una causa extraña, ya que la jurisprudencia ha aceptado el caso fortuito como motivo eximente de responsabilidad por daños causados en el ejercicio de actividades peligrosas y éste puede ocurrir por "causas internas del demandado".

Que el artículo 118 acusa falta de conocimiento de los más elementales principios procesales, por parte de quienes lo redactaron, pues establece un nuevo término de prescripción que desvirtúa o desconoce esta institución como derecho adquirido y forma de extinguir las acciones y consagra que la prescripción se interrumpe con la sola presentación de la demanda, en contra de lo que dispone el Código de Procedimiento Civil para la defensa de los ciudadanos y evitar procesos interminables.

IV. Concepto del Procurador General

El Jefe del Ministerio Público emitió el concepto No. 1065 en agosto 23 de 1986 en el cual concluye que las disposiciones acusadas "son exequibles y solicita a la Corte que así lo declare".

La petición del señor Procurador se sustenta esencialmente en los siguientes argumentos:

a) Considera infundados los cargos de inconstitucionalidad que plantea la demanda sobre el artículo 96 del Decreto número 1344 de 1970, por cuanto el artículo 44 constitucional "no guarda relación con la norma acusada por no consagrar la libertad de locomoción a que hace referencia el actor" y que el artículo 46 *ibidem* "si bien consagra un aspecto de la libertad de locomoción, el cual deviene del derecho de reunión allí contemplado, no tiene relación con la exigencia establecida en la norma atacada, en donde se dispone la obligación de estipular un seguro que cubra la responsabilidad civil por posibles daños a terceros, para toda persona que solicite o desee conservar su licencia de tránsito".

No se detiene a analizar la infracción de los artículos 30 y 32 del Estatuto Superior "Dado que el actor no expresa su concepto de violación" y en cuanto al desconocimiento de la libertad de contratación se aparta del criterio expresado por aquél, toda vez que el artículo 12 de la Carta le atribuye al Legislador la facultad "privativa y excluyente de determinar el régimen jurídico de las sociedades, en cuyo desarrollo puede establecer obligaciones a cargo de esas personas jurídicas".

b) Sobre los artículos impugnados de la Ley 33 de 1986 considera que no guarda relación "siquiera indirecta, con los cánones 44 y 46, constitucionales, porque en primer lugar, nada tiene que ver con la libertad de asociación (art. 44) y en segundo lugar, no guardan relación con el derecho de reunión (art. 46)".

A su juicio los artículos 115 y 116 atacados "no infringen el precepto 12 de la Carta porque el legislador podía fijar cargas a las personas jurídicas en este caso a las compañías de seguros" por corresponderle como función propia reglar lo concerniente a su régimen.

Que no existe tampoco la violación del artículo 32 de la Constitución, porque la garantía de la libertad de empresa y de la iniciativa privada que allí se consagra se encuentra limitada por el propio constituyente primario, "el cual le permite al Estado intervenir, por mandato legal, en la utilización de los servicios privados como son los que prestan las aseguradoras, buscando siempre el bien común, que fue lo que aconteció con la expedición de las normas atacadas".

c) Recuerda el Procurador que los artículos 117 y 118 de la Ley 33 de 1986 ya fueron demandados, no obstante, se pronuncia sobre el fondo de esta nueva impugnación así:

No comparte el argumento del actor sobre negación del derecho de defensa, porque la "causa extraña" de que habla la norma acusada "consiste en un hecho ajeno a la voluntad de la persona" la cual a su juicio, puede predicarse tanto "del caso fortuito y la fuerza mayor, como de la culpa del afectado, ya que ellas son extrañas, o mejor ajenas al consentimiento del individuo".

Desestima la tacha de inconstitucionalidad que plantea la demanda sobre el artículo 118, porque "el artículo 26 de la Constitución no le prohíbe a la Ley crear o cambiar los trámites procesales, por lo que siendo el artículo 118 una norma de carácter netamente procesal, el Legislador podía fijar un término de prescripción en

materia de tránsito, diferente al que existe en los demás Códigos sin violentar la Constitución Política".

V. Consideraciones de la Corte

Primera. *La Competencia.* De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 214 de la Constitución Nacional, la Corte tiene competencia para conocer y decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los preceptos demandados en esta oportunidad, por cuanto ellos hacen parte de una Ley y de un Decreto expedido por el gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias.

Segunda. *La Cosa Juzgada.* En orden a precisar la extensión del pronunciamiento que se adoptará en este proceso constitucional, debe la Corte advertir en primer término, que los artículos 117 y 118 de la Ley 33 de 1986 fueron demandados en oportunidad anterior por el ciudadano Jorge Cardozo Isaza y sobre ellos recayó fallo de exequibilidad mediante Sentencia No. 62 de agosto 21 de 1986 (proceso No. 1452).

Teniendo en cuenta que las decisiones en asuntos de constitucionalidad son definitivas y están revestidas de la autoridad de cosa juzgada con efectos *erga omnes,* no procede un nuevo pronunciamiento sobre lo ya resuelto por haberse agotado con el fallo aludido, la jurisdicción de la Corte.

Por este motivo el fallo sobre los artículos 117 y 118 de la Ley 33 de 1986 es intangible y habrá de estarse a lo decidido en él; así lo exigen la seguridad jurídica y la imperatividad que le es propia.

Tercera. *Las facultades extraordinarias:* Aunque no es motivo central de la acusación y el actor sólo sugiere que el Presidente pudo haber excedido las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 8ª de 1969, para esta Corporación resulta de capital importancia, cuando la acusación se refiere a los preceptos de un Decreto Ley, examinar su constitucionalidad frente a la ley de investidura a fin de verificar si el Ejecutivo se ciñó a los límites temporal y material que le fijó el Legislador.

El artículo 1° de la Ley 8ª de 1969 en cuyo desarrollo fue expedido el Decreto número 1344 de 1970, le atribuyó al Presidente de la República facultades extraordinarias por el término de un año para: a) revisar los sistemas de notariado, registro de instrumentos públicos y privados, catastro y registro del estado civil de las personas,

... f) Reglamentar lo relativo a la Policía Vial y de Circulación, y expedir el reglamento unificado de tránsito.

Como la vigencia de la Ley se inició a partir de la promulgación, hecho que tuvo ocurrencia mediante su inserción en el "Diario Oficial" No. 32929 de noviembre 10 de 1969, el artículo 96 acusado no excede el límite temporal señalado en la Ley de facultades, toda vez que el Decreto número 1344 de 1970 al cual pertenece, fue dictado el 4 de agosto de 1969.

Igualmente, si se examina el aspecto material de la norma, encuentra la Corte que ella encaja dentro de las atribuciones que le fueron dadas al Ejecutivo en forma amplia, para expedir el reglamento unificado de tránsito y ello se refleja precisamente

en la disposición impugnada, que señala como requisito "indispensable para la consecución y conservación de la licencia de tránsito", la vigencia de un seguro que cubra la responsabilidad civil de quien cause el daño a un tercero en accidente de tránsito.

En efecto, la facultad de expedir un reglamento de tránsito implica de suyo, la de expedir normas con carácter impersonal y abstracto reguladoras de la libertad de locomoción; por esto no resulta extraño a esa materia que el Legislador Extraordinario fije los requisitos que juzgue convenientes y razonables, a fin de que las autoridades correspondientes condicionen a su cumplimiento, el permiso o licencia para que los vehículos transiten por el territorio nacional, y estén a la vez, debidamente protegidos quienes soportan el riesgo del ejercicio de esa actividad, considerada tradicionalmente como peligrosa.

El inciso final del artículo 96 que se analiza es armónico con el ordenamiento constitucional en cuanto deja en manos del gobierno la reglamentación de lo concerniente a la naturaleza, cuantía y prestación del seguro, así como la vigencia de lo allí dispuesto, todo lo cual corresponde al ejercicio de la potestad reglamentaria, confiada por la Norma Suprema al Presidente de la República para la cumplida ejecución de la Ley.

También resulta carente de fundamento la apreciación del actor, según la cual, el Presidente "debió exceder las facultades extraordinarias", y no cabe por este aspecto reparo de inconstitucionalidad; en efecto, la circunstancia de haber estatuido el Legislador extraordinario dentro del Código Nacional de Tránsito una norma relativa al seguro por daños causados en accidente de tránsito, permite inferir que los artículos 115 y 116 que ahora se acusan, no resultan materia extraña o sorpresiva a la Ley 33 de 1986, pues mediante su expedición el Legislador vino a complementar lo que ya había dispuesto en la citada codificación, al imponer la obligatoriedad del seguro "por daños a terceros causados en accidentes de tránsito" y darle al perjudicado, contra lo ordenado en el artículo 1.133 del Código de Comercio, acción directa frente al asegurador.

Del mismo modo, al imponer a las compañías aseguradoras "que tengan autorización para operar en el ramo de automóviles" la obligación de amparar los riesgos que tengan su origen en la circulación de vehículos, el Ejecutivo se acomodó a la materia de la autorización legal ya que estas medidas están enderezadas sin duda a brindar una mayor protección a los habitantes y a sus bienes, y aseguran así la efectividad de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Cuarta. *Libertades de contratación y locomoción o movilización.* Habrá de referirse la Corte a estas garantías individuales ya que como se dejó reseñado precedentemente, el censor de la constitucionalidad de las disposiciones en examen, alude al quebranto de esos derechos o garantías. Las modalidades de la libertad individual en cita y en general, todas las que informan el título III de la Carta Política, se han considerado por la Corporación como esencialmente relativas en contra de la concepción de los doctrinantes del siglo XVIII quienes en su intento por oponerlas al omnímodo poder del monarca, las concibieron como absolutas.

La libertad considerada en abstracto obedece sólo a un concepto filosófico que ha de concretarse en los múltiples y diversos modos del comportamiento humano dando así origen a las libertades o garantías específicas cuya tutela por el Estado es más o menos amplia de acuerdo con las circunstancias imperantes en el grupo social y deben modelarse por éste para que ejerciéndose dentro de los límites por él señalados, permita a los demás el ejercicio de esos mismos derechos y de esta manera se logre la armonía de los intereses generales de la comunidad.

Precisamente acorde con el precedente criterio la Corte ha dicho que "no existen libertades absolutas ni derechos que puedan ser ejercidos *ad-libitum* por el individuo dentro de la inaceptable abstracción de una existencia despojada de relaciones y sentido social"; y que es labor de las autoridades lograr la conciliación de las dos posiciones contempladas por el artículo 16 de la Carta "a través de una adecuada reglamentación cuyo objetivo es hacer posible que todos tengan acceso a ellas; que para todos por igual exista la misma posibilidad de disfrute".

A pesar de que no aparecen explícitamente consagradas las libertades de locomoción y contratación en la Carta Fundamental, ellas brotan de otros textos que en forma más general tutelan la libertad. Es así como respecto el primer derecho, se desprende claramente de los artículos 23 y 46 de la Constitución, normas éstas que prohíben toda molestia a las personas y permite "a la vez a toda parte del pueblo reunirse en forma pacífica". Así lo reconoció la Corporación en sentencia de su Sala Plena del 13 de agosto de 1970 (G.J. No. 2338, bis, pág. 310). Tan importante derecho por otra parte, se incorporó en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968.

En cuanto a la libertad de contratar, pilar del Derecho Civil, ella forma parte de las libertades económicas, pues es modalidad de la libertad de escoger profesión u oficio, de la libertad de empresa y de iniciativa privada tuteladas por los artículos 32 y 39 de la Constitución y se compendia en el poder de autoregulación que de los propios intereses que el Código Civil le reconoce a los sujetos de derecho en el artículo 1.602.

El poder de auto-regulación así consagrado por el ordenamiento positivo, encuentra también su fundamento en la idea misma de persona pues siendo ésta un ser cuyos fines derivan de su naturaleza racional, el ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocerle un ámbito de suficiencia, para arreglar sus propios intereses. El contrato es precisamente el medio adecuado para esta regulación; más como atrás se expresó, las garantías en examen no son absolutas y el ordenamiento las regula o reglamenta llegando muchas veces a restringirlas cuando las conveniencias públicas lo exijan, pues como se anotó y lo ha repetido insistentemente la Corte "la libertad no es incondicionalidad de la voluntad. Se es libre dentro de la ley, al ejercer los derechos en ella reconocidos".

En el campo contractual, y para referirse la Corte en particular a esta garantía que considera el demandante violada por las disposiciones en estudio, el Legislador viene atenuando el en otro tiempo dogmático principio de la autonomía de la voluntad ya que en la forma absoluta en que fue consagrado por los revolucionarios franceses en su Código Civil de 1804, tenía un alcance marcadamente individualista opuesto a la solidaridad social.

Son por ello numerosas las disposiciones legales que inspiradas en imperativos éticos, sociales o humanitarios, ponen límites a la libertad de contratación; y muchos pactos que antes se consideraban de derecho privado han salido de esta órbita para desplazarse al campo público. La evolución jurídica en este proceso marcha aceleradamente hacia una infiltración cada vez mayor de elementos éticos y sociales, en esas relaciones de derecho privado; la doctrina civil aún en nuestro medio acepta la noción de los contratos forzosos o impuestos, en los que el acto por el cual se realiza esta intervención no se limita a establecer el contenido de la relación sino que determina de antemano su forzosa estipulación.

De esta misma estirpe es la legislación que regula los denominados contratos por adhesión, y las tesis que cada vez con más intensidad se abren paso a fin de proteger a la parte que generalmente es víctima del poder de hecho que ostenta la otra, y que se refleja en el desequilibrio de las prestaciones fijadas por ésta unilateralmente.

Esos contratos, bien en la forma normada por el ordenamiento o simplemente en cuanto a la obligatoriedad de su celebración, atendiendo se repite a conveniencias generales, se deben ajustar a las previsiones legales, en vista de la función social que los inspira sin que se pueda sostener fundadamente que tiene el carácter de Actos de Poder sin vestigio alguno de iniciativa particular: Siguen siendo contratos, pactados por la libre voluntad de las partes, pero ceñidos a los lineamientos que el ordenamiento consagre.

Siguiendo la Corte las premisas anteriores puede afirmar que el artículo 96 del Decreto número 1344 de 1970 que establece como requisito para obtener y conservar la licencia de tránsito, la vigencia de un seguro que garantice la reparación de los perjuicios causados a un tercero en accidente de tránsito, y los textos consignados en los artículos 115, 116 de la Ley 33 de 1986 complementarios de la disposición anterior, en la medida en que reiteran la obligatoriedad del seguro y le dan acción directa al perjudicado contra el asegurador e imponen la obligación a las compañías de seguros de asumir esta responsabilidad, no conculcan en manera alguna las libertades de contratación y de locomoción pues se trata de una exigencia que la ley hace en protección de los asociados y en cumplimiento de la función social de prevención y resarcimiento de daños que es propia del contrato de seguros, que desde luego debe pactarse con entera libertad jurídica.

Lo anterior indica entonces, que las normas impugnadas lejos de contrariar el ordenamiento constitucional se adecuan a él en cuanto desarrollan a cabalidad los principios que tutelan los artículos 16 y 20 de la Carta, que imponen a las autoridades el deber de proteger a las personas en sus vidas, honra y bienes; aseguran el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares y su responsabilidad frente a la comunidad política.

Quinta. Plantea el actor como cargo de inconstitucionalidad contra las normas que acusa, el ser violatorias del artículo 12 de la Constitución. Empero ninguna de ellas se ocupa de la regulación de aspectos atinentes a la capacidad, reconocimiento y régimen de las sociedades o demás personas jurídicas, sin que pueda advertirse entonces, el quebranto del precepto constitucional citado.

En cuanto al artículo 116 que impone a las empresas aseguradoras vinculadas al ramo de vehículos la obligación de garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros, es evidente que él contiene una expresión de las facultades de intervención del Estado en la economía en beneficio de la comunidad, e implica a la vez como quedó dicho, una limitación del principio de la libertad de contratar para lo cual existe clara atribución constitucional derivada del artículo 32.

Sexta. *Derecho de acción.* A juicio del demandante el artículo 115 de la Ley 33 de 1986 vulnera el derecho de acción que se deriva del artículo 45 de la Constitución Nacional.

"Derecho de petición" es el nombre genérico con el que la doctrina y la jurisprudencia han denominado la garantía que tutela el artículo 45 de la Carta, la cual comprende tanto la atribución de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades, como la de obtener pronta resolución. Sin duda la acción o pretensión procesal es una modalidad del derecho de petición, mediante la cual se pone en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado a fin de obtener la tutela del derecho material.

Lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley 33 de 1986 al permitir al perjudicado en accidente de tránsito, accionar directamente contra la compañía aseguradora para el pago del seguro a que la misma disposición se refiere, no contraría o desconoce el derecho de petición consagrado en el texto del artículo 45 de la Constitución Nacional.

Se regula simplemente el derecho que el tercero perjudicado tiene frente a la compañía aseguradora para exigir el pago del seguro y que es *directo* esto es decir, que nace por el solo hecho de acaecer el riesgo asegurado por el tomador y se ubica en una típica "estipulación para otro" según la estructura que a esta figura le da el artículo 1605 del Código Civil.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños causados por la circulación o conducción de vehículos automotores, impone a cargo de la compañía aseguradora la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el tercero con motivo de la responsabilidad que en su causación, haya podido incurrir el tomador en ejercicio de dicha actividad.

La sola estipulación de este seguro aún en la forma obligatoria que la impone el artículo 115 en examen, no desplaza la responsabilidad civil que concierne al tomador de éste, al asegurador en el cumplimiento de las obligaciones propias del contrato de transporte o conducción frente a la parte y frente a terceros. Por ello, y si incurre en inejecución de esos deberes y a consecuencia de ello irroga perjuicios a terceros, estos pueden exigir del autor del daño la correspondiente indemnización; o si lo prefieren, pueden dirigirse contra el asegurador para reclamar de éste el pago del seguro cuando la cuantía cubra según su criterio, los daños sufridos y bajo el supuesto de que el tomador, autor de la inejecución del contrato de transporte, sea responsable del daño por haberse reunido en integridad, los requisitos de este tipo de responsabilidad civil; todo lo cual habrá de ventilarse en el proceso que se incoe contra el asegurador.

Ocurrido el siniestro, que en esta modalidad de seguro es el hecho externo imputable al tomador y que consiste en la causación del daño al tercero, la víctima puede optar por exigir su resarcimiento integral al autor del hecho delictual o cuasi-delictual, o dirigirse en acción directa nacida de la estipulación del seguro entre el tomador y el asegurador, contra la compañía aseguradora; esto último no lo habría podido hacer frente al artículo 1133 del Código de Comercio que dispone que el seguro de responsabilidad no es seguro a favor de terceros, y el *damnificado carece en tal virtud, de acción directa contra el asegurador.*

El artículo 115 de la Ley 33 de 1986 hace más expedita la acción electiva de la víctima para que si ésta lo prefiere, exija directamente al asegurador el pago de la indemnización y no a través de otro expediente que bien podría ser un llamamiento en garantía en el proceso incoado contra el autor del hecho, ello porque el seguro de daños tiene carácter indemnizatorio y por ende su pago no puede concurrir con el de los daños a cargo del autor del hecho ilícito.

Esa facilidad que brinda la ley nueva a la víctima del accidente de tránsito, implica tan solo la derogatoria del artículo 1133 del Código de Comercio y no como resulta obvio, la violación de mandato constitucional alguno, pues el Legislador se ha limitado a hacer uso de la facultad constitucional de "interpretar, reformar y derogar leyes preexistentes y disposiciones de códigos" como lo contempla el artículo 76-1-2 de la Constitución Nacional.

En conclusión, no encuentra la Corte que las disposiciones acusadas sean contrarias al ordenamiento constitucional y por ello ha de decidirse su exequibilidad.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Primero. Declarar EXEQUIBLES los artículos 96 del Decreto-ley número 1344 de 1970 y los artículos 115 y 116 de la Ley 33 de 1986.

Segundo. En cuanto a los artículos 117 y 118 de la Ley 33 de 1986, ESTÉSE a lo resuelto en la Sentencia No. 62 de agosto 21 de 1986 (Proceso 1452).

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Alvaro Tafur Galvis,* Conjuez, *Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón*

Diaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía,

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

La suscrita secretaria general de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR:

Que el magistrado Edgar Saavedra Rojas, no asistió a la Sala Plena celebrada el día veintinueve de enero del presente año, por encontrarse con excusa justificada.

Expedida en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

LOS DERECHOS DE AUTOR. OBRA DE ARTE DE CARACTER INDUSTRIAL, CUANDO LA OBRA DE ARTE HAGA PARTE DEL OBJETO INDUSTRIAL A QUE FUE APLICADA, NO SE PUEDE HABLAR DE DERECHOS DE AUTOR SINO POR EL CONTRARIO, CONSTITUIRIA UNA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE ESTA PROTEGIDA DE OTRA FORMA Y TIENE SU PROPIA REGLAMENTACION LEGAL. COSA JUZGADA.

Estése a lo resuelto en sentencia No. 52 de 4 de julio de 1986 (expediente No. 1402), respecto al art. 6° de la Ley 23. Exequible el inciso 3° del art. 6° de la Ley 23 de 1982.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 5.

Referencia: Expediente número 1494.

Acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 6°, 1er. inciso (parcial), e inciso 3° de la Ley 23 de 1982.

Actor: *Martín Carrizosa Calle.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobada por Acta número 02.

Bogotá, D. E., enero veintinueve (29) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Martín Carrizosa Calle, presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6°, inciso 1°, parcial, e inciso 3° de la Ley 23 de 1982.

Se admitió la demanda, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien emitió el concepto de rigor, y procede la Corte a resolver el asunto.

II. Texto de la norma acusada

La norma acusada por el actor es del siguiente tenor:

"Ley 23 de 1982

"Artículo 1°...

Artículo 6° Los inventos o descubrimientos científicos con aplicación práctica explotable en la industria, *y los escritos que los describen,* sólo son materia de privilegio temporal, con arreglo al artículo 120, numeral 18, de la Constitución.

"Las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son objeto de apropiación. Esta Ley protege exclusivamente la forma literaria, plástica o sonora, como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas y artísticas.

"Las obras de arte aplicadas a la industria sólo son protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicadas" (Lo subrayado es lo demandado)

III. Normas constitucionales que se consideran violadas

El actor considera violados los artículos 16, 31, 35 y 120-18, de la Constitución Nacional.

IV. Argumentos de la demanda

Afirma el actor que la expresión y el inciso demandado del artículo 6° de la Ley 23 de 1982, infringen el canon 16 de la Constitución, que "establece como principio cardinal la igualdad frente a la ley de todos los residentes en Colombia" y el artículo 31 *ibidem* que "prohíbe la concesión de privilegios en materias diferentes a inventos útiles y vías de comunicación". También considera infringido el artículo 35 de la Carta, por cuanto ésta disposición al proteger a los autores lo hace sin discriminación alguna. Tales violaciones se causan porque la ley establece varias clases de autores, así: "a) Aquéllos a quienes no les protege su creación (los autores de escritos que describen los inventos o descubrimientos científicos con aplicación práctica en la industria), b) Aquéllos a quienes no les protege la obra, a menos que tenga un valor artístico que pueda ser separado del carácter industrial del objeto, y finalmente, c) Aquéllos privilegiados a quienes la ley sí protege, y que son todos los demás no incluidos en la norma acusada". En relación con el artículo 35 de la Constitución, se considera en la demanda que dicha norma autoriza a la ley solamente para que ésta "establezca las formalidades requeridas para que el derecho quede protegido por el tiempo de la vida del autor y ochenta años más... pues *establecer formalidades es fijar las condiciones, términos y expresiones requeridas para que un acto sea válido o un derecho operante*". Pero este canon constitucional no permite "eliminar la protección a quien tiene derecho de autor como es el caso de los autores de escritos que describen invenciones o descubrimientos científicos con aplicación práctica en la industria, o de aquellos autores de obras de arte aplicadas a la industria en que su valor artístico no pueda ser separado del carácter industrial del objeto", porque "la Carta sólo autoriza a la ley para establecer formalidades, nunca para reglamentar el derecho como tal". Finalmente explica el demandante que existen dos clases de propiedad intelectual, la propiedad literaria y artística protegida por el artículo 35 de la Constitución y la propiedad industrial a la cual se refieren los artículos 31 y 120-18 de la Carta, para

llegar a la conclusión que "la norma acusada le da al artículo 120-18 de la Carta un alcance que no tiene", porque "la forma literaria como se expone la idea en que consiste la invención o el descubrimiento científico" es una obra literaria que debe ser protegida por el artículo 35 de la Constitución.

V. Concepto del Procurador General de la Nación

El Procurador General de la Nación emitió concepto en los siguientes términos:

1. Que en primer lugar, cabe observar que la Corte en la providencia No. 52 del 4 de julio de 1986, ya decidió sobre la exequibilidad de la expresión "y los escritos que los describen" contenida en el artículo 6° de la Ley 23 de 1982, con la consideración de que la norma acusada no hace desaparecer el derecho de propiedad intelectual protegido por el artículo 35 de la Constitución.

2. Que por lo anterior procede solicitar a la Corte que esté a lo resuelto en la citada sentencia, respecto de la expresión demandada, por ser cosa juzgada.

3. Que en relación con el último inciso del artículo 6° que no había sido acusado con anterioridad, se observa que esta disposición, lejos de infringir el artículo 35 de la Carta, reconoce el goce de los derechos de autor inclusive en obras artísticas que hagan parte de objetos industriales, siempre y cuando "su valor artístico pueda ser separado del carácter del objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicadas". En el caso que esta separación no pueda ocurrir, obviamente prevalece la naturaleza industrial de la creación, ya que su finalidad es la industria y no el arte y el creador, así sea un artista, cuando aplica su talento a la industria, de tal manera que su obra se confunda con el objeto industrial, no puede exigir la exclusividad en la propiedad, pues ésta deja de ser una obra artística en el sentido señalado por el artículo 35 de la Constitución.

4. Que en efecto, este canon constitucional se refiere a las obras en las cuales prevalece el elemento intelectual, o sea, como dice Sáchica al "derecho de dominio sobre cosas o bienes incorporales, no tangibles, como lo son los frutos del talento, de la inteligencia, y el ingenio del hombre, vertidos en formas plásticas, traducidas en pensamientos, ideas, teorías o doctrinas", y no "a la propiedad de los elementos materiales o sensibles mediante los cuales se expresan esas formas y esas ideas o quedan impresos", porque esta disposición de la Carta sólo tutela el modo como dichos elementos materiales "fueron concebidos originalmente y el estilo personal en que se expresan, que da facultad exclusiva al autor o al artista para reproducirlas" (Sáchica, Constitucionalismo Colombiano, pág. 362).

5. Que teniendo en cuenta la anterior explicación, resulta evidente que un objeto industrial que es eminentemente material y utilitario, y en el cual lo artístico es un agregado que no modifica sustancialmente su valor, no se ajusta al concepto de la propiedad "intelectual" amparada por el artículo 35 de la Constitución.

En tales condiciones, tampoco puede considerarse que el inciso acusado viole la igualdad de la ley garantizada implícitamente por el artículo 16 de la Carta, porque ésta se predica en igualdad de circunstancias y no cuando el derecho es diferente, como ocurre con la propiedad artística y la industrial.

6. Que en consecuencia, el Despacho considera que es exequible también el último inciso del artículo 6° de la Ley 23 de 1982.

VI. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, el estudio de la exequibilidad de todas las leyes cuando fueren acusadas ante ella por cualquier ciudadano, como lo dispone el artículo 214, numeral 2° de la Carta. Por lo tanto, esta Corporación es competente para resolver este asunto.

2. *Cosa juzgada*

En sentencia No. 52 de 4 de julio de 1986, dictada dentro del proceso 1402, la Corte decidió sobre la exequibilidad de la expresión "y los escritos que los describen", del artículo 6° de la Ley 23 de 1982, habiéndose producido el efecto procesal de cosa juzgada y por tanto se ordena estarse a lo decidido en tal fallo.

3. *Los Derechos de Autor*

"La creación espiritual constituye un medio de comunicación de los hombres y la protección a su autor tiende al mejoramiento y al engrandecimiento de las artes y de las ciencias y por ende de la cultura y la civilización. El medio de expresión es el resultado de toda producción espiritual, que se proyecta a través de diversas formas. Por ello, su protección se produce mediante el reconocimiento y la reglamentación uniforme y universal del derecho intelectual. Por eso están establecidas las notas características del derecho intelectual, así: a) El monopolio o privilegio exclusivo de la explotación a favor del titular; b) Amparo del derecho moral de autor; c) Su temporalidad, referida exclusivamente al aspecto patrimonial del derecho, y no al propio derecho moral de autor, como lo consagra la misma Ley 23 de 1982, y d) Su existencia, a diferencia de las patentes de invención y las marcas, no depende de formalidades esenciales. Nace de la obra sin necesidad de ser constatada, de formular o mencionar reservas, sin declaración o registro alguno. Sólo el ejercicio del derecho requiere el depósito legal".

"Las obras intelectuales son creaciones espirituales sin otro fin que expresar la belleza o la verdad, carentes de un fin utilitario especial, mientras que las patentes de invención, si bien son creaciones mentales, su fin es esencialmente industrial".

Ahora bien, el inciso 3° del artículo 6° de la Ley 23 de 1982, establece la protección para las obras de arte aplicadas a la industria sólo cuando su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en que ellas puedan ser aplicadas.

En una sana interpretación de la norma se tiene que la ley se está refiriendo a los derechos de autor y protección de la propiedad artística desligada de cualquier interés comercial o utilitario, esto es, sin detenerse en la posible aplicación que la obra pueda tener. De otro lado, cuando la obra de arte haga parte del objeto industrial a que fue aplicada, no se puede hablar de derechos de autor sino por el contrario, constituiría

una propiedad industrial que está protegida de otra forma y tiene su propia reglamentación legal.

Por lo tanto, no se advierte que exista violación alguna del artículo 16 de la Carta, pues la igualdad se predica cuando existe igualdad de condiciones, y no se puede decir que hay igualdad de condiciones entre los propietarios de una creación espiritual y los de la obra de arte de carácter industrial.

Así mismo, si la obra de arte hace parte de los objetos de carácter industrial sin poderla separar, como lo exige la norma, no se trata entonces de obras artísticas a fin de proteger derechos de autor, y de ahí la imposibilidad de violación del artículo 35 de la Carta, pues la norma se refiere a otra clase de propiedad, y sobre ella no se están concediendo privilegios, por lo cual no es posible violar el artículo 31 de la Constitución ni mucho menos el artículo 120-18 de la misma. Tampoco se advierte violación de ninguna otra norma constitucional.

VI. Decisión

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Decide:

Primero. Estése a lo resuelto en sentencia No. 52 de 4 de julio de 1986 (expediente número 1402), respecto de la expresión "y los escritos que los describen", que aparece en el artículo 6° de la Ley 23 de 1982.

Segundo. Declarar exequible el inciso 3° del artículo 6° de la Ley 23 de 1982, que dispone:

"Las obras de arte aplicadas a la industria sólo son protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicadas".

Cópiese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Oscar Peña Alzate,* Conjuez, *Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR:

Que el Magistrado Edgar Saavedra Rojas, no asistió a la Sala Plena celebrada el veintinueve de enero del presente año, por encontrarse con excusa justificada.

Bogotá, diecisiete (17) de febrero de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO. NORMAS SOBRE EL ESCALAFON NACIONAL PARA EL SECTOR DOCENTE PUBLICO Y PRIVADO, DEMAS ASPECTOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS EDUCADORES. COSA JUZGADA.

En cuanto al art. 100 del Decreto número 080 de 1980, remite a sentencia del 13 de septiembre de 1984.

Exequible el artículo 113 del mismo decreto.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 6.

Referencia: Expediente número 1500.

Acción de inconstitucionalidad contra el inciso 2° del artículo 100, y el artículo 113 del Decreto número 080 de 1980. Docentes de Educación Post-Secundaria: Pensión de Jubilación. Inhabilidades e incompatibilidades.

Actor: *Vicente Miranda Melo.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobada por Acta número 002.

Bogotá, D. E., enero veintinueve (29) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Vicente Miranda Melo, presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra el inciso 2° del artículo 100 y artículo 113 del Decreto número 080 de 1980. Se admitió la demanda, se corrió traslado al Procurador General de la Nación y se procede ahora a resolver el asunto.

II. Texto de las normas acusadas

"DECRETO NUMERO 080 DE 1980

"Por el cual se organiza el Sistema de Educación Post-Secundaria.

"Artículo 1°...

"Artículo 100...

"El goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de la docencia de tiempo parcial o de cátedra. Su vinculación se hará, sin embargo, por períodos académicos.

Artículo 113. Salvo lo expresamente previsto en este Decreto, las inhabilidades e incompatibilidades de los empleados públicos del orden nacional se aplicarán a los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial".

III. Normas que se consideran infringidas

Artículos 2°, 55, 76-12 y 118-8 de la Constitución Nacional.

IV. Argumentos de la demanda

Considera el actor infringida la Constitución por las siguientes razones:

1. Que la Ley 8ª de enero 24 de 1979, con base en la cual se expidió el Decreto número 080 de 1980, y "Por la cual se otorgan unas facultades extraordinarias para establecer la naturaleza, características y componentes del Sistema de Educación Post-Secundaria, se fijan requisitos para la creación y funcionamiento de instituciones públicas y privadas de educación post-secundaria, para organizar la Universidad Nacional de Colombia y las demás universidades e institutos oficiales de nivel post-secundario y para expedir las normas sobre Escalafón Nacional para el sector docente y derogar unas normas, en su artículo 1°, ordinal 3°, dice: "Reorganizar la Universidad Nacional de Colombia y las demás universidades o instituciones oficiales de nivel post-secundario, dictar sus estatutos orgánicos en los cuales se defina su naturaleza jurídica, la composición y funciones de sus órganos de dirección, administración, las calidades y atribuciones de sus rectores y directivos, las normas a que estarán sujetas para su manejo administrativo y financiero dentro de claros parámetros de planificación, las disposiciones generales a que deberán someterse los estatutos internos que en materia de personal a su servicio y régimen estudiantil expida cada entidad, con el fin de lograr una óptima calidad académica y una adecuada organización administrativa".

2. Que como se ve claramente de la transcripción del numeral 3° de la Ley de facultades, en ella no se encuentra directa ni indirectamente aspecto alguno relacionado con el régimen de incompatibilidades del personal docente.

Los decretos-leyes, tienen también el carácter de ley en el sentido material, pero con su ámbito reducido exclusivamente al que las facultades señalan. Si en éstas y, para el presente caso, no hubo habilitación en cuanto a incompatibilidades pensionales de los docentes de educación post-secundaria o universitaria, mal podía el Ejecutivo establecerlas en los artículos materia de la presente demanda.

3. Que como principio general y, de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución Nacional, existe prohibición de recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en que tenga parte el Estado, salvo lo

que para casos especiales determinen las leyes. Así, la percepción simultánea de pensión y sueldo implicaría transgresión al mandato constitucional, el cual contiene una regla general de carácter prohibitivo, con excepción: "salvo lo que para casos especiales determinen las leyes. Por ello, la compatibilidad entre pensión y sueldo debe ser determinada exclusivamente por la ley, y por tratarse de una excepción, su interpretación y aplicación deben ser estrictas y restrictivas".

4. Que en consecuencia, no habiendo sido revestido el Ejecutivo de facultades precisas y extraordinarias conferidas por el Congreso de acuerdo con la facultad constitucional consagrada en el ordinal 12, artículo 76 de la Constitución Nacional para reglar aspectos relacionados con las prestaciones sociales, como es el régimen de incompatibilidades pensionales, se violan los artículos: 2°, porque un poder público como es el Ejecutivo, no se ejerce en los términos que señala la Constitución, sino en contra de ella; el 55, porque desconoce flagrantemente el principio de la separación de los poderes en él consagrada, invadiendo en forma inconstitucional las funciones de la Rama Legislativa del Poder Público, y el 76, ordinal 9°, porque la fijación de prestaciones sociales corresponde por disposición expresa de la Constitución Nacional al Congreso y no al Ejecutivo, el que al hacerlo viola la norma constitucional.

5. Que considerados los presupuestos del régimen democrático y el mandamiento del orden jurídico del país presidido por el permanente respeto de la Carta, en este desdoblamiento de la función legislativa el Ejecutivo interfirió funciones propias del Congreso cuando en aplicación de facultades de que no estuvo investido, dictó los textos legales acusados que invaden la órbita exclusiva del Congreso.

6. Que ha dirigido la argumentación de inexequibilidad por inconstitucionalidad de las normas acusadas, porque el Gobierno extralimitó la ley de autorizaciones sin que el Congreso le hubiere delegado la competencia en forma precisa al tenor del citado numeral 12 del artículo 76 de la Carta. Corresponde a la Honorable Corte buscar la perfección del Estado, deslindando dentro de marcos precisos el poder constitucional ahora fuerte y extenso, a través del exacto control constitucional.

V. Concepto del Procurador General de la Nación

El Procurador General de la Nación emitió concepto en los siguientes términos:

1. Que en primer lugar debe observarse que la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado sobre la exequibilidad del artículo 100 del Decreto número 080 de 1980, en sentencia No. 98 del 13 de septiembre de 1984, y en consonancia, es pertinente solicitar a la Corte que se esté a lo resuelto en la citada sentencia, por ser cosa juzgada.

2. Que en relación con el artículo 113 del mismo decreto, no existe pronunciamiento de la Honorable Corporación. Sin embargo, es evidente que dicha norma también se ocupa del régimen de incompatibilidades de los docentes, haciendo extensivas a ellos las reglas generales previstas para los empleados públicos del orden nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior es forzoso concluir que las facultades del Ejecutivo para dictar el artículo 113 se encuentran también señaladas en las expresio-

nes "expedir... las disposiciones que regulen los derechos, deberes, estímulos, sanciones y *demás aspectos del ejercicio profesional* de los educadores al servicio de establecimientos de educación", contenidas en el artículo 1°, numeral 4° de la Ley 8ª de 1979, puesto que si la incompatibilidad establecida en el artículo 100 es una materia que la Corte consideró que se ajusta a los conceptos de "derechos" y "demás aspectos" de la docencia, previstos por la ley de facultades, la misma consideración cabe en lo atinente a las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el artículo 113 que se analiza.

3. Que por otra parte, cabe observar que en sentencia No. 16 del 6 de mayo de 1982, la Corte también declaró exequible el artículo 95 del Decreto número 080 de 1980, el cual precisamente se refiere a una de las excepciones de incompatibilidad previstas por el artículo acusado en la presente demanda, y aunque en dicha sentencia no se analizan expresamente las facultades, no se hacen reparos sobre este aspecto, por lo que resulta obvio que si la Corte no encontró objeciones de orden constitucional en una norma que señala las excepciones, tampoco existan en la disposición que establece la regla general de la misma materia.

VI. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

La Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del presente asunto, toda vez que de acuerdo con el artículo 214 de la Carta, las normas acusadas hacen parte del Decreto número 080 de 1980, dictado por el Ejecutivo, con base en las facultades otorgadas por el Congreso en desarrollo del artículo 76-12 de la Constitución.

2. *Cosa juzgada*

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 13 de septiembre de 1984, No. 98 aprobada por acta No. 43 de la misma fecha y con ponencia del doctor Manuel Gaona Cruz, declaró exequible el artículo 100 del Decreto número 080 de 1980.

Como quiera que la exequibilidad de esta norma ya fue decidida por la Corte en la sentencia antes referida, se ha producido el efecto procesal de cosa juzgada y por tal razón se ordena estarse a lo resuelto en la sentencia de 13 de septiembre de 1984.

3. *El artículo 113 del Decreto número 080 de 1980*

Por cuanto la Corte no ha efectuado cotejo de constitucionalidad del artículo 113 del Decreto número 080 de 1980, se procede a ello.

El actor considera que el artículo mencionado infringe los artículos 2-55, 76-12 y 118-8 de la Constitución Nacional.

De la exposición efectuada por el demandante, se observa que la acusación fundamental se basa en la posible extralimitación del Ejecutivo respecto del marco que la ley de facultades extraordinarias (Ley 8ª de 1979) le había conferido.

Está establecido ya por la jurisprudencia, pero no sobra reiterarlo nuevamente, que cuando se acusa una norma por exceso en las facultades otorgadas con base en el

artículo 76-12 de la Carta, la infringida por el Presidente de la República es el artículo 118-8 de la Carta y no el 76-12 de la misma, toda vez que el 76-12 hace referencia a la ley de facultades y ésta no es objeto de acusación. Por ello, el cotejo se efectuará frente al 118-8 de la Constitución, a fin de establecer si el Presidente de la República al dictar el artículo 113 del Decreto número 080 de 1980 rebasó las facultades que le había conferido la Ley 8ª de 1979. Es preciso conocer el texto de esta Ley en su parte pertinente, que es el siguiente:

"LEY 8ª DE 1979
(Enero 24)

"Por la cual se otorgan unas facultades extraordinarias para establecer la naturaleza, características y componentes del sistema de educación post-secundaria, se fijan los requisitos para la creación y funcionamiento de instituciones públicas y privadas de educación post-secundaria para reorganizar la Universidad Nacional de Colombia y las demás universidades e institutos oficiales de nivel post-secundario y para expedir las normas sobre escalafón nacional para el sector docente y derogar unas normas.

"EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

D E C R E T A:

"Artículo 1° De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del art. 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, contado a partir de la sanción de la presente Ley, para lo siguiente:

"……

"4° Expedir las normas sobre escalafón nacional para el sector docente público y privado de los niveles de educación superior y las disposiciones que regulen los derechos, deberes, estímulos, sanciones y demás aspectos del ejercicio profesional de los educadores al servicio de establecimientos de educación sin desconocer los derechos que en materia de escalafón hubieran adquirido antes de la expedición del Decreto Extraordinario número 128 de 1977 y durante la vigencia de éste.

"……

"Artículo 5° Esta Ley regirá a partir de la fecha de su sanción.

"Dada en Bogotá, D. E., a los 24 días del mes de enero de 1979".

La sentencia de 13 de septiembre de 1984, al pronunciarse sobre la amplitud de la ley de facultades frente al régimen de incompatibilidades que establecía el artículo 100 del mismo Decreto dijo:

"……

"De lo subrayado del texto del numeral 4° del artículo 1° de la Ley 8ª de 1979 precedentemente transcrito, saca en claro el juez de constitucionalidad que el Gobierno sí estaba facultado para expedir el artículo 100 del Decreto número 080 de 1980, en el cual, ciñéndose a dicha Ley, y recorriendo sus mandatos se *'regulan'* algunos *'derechos'*, *'estímulos'* y *'aspectos'* sobre el *'ejercicio profesional de los educadores al*

servicio de establecimientos de educación; como son los siguientes de naturaleza laboral: el de que 'la edad de retiro forzoso para los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial, será de sesenta y cinco años', el de que 'el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de la docencia de tiempo parcial o de cátedra' y el de que su 'vinculación se hará, sin embargo, por períodos académicos'. Las materias así reguladas del artículo demandado las toma la Corte como habilitadas por aquella ley en calidad de 'derechos' y 'aspectos' y sobre todo de 'estímulos' de carácter laboral o atinentes al ejercicio profesional de dicho personal docente".

"6. Negarle en estrado jurisdiccional de constitucionalidad al Gobierno la atribución de regular lo anterior frente a las admitidas facultades equivale a exigirle al legislador ordinario un recetario tan detallado y minucioso para conferirlas que haría estéril la razón y finalidad de la investidura legislativa extraordinaria o que convertiría al legislador extraordinario en un mero reglamentador ordinario de la ley, para lo cual no requieren ni el Congreso ni el Gobierno apoyarse en los artículos 76-12 y 118-8 de la Carta, sino en el 76-1 en el que se le otorga al primero la facultad de hacer y reformar directamente la ley, y en el 120-3 de la misma en el que se le reconoce al segundo la atribución directa de reglamentación de la ley..."

Ahora bien, el artículo 1°, numeral 4° de la ley de facultades, autoriza al Presidente de la República para expedir normas sobre Escalafón Nacional para el sector docente público y privado y las disposiciones que regulen entre otros los deberes y sanciones y demás aspectos del ejercicio profesional de los educadores.

El artículo 113 del Decreto número 080 de 1980, al someter a los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los empleados públicos del orden nacional, con las salvedades que fija el mismo decreto, está precisamente regulando los deberes y sanciones a que deben estar sujetos tales educadores. La Corte entiende que el contenido del artículo acusado se encuentra cobijado en la ley de facultades y especialmente en el artículo 1°, numeral 4°. Por tanto, no se advierte violación alguna del artículo 118-8 de la Carta.

En conclusión, como el Presidente de la República hizo uso de las facultades conferidas no se advierte violación alguna de los artículos 2° y 55 de la Carta, ni de otra norma constitucional, por ello debe declararse exequible la norma acusada.

Decisión

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

Decide:

Primero. En cuanto al artículo 100 del Decreto número 080 de 1980, Estése a lo resuelto en sentencia de 13 de septiembre de 1984.

Segundo. Declarar exequible el artículo 113 del Decreto número 080 de 1980, que dispone:

"Artículo 113. Salvo lo expresamente previsto en este Decreto, las inhabilidades e incompatibilidades de los empleados públicos del orden nacional se aplicarán a los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Oscar Peña Alzate,* Conjuez, *Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR:

Que el Magistrado Edgar Saavedra Rojas, no asistió a la Sala Plena celebrada el día veintinueve de enero del presente año, por encontrarse con excusa justificada.

Bogotá, diecisiete (17) de febrero de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

ES MATERIA DE LA LEY OCUPARSE DEL HECHO DEL NACIMIENTO DE LAS PERSONAS Y RECONOCERLE LOS EFECTOS QUE NO ESTA RESERVADO HACERLO A UNA DISPOSICION CONSTITUCIONAL, FACULTAD LEGISLATIVA PROPIA DEL CONGRESO, DE LA CUAL PUEDE PRECISA Y TEMPORALMENTE REVESTIR AL EJECUTIVO PARA DISPONER LOS RESTANTES EFECTOS JURIDICOS. DEL REGISTRO DE NACIMIENTOS, OCURRIDOS EN TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO.

FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

Exequible el numeral 3° del artículo 44 del Decreto número 1260 de 1970.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 7.

Referencia: Expediente número 1526.

Norma Acusada: Artículo 44 del Decreto-ley número 1260 de 1970.

Actores: *Juan La Rotta y Alvaro Márquez.*

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobado por Acta número 2.

Bogotá, D. E., enero veintinueve (29) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional, los ciudadanos Juan La Rotta y Alvaro Márquez, presentaron demanda de inexequibilidad contra el artículo 44 del Decreto-ley número 1260 de 1970.

Una vez admitida la demanda, se dio traslado de ella al Procurador General de la Nación, quien ha emitido el correspondiente concepto de rigor, en virtud de lo cual, la Corte se ocupará a continuación, del fallo a que haya lugar.

I. Norma acusada

El numeral tercero del artículo 44 del Decreto-ley número 1260 de 1970, dice lo siguiente:

"Artículo 44. En el registro de nacimientos se inscribirán:

".....

3. Los nacimientos que ocurran en el extranjero, de personas hijas de padre o madre colombianos de nacimiento o por adopción, o de extranjeros residentes en el país, caso de que lo solicite un interesado".

II. Concepto de la violación

En opinión de los acusantes el texto subrayado viola los artículos 8° y 10 de la Constitución, porque concede la posibilidad a los extranjeros residentes en el país de inscribir en el registro de nacimientos a sus hijos que hayan nacido en el exterior, y, después de que se les otorgue la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía colombiana, evadiendo las condiciones establecidas constitucionalmente para ser colombiano.

El artículo 8° de la Constitución, dicen los demandantes, condiciona la nacionalidad colombiana de los hijos de los extranjeros que hayan nacido en el país a su domicilio en Colombia; la parte acusada permite a dichas personas ejercer derechos como si fueran colombianos, esto es, adquirir tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía mediante el registro civil de nacimiento.

Respecto del artículo 10 de la Constitución sin sustentar sus afirmaciones dicen que lo acusado es contrario a la Carta.

III. Concepto del Procurador

La vista fiscal solicita que se declare la exequibilidad del texto acusado y para ello opina el Procurador lo siguiente:

Las disposiciones acusadas son materia de un estatuto dictado por el ejecutivo en uso de facultades legislativas extraordinarias, pero las previsiones demandadas encajan perfectamente en las facultades dadas por la Ley 8ª de 1969, pues el artículo 44 del Decreto número 1260 de 1970 señaló los asuntos que deben inscribirse en el registro de nacimiento, incluyendo en su numeral 3° "los que ocurran en el exterior" tanto de colombianos como de extranjeros lo cual no es materia ajena al registro del Estado Civil de las personas.

La disposición acusada en nada incide sobre la nacionalidad de los inscritos; no establece que el registro les otorgue la nacionalidad colombiana; simplemente permite que se registre el nacimiento de extranjeros en protocolos colombianos.

Dice el Procurador que si se llegare a expedir cédulas de ciudadanía con base en el registro civil al hijo de extranjero nacido en el exterior, la falla no sería de la Ley sino de la administración, lo cual no conlleva vicio de inconstitucionalidad.

En cuanto a la infracción del artículo 10 de la Carta, el Fiscal no encuentra que el numeral acusado tenga relación con aquella norma superior, ya que no desconoce el deber de nacionales y extranjeros en Colombia de "vivir sometidos a la Constitución, a las leyes y respetar y obedecer a las autoridades, ni extiende el sometimiento a la ley colombiana para los extranjeros en el exterior, puesto que la inscripción en registros colombianos de sus hijos nacidos fuera del país, no es obligatoria sino facultativa".

IV. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

La norma acusada es parte de un Decreto-ley, expedido por el Ejecutivo en ejercicio de las precisas facultades legislativas de que fue revestido por el Congreso, bases para que la Corte decida sobre la acusación de su inexequibilidad.

2. *La ley de facultades*

El Congreso mediante Ley 8ª de 1969 facultó al Presidente de la República para ejercer temporalmente atribuciones legislativas, de las cuales, en la especie de esta demanda, es pertinente referirse a las contenidas en el literal d) del artículo 1º, relacionadas con "el estatuto del Estado Civil de las personas con señalamiento de los hechos y actos sometidos a inscripción, los funcionarios encargados de este registro, la norma como deben llevarlo, los efectos de la anotación, el procedimiento para correcciones de partidas, el arancel, el mérito probatorio de las actas, copias y certificados". El lapso de revestimiento de ellas fue de un año contado a partir de la promulgación de la ley, lo cual ocurrió el 10 de noviembre de 1969, fecha de su promulgación en el "Diario Oficial" No. 32929.

3. *Estudio de la exequibilidad*

A. Temporalidad.

La norma acusada integra el Decreto-ley número 1260 de 1970 "por el cual se expide el estatuto de registro del estado civil de las personas", vigente, tal como lo determina el artículo 124, desde el 5 de agosto de 1970, fecha de su publicación en el "Diario Oficial".

De la simple confrontación de términos se concluye que por este aspecto el Ejecutivo ejerció oportunamente las facultades legislativas.

B. Materialidad.

Las facultades legislativas de la Ley 8ª de 1969 son las relacionadas con el Estatuto del registro del estado civil de las personas con indicación de los hechos y actos sometidos a inscripción, y entre las distintas materias que fueron objeto de revestimiento extraordinario existen algunas que no inciden en la definición de la presente demanda y, aunque ella no es un cuestionamiento a la ley de facultad sino a su desarrollo por la Presidencia de la República, resulta apropiado establecer qué limitaciones constitucionales tiene el legislador ordinario y extraordinario en relación con el Estado Civil.

La Constitución señala que la Ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los correspondientes derechos y deberes, pero no avanza noción alguna sobre la mencionada calidad de la persona. La Constitución, en cambio, sí define otras calidades de ella como la "nacionalidad y la ciudadanía" las cuales son nociones inalterables por la ley.

Tenemos, entonces, que la Carta distingue la persona natural colombiana y la extranjera, disponiendo que los residentes en Colombia deben vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, respetar y obedecer a las autoridades.

La calidad de nacional colombiano, según la Constitución, deviene o del hecho jurídico del nacimiento en los términos indicados por el numeral 1° del artículo 8° de la Constitución o por la manifestación de voluntad del extranjero –hecho jurídico también– ajustada a los términos de la ley para obtener su carta de naturalización, de acuerdo con el numeral 2° del artículo citado. Esa calidad, según la norma fundamental, se pierde al adquirir carta de naturaleza en país extranjero y fijando su domicilio en el exterior, pero puede recobrarse en los términos señalados por la ley. Ella es requisito indispensable tanto a los nacionales como a los extranjeros aunque a éstos en las condiciones previstas por la ley, atendiendo razones de orden público, pueden subordinarles su ejercicio al cumplimiento de condiciones especiales.

La otra calidad de la persona, también definida por la Constitución, es la ciudadanía, así como la forma de su pérdida en concomitancia con la de la nacionalidad, sanción que proviene de la misma Carta, o que se origina en la ley en virtud de decisión judicial en los casos determinados por el legislador. La carta consagra el derecho a la rehabilitación de la ciudadanía. Las precedentes calidades de la persona natural, nacionalidad y ciudadanía, las cuales se ubican dentro de la sociedad que habita el territorio nacional, no pueden ser alteradas o desconocidas por el legislador dada su clara estirpe constitucional; peor, de la persona como sujeto de derechos y deberes, se pregonan otras calidades, las que compete al legislador definir observando las limitaciones constitucionales.

La definición legal del estado civil entre nosotros contiene elementos políticos y civiles, ya que la Constitución no ofrece su noción. Es por ello que el Decreto-ley número 1260 de 1970 la enuncia como "la situación jurídica en la familia y la sociedad" y que sirve para determinar la capacidad de ejercicio de ciertos derechos y para contraer ciertas obligaciones.

La Ley 8ª de 1969 al facultar al Ejecutivo para legislar sobre el Estado Civil de las personas tampoco le precisó una definición de tal instituto jurídico, pero lo autorizó para adoptar una, sin la cual no podría indicar los hechos y actos sometidos a la formalidad de su inscripción, lo que impone limitar las fuentes legales del estado civil.

Entre los sucesos de la naturaleza a los que la ley les asigna efectos jurídicos, el nacimiento conlleva importantes efectos legales según el territorio donde suceda y el núcleo personal donde acontezca. De lo primero –el territorio– la Constitución, a partir de la confluencia de varios elementos esenciales, deriva la nacionalidad, la cual, como se anotó, es una calidad de la persona en la sociedad. De lo segundo, correspondiente a la ubicación de la persona en la familia, fuente de derechos y obligaciones se ocupa la ley.

Aquélla y éstas son circunstancias relevantes dentro del estado civil de la persona por habilitarle para ejercer derechos y someterle a obligaciones.

Es materia de la ley ocuparse del hecho del nacimiento y reconocerle los efectos que no está reservado hacerlo a una disposición constitucional, facultad legislativa propia del Congreso, de la cual puede precisa y temporalmente revestir al Ejecutivo para disponer los restantes efectos jurídicos. El artículo 5° del Decreto-ley número 1260 de 1970 dispuso que "los hechos y actos relativos al estado civil de las personas deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente, los nacimientos..."

Luego el artículo 44 del mismo estatuto respecto del registro de nacimiento, ordena que sean los ocurridos en el territorio nacional sin distinguir la nacionalidad de los progenitores, y, los ocurridos en el extranjero atendiendo dos hechos: El primero, la nacionalidad colombiana de uno de los padres; el segundo, a la solicitud del extranjero residente en el país, para que se inscriba el alumbramiento de su hijo en el exterior.

La hipótesis de esta demanda es la vertida en el numeral 3° del artículo 44 del Decreto-ley número 1260 de 1970, referente al registro de nacimientos que ocurran en el extranjero de personas hijas de extranjeros residentes en el país caso de que lo solicite un interesado.

Considera la Corte que es la Carta Política y no la ley la que determina quiénes son colombianos y no existe en ese aspecto violación constitucional, ya que la nacionalidad continúa regulándose por el artículo 8° de la Constitución y no por lo dicho en el numeral 3° del artículo 44 del Decreto número 1260 de 1970.

El registro del estado civil de las personas es un servicio público y corresponde como tal a la ley determinar todos los aspectos de su prestación, al cual pueden acceder los residentes en Colombia para dejar constancia y obtener la pertinente prueba del hecho y acto no necesariamente sucedido en suelo patrio, pero a condición evidente de hacerle generar efectos jurídicos en él, y a dicha finalidad apunta el tenor acusado, para facilitar al extranjero residente en Colombia o a un interesado poseer en el país la prueba de un hecho ocurrido en el exterior cuyos efectos se exigen o cumplen en el país, como son los relacionados con sus parientes y sus relaciones de familia cuando lo requiera en Colombia como lugar de su residencia.

En el evento que concita, ni la nacionalidad ni la ciudadanía regidos por preceptos constitucionales resultan vulnerados, porque el registro de ese nacimiento no trae consigo para el nacido la calidad de nacional colombiano ni a partir del artículo 8° de la Carta ni del número 3 del artículo 44 del Decreto-ley número 1260 de 1970, pues para ello la propia Constitución le faculta en su oportunidad arquirirla por adopción, según los términos de la ley, precisamente por no tenerla.

Por todo ello no existe violación constitucional en la parte final del numeral 3° del artículo 44 del Decreto-ley número 1260 de 1970.

V. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE el numeral 3° del artículo 44 del Decreto-ley número 1260 de 1970.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR:

Que el Magistrado Edgar Saavedra Rojas, no asistió a la Sala Plena celebrada el día veintinueve de enero del presente año, por encontrarse con excusa justificada.

Bogotá, diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

COSA JUZGADA, DEFINITIVA Y ERGA OMNES. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. FLAGRANCIA Y CUASIFLAGRANCIA, A QUIENES SE PUEDE CONCEDER LA LIBERTAD PROVISIONAL.

Estése a lo resuelto en las sentencias de octubre 9 y de julio 17 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 8.

Referencia: Expediente número 1520

Acción de inexequibilidad contra los Decretos números 1853 de 1985 y 056 de 1986.

Actor: *José Gendry Mosos Devia.*

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobado según Acta número 3.

Bogotá, D. E., febrero cinco (5) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

En ejercicio del derecho que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano José Gendry Mosos Devia solicita a esta Corporación que declare la inexequibilidad de los artículos 1, 2, 3, 4 incisos 1º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del Decreto número 1853 de 1985 y el Decreto número 056 de 1986 en su integridad.

Admitida oportunamente la demanda se dio traslado al Señor Procurador General de la Nación, quien mediante oficio del 30 de septiembre de 1986 manifestó estar impedido para conceptuar en este asunto por haber participado, en su calidad de representante a la Cámara, en la elaboración y expedición de la Ley 52 de 1984, en virtud de la cual se dictaron los Decretos acusados.

La Sala Constitucional inadmitió la causal de impedimento invocada y el Procurador General rindió la vista fiscal de rigor, con cuyo trámite procede la Corte a resolver la demanda propuesta, previa las siguientes consideraciones.

II. Norma acusada

El texto literal de las disposiciones acusadas es como sigue:

"DECRETO NUMERO 1853 DE 1985
(julio 8)

"Por el cual se dictan unas normas de Procedimiento Penal.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 52 de 1984, y oído el concepto de la comisión asesora creada por el artículo 3° de la referida Ley,

DECRETA:

"Artículo 1° *Flagrancia y cuasiflagrancia.* Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer un hecho punible. Se considera en situación de cuasiflagrancia la persona sorprendida con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que ha cometido un hecho punible o participado en él; o cuando es perseguida por la autoridad; o cuando por voces de auxilio se pide su captura.

"Artículo 2° *Captura en flagrancia o cuasiflagrancia.* Quien sea sorprendido en flagrancia o cuasiflagrancia, será capturado por la Policía Judicial o por cualquiera otra autoridad o persona y conducida en el acto o a más tardar en el término de la distancia, ante el juez competente para iniciar la investigación, a quien deberá rendir un informe sobre las causas de la captura. De este informe se dejará constancia en un acta que suscribirán el Juez y quien haya realizado la captura.

"Artículo 3° *Captura obligatoria.* En los procesos por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y terrorismo; por los delitos previstos en el Estatuto Nacional de Estupefacientes sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años; por los delitos tipificados en el Capítulo I del Título VII, del Código Penal, y en el Decreto número 2920 de 1982, el Juez librará orden de captura para oír al sindicado en indagatoria.

"Artículo 4° *Captura facultativa o citación para indagatoria.* En los procesos por delitos distintos de los señalados en el artículo anterior sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de agravación concurrentes, podrá librarse orden escrita de captura contra el presunto sindicado para efectos de la indagatoria, si a juicio del instructor hubiere mérito para recibirla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal.

"Artículo 5° En los casos de homicidio y lesiones personales, cuando sea evidente que el inculpado obró en legítima defensa, sólo podrá ordenarse la captura, cuando exista prueba de que la persona no concurrió a rendir diligencia de indagatoria voluntariamente o por citación que haya hecho la autoridad competente.

"En la misma forma se procederá cuando se trate de homicidio o lesiones personales ocurridos en accidente de tránsito y sea evidente que el imputado no actuó con culpa.

"Artículo 6° *Cancelación de las órdenes de captura.* El funcionario que haya impartido la orden de captura está en la obligación de cancelarla inmediatamente cesen los motivos que dieron lugar a ella, so pena de incurrir en causal de mala conducta, sancionable con destitución previo el trámite previsto en las normas legales correspondientes, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

"De la misma manera se procederá en los casos de declaratoria de reo ausente, una vez se haya resuelto la situación jurídica de éste, siempre que no se disponga medida de aseguramiento.

"Artículo 7° *Definición de la situación jurídica.* Terminada la indagatoria y si se tratare de los casos previstos en el artículo tercero y en el inciso primero del artículo cuarto de este decreto, o se captura en flagrancia o cuasiflagrancia, la situación jurídica del aprehendido deberá definirse por auto interlocutorio, a más tardar, dentro de los cinco (5) días siguientes, decretando medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique, u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el procesado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante el juzgado cuando se le solicite.

"Si el procesado fuere dejado en libertad al término de la indagatoria, o hubiere sido declarado reo ausente, el plazo para resolver su situación jurídica será hasta de diez (10) días. El Juez dispondrá del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas ellas se hubiere realizado el mismo día.

"Artículo 8° *Medidas de aseguramiento.* Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra el procesado resultare por lo menos una declaración de credibilidad, según el artículo 236 del Código de Procedimiento Penal, o un indicio grave de responsabilidad.

"Artículo 9° *Conminación.* La conminación consiste en el compromiso por el cual el procesado, so pena de incurrir en arresto inconmutable hasta de treinta (30) días, se somete a cumplir las obligaciones que le imponga el juez al resolverle la situación jurídica. Sólo procede para los delitos sancionados con arresto o pena no privativa de la libertad.

"Artículo 10. *Cauciones.* La caución puede ser juratoria o prendaria y se aplica en relación con los delitos cuya pena mínima sea inferior a dos (2) años de prisión, o cuando se conceda la excarcelación, o cuando se profiera primer sobreseimiento temporal.

"Artículo 11. *Caución juratoria.* La caución juratoria se otorgará mediante acta en la que el procesado mediante juramento prometa cumplir las obligaciones que le hayan sido impuestas. Esta caución procederá cuando a juicio del juez no tenga recursos económicos el procesado para constituir caución prendaria.

"Artículo 12. *Caución prendaria.* Consiste en el depósito de dinero cuya cuantía se fijará teniendo en cuenta las condiciones económicas del procesado y la gravedad del hecho.

"La cuantía oscilará entre $1.000.oo y el equivalente a doscientas veces el salario mínimo mensual establecido por la autoridad competente para el lugar en donde haya ocurrido el delito.

"El dinero se depositará a órdenes del despacho respectivo, en el Banco Popular; donde éste no exista, en la Agencia de la Caja Agraria y, en defecto de ésta, en la Tesorería Municipal.

"Artículo 13. En las actas de conminación y de caución juratoria y prendaria, se consignarán las obligaciones que el procesado debe cumplir, de conformidad con el artículo 460 del Código de Procedimiento Penal.

"Artículo 16. *Excepciones a las normas sobre libertad provisional.* No tendrán derecho a la libertad provisional prevista en el numeral 3° del artículo 44 de la Ley 2ª de 1984, los procesados por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y terrorismo; por los delitos tipificados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes cuando tengan pena de prisión que sea o exceda de dos (2) años y por los delitos de enriquecimiento ilícito y los consagrados en el Capítulo I del Título VII del Código Penal y en el Decreto número 2920 de 1982.

"Artículo 17. *Excarcelación por demora en la celebración de la audiencia.* El procesado tendrá derecho a excarcelación caucionada cuando hayan transcurrido más de dos (2) años a partir de la ejecutoria del auto de proceder sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública con jurado de conciencia, o más de un (1) año si no se hubiere celebrado la respectiva audiencia sin jurado.

"Se exceptúan de este beneficio los procesados por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y terrorismo y por los delitos tipificados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes cuando tengan pena de prisión que sea o exceda de dos (2) años.

"Artículo 18. *Excepciones al artículo anterior.* No habrá lugar a la excarcelación prevista en el artículo anterior cuando la audiencia se hubiere iniciado, así ésta se encuentre suspendida por cualquier causa y cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al procesado o a su defensor.

"Artículo 19. *Notificación del llamamiento a juicio al procesado.* El autor de proceder se notificará personalmente al procesado, si estuviere detenido o si se presentare dentro de los dos (2) días siguientes a la expedición del auto. En caso contrario se notificará al apoderado que lo haya venido asistiendo o, si no lo tuviere, al apoderado de oficio que le designe el juez, y con él se continuará el proceso.

"Artículo 20. *Defensa del procesado.* La persona que haya sido legalmente vinculada al proceso penal, cualquiera sea su situación jurídica, podrá en cualquier momento designar apoderado o defensor, mediante poder debidamente autenticado ante autoridad competente y dirigido al juez respectivo.

"Artículo 21. *Pago de cauciones y multas.* Las cauciones que deban hacerse efectivas y las multas que se impongan en el proceso penal se depositarán en dinero, a órdenes del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, en las oficinas de la Caja Agraria del respectivo municipio, dentro del plazo fijado por el juez o funcionario, o,

en su defecto, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la respectiva providencia.

"Artículo 22. *Destino de las cauciones y multas.* El valor de las cauciones y multas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, ingresen al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, se destinará a la construcción, reparación, mantenimiento y dotación de despachos judiciales y a programas de bienestar social de funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional.

"Artículo 23. *Vigencia del Decreto y derogación de disposiciones contrarias.* El presente Decreto rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga los artículos 120, 182, 289, ord. 9° y 11, 301, 426 (artículo 38 de la Ley 2ª de 1984), 427 (artículo 39, Ley 2ª de 1984), 437, 439 (artículo 42 de la Ley 2ª de 1984), 458, 459 (artículo 46 de la Ley 2ª de 1984), 461, 484, 485, 722, 724 y 725 del Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones que le sean contrarias.

"Comuníquese y cúmplase

"Dado en Bogotá, D. E., a 8 de julio de 1985

"(Fdo.) **Belisario Betancur**
Presidente de la República.

"(Fdo.) **Enrique Parejo González**
Ministro de Justicia".

"DECRETO NUMERO 056 DE 1986
(enero 9)

"Por el cual se dictan unas normas de Procedimiento Penal.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 52 de 1984, y oído el concepto de la comisión asesora creada por el artículo 3° de la referida Ley,

DECRETA:

"Artículo 1° El artículo 2° del Decreto número 1853 de 1985, quedará así: *Captura en flagrancia o cuasiflagrancia* quien sea sorprendido en flagrancia o cuasiflagrancia será capturado por la Policía Judicial o por cualquier otra autoridad o persona y conducido en el acto o en el término de la distancia, ante juez competente para iniciar la investigación, a quien deberá rendirse informe sobre las causas de la captura. De este informe se dejará constancia en acta que suscribirán el juez y quien haya realizado la captura.

"Cuando por cualquier circunstancia no atribuible a quien hubiere realizado la captura, el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente ante el juez, será recluido en la cárcel del lugar o en otro establecimiento oficial destinado al efecto, debiéndose poner a disposición del juez dentro de la primera hora hábil del día siguiente, con el informe de que trata el inciso anterior.

"Artículo 2° El artículo 9° del Decreto número 1853 de 1985 quedará así: *Conminación.* La conminación consiste en el compromiso por el cual el procesado se somete a cumplir las obligaciones que imponga el Juez al resolverle la situación jurídica. Sólo procede para delitos sancionados con arresto o pena no privativa de la libertad.

"Artículo 3° El artículo 14 del Decreto número 1853 de 1985 quedará así: *Casos en que procede la detención preventiva.* La detención preventiva procede en los siguientes casos:

"1. Cuando el delito que se imputa al procesado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de agravación concurrentes.

"2. Cuando se trate de uno cualquiera de los delitos tipificados en el Capítulo I del Título VII del Código Penal y del delito de enriquecimiento ilícito.

"3. Cuando el procesado tuviere auto de detención o caución vigente por delito doloso o preterintencional en otro proceso, aunque el delito por el cual se proceda tenga pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a dos (2) años so pena de arresto.

"4. Cuando se hubiere realizado captura en flagrancia o cuasiflagrancia respecto de delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión.

"5. Cuando el procesado no otorgue la caución juratoria o prendaria dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que la disponga y cuando incumpla cualquiera de las obligaciones que se le hayan impuesto en la respectiva diligencia, caso en el cual también perderá el valor de la caución prendaria que hubiere prestado.

"Artículo 4° *Improcedencia de la medida de aseguramiento.* No procede medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el procesado actuó en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 29 y 40 del Código Penal.

"Artículo 5° El artículo 16 del Decreto número 1853 de 1985 quedará así: *Excepciones a las normas sobre libertad provisional.* No tendrá derecho a libertad provisional prevista en el numeral 3° del artículo 44 de la Ley 2ª de 1984:

"1. Los procesados por delitos de secuestro extorsivo, extorsión y terrorismo, por los delitos tipificados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes cuando tengan pena de prisión que sea o exceda de dos (2) años y por los delitos de enriquecimiento ilícito y los consagrados en el Capítulo I, Título VII del Código Penal y en el Decreto número 2920 de 1982.

"2. Los procesados a quienes se les hubiere dictado auto de detención preventiva conforme a lo previsto en los numerales 4° y 5° del artículo 14 del Decreto número 1853 de 1985.

"Artículo 6° *Poderes disciplinarios del juez.* El juez sancionará mediante resolución motivada contra la cual sólo procede el recurso de reposición, con arresto inconmutable hasta por treinta (30) días al procesado que injustificadamente se negare a suscribir diligencia de conminación.

"El arresto a que se refiere el inciso anterior cesará en el momento en que el procesado suscriba la diligencia.

"El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la diligencia de conminación, dará lugar a la imposición de arresto hasta por treinta (30) días cada vez que dicho incumplimiento se produzca.

"Artículo 7° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase

"Dado en Bogotá, D. E., a 9 de enero de 1986

"(Fdo.) **Belisario Betancur**
Presidente de la República.

(Fdo.) **Enrique Parejo González**
Ministro de Justicia"

III. Razones de la demanda

Con base en un análisis del artículo 76 de la Constitución Nacional en cuanto determina el contenido y alcance de las facultades extraordinarias, dice el actor que el gobierno hizo uso indebido de las atribuciones que le confirió la Ley 52 de 1984, por cuanto en vez de expedir un Código de Procedimiento Penal, dictó "dos decretos que en ningún momento podrán ser considerados como el Código a que se refiere la ley de facultades".

Agrega, que la inconstitucionalidad de los Decretos que demanda, por la forma en que fueron expedidos, es tan notoria, que la Corte Suprema de Justicia haciendo uso del control por vía de excepción, de que trata el artículo 215 de la Carta, ha dejado de aplicar algunas de sus disposiciones, lo cual manifiesta sólo tiene efectos entre las partes que intervienen en el proceso y frente al caso resuelto.

Por lo anterior considera conveniente que la Corte deje sin efecto la totalidad de las normas de los Decretos demandados por cuanto no existe uniformidad de criterio entre los jueces, ya que mientras algunos aplican estos decretos en virtud del principio de la favorabilidad, otros dejan de hacerlo de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte presentándose así "un enfrentamiento normativo, en un terreno tan delicado como es la libertad del procesado".

IV. Concepto del Procurador General

En la vista fiscal de rigor, el Jefe del Ministerio Público solicita a la Corte que se "ESTÉ A LO RESUELTO en las sentencias números 57 y 90 de 17 de julio y 9 de octubre en que se declararon INEXEQUIBLES los Decretos números 1853 de 1985 y 056 de 1986 en su totalidad".

V. Consideraciones de la Corte

Como lo advierten el demandante y el Procurador los Decretos números 1853 de 1985 y 056 de 1986 fueron objeto de acusaciones anteriores, sobre las cuales la

Corte profirió decisiones de fondo que dejaron por fuera del ordenamiento positivo sus disposiciones, ellas son:

1. La sentencia de mayo 22 de 1986 que declaró inexequible el artículo 15 del Decreto número 1853 de 1985 (proceso 1399).

2. En sentencia de junio 25 de 1986 fueron declarados inexequibles los incisos 2º y 3º del artículo 4º y los numerales 1, 2 y 3 del artículo 14 del Decreto número 1853 de 1985.

3. La sentencia de octubre 9 de 1986 que resolvió: "Declárase INEXEQUIBLE en su totalidad el Decreto-ley número 1853 de 1985".

4. El fallo de 17 de julio de 1986 que declaró inexequible en su integridad el Decreto número 056 de 1986.

Conforme se deja visto, las normas del Decreto número 1853 de 1985 y la totalidad de los artículos del Decreto número 056 de 1986 que son materia de esta impugnación, quedaron sin vigencia en virtud de las providencias reseñadas de octubre 9 y julio 17 de 1986, respectivamente, que tiene fuerza de cosa juzgada y alcance *erga omnes*, por lo cual no es procedente reexaminar su constitucionalidad, por haber agotado la Corte su jurisdicción, debiendo por lo tanto atenerse a lo ya resuelto.

VI. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Primero. ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia de octubre 9 de 1986 que dispuso declarar "Inexequible en su totalidad el Decreto número 1853 de 1985" (proceso 1473).

Segundo. ESTÉSE A LO RESUELTO en fallo de julio 17 de 1986 que declaró INEXEQUIBLE en todas sus partes el Decreto número 056 de 1986 (proceso 1473).

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Edgar Saavedra Rojas, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Jorge Iván Palacio Palacio, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Jesús Vallejo Mejía, Rafael Romero Sierra.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR

Que los Magistrados Nemesio Camacho Rodríguez y Rafael Romero Sierra, no asistieron a la Sala Plena celebrada el cinco de los corrientes por encontrarse con excusa justificada.

Expedida en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

NO EXISTE REPARO DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS. COSA JUZGADA. CODIGO DE REGIMEN MUNICIPAL.

Estése a lo resuelto en sentencia No. 101 de nov. 13 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 9.

Referencia: Expediente número 1513

Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 385 del Decreto número 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal). Derogatoria de normas sobre administración municipal.

Actor: *Simón Castro Benítez.*

Magistrado ponente: *Fabio Morón Díaz.*

Aprobado por acta No. 03.

Bogotá, D. E., febrero cinco (5) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Simón Castro Benítez, presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra el artículo 385 del Decreto número 1333 de 1986. Se admitió la demanda y se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien emitió el concepto de rigor y se procede ahora a resolver el asunto.

II. Texto de la norma acusada

"DECRETO NUMERO 1333 DE 1986

"Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 11 de 1986 y oída la Comisión Asesora a que ella se refiere,

DECRETA:

"Artículo 1° .....

"Artículo 385. Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, literal b), de la Ley 11 de 1986, están derogadas las normas de carácter legal sobre organización y funcionamiento de la administración municipal no codificadas en este estatuto.

"Artículo 386. ....."

III. Normas que se consideran infringidas

Artículos 76-12, 20, 2° y 118-8 de la Constitución Nacional.

IV. Argumentos de la demanda

Las razones que da el actor para sustentar la demanda, son las siguientes:

1. La Ley 11 de 1986 no estableció derogatoria alguna, ni la facultad de derogar, por lo que al expedir el Ejecutivo el artículo 385 del Decreto extraordinario número 1336 de 1986, que dispone que están derogadas las normas de carácter legal sobre organización y funcionamiento de la administración municipal no codificadas en ese estatuto, creó, se inventó, un contenido inexacto, inexistente que supera el de las facultades conferidas. Sostiene el actor en este punto que la ley de facultades no le da al Ejecutivo competencia o facultad extraordinaria para declarar sin vigencia o la no vigencia de las normas no incluidas en aquella compilación, por lo que el Ejecutivo habría incurrido en ejercicio de funciones que no le corresponden.

2. Es una institución excepcional la que permita revestir temporalmente al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por lo que su aplicación o ejercicio debe ser estricto y restrictivo, sin salirse de los límites que con precisión le debe señalar el Congreso. Cuando el Ejecutivo concluye que "están derogadas las normas de carácter legal..." incurre en extralimitación de su poder lo que sanciona la Constitución con la inexequibilidad de la norma viciada.

3. El actor señala que en la Ley 11 de 1986 se dictan nuevas normas sobre organización y funcionamiento del régimen municipal que en cada caso subrogan o derogan normas anteriores contrarias, y que en esta misma ley se conceden facultades para dictar normas nuevas sobre entidades descentralizadas y para codificar las normas constitucionales y legales vigentes sobre organización y funcionamiento del régimen municipal. Empero, indica, respecto a la codificación debe el Ejecutivo ceñirse a recopilar las normas, ponerlas en el orden señalado por la ley, sin omitir ninguna, sin excluirlas, sin seleccionarlas, pues no se le dieron esas facultades, ni menos las de declarar derogadas de manera expresa las que queden fuera de la codificación.

Incurriría en posible violación de la Constitución el acto del Ejecutivo que al hacer uso de las facultades extraordinarias declare como derogadas de manera expresa las normas que queden por fuera de la codificación porque la competencia para compilar y producir una codificación no se extiende para derogar normas vigentes.

4. En otro apartado, indica el actor que el artículo 20 de la Carta prescribe que los funcionarios no pueden hacer sino lo expresamente señalado en las normas, lo que en el acto acusado no se cumplió, pues se ejercieron poderes que no le correspondían a la autoridad que expidió el artículo 385 del Decreto Extraordinario número 1333 de 1986.

5. Además, considera la demanda, el poder para el que fue facultado el ejecutivo no se ejerció conforme a lo señalado por la propia Constitución sino contra los términos establecidos en ella.

6. Sostiene en último término el actor que, como la Ley 11 de 1986 ordenó hacer una codificación de todas –sin exclusión alguna– las normas legales vigentes, y el Ejecutivo no cumplió con ese mandato, pues, en la norma acusada no se codificaron todas las disposiciones legales vigentes sino que se hizo una selección arbitraria que excluye algunas de ellas, se incurrió en violación del artículo 118, numeral 8. Al no hacer la codificación, al atribuirle un texto extraño y ajeno a la ley de facultades y al atribuirse unas facultades que no tenía el Ejecutivo, éste no estaría cumpliendo con la norma constitucional que ordena ejercer las facultades a que se refiere el artículo 76, numeral 12 y dictar los decretos con la fuerza legislativa que ellos contemplan.

V. El Ministerio Público

El Procurador General de la Nación pide a la Corte que declare inexequible el artículo 385 del Decreto número 1333 de 1986, por estimarlo contrario a la Constitución, y que, en caso de que ya se hubiese fallado sobre lo mismo en el expediente 1507, se esté a lo resuelto en dicha instancia según razonamiento que repite el texto del anterior concepto sobre el mismo asunto de constitucionalidad, así:

1. Debe inferirse, sin la menor duda, de la lectura de la ley de facultades en su artículo 76, que la expresión "codificar" no debe entenderse con la acepción lata de hacer leyes sistemáticas, sino con el sentido estricto de recopilar puesto que, en juicio de su Despacho, la Ley 11 de 1986 no se refiere a leyes nuevas sino a disposiciones constitucionales y legales vigentes.

2. Distingue el Ministerio Público entre los fenómenos de la insubsistencia normativa y el de la derogatoria tácita, como figuras que forman un preciso instrumento legal de interpretación jurídica, y al efecto indica que en el caso en cuestión debe entenderse que operaría la insubsistencia de normas no transcritas en la recopilación del Código que manda hacer la ley siempre que la ley nueva regule íntegramente la materia a la que la anterior disposición se refería. Sostiene que en este asunto no es aplicable la figura de la derogatoria tácita que contiene el artículo 71 del Código Civil, pues, las facultades dadas por la Ley 11 de 1986 no comprendían las de dictar normas distintas de las existentes y sólo cabría en el caso de que la ley nueva contenga disposiciones diferentes a la anterior con la que no pueda conciliarse.

Por lo anterior, sostiene el Procurador que en tales circunstancias resulta obvio que el Ejecutivo tampoco tenía facultades para declarar la derogatoria de las disposiciones "no codificadas" en el nuevo estatuto, porque la recopilación de las normas existentes no permite cambio alguno y por tanto, tampoco autoriza la supresión de

disposiciones que no queden incorporadas en el Código, ya que la derogatoria en este sentido equivale a una reforma".

3. Concluye su concepto el Jefe del Ministerio Público, tachando como inconstitucional la norma acusada porque el Congreso no autorizó expresamente al Presidente de la República para derogar la legislación vigente, lo cual, según su autorizada opinión, sólo debía ser codificada por lo que le resulta forzoso concluir que el artículo 385 del Decreto número 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal) excede de las facultades extraordinarias conferidas de conformidad con los artículos 76-12 y 118-8.

VI. Consideraciones de la Corte

Primera: *La competencia*

Como se trata de resolver sobre la demanda contra una norma contenida en un Decreto Extraordinario, esta Corte es competente para decidir sobre su constitucionalidad.

La Ley 11 de 1986 revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de 100 días, contados a partir de la fecha de su publicación, lo cual ocurrió el 17 de enero de 1986 en el "Diario Oficial" No. 37310. El Decreto número 1333 de 1986, cuyo artículo 385 se acusa, fue expedido el 25 de abril de 1986 y publicado el 14 de mayo de este año en el "Diario Oficial" No. 37466. Por esto, no encuentra la Corte reparo de constitucionalidad sobre el ejercicio en término de las facultades conferidas.

Segunda: *Cosa Juzgada*

1. Sobre el texto de la norma acusada en la acción que por este fallo se decide, ya la Corte resolvió de fondo su constitucionalidad dentro del proceso No. 1507 y se pronunció declarándolo EXEQUIBLE por no ser violatorio de la Constitución Nacional, lo que para este caso produce efecto de cosa juzgada.

2. Esta Corporación sostuvo en el citado fallo sobre la norma acusada que "En ella no se dispone derogar las normas anteriores sobre régimen municipal, que es precisamente la causa de la demanda; se hace una declaración" y ésta constituye una aclaración del alcance del artículo 76, literal b) de la ley de facultades.

3. Por último, la Corte sostuvo sobre este asunto que "es sabido que el legislador puede interpretar con autoridad el sentido y alcance de una ley mediante otra. Así lo hizo el gobierno como legislador extraordinario, cuya naturaleza de ley en sentido material es generalmente aceptada".

4. Por eso se resuelve ordenar estarse a lo decidido en el fallo que se cita.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

ESTÉSE A LO RESUELTO en Sentencia No. 101 de noviembre 13 de 1986 (Expediente No. 1507), respecto de todo el artículo 385 del Decreto número 1333 de 1986.

Cópiese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR

Que los Magistrados Nemesio Camacho Rodríguez y Rafael Romero Sierra, no asistieron a la Sala Plena celebrada el cinco de los corrientes por encontrarse con excusa justificada.

Expedida en Bogotá, a los diecinueve días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y siete.

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

LAS IMPUGNACIONES SOLO SE ADMITEN EN MATERIA DE CONTROL AUTOMATICO CONSTITUCIONAL DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 121 Y 122 DE LA CARTA, NUNCA EN LAS ACCIONES DE INEXEQUIBILIDAD CIUDADANA, COSA JUZGADA. CONTRATOS DE EMPRESTITO, DE LA NACION Y SU EJECUCION EN EL EXTERIOR.

La Corte remite a Sentencia número. 98 de 30 de octubre de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 10.

Referencia: Expediente número 1476.

Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 239, inciso segundo, del Decreto número 222 de 1983. Contratos de empréstito, su ejecución en el exterior.

Demandante: *Paul Lehoucq.*

Magistrado ponente: Doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobado por Acta número 03.

Bogotá, D. E., febrero cinco (5) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Paul Lehoucq presentó a esta Corporación demanda de inexequibilidad contra el inciso segundo del artículo 239 del Decreto número 222 de 1983, expedido en uso de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 19 de 1982. Agotada la ritualidad del proceso constitucional correspondiente, se procede a resolver la demanda propuesta.

II. Texto de la norma acusada

"DECRETO NUMERO 222 DE 1983
(febrero 2)

"Por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones

"El Presidente de la República de Colombia

"En uso de las facultades extraordinarias que le otorga la Ley 19 de 1982, y oída la Comisión a que ella se refiere,

D E C R E T A:

".....

"Artículo 239. De la ley y jurisdicción aplicable y la cláusula de arbitramento. En todo caso, la celebración de los contratos de empréstito se someterá a la ley colombiana y a la jurisdicción de los jueces y tribunales colombianos. Los contratos celebrados en el exterior que deben ejecutarse en el país, se regirán por la ley colombiana.

"La ejecución de los contratos de empréstito que deba verificarse en el exterior, podrá someterse, en cuanto a la ley y jurisdicción, a lo que en ellos se pacte.

"Podrá estipularse la cláusula compromisoria con el fin de someterla a la decisión de árbitros las controversias que se susciten durante la ejecución del contrato o en relación con la misma" (Lo subrayado es lo demandado).

III. Normas constitucionales que se consideran infringidas

El actor considera que la norma acusada viola el artículo 2° de la Constitución Nacional.

IV. Argumentos de la demanda

1. Para el actor se viola el artículo segundo de la Carta Fundamental porque, en su juicio, la norma que acusa permite la exclusión de las leyes o jurisdicciones nacionales por poderes no emanados de la Nación, que conocerían de los conflictos surgidos a raíz de un contrato de empréstito.

2. En el concepto del actor, la norma que acusa otorga potestad para que poderes jurisdiccionales extraños al que emana de la Carta Política nacional ejerzan justicia, violando la soberanía nacional.

3. De igual manera, el actor estima que los poderes que emanan de la Nación deben estar legitimados en ella, lo que ocurriría en el caso que analiza.

4. Fundamenta su acción en la idea según la cual todos los poderes que ejerce el Estado son limitados y éstos deben ejercerse dentro de los términos de dichos límites por lo que, resultaría de la aplicación de la norma acusada, que poderes extraños a los emanados de la soberanía intervendrían en decisiones internas.

5. Resulta del análisis que presenta el actor, la violación de la soberanía (art. 2° C.N.), así como de todos los poderes emanados de ella, en especial del jurisdiccional, ya que su función no puede existir sino por la Carta Política y su organización, y nunca por poderes extraños como son los que tendrían origen en la permisión legal del inciso segundo del artículo 239 del Decreto número 222 de 1983. Ya que es la Nación titular de la soberanía, la Constitución Política resulta agredida por cualquier desfiguración de ésta, lo que no se debe permitir, concluye el actor.

V. Concepto del Procurador General de la Nación

El Procurador General de la Nación emitió concepto en los siguientes términos:

1. En primer lugar advierte que la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 20 de marzo de 1986, declaró inexequible el artículo 3° del Decreto número 3614 de 1985.

2. Señala que la norma acusada en esta ocasión y la declarada inexequible por la Corte, difieren en cuanto que la primera de las citadas no hace distinción en el lugar donde deba ejecutarse el contrato y la segunda hace referencia únicamente a los que deban ejecutarse en el exterior.

3. En seguida el Procurador General de la Nación analiza la regulación contenida en el artículo 10 de la Constitución colombiana. Apunta que este precepto no pretende regular los vínculos que establezcan nacionales con extranjeros fuera del territorio de la República; así mismo advierte que no se prohíbe al legislador la reglamentación de dichos vínculos hasta el punto de no excluir el posible sometimiento de éstos al conocimiento de jueces extranjeros.

4. Sostiene que los términos que la Constitución emplea para atribuir funciones y competencias jurisdiccionales, se defieren por regla general a la ley, la que así, debe señalarlas y, por esto, no es forzoso, en nuestro orden constitucional, que la ley deba adscribir el conocimiento de estos asuntos a uno u otro organismo jurisdiccional colombiano.

5. El Procurador afirma que es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, en acatamiento del constituyente, la que señala a la ley, mas no a la Constitución vigente, la facultad de distribuir funciones y asignar competencias jurisdiccionales.

6. Advierte que en el campo de la jurisdicción aplicable a las controversias que surjan entre la Nación o las entidades públicas con prestamistas extranjeros, a propósito de la ejecución de contratos de empréstito externo que deban celebrarse en el exterior, no es de orden constitucional su regulación.

VI. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Es la Corte Suprema de Justicia, órgano de control constitucional competente para decidir sobre el caso planteado.

En la Secretaría se aceptaron escritos de impugnación a la demanda, presentados por los ciudadanos Hugo Palacios Mejía, Guillermo Salah Zuleta y Clara Laignelet Garavita, por Alejandro Linares Cantillo, y por Alberto Hernández Mora, que se incorporaron al expediente. Sin embargo, es bien sabido que la normatividad constitucional vigente no permite tales impugnaciones en demanda de inexequibilidad, pese a iniciativas de reforma planteadas en este sentido. Tales impugnaciones sólo se admiten actualmente en materia de control automático constitucional de los decretos legislativos a que se refieren los artículos 121 y 122 de la Carta.

2. *Lo demandado*

Ha sido demandado el inciso 2° del artículo 239 del Decreto Extraordinario número 222 de 1983; esta norma fue expedida dentro del término señalado por el artículo 10 de la Ley 19 de 1982.

El cuestionamiento de la constitucionalidad de la norma en estudio se basa en la indicada violación al artículo 2° de la Constitución Nacional. Al respecto, el Procurador solicita la constitucionalidad del acto acusado, en sentido contrario al del demandante. El concepto fiscal destaca que la norma que se estudia es bien diferente a la que contiene el artículo 3° del Decreto Legislativo 3614 de 1985, declarado inconstitucional por esta Corporación en fallo del 20 de marzo de 1986.

3. *Cosa juzgada*

El caso en cuestión ha sido examinado y resuelto por esta Corporación en Sentencia No. 98 de 30 de octubre de 1986, dictada dentro del proceso No. 1463; la Corte declaró exequible todo el artículo 239 del Decreto número 222 de 1983, lo que para el caso que se resuelve produce el efecto de cosa juzgada. Por lo anterior se resuelve ordenar estarse a lo decidido en ese fallo.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

ESTÉSE A LO RESUELTO en sentencia número 98 de 30 de octubre de 1986 (Expediente No. 1463), respecto de todo el artículo 239 del Decreto número 222 de 1983.

Cópiese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez* (Ver salvamento en decisión referida), *Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro*

Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR

Que los Magistrados Nemesio Camacho Rodríguez y Rafael Romero Sierra, no asistieron a la Sala Plena celebrada el cinco de los corrientes por encontrarse con excusa justificada.

Expedida en Bogotá, a los diecinueve días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y siete.

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

LEY APROBATORIA DEL CONCORDATO Y PROTOCOLO FINAL SUSCRITOS ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA SANTA SEDE. LO QUE SE EXIGE PARA EL DEBATE PARLAMENTARIO ES LA DISCUSION LIBRE Y PACIFICA PARA LLEGAR A UN ACUERDO, QUE CONSULTE UNICAMENTE LA JUSTICIA Y EL BIEN COMUN DE LA NACION. COLOMBIA NO PUEDE SER, Y MENOS EN EL ACTUAL CONCIERTO DE NACIONES QUE ASPIRAN A VIVIR BAJO LOS SIGNOS DE LA SOLIDARIDAD Y LA INTEGRACION, UNA INSULA APARTE, AJENA A LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES QUE LE SEÑALAN SU CONDICION DE MIEMBRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSAL.

INHIBICION

Es constitucional la Ley 20 de 1974, en cuanto no adolece de vicios en su formación.

Se declara inhibida para decidir sobre el fondo de la demanda instaurada contra la Ley 20 de 1974.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 11.

Referencia: Expediente número 1489.

Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato y protocolo final suscritos entre la República de Colombia y la Santa Sede.

Actor: *Víctor Velásquez Reyes.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobado por Acta número 04.

Bogotá, D. E., febrero doce (12) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

Ante esta Corporación el ciudadano Víctor Velásquez Reyes, presentó demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 20 de 1974. La demanda fue admitida, se

corrió traslado al señor Procurador de la Nación, quien emitió el concepto de rigor, y procede la Corte a resolver el asunto.

II. Texto de la norma acusada

"LEY 20 DE 1974
(diciembre 18)

"Por la cual se aprueba el 'Concordato y el Protocolo final entre la República de Colombia y la Santa Sede' suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973

"El Congreso de Colombia,

DECRETA:

"Artículo primero. Aprúebase el Concordato y el Protocolo final, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973, entre el Excelentísimo señor Nuncio Apostólico y el señor Ministro de Relaciones Exteriores, que dice así:

"Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede

"La República de Colombia y la Santa Sede con el propósito de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la Nación colombiana, animados por el deseo de tener en cuenta las nuevas circunstancias que han ocurrido, tanto para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como para la República de Colombia desde 1887, fecha del Concordato suscrito entre ellas, han determinado celebrar un nuevo Concordato, que constituye la norma que regulará en lo sucesivo, sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado.

"Con tal fin, su excelencia el Presidente de Colombia, señor doctor Misael Pastrana Borrero, ha designado como su Plenipotenciario.

"A su excelencia el señor doctor Alfredo Vásquez Carrizosa, Ministro de Relaciones Exteriores; y su Santidad el Papa Paulo VI ha designado como su Plenipotenciario.

"A su Excelencia Monseñor Angelo Palmas, Arzobispo titular de Vibiana, Nuncio Apostólico en Bogotá, quienes después de canjear sus respectivos Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

"ARTICULO I

"El Estado, en atención al tradicional sentimiento católico de la Nación colombiana, considera la Religión Católica, Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien común y del desarrollo integral de la comunidad nacional.

"El Estado garantiza a la Iglesia Católica y a quienes a ella pertenecen el pleno goce de sus derechos religiosos, sin perjuicio de la justa libertad religiosa de las demás confesiones y de sus miembros, lo mismo que de todo ciudadano.

"ARTICULO II

"La Iglesia Católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes.

"ARTICULO III

"La Legislación Canónica es independiente de la civil y no forma parte de ésta, pero será respetada por las autoridades de la República.

"ARTICULO IV

"El Estado reconoce verdadera y propia personería jurídica a la Iglesia Católica. Igualmente a las diócesis, comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley canónica otorga personería jurídica, representadas por su legítima autoridad.

"Gozarán de igual reconocimiento las entidades eclesiásticas que hayan recibido personería jurídica por un acto de la legítima autoridad, de conformidad con las leyes canónicas. Para que sea efectivo el reconocimiento civil de estas últimas basta que acrediten con certificación su existencia económica.

"ARTICULO V

"La Iglesia consciente de la misión que le compete de servir a la persona humana continuará cooperando para el desarrollo de ésta y de la comunidad por medio de sus instituciones y servicios pastorales, en particular mediante la educación, la enseñanza, la promoción social y otras actividades de público beneficio.

"ARTICULO VI

"El Estado y la Iglesia colaborarán en la pronta y eficaz promoción de las condiciones humanas y sociales de los indígenas y de la población residente en zonas marginadas susceptibles de un régimen canónico especial. Una comisión permanente integrada por funcionarios designados por el Gobierno Nacional y prelados elegidos por la Conferencia Episcopal, reglamentada de común acuerdo, programará y vigilará el desarrollo progresivo de los planes que se adopten.

"Las funciones de la Comisión Permanente serán ejercidas sin perjuicio de la autoridad propia de planeación del Estado y sin que la Iglesia tenga a su cargo actividades ajenas a su naturaleza y misión.

"ARTICULO VII

"El Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico. Para la efectividad de este reconocimiento la competente autoridad eclesiástica transmitirá copia auténtica del Acta al correspondiente funcionario del Estado quien deberá inscribirla en el Registro Civil.

"ARTICULO VIII

"Las causas relativas a la nulidad o a la disolución del vínculo de los matrimonios canónicos, incluidas las que se refieren a las dispensas del matrimonio rato y no consumado, son de competencia exclusiva de los Tribunales Eclesiásticos y Congregaciones de la Sede Apostólica.

"Las decisiones y sentencia de éstas, cuando sean firmes y ejecutivas conforme al derecho canónico, serán transmitidas al Tribunal Superior del Distrito Judicial territorialmente competente, el cual decretará su ejecución en cuanto a efectos civiles y ordenará su inscripción en el registro civil.

"ARTICULO IX

"Las Altas Partes Contratantes convienen en que las causas de separación de cuerpos de los matrimonios canónicos sean tramitadas por los jueces del Estado, en primera instancia ante el Tribunal Superior respectivo y en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia.

"A solicitud de uno de los cónyuges la causa respectiva se suspenderá en primera instancia y por una sola vez, durante treinta días, para dar lugar a la acción conciliadora y pastoral de la Iglesia, salvo la competencia del Tribunal para adoptar las medidas precautelativas que estime convenientes. Vencido el plazo el respectivo Tribunal reanudará el trámite correspondiente.

"ARTICULO X

"1° El Estado garantiza a la Iglesia Católica la libertad de fundar, organizar y dirigir bajo la dependencia de la autoridad eclesiástica centros de educación en cualquier nivel, especialidad y rama de la enseñanza, sin menoscabo del derecho de inspección y vigilancia que corresponde al Estado.

"2° La Iglesia Católica conservará su autonomía para establecer, organizar y dirigir facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios y casas de formación de religiosos. El reconocimiento por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por dichos centros será objeto de reglamentación posterior.

"ARTICULO XI

"A fin de hacer más viable el derecho que tienen las familias de escoger libremente centros de educación para sus hijos, el Estado contribuiría equitativamente, con fondos del Presupuesto Nacional, al sostenimiento de planteles católicos.

"ARTICULO XII

"En desarrollo del derecho que tienen las familias católicas de que sus hijos reciban educación religiosa acorde con su fe, los planes educativos, en los niveles de primaria y secundaria, incluirán en los establecimientos oficiales enseñanza y formación religiosa según el Magisterio de la Iglesia. Para la efectividad de este derecho corresponde a la competente autoridad eclesiástica suministrar los programas, aprobar los textos de enseñanza religiosa y comprobar cómo se imparte dicha enseñanza.

La autoridad civil tendrá en cuenta los certificados de idoneidad para enseñar la religión, expedidos por la competente autoridad eclesiástica.

"El Estado propiciará en los niveles de educación superior la creación de institutos o departamentos de ciencias superiores religiosas, donde los estudiantes católicos tengan opción de perfeccionar su cultura en armonía con su fe.

"ARTICULO XIII

"Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas temporalmente de un régimen canónico especial, la Iglesia colaborará en el sector de la educación oficial mediante contratos que desarrollen los programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno Nacional se ajustarán a criterios previamente acordados entre éste y la Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo VI.

"ARTICULO XIV

"El derecho de nombrar Arzobispos y Obispos corresponde exclusivamente al Romano Pontífice. La Santa Sede antes de proceder al nombramiento de un Arzobispo u Obispo residencial, o de un coadjutor con derecho a sucesión, que deberá recaer en ciudadano colombiano, comunicará al Presidente de la República el nombre de la persona escogida, a fin de saber si tiene objeciones de carácter civil o político. Se entenderá que ellas no existen si no las manifiesta dentro de treinta días. Estas gestiones se adelantarán por ambas partes con la mayor diligencia y reserva.

"ARTICULO XV

"La Santa Sede podrá erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas y modificar los límites de las existentes, cuando lo creyere oportuno para el mejor desempeño de la misión de la Iglesia. Con tal finalidad informará previamente al Gobierno, acogiendo las indicaciones justas y convenientes que él reciba.

"ARTICULO XVI

"La Santa Sede conviene en elevar con la mayor celeridad posible las jurisdicciones misionales a la categoría de diócesis, a medida que el desarrollo de las regiones resulte armónico con las exigencias pastorales diocesanas.

"ARTICULO XVII

"La atención espiritual y pastoral de los miembros de las Fuerzas Armadas se ejercerá por medio de la Vicaría Castrense, según normas y reglamentos dictados al efecto por la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno.

"ARTICULO XVIII

"Los clérigos y religiosos no podrán ser obligados a desempeñar cargos públicos incompatibles con su ministerio y profesión religiosa y estarán además exentos del servicio militar.

"ARTICULO XIX

"Continuarán deferidas a los Tribunales del Estado las causas civiles de los clérigos y religiosos y las que se refieren a la propiedad y derechos temporales de las personas jurídicas eclesiásticas, como también los procesos penales contra los Obispos y quienes están asimilados a éstos en el derecho eclesiástico, que son de competencia exclusiva de la Sede Apostólica.

"ARTICULO XX

"En caso de procesos penales contra clérigos y religiosos, conocerán en primera instancia, sin intervención de jurado los Jueces Superiores o quienes los reemplacen y en segunda, los Tribunales Superiores. Al iniciarse el proceso se comunicará el hecho al Ordinario propio, el cual no pondrá obstáculo al procedimiento judicial.

"Los juicios no serán públicos. En la detención y arresto, antes y durante el proceso, no podrán aquéllos ser recluidos en cárceles comunes, pero si fueren condenados en última instancia se les aplicará el régimen ordinario sobre ejecución de penas.

"ARTICULO XXI

"Los funcionarios de las Ramas Jurisdiccional y Ejecutiva del Estado, si fuere necesario, prestarán su colaboración en la ejecución de las providencias de los Tribunales Eclesiásticos, con el fin de proteger los derechos de las personas que podrían ser lesionadas por ejecución incompleta o fallida de tales providencias.

"ARTICULO XXII

"El ejercicio ilegítimo de jurisdicción o funciones eclesiásticas por quienes carecen de misión canónica para desempeñarlas, oficialmente comunicado por la autoridad eclesiástica al competente funcionario del Estado, será considerado por éste como usurpación de funciones públicas.

"ARTICULO XXIII

"La Iglesia Católica y las demás personas jurídicas de que trata el artículo IV del presente Concordato tienen facultad de adquirir, poseer, enajenar y administrar libremente bienes muebles e inmuebles en la forma establecida por la legislación colombiana para todos los ciudadanos, y sus propiedades, fundaciones y derechos serán no menos inviolables que los pertenecientes a las demás personas naturales y jurídicas.

"ARTICULO XXIV

"Las propiedades eclesiásticas podrán ser gravadas en la misma forma y extensión que las de los particulares. Sin embargo, en consideración a su peculiar finalidad se exceptúan los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios.

"Los bienes de utilidad común sin ánimo de lucro pertenecientes a la Iglesia y a las demás personas jurídicas de que trata el artículo IV del presente Concordato, tales

como los destinados a obras de culto, de educación o beneficencia se regirán en materia tributaria por las disposiciones legales establecidas para las demás instituciones de la misma naturaleza.

"ARTICULO XXV

"El Estado reconoce el derecho de la Iglesia a recabar libremente de los fieles, contribuciones y ofrendas para el culto divino, la sustentación de sus ministros y otros fines propios de su misión.

"ARTICULO XXVI

"Las Altas Partes Contratantes unifican las obligaciones financieras adquiridas por el Estado en virtud del Concordato de 1887 y de la Convención sobre Misiones de 1953. En consecuencia reglamentarán su cuantía en forma que permita atender debidamente aquellas obligaciones. Será también reglamentada la contribución del Estado para la creación de nuevas diócesis y para el sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente llamados territorios de Misiones. El Estado concederá a las entidades eclesiásticas que reciben la llamada renta nominal la posibilidad de redimirla.

"ARTICULO XXVII

"El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden público. En los cementerios dependientes de la autoridad civil, la Iglesia podrá ejercer su ministerio en la inhumación de los católicos.

"ARTICULO XXVIII

"En defensa y promoción del patrimonio cultural colombiano la Iglesia y el Estado colaborarán en el inventario del arte religioso nacional, que incluirá monumentos, objetos de culto, archivos, bibliotecas y otros que por su valor histórico o estético sean dignos de conjunta atención para conservarse, restaurarse y exponerse con fines de educación social.

"ARTICULO XXIX

"En la ejecución de las disposiciones contenidas en este Concordato como en sus reglamentaciones y para resolver amistosamente eventuales dificultades relativas a su interpretación y aplicación, las Altas Partes Contratantes procederán de común acuerdo.

"ARTICULO XXX

"El presente Concordato, salvo lo acordado en el artículo XXVI, deja sin vigor y efecto el que las Altas Partes Contratantes, firmaron en Roma el 31 de diciembre de 1887, aprobado por la Ley 35 de 1888, y los siguientes acuerdos: La Convención adicional al Concordato, firmada en Roma el 20 de julio de 1892, aprobada por la Ley 34 de 1892; los acuerdos derivados del canje de notas número 27643 del 27 de

febrero de 1924, dirigida por el Secretario de Estado de su Santidad al Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede y la respuesta de éste del 10 de junio de 1924, que dieron origen a la Ley 54 de 1924; y la Convención sobre Misiones, firmada en Bogotá el 29 de enero de 1953.

"Así mismo, quedan derogadas todas las disposiciones de las leyes y decretos que en cualquier modo se opusieran a este Concordato.

"ARTICULO XXXI

"El presente Concordato se firma en doble ejemplar y en lenguas española e italiana, cuyos textos serán igualmente auténticos y harán fe.

"Este Concordato entrará en vigor en la fecha del canje de las respectivas ratificaciones de las Altas Partes Contratantes.

"En fe de lo cual, los suscritos Plenipotenciarios firman este Concordato, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, a los doce días de julio de mil novecientos setenta y tres. Fdo. *Alfredo Vásquez Carrizosa,* Ministro de Relaciones Exteriores. Fdo. *Angelo Palma,* Nuncio Apostólico.

"PROTOCOLO FINAL

"En el acto de la firma del Concordato suscrito en la fecha entre la República de Colombia y la Santa Sede, los Plenipotenciarios de las Altas Partes Contratantes hacen las siguientes declaraciones que forman parte integrante del mismo Concordato.

"EN RELACION CON EL ARTICULO VII

"I. De acuerdo con la legislación vigente en el Estado colombiano la inscripción de un matrimonio canónico que no haya sido anotado en el registro civil al tiempo de su celebración, podrá siempre efectuarse a requerimiento de cualquiera de los cónyuges o de quien tenga un interés legítimo en dicho matrimonio. Con tal fin será suficiente la presentación de una copia auténtica de la respectiva partida eclesiástica. La muerte de uno o de ambos cónyuges no será obstáculo para efectuar dicha inscripción.

"II. Los efectos civiles del matrimonio canónico debidamente inscrito en el registro civil, regirán a partir de la fecha de la celebración canónica de dicho matrimonio.

"EN RELACION CON EL ARTICULO VIII

"La República de Colombia reconoce la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica en cuanto se refiere a los aspectos canónicos del Privilegio de la fe.

"Por lo que se refiere a los efectos civiles correspondientes se tendrá en cuenta lo dispuesto por la jurisprudencia y la legislación civil colombiana de manera que sean respetados tanto los derechos adquiridos por los cónyuges como los derechos de las personas legalmente amparadas en la sociedad conyugal.

"EN RELACION CON EL ARTICULO IX

"La determinación que hace este artículo de que las causas de separación del matrimonio canónico serán dirimidas ante el Tribunal Superior y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, no impedirá, que, en el futuro, el Estado colombiano pueda establecer una instancia especial para examinar y juzgar las causas relativas al derecho de familia y que tenga un nivel equivalente al de aquellas entidades.

"El presente Protocolo se firma en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, a los doce días de julio de mil novecientos setenta y tres. Fdo. *Alfredo Vásquez Carrizosa,* Ministro de Relaciones Exteriores. Fdo. *Angelo Palmas,* Nuncio Apostólico.

"Aprobado, sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales, Fdo. *Misael Pastrana Borrero.* Fdo. *Alfredo Vásquez Carrizosa,* Ministro de Relaciones Exteriores".

III. La demanda

Después de larga exposición sobre los antecedentes del Concordato, del Pontificado y del Cristianismo y de citar numerosos pasajes bíblicos y relatos sobre las luchas entre cristianos y paganos, el demandante expresa que la Ley 20 de 1974 viola de manera abierta y ostensible la Carta por pretermisión del procedimiento formativo de la ley, mencionado en el Título VII de la misma (artículo 79 al 92), ya que durante la tramitación del proyecto en el Congreso no tuvo lugar ninguna discusión ni debate. Agrega que a la iniciativa presentada no se le cambió ni una coma, y que tampoco tuvo ocurrencia la formulación de objeciones presidenciales las que, en el sentir del actor, "no son discrecionales para el Presidente, pues el numeral 7° del artículo 118 de la ley marco, torna en obligatorio el ejercicio del derecho (sic) a tales objeciones, al preceptuar cuáles son las funciones del ejecutivo frente al Congreso".

Dice además, que la Ley 20 modificó el Título I, el Título II y el Título III "de la ley marco que se defiende en este libelo" (sic), lo cual le dio apariencia de constitucionalidad. "Esa apariencia constitucional genera simulación, y por ende, la nulidad del acto, que el presente escrito (sic) es la inexequibilidad de la norma que en su totalidad se demanda".

Señala que la ley atenta contra el artículo 1° de la Constitución, pues según aquélla, a pesar de ser Colombia una República Unitaria, existen dos legislaciones: "una para regular el Estado Civil de las personas que siguen las orientaciones del Romano Pontífice o del Pont-Max (sic) y otra que se aplica a quienes no siguen las orientaciones del Pontífex Maximus, como son los católicos ortodoxos (sic), los católicos anglicanos (sic), los católicos luteranos (sic) y los cristianos evangélicos y aun para los que no tienen una creencia".

En lo relativo a otras normas de la Constitución, añade la demanda:

"El Concordato viola así mismo, el artículo 2° de nuestra codificación constitucional, porque le entrega parte de la soberanía a una potestad extraña a Colombia, se deja que un soberano extranjero, el pontífice intervenga en el manejo de las relaciones interpersonales de los nacionales y de paso viola el tratado de Montevideo, que, el país suscribió especialmente los artículos 13 al 17.

"Además no se puede legislar autónomamente en los temas que se mencionan en la Ley 20, pues para ello debe contar con la benevolencia, participación y consentimiento de la otra parte o del soberano extranjero, soberano que representa el Estado del Vaticano.

".....

"De otra manera (sic) los artículos 58 y 147 de nuestro máximo ordenamiento legal, definen quiénes administran justicia y dentro de la señalización que hace, no aparecen los Tribunales Eclesiásticos, porque éstos no son nuestros, por tanto, los arts. VII y VIII de la Ley 20 de 1974, atentan contra dichos preceptos constitucionales.

".....

"Al consagrar que la autoridad civil tendrá en cuenta los certificados que sobre el tema, otorguen las autoridades eclesiásticas para enseñar religión en Colombia (XII), desecha y excluye, los seminarios bíblicos de calificada enseñanza y coarta la libertad de escoger el colegio que mejore cimientos morales cristianos, ofrezca y

".....) Al institucionalizar la enseñanza y atención espiritual y pastoral de los militares a la Vicaría Castrense, según las normas y reglamentos que dicte el Vaticano o Santa Sede (art. XVII) flagela la libertad de conciencia de quienes siendo militares y Cristianos, no siguen las orientaciones (sic) de la curia vaticana o de los que no creen en Cristo por ejemplo los del rito judío.

"En síntesis, se violan con los enunciados en los cuatro puntos anteriores, los arts. 41 y 53 de la Carta.

".....

"Tampoco es constitucional, que, existiendo en nuestros pueblos un solo cementerio, la ley otorgue el monopolio o configure un monopolio al exhumar cadáveres al rito católico romano, cuando precisamente la Carta protege como ya se ha visto en otros cultos. Por consiguiente el art. XXVII de la Ley 20 es abiertamente contrario a la libertad religiosa que se cita en el artículo 53 como a la moral cristiana que obliga a dar sepultura.

"Por último del protocolo final, en el acápite relacionado con el art. VIII, contraría a la Constitución, porque la Carta no establece privilegios y aquí señala al rito romano como el único poseedor de la verdad, pues frente a la libertad religiosa, de conciencia, de cultos, de la actual codificación política, no se justifica que, la igualdad e imparcialidad del legislador o constituyente primario, se modifique por medio de una ley, que, no es acto reformatorio de la Carta y de sus garantías".

IV. Concepto del Procurador General de la Nación

El concepto de Procuraduría, emitido mediante oficio 1062 de agosto 21 de 1986, comienza reiterando la tesis sobre competencia de la Corte para fallar sobre la demanda instaurada, para lo cual transcribe varios conceptos anteriores, procedentes de ese Despacho:

"……

"a) El artículo 214 de la Carta asigna competencia para decidir sobre la constitucionalidad de todas las leyes, sin excepción (Conceptos Nos. 670, 679 y 638);

"b) Las leyes reformatorias de la Constitución y las aprobatorias de tratados públicos, aunque sean especiales o hagan parte de un acto complejo, no dejan de ser leyes y están sujetas a dicho control (Conceptos Nos. 670, 838);

"c) No hay actos del legislador ni del Gobierno que puedan carecer del debido control, pues no puede existir poder público sin límites, '...al amparo del común anhelo de todos los pueblos por propiciar la integración, la solidaridad y la cooperación internacional, no puede deslizarse la peligrosa tesis de que puede existir una autoridad, un poder público (nacional, supranacional, internacional, regional, etc.), cuyo ejercicio no quede sujeto a límites, reglas, parámetros, *valores, principios,* en los cuales se exprese una concepción humanista del Estado, del hombre, de la autoridad, de la libertad' (Concepto No. 670);

"d) 'Descartar el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de Tratados es, simplemente, dejar sin garantía de vigencia los valores que expresa nuestro constituyente' *(Ibidem);*

"e) '...la argüida bilateralidad que conlleva todo pacto internacional no alcanza a justificar la lesión eventual del régimen constitucional vigente hasta el punto de que la Corporación encargada de la guardia de la Constitución y de la preservación de la integridad de las garantías y derechos individuales deba abstenerse de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley que apruebe el acuerdo...' (Concepto No. 838);

"g) La Corte no puede decidir cuándo aplica o no el ordenamiento constitucional, ni 'crear situaciones que estrechen su radio de acción, a fin de condicionar el mecanismo de control, al fenómeno de la temporalidad (competencia precaria o temporal), como lo han sostenido en salvamentos de voto algunos Magistrados', pues en nuestra legislación no existe control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales, ni puede la Corte renunciar a una clara competencia y, en cambio, asumir la guarda de la integridad del derecho internacional (Concepto No. 838).

"A los anteriores argumentos que fueron apoyados en numerosas citas de doctrinas y jurisprudencias y de normas constitucionales de otros países, deben agregarse algunos de los sostenidos en el salvamento de voto emitido por varios Magistrados en la sentencia número 85 del 1° de septiembre de 1983, así:

"El artículo 214 de la Carta, confía a la Corte Suprema de Justicia, la guarda de la *integridad* de la Constitución, 'precisamente para destacar que la defensa atribuida a la Corte, no es de una parte de la Constitución sino de toda ella', por lo que la misma disposición advirtió pleonásticamente si se quiere, que el control de constitucionalidad comprende *'todas las leyes'*... y no cabe duda de que, si una ley cualquiera pudiera vulnerar impunemente la Constitución del Estado, ya no estaría la Corte defendiendo la 'integridad' de la misma, sino apenas una parte de ella.

" '...la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte se ha venido orientando hacia el reconocimiento de la inexistencia de excepciones en materia de defensa de la Carta

Fundamental... El día por lo tanto en que se acepte la competencia en casos como el que ahora se estudia, podrá decirse, que se habrá cerrado el ciclo de reafirmación de la Corte de la competencia que sin limitación alguna le otorga la Constitución, momento en el cual podrá afirmarse por último que existirá en el país un auténtico Estado de Derecho, y una auténtica supremacía de la Constitución'.

" 'Ni desde el punto de vista material, ni desde el punto de vista formal, ni desde el punto de vista de su contenido y cualesquiera que sea la definición de la ley que se adopte, de las innumerables que ha dado la doctrina y la jurisprudencia, puede negarse a las leyes aprobatorias de los Tratatos Públicos la calidad de tales'.

" '...Muchos Estados reconocen la supremacía de sus Constituciones sobre los Tratados Internacionales como también reconocen la existencia de control constitucional sobre éstos...' como ocurre en los Estados Unidos de América en donde numerosos fallos sentaron el principio de la sujeción de los Tratados a las disposiciones constitucionales y de que la ley posterior deroga a la anterior, inclusive a los tratados...

" 'Atribuirle al Congreso en Colombia, por el hecho de corresponderle a éste la aprobación de los Tratados, un control implícito de constitucionalidad, es reconocerle competencias que no prevé la Constitución...'

"Respecto a la terminación unilateral del Tratado, 'a la cual podría llegarse como consecuencia de una declaración de inexequibilidad, lejos de constituir ...un fenómeno contrario al Derecho Internacional, es simplemente una institución propia del mismo, tan antigua como él, ampliamente regulada por las normas respectivas...' y prevista por el ordinal 4º del artículo 21 del Tratado aprobado por la ley cuya constitucionalidad se cuestiona.

"Por su parte, el constitucionalista y ex Presidente Alfonso López Michelsen, en una conferencia efectuada en Cali sobre este tema, al recordar que la Corte desde 1914 ha sostenido su falta de competencia para fallar sobre la exequibilidad de las leyes aprobatorias de los Tratados Públicos, advertía también que tal tesis era abiertamente contradictoria con otra de la misma Corporación que le permitió declarar su competencia para conocer de los Actos Legislativos reformatorios de la Constitución.

"Respecto del argumento central de la Corte para justificar su incompetencia, en el sentido de que al entrar a conocer la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de Tratados, el Organo Jurisdiccional se convertiría en negociador, infringiendo las disposiciones constitucionales que establecen los Tratados se perfeccionan mediante la concurrencia exclusiva del Ejecutivo y del Legislativo, el doctor López Michelsen dijo que con esta tesis la Corte desestimó lo sustancial del asunto, o sea: si tanto el Legislativo como el Ejecutivo, individual o colectivamente, tienen competencia para disponer de los derechos y garantías sociales contemplados en el Título III de la Constitución.

"Por lo demás, teniendo en cuenta que el fallo inhibitorio, en juicio de constitucionalidad, no define nada y carece de los efectos de la cosa juzgada, la decisión en este proceso, representa una nueva oportunidad que tienen los honorables Magistrados para volver a analizar todos los aspectos del problema y rectificar su

tesis reivindicando la plena competencia del máximo Tribunal del país, para velar por la integridad de la Constitución Nacional".

Advierte, después, basado en jurisprudencia de esta Corporación, que al demandarse la Ley 20 de 1974, se demandó también el Concordato, pues la Ley debe ser apreciada como parte del Tratado y un ataque contra la misma es de consiguiente, una impugnación del Tratado.

Anota igualmente que, aunque el actor dice demandar la Ley 20 de 1974 en su totalidad, únicamente se refiere a unas pocas disposiciones del Concordato, además de citar gran número de normas constitucionales que considera se infringen pero sólo expone el concepto de violación de algunas, incumpliendo lo previsto en el artículo 16-3 del Decreto número 432 de 1969. Por tanto, el Procurador sólo emite su concepto sobre las que reúnen ese requisito legal (arts. 1°, 7°, 8°, 11, 12, 17, 18, 19, 27 y 28 del Concordato).

Dice posteriormente:

"Ahora bien, el actor empieza sosteniendo que se violó el procedimiento formativo de la ley, pues al presentarse el proyecto de la Ley 20 de 1974 'no hubo ninguna discusión, ningún debate' en el Congreso de la República, a lo cual se debe responder que no es cierta la afirmación del demandante, por cuanto éstos sí ocurrieron, con interesantes ponencias y estudios de diferentes miembros tanto del Senado, como de la Cámara de Representantes, los cuales se encuentran publicados en los Anales del Congreso e inclusive se han editado varias obras que los contienen, como por ejemplo 'El Concordato Colombiano de 1973' de Fabio Lozano Simonelli, editado por el Banco de la República en 1981.

"El hecho de no haberse presentado 'lucha' o 'combate' en los debates, ni cambiarse 'ni una coma' al proyecto, como dice el demandante, no son causales de inconstitucionalidad, pues simplemente se requiere de la discusión pacífica para llegar a un acuerdo que consulte el interés general de todos los asociados.

"En cuanto a que el Presidente de la República no presentó 'objeciones' a dicha ley, es de anotar que es la misma Constitución la que le otorga al Presidente la facultad *potestativa* de objetar los proyectos de ley, ya sea por razones de inconveniencia o por inconstitucionalidad conforme a lo ordenado en los artículos 85 y 118-7 del Estatuto Superior, facultad de la cual puede hacerse uso o no según lo estime conveniente, sin que haya lugar a declaratoria de inexequibilidad por el hecho de no presentarse 'objeciones presidenciales'.

"Respecto a la violación del artículo 1° constitucional, es de anotar que en este canon se consagra el principio de la 'unidad de soberanía', que es la Nación misma, considerada en su totalidad.

"……

"Así las cosas no se puede deducir infracción de este artículo de la Constitución, pues de acuerdo al mandato contenido en el canon 53 de la misma Carta, 'El Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la posterior aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica'.

"Expresa el demandante que los artículos 7° y 8° del Concordato violan los artículos 58 y 147 de la Constitución, al crear Tribunales Eclesiásticos, sin embargo este Despacho no encuentra infracción a tales cánones ya que el 147 se limita a señalar la composición de la Corte Suprema de Justicia y el 58 consagra que administran justicia 'La Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y *demás tribunales* y Juzgados que establezca la ley...', es decir, que la ley puede crear otros Tribunales que ejerzan jurisdicción, como el militar, o de aduanas, sin infringir tal mandato constitucional.

".....

"Tampoco se puede sostener que se viole la libertad de conciencia, pues como lo sostuvo la Corte Suprema en sentencia de 11 de diciembre de 1969 'si un católico por deberes de conciencia, quiere contraer matrimonio de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento, la ley le permite celebrarlo sin oponer dificultad. Y si una persona, que no profesa la religión católica, o de ella se ha separado después del bautismo, quiere casarse civilmente, también se le abren las vías de este último acto para que, sin pugna con sus creencias, lo celebre de manera cumplida. Violar su libertad de conciencia sería, por el contrario, forzarlo a ejecutar un acto, como sería el matrimonio católico 'inspirado en una fe que no profesa' ".

"El artículo 8° del Concordato tampoco viola la libertad religiosa, sino que la acata, ya que nadie obliga a una persona a casarse por lo católico, pues debe hacerlo por lo civil si lo desea, optando por el matrimonio que considere reúne las condiciones necesarias de acuerdo con sus creencias".

También agrega que, la enseñanza de religión en colegios oficiales tampoco es obligatoria, pues de ello se dejó constancia en el Acta de Canje del Concordato.

"No puede desconocerse el preámbulo del Plebiscito de 1957 en donde se dijo que Dios es fuente de toda autoridad y que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación y como tal los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como elemento del orden social.

"En cuanto se refiere a los artículos 27 y 28 del Concordato, este Despacho no encuentra que infrinjan canon constitucional alguno, pues en el 27 se dispone 'el Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a la vigilancia oficial en lo referente a higiene y orden público...' "

No observa violación de la Constitución en los artículos 17, 18, 19 y 20 del Concordato, pues en su concepto concuerdan con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 y demás disposiciones de la Carta. En cuanto al fuero eclesiástico sobre competencia jurisdiccional en materia penal, expresa que se trata de una excepción a la territorialidad de la ley procesal, pactada en un Tratado Público y, por tanto, no es inconstitucional, como no lo es la inmunidad diplomática o consular prevista en los tratados públicos.

Concluye manifestando que las disposiciones acusadas no violan ningún mandato constitucional aunque algunas de ellas, en su concepto no demandadas, integrantes del mismo Concordato, "pueden llegar a vulnerar la Carta", pero que no se pronuncia por no estar permitido al juez de constitucionalidad fallar *extrapetita*.

V. Consideraciones de la Corte

En la demanda que se examina, el actor solicita la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 20 de 1974 "por la cual se aprueba el Concordato y el Protocolo final entre la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973. Dicho Concordato puso término al régimen de las relaciones entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica instaurado por el Concordato de 1887, con el propósito de adecuarlas a las nuevas normas de la Constitución Nacional, a las exigencias de la época y aun a los principios del Concilio Vaticano II, inspirado en el pensamiento del Papa Juan XXIII. Así mismo, la Ley 20 de 1974 derogó la Ley 54 de 1924 sobre el Matrimonio Civil y puso fin, además, al llamado Convenio de Misiones, firmado entre el Nuncio Apostólico Antonio Samoré y el Ministro de Relaciones Exteriores doctor Juan Uribe Holguín, el 29 de enero de 1953.

En el Derecho Público de Colombia el Concordato pertenece al género de los tratados internacionales cuyo procedimiento de discusión, aprobación y ratificación está previsto en la Constitución Nacional, y regulado por normas de Derecho Internacional Público que obligan a la República, como la Convención de Viena de 1969, ratificada por Colombia por medio de la Ley 32 de 1985.

Primera. *El aspecto formal*

Sea lo primero, en el orden de las impugnaciones, considerar la afirmación del actor en el sentido de que se violó el procedimiento formativo de la ley y que ella no tuvo ninguna discusión o debate, todo lo cual está en contradicción con la realidad, pues son muy significativos y abundantes los documentos y ponencias que se aportaron en el trámite parlamentario, producto del debate legislativo, entre los cuales bastaría citar los publicados por el senador Germán Zea Hernández y el representante Fabio Lozano Simonelli. El hecho de no haberse presentado "lucha" o "combate" en los debates, no es causal de inconstitucionalidad, pues lo que exige el debate parlamentario es la discusión libre y pacífica para llegar a un acuerdo, que consulte únicamente la justicia y el bien común de la Nación. También está fuera de razón la afirmación del actor en el sentido de que el señor Presidente de la República no presentó objeciones al proyecto de ley, como si esta facultad tuviera el carácter de obligatoria para el Jefe del Estado, quien hace uso de ella cuando lo tiene a bien, en forma potestativa, según lo consagra la Constitución. En este sentido, y ante la manifestación del actor sobre la existencia de vicios en la formación de la Ley 20 de 1974, y comprobado que no existe fundamento en su trámite constitucional para tales afirmaciones, la Corte procederá a desestimar dicha impugnación y consecuentemente a declarar la constitucionalidad de la ley, porque ella no adolece de vicios en su formación.

Segunda. *La Jurisprudencia de la Corte*

No es el caso de hacer un pormenorizado recuento histórico de la abundante jurisprudencia de la Corte sobre esta materia. Basta hacer una precisión esquemática de cuál ha sido la posición de la Corporación sobre el tema.

Por medio de la tesis tradicional ha estimado la Corte que las etapas o ciclos de conclusión de un tratado público integran un solo acto complejo, y por consiguiente

la ley aprobatoria de un tratado no es una ley ordinaria, sino una parte más de ese "acto complejo" y por lo mismo no susceptible de control constitucional ya que su juzgamiento implicaría la revisión del tratado, lo cual no le compete a ella. Tal cosa llevaría a la posibilidad de la ruptura unilateral del Tratado y la invasión a la órbita de competencia del Presidente de la República. Sobre este particular, en providencia de julio de 1914, dijo la Corte:

"Aquélla (la ley aprobatoria del Tratado) es elemento de un acto jurídico complejo, es la manera como una de las altas partes contratantes manifiesta su consentimiento a las estipulaciones de un pacto sinalagmático internacional; no establece por sí sola relaciones de derecho, y su eficacia depende del consentimiento de la otra nación contratante, si ésta por su parte ratifica las cláusulas convenidas por sus negociadores. La ley que aprueba un tratado público, tiene pues, un carácter especial. El papel del Parlamento en materia de tratados, no se asemeja al que desempeña en materia legislativa" (G.J. XXIII p. 10 ss).

Y en sentencia de septiembre 1° de 1983, la Corte agregó estas consideraciones:

"a) Las leyes aprobatorias de tratados públicos forman parte de los tratados que aprueban y, por consiguiente juzgarlas implica también un juicio sobre esos tratados, lo cual no es posible en razón a que el estatuto constitucional no ha dado tal atribución a la Corte Suprema de Justicia ni a otro tribunal nacional, lo que obedece a la naturaleza y rango supraestatales que tienen los tratados públicos, así como que la dirección de las relaciones internacionales es competencia exclusiva del Presidente de la República, condicionada únicamente a la ratificación de los tratados por parte del Congreso, y

b) Ha estimado también la Corte que admitir demandas de inconstitucionalidad contra las leyes que aprueban tratados públicos, equivale a aceptar que éstos puedan ser rotos unilateralmente, pues tal sería el efecto de una declaratoria de inexequibilidad proferida por aquélla, ignorando los procedimientos propios del derecho internacional para deshacer los compromisos contraídos entre los Estados".

Por medio de la tesis llamada de la competencia temporal o intermedia, acogida en la sentencia de 6 de junio de 1985, a propósito del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, la Corte se inhibió de fallar por haberse perfeccionado el Tratado, aunque la Corte considera ahora que tiene competencia para examinar la constitucionalidad de los tratados desde la promulgación de la ley aprobatoria hasta el momento del canje de ratificaciones o del depósito de los instrumentos correspondientes.

En esta sentencia la Corte llega a la conclusión de que el convenio internacional sólo nace a la vida jurídica cuando "además de la ley aprobatoria, se haya producido el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación" y que antes de ese requisito esos acuerdos son imperfectos, no producen efectos internacionales por ser pactos que se hallan en procesos de formación "lo cual significa que las leyes aprobatorias de ellos, si bien no alcanzan aún, en ese período, a producir efectos entre los Estados celebrantes, sí ostentan el carácter común de normas de derecho público interno, en ese momento iguales a las demás que expide el Congreso, y sujetas, por tanto como éstas al juicio de constitucionalidad que compete a la Corte,

sin que ello implique agravio al compromiso internacional, sencillamente porque él aún no existe en razón de que el acto que lo contiene y lo produce todavía no está perfeccionado".

En sentencia de 12 de diciembre de 1986, la Corte aceptó la impugnación de inconstitucionalidad de la Ley 27 de 1980 "por vicio de procedimiento en su sanción o firma". A este respecto la Corporación se pronunció en la siguiente forma:

"*Tercera.* Para que la ley, pueda ser tenida como parte integradora del tratado e inseparable de éste, es menester que se ajuste o adecúe a los requisitos constitucionales necesarios para su existencia, pues un acto que sólo aparentemente ostente la calidad de ley por haberse expedido sin el cumplimiento íntegro de esos requisitos o formalidades, no es apto para cooperar en la formación del Acto Complejo y por ende, su impugnación o juzgamiento constitucional no afecta ni se proyecta en el Ente Contractual Internacional que por el mismo motivo, no nace aún a la vida del derecho ni trasciende al ordenamiento interno".

Considera la Corte que la competencia que asume "no se opone ni rectifica la tesis de la competencia temporal sostenida en su fallo de 6 de junio del año retropróximo, ni tampoco contraría a la tradicional de la incompetencia intemporal aún sostenida por algunos honorables Magistrados, ya que la Corporación ha sido enfática en considerar que para que el Acto Complejo denominado 'Tratado Público' se sustraiga a la jurisdicción de ella, y del derecho fundamental interno, es menester que se integre por actos o segmentos regulares; sólo así el juzgamiento de la ley implica el del tratado mismo por estar incluida en su propio cuerpo.

Cosa diferente sucede cuando la ley no se ciñe a los requisitos sustanciales para su existencia, pues entonces si su texto no se integra al Acuerdo y éste por consiguiente carece de vigencia. Es obligada inferencia de lo planteado, que ese conato de ley, estaría subordinado a la jurisdicción constitucional de la Corte y que su impugnación y eventual inexequibilidad dejarían incólume la atribución presidencial del artículo 120-20, por no haberse agotado el proceso de perfeccionamiento del Tratado y por no ser aún perfecto el concierto de voluntades entre las dos partes que las estipularon. Ello no implica un rompimiento unilateral de Un Acto, cuyo consentimiento en lo que concierne a una de las partes, no se ha completado con el acto legal que exige su ratificación".

No ha adoptado hasta ahora la Corte la tesis de la competencia plena para conocer de la impugnación sobre las leyes aprobatorias de tratados internacionales, que ha sido propuesta en algunos salvamentos de voto de Magistrados de la Corporación y por doctrinantes de Derecho Constitucional y la cual se basa en el principio de la guarda de la integridad de la Constitución contenido en el artículo 214 de la Carta, en donde expresamente se ordena a la Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes.

La Corte, al examinar el asunto, en relación con el Concordato, se pronunció en sentencia de 18 de septiembre de 1975, en los siguientes términos:

"1. La ley ha sido demandada en su integridad y como puede observarse en su texto, sólo tiene tres artículos: el primero por medio del cual se reproducen y

aprueban el Concordato y su protocolo final; el segundo, por medio del cual se derogan la Ley 54 de 1924 y las demás disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en el artículo primero; y el tercero, por el cual se dispone que la ley entrará a regir a partir de su promulgación. El texto de la ley está reproducido, pero toda la demanda se refiere de modo exclusivo al Concordato (un tratado-contrato), y a su contenido, para enfrentarlo a la Constitución y pedir como ya se dijo, que se declare su inexequibilidad...

"2. No sólo porque, como se deja visto, así lo plantea la demanda, sino por ser de lógica tratándose de que el artículo 1° de la ley cuya legitimidad se discute, es aprobatorio de un tratado internacional, se estudiará primeramente lo relativo a la competencia.

"Ha sido invariable la posición doctrinaria de la Corte al afirmar, cuando se trata de leyes aprobatorias de tratados y convenios internacionales su incompetencia para conocer de las demandas respectivas. Se funda tal doctrina en la necesidad de no someter la estabilidad de los tratados a la decisión unilateral de uno de los contratantes, Colombia en este caso, con manifiesto peligro para la seriedad de nuestras relaciones internacionales...

"

"A lo anterior se agrega que, nuestra Constitución no prevé ninguna participación de la Rama Jurisdiccional en la celebración de los tratados públicos, los cuales se acuerdan por el Presidente de la República como jefe de las relaciones internacionales (120-20), se someten al Congreso para su aprobación definitiva (76-18) y se rematan con un canje de ratificaciones. Cuando el Tratado se celebra por sus cláusulas queda comprometido en su buena fe el Estado colombiano con todas las ramas que constitucionalmente integran el poder público (art. 55). Si se aceptara que una vez celebrado el Tratado, una de tales ramas, la jurisdiccional en este caso, puede declarar inválido el Tratado, en todo o en parte, a través de una declaración de inexequibilidad, habría que admitir que aquel compromiso no obligaba totalmente al Estado, sino con reservas, y por lo mismo, la capacidad de negociación del país con otros Estados se vería disminuida o menguada por el riesgo de la decisión unilateral que en cualquier momento podría sobrevenir respecto de las cláusulas que con arreglo a la Carta fueron convenidas con el Presidente y aprobadas por el Congreso. Esto es cuanto ha dicho la Corte en otras ocasiones y con otras palabras en materia sobre la cual no se ven razones que justifiquen una rectificación" (Gaceta Judicial, T. CLII - CLIII, Nos. 2393, 2394, p. 169).

Posteriormente, la Corte, en sentencia de junio 6 de 1985, citada atrás parcialmente, acogió la tesis temporal o intermedia en relación con la impugnación sobre las leyes aprobatorias de los tratados públicos, en los siguientes términos:

"Si la ley aprobatoria incluye el tratado, éste, en cuanto parte formal y material de aquélla, queda subordinado a la jurisdicción constitucional de la Corte, no propiamente en su carácter de convenio internacional, naturaleza que aún no ostenta, sino como tratado en proyecto, susceptible aún de revisión y modificación por distintos motivos, sobre todo por el más trascendente que es el de su lealtad a las normas del Código Superior, sin que, según se advierte y se reitera, tal revisión y las

posibles modificaciones, tengan que ver con el compromiso internacional en vía de ocurrir.

"Ni se piense que el juicio de la Corte sobre la ley aprobatoria de un tratado antes de que éste llegue a perfeccionarse y adquirir su plena validez internacional, significa invasión indebida de los fueros constitucionales del Presidente de la República establecidos en el artículo 120-20 de la Carta, porque al lado de éste, y con igual valor se encuentra el 76-18 que obliga, al Congreso a aprobar o no aprobar los tratados, por medio de leyes, y simultáneamente el 214 que impone a la Corte el deber de juzgar la constitucionalidad de éstas, sin excepción. De donde brotan con claridad las funciones que la Carta asigna al Presidente de la República, al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia, cada uno dentro de la órbita constitucional de facultades que le son propias: el Presidente, como director de las relaciones internacionales, el Congreso como expresión de la voluntad legislativa de la Nación, la Corte como Juez de constitucionalidad de todas las leyes.

"Cuando éstas aprueban tratados y los incluyen en sí mismas con ese objeto, unas y otros, mientras no agoten el proceso de perfeccionamiento de esos pactos internacionales, permanecen en el ámbito del derecho público interno, y sólo después de haber experimentado las demás secuencias constitucionales y legales que pertenecen a él, incluido, el control determinado por el artículo 214 de la Carta, llegarán a hacerse perfectas y lo trascenderán para producir las consecuencias previstas por el derecho que rige las relaciones interestatales.

"De tal manera en caso de que la Corte llegara a decidir la inexequibilidad de una ley aprobatoria de tratado, éste, sin que aún produzca efectos internacionales, no podrá ejecutarse lo que equivale a decir que es inexequible, en la misma medida de la ley que lo contiene, y ello no significará rompimiento unilateral a consecuencia del fallo porque el pacto en ese momento no ha culminado el curso de su formación, no constituye aún acto bilateral o multilateral de un consentimiento así mismo modificable unilateralmente, de manera directa o indirecta, o por consecuencias como en el caso de fallo judicial.

"Entendida de tal manera la capacidad constitucional de la Corte para ocuparse de acciones de inconstitucionalidad que se promuevan sobre leyes aprobatorias de tratados internacionales, habrá de llegarse al ideal democrático de que no existan actos legislativos que escapan a ese control, como ha venido ocurriendo con respecto a tales leyes, sin que la Carta las haya excluido de la jurisdicción que genera a través de su artículo 214" (Sentencia número 41 de 6 de junio de 1985 –Expediente número 1275–. Magistrado Ponente: doctor *Carlos Medellín Forero).*

Esta tesis que señala un notable cambio en la jurisprudencia de la Corte junto con la de su competencia para conocer de la inconstitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales cuando están afectadas de sustanciales vicios de forma, concilia la solución de que tales instrumentos jurídicos no sean ajenos a la revisión constitucional y que tampoco sean revisables indefinidamente. La observación de algunos eminentes doctrinantes al hacer la crítica de la competencia temporal en el sentido de ser una competencia de unos pocos días, semanas, o meses, sujeta a la voluntad del gobierno, que después de aprobada la ley, opta o no por agilizar los términos del canje de ratificaciones, prolongando o acortando, el período durante el

cual puede entrar a estudiar la Corte la demanda, no tiene aceptación o cabida, pues si la impugnación se presenta oportunamente, la Corte retiene la competencia para conocer y decidir la demanda.

Así mismo, quienes impugnan esta posición jurisprudencial desde el punto de vista de los más rígidos principios del Derecho Internacional Público, olvidan que aún sus normas actuales contienen soluciones y mecanismos para las situaciones imprevisibles, a que se sujetan las partes contratantes por virtud de pactos multilaterales o que incorporan al propio texto de los tratados o convenios que celebran.

Quizá a este respecto haya que llenar en el futuro determinados vacíos que presenta la normatividad constitucional, para hacer explícitos principios que hasta ahora sólo pertenecen al ámbito de la jurisprudencia y de la doctrina, especialmente en el campo del Derecho Internacional Público y en relación con el control constitucional que le corresponde a la Corte. Pero ello es materia de criterios de conveniencia cuya recepción sólo puede llevarla a cabo el constituyente y que penetran el dominio de la política internacional del Estado, campo naturalmente vedado a la naturaleza de las funciones que cumple la Corte en su cometido jurisdiccional. Precisamente estas consideraciones son las que señalan la importancia de varias iniciativas de reforma constitucional que han cursado y cursan en el Congreso de la República en el sentido de establecer un control preventivo y limitado en el tiempo, a cargo de la Corte Suprema de Justicia, sobre la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados públicos.

Por otro lado, Colombia no puede ser, y menos en el actual concierto de naciones que aspiran a vivir bajo los signos de la solidaridad y la integración, una ínsula aparte, ajena a las obligaciones internacionales que le señalan su condición de miembro de la comunidad universal, y como integrante de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y de múltiples tratados bilaterales y multilaterales.

De todo lo dicho, conclúyese que la Ley 20 de 1974 se halla produciendo la plenitud de sus efectos nacionales e internacionales, pues respecto de ella se han cumplido todos los trámites y requisitos que la caracterizan no sólo como parte integrante del derecho público interno, sino también como acto jurídico que lo ha trascendido para producir todas sus consecuencias en el derecho público internacional. En efecto, el Concordato empezó a regir el 2 de julio de 1975, día del canje de ratificaciones.

La Corte reitera ahora las jurisprudencias del 6 de junio de 1985 y del 12 de diciembre de 1986, a las que se ha referido en las motivaciones anteriores, y concluye en el sentido de declarar la constitucionalidad de la Ley 20 de 1974 en cuanto no adolece de vicios en su formación, y declarar, así mismo, que por haberse perfeccionado en debida forma el trámite del Tratado, carece de competencia para decidir sobre el fondo de la presente demanda.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

1. Es CONSTITUCIONAL la Ley 20 de 1974 en cuanto no adolece de vicios en su formación.

2. DECLÁRASE INHIBIDA para decidir sobre el fondo de la demanda instaurada contra la Ley 20 de 1974.

Cópiese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández* (Con aclaración de voto), *Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengás, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez* (Con salvamento de voto), *Guillermo Duque Ruiz* (Con salvamento de voto), *Eduardo García Sarmiento (Con aclaración), Jaime Giraldo Angel* (Con salvamento de voto), *Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe* (Con salvamento de voto), *Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome* (Con salvamento de voto), *Héctor Marín Naranjo* (Con aclaración de voto), *Lisandro Martínez Zúñiga* (Con salvamento de voto), *Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero* (Con aclaración de voto), *Jorge Iván Palacio Palacio* (Con salvamento de voto), *Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra* (Con salvamento de voto), *Edgar Saavedra Rojas* (Con salvamento de voto), *Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO

Los suscritos Magistrados dejamos consignado en esta Salvamento de Voto, los principales argumentos que esgrimimos en apoyo de la tesis de la competencia total e intemporal de la Corte para conocer de las demandas de inconstitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados públicos, tesis que consideramos se abre paso desde el fallo de 12 de diciembre de 1986 que aceptó la competencia de la Corporación para conocer, en cualquier tiempo, de demandas de inexequibilidad contra esas leyes por vicios de forma en su tramitación y que no dudamos habrá de consagrarse en un futuro inmediato para que se cumpla a cabalidad el mandato del artículo 214 de la Constitución que le da competencia a la Corte para "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de *todas* las leyes", sin excepción alguna.

Son los mismos que justifican nuestro disentimiento respetuoso, de la decisión mayoritaria adoptada en la Sentencia de la fecha.

Estado actual de la cuestión

En el último fallo proferido por la Corte el 24 de junio de 1985 para decidir sobre la constitucionalidad de los artículos 1° y 2° de la Ley 27 de 1980 acusados por Epifanio Rojas Arias, y en el que se revaluó en parte la jurisprudencia sobre su incompetencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad de leyes aprobato-

rias de tratados públicos, se concretan las principales razones que fundamentan su tesis; son ellas:

a) Esas leyes "forman parte de los tratados cuya aprobación imparten y, por consiguiente, el juicio sobre aquéllas implican el de éstos, sin que la Carta le conceda la indispensable jurisdicción para hacerlo";

b) "La dirección de las relaciones internacionales y la facultad de celebrar tratados, son atribuciones que la Constitución otorga exclusivamente al Presidente de la República, con la intervención del Congreso en cuanto a la aprobación o improbación de éstos, lo cual excluye toda participación de la Corte, así se refiera a la guarda de la Constitución que el constituyente le ha confiado";

c) Al quedar concentrado en el Ejecutivo y el Legislativo el ejercicio de la soberanía que la celebración de tratados implica, "sólo el primero es constitucionalmente capaz de comprometer el honor y la dignidad de la Nación en tales actos, lo cual se ha establecido en beneficio de su estabilidad, sin que poder alguno diferente pueda variar esa situación mediante determinaciones que implicarían su rompimiento unilateral. Ello excluye, entonces, toda posibilidad de juzgar la constitucionalidad de los tratados y, en consecuencia, de las leyes que lo aprueban".

Segunda. Previo análisis de la *complejidad* del proceso de formación del tratado y de los actos que lo integran, de los cuales la ley que lo aprueba es apenas uno de ellos, llega la Corte a la conclusión de que el convenio sólo nace a la vida jurídica cuando "además de la ley aprobatoria, se haya producido el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación", y que antes de este requisito esos acuerdos son imperfectos, no producen efectos internacionales por ser pactos que se hallan en proceso de formación, "lo cual significa que las leyes aprobatorias de ellos si bien no alcanzan aún, en un período, a producir efectos entre los Estados celebrantes, sí ostentan el carácter común de normas de derecho público interno, hasta ese momento iguales a las demás que expide el Congreso, y sujetas, por tanto como éstas, al juicio de constitucionalidad que compete a la Corte, sin que ello implique agravio alguno al compromiso internacional, sencillamente porque él aún no existe en razón de que el acto que lo contiene y lo produce todavía no está perfeccionado".

A cada uno de estos argumentos y siguiendo el orden en que se anuncian, se responde:

a) La propia Corporación en el mismo fallo de 24 de julio de 1985 sostiene que las leyes aprobatorias de tratados internacionales "no constituyen excepción a la regla del artículo 214 de la Carta que otorga competencia para ejercer el control de constitucionalidad de todas las leyes, ni a la definición que de la ley da el artículo 4° del Código Civil, porque la aprobatoria de un tratado si bien no manda, ni prohíbe, ni castiga, sí permite su perfeccionamiento, su ejecución".

Ahora bien, cuando se acusa la ley que aprueba el tratado, lo que se impugna no es el tratado sino la ley que cabalmente lo hace operante en los ámbitos interno y externo, pues sin ella el tratado no tendría significación en ninguna de esas órbitas; de esto se colige que la obligatoriedad interna e internacional del tratado no se derivan de éste sino de la ley que lo aprueba.

Se desprende de lo dicho que la ley es separable del tratado y que no pierde esta calidad cuando aprueba la convención internacional: la naturaleza de mandato sigue subsistiendo pues es una manifestación de la voluntad popular vertida por el órgano representativo de ésta y por los procedimientos y trámites que señala la Constitución; y el Congreso al emitirla obra en ejercicio de una función que le es propia según el artículo 76-18 de la Carta.

La tesis que se esboza y con apoyo en la cual es dable sostener la existencia de "actos separables del tratado", permite juzgar la constitucionalidad de la ley que lo aprueba por los tribunales del respectivo país y según su propia legislación como más adelante se precisará;

b) De igual modo la Corte en la citada sentencia de 24 de junio del año retropróximo, fijó los campos de competencia de cada una de las ramas del poder público en lo relacionado a la materia que se analiza. Dijo en efecto, que el conocimiento que a ella concierne sobre aprobación de tratados no "significa invasión indebida de los fueros constitucionales del Presidente de la República establecidos en el artículo 120-20 de la Carta, porque al lado de éste, y con igual valor, se encuentra el 76-18 que obliga al Congreso a aprobar o no aprobar los tratados, por medio de leyes, y simultáneamente el 214 que impone a la Corte el deber de juzgar la constitucionalidad de éstas, sin excepción. De donde brotan con claridad las funciones que la Carta asigna al Presidente de la República, al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia, cada uno dentro de la órbitra constitucional de facultades que le son propias: el Presidente como director de las relaciones internacionales, el Congreso como expresión de la voluntad legislativa de la Nación, la Corte como juez de la constitucionalidad de todas las leyes".

Se debe pues aceptar sin ambages, que no existe en nuestro ordenamiento ley alguna que escape al control judicial de constitucionalidad ya que por estatuirlo así la Constitución Nacional en el artículo 214, todas las leyes están sujetas a la vigilancia de la Corte Suprema de Justicia por vía de demanda ciudadana y aún los proyectos de ley que hayan sido objetados de inconstitucionalidad por el Presidente de la República. Este control se extiende también a actos de gobierno emitidos en estados críticos de la vida de la Nación como los decretos expedidos en estado de sitio o de emergencia económica y aun a las mismas reformas constitucionales por aspectos de forma. Y no solamente la Corte y el Consejo de Estado sino todos los funcionarios que hayan de aplicar la ley, tienen la obligación de preferir la Constitución cuando el precepto inferior se considere incompatible con ella, por ello resultaría en pugna con este principio de control total de constitucionalidad, excluir de la vigilancia judicial de la Corte, actos que sin texto constitucional que lo disponga, se consideran propios del orden internacional sujetos únicamente a este ordenamiento, dándose preferencia al derecho internacional sobre el derecho interno.

Por otra parte, el hecho de que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de las leyes a que se viene refiriendo este fallo, no significa de modo alguno que invada o se inmiscuya en la esfera que la Constitución reserva al Presidente y al Congreso para dirigir las relaciones internacionales, así como no implica injerencia en la órbita legislativa o constitucional ni se convierte por ello en legislador o constituyente, cuando conoce de las demandas de inexequibilidad contra las leyes o

reformas constitucionales. Por tanto, si no se puede considerar como acto violatorio del Código Superior el fallo que declara la inexequibilidad de un Acto Legislativo o de una ley, tampoco y por igual razón puede serlo un pronunciamiento de inexequibilidad de la ley aprobatoria del tratado, ya que, lejos de tener este carácter la sentencia en ese supuesto, implicaría sólo "el cumplimiento de una función impuesta por la misma Carta";

c) Con respecto a la argumentación de este literal, no es exacto atribuirle a la decisión de la Corte, el efecto de romper unilateralmente el tratado ya que en ella no se encuentra como acaba de indicarse, las facultades que los artículos 120-20 y 76-18 de la Constitución le fijan al Presidente y al Congreso para dirigir las relaciones internacionales y en ejercicio de ellas celebrar tratados. Ya se dijo precedentemente, que el papel de la Corte se limita a juzgar la constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado y esta función fue destacada por la misma Corporación que consideró su ejercicio como uno de los presupuestos del Estado de Derecho puesto que, "entendida de tal manera la capacidad constitucional de la Corte para ocuparse de acciones de inconstitucionalidad que se promuevan sobre leyes aprobatorias de tratados internacionales, habrá de llegarse al ideal democrático de que no existan Actos Legislativos que escapen a ese control, como ha venido ocurriendo con respecto a tales leyes, sin que la Carta las haya excluido de la jurisdicción que genera a través de su artículo 214".

Agréguese a lo anterior que si la improbación del tratado no le destruye ni termina, menos podría extinguirlo la sentencia de la Corte que declare inconstitucional la ley que lo aprueba. Con la inexequibilidad "el tratado no ha quedado resuelto unilateralmente; por el contrario, el pacto internacional permanece en vigencia en su esfera es decir, en la esfera del derecho internacional al cual pertenece"; siendo entonces en el supuesto que se contempla, susceptible de denunciarse por el Estado colombiano; pero el funcionamiento interno del tratado, esto es decir su vigencia interna, "no puede producirse sino conforme al ordenamiento nacional, en que la Constitución ocupa el más alto lugar" como lo sostiene la doctrina nacional.

Los argumentos en que la Corte ha apoyado su tesis, hoy morigerada, de la incompetencia para conocer de las demandas de inexequibilidad de leyes aprobatorias de tratados públicos parecerían justificar el fallo "inhibitorio" no sólo cuando la impugnación verse sobre el contenido mismo de la ley, sino también cuando se acusan por vicios de forma o trámite.

Sin embargo, una atenta consideración de la sentencia en lo que atañe a la naturaleza *compleja* del *tratado público* que expresamente le reconoce a éste, permite sostener que la incompetencia sólo se configura o surge cuando el tratado ha adquirido entidad de tal, esto es, cuando "ha trascendido al derecho público interno" por haberse cumplido o agotado la totalidad de los requisitos necesarios para su existencia incluido en éstos, el legislativo que se concreta en la ley que lo aprueba. Por tanto, si este requisito integrador del acto complejo no se ha realizado, o su cumplimiento o existencia es meramente aparente por no haberse acatado las formalidades esenciales que el derecho nacional exige para su nacimiento, el *acto final* no nace ni logra por tanto sustraer del orden interno la *ley* aprobatoria del convenio y fundida a éste hacerla desaparecer como acto separado para incorporarse

junto con los demás elementos constitucionales del tratado, en un ente complejo llamado a producir sus efectos en la órbita del derecho internacional.

El acto complejo requiere que cada uno de sus segmentos integradores se ciñan a los requisitos que le son propios: ya la Corporación en la pluricitada sentencia de 6 de junio de 1986 calificó de tal la conjunción de los actos que lo forman. Dijo entonces:

"El carácter de las leyes aprobatorias de los tratados internacionales, sus objetivos específicos, lo particular de su vigencia, la circunstancia de corresponder a todo un proceso, según lo ya explicado han llevado a la Corte a considerarlo como *un acto jurídico complejo que no se realiza plenamente mientras no se cumpla la totalidad de las actuaciones que lo informan, incluida la legislativa indispensable para su aprobación y su existencia:*

"Debe observarse que tanto en el plano jurídico internacional, como en el constitucional, el tratado como se anotó es *un acto jurídico complejo, integrado por una sucesión, necesaria de actos intermedios sin los cuales no lograría la perfección.* Tal proceso comienza con las negociaciones respectivas y concluye con el canje de ratificaciones. *Dentro de él y como elemento esencial aparece la ley aprobatoria que viene a ser como la suprema expresión del pueblo,* hecha a través de su representante natural, el Congreso da aceptación y acatamiento de lo convenido entre el gobierno y las demás partes contratantes. *Sin esta expresión, al menos en nuestro orden jurídico, no podría concebirse la existencia del tratado ni por lo mismo hablarse de obligaciones generadas por él"* (Subraya el Procurador).

Si pues, la ley es uno de los requisitos para que el *tratado* adquiera eficacia y unida a los otros actos que lo conforman, entran a formar parte inescindible del acuerdo internacional, los vicios sustanciales que afecten su proceso genético (y sean de tal entidad porque no permitan considerarla como existente por su vulnerabilidad constitucional), necesariamente se proyectan o inciden en el *acto complejo* y no permiten que éste adquiera existencia en el orden normativo interno o doméstico. En este supuesto la ley lejos de ser manifestación de la voluntad soberana del legislador, es un mero "conato" de tal expresión y por tanto, mantiene su autonomía o separabilidad del pacto internacional al que apuntaba, y puede ser juzgada (de inconstitucionalidad) frente al derecho interno sin que ello implique intervención de la Corte en un terreno que pertenece a la órbita del derecho internacional.

La doctrina nacional acepta la revisión de constitucionalidad de la ley que aprueba el tratado cuando se expide con vicios sustanciales, en su trámite, así lo sostiene el Dr. Eduardo Fernández Botero, ex-Magistrado de esta Corporación. Dice:

"La ley que aprueba un tratado, aunque es elemento de un acto jurídico complejo, puede ser declarada inconstitucional por la Corte, pero sin relación alguna con el texto del tratado. Vale decir que en nuestro sentir sólo sería declarada inconstitucional la ley aprobatoria cuando ella se expide con vicios sustanciales de trámite como cuando no recibe los debates o votaciones exigidas por la Constitución. También podría ser inexequible el Decreto-ley en que el Ejecutivo aprobase un tratado si para ello se creyese revestido de autorizaciones extraordinarias, y no las tuviera, o fueren insuficientes o estuviesen vencidas.

"Y en ambos casos quedaría el tratado en camino de ser aprobado reconstruyendo el procedimiento. Y no se afectarían las facultades negociadoras del Ejecutivo ni se afectaría la práctica *diplomática* ni la seguridad de las negociaciones entre las potencias" (Estudios sobre la Constitución Política de Colombia, editorial Lito-Textos 1974, pág. 667-668).

El divorcio o separación que se predica de la ley con respecto al tratado, para los efectos de su impugnación, no tiene límite en el tiempo ya que no subsiste únicamente hasta que el tratado sea canjeado, pues el vicio constitucional que la afecta es verificable por la Corte en cualquier momento ya que él no se purga o redime por el solo hecho de entrar en vigencia.

Es pertinente recordar a este respecto, un principio general admitido en el derecho internacional conforme al cual, para la validez de un acto unilateral o bilateral de un Estado, es menester que tal acto sea proferido conforme a las normas sobre competencia contenidas en el derecho interno del país o países de que se trate (Opphinm y Lanter Pach, Derecho Internacional Público. Tomo I. Volumen 2. Nos. 342-497. Página 509-A), de lo cual es obligado concluir que sólo los tribunales nacionales pueden verificar o decidir sobre su ajuste al derecho interno, la sumisión a la ley doméstica tiene órbitas territorial y personal que no pueden rebasarse sin desconocer la soberanía del Estado. De este modo se logra el mínimo control de ese acto que recae sólo sobre el poder legal de quien lo expidió quedando por fuera la oportunidad, mérito o conveniencia, aspectos que no son cuestionables jurisdiccionalmente y en cuyo análisis sí invadiría la Corte órbitas que le están vedadas.

No obstante su tesis inhibitoria para conocer de demandas de inconstitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados públicos, esta Corporación en sentencia de 20 de enero de 1972 (G.J.T.L. Pág. 704) declaró inexequible el Decreto número 1299 de 30 de junio de 1971 "Por el cual se pone en vigencia el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros sobre marcas, patentes, licencias y regalías del Acuerdo de Cartagena", refiriéndose dicho Decreto a materias reguladas por el Acuerdo de Cartagena y el Pacto de Montevideo. Y antes de dicho fallo, declaró en sentencia de 30 de enero de 1958 que "Las leyes colombianas que aprueban tratados públicos deben como cualesquiera otras leyes", estar bien avenidas con los cánones de la Constitución; agregando en el mismo que "por más que se apure el análisis de las disposiciones que en la demanda se citan como infringidas y por mucho que ahonde en el examen sutil de los hechos o antecedentes del caso, no se llega a advertir violación, ni de fondo ni de forma de la Constitución colombiana por parte de la Ley 56 de 1921".

Igualmente en fallo de 26 de abril de 1971, recaído en la demanda contra la Ley 54 de 1924 (denominada Ley Concha) admitió su competencia a pesar de que la norma acusada incidía en un tratado internacional y entró a estudiar el fondo de la acción de inexequibilidad y la declaró exequible; y lo mismo hizo en el fallo de 27 de febrero de 1957 sobre la demanda de inexequibilidad de algunas disposiciones de la Ley 8ª de 1973, relacionada con los efectos de las medidas que puedan adoptar la Comisión y la Junta que desarrollen el Acuerdo Subregional Andino, materias éstas propias del Acuerdo de Cartagena.

Es claro entonces que la Corporación no ha sido consecuente con su tesis tradicional adoptada en la sentencia de 1914 y por el contrario, en las decisiones arriba citadas, viene aceptando que no quedan excluidas de la acción de inconstitucionalidad que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional, las leyes aprobatorias de tratados internacionales ya que este texto le confiere la función de decidir "sobre la inexequibilidad de todas las leyes".

Sostener lo contrario implicaría como, lo han puesto de manifiesto quienes salvaron el voto de las decisiones inhibitorias "que las facultades del Presidente de la República en la celebración de tratados o convenios no sólo serían supranacionales, sino que aún podría tolerarse la actividad anticonstitucional del Ejecutivo con la aquiescencia del guardián de la Constitución", y que si los actos internacionales no tienen control "la estructura constitucional del Estado deja de existir y se abre el camino a un gobierno omnímodo y absoluto si la Constitución no tiene la facultad de restablecer su imperio desaparece el Estado de Derecho"; y finalmente, que las leyes que aprueban los tratados o convenios que el Presidente celebre en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 120-20 a que se refiere el artículo 76-13 "debe ceñirse rigurosamente a los preceptos de la Constitución como ley suprema que gobierna los derechos y deberes de todos los habitantes y de su conformación, con ella se encarga a la Corte Suprema de Justicia. La materia sometida a la competencia de la Corte es la ley nacional que ha de obligar a todos los ciudadanos y éstos tienen por tanto, derecho a que dicho ordenamiento se ajuste a los mandatos que condicionan su actividad social o jurídica".

Agréguese a lo anterior que nuestro ordenamiento constitucional no le ha dado al tratado un rango superior al de la ley ni ha dispuesto que por ser institución internacional es impugnable únicamente por los medios que este ordenamiento establece.

Sobre esta primacía o mejor sobre la fuerza obligatoria del derecho internacional sobre el derecho interno, dice *Pierre Lardy,* partidario de esta prelación, autor contemporáneo citado por el Dr. Carlos Restrepo Piedrahíta: "La aplicación del derecho internacional, su primacía sobre las reglas estatales internas, no es un problema de derecho internacional, sino un problema de técnica constitucional. Cada Estado debe prever por sí mismo según cuáles principios habrán de ser aplicadas las normas internacionales ante los tribunales".

La superioridad del derecho internacional sobre el nacional sí es conveniente para asegurar la estabilidad de las relaciones de los Estados, concertadas sobre materias de común interés, sólo opera en la medida en que la Constitución lo establezca ya que en su ordenamiento se contiene la base de la organización política del Estado y a ellos necesariamente deben subordinarse todos los poderes que por ser soberanos no admiten que ninguno se le superponga. Sólo la *Constitución,* máxima expresión de esa soberanía y "afirmación de la voluntad de un pueblo de vivir organizado como Estado", puede estatuir en qué medida la ley nacional se subordina a normas supranacionales. La ausencia de texto constitucional sobre esa prelación no se suple por disposición legal ni por decisiones jurisprudenciales por reiteradas que sean, ni menos por inveteradas prácticas internacionales.

Esta tesis se reiteró en la discusión de la Reforma Constitucional de 1968, al proponerse un artículo del correspondiente proyecto que reconocía superioridad al derecho internacional sobre el nacional; y es la misma que acogen algunas constituciones modernas como las de Alemania, Italia, España y la República Federal Alemana; esta última promulgada el 8 de mayo de 1949, dispone que "las reglas generales del derecho internacional son parte integrante del derecho federal. Son superiores a las leyes y hacen nacer directamente derechos y obligaciones para los habitantes del territorio federal".

Digna de especial mención es la fórmula que sobre el particular adopta la Constitución de la V República Francesa de 1958 que dice: "Los tratados o acuerdos regularmente ratificados o aprobados tienen, desde su publicación una autoridad superior a la de las leyes, bajo reserva, para acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte" (Artículo 55); y si cuando el Consejo Constitucional declara que un convenio es inconstitucional, no puede ser aprobado o ratificado sino a condición de que en tal sentido se reforme la Constitución (artículo 54), ello implica indudablemente que se mantiene a toda costa la primacía de la Constitución sobre el tratado.

Si un tratado internacional contraviene el derecho fundamental interno, no se puede aplicar en el ámbito nacional ya que la Constitución es la ley suprema y los tratados están en un grado inferior de obligatoriedad con respecto a ésta; de no ser así se abriría la puerta al Ejecutivo y al propio legislador para toda clase de suplantaciones constitucionales, con flagrante quebranto del artículo 120-9 que le impone al Presidente proveer a la seguridad exterior de la República "defendiendo la independencia" de la Nación.

Las eventuales dificultades que de la anterior tesis se puede derivar para la estabilidad de las relaciones internacionales, se sortean con la previa constatación del ordenamiento de los Estados que van a contraer y/o con el previo control constitucional del tratado, así como en el caso *sub judice* ocurriría en los Estados Unidos, en donde los tratados siempre están supeditados al ordenamiento constitucional. Sobre el primer sistema resulta oportuno citar al constitucionalista Jorge Carpizo para quien "lo primero que deben constatar los Estados que van a contratar es la situación jurídica de ellos sin que haya por este aspecto injerencia en el orden interno del Estado ni menos interpretación de la legislación del otro Estado" pues siempre que se celebra un acto jurídico interesa analizar la situación jurídica de la otra parte y lo mismo debe ocurrir en la celebración del *tratado*.

Bogotá, 13 de febrero de 1987

Rodolfo Mantilla Jácome, Jaime Giraldo Angel, Lisandro Martínez Zúñiga, Jorge Iván Palacio Palacio, Guillermo Duque Ruiz, Edgar Saavedra Rojas, Rafael Romero Sierra, Jairo E. Duque Pérez.

Aclaración de voto a la sentencia de 12 de febrero de 1987

Expediente número 1489

No obstante compartir los dos puntos de la decisión de la sentencia referida, en cuanto declaró ajustada a la Constitución Nacional la Ley 20 de 1974 "por no

adolecer de vicio en su formación" y la inhibición para decidir sobre el fondo de la demanda, hemos de consignar, a manera de aclaración, reparos a las motivaciones que llevaron a la mayoría a inclinarse por la falta de competencia.

Creemos que no existe razón alguna para apartarse de la tesis de la Corte, predicada desde 1914, de la inhibición, en cuanto una ley aprobatoria de un tratado no puede ser materia de revisión constitucional atendida la circunstancia simple, pero categórica, de que esta clase de normaciones forman parte de convenios internacionales, que hacen suponer, entonces, que su juzgamiento implica también el del tratado mismo, que como es sabido sólo compete al Presidente de la República (artículo 120-20 de la Constitución Nacional), como supremo director de las relaciones internacionales. La complejidad del acto y hecho jurídico que concluyen, en un primer estado, con la ley aprobatoria del tratado, le permite advertir a ésta que si bien no es una ordenación de superior linaje o estirpe, sí tiene un matizado y reconocido efecto: transferir, por sí sola, el ámbito interno, para proyectar su consecuencia: al derecho externo, situación que no es común en cualquier clase de leyes. Esa índole particular surge desde el momento mismo que el Congreso Nacional incorpora al ordenamiento interno los convenios suscritos por el director de las relaciones internacionales. No hay duda, pues, de su especial incidencia en el campo del derecho internacional y su influencia indiscutible en el derecho nacional. Por eso dijo esta Corporación con precisión: "En verdad las leyes que se están analizando tienen una función múltiple: recubren un tratado; su contenido es el tratado mismo; reproducen las estipulaciones o texto del tratado, le dan forma, lo solemnizan, lo convalidan políticamente, lo ratifican y respaldan, a la vez que implican una compatibilización con la Constitución Nacional".

Y es que una ley aprobatoria de un tratado no puede ser derogada o subrogada por medio de otra ley. Su fuerza normativa particular le permite hacer relevante su condición privilegiada, que la aparta, por tanto, de la común regulación.

No es que el tratado esté por encima de la Constitución. Eso es un desafuero jurídico. En cambio, es evidente que cuando la Carta Fundamental entrega al Presidente de la República la facultad de dirigir con discrecional autonomía las relaciones internacionales y, por ende, la de celebrar los acuerdos encaminados a crear relaciones jurídicas con otros Estados, y cuando atribuye al Congreso la función de aprobar esos acuerdos, traza o delinea los pasos que, con el respeto que merecen la moral y el derecho, se deben dar para la incoación y ulterior eficacia de la referida modalidad de enlace o vinculación internacional. De ahí que sea inaceptable el esgrimir, como argumento en pro de la competencia de la Corte para asumir el conocimiento de demandas de inconstitucionalidad enderezadas en contra de los tratados internacionales, el que exista la posibilidad que con un tratado llegue a transgredirse la Constitución Nacional. A este respecto conviene recordar que, con arreglo al artículo 26 de la Convención de Viena, los tratados deben, no sólo ejecutarse de buena fe, sino también celebrarse bajo este designio.

Entonces, consideramos que no hay motivo alguno que permita un cambio de doctrina sobre la incompetencia.

Ahora bien, frente a la posición doctrinaria que se enuncia en la sentencia consistente en afirmar que mientras no se produce el canje de ratificaciones sí se

puede entrar a estudiar los alcances de la ley aprobatoria y del tratado mismo, para confrontarlos con la Constitución, debemos hacer algunas precisiones:

Un tratado internacional se incorpora al ordenamiento jurídico del país desde el propio instante de la aprobación de la ley que lo adopta. No existe en el Sistema Jurídico Colombiano regla que indique que esta clase de normas tiene un mecanismo y procedimiento distinto para determinar cuándo es ley de la República. Esto es, ella sigue ceñida a las previsiones constitucionales de los artículos 81 y 85 de la Carta Superior, a saber, la aprobación legislativa, la sanción presidencial y la publicación en el *Diario Oficial.*

La Convención de Viena, adoptada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985, señala el marco preciso para aquellos eventos de quebranto, rechazo o enfrentamiento de las ordenaciones de un tratado con el derecho interno superior cuando permite enjuiciar la nulidad del mismo. Es decir, si en un momento dado se advierte la violación de los textos constitucionales en virtud de un tratado, la Nación misma, integrada por todos los estamentos de la nacionalidad, puede impugnar la eficacia en procura restablecer a plenitud el derecho interno, como forma ideal de restarle fuerza jurídica (art. 69 de la Convención de Viena).

Dispone el artículo 18 de la citada Convención que "Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado", como una exigencia propia de la aplicación del principio *"pacta sunt servanda"* que también es reconocida en dicha Convención. Vale decir, que suscrito un tratado, por quien esté debidamente legitimado para hacerlo, le corresponde, luego, procurar todos los medios para su cumplimiento, entre los cuales está por mandato constitucional el de alcanzar la aprobación de rigor. Pero hasta ahí. No se puede admitir que los actos posteriores atinentes a su puesta en vigor, no necesariamente circunscrito al canje de ratificaciones como se sostiene en la sentencia, sino en cualquier otro medio aceptado por la citada convención (artículo 16 de la Convención de Viena en concordancia con el 24 *ibidem,* como una ampliación al procedimiento seguido de acuerdo con la Ley 7 de 1944), sean los que determinen el momento para la viabilidad o no de una impugnación por el camino de una acción pública.

Por último, la tesis de la competencia intemporal y la que se prohija en la sentencia suponen, en cierta forma, una actitud del Presidente de la República ajena por completo a los intereses superiores de la Nación y una convalidación del Congreso también marginada de los cánones fundamentales, dejando a la Corte Suprema, como la única defensora de esos grandes propósitos de salvaguardia de las normas constitucionales, con la inevitable injerencia en las cuestiones internacionales asignadas al Jefe del Estado. Y sobre esas bases, resulta inadmisible abrirle paso a la revisión constitucional pretextando para ello que con un tratado se pueden violar las normas superiores, particularmente si se tiene en cuenta el mecanismo previsto en la Convención de Viena, cuando entre los casos de nulidad de un acuerdo internacional destaca, por mandato del artículo 46, el que se viole en forma manifiesta y se afecte un precepto de importancia fundamental del derecho interno. Significa lo anterior que los Estados tratantes sí conservan ante el quebranto de normas superiores de derecho interno, procedimiento para lograr su separacicón del ordenamiento internacional y, por ende del interno, sin que se acuda al expediente que cada

Estado, por separado, pueda unilateralmente restarle eficacia por acto propio de una de las ramas del poder público.

José Alejandro Bonivento Fernández, Eduardo García Sarmiento, Héctor Gómez Uribe, Héctor Marín Naranjo, Alberto Ospina Botero.

DECRETO DE ESTADO DE SITIO. FACULTADES A LOS COMANDANTES DE UNIDADES OPERATIVAS, BASES NAVALES Y AEREAS, PARA SUSPENDER LAS LICENCIAS AL PERSONAL AERONAUTICO, MARITIMO, FLUVIAL Y TERRESTRE, CUANDO ESTEN VINCULADOS AL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES. CONEXIDAD. DERECHO DE DEFENSA.

Exequible el Decreto Legislativo número 3667 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 12.

Referencia: Expediente número 1559 (232-E)

Revisión del Decreto Legislativo número 3667 de 1986.

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Acta número 6.

Bogotá, D. E., febrero veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, el Secretario General de la Presidencia remitió oportunamente a la Corte el Decreto número 3667 de 1986, "por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público.

Mediante auto de enero 23 del presente año, se ordenó la fijación en lista del negocio por el término de tres (3) días vencido el cual y sin que ningún ciudadano acudiera a impugnar o coadyuvar la constitucionalidad del Decreto, se corrió traslado al Procurador General de la Nación quien rindió la vista fiscal correspondiente.

Agotadas las ritualidades previstas en el Decreto número 432 de 1969 para la revisión de constitucionalidad de los decretos legislativos, entra la Corte a resolver lo pertinente, previas las siguientes consideraciones:

II. Texto del Decreto Legislativo

El texto del Decreto materia de la revisión es como sigue:

"DECRETO NUMERO 3667 DE 1986
(diciembre 19)

"Por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público

"El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984,

D E C R E T A:

"Artículo 1° Facúltase a los comandantes de Unidades Operativas, Bases Navales y Aéreas, para disponer la suspensión de las licencias al personal aeronáutico, marítimo, fluvial y terrestre y los permisos de operación, de acuerdo con los indicios graves que posean provenientes de los organismos de inteligencia, sobre actividades de personas, aeronaves, vehículos marítimos y terrestres y operación de aeródromos o pistas, puertos, muelles o terminales marítimos, fluviales y terrestres, vinculados al tráfico de estupefacientes.

"Artículo 2° Este Decreto rige desde la fecha de su publicación, y suspende las normas que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 19 de diciembre de 1986.

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Gobierno y encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, *Fernando Cepeda Ulloa;* el Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* el Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo;* El Ministro de Defensa Nacional, General *Rafael Samudio Molina;* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* el Ministro de Trabajo, *José Name Terán;* el Ministro de Salud, *César Esmeral Barros;* el Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo;* el Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio;* el Ministro de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse;* el Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez;* el Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo Correa".*

III. La vista fiscal

El Jefe del Ministerio Público concluye solicitando a la Corte que declare exequible el Decreto bajo revisión. Su petición se apoya en los siguientes argumentos:

1. El Decreto cumple con los requisitos formales que exige la Constitución, es temporal y tiene evidente conexidad con las causas que determinaron el estado de sitio.

2. Advierte que el Decreto Legislativo número 1060 de 1984 contiene una disposición semejante a la del decreto que se analiza, con la sola diferencia que aquél

otorgaba facultades similares al Consejo Nacional de Estupefacientes y que la Corte al efectuar el examen de su constitucionalidad, mediante Sentencia de junio 27 de 1984 encontró que esta medida junto con las otras dictadas por el citado Decreto corresponden a las facultades propias del Presidente en estado de sitio y por ello lo declaró ajustado a la Constitución.

Prosigue el Procurador que teniendo a la vista la opinión expresada por la Corte en la sentencia mencionada y aunque la norma no establece un procedimiento específico para la supensión de licencias y permisos, puede interpretarse "como un medio policivo eminentemente temporal, realizable en el acto, con el fin de impedir una actividad supuestamente ilícita hasta tanto avoque el conocimiento la autoridad" y que al darle el sentido de medida precautelativa, no infringe el derecho de defensa consagrado en el artículo 26 de la Carta.

IV. Consideraciones de la Corte

Primera. *La competencia*

El Decreto número 3667 de 1986 fue dictado por el Presidente en ejercicio de las facultades que le confiere el estado de sitio y conforme a lo dispuesto en el artículo 121 en concordancia con el 214 de la Constitución Nacional, la Corte es competente para revisarlo y decidir definitivamente sobre su constitucionalidad.

Segunda. *Las formalidades del Decreto*

El decreto.sometido al juicio de la Corte lleva la firma del Presidente y todos sus ministros y sólo suspende las normas que le sean contrarias, con lo cual se aviene a lo dispuesto en el artículo 121 para los de su especie.

Tercera. *La conexidad*

Como claramente lo indica su texto, el decreto que se revisa es desarrollo del Decreto número 1038 de 1984 que declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República. Resulta entonces oportuno recordar que como motivos determinantes de esa declaratoria adujo el gobierno los siguientes:

"Que en diversos lugares del país han venido operando reiteradamente grupos armados que han atentado contra el Régimen Constitucional, mediante lamentables hechos de perturbación del orden público y suscitando ostensible alarma en los habitantes;

Que para conjurar la grave situación especialmente en los departamentos de Caquetá, Huila, Meta y Cauca, el gobierno declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio de dichos departamentos por medio del Decreto número 615 de 14 de marzo anterior;

Que el gobierno ha utilizado para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales los medios que le atribuye la legislación ordinaria, sin que haya bastado su efecto para recobrar la normalidad;

Que con posterioridad a la expedición del Decreto número 615 de 1984, han tenido lugar asaltos a poblaciones por obra de grupos armados, entre ellos los ocurridos sobre Acevedo en el departamento del Huila, Corinto en el departamento del Cauca, Sucre y Jordán Bajo en el departamento de Santander, Giraldo en el departamento de Antioquia y Miraflores en la comisaría del Guaviare;

Que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y salubridad públicas y en la economía nacional;

Que recientemente ocurrieron actos terroristas en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, causantes de la destrucción de numerosos vehículos de transporte colectivo;

Que al anochecer del día de ayer fue asesinado el señor Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla;

Que en general, hechos de violencia provocados por las circunstancias antes mencionadas han ocasionado sensibles bajas del personal de las Fuerzas Militares y de la Policía, lo mismo que víctimas en la población civil;

Que se hace necesario, ante la gravedad de la situación adoptar las medidas de excepción contempladas en el artículo 121 de la Constitución Política".

Aunque el Decreto número 3667 de 1986 carece de parte motiva, ello no impide a la Corte examinar su constitucionalidad, toda vez que el aspecto esencial del control se circunscribe a verificar si las medidas que dictó el gobierno como legislador excepcional se ajustan en su forma y contenido al ordenamiento constitucional o si por el contrario lo infringen, independientemente de que su expedición esté o no precedida de consideraciones, pues ello no constituye exigencia de la Carta.

Para esta Corporación es evidente que la normatividad bajo revisión guarda conexidad directa con las causas que motivaron la implantación del estado de sitio, por cuanto el Ejecutivo dejó expreso, que por la acción persistente de grupos armados relacionados con el narcotráfico venía perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, con secuelas en la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y las disposiciones que ahora se revisan están dirigidas a ejercer control y precaver la comisión de conductas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, que propician el estado de anormalidad institucional.

Cuarta. *Constitucionalidad de las medidas*

El Decreto consta únicamente de dos artículos; el primero de ellos faculta a los comandantes de unidades operativas, bases navales y aéreas, para disponer la suspensión de las licencias al personal aeronáutico, marítimo, fluvial y terrestre y los permisos de operación de acuerdo con indicios graves que posea provenientes de los organismos de inteligencia del Estado, de que las personas, aeródromos o pistas están vinculados al tráfico de estupefacientes. El segundo artículo determina su vigencia a partir de la publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

Ciertamente como lo recuerda el colaborador fiscal, una medida de similar contenido a la que ahora se revisa fue adoptada mediante el Decreto Legislativo número 1060 de 1984, que adicionó el artículo 83 del Decreto número 1188 de 1974, y le atribuyó al Consejo Nacional de Estupefacientes la facultad de suspender licencias para personal aeronáutico, los certificados de aeronavegabilidad o los permisos de operación, en los casos de poseer informes sobre vinculación con el narcotráfico. Posteriormente la Ley 30 de 1986, por medio de la cual se expidió el Estatuto Nacional de Estupefacientes le otorgó con carácter permanente la misma función al citado Consejo en el literal f) del artículo 91, norma que fue declarada exequible mediante sentencia de esta Corporación de noviembre 27 de 1986.

Dijo la Corte en esa oportunidad en ponencia elaborada por el mismo Magistrado que sustancia esta providencia.

"Cabe advertir que el texto legal al consagrar la función cuestionada, no deja al arbitrio de dicho Consejo la adopción de la medida, ni el fundamento que la determina, pues sólo resulta legalmente oportuna frente a una prueba indiciaria de tal entidad, que valorada en forma razonada, evidencie la existencia del hecho que se pretende probar, por darse un estrecho nexo causal entre el hecho indicado que lo hace de lógica ocurrencia.

La circunstancia de haber exigido el legislador una prueba calificada de la naturaleza de la requerida, supone la existencia de un proceso por narcotráfico, como lo advierte el Procurador, o su inminente iniciación por denuncia o aviso del Consejo Nacional de Estupefacientes en cumplimiento del deber que le impone los artículos 12 del Código de Procedimiento Penal y 67 de la Ley 30 de 1986".

Debe entenderse entonces que por virtud del decreto que se revisa ha quedado suspendida la facultad del Consejo Nacional de Estupefacientes, para ejercerse transitoriamente por los comandantes de unidades operativas, bases aéreas y navales, quienes por las funciones de control y vigilancia directa que ejercen en sus respectivas áreas aseguran la eficacia inmediata de la medida.

Es claro que la atribución prevista en el artículo 1° de la normatividad que se revisa no tiene carácter de sanción, sino que es una medida precautelativa de carácter policivo como lo ha entendido el Procurador que exige decisiones de aplicación inmediata para remediar o evitar alteraciones del orden público, las cuales por su carácter administrativo están sujetas al control de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

Igualmente es dable observar que la norma no traspasa, a los funcionarios mencionados, una atribución para que la ejerzan *ad libitum,* sino que exige como presupuesto de procedibilidad que halla indicios graves indicativos de la vinculación de las personas o los medios de transporte al tráfico de estupefacientes; por ello los informes que así lo indican deben ser apodícticos y constituir por ende base suficiente para que el comandante que imponga la medida y/o los organismos de inteligencia promuevan el proceso penal correspondiente en cumplimiento de la obligación que les impone la ley, de dar aviso a las autoridades respectivas cuando tengan conocimiento de la comisión de un ilícito.

Así las cosas, es evidente que quien se vea afectado por la medida, tiene garantizado el derecho de defensa y los demás derechos ínsitos en el concepto del debido proceso que tutela el artículo 26 de la Constitución bien sea dentro del proceso penal que se le inicie, o para el caso que éste no se instaure, acudiendo a los tribunales administrativos si considera que se le ha lesionado su derecho.

Estima la Corte que el Decreto en revisión no viola ninguna norma constitucional en general, ni en particular el artículo 132, pues en este último caso los asuntos de que conoce el Consejo Nacional de Estupefacientes no son del todo afines con los que incumbe al Ministerio de Defensa; por tanto sólo a través de un Decreto Legislativo que se apoye en las atribuciones del 121 puede el Presidente asignarle la materia que contempla el literal F) del artículo 91 de la Ley 30 de 1986 al Ministro de Defensa y no por medio de un simple reglamento constitucional dictado en desarrollo de las facultades del artículo 132.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo examen de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declárase EXEQUIBLE el Decreto Legislativo número 3667 de 1986 "por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público".

Cópiese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

DOTACION OPORTUNA A LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD, DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, TENDIENTES AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO TURBADO. LIBERACION DE CARGAS FISCALES AL MATERIAL DE GUERRA. DECRETO DE ESTADO DE SITIO.

Constitucional el Decreto número 3670 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 13.

Referencia: Expediente número 1561 (234-E)

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo número 3670 de 1986 "Por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público".

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobado por Acta número 6.

Bogotá, D. E., febrero veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El Secretario General de la Presidencia de la República remitió a la Corte, para su revisión constitucional y en la misma fecha de su expedición, el Decreto Legislativo número 3670 del 19 de diciembre de 1986, en cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional y por el artículo 13 del Decreto número 432 de 1969.

Para los efectos de la intervención ciudadana se dispuso la fijación en lista y el traslado al Procurador General de la Nación para su concepto, todo lo cual se cumplió en término.

II. Texto del Decreto

El texto del Decreto que se revisa es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 3670 DE 1986
(diciembre 19)

"Por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público

"El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

"Que para conjurar la grave situación de orden público presentada en el país por la acción reiterada de grupos armados, el Gobierno Nacional mediante Decreto número 615 de 1984, declaró en Estado de Sitio parte del Territorio Nacional, extendiéndolo a todo el territorio de la República mediante el Decreto número 1038 del mismo año;

"Que las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado deben dotarse en forma oportuna de equipos y materiales para el cumplimiento de sus funciones;

"Que con tal objeto, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad y los Fondos Rotatorios de estos sectores administrativos suscribieron contratos para la adquisición de material de guerra o reservado;

"Que mientras se hacían las adquisiciones se logró alcanzar el nivel de equilibrio de la tasa de cambio y se crearon nuevos gravámenes sobre las importaciones y los bienes importados, factores por los cuales se presentan insuficiencias presupuestales que no permiten despachar para el consumo los bienes adquiridos;

"Que en las actuales circunstancias, debe primar la necesidad de la acción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tendiente al restablecimiento del orden público y seguridad nacional sobre la del arbitrio fiscal del Estado que supone el pago por su parte de derechos y gravámenes de los cuales es, en última instancia, beneficiario;

"Que por todo lo anterior es indispensable suspender aquellas disposiciones que actualmente impiden la inmediata dotación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, liberando las apropiaciones presupuestales existentes para el pago del valor y los gravámenes de importaciones que lleguen a ser necesarias,

DECRETA:

"Artículo 1° Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio la totalidad o parte del Territorio Nacional, el material de guerra o reservado a que se refiere el Decreto número 695 de 1983 a excepción de los numerales 5, 6, 10 y 12 y 'combustibles, lubricantes y grasas' de que trata el artículo 1°, destinado a la Nación –Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad–, los Fondos Rotatorios adscritos a estos organismos y el Hospital Militar Central, que se encuentre contratado en la fecha de publicación de este Decreto y pendiente de nacionalización, será despachado en forma inmediata para

consumo libre del pago de la totalidad de los derechos de Aduana y demás gravámenes.

"Artículo 2° El despacho para consumo requerirá una certificación expedida por el Subdirector de Ejecución Presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que al comprar el bien respectivo existían apropiaciones presupuestales suficientes, así como una constancia otorgada por el Ministro de Defensa Nacional o el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, según el caso, de que los elementos son necesarios en forma inmediata para preservar el orden público y la seguridad nacional.

"La existencia de recursos provenientes de los Fondos Internos de que trata el Decreto número 2350 de 1971, será certificada por el Comandante General de las Fuerzas Militares o por el Ministro de Defensa Nacional para los gastos ordenados por la Dirección General de la Policía Nacional.

"Artículo 3° El material que con el mismo objeto se contrate a partir de la vigencia del presente decreto, quedará cobijado por el tratamiento aquí establecido, mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio la totalidad o parte del territorio nacional.

"Artículo 4° Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase

"Dado en Bogotá, D. E., a 19 de diciembre de mil novecientos ochenta y seis

VIRGILIO BARCO

"Ministro de Gobierno y encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, *Fernando Cepeda Ulloa;* Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo;* Ministro de Defensa Nacional, General *Rafael Samudio Molina;* Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* Ministro de Trabajo y Seguridad Social, *José Name Terán;* Ministro de Salud, *César Esmeral Barros;* Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo;* Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio,* Ministro de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse,* Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez;* Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo Correa".*

El Decreto lleva la firma del Presidente de la República y de todos los Ministros.

Fijado en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte, no se conoció ningún escrito de impugnación contra la norma que se revisa.

III. Concepto del Procurador General de la Nación

Dentro del término correspondiente, la vista fiscal suscrita por el Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar exequible en su integridad el Decreto número 3670 de 1986, fundado en el razonamiento que sigue:

1. Que como el ordenamiento que se revisa tiene vinculación conducente con las situaciones que obligaron a dictar el Decreto número 1038 de 1984, se reconoce la relación directa de conexidad entre la norma que declara turbado el orden público y establece el Estado de Sitio para todo el territorio nacional, y el Decreto número 3670 de 1986.

2. Que lo anterior se hace evidente por la existencia de grupos armados y de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico y por la comisión de actos terroristas en las ciudades, que ocasionaron zozobra en la población y notorias bajas en las Fuerzas Armadas y civiles.

3. Que los complejos trámites de nacionalización de mercancías importadas, en especial de los elementos de guerra señalados por el Decreto, al igual que el pago de los impuestos que dicha importación ocasiona, dificultan e impiden al gobierno recibir oportunamente los materiales necesarios para actuar en forma diligente y ágil en el propósito de acabar las causas que originaron la declaratoria del Estado de Sitio.

4. Los artículos 1°, 2° y 3° de la norma que se revisa, no infringen la Constitución Nacional porque el objetivo que pretenden es el restablecimiento de la normalidad, lo que tiene obvia relación con las causas invocadas en el Decreto número 1038 de 1984. Además, la disposición se encuentra en el ámbito de las facultades que le corresponden al gobierno por el artículo 121 de la Carta Fundamental.

IV. Consideraciones de la Corte

1. *La Competencia*

De conformidad con el parágrafo del artículo 121 y con el artículo 214 de la Constitución Nacional, corresponde a la Corte Suprema de Justicia el control de constitucionalidad de los decretos expedidos por el Presidente de la República, dentro de los precisos límites del Estado de Sitio. Por tratarse de un decreto expedido en ejercicio de las facultades señaladas, la Corte procede a revisar la constitucionalidad del Decreto número 3670 de 1986.

2. *Los Requisitos Formales*

El Decreto Legislativo número 3670 de 1986 fue expedido por el Gobierno Nacional con fundamento en las facultades del artículo 121 de la Constitución y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984. El Decreto que se somete a examen ha sido además firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros.

El Decreto número 3670 de 1986 rige, según lo dispone el artículo 4° del mismo, a partir de la fecha de su publicación, la que se efectuó el 19 de diciembre de 1986, en el "Diario Oficial" número 37739. De conformidad con la parte final del mismo artículo 4°, se entiende con claridad que la norma es transitoria y no tiene vocación de permanencia pues, como lo indica, sólo suspende las disposiciones que le sean contrarias sin derogarlas.

Además, el carácter transitorio de esta norma se desprende del enunciado con el que la condicionan los artículos 1° y 3° de la misma y que consiste en su aplicación

"mientras subsista turbado el orden público y en Estado de Sitio la totalidad o parte del territorio nacional".

El Decreto número 3670 cumple así con las exigencias formales señaladas para su validez constitucional de conformidad con el artículo 121 de la Carta. Son constitucionales en consecuencia, por este aspecto los artículos 1°, 3° y 4° del Decreto en cuestión.

3. *La Conexidad*

Encuentra la Corte que existe conexidad entre las medidas de la norma que revisa y el Decreto número 1038 de 1984, ya que el propósito de dotar en forma oportuna a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, de equipos y materiales para el cumplimiento de sus funciones, tiene como objeto atender las necesidades de la acción de dichas fuerzas, tendientes al restablecimiento del orden público turbado. En tanto que para el propósito del restablecimiento del orden público en todo el territorio nacional, la dotación oportuna de las Fuerzas Armadas y de Seguridad constituye un procedimiento que expresa la relación de conexidad exigida para las normas que desarrollen la declaratoria del Estado de Sitio, resulta constitucional el Decreto número 3670 de 1986.

Es preciso advertir que el concepto de material de guerra o reservado, está determinado en el Decreto número 0695 de 1983 (marzo 8) en tal forma que las autorizaciones que contiene la norma que se revisa guardan el preciso marco de referencia, destinado exclusivamente a dotar al Ejecutivo de los instrumentos necesarios y adecuados para el restablecimiento y conservación del orden público nacional. En este sentido el Decreto número 0695 de 1983 estableció en sus artículos 1° y 2° lo que se entiende por material de guerra o reservado para la defensa nacional y por consiguiente de uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional así:

"Artículo 1° Considéranse como armas, municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo, los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional:

"1. Sistemas de armas y armamento mayor y menor de todos los tipos, modelos y calibres con sus accesorios, repuestos y los elementos necesarios para la instrucción de tiro, operación, manejo y mantenimiento de los mismos.

"2. Todo tipo de naves, artefactos navales y aeronaves destinadas al servicio del Ramo de Defensa Nacional, con sus accesorios, repuestos y demás elementos necesarios para su operabilidad y funcionamiento.

"3. Municiones, torpedos y minas de todos los tipos, clases y calibres para los sistemas de armas y el armamento mayor y menor que usan las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

"4. Material blindado y de transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo con sus accesorios, repuestos, combustibles, lubricantes y grasas, necesario para el transporte de personal y materiales.

"5. Semovientes de todas las clases y razas destinados al mantenimiento del orden público interno o externo.

"6. Materiales explosivos y piroctécnicos, materias primas para su fabricación y accesorios para su empleo.

"7. Paracaídas y equipos de salto para unidades aerotransportadas, incluidos los necesarios para su mantenimiento.

"8. Elementos, equipos y accesorios contra motines.

"9. Los equipos de ingenieros de combate con sus accesorios y repuestos.

"10. Equipos de bucería y de voladuras submarinas, sus repuestos y accesorios.

"11. Equipos de detección aérea, de superficie y submarina sus accesorios, repuestos, equipos de sintonía y calibración.

"12. Elementos para control de incendios y de averías, sus accesorios y repuestos.

"13. Herramientas y equipos para pruebas y mantenimiento del material de guerra o reservado.

"14. Equipos y demás implementos de comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

"15. Otros elementos aplicables al servicio y fabricación del material de guerra o reservado.

"Artículo 2° Por su destinación a la defensa nacional y al uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se consideran material de guerra o reservado los equipos de hospitales militares y de sanidad en campaña, y equipos militares de campaña.

"Artículo 3° ....."

Al permitir el artículo 1° del Decreto revisado, el despacho en forma inmediata para consumo, libre del pago de la totalidad de los derechos de aduana y demás gravámenes nacionales, de los materiales de guerra o reservados, a los que se refiere el Decreto número 0695 de 1983, con las precisas excepciones previstas, se dispone de manera específica la liberación temporal de tributos y de arbitrios fiscales por la vía de la suspensión de los mismos.

Dentro de las facultades excepcionales que contiene el artículo 121 de la Constitución Nacional está comprendida la de suspender la vigencia de normas que consagran los derechos de aduana y demás gravámenes de orden nacional. En consecuencia, la liberación de dichas cargas fiscales, siempre y cuando el uso de los materiales indicados se destine para atender el restablecimiento del orden público y para la seguridad nacional, agiliza el despacho oportuno de los materiales señalados y satisface la necesidad urgente que exigen las medidas de excepción que se revisan.

El artículo 2° establece, también con carácter provisional, normas de contenido administrativo íntimamente vinculadas con las disposiciones del artículo anterior,

aplicables al tratamiento expedido que se prevé para los mismos materiales y para los expresados fines, tendientes a permitir la demostración de la existencia de apropiaciones presupuestales suficientes y el carácter de urgente y de inmediata necesidad del despacho; resulta, pues, constitucional y así habrá de declararse.

El artículo 3° en cuestión contiene una previsión temporal para la contratación que en adelante, y mientras subsista el Estado de Sitio, recaiga sobre los objetos señalados por el artículo 1° y afectados a fin de atender la necesidad urgente de dotar a las Fuerzas Militares y de Seguridad Nacional de los elementos propios de su actividad para restablecer el orden público, haciéndola expedita aunque no desprovista de las demás formalidades legales. Se limita pues a prever una excepción a la norma que establece el pago de los derechos de aduanas y demás gravámenes cuando fuere preciso su despacho inmediato para consumo de las Fuerzas Militares y de los organismos de seguridad del Estado; además, se establece un mecanismo excepcional según el cual se debe demostrar, en el caso de la urgencia de su despacho para el consumo, la existencia previa de la apropiación presupuestal suficiente con certificación suscrita por el Subdirector de Ejecución Presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como el carácter de inmediata y urgente necesidad de tales elementos para preservar el orden público y la seguridad nacionales, mediante constancia expedida por el Ministro de Defensa Nacional o, según el caso, por el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad.

Las previsiones constitucionales para el gasto y la ordenación presupuestal son normas imperativas de superior categoría que no pueden ser desconocidas por ningún precepto legal inferior; en consecuencia, el tratamiento que para la contratación de material de guerra o reservado con el objeto de atender el fin perseguido por la norma que se revisa y que en ella se establece, no conduce ni puede conducir al desconocimiento del régimen constitucional de la Hacienda Pública, ni de las demás disposiciones que sobre su manejo contiene la Constitución Nacional.

Las excepciones previstas hacen referencia exclusivamente a la aplicación de las normas sobre derechos de aduana y demás gravámenes y a los procedimientos administrativos para la demostración de la apropiación presupuestal suficiente y la naturaleza de la urgencia del despacho para el consumo, tanto para las operaciones contractuales ya celebradas o por celebrarse en adelante y sólo mientras subsista turbado el orden público. En consecuencia, no encuentra la Corte violación constitucional alguna en tales disposiciones.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo examen de su Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarar CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo número 3670 de 1986, "por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas.*

MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA COMERCIALIZACION, LOCOMOCION Y REGISTRO DE MOTOCICLETAS. *ESTADO DE SITIO*. OBLIGACION CONSTITUCIONAL QUE TIENE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CONSERVAR EL ORDEN PUBLICO Y DE RESTABLECERLO DONDE FUERE TURBADO Y ADEMAS DEL DEBER QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DE PROTEGER LA VIDA DE LOS GOBERNADOS SUPREMA FINALIDAD DEL EJERCICIO DEL PODER PUBLICO.

Exequible el Decreto número 3669 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 14.

Referencia: Expediente número 1560 (233-E)

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo número 3669 de 1986.

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Acta número 6.

Bogotá, D. E., febrero veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El Secretario General de la Presidencia de la República remitió a la Corte el Decreto Legislativo número 3669 de 1986, en la misma fecha de su expedición, para su revisión constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 121 de la Constitución y en el artículo 13 del Decreto número 432 de 1969.

Para los efectos de la intervención ciudadana se dispuso la fijación en lista del negocio y el traslado al Procurador General de la Nación para concepto, obtenido el cual, corresponde a la Corte proferir la decisión correspondiente, previas las siguientes consideraciones:

II. Texto del Decreto

El texto literal del decreto que se revisa es como sigue:

DECRETO NUMERO 3669 DE 1986
(diciembre 19)

"Por el cual se dictan normas restrictivas sobre la comercialización, locomoción y registro de motocicletas y se modifican los Decretos números 1030 y 1540 de 1985.

"El Presidente de la República de Colombia en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984,

D E C R E T A:

"Artículo 1° Mientras se halle turbado el orden público y en estado de sitio toda la República, las agencias vendedoras o distribuidoras de motocicletas tendrán la obligación de informar al Comando de Estación o Subestación de Policía de la Jurisdicción, a más tardar dentro de las 24 horas hábiles siguientes, sobre la venta de cualquier vehículo de este tipo, suministrando las características e identificación numérica de éste y los datos del comprador.

"Artículo 2° Prohíbese la venta de motocicletas a particulares, con un cilindraje mayor de 125 cc.

"Se exceptúan de la presente prohibición, las destinadas a uso comerciales como: la distribución o repartición de víveres y mercancías, y a competencias deportivas, en cuyo caso estarán debidamente registradas a nombre de la casa comercial propietaria o de la liga o club deportivo respectivo.

"Parágrafo. Cuando la motocicleta esté destinada a usos comerciales o actividades deportivas, sus propietarios quedarán obligados a que el vehículo lleve los símbolos o colores que permitan identificar la entidad comercial o deportiva a que pertenece o esté afiliado.

"Artículo 3° Las Secretarías de Tránsito y Transporte de los departamentos y las inspecciones de Tránsito Municipal, estarán en la obligación de informar a los Comandos de Estación o Subestación de Policía de su jurisdicción, dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes, las nuevas matrículas o traspasos que se realicen en sus dependencias respecto de motocicletas, indicando las características del vehículo y los datos de su propietario.

"Parágrafo. El incumplimiento por parte de las autoridades a que se refiere este artículo, constituirá causal de mala conducta, sancionable con la destitución del cargo.

"Artículo 4° Los conductores de motocicletas que requieran desplazarse a departamento diferente a aquél en que se hallen matriculadas deberán proveerse previamente de un permiso para hacerlo, que será expedido por la Inspección de Tránsito del lugar de residencia, en el cual se anotará el motivo del desplazamiento y la fecha de regreso a su lugar de origen, así como el nombre y documento del titular del permiso.

"Parágrafo. Las motocicletas matriculadas en el Distrito Especial de Bogotá, podrán circular libremente en él, y en el departamento de Cundinamarca.

"Artículo 6° La violación de las normas contenidas en los artículos 1°, 2°, 4° y 5°, constituyen contravención que se sancionará en los términos establecidos en el artículo 3° del Decreto número 1540 de 1985 y por las autoridades y procedimientos señalados en el mismo Decreto.

"Artículo 7° El presente Decreto rige desde su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

"Comuníquese, publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá a diecinueve (19) de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (1986).

"El Ministro de Gobierno y encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, *Fernando Cepeda Ulloa;* el Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* el Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo;* El Ministro de Defensa Nacional, General *Rafael Samudio Molina;* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* el Ministro de Trabajo, *José Name Terán;* el Ministro de Salud, *César Esmeral Barros;* el Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo;* el Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio,* el Ministro de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse,* el Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez,* el Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo".*

III. Concepto del Procurador General de la Nación

El Jefe del Ministerio Público considera que el Decreto Legislativo número 3669 de 1986 se adecua a la Constitución, con excepción del artículo 2° que a su juicio debe declararse inexequible.

La conclusión de la vista fiscal se apoya en los siguientes argumentos:

1: El Decreto cumple con las formalidades que exige la Carta para su expedición y sus efectos son transitorios en cuanto sólo suspende las normas que le sean contrarias.

2. Sobre la relación de conexidad expresa que al modificar el Decreto en revisión los Decretos números 1030 y 1540 de 1985, resulta claro que le son aplicables los considerandos del primero que se refieren a la utilización de motocicletas para la comisión de homicidios y que habiendo sido declarado exequible por la Corte, el que ahora se confronta por regular las mismas materias, es igualmente exequible con excepción del artículo 2°.

Enfatiza que la conexidad o relación del artículo 2° con las causas que determinaron la implantación del estado de sitio es tan solo aparente pues, y no "necesaria" y además no es una medida que conduzca al restablecimiento del orden público, ya que aunque la maniobrabilidad de esos vehículos los hace útiles para perpetrar atentados "el que se prohíba la venta de motos del cilindraje allí indicado, no puede considerarse como una medida que vaya a reducir, siquiera parcialmente el riesgo de

su uso para fines criminales, porque no puede perderse de vista que en la actualidad se encuentran en poder de particulares miles de motos de igual o mayor cilindraje" que en cualquier momento pueden ser destinados para la comisión de nuevos crímenes.

Advierte así mismo que la excepción prevista en el artículo 2° hace ineficaz la medida y pone de manifiesto la falta de conexidad puesto que dado su carácter simplemente enunciativo permite que cualquier persona pueda obtener motos de alto cilindraje para actividades ilícitas con el pretexto de su uso comercial o deportivo. De lo que colige que la medida no conduce al restablecimiento del orden público.

3. Considera que los artículos 1°, 3° y 4° son exequibles pues no constituyen violación a las libertades consagradas en el Estatuto Superior, ya que tan solo establecen mecanismos de acción preventiva que permiten llevar un estricto control sobre la comercialización, registro y movilización de motocicletas que buscan proteger a las personas de posibles atentados en bien de la tranquilidad ciudadana.

4. Finalmente sobre el artículo 6° que eleva a conductas contravencionales la infracción de lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° y se remite al Decreto número 1540 de 1985 en cuanto al trámite, sanción y autoridades encargadas de su juzgamiento, considera que dicho procedimiento no desconoce el derecho de defensa del eventual acusado por lo cual no abriga dudas sobre su exequibilidad, con mayor razón si se tiene en cuenta que este Decreto fue declarado exequible por la Corte mediante sentencia de julio 9 de 1985.

IV. Consideraciones de la Corte

Primera. *La Competencia.*

Por tratarse de un Decreto expedido por el Presidente en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución, a la Corte le corresponde su control oficioso de constitucionalidad.

Segunda. *Requisitos formales del acto materia de este proceso.*

El Decreto lleva la firma del Presidente y todos sus ministros cumpliendo así los requisitos formales prescritos en el artículo 121 de la Carta. De otro lado es desarrollo del Decreto número 1038 de 1984 por el cual se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional; su vigencia es transitoria de acuerdo con lo dispuesto en sus artículos 1° y 6° que establecen que las medidas por él adoptadas regirán mientras se halle turbado el orden público y en estado de sitio toda la República y sólo suspende las disposiciones que le sean contrarias.

Tercera. *La Conexidad.*

Según reza su acápite, el Decreto contiene medidas restrictivas de la comercialización, locomoción y registro de motocicletas, modifica también los Decretos Legislativos números 1030 y 1540 de 1985 referidos al tránsito de dichos vehículos y para el examen de su conexidad con el Decreto número 1038 de 1984 conviene señalar que los Decretos Legislativos que dice modificar fueron declarados exequibles en su integridad por esta Corporación, mediante sentencias de mayo 16 y julio 9 de

1985, por haber encontrado que las medidas que dictó el Presidente entonces tenían clara relación de conexidad con los factores que determinaron la extensión del estado de sitio a todo el territorio nacional, toda vez que dentro de la causa que invocó el Gobierno figuran "hechos de violencia provocados por las circunstancias antes mencionadas" que "han ocasionado sensibles bajas en el personal de las Fuerzas Militares y de Policía lo mismo que víctimas en la población civil" y además que "el uso de motocicletas por terroristas o por sicarios –es decir, por asesinos remunerados– que se hizo en el crimen de que fue víctima el doctor Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984, cuando desempeñaba el Ministerio de Justicia y que constituyó la causa que unida a las demás indicadas en el Decreto número 1038 determinó finalmente la declaración del estado de sitio en todo el territorio colombiano, han venido continuando notoriamente con posterioridad a ese crimen, que por sus características continúa conmoviendo la sensibilidad nacional".

Las consideraciones anteriores plasmadas en las sentencias citadas resultan aplicables en su totalidad a la normatividad sometida ahora al juicio de la Corte como quiera que sus normas buscan establecer controles sobre las ventas, matrículas, traspaso y circulación de motocicletas que permitan la fácil identificación de sus propietarios y la vigilancia respecto de aquellas que se desplacen fuera del territorio departamental en que están matriculadas.

El colaborador fiscal considera que el artículo 2° acusa indiscutible falta de conexidad con los motivos que dieron lugar a la declaratoria de estado de sitio; afirmación que hace con fundamento en un juicio de valor que se contrae más al análisis de la efectividad real de la medida, que a su conducencia al restablecimiento del orden público.

"La Corte no comparte la apreciación del Procurador pues considera que la prohibición contenida en la norma citada guarda relación con las causas invocadas para la declaración de turbación del orden y que aún continúan, agravando el estado de alarma ciudadana, puesto que los atentados contra la vida e integridad de las personas siguen ocurriendo, valiéndose los delincuentes del uso de moticicletas de alto cilindraje que por la potencia de sus motores, unida a las posibilidades de maniobrabilidad que ofrecen dichos vehículos, los hace el medio más apto para el ataque sorpresivo y la consiguiente huida.

Tampoco es de recibo la argumentación según la cual la medida no es conducente al restablecimiento del orden público, sobre la base de la incertidumbre de sus resultados pues éstos son aspectos que escapan a la intención del gobierno y al examen de la Corte, ya que la constitucionalidad de un precepto no puede fundarse en consideraciones de orden circunstancial, que son las que a la postre vendrían a determinar que la disposición alcance realmente los objetivos que se propuso el Ejecutivo. Si este tipo de razonamiento tuviere relevancia jurídica en la revisión oficiosa de los decretos de estado de sitio, tendría esta Corporación que aplazar su decisión por un término prudencial que le permitiera valorar inequívocamente, si los preceptos son o no eficaces para el retorno a la normalidad. La verificación que hace la Corte se circunscribe a examinar si las disposiciones están orientadas a superar la crisis, esto es, si de ellas puede esperarse razonablemente que se contrarresten las causas de perturbación, con independencia de sus resultados reales.

No se configura entonces, en el caso presente, la inconstitucionalidad que se sugiere en la vista fiscal pues lo normado en el artículo 2° no sólo está relacionado con las causas de perturbación sino que propende al restablecimiento del orden público, en cuanto restringe la venta de motocicletas de alto cilindraje a los particulares y prevé vigilancia especial para los casos en que se permite su comercialización, ya que es un hecho cierto que los controles previstos en la legislación ordinaria y los adoptados en las normas de excepción expedidas anteriormente no han sido suficientes para prevenir nuevos atentados, lo que explica que el gobierno se haya visto obligado a tomar medidas más severas para asegurar la defensa del orden público.

De otra parte, analizado el artículo 2° frente a otras disposiciones del ordenamiento constitucional, no se advierte que las restricciones que en él se imponen conculquen las garantías individuales que tutelan la propiedad y la libre empresa, pues dentro de nuestro estado de derecho el bien común es superior al de las personas individualmente consideradas y por lo tanto en caso de conflicto entre éstos, prevalecen los intereses generales o sociales sobre los particulares.

Cuarta. *La constitucionalidad de las normas restantes del Decreto número 3669 de 1986.*

El artículo impone a las agencias vendedoras y distribuidoras de motocicletas la obligación de informar sobre cualquier venta de estos vehículos al Comando de Estación o Subestación de Policía, debiendo suministrar las características que permitan la identificación de éstos y los datos relativos al comprador, lo cual no limita en manera alguna la actividad comercial sino la somete a control con fines policivos debido a su frecuente utilización para la comisión de atentados contra la vida de las personas.

El artículo 3° erige en falta disciplinaria el incumplimiento del deber a que están obligadas las secretarías e inspecciones de Tránsito de informar sobre los traspasos de motocicletas, la cual será sancionable con destitución del cargo. Aunque la norma no señala un procedimiento específico para la imposición del correctivo disciplinario, como lo hace notar el Procurador, no existe infracción del debido proceso pues ha de entenderse que la determinación de la falta y su sanción debe hacerse de acuerdo con las normas legales que rigen en esta materia para los empleados públicos. Por lo demás la disposición se basa en el artículo 20 de la Constitución que permite a la ley deducir responsabilidades a los funcionarios públicos "por extralimitación de funciones, o por omisión en el ejercicio de éstas".

El artículo 4° constituye un límite a la libertad de locomoción de los motociclistas, pues señala que éstos deben obtener permiso de las autoridades para desplazarse a territorio de departamento diferente a aquél en que están matriculadas, a fin de conocer el motivo del viaje y de controlar la fecha de su regreso al lugar de origen. Esta restricción sin embargo se considera adecuada a las circunstancias de orden público y al igual que las demás normas del decreto que se revisa, es cabal desarrollo de la obligación constitucional, que tiene el Presidente conforme a los artículos 120-7 y 121 de conservar el orden público y de restablecerlo donde fuere turbado y además del deber que tienen las autoridades de proteger la vida de los gobernados suprema finalidad del ejercicio del poder público.

El artículo 6º tipifica como contravención, la infracción de las normas contenidas en los artículos 1º, 2º, 4º y 5º, a pesar de que el Decreto carece de artículo 5º, lo cual si bien denota descuido en su expedición no incide en manera alguna sobre su constitucionalidad. Indica el artículo 6º que la violación de las prohibiciones y la omisión de los deberes que allí se señalan se sancionará conforme al artículo 3º del Decreto número 1540 de 1985 y por las autoridades y conforme al procedimiento que en él se establece, vale decir, que la pena es de multa de cinco mil a cincuenta mil pesos y el Alcalde es el funcionario competente para conocer y decidir sobre la contravención mediante resolución motivada, previos descargos y práctica de pruebas, en salvaguardia de los principios de la legalidad y del debido proceso que garantiza la Constitución (artículos 23, 26 y 28). Procedimiento y competencia que la Corte halló ajustados al Estatuto Superior mediante sentencia de julio 9 de 1985 al juzgar la constitucionalidad del Decreto número 1540 de 1985.

De acuerdo con el análisis anterior no encuentra la Corte que el Decreto bajo examen quebranta alguna norma de la Carta.

V. Decisión

La Corte Suprema de Justicia en –Sala Plena– previo examen de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declárase EXEQUIBLE el Decreto número 3669 de 1986 "por el cual se dictan normas restrictivas sobre la comercialización, locomoción y registro de motocicletas y se modifican los Decretos números 1030 y 1540 de 1985".

Cópiese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

REVISION, REFORMA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA JUDICIAL. CODIGO ES UN CONJUNTO COHERENTE Y ARMONICO DE DISPOSICIONES SOBRE UNA MATERIA, QUE SE ORDENA EN UN SOLO CUERPO. ESTATUTO ES EL REGIMEN JURIDICO QUE GOBIERNA UNA DETERMINADA ACTIVIDAD O UN RAMO ESPECIALIZADO, EL CUAL PUEDE ESTAR INTEGRADO POR NORMAS DISTINTAS DE LEYES, DECRETOS U OTROS TEXTOS JURIDICOS, SIN QUE DEBAN NECESARIAMENTE ESTAR COMPRENDIDAS EN UN SOLO TEXTO. LA PROTECCION AL TRABAJO, LA AUTONOMIA DE LA RAMA JURISDICCIONAL. FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

Inexequibles las siguientes normas del Decreto número 2400 de 1986: Los artículos 1 a 72, inclusive, de los Capítulos I a VI; los artículos 79 y 81 del capítulo VII; los artículos 93 y 106 del capítulo VIII; el artículo 112 literal K, del capítulo X; los artículos 159 y 161 del capítulo XIII; los artículos 176 a 181 del capítulo XV, los artículos 184 y 185 del capítulo XVI, los artículos 199 y 200 del capítulo XVIII, los artículos 206, 207, 208, 209, 212 y 213 del capítulo XIX.
Declara exequibles las demás disposiciones.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 15.

Referencia: Expediente número 1534

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto número 2400 de 1986, "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento la carrera judicial".

Demandante: *Carlos Alberto Montoya Gómez.*

Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

(Aprobada por Acta número 7 de 3 de marzo de 1987)

Bogotá, D. E., marzo tres (3) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

El ciudadano Carlos Alberto Montoya Gómez, en ejercicio del derecho conferido por el artículo 214 de la Constitución, ha demandado ante la Corte el texto íntegro del Decreto-ley número 2400 de 1986, "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento la carrera judicial.

Cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados por el Decreto número 0432 de 1969, se procede a decidir de fondo.

El Decreto acusado, expedido en uso de las facultades extraordinarias conferidas al gobierno según la Ley 52 de 1984, es de este tenor:

"DECRETO NUMERO 2400 DE 1986
(julio 29)

Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial

El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 52 de 1984, y oído el concepto de la Comisión Asesora creada en el artículo 3° de la mencionada Ley,

D E C R E T A:

CAPITULO I

"Empleos de libre designación y de carrera judicial

"Artículo 1° Todos los cargos de la rama jurisdiccional son de carrera y deben ser provistos por el sistema de mérito contemplado en el presente Decreto, con excepción de los siguientes, los cuales son de libre designación:

- "Magistrado de la Corte Suprema de Justicia;
- "Consejero de Estado;
- "Magistrado del Tribunal Disciplinario;
- "Director Nacional de Instrucción Criminal;
- "Visitador Nacional de Instrucción Criminal;
- "Director Seccional de Instrucción Criminal;
- "Auxiliar de magistrado;
- "Abogado asistente;
- "Chofer.

"Los empleos de libre designación no son provistos por el sistema de mérito pero en todo caso, la autoridad nominadora deberá exigir el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados para su desempeño.

"Artículo 2° Para efectos del presente Decreto entiéndese como funcionarios judiciales los magistrados y jueces de la República. Las demás personas que ocupen cargos en la rama jurisdiccional tienen el carácter de empleados.

CAPITULO II

"Clases de nombramiento

"Artículo 3° El ingreso al servicio de la administración de justicia se hace por nombramiento ordinario, para los cargos de libre designación y por nombramiento en período de prueba, en propiedad o en provisionalidad, para los de carrera.

"Artículo 4° Al proveer los empleos de libre designación, la autoridad nominadora deberá tener en cuenta en todo caso, que las personas en quienes recaiga el nombramiento ordinario reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de los mismos. La confirmación sólo será exigida cuando se trate de proveer empleos de libre designación o en el caso de nombramiento provisional de funcionario judicial en empleo de carrera.

"Artículo 5° El nombramiento en período de prueba para quien ha de tener la calidad de empleado judicial únicamente podrá recaer en persona seleccionada mediante el sistema de mérito.

"Artículo 6° El nombramiento en período de prueba no podrá ser inferior a dos meses ni superior a cuatro. Dentro de dicho período, el empleado judicial deberá ser calificado mensualmente por la autoridad nominadora.

"Artículo 7° No habrá período de prueba para el funcionario judicial seleccionado por el sistema de mérito.

"Artículo 8° El empleado judicial que durante el período de prueba no obtenga calificación satisfactoria de conformidad con las disposiciones del presente Decreto, dseberá ser retirado del servicio.

"Artículo 9° Una vez superado satisfactoriamente el período de prueba, el empleado judicial deberá ser nombrado en propiedad por la autoridad nominadora.

"Artículo 10. El nombramiento en propiedad otorga tanto al funcionario como al empleado judicial el derecho a la inscripción en la carrera.

"Artículo 11. La autoridad nominadora deberá enviar fotocopia auténtica del acto de nombramiento en propiedad a la Escuela Judicial, a fin de que ésta incluya al funcionario o empleado judicial en el escalafón.

"Artículo 12. Si por cualquier circunstancia no es posible proveer un empleo de carrera con personal seleccionado por el sistema de mérito, podrá proveerse mediante nombramiento provisional, cuando las necesidades del servicio lo exijan.

"Artículo 13. La autoridad nominadora, so pena de incurrir en causal de mala conducta, antes de proveer el empleo mediante nombramiento provisional, deberá solicitar a la Escuela Judicial constancia de que no existe lista de elegibles vigente para el cargo vacante.

"Artículo 14. Cuando se trate del nombramiento de un empleado judicial y la lista de elegibles no estuviere conformada o hubiere perdido su vigencia, la autoridad nominadora podrá proveer el empleo mediante nombramiento provisional, hasta la

fecha en que la persona seleccionada de la lista que suministre la Escuela Judicial tome posesión del cargo, o en su defecto hasta el vencimiento del período del nominador.

"Los funcionarios judiciales de período fijo que no puedan ser seleccionados por el sistema de mérito, para un empleo de carrera por los motivos expuestos en el inciso anterior, podrán ser nombrados provisionalmente hasta el vencimiento del respectivo período. Dicho nombramiento perderá vigencia una vez la Escuela Judicial suministre la lista de elegibles, siempre que la persona seleccionada por el sistema de mérito, haya tomado posesión del cargo.

CAPITULO III

"Carrera judicial

"Artículo 15. La carrera busca mediante la debida organización del personal al servicio de la administración de justicia, que ella se administre en forma pronta y cumplida, como lo dispone la Constitución Nacional.

"Artículo 16. La carrera tiene como finalidades inmediatas la selección y capacitación de los funcionarios y empleados al servicio de la administración de justicia, la estabilidad en el empleo, los ascensos dentro de la organización judicial, mediante el sistema de evaluación de méritos, conducta y eficiencia, el otorgamiento de estímulos, la participación de funcionarios y empleados en programas de bienestar social que les aseguren niveles decorosos de vida y el progreso, la seguridad y el sano esparcimiento de los mismos.

"Artículo 17. El ingreso a la carrera se efectuará siempre mediante concurso, para lo cual los aspirantes acreditarán sus méritos y conocimientos a través de exámenes, comprobación de títulos y experiencia, conforme a lo dispuesto en este Decreto y en los reglamentos que en desarrollo del mismo se expidan.

"Artículo 18. La promoción en la carrera se podrá efectuar mediante concurso de ascenso, curso concurso, calificación de servicios y experiencia por antigüedad en la administración de justicia, según la ponderación que a estos factores señale la Escuela Judicial, conforme al escalafón de la carrera y de acuerdo con los reglamentos que al efecto se expidan.

"Artículo 19. Con base en el sistema de mérito establecido para la promoción del personal inscrito en la carrera, la Escuela Judicial elaborará listas de elegibles para la provisión de los empleos vacantes.

"En el evento de que por cualquier circunstancia no pueda proveerse la respectiva vacante por el sistema de ascenso, deberá efectuarse concurso abierto, en el cual podrán participar personas no vinculadas a la administración de justicia.

"Artículo 20. La dirección y administración de la carrera compete a la Escuela Judicial y a su Consejo Superior, con la asesoría y coordinación del Consejo Superior de la Administración de Justicia.

"Artículo 21. El empleado judicial ingresa a la carrera cuando inicia el período de prueba y se considera inscrito en el respectivo escalafón, una vez se efectúe el nombramiento en propiedad por la autoridad nominadora.

"Artículo 22. El funcionario judicial ingresa a la carrera cuando ha sido designado mediante nombramiento en propiedad, previa selección por el sistema de mérito.

CAPITULO IV

"Proceso de selección

"Artículo 23. La selección para el ingreso a la carrera judicial se hará siempre mediante concurso abierto. Los aspirantes que reúnan los requisitos mínimos para concursar acreditarán sus méritos y conocimientos a través de medios que garanticen su idoneidad para el desempeño del cargo. La selección se hará con base exclusiva en el mérito.

"Artículo 24. El proceso de selección tiene por objeto:

"a) Garantizar a la administración de justicia la mejor selección del personal a su servicio;

"b) Promover el ingreso al servicio y el ascenso a cargos de nivel superior, por el sistema de mérito;

"c) Ofrecer igualdad de oportunidades a los aspirantes a ingresar al servicio de la administración de justicia.

"Artículo 25. El proceso de selección comprende las siguientes etapas:

"a) Reclutamiento;

"b) Concurso;

"c) Período de prueba.

"Artículo 26. El reclutamiento tiene por objeto convocar a quienes reúnan los requisitos para desempeñar empleos en la administración de justicia. El proceso de reclutamiento se inicia con el aviso de convocatoria de concurso. La Escuela Judicial deberá hacer la divulgación de la convocatoria a través de los medios de comunicación más idóneos.

"Artículo 27. La convocatoria la hará la Escuela Judicial con no menos de treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha señalada para la realización del concurso. Dicho término podrá prorrogarse hasta por otro tanto, a juicio de la Escuela Judicial, y sólo por motivos que lo justifiquen.

"Artículo 28. La iniciación de las pruebas del concurso no podrán efectuarse antes de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria.

"Artículo 29. El proceso de convocatoria para todo concurso se efectuará en dos fases.

"En la primera deberá indicarse:

"a) La denominación del empleo que se va a proveer;

"b) Su ubicación dentro de la rama jurisdiccional;

"c) El lugar de trabajo, cuando sea necesario;

"d) La remuneración mensual;

"e) Las funciones del empleo;

"f) Los requisitos que deben llenar los aspirantes;

"g) El lugar y la fecha en que se llevará a cabo el concurso;

"h) La clase de pruebas o medios de selección que van a aplicarse y el puntaje mínimo requerido para su aprobación;

"i) La documentación requerida para la participación en el concurso;

"j) El sitio y la fecha de recepción de inscripciones.

"En la segunda fase, se informará a los aspirantes que reúnan los requisitos mínimos exigidos, su derecho a participar en el concurso y se les proporcionará la información complementaria sobre la realización del mismo.

"Artículo 30. La convocatoria es norma reguladora de todo concurso, obliga tanto a la Escuela Judicial como a los convocados y su contenido en cuanto a denominación del cargo, condiciones de trabajo, requisitos, documentos exigidos y características del concurso, no podrá cambiarse una vez iniciada la inscripción de los aspirantes. La modificación del sitio o la fecha de recepción de inscripciones se comunicará por los mismos medios con que se hizo la primera fase del proceso. De la modificación del lugar y la fecha en que se llevará a cabo el concurso deberá darse oportuno aviso directamente a los interesados.

"Artículo 31. Los aspirantes que reúnan los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria deberán inscribirse ante la Escuela Judicial. Los candidatos presentarán la documentación requerida, debidamente autenticada y diligenciada. La inscripción deberá hacerse a más tardar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria.

"Artículo 32. La Escuela Judicial revisará la documentación presentada por los aspirantes, con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos y elaborará una lista de admitidos y rechazados al concurso, indicando en este último caso los motivos del rechazo. La lista y los documentos de los rechazados estarán a disposición de éstos. A los admitidos se les avisará sobre la fecha de su presentación al concurso.

"Artículo 33. Cualquier aspirante no admitido a concurso podrá solicitar, a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que se le comunique el rechazo, la reconsideración motivada de dicha decisión ante la División de Carrera de la Escuela Judicial, la cual decidirá dentro de los dos (2) días siguientes a la

presentación de la solicitud. Contra la decisión de la División de Carrera de la Escuela Judicial no cabe recurso alguno.

"Artículo 34. El concurso puede consistir en el análisis de antecedentes, la realización de pruebas escritas, orales o de ejecución, en entrevistas, cursos de capacitación, o, en general, en cualquier otro medio que permita apreciar las calidades de los aspirantes mediante la evaluación de factores tales como sus conocimientos, aptitudes, formación profesional y experiencia de trabajo. La modalidad y características de cada concurso serán establecidas por la Escuela Judicial. En ningún caso podrá utilizarse, como única modalidad de concurso, la entrevista.

"Artículo 35. La Escuela Judicial será responsable de la realización de los concursos, de acuerdo con las siguientes reglas:

"a) Los concursantes deberán identificarse legalmente, para evitar suplantaciones;

"b) Se implantará un control estricto de las pruebas, con el fin de evitar la pérdida o divulgación del respectivo material;

"c) Las pruebas deberán contener instrucciones precisas y ser administradas correctamente.

"Artículo 36. Según el número de candidatos inscritos, que acrediten las condiciones señaladas, el concurso podrá realizarse por grupos de participantes. Para cada uno de los cuales deberá elaborarse la lista de elegibles, siempre que la convocatoria así lo determine.

"Artículo 37. Las pruebas objetivas serán elaboradas, aplicadas y calificadas por la unidad responsable del proceso de selección de la Escuela Judicial, con la asesoría del Departamento Administrativo del Servicio Civil, cuando se considere necesario.

"Las pruebas objetivas persiguen apreciar las aptitudes y conocimientos generales y específicos requeridos para desempeñar un empleo.

"Artículo 38. Las pruebas de ensayo persiguen apreciar la capacidad o habilidad con que una persona aplica los conocimientos relacionados con las funciones propias del cargo.

"Estas pruebas serán elaboradas y calificadas por la Escuela Judicial, con la asesoría del Departamento Administrativo del Servicio Civil, cuando se considere necesario. La prueba deberá contener por lo menos cinco preguntas sobre aspectos básicos relacionados con las funciones propias del cargo, cada una de las cuales será calificada separadamente, por dos calificadores en forma independiente.

"Artículo 39. El análisis de antecedentes consiste en el estudio comparativo del rendimiento y el comportamiento del candidato en otros cargos y de los títulos, estudio y experiencia debidamente acreditados que se relacionen específicamente con las funciones del empleo por proveer y que excedan los requisitos mínimos exigidos.

"Artículo 40. La entrevista tiene por objeto apreciar la personalidad del candidato y su aptitud para el desempeño del cargo que se vaya a proveer.

"Cuando en la entrevista se elimine a un aspirante, el jurado deberá dejar constancia clara e inequívoca de las razones que lo llevaron a tomar esa decisión.

"Artículo 41. La evaluación final de los cursos de capacitación que se programen como parte de un concurso podrá ser tenida en cuenta para la calificación de los aspirantes y su valor será cuantificado de acuerdo con las normas que se hayan establecido para esta modalidad de concurso.

"Artículo 42. Para la elaboración, aplicación y evaluación de las pruebas de ensayo y el análisis de antecedentes y entrevistas los jurados deberán ser preferencialmente miembros de academias, universidades públicas y organismos similares de alta trayectoria en su respectiva disciplina y su designación se hará de conformidad con el reglamento que se expida.

"No podrá ser jurado el cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de alguno de los aspirantes, o quien tenga con éste manifiesta enemistad o amistad íntima.

"Los jurados deberán rendir un informe sobre la aplicación de cada una de las pruebas, en el cual deberán figurar los factores evaluados, el sistema empleado para valorarlos, la lista de las personas que hubieren aprobado o reprobado, con las respectivas calificaciones, la fecha del informe y la firma de los jurados.

"Artículo 43. Con base en los resultados del concurso, la Escuela Judicial establecerá mediante resolución una lista de elegibles, en la cual constará:

"a) El número y la fecha de la convocatoria, y la relación de los empleos por proveer;

"b) El nombre de las personas que se inscribieron con indicación de los empleos para los cuales concursaron;

"c) El nombre de los inscritos que fueron aceptados;

"d) La relación de los participantes que no aprobaron el concurso o no se presentaron a él;

"e) La relación de los participantes que aprobaron el concurso y que están inscritos en el escalafón de la carrera.

"Artículo 44. La Escuela Judicial deberá realizar concursos de manera permanente con el fin de mantener listas de elegibles vigentes y suministrarlas a las correspondientes autoridades nominadoras cuando deban proveer vacantes.

"Artículo 45. Constituida una lista de elegibles, cuya vigencia será de dos años, la unidad de la Escuela Judicial encargada de la selección, comunicará a cada uno de los participantes el resultado del concurso y publicará copia de la correspondiente resolución en un lugar visible de la misma dependencia. La lista de elegibles deberá ser publicada a más tardar dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la última prueba, previa aprobación del Consejo Superior de la Escuela Judicial.

"Artículo 46. Las quejas de los aspirantes sobre irregularidades en los concursos o en la elaboración por los participantes de la lista de elegibles deberán presentarse a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados del concurso o de la publicación de la lista. La queja deberá fundamentarse ante el Consejo Superior de la Escuela Judicial. El Consejo decidirá dentro de los diez días siguientes al recibo de la queja, sobre la validez total o parcial del concurso o de la conformación de la respectiva lista.

"Artículo 47. No podrá hacerse uso de la lista de elegibles mientras no se decida la queja sobre irregularidad en su elaboración.

"Artículo 48. En caso de declararse nulo el concurso, éste deberá repetirse sin necesidad de una nueva convocatoria, entre los mismos participantes. Si la nulidad es parcial el concurso podrá rehacerse a partir del momento en que se presentó la irregularidad.

"Artículo 49. En los actos de creación de las regionales de la Escuela Judicial y en los convenios con entidades públicas en materia de concursos, deberá señalarse el funcionario encargado de las funciones de control y vigilancia del proceso de selección establecidas en el presente capítulo.

"Artículo 50. Durante la vigencia de las listas de elegibles, toda vacante definitiva deberá proveerse con personas que figuren en ellas, siempre que se trate del cargo para el cual se concursó. En todo caso, se seguirán estrictamente las normas que consagran derechos preferenciales para efecto de promociones.

"Artículo 51. Las vacantes transitorias serán provistas mediante encargo, con personas inscritas en el escalafón que desempeñen cargos inmediatamente inferiores, previo el lleno de los requisitos respectivos.

"Artículo 52. Será causal de retiro de una lista de elegibles el fraude comprobado en la realización del concurso, el error evidente en el proceso de selección, o la no aceptación del nombramiento sin que a juicio de la autoridad nominadora medie justa causa.

"Artículo 53. Cuando se trate de empleados, la autoridad nominadora, una vez recibida la correspondiente lista de elegibles y según el porcentaje mínimo exigido para el efecto, deberá nombrar en período de prueba a los aspirantes que hayan ocupado los cinco primeros puestos de la lista, la cual deberá actualizarse o renovarse a medida que sean designadas estas personas.

"Artículo 54. Una vez la autoridad nominadora nombre y comunique el nombramiento en propiedad o en período de prueba, el funcionario o empleado deberá manifestar su aceptación dentro de los ocho (8) días siguientes y tomar posesión del cargo dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la aceptación. Dicho término podrá prorrogarse por otro tanto por justa causa debidamente acreditada.

"Artículo 55. Tan pronto como el funcionario o empleado judicial tome posesión del empleo, la autoridad nominadora deberá dar aviso a la Escuela Judicial para la actualización de la correspondiente lista de elegibles.

"Artículo 56. La persona escogida por concurso será nombrada en período de prueba, cuando se trate de empleado judicial. El período de prueba constituye la última etapa del proceso de selección y es elemento de comprobación y complementación del mismo, el cual tendrá una duración no inferior a dos meses ni superior a cuatro.

"Artículo 57. Cuando el concurso se declare desierto, la Escuela Judicial deberá proceder a una nueva convocatoria y selección.

"Artículo 58. En caso de insubsistencia del nombramiento de un empleado judicial en período de prueba, éste deberá ser retirado de la respectiva lista de elegibles y quedará inhabilitado por el término de un año para participar en concursos para empleos de igual o superior categoría del que desempeñaba.

"Artículo 59. No habrá período de prueba cuando se trate de ascenso de empleado judicial.

CAPITULO V

"Carrera judicial y período fijo

"Artículo 60. Los nombramientos en propiedad de los funcionarios de la rama jurisdiccional se harán por las corporaciones competentes, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial, entre quienes ocupen los cinco primeros puestos, las que serán elaboradas con base en los concursos realizados para el efecto.

"Artículo 61. La elaboración de listas para los cargos de masgistrados de tribunal, se hará teniendo en cuenta que quienes las integren, además de llenar los requisitos constitucionales y legales, hayan desempeñado cualquiera de los correspondientes cargos en el respectivo departamento o que sean oriundos de él.

"Artículo 62. El Consejo Superior de la Escuela Judicial enviará a la respectiva autoridad nominadora las listas de las personas seleccionadas, por riguroso orden de mérito.

"Artículo 63. Con la debida antelación, cuando se trate de iniciación de período, el Consejo Superior de la Escuela Judicial enviará a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los tribunales superiores de Distrito Judicial, los tribunales administrativos y superior de aduanas, las listas de personas que reúnan calidades y condiciones para ser designados magistrados o jueces.

"Con miras a la integración de las salas de los tribunales, los candidatos a magistrados se clasificarán por especialidades, en las distintas disciplinas del derecho.

"En las listas para la designación de jueces, se clasificarán los candidatos por categorías y disciplinas jurídicas. Igualmente el Consejo Superior de la Escuela Judicial podrá integrar listas para grupos de juzgados, clasificados éstos según su ubicación geográfica.

"Artículo 64. Cuando se produzca una vacante, la respectiva autoridad nominadora solicitará la lista de elegibles al Consejo Superior de la Escuela Judicial, la cual le deberá ser remitida al presidente de la Corporación, quien la someterá a consideración de la entidad en pleno.

"Artículo 65. Los empleos de carrera de la Rama Jurisdiccional se proveen de la siguiente manera:

"a) Los de magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial y del Tribunal Superior de Aduanas, por la Corte Suprema de Justicia;

"b) Los de magistrado de Tribunal Administrativo, por el Consejo de Estado;

"c) Los de jueces, por designación del respectivo tribunal.

"Parágrafo 1. El Consejo Superior de la Escuela Judicial enviará con las listas de elegibles, un resumen de la hoja de vida de cada uno de los integrantes de las mismas.

"Parágrafo 2. La designación de los funcionarios vinculados a la rama jurisdiccional, por parte de las corporaciones judiciales se hará con la presencia de las dos terceras partes de sus miembros y con el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes.

"Artículo 66. Si la persona designada no acepta o no se posesiona dentro del término legal, la Corporación Judicial correspondiente elegirá su reemplazo de la misma lista de elegibles.

"Cuando por cualquier razón se desintegrare la lista de elegibles, la autoridad nominadora solicitará una nueva.

"Artículo 67. El funcionario judicial inscrito en la carrera, al vencimiento del período correspondiente, tendrá derecho a ser nuevamente designado mediante nombramiento en propiedad por la respectiva autoridad nominadora, siempre que dentro de dicho período no haya tenido calificaciones de servicio insatisfactorias o recibido sanciones disciplinarias, de conformidad con el reglamento que se expida.

"Parágrafo. Para dar efectividad a lo dispuesto en el presente artículo, el presidente de la respectiva Corporación Judicial deberá someter a consideración de la entidad en pleno, el nombre de los funcionarios que se encuentren inscritos en carrera.

"Artículo 68. Cuando se trate del ascenso de un funcionario judicial en el escalafón de la carrera, se tendrán igualmente en cuenta las calificaciones de servicios obtenidas, los antecedentes disciplinarios y la antigüedad en el servicio, de conformidad con el reglamento que se expida.

CAPITULO VI

"Escalafón de la carrera

"Artículo 69. Establécese el siguiente escalafón para los funcionarios judiciales de carrera:

– "Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, Contencioso-Administrativo y Superior de Aduanas.

– "Juez Superior de Distrito Judicial;

– "Juez Superior de Aduanas;

– "Juez de Menores;

– "Juez de Circuito;

– "Juez Laboral;

– "Juez de Instrucción Penal Aduanera;

– "Juez de Instrucción Criminal;

– "Juez de Distrito Penal Aduanero;

– "Juez Municipal;

– "Juez territorial;

"Artículo 70. Establécese el siguiente escalafón para los empleados judiciales de carrera en los juzgados y corporaciones judiciales.

– "Relator de la Corte Suprema de Justicia;

– "Relator del Consejo de Estado;

– "Relator del Tribunal Disciplinario;

– "Secretario de la Corte Suprema de Justicia;

– "Secretario del Consejo de Estado;

– "Secretario del Tribunal Disciplinario;

– "Secretario de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal;

– "Contador liquidador de Impuestos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado;

– "Secretario de Tribunal;

– "Secretario de Dirección Seccional de Instrucción Criminal;

– "Oficial Mayor;

– "Bibliotecólogo;

– "Relator de tribunal;

– "Auxiliar Judicial;

– "Secretario de juzgado;

– "Archivero;

– "Asistente social;

– "Escribiente;

– "Oficinista;

– "Citador;

– "Auxiliar de servicios generales.

"Artículo 71. En el escalafón de la carrera deberán figurar los funcionarios y empleados judiciales inscritos en ella, los empleos que ocupan, la fecha de ingreso, los ascensos obtenidos, los traslados efectuados y los demás datos que permitan una completa información sobre la hoja de servicio de los mismos.

"Artículo 72. Hay traslado cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, de la misma categoría, con funciones afines a las desempeñadas por aquél y para el cual se exijan requisitos mínimos similares.

CAPITULO VII

"Capacitación

"Artículo 73. Para dar adecuado desarrollo a la carrera, preparar el personal que requiere la administración de justicia, mejorar los conocimientos de los funcionarios y empleados judiciales y facilitar su ascenso, el Consejo Superior de la Escuela Judicial establecerá programas de formación, perfeccionamiento y adiestramiento, de acuerdo con las necesidades y el nivel de preparación de los recursos humanos que la Rama Jurisdiccional demande.

"Artículo 74. Es deber de la Escuela Judicial determinar las necesidades de formación, perfeccionamiento y adiestramiento de los funcionarios y empleados judiciales y formular y ejecutar los programas específicos.

"Artículo 75. La Escuela Judicial desarrollará los programas de capacitación utilizando sistemas adecuados a la naturaleza de los cursos, el nivel de los participantes y los objetivos que se persiguen.

"Artículo 76. La Escuela Judicial deberá ejecutar los programas de formación, perfeccionamiento y adiestramiento directamente o, cuando ello no sea posible, contratarlos con entidades públicas o privadas, debidamente constituidas y con experiencia en las áreas respectivas.

"Artículo 77. Los convenios que se celebren con entidades privadas requerirán la previa aprobación del Consejo Superior de la Escuela Judicial.

"Los convenios con organismos judiciales se sujetarán al régimen de contratación entre entidades públicas.

"Artículo 78. La Escuela Judicial llevará un inventario de los centros de capacitación que funcionan en el país, lo mismo que de los programas que realizan, la intensidad horaria de los mismos y las demás informaciones que se consideren conducentes para el desarrollo de los planes y programas de capacitación en beneficio de los funcionarios y empleados judiciales.

"Artículo 79. En el presupuesto de la rama jurisdiccional deberán incluirse anualmente las partidas necesarias para financiar los programas de formación, adiestramiento y perfeccionamiento de los funcionarios y empleados judiciales.

"Artículo 80. La capacitación de funcionarios y empleados judiciales tendrá los siguientes objetivos fundamentales:

"a) Ampliar los conocimientos y desarrollar sus habilidades y aptitudes;

"b) Obtener un mayor rendimiento en el desempeño de sus funciones;

"c) Incrementar sus conocimientos a efecto de poder participar en concursos que les permitan obtener la promoción en el servicio;

"d) Ingresar a la carrera judicial, y

"e) Recibir formación en las ciencias técnicas concernientes a la administración de justicia.

"Parágrafo. Entre los objetivos de la capacitación están el de lograr el mejoramiento de la administración de justicia, contribuir a su tecnificación, aumentar su eficiencia, promover la elevación de la ética profesional y acelerar el proceso de aprendizaje de sus servidores.

"Artículo 81. Los funcionarios y empleados judiciales que aspiren a participar en los programas de capacitación, serán seleccionados de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida la Escuela Judicial, de conformidad con las directrices que señale el Consejo Superior.

"Artículo 82. La asistencia a los programas de capacitación y la aprobación de los cursos por parte de los funcionarios y empleados judiciales, se apreciarán de conformidad con las normas sobre carrera, sin que por sí solas otorguen derecho a la promoción en el empleo.

"Artículo 83. Los funcionarios y empleados judiciales escogidos para seguir los cursos de capacitación tienen la obligación de asistir a ellos con regularidad, realizar las prácticas, rendir las pruebas y observar los reglamentos correspondientes. El incumplimiento de estas obligaciones constituye falta disciplinaria.

"Artículo 84. Sin menoscabo de la función atribuida a la Escuela Judicial en el presente capítulo, el Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Escuela Superior de Administración Pública asesorarán y coordinarán la programación y ejecución de los planes de capacitación.

"Artículo 85. La formación puede ser previa o posterior al ingreso del funcionario o empleado al servicio de la administración de justicia.

"La formación posterior al ingreso del funcionario o empleado a la administración de justicia, corresponde a la preparación que él reciba desde el momento de su incorporación hasta su retiro del servicio. A través de esta formación el funcionario o empleado judicial se prepara para desempeñar mejor su labor, ejercer funciones de superior jerarquía y lograr el desarrollo de su carrera.

"Artículo 86. Para efectos del presente capítulo, entiéndese por perfeccionamiento el proceso dirigido a preparar a los funcionarios y empleados judiciales en campos más amplios de la administración de justicia, o sobre aspectos generales o específicos de una determinada área.

"Son objetivos del perfeccionamiento, fortalecer la organización de la administración de justicia, contribuir al desarrollo de la carrera de los funcionarios y empleados judiciales y procurar el mejoramiento personal y profesional de los mismos.

"Artículo 87. Para efectos del presente capítulo, entiéndese por adiestramiento el proceso continuo y sistemático dirigido a la adquisición de conocimientos, el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas y el mejoramiento de las aptitudes que contribuyan directamente al cabal desempeño de las funciones propias del cargo.

"Artículo 88. La Escuela Judicial tendrá a su cargo el programa de orientación de los funcionarios y empleados judiciales, que a partir de la vigencia del presente Decreto se vinculen a la rama jurisdiccional.

"Para el cumplimiento de dicho programa, las autoridades nominadoras de la Rama Jurisdiccional deberán suministrar periódicamente a la Escuela Judicial la relación de los funcionarios y empleados judiciales que vayan ingresando al servicio de la misma.

"Artículo 89. El programa de orientación está encaminado a facilitar al funcionario o empleado judicial el buen desempeño de sus funciones, para cuyo efecto la Escuela Judicial deberá explicarle la organización y el funcionamiento de la Rama Jurisdiccional, las funciones que le están adscritas, la ubicación jerárquica y física del empleo que va a desempeñar y hacerle entrega de los manuales ilustrativos correspondientes.

"Artículo 90. Son objetivos del programa de orientación explicar la importancia de la administración de justicia, fomentar entre el personal que ingresa a dicha Rama el importante compromiso que se adquiere, con la sociedad y el Estado; relacionar al nuevo servidor con el resto del personal que se vincule por primera vez a la Rama e informar sobre las normas de personal, régimen salarial y ética profesional pertinentes.

"Artículo 91. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, es obligación de las distintas autoridades nominadoras dar al nuevo funcionario o empleado judicial las explicaciones e informes necesarios para la adecuada prestación de sus funciones.

CAPITULO VIII

"Calificación de servicios

"Artículo 92. La calificación de servicios de los funcionarios y empleados judiciales tendrá los siguientes fines:

"a) Determinar su permanencia o su retiro del servicio;

"b) Escalafonarlo en la carrera;

"c) Determinar su participación en los concursos de ascenso;

"d) Promover su participación en los programas de adiestramiento o perfeccionamiento que se realicen;

"e) Facilitar el otorgamiento de las becas y estímulos que se programen;

"f) Asegurar su participación en los programas de bienestar social que se adopten.

"Artículo 93. La Escuela Judicial elaborará los modelos de formularios, determinará la ponderación de los factores e impartirá las instrucciones necesarias para la adecuada y oportuna calificación de servicios, con la asesoría del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

"Artículo 94. La calificación de servicios compete a la autoridad nominadora del funcionario o empleado judicial, ya se encuentre éste en período de prueba o se halle inscrito en la carrera.

"Artículo 95. Las autoridades nominadoras obligadas a calificar los servicios del personal que de ellas dependan, deberán hacerlo dentro de los períodos que se fijen al efecto.

"El incumplimiento de este deber será sancionado disciplinariamente.

"Artículo 96. La calificación de servicios del empleado judicial en período de prueba comprenderá tanto el rendimiento y la calidad de su trabajo, como su conducta y comportamiento.

"Artículo 97. El empleado judicial en período de prueba deberá ser calificado mensualmente.

"Contra dicha calificación de servicios sólo procede el recurso de reposición.

"Al interponer el recurso, el empleado judicial deberá, sustentar los motivos de su inconformidad, aportando las pruebas, así sean sumarias, en relación con cada uno de los cargos formulados.

"Artículo 98. La revisión de la calificación de servicios no podrá desmejorar la calificación inicial y se anexará a ella como parte esencial de la misma.

"Artículo 99. Dos calificaciones insatisfactorias del empleado judicial en período de prueba darán lugar a su retiro del servicio, mediante declaratoria de insubsistencia motivada que hará la autoridad nominadora.

"Contra la declaratoria de insubsistencia, en este caso sólo procede el recurso de reposición.

"Artículo 100. El funcionario o el empleado judicial inscrito en la carrera, será calificado para efectos de determinar el rendimiento y la calidad de su trabajo. Si

incurre en hechos constitutivos de falta disciplinaria deberá ser objeto de la correspondiente investigación, de conformidad con las normas pertinentes.

"Artículo 101. El funcionario o el empleado judicial inscrito en la carrera deberá ser calificado por lo menos una vez al año, pero el nominador podrá calificarlo cuando lo considere conveniente, en intervalos no menores de un mes.

"La calificación de servicios se notificará personalmente al interesado y si no está conforme con ella, podrá solicitar su reconsideración en un plazo no superior a dos días. El calificador deberá resolverla en un término no mayor a dos días, contados a partir del momento en que se solicite.

"Parágrafo. Cuando la calificación corresponda a un juez colegiado, esta función la cumplirá la Sala Disciplinaria de la correspondiente Corporación.

"Artículo 102. Dos calificaciones insatisfactorias dentro del mismo año civil darán lugar a la suspensión del respectivo funcionario o empleado judicial del escalafón de la carrera, por el término de un año, dentro del cual no podrá ser ascendido ni participar en programas de capacitación, ni gozar de los estímulos que se establecen para el personal de carrera.

"Artículo 103. Tres calificaciones de servicios insatisfactorias dentro del correspondiente año civil darán lugar a la declaratoria de insubsistencia motivada por parte de la autoridad nominadora.

"Artículo 104. La declaratoria de insubsistencia implica la pérdida del escalafón de la carrera, y, además, el retiro del servicio; dicha declaratoria no dará lugar a inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.

"Artículo 105. Contra la declaratoria de insubsistencia cabe el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico de la autoridad nominadora, el cual se concederá en el efecto suspensivo y deberá ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

"Si el nominador deniega la apelación, procederá el recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 377 y 378 del Código de Procedimiento Civil.

"El superior jerárquico del nominador deberá resolver el recurso, a más tardar, dentro de los treinta días siguientes a su interposición.

"Para la decisión del recurso de apelación, se aplicará lo dispuesto en el parágrafo del artículo 101 del presente Decreto, cuando corresponda a una Corporación Judicial.

"Artículo 106. Fotocopia auténtica de las calificaciones de servicios de los empleados judiciales en período de prueba o de los funcionarios y empleados judiciales inscritos en el escalafón de la carrera y de las declaratorias de insubsistencia en firme deberán ser enviadas a la Escuela Judicial en forma inmediata.

"Artículo 107. Para efecto del presente capítulo, se entiende por año civil el comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre.

CAPITULO IX

"Inhabilidades

"Artículo 108. No podrán ser vinculados al servicio de la Rama Jurisdiccional, a ningún título:

"a) Quienes se hallen en interdicción judicial.
Los funcionarios que la decreten deberán informar de ésta o de su rehabilitación a la Escuela Judicial, para ser incluida en el respectivo registro;

"b) Quienes padezcan cualquier afección física o mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del empleo;

"c) Quienes se encuentren en detención preventiva, aunque gocen del beneficio de excarcelación y quienes hayan sido llamados a juicio por un hecho punible y mientras se resuelve la situación jurídica;

"d) Quienes hayan sido condenados por delito doloso, pero sólo por un tiempo igual al de la pena principal;

"e) Quienes se encuentren excluidos del ejercicio de la profesión de abogado, o hayan sido suspendidos por término superior a tres meses;

"f) Los funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público o de las direcciones de Instrucción Criminal, que por falta disciplinaria, hayan sido destituidos o suspendidos por segunda vez, o a quienes se haya impuesto por tres veces cualquier otro tipo de sanciones;

"g) Quienes por faltas graves hayan sido destituidos de cualquier otro empleo público;

"h) Quienes habiendo sido funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público o de las direcciones de Instrucción Criminal, hayan gestionado dentro del año siguiente a la fecha de su retiro, de manera directa o indirecta, a título personal o en representación de terceros, asuntos que estuvieron a su cargo o en cuya tramitación intervinieron.

"Parágrafo. El término de las inhabilidades a que se refieren los literales e), f) y g) será de tres años, contados a partir de la ejecutoria de la providencia que disponga la destitución del funcionario o empleado o la exclusión o suspensión del ejercicio de la profesión de abogado o a partir de la expiración del término de suspensión, o de la ejecutoria de la providencia de la última sanción en el último evento del literal f) del presente artículo.

Artículo 109. No podrán ser elegidos o nombrados funcionarios o empleados judiciales quienes sean cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de los funcionarios que intervienen en la elección o nombramiento, o de los que han participado en la elección o nombramiento de quienes deben hacer la designación.

"Artículo 110. No podrán ser elegidos o nombrados para una misma corporación o despacho judicial, ni para empleos que dependan funcionalmente de una u

otro, quienes sean entre sí cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

CAPITULO X

"Derechos

"Artículo 111. Además del ejercicio de sus derechos ciudadanos, todo funcionario o empleado judicial tendrá derecho a ser informado acerca de la organización de la administración de justicia y de las funciones del despacho o corporación judicial a la cual sea vinculado y, en especial, a recibir las instrucciones sobre los deberes, responsabilidades, derechos y atribuciones que le incumben, su dependencia jerárquica y el conducto regular a que debe sujetarse; a recibir capacitación adecuada para su mejoramiento en el desempeño de las funciones propias de su cargo, y a la oportunidad de progresar en el servicio de la administración de justicia; a la oportuna y justa evaluación de sus servicios; a percibir puntualmente la remuneración que le corresponda, así como al reconocimiento de los gastos de transporte y viáticos ocasionados en el cumplimiento de las comisiones que se le confieran; a la asociación con fines de apoyo mutuo, o de carácter cultural o asistencial, cooperativo y otros similares; a disfrutar oportunamente del régimen prestacional establecido a su favor; a obtener permisos y licencias; según las normas legales; a participar en los programas de bienestar social y gozar de estímulos de carácter moral y pecuniario; a la prevención de los riesgos en su trabajo; a hacer uso de los trámites establecidos para la defensa de sus propios intereses y para hacer efectivos sus derechos; a ser defendido por las autoridades competentes en caso de amenazas, violencias, vías de hecho, injurias, difamaciones y ultrajes de que pueda ser víctima con ocasión del ejercicio de sus funciones; a solicitar traslado en cargos equivalentes al que desempeña, y a todos los demás beneficios que se establezcan a su favor por ley o reglamento.

CAPITULO XI

"Deberes y prohibiciones

"Artículo 112. Son deberes de los funcionarios y empleados judiciales:

"a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos;

"b) Vigilar y salvaguardar la majestad de la justicia;

"c) Desempeñar con solicitud e imparcialidad las funciones de su cargo;

"d) Obedecer y respetar a sus superiores jerárquicos; dar un tratamiento cortés a sus compañeros y a sus subordinados, y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito;

"e) Permanecer en el desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo.

"f) Observar permanentemente en sus relaciones con el público toda la consideración y cortesía debidas;

"g) Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder del uso de la autoridad que le ha sido otorgada y de ejecución de las órdenes que puedan impartir, sin que en ningún caso queden exentos de la responsabilidad que les incumbe por la que corresponda a sus subordinados;

"h) Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo, en razón de su naturaleza o en virtud de instrucciones especiales, aun después de haber cesado en el empleo y sin perjuicio de la obligación de denunciar cualquier hecho delictuoso;

"i) Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones que les han sido encomendadas;

"j) Responder por la conservación de los documentos, útiles, materiales, dinero, equipo, muebles y demás bienes confiados a su guarda o administración, y rendir oportunamente cuenta de su utilización;

"k) Poner en conocimiento del Consejo Superior de la Administración de Justicia, por intermedio de la División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional del Ministerio de Justicia, los hechos que puedan perjudicar la administración de justicia y las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio;

"l) Las demás que la ley les señale.

"Artículo 113. Los funcionarios y empleados judiciales deben residir en la sede de su despacho, de la cual no podrán ausentarse en los días y horas de trabajo, sino con permiso de su superior jerárquico.

"Sin embargo, el respectivo superior podrá autorizar la residencia en lugar distinto de la sede, siempre que no se perjudique la prestación del servicio y cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

"a) Que en la respectiva localidad no existan instituciones docentes para la educación de sus hijos menores de dieciocho años;

"b) Que entre esa población y la de residencia haya una distancia no mayor de cincuenta kilómetros y siempre que exista comunicación directa y permanente entre las dos.

"Artículo 114. La autorización para residir fuera de la sede no comprende en ningún caso la variación de los horarios de trabajo, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

CAPITULO XII

"Faltas disciplinarias

"Artículo 115. Son faltas contra la dignidad de la administración de justicia, por parte del funcionario o empleado:

"a) Embriagarse pública y habitualmente; usar habitual e injustificadamente sustancias que produzcan dependencia física o síquica; asistir al despacho en estado de embriaguez o de intoxicación producidas por el alcohol o por dichas sustancias; practicar habitualmente juegos prohibidos; abandonar injustificadamente el propio

hogar; practicar públicamente actos eróticos-sexuales; dedicarse, tanto en el servicio como en la vida social, a actividades que puedan afectar la confianza de la ciudadanía;

"b) Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra las instituciones o contra cualquier funcionario o empleado;

"c) Hacer en actuación judicial o fuera de ella calificaciones ofensivas, ultrajantes o calumniosas de las personas que intervienen en los procesos;

"d) Solicitar o fomentar publicidad de cualquier clase respecto de su persona o de sus actuaciones, sin perjuicio del derecho de rectificar informaciones o comentarios;

"e) Contraer obligaciones de manera directa o indirecta con alguna de las partes o sus apoderados o con cualquier otro interesado en asuntos que se hallen a su conocimiento o en los cuales deba intervenir;

"f) Solicitar o recibir dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de lucro provenientes directa o indirectamente de alguna de las personas mencionadas en el literal anterior, o de funcionario o empleado de su dependencia;

"g) Influir directa o indirectamente en el nombramiento o elección de funcionarios o empleados;

"h) Realizar colectas para hacer homenajes u obsequios a los superiores, y

"i) Ejercer actividades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma afecten su dignidad.

"Artículo 116. Son faltas contra la eficacia de la administración de justicia, por parte del funcionario o empleado:

"a) Omitir o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo o el trabajo que señalen la ley o los reglamentos de la oficina, o dejar vencer sin justa causa los términos sin la actuación correspondiente;

"b) Abstenerse de cumplir o retardar injustificadamente la evacuación de las comisiones que legalmente se le confieren;

"c) Omitir el reparto cuando sea obligatorio, o hacerlo o tolerar su ejecución en forma irregular;

"d) Permitir que litigue en su despacho persona no autorizada para ello, o mostrar los expedientes o parte de los mismos sin la debida autorización;

"e) Dejar de asistir a los actos o diligenciamientos en que se requiera su presencia, o firmar las providencias sin haber participado en su discusión o pronunciamiento;

"f) Dejar de asistir a las audiencias o de practicar personalmente las pruebas, en los casos en que la ley lo ordene, o no dictar o dejar de notificar las providencias, cuando a ello hubiere lugar;

"g) Hacer constar en cualquier diligencia judicial hechos que no sucedieron, o dejar de relacionar los que ocurrieron;

"h) Dar un tratamiento de favor o de discriminación a las personas que intervienen en los procesos, por razón de procedencia geográfica o social, filiación política, credo religioso, raza, edad, sexo, amistad o simpatía, o cualquier otra causa;

"i) Dejar de asistir injustificadamente a su oficina, o cerrarla sin motivo legal, o limitar indebidamente las horas de trabajo o de despacho público;

"j) Ejercer influencias directas o indirectas sobre cualquier funcionario o empleado de la administración de justicia, para que proceda en determinado sentido en los asuntos de que éste conoce o ha de conocer o que tramite;

"k) No dar noticia a la autoridad competente de delitos y faltas disciplinarias de que tenga conocimiento, en razón del ejercicio de sus funciones;

"l) Realizar huelgas, paros, suspensión total o parcial de actividades o disminución del ritmo de trabajo, o participar en tales actos;

"m) No suministrar oportunamente las informaciones que deba dar o suministrarlas con inexactitud o en forma incompleta;

"n) Tener a su servicio en forma estable o transitoria, para las labores de su despacho, personas distintas de los empleados de la propia oficina;

"ñ) Dejar de sancionar las faltas de los funcionarios o empleados judiciales, u obrar con lenidad en la aplicación de las sanciones;

"o) Violar las normas sobre nombramiento, elección o remoción de los funcionarios o empleados, y las que regulan la designación de auxiliares de la justicia;

"p) Contravenir las disposiciones sobre honorarios de los auxiliares de la justicia y sobre arancel;

"q) Residir, sin permiso fuera de la sede del despacho, o realizar actividades ajenas al ejercicio de sus funciones, durante la jornada de trabajo;

"r) Desempeñar cualquier otro empleo retribuido, salvo el profesorado hasta el límite de ocho horas semanales y siempre que no afecte la marcha regular del trabajo;

"s) Percibir más de una asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones legales;

"t) Gestionar profesionalmente negocios propios o ajenos, o prestar a título particular servicios de asesoría o de asistencia en trabajos relacionados con las funciones propias de su empleo o cuyo conocimiento esté atribuido a otra autoridad;

"u) Desempeñar alguno de los cargos de albacea curador dativo, auxiliar de la justicia o de director o fiscalizador de sociedades comerciales;

"v) Aceptar sin permiso del gobierno empleos, invitaciones, obsequios o prebendas provenientes de entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

CAPITULO XIII

"Régimen disciplinario

"Artículo 117. El régimen disciplinario tiene por objeto garantizar a la administración de justicia una eficiente prestación de los servicios, así como la moralidad, responsabilidad y buena conducta de los funcionarios y empleados judiciales y a éstos los derechos y garantías que les corresponden como tales.

"Artículo 118. Los magistrados y los jueces de la República no podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sino en los casos y con las formalidades que determine la ley.

"Artículo 119. El régimen disciplinario de los funcionarios judiciales continuará regulándose por las disposiciones pertinentes sobre la materia.

"Artículo 120. Sin menoscabo de la función atribuida en el presente Decreto a la Procuraduría General de la Nación en materia de régimen disciplinario, los empleados judiciales estarán sometidos al control disciplinario interno que, en cabeza de las correspondientes autoridades nominadoras, se establece en los siguientes artículos.

"Artículo 121. La acción disciplinaria podrá iniciarse de oficio, por información del funcionario o empleado judicial, o por queja presentada por cualquier persona en el ejercicio del derecho de petición.

"Artículo 122. Toda falta disciplinaria cometida por un empleado judicial origina acción disciplinaria, cuyo ejercicio es obligatorio, aunque se haya iniciado acción penal o el infractor se encuentre desvinculado del servicio.

"Artículo 123. La responsabilidad emanada de la acción disciplinaria iniciada contra un empleado judicial es independiente de la responsabilidad civil o penal que dicha acción pueda originar.

"Artículo 124. Ningún empleado judicial podrá ser sancionado por un hecho que no haya sido definido previamente por la Constitución o la ley como falta disciplinaria, ni sometida a sanción de esta naturaleza que no esté consagrada en disposición legal anterior a la comisión de la falta que se sanciona.

"Artículo 125. La acción disciplinaria caduca en cinco años, contados a partir del último acto constitutivo de la falta, término dentro del cual deberá igualmente imponerse la sanción.

"Artículo 126. No podrá abrirse investigación disciplinaria para establecer la responsabilidad de un empleado judicial por hechos o actos respecto de los cuales ya había sido investigado.

"Artículo 127. En toda investigación disciplinaria, el empleado judicial investigado tendrá derecho a conocer el informe y las pruebas que se alleguen a la misma; a ser oído en descargos; a que se practiquen las pruebas que solicite siempre que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, y a ser representado por un apoderado, si así lo desea.

"Artículo 128. Cuando la falta haya sido cometida por un empleado judicial que se encuentre retirado del servicio, la investigación deberá iniciarse o proseguirse, según el caso, siempre que la acción disciplinaria no haya caducado.

"Artículo 129. Podrán ordenarse diligencias preliminares que tengan por objeto comprobar la existencia de los hechos o actos que puedan llegar a constituir falta disciplinaria y determinar los posibles responsables.

"Artículo 130. La investigación disciplinaria tendrá las siguientes etapas:

"a) Iniciación de la investigación;

"b) Práctica de pruebas;

"c) Formulación de cargos;

"d) Recepción de descargos, y

"e) Cierre de la investigación.

"Artículo 131. La investigación disciplinaria podrá ser adelantada por la autoridad nominadora del empleado judicial o por un funcionario o empleado delegado por ella, evento en el cual el investigador deberá ser de igual o superior categoría al investigado.

"No obstante lo anterior, cuando la autoridad nominadora tenga conocimiento directo de faltas cometidas por un empleado judicial que puedan implicar la aplicación de las sanciones de amonestación escrita o de censura, podrá solicitarle inmediatamente que presente descargos verbales o escritos y, previo el análisis de los mismos, imponerle la sanción correspondiente.

"En el caso de descargos verbales, se levantará un acta que deberá ser suscrita por la autoridad nominadora, el investigado y la persona que la elabora.

"Artículo 132. La investigación disciplinaria se considerará iniciada desde el momento mismo en que el nominador del empleado judicial o su delegado dicte el auto de apertura de la misma.

"Artículo 133. La investigación disciplinaria no podrá exceder en ningún caso de sesenta días hábiles, término que podrá suspenderse por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

"Artículo 134. Una vez iniciada la investigación disciplinaria, deberá darse aviso de ese hecho a la Procuraduría General de la Nación y al empleado investigado.

"Artículo 135. Cuando la investigación se inicie por queja o información, el investigador deberá solicitar al quejoso o informador la ratificación de la queja o de la información, bajo la gravedad de juramento. La imposibilidad de cumplir con esta exigencia, sea cual fuere el motivo, no impide la continuación de la investigación.

"Artículo 136. Iniciada la investigación, el nominador podrá suspender provisionalmente al empleado investigado, hasta por el término de sesenta días hábiles, si el hecho se considera constitutivo de falta disciplinaria grave.

"En todo caso, la investigación disciplinaria debe culminar dentro del término de la suspensión.

"La providencia que ordena la suspensión provisional será motivada, tendrá vigencia inmediata y contra ella no procede recurso alguno.

"Artículo 137. Cuando el nominador tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de faltas disciplinarias cometidas por un empleado contra el cual se esté adelantando una investigación, ésta se acumulará a la nueva investigación, si ello fuere posible.

"Artículo 138. En la investigación disciplinaria serán admisibles como medios de prueba los reconocidos por la ley.

"Artículo 139. Las pruebas se valorarán según las reglas de la sana crítica.

"Artículo 140. Cuando en el desarrollo de la investigación se establezca que un empleado pudo incurrir en falta disciplinaria, el investigador formulará a éste los cargos correspondientes.

"Artículo 141. La formulación de cargos deberá contener lo siguiente:

"a) Una relación de los hechos objeto de la investigación;

"b) Una relación de las pruebas practicadas o allegadas que demuestren la existencia de tales hechos;

"c) La cita de las disposiciones legales presuntamente infringidas;

"d) El término dentro del cual el investigado deberá presentar sus descargos y solicitar o allegar pruebas el cual no podrá ser inferior a un día, ni superior a ocho, contados a partir de la fecha de recibo del pliego de cargos.

"Artículo 142. El pliego de cargos se entregará personalmente al investigado, en su lugar de trabajo, quien deberá firmar una copia del mismo como constancia de recibo.

"En caso de que el investigado se niegue a firmar, el comisionado para la entrega del pliego dejará constancia de tal hecho en la copia del mismo y hará firmar a un testigo.

"Si el empleado se encuentra desvinculado de la entidad o suspendido del empleo que desempeña, se solicitará su presentación ante el investigador para hacerle entrega del pliego de cargos, mediante telegrama dirigido a la dirección que aparezca registrada en su hoja de vida o a la que se conozca por cualquier medio, dejando constancia de ello en el expediente.

"Si transcurridos cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de envío del telegrama, el investigado no se presentare a notificarse de los cargos, se le designará de oficio un apoderado, quien deberá presentar los descargos, y con él se continuará la investigación hasta su culminación.

"Para efectos de la designación del apoderado de oficio el investigador recurrirá a la lista de auxiliares de la justicia.

"Artículo 143. El empleado investigado deberá hacer sus descargos ante el funcionario investigador.

"Artículo 144. Si dentro del término que se le haya señalado, el investigado no presenta los descargos, se le designará apoderado de oficio, en la forma establecida en el inciso final del artículo 142 y se le fijará a éste un nuevo término para la presentación de los descargos.

"Artículo 145. El investigador deberá practicar las pruebas que el investigado solicite al hacer sus descargos, cuando ellas sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, dentro de un plazo máximo de ocho días, contados a partir de la fecha de recibo de los respectivos descargos.

"Artículo 146. Si el investigador encontrare que en el desarrollo de la investigación disciplinaria se ha incurrido en alguna irregularidad, procederá a subsanarla antes del cierre de la misma, si ello fuere posible; de lo contrario, se reiniciará la investigación en la etapa en que se hubiere producido la irregularidad.

"Artículo 147. Cuando el investigador, dentro del término establecido en el presente Decreto, considere que la investigación se encuentra perfeccionada, procederá al cierre de la misma y, si hubiere actuado como delegado, rendirá un informe a la autoridad nominadora, en el cual deberá hacer una relación sucinta de los hechos que hayan dado lugar a ella, y de los descargos del investigado, el análisis de las pruebas en las cuales se funde la responsabilidad o la inocencia del investigado, las normas infringidas y la recomendación sobre la sanción disciplinaria que debe aplicarse, si fuere el caso, o la solicitud de archivo del expediente.

"Artículo 148. Cuando la autoridad nominadora encuentre que el hecho investigado no ha existido, o que la ley no lo considera como falta disciplinaria, o que el funcionario acusado no lo cometió o que hay lugar a exoneración de responsabilidad, procederá a archivar el expediente.

"Artículo 149. Las faltas disciplinarias se calificarán como leves o graves, en atención a su naturaleza y efectos, las modalidades y circunstancias del hecho y los antecedentes personales y profesionales del infractor.

"Artículo 150. Las sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a los empleados judiciales son las siguientes:

"a) Amonestación escrita, sin anotación en la hoja de vida;

"b) Censura, con anotación en la hoja de vida;

"c) Multa que no exceda de la quinta parte de la remuneración mensual;

"d) Suspensión en el ejercicio del cargo, hasta por treinta días, sin derecho a remuneración;

"e) Destitución.

"Artículo 151. Las faltas leves se sancionarán con amonestación escrita, sin anotación en la hoja de vida, con censura, con anotación en la hoja de vida, o con multa que no exceda de la quinta parte de la remuneración mensual.

"El concurso de faltas, la falta grave o la reincidencia en faltas leves darán lugar a la aplicación de las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por treinta días sin derecho a remuneración, o de destitución.

"Para efectos de reincidencia, se tendrán en cuenta las faltas cometidas por el empleado dentro de los doce meses inmediatamente anteriores a la comisión de la falta que se juzga.

"Cuatro sanciones disciplinarias que hayan sido impuestas al empleado judicial, por hechos constitutivos de faltas leves, dentro de los dos años anteriores, darán lugar en caso de una nueva sanción disciplinaria, por lo menos, a la sanción de suspensión por treinta días, sin derecho a remuneración.

"La imposición de dos sanciones disciplinarias de suspensión en el ejercicio del cargo, dentro de los dos años inmediatamente anteriores, dará lugar a la sanción de destitución en el evento de que incurra el empleado judicial en una nueva falta disciplinaria.

"Artículo 152. La autoridad nominadora del empleado investigado procederá a calificar la falta, conforme a los criterios señalados en este Decreto, y a determinar la sanción que deba imponerse.

"En todo caso, las sanciones disciplinarias deberán ser impuestas mediante providencia motivada.

"Artículo 153. El empleado judicial suspendido provisionalmente será reintegrado a su empleo y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando la investigación termine por archivo del expediente, por expiración del término de suspensión provisional sin que hubiere terminado la investigación, o cuando la sanción impuesta fuere de amonestación o censura.

"Cuando la sanción impuesta fuere de multa, ésta se descontará de la remuneración que el empleado deba percibir durante el término de la suspensión. El empleado sancionado con suspensión por un término inferior al de la suspensión provisional, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración correspondiente al período que exceda el tiempo señalado en la sanción.

"Artículo 154. Cuando el término de la sanción de suspensión fuere igual o superior al de la suspensión provisional, en la providencia mediante la cual se imponga dicha sanción, se ordenará computar el tiempo de la suspensión.

"Artículo 155. Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable al empleado investigado que se haya reintegrado con anterioridad a la fecha de imposición de la sanción y a quien se hubiere cancelado los salarios dejados de percibir durante el término de la suspensión provisional.

"Artículo 156. En la misma providencia en la cual se imponga la sanción de destitución, la autoridad nominadora señalará el término de inhabilidad para el desempeño de funciones públicas del sancionado; que será de tres años.

"Artículo 157. Contra las providencias que impongan sanción u ordenen el archivo del expediente, procede el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, que podrán interponer el Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial o su delegado, el sancionado o el quejoso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. El recurso de apelación se surtirá ante el superior jerárquico del nominador y se concederá en el efecto suspensivo.

"Habrá lugar al recurso de queja cuando se rechace el de apelación.

"El superior deberá decidir dentro de los treinta días siguientes al recibo del expediente, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

"La providencia que imponga sanción u ordene el archivo del expediente deberá notificarse personalmente al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial o a su delegado.

"Parágrafo. Contra las decisiones de las salas disciplinarias de las corporaciones judiciales que resuelvan estos recursos, no cabe recurso alguno.

"Artículo 158. La resolución del recurso no puede hacer más gravosa la situación del recurrente, a menos que haya sido interpuesto por el correspondiente funcionario de la Procuraduría General de la Nación.

"Artículo 159. Copia auténtica de las providencias mediante las cuales se impongan sanciones disciplinarias deberá remitirse a la Escuela Judicial y a la Procuraduría General de la Nación a fin de que sea archivada en la respectiva hoja de vida del empleado, salvo cuando se imponga sanción de amonestación escrita.

"Artículo 160. Cuando en el curso de la investigación disciplinaria se establezca que los hechos objeto de la misma pudieren llegar a constituir delitos perseguibles de oficio, el investigador deberá ponerlos en conocimiento de la autoridad penal competente, remitiéndole los documentos probatorios que correspondan.

"Artículo 161. La Escuela Judicial y sus dependencias regionales o seccionales deberán llevar un libro especial de control disciplinario, en el cual se radicarán, en el orden de su presentación, las quejas que se formulen contra los empleados judiciales.

"El libro de que trata el inciso anterior deberá contener, por lo menos, la siguiente información: nombre del informante o del quejoso, nombre del empleado o empleados judiciales contra los cuales se formula la queja, fecha de presentación de la misma, naturaleza de los hechos, trámite dado a la queja, resultado de la investigación y determinación tomada.

"Artículo 162. La autoridad nominadora del empleado investigado deberá dar aviso oportuno a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, sobre la iniciación de la acción disciplinaria e informar sobre los resultados de la misma.

"Artículo 163. Contra la providencia que imponga sanción de destitución, se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Disciplinario, dentro de los quince días siguientes a la ejecutoria de la misma, en los casos que a continuación se señalan:

"1° Cuando se demuestre que es falso el testimonio, la peritación, el documento o cualquier otra prueba en que se apoye la providencia.

"2° Cuando después de dictada la providencia aparezcan hechos nuevos o se presenten pruebas no conocidas al tiempo de proferirla, que determinen una decisión contraria a la recurrida.

"Artículo 164. El recurso de revisión se propondrá por el destituido o por la Procuraduría General de la Nación, en memorial dirigido al Tribunal Disciplinario, en el cual se determinará el caso cuya revisión se demanda, los despachos judiciales que hubieren dictado la providencia, la falta o faltas disciplinarias que lo hubieren motivado, y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud. Con el memorial se acompañarán las pruebas de los hechos fundamentales.

"Artículo 165. Recibido por el Tribunal Disciplinario el expediente, se abrirá a pruebas por un término de diez días, mediante auto que se notificará personalmente al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y al sancionado.

"Artículo 166. Vencido el término probatorio, el magistrado sustanciador, previo informe del secretario, ordenará correr traslado al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y al sancionado por el término de diez días a cada uno, para que presenten sus alegatos por escrito. Concluido este término, el Tribunal Disciplinario, dentro de los treinta días siguientes, desatará el recurso. Si el Tribunal invalida la providencia recurrida, dictará la que en su reemplazo corresponda.

"Si la revisión fuere negada, se devolverá el expediente al despacho que corresponda dejando en el Tribunal Disciplinario copia del fallo.

"Artículo 167. Si el fallo del Tribunal Disciplinario fuera absolutorio, el empleado será restituido en su cargo, con derecho a cobrar los sueldos dejados de percibir durante el tiempo que hubiere durado la desvinculación por razón de la providencia recurrida y no se entenderá que ha existido solución de continuidad.

"Artículo 168. El reemplazo del empleado destituido sólo podrá hacerse en propiedad, de conformidad con las normas de carrera establecidas en el presente Decreto, cuando precluya el término para interponer el recurso de revisión o cuando éste se resuelva en contra del empleado.

CAPITULO XIV

"Vigilancia de la Procuraduría

"Artículo 169. Corresponde a la Procuraduría General de la Nación supervigilar la conducta oficial de los empleados judiciales.

"Artículo 170. La Procuraduría General de la Nación podrá en cualquier momento y mediante resolución motivada iniciar o asumir la investigación disciplinaria contra un empleado judicial.

"En este último caso, el investigador deberá suspender las diligencias que estuviere adelantando y ponerlas a disposición de la Procuraduría.

"Si vencido el término de que trata el artículo 172 de este Decreto, la Procuraduría no concluye la investigación, el nominador respectivo o su delegado deberá reasumirla y la Procuraduría deberá entregar de inmediato el correspondiente expediente y no podrá asumirla nuevamente,

"Artículo 171. Cuando la Procuraduría General de la Nación inicie o asuma una investigación disciplinaria contra un empleado judicial, la autoridad nominadora podrá ordenar la suspensión provisional de éste, informando de ello a la Procuraduría.

"La suspensión provisional deberá ordenarse por el nominador del empleado investigado a solicitud de la Procuraduría General de la Nación.

"Artículo 172. Las investigaciones disciplinarias que adelante la Procuraduría contra empleados judiciales no podrán exceder el término de sesenta días hábiles contados a partir de su iniciación.

"El incumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior es causal de mala conducta.

"Artículo 173. Si como consecuencia de la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación, se solicita a la autoridad nominadora imponer sanción o archivar el expediente, contra la decisión que adopte la autoridad nominadora o su delegado procederán los recursos contemplados en el artículo 157 del presente Decreto.

"Artículo 174. Para los efectos previstos en este Decreto se considerará superior jerárquico de la autoridad nominadora del empleo judicial, la sala disciplinaria de la respectiva corporación judicial. Para estudiar el recurso se designará como ponente un magistrado de la sala, de la misma especialidad de la autoridad nominadora.

"En aquellos casos en que la autoridad nominadora no tenga superior jerárquico, desatará el recurso la sala a la cual pertenezca el empleado judicial.

"Artículo 175. Con excepción de lo estatuido en el presente Decreto, el procedimiento disciplinario que adelante la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios y empleados judiciales seguirá regulándose por las disposiciones vigentes.

CAPITULO XV

"Sistema de información de personal

"Artículo 176. Corresponde a la Escuela Judicial, la organización del sistema de información de los funcionarios y empleados judiciales, sin menoscabo de la función que, en ese campo, le da la ley al Departamento Administrativo del Servicio Civil.

"Cuando las necesidades así lo exijan, el Ministerio de Justicia, de acuerdo con la política sobre informática que establezca, podrá contratar a través de la Escuela Judicial, con el Departamento Administrativo del Servicio Civil, el DANE u otras

entidades públicas o privadas especializadas en la materia, la organización y prestación del sistema de información para la Rama Jurisdiccional.

"Artículo 177. La Escuela Judicial deberá llevar estadísticas continuas sobre los servidores judiciales, las cuales servirán de base para la elaboración de diagnósticos que permitan definir políticas y desarrollar programas destinados a una mejor utilización de los recursos humanos al servicio de la Rama Jurisdiccional; formar, capacitar y seleccionar el personal, de acuerdo con las necesidades reales de la administración de justicia; determinar las características de aquellos servidores que demandan los diferentes servicios, su cantidad, clase y distribución.

"Artículo 178. Todas las autoridades y corporaciones judiciales, debidamente orientadas por la Escuela Judicial, con la asesoría del Departamento Administrativo del Servicio Civil, están obligadas a participar en la elaboración de dichas estadísticas, de acuerdo con el reglamento que se expida.

"Artículo 179. A todo funcionario o empleado judicial deberá llevársele en la Escuela Judicial un registro individual debidamente actualizado.

"Todas las autoridades judiciales están obligadas a proveer los documentos que con ese objeto, se les soliciten, dentro de los plazos y condiciones que se estipulen. La demora o incumplimiento injustificados dará lugar a la aplicación de sanciones de carácter disciplinario.

"Artículo 180. Los datos de carácter personal serán reservados y solamente podrán ser manejados y consultados por las autoridades responsables. Los datos de carácter administrativo prestarán mérito público.

"El extravío, adulteración, violación de la reserva o negligencia en el manejo de los registros de personal constituye falta grave.

"Artículo 181. El censo nacional de personal al servicio de la administración de justicia estará a cargo de la Escuela Judicial, con la asesoría del Departamento Administrativo del Servicio Civil, y en su desarrollo, deberán colaborar todas las autoridades y corporaciones judiciales.

"Dicho censo deberá mantenerse actualizado y servirá de base para el estudio de los recursos humanos requeridos en la administración de justicia, para la proyección de la reglamentación y aplicación de las diferentes técnicas del sistema de administración de personal de la Rama Jurisdiccional.

CAPITULO XVI

"Estímulos

"Artículo 182. Los funcionarios y empleados judiciales que se distingan por sus méritos en la prestación de sus servicios a la administración de justicia se harán acreedores a los estímulos y distinciones que se determinan en el presente Decreto y en las demás disposiciones sobre la materia.

"Los estímulos y distinciones tienen por objeto destacar las aptitudes, méritos y virtudes de los funcionarios y empleados judiciales.

"Artículo 183. Son estímulos y distinciones, entre otros, los siguientes:

"a) El otorgamiento de becas;

"b) La comisión de estudios;

"c) La publicación de trabajos meritorios; y

"d) Las condecoraciones.

"Artículo 184. El otorgamiento de becas, la participación en cursos especiales y las publicaciones y condecoraciones serán autorizadas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial.

"Cuando se establezcan otros estímulos o distinciones, en el acto de su concesión se determinarán las modalidades de su otorgamiento.

"Artículo 185. Podrán otorgarse a los funcionarios y empleados judiciales comisiones de estudios dentro o fuera del país, remuneradas o no, hasta por el término de un año, prorrogable por otro tanto, de conformidad con el reglamento que se expida.

"Estas comisiones serán otorgadas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial.

"La autoridad nominadora del funcionario o empleado judicial deberá conceder la respectiva licencia por el término de duración de la comisión.

"Artículo 186. Durante el tiempo que el funcionario o empleado judicial se encuentre en comisión, se produce vacancia transitoria del cargo que desempeña, el cual podrá ser provisto de conformidad con las normas del presente Decreto.

"Artículo 187. La calificación de servicios de los funcionarios y empleados judiciales se tendrá en cuenta para efectos de la concesión de estímulos y condecoraciones contemplados en el presente capítulo, según el reglamento que se expida.

CAPITULO XVII

"Bienestar Social

"Artículo 188. El Gobierno Nacional establecerá a favor de los funcionarios y empleados judiciales y de sus familiares programas de bienestar social relativos a vivienda, educación, cultura, salud, recreación y demás programas que permitan elevar su nivel de vida y propender a su mejoramiento social y cultural.

"El Gobierno Nacional hará extensivos a los funcionarios y empleados judiciales y a sus familiares los programas de bienestar social que ejecuten las entidades públicas especializadas en la materia, de conformidad con las condiciones y procedimientos que se establezcan.

"Artículo 189. Los programas de bienestar social de que trata este capítulo no podrán tener por objeto crear, incrementar o duplicar salarios o prestaciones sociales que la ley, no haya establecido, ni otorgar beneficios en dinero o en especie.

"Artículo 190. Los programas de bienestar social se adelantarán con las siguientes entidades: Prosocial, Coldeportes, Colcultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y otros organismos oficiales de seguridad y previsión social.

"Artículo 191. El Ministerio de Justicia, a través de la División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional, promoverá con los organismos oficiales que dispongan de centros vacacionales, clubes sociales, deportivos y recreativos, la utilización de dichos servicios por parte de los funcionarios y empleados judiciales.

"Artículo 192. Las entidades deportivas del Estado facilitarán a los funcionarios y empleados judiciales el uso de sus centros deportivos para los fines previstos en este capítulo.

"Artículo 193. El Ministerio de Justicia, a través de la División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional, coordinará con las entidades especializadas la realización de programas educativos destinados a los hijos de los funcionarios y empleados judiciales.

"Artículo 194. La Dirección de Bienestar Social del Departamento Administrativo del Servicio Civil asesorará y coordinará los programas que, en cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, desarrollen el Ministerio de Justicia y las demás entidades públicas de que trata el artículo 190 de este Decreto.

CAPITULO XVIII

"Disposiciones varias

"Artículo 195. El artículo sexto del Decreto número 1373 de 1986 quedará así:

"El Consejo Superior de la Escuela Judicial estará integrado por:

"a) El Ministro de Justicia o su delegado, quien lo presidirá;

"b) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o su delegado;

"c) El Presidente del Consejo de Estado o su delegado;

"d) El Presidente del Tribunal Disciplinario o su delegado;

"e) El Procurador General de la Nación o su delegado;

"f) El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil o su delegado;

"g) El Director de la Escuela Superior de Administración Pública o su delegado;

"h) El Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior o su delegado;

"i) Un representante de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional elegido en la forma que determine el reglamento;

"j) Un representante de los empleados de la Rama Jurisdiccional elegido en asamblea general de delegados de los diferentes distritos judiciales.

"El Director de la Escuela Judicial tendrá voz pero no voto en las sesiones del Consejo.

"Parágrafo. Actuará como Secretario del Consejo Superior de la Escuela Judicial el Jefe de la División Académica de la misma.

"Las decisiones del Consejo deberán adoptarse por la mitad más uno de sus miembros. Para que el Consejo pueda deliberar se requerirá de la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.

"El Consejo Superior se reunirá por derecho propio, en sesiones ordinarias, una vez al mes y, en sesiones extraordinarias, cuando sea convocado por su presidente o a petición de cuatro de sus miembros.

"Los miembros del Consejo Superior de la Escuela Judicial percibirán honorarios por su asistencia a las reuniones, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

"Artículo 196. El artículo octavo del Decreto número 1373 de 1986 quedará así:

"Para ser Director de la Escuela Judicial se requiere tener título profesional en ciencias jurídicas y experiencia administrativa y docente no inferior a tres años. La experiencia administrativa deberá referirse al desempeño de funciones afines o similares a las asignadas al Director de la Escuela Judicial.

"Artículo 197. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación que a la fecha de la vigencia del presente Decreto desempeñen empleos de carrera, podrán solicitar su inscripción en la misma, en un término no superior a un año, de conformidad con las normas que posteriormente se expidan.

"Artículo 198. La elección de funcionarios y empleados judiciales se hará por la entidad nominadora mediante votación pública, y no se admitirá la modalidad de voto en blanco.

"El incumplimiento de lo preceptuado anteriormente constituirá falta disciplinaria.

"Artículo 199. En los juzgados ubicados en cabecera de Distrito Judicial, los jueces, de común acuerdo, podrán reducir el horario de atención al público, hasta por dos horas diarias, sin disminuir la jornada laboral establecida en las normas pertinentes.

"Artículo 200. Los directores seccionales de Instrucción Criminal podrán disponer la rotación de los juzgados de Instrucción Criminal, y el cambio de juzgados radicados en ambulantes, consultando las necesidades del servicio previamente establecidas.

"Los jueces en cuyos despachos, por virtud de la rotación, se incremente la planta de personal, deberán proveer los nuevos cargos con empleados pertenecientes al juzgado cuya nómina se redujo como consecuencia de dicha determinación.

CAPITULO XIX

"Disposiciones transitorias

"Artículo 201. El ingreso a la carrera de los empleados judiciales que, a la fecha de la vigencia del presente Decreto, ocupen empleos de carrera en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Tribunal Disciplinario, los tribunales superiores de distrito judicial, los tribunales administrativos, la jurisdicción penal aduanera, la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y las direcciones seccionales de Instrucción Criminal, se hará previa evaluación de sus méritos, conocimientos, experiencia, conducta y eficiencia.

"En cuanto a los empleados judiciales de los demás juzgados, se estará a lo dispuesto en los Decretos números 2464 de 1985 y 1190 de 1986.

"Artículo 202. Con la solicitud de inscripción en la carrera judicial, los empleados a que se refiere el artículo anterior deberán presentar:

"a) Los documentos que acrediten los requisitos mínimos necesarios para el ejercicio del cargo que desempeñan;

"b) Certificado de buena conducta y eficiencia, que deberá expedir la respectiva autoridad nominadora o su delegado dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud;

"c) Fotocopia autenticada del pasado judicial actualizado por el DAS;

"d) Certificado sobre antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación.

"Artículo 203. El certificado de buena conducta y eficiencia será expedido bajo la gravedad del juramento, teniendo en cuenta el comportamiento general y el rendimiento del empleado en el desempeño del cargo y deberá ser motivado. Si el certificado fuere desfavorable al empleado, éste podrá solicitar su revisión, dentro de los cinco días suguientes a la expedición del mismo, ante el Consejo Superior de la Administración de Justicia.

"El nominador incurrirá en causal de mala conducta en el evento de que la certificación expedida no corresponda a la verdad, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. Así mismo, el Ministerio Público podrá impugnar en cualquier momento los certificados de que trata este artículo.

"Artículo 204. Para el ingreso a la carrera judicial los empleados deberán reunir los siguientes requisitos:

Nombre del cargo	Grado	Requisitos
Secretario y relator de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Tribunal Disciplinario.	20	Poseer título de abogado y tener cuando menos tres años de experiencia en la Rama Jurisdiccional

Contador liquidador de Impuestos.	17	Poseer título de contador público y tener cuando menos dos años de experiencia como contador.
Secretario de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal.	15	Poseer título de abogado y tener cuando menos dos años de experiencia.
Secretario de Tribunal y de dirección seccional de instrucción criminal.	13	Haber aprobado cinco años de estudio en educación superior, o haber aprobado cuatro años de estudios en educación superior y tener cuando menos tres años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Oficial mayor.	12	Haber aprobado cuatro años de estudios en educación superior, Haber aprobado tres años de estudios en educación superior y tener cuando menos dos años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Bibliotecólogo.	12	Poseer licenciatura en bibliotecología, y tener cuando menos un año de experiencia como auxiliar de biblioteca.
Relator de tribunal, auxiliar judicial y oficial mayor.	11	Haber aprobado tres años de estudios en educación superior o Haber aprobado dos años de estudios en educación superior y tener cuando menos dos años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Auxiliar judicial y secretario de juzgado en cabecera de Distrito Judicial.	10	Tener título en edùcación superior, o Haber terminado estudios en educación superior y tener cuando menos un año de experiencia en la Rama, o

		Haber terminado tres años de estudios en educación superior y tener cuando menos tres años de experiencia en la Rama, o Poseer diploma en educación media y tener cuando menos seis años de experiencia en la Rama.
Secretario de Juzgado en cabecera de circuito judicial y otras sedes.	10	Haber terminado estudios en educación superior, o Haber aprobado cuatro (4) años de estudios en educación superior y tener cuando menos (1) año de experiencia en la Rama, o Haber aprobado dos (2) años de estudios en educación superior y tener cuando menos tres (3) años de experiencia en la Rama, o Poseer diploma en educación media y tener cuando menos cinco (5) años de experiencia en la Rama.
Auxiliar judicial, secretario oficial mayor y escribiente en cabecera de distrito judicial.	9	Haber aprobado cuatro años de estudios en educación superior, o Haber aprobado tres años de estudios en educación superior y tener cuando menos tres (3) años de experiencia en la Rama, o Poseer diploma en educación media y tener cuando menos cinco (5) años de experiencia en la Rama.

Secretario y oficial mayor en cabecera de circuito y otras sedes.	9	Haber aprobado tres (3) años en estudios en educación superior, o Haber aprobado dos (2) años de estudios en educación superior y tener cuando menos dos (2) años de experiencia en la Rama, o Poseer diploma en educación media y tener cuando menos cuatro (4) años de experiencia en la Rama.
Archivero.	9	Haber aprobado dos (2) años de estudios en educación superior en bibliotecología, o Haber aprobado un año de estudios en educación superior en bibliotecología y tener cuando menos un año de experiencia.
Auxiliar judicial y oficial mayor.	8	Haber aprobado dos (2) años de estudio en educación superior, o Haber aprobado un (1) año de estudios en educación superior y tener cuando menos dos (2) años de experiencia en la Rama, o Poseer diploma en educación media y tener cuando menos cuatro (4) años de experiencia en la Rama.
Escribiente, asistente social y oficial mayor.	7	Haber aprobado un año de estudios en educación superior o Poseer diploma en educación media y tener cuando menos dos (2) años de experiencia en la Rama.

Oficinista y escribiente.	6	Poseer diploma en educación media o Haber aprobado cinco años de educación, media y tener cuando menos dos (2) años de experiencia en la Rama, o Poseer diploma en secretariado comercial y tener cuando menos tres (3) años de experiencia en la Rama.
Oficinista y escribiente.	5	Poseer diploma en educación media, o Haber aprobado cinco (5) años de educación media y tener cuando menos un (1) año de experiencia en la Rama.
Auxiliar de servicios generales, escribiente y citador.	4	Poseer diploma en educación media, o Haber aprobado cuatro (4) años de educación media y tener cuando menos dos (2) años de experiencia en la Rama.
Citador y auxiliar de servicios generales.	3	Haber aprobado cuatro (4) años de educación media, o Haber aprobado tres (3) años de educación media y tener cuando menos tres (3) años de experiencia en la Rama.

"Parágrafo 1. Los empleados de que trata el artículo 201 del presente Decreto, que no reúnan los requisitos exigidos en este artículo, les serán aplicables las siguientes equivalencias:

"Un año de educación superior por dos años de experiencia relacionada y viceversa.

"Un año de educación media por un año de experiencia relacionada y viceversa.

"Un año de educación básica por un (1) año de experiencia relacionada y viceversa. Esta última equivalencia será aplicable a los cargos de que trata el artículo 4º del Decreto número 1190 de 1986.

"Parágrafo 2. Se entenderá por educación superior la adelantada en ciencias jurídicas, sociales o económicas, en instituciones debidamente reconocidas.

"Artículo 205. Para efectos de la experiencia relacionada se tendrán en cuenta los servicios prestados en las fiscalías.

"Artículo 206. Para el ingreso en la carrera judicial, los actuales jueces de la República podrán solicitar su inscripción para lo cual deberán acreditar:

"a) Los requisitos constitucionales exigidos para el cargo;

"b) Experiencia no inferior a cuatro años en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público;

"c) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, y

"d) Fotocopia auténtica del pasado judicial vigente.

"Artículo 207. Los actuales Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de Distrito Penal Aduanero y de los tribunales administrativos podrán solicitar su inscripción en la carrera judicial, para lo cual deberán acreditar:

"a) Los requisitos constitucionales exigidos para el cargo;

"b) Experiencia en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público no inferior a ocho (8) años;

"c) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación;

"d) Fotocopia auténtica del pasado judicial vigente.

"Artículo 208. La solicitud de inscripción en la carrera judicial deberá presentarse ante el Ministerio de Justicia, División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional, o remitirla por correo certificado, a más tardar, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de vigencia del presente Decreto acompañando a ésta los documentos correspondientes.

"Artículo 209. El Ministerio de Justicia decidirá, mediante resolución motivada si acepta o niega la inscripción en la carrera. Contra esta resolución, que se notificará en la forma establecida en el Código Contencioso Administrativo, sólo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro del término que el mismo código señala.

"El Ministerio podrá tomar en cuenta para su decisión los informes que le suministren tanto las entidades públicas como las asociaciones de abogados. En el evento de que contra el funcionario o empleado judicial se esté adelantando alguna investigación disciplinaria, el trámite de inscripción en la carrera podrá aplazarse hasta cuando la investigación culmine.

"En ningún caso podrá ser inscrito en la carrera el funcionario judicial que haya sido destituido o suspendido por una vez por treinta días o más, o por dos veces que sumadas sean iguales o superiores a treinta días, o sancionado tres o más veces cualquiera que sea la naturaleza de la sanción.

"Artículo 210. En ningún caso podrá ser inscrito en la carrera el empleado judicial que haya sido destituido, o suspendido por una vez por treinta o más días, o por dos veces que sumadas sean iguales o superiores a treinta días; o sancionado tres veces, cualquiera que sea la naturaleza de la sanción, salvo el caso contemplado en el artículo 103 del Decreto número 250 de 1970.

"Artículo 211. La Procuraduría General de la Nación, a través de la División de Registro y Control, expedirá el certificado de antecedentes disciplinario, en un plazo máximo de veinte días hábiles, a partir de la fecha de recibo de la solicitud. El certificado deberá referirse a los últimos cinco años. En caso de que el funcionario o empleado judicial haya sido sancionado disciplinariamente, deberá anexar al certificado copia autenticada de la respectiva providencia. Si hubiere una investigación en curso, ésta circunstancia y los hechos que la han originado se harán constar en el certificado.

"Si el certificado fuere expedido dentro del término fijado en este artículo, el peticionario deberá presentar constancia de que lo solicitó en tiempo.

"Artículo 212. Mientras el Ministerio de Justicia decide sobre la solicitud de inscripción en la carrera, el empleado judicial gozará de estabilidad en el cargo que desempeña pero sólo hasta el vencimiento del período judicial del nominador y no podrá ser removido en ese tiempo sino por causas legales y mediante el procedimiento señalado en el presente Decreto.

"Igualmente se hace extensivo este derecho en los casos en que el empleado no reúna los requisitos exigidos o no haya efectuado la solicitud de ingreso a la carrera dentro del tiempo señalado en este estatuto.

"Artículo 213. El empleado que se encuentre en la situación prevista en el inciso segundo del artículo anterior que posteriormente reúna los requisitos establecidos en el artículo 204 de este Decreto, tendrá derecho a solicitar su inscripción en la carrera judicial, previo cumplimiento de los requisitos sobre concursos consagrados en el presente Decreto.

"Artículo 214. El funcionario judicial que no hiciere la solicitud de inscripción en la carrera, de conformidad con las disposiciones transitorias establecidas en este Decreto, podrá posteriormente ingresar a ella, previo el cumplimiento de las condiciones sobre concursos señaladas en el presente estatuto.

"Artículo 215. El funcionario o empleado judicial inscrito en la carrera gozará de estabilidad y tendrá derecho a ser promovido a cargos de superior categoría, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto y no podrá ser removido sino por causas legales y mediante los procedimientos establecidos en el mismo.

"Artículo 216. La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, directamente o por medio de las procuradurías regionales o de las oficinas seccionales, velará por el estricto cumplimiento de las disposiciones contempladas en el presente capítulo.

"Artículo 217. Los funcionarios que incumplan las obligaciones que consagra el presente capítulo incurrirán en causal de mala conducta sancionable de acuerdo con las normas legales vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

"Artículo 218. Los empleos de los despachos judiciales creados por el Decreto número 3822 de 1985, no son de carrera judicial.

"Artículo 219. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su promulgación, modifica en lo pertinente el Decreto extraordinario número 250 de 1970, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase,

"Dado en Bogotá, D. E., a 29 de julio de 1986.

BELISARIO BETANCUR

"El Ministro de Justicia, *Enrique Parejo González*, El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, *Ericina Mendoza Saladen*".

La demanda.

Aunque se trata de un escrito confuso, la mayor parte de cuyos argumentos versan sobre la inconveniencia del estatuto objeto de acción, se puede concluir que los principales cargos formulados en la demanda son los siguientes:

1. Violación de los artículos 17 y 39 de la Constitución Nacional por haber establecido requisitos excesivos para desempeñar cargos cobijados por la carrera judicial, la cual, según el pensamiento del demandante vulnera la libertad de trabajo.

2. Violación del artículo 142 de la Constitución, a cuyo tenor los funcionarios del Ministerio Público tendrán la misma categoría, remuneración, privilegios y prestaciones de los magistrados y jueces ante quienes ejercen sus cargos, toda vez que el Decreto acusado excluyó de su régimen a aquellos empleados.

3. Exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas, por cuanto éstas se referían a la revisión, reforma y funcionamiento del estatuto de la carrera judicial, en tanto que el Decreto acusado (artículos 93, 176 y 181) estableció asesorías con el Departamento Administrativo del Servicio Civil.

4. Violación de la Constitución no dice en cuáles de sus normas por haber creado y establecido la Escuela Judicial sin especificar si se trata de establecimiento público o de otro tipo de entidad administrativa.

5. Violación del artículo 76, ordinal 9º de la Constitución, "pues solamente por ley se puede reformar la estructura de la administración y crear escuelas como entes públicos o entidades públicas". A través de la Ley 52 de 1984 no se otorgó al Presidente facultad alguna para ello.

6. Extralimitación de las facultades extraordinarias en cuanto se dictaron varios decretos para desarrollarlas, en vez de un solo estatuto ordenado y coherente.

7. Violación del artículo 118, numeral 8° de la Carta por haber otorgado competencias al Tribunal Disciplinario (artículos 163 a 168), "lo que atenta contra el régimen estatuido y competitivo (sic) de ese alto Tribunal (...), pues esas facultades no se las otorgó el Congreso al Presidente, ni las preveía el Decreto número 250 de 1970, pues ahí (sic) al Tribunal Disciplinario solamente se le atribuye la competencia para investigar disciplinariamente a ciertos funcionarios de alto rango (art. 108 Decreto número 250 de 1970)".

8. Exceso en el uso de las facultades extraordinarias por haberse establecido que el Consejo Superior de la Escuela Judicial enviará a los tribunales la lista de los seleccionados para la carrera (Capítulo V Decreto número 2400/86, artículos 62 y ss.), "limitando la libre facultad de las corporaciones para elegir sus jueces, los que se convierten en vitalicios e inclusive se establece que si el rendimiento no es bueno este Consejo de por sí inconstitucional crado (sic), puede excluir al funcionario de las listas, lo que lo convierte implícitamente en un nuevo nominador de jueces".

9. Extralimitación de las facultades otorgadas por haber adicionado el presupuesto nacional para la Rama Jurisdiccional.

Concepto del Procurador General de la Nación

El señor Procurador General de la Nación, mediante oficio 1094 de noviembre 7 de 1986, expresa:

1. Los términos "revisar, reformar y poner en funcionamiento", con los cuales fueron otorgadas las facultades extraordinarias no equivalen a hacer un nuevo estatuto de la carrera judicial, puesto que la revisión y reforma no implica necesariamente la derogación de todas las normas anteriores, sino apenas de aquéllas incompatibles con las nuevas.

2. La ley de facultades no dispuso que éstas se desarrollaran en un decreto único.

3. No es cierto que el estatuto de la carrera judicial se haya expedido en varios decretos, sino que las reformas sustanciales de la carrera están comprendidas en el Decreto número 2400 de 1986.

4. Solamente algunos artículos del Decreto demandado "se ajustan al concepto de violación sustentado por el demandante".

5. La asesoría de una entidad estatal especializada en el manejo de la carrera de los empleados públicos, como lo es el Departamento Administrativo de Servicio Civil, además de conveniente, no es ajena sino que desarrolla las facultades extraordinarias, pues representa un medio para poner en funcionamiento la carrera.

6. Todo lo pertinente a la Escuela Judicial concierne a la carrera y, por tanto, los artículos que a ella se refieren, así como los relativos al Consejo Superior de la Escuela Judicial como organismo directamente relacionado con la carrera judicial, no exceden las facultades conferidas.

7. El régimen disciplinario hace parte de toda carrera y, por tal razón, consagrar nuevos trámites procesales y competencias (artículos 163 a 168 del Decreto), no propasa las precisas facultades conferidas por la Ley 52 de 1984.

8. Citando jurisprudencia de la Corte (sentencias del 4 de abril de 1974 y 13 de Noviembre de 1975) afirma que la ley sí podía asignar funciones al Tribunal Disciplinario.

9. El artículo 79 del Decreto número 2400 de 1986, al ordenar que en el Presupuesto de la Rama Jurisdiccional se incluyan las partidas necesarias para la capacitación del personal judicial, no lo adiciona, como pretende el actor, sino simplemente establece unas indicaciones para su adecuada distribución, lo que no es ajeno a la autorización de "poner en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial".

10. El Decreto fue expedido dentro del tiempo señalado por la ley de facultades.

11. Sobre la posible violación de los artículos 17 y 39 de la Constitución expresa:

"El actor plantea la infracción de los artículos 17 y 39 de la Carta, haciendo comentarios sobre los requisitos exigidos por el Decreto número 2400 de 1986 a los empleados judiciales y poniendo algunos ejemplos, pero sin determinar cuál es la disposición del Decreto acusado que viola dichas normas superiores. Aunque puede deducirse que el artículo en cuestión es el 204 del Decreto demandado, el Despacho considera que la Corte no puede pronunciarse sobre el particular, por cuanto el numeral 3º del artículo 16 del Decreto número 432 de 1969 señala que la demanda debe contener 'las razones' de violación, las cuales deben lógicamente referirse a una norma en particular y no a la totalidad del Decreto, ya que el artículo 214 de la Constitución prevé la acción de inexequibilidad por acusación ciudadana y no como una atribución oficiosa de la Corte".

12. No acoge el concepto del demandante en cuanto a violación de la Carta, por no incluir a los funcionarios del Ministerio Público.

Dice así el Procurador:

"El Despacho no comparte la opinión del actor en el sentido de que las citadas disposiciones infringen los artículos 142 y 162 de la Carta, por no incluir al Ministerio Público, ya que el artículo 2º del Decreto acusado, al ocuparse exclusivamente de los funcionarios y empleados judiciales, en nada se opone al mandato del artículo 142 de la Constitución que consagra la igualdad en categorías, remuneraciones y privilegios entre los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y los del Ministerio Público y el artículo 197 del mismo Decreto, no desconoce al personal del Ministerio Público, porque remite la reglamentación de la correspondiente carrera a una normatividad posterior, lo cual, como ya se expresó al analizarse las facultades, no estaba prohibido por la Ley 52 de 1984. Por otra parte, el artículo 205 del Decreto número 2400, en lugar de ignorar al Ministerio Público, reitera su importancia, al tener en cuenta el servicio prestado en las fiscalías, como experiencia para el ejercicio de cargos en la Rama Jurisdiccional. Finalmente, respecto del artículo 162 superior, el actor no explica porqué razón los citados artículos lo violan, ni el Despacho encuentra ninguna razón de infracción ya que dicha norma otorga a la ley la

atribución de establecer la carrera judicial y para reglamentar 'los sistemas de concurso para la selección de los candidatos que hayan de desempeñar los cargos judiciales y los del Ministerio Público, las jubilaciones', etc., lo cual no se opone a que la carrera judicial y del Ministerio Público sean previstas en diferentes decretos".

13. Dice el Agente del Ministerio Público que, en su opinión, es procedente la decisión inhibitoria en cuanto a los cargos formulados contra los artículos 62 y siguientes del Decreto número 2400 de 1986, por no determinar exactamente cuáles son los textos acusados.

El Procurador solicita que se declaren exequibles los artículos 73, 79, 93, 100, 119, 163 a 168, 175, 176 a 181 y 219 del Decreto número 2400 de 1986, "pero sólo en cuanto a facultades se refieren (sic)".

Pide igualmente que se declaren exequibles los artículos 2°, 197 y 205 del mismo Decreto y que respecto de los demás artículos se inhiba la Corte de pronunciarse.

Consideraciones de la Corte

1. *Competencia.*

Por razón de la naturaleza del Decreto acusado, es la Corte Suprema de Justicia el Tribunal competente para fallar en forma definitiva sobre su constitucionalidad, según lo dispone el artículo 214 de la Carta.

El Decreto número 2400 de 1986 fue objeto de varias demandas, una de las cuales –la que ha dado origen al presente proceso– versa sobre la totalidad de sus disposiciones.

La demanda fue presentada el día 22 de septiembre de 1986 y admitida mediante auto de fecha 3 de octubre del mismo año, cuando el Decreto acusado se encontraba en plena vigencia.

Repartido el expediente, se elaboró la respectiva ponencia que fue registrada el 2 de diciembre de 1986 y adoptada por la Sala Constitucional el 3 de diciembre.

El 13 de enero de 1987, en ejercicio de las mismas facultades extraordinarias con apoyo en las cuales se había dictado el Decreto número 2400 de 1986 (Ley 52 de 1984), el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 052 de 1987, que derogó expresamente el 2400 de 1986, salvo sus artículos 67, 188 a 194, 201, 206 y 207, exceptuados en el artículo 142 del nuevo Estatuto, el cual dispuso, además, que regiría a partir de su publicación en el "Diario Oficial", ocurrida en la misma fecha.

Se encuentra entonces, que al momento de ser derogado el Decreto número 2400 de 1986, la Corte ya había asumido el conocimiento sobre su constitucionalidad y gozaba, por tanto, de la plena competencia para fallar al respecto, sin que de ella pudiera ser despojada por la actuación posterior del Ejecutivo ni del Legislador ordinario.

En efecto, según el claro texto del artículo 214 de la Constitución, corresponde a la Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y de los decretos leyes que allí se indican *"cuando fueren acusados* ante ella de inconstitucio-

nalidad por cualquier ciudadano". De tal modo que si, habiéndose incoado y admitido la demanda durante la vigencia de la norma, se sucede la derogatoria de ella antes del fallo, no puede la Corte Suprema de Justicia dejar de pronunciarse, toda vez que en su cabeza se ha radicado ya la competencia.

Siendo ello así, entrará la Corte a decidir sobre la demanda que dio lugar al presente juicio de constitucionalidad.

2. *El asunto objeto de la demanda.*

Como lo expresa el señor Procurador en su concepto, el Gobierno Nacional ejerció las facultades dentro del término de dos años previsto por el artículo 1° de la Ley 52 de 1984 y, por tanto, en ese aspecto se cumplieron a cabalidad las prescripciones constitucionales.

Un análisis de la demanda permite concluir que ella versa sobre la totalidad de las normas integrantes del Decreto, si bien los cargos sustentados por el demandante aluden a algunos de sus artículos y en ocasiones no precisan en forma exacta las razones de la acusación.

No obstante lo anterior, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto número 432 de 1969, procede la Corte a confrontar todas las disposiciones acusadas con la totalidad de los preceptos de la Constitución, a fin de pronunciarse definitivamente sobre si aquéllas son o no constitucionales.

Se examina ante todo la materia propia de las facultades extraordinarias. Fueron ellas conferidas al Presidente de la República por la Ley 52 de 1984, cuyo artículo 1° dice textualmente:

"LEY 52 DE 1984
(Diciembre 28)

"Por la cual se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República

"El Congreso de la República de Colombia

D E C R E T A:

"Artículo 1° De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de dos (2) años para:

"

"3° Revisar, reformar y poner en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial.

"

"Código y estatuto.

"El ataque fundamental contra la integridad del Decreto número 2400 de 1986 consiste en afirmar que las facultades se otorgaron al Presidente de la República para

que revisara, reformara y pusiera en funcionamiento el estatuto de la Carrera Judicial y que ello ha debido hacerse a través de un solo cuerpo normativo, pero que el Gobierno extralimitó esas autorizaciones al dictar varios decretos, uno de los cuales es el demandado.

"Arguye el actor que en esta ocasión se dan idénticos motivos a los que se tuvieron en cuenta por la Corte para declarar la inexequibilidad de los Decretos números 1853 de 1985 y 056 de 1986, por medio de los cuales el Gobierno había desarrollado parcialmente las facultades extraordinarias que le concedió la misma Ley 52 de 1984 para expedir un Código de Procedimiento Penal.

"Empero, esta Corporación no encuentra que puedan asimilarse los dos tipos de facultades, los cuales presentan ostensibles diferencias. En el caso que se invoca como precedente por el demandante, se hacía expresa referencia a la expedición de un código, al paso que en materia de carrera judicial, la atribución otorgada al Ejecutivo incluyó tanto la posibilidad de 'revisar' y 'reformar' un estatuto, como la de 'ponerlo en funcionamiento', todo lo cual puede requerir, dada su misma amplitud y diversidad, la expedición de varios actos.

"Nótese, además, cómo en el asunto que ahora estudia la Corte, el legislador ordinario para nada habló de expedir un Código sobre carrera judicial, sino de la revisión y reforma de un estatuto sobre ella. Es claro que tales conceptos (código y estatuto) no son sinónimos ni equivalentes, pues mientras el Código, según criterio que ha venido sentando la jurisprudencia constitucional, es un conjunto coherente y armónico de disposiciones sobre una materia, que se ordena en un solo cuerpo, el estatuto es el régimen jurídico que gobierna una determinada actividad o un ramo especializado, el cual puede estar integrado por normas de distintas leyes, decretos u otros textos jurídicos, sin que deban necesariamente estar compendiadas en un solo texto. Lo esencial es que todas ellas, aunque sean de distinta jerarquía, guarden entre sí homogeneidad, no en su pertenencia a un mismo Código, sino en su referencia o relación con el área de que se trata. Así pues, el concepto de 'estatuto' es bastante más amplio que el de Código y, por ende, no se deben confundir como evidentemente lo hace la demanda.

"En este orden de ideas, no es de recibo aplicar al Decreto número 2400 de 1986 la doctrina expuesta por la Corte en los fallos a que alude la demanda, razón por la cual este cargo de inconstitucionalidad no está llamado a prosperar.

"La protección al trabajo.

"Afirma también el demandante que todas aquéllas normas acusadas en las cuales se exigen requisitos mínimos para ingresar a la carrera judicial por parte de quienes desempeñan cargos en la Rama Jurisdiccional, son contrarias al orden constitucional en cuanto atentan contra la especial protección que, según el artículo 17 de la Carta, merece el trabajo.

"No lo considera así la Corte, puesto que la protección del trabajo no radica en la inexistencia de condiciones y aptitudes para obtener las garantías laborales que otorga la carrera en el ejercicio de los empleos, como la estabilidad y los ascensos. Es lógico que todo empleador, y más aún el Estado, en guarda de la eficiencia de los

servicios a su cargo, exija ciertos niveles de preparación, conocimientos o capacidades adecuadas a las distintas funciones que los empleados deben cumplir.

"Pero, además, no puede existir carrera alguna, ni administrativa ni judicial, que pueda prescindir de la determinación de requisitos para las distintas escalas que la integran, pues solamente a través de ellos se puede asegurar objetivamente y con la debida certeza, tanto para las entidades como para los empleados, cuál será la forma de ascender sobre la base de unas exigencias mínimas para lograrlo.

"Por tanto, si se confirieron facultades extraordinarias al Ejecutivo para poner en funcionamiento la carrera judicial y para revisar y reformar las disposiciones de su estatuto, es claro que se hallaba autorizado para señalar condiciones y requisitos para ingreso a la misma en los diversos cargos de la Rama Jurisdiccional.

"En consecuencia, ni se excedieron las facultades extraordinarias al fijarse los requisitos mínimos de los empleos, los cuales constituyen factor esencial de la carrera, ni se atentó contra la debida protección estatal que la Constitución exige para el trabajo.

"La autonomía de la Rama Jurisdiccional

"El artículo 1° del Decreto número 2400 de 1986 establece que todos los cargos de la Rama Jurisdiccional, salvo las excepciones que allí mismo se enuncian 'deben ser provistos por el sistema de mérito contemplado en el presente Decreto'.

"A lo largo de todo el estatuto se desarrolla lo que se entiende por tal sistema de mérito y se preceptúa cuál ha de ser su funcionamiento, así como los órganos a los cuales se confía.

"Por ejemplo, el artículo 19 subraya que con base en el sistema de mérito previsto para la promoción del personal inscrito en la carrera, la Escuela Judicial elaborará listas de elegibles para la provisión de los empleos vacantes.

"El artículo 44 expresa que la Escuela Judicial deberá realizar concursos de manera permanente con el fin de mantener listas de elegibles vigentes y suministrarlas a las correspondientes autoridades nominadoras cuando deban proveer vacantes.

"El artículo 50 señala que durante la vigencia de las listas de elegibles (dos años, al tenor del artículo 45), toda vacante definitiva deberá proveerse con personas que figuren en ella, siempre que se trate del cargo para el cual se concursó.

"El artículo 53 dice que cuando se trate de empleados, la autoridad nominadora deberá nombrar en período de prueba a los aspirantes que hayan ocupado los cinco primeros puestos de la lista, la cual deberá actualizarse o renovarse a medida que sean designadas estas personas.

"El artículo 60 dispone que los nombramientos en propiedad de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional se harán por las corporaciones competentes, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial, entre quienes ocupen los cinco (5) primeros puestos, las que serán elaboradas con base en los concursos realizados para el efecto.

"El artículo 61 expresa que la elaboración de listas para los cargos de Magistrado de Tribunal, se harán teniendo en cuenta que quienes las integren, además de llenar los requisitos constitucionales y legales, hayan desempeñado cualquiera de los correspondientes cargos en el respectivo departamento o que sean oriundos de él.

"El artículo 62 ordena al Consejo Superior de la Escuela Judicial enviar a la respectiva autoridad nominadora las listas de las personas seleccionadas, por riguroso orden de mérito.

"Dice el artículo 63:

"Con la debida antelación, cuando se trate de iniciación de período, el Consejo Superior de la Escuela Judicial enviará a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los Tribunales Administrativos y Superior de Aduanas, las listas de personas que reúnan calidades y condiciones para ser designados magistrados o jueces.

"Con miras a la integración de las salas de los tribunales, los candidatos a magistrados se clasificarán por especialidades, en las distintas disciplinas del derecho.

"En las listas para la designación de jueces, se clasificarán los candidatos por categorías y disciplinas jurídicas. Igualmente el Consejo Superior de la Escuela Judicial podrá integrar listas para grupos de juzgados, clasificados éstos según su ubicación geográfica.

"Y agrega el 64:

"Cuando se produzca una vacante, la respectiva autoridad nominadora solicitará la lista de elegibles al Consejo Superior de la Escuela Judicial, la cual le deberá ser remitida al presidente de la Corporación, quien la someterá a consideración de la entidad en pleno.

"Los artículos 23 a 59 del Decreto establecen el proceso de selección para el ingreso a la carrera judicial, cuya dirección y administración corre a cargo de la Escuela Judicial y su Consejo Superior (artículo 20), así como para la elaboración de las listas de elegibles que luego se enviarán, según lo ya dicho, a las autoridades nominadoras.

"El artículo 93 añade que la Escuela Judicial elaborará los modelos de formularios, determinará la ponderación de los factores e impartirá las instrucciones necesarias para la adecuada y oportuna calificación de servicios, con la asesoría del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

"En general, todas las normas de los Capítulos I, II, III, IV y V están orientadas a configurar el sistema de carrera judicial sobre la base de concursos que habrán de adelantarse a cargo y bajo la dirección de la Escuela Judicial y establecen que los nombramientos y elecciones tanto de empleados como de funcionarios, se harán de listas elaboradas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial según los principios del sistema de mérito fijados en el mismo Decreto. El capítulo VI señala el escalafón aplicable a los funcionarios judiciales de carrera, al paso que el Capítulo XV contempla el sistema de información de personal, también a cargo de la Escuela

Judicial, entidad ésta que, según expresa el artículo 177, deberá llevar estadísticas continuas sobre los servidores judiciales, las cuales servirán de base para la elaboración de diagnósticos que permitan definir políticas y desarrollar programas destinados a una mejor utilización de los recursos humanos al servicio de la Rama Jurisdiccional. Dice el 178 que todas las autoridades y corporaciones judiciales, debidamente orientadas por la Escuela Judicial, con la asesoría del Departamento Administrativo del Servicio Civil, están obligadas a participar en la elaboración de dichas estadísticas. Y agrega el 179 que 'a todo funcionario o empleado judicial deberá llevársele en la Escuela Judicial un registro individual debidamente actualizado' y que todas las autoridades judiciales están obligadas a proveer los documentos que con ese objeto 'se les soliciten dentro de los plazos y condiciones que se estipulen', bajo apremio de sanciones disciplinarias. Si bien no se expresa cuál sea la entidad competente en estas materias, parece concluirse que ellas estarían a cargo de la Escuela Judicial, ya que es a dicha entidad a la que se confía la dirección y manejo de la información sobre personal.

"El artículo 112, literal k), del Decreto número 2400, señala como deber de los funcionarios y empleados judiciales, el de poner en conocimiento del Consejo Superior de la Administración de Justicia, por intermedio de la División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional del Ministerio de Justicia, los hechos que puedan perjudicar la administración de justicia y las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio.

"Las normas a las que se acaba de hacer referencia y aquéllas que las complementan, tienen por elemento común el de establecer limitaciones al libre ejercicio de la autonomía nominadora y al manejo del personal perteneciente a la Rama Jurisdiccional del poder público. En todas ellas, invariablemente, aparece la Escuela Judicial como el organismo a cuyas listas, en unos casos, directrices, pautas y orientaciones, en otros deben someterse las autoridades y corporaciones judiciales, bajo el apremio de sanciones disciplinarias.

"Interpretadas en su conjunto, las disposiciones enunciadas representan la estructuración de la carrera judicial bajo la dirección y administración de la Escuela, cuyas funciones, según esos preceptos, van mucho más allá de las puramente formativas del personal que preste sus servicios a la Rama Jurisdiccional. Considera la Corte que son, más bien, funciones de nominación, dirección, manejo y calificación de dicho personal, e inclusive de injerencia en las actividades administrativas y nominadoras de las corporaciones y autoridades judiciales.

"La Escuela Judicial fue creada por el artículo 46 del Decreto número 250 de 1970, con el fin de capacitar en forma especializada a los funcionarios y empleados, bajo la orientación del Consejo Superior de la Administración de Justicia. Sin determinar cuál era su naturaleza, allí mismo se dijo que la organización y funcionamiento se dispondrían 'por decreto reglamentario'.

"Mediante Decreto número 1373 de abril 12 de 1986, expedido con apoyo en las ya mencionadas facultades extraordinarias de la Ley 52 de 1984, se organizó la Escuela Judicial 'Rodrigo Lara Bonilla', como una Dirección General del Ministerio de Justicia.

"De lo anterior se deduce que es equivocada la afirmación del demandante en el sentido de que la Escuela Judicial haya sido *creada* por el Decreto número 2400 de 1986, razón por la cual carece de todo fundamento una posible inconstitucionalidad de ese decreto por modificar sin facultades la estructura de la administración nacional (art. 76, ordinal 9º, C. N.).

"En cambio, sí encuentra la Corte que es fundada la inquietud del actor en cuanto a la infracción de las normas constitucionales sobre separación de funciones y autonomía de una de las ramas del poder público, teniendo en cuenta las amplísimas atribuciones que el Decreto número 2400 de 1986 confiere a la Escuela Judicial y la dependencia que respecto de ella establecen varios de los artículos ya citados.

"En efecto, dispone el artículo 55 de la Constitución, que el Congreso, el Gobierno y los jueces tienen funciones separadas, aunque colaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado.

"Esa estructura tiene por objeto primordial el de impedir la concentración de poderes o facultades, estableciendo, a la manera como lo exponía el Barón de Montesquieu, un sistema de controles y equilibrios ('Checks and balances'), que necesariamente implica diferenciación y autonomía funcional para garantía de los gobernados.

"Bien es cierto que la evolución de las ideas jurídicas y políticas, así como los enormes desafíos a los que debe responder el Estado contemporáneo, en especial en los aspectos económicos y sociales, han dejado atrás la teoría extrema de la *división de poderes*, y, poco a poco, se ha ido reemplazando ese concepto absoluto por el moderado, que implica un *armónico equilibrio* y mutuo apoyo entre quienes ejercen el poder público para alcanzar los objetivos del bien común. Tal es la concepción plasmada en la Carta política colombiana, que se refleja no solamente en la ya señalada expresión del artículo 55, sino que se desprende de su contexto general.

"No obstante lo anterior, la necesaria autonomía entre las ramas del poder, sigue constituyendo preciosa garantía democrática que no resulta anulada por la colaboración armónica y que, en cambio, aparece conculcada cuando una rama del poder público depende de otra para el ejercicio de sus funciones.

"Tal es el caso de las aludidas disposiciones del Decreto número 2400 de 1986, todas las cuales, por consagrar verdaderas imposiciones de la Escuela Judicial (Organismo dependiente del Ejecutivo) sobre las autoridades y corporaciones jurisdiccionales, desconocen de manera flagrante el principio de independencia y autonomía entre las ramas del poder y violan, por tanto, el artículo 55 constitucional.

"Considera la Corte que la norma del artículo 162 de la Constitución, que obliga a la ley a establecer la carrera judicial y que le ordena reglamentar los sistemas de concurso para la selección de los candidatos que hayan de desempeñar los cargos judiciales, no conlleva autorización para que el legislador deje dicha carrera y los sistemas de concurso en manos de una oficina o repartición subalterna de la Rama Administrativa, ni para plasmar excepciones al mandato del artículo 55, ya que ellas tan solo caben por la vía de reforma constitucional, mas no por medio de leyes.

"La autonomía de las autoridades o corporaciones nominadoras está tutelada, además del mencionado precepto, en los artículos 156 y 158 de la Constitución.

"Dice el primero que los magistrados de los tribunales 'serán elegidos *por la Corte Suprema de Justicia de entre los ciudadanos que reúnan las condiciones del artículo anterior* (155)' (Se subraya). Manifiesta el segundo que los jueces 'serán elegidos para períodos de dos años por el Tribunal Superior del respectivo distrito', sin agregar nada sobre posibles ternas o listas provenientes de órganos distintos.

"Por tanto, también esas normas resultan violadas por los artículos que se comentan.

"Por otra parte, en cuanto a los cargos respecto de los cuales, la Constitución enuncia los requisitos indispensables para su desempeño, como sucede con los Magistrados de Tribunales Superiores (art. 155 C.N.), los jueces superiores, de circuito, de menores, especializados y de Instrucción Criminal, (art. 157 C.N.) y los Municipales (art. 158 C.N.), no puede la ley cambiar las exigencias constitucionales, como sería por ejemplo el tiempo de experiencia señalado para desempeñar estos cargos, pues cualquier modificación de los enunciados preceptos debe producirse por Acto Legislativo expedido por el Congreso con las formalidades previstas en el artículo 218 de la Constitución.

"La única facultad que, en lo tocante con los expresados cargos, deja el Constituyente al legislador es la de indicar la forma en que se acreditan las calidades exigidas para desempeñarlos (art. 159 C.N.).

"Existe, pues, en numerosas disposiciones del Decreto número 2400 de 1986, un triple motivo de quebranto para el orden constitucional: la ruptura del equilibrio entre las ramas del poder público, el constreñimiento de los nominadores en cuanto se los obliga a sujetarse a listas previamente elaboradas para proceder a nombramientos y elecciones, y la modificación de requisitos previstos en la Carta para el desempeño de ciertos cargos, lesionando de contera el derecho de los ciudadanos que cumpliéndolos, estarían en condiciones de acceder a la función pública jurisdiccional. Si ello es así, la Corte declarará inexequibles todas aquellas disposiciones del Decreto que, en una u otra forma, atenten contra los enunciados principios.

La materia presupuestal

Dice el artículo 79 del Decreto número 2400 de 1986 que en el Presupuesto de la Rama Jurisdiccional deberán incluirse anualmente las partidas necesarias para financiar los programas de formación, adiestramiento y perfeccionamiento de los funcionarios y empleados judiciales.

En criterio de la Corte, esta norma implica una obligación permanente establecida en cabeza del Congreso y el Gobierno, respectivamente, al elaborar el proyecto y aprobar cada año la ley de Presupuesto.

Por tanto se está modificando la ley Orgánica de Presupuesto (artículo 76, ord. 3°, y 210 C.N.), lo cual puede hacer el legislador, tanto el ordinario como el extraordinario, pero en el caso de este último siempre y cuando haya sido expresamente facultado para ello, puesto que las facultades extraordinarias como deben ser

precisas, conforme a la Carta, son de interpretación restrictiva según ha sostenido la Corte en numerosos fallos.

Es evidente que, en el asunto objeto del presente proceso, tal autorización legislativa no existía. Verdad que la Ley 52 de 1984 dispuso en el artículo 4º: "Para dar cumplimiento a lo ordenado en esta ley, facúltase al Gobierno Nacional para realizar los traslados presupuestales indispensables y para abrir créditos y contracréditos".

El lenguaje de la norma transcrita, frecuente en leyes de facultades que demandan gastos adicionales, se interpreta como referente a la vigencia en curso (1984) pero en modo alguno como autorización legal para modificar, ni adicionar la ley normativa del Presupuesto.

De lo anterior se deduce que el citado artículo 79 infringe el ordenamiento constitucional por exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias (artículos 55 y 118, ordinal 8º C.N.) y por ello será declarado inexequible.

Disminución de la jornada laboral y rotación de juzgados

Dice el artículo 199 del Decreto número 2400 de 1986:

"En los juzgados ubicados en cabecera de Distrito Judicial, los jueces de común acuerdo, podrán reducir el horario de atención al público, hasta por dos horas diarias, sin disminuir la jornada laboral establecida en las normas pertinentes".

Y el 200, establece:

"Los directores seccionales de Instrucción Criminal podrán disponer la rotación de los juzgados de Instrucción Criminal, y el cambio de juzgados radicados en ambulantes, consultando las necesidades del servicio previamente establecidas.

"Los jueces en cuyos despachos, por virtud de la rotación, se incremente la planta de personal, deberán proveer los nuevos cargos con empleados pertenecientes al juzgado cuya nómina se redujo como consecuencia de dicha determinación".

Estas dos normas, independientemente de las consideraciones que en torno a su conveniencia o inconveniencia puedan hacerse –asunto que no compete a la Corte–, representan incursiones del legislador extraordinario en materias completamente ajenas a las previstas en la ley de facultades, pues en nada se relaciona la carrera judicial ni su funcionamiento con la reducción en el horario de atención al público, ni con la rotación de juzgados de Instrucción Criminal.

En consecuencia, las mencionadas disposiciones serán declaradas inexequibles por violación de los artículos 55 y 118, ordinal 8º de la Constitución Política.

Escalafón para funcionarios judiciales de carrera

Uno de los artículos del Decreto demandado, el 69, establece:

"Establécese el siguiente escalafón para los funcionarios judiciales de carrera:

– Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, Contencioso-Administrativo y Superior de Aduanas.

- Juez Superior de Distrito Judicial.
- Juez Superior de Aduanas.
- Juez de Menores.
- Juez de Circuito.
- Juez Laboral.
- Juez de Instrucción Penal Aduanera.
- Juez de Instrucción Criminal.
- Juez de Distrito Penal Aduanero.
- Juez Municipal.
- Juez Territorial.

Todo escalafón, por su misma naturaleza y por los objetivos que persigue, implica necesariamente grados o niveles, unos superiores a los otros. De modo que, tal como lo prevé el precepto transcrito, el Magistrado de Tribunal Superior tiene mayor jerarquía dentro del escalafón establecido, que el Juez Superior de Distrito Judicial y éste lo tiene respecto del Juez Superior de Aduanas, quien a su vez goza de mejor nivel que el Juez de Menores, y así sucesivamente.

Considera la Corte que la norma acusada introduce una jerarquización que no encuentra apoyo en disposiciones constitucionales y que, por el contrario, resulta diferente de la contemplada en el artículo 157 del Estatuto Fundamental.

En efecto, según dicha previsión superior, tienen el mismo nivel o categoría los jueces superiores, los de circuito, los de menores, los jueces especializados y los jueces de Instrucción Criminal. Más aún, después de mencionarlos y antes de referirse a los demás para consagrar por vía enunciativa la disposición sobre requisitos, el Constituyente utilizó las expresiones "de igual o superior categoría *a los indicados*" (subraya la Corte), con lo cual los dejó cobijados por la misma preeminencia o importancia.

Desde luego, el artículo acusado, cuando menos en lo referente a los niveles 2° a 9°, introdujo categorías que contrarían abiertamente el tenor del mandato constitucional.

Fuera de eso, la norma legal que se estudia, excluyó del escalafón a los jueces especializados, a los cuales menciona expresamente el artículo 157 de la Constitución, como pertenecientes a la misma jerarquía referida. Esta omición vicia de inconstitucionalidad el indicado precepto.

Escuela Judicial y control disciplinario

El artículo 161 del Decreto demandado pone en cabeza de la Escuela Judicial, que como ya se dijo es dependencia de la Rama Ejecutiva, una función que, a juicio de la Corte, rompe el equilibrio armónico previsto por el artículo 55 de la Constitución y viola también sus artículos 142 y 143, en cuanto atribuye a un organismo administrativo funciones propias de la Rama Jurisdiccional del Ministerio Público. Dice así el artículo que se comenta:

La Escuela Judicial y sus dependencias regionales o seccionales deberán llevar un libro especial de control disciplinario, en el cual se radicarán, en el orden de su presentación, las quejas que se formulen contra los empleados judiciales.

"El libro de que trata el inciso anterior deberá contener, por lo menos, la siguiente información: nombre del informante o del quejoso, nombre del empleado o empleados judiciales contra los cuales se formula la queja, fecha de presentación de la misma, naturaleza de los hechos, trámite dado a la queja, resultado de la investigación y determinación tomada".

Estima esta Corporación que no puede la ley atribuir el control disciplinario de los funcionarios y empleados judiciales a un organismo perteneciente a la Rama Ejecutiva, sin grave lesión de los preceptos constitucionales enunciados, por cuanto ello implica invasión de los terrenos que la propia Carta ha demarcado como propios del Ministerio Público y de aquéllos que, según la autonomía ya expuesta, corresponden a la Rama Jurisdiccional respecto de sus subalternos.

Por otra parte, la disposición legal que se ha transcrito infringe directamente el artículo 160, inciso 2° de la Carta, a cuyo tenor los magistrados y los jueces estarán sujetos a sanciones disciplinarias impuestas *por el respectivo superior* (subraya la Corte), en la forma que determine la ley. De lo cual se concluye que el legislador extraordinario rebasó su órbita de competencia, al atribuir a organismos diferentes la posibilidad de recibir quejas, tramitar investigaciones y ejercer control disciplinario sobre estos funcionarios.

Decisión

Con fundamento en las razones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y conocido el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

1° Decláranse INEXEQUIBLES las siguientes normas del Decreto número 2400 de 1986:

Los artículos 1° a 72, inclusive, de los Capítulos I a VI; los artículos 79 y 81 del Capítulo VII; los artículos 93 y 106 del Capítulo VIII; el artículo 112 literal k), del Capítulo X; los artículos 159 y 161 del Capítulo XIII; los artículos 176 a 181 del Capítulo XV; los artículos 184 y 185 del Capítulo XVI; los artículos 199 y 200 del Capítulo XVIII; y los artículos 206, 207, 208, 209, 212 y 213 del Capítulo XIX.

2° Decláranse EXEQUIBLES las demás disposiciones del mencionado Decreto.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera*, (Con salvamento de voto), *José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo* (Con salvamento de voto), *Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero* (Con salvamento de

voto), *Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar,* (Con salvamento de voto), *Rafael Romero Sierra,* (Con salvamento de voto), *Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía".*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria general

SALVAMENTO DE VOTO

Nuestro disentimiento se concreta al hecho de haberse pronunciado la Corte, mediante decisión de fondo, sobre normas derogadas o no vigentes al momento de la decisión, pues consideramos que en tal evento el pronunciamiento a tomar debió ser meramente formal o inhibitorio.

El criterio precedente, lo apoyamos en las razones siguientes:

1ª De manera constante y reiterada, por más de cincuenta años, ha sostenido la Corte que el fallo de inexequibilidad tiene el importante y singular efecto de dejar insubsistente la norma declarada como contraria a la Constitución, o en otros términos, la decisión de inexequibilidad no es otra cosa que la declaración jurisdiccional de que la ley acusada, por vulnerar o ser incompatible con la Constitución, no puede ejecutarse en lo sucesivo, pues de inmediato se produce su retiro del ordenamiento jurídico.

2ª Según el planteamiento precedente, la acción de inexequibilidad supone el cotejo de la Constitución con una norma vigente al momento de decidir la Corte, pues fuera de que los efectos del fallo en esta materia se proyectan sobre el futuro y no sobre pasado, de no existir norma vigente al momento del fallo no habría objeto sobre qué decidir, porque no resulta ser lógico que se ordene retirar de la normatividad lo que no existen lo que con antelación fue, retirado o había desaparecido.

Precisamente, la Corte, en fallo de 26 de abril de 1979, cuando abordó el tema de la acción de inexequibilidad de normas derogadas afirmó lo siguiente:

"En consecuencia, el objeto fundamental buscado con este control y, por tanto, de la acción de inexequibilidad, no es otro que hacer inaplicable la regla jurídica inconstitucional.

"Por lo mismo, la confrontación normativa en que consiste este control sólo es posible entre normas vigentes, una constitucional y otra legislativa. Y, no es lógico, pues carece de objeto, y no puede haber acción sin interés jurídico actual que la justifique, el que la Corte se pronuncie sobre validez de una norma derogada.

"Carecería de efecto un fallo teórico, de alcances puramente morales o docentes, extra-jurídicos, declarativos de la inconstitucionalidad de una disposición ya inexistente, inaplicable de suyo por estar derogada.

"De otra parte, cabe preguntarse si una tal declaración destruiría la seguridad jurídica que la Corte ha protegido con sus decisiones inhibitorias.

"En Colombia, la ley se presume constitucional e intangibles los efectos de su aplicación, como derechos bien adquiridos, mientras la Corte no la juzgue inconstitucional. Por eso, sus sentencias en este campo sólo puede tener efectos futuros, que no son sino la inaplicabilidad de la norma inexequible, como sanción jurídica del indebido ejercicio de la competencia constitucional del Gobierno o del Congreso, pero dejando a salvo las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de aquélla, en defensa de la seguridad jurídica y de la buena fe de los gobernados.

"La función de la Corte como guardiana de la Constitución es específica y exclusivamente judicial, aunque con implicaciones políticas, y no puede transformarse en la de un poder moral, directivo, que la Constitución no le atribuye. La excepción del estado de sitio, como lo dijo la Corte en fallo de octubre 20 de 1977, obedeció a razones distintas.

"Unicamente con esta interpretación se logra deslindar la inexequibilidad de fenómenos como la derogatoria y la declaración de nulidad a los cuales se la ha querido asimilar.

"Hay que agregar que la acción de inconstitucionalidad es una garantía efectiva, la garantía de las garantías, un poder correctivo y conservador de la Constitución y no una simple facultad moderadora del ejercicio de las demás competencias. De lo que se trata en el juicio de validez constitucional es de contener dentro de sus competencias al Ejecutivo y al Legislativo, prescindiendo de los actos que las desbordan, no por amonestaciones orientadoras sino con decisiones con efecto inmediato y no meramente declarativas de principios, de modo que la norma constitucional violada recobre o tenga la plenitud de su eficacia.

"El juez constitucional representa la voluntad del constituyente, sobrepuesta a la de los órganos que deben darle aplicación y desarrollo.

"De lo cual se desprende que la acción de inexequibilidad caduca o precluye respecto de las normas derogadas, pues pierde su razón de ser, su naturaleza de garantía, al perder actualidad la posible lesión sufrida por el orden jurídico que aquéllos transgredieron. Los efectos de la derogación eliminan dicha acción por innecesaria a los fines que le asigna la Constitución que es la de mantener su integridad".

Más adelante la Corte, en fallo de octubre 4/84, insistiendo en su posición y procurando hacer mayor claridad y precisión, sentó las reflexiones siguientes:

"*Segundo.* Con sus especiales características, que lo distinguen a otros modelos, el proceso de constitucionalidad de una norma legal tiene en ésta su específico objeto. Sobre él recae la correspondiente decisión judicial, y es él también uno de los elementos de la cosa juzgada, porque ésta se produce precisamente cuando se da la repetición del mismo objeto (*eadem res)* luego de haber sido materia de juicio y fallo anteriores, sobre su constitucionalidad.

"Consecuencia directa de la sentencia que declara la exequibilidad de una disposición legal, como resultado de su fidelidad a los preceptos constitucionales, es la permanencia de aquélla en la normatividad, para que produzca o siga produciendo todos sus efectos jurídicos. *Contrario sensu,* la inexequibilidad de la norma objeto del

juicio conduce inexorablemente a su retiro inmediato del ordenamiento jurídico, sus efectos cesan *ipso jure,* su entidad legal desaparece automáticamente, aunque como muchas veces se ha explicado, tales resultados ocurren *ex nunc.*

"Apenas elemental resulta, entonces, el presupuesto procesal de la existencia del objeto del juicio, esto es, que exista la norma sobre cuya constitucionalidad éste versará, y que habrá de recibir los efectos del fallo, para desaparecer o para subsistir, según el caso. Mal podría ser retirada de la ordenación legal una disposición que ya no forma parte de ella. Mal se podría decidir la extinción de una norma inexistente. Tal sería el caso de la declaratoria de inexequibilidad de un precepto legal desaparecido como consecuencia de derogación o figura de semejantes efectos. En ese sentido dícese que no hay objeto del proceso, ni del fallo, por lo tanto. De ahí la inevitable inhibición de la entidad sentenciadora, la cual no es otra cosa que su abstención para decidir acerca de la constitucionalidad de un objeto que ya no puede ser ni constitucional ni inconstitucional sencillamente porque no existe. En gracia del llamado magisterio moral podría pensarse en un simple dictamen sobre si la norma, en su momento, tuvo o no esa virtud, pero jamás en providencia que le permitiera seguir ejecutándose o dejar de ejecutarse, ya que ello significaría un resultado imposible, física y jurídicamente imposible por la inexistencia actual del objeto. Lo que el artículo 214 de la Carta ordena no es sólo que la Corte declare si la morma sujeta a su jurisdicción se ajusta o no a la preceptiva constitucional, sino que, además, resuelva su exequibilidad o su inexequibilidad y esto no puede ocurrir cuando no hay objeto para hacerlo.

"Es este un antiguo criterio de la Corte en el que se han apoyado numerosas decisiones de inhibición por el mismo motivo. Los casos en que pudiera pensarse que la Corporación ha introducido excepciones, por el contrario confirman su tradicional posición jurisprudencial al respecto. Tales serían:

"a) Las decisiones sobre exequibilidad de normas contenidas en decretos legislativos, porque han ocurrido sólo cuando éstas han adquirido permanencia en virtud de ley que así lo determina. Hay, pues, objeto actual en esas decisiones;

"b) Los fallos sobre preceptos de leyes o de códigos cuya vigencia haya sido aplazada por el legislador, porque esta circunstancia temporal no significa que aquéllas no existan como entidades legales. De ahí su condición de objeto actual para el pronunciamiento de la Corte;

"c) Las sentencias sobre normas transitoriamente suspendidas por decretos legislativos de estado de sitio, por la misma razón;

"d) Las decisiones relativas a proyectos de ley, ya que si bien éstos aún no tienen naturaleza ni fuerza legal, es la propia Carta la que establece su juzgamiento por la Corte, como excepción expresamente determinada;

"e) Los fallos sobre normas derogadas o subrogadas que habiendo sido materia de anterior inhibición por tal razón, revivan, ya que este hecho las determina como objetos de decisión, precisamente en cuanto vuelven a ser".

3ª Ahora bien, como se dijo *ab initio,* para que la Corte pueda decidir de fondo la acción de inexequibilidad contra una norma, ésta debe estar vigente al momento

de producirse el fallo. Por consiguiente, si con antelación a la decisión por la Corte la norma ha sido derogada, como ya no existe sobre qué decidir, o sea, ya no es posible retirar del derecho positivo lo que ciertamente ya está retirado, la decisión que corresponde tomar en esta hipótesis, que es lo que acontece con la gran mayoría de los artículos del Decreto número 2400 de 1986, es la inhibitoria.

El criterio que se acaba de exponer también lo ha sostenido la Corte de vieja data, como quiera que en fallo de 3 de noviembre de 1950, reiterado posteriormente en múltiples decisiones, ha afirmado, respecto de la acción de inexequibilidad, que "si al tiempo de fallar no están en vigor la ley o el Decreto acusados, el orden constitucional si bien temporalmente quebrantado, se ha restablecido automáticamente, ya que el acto violatorio no tendrá fuerza ni eficacia en el porvenir, y en tal evento, no persistiendo el menoscabo a la Norma Suprema, el fallo de la Corte no vendría a restablecer el Imperio de la Carta y no se cumpliría así la misión que ésta le señala. Podría decirse que cualquier decisión en tales condiciones no se dirigía a demostrar que el acto acusado es o no inconstitucional, sino que fue o no fue inconstitucional, lo cual... no se ajustaría al objeto que en sí tiene la acción de inexequibilidad".

4ª De conformidad con los planteamientos precedentes, no compartimos la decisión tomada por la Corte en el específico de haber decidido de fondo respecto de normas derogadas o que no estaban vigentes al momento de pronunciarse el fallo.

Fecha, *ut supra.*

Alberto Ospina Botero, Rafael Baquero Herrera, Jacobo Pérez Escobar, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.

ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL. COSA JUZGADA.

Estése a lo resuelto en sentencia del 3 de marzo de 1987, expediente número 1534.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 16.

Referencia: Expediente número 1536.

Norma demandada: Artículo 69 del Decreto número 2400 de 1986.

Demandante: *Orlando Alfonso Rodríguez Ch.*

Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 7 de 3 de marzo de 1987.

Bogotá, D. E., marzo tres (3) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

El ciudadano Orlando Alfonso Rodríguez Ch., en ejercicio del derecho conferido por el artículo 214 de la Carta Política, ha presentado ante la Corte demanda de inconstitucionalidad contra el precepto de la referencia, cuyo texto dice:

"DECRETO NUMERO 2400 DE 1986
(julio 29)

"Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial

"El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 52 de 1984, y oído el concepto de la Comisión Asesora creada en el artículo 3° de la mencionada Ley,

D E C R E T A:

".....

"Artículo 69. Establécese el siguiente escalafón para los funcionarios judiciales de carrera:

"– Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, Contencioso-Administrativo y Superior de Aduanas.
"– Juez Superior de Distrito Judicial.
"– Juez Superior de Aduanas.
"– Juez de Menores.
"– Juez de Circuito.
"– Juez Laboral.
"– Juez de Instrucción Penal Aduanera.
"– Juez de Instrucción Criminal.
"– Juez de Distrito Penal Aduanero.
"– Juez Municipal.
"– Juez Territorial".

La demanda

Las razones expuestas por el demandante, en apoyo de su acción son las siguientes:

"(...) el legislador, ordinario o extraordinario no tiene facultades para escalafonar en una gradación entre jueces superiores que ocuparían la cúspide de la pirámide, seguidos por el Juez Superior de Aduanas; quedando el Juez de Circuito en inferior categoría que el Juez de Menores, en una flagrante violación a la norma constitucional. El Juez de Instrucción Criminal, sin razones expuestas, ni mucho menos válidas, aparece en el fondo, en los escalones bajos de ese escalafón, en un indudable cercenamiento de sus derechos, a la par adquiridos con los otros cargos de funcionarios.

"Además, si se exigen las mismas condiciones personales y profesionales para ocupar cualquiera de estos cargos, ¿por qué se van a hacer discriminaciones de tipo laboral entre unos y otros? ¿Acaso ese pretendido escalafón no va a introducir diferencias de orden ascensional y prestacional entre los jueces de que trata el artículo 157 de la Constitución Nacional?

"Si la Constitución Nacional exige los mismos presupuestos para ser nombrado Juez en cualquiera de los cargos enunciados en el artículo que sirve de base a mi pretensión; y, tiene como validez los mismos para ser nombrado magistrado de Tribunal, según el artículo 155 del mismo estatuto, ¿de dónde acá el Gobierno Nacional, con facultades extraordinarias, pretende dar una diferenciación en la remuneración prestacional y ascensional a través de un escalafón?

"Hasta donde se entiende, escalafón significa en lengua castellana, la lista de sujetos pertenecientes a una institución, que son clasificados y por ende remunerados, según su grado, capacidad, función, méritos entre otros.

"En este orden de ideas se busca, a través del Decreto y artículo demandado desconocer la importancia de la función instructiva en el campo criminal que desarrollan los jueces que ahora pretenden dejar en el fondo del escalafón, creándose situaciones concretas de desestímulo; amén de una discriminación a todas luces rayanas en la inconstitucionalidad".

CONCEPTO DEL PROCURADOR

Mediante oficio 1098 del 24 de noviembre de 1986, emitió concepto el señor Procurador General.

Se transcriben los apartes esenciales:

"(...) no cabe la menor duda de que la disposición acusada distribuye en ocho niveles, los jueces que el artículo 157 de la Constitución, reúne en una sola línea ascensional, con lo cual se rompe el orden jerárquico instituido por la Carta Política, no caprichosamente, sino en razón de la similitud de funciones que ejercen los jueces de esta categoría intermedia, de acuerdo con su especialidad y competencia.

".....

"Por otra parte, cabe observar que no quedaron incluidos en el escalafón determinado por el artículo acusado, los jueces especializados, los cuales en cambio son nominados en el canon superior, a pesar de que actualmente tienen gran importancia, pues la Ley 2ª de 1984 creó jueces especializados de Distrito Judicial, 'competentes para investigar y fallar los siguientes delitos: secuestro extorsivo, extorsión, terrorismo y los conexos con éstos' (art. 12).

".....

"Por último, debe advertirse que los jueces tantas veces citados, a partir de la vigencia del Decreto número 717 de 1978, que estableció el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público, quedaron clasificados sin excepción con el mismo grado 17, con lo cual se consolidó una situación laboral creadora de derechos para todos los jueces que desempeñaban esos cargos antes de la vigencia del Decreto número 2400 de 1986, o sea el reconocimiento de iguales prerrogativas en dignidad, remuneración y ascensos.

"Por lo anterior, este Despacho estima que la norma demandada también infringe los artículos 17 y 30 de la Constitución, porque con el escalafón cuestionado el Estado disminuyó las prerrogativas de algunos jueces, incumpliendo la obligación de dar protección al trabajo y por ende al trabajador y violando los derechos adquiridos por leyes anteriores".

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal competente para decidir en el fondo sobre la demanda, por cuanto el artículo acusado forma parte de un decreto con fuerza de ley.

Cosa juzgada

Ya se pronunció la Corte sobre el artículo 69 del Decreto número 2400 de 1986 por medio de sentencia número 15 de fecha marzo 3 de 1987, recaída sobre la totalidad del Decreto número 2400 de 1986.

Por tanto, ha de acatarse el principio de la *Cosa juzgada.*

DECISIÓN

Con fundamento en las razones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y conocido el concepto del señor Procurador General,

DECIDE:

Estése a lo resuelto por la Corte en fallo de 3 de marzo de 1987, expediente número 1534.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía".*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

FUNCIONAMIENTO DEL ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL. COSA JUZGADA.

Estése a lo resuelto en la sentencia del 3 de marzo de 1987, expediente número 1534.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 17.

Referencia: Expediente número 1539.

Acción de inexequibilidad contra los artículos 14, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 206 y 207 del Decreto-ley número 2400 de 1986.

Actor: *Héctor Rodríguez Cruz.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobada por Acta número 7.

Bogotá, D. E., marzo tres (3) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Héctor Rodríguez Cruz presentó el 14 de octubre de 1986 ante esta Corte, demanda de inexequibilidad contra los artículos 14, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 206 y 207 del Decreto-ley número 2400 de julio veintinueve (29) de mil novecientos ochenta y seis (1986). Se admitió la demanda y se corrió traslado al Procurador General de la Nación, quien emitió el concepto de rigor. Se procede ahora a resolver el asunto.

II. Texto de la norma acusada

El texto de las normas acusadas es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 2400 DE 1986
(julio 29)

"Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial

"El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 52 de 1984, y oído el concepto de la mencionada ley,

".....

CAPITULO II

"Clases de nombramientos

"Artículo 3º .....

"Artículo 14. Cuando se trate del nombramiento de un empleado judicial y la lista de elegibles no estuviere conformada o hubiere perdido su vigencia, la autoridad nominadora podrá proveer el empleo mediante nombramiento provisional, hasta la fecha en que la persona seleccionada de la lista que suministre la Escuela Judicial tome posesión del cargo, o en su defecto, hasta el vencimiento del período del nominador.

"Los funcionarios judiciales de período fijo que no puedan ser seleccionados por el sistema de mérito, para un empleo de carrera por los motivos expuestos en el inciso anterior, podrán ser nombrados provisionalmente hasta el vencimiento del respectivo período. Dicho nombramiento perderá vigencia una vez la Escuela Judicial suministre la lista de elegibles, siempre que la persona seleccionada por el sistema de mérito haya tomado posesión del cargo.

".....

CAPITULO V

"Carrera Judicial y período fijo

"Artículo 60. Los nombramientos en propiedad de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional se harán por las corporaciones competentes, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial, entre quienes ocupen los cinco primeros puestos, las que serán elaboradas con base en los concursos realizados para el efecto.

"Artículo 61. La elaboración de listas para los cargos de Magistrados del Tribunal se hará teniendo en cuenta que quienes las integren, además de llenar los requisitos constitucionales y legales hayan desempeñado cualquiera de los correspondientes cargos en el respectivo departamento o que sean oriundos de él.

"Artículo 62. El Consejo Superior de la Escuela Judicial enviará a la respectiva autoridad nominadora las listas de las personas seleccionadas, por riguroso orden de mérito.

"Artículo 63. Con la debida antelación, cuando se trate de iniciación del período, el Consejo Superior de la Escuela Judicial, enviará a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los tribunales superiores de Distrito Judicial, los

tribunales administrativo y Superior de Aduanas, las listas de personas que reúnan calidades y condiciones para ser designados magistrados o jueces.

"Con miras a la integración de las salas de los tribunales, los candidatos a magistrados se clasificarán por especialidades, en las distintas disciplinas del derecho.

"En las listas para la designación de jueces, se clasificarán los candidatos por categorías y disciplinas jurídicas. Igualmente el Consejo Superior de la Escuela Judicial podrá integrar listas para grupos de juzgados, clasificados éstos según su ubicación geográfica.

"Artículo 64. Cuando se produzca una vacante, la respectiva autoridad nominadora solicitará la lista de elegibles al Consejo Superior de la Escuela Judicial, la cual le deberá ser remitida al presidente de la Corporación, quien la someterá a consideración de la entidad en pleno.

"Artículo 65. Los empleos de carrera de la Rama Jurisdiccional se proveen de la siguiente manera:

"a) Los de magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial y del Tribunal Superior de Aduanas, por la Corte Suprema de Justicia;

"b) Los de magistrado de Tribunal Administrativo, por el Consejo de Estado;

"c) Los de jueces, por designación del respectivo tribunal.

"Parágrafo 1. El Consejo Superior de la Escuela Judicial enviará con las listas de elegibles, un resumen de la hoja de vida de cada uno de los integrantes de las mismas.

"Parágrafo 2. La designación de los funcionarios vinculados a la Rama Jurisdiccional, por parte de las Corporaciones Judiciales se hará con la presencia de las dos terceras partes de sus miembros y con el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes.

"Artículo 66. Si la persona designada no acepta o no se posesiona dentro del término legal, la corporación judicial correspondiente elegirá su reemplazo de la misma lista de elegibles.

"Cuando por cualquier razón se desintegrare la lista de elegibles, la autoridad nominadora solicitará una nueva.

"Artículo 67. El funcionario judicial inscrito en la carrera al vencimiento del período correspondiente, tendrá derecho a ser nuevamente designado mediante nombramiento en propiedad por la respectiva autoridad nominadora, siempre que dentro de dicho período no haya tenido calificaciones de servicio insatisfactorias o recibido sanciones disciplinarias, de conformidad con el reglamento que se expida.

"Parágrafo. Para dar efectividad a lo dispuesto en el presente artículo, el presidente de la respectiva corporación judicial deberá someter a consideración de la entidad en pleno, el nombre de los funcionarios que se encuentren inscritos en carrera.

"Artículo 68. .....

CAPITULO XIX

"Disposiciones transitorias

"Artículo 206. Para el ingreso en la carrera judicial, los actuales jueces de la República podrán solicitar su inscripción para lo cual deberán acreditar:

"a) Los requisitos constitucionales exigidos para el cargo;

"b) Experiencia no inferior a cuatro años en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público;

"c) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, y

"d) Fotocopia auténtica del pasado judicial vigente.

"Artículo 207. Los actuales magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de Distrito Penal Aduanero y de los tribunales administrativos, podrán solicitar su inscripción en la carrera judicial, para lo cual deberán acreditar:

"a) Los requisitos constitucionales exigidos para el cargo;

"b) Experiencia en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público no inferior a ocho años;

"c) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación;

"d) Fotocopia auténtica del pasado judicial vigente.

"Artículo 208. .....".

III. Normas que se consideran infringidas

Considera el actor que resultan violados los artículos 2°, 55, 136, inciso 5, 148 inciso 4°, 139, 150, 155, 156, 157, 158 y 159, de la Constitución Nacional.

IV. Consideraciones de la demanda

El actor fundamenta la acción que aquí se estudia en las siguientes consideraciones:

1. Estima que el primer grupo de normas acusadas, es decir, los artículos 14 y 60 a 67, del Decreto número 2400 de julio 29 de 1986, es violatorio de los artículos 2°, 55, 136, 148 inciso 4°, 156, 157 y 158 de la Constitución Nacional porque ésta impone a la estructura de los poderes públicos el principio orgánico de su separación y de su ejercicio limitado al mismo texto.

Ocurre, según el actor, que el Decreto acusado al crear la carrera judicial, los procedimientos y los organismos que la manejarán, es el resultado de la extralimitación de las funciones del legislador. El que una dependencia del Ministerio de Justicia, del poder ejecutivo, maneje la carrera judicial, presupone que la elección de magistrados y jueces obedecerá a reglas distintas y contrarias al texto constitucional

que establece la elección libre y soberana de los mismos sin permitir injerencia alguna de otro poder y menos del de el Ejecutivo.

Una norma de inferior categoría no puede modificar las formas de elección y nombramiento en la Rama Jurisdiccional del poder público sin atentar contra la Carta Fundamental; todo lo cual conduce a determinar el reconocimiento de una indebida, por inconstitucional, injerencia del poder ejecutivo en el poder jurisdiccional, mucho más, si aquél pretende intervenir en la libre y autónoma escogencia de los jueces y del personal subalterno de los despachos judiciales.

Porque la Constitución Nacional estableció las condiciones de ingreso, los requisitos para el mismo y para el desempeño de las funciones jurisdiccionales de los jueces, así como el período de ejercicio del cargo y las causas de retiro del poder jurisdiccional de éstos, no puede el legislador variar, aumentando o suprimiendo, en últimas modificando los elementos de este régimen, sin que el acto que así lo determine, deba ser declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Todo porque el ejercicio de este poder es función única, exclusiva y autónoma de la Rama Jurisdiccional del poder público de la Nación, que se expresa con soberanía en el texto de la Constitución Nacional.

2. Sobre los artículos 206 y 207 del Decreto número 2400 de 1986, el actor manifiesta que deben desestimarse por inconstitucionales y pide la declaratoria de inexequibilidad dentro del orden jurídico nacional con el argumento que consiste en la demostración de violación de los artículos 139, 150, 155, 157, 158 y 159 de la Carta.

Estas dos normas establecen más requisitos que los señalados por la Constitución Nacional para ser Magistrado de los tribunales superiores, Juez Superior, de Circuito, de Menores, Juez Especializado, Juez de Instrucción Criminal o Juez de igual o superior categoría a los que señala, así como los exigidos para ser juez municipal, por lo que se sobrepasan los límites precisos de la Carta. Se impone con las normas que se acusan el obligatorio cumplimiento de unas condiciones de ingreso que desbordan el poder de nominación constitucionalmente reglado que tienen los funcionarios jurisdiccionales, pues al no cumplirse los requisitos que se agregan a los constitucionales, quienes sí cumplen éstos no pueden ser elegidos como dispone la Carta.

Como es requisito insuperable el pertenecer a la carrera judicial, para el acceso al cargo de Magistrado de los Tribunales como al de juez, sin que la Constitución lo demande, se viola este texto incurriendo en el mismo vicio.

No está permitido al legislador extraordinario crear con sus actos situaciones que contraríen la Constitución como ocurre con las normas que acusa; mucho menos le está permitido reformar la Constitución con actos de la categoría de un Decreto de facultades.

V. El concepto fiscal

1. El señor Procurador General de la Nación sostiene que el primer grupo de normas acusadas, es decir el que integran los artículos 14 y 60 a 67 del Decreto

número 2400 de 1986, no infringen de ninguna manera los artículos 136 inciso quinto y 148 inciso cuarto, de la Constitución, que regulan la forma de llenar las vacantes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, porque estas normas no le son aplicables como lo dispone el artículo 1° del anotado Decreto.

Agrega que, como el artículo 162 de la Constitución autoriza expresamente la creación de la carrera judicial, las normas acusadas al regularla, en particular en lo que se relaciona con las listas de elegibles, de personas seleccionadas, de personas que reúnan las cualidades y condiciones para ser designadas Magistrados o Jueces, así como con los concursos, clasificaciones y calificaciones, son exequibles.

En sentido contrario y sobre el mismo asunto, sostiene el Procurador General de la Nación que "no se puede hacer la misma deducción si se analizan los artículos acusados de acuerdo con el concepto de violación planteado por el actor, en relación con la Escuela Judicial, encargada de hacer las listas, preparar los concursos y clasificar los candidatos, puesto que sin las disposiciones relacionadas con la organización de esa entidad, faltan los elementos de juicio necesarios para determinar si las funciones de la Escuela constituyen la indebida intervención de la Administración en la Rama Jurisdiccional, alegada en la demanda".

"Por tal razón el Despacho considera que los preceptos acusados por sí solos no son suficientes para tomar una decisión de fondo 'por encontrarse en una inescindible relación de dependencia con otro u otros no impugnados que condicionan su significado' (sentencia del 29 de marzo de 1984), o sea los pertinentes del Decreto número 1373 de 1986".

Solicita, pues, el señor Procurador General que se produzca fallo inhibitorio sobre el primer grupo de normas *sub-examine* al estimar que la proposición jurídica que consigna el actor es incompleta.

2. Con respecto a los artículos 206 y 207 del mismo Decreto, el concepto fiscal solicita la declaratoria de inexequibilidad pues comparte la tesis de la demanda.

Atentan contra el orden constitucional las normas bajo examen, pues los artículos 155, 156, 157 y 158, de la Carta, establecen las condiciones que deben reunir los ciudadanos para ser elegidos Magistrados de los Tribunales y jueces de la República, sin que exista concordancia entre unos y otros ya que agregan un requisito no señalado por la Constitución. Sostiene en este sentido el concepto fiscal que "y aunque los requisitos son exclusivamente para el ingreso a la carrera de los actuales jueces y magistrados, su vinculación es indispensable para continuar en el cargo al vencimiento del período o para ser ascendido, por lo que resulta que magistrados y jueces actuales que no reúnen las condiciones legales, a pesar de tener las constitucionales, pierden el derecho a ser designados nuevamente como tales".

Las normas acusadas (artículos 206 y 207 del Decreto número 2400 de 1986), según el concepto que aquí se analiza, eliminan totalmente la condición que habilita al ciudadano para la elección del cargo, la experiencia en el ejercicio profesional o en la docencia y aumenta la del tiempo en el cargo, de cuatro a ocho años, en evidente atentado contra la Constitución. "Como esta disposición no hace diferenciación

alguna entre los jueces, exige los mismos cuatro años también para los jueces municipales, para cuyo nombramiento el artículo 158 de la Carta no establece ninguna experiencia y sólo condiciona el nombramiento al 'colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y abogado litigante', observa el señor Procurador.

Para concluir sostiene el concepto fiscal, que la Constitución en los artículos 162 y 62 no facultan a la ley para modificar las condiciones ni los requisitos o las calidades y los antecedentes para la vinculación los ascensos de los empleos, en los casos previstos por la Constitución, de lo que se puede afirmar que en estos precisos y especiales casos, los requisitos constitucionales no son los mínimos básicos sobre los cuales la ley puede agregar otros, sino que son los únicos permitidos. En consecuencia, considera que los artículos 206 y 207 son inexequibles en la parte que exige una mayor experiencia que la requerida por los artículos 155, 157 y 158 de la Carta para el desempeño de los cargos indicados por violar estas normas constitucionales y el artículo 62.

V. Consideraciones de la Corte

Primera: La Competencia

El Decreto número 2400 de 1986 (julio 29) "por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial" fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 52 de 1984 y aparece publicado en el "Diario Oficial" No. 37571 el 1° de agosto de 1986. Es este un Decreto de aquéllos que el artículo 214 de la Carta señala como de competencia de la Corte Suprema de Justicia para el estudio de su exequibilidad cuando fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano. Así, es competente la Corte para decidir en Sala Plena y previo el estudio de la Sala Constitucional la acción iniciada por el ciudadano Héctor Rodríguez Cruz.

Segunda: Normas derogadas y cosa juzgada

Advierte la Corte, a la fecha de resolver las acusaciones de la acción pública de inexequibilidad contra los artículos 14, 60 a 67 y 206 y 207 del Decreto número 2400 de 1986, que algunas de estas normas fueron sustituidas y derogadas expresamente por el artículo 142 del Decreto número 52 de enero 13 de 1987 que aparece publicado en el "Diario Oficial" No. 37755 de esa misma fecha y que dice: "Art. 142. El presente Decreto rige a partir de su promulgación y modifica en lo pertinente el Decreto número 250 de 1970. Sustituye y deroga el Decreto número 2400 de 1986, excepto los artículos 67, 188, 201, 206 y 207, los Decretos números 1768 y 1373 de 1986 y el Decreto número 1190 de 1986, excepto los artículos 2° y 4°".

No queda la menor duda de que los artículos 14 y 60 a 66 que se acusan, se encuentran derogados; pero en acatamiento de la jurisprudencia de esta Corporación sobre el tema del examen de constitucionalidad de normas que han perdido su vigencia, la Corte deberá dictar sentencia por ser competente para ello al haberse admitido la demanda e iniciado el proceso el 31 de octubre de 1986. Al momento de ser derogadas las normas objeto de la acusación, la Corte ya había asumido el conocimiento sobre su constitucionalidad y gozaba de plena competencia para fallar al respecto, sin que de ella pudiera ser despojada por la actuación posterior del

Ejecutivo ni del legislador ordinario. En efecto, según el claro texto del artículo 214 de la Constitución, corresponde a la Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y de los decretos leyes que allí se indican "cuando fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano". De tal modo que si, habiéndose incoado y admitido la demanda durante la vigencia de la norma, se sucede la derogatoria de ella antes del fallo, no puede la Corte Suprema de Justicia dejar de pronunciarse, toda vez que en su cabeza se ha radicado ya la competencia.

Además, la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció en el ejercicio de su competencia de control de constitucionalidad sobre la inexequibilidad de los artículos 14 y 60 a 66 del Decreto número 2400 de 1986, declarándolos contrarios a la Carta en sentencia No. 15 de marzo tres de mil novecientos ochenta y siete, por lo que se ordenará estarse a lo resuelto a ese respecto. Sobre las normas no derogadas por el artículo 142 del Decreto número 052 de 1987, también la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció declarando como exequible el artículo 201 del Decreto número 2400 de 1986, y como contrarios a la Constitución Nacional las restantes normas objeto de la demanda que inició este proceso, es decir, los artículos 206 y 207. En consecuencia, también deberá pronunciarse fallo que ordene estarse a lo resuelto en la mencionada sentencia.

DECISIÓN

Con fundamento en las razones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, –Sala Plena– previo estudio de su Sala Constitucional y conocido el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE

ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de tres de marzo de mil novecientos ochenta y siete proferida dentro del expediente No. 1534.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

REAJUSTE SALARIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS EN EL ORDEN NACIONAL, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS POR EL CONGRESO, TEMPORALES Y PRECISAS. NO VULNERA LOS GRADOS NI LOS HONORES DE LA FUERZA PUBLICA. PUBLICACION DE LA NORMA EN EL DIARIO OFICIAL.

Exequible en su totalidad el Decreto número 108 de mil novecientos ochenta y seis.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 18.

Referencia: Expediente número 1519.

Norma acusada: Decreto número 108 de mil novecientos ochenta y seis (1986).

Actores: *Gerardo Ayerbe, Alfonso Ahumada, Alberto Camacho, Marcos Arámbula, Alberto Paweles, Hernando Castro, John Rayran y José A. Pedraza.*

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobada por Acta número 07.

Bogotá, D. E., marzo tres (3) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución Política, los ciudadanos Gerardo Ayerbe, Alfonso Ahumana, Alberto Camacho, Marcos Arámbula, Alberto Paweles, Hernando Castro, John Rayran y José A. Pedraza, presentaron demanda de inexequibilidad contra el Decreto número 108 de mil novecientos ochenta y seis. Se admitió la demanda, se corrió traslado de ella al Procurador General de la Nación quien ha emitido su concepto y la Corte se ocupará en decidir sobre la misma.

I. Norma acusada

El texto del Decreto-ley número 108 de mil novecientos ochenta y seis, es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 108 DE 1986
(enero 11)

"Por el cual se dictan normas en materia salarial.

"El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 01 de 1986.

D E C R E T A:

"Artículo 1° A partir del 1° de enero de 1986, la remuneración mensual de los empleos de Ministerios y Departamentos Administrativos que a continuación se señalan será la siguiente:

Denominación	Código	Grado	Asignación básica	Gastos de Representación	Total
Secretario Ejecutivo del Despacho de Ministro o Jefe de Departamento Administrativo.	5040	17	75.000	———	75.000
Jefe de sección	2075	09	98.550	———	98.550
Jefe de División	2040	14	98.260	———	98.260
Administrador de Impuestos de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira	2060		82.782	35.478	118.260
Jefe de Oficina	2045	14	82.782	70.000	140.000
Asesor	1020	03	70.000	70.000	140.000
Subdirector del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	2030	14	70.000	70.000	140.000
Subdirector del Centro de Información y sistemas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	2030	15	70.000	70.000	140.000
Subdirector General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	2030	14	73.913	73.912	147.825
Director de Ministerio o Departamento Administrativo	2005	17	73.913	73.912	147.825
Director General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	2005	17	68.400	121.600	190.000
Director General del Centro de Información y Sistemas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	2005	17	68.400	121.600	190.000
Secretario General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	0035	03	95.000	95.000	190.000
Secretario Privado del Presidente de la República	1010	02	89.010	89.010	178.020
Asesor del Consejo Superior del Servicio Civil	1020	03	89.010	89.010	178.020

"Parágrafo. La persona designada en el empleo de Secretario Ejecutivo código 5040 Grado 17 del Despacho de Ministro o Jefe de Departamento Administrativo

tendrá derecho a percibir la remuneración señalada en este capítulo cuando para el cumplimiento de las funciones, deberes y responsabilidades atribuidas al cargo deba laborar ordinariamente en jornadas superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

"Artículo 2° A partir del 1° de enero de 1986, la remuneración mensual de los empleos que a continuación se señalan será la fijada para su grado en la escala de remuneración del Nivel Directivo de que trata el Decreto-ley número 062 del presente año y a partir del 7 de agosto de 1986 será la siguiente:

Denominación	Código	Grado	Asignación básica	Gastos de Representación	Total
Ministro	0005	09	75.600	134.400	210.000
Jefe de Departamento Administrativo	0010	09	75.600	134.400	210.000
Viceministro	0020	07	70.200	124.800	195.000

"Artículo 3° A partir del 7 de agosto de 1986, la remuneración mensual del personal de la Rama Ejecutiva del poder público en lo nacional que sea equivalente a un porcentaje de la que corresponde a los Ministros o Jefes de Departamento Administrativo, se continuará determinando sobre la cuantía de ciento noventa y siete mil pesos ($197.000.00) y las que sean equivalentes a un porcentaje de la de los viceministros sobre la suma de ciento setenta y ocho mil veinte pesos ($178.020.00).

"Artículo 4° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los artículos 2° del Decreto-ley número 1044 de 1978, 5° y 6° del 3693 de 1981 y 2° del 140 de 1985 y los Decretos-leyes 103, 292 y 293 de 1983 y 113 de 1985, y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 1986 salvo lo dispuesto en el artículo 2°.

"Publíquese y cúmplase

"Dado en Bogotá, D. E., a 11 de enero de 1986

BELISARIO BETANCUR

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, *Hugo Palacios Mejía;* la Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, *Ericina Mendoza Saladén*".

II. Concepto de la violación

Los demandantes estiman violados los artículos 2, 30, 55, 76 ordinales 9 y 12 y el 118-8 de la Constitución Política.

Los fundamentos de la acusación y el concepto de la violación lo sustentan así:

1. El Decreto-ley número 108 de 1986 es inconstitucional en su totalidad por cuanto fue expedido extemporáneamente, conclusión a la cual llegal los demandantes al computar el término de revestimiento de facultades legislativas, en cuyo

concepto, contado desde el tres de enero venció el 10 de enero siguiente, y como el Decreto-ley acusado está fechado el día 11 de enero consideran que su expedición excedió el tiempo.

2. Como el término de facultades extraordinarias venció el 10 de enero y en el artículo 3º se dispone que "entra a regir a partir del 7 de agosto de 1986, de manera indirecta, se autofaculta para extender la protemporalidad autorizada, con evidente abuso desde el 7 de agosto futuro –dicho en relación con la fecha de presentación de la demanda– en que se agota *in integrum* la capacidad ejecutiva".

3. Por lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto acusado la remuneración mensual del Ministro del Depacho, jefe de Departamento Administrativo y Viceministros a partir del 7 de agosto de 1986 reciben un incremento salarial, pero en el artículo 3º *ibidem* se ordena no aplicar el aumento al personal de la Rama Ejecutiva cuya remuneración sea equivalente a un porcentaje de la asignación de aquéllos. Es decir, congela la escala de salarios grado 09, fijada en el Decreto-ley número 062 de 1986. Entre dichos servidores públicos se encuentran los oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en la escala de Generales, Mayores Generales, Brigadieres Generales, quienes tienen predeterminada su asignación, según el Decreto-ley número 095 de 1986 en una proporción de la remuneración del cargo de Ministro, y es obvio que por esta vía indirecta, se excluye a los oficiales de tal graduación en actividad y en goce de asignación de retiro, de beneficiarse de tales incrementos".

4. En las asignaciones de retiro y de beneficiarios legales de dicha clase se lesiona el derecho adquirido con justo título y con arreglo a la ley, porque no puede modificarse por leyes posteriores, para desaparecer la protección que a tales situaciones otorgan los artículos 17 y 30. Además se obra contra la prohibición de privar a los militares de sus grados, honores y pensiones, "en la manera que no extiende a dicha escala tales aumentos".

5. Como en el Decreto cuestionado no aparece la firma del Ministro de Defensa, se quebrantó el artículo 57 de la Constitución que exige para la validez de los actos del Presidente de la República que "sean refrendados y comunicados por el Ministerio del ramo y hay que convenir que por afectar relaciones de carácter militar y policivo propias del ramo de Defensa su titular debe aparecer refrendando el Decreto".

II. Concepto del Procurador

El Procurador en su intervención solicita que la Corte declare: La exequibilidad del Decreto número 108 de 1986 en cuanto a facultades se refiere; la exequibilidad del artículo 2º; que se inhiba para resolver sobre el fondo del artículo 3º del Decreto número 108 de 1986 y que no se pronuncie sobre el artículo 1º, porque:

1. En la demanda no se hace ninguna mención concreta del artículo 1º, ni se explica su posible violación.

2. Aplicando la norma del Código de Régimen Político y Municipal que regula el cómputo de días indicados por una disposición legal, el Procurador encuentra que

en el presente evento fue expedido el Decreto dentro del término previsto por la Ley 1ª de 1986 y que en consecuencia el Ejecutivo no infringió, lo dispuesto en los artículos 76-12 y 118-8.

3. En lo que respecta al artículo 3º afirma el concepto fiscal, que la supuesta inexequibilidad, de acuerdo con los argumentos de la demanda, se deduce de otras disposiciones legales que fijan las asignaciones de retiro de los oficiales de las Fuerzas Militares, o sea los artículos 161 del Decreto número 089 de 1984 y 2º del Decreto número 095 de 1986, los cuales se transcriben. Como en la demanda apenas se insinúan, a pesar de ser precisamente las condicionantes de la inexequibilidad, la proposición jurídica no es completa puesto que su alcance depende de otras normas que no han sido acusadas y las cuales son necesarias para decidir sobre la exequibilidad del artículo demandado.

III. Consideraciones de la Corte.

1. *Competencia*

Como el Decreto-ley número 108 de 1986, por el cual se dictan normas en materia salarial fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades legislativas según la Ley 1ª de 1986, es competente la Corte para decidir sobre la acusación de inexequibilidad presentada.

No obstante haberse cumplido íntegramente los efectos del Decreto acusado al culminar el año 1986, considera la Corte que, por haber sido presentada la demanda durante dicho año, mantiene su competencia para pronunciarse sobre la misma.

2. *Ley de facultades*

La Ley 1ª de 1986, facultó al Ejecutivo por ocho días contados desde su vigencia, para modificar la escala de remuneración y el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación de los empleados del sector público. De ella, en sentencia del 25 de septiembre pasado dijo la Corte:

"El Congreso conocedor de las limitaciones constitucionales que en materia del manejo del gasto público entronizara la reforma de 1968, en la Ley 1ª de 1985 –ahora cabe decir, la Ley 1ª de 1986, dada su semejanza–, al facultar al Ejecutivo para los reajustes de algunos ingresos de empleados públicos en el orden nacional, mantuvo al Gobierno el manejo de las cifras concretas precisándole, sin embargo, las variables económicas observables: Ingresos estatales, índice de precios y facultad adquisitiva de salarios.

"El legislador indicó como norma general al Ejecutivo que al hacer uso de las facultades, la política del gasto público a través de las asignaciones de empleados de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial para 1986, se incrementaría en forma equivalente y en una variación que ponderaría la disponibilidad de los recursos fiscales y la mutación del índice de precios, con la finalidad de garantizar el poder adquisitivo de los ingresos y conservó las distintas categorías de empleos y los diversos conceptos legales de retribución de servicios.

"Ciertamente el Congreso, aunque no fijó el monto exacto de la variación ni cuáles de los factores integrantes de la asignación del empleado serían atribuciones legislativas al referirse a los distintos ingresos del servidor... sin dejar arbitrio al Gobierno en el ejercicio de las facultades al señalarle las bases objetivas del incremento y de la modificación, los rubros afectables, sin desbordarse fiscalmente en el gasto público, limitado a las disponibilidades ante la incidencia que en el flujo económico tienen y desencadenan su desenvolvimiento.

".....

"Las facultades otorgadas... cubrían... la totalidad de la Rama Ejecutiva del Poder Público y la parte administrativa de la Instrucción Criminal, el Tribunal Disciplinario, la Contraloría de la República y los empleados públicos vinculados a las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, lo cual denota la magnitud multiplicadora del incremento salarial y prestacional sobre el caudal del erario público, afectación necesaria en la tributación al fisco con merma del poder adquisitivo en general..."

Las facultades de las cuales fue revestido el Ejecutivo son propias del Congreso, fueron temporales y precisas. Resta afirmar solamente, que el incremento tendría vigencia durante el año 1986.

3. *La acusación de inexequibilidad del D.L. 108 de 1986*

La Ley 1ª de 1986, vigente desde su publicación fue insertada en el "Diario Oficial" el 3 de enero, de manera que los ocho días de revestimiento da facultades legislativas para el Ejecutivo, como en ella no se expresó cosa distinta, son días hábiles, según el artículo 62 del Código de Régimen político y municipal entonces vigente. El Decreto número 108 se expidió el día 11 de enero de 1986 y ese mismo día se publicó en el "Diario Oficial" No. 37305, dentro del término de habilitación y sin que por dicho concepto hubiere vicio de inconstitucionalidad.

a) El Artículo 1° del Decreto Acusado.

Se relaciona con la remuneración mensual de unos empleados públicos de la Presidencia de la República, del Ministro de Hacienda y Departamento Administrativo allí indicados, con incrementos de asignación básica o de los gastos de representación o de ambos conceptos, determinaciones legales para las cuales el Presidente de la República había sido revestido por el Congreso; rige durante el año de 1986, y se ajusta dentro de la materia específica definida por la ley de facultades.

El parágrafo de dicho artículo regula la remuneración del secretario ejecutivo código 5040 grado 17 del Despacho del Ministro o Jefe de Departamento Administrativo y las condiciones legales extraordinarias no violan la Carta por cuanto corresponden al ejercicio de la atribución que el legislador tiene para definir las asignaciones y condiciones para su causación en los distintos empleos públicos, asunto para el cual el ejercicio fue habilitado.

b) El Artículo 2° del Decreto Acusado.

Señala la asignación mensual para estos tres grupos tres cargos públicos: Ministro, Jefe de Departamento Administrativo y viceministro, durante el año de 1986 así: Por el lapso comprendido entre el 1° de enero al 6 de agosto en la correspondiente al incremento concedido mediante el Decreto-ley número 062 de 1986 expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias de la Ley 1ª de 1986 y para el período que cuenta entre el 7 de agosto al último día del mismo año, la que determina el texto cuestionado.

Esas previsiones encuadran dentro de las facultades legislativas de incrementar las remuneraciones de los empleados de la Rama Ejecutiva del poder público, y, no la contraviene que el Presidente haya optado por aumentarles ponderadamente a los tres funcionarios de la más alta jerarquía de tal rama pública, al fraccionar los porcentajes en una parte del año y en otra para el período restante, siempre dentro de 1986, si con ella consulta la finalidad determinante de la ley de facultades de mantener el poder adquisitivo de los ingresos, teniendo en cuenta las escalas y niveles de los diversos cargos públicos, la variación de los índices de precios, la disponibilidad de recursos fiscales y la incidencia del aumento en el gasto público.

Corresponde a la ley precisar la asignación de los distintos empleos y es en efecto lo que el Ejecutivo cumplió con la expedición del tenor acusado. No se trata de una autohabilitación de las facultades, ni de una autoprórroga de ellas envolviendo una infracción de la temporalidad de las mismas como lo pregonan los demandantes, pues la disposición no está haciendo reservas de ellas para cumplirlas a partir del 7 de agosto de 1986, sino de la modificación y exigibilidad dentro del año de 1986, para todo lo cual se encontraba facultado el Presidente y ejerció en tiempo, sobre temas concernientes a las atribuciones legislativas de que fuera revestido. Además no tenía prohibido que pudiera hacer los reajustes en la forma como lo hizo, ni la ley de facultades le precisó pauta alguna en tal sentido, sino de una capacitación extraordinaria para cifrar su cuantía, los rubros afectables, las variables considerables y los funcionarios a quienes se destinaría.

Por todo ello la Corte no encuentra violación de la Constitución en la expedición de la norma debatida.

c) El Artículo 3° del Decreto Impugnado.

De su tenor literal se desprende que está destinado a excluir del incremento de la asignación mensual ordenado por el artículo precedente a todos aquellos empleados de la Rama Ejecutiva en lo nacional a quienes corresponda como remuneración un porcentaje de la asignada al Ministro, Jefe de Departamento Administrativo y Viceministro, pues dispone que se les continuará reconociendo por el año de 1986 sobre la base determinada en el incremento reconocido por el Decreto-ley número 062 de 1986, las cuales son de $197.100, para los dos primeros y $178.020 para el último.

No existe como lo sostiene el Procurador proposición jurídica incompleta que impida a la Corte decidir la cuestión formulada pues la unidad normativa se integra en este evento con el precepto que establece una limitación para un grupo de empleados públicos y la hipótesis legal contiene todos los elementos esenciales del

fenómeno jurídico que se estudia y no depende de otras no rebatidas, sino que de modo contrario es la acusada la base para la aplicación de aquéllas mencionadas por el Fiscal, que no son materia del cuestionamiento.

La ley es la llamada a concretar las escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos y ella válidamente, cuando se expide en forma extraordinaria bajo el supuesto de la habilitación legislativa, debe mantener la diferenciación que reconoce la Constitución entre los distintos destinos públicos según su naturaleza, funciones y nivel, establecer diversidad de bases para su fijación, disposiciones no excluidas por la ley de facultades.

No existe violación constitucional por no haber suscrito el Ministro de Defensa Nacional el Decreto número 108 de 1986, pues su texto se refiere a asuntos relacionados con el personal de la Rama Ejecutiva del Poder Público, sobre la cual conforman constitucionalmente gobierno, el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y el Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

De otra parte no vulnera los grados, ni los honores de los miembros de la Fuerza Pública, ni desconoce los derechos causados y reconocidos como asignaciones de retiro, pues sus previsiones únicamente se aplican hacia el futuro, sin menoscabar las situaciones jurídicas ya consolidadas al amparo de normas anteriores; ni constituyen sus órdenes una desprotección del trabajo como quiera que gozan del incremento dispuesto por el Decreto-ley número 062 de 1986. Y cuanto toca con las expectativas de asignaciones de retiro y eventuales pensiones, ellas para el momento de entrar en vigor la norma no son óbice para que el legislador las regule de modo diverso, modifique sus elementos, requisitos, bases, monto, proporciones sobre las cuales se determinará en el futuro un derecho para tenerlo como adquirido cuando a su amparo se cause, en lo cual no existe desconocimiento del artículo 30 de la Carta ni violación del artículo 17 de ella. Por consiguiente se declarará exequible el precepto estudiado.

d) El Artículo 4°.

Aunque no contiene la demanda alegación alguna de las violaciones en que haya incurrido el Ejecutivo contra la Carta al expedirlo, encuentra la Corte que este artículo es la expresión de la facultad legislativa de derogar la ley preexistente y de disponer la aplicación de la ley en el tiempo, así como determinar el sistema de remuneración vigente en el aludido sector del servicio público. Tal precepto, entonces, no es inexequible.

V. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarar exequible el Decreto-ley número 108 de 1986, en su totalidad.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

COSA JUZGADA. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A LA CARRERA JUDICIAL. LA CORTE NO ES JUEZ DE LA CONVENIENCIA DE LAS NORMAS ACUSADAS SINO DE SU CONSTITUCIONALIDAD.

Estése a lo resuelto en sentencia del 3 de marzo de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 19.

Referencia: Expediente número 1522

Norma acusada: Artículo 65 parágrafo segundo (2º), del Decreto-ley número 2400 de 1986.

Actor: *Ernesto Rey Cantor.*

Magistrado ponente: *Jesús Vallejo M.*

Aprobada por Acta número 07.

Bogotá, D. E., marzo tres (3) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional el ciudadano Ernesto Rey Cantor, presentó demanda de inexequibilidad contra el parágrafo segundo del artículo 65 del Decreto-ley número 2400 de 1986.

Una vez admitida la demanda se corrió traslado al Procurador General de la Nación, quien ha emitido el concepto de rigor, en virtud de lo cual la Corte se ocupará a continuación del fallo correspondiente.

I. Texto de la norma acusada

El parágrafo segundo del artículo 65 del Decreto-ley número 2400 de 1986 dice lo siguiente:

"Artículo 65. Los empleos de carrera de la Rama Jurisdiccional se proveen de la siguiente manera:

"....."

Parágrafo 2°. *La designación de los funcionarios vinculados a la Rama Jurisdiccional, por parte de las corporaciones judiciales se hará con la presencia de las dos terceras partes de sus miembros y con el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes".*

II. Concepto de la violación

El actor señala como violado el artículo 76-12 de la Constitución y desarrolla el concepto de la violación así: Al Presidente de la República, se le facultó para revisar los estatutos anteriores (Decreto número 250 de 1970 y 1660 de 1978) y para reformar lo pertinente con el funcionamiento de la carrera judicial. Esos decretos hacen una clasificación práctica de los servidores de la Rama Jurisdiccional en funcionarios y empleados, pero no distinguen los artículos que fijan el quórum si los candidatos son vinculados o nuevos. Obviamente que se refieren a ambas categorías, pero desafortunadamente el Presidente sólo revisó la designación de los funcionarios 'vinculados', señalando un quórum electivo especial y curioso, pues los no vinculados se quedaron sin norma aplicable por la sencilla razón de que el artículo 219 del D.L. 2400 de 1986 expresamente dispuso que 'modifica en lo pertinente el Decreto Extraordinario número 250 de 1970 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Entonces, al existir tres fórmulas matemáticas diferentes, las contenidas en los Decretos números 250, 1660 y 2400 (sic), se puede afirmar que el artículo 65 acusado "reformó y por ende revisó los dos anteriores, derogándolos en su contenido total' ".

Concluye que la labor legislativa del Ejecutivo se quedó corta. Las facultades que la ley de investidura le otorgó no se ejercieron con precisión; valga decir, prosigue, que es un anticipo de lo que debe ser un estatuto completo de la carrera judicial, y posteriormente se deberá expedir la parte que falta. Las precisas facultades de que trata el artículo 76 numeral 12 de la Carta no fueron cumplidas de acuerdo con la atribución de revisar y reformar, sino que por el contrario "se creó un sistema electivo incompleto, contradictorio, que puede prestarse a irregularidades que lo pueden hacer inoperante".

II. Concepto del Procurador

El Procurador solicita a la Corte que declare la exequibilidad del texto acusado y para ello expone:

Dos elementos caracterizan las facultades extraordinarias del Congreso al Presidente de la República, a saber: la temporalidad y la precisión. El Presidente, al expedir decretos en uso de facultades extraordinarias, asume el ejercicio de la función legislativa que corresponde al Congreso y lo hace transitoriamente. Por mandato de la Ley, y en estas condiciones un decreto extraordinario puede derogar, reformar o suspender leyes existentes, cuando estén en oposición con los fines para los cuales se dieron las facultades.

Examina la temporalidad de las facultades concedidas por la ley 52 de 1984 y de su confrontación con la vigencia del D.L. 2400, concluye que el Ejecutivo oportunamente expidió el estatuto de la carrera judicial, del cual hace parte el tenor acusado, por lo cual no existe violación de la Carta en tal aspecto.

Al estudiar la precisión de la materia regulada anota que el parágrafo segundo del artículo 65 del Decreto número 2400 de 1986, objeto de la acusación, no es extraño a la facultad conferida, pues en este se le autoriza para "revisar, reformar y poner en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial, y en aquél se consagra el *quorum* que deben cumplir las Corporaciones Judiciales cuando vayan a designar funcionarios vinculados a la Rama Jurisdiccional, lo cual encaja perfectamente dentro de las atribuciones conferidas.

Respecto de la palabra 'vinculados' dice el Procurador que no tiene los alcances limitados que le da el demandante, pues del texto completo de la norma se deduce que se refiere a todos los funcionarios "de la carrera". Sin embargo, entendida como lo hace el actor, dejando a un lado a los 'no vinculados', este hecho, sostiene el Procurador, "no acarrea vicio de inconstitucionalidad alguno, pues es apenas obvio que cuando se trata de expedir esta clase de estatutos se pueden quedar algunas situaciones sin reglamentación, y que para el caso concreto, seguirán vigentes las disposiciones anteriores que no sean contrarias, según lo ordenado por el propio Decreto número 2400 de 1986".

III. Consideraciones de la Corte

Si bien ésta Corporación es competente para conocer de la demanda, por versar ésta sobre una disposición contenida en un decreto-ley expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias que prevé el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución, observa la Corte que en fallo proferido el 3 de marzo de este año respecto del proceso No. 1534 declaró exequibles en general las disposiciones del Decreto 2400 de 1986, excepción hecha de las que expresamente se mencionan en dicho proveído, entre las cuales no se cuenta el parágrafo 2° del artículo 65 de ese Decreto.

En consecuencia, ha habido un pronunciamiento definitivo de la Corte acerca de la exequibilidad de la disposición acusada y habrá que estarse a lo resuelto sobre el particular.

Conviene, empero, hacer algunas consideraciones adicionales en torno de las acusaciones de la demanda, las cuales se circunscriben a una posible violación del numeral 12 del artículo 76 de la Constitución, porque, según reza aquélla, "la labor legislativa del Ejecutivo se quedó corta", dado que al parecer el parágrafo 2° del artículo 65 del Decreto número 2400 de 1986 se refiere sólo a funcionarios vinculados a la carrera judicial y, en tal virtud, las facultades que otorgó la ley al Ejecutivo no fueron ejercidas por éste con precisión. De lo contrario, el Gobierno habría expedido un estatuto completo de la carrera judicial y no "un sistema electivo incompleto, contradictorio que puede prestarse a irregularidades que lo pueden hacer inoperante".

Tal como lo anotó la Procuraduría, la palabra "vinculados" que aparece en la norma acusada no tiene los alcances limitativos que le da el demandante. Y aunque así fuera, el restringir un sistema de elección a determinada categoría de funcionarios no es de suyo contrario a la Constitución.

La Corte no es juez de la conveniencia de las normas acusadas sino de su constitucionalidad.

IV. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Estése a lo resuelto, en sentencia del 3 de marzo de 1987, proferido en el proceso 1534, acerca de la exequibilidad de la norma acusada.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorgé Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria



ORDEN PUBLICO MILITAR, POLICIVO. ORDEN PUBLICO ECONOMICO. PODERES JURIDICOS DEL GOBIERNO EN PERIODOS DE ESTADO DE SITIO. CON LAS FACULTADES EXCEPCIONALES DE QUE TRATA EL ARTICULO 121 DE LA CARTA SOLO SE PUEDEN TOMAR LAS MEDIDAS CUYA FINALIDAD SEA EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO. *INCOMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES MILITARES PARA CONOCER Y JUZGAR DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES.* COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE NARCOTRAFICO.

Inconstitucional el Decreto 3671 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 20.

Referencia: Expediente número 1562 (235-E)

Revisión del Decreto-legislativo número 3671 de 1986 "Por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de Narcotráfico.

Magistrado Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobada por Acta número 08.

Bogotá, D. E., marzo cinco (5) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Con fecha 19 de diciembre de 1986, la Presidencia de la República envió a la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, copia auténtica del Decreto número 3671 de 1986, dictado con fundamento en las facultades excepcionales del Estado de Sitio, declarado con anterioridad por el Decreto número 1038 de 1984, para su correspondiente revisión constitucional, como lo ordena el artículo 121 de la Carta.

1. Decreto

El texto del Decreto Legislativo número 3671 de 1986, es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 3671 DE 1986
(diciembre 19)

"Por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico

"El Presidente de la República de Colombia en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984,

DECRETA:

"Artículo 1° El conocimiento de los delitos a que se refieren los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986, corresponde a la Justicia Penal Militar, la cual los juzgará por el procedimiento señalado en el artículo 590 del Código de Justicia Penal Militar, cuyos fallos serán consultables.

"Tendrán competencia para conocer y juzgar de los anteriores delitos los Comandantes de Brigada, Fuerza Naval, Base Aérea 'Germán Olano' y Comando Unificado del Sur.

"Parágrafo. La competencia adscrita a la Justicia Penal Militar, por razón del presente Decreto, se circunscribirá a las siguientes cantidades de semillas, plantas y droga:

"a) Respecto de las semillas a las cuales se refiere el inciso 1° del artículo 32, la jurisdicción penal castrense conocerá únicamente de los procesos que deban iniciarse por la incautación de dos (2) kilos o más;

"b) En relación con las plantas a las cuales se refiere el inciso 2° de ese mismo artículo, dicha competencia se limitará a los procesos que deben iniciarse por la incautación de mil (1.000) plantas o más;

"c) En cuanto se refiere a las diferentes modalidades de droga mencionadas en el artículo 33, la competencia se circunscribirá a los procesos que deban iniciarse por la incautación de mil (1.000) gramos o más.

"Artículo 2° La competencia y procedimiento establecido en el artículo anterior, se extenderán a los delitos conexos con las infracciones señaladas en él.

"Artículo 3° Los infractores del artículo 1° de este Decreto, no tendrán derecho a la libertad provisional ni a condena de ejecución condicional.

"Artículo 4° Los Jueces de Instrucción Criminal podrán instruir los procesos contra particulares por los delitos a que se refiere el artículo 1° del presente Decreto.

"Para estos efectos los Directores Seccionales de Instrucción Criminal comisionarán a los Jueces de Instrucción Criminal previa solicitud de los Comandantes de Brigada, Fuerza Naval, Base Aérea 'Germán Olano' y Comando Unificado del Sur.

"Artículo 5° La captura y detención preventiva se regirán por las normas pertinentes del Código de Justicia Penal Militar. El término establecido en el artículo 521 del Código de Justicia Penal Militar, será de diez (10) días si fuere uno solo el indagado, y si hubiere dos (2) o más en el mismo proceso, el término será de veinte (20) días.

"Artículo 6° Para los efectos del presente Decreto asígnase jurisdicción y competencia, con relación a particulares, al Comandante del Comando Unificado del Sur.

"Artículo 7° Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a los procesos iniciados a partir de su vigencia.

"Artículo 8° El presente Decreto rige a partir de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase

"Dado en Bogotá, D. E., a diecinueve (19) de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (1986).

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Gobierno y encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, *Fernando Cepeda Ulloa;* el Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* el Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo;* el Ministro de Defensa Nacional, General *Rafael Samudio Molina;* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* el Ministro de Trabajo, *José Name Terán;* el Ministro de Salud, *César Esmeral Barros;* el Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo;* el Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio;* el Ministro de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse;* el Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez;* el Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo*".

II. Impugnaciones

De acuerdo con las constancias de la Secretaría General de la Corte, el término de fijación en lista transcurrió "en silencio", esto es, sin que ningún ciudadano acudiera a defender o a impugnar el decreto que se revisa.

IV. Concepto del Procurador

El señor Procurador General de la Nación, hace un amplio recuento de la jurisprudencia de la Corte sobre el tema principal del Decreto, así como de los conceptos que sobre lo mismo ha emitido el Ministerio Público, para llegar a las siguientes conclusiones:

a) El Decreto cumple con los requisitos formales pertinentes;

b) La Procuraduría no entra a analizar en detalle la conexidad entre las disposiciones fundamentales del Decreto y las causas de perturbación del orden público invocadas por el Gobierno al decretar el Estado de Sitio, por considerarlo innecesario, ya que en su opinión la medida es inconstitucional desde el punto de vista jurídico, por infracción de los artículos 26, 51, 58 y 170 de la Carta. Reitera en este punto los últimos conceptos emitidos por ese Despacho en oportunidades anteriores.

V. Consideraciones de la Corte

El texto del artículo 42 del Acto Legislativo No. 1 de 1968, que corresponde al artículo 121 de la actual codificación constitucional, es resultado de serios debates que tuvieron lugar en el seno del Congreso en busca de una fórmula jurídica que diera claridad sobre las facultades del Gobierno para el manejo de situaciones de emergencia que alteraran lo que ahí se denominó "Orden Público Militar-Policivo", en contraste con el "Orden Público Económico" para el cual se previó el artículo 122 de la Constitución, y a la vez le otorgara poderes razonablemente amplios para afrontar los casos de guerra exterior o de conmoción interior.

El constituyente de ese año consideró que, a pesar de los abusos cometidos con el Estado de Sitio, convenía conservar sus lineamientos fundamentales en beneficio de valores superiores como la defensa del territorio patrio, la salvaguardia de las instituciones republicanas y el mantenimiento de la paz y del orden institucional, corrigiendo sin embargo las distorsiones que habían resultado de su aplicación en las décadas precedentes y trazando pautas para circunscribirlo al ámbito que le es propio.

Por eso, en la ponencia para segundo debate en el Senado respecto del Acto-Legislativo número 46 de 1966 "Reformatorio de la Constitución Política" se hicieron las siguientes alusiones:

"Inmediata y obligada consecuencia de la tipificación del orden público económico fue la revisión sustancial del instituto del Estado de Sitio, configurado en el artículo 121 en su acto reformatorio de 1960. En uso de los poderes militares o policivos que puede poner en acción el Gobierno durante el Estado de Sitio, sólo podrían afectarse transitoriamente garantías individuales o sociales 'en los casos previstos en la Constitución' (artículo 36). Queda cerrada así, terminantemente y herméticamente, la puerta a la funesta y corruptora teoría de los poderes implícitos, o de las atribuciones naturales o de las facultades extensivas y extensibles del Gobierno que, en los cuarenta años últimos, se ha ido erigiendo, sinuosa y torticeramente, en una especie de derecho natural del Ejecutivo, anterior y superior a la Constitución. En adelante, el Gobierno no podrá modificar ni derogar la Constitución ni las leyes. Podrá suspender temporalmente algunas garantías 'en los casos previstos en la Constitución' y las leyes incompatibles con el Estado de Sitio" (historia de la Reforma Constitucional de 1968, Imprenta Nacional, Bogotá, 1969).

Estas opiniones se tuvieron en cuenta a lo largo del debate, si bien se intentó matizarlas para posteriormente buscar una fórmula que, *"manteniéndose dentro de la misma línea de pensamiento de precisar los poderes jurídicos del Gobierno en períodos de Estado de Sitio"* (Subraya la Sala), le otorgase "los que conforme a la experiencia se requieran en los eventos de intranquilidad pública", señalándolos taxativamente, "con el noble propósito institucional de que el Gobierno no se convierta en legislador ordinario, fuente segura del desprestigio del Congreso, y de su aniquilamiento como órgano democrático" (ib. pág. 486).

Por eso, en el inciso 1° del artículo 121 se estipuló que por la declaratoria de Estado de Sitio quedaría investido el Gobierno de tres clases de facultades, a saber: las legales; las que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del

orden público; y las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones.

En la misma ponencia que se viene citando se explicó concretamente cuál era el alcance que se preveía para cada una de esas facultades, en los siguientes términos:

"1° Facultades Legales

"Son aquellas facultades para el Gobierno existentes en las leyes y que pueden contribuir a superar las circunstancias de emergencia, o las especiales que se dicten en el futuro, como por ejemplo, aumento de las penas de ciertos delitos, el establecimiento de ciertos controles, etc. Ellas pueden ser suspendidas por el Gobierno mediante decretos legislativos, si en la materia tiene facultades constitucionales. También se comprenden en este haz de facultades las que la Constitución otorga al Presidente de la República de manera ordinaria, como la reglamentación del derecho de reunión, artículo 45, y que en un momento dado pueden ser útiles para enfrentar una situación de orden público.

2° Facultades que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público.

"Estas facultades están enumeradas en la Constitución misma y son: el artículo 28 que autoriza retener a las personas contra quienes haya graves motivos para temer perturbación del orden público; el artículo 33, sobre decretos o indemnización para expropiaciones en tiempos de guerra; el artículo 38, sobre circulación de impresos por los correos; el artículo 42, de restricciones a la libertad de prensa; el 43, sobre imposición de contribuciones por autoridades distintas al Congreso, las asambleas y los concejos; el 61, sobre acumulación de la autoridad política o civil y la judicial o militar, y el artículo 206, que faculta para percibir impuestos o contribuciones y hacer erogaciones que no figuren en el Presupuesto.

"Estas facultades, y las anteriores, son las que, para los casos más frecuentes de orden público, empleará el Gobierno. De su lectura se desprenden poderes concretos y limitados del Ejecutivo y la imposibilidad de abordar otros campos de legislación.

"3° Las reglas aceptadas por el derecho de gentes para la guerra entre naciones.

"Aunque en este punto no se ha introducido ningún cambio a lo estipulado actualmente en la Carta Fundamental, conviene explicar que la referencia a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes para la guerra entre naciones es la remisión a un estatuto que conlleva poderes como limitaciones, de aplicación tanto en caso de conmoción interior como de guerra exterior. El Derecho de Gentes está hoy en día conformado por las reglas y principios contenidos en los tratados y convenios internacionales que hayan venido regulando las operaciones de la guerra para humanizarla, y que contemplan disposiciones sobre el trato que debe darse a las personas y a las cosas que se hallen vinculadas a la guerra, según su mayor participación o la gravedad del conflicto.

"Dichas reglas a las cuales se ha venido suscribiendo Colombia mediante la ratificación de los tratados internacionales, si bien implican poderes sobre las perso-

nas y las cosas, suponen también y, esencialmente, limitación en la conducción de las acciones bélicas, pues se han establecido para ello y en guarda de la dignidad de la persona humana, y con el propósito de eliminar la barbarie en los conflictos armados.

"Pueden ser de aplicación tanto en los eventos de conmoción interior, si la gravedad de la situación da lugar a las circunstancias previstas en el Derecho de Gentes y cuando ella alcance perfiles bélicos, como los de guerra exterior, y, de todos modos, confirma la tradición colombiana de respeto al derecho internacional en las penosas circunstancias de los conflictos armados".

De esa manera, límites de las facultades de Estado de Sitio se tornaron precisas, como lo dice el mismo artículo 121 y se abandonó expresamente la tesis del fallo de junio 12 de 1945 según el cual el deber que tiene el Presidente de conservar y restaurar el orden público lo dota implícitamente de todas las facultades necesarias para cumplir su cometido. Esa idea de restringir los poderes gubernamentales durante el Estado de Sitio se tradujo, además, en la limitación temporal de las retenciones que autoriza el artículo 28 y en el control automático de constitucionalidad de los decretos legislativos que se dicten dentro de su vigencia.

Como por estas facultades no es posible derogar las leyes sino tan solo suspender las que sean incompatibles con el Estado de Sitio, conforme se dispuso desde el acto legislativo No. 3 de 1910, ha sostenido la Corte en forma reiterada que dichas facultades encuentran limitaciones en la necesidad de restablecer el orden lo cual implica que las medidas del caso deben tener relación o nexo causal con los motivos de perturbación y estar encaminadas a eliminarlas (vid. sent. mayo 14 de 1970).

El fallo que se cita prosigue diciendo:

"De ahí que la competencia de la Corte no esté circunscrita al examen de los decretos legislativos por el solo aspecto de la eventual infracción directa de ciertos preceptos de la Constitución, sino también porque de ella forma parte el artículo 121, para decidir si las medidas que contemplan se dirigen a cumplir el fin propio de la institución del estado de sitio y se encuentran dentro de los "precisos límites" a que alude el citado artículo" (id.).

Corroboró de ese modo la Corte lo que venía sosteniendo de tiempo atrás, especialmente en el fallo del 24 de julio de 1961, al que después se hará alusión en esta sentencia, en el que se habló de la importancia cardinal que tiene la limitación que se viene examinando, y se afirmó "que es necesario que la ruptura del orden público objetivamente se halle en relación inmediata y directa, por nexo de causalidad eficiente, con ciertas y determinadas leyes que, por lo mismo, son o han llegado a ser el origen del desorden o una valla verdadera para el regreso a la normalidad" (sent. julio 24 de 1961). Análogo pronunciamiento hizo la Corte en fallo de 23 de septiembre de 1958, cuando dijo que "el Gobierno en ejercicio de las facultades excepcionales de que trata el artículo 121 de la Carta, sólo puede dictar las medidas cuya finalidad sea el restablecimiento del orden público, es decir aquéllas en que aparezca ostensible relación entre la conmoción interior y la necesidad de regresar a la normalidad".

En conclusión, como a la Corte se le ha confiado la guarda de la integridad de la Constitución (artículo 214), al ejercer el control jurisdiccional sobre los decretos que

dicte el Gobierno en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 121 esta Corporación debe pronunciarse no sólo acerca de su fundamento en la ley, la Constitución o el Derecho de Gentes, y de su congruencia con normas constitucionales que aún bajo el Estado de Sitio deben ser observadas por aquél, sino sobre su conexidad con los motivos que ocasionan la declaratoria de la emergencia político-militar.

2. *Consideraciones formales*

Analizado el Decreto desde este punto de vista, la Corte no encuentra objeción alguna que formularle, pues fue dictado dentro del régimen del Estado de Sitio que instauró el Decreto número 1042 de 1984 y lleva las firmas del Presidente y de todos los Ministros del Despacho.

3. *Contenido del Decreto número 3671 de 1986*

El acto que se examina puede desglosarse en los siguientes temas:

a) La adscripción a la Justicia Penal Militar (Comandantes de Brigada, Fuerza Naval, Base Aérea "Germán Olano"; Comando Unificado del Sur) de la competencia para conocer de los delitos a que se refieren los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986, en cuanto a las cantidades de "semillas, plantas y droga" que prevé el artículo 2º del Decreto que se examina y a los delitos conexos con tales infracciones (artículos 1º, 2º, 4º y 6º).

b) La determinación del procedimiento correspondiente, que es el señalado en el artículo 590 del Código Penal Militar, con la advertencia de que los fallos que se dicten serán consultables (artículo 1º), la de que "la captura y la detención preventiva se regirán por las normas pertinentes del Código de Justicia Penal Militar" dentro de los términos que fija el artículo 5º del mismo decreto y la de que los infractores no tendrán derecho a la libertad provisional ni a condena de ejecución condicional.

c) La autorización a los jueces de Instrucción Criminal para instruir los procesos contra particulares por los delitos a que se refiere el artículo 1º del Decreto, para lo cual "los Directores Seccionales de Instrucción Criminal comisionarán a los jueces de Instrucción Criminal previa solicitud de los comandantes de Brigada, Fuerza Naval, Base Aérea 'Germán Olano' y Comando Unificado del Sur" (artículo 4º).

d) La vigencia del Decreto, el cual rige a partir de su publicación, suspende las normas que sean contrarias (artículo 8º) y es aplicable a los procesos iniciados a partir de su vigencia.

4. *La competencia de las autoridades militares para conocer y juzgar delitos cometidos por particulares.*

Aunque sobre esta materia ha habido jurisprudencia reiterada de la Corte a partir del fallo de 12 de junio de 1945, con la sola excepción del de 24 de julio de 1961 al que atrás se aludió, la solución tradicional ha sido objeto de aguda controversia no sólo en el seno de esta Corporación sino en la opinión pública en general, hasta el punto de que a raíz de la revisión del D.L. 1042 de 1984, esta Corporación se dividió

por mitades entre los partidarios de la declaratoria de exequibilidad de dicho acto y los que propugnaban su inexequibilidad, empate que hubo de dirimirse con la intervención de un conjuez que votó por la primera de tales alternativas. Es bueno recordar que el Procurador General de la Nación emitió en aquella oportunidad su concepto adverso a este tipo de medidas.

Conviene entonces examinar cuidadosamente los fundamentos constitucionales del acto que se revisa, en cuanto adscribió a la Justicia Penal Militar la competencia para conocer de los delitos a que se refieren los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986, de acuerdo a las cantidades de "semillas, plantas y droga" que menciona el artículo 2° del mismo decreto, y de los delitos conexos con tales infracciones.

Ha considerado la Corte que precisamente el artículo 61 de la Constitución, según el cual "ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política o civil y la judicial o la militar" autoriza al Gobierno para ordenar con motivo de guerra exterior o conmoción interior, la acumulación de las autoridades civil o militar y la judicial, asignándoles funciones jurisdiccionales a órganos pertenecientes al Ejecutivo o al ramo castrense.

Esta solución no se desprende del tenor literal del texto referido, el cual formula una prohibición para "tiempo de paz". Sólo por un razonamiento "a contrario" y con las reservas que éste impone, es posible admitir que el artículo 61 permite en Estado de Sitio el ejercicio simultáneo de las autoridades política o civil y la judicial, por una parte, o de aquéllas y la militar por otra, pero no el de las autoridades judicial y militar. Esto último no se infiere necesariamente de lo anterior, ni tampoco la tesis antagónica.

La Constitución permite para épocas de normalidad que haya un alcalde militar o un alcalde juez, pero no prevé que un juez comande las Fuerzas Armadas o que un militar sea juez para sujetos civiles. En consecuencia, del artículo 61 C.N. no se desprende una *facultad precisa,* como lo exige el artículo 121 id. para disponer por medio de Decreto Legislativo el ejercicio simultáneo por parte de una persona o corporación, de las autoridades judicial y militar.

Debe agregarse que el artículo 170 de la Constitución Nacional, según el cual "de los delitos cometidos por los militares en servicio y en relación con el mismo servicio conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código de Justicia Penal Militar", es de aplicación restrictiva, por lo que consagra el llamado "fuero castrense", dentro del Estado de Sitio, a la población civil sin violar el artículo 26 de la Constitución Nacional.

Los Tribunales Militares son competentes para juzgar delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Pero, se repite, no hay texto alguno de la Constitución que otorgue una facultad precisa según el artículo 121 de la misma, para asignarles el carácter de tribunal competente respecto de delitos cometidos por civiles. Y no se diga que la ley y por ende, los decretos legislativos, pueden establecer libremente tribunales y juzgados que administren justicia, al tenor del artículo 58 de la Constitución, de donde resultaría viable una

medida como la que se revisa, porque el principio de la separación de las ramas del poder público, que consagra el artículo 55 de la Constitución Nacional, exige que los jueces ejerzan funciones separadas, esto es, independientes respecto del Congreso y de la Rama Ejecutiva. Y los Tribunales Militares no pertenecen a la Rama Jurisdiccional sino a la organización jerárquica de las Fuerzas Armadas, por lo cual no cabe predicar de ellos las notas de independencia, y de especialización que, según los principios del Estado de Derecho, deben caracterizar la Administración de Justicia.

Ha dicho la Corte, en fallo relativo a una disposición que extendía el ámbito de las Cortes Marciales al juzgamiento del personal civil y que es aplicable al caso que se estudia, lo siguiente:

"La Justicia Penal Militar se administra de un modo acelerado, con parvedad de procedimientos y del ejercicio del derecho de defensa, sobre todo en el aspecto fundamental de las pruebas. Así lo requiere la naturaleza de la institución castrense y la importancia de mantener la autoridad y respetar la jerarquía de los cuerpos militares. *Por ello, sólo se concibe respecto de éstos y en relación exclusiva con tal actividad y los ilícitos cometidos en desarrollo de la misma.* Consagrarla, involucrando personas distintas de los militares en servicio activo y delitos diferentes a los que se relacionan con el mismo servicio, equivale a suplantar el orden constitucional, concediéndole el artículo 170 de la Carta un valor genérico y no específico que es el que debe corresponder" (C.S.J. fallo de oct. 4 de 1971; subraya la Sala).

Esta Corporación comparte, desde luego, la inquietud general que existe por la situación tan compleja que afecta a la sociedad colombiana, sometida hoy a la acción disolvente de la delincuencia organizada y de los grupos subversivos. Pero a la guerra que desde dichos frentes se ha desatado en contra de las instituciones no es posible responder haciéndoles perder a éstas su fisonomía propia, plasmada expresamente por la Constitución Política que les confiere legitimidad a sus actos. El Estado de Derecho reposa sobre unos equilibrios muy delicados y sutiles que obran en el seno del poder público y en las relaciones de éste con los súbditos. La limitación y especialización funcional de las ramas del poder, así como la garantía de los derechos de las personas, dentro de los límites que traza el bien común, no pueden perderse de vista al examinar las soluciones que deben tomarse para combatir a los perturbadores del orden público.

A las Fuerzas Armadas les corresponde una misión noble y difícil, cual es la que les señala la Constitución de "defender la independencia nacional y las instituciones patrias". La disciplina militar les impone a sus efectivos toda clase de sacrificios, aun el de la vida, en cumplimiento de su deber. Pero no es justo ni conveniente para las propias Fuerzas Armadas y desde luego para el país en general, hacer recaer sobre ellas responsabilidades que deben ser asumidas por otros órganos del Estado y aun por la propia comunidad.

Se ha dicho que la Corte, en guarda de la integridad de la Constitución, asume el papel de "juez estadista". Ello es cierto, dado que no debe limitarse a un examen formal y de cierto modo mecánico de los textos constitucionales y de su aplicación a los casos sometidos a su revisión, sino que le toca penetrar en el sentido profundo de

las instituciones políticas y del ordenamiento jurídico que nos rige para, desde dicha perspectiva, analizar las repercusiones que producen en el equilibrio constitucional los actos que ella controla.

Desde este punto de vista, no puede dejar de ser preocupante que se diga con demasiada reiteración que los jueces no están en capacidad de cumplir con su deber respecto a determinados fenómenos delictivos que ya son endémicos en nuestra sociedad y que, en consecuencia, son las Fuerzas Armadas quienes deben entrar a suplir sus deficiencias. Con la misma lógica habría que decir que la labor legislativa y hasta la del Gobierno tendrían que ser asumidas por aquéllas, desquiciando así todo el orden constitucional.

El juzgamiento de civiles por Tribunales Militares no obedece, como se ha dicho con deplorable ligereza, a un simple traslado de competencias entre unos órganos judiciales previstos por la propia Constitución. Ya se dijo atrás que el artículo 170 de ésta contempla los Tribunales Militares exclusivamente para conocer de las faltas cometidas por militares en servicio y dentro del mismo, en razón de un fuero especialísimo que se explica por la naturaleza de la institución armada. Asignarles el conocimiento de delitos cometidos por sujetos civiles implica algo más de fondo: una alteración sustancial del equilibrio de los poderes públicos y un cambio radical en la concepción acerca de la administración de justicia.

Se ha aludido a los aspectos perturbadores que desde el punto de vista institucional resultan del hecho de extender la acción de las Fuerzas Armadas a campos diversos de los que no sólo la Constitución sino la propia naturaleza de las cosas les ha trazado. Conviene referirse ahora a lo que ello envuelve en torno a la concepción de la justicia.

Una de las más preciosas conquistas de la civilización política es la de la justicia administrada por órganos independientes, imparciales y versados en la ciencia jurídica. No hay que explayarse en demasiadas consideraciones para demostrar las bondades de este principio. Ahora bien, la Justicia Penal Militar, por su organización y por la forma como se integra y como funciona, no hace parte de la Rama Jurisdiccional, como lo exige la Constitución para el juzgamiento de la población civil. Quizá responda a la angustia y a la indignación que experimenta la opinión pública cuando se ve amenazada e inerme ante fuerzas oscuras y excepcionalmente dañinas. Pero el sentido propio de la función jurisdiccional no es encontrar responsables a todo trance, sino castigar el culpable y absolver al inocente, lo cual exige una reflexión ponderada que no suele darse cuando hay que actuar con celeridad frente a las perturbaciones del orden público.

Las urgencias del momento, por apremiantes que lleguen a ser, no son móvil plausible para disponer y tolerar un desbordamiento de las órbitas que la Constitución les asigna a cada una de las ramas del poder público. La anormalidad en los hechos no puede combatirse creando anormalidad en las estructuras jurídicas de la República, pues en todo tiempo deben prevalecer los mandatos constitucionales sobre las normas de inferior categoría.

Sólo así se mantiene la incolumidad de nuestra Carta Política, como su artículo 214 le impone garantizar a la Corte Suprema de Justicia.

Es tradicional la diferencia que la doctrina jurídica ha establecido entre la función jurisdiccional y el poder de policía. A éste le corresponde conservar y restaurar el orden público aparente, lo cual realiza con la aplicación de medidas eminentemente transitorias y revisables que no van dirigidas a solucionar las causas de fondo de los conflictos sociales sino a resolver sus aspectos epidérmicos. El sentido propio de la institución del Estado de Sitio se encuentra en el concepto de una alta policía, ampliada en razón de la gravedad de las circunstancias a campos en los que dicho poder normalmente no se aplica. No se puede perder este horizonte dentro del cual es posible hacer uso de muchos recursos para controlar los comportamientos de los súbditos en orden a prevenir y reprimir por la fuerza las perturbaciones, confundiendo lo que es propio del poder de policía con lo que pertenece al ámbito de la función jurisdiccional, a la cual le toca pronunciarse con fuerza de verdad legal acerca de la responsabilidad jurídica de quienes intervengan en los procesos como incriminados o demandados.

Así, mientras la policía no tiene por qué entrar en demasiadas consideraciones sobre el fondo legal de una situación dada, ya que lo que busca es su conformidad con un orden aparente, la jurisdicción debe buscar ante todo la verdad legal de la situación y pronunciarse definitivamente sobre ella, con fuerza de cosa juzgada.

Ello hace que los procedimientos policivos sean expeditos y autoritarios, mientras los jurisdiccionales deben permitir una consideración serena y cuidadosa acerca de los hechos sometidos a la decisión de los jueces.

Acerca del carácter policivo que, en general, tienen las atribuciones del Gobierno bajo el Estado de Sitio, ha dicho la Corte lo siguiente:

"Cuando la perturbación sobrepasa los límites corrientes, al extremo de que produce una conmoción tal como el grave tumulto que pone en peligro la subsistencia de la autoridad legítima o un alzamiento generalizado contra el Estado, los medios 'habituales' resultan insuficientes y debe apelarse a los excepcionales y extraordinarios pero siempre dentro de los límites de la Constitución y de las leyes, de los tratados internacionales o del derecho de gentes y de los principios universales que caracterizan y tutelan la supremacía del derecho; o sea, de la regla, por "oposición al arbitrio personal de un individuo, de un grupo o de una corporación. *Y como siempre que se trate de policía, los medios que se empleen deben guardar íntima y precisa relación con la necesidad de proteger la libertad. Además, serán proporcionados con la causa que motive su empleo*". (sent. del 5 de diciembre de 1979; la subrayas son de la Sala).

Los poderes del Estado de Sitio le permiten al Gobierno tomar disposiciones policivas muy variadas y eficaces para combatir el narcotráfico y sus secuelas perjudiciales dentro de la sociedad, de modo que atenúen la alarma social producida por los graves crímenes presumiblemente realizados por la delincuencia organizada, sin necesidad de suplantar a las autoridades jurisdiccionales, y lo que es más grave, de distorsionar el sentido propio de la administración de justicia, lo que no deja de tener delicadas repercusiones en el orden institucional.

Es oportuno recordar aquí uno de los pasajes centrales del fallo del 24 de julio de 1961, en el cual se hicieron importantes precisiones sobre el tema en estudio:

"Aparentemente la función falladora acumulada a la actividad instructiva confiere agilidad y presteza a la forma eliminatoria de los estados de violencia perturbadores del orden público. Pueden verse en la medida altas razones encaminadas al logro de la normalidad por el empleo de instrumentos adecuados a la pronta y eficaz lucha contra la delincuencia como garantía del sosiego público. Pero el examen institucional de la cuestión descubre el espejismo y no permite recibir el sistema profundamente perturbador que suplanta la actividad de los jueces y les arrebata la competencia que de derecho y en los hechos, están capacitados para ejercer; que en todo tiempo, y mayormente en casos de emergencia, puede y debe recibir todo estímulo natural e indispensable para su oportuno, eficaz y ágil desempeño, con sólo proveer por los cauces constitucionales todos los elementos morales y materiales en respaldo de función tan elevada, y todo el personal extraordinario que las circunstancias demandan; que con la justicia haya justicia, para contrarrestar debidamente el peligro de la violencia endémica, y atender y hacer frente al aumento de los procesos punitivos en curso, cuyos trámites además, pueden hacerse tan rápidos como lo permite la salvaguardia del derecho de defensa ante *jueces competentes*" (subraya la Sala).

Así las cosas, no sólo por la interpretación gramatical del artículo 61 de la Constitución sino por su sentido institucional, al relacionarlo con los artículos 26, 55, 58 y 170 de la Carta, esta Corporación habrá de declarar la inexequibilidad de los artículos 1°, 2°, 4° y 6° del Decreto que se revisa por cuanto infringen los preceptos constitucionales mencionados, declaración que tendrá que extenderse a las restantes disposiciones del mismo decreto, por cuanto se explican necesariamente en función de dichos textos.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarar inconstitucional el Decreto Legislativo No. 3671 del 19 de diciembre de 1986.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel,* (Con salvamento de voto), *Hernando Gómez Otálora,* (Con salvamento de voto), *Héctor Gómez Uribe,* (Con salvamento de voto), *Gustavo Gómez Velásquez,* (Con salvamento de voto), *Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo,* (Con salvamento de voto), *Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero,* (Con

salvamento de voto) *Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra,* (Con salvamento de voto), *Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

MEDIDAS TENDIENTES A COMBATIR LA IMPUNIDAD. ESTADO DE SITIO. RECOMPENSA MONETARIA, A QUIEN SUMINISTRE DATOS PARA CAPTURAR RESPONSABLES DE LA COMISION DE DELITOS EN EL TERRITORIO NACIONAL O FUERA DE EL, PARA QUE LAS NORMAS LEGALES PUEDAN SER TACHADAS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEBEN OPONERSE *ELLAS EN SI MISMAS* AL ORDEN SUPERIOR DE TAL MODO QUE LA INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE HACERSE CONSISTIR EN EL INDEBIDO USO QUE DE ESAS NORMAS LEGALES HAGAN LAS PERSONAS.

Es Constitucional el Decreto número 3673 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 21.

Referencia: Expediente número 1569 (236-E).

Revisión oficiosa del Decreto Legislativo número 3673 de 1986.

Magistrado Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 9 de 10 de marzo de 1987.

Bogotá, D. E., marzo diez (10) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

El Decreto objeto de revisión

En acatamiento a lo prescrito por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, la Presidencia de la República ha remitido a esta Corte, para la revisión definitiva sobre su constitucionalidad, el Decreto Legislativo número 3673 del 19 de diciembre de 1986, "por el cual se dictan medidas tendientes a combatir la impunidad", cuyo texto es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 3673 DE 1986
(diciembre 19)

"Por el cual se dictan medidas tendientes a combatir la impunidad

"El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984,

DECRETA:

"Artículo 1° Quien suministre a la autoridad informes que permitan hacer efectivo el cumplimiento de órdenes de captura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional o fuera de él, podrá ser beneficiario de una recompensa monetaria.

"Esta misma recompensa podrá ser reconocida a la persona que suministre informaciones y pruebas eficaces que fundamenten la responsabilidad penal del sindicado o permitan hacerla extensiva a otras personas.

"Artículo 2° El Consejo Nacional de Instrucción Criminal recomendará al Director General de Instrucción Criminal los casos en los cuales se reconocerán las recompensas, su cuantía y la oportunidad de su pago.

"Artículo 3° En casos especiales, el Consejo Nacional de Instrucción Criminal podrá recomendar que las ofertas de recompensa sean hechas públicas.

"Así mismo, cuando lo juzgue conveniente, el Consejo Nacional de Instrucción Criminal podrá autorizar la determinación anticipada del monto de las recompensas.

"Artículo 4° El Gobierno Nacional podrá tomar medidas especiales para proteger a las personas que aporten las informaciones y pruebas eficaces a que se refiere el artículo 1° de este Decreto. Estas medidas podrán consistir en la sustitución de los documentos de Registro Civil y de identidad de la persona, así como la provisión de los recursos económicos indispensables para que las mismas puedan cambiar de domicilio y ocupación, tanto dentro del país como en el exterior.

"Artículo 5° Las recompensas de que trata este Decreto podrán ser pagadas dentro del país o fuera de él.

"Artículo 6° Los actos y providencias que expidan el Gobierno Nacional, el Consejo Nacional de Instrucción Criminal y el Director de Instrucción Criminal para la ejecución del presente Decreto, estarán amparados por la reserva legal.

"Artículo 7° El valor de las recompensas se imputará al presupuesto de gastos del Departamento Administrativo de Seguridad, para lo cual, se abrirá una cuenta especial cuyo manejo será absolutamente reservado. El Gobierno queda autorizado para realizar todas las operaciones presupuestales necesarias.

"El ordenador del gasto para los efectos anotados será el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, quien no podrá delegar esta facultad, y deberá rendir informe periódico al Contralor General de la República sobre la cuantía y oportunidad de las recompensas pagadas; solamente el Contralor General de la República auditará el manejo de la cuenta especial cuyos ingresos también podrán estar constituidos por donaciones.

"Artículo 8º A quien fuera de los casos de flagrancia, confesare el hecho durante su primera versión, si fuere condenado se le reducirá la pena hasta en una tercera parte, cuando tal confesión fuere el fundamento de la sentencia.

"También podrá ser rebajada la pena hasta en la mitad, cuando de la confesión se derive la condena de otro responsable.

"Artículo 9º Los mandatos del artículo anterior también se aplicarán respecto de quienes con sus informaciones permitan la ejecución de órdenes de captura.

"Artículo 10. Si el informante o colaborador favorecido con el beneficio de la rebaja de la pena reincidiere o cometiere cualquier conducta delictiva, cesarán los efectos de la rebaja de pena.

"Artículo 11. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 19 de diciembre de 1986.

"(Firmados).

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Gobierno y Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, *Fernando Cepeda Ulloa;* el Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* el Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo;* el Ministro de Defensa Nacional, *Rafael Samudio Molina;* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* el Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo;* el Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio;* la Ministra de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse;* el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, *José Name Terán;* el Ministro de Salud, *César Esmeral Barros;* el Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez;* el Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo Correa".*

Concepto del Procurador General de la Nación

Enviado el expediente al señor Procurador General de la Nación, emitió concepto mediante oficio número 1111 del 13 de febrero de 1987.

Expresa la vista fiscal que las medidas adoptadas por medio del Decreto número 3673 de 1986 guardan evidente conexión con las causas invocadas por el Gobierno en el Decreto número 1038 de 1984 para declarar el Estado de Sitio en todo el territorio nacional.

Dice que el artículo 1º del Decreto en revisión es constitucional, pues bien puede el Gobierno dentro de las facultades de Estado de Sitio establecer erogaciones por concepto de recompensas, pues ningún canon constitucional prohíbe esta clase de estímulos a los ciudadanos como medio para luchar contra el delito. En cuanto a otros artículos manifiesta textualmente la Procuraduría:

"(...) No sucede lo mismo, en cambio, con el artículo 2° del Decreto Legislativo en cuanto otorga implícitamente al Director General de Instrucción Criminal, previa recomendación que le haga el Consejo Nacional de Instrucción Criminal, el poder de establecer *los casos y la oportunidad* en los cuales se reconocerán y pagarán las recompensas. Como la disposición rige para quienes suministren *pruebas eficaces* que fundamenten la responsabilidad penal del sindicado o permitan hacerla extensiva a otras personas (inciso 2° del artículo 1°), ello implica, necesariamente, que un funcionario del poder ejecutivo se vea autorizado para calificar la relación causal (sic) entre los tres extremos de la relación jurídica; suministro de la prueba –eficacia– determinación de la responsabilidad.

"El ejercicio de valoraciones de esa índole rompe el esquema de separación funcional de los poderes públicos –columna vertebral del estado de derecho– diseñado en el artículo 55 de la Carta, en virtud del cual el Congreso, el gobierno y los jueces tienen funciones separadas. Y violenta, de contera, el mandato del artículo 58 de la Constitución Nacional, a cuyo amparo únicamente la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito y demás tribunales y juzgados que establezca la ley, administran justicia.

".....

"En los términos en que está concebida la institución de la recompensa, entonces, resulta inexequible la facultad otorgada al Director General de Instrucción Criminal en tanto se vincula con la responsabilidad penal de un sindicado o de otras personas, comoquiera que se deriva de un acto jurídico privativo de la jurisdicción, que no respecto de la originada en las informaciones que permitan hacer efectivas las órdenes de captura, típicas operaciones materiales respecto de las cuales basta su constatación física, sin que impliquen juicios de valor reservados por la Carta a uno de los poderes públicos por vía general, excepción hecha de las atribuciones que sobre la materia se reconocen al Senado de la República y a la Jurisdicción Penal Militar.

"De ahí que distingamos ambas hipótesis para predicar que la disposición contraría la Carta, en cuanto desarrolla la premisa consagrada en el inciso 2° del artículo 1° del Decreto Legislativo número 3673 de 1986, por lo que la Procuraduría General de la Nación depreca su inexequibilidad. Y en cuanto regula el supuesto del inciso 1° de la misma norma, resulta compatible con la Carta y es por tanto exequible.

"En los mismos términos es parcialmente exequible y parcialmente inexequible el artículo 3° del Decreto que la Corporación revisa por la vía del control automático.

"También tiene vicios de constitucionalidad (sic) el artículo 4° del Decreto número 3673 de diciembre 19 de 1986, cuyo contenido no puede estudiarse sino en íntima vinculación con el artículo 6° *ibidem*. En tanto el primero de ellos autoriza al Gobierno para tomar medidas de protección en favor de los delatores, entre ellas la sustitución de los documentos de registro civil y de identidad de los mismos y la provisión de recursos económicos para facilitarles el cambio de residencia y ocupación, tanto dentro del país como en el exterior, el segundo (2°) consagra la reserva legal de todos los actos y providencias que sobre el tópico se expidan. A ello formulamos los siguientes reparos:

"A. La reserva sobre la sustitución de documentos de identidad y de registro civil, y sobre actos de protección del delator que se entienden de carácter discrecional, vulnera la garantía de derechos adquiridos por parte de terceros frente a sus deudores, pues hace imperseguibles sus créditos y otros derechos subjetivos amparados en el artículo 30 de la Constitución, e impide a las autoridades proteger la honra y bienes de esos terceros frente a los beneficiados con el cambio, ocultamiento y reserva de su nueva identidad (artículo 16 Constitución Nacional).

"B. A través del mismo mecanismo, tal como está concebido en el Decreto cuya constitucionalidad se revisa, se desconoce el principio del debido proceso, consagrado en el artículo 26 de la Carta, en cuanto impide al reo y a su defensor el ejercicio del contradictorio, mediante el control sobre el órgano de la prueba que se hace valer en su contra. El concepto de juicio, contenido en el artículo 26 de la Constitución, no es vacío y ausente de consecuencias jurídicas. Al contrario, se trata de un término ampliamente desarrollado en los sistemas jurídicos y en la doctrina constitucional, que implícitamente significa la posibilidad de debate y de controversia, tanto sobre la prueba misma como respecto del órgano que la aporta, amén de las demás implicaciones propias del ejercicio del derecho de defensa. Las pruebas ocultas, o los sujetos inidentificables que las aportan, riñen abiertamente con la garantía constitucional del debido proceso y del ejercicio del contradictorio, precisamente una de aquéllas de carácter absoluto que el gobierno nacional no puede ignorar, aun en estado de conmoción interior o de guerra exterior.

"El cambio de identidad, bajo esta perspectiva, sólo sería constitucionalmente válido a partir de la finalización del juicio. Y lo mismo cabría predicar para cualquier tipo de medida protectora tendiente a mantener en la clandestinidad al sujeto de la prueba de incriminación, por fuera del alcance del reo para controlar tanto su origen como las calidades y características que constituyen los fundamentos racionales de la crítica probatoria.

"De ahí que los artículos 4° y 6° del Decreto sean contrarios a las normas de la Constitución aquí aludidas y deban ser declarados inexequibles por la Honorable Corte Suprema de Justicia".

Señala que el artículo 5° es exequible pues se trata apenas de un estímulo que en nada contraría el sistema constitucional. Por el contrario, estima inexequible el artículo 7°, en cuanto consagra como única excepción a la reserva que establece sobre el manejo de la cuenta especial dentro del presupuesto del DAS para pagar las recompensas, el Auditaje del Contralor General de la República. Ello, en su sentir, viola los artículos 145 y 151 de la Constitución, por excluir el control del Ministerio Público.

Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Es la Corte Suprema de Justicia el Tribunal competente para resolver acerca de la constitucionalidad del Decreto transcrito, pues se expidió por el Presidente de la

República en ejercicio de las facultades legislativas excepcionales que le otorga el artículo 121 de la Carta Política.

2. *Revisión formal del Decreto*

Tal como lo exige el artículo 121 de la Constitución, el Decreto en estudio lleva las firmas del Presidente de la República y de todos los Ministros del Despacho.

3. *Constitucionalidad desde el punto de vista material*

La idea fundamental plasmada en el Decreto cuya constitucionalidad se estudia, es la de autorizar a las entidades responsables de ejecutar las órdenes de captura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional, para que procedan sobre la base de informes suministrados por cualquier persona, la cual a su vez, por el hecho de haber informado, se hace beneficiaria de una recompensa monetaria que determinará el Director General de Instrucción Criminal, según las recomendaciones del Consejo Nacional de Instrucción Criminal sobre casos, cuantía y oportunidad, con cargo al Presupuesto de Gastos del Departamento Administrativo de Seguridad.

Estima la Corte que, por una parte, la medida tiende a garantizar la efectiva acción de las autoridades respecto de la actividad delincuencial en sus distintas formas, lo cual encaja dentro del concepto de guarda del orden público y tiene indudable relación con los motivos que llevaron al gobierno a poner en vigencia el excepcional estatuto previsto en el art. 121 de la Carta.

Por otro lado, independientemente de si en la práctica la aplicación de la medida dará o no resultados, punto que no es del interés jurisdiccional cuando se estudia la constitucionalidad del Decreto, se considera acertado el concepto emitido por el señor Procurador General en el sentido de que ninguna disposición constitucional prohíbe erogaciones del Tesoro Público con objeto semejante, cuyo propósito no es otro que el de realizar los fines que justifican la existencia del Estado.

Puede, por tanto, la ley (en este caso la que con fuerza material expide el Ejecutivo) disponer de las partidas necesarias para atender a los gastos que la defensa social demanda, especialmente cuando del orden público se trata.

Se aparta la Corte del concepto fiscal en punto a la posible invasión de la órbita jurisdiccional por el gobierno, ya que el procedimiento de recepción de las denuncias o informes y el posterior reconocimiento y pago de las recompensas es, en sí mismo, administrativo y en modo alguno jurisdiccional, pues ese proceso no tiende a establecer la responsabilidad del sindicado ni a señalar la sanción penal que pueda caberle, sino a facilitar la captura física de quien va a ser juzgado por Tribunal competente.

No obstante lo anterior, que puede afirmarse sobre la idea general contenida en el Decreto, es evidente que la expresada invasión del ámbito propio de los jueces podría darse en caso de entender que el inciso 2° del art. 1° faculta la determinación y pago de la recompensa con antelación al momento en que se establezca por funcionario competente la responsabilidad del sindicado. Pero eso no es lo que se desprende del texto de la norma.

Por el contrario, aplicando el principio según el cual se deben interpretar las disposiciones del modo que mejor encuadren dentro de la integridad de nuestro ordenamiento positivo, es decir, el citado inciso puede entenderse, y ello se adecua más a su tenor textual, como una posibilidad de recompensa que sólo se convierte en derecho para el informante cuando el supuesto de la gratificación (la eficacia de una información que fundamente la responsabilidad del sindicado), tiene apoyo en una sentencia.

Si tal es el alcance del precepto, no se ve motivo para sostener que sea inconstitucional y así lo considera la Corte.

Por otro aspecto, las disposiciones del Decreto, consideradas en su conjunto, no atentan contra la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que, aún tratándose de denuncias temerarias, cuya ilicitud sería más grave en estos casos, es claro que ellas pueden darse con o sin recompensas y que, por tanto, la creación de éstas no es el motivo que induciría a esa clase de denuncias, las cuales en cualquier tiempo y respecto de todo tipo de delitos, han sido previstas y sancionadas por el ordenamiento penal.

Finalmente, se encuentra sin dificultad que el Decreto revisado es desarrollo de la obligación contemplada en el artículo 16 de la Carta Política: A las autoridades corresponde proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes.

Quizá pudiera formularse a las normas que se comentan, la tacha de colocar a los ciudadanos en posición de cobrar por algo que, según las leyes, es su obligación. Pero, este argumento no puede usarse, aún considerándolo válido, para desestimar la constitucionalidad del Decreto, sino a lo sumo para señalar críticas sobre oportunidad o conveniencia que, como ya se dijo, escapan a la tarea de control confiada a esta Corporación.

En cuanto atañe a algunas dudas suscitadas por el concepto de Procuraduría sobre otras disposiciones del Decreto tomadas individualmente se tiene:

El artículo 4° faculta al Gobierno Nacional para tomar medidas especiales tendientes a proteger a las personas que aporten informaciones y pruebas eficaces a las que se refiere el artículo 1°. Tales medidas pueden consistir en la sustitución de los documentos de registro civil y de identidad de la persona, así como en la provisión de recursos económicos indispensables para que las mismas puedan cambiar de domicilio y ocupación, tanto dentro del país como en el exterior.

Se trata, pues, de una previsión normativa destinada específicamente a evitar las retaliaciones de que pudieran ser objeto los denunciantes y, por tanto, de un estímulo adicional para que suministren las informaciones y datos que permitan la ejecución de las órdenes de captura de que trata el Decreto. Eso quiere decir que existe conexidad entre la medida y el objetivo buscado por la declaratoria del Estado de Sitio (Decreto número 1038 de 1984), luego desde dicha perspectiva no vulnera la Constitución.

Afirma el concepto de Procuraduría que, por una parte la facultad conferida al gobierno significa un desconocimiento de los derechos adquiridos por parte de terceros frente a sus deudores (informantes que cambian de identidad y domicilio), y que además conduce necesariamente a la violación del artículo 26 Constitucional puesto que se atenta contra el concepto de *juicio,* el cual implica la posibilidad de debate y de controversia "tanto sobre la prueba misma como respecto del órgano que la aporta".

Respecto de la primera observación, encuentra la Corte que el cambio de identidad autorizado por la ley no representa en sí mismo la facilidad de burlar los intereses que puedan tener los acreedores del informante, toda vez que la norma no excluye el establecimiento de medidas que impidan ese indebido beneficio para quien informa. Pero, aun cuando en efecto pudiera llegar a causarse a los acreedores el perjuicio que teme la Procuraduría, no se estima violado el artículo 30 de la Constitución, pues la morma objeto de revisión no dispone que se extingan las obligaciones del informante, ni de su articulado se deduce que cambie su identidad física; si abusando del cambio de documento de identidad incumple sus obligaciones civiles, será su voluntad la causa del incumplimiento y no la norma que se revisa.

Además, la eventualidad del perjuicio a los terceros sería demasiado mediata e indirecta como para hacer inconstitucional la disposición.

En efecto, para que las normas legales puedan ser tachadas de inconstitucionalidad deben oponerse *ellas en sí mismas* al orden superior, de tal modo que la inconstitucionalidad no puede hacerse consistir en el indebido uso que de esas normas legales hagan las personas.

En cuanto al derecho de controvertir la prueba y la supuesta necesidad de que el acusado y su apoderado *conozcan* al informante, estima la Corte que ello no es necesario para la debida garantía del derecho de defensa que, en este caso, no descansa en el conocimiento directo de esa persona y sí en la posibilidad de debatir y valorar y aun de desvirtuar los resultados de esta especial colaboración investigativa, lo cual en modo alguno resulta prohibido u obstaculizado por el precepto que se revisa. Debe destacarse que el informante no puede ser llamado a figurar en el proceso, ni por la acción de oficio del juez ni menos a petición de los que en él intervienen. Conforme a las claras finalidades del Decreto, tan procedentes constitucionalmente, su identidad debe preservarse por todos los funcionarios, llámense jueces, policía judicial o autoridades administrativas, garantía de seguridad que debe ser efectiva antes de iniciarse la averiguación, durante el desarrollo de ésta y después de haber culminado totalmente.

En cuanto al artículo 7° del Decreto, el cual establece la reserva sobre el manejo de la Cuenta Especial que, con cargo al Presupuesto de gastos del DAS, debe llevar a cabo el Director de ese organismo para hacer efectivas las recompensas, así como el deber que dicho funcionario tiene de rendir informe periódico al Contralor General de la República sobre la cuantía y oportunidad de las recompensas pagadas, no acoge la Corte el criterio del señor Procurador sobre posible violación de los artículos 145 y 151 de la Carta.

En efecto, se considera que la función fiscalizadora del Estado puede cumplirla tanto la Procuraduría como otros organismos a los cuales se atribuye la función propia del Ministerio Público, como el Contralor General de la República, en lo que atañe al gasto y las cuentas públicas.

Esta última función, dada su especialidad, si es cumplida por la Contraloría como en el presente caso lo establece la propia norma que se revisa no requiere una doble actuación, sobre la misma materia y con el mismo propósito, en cabeza del Ministerio Público.

Bien distinto es que, de los materiales y conclusiones que obtenga el Contralor, pueda la Procuraduría cumplir su función respecto de la conducta del funcionario público en cuestión, a lo cual la norma examinada no se opone pues debe ser interpretada dentro del contexto general del orden jurídico, que en modo alguno resulta derogado por el Estado de Sitio y ni siquiera suspendido si no se opone a él.

DECISIÓN

Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLARAR CONSTITUCIONAL en su integridad el Decreto número 3673 de 1986, "por el cual se dictan medidas tendientes a combatir la impunidad".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria General

Expediente 1561 (234-E). Revisión Constitucional Decreto número 3670 de 1986.

Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, (Con salvamento de voto), *Hernando Gómez Otálora,* (Con salvamento de voto), *Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez,* (Con salvamento de voto), *Rodolfo*

Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO

Disentimos parcialmente de la decisión mayoritaria al considerarse que el artículo tercero del decreto impugnado es inconstitucional, por las siguientes razones:

1. En el mencionado artículo se dice que "el material que con el mismo objeto se contrate a partir de la vigencia del presente Decreto, quedará cobijado por el tratamiento aquí establecido", es decir, exento de la totalidad de los derechos de aduana y demás gravámenes, y con un control presupuestal limitado a la "certificación expedida por el Subdirector de Ejecución Presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que al comprar el bien existían apropiaciones presupuestales".

2. En la exposición de motivos del Decreto analizado se dice:

(...)

Que las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado deben dotarse en forma oportuna de equipos y materiales para el cumplimiento de sus funciones;

(...)

Que por todo lo anterior es indispensable suspender aquellas disposiciones que actualmente impiden la inmediata dotación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, liberando las apropiaciones presupuestales existentes para el pago del valor y los gravámenes de importaciones que lleguen a ser necesarias.

3. Al interpretar el alcance de la primera parte del artículo tercero, en función de los dos considerandos transcritos de la exposición de motivos, puede entenderse que "el material que con el mismo objeto se contrate" (para consumo, según se desprende de los dos primeros artículos del Decreto), se refiere al necesario para el funcionamiento y dotación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Si éste es el alcance, no sólo se viola ostensiblemente la relación de conexidad que debe existir entre el artículo estudiado y el Decreto número 1038 de 1984 por medio del cual se decretó el Estado de Sitio en el territorio colombiano, pues muchos de los gastos de funcionamiento y dotación de las entidades que integran estos cuerpos pueden no estar relacionados con el restablecimiento del orden público turbado, y mucho menos con la adquisición de "material de guerra o reservado" o "combustibles, lubricantes y grasas" a que se refiere el artículo primero del Decreto.

Esta interpretación se refuerza si se tiene en cuenta que en el Decreto se prevé la adquisición de elementos para organismos como el Hospital Militar.

Sobre esta base interpretativa la norma también viola el artículo 17 de la Carta que prevé la obligación del Estado de darle especial protección al trabajo, pues a través de la brecha abierta de la importación de elementos libres de los gravámenes aduaneros para la dotación y funcionamiento de las Fuerzas Militares y de Seguridad, no sólo se desangrará el presupuesto nacional, sino que, además, se dejará de invertir fuertes sumas de dinero en la adquisición de bienes producidos por la industria colombiana.

Es más, una situación de privilegio de esta naturaleza, proyectada a todas las compras que se realicen para las Fuerzas Armadas y de Seguridad a partir de la fecha de la expedición del Decreto en estudio, puede constituir un poderoso acicate para la perpetuación del estado de emergencia.

4. Y no cabe argüir que esta interpretación es sólo una hipótesis que puede no materializarse en la realidad concreta, pues la sola posibilidad de que ella se dé vicia de inconstitucionalidad la norma, ya que la relación de conexidad que forzosamente debe existir entre el decreto expedido con base en las facultades nacidas de la declaratoria del Estado de Sitio, y los motivos de ésta, no permite ninguna ambigüedad en la redacción de los textos normativos. En el caso en estudio no sólo hay ambigüedad, sino una peligrosa posibilidad de que la norma sea interpretada en la forma como atrás se expresó.

Gustavo Gómez Velásquez, Jaime Giraldo Angel.

Salvamento de voto

Nuestro disentimiento con relación a la decisión adoptada por el voto mayoritario de la Sala se refiere a dos aspectos complementarios: El primero hace relación a que no compartimos la afirmación que se desprende de la sentencia, de que la Justicia Penal Militar no puede, en ningún tiempo, conocer de delitos cometidos por civiles. El segundo, a que consideramos es exequible el Decreto número 3671 de 1986, por medio del cual se asignó a dicha Justicia el conocimiento de algunos delitos de narcotráfico, dadas las circunstancias que motivaron la declaratoria del Estado de Sitio que le dió soporte jurídico a la expedición del mencionado Decreto. Analizaremos estos dos puntos en forma separada.

1. Competencia de la Justicia Penal Militar para conocer, en casos de guerra exterior o de conmoción interior, de los delitos cometidos por civiles.

En tiempo de paz no hay duda alguna que la Justicia Penal Militar sólo puede conocer "de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio", como literalmente reza el artículo 170 de la Carta. Pero de aquí no se colige que este mismo régimen sea el previsto por nuestra Constitución Nacional para épocas de anormalidad en que se pueda ver envuelto el país.

Por el contrario, el artículo 61 de la misma dice que "ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente en tiempo de paz, la autoridad política o

civil y la judicial o militar", por lo que, a contrario sensu, en tiempo que no sea de paz podrá existir el ejercicio simultáneo de funciones públicas diversas por los distintos órganos del Estado.

Dentro de una limitada interpretación exegética de la norma se ha afirmado que de su texto literal sólo se colige la posibilidad de que en tiempo de guerra la autoridad civil, y no las demás, puede ejercer también la judicial y la militar. Si ello fuera así, la norma sobraría, por lo menos en lo que al ejercicio de la autoridad militar se refiere, pues enfáticamente dice el numeral 8° del artículo 120 de la Carta que corresponde al Presidente de la República "dirigir, cuando lo estime conveniente, las operaciones de la guerra como Jefe de los Ejércitos de la República". Aun en tiempo de paz el Presidente es el Jefe Supremo de las Fuerzas Militares.

El derecho es un instrumento cultural de los pueblos encaminado a resolver los conflictos que se le presentan en cada momento histórico, y es en función de su eficacia para alcanzar este objetivo como debe ser interpretado. Cuando hay perturbación del orden público del país por factores externos o internos, el Estado debe tener la capacidad de utilizar a plenitud sus recursos, para garantizar el restablecimiento del orden y del sosiego social. Es en estos momentos cuando las Fuerzas Militares, adiestradas y equipadas para enfrentar las más adversas condiciones, pueden asumir el cumplimiento de muchas funciones del Estado, como las de llevar salud, protección, bienestar social, a los sitios convulsionados, en donde no se puede llegar a prestar normalmente los servicios a la comunidad. Y estas posibilidades están contempladas en el artículo 61 de la Carta, así ellas no se desprendan de su escueta interpretación literal.

La interpretación por la que se propugna en este salvamento se hace aún más imperativa a partir de la reforma constitucional de 1945, en la que se morigeró sustancialmente el principio de separación de las Ramas del Poder Público, estableciendo para ellas el deber de colaborar armónicamente a fin de lograr el cumplimiento de los fines del Estado (art. 55 de la Carta).

Igualmente, y en casos específicamente relacionados con los motivos de turbación del orden público, las autoridades militares pueden cumplir funciones judiciales con relación a los civiles involucrados en ellos. Nuestro país ha suscrito distintos tratados en donde esta eventualidad está expresamente pactada, sin que hasta ahora se hayan tildado de inconstitucionales. En el Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, aprobado por la Ley 5ª de 1960, se prevé, en los casos de conflicto entre varios Estados, el juzgamiento de civiles por autoridades militares para permitirle a la potencia ocupante garantizar la administración regular del territorio ocupado, así como la seguridad de los miembros y bienes de las fuerzas de ocupación. La Convención Americana de Derechos Humanos (Tratado de San José de Costa Rica), aprobado por la Ley 16 de 1972, prevé en su artículo 27 la suspensión de la garantía del "juez natural" en "caso de guerra, *peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado*" (la subraya es nuestra). No hay pues duda de que en nuestra Constitución hay previsiones suficientes para que en circunstancias excepcionales la Justicia Penal Militar pueda conocer de delitos cometidos por civiles, cuando éstos estén relacionados con dichas circunstancias.

2. Competencia de la Justicia Penal Militar para conocer de delitos de narcotráfico, de acuerdo con el Decreto número 3671 de 1986, expedido por el Gobierno Nacional en uso de las facultades del art. 121 de la Constitución Nacional.

En nuestro ordenamiento jurídico quien tiene facultad para determinar cuándo el país se encuentra "en caso de guerra, peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado" es el Gobierno Nacional. Uno de los mecanismos creados por la Constitución Nacional para el efecto es la declaratoria del Estado de Sitio, prevista en el artículo 121 de nuestro estatuto fundamental. Dice así la mencionada norma:

Art. 121. En caso de guerra exterior o de conmoción interior, podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella...

Este acto no es en manera alguna una decisión discrecional del Presidente de la República, pues se exige para su expedición el concepto previo y favorable del Consejo de Estado. Por otra parte está sometido a control político cuando la misma Carta dispone que "...serán responsables el Presidente y los Ministros cuando declaren turbado el orden público sin haber ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoción interior..."

Con base en esta facultad el Presidente de la República, mediante el Decreto 1038 de mayo 1° de 1984, con ocasión del asesinato del Ministro Rodrigo Lara Bonilla, declaró turbado el orden público en todo el territorio nacional. En uno de los considerandos del mencionado Decreto se dice expresamente:

Que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional.

Por consiguiente, el país, a través de sus mecanismos institucionales estaba dentro del régimen del estado de excepción que autorizaba la expedición de medidas extraordinarias encaminadas a remover las causas que implicaban la perturbación del orden público.

3° Las atribuciones del Presidente de la República con fundamento en el artículo 121 de la Constitución Nacional.

Es claro que con ocasión de la declaratoria del Estado de Sitio el Presidente sólo tiene "las facultades legales, las que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público y las que conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones", tal como reza la parte final del inciso primero del mencionado artículo 121. Pero ya se ha visto cómo nuestra Constitución Nacional en su artículo 61, y el Derecho de Gentes en los distintos tratados en que se han incorporado sus principios, prevén la posibilidad de que la Justicia Penal Militar juzgue a civiles en las específicas condiciones que hayan motivado la declaratoria de turbación del orden público.

Por otra parte, a más del soporte jurídico que debe tener la medida que se tome para el restablecimiento del orden, ella debe estar en relación de conexidad con los factores que motivaron la perturbación. Como lo dice el fallo del que respetuosamente nos separamos, haciendo alusión a una jurisprudencia de la Corte de mayo 14 de 1970, las facultades del Presidente de la República durante el estado de sitio "encuentran limitaciones en la necesidad de restablecer el orden, lo cual implica que las medidas del caso deben tener relación o nexo causal con los motivos de perturbación y estar encaminadas a eliminarlas".

Corresponde pues a la Corte velar no sólo porque la medida no desborde los límites constitucionales, sino también porque ella esté en relación de conexidad causal con los fenómenos que motivaron la declaratoria de turbación del orden público.

Dentro de este contexto, no hay duda que el Decreto se ajusta a las exigencias de nuestros cánones constitucionales: Fue expedido con fundamento en las facultades que concede la Carta al Presidente de la República cuando se ha producido la declaratoria del Estado de Sitio, y está en relación de conexidad causal con los motivos que originaron dicha declaratoria.

Sin embargo, situado el problema en este terreno, se presenta la posibilidad de mezclar juicios de conveniencia con los de viabilidad jurídica de la medida adoptada. Quienes salvamos el voto compartimos íntegramente las preocupaciones de la opinión mayoritaria de la Sala en cuanto a los inconvenientes de adoptar estereotipadamente como mecanismo de solución de todos los conflictos que se suscitan en el país transferirle la responsabilidad de ellos a las Fuerzas Militares, con un desprecio institucional que está resquebrajando seriamente la estructura jurídica del país, y estamos de acuerdo con la necesidad de mantener muy en alto los valores de la civilidad y la democracia. Hubiéramos preferido que el Gobierno, haciendo uso de las facultades extraordinarias que tuvo durante dos años para reformar el Código de Procedimiento Penal, hubiese creado un grupo especializado de jueces que con todas las garantías de seguridad, y todos los estímulos necesarios, pudiera afrontar, dentro de los canales institucionales de la justicia ordinaria, las graves situaciones que afectan la tranquilidad nacional, como reiteradamente se le sugirió. No lo quiso hacer así y recurrió al camino fácil de transferir a la justicia Militar la competencia para conocer de algunos delitos que motivaron la declaratoria del estado de sitio. Pero el hecho de que esta decisión no haya sido la más conveniente para la vida del país, no la hace por eso inconstitucional.

Jaime Giraldo Angel, Alberto Ospina Botero, Héctor Marín Naranjo.

SALVAMENTO DE VOTO

Los suscritos magistrados disentimos de la decisión adoptada por la mayoría de la Corte, por las siguientes razones:

La institución del Estado de Sitio es de carácter extraordinario, puesto que se concibió precisamente para enfrentar situaciones de orden público respecto de las cuales son insuficientes las facultades ordinarias del Gobierno.

No es de extrañar, por tanto, que –sin perder su necesario encuadramiento dentro del sistema constitucional– el artículo 121 de la Carta permita el ejercicio de ciertas atribuciones de excepción que no pueden ser usadas por el Ejecutivo en épocas de tranquilidad y sosiego o normalidad constitucional.

La Constitución señala que, durante el tiempo de excepción siempre y cuando se haya declarado el Estado de Sitio con las formalidades previstas en ella, el Presidente de la República tendrá, *"además,* de las facultades legales, las que la Constitución *autoriza* para tiempos de guerra o de perturbación del orden público (como son las que se deducen de los artículos 28, 33, 42, 43 y 61) y, las que conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes, rigen para la guerra entre naciones" (se subraya).

Entre las facultades autorizadas por la Carta para tiempos de perturbación del orden público, es decir, para épocas de no paz, está la de confiar temporalmente a ciertas autoridades el ejercicio simultáneo de funciones de naturaleza distinta, por ejemplo las judiciales y las militares, siempre que la medida correspondiente guarde conexidad con los motivos que ocasionaron la perturbación.

Se deduce lo anterior no solamente de la razón ya expresada en torno al carácter extraordinario del Estado de Sitio, pues la naturaleza misma de la perturbación puede aconsejar la aludida concentración temporal de funciones públicas, sino del artículo 61 de la Carta, a cuyo tenor, "ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente, *en tiempo de paz,* la autoridad política o civil y la judicial o la militar".

Entendemos como evidente que lo opuesto al tiempo de paz es la guerra o la conmoción interna y que las crisis del orden público que ellas representan constituyen supuesto necesario cuando el país ha sido declarado en Estado de Sitio.

Aunque se pretenda descalificar el argumento "a contrario" por supuestas fallas de lógica jurídica, quienes suscribimos el presente Salvamento de Voto lo consideramos válido para interpretar el sentido de la norma transcrita, pues se trata de una expresa condición señalada por el constituyente (la de hallarse el país en tiempo de paz) para que se configure y tenga efecto la prohibición allí establecida. No es por tanto, aplicable al tiempo de turbación del orden público.

De interpretar la prohibición como absoluta, se dejaría sin sentido parte de esa norma constitucional, cuya referencia al artículo 121 aparece clara en cuanto éste permite al Jefe del Estado, durante el tiempo de excepción, ejercer atribuciones que de otra manera no tendría.

La ponencia a cuyo favor se pronunció la mayoría admite que se transfiera a la jurisdicción penal militar el juzgamiento de civiles por delito de narcotráfico, cuando una situación excepcional lo requiera. Compartimos este criterio pero discrepamos del concepto expresado por el señor ponente en el sentido de que esa situación excepcional no existe hoy, pues en nuestra opinión la actual coyuntura es de especial gravedad

para la justicia y para la Nación, de lo cual da muestras precisamente el conjunto de hechos que motivaron la actual vigencia del Estado de Sitio y las medidas adoptadas al amparo de éste.

A nadie escapa ni puede escapar la grave crisis del orden público que afecta al país, cuyas características son tales que nos hallamos sin duda ante un hecho notorio que, por su naturaleza, no necesita prueba.

1º *El derecho de gentes.* El artículo 121 de la Carta es uno de los pocos que hace referencia expresa a las "reglas aceptadas por el derecho de gentes que rigen para guerra entre las naciones".

La ponencia hacía alusión a tales reglas, para sostener que el juzgamiento de civiles por Tribunales Militares era violatorio de ellas.

Sin embargo, del estudio detenido de las normas del Derecho internacional, se llegó a la conclusión contraria, lo cual concluyó en que se omitiese tal motivación.

2º Los magistrados disidentes recalcamos en las opiniones expresadas sobre este trascendente tópico en la discusión en Sala Plena.

3º Tres Convenios Internacionales se citaban en la ponencia inicial como fundamento de la tesis citada:

a) La IV Convención de Ginebra de 12 de agosto de 1949 aprobada, aun cuando no textualmente reproducida por la Ley 5ª de 26 de agosto de 1960. Por cierto que tal Convención fue adicionada por el Protocolo II de 10 de junio de 1977, cuyo texto aun cuando no ha sido aprobado por Colombia, es elemento de interpretación;

b) Los pactos internacionales de derechos económicos, sociales, culturales y de derechos civiles y políticos, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 y aprobados por la Ley 14 de 1968;

c) La Convención interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica de 22 de diciembre de 1969 aprobada por la Ley 16 de 1972.

4. Para los suscritos magistrados, la primera de estas concreciones nada tiene que ver con el tema a estudio, ya que se refiere a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, bien sea internacional (art. 2º) o nacional y busca proteger a las personas que no participan en tales hostilidades. Además las alusiones que se hacen a los tribunales militares, están incluidas en la Sección II (territorios ocupados) del Título III (estatuto y trato de las personas protegidas) y se refiere a los casos de ocupación de un país por otro, lo cual es imposible predicar en el caso de la represión del narcotráfico.

Por lo demás, lo que el artículo 3 ordinal a) prohíbe son las condenas dictadas *sin previo juicio* (se subraya) y tal posibilidad se descarta en el Decreto revisado, donde se señala el trámite del juicio respectivo (artículo 590 del C. de J.P.M.).

Suspensión de garantías

4° Dentro de tales parámetros, los convenios internacionales principalmente aplicables, el de Nueva York de 1966 y el de San José de Costa Rica de 1969, son las bases para concretar las reglas del Derecho de Gentes.

La última convención por ser esencial para el área convulsionada de nuestra América y ser posterior, tiene mayor pertinencia interpretativa. Ambas normas aceptan que en circunstancias excepcionales que allí se concretan, podrá un Estado signatario suspender por tiempo limitado las obligaciones contraídas en el Pacto o Convención, siempre que "no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el Derecho Internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social" (Art. 4 del Pacto de Nueva York y 27 del Convenio de San José de Costa Rica).

Las circunstancias excepcionales, son según esta última disposición, los casos de guerra, peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o *seguridad* del Estado Parte. (se subraya).

Tales presupuestos translucen en esencia, los términos Guerra exterior o conmoción interior, usados por el artículo 121 de la Constitución Nacional.

Ambas normas internacionales determinan en forma específica y concreta, cuáles derechos individuales no pueden ser suspendidos, lo cual a contrario sensu, hace deducir cuáles pueden suspenderse.

Pues bien, según la Convención Americana de Costa Rica, pueden suspenderse en tales casos excepcionales el Derecho a la libertad personal (art. 7). Las garantías judiciales (en cuanto no sean indispensables para la protección de los derechos que no pueden suspenderse), el Derecho a la indemnización (art. 10); la protección a la honra y dignidad (art. 11); la libertad de pensamiento y expresión (art. 13).

Entre los derechos que no pueden suspenderse, amén de los derechos a la vida e integridad personales, está el principio de la legalidad y retroactividad (art. 9) de evidente relación con el tema a estudio.

Del análisis de lo dispuesto, se concluye que aún "la preciosa conquista de ser juzgado por órganos independientes e imparciales" consagrada por el artículo 10 de tal Convención, sí puede ser transitoriamente suspendida según ella; máxime cuando la Justicia Penal Militar, está establecida con anterioridad a la declaración del Estado de emergencia y el procesado es oído.

5. *Principios de reserva y favorabilidad.* En lo tocante con los principios universales sobre el juzgamiento de los habitantes de un territorio, la Convención de San José, establece dos que son intocables e invulnerables aún en estado de excepción. Coincide éste planteamiento con lo determinado en el Pacto de Nueva York.

Estos principios básicos que deben respetarse en todo momento son:

a) El de *reserva o estricta legalidad* según el cual nadie podrá ser penado sino conforme a previa norma que haya definido el hecho y determinado la pena correspondiente;

b) El de la aplicación retroactiva de la normal penal.

6. *Constitución y derecho de gentes.* Coinciden los pactos internacionales citados con la Constitución colombiana (art. 28) en la terminante prohibición de que aun cuando en el tiempo de excepción hay un principio que debe respetarse, el de reserva o estricta legalidad. De sobra sabido es, que tal artículo expresa que aún en tiempo de guerra, nadie podrá ser penado ex-post facto sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinándose la pena correspondiente.

Con tales bases debe concluirse, que el Decreto acusado no viola ni el principio de reserva o estricta legalidad (intangible según la Constitución y los Tratados citados) ni el de favorabilidad respetado en los Tratados.

Por los motivos expuestos, los firmantes consideramos que la Corte ha debido declarar constitucional el Decreto número 3671 de 1986 "por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento".

Fecha, *ut supra,*

Hernando Gómez Otálora, Lisandro Martínez Zúñiga, Héctor Gómez Uribe, Rafael Romero Sierra.

SALVAMENTO DE VOTO

Durante años combatimos, casi solitariamente, en favor de una tesis como la que ahora por fin se ha impuesto. Las razones para ello, si se quiere buscar una completa relación de las mismas, están consignadas en el salvamento de voto que firmamos con los doctores Alvaro Luna Gómez y Jesús Bernal Pinzón y relacionada con la sentencia de constitucionalidad del Decreto número 070 de 20 de enero de 1978 (ver Foro Colombiano número 106-abril de 1978, págs. 382 a 398-). Hoy, con cierto inocultable pesar, debemos disentir del criterio de la mayoría, no porque abstractamente la tesis no corresponda a la más depurada teoría del derecho constitucional, pues sigue siendo válida y conveniente en este plano, sino porque resulta ajena a la palpitante realidad actual que la debe inspirar y regular.

Cuando en ese entonces propugnamos por el regreso a los cuarteles de los militares, abandonando éstos una función que les es eminentemente extraña, cual es la de administrar justicia, no dejamos de advertir que las vicisitudes de la vida nacional podían, por la ceguera de todos, llevarnos a esa encrucijada de hacerla necesaria. Lo peor, cuando se aclimata, también puede tornarse en algo imprescindible.

Lamentablemente hemos ido a parar a esa excepcional coyuntura, no querida pero sí prevista, y de ahí que la declaratoria de inexequibilidad del Decreto número 3671/86, no la encontremos procedente. Tardíamente se ha acogido una tesis presentada para circunstancias diferentes y condicionada a factores que durante largo tiempo no se quisieron disponer ni propiciar. Mutatis mutandi ha sucedido lo que al médico estupefacto que descubre la existencia de los antibióticos pero cuando el enfermo no los resiste o en el lugar apenas se cuenta con los ungüentos o las sulfas; o de quien advierte la posesión de hermosa prenda de vestir que, por haber pasado los tiempos de su uso, lejos de distinguir puede resultar en algo estrafalario. Lástima grande que cuando decíamos la verdad sobre la justicia penal militar no se nos oyera, ni siquiera por algunos que ahora firman la decisión y pudieron acompañarnos en esa lucha, pero tampoco ahora se nos oiga cuando aconsejamos otro tratamiento, acorde con el aflictivo estado de la juridicidad, situación esta no creada por sus fieles servidores sino por quienes estaban obligados a arbitrar las soluciones oportunas. A los patrocinadores de esta tesis les juzgamos idealistas a ultranza, ansiosos de procurar lo mejor para el país y para la guarda de la Constitución Nacional, ajenos a pensamientos extraños a sus funciones y formación de ilustres juristas. De todo esto no nos cabe la menor duda. Pero se ha olvidado que la teoría tiene un momento feliz de aplicación, unas especiales circunstancias y forma de ser propias, todo lo cual, de contrariarse, lejos de producir beneficios no genera sino mayores males. Si algo nutre la entraña del citado artículo 121, que alguien denunciando con gracia sus peligros decía "que empieza con uno pero también acaba con uno", es la necesidad de valorarlo conforme a los problemas que trata de conjurar; cualquier desacomodación con éstos puede resultar funesto, porque se puede incurrir en exagerada utopía o en grosera adoración de los requerimientos vitales de la hora, alternativas ambas de nocivas repercusiones para las instituciones y la sociedad.

Disentimos de la decisión mayoritaria fundamentalmente porque en esta etapa crucial de la administración de justicia, no se está en condiciones de afrontar airosamente este compromiso cuando se ha agudizado a su máximo la potencia del crimen organizado y la respuesta que puede ofrecer la rama jurisdiccional ante el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el terrorismo, la rebelión y la sedición, es demasiado precaria y azarosa, así se tenga la mejor de las voluntades y el más templado carácter. Imposible en medio de un naufragio, tratar de enseñarle al náufrago a que aprenda a nadar así sea en dos de las lecciones del manual de natación. ¡Somos demasiado ilusos pero no tanto!

Desde el mencionado salvamento de voto indicamos, así fuera en apretada y superficial enumeración, las reformas, programas y ayudas que se imponían para que la justicia administrada por la Rama Jurisdiccional pudiera afrontar tan delicada empresa, y eso que para tal época estábamos lejos de alcanzar la cresta de la ola de la criminalidad, la corrupción, la crisis y la desesperación como malhadadamente ha llegado a ocurrir, por obra de todos. Conviene anotar que de lo recomendado en esa salvedad de voto, poco se ha realizado y de ahí que constituya aventura demasiado riesgosa asumir la responsabilidad que ahora decreta la mayoría de la Corte, sin contar con los medios necesarios para intentar una respuesta eficiente y debiéndose acudir, en el mejor de los eventos, a una calamitosa improvisación. Grave carga se ha echado sobre los hombros de esta justicia. Debe recibir un peso muerto de frustracio-

nes, ganado por otros, y comparecer ante la historia como la que nada hizo, nada pudo y todo lo perdió. Ojalá el Gobierno acuda prestamente, aunque con imperdonable retraso, a sufragar algunos de estos indispensables requerimientos, para que por lo menos la decisión no aparezca demasiado desastrosa y se evite el inmerecido hundimiento de la administración de justicia. Debemos reiterar que resulta inadmisible que el estamento judicial que ha aportado la máxima cuota de sacrificio en esta hecatombe, hoy tenga que cargar también con implacables censuras que destacarán su ineficacia y fracaso en este empeño, sin que se le haya atendido en el suministro de los más elementales medios de acción.

La angustiosa situación que hoy afrontamos, en este comentado plano, ha sido obra de todos, al punto que la justicia no puede recibir, en este momento, este ponderoso encargo.

a) La Corte con su tradicional y casi inexpugnable tesis de permitir el juzgamiento de civiles por la justucia penal militar, permitió años atrás que el Gobierno se desentendiera de las soluciones de fondo, las verdaderamente válidas y acertadas, o sea, las que buscaban capacitar y potencializar la administración de justicia, para auspiciar, por el contrario, el cómodo, repetitivo, fácil y engañoso remedio de la acción de los organismos castrenses;

b) La sociedad, que con su vocación por el poder y el presupuesto no vaciló en sus apoyos ilimitados a los gobiernos de turno y al estamento judicial militar, abandonando poco a poco pero en forma muy influyente a su administración de justicia y a sus legítimos ejecutores. Contemporizó desmedidamente con el delito y con sus pingües resultados económicos;

c) El Cuerpo Legislativo que apenas procuró, mediante toda clase de facultades extraordinarias, reformas simplemente nominales de las leyes, pero nunca la enmienda de fondo de todo lo que ha constituido el caldo de cultivo de la delincuencia que hoy campea. No ha estado en su pensamiento mejorar la justicia, para dotarla de recursos y poderes adecuados, por no estar la misma en el radio de su dependencia. Sus reformas legales sólo han propiciado parálisis y confusión judiciales y cuotas insufribles de impunidad;

d) El gobierno, que con la aplicación del artículo 121 de la C. N. ha desencuadernado todo esquema jurídico fundamental. Si algo ha distinguido la aplicación de este precepto de excepción ha sido su abuso. Para levantar un censo de falencias del gobierno en cuanto a la deficiente marcha de la administración de justicia, basta ver en qué ha fracasado ésta, cuáles son sus más sensibles fallas, y se advertirá que cada uno de estos factores corresponde a una actitud o a una omisión institucional del Gobierno. Este lejos de constituirse en apoyo decisivo de la justicia, en su colaborador eficaz, se ha reservado el papel de estorbarla y restarle perfección e idoneidad. Tantas veces se le ha autorizado la intervención militar en la justicia, sin que se dé propósito de enmienda que busque poner en marcha a los Tribunales y jueces destituidos de sus funciones, que, escrutando razones en favor de la decisión de mayoría, encontramos como la más válida la de procurar, de una vez por todas, que el Gobierno asuma el cumplimiento cabal de los deberes y obligaciones para con la justicia;

e) El Ministerio Público no ha tenido menos que ver en este cuadro de desolaciones. Tradicionalmente el auxilio a la Rama Jurisdiccional sólo ha operado en el campo de la vigilancia judicial, pero no para prevenir sus desvíos, para introducir correctivos inmediatos mediante la acción constante y oportuna de sus fiscales, o para colocar toda la dinámica de la policía judicial que ha manejado en el descubrimiento de los delitos o para reclamar con voz autorizada el remedio gubernamental a los tropiezos económicos y funcionales de esta rama del poder público, sino para acusar, tardíamente, por faltas de secundaria entidad, lo cual forma agudo contraste con el silencio que siempre ha mantenido cuando la gestión judicial ordinaria se desplaza hacia la organización castrense;

f) La justicia penal militar que nunca ha encontrado la esperada hora de su reforma institucional y se muestra errátil, deficiente y con visibles lastres de espíritu de cuerpo. No puede pasarse por alto que, inveteradamente, ha tenido el manejo penal de estas calificadas formas delincuenciales y nunca las conjuró con los poderes que le daba la aplicación de los procedimientos de las cortes marciales, hasta el punto que el problema está hoy más extendido, poderoso y se muestra con alucinantes características. Se redujo a afrontar cancinamente los casos de flagrancia de las acciones secundarias, casi que apenas rasguñando esporádicamente lo que, por falta de individualización, constituiría fantasmagóricos cultivos de marihuana o coca, el laboratorio dirigido por algún gnomo, la venta callejera de estupefacientes y cuando por forzada amalgama de las circunstancias se dio con alguien de importancia, el único delito deducible fue el porte ilegal de armas. No deja de extrañar que esta última ocurrencia se centre reiteradamente en la misma persona ignorándose si todo se debe a afán de convertirlo en mártir, héroe, chivo expiatorio, o fuente de indebidos tratos. Esa persona casi que ya no conserva su nombre de pila y la opinión lo llama: "el de siempre";

En lo único que la justicia penal militar puede mostrarse ágil, tal vez porque en ello va su supervivencia, es en la persecución de lo que hace tiempo se apellidó delincuencia política, luego delincuencia político-social, después subversión, luego guerrilla, más adelante bandolerismo, narcoguerrilla y ahora delincuentes político-comunes.

De resto ha sido igual o más ineficaz a como podría serlo en algunos aspectos la justicia ordinaria, pero con la diferencia de que a ésta se le han negado todas las posibilidades de acción, brindadas pródigamente a aquélla;

g) La ceguera de la delincuencia. Esta no ha podido entender que sus jueces deben ser independientes, probos, imparciales, competentes, pues sólo así es posible la tutela de lo que la Constitución y las Leyes les conceden; que cuando actúan tratando de aplicar debidamente la ley, sólo el interés de ésta los guía y disciplina, y no la moda dominante de negarles o concederles todas las prerrogativas. No han podido vislumbrar que el juez no está ni para favorecerlos inmerecidamente, ni para perseguirles caprichosa o arbitrariamente; que es ajeno al resultado de su conducta y que una vez cometido el delito debe responder con el instrumento de acción que le da la ley, so pena de prevaricar y de merecer la cárcel y la postración ética.

Han querido reducirlos a la órbita de sus propósitos sin más alternativas que la venalidad o la muerte. Los administradores de justicia cuando los delincuentes no buscan su físico exterminio, pueden y deben actuar. Están destinados, aunque suene a paradoja o a letra de conocida música vernácula, para el delincuente honrado: aquél que si bien no ceja en el delito y procura su impunidad, llegada la hora de afrontar la responsabilidad, se somete al legítimo juzgamiento. Pero cuando se ha tomado camino distinto y se acude a la eliminación no sólo de la víctima, sino del testigo, del juez, del auxiliar de éste, de los jurados, de los investigadores y de todo lo que tenga que ver con el procesamiento, entonces él mismo está reclamando y creando el ambiente necesario para que actúen otros organismos, no forjados en el mismo troquel del juez profesional; prepara así su definitiva perdición porque el estado de derecho se ve sustituido por la vía de hecho, por la justicia por la propia mano o por grupos pagados por los ofendidos o por los que forman parte de su mismo nivel social, económico, político, etc.

Todo esto conduce a que la justicia penal militar deba afrontar la culminación de esta época de aguda crisis, pues ni la administración de justicia cuenta con elementos apropiados para ello, ni se la deja actuar en algunos niveles, ni es admisible que reciba una herencia de mayúsculos errores, que en donde otros sembraron el gérmen de disolución a ella se le imponga el legado del sacrificio definitivo.

La sentencia hace mención del fallo de 24 de julio de 1971. Conviene una transcripción olvidada de esa decisión, con la cual siempre alertamos a la Corte sobre lo que podría acontecer, evento que ha llegado a ser, al menos para nosotros, una deplorable pero indiscutible realidad y que nos obliga a disentir de la mayoría. Se dijo entonces: "... Si las circunstancias de hecho –ajenas a la voluntad del gobierno– tienen tal incidencia que son capaces de impedir la actividad correspondiente a las atribuciones privativas de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, se dará en concreto la *calamitosa situación excepcional* a que sea aplicable el *remedio heroico* de que una misma persona o corporación pueda ejercer "simultáneamente la autoridad política y la judicial o militar".

"Este es el verdadero significado y alcance del artículo 61 dentro del espíritu incontrastable de la Carta Fundamental que organiza la nación colombiana como república democrática y representativa. Y puesto que el artículo 61 modifica y altera el principio sustancial de la separación de los poderes públicos, ha de verse con toda claridad que el constituyente contempla allí nada más que la *situación excepcional, angustiosa y extrema* de que en los hechos no pueda funcionar conforme a los dictados de la Carta la Rama Jurisdiccional. En conflictos tales, la ejercerán de emergencia las autoridades políticas o las civiles y militares, desde luego que sin administración de justicia la sociedad no puede subsistir, y no *habría otro camino para el retorno a la normalidad...*".

Juzgar esta realidad es lo que puede llevar a considerar el Decreto como avenido a la Carta, o repudiarlo por este fundamental vicio. Para nosotros la realidad es demasiado tozuda y sensible. No es que queramos dramatizar, pero lo que se vivió meses antes del 6 y 7 de noviembre de 1985, lo que se padeció en ese momento y lo que se sufre ahora, indican que se han cumplido las condicionantes transcritas. Esa

hipótesis extrema y dolorosa aparece como algo cierto e incontrastable. Reconocerlo así y abrir paso al artículo 121, puede que no sea razón ni remedio poderoso para evitar el colapso pero sí para atemperarlo o diferirlo y, por lo menos, para no aniquilar y desprestigiar total e injustamente a la Rama Jurisdiccional del poder público.

Una glosa final. No comprendemos la declaratoria de inexequibilidad del art. 3º en razón de la inconstitucionalidad del resto del articulado. Los beneficios de libertad y condena condicional se dispensan por la gravedad del hecho en el momento en que esa delincuencia se desata. ¿Negará alguien que en este sentido hay que endurecer un poco este tratamiento? ¿No han sido los aumentos de pena, aun para satisfacerlos más allá del estado de sitio, remedio constante y que la mayoría no repudia? Pero por lo visto la mayoría de la Sala lejos de considerar el delito y el delincuente ha tenido en cuenta al juzgador, como si este así sea ordinario, común, especial, extraordinario o militar fuera el destinatario de la medida. Creo que este precepto debió conservar vigencia. Podría discutirse su conveniencia, tan difícil de rechazarla por esta consideración, pero nunca por inconstitucional y más sobre la base del argumento de esencia expuesto para arribar a la conclusión de inconstitucionalidad.

Gustavo Gómez Velásquez

NORMAS CONTRA EL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES. ELEVACION DE ALGUNAS CONDUCTAS PREVISTAS EN LA LEY 30 DE 1986 COMO CONTRAVENCIONES A LA CONDICION DE DELITOS. RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO. NO ES TAREA JURISDICCIONAL LA DE EXCLUIR NORMAS DEL ORDEN JURIDICO POR DIFICULTADES QUE PUEDAN EXISTIR EN SU CABAL ENTENDIMIENTO, SINO LA DE DECLARAR PREVIA INTERPRETACION DEL CONTENIDO NORMATIVO, SI ESTE SE AJUSTA A LA CARTA O SI DESCONOCE SUS PRECEPTOS. EL DERECHO DE PROPIEDAD.

Constitucional en su totalidad el Decreto Legislativo número 3665 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 22.

Referencia: Expediente número 1556 (230-E).

Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 3665 (diciembre 17) de 1986, "por el cual se dictan medidas sobre control y tráfico de estupefacientes".

Magistrado sustanciador: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 09 de diez (10) de marzo de 1987.

Bogotá, D. E., marzo diez (10) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El Decreto de la referencia fue remitido a la Corte por el Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 121 de la Constitución Política, para los efectos de su revisión definitiva.

Dentro del término de fijación en lista no se han recibido escritos de defensa o impugnación de dicho Decreto.

II. Texto del Decreto en revisión

El Decreto número 3665 de 1986 dice textualmente:

"Presidencia de la República

"DECRETO NUMERO 3665 DE 1986

"Por el cual se dictan medidas sobre control y tráfico de estupefacientes.

"El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto Legislativo número 1038 de 1984,

D E C R E T A:

"Artículo 1° Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, *elévase a la condición de delito la contravención* descrita en el artículo 64 de la Ley 30 de 1986 y las demás previstas en los literales b), c) y d) del artículo 65 de la misma ley, los cuales serán sancionables con pena de prisión de tres (3) a diez (10) años.

"Artículo 2° Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, las unidades especiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, destinadas al control de estupefacientes, podrán desarrollar procedimientos para inutilizar pistas de aterrizaje, destruir plantaciones de marihuana, coca y adormidera en los casos previstos por la Ley 30 de 1986, cuando las operaciones se realicen en áreas rurales donde no se pueda contar con la presencia inmediata de autoridades judiciales o de representantes del Ministerio Público, debiendo presentar el correspondiente informe inmediatamente a la autoridad competente.

"Artículo 3° Las mismas autoridades de que trata el artículo anterior, están facultadas para destruir los insumos químicos y demás substancias que se hayan utilizado en el procesamiento de estupefacientes, en los casos autorizados por la Ley 30 de 1986 y cuando la operación se realice dentro de las circunstancias que señala el artículo 2° de este Decreto.

"Artículo 4° Los elementos decomisados o aprehendidos en desarrollo de los procedimientos señalados en los artículos 2° y 3° del presente Decreto, serán puestos a dispisición del Comandante de Unidad Táctica o Unidad Operativa o del Comandante del Departamento de Policía, según corresponda, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al decomiso o la aprehensión.

"Artículo 5° Los bienes muebles e inmuebles utilizados en la Comisión de delitos o contravenciones relacionados con estupefacientes, quedarán fuera del comercio y no podrán ser negociados hasta tanto se ejecutorie el fallo judicial definitivo.

"Artículo 6° Los informes o dictámenes que rindan a las autoridades los servicios especiales de control de estupefacientes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, tendrán el carácter de prueba judicial con sujeción a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

"Artículo 7º Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende parcialmente los artículos 43, 64, 65 y 77 de la Ley 30 de 1986 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., diciembre diecisiete (17) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

"(Firmados).

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Gobierno y Encargado de Relaciones Exteriores, *Fernando Cepeda Ulloa;* el Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* el Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo;* el Ministro de Defensa Nacional, General *Rafael Samudio Molina;* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, *José Name Terán;* el Ministro de Salud, *César Esmeral Barros;* el Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo;* el Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio,* el Ministro de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse;* el Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez;* el Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo Correa*".

III. Concepto del Procurador General

El Procurador General de la Nación, mediante oficio 1110 de 13 de febrero de 1987, emitió concepto en el cual solicita a la Corte que declare la constitucionalidad del Decreto en revisión, excepto la expresión "...y las demás previstas en los literales b), c) y d) del artículo 65 de la misma ley...", del artículo 1º que ese Despacho considera contraria a la Carta Política.

Los principales argumentos contenidos en la vista fiscal son los siguientes:

"El Decreto en estudio lleva la firma del Presidente de la República y de todos los Ministros y fue dictado en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984 por medio del cual se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio de la República. El Decreto número 3665 de 1986, guarda una evidente y clara relación de conexidad con las causas que fundamentaron tal declaratoria dentro de las cuales cabe destacar:

"Que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional.

"Y como se puede observar las medidas adoptadas en el Decreto bajo análisis están encaminadas exclusivamente 'al control y tráfico de estupefacientes'.

"……

"En el artículo 1° se dispone textualmente: 'Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, elévase a la condición de delito la contravención descrita en el artículo 64 de la Ley 30 de 1986 y las demás previstas en los literales b), c) y d) del artículo 65 de la misma ley, los cuales serán sancionables con pena de prisión de tres (3) a diez (10) años'.

"Al leer esta disposición el Despacho advierte que ciertamente el artículo 64 de la Ley 30 de 1986 consagra algunas contravenciones, las cuales se elevan a la categoría de delitos, penalizándose con prisión de tres a diez años, lo que no atenta contra mandato alguno constitucional, pues es propio del Legislador definir las conductas punibles y hacer la conversión de las contravenciones en delitos y viceversa, imponiendo la correlativa sanción.

"No ocurre lo mismo con la parte de la disposición que dice 'y las demás previstas en los literales b), c) y d) del artículo 65 de la misma Ley', por cuanto en dicho canon no se establece ninguna clase de conductas delictivas, sino de sanciones, por lo que mal pueden elevarse éstas a delitos y penarse con prisión de tres (3) a diez (10) años, lo que resulta contrario al artículo 26 de la Constitución Política que consagra que no puede haber sanción penal sin norma que regule la conducta delictiva.

"En consecuencia, el Procurador General solicitará a la Corte Suprema declare exequible el artículo 1° del Decreto número 3665 de 17 de diciembre de 1986 salvo la expresión '…y las demás previstas en los literales b), c) y d) del artículo 65 de la misma Ley…', por considerar que es inexequible.

"……

"El Procurador General observa que en los artículos 2° y 3° no se prevé ningún procedimiento especial para el ejercicio de las facultades por parte de las Unidades Especiales encargadas del control de estupefacientes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para proceder a la destrucción de las plantaciones de marihuana, coca y adormidera, así como tampoco para los insumos químicos y demás substancias que se hayan utilizado en el procesamiento de estupefacientes, ni para la inutilización de las pistas de aterrizaje, pero como tales operaciones proceden en los casos previstos y autorizados por la Ley 30 de 1986, se entiende que debe seguirse el procedimiento establecido en dicho ordenamiento y sólo así pueden considerarse tales artículos 2° y 3° constitucionales. Además la destrucción de substancias y plantas que producen adicción física y síquica y que atentan contra la integridad moral, física y síquica de las personas, necesariamente es una obligación de las autoridades que encaja dentro del canon 16 de la Carta que consagra la protección de todas las personas residentes en Colombia en 'sus vidas, honra y bienes'.

"……

"En el artículo 4° del Decreto bajo estudio se establece que los elementos decomisados o aprehendidos en desarrollo de los procedimientos señalados en los artículos 2° y 3° citados anteriormente, deberán ponerse a disposición del comandante de Unidad Táctica o Unidad Operativa o del Comandante del Departamento de Policía, según corresponda, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al

decomiso o la aprehensión. Este mandato no contraría norma constitucional. Al respecto cabe anotar que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en varias oportunidades sobre este punto haciendo énfasis en que el Estatuto Supremo no prohíbe el decomiso, sino 'el absoluto despojo, sin compensación alguna, que da por resultado la pérdida total de los valores confiscados sin resarcimiento alguno; y esto a beneficio del fisco, según lo expresa el vocablo... En síntesis, la confiscación que la Constitución prohíbe es la apropiación oficial indebida, sin causa y procedimiento legal, por vía de simple aprehensión, del patrimonio de una persona' (Sentencia de 3 de agosto de 1972. Dr. Eustorgio Sarria).

"....."

"El artículo 5° del Decreto número 3665 de 1986 dispone que los bienes muebles e inmuebles utilizados en la comisión de delitos o contravenciones relacionados con estupefacientes quedan fuera del comercio y no pueden negociarse hasta tanto no se ejecutorie el fallo judicial definitivo. Ordenamiento que no viola ninguna norma superior, por lo contrario se aviene a los cánones de Procedimiento Penal, pues los elementos con los cuales se comete un delito o contravención quedan a disposición de las autoridades y por tanto fuera del comercio hasta tanto no lo decida el competente.

"El artículo 6° prescribe que los informes o dictámenes que rindan a las autoridades los servicios especiales de control de estupefacientes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, tienen el carácter de prueba judicial con sujeción a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Esta norma tampoco atenta contra la Carta, pues se ajusta a lo dispuesto en los artículos 80 de la Ley 30 de 1986 y 306 del Código de Procedimiento Penal.

"....."

"El artículo 7° del Decreto materia de análisis se limita a establecer la fecha de publicación como es debido en toda disposición legal y a suspender parcialmente los artículos 43, 64, 65 y 77 de la Ley 30 de 1986 y las disposiciones que le sean contrarias, con lo cual se aviene a lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución".

IV. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Por tratarse de un Decreto Legislativo, expedido por el Presidente de la República en virtud del artículo 121 de la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia el Tribunal competente para su revisión.

2. *Constitucionalidad desde el punto de vista formal*

Puesto que, tal como lo exige el artículo 121 de la Carta, el Decreto en examen lleva las firmas del Presidente y todos los Ministros del Despacho, no se encuentra que por este aspecto se desconozcan las disposiciones constitucionales.

3. *Conexidad*

Por medio del Decreto que se revisa, el Gobierno Nacional dispuso primordialmente la elevación de algunas conductas previstas en la Ley 30 de 1986 como contravenciones a la condición de delitos, mientras subsista la turbación del orden público, y durante el mismo tiempo, prevé la autorización a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que, a través de sus unidades operativas destinadas al control de estupefacientes, desarrollen procedimientos para inutilizar pistas de aterrizaje, destruir plantaciones de marihuana, coca y adormidera e insumos químicos y demás substancias utilizadas en el procesamiento de estupefacientes, en los casos contemplados por la ya mencionada ley, cuando las operaciones se realicen en áreas rurales donde no se pueda contar con la presencia inmediata de autoridades judiciales o de representantes del Ministerio Público (artículos 1°, 2° y 3°). El artículo 4° del Decreto señala que los elementos decomisados o aprehendidos serán puestos a disposición del comandante del Departamento de Policía Táctica o Unidad Operativa o del Comandante del Departamento de Policía, según corresponda, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al decomiso o la aprehensión.

La norma del artículo 5° dispone que los bienes muebles o inmuebles utilizados en la comisión de delitos o contravenciones relacionados con estupefacientes quedarán fuera del comercio y no podrán ser negociados hasta tanto se ejecutorie el fallo judicial definitivo.

Según el artículo 6° los informes o dictámenes que rindan a las autoridades los servicios especiales de control de estupefacientes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, tendrán el carácter de prueba judicial con sujeción a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

Salta a la vista la estrecha relación existente entre las medidas que se acaban de resumir y la motivación principal contenida en el Decreto número 1038 de 1984, por medio del cual se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, consistente en la grave perturbación que al normal funcionamiento de las instituciones ha venido causando la acción de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico.

Se ajusta, entonces, el Decreto a las exigencias de la Carta en desarrollo de las cuales las medidas que el Presidente adopte durante el Estado de Sitio deben estar encaminadas al restablecimiento del orden público perturbado y tan solo pueden suspender las normas legales que le sean contrarias.

4. *Revisión por otros aspectos constitucionales*

a) *Delitos y sanciones*

El señor Procurador General afirma que es parcialmente inconstitucional el artículo 1° del Decreto número 3665 de 1986 en cuanto se refiere a las previsiones de los literales b), c) y d) del artículo 65 de la Ley 30 de 1986.

Al respecto, dice que en el canon últimamente mencionado no se establecen conductas susceptibles de ser elevadas a la categoría de delitos, sino sanciones, lo cual

resulta contrario al artículo 26 de la Constitución, a cuyo tenor no puede haber sanción penal sin norma que regule la conducta delictiva.

Ante todo, cabe advertir que, dado el texto de la norma sujeta a revisión, podría pensarse que es factible para la Corte optar entre deducir su inaplicabilidad absoluta por deficiencias de redacción o proceder a una interpretación contextual que produzca efectos en el mundo del derecho sin violación de las disposiciones constitucionales.

Entre estos dos caminos, es preferible tomar el de la interpretación últimamente enunciado, pues no es tarea jurisdiccional la de excluir normas del orden jurídico por dificultades que puedan existir en su cabal entendimiento, sino la de declarar, previa interpretación del contenido normativo, si éste se ajusta a la Carta o si desconoce sus preceptos.

En ese orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 65 de la Ley 30 de 1986 enumera sanciones, como lo señala el concepto fiscal, y que desde el punto de vista técnico-jurídico podría decirse que es impropia la redacción del Decreto revisado en cuanto eleva sanciones a la condición de delitos, ese no es motivo para dictaminar su inconstitucionalidad, pues la referencia a los ordinales citados debe entenderse hecha en relación con el artículo 64 de la misma Ley 30 de 1986.

En efecto, si así se procede, es fácil colegir que las sanciones enumeradas por el artículo 65 son aplicables a las conductas previstas por el 64. De ese modo, lo que dispone el Decreto número 3665 de 1986 es que esas conductas, en las modalidades contempladas por los literales enunciados del art. 64, serán sancionadas con pena de prisión de tres (3) a diez (10) años y multa en cuantía de uno (1) a ochocientos (800) salarios, a favor del Fondo Rotatorio adscrito al Consejo Nacional de Estupefacientes –art. 65–, literal a), que aquél no afectó. El Decreto, en otras palabras, aludió a la norma penal completa (conducta y sanción), que en este caso se halla integrada por los artículos 64 y 65, toda vez que el primero tipifica las conductas contravencionales (hoy delictivas) y el segundo indica las sanciones correspondientes, las cuales mediante el Decreto de Estado de Sitio se reemplazan en la forma indicada.

Con las demás sanciones señaladas en el art. 65 de la Ley 30 de 1986, ocurre lo siguiente: la del literal b), queda substituida por lo dispuesto en el artículo 58 del C. Penal, en razón de caracterizarse la conducta como delito; la del literal c), obrará a expensas de otras regulaciones del Estado de Sitio; y finalmente la de la letra d), es una referencia en el vacío, pues la citada ley, en su artículo 68, no contiene ningún numeral 3°, literal a).

Esto en modo alguno vulnera el artículo 26 de la Constitución, dado que no se crean sanciones para delitos inexistentes o indefinidos, sino que clara e indudablemente se imputan a conductas determinadas por el artículo 64 de la Ley 30 de 1986.

b) *El derecho de propiedad*

Se plantea necesariamente la inquietud de si las disposiciones del Decreto número 3665 de 1986 riñen con el precepto constitucional que garantiza el derecho

de propiedad e impide que tal derecho, como los demás adquiridos con justo título conforme a las leyes civiles, resulte desconocido por normas posteriores.

La violación de ese mandato podría consistir en que se autoriza a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para causar daño, inutilizar, incautar y aún para destruir bienes muebles e inmuebles de propiedad particular.

La glosa sería aceptable si se tratara pura y simplemente de otorgar semejantes facultades sin calificación alguna, pero no lo es si se tienen en cuenta la causa de la perturbación del orden público relacionada con los motivos por los cuales pueden las autoridades llevar a cabo tales actos.

Ante todo, esos motivos no podrán hacerse valer ni las medidas concretas adoptarse en cualquier tiempo, sino mientras dure la vigencia del Estado de Sitio, lo cual ubica la atribución dentro de aquéllas de que goza el Presidente, según el artículo 121 de la Carta, en tiempos de perturbación del orden público.

Esta circunstancia por sí misma no purgaría de inconstitucionalidad la norma transitoria, pues tiene dicho la jurisprudencia que el Estado de Sitio no suspende ni deroga la plena vigencia de las garantías constitucionales, salvo los casos en que expresamente ello se autorice por la misma Carta.

No obstante, la norma del artículo 30 sobre el derecho de propiedad, aún en tiempo de paz y con mayor razón en épocas de perturbación del orden público, pone de relieve el principio según el cual el interés social y la utilidad pública, prevalecen –en caso de conflicto– sobre los derechos de particulares consagrados por la ley.

Siendo evidente que en relación con las actividades propias del narcotráfico a las que alude la norma revisada, se hallan en peligro las vidas, los bienes, la tranquilidad y el sosiego de la comunidad entera y que se suscita un ostensible conflicto entre dicha acción delictiva y ese interés público, tiene en este caso plena aplicación la norma constitucional en cuya virtud debe ceder el interés privado, lo cual elimina toda posibilidad de inconstitucionalidad en el Decreto que se revisa por supuesta violación del derecho de dominio particular.

Además, es indispensable precisar que la figura jurídica del decomiso, no corresponde a la de confiscación ni conduce a ella, pues no es en sí mismo una pena ni representa el despojo estatal del patrimonio del delincuente, sino la aprehensión de los elementos materiales con los cuales se perpetró un delito como medida policiva tendiente a los fines de la investigación y a impedir la prosecución de las actividades delictuales. Por tanto, la norma revisada en nada contradice la prohibición constitucional de establecer sanciones confiscatorias.

c) *Bienes fuera del comercio*

En lo relativo a lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto que se analiza, el cual también pudiera pensarse que contraviniera la Constitución por impedir la libre enajenación de los bienes (art. 37 C.N.), en realidad no se opone a ella, por varias razones:

– Los bienes a los que se refiere el artículo en revisión están según allí se establece, íntimamente ligados a la comisión de delitos y contravenciones, circunstancia que los vincula necesariamente a los procesos penales que respecto de esas conductas deban adelantarse. Mal podría entenderse que la Constitución, en aras de garantizar la libre negociación de los bienes, interfiriera las labores investigativas que deban cumplir las autoridades competentes. Si esto sucede en tiempo de paz, tanto más en época de turbación del orden público y tratándose precisamente de los delitos que han dado lugar a la declaratoria del Estado de Sitio.

– Dichos bienes, según el texto de la norma, no salen del comercio definitivamente sino en tanto se desarrolla el proceso y hasta cuando se ejecutorie el fallo judicial definitivo.

Es evidente que, también aquí se debe subrayar la prevalencia del interés público sobre el particular, y decir al respecto que para nuestra Constitución ningún derecho es absoluto ni su ejercicio tutelado ilimitadamente, menos aun si ese ejercicio ha venido lesionando los derechos colectivos.

d) *Pruebas judiciales*

En cuanto atañe al carácter de pruebas judiciales, con el cual el artículo 6º reviste a los informes y dictámenes que rindan las autoridades militares y de policía sobre control de estupefacientes, se considera que es facultad de la ley decir cuáles son los medios de prueba. Ello es del resorte del legislador, no del constituyente.

Por lo tanto, si –como en el presente caso sucede– el legislador extraordinario estima que determinados dictámenes pueden obrar como pruebas judiciales en procesos relativos a delitos cuya comisión recurrente motivó la declaratoria del Estado de Sitio (conexidad), no hay razón para deducir su inconstitucionalidad, máxime teniendo en cuenta que durante el juicio no se impide controvertirlas.

El Decreto objeto de este proceso no viola ninguna otra disposición constitucional.

DECISIÓN.

Con fundamento en lo dicho, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena– previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE

Declarar CONSTITUCIONAL en su totalidad el Decreto Legislativo número 3665 de diciembre de 1986, "por el cual se dictan medidas sobre control y tráfico de estupefacientes".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Gui-*

llermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.

Inés Galvis de Benavides
Secretaria General

FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. INSPECCION, VIGILANCIA Y REGIMEN DISCIPLINARIO. LA CONEXIDAD PRETENDE IMPEDIR QUE LEYES QUE SEAN TRAMITADAS CON UN OBJETO ESPECIFICO REGULEN TEMAS O MATERIAS QUE NO TIENEN UNA ESTRECHA CONEXIDAD CON LA FINALIDAD DE LA LEY.

Exequible el parágrafo del artículo 16 de la Ley 117 de 1985.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 23.

Referencia: Expediente número 1521.

Acción de inexequibilidad contra el parágrafo del artículo 16 de la Ley 117 de 1985. Superintendencia Bancaria, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Materia de la Ley de habilitación y ejercicio de facultades.

Actor: *Camilo Gutiérrez Jaramillo.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobada por Acta número 9

Bogotá, D. E., marzo diez (10) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Camilo Gutiérrez Jaramillo, presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra el parágrafo del artículo 16 de la Ley 117 de 1985. Se admitió la demanda y dentro del traslado, el Procurador General de la Nación expuso su impedimento para rendir concepto, el cual la Sala Constitucional aceptó, ordenando correr traslado al Viceprocurador General de la Nación, quien rindió el concepto de rigor y procede la Corte ahora a decidir sobre el asunto.

II. Texto de la norma acusada

El texto de la norma acusada es del siguiente tenor:

"LEY 117 DE 1985

"Por la cual se crea el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, se determina su estructura y se dictan otras disposiciones.

"El Congreso de Colombia,

DECRETA:

"Artículo 1° .....

"Artículo 16. Inspección, vigilancia y régimen disciplinario.

".....

"Parágrafo. Facúltase al Gobierno Nacional, por el término de seis meses, contados a partir de la sanción de la presente ley, para dictar normas sobre estructura, funciones y contratación de la Superintendencia Bancaria para facilitar la revisión de las actividades de las instituciones vigiladas".

III. Normas constitucionales que se consideran infringidas

Artículos 2° y 77 de la Constitución Nacional.

IV. La demanda

El actor considera como fundamentos de su demanda los siguientes:

1. El sentido del artículo 77 de la Constitución Nacional no se reduce a impedir que se incluyeran en los proyectos de ley asuntos ajenos a su preceptiva sino al de obtener que cada ley refleje sentido de unidad lo que se traduce en mayor coherencia y homogeneidad normativa.

2. Se viola el artículo 77 de la Carta por la norma que se acusa, toda vez que surge una ostensible diferencia material entre el proyecto mismo y el parágrafo que faculta al gobierno para reformar la estructura y las funciones de la Superintendencia Bancaria pues éstas no se refieren al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Con esto se desborda materialmente y se excede el campo de aplicación propiamente dicho de la Ley 117 de 1985.

3. Encuentra el actor una ostensible diferencia entre el contenido de la Ley 117 de 1985 y el parágrafo del artículo 16, lo que permite la creación de normas que nada tienen que ver con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Se ha deslizado en un parágrafo una atribución de facultades que reviste al Ejecutivo de competencias no sólo para revisar toda la estructura de la Superintendencia Bancaria sino para introducir una profunda reforma a todo el organismo ya creado. El artículo 77 de la Carta reprime estas prácticas, pues manda que las leyes se refieran a una misma materia.

4. La norma de creación, estructuración y funcionamiento del Fondo de Garantías es muy específica, y el campo de su aplicación que es preciso contrasta con la especificidad de la norma que faculta para la reforma de la Superintendencia Bancaria. De esto resultaría la violación grave del artículo 77 de la Constitución Nacional.

V. Concepto del Viceprocurador

El señor Viceprocurador General de la Nación, rinde su concepto fiscal en el que considera que el parágrafo del artículo 16 de la Ley 117 de 1985 es exequible y solicita de esta Corporación que así lo declare. Fundamenta su razonamiento en las siguientes consideraciones:

1. Es finalidad primordial del artículo 77 de la Carta, evitar que mediante la inserción de normas que no guarden armonía con la materia de que tratan los proyectos de ley, se asalte la voluntad del Congreso.

2. Guarda una estrecha relación de conexidad la norma acusada que propende por una reestructuración de la Superintendencia Bancaria con el proyecto de ley presentado por el gobierno al Congreso, que autorizaba la creación del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, pues ambas se encaminan al mejor cumplimiento de los fines contenidos en la misma ley. El Congreso podía, sin vulnerar la Constitución, llevar a cabo las modificaciones que estimara necesarias al proyecto de ley, siempre y cuando éstas guardasen relación con el proyecto presentado por el gobierno.

3. El parágrafo impugnado guarda directa relación de materia con el contenido del proyecto y con todo el cuerpo de la ley a la que pertenece. Aunque la disposición acusada no se encontraba dentro del articulado presentado por el Ejecutivo al Congreso, es también cierto que el proyecto de ley que autorizaba la creación del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, buscaba que la Superintendencia Bancaria ejerciera la inspección, control, vigilancia y el régimen disciplinario de ese organismo. Igualmente, lo que pretendía el legislador era otorgarle al Ejecutivo facultades extraordinarias dirigidas a dictar normas sobre estructura, funciones y contratación de la Superintendencia Bancaria para facilitar la revisión de actividades de las instituciones vigiladas, facultades que indudablemente están íntimamente relacionadas con el resto de las disposiciones de la ley.

4. Esta relación que reconoce el Viceprocurador, se destaca con mayor claridad en especial con las funciones entregadas a la Superintendencia Bancaria en los artículos 5º literal d), 6º, 7º y 19 de la Ley 117 de 1985, toda vez que era indispensable suministrar a esa Entidad los mecanismos necesarios que le permitieran cumplir con las atribuciones dadas por la misma ley.

VI. Consideraciones de la Corte

Competencia

Le asiste competencia a esta Corte para resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad contra las leyes, según el artículo 214 de la Constitución, cuando sean demandadas por cualquier ciudadano. Por ello, debe la Corte resolver sobre el fondo de este asunto.

La conexidad

La jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene claramente establecido el alcance y finalidad del artículo 77 de la Constitución Nacional

que fuera incorporado por el artículo 12 del Acto Legislativo No. 1 de 1968. De acuerdo con esta norma constitucional se pretende impedir que leyes que sean tramitadas con un objeto específico regulen temas o materias que no tienen una estrecha conexidad con la finalidad de la ley. Lo anterior obliga a que el proyecto de ley que se presente a consideración de las Cámaras, deba ser elaborado siguiendo los trazos de la norma en comento, esto es, en él debe darse tal conexidad. Pero también este artículo 77 de la Carta impide que se aproveche un proyecto inicialmente presentado con la conexidad requerida para modificarlo en su secuencia procedimental legislativa e introducirle disposiciones que rompan tal nexo. Dice así la jurisprudencia:

"La razón de ser del artículo 77, fue la de buscar una sistematización racional en la tarea legislativa, a fin de impedir que mediante inserciones muchas veces repentinas, anónimas, o inoportunas, se establecieran sorpresas legislativas, reglamentaciones inconsultas o *normas que no habían sufrido el trámite regular del proyecto original.* Estas inserciones se conocieron en nuestro lenguaje parlamentario con el nombre de 'micos', para significar lo extraño y sorpresivo del precepto, en relación con el texto en general de la ley. La finalidad del texto 77 es, como él lo dice, que cuando acontece lo que se viene narrando, las propuestas o disposiciones que lo contengan 'serán inadmisibles', y el Presidente de la respectiva comisión deberá rechazarlas con decisión que es susceptible de ser apelable ante la misma comisión. Es decir, que constitucionalmente el sistema está prohibido y que esta prohibición debe hacerse cumplir primeramente por la acción respectiva" (Corte Suprema de Justicia, Sentencia de mayo 11 de 1978, G.J. Tomo CLVII, número 2397, pág. 132).

Se considera entonces, que este análisis permite desarrollar el espíritu del Acto Legislativo No. 1 de 1968, cuando en su artículo 8° justificaba la norma que hoy es artículo 77 de la Carta, así:

"Artículo 8° El artículo 77 del proyecto es totalmente nuevo. La norma contenida actualmente, en este artículo pasó a formar parte de la atribución 23 del artículo 76 por estimarse que allí es su lugar apropiado.

"La norma contemplada tiende a la unidad de legislación por materias, a evitar que se sorprenda la voluntad de las Cámaras con la inclusión de textos ajenos a ellas, y a dotar de poderes a los presidentes de las comisiones y de las Cámaras para que los temas tratados en los proyectos tengan la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen" (Historia de la Reforma Constitucional, Ed. Imprenta Nacional, 1969, pág. 46).

La Reforma de 1968 en esta materia no perseguía otra cosa que acabar con la insana costumbre que había prevalecido en el Congreso cuando en relación con un proyecto de ley que fuera importante o urgente o necesario, se aprovechaba tal circunstancia para introducirle disposiciones que rompían la unidad material de la ley y que no tenían relación alguna con el asunto que motivaba el proyecto, o cuando en el curso de los debates constitucionales se hacían modificaciones a los proyectos originales para insertarles disposiciones que tenían otras finalidades muy distintas a las que se habían invocado inicialmente.

Pero esta situación, corregida por fortuna en el Acto Legislativo No. 1 de 1968, no sólo había invadido las esferas del Congreso sino que también se utilizó con los mismos móviles en las asambleas a nivel departamental, mediante las ordenanzas y en los concejos municipales, mediante acuerdos. Por ello, hoy por hoy, ante el correctivo que impone la norma constitucional, es preciso someterse al imperio de su mandato y depurar, por vías de control de constitucionalidad, las leyes que padezcan tales vicios y que no fueron corregidas oportunamente por las mismas Cámaras a través de los medios que consagra la norma del artículo 77 de la Carta.

Ahora bien, en el caso *sub examine* observa la Corte que no se presenta la falta de conexidad exigida por la Constitución, ya que por el contrario, la norma acusada corresponde por su materia al contenido de la ley de que hace parte.

Es decir que dicha norma guarda el sentido de unidad exigido por el texto constitucional para que haya coherencia y armonía en las disposiciones contenidas en una misma ley.

Es facultad constitucional propia del Congreso atribuir al Ejecutivo competencias precisas de las que se desprende el mismo órgano legislador dentro del espíritu de armónica colaboración funcional entre las diversas ramas del poder público, tal como lo manda el artículo 55 de la Carta.

Si dentro del texto de una ley ordinaria, el Congreso se desprende de su facultad legislativa propia, atribuyendo al Ejecutivo temporalmente y de manera precisa, competencia para expedir los decretos con fuerza legislativa que sean necesarios para el fin señalado en la ley de facultades, no aparece violación alguna de la Carta que pueda viciar por inconstitucional a la ley que así faculta. En el caso que se examina no se encuentra vicio de inconstitucionalidad que afecte a la norma acusada y así lo declara esta Corporación. El mandato del artículo 77 de la Constitución permite declarar inexequibles aquellas normas que no se relacionen con una misma materia dentro del texto de una ley; el caso en examen no admite la aplicación de la disposición que se prevé por dicha prohibición pues, dentro de las competencias del Congreso están precisamente las que contiene la norma acusada. Es materia que se relaciona con la del proyecto, la que contiene el parágrafo del artículo 16 de la Ley 117 de 1985, ya que precisamente de lo que trata aquél es de reorganizar el sistema financiero, establecer mecanismos de funcionamiento estabilizador e instrumentos compensatorios de sus recursos, así como el de dotar a este sistema de procedimientos y fondos de emergencia o auxiliares que le aseguren respetabilidad, confianza y credibilidad dentro del medio económico en el que desarrollan sus actividades.

La conexidad en la materia es precisa y la relación es plena, pues la Superintendencia Bancaria es el instrumento administrativo que ejerce vigilancia y control sobre el funcionamiento de las entidades financieras que mantienen actividades en Colombia y nada extraño a la materia que contiene la Ley 117 de 1985, es el desprendimiento de facultades del Congreso para que el Ejecutivo reorganice y reestructure esta Institución en el propósito de ordenar el sistema financiero colombiano y con la finalidad de proteger la confianza de los acreedores y depositantes de ese fundamental instrumento económico.

En fallo del 27 de mayo de 1980 la Corte expresó:

"...esto significa que los puntos vertidos en un proyecto de ley deben ir encaminados a una misma finalidad, y aunque, al ser considerados separadamente, pueden parecer distintos, están todos ordenados en una misma dirección de tratamiento de un tema, y para señalar su alcance se anotó también que por materia ha de entenderse el área general de un tema tomado en su conjunto, y no las piezas separables del mismo".

En esta consideración y para el caso que se examina, ha de entenderse que se trata de una misma materia la que regula y autoriza regular el legislador y no de temas ajenos al área de dicha ley, por lo que no se encuentra violación alguna al artículo 77 de la Constitución Nacional ni a ninguna otra norma de este estatuto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 16 de la Ley 117 de 1985, que dispone:

"Parágrafo. Facúltase al Gobierno Nacional, por el término de seis meses contados a partir de la sanción de la presente ley para dictar normas sobre estructura, funciones y contratación de la Superintendencia Bancaria para facilitar la revisión de las actividades de las instituciones vigiladas"

Cópiese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

CONSTANCIA DEL H. MAGISTRADO DOCTOR HERNANDO GÓMEZ OTÁLORA

Referencia: Expediente número 1521.

Acción de inexequibilidad contra el parágrafo del artículo 16 de la Ley 117 de

1985. Superintendencia Bancaria, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Materia de la Ley de habilitación y ejercicio de facultades.

Actor: *Camilo Gutiérrez Jaramillo.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Por las razones contenidas en mi comunicación de 12 de marzo de 1987 al señor Presidente de la honorable Corte Suprema de Justicia, me abstengo de suscribir el fallo correspondiente al proceso de la referencia.

En efecto, digo en dicha comunicación:

"Al darse lectura en la Sala Plena ordinaria de la fecha al Acta de la sesión extraordinaria del pasado 10 de marzo, he caído en la cuenta de que se discutió en ella el proceso No. 1521, cuyo ponente es el Dr. Fabio Morón Díaz, relativo al artículo 16 de la Ley 117 de 1985, sin haberme declarado impedido para participar en el debate.

"Por el hecho de haber sido miembro de la Cámara de Representantes durante la discusión de la citada norma, estaba impedido para participar en su análisis y decisión en la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto número 0432 de 1969, según el cual 'en los casos de acción de inexequibilidad por parte de cualquier ciudadano serán causales de impedimento y recusación' las previstas en el artículo 22 que en su parte pertinente dice: 'Haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto'.

"No caí en cuenta de la anterior circunstancia, debido a que en la misma sesión de la Sala Plena se consideraron cuatro ponencias mías, lo cual me exigió concentración en su manejo, lectura y anotación de las observaciones que sobre ellas se formularon.

"Por ello me veo obligado a hacer la manifestación de este impedimento con posterioridad a la discusión del proyecto, cuando ha debido hacerlo 'tan pronto como la Sala entró a ocuparse del negocio', al tenor del artículo 24 del tantas veces citado Decreto número 0432 de 1969.

"No obstante deseo que mis colegas se enteren de la referida situación para dar cumplimiento, así sea tardío, a la obligación que tengo de poner en su conocimiento esa circunstancia y seguro de que éllos, habiendo vivido las incidencias de la pasada Sala Plena, sabrán excusar mi involuntario olvido.

"Cordialmente,

Hernando Gómez Otálora".

Bogotá, D. E., marzo 18 de 1987.

ESTIMACION DEL LIMITE MAXIMO DEL VALOR COMERCIAL DE LOS INMUEBLES QUE SEAN OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. LAS DECISIONES DE LA CORTE SON SIEMPRE SOBRE CONSTITUCIONALIDAD, NO SOBRE ILEGALIDAD. EL REAJUSTE DEL CANON DE ARRENDAMIENTO SERA CADA DOCE MESES DE EJECUCION DEL CONTRATO BAJO LA MISMA RENTA, LUEGO NO ES EL ARRENDATARIO EL UNICO QUE PUEDE OBTENER REGULACION DEL PRECIO. DERECHO DE DEFENSA.

Exequibles por no ser violatorio de la constitución los artículos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 23 del Decreto número 1919 de 1986.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 24

Referencia: Expediente número 1518. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2°, 5° a 10, 11 y 23 del Decreto-ley número 1919 del 17 de junio de 1986.

Demandantes: *Luis Jaime Pulido Sierra y otros.*

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 9 de marzo 10 de 1987.

Bogotá, D.E., marzo diez de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Los ciudadanos Luis Jaime Pulido Sierra, Campo Elías Rivera Pico, Gloria Elsa Acosta Ramírez y Jorge Enrique León Vera, han presentado demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2°, 5° a 11 y 23 del Decreto-ley número 1919 de junio 17 de 1986.

Se transcriben a continuación los textos de las normas demandadas. Dada su íntima conexidad con el contenido de ellas, también se transcribe el artículo 1°:

"DECRETO NUMERO 1919 DE 1986
(junio 17)

"Por el cual se determina el sistema de estimación del límite máximo del valor comercial de los inmuebles a que se refiere el parágrafo del artículo 9° de la Ley 56 de 1985 y se establece el régimen de procedimiento administrativo, de sanciones y de recursos aplicables en desarrollo de la misma

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 56 de 1985 y consultada la Comisión Asesora que ella estableció,

DECRETA:

"Artículo 1° Para los efectos de la estimación del límite máximo del valor comercial de los inmuebles que sean objeto de contrato de arrendamiento de vivienda compartida, pensión, o no incorporadas al Catastro, se tendrá en cuenta la clasificación que por categorías de precios se establece en el presente decreto.

"Artículo 2° Las categorías de precios de que trata el artículo anterior son las siguientes:

"Categoría A: Vivienda con condiciones de independencia y servicios esenciales.

"Categoría B: Vivienda con servicios esenciales y áreas compartidas.

"Categoría C: Vivienda por piezas o pensiones.

"Dentro de cada una de estas categorías, se tendrán en cuenta igualmente como factores determinantes de la estimación del límite máximo del valor comercial del inmueble: ubicación según estrato social, materiales de construcción y acabados, y época de construcción.

".....

"Artículo 5° En los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, cuando el arrendatario considere que el valor comercial sobre el cual se determinó el canon de arrendamiento supera los precios del mercado, podrá solicitar por escrito dentro de los seis (6) meses siguientes a la celebración del contrato o a la fecha en que se haga exigible el incremento de la regulación del mismo por el sistema pericial ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante la autoridad en quien ella delegue tal función.

"Artículo 6° Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de que trata el artículo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad en quien ella delegue tal función, procederá a designar por orden alfabético, la persona que ha de practicar el experticio, de la lista de expertos inscritos para el efecto ante tales entidades, o en su defecto, de los peritos expertos en propiedad raiz inscritos en las listas de auxiliares de la justicia de la respectiva jurisdicción.

"Artículo 7° El perito tomará posesión de su cargo ante quien hizo la designación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, de su nombramiento expresando bajo juramento que se compromete a cumplir bien, imparcial y fielmente las funciones de su cargo.

"Artículo 8° El perito rendirá su dictamen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su posesión. Del mismo, se ordenará dar traslado al arrendador y arrendatario por el término de dos (2) días hábiles para que se presenten objeciones. Vencido este término, si no se hubieren presentado objeciones, el funcionario competente proferirá la providencia correspondiente acogiéndose al dictamen pericial; si hubiere objeciones éstas serán dirimidas por el funcionario competente quien hará la regulación del caso con base en el concepto del perito, las objeciones formuladas, la costumbre y la equidad natural.

"La decisión que en uno u otro caso se profiera será susceptible de recurso de reposición ante el funcionario que dictó la providencia pudiendo solicitarse la designación de un nuevo perito.

"Parágrafo. El auto mediante el cual se ordena dar traslado a las partes del dictamen pericial se notificará por estado.

"Artículo 9° Cuando de la regulación del valor comercial del inmueble resultante del procedimiento descrito en los artículos 5°, 6°, 7° y 8° del presente Decreto, apareciere que el precio del arrendamiento legalmente exigible es inferior al efectivamente cobrado en la providencia respectiva, se ordenará además al arrendador que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de tal providencia, consigne a favor del arrendatario los excedentes a que hubiere lugar, en cualquiera de las entidades a que se refiere el artículo 22 del presente Decreto.

"Parágrafo. La providencia mediante la cual se ordena la devolución de excedentes presta mérito ejecutivo.

"Artículo 10. Transcurridos treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia de que trata el artículo anterior, sin que el arrendador haya acreditado la consignación allí prevista, la Superintendencia de Industria y Comercio o la autoridad en quien ella delegue tal función, procederá a imponerle multa hasta por cinco (5) veces el precio mensual de arrendamiento exigido en cada caso y con destino al Fondo Especial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

"Artículo 11. En caso de desacuerdo de las partes contratantes respecto del precio de arrendamiento de los servicios, cosas o usos adicionales, se someterá a justiprecio de peritos para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido en los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del presente Decreto, e imponer la sanción establecida en el artículo 10 si a ello hubiere lugar, a favor del Fondo Especial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

"Parágrafo. El arrendatario deberá detallar en la solicitud los servicios, cosas o usos adicionales sobre los cuales ha de versar el experticio y anexar prueba siquiera sumaria del contrato de arrendamiento.

"Artículo 23. Para efectos de la entrega provisional de que trata el inciso 2° del artículo 17 de la Ley 56 de 1985, la Superintendencia de Industria y Comercio o la autoridad en quien ella delegue tal función, a solicitud escrita del arrendatario y una vez acreditado por parte del mismo, el cumplimiento de las condiciones allí previstas, procederá a señalar fecha y hora para llevar a cabo la entrega del inmueble.

"Cumplido lo anterior se citará al arrendador y al arrendatario mediante comunicación cablegráfica a fin de que comparezcan el día y hora señalados al lugar de ubicación del inmueble para efectuar la entrega al arrendador.

"Si el arrendador no acudiere a recibir el inmueble el día de la diligencia, el funcionario competente para tal efecto hará entrega del inmueble a un secuestre que para su custodia designará de la lista de auxiliares de la justicia hasta la entrega al arrendador a cuyo cargo corren los gastos del secuestre.

"De todo lo anterior se levantará un acta que será suscrita por las personas que intervinieron en la diligencia".

ARGUMENTOS DE LA DEMANDA

Los demandantes sostienen principalmente:

1. El artículo 2° del Decreto número 1919 de 1986, al establecer categorías de precios según el tipo de vivienda, consagra una norma de imposible aplicación.

La demanda no expresa cuáles serían las razones de inconstitucionalidad por este aspecto.

2. El artículo 5° del mismo decreto otorga exclusivamente al arrendatario la facultad de solicitar la regulación o revisión del precio pactado en el contrato, lo cual, a juicio de los actores "consagra una flagrante violación al principio constitucional y procesal de la igualdad de las partes ante la ley y los funcionarios".

Agregan que "se entró a hacer una discriminación disgustante con una de las partes contratantes, como lo es el arrendador, quien hipotéticamente puede en muchas ocasiones ser el lesionado con la fijación del precio del arrendamiento".

3. Los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del decreto son, en opinión de los demandantes, violatorios del principio constitucional del derecho de defensa (artículo 26 Constitución Nacional), pues "se está consagrando una especie de juicio en contra y a espaldas de una de las partes como lo es el arrendador, puesto que se señala como a éste sólo (sic) se le tiene en cuenta en tal juicio, una vez que éste prácticamente ha terminado, sorprendiéndolo con una providencia sin previa notificación, y dándole un término arbitrario de dos (2) días para que constituya un apoderado que la defienda (sic) y objete la decisión ya tomada, que entre otras cosas sólo se le da a conocer entre comillas o a hurtadillas, mediante una notificación por estado (...)".

4. Expresan que el artículo 9° del citado decreto es inconstitucional ya que el Gobierno no tenía facultades para crear títulos ejecutivos.

5. Como si fuera argumento para concluir la inconstitucionalidad del decreto, los actores critican la institución de las facultades extraordinarias, diciendo que es

"un canal por el cual se ha escabullido la más importante actividad del Congreso, por cuanto se cuentan por cantidades (sic) las facultades que se otorgan en ejercicio de esta atribución".

6. El artículo 23 del Decreto, según la demanda, es inconstitucional, dado que el artículo 28 de la Ley 56 dd 1985 no facultó al Gobierno para legislar sobre la entrega provisional del inmueble por el arrendatario cuando el arrendador no lo ha querido recibir en tiempo.

Concepto del Procurador

Dice el señor Procurador General en concepto emitido mediante Oficio 1090 del 7 de noviembre de 1986:

"Respecto del artículo 2° demandado, no hará el Despacho un pronunciamiento de fondo, por cuanto los actores no indicaron cuáles disposiciones constitucionales consideran fueron vulneradas por esa norma legal, además de que el concepto de violación en este punto si bien aparentemente constituye un argumento de violación, en rigor no es una exposición razonada dirigida a darle respaldo a su solicitud de inexequibilidad, ya que como se anotó, no va dirigida a sustentar la infracción de precepto constitucional alguno, tal como lo ordena el artículo 16 numerales 2 y 3 del Decreto número 432 de 1969, el cual establece que las demandas de inexequibilidad deben contener:

".....

"2. *El señalamiento o designación de los textos constitucionales que se consideren infringidos;*

"3. *Las razones por las cuales dichos textos se estimen violados;*

".....".

(Subrayas fuera del texto).

"Al no cumplirse con esos requisitos legales, que constituyen exigencias de carácter sustancial, que no formal, faltan algunos elementos esenciales de esa clase de demandas, lo que hace imposible su estudio.

".....

"La acusación del artículo 5° del Decreto-ley número 1919 de 1986, se circunscribe a la violación de los artículos 16 y 45 de la Carta.

".....

"En segundo lugar, en torno a la presunta infracción del canon 45 superior, por parte del artículo 5° atacado, es de anotar que lo que la ley ha establecido es un procedimiento para proteger los derechos de los arrendatarios, más no el derecho de petición propiamente, el cual se encuentra claramente señalado en el Código Contencioso Administrativo. Considerar que todo procedimiento, sea administrativo, penal, civil, etc., es derecho de petición, nos llevaría al absurdo de afirmar que cualquier procedimiento que fije excepciones a determinadas actuaciones en favor de

una y otra parte, es por ese hecho inconstitucional. Precisamente lo que se procura en materia procesal es fijarles a las partes sus obligaciones dentro de cada proceso, obligaciones que no pueden ser iguales para todos.

"……

"No comparte el Procurador los argumentos expuestos por los demandantes respecto de la violación del derecho de defensa del arrendador. El procedimiento señalado en las disposiciones que se estudian si bien es breve, no por ello puede afirmarse que conculque el canon 26 constitucional, porque como lo ha sostenido esa Corporación, el procedimiento 'puede ser sumario y brevísimo, cuando así lo requieren las funciones rápidas de la policía preventiva' (Sentencia de julio 22/70, M.P.: doctor Eustorgio Sarria).

"En el asunto bajo examen no cabe duda de lo breve del proceso a seguirse ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante la entidad en que ella delegue esa función, pero al tiempo que es breve, también se le entregó al arrendador la posibilidad de poder controvertir el dictamen pericial así como la decisión que se adopte. Obsérvese que una vez el perito entregue el dictamen a que haya lugar, de éste debe dársele traslado al arrendador por dos (2) días hábiles, dentro de los cuales podrá presentar las objeciones al mencionado informe. El hecho de que la notificación al arrendador se haga por estado, no constituye infracción a precepto constitucional alguno, por cuanto ningún artículo de la Carta Política establece la forma de notificación de las providencias, correspondiendo al legislador determinar la manera como se deba llevar a cabo.

"……

"Mas aún, el artículo 11 estableció que en caso de controversia entre las partes sobre el valor del arrendamiento, los servicios y demás usos adicionales, el trámite a seguirse será el contemplado en los artículos 5° a 10 atacados, con lo cual se reitera la facultad que tienen las partes para hacer valer sus derechos y el procedimiento que se deberá seguir para el efecto, incluyendo una sanción para el litigante que no cumpla con sus obligaciones. El procedimiento, se insiste, es breve pero no coarta ningún derecho ni del arrendador ni del arrendatario.

"Respecto del artículo 23 del Decreto al que se refiere la demanda, el Procurador señala que, confrontado con la ley de facultades, no encuentra infracción alguna de la Carta, pues se limitó el gobierno a fijar un procedimiento para la entrega provisional de un inmueble, con lo cual estaba dando cumplimiento exacto a las atribuciones conferidas. Culmina la vista fiscal solicitando a la Corte que respecto del artículo 2° del Decreto-ley número 1919 de 1986, se declare inhibida por ineptitud sustancial de la demanda y que se pronuncie por la exequibilidad de los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 23 del Decreto número 1919 de 1986".

Consideraciones de la Corte

Es la Corte Suprema de Justicia el Tribunal competente para decidir de manera definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos acusados, pues forman parte de un decreto expedido en ejercicio de facultades extraordinarias (artículo 76, ordinal 12, Constitución Nacional).

El Decreto número 1919 fue expedido el 17 de junio de 1986, es decir, dentro del año que la Ley 56 de 1985 señaló como término para el ejercicio de las facultades extraordinarias, que vencía precisamente en tal fecha, luego por este aspecto, los artículos acusados son constitucionales.

En lo relativo a la materia contenida en dichas normas y su ajuste a la Ley de Facultades, se tiene que estas fueron conferidas principalmente para:

"Establecer los procedimientos y normas para determinar la estimación del valor comercial en los casos y circunstancias previstos en el parágrafo del artículo 9° de la presente ley.

"Establecer el régimen de procedimiento administrativo, de sanciones y de recursos aplicables en desarrollo de la intervención del Gobierno Nacional previsto en la presente ley".

Encuentra la Corte que la totalidad de las disposiciones acusadas, por cuanto establecen las reglas conforme a las cuales se estimará el valor comercial de los inmuebles para efectos de arrendamientos y fijan procedimientos, sanciones y recursos respecto de la misma materia, encajan dentro del ámbito de las facultades que al Gobierno le fueron otorgadas por la citada ley y, en consecuencia, por este aspecto, no violan las disposiciones constitucionales.

La imposibilidad de aplicación

Por cuanto no le compete, no entra la Corte a decidir si determinados artículos del Decreto número 1919 de 1986 pueden o no cumplirse en la práctica, pero sí anota que la "imposibilidad jurídica de aplicación", presentada por los demandantes como uno de los principales cargos contra aquéllos, aún en el caso de ser cierta, no implica oposición a los preceptos de la Carta y, por tanto, mal podría llevar a la declaratoria de inexequibilidad solicitada.

En efecto, una cosa es que la norma legal esté configurada en forma tal que no sea factible llevar a cabo sus mandatos y otra bien distinta es que esa misma norma, por darse la circunstancia enunciada, vulnere la Constitución.

El argumento en cuestión puede ser válido para solicitar a los legisladores una reforma o adecuación de los artículos pertinentes, pero de ningún modo es de recibo dentro del campo de confrontación constitucional que a esta clase de procesos corresponde.

Adicionalmente, repitè la Corte una vez más que el objeto de sus decisiones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 214 de la Carta Fundamental, consiste en fallar sobre *constitucionalidad*, más no en torno a *ilegalidad* como erróneamente lo piden los demandantes en forma subsidiaria. Una ley puede ser derogada, modificada, ampliada o aclarada mediante otras leyes posteriores, bien que lo sean en sentido formal o material, pero jamás puede resultar *violada por ellas*.

Igualdad ante la ley y derecho de petición

Dicen los actores que el artículo 5° del Decreto número 1919 de 1986 viola la Constitución por otorgar única y exclusivamente al arrendatario la facultad de

solicitar ante las autoridades administrativas la regulación o revisión del arrendamiento pactado en el contrato.

Caben dos observaciones relevantes para juzgar sobre la constitucionalidad de la disposición:

a) La revisión que puede solicitar el arrendatario no es directamente sobre el precio del arrendamiento sino sobre el valor del inmueble, según se deduce del texto normativo.

En efecto, el objeto de tal solicitud es el de que la autoridad administrativa constate si el valor comercial del inmueble sobre el cual se determinó el precio de arrendamiento, supera los precios del mercado y, en consecuencia, *si encuentra que ello es así,* regule el precio por el sistema pericial. Se trata de una verificación que recae directamente sobre el valor del inmueble, pero *en cuanto pueda haberse aumentado por el arrendador para determinar un mayor precio de arrendamiento* (artículo 9° Ley 56 de 1985), razón por la cual es ésta una revisión administrativa que interesa al arrendatario y que mal podría pedir el arrendador, ya que fue él quien determinó ese valor comercial para los efectos del arrendamiento y es cabalmente *esa* determinación la que se revisa.

b) Pero, además, la circunstancia de que sea el arrendatario el único de los contratantes facultado para pedir la verificación y regulación mencionadas, no implica la desprotección del arrendador, como afirman los demandantes, ya que la norma del artículo 5° ha de considerarse en armonía con el conjunto de disposiciones sobre el particular, tanto las del Decreto número 1919 como las que integran la Ley 56 de 1985.

Encuentra la Corte que el artículo 10 de la Ley 56 de 1985, establece el reajuste del canon de arrendamiento cada doce meses de ejecución del contrato bajo la misma renta, luego no es el arrendatario el único que puede obtener regulación del precio. Se trata de dos mecanismos distintos pero complementarios, tendientes a lograr el equilibrio entre las partes contratantes.

Si estos dos mecanismos fueran considerados aisladamente, tanto una como otra parte, según el caso, podría alegar respecto de cada uno de ellos, que se le desconoce su derecho. No sucede así cuando se estudia el conjunto, que es el elemento de relevancia jurídica cuando se trata de determinar valores tales como la equidad y la igualdad ante la ley.

Por tanto, no se estima violado el artículo 16 de la Constitución, ya que según él, las autoridades han sido instituidas para proteger a *todas* las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes. Y no considera la Corte que la disposición demandada haya dejado sin protección al arrendador, por las razones enunciadas.

Tampoco resulta transgredido el artículo 45 de la Constitución, ya que la disposición contenida en el artículo 5° del Decreto número 1919 de 1986 no alude al derecho de petición y menos aún limita su libre ejercicio. Como expresa el señor Procurador, cuyo concepto en este aspecto se acoge, lo que la norma ha establecido es un procedimiento para proteger los derechos de los arrendatarios, pero nada relativo

al derecho de petición propiamente, el cual se encuentra regulado en el Código Contencioso Administrativo.

Del enunciado artículo no se deduce limitación alguna al derecho de petición de los arrendadores, por el solo hecho de haberse conferido a los arrendatarios la posibilidad de elevar la solicitud cuyo objeto se acaba de explicar. Si así fuera, habría de concluirse que las acciones o excepciones conferidas por la ley a una sola de las partes, según el proceso de que se trate y la naturaleza del asunto, serían inconstitucionales, lo cual resulta absurdo.

Derecho de defensa

Los artículos 6 a 11 del Decreto tantas veces mencionado establecen el procedimiento para que la administración efectúe el peritazgo y, sobre la base de sus resultados, regule el precio del arrendamiento –si hay lugar a ello– y, en su caso, ordene la devolución de las sumas pagadas en exceso por el arrendatario sobre la tarifa legalmente permitida.

Afirman los demandantes que el proceso, tal como ha sido previsto en las nombradas disposiciones, es inconstitucional por desconocer el derecho de defensa.

No lo juzga así la Corte, pues, como lo recuerda el concepto de Procuraduría, ha insistido la jurisprudencia constitucional en que el proceso puede ser sumario y brevísimo, cuando así lo exijan las funciones rápidas de la policía preventiva (Sentencia de julio 22 de 1970. Ponente doctor Eustorgio Sarria), o, como en el caso presente, se haga necesaria la pronta decisión de las autoridades administrativas para velar por el exacto cumplimiento de las leyes (artículo 120, ordinal 2° Constitución Nacional), y por la protección de las personas (artículo 16 Constitución Nacional), siempre y cuando se garantice a plenitud que en el curso de las actuaciones correspondientes no se desconocerán ninguno de los principios constitucionales.

No es cierto que, como lo sostiene la demanda, los artículos acusados consagren normas atentatorias del derecho de defensa en el caso de los arrendadores.

En efecto, se establecen normas claras sobre trámite de la solicitud, designación y toma de posesión de los peritos y emisión del dictamen correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su posesión (artículos 6°, 7° y 8°); se prevé el traslado de dicho dictamen al arrendador para que pueda presentar objeciones al mismo y se ordena que, en caso de haberlas, el funcionario competente las dirima con base en el concepto del perito, las objeciones presentadas, la costumbre y la equidad natural.

Pero, además, "la decisión que en uno y otro caso se profiera será susceptible de recurso de reposición ante el funcionario que la dictó, pudiendo solicitarse la designación de un nuevo perito".

No había necesidad de expresar que dicha decisión tendría que notificarse personalmente, de lo cual se quejan los demandantes, pues tratándose de típicas actuaciones administrativas, están sujetas a las reglas generales previstas por el Código Contencioso Administrativo (Decreto número 01 de 1984).

Las demás normas acusadas se limitan a fijar el trámite posterior a la determinación del valor comercial del inmueble y su comparación con el que se tomó como base para fijar el precio del arrendamiento. La consiguiente devolución de excedentes es, a juicio de la Corte, elemental aplicación de principios generales en cuya virtud quien ha recibido lo que no se le debía o más de lo que se le debía, está obligado a restituir el exceso, restableciendo el equilibrio entre los contratantes, lo cual en modo alguno viola, sino que por el contrario, desarrolla los mandatos constitucionales.

Las normas objeto de la acción no violan ninguna disposición constitucional y, por tanto, no están llamadas a prosperar las pretensiones de los demandantes.

DECISIÓN:

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES, por no ser violatorios de la Constitución, los artículos 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 23 del Decreto-ley número 1919 del 17 de junio de 1986.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo Garcia Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jácobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavidez
Secretaria General

AVALUOS DE INMUEBLES PARA DETERMINAR LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO. SI EL CONTEXTO O LA PARTE COMPLEMENTARIA DE LOS FRAGMENTOS ACUSADOS PERMITEN UNA APRECIACION DE CONJUNTO SOBRE EL CONTENIDO NORMATIVO DE ELLOS, PUEDE LA CORTE ENTRAR A FALLAR, SIN QUE SE PUEDA SOSTENER LA FALTA DE SENTIDO AUTONOMO QUE CARACTERIZA LAS PROPOSICIONES JURIDICAS INCOMPLETAS. LA CONSIGNACION DE LA MULTA IMPUESTA PREVIAMENTE, ES EN SI MISMO INCONSTITUCIONAL, POR CUANTO COLOCA AL CIUDADANO EN LA IMPOSIBILIDAD DE EJERCER SU DERECHO, SI CARECE DE DINERO PARA EFECTUAR LA CONSIGNACION. COSA JUZGADA.

Inexequible el artículo 21 del Decreto número 1919 de 1986.
DE 1986.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 25

Referencia: Expediente número 1524. Normas acusadas; artículos 2° incisos 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 21 en parte, del Decreto número 1919 de 1986.

Demandante: *Elisa Carrizosa Tovar.*

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 10 de 12 de marzo de 1978.

Bogotá, D.E., marzo doce (12) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

La ciudadana Elisa Carrizosa Tovar, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 214 de la Constitución Política, ha demandado ante la Corte los artículos de la referencia, que dicen textualmente:

"DECRETO NUMERO 1919 DE 1986
(junio 17)

"Por el cual se determina el sistema de estimación del límite máximo del valor comercial de los inmuebles a que se refiere el parágrafo del artículo 9° de la Ley 56 de 1985 y se

establece el régimen de procedimiento administrativo, de sanciones y de recursos aplicables en desarrollo de la misma.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 56 de 1985 y consultada la Comisión Asesora que ella estableció,

DECRETA:

".....

"Artículo 2º Las categorías de precios de que trata el artículo anterior son las siguientes:

"Categoría A: vivienda con condiciones de independencia y servicios esenciales.

"Artículo 5º En los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, cuando el arrendatario considere que el valor comercial sobre el cual se determinó el canon de arrendamiento supera los precios del mercado, podrá solicitar por escrito dentro de los seis (6) meses siguientes a la celebración del contrato o a la fecha en que se haga exigible el incremento la regulación del mismo por el sistema pericial ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante la autoridad en quien ella delegue tal función.

"Artículo 6º Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de que trata el artículo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad en quien ella delegue tal función, procederá a designar por orden alfabético, la persona que ha de practicar el experticio, de la lista de expertos inscritos para el efecto ante tales entidades, o en su defecto, de los peritos expertos en propiedad raíz inscritos en las listas de auxiliares de la justicia de la respectiva jurisdicción.

"Artículo 7º El perito tomará posesión de su cargo ante quien hizo la designación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento, expresando bajo juramento que se compromete a cumplir bien, imparcial y fielmente las funciones de su cargo.

"Artículo 8º El perito rendirá su dictamen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su posesión. Del mismo, se ordenará dar traslado al arrendador y arrendatario por el término de dos (2) días hábiles para que se presenten objeciones. Vencido este término, si no se hubieren presentado objeciones, el funcionario competente proferirá la providencia correspondiente acogiéndose al dictamen pericial; si hubiere objeciones estas serán dirimidas por el funcionario competente quien hará la regulación del caso con base en el concepto del perito, las objeciones formuladas, la costumbre y la equidad natural.

"La decisión que en uno u otro caso se profiera será susceptible de recurso de reposición ante el funcionario que dictó la providencia pudiendo solicitarse la designación de un nuevo perito.

"Parágrafo. El auto mediante el cual se ordena dar traslado a las partes del dictamen pericial se notificará por estado.

"Artículo 9° Cuando de la regulación del valor comercial del inmueble resultante del procedimiento descrito en los artículos 5°, 6°, 7° y 8° del presente Decreto, apareciere que el precio del arrendamiento legalmente exigible es inferior al efectivamente cobrado en la providencia respectiva se ordenará además al arrendador que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de tal providencia, consigne a favor del arrendatario los excedentes a que hubiere lugar, en cualquiera de las entidades a que se refiere el artículo 22 del presente decreto.

"Parágrafo. La providencia mediante la cual se ordena la devolución de excedentes presta mérito ejecutivo.

"Artículo 10. Transcurridos (30) días hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia de que trata el artículo anterior, sin que el arrendador haya acreditado la consignación allí prevista, la Superintendencia de Industria y Comercio o la autoridad en quien ella delegue tal función, procederá a imponerle multa hasta por cinco (5) veces el precio mensual de arrendamiento exigido en cada caso y con destino al Fondo Especial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

"Artículo 11. En caso de desacuerdo de las partes contratantes respecto del precio de arrendamiento de los servicios, cosas o usos adicionales, se someterá a justiprecio de peritos para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido en los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del presente Decreto, e imponer la sanción establecida en el artículo 10 si a ello hubiere lugar, a favor del Fondo Especial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

"Parágrafo. El arrendatario deberá detallar en la solicitud los servicios, cosas o usos adicionales sobre los cuales ha de versar el experticio y anexar prueba siquiera sumaria del contrato de arrendamiento.

"……

"Artículo 21. Contra las providencias que pongan fin a la actuación administrativa aquí prevista procederán los siguientes recursos *previa consignación* de la multa impuesta según fuere el caso:

"1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la decisión para que la aclare, modifique, revoque o adicione.

"2. El de apelación, para ante el inmediato superior jerárquico con el mismo propósito.

"3. El de queja cuando se rechace el de apelación.

"La oportunidad y presentación de los anteriores recursos se regirá por las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo".

Fundamentos de la demanda

La actora estima violados los artículos 2°, 26, 34, 55, 58 y 118-8 de la Constitución, por las siguientes razones:

"……

"La norma acusada es inconstitucional por haber excedido las facultades extraordinarias en cuanto amplió el concepto de vivienda compartida para cobijar también los inmuebles que, como hemos descrito, encajan dentro de la descripción consagrada en el artículo 1° de la Ley 182 de 1948, y por ello pueden someterse al citado régimen.

"Este hecho supone la irrupción del Ejecutivo en las funciones legislativas, y por ende, la violación del artículo 55 de la Constitución.

"……

"La Ley 56 de 1985 dio autorización al gobierno para establecer el régimen de procedimiento administrativo, de sanciones y de recursos aplicables en desarrollo de la intervención prevista en el numeral 5° del artículo 28, pero tal facultad no puede extenderse más allá de la instrumentación de los medios para ejercer el necesario poder de policía que permita el debido control, inspección, vigilancia y sancionamiento administrativos.

"La noción de policía administrativa no comprende el poder de impartir justicia; ello es función que compete a los jueces.

"Aparte lo hasta aquí afirmado, el Gobierno no recibió autorización para crear un sistema mediante el cual sus agentes impongan el precio ni el monto de los reajustes contractuales.

"El precio, conforme al artículo 9° de la Ley 56 de 1985, se acuerda por las partes, fórmula que también adoptó el artículo 4° del Decreto número 1919 de 1986, y es que según el artículo 1° de la citada norma de facultades 'esta ley tiene por objeto *fijar los criterios que deben servir de base* para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda y para determinar el valor del canon respectivo y sus reajustes', luego es indudable que la intención del congreso no fue la de establecer individualmente precios, sino la de indicar pautas para su determinación dentro del respeto por la autonomía contractual.

"……

"No se previó notificación ni traslado al arrendador de la solicitud elevada por el arrendatario para que se revise el valor comercial del inmueble. Ello le impide hacerse parte e interponer las defensas a su alcance, tales las de prescripción, preexistencia de un avalúo, pleito pendiente, cesión del contrato, etc.

"……

"La inspección, control, vigilancia y sancionamiento los radicó la Ley 56 en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio o en la de las autoridades departamentales o municipales en quienes ella delegue esa función (artículo 26), pero ocurre que el Decreto-ley acusado dispuso que de no presentarse objeciones, la Superintendencia deba acoger el dictamen pericial, de donde no solamente el ejecutivo se ha abrogado funciones judiciales sino que difiere el fallo al perito, por lo cual, en último término, viene a impartir justicia un particular.

"Tienen tal carácter de judiciales las facultades que en este punto se consagraron que para el caso de oposición se dispuso que 'la regulación' la haga el funcionario 'con base en el concepto del perito, las objeciones, la costumbre y la equidad natural' (artíulo 8° Decreto número 1919 de 1986), todo lo cual supone un juicio de valoración.

"(...) es injurídico asignarle mérito ejecutivo a la providencia administrativa que ordena la devolución de excedentes (nótese, además, que el inquilinio nunca probó el pago de los cánones); tal declaración supone el ejercicio de una función judicial de competencia de otra rama del poder público conforme a las disposiciones constitucionales citadas".

Concepto del Procurador General de la Nación

El señor Procurador emitió concepto mediante oficio número 1095 del 7 de noviembre de 1986, en el cual expresa fundamentalmente:

"En torno al artículo 2°, inciso segundo atacado, los argumentos expuestos por la demandante no son de recibo. Entiende el Procurador que cuando el legislador extraordinario se refirió a la 'vivienda en condiciones de independencia y servicios esenciales', lo hizo aludiendo a esa clase de vivienda que no se encontraba incorporada al registro catastral, porque para los demás eventos, vivienda compartida y por el sistema de contrato de pensión, el propio Decreto-ley los contempló en forma expresa. No otra puede ser la interpretación, si se tiene en cuenta que la misma Ley 56 de 1985 en su artículo noveno, inciso tercero, claramente estableció cuál era el sistema de estimación del límite máximo del valor comercial de los inmuebles con registro catastral, sin fijar categorías, dejando al legislador extraordinario la determinación de ese sistema para los inmuebles que no se encontrarán registrados en el Catastro. Fue en desarrollo de lo ordenado por el parágrafo del artículo 9°, de la ley citada, que el Ejecutivo haciendo uso de las facultades conferidas, estableció la categoría A que hoy se acusa, referida indudablemente a los inmuebles que si bien son independientes, no tienen registro catastral. Por tanto, considera el Despacho que el Gobierno, al expedir el Decreto-ley número 1919 de 1986, ejerció cabalmente las facultades conferidas por la Ley 56 de 1985, lo que se traduce en la no infracción del artículo 118-8 constitucional y en el cumplimiento pleno del canon 55 superior sobre la separación y colaboración armónica de las ramas del poder público.

"El argumento de violación para el artículo 5° demandado se contrae a la intromisión, por parte del Ejecutivo, en la órbita de la Rama Jurisdiccional, por cuanto le otorgó la función 'de impartir justicia civil a una entidad del orden administrativo', siendo que esa función es propia de los jueces. Al respecto vale la pena recordar, teniendo en cuenta lo expuesto por la actora, lo que la jurisprudencia y doctrina han entendido por Poder de Policía y Función de Policía. Como las normas de policía dicen relación con las funciones del Estado, ellas pertenecen al Derecho Público y especialmente al Derecho Administrativo, sin que por esto pueda afirmarse que su interés se encuentre limitado sólo a esa materia toda vez que la protección de la persona, entendida en forma integral, cobija todos sus derechos tanto en el campo social como en el privado.

"(...) el Poder de Policía es normativo, y busca preservar el ejercicio de la libertad individual dentro del marco del orden público, mientras que la función de policía se encuentra reglada y subordinada al poder de policía, y supone el ejercicio de competencias determinadas que hayan sido asignadas por el legislador, ordinario o extraordinario, a las autoridades administrativas cuyas actuaciones en estos casos si bien son muy similares a las jurisdiccionales, no por ello puede afirmarse que sean netamente judiciales.

"En este orden de ideas, y frente al caso bajo examen, obsérvese que el legislador, en ejercicio del Poder de Policía, le entregó la competencia para ejercer el control y vigilancia, incluida la imposición de sanciones administrativas en materia de arrendamiento de vivienda urbana, a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la autoridad departamental o municipal en quien ella delegue esa función (artículo 26, Ley 56 de 1985) y el legislador extraordinario simplemente se limitó a reiterarla en el artículo 5° del Decreto demandado, lo que en manera alguna constituye indebida injerencia del Ejecutivo en la órbita de atribuciones propias de la Rama Jurisdiccional, como lo sostiene la demandante; antes por el contrario, comporta una función y actuación netamente de policía administrativa para la cual sí se encontraba facultado el legislador extraordinario, por lo que no encuentra el Despacho que exista infracción de los artículos 118-8, 2°, 55 y 58 de la Carta.

"En punto a los preceptos 9° y 11 tachados de inconstitucionalidad por la actora, son valederos los argumentos expresados en la presente Vista Fiscal respecto del artículo 5° antes estudiado, toda vez que como ya se indicó, la Administración puede en ejercicio de competencias dadas por el legislador, cumplir funciones que aun cuando en apariencia son jurisdiccionales y conllevan una especie de proximidad con éstas, son en realidad diferentes, por lo que en ese evento tampoco hay violación de las normas 118-8, 2ª y 55 del Estatuto Superior.

".....

"(...) sin vulnerar la Constitución Nacional, el legislador extraordinario puede modificar o subrogar los códigos así expresamente la ley de facultades no lo haya autorizado. Sin embargo, en el presente caso no encuentra el Despacho que se hayan modificado los artículos de los Códigos de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo citados en la demanda, ya que el procedimiento fijado por el Decreto-ley número 1919 de 1986 es un procedimiento especial y *sui-generis* frente a los demás procedimientos contemplados en los códigos antes mencionados, y en el cual se establece el trámite a seguir para adelantar esa clase de procesos. Por lo tanto, tampoco existe infracción del precepto 118-8 de la ley superior.

".....

"La existencia de un procedimiento breve y sumario en materia de arrendamiento de los inmuebles indicados en las categorías de que trata el artículo 2° del Decreto impugnado, no implica en manera alguna infracción al derecho de defensa del arrendador, toda vez que en él mismo se les entrega a las partes la posibilidad de controvertir tanto el informe pericial como la decisión que se adopte, contra la cual únicamente cabe el recurso de reposición, lo que coincide con lo dispuesto por el artículo 50, numeral 2° del Código Contencioso Administrativo, el cual dispone que

contra las decisiones dictadas por 'los Ministros, Jefes de Departamento Administrativo, Superintendentes...', no procede el recurso de apelación.

"Mas aún, es tan cierto que se busca garantizar el derecho de defensa de las partes, que la misma ley contempla la posibilidad de que éstas puedan solicitar el nombramiento de un nuevo perito, al momento de interponer el recurso de reposición contra la decisión que se adopte.

".....

"Así mismo, no es de recibo la afirmación del demandante en el sentido de que cuando no exista objeción al informe del perito, éste debe ser acogido por la Superintendencia de Industria y Comercio o la que cumpla esa función, traduciéndose en el hecho de que un particular imparta justicia civil. No puede olvidarse que precisamente los peritos son auxiliares de la justicia, que por sus conocimientos especializados en ciertas materias hacen necesaria su presencia en determinados procesos, con el fin de lograr una equitativa e imparcial administración de justicia, ya que es imposible exigir de los jueces vastos conocimientos sobre todos los asuntos de carácter técnico en que deban intervenir.

"La imposición de la multa indicada en los artículos 10 y 11 del Decreto-ley número 1919 de 1986, como medida coercitiva es una consecuencia del procedimiento señalado en los artículos precedentes, los cuales son un desarrollo del poder de policía y de la función de policía, por lo que mal puede considerarse que exista violación al derecho de defensa del arrendador.

"Respecto de la frase 'previa consignación de la multa impuesta' del artículo 21 que se acusa por infracción del canon 26 constitucional, considera el Despacho que existe proposición jurídica incompleta, por que faltan los dos extremos que sustentan la argumentación de la demandante. Por una parte, no se indicó cuál disposición contempla la exigencia ejecutiva de las multas que se impongan, porque el artículo 21 no lo dice, y de la otra, no se acusó la parte del artículo que contiene los recursos que proceden contra esas providencias y mucho menos se expresó la relación de causalidad entre los medios de impugnación procedentes y la presunta exigencia ejecutiva de las multas.

".....".

Consideraciones de la Corte

1. Respecto de los artículos 2°, incisos 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11, del Decreto número 1919 de 1986, que ya habían sido demandados, esta Corte se pronunció definitivamente en fallo del 12 de marzo del año en curso.

Teniendo en cuenta el principio de la cosa juzgada, habrá de estarse a lo resuelto en la aludida sentencia.

2. Del artículo 21, ha sido demandada únicamente la frase "previa consignación de la multa impuesta".

No considera la Corte que en este caso haya proposición jurídica incompleta, como lo sostiene la Procuraduría, pues según ya se dijo en sentencia del 4 de

diciembre de 1986 al fallar sobre la constitucionalidad de algunos apartes del artículo 11 del Decreto número 3466 de 1982, si el contexto o la parte complementaria de los fragmentos acusados permiten una apreciación de conjunto sobre el contenido normativo de ellos, puede la Corte entrar a fallar, sin que se pueda sostener la falta de sentido autónomo que caracteriza las proposiciones jurídicas incompletas.

En el caso presente, las palabras "previa consignación de la multa impuesta" deben apreciarse en relación con el objeto primordial del artículo al cual pertenecen, el 21 del Decreto número 1919, que señala los recursos que proceden por la vía gubernativa contra las providencias que pongan fin a las actuaciones administrativas a que se refiere el mismo Decreto.

Dado lo anterior, la Corte proferirá decisión definitiva sobre la constitucionalidad de los términos objeto de la acción.

Se estima infundado el cargo relativo a violación del artículo 2° de la Carta, pues de su contenido y objeto nada se desprende sobre prohibición al legislador en cuanto a la exigencia de condiciones previas al ejercicio de los recursos por la vía gubernativa.

Tampoco el 118, ordinal 8°, de la Constitución ha sido conculcado pues no hay exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias (Ley 56 de 1985), ya que ellas se confirieron para "establecer el régimen de procedimiento administrativo, de sanciones y de recursos aplicables" en la materia que dicha ley reguló y que es la misma del Decreto acusado.

En cuanto al derecho de defensa, como ya lo ha expresado la Corte en sentencia del 11 de septiembre de 1986, los recursos en sus distintas modalidades son de creación legal, no constitucional y, por tanto, las reglas relativas a ellos y sus limitaciones competen al legislador.

Sobre el particular sostuvo esta Corporación:

"La Carta se limita a garantizar que en las actuaciones administrativas se asegure plenamente el derecho de defensa y a formular los principios generales a cuyo amparo puedan acogerse los particulares ante el Estado, pero no cataloga los recursos, ni señala sus características, ni dice cuándo proceden ni ante quién" (Sentencia número 70. Proceso número 1470. Septiembre 11 de 1986).

Si ello es así, el legislador está facultado con mayor razón para señalar las condiciones o requisitos que deben cumplirse para acceder a los recursos por ella creados, lo cual no quebranta ninguna disposición constitucional. Sin embargo, en el presente caso, el trámite previo exigido por la norma para que el particular acceda a los recursos por la vía gubernativa, es decir, la consignación de la multa impuesta, es en sí mismo inconstitucional, por cuanto coloca al ciudadano en la imposibilidad de ejercer su defensa ante el Estado si carece del dinero necesario para efectuar la consignación. Y no es poca la cuantía, puesto que según el artículo 10 del mismo Decreto, equivale a cinco (5) veces el canon de arrendamiento respectivo.

Entendiendo la justicia en su sentido amplio, considera la Corte que una exigencia como la indicada atenta también contra el principio de gratuidad.

Con fundamento en las razones anteriores, la –Sala Plena– de la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de su Sala Constitucional y conocido el concepto del Procurador General de la Nación,

DECIDE:

1° Declárase INEXEQUIBLE, del artículo 21 del Decreto número 1919 de 1986, la expresión "previa consignación de la multa impuesta".

2° En cuanto a los artículos 2°, incisos 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11 del mismo Decreto, ESTÉSE A LO RESUELTO por la Corte en fallo del 12 de marzo de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria General

FABRICACION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, VENTA, SUMINISTRO, REPARACION O PORTE DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL O DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS, SIN PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE. SANCIONES. EL ARTICULO 121 DE LA CONSTITUCION NACIONAL AUTORIZA AL GOBIERNO, DENTRO DEL ESTADO DE SITIO, PARA SUSPENDER LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SEAN INCOMPATIBLES CON LAS NORMAS DICTADAS TRANSITORIAMENTE, PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO

Inexequibles los artículos 4° y 5° del Decreto número 3664 de 1986. Exequibles los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7° y 8° del mismo Decreto legislativo.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 26.

Referencia: Expediente número 1557 (235-E).

Revisión constitucional del Decreto legislativo número 3664 de 1986, "Por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público".

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo M.*

Aprobado por Acta número 10.

Bogotá, D.E., marzo doce (12) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

1. En desarrollo del Decreto legislativo número 1038 de 1984, el Presidente de la República con la firma de todos los Ministros, el 17 de diciembre de 1986 expedió el Decreto legislativo número 3664.

2. En acatamiento de lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución Nacional, el último de los mencionados decretos fue enviado a la Corte Suprema de Justicia para que ella efectuara su revisión constitucional.

II. El texto del decreto

El texto del Decreto legislativo número 3664 de 1986 es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 3664 DE 1986
(diciembre 17)

"Por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984,

D E C R E T A:

"Artículo 1°. Mientras se halle turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, el que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y en el decomiso de dicho elemento.

"La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando el hecho se cometa en las circunstancias siguientes:

"a) Utilizando medios motorizados.

"b) Cuando el arma provenga de un hecho ilícito.

"c) Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades.

"d) Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.

"Artículo 2°. Mientras se halle turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, el que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, repare, almacene, conserve, adquiera, suministre o porte armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y en el decomiso del material correspondiente.

"La pena mínima anteriormente dispuesta se elevará al doble cuando concurran las circunstancias determinadas en el inciso 2° del artículo 1° de este Decreto.

"Artículo 3° Los infractores del artículo 1° de este decreto cuando el hecho se realice con cualquiera de las circunstancias previstas en su inciso 2° y quienes infrinjan el artículo 2° de esta misma norma, no tendrán derecho a la libertad provisional ni a condena de ejecución condicional.

"Artículo 4° Se atribuye el conocimiento de las infracciones anteriores, a los Comandos de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea, mediante el procedimiento especial de artículo 590 del Código de Justicia Penal Militar.

"Artículo 5° Los fallos de primera instancia proferidos sobre las conductas de que trata este decreto, serán consultadas con el Tribunal Superior Militar, si no fueren apelados.

"Artículo 6° Los Comandantes de Brigada, Unidad Táctica, Base Naval o Aérea, podrán suspender los salvoconductos ordinarios otorgados para portar armas de defensa personal a quienes considere necesario o en las zonas que así lo determine el orden público.

"Artículo 7° Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los hechos cometidos a partir de su vigencia.

"Artículo 8° Este decreto rige desde la fecha de su publicación, deroga las Decretos números 1056 y 1058 de 1984 y suspende las normas que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D.E., a 17 de diciembre de 1986.

VIRGILO BARCO

"El Ministro de Gobierno y Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, *Fernando Cepeda Ulloa,* el Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy,* el Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo,* el Ministro de Defensa Nacional, *General Rafael Samudio Molina,* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán,* el Ministro de Trabajo, *José Name Terán,* el Ministro de Salud, *Cesar Esmeral Barros,* el Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo,* el Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio,* el Ministro de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse,* el Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez,* el Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo".*

III. Impugnaciones

De acuerdo con las constancias de la Secretaría General de la Corte, el término de fijación en lista transcurrió "en silencio", esto es, sin que ningún ciudadano acudiera a defender o a impugnar el decreto que se revisa.

IV. Concepto del Procurador

En el concepto del Procurador General de la Nación se pide la declaración de exequibilidad del Decreto legislativo número 3664 de 1986, exceptuados los artículos 4° y 5°.

a) *La exequibilidad*

Los argumentos del concepto fiscal para pedir la constitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 6 y 8 del decreto en cuestión, son:

1. Respecto de los artículos 1 y 2, que definen hechos punibles y establecen sus sanciones, dice que puede el Presidente de la República obrando como legislador

extraordinario en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 121 de la Constitución, tipificar los delitos y contravenciones y señalar las sanciones correspondientes.

2. La supresión del derecho a la libertad provisional y a la condena de ejecución condicional para los infractores del artículo 1 y del artículo 2, son constitucionales, según el Fiscal, puesto que son asuntos que compete regular a la ley, la cual puede resultar suspendida por los decretos legislativos dictados bajo el régimen del Estado de Sitio, como lo hace el artículo 3° del Decreto legislativo.

3. Considera exequible el artículo 6 porque es una atribución propia de las Fuerzas Armadas otorgar los salvoconductos para el porte de armas, siendo por tanto consecuente que corresponda la suspensión de los mismos a los Comandantes de Brigada, Unidad Táctica, Base Naval y Aérea, como lo establece la norma examinada.

4. Señalar la fecha de vigencia como lo hace el artículo 8° y destacar la temporalidad del decreto, es ajustado a la Constitución.

5. En torno al artículo 7 del Decreto en estudio el Procurador no hizo consideración especial.

b) *La inconstitucionalidad de los artículos 4 y 5 del Decreto-legislativo número 3664 de 1986*

Con ellos se atribuye el conocimiento de las infracciones mencionadas a la Justicia Penal Militar, se señala el procedimiento y se otorga competencia para la segunda instancia al Tribunal Superior Militar. El Procurador reitera sus opiniones vertidas al analizar el Decreto legislativo número 3671 de 1986, cuya fotocopia anexa.

Se trata del concepto número 1109 del 13 de febrero de 1987, donde luego de relacionar los diversos fallos de la Corte sobre el tema y los conceptos del Ministerio Público, así como de hacer sus glosas, apoyado en que las únicas autorizaciones expresas de la Carta para la acumulación de funciones judiciales con las militares son las de los artículos 27-2 y 170, que son excepcionales frente a la regla general de la separación de funciones impuestas por el artículo 55 de la Constitución, indica que su aplicación no puede ser ampliada por el legislador y repara como inexequibles las previsiones en comento para la justicia penal militar.

Dice también el concepto, que se viola el artículo 26 de la Carta con el traspaso de conocimiento de delitos de la jurisdicción ordinaria a la castrense porque no es cambio de competencia del resorte legal sino una transferencia de una jurisdicción a otra, ambas de creación constitucional, por lo que no pueden ser ampliadas o restringidas a voluntad del legislador ordinario o extraordinario.

V. Consideraciones de la Corte

a) *Examen formal*

Toda la República se encuentra en Estado de Sitio desde la vigencia del Decreto

legislativo número 1038 de 1984, declarado exequible por la Corporación según fallo del 14 de junio de 1984.

El Decreto número 3664 de 1986, se expidió en ejercicio de las facultades concedidas al Presidente por el artículo 121 de la Constitución y como desarrollo del mencionado Decreto número 1038 de 1984.

El Decreto legislativo que se revisa lleva la firma de todos los Ministros del Despacho y desde luego la del Presidente, ajustándose así a lo que exige el artículo 121 de la Constitución, en lo que a formalidades se refiere.

b) *Examen material*

Es claro el artículo 121 de la Constitución Nacional al autorizar al Gobierno, dentro del Estado de Sitio, para suspender las disposiciones legales que sean incompatibles con dicha emergencia, pudiendo entonces dictar normas transitorias que entren a reemplazarlas mientras dure la turbación del orden público.

Ello permite que el Gobierno tome medidas de orden penal, tanto en lo sustantivo como en lo atinente al procedimiento, para regular y sancionar conductas que alteren la paz social, tales como las que tipifican los artículos 1° y 2° del Decreto que se revisa, los cuales son por consiguiente exequibles. Lo es también el artículo 3° al establecer una disposición procedimental que no viola la garantía del derecho de defensa que consagra el artículo 26 de la Constitución Nacional.

Son inexequibles, en cambio, los artículos 4° y 5° por las razones expuestas por la Corte en la revisión constitucional del Decreto legislativo número 3664 de 1984, a las cuales se remite en esta oportunidad.

Sobre el artículo 6°, que autoriza a las autoridades militares que ahí se mencionan para suspender los salvoconductos ordinarios otorgados para portar armas de defensa personal, ha considerado la Corte que medidas de esta índole "son conducentes para el restablecimiento del orden público, y por consiguiente, encajan dentro de las facultades que el Presidente de la República, le confiere al artículo 121 de la Constitución, previa declaración de turbación del orden público y de Estado de Sitio, como ha ocurrido" (Sentencia de 2 de diciembre de 1976).

Se trata entonces de un desarrollo del artículo 48 de la Constitución Nacional, especialmente para épocas de turbación del orden público, conforme a las caracterísicas que ésta asuma y según la inteligencia que del mismo tiene el Gobierno en cuanto al porte de armas y sus salvoconductos, lo cual nada tiene que ver con la noción de los derechos adquiridos (artículo 30 *ibidem*), tanto por lo dicho como por referirse a una facultad administrativa dispuesta por la ley.

Es pues exequible esta disposición, lo mismo que los artículos 7° y 8° que versan sobre la vigencia temporal del decreto en términos que en modo alguno pugnan con el orden constitucional, aunque sí conviene destacar, con relación al último de los mencionados preceptos, la inexplicable ligereza de haber dispuesto la derogatoria integralmente los Decretos número 1056 y 1058 de 1984, en cuanto incluía conductas delictivas, aspecto que nada tenía que ver con las modificaciones propias de los

artículos 1°, 2° y 3° del Decreto en estudio y que, de haberse mantenido la competencia penal militar, habría creado no pocas dudas, confusiones y controversias.

VI. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarar inexequibles los artículos 4° y 5° del Decreto legislativo número 3664 de 1986.

Declarar exequibles los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7° y 8° del mismo Decreto legislativo.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel,* con salvamento de voto, *Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo,* con salvamento de voto, *Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Moron Díaz, Alberto Ospina Botero,* con salvamento de voto, *Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra,* con salvamento de voto, *Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, deja constancia: que el Magistrado José Alejandro Bonivento Fernández, no asistió a la Sala Plena celebrada el día doce de marzo de mil novecientos ochenta y siete, por encontrarse con excusa justificada.

Inés Galvis Benavides
Secretaria

Salvamento de voto

Como no comparto la decisión adoptada por la Corte, en cuanto declaro inexequibles los artículos 4° y 5° del Decreto número 3664 de 1986, consigno brevemente los motivos de mi disentimiento.

1. He considerado, con fundamento en el artículo 61 de la Constitución, que en tiempos de perturbación del orden público, bien puede atribuírsele a la jurisdicción

penal militar el juzgamiento de ciertos delitos cometidos por civiles, cuando estas medidas sean aconsejables para el restablecimiento del orden público.

2. La doctrina constitucional de la Corte ha entendido que el artículo 61 de la Carta autoriza, para tiempos de no paz, como el que vive el país actualmente, extender y asignarle a la justicia penal militar el juzgamiento de delitos cometidos por civiles.

En efecto, dijo la Corte en sentencia de 30 de octubre de 1978:

"Precisamente, el Decreto número 1923 no ha hecho en este aspecto sino aplicar la excepción del artículo 61 que autoriza para tiempos anormales la acumulación y, por tanto, el traslado transitorio de competencias, y expresamente las de naturaleza jurisdiccional, en órganos distintos a los que las ejercen ordinariamente, lo cual legitima la adscripción a la justicia penal militar, y a las autoridades militares y de policía que aquel decreto determina, el conocimiento y sanción de ciertos delitos y contravenciones.

"El decreto en estudio no crea organismos *ad-hoc*, ni cambia el origen ni la composición de los existentes. Simplemente, faculta a ciertas autoridades el ejercicio simultáneo de las atribuciones que ordinariamente les compete, con las que les son adscritas transitoriamente, según la autorización constitucional del artículo 61".,

3. El criterio precedente, lo reiteró la Corporación en decisiones de 23 de mayo de 1980 y de 3 de julio de 1984.

4. Por ello, no concibo que los artículos 4° y 5° del Decreto número 3664 de 1986, dictado por el Gobierno en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, que le asignan a los Comandos de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea y al Tribunal Superior Militar el conocimiento de las infracciones señaladas en los artículos 1° y 2° del mismo decreto, entren en conflicto con la Constitución, pues se trata de medidas de excepción, que tienen apoyo constitucional en los artículos 61 y 121.

Fecha ut supra.

Alberto Ospina Botero

Como compartimos el anterior salvamento de voto nos adherimos a él.

Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Jaime Giraldo Angel.

EL LEGISLADOR, PARA ERIGIR EN DELITO UNA CONDUCTA, ESTA OBLIGADO A DEFINIR, A PRECISAR SUS CONTORNOS Y A DETERMINAR *EL HECHO* EN FORMA QUE NO DEJE LUGAR A DUDAS SOBRE CUANDO SE DELINQUE Y CUANDO NO, Y LA CONSECUENCIA PUNITIVA CORRESPONDIENTE. PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD. CONTAMINACION AMBIENTAL. CODIGO PENAL. NORMA PENAL EN BLANCO.

Exequible el artículo 247 del Decreto número 100 de 1980.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 27.

Referencia: Expediente número 1528.

Norma acusada: artículo 247 del Decreto número 100 de 1980 (Código Penal). Contaminación ambiental.

Actor: *William Fernando León Moncaleano.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobado por Acta número 10.

Bogotá, D.E., marzo doce (12) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

ANTECEDENTES

El ciudadano William Fernando León Moncaleano, haciendo uso del derecho conferido por el artículo 214 de la Constitución Política, ha presentado demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 247 del Código Penal (Decreto número 100 de 1980), cuyo texto es como sigue:

"Artículo 247. Contaminación ambiental. El que ilícitamente contamine el ambiente, incurrirá sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar y siempre que el hecho no constituya otro delito, en prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de cincuenta mil a dos millones de pesos".

La demanda

El actor sostiene primordialmente:

"(...) la norma violada es el artículo 23 y 26 de la Constitución Nacional ya que el ejecutivo al tipificar el delito de contaminación ambiental incurrió en una imprecisión y vaguedad respecto a su verbo rector pues habló el artículo 247 de contaminar y precisamente como lo anotara el proceso (sic) Antonio J. Cancino, 'contaminar es todo y es nada', ya que contamina quien enciende un cigarrillo o quien enciende su chimenea, existe entonces una imprecisión de tipicidad o mejor se violó el principio de la legalidad y por ende los artículos 23 y 26 de la Constitución que establecen que para que la persona sea juzgada y detenida debe serlo por los motivos precisos previamente fijados en la ley. Por consiguiente al existir imprecisión en el tipo, ya que el mismo autor citado sostiene, en criterios que comparto que la expresión que ha debido utilizarse es: 'El que deteriore el ambiente', existe una inconstitucionalidad por imprecisión de la tipicidad y no se puede sostener que la norma demandada es una norma incompleta, pues tiene su verbo rector y su sanción, más parecería una norma o tipo penal en blanco, pues su aplicación dependería de otras normas o de la violación de otras normas de carácter no penal como lo serían el artículo 8º de la Ley 23 de 1973, o sea del Código de Recursos Naturales que determina en forma genérica que la contaminación es la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía. Pero volvemos a quedar en la misma situación pues se contamina encendiendo una hoguera para cocinar o un cigarro y por lo tanto por imprecisión del verbo rector o violación de la legalidad solicito a los señores magistrados la declaratoria de inexequibilidad, pues se violó el artículo 23 de la Constitución Nacional".

Concepto del Procurador General de la Nación

Mediante oficio número 1096 del 10 de noviembre de 1986, el señor Procurador General de la Nación emitió concepto a través del cual solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada por las siguientes razones:

"Los artículos 23, 26 y 28 de la Constitución Nacional, consagran el principio de la estricta legalidad, fundamento del Estado de Derecho, que en materia penal, responde al aforismo '*nullum crimen sine lege*'. Los citados cánones superiores, prohíben de manera clara y expresa la indeterminación del hecho punible, puesto que, como dijo la Corte en sentencia del 10 de febrero de 1983, 'exigen al legislador la certidumbre o certeza del derecho punitivo, o la legalidad expresa y estricta, inequívoca, clara, impersonal y preexistente'.

"Sin embargo, esa precisión que exige la Corte, no implica que la norma penal deba agotar necesariamente todos los términos de la definición, ya que las reglas de interpretación establecen que cuando las palabras de la ley hayan sido definidas expresamente para ciertas materias 'se les dará en éstas su significado legal' (artículo 28 C.C.).

"En efecto, el Código Penal, constantemente utiliza término cuya significación depende de otras ciencias o diferentes leyes, sin que por tal motivo pueda considerarse que la descripción del tipo penal sea vaga o incompleta, porque el principio de

legalidad no se infringe con la remisión a disposiciones de otro orden legal, siempre que éstas sean precisas.

"……

"Habida cuenta que 'la expresión contaminación ambiental tiene una definición técnico legal, claramente elaborada en el Código de Recursos Naturales', la comisión aprobó por unanimidad el nuevo texto que suprimió la frase en la cual se tipificaba como elemento del delito el 'grave perjuicio para las personas, los animales y los recursos naturales'.

"Ahora bien, si se analiza la definición dada por el artículo 8°, transcrita se advierte, en primer lugar, que la contaminación ambiental es un factor de deterioro del ambiente o sea que no es exactamente un tipo de acción (u omisión), sino una causa que junto con otras lo produce. Entonces, la contaminación así definida es 'la alteración del ambiente' que sea factor de deterioro. Luego la contaminación depende de la valoración de los resultados, para la cual el juez debe acudir a conocimientos ajenos a las ciencias jurídicas.

"Por otra parte, no toda la definición encaja dentro de la tipicidad penal, pues según ella, la contaminación puede ser producida por 'actividad humana' o de la naturaleza, por lo que no siempre se deslinda claramente la responsabilidad del hombre y de las fuerzas naturales.

"Finalmente, el mismo artículo introduce otros elementos como 'en cantidades o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente...', que dejan a la discrecionalidad del fallador la definición de la conducta incriminada.

"Además de las imprecisiones relativas al significado de contaminación ambiental, el artículo acusado introduce un nuevo concepto vago con la palabra 'ilícitamente', ya que ello presupone la existencia de otras disposiciones que permiten, autorizan o prohíben, de modo que la punibilidad penal depende de disposiciones administrativas, tales como las que expide la Comisión Conjunta para Asuntos Ambientales, creada por el Decreto número 1415 de 1978, a la cual corresponde precisamente 'definir, cuando se trata de actividades susceptibles de producir efectos deteriorantes tanto para la salud humana como para los recursos naturales renovables, requisitos y parámetros generales', relacionados con las declaraciones y estudios que deben presentar las personas, cuyas actividades puede constituir peligro de producir deterioro ambiental" (artículos 27 y 28 del Decreto número 2811 de 1974).

Consideraciones de la Corte

Teniendo en cuenta que el Decreto número 100 de 1980 fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 5ª de 1979, la Corte Suprema de Justicia es el Tribunal competente para fallar acerca de su constitucionalidad.

El principio de la legalidad

Según lo dispone el artículo 28 de la Constitución Política, que consagra una preciosa garantía inherente al concepto mismo de Estado de Derecho, en Colombia nadie puede ser penado *ex pos facto,* sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinándose la pena o sanción a él correspondiente.

Esto implica un límite fundamental para quien tiene la potestad de imponer las sanciones en casos concretos (el Juez), en cuanto no le es dado castigar por motivos no determinados por el legislador ni señalar penas diferentes a las contempladas en la norma como correspondiente a la conducta legalmente prevista.

Pero el mandato constitucional también cobija al propio legislador, en cuanto que para erigir en delito una conducta, está obligado a definir, a precisar sus contornos, y o, como lo dice el precepto constitucional citado, a *determinar el hecho* en forma que no deje lugar a dudas sobre cuándo se delinque y cuándo no, y la consecuencia punitiva correspondiente. En eso consiste el principio de la legalidad, básica garantía, constitucional que sustenta los principios y normas del Código Penal.

El propósito de la tutela así prevista por la Carta es el de garantizar un verdadero derecho, además fundamental, que asiste al destinatario de la norma, y que radica en conocer con entera certidumbre y en todos sus detalles cuáles son las conductas que la ley señala como delictivas, así como las penas que su incursión en ellas puede acarrearle.

La demanda que se estudia impugna la norma de inconstitucionalidad por dos razones: por considerar que ella no reúne los requisitos exigidos para que sea típica, y porque en su redacción se violan los principios de la técnica legislativa.

En cuanto al primer punto, es necesario distinguir entre legalidad y tipicidad. La legalidad hace relación a la exigencia constitucional de que nadie puede ser juzgado por un delito que no esté previamente definido como tal por la ley penal. La tipicidad, por su parte, es un concepto doctrinario de una escuela de derecho, la dogmática jurídica, según la cual la legalidad debe concretarse en la totalidad de los elementos que constituyen el tipo delictivo.

Como ya lo dijo la Corte, en sentencia anterior, la interpretación de las normas constitucionales no puede hacerse en función de las concepciones teóricas de una determinada escuela jurídica, máxime cuando ellas no han tenido siquiera la suficiente sedimentación doctrinal y se hallan en permanente contradicción interna. Así, dijo la Corte en sentencia de su Sala Plena:

"1. La Corte reitera que la Constitución no sigue ni exige escuela alguna del derecho penal. El legislador puede trazar autónomamente los derroteros doctrinarios del incriminativo, con las únicas condiciones limitantes de que sean compatibles con las normas de aquélla, o sea, de que estén acordes con lo que ella mande o permita y no consagren lo que ella prohíba (sentencia de 2 de junio de 1981).

"De consiguiente, cuando el legislador proscriba principios de una doctrina del derecho penal o cuando instituya otros, sin contradecir las prescripciones de la Carta, ha de entenderse que dichas facultades le están permitidas y que sólo cuando atenten contra aquéllas son inconstitucionales. Así las cosas, el ámbito de regulación punitiva del legislador es amplio y diverso, pero no arbitrario" (Proceso número 989, Magistrado ponente: doctor Manuel Gaona Cruz).

Por eso, en este sentido, para algunos de los partidarios de la teoría de la tipicidad, sólo son elementos del tipo los puramente objetivos; para otros, la tipicidad incluye la antijuridicidad, y se habla más específicamente del delito como "una conducta típicamente antijurídica", y para otros, la culpabilidad está incluida dentro de la tipicidad. Si se aceptara el planteamiento del recurrente de que la legalidad debe definirse en términos de tipicidad, muchas de las normas del Código Penal devendrían inconstitucionales, según el enfoque teórico que se adoptara.

Por otra parte, se considera que la conducta a que hace referencia la norma acusada no es clara en su estructuración porque se define por su resultado, contaminar, y no por los comportamientos concretos que producen la contaminación. Este reparo desconoce los desarrollos actuales de la técnica legislativa, que define los delitos precisamente por sus resultados, y no por los comportamientos concretos que puedan dar lugar a ellos, pues éstos son absolutamente imprevisibles. Así, cuando en el Código Penal derogado se definía la falsedad por los distintos comportamientos (quien contrahaga o finja letra, firma o rúbrica, etc.), en el Código actual sólo se habla de falsificar documentos públicos o privados.

Por último, se censura la norma por incluir en su contexto un elemento normativo, ilícitamente, el cual la hace, en opinión del censor, completamente vaga. En primer lugar, en un gran número de normas penales de nuestro ordenamiento jurídico se incluye este elemento normativo. Tal ocurre, por ejemplo, en la mayoría de los delitos contra los recursos naturales (ilícito aprovechamiento de recursos naturales, ocupación ilícita de parques y zonas de reserva forestal, etc.), en el delito de estafa (aprovechamiento ilícito), y en muchos otros casos.

Por otra parte, esta referencia a elementos normativos contenidos en otras normas constituye el fenómeno jurídico de la norma penal en blanco, que en ocasiones puede dar lugar a dificultades en su aplicación, pero que en este caso no genera reproche de inconstitucionalidad.

En este sentido, el Decreto-ley número 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, proferido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 23 de 1973, define la contaminación en su artículo 8°, así:

"Artículo 8° Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:

"a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud

de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares.

"Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica;

"b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;

"c) Las alteraciones nocivas de la topografía;

"d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;

"e) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;

"f) Los cambios nocivos del lecho de las aguas;

"g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos genéticos;

"h) La introducción o propagación de enfermedades y de plagas;

"i) La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de sustancias peligrosas;

"j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;

"k) La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria;

"l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios;

"m) El ruido nocivo;

"n) El uso inadecuado de sustancias peligrosas;

"o) La eutrificación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas;

"p) La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud".

Se trata de una normatividad, que si bien no es conocida como debiera serlo, constituye una auténtica defensa de la calidad de la vida humana, hacia la cual evoluciona progresivamente, el Derecho Público. El Estado tiene indudablemente el deber de incorporar a su acción efectiva la defensa del medio ambiente, deber que puede incluirse aún en su clásica función de protección de la vida de los residentes en Colombia, que consagra el artículo 16 de la Carta.

La descripción legal de la conducta punible en la norma acusada, es decir "el que ilícitamente contamine el ambiente" resulta clara e inequívoca al tenor de la definición del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Los destinatarios de la norma, los contaminadores potenciales, pueden

tener seguridad y certeza de cuál es concretamente la conducta que merece el reproche legal.

Por las anteriores razones, no observa la Corte en la norma acusada violación alguna a los artículos 23 y 26, ni de ninguna otra norma de la Constitución Nacional, y así habrá de declararlo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y después de conocido el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE el artículo 247 del Decreto número 100 de 1980 (Código Penal), que dice:

"Contaminación ambiental. El que ilícitamente contamine el ambiente, incurrirá sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar y siempre que el hecho no constituya otro delito, en prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de cincuenta mil a dos millones de pesos".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Saénz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

LA POTESTAD REGLAMENTARIA, QUE ES EL MEDIO JURIDICO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION NACIONAL, PARA DARLE DESARROLLO, SENTIDO Y ALCANCE A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE POR SI MISMAS NO LOGREN REGULAR EFICIENTEMENTE UNA MATERIA, SE HA RADICADO POR PRINCIPIO, EN CABEZA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, COMO SUPREMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, PODRAN REGLAMENTAR DE ACUERDO CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EXCEPCION CONCEDIDA SOLO A ELLAS. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Inexequible en parte el artículo 45 de la Ley 11 de 1986 y parte del artículo 296 del Decreto número 1333 de 1986. Exequible las demás partes demandadas.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 28.

Referencia: Expediente número 1531.

Normas acusadas. Artículo 45 parte final de la Ley 11 de 1986; y, artículo 296 parte final del Decreto-ley número 1333 de 1986.

Demandante: *Luis H. Ban-Strahlen.*

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobado por Acta numero 10.

Bogotá, D. E., marzo doce (12) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución Política, el ciudadano Luis Hernando Van-Strahlen Pedraza, presentó demanda de inexequibilidad contra el artículo 45 parcialmente, de la Ley 11 de 1986 y contra el artículo 296 del Decreto-ley número 1333 de 1986. Admitida la demanda se corrió traslado de ella al Procurador General de la Nación, quien ha emitido el concepto de rigor, por lo cual la Corte se ocupará en decidir sobre la acusación planteada.

I. Texto de las normas acusadas

El artículo 45 de la Ley 11 dice lo siguiente y es demandado en la parte que se subraya:

"Artículo 45. La administración de personal por las autoridades a que se refiere el artículo anterior, se hará con sujeción a los principios y normas que consagren la ley *y las disposiciones que en desarrollo de éstas dicten las autoridades locales sobre vinculación al servicio público, requisitos para el desempeño de determinados empleos, permanencia en el cargo, régimen disciplinario, ascensos por mérito y antigüedad y retiro o despido por causas legales*".

El artículo 296 del Decreto-ley número 1333 de 1986 dice lo siguiente y es demandado en la parte que se subraya:

"Artículo 296. La administración de personal por las autoridades municipales se hará con sujeción a los principios y normas que consagren la ley *y las disposiciones que en desarrollo de éstas dicten las autoridades locales sobre vinculación al servicio público, requisitos para el desempeño de determinados empleos, permanencia en el cargo, régimen disciplinario, ascensos por méritos y antigüedad, y retiro o despidos por causas legales*".

II. Concepto de la violación

El actor considera que las disposiciones acusadas violan los artículos 62 y 120 ordinal 3° y el 5° de la Reforma Constitucional aprobada por el Plebiscito de 1° de diciembre de 1957.

Para sostener lo anterior el actor acude a los argumentos que a continuación se destacan:

1° "La Constitución otorga al Presidente de la República como Jefe del Estado Colombiano y Suprema Autoridad Administrativa de toda la Nación, la facultad de adoptar medidas generales denominadas reglamentarias (artículo 120-3 Constitución Nacional) ... La ley debe tener idéntica aplicación en todas y cada una de las entidades" "y por lo mismo no puede ser reglamentada por las autoridades municipales pues ello implicaría en principio, disímiles y aun incongruentes reglamentaciones legales".

2° "El artículo 45 de la Ley 11 de 1986 así como el 296 del Decreto número 1333 de este mismo año, atribuyen a las autoridades municipales (alcaldes y funcionarios en quien delegue la primera autoridad municipal) la Administración del personal del correspondiente municipio *con sujeción a las normas que consagre la ley,* lo que es correcto y conforme con el carácter de la ley; pero seguidamente expresa que tal administración debe igualmente ajustarse *a las disposiciones que en desarrollo de éstas dicten las autoridades locales.*

"Lo anterior significa que *las autoridades municipales pueden expedir normas reglamentarias de las leyes* que dispongan sobre vinculación al servicio público, requisitos para el desempeño de determinados empleos, etc., facultad ésta que conforme al mencionado artículo 120-3 de la Constitución Política corresponde al Presidente de la República.

La ley no puede modificar la competencia atribuida a las autoridades de la República por la Constitución, como lo pretende la Ley 11 mencionada al trasladar por virtud de la parte final de su artículo 45, la potestad reglamentaria de leyes y concretamente de las relativas a la Carrera Administrativa en la órbita municipal a las autoridades locales, siendo que es atribución constitucional del Presidente de la República" (el subrayado es del actor).

De otra parte los decretos extraordinarios, "no pueden, de la misma manera, entrar a variar las reglas de competencia consagradas en la Constitución. El Presidente de la República dictó el Decreto Extraordinario número 1333 de 1986, en cuyo artículo 296 facultó de igual manera a las autoridades municipales para desarrollar las leyes relativas a Carrera Administrativa, reprodujo así en forma exacta los términos contemplados en el artículo 45 de la ley mencionada".

Por todo lo cual considera violado el artículo 120-3 de la Carta.

3° En torno a la violación de los artículos 62 de la Constitución y 5° del Plebiscito, el actor argumenta:

"Los temas referidos a las condiciones sobre 'vinculación al servicio público, requisitos para el desempeño de ciertos empleos, permanencia en el cargo, régimen disciplinario, ascensos por mérito y antigüedad y retiro o despido por causas legales' son de la esencia constitutiva de la organización de un servicio civil y de una Carrera Administrativa tal y exactamente como se previó e inspiró en el artículo 5° del Plebiscito Nacional, que sólo pueden establecerse por el Congreso de la República y en ninguna circunstancia ni de modo alguno por las autoridades municipales (respecto de los empleados de esta órbita) ni aún bajo el pretexto de dictar disposiciones en desarrollo de las leyes pertinentes, como lo dicen los artículos 45 de la Ley 11 de 1986 y 296 del Decreto número 1333 de 1986.

Sólo la ley puede disponer y ordenar sobre 'calidades y antecedentes para el desempeño de ciertos empleos', 'condiciones de ascenso', 'condiciones de acceso al servicio', 'de ascenso por mérito y antigüedad' 'y de jubilación retiro o despido', así como sobre *'régimen disciplinario' de los servidores públicos municipales, sin que le sea dable al Congreso Nacional delegar esta facultad en las autoridades municipales ni trasladar a las mismas la facultad reglamentaria de las leyes que traten sobre estas materias, constitucionalmente propia, como se sabe, del Presidente de la República.* Es decir que todos los aspectos referidos a la Carrera Administrativa y al Servicio Civil de los servidores públicos municipales, solo pueden establecerse por la ley".

De la manera expuesta considera el demandante que se han transgredido los artículos 62 de la Carta y 5° del Plebiscito de 1957.

III. Concepto del Viceprocurador

El colaborador fiscal ha solicitado a la Corte en su concepto la inexequibilidad de las normas acusadas con fundamento en lo que se destaca a continuación:

1° "De las disposiciones citadas se puede concluir que corresponde privativamente al Congreso como legislador ordinario, o al Presidente de la República, como

legislador extraordinario, la función de fijar las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos no previstos en la Constitución, como también señalar el régimen disciplinario a que deben sujetarse dichos empleados, establecer las causales de inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio de tales cargos, señalar las condiciones para ingresar al Servicio Público, etc.".

"En consecuencia, el artículo 45 de la Ley 11 de 1986 y el 296 del Decreto número 1333 del mismo año, materia de impugnación... contraria (sic) lo dispuesto en los artículos 62 y 76-10 de la Constitución, pues como se dejó anotado esta función está atribuida exclusivamente a la ley".

2° Sobre la alegada violación del artículo 120-3, el Viceprocurador considera:

"Ahora bien, respecto a la violación por parte de las normas acusadas del artículo 120-3 de la Constitución, cabe expresar que la potestad reglamentaria consignada en este canon, corresponde ejercerla al Presidente de la República, mediante la expedición de órdenes, decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecución de las leyes. Esta facultad la ejecuta el Presidente de la República junto con el Ministro del Ramo o Jefe de Departamento Administrativo, respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 *ibidem*.

".....

"Una cosa es el poder reglamentario que tiene el Presidente de la República, inherente a la facultad general y permanente y otra muy diferente, es la facultad que tienen ciertos funcionarios públicos de expedir actos administrativos al nivel de su competencia, entre los cuales se cuentan los reglamentos y resoluciones internos que se requieran para el funcionamiento de las dependencias a su cargo.

".....

"Pero en el caso en estudio no se puede entender que la facultad conferida a las autoridades locales del municipio sea la de la simple reglamentación interna pues está claro en los textos impugnados que se trata de una delegación de la potestad reglamentaria atribuida por el constituyente al Gobierno...".

Cabe anotar, que el texto del concepto fiscal, se halla documentado por conocida jurisprudencia de la Corte sobre el régimen de los funcionarios públicos; y, del Consejo de Estado, sobre la potestad reglamentaria.

IV. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

La Corte es competente para decidir sobre la acusación de inexequibilidad del artículo 45 de la Ley 11 de 1986, por estar contenido en una disposición expedida por el Congreso de la República como ley formal.

Y es igualmente competente para conocer de la acusación instaurada contra el artículo 296 del Decreto número 1333 del mismo año, por estar contenido en una disposición expedida por el Presidente en ejercicio de facultades extraordinarias.

2. *La temporalidad y materialidad del Decreto número 1333 de 1986*

La corte se refiere a la temporalidad y materialidad del Decreto número 1333 de 1986, por cuanto contiene una de las dos disposiciones demandadas.

Para ese efecto se estará a lo resuelto por sentencia de 13 de noviembre de 1986 en cuyo texto consideró la Corte, que el mencionado decreto-ley, no excedía los límites de materia y de tiempo.

3. *Estudio de la exequibilidad de las normas acusadas*

Por tratarse de dos textos idénticos, y habiendo sido revisada la materialidad y temporalidad del Decreto número 1333 que contiene el acusado artículo 296, la Corte hará a continuación un estudio conjunto de las normas que se demandan.

a) La potestad reglamentaria, que es el medio jurídico establecido en la Constitución Nacional, para darle desarrollo, sentido y alcance a las disposiciones legales que por sí mismas no logren regular eficientemente una materia, se ha radicado por principio, en cabeza del Presidente de la República, como Suprema Autoridad Administrativa.

Esto significa, que por regla general, una autoridad distinta del Presidente de la República no puede expedir "órdenes, resoluciones y decretos", cuando éstos sean necesarios "para la cumplida ejecución de las leyes", pues, como lo entendió la Corte en sentencia de mayo 14 de 1980, la potestad reglamentaria "... de los funcionarios subalternos tiende a la organización interna de sus oficinas para las buenas relaciones de los empleados entre sí y con el público en general. Es, si se quiere una reglamentación de mero detalle".

Pero esa "reglamentación del servicio" –como lo denominan los juspublicistas– para la cual están habilitadas las demás autoridades administrativas, no puede afectar el sentido o alcance de la ley, pues la buena marcha de la función administrativa del Estado y máxime en un sistema de Gobierno Presidencialista, como el nuestro, exige entre otras condiciones, la unidad de criterio en el ejercicio de su actividad y en el cumplimiento de sus fines. De ahí surge la necesidad de hacer exclusiva para la Suprema Autoridad Administrativa del Estado la facultad de reglamentar la ley. Sin embargo, el propio constituyente, como aplicación del principio cardinal de la "descentralización administrativa", y en desarrollo de la moderada tendencia hacia la autonomía local, ha establecido una clara excepción a la facultad consagrada en el artículo 120-3 de la Carta, al otorgar a las Asambleas Departamentales y sólo a ellas, la potestad de "reglamentar de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales, la prestación de los servicios a cargo del departamento", sin que la misma pueda extenderse a otras materias.

b) Los Concejos Municipales, por su parte según el artículo 197 ordinal 3° de la Constitución Nacional, pueden determinar por atribución constitucional propia la "Estructura de la Administración Municipal, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos", quedando en todos los demás aspectos concernientes al ejercicio de los cargos públicos, sometidos a las disposiciones que en desarrollo de los artículos 62 y 76-10 de la Carta, establezca la ley, y a la reglamentación que de las misma realice el

Presidente de la República, ya que a diferencia de las Asambleas, el constituyente no les otorgó a los Concejos Municipales, potestad reglamentaria de la ley, sobre materia alguna.

En consecuencia, cuando los artículos 45 de la Ley 11 de 1986, y 296 del Decreto-ley número 1333 del mismo año, conceden a las autoridades locales la posibilidad de desarrollar la ley para la administración de personal y para otros aspectos relacionados con el ejercicio de la función pública, ha desconocido el artículo 120 ordinal 3° de la Constitución Nacional, salvo en lo relativo a la determinación de requisitos para el desempeño de determinados empleos, atribución que cabe desde luego dentro de la de determinar las funciones de las diferentes dependencias según prevé para los Concejos Municipales, el artículo 197 ordinal 3° de la Constitución Nacional. En virtud de lo cual, esta parte se declarará exequible.

V. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

1. Declarar inexequible, la parte del artículo 45 de la Ley 11 de 1986, que dice:

"... y las disposiciones que en desarrollo de éstas dicten las autoridades locales sobre vinculación al servicio público..., permanencia en el cargo, régimen disciplinario, ascensos por mérito y antigüedad y retiro o despido por causas legales".

2. Declarar exequible, la parte de la misma disposición que dice:

"... requisitos para el desempeño de determinados empleos, ...".

3. Declarar inexequible, la parte del artículo 296 del Decreto-ley número 1333 del mismo año, que dice:

"... y las disposiciones que en desarrollo de éstas dicten las autoridades locales sobre vinculación al servicio público..., permanencia en el cargo, régimen disciplinario, ascensos por mérito y antigüedad y retiro o despido por causas legales".

4. Declarar exequible, la parte de la misma disposición que dice:

"... requisitos para el desempeño de determinados empleos, ...".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Saénz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón*

Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

ALTERACIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE O DE SUS TARIFAS, SANCIONES. LA CONSTITUCION NACIONAL RECONOCE LA LIBERTAD DE EMPRESA Y LA INICIATIVA PRIVADA DENTRO DE LOS LIMITES DEL BIEN COMUN AUNQUE LA DIRECCION GENERAL DE LA ECONOMIA ESTA A CARGO DEL ESTADO. POR MANDATO DE LA LEY SE INTERVENDRA SOBRE UNA Y OTRA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS. COSA JUZGADA.

En cuanto al Decreto número 2624 de 1983, remite a lo resuelto dentro de la radicación número 2624 de 1983. Exequible los Decretos números 2440 y 2454 de 1986.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 29.

Referencia: Expediente número 1535.

Normas acusadas: Decretos números 2624 de 1983, 2440 de 1986 y 2454 de 1986.

Actor: *Orlando Ramírez Gamboa.*

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobado por Acta número 10.

Bogotá, D. E., marzo doce (12) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 214 de la Constitución Política, el ciudadano Orlando Ramírez Gamboa, presentó demanda de inexequibilidad contra el texto total de los Decretos-ley números 2624 de 1983, 2440 y 2454 de 1986. Admitida la demanda se corrió traslado al Procurador General de la Nación quien ha emitido el concepto de rigor, por lo cual la Corte se ocupará del fallo que corresponda.

I. Texto de las normas acusadas

El texto del Decreto número 2624 de 1983, es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 2624 DE 1983
(septiembre 15)

"Por el cual se toman unas medidas en materia de servicio público de transporte y se deroga el Decreto número 1459 de 1974.

"El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere la Ley 15 de 1959,

D E C R E T A:

"Artículo 1° Las alteraciones en la prestación del servicio público de transporte o de sus tarifas, serán sancionadas con arreglo al presente decreto, por el Instituto Nacional del Transporte, o por la entidad en la cual se deleguen estas funciones.

"Artículo 2° Modificado por el artículo 1° del Decreto número 2440 de 1986.

"Artículo 3° La reincidencia en la transgresión de que trata el artículo anterior, en un período de dos años, se sancionará con la cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento de la empresa respectiva.

"Artículo 4° Los propietarios de automotores de servicio público que alteren o permitan la alteración en la prestación del servicio público de transporte colectivo en buses, busetas, microbuses o automóviles o modifiquen de cualquier manera sus tarifas, serán sancionados con multa equivalente al valor de dos a cinco salarios mínimos mensuales vigentes en Bogotá.

"Artículo 5° La reincidencia en la transgresión de que trata el artículo anterior, en un período de dos años, se sancionará con multa equivalente al valor de cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes en Bogotá.

"Artículo 6° Cuando el Instituto Nacional del Transporte tenga conocimiento de que las agremiaciones de transportadores han propiciado alteraciones en la prestación del servicio público o en las tarifas establecidas, pondrá dicha circunstancia en conocimiento del Ministerio de Justicia a fin de que se proceda a cancelar su personería jurídica previos los trámites legales.

"Artículo 7° Para sancionar las infracciones de que trata este Decreto, el Instituto Nacional del Transporte, se fundamentará en el informe oficial, escrito por cualquier autoridad de tránsito o de policía que tenga conocimiento de la transgresión.

"Artículo 8° Modificado por el artículo 2° del Decreto número 2440 de 1986.

"Artículo 9° Los recursos que proceden contra las providencias dictadas en desarrollo de este Decreto, solo serán concedidos previa cancelación de la multa y cuando mediante certificación de autoridad competente, se compruebe que la alteración del servicio público de transporte o de sus tarifas ha cesado.

"Artículo 10. En caso de cancelación de la licencia de funcionamiento, las rutas que servía la empresa sancionada se redistribuirán directamente por el Instituto Nacional del Transporte o la entidad competente, sin necesidad de hacer publicaciones y los vehículos se vincularán a las empresas adjudicatarias.

"Artículo 11. Para los efectos legales pertinentes, de las providencias que impongan como sanción la cancelación de la licencia de funcionamiento, se enviará copia a las autoridades de tránsito, Superintendencia de Sociedades o Departamento Nacional de Cooperativas, según el caso.

"Artículo 12. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y en especial el Decreto número 1459 de 1974.

"Publíquese y cúmplase".

El texto del Decreto-ley número 2440 de 1986, es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 2440 De 1986
(julio 30)
"Por el cual se modifica el Decreto número 2624 de 1983.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 15 de 1959,

D E C R E T A:

"Artículo 1° El artículo segundo del Decreto número 2624 de 1983, quedará así:

"'Artículo 2° Las empresas que alteren o permitan la alteración en la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en buses, busetas, microbuses o automóviles o modifiquen de cualquier manera sus tarifas, serán sancionadas con multa equivalente al valor de diez (10) hasta trescientos salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Bogotá'.

"Artículo 2° El artículo 8° del Decreto número 2624 de 1983, quedará así:

"Artículo 8° Una vez recibido el informe oficial, el Instituto Nacional del Transpoirte solicitará mediante providencia no recurrible los descargos correspondientes, los cuales deberán ser presentados por escrito dentro de las ocho (8) horas siguientes contadas a partir de la notificación personal de dicha providencia.

"'Parágrafo. La citación para efectos de la notificación personal de los cargos, se efectuará mediante comunicación telegráfica dirigida a la sede de la empresa. Si transcurridas dieciocho (18) horas, no se ha efectuado la notificación personal, se procederá a notificarla por edicto que se fijará por dos (2) días en la Secretaría correspondiente del INTRA, transcurrido dicho término se entenderá surtida la notificación'.

"Artículo 3° Cuando a juicio del Instituto Nacional del Transporte el servicio público pueda sufrir perjuicios con la cancelación de la licencia de funcionamiento, se pondrá el hecho en conocimiento del Alcalde de la respectiva ciudad quien impondrá al Representante Legal de la empresa una multa de trescientos (300) salarios mínimos mensuales convertibles en arresto a razón de un día por cada

quinientos pesos ($500.00), cuando no sea cancelada dentro del mes siguiente a su imposición, sin que en ningún caso el arresto pueda exceder de seis (6) meses.

"Igual concesión se podrá hacer cuando sin justa causa las multas aludidas en el Decreto número 2624 de 1983 no sean cancealadas dentro del mismo término.

"Artículo 4° Esde decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

"Publíquese, comuníquese y cúmplase".

El texto del Decreto-ley número 2454 de 1986, es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 2454 DE 1986
(julio 31)

"*Por el cual se dictan normas sobre el servicio público de transporte terrestre urbano y metropolitano de pasajeros.*

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 15 de 1959.

D E C R E T A:

"Artículo 1° Serán sancionadas con multas equivalentes a tres (3) salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Bogotá, las empresas de transporte urbano y metropolitano que incurran en las siguientes infracciones:

"a) No entregar al Instituto Nacional del Transporte los datos que según las normas vigentes deba suministrar con fines de información o de estudio;

"b) No portar en los vehículos el extintor de incendios, botiquín de primeros auxilios o equipo de carretera.

"Artículo 2° Serán sancionadas con multas entre tres (3) y seis (6) salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Bogotá, las empresas de transporte urbano y metropolitano que incurran en las siguientes infracciones:

"a) Permitir la circulación de vehículos de la empresa sin sus colores distintivos o sin portar la razón social en aviso visible;

"b) Permitir la operación de vehículos sin las necesarias condiciones de seguridad;

"c) Utilizar vehículos de otra empresa sin el previo cumplimiento de los requisitos legales;

"d) Carecer de un sistema de mantenimiento para sus vehículos o no facilitar los medios para hacerlo a los propietarios de los vehículos vinculados a la empresa;

"e) Retener o no tramitar oportunamente las tarjetas de operación de los vehículos vinculados a la empresa;

"f) Permitir la operación de vehículos sin tarjeta de operación;

"g) Alterar los horarios autorizados;

"h) Operar sin diligenciar la correspondiente planilla de despacho;

"i) Operar sin el seguro de responsabilidad expedido conforme a las disposiciones sobre la materia;

"j) Prestar el servicio de transporte de pasajeros en buses o busetas que no tengan puerta de seguridad o salida de emergencia;

"k) Prestar el servicio de transporte de pasajeros en buses que no tengan trasera.

"Artículo 3° Serán sancionadas con multas entre tres (3) y cincuenta y cinco (55) salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Bogotá, las empresas de transporte urbano y metropolitano que incurran en las siguientes faltas:

"a) Prestar el servicio de transporte en zonas de operación o rutas no autorizadas;

"b) Aumentar o disminuir las tarifas autorizadas por autoridad competente;

"c) Permitir a personas no idóneas, embriagadas o bajo el efecto de drogas, la conducción de vehículos que prestan el servicio público de transporte;

"d) Permitir el transporte de pasajeros ubicándolos entre la registradora y la puerta delantera de los vehículos;

"e) Transportar pasajeros excediendo la capacidad de los vehículos determinada por el Intra para el servicio especial, de lujo o para los taxis;

"f) Alterar la capacidad transportadora determinada y autorizada por el Intra;

"g) Utilizar conductores asalariados no contratados directamente por la empresa;

"h) Fijar a los conductores jornadas de trabajo superiores a las legalmente autorizadas;

"i) Abstenerse de utilizar las terminales de transporte, debiendo hacerlo;

"j) Suspender parcialmente el servicio.

"Artículo 4° El abandono total e injustificado del servicio dará lugar a la cancelación del permiso o a la caducidad de la concesión según el caso.

"Artículo 5° Habría lugar a duplicar la sanción correspondiente cuando la empresa incurra en la misma infracción dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga.

"Artículo 6° Las sanciones a que se refiere este decreto se impondrán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, los antecedentes de la empresa y las implicaciones del hecho en la prestación del servicio público de transporte.

"Artículo 7° Cuando se tenga conocimiendo de la posible comisión de una infracción de las sancionables por este decreto, la autoridad competente abrirá la investigación mediante resolución motivada contra la cual no procede recurso alguno. Los hechos constitutivos de la infracción podrán demostrarse por cualquier medio de prueba.

"Artículo 8° Cuando en el desarrollo de la investigación se establezca que una empresa de transporte pudo incurrir en una infracción, el funcionario competente dictará una resolución motivada que deberá contener como mínimo:

"– Relación de los hechos objeto de la investigación.

"– Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de tales hechos.

"– Cita de las disposiciones presuntamente infringidas con los hechos investigados.

"– Términos dentro del cual la empresa debe presentar por escrito sus explicaciones y justificaciones, así como la solicitud de pruebas. Dicho término será de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de su notificación.

"Artículo 9° La notificación de la resolución a que se refiere el artículo anterior se hará de acuerdo con lo indicado en el Código Contencioso Administrativo.

"Artículo 10. Presentado el escrito de explicaciones por la empresa, el Intra tendrá treinta (30) días calendario para decidir mediante resolución motivada contra la cual proceden los recursos legales. En el evento de que se deban practicar pruebas, dicho término podrá ampliarse hasta en quince (15) días calendario. Al procedimiento subsiguiente se aplicarán las normas del Código Contencioso Administrativo.

"Artículo 11. Los recursos contra una resolución que imponga sanción de multa solo serán concedidos previo depósito de su valor en la tesorería del INTRA.

"Artículo 12. Las alteraciones en la prestación del servicio público de transporte o en las tarifas autorizadas que pongan en grave peligro el orden público serán sancionadas de acuerdo con lo establecido por el Decreto número 2624 de 1983.

"Artículo 13. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

"Comuníquese y cúmplase".

II. Concepto de la violación

El actor considera que se han violado los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución y lo sustenta así:

a) El Presidente excedió las facultades que le fueron conferidas por medio de la Ley 15 de 1959, y como estima que todos sus argumentos son predicables frente a cada decreto en particular, considera innecesario expresarlo en referencia a cada uno de ellos. El gobierno se ha desviado de los fines señalados por la Ley 15 de 1959 al crear "regímenes disciplinarios especiales para la industria del transporte, mediante la expedición de normas que contemplan desde la imposición de sanciones de orden pecuniario, pasando por la reducción de los medios de defensa garantizados a la generalidad de los ciudadanos y por la consagración de un inaceptable *'dolus in re ipsa'* predicable en relación con personas naturales facultadas para representar legalmente a las empresas transportadoras, hasta llegar incluso a la previsión de sanciones que comportan la pérdida de la libertad".

b) Dice el demandante que como las facultades otorgadas deben ser claras, inequívocas, concisas, "ellas son la evidencia de que la implantación de un régimen

disciplinario con procedimientos especiales... no puede encontrar jamás legitimación normativa en dicha ley, la cual... sí se ocupó, por ejemplo, de aspectos tan concretos como la importación de repuestos y la regulación del precio de su venta al público, y nada dijo en cambio sobre autorización alguna para establecer un régimen disciplinario .

III. Concepto del Procurador

Solicita el Procurador que la Corte declare la inexequibilidad de los decretos acusados, para lo cual reitera el concepto rendido dentro de la radicación 1515, del cual estos son sus apartes principales:

"No son válidas las autorizaciones indefinidas sobre materias de competencia exclusivamente legal. De la lectura de las disposiciones contenidas en el decreto citado, salta a la vista que éste contiene normas del poder de policía que se encuentra en cabeza del legislador, siendo de jerarquía y naturaleza legal, más no simplemente administrativa, las cuales únicamente pueden ser otorgadas al ejecutivo a través de una ley de facultades extraordinarias en la que se señale, en forma precisa y con carácter temporal, la materia sobre la cual puede legislar el Gobierno, conforme al artículo 76-12 constitucional.

"Cuando el Ejecutivo expidió el decreto atacado con base en unas autorizaciones intemporales y no actuando como legislador extraordinario, resulta claro que ejerció funciones que son de exclusiva reserva legal.

"Y en relación con el ordinal 11 del artículo 76, siguiendo fallos de la Corte, cuando el precepto permite al Congreso conceder autorizaciones al Gobierno para los efectos en él indicados, se refiere, de manera exclusiva, a funciones de carácter administrativo, de aquellas que, naturalmente entran en la esfera propia del Gobierno, pero respecto a las cuales la Constitución prescribe cierta participación del legislador. Esa órbita constitucional es en materia administrativa o mecánica de ejercicio, pero no de naturaleza legislativa".

Los decretos acusados contienen conductas punibles y el procedimiento para su aplicación, y respecto de las empresas de transporte urbano y metropolitano, valen las mismas argumentaciones acabadas de transcribir, dice el Fiscal, para solicitar la inexequibilidad, teniendo en cuenta que hubo exceso en el uso de las atribuciones conferidas por la Ley 15 de 1959.

IV. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Los decretos acusados fueron expedidos por el Presidente de la República con invocación de las facultades conferidas por la Ley 15 de 1959, la cual es un mandato legislativo de los previstos en el artículo 32 de la Constitución.

Ha dicho la Corte que tales normas encajan dentro del concepto de autorizaciones legislativas al Gobierno para ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional, según el numeral 11 del artículo 76, que tienen fuerza de ley y que a la Corte compete decidir sobre la acusación de inexequibilidad.

2. *Cosa juzgada*

Bajo la radicación 1515 esta Corporación estudió la acusación de inexequibilidad de la totalidad del Decreto número 2624 de 1983, la cual no prosperó y sostuvo:

"No es dable pensar que las autorizaciones legislativas hubieran de excluir el momento final y más importante en lo relacionado con el servicio de transporte a la comunidad, cual es el de su verdadera y eficaz prestación... si a última hora la voluntad de los empresarios del transporte impidiera a los usuarios recibir el beneficio que para ellos ha buscado la actuación estatal", por lo cual el Gobierno dice el fallo, "no solamente estaba habilitado para dictar normas en el puro terreno económico, sino todas aquellas indispensables para garantizar la correcta y permanente prestación del servicio, entre otras, desde luego, las consistentes en la determinación de infracciones sobre la materia y en el establecimiento de sanciones para los responsables".

Para el momento de esta demanda ya había sido proferido el Decreto número 2440 de 1986 modificatorio de los artículos 2° y 8° del Decreto número 2624 de 1983, con el cual se adoptaron otras medidas pero frente a ellos en particular no existe pronunciamiento de la Corte, por lo cual se estudiarán ahora.

Al decidir sobre la acusación de la radicación 1515, ya había sido expedido también, el Decreto número 2454 de 1986, el cual, además de definir unas conductas lesivas a la prestación del servicio público de transporte automotor urbano y metropolitano, en su artículo 12 dispuso que "las alteraciones en la prestación del servicio público de transporte o en las tarifas autorizadas que pongan en grave peligro el orden público serán sancionados de acuerdo con lo establecido por el Decreto número 2624 de 1983".

3. Nuestro sistema constitucional reconoce la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común, aunque la dirección general de la economía está a cargo del Estado. Por mandato de la ley se intervendrá sobre una y otra y en los servicios públicos y privados.

El constituyente, que no definió el servicio público, ni la empresa, ni la industria, dejó a la ley definirlas e intervenir para regular su prestación en lo relativo a la seguridad, salubridad, moralidad, tarifas y demás reglamentos; la producción, distribución, utilización y consumo de bienes; la exigencia de títulos de idoneidad y la reglamentación del ejercicio de las profesiones, oficios o industrias dentro del bien común y para alcanzar los fines señalados por la Carta en sus artículos 16, 30, 32 y 39, entre otros.

Con la expedición de la Ley 15 de 1959 el Congreso indicó que el transporte automotor es una industria, pero que igualmente tiene la característica de un servicio público, prestado por empresas públicas, privadas o mixtas, sean de cáracter distrital, municipal, departamental o nacional, que movilizan pasajeros o carga, facultando al gobierno en forma permanente para que intervenga dentro de los objetivos señalados por la Constitución y en los campos definidos en su artículo 1°, mediante decreto, con carácter de ley, pero circunscritos a ese ámbito, los cuales en todo momento el legislador podrá derogar, modificar, reformar, basado en su capacidad de hacer la ley.

Los decretos con los cuales el Ejecutivo interviene en la economía privada corresponden a una de las formas especiales y específicas en que legisla; son esas facultades intemporales, a partir de la vigencia de la ley que autoriza la intervención y perduran con el vigor de la ley ordenadora; no requieren que se detallen, con la precisión exigida constitucionalmente para las leyes del ordinal 12 del artículo 76 Constitución Nacional, sino basta que se indique la actividad privada efectable, pues sus fines no pueden ser otros que los predeterminados por el constituyente en los artículos 16, 30, 32 y 39 de protección para la comunidad, reconocimiento del interés privado y de su función eminentemente social. De otra parte toda la actividad del Estado está colocada al servicio de la comunidad y desde luego que son obvias esas connotaciones en las normas que regulan la actividad estatal vertida al servicio de la comunidad.

4. La Ley 15 de 1959, facultó al Gobierno para intervenir el transporte, y entre otros aspectos, con el objeto de "organizar empresas privadas, reglamentar el funcionamiento, la prestación de sus servicios, y, fijar para todas las ciudades del país las tarifas de transporte" (literales a), b), c) y d) del artículo 1°).

Como dijo la Corte en la radicación 1515 dichas facultades resultarían inocuas si el Gobierno careciere del poder deficiente para hacer coactivas las medidas que regulan dicha actividad, expedidas por el Congreso, o por el Ejecutivo habilitado para intervenir, señalar las consecuencias a su desconocimiento, cuando el legislador no lo haya hecho y aún frente a las expedidas por el Ejecutivo como agente interventor o como autoridad administrativa y la manera procesal bajo la cual se imponen las sanciones, conservando, en todo caso, las garantías constitucionales del derecho de defensa.

a) El Decreto número 2624 de 1983, fue expedido para sancionar administrativamente las alteraciones en la prestación del servicio público de transporte o de sus tarifas, por el Instituto Nacional del Transporte o por la entidad que se delegue, según el trámite gubernamental allí previsto.

Con la expedición del Decreto número 2440 de 1986 se modificaron los artículos 2° y 8° de aquél, así: para sancionar, según la nueva redacción del primero, de los citados, la conducta de las empresas que alteren o permitan la alteración de la prestación del servicio en sus diferentes modalidades con multa que oscilará entre diez (10) y trescientos (300) salarios mínimos, vigente en Bogotá; y, con la modificación del 8° para legislar sobre el trámite de la notificación de la providencia que solicita los descargos al presunto infractor.

Por el artículo 3° del Decreto número 2440 de 1986, se determina la conversión de la multa en arresto cuando no es cancelada oportunamente, así se trate de las cauciones indicadas en ese decreto como de aquéllas impuestas por aplicación del Decreto número 2624 de 1983, y, el artículo 4° es la previsión legal de su vigencia.

En su integridad los mandatos acusados encajan dentro de las facultades explícitas del literal b) del artículo 1° de la Ley 15 de 1959, que reza: "reglamentar el funcionamiento de dichas empresas y la prestación de sus servicios", pues corresponden a la determinación de la sanción merecida por quien altera la forma o la tarifa de la prestación del servicio público del transporte y a la manera como debe informársele

de la iniciación del procedimiento administrativo con el cual se constatará el hecho, se definirá la sanción y para que ejerza su defensa. El Gobierno como legislador habilitado en este evento, no obstante tratarse de asuntos administrativos, ejerce la función de expedir normas generales, impersonales y preexistentes, reguladoras del comportamiento del transportador, persona natural o jurídica, que tiene que ver con el orden público, la continuidad del servicio público y con los límites que a la iniciativa privada impone el bien común. La norma define la conducta, sus elementos constitutivos y el monto de la sanción pecuniaria, con lo cual no se viola por exceso el mandato legal, ni los que en la Constitución establecen los límites de la pena.

Tampoco los restantes artículos del Decreto número 2440 de 1986, infringen la Carta en los aspectos intervencionistas de la empresa e iniciativa privadas, ni el ordenamiento legal, ni los cánones constitucionales concedentes de la garantía de la defensa y de las formas del debido proceso. Por todo lo cual se declarará exequible el Decreto número 2440 de 1986;

b) El contexto del Decreto número 2454 de 1986, es más variado, pero se relaciona en alguna parte con los decretos de 1983 y de 1986 ya mencionados.

Respecto a éstos el artículo 12 del Decreto número 2454 de 1986 ordena que el trámite señalado por el Decreto número 2624 de 1983 se aplicará cuando exista alteración del servicio público de transporte o alteración de tarifas que ponga en grave peligro el orden público, distinción con la cual, en el sentido del Gobierno, existen alteraciones al servicio y a las tarifas del transporte que no comprometen el orden público en forma grave, lo cual justifica una diversidad de tratamiento legal. Dicho mandato es exequible por cuanto, como se anotó, se ajusta en la facultad legal para intervenir en la prestación del servicio y para estructurar los hechos constituyentes de la violación a la obligatoriedad constitucional de su continuidad y para el trámite legal para sancionar a los infractores.

El literal j) del artículo 3° del Decreto número 2454 de 1986 sanciona con multa entre 3 y 55 salarios mínimos mensuales vigentes en Bogotá a los empresarios del transporte urbano y metropolitano que incurran en la suspensión "parcial del servicio".

Los Decretos números 2624 de 1983 y 2440 de 1986 se refieren a "las alteraciones en la prestación del servicio público de transporte", por parte de las empresas, "de los propietarios de automotores", que ciertamente no equivale a la suspensión del servicio, pues el servicio se puede alterar o modificar sin que haya suspensión, y viceversa, se puede suspender sin que haya alteración de la forma de sus tarifas. Ellas difieren del abandono total e injustificado del servicio, hecho de elementos esenciales distintos y que ameritan otra sanción como es la de la cancelación del permiso o la caducidad de la concesión, en su caso (artículo 4° id).

Son normas que definen una infracción y no inducen a la vaguedad ni adolecen de vacíos que enerven la protección del derecho de la comunidad a la prestación del servicio público dispuesto para la industria del transporte. Por ello el Gobierno no

violó la Constitución como se ha sostenido, en la expedición de los siguientes textos legales: el literal j) del artículo 3° y en el artículo 12 del Decreto número 2454 de 1986.

Los restantes preceptos de ese decreto corresponden a las infracciones que cometen los transportadores, personas jurídicas o naturales, cuando inciden en alteraciones del servicio según la modalidad, características, equipos, personal, vehículos, frecuencias, tarifas, cupos, etc., relacionados con el logro de una eficaz y conveniente prestación del servicio. Versan con el trámite observable en la imposición de sanciones, el ejercicio del derecho de defensa del presunto infractor, la pena por reincidencia y los recursos.

Estas disposiciones son exequibles, si como ya se ha determinado competen al ejercicio de una parte de la facultad intervencionista del Estado con la mira de hacer efectivas las normas y medidas dictadas para la prestación del servicio público del transporte, dan a los investigados la garantía de su defensa dentro de la averiguación gubernamental y no desconocen su posterior decisión contencioso-administrativa.

V. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación.

Resuelve:

1. Estése a lo resuelto dentro de la radicación 1515, sobre la exequibilidad del Decreto número 2624 de 1983.

2. Declarar exequible el Decreto-ley número 2440 de 1986.

3. Declarar exequible el Decreto-ley número 2454 de 1986.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zuñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia,

DEJA CONSTANCIA:

Que el Magistrado José Alejandro Bonivento Fernández, no asistió a la Sala Plena celebrada el día doce de marzo de mil novecientos ochenta y siete, por encontrarse con excusa justificada.

Inés Galvis de Benavides
Secretaria

LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEBEN INTERPRETARSE ARMONICAMENTE, NO EN FORMA INDIVIDUALIZADA. VACACIONES JUDICIALES. LA REGULACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA REPUBLICA (ART. 76-10). COSA JUZGADA.

Remite a sentencia del 28 de junio de 1956 en cuanto al Decreto número 3664 de 1950.
Declara exequible la Ley 141 de 1961; el artículo 698 del Decreto número 1400 de 1970; y el artículo 2° del Decreto número 546 de 1971 y el 1° de la Ley 31 de 1971.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 30.

Referencia: radicación número 1481.

Normas demandadas: Decreto legislativo número 3664 de 1950; la Ley 141 de 1961 en cuanto adoptó como normas legales permanentes los artículos 1°, 2° y 3° del decreto legislativo número 3664 de 1950; el artículo 698 del Decreto Extraordinario número 1400 de 1970, pero sólo en cuanto derogó el artículo 181 de la Ley 105 de 1931; el artículo 2° del Decreto Extraordinario 546 de 1971 y el artículo 1° de la Ley 31 de 1971.

Actor: *Cesar Castro Garcés.*

Conjuez ponente: doctor *Oscar Peña Alzate.*

Aprobado por Acta número 11 de diciesiete (17) de marzo de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Bogotá, D. E., diecisiete (17) de marzo de mil novecientos ochenta y siete (1987).

1. El ciudadano César Castro Garcés, en ejercicio de la acción de inexequibilidad consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional, solicita que se declare la inexequibilidad de las normas que a continuación se indican, relativas a la disminución de las vacaciones judiciales y del Ministerio Público de un mes a veinte días.

Por tener interés en la decisión los señores Magistrados se declararon impedidos. Aceptados esos impedimentos, se procede a decidir sobre la demanda de 9 de mayo de 1986, con base en la ponencia adoptada en la Sala Constitucional de la Corte, integrada también por conjueces de la Corporación.

2. Las normas acusadas son las siguientes:

"DECRETO NUMERO 3664 DE 1950
(diciembre 12)

"Por el cual se determinan los días de vacancia judicial.

"El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

"Que por Decreto número 3518 del 9 de noviembre de 1949 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

"Que el lapso de vacaciones judiciales señalado en la parte final del inciso 1° del artículo 181 de la Ley 105 de 1931, es mucho más largo que el que fijan otras leyes para las vacaciones de los demás empleados públicos sin que ello tenga justificación, y

"Que toda medida tendiente a intensificar el servicio de la justicia contribuirá en forma eficaz al restablecimiento del orden público.

D E C R E T A:

"Artículo 1° A partir de la fecha del presente decreto los días de vacancia judicial, incluyendo la jurisdicción contencioso administrativa y la del trabajo, serán los siguientes: los de fiesta nacional, los domingos, los de fiesta católica de guardar, los de la Semana Santa y los comprendidos en el lapso del 20 de diciembre al 10 de enero inclusive.

"Artículo 2° Quedan suspendidas las disposiciones legales contrarias al presente decreto.

"Artículo 3° Este decreto regirá desde la fecha de su expedición.

"Comuníquese y publíquese.

"Dado en Bogotá a 12 de diciembre de 1950".

"LEY 141 DE 1961
(diciembre 16)

"Por el cual se adopta una legislación de emergencia y se dictan otras disposiciones.

"El Congreso de Colombia,

DECRETA:

"Artículo 1° Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el 9 de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el 20 de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores.

"Artículo 2° Esta ley regirá desde su sanción. Dada en Bogotá, D. E., a 15 de diciembre de 1961".

"DECRETO EXTRAORDINARIO NUMERO 1400 DE 1970
(agosto 6)

"Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil.

"El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 4ª de 1969 y consultada la Comisión Asesora que ella estableció,

DECRETA:

"Código de Procedimiento Civil
"Título Preliminar
"Disposiciones Generales

".....

"Artículo 698. Derogaciones.

"Deróganse la Ley 105 de 1931 y las disposiciones que la adicionan y reforman; los artículos 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 200, 1521 ordinal 4°, 1757 inciso 2°, 1758, 1759, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1767, 1768, 1769, 1770, 1822, 1901, 2489, inciso 3°, 2524, 2603 inciso 2° y 3° del ordinal 4° del Código Civil, el artículo 10 de la Ley 57 de 1887; los artículos 91, 92 y 93 de la Ley 153 de 1887; los artículos 10 y 29 de la Ley 95 de 1890; el artículo 8° de la Ley 28 de 1932; el artículo 13 de la Ley 34 de 1936; los artículos 26, 27, 29, 30, 31, 32, 40, 53 inciso 1°, 54, 55, 59 y 60 de la Ley 63 de 1936; los artículos 1° y 2° de la Ley 19 del año de 1937; las Leyes 120 de 1928, 2ª de 1938 y 51 de 1943; y en general cualquiera disposición contraria a las normas del presente Código".

"DECRETO NUMERO 546 DE 1971

"Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorga la Ley 16 de 1968, y atendido el concepto de la Comisión Asesora establecida por el artículo 21 de la misma ley,

DECRETA:

"……

"De los días de Vacancia Judicial.

"Artículo 2° Para todos los efectos legales, los días de vacancia judicial son los siguientes:

"a) Los días domingos y festivos cívicos y religiosos establecidos en las leyes vigentes y los de la Semana Santa;

"b) Veinte (20) días continuos. Cuando se trate de vacaciones colectivas en la rama civil, contencioso-administrativa y laboral los días de vacaciones son los comprendidos entre el 20 de diciembre y el 10 de enero inclusive, de cada año.

"Parágrafo. Cuando las vacaciones no sean colectivas, el superior respectivo fijará, en cada caso, dentro del año siguiente, la fecha en que deben comenzar a ser disfrutadas".

"LEY 31 DE 1971
(diciembre 20)

"Por la cual se modifica parcialmente el Decreto número 546 de 1971 y se dictan otras disposiciones.

"El Congreso de Colombia,

DECRETA:

"Artículo 1° El artículo 2° del Decreto número 546 de 1971 quedará así:

"Para todos los efectos legales, los días de vacancia judicial son los siguientes:

"a) Los días domingos y festivos, cívicos o religiosos, que determine la ley, y los de la Semana Santa;

"b) Los días comprendidos entre el 20 de diciembre de cada año y el 10 de enero siguiente, inclusive, lapso en el cual los funcionarios y empleados de la Rama Civil, contencioso-administrativo, laboral y los de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Aduanas y Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito, así como los respectivos Agentes del Ministerio Público que corresponden a tales despachos, disfrutarán colectivamente de la prestación social de vacaciones anuales.

"En los juzgados de la Rama Penal, en los Promiscuos y en los de la Rama Penal Aduanera no habrá otros días de vacancia judicial que los señalados en el ordinal a) del presente artículo.

"……

"Artículo 3° Esta ley regirá desde su sanción.

"Dada en Bogotá, D. E., a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y uno".

3. *Disposiciones constitucionales violadas*

Según el demandante, las normas anteriormente transcritas violan los artículos 30 y 17 de la Constitución Nacional. El señor Procurador General de la Nación considera que también se tuvo por infringido en la demanda el artículo 121, aunque no existe una parte de ella dedicada a indicar el concepto de violación de este texto, y solo se hace una mención de la falta de relación entre el Decreto Legislativo 3664 de 1950 y los problemas del orden público en un pasaje de la demanda (pág. 11).

4. *Concepto de la violación*

a) La Sala encuentra que el señor Procurador General de la Nación al rendir su concepto fiscal el 24 de julio de 1986 resumió adecuadamente las argumentaciones del actor sobre violación del artículo 30 de la Constitución Nacional proveniente de la disminución del término de las vacaciones judiciales. Por tal razón se va a permitir transcribir la parte pertinente del concepto fiscal en que se examina el primer cargo formulado contra las disposiciones de carácter legal acusadas:

"Señala el actor que el legislador no podría disminuir el tiempo de vacaciones de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, que la Ley 105 de 1931 señalaba de un mes 'porque esa disminución equivale a desconocer un beneficio social que ha ingresado al patrimonio de aquellos funcionarios y empleados, y que quienes estaban en ese momento trabajando en ellos y los demás que ingresaron a esas jurisdicciones tenían derecho a continuar disfrutando de un mes completo de vacaciones, porque las vacaciones de aquellos funcionarios y empleados constituye un derecho patrimonial en su favor que no puede ser desconocido por ley posterior.

"Hubo pues, una violación de derechos adquiridos", inclusive de los derechos de los actuales funcionarios, que cuando ingresaron al servicio público apenas contaban con 20 días de vacaciones, porque también "tenía constitucionalmente el derecho a disfrutar de las vacaciones legalmente decretadas y constitucionalmente garantizadas".

"Considera el actor que se justifica el mes de vacaciones para dichos funcionarios y empleados, porque 'tienen un desgaste cerebral más acentuado que los demás funcionarios y empleados del Estado' y afirma que el Decreto Legislativo 3664 de 1950 violó el artículo 121 de la Carta, porque la disminución del tiempo de vacaciones 'nada tenía que ver con el orden público de esa época', por lo que resulta inconstitucional por ese motivo, lo mismo que la Ley 141 de 1961 que adoptó el Decreto como legislación permanente. Además ambas normas infringieron el artículo 30 de la Constitución, por cuanto 'en ese momento los funcionarios y empleados correspondientes y ya mencionados, no podían ser desmejorados en sus vacaciones de un mes, ya que el derecho de ese mes completo de vacaciones, representa dinero para ellos, implica un aumento en su patrimonio económico, y la disminución a 20 días de las vacaciones, conllevó una merma de ese patrimonio'".

"Se dice en la demanda que también el Decreto Extraordinario 546 de 1971, la Ley 31 de 1971, lo mismo que el artículo 698 del Código de Procedimiento Civil, que derogó la totalidad de la Ley 105 de 1931, son inconstitucionales porque prolongaron 'la situación de inconstitucionalidad del recorte de las vacaciones' de aquellos servidores públicos, cobijados por la Ley 105 de 1931";

b) En cuanto a la violación del artículo 17 de la Constitución sobre protección social al trabajo por el Estado, el demandante parte de la base de que la disminución de las vacaciones judiciales, además de violar derechos adquiridos, desfavorece y desprotege al trabajo en contra de la declaración del artículo citado. En lugar de progresar la legislación estaría retrocediendo.

5. *El concepto fiscal del Procurador General de la Nación*

El concepto fiscal número 1058 de 24 de julio de 1986 comienza por establecer que el Decreto número 3664 de 1950 fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 28 de junio de 1956, al decidir una demanda de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano contra tal norma con fuerza legislativa lo cual era posible antes de la Reforma Constitucional de 1968.

Los párrafos de la sentencia de la Corte que cita la vista fiscal marcan la relación entre la perturbación del orden público y el recorte en el tiempo de las vacaciones judiciales. Concluye la Procuraduría afirmando que el fallo en cuestión determina cosa juzgada y pide a la Corporación que así lo resuelva.

A continuación examina si la Ley 141 de 1961 al hacer permanente las disposiciones del Decreto número 3664 de 1950 puede ser contraria a la Carta fundamental, hipótesis que rechaza puesto que legislar sobre vacaciones judiciales es competencia del Congreso tampoco considera que se hayan infringido los textos de los artículos 17 y 30.

Al referirse a la constitucionalidad del Decreto número 546 de 1971 y la Ley 31 de 1971, por cuanto reproducen disposiciones ya existentes, la Procuraduría sostiene que no puede argüirse violación del artículo 30 de la Constitución ni desmejorar en las condiciones del trabajo con infracción del artículo 17 de la misma por cuanto "a partir de 1958 la expectativa de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público no se fundamenta en el término de vacaciones de 30 días consagrado en la Ley 105 de 1931 sino en el señalado por el Decreto número 3664 de 1950".

Aunque no se explica la fecha, la indicación del año de 1958 corresponde a la primera ley de prórroga de los decretos de estado de sitio, proceso legislativo que remató con la expedición de la Ley 141 de 1961, que como ella misma expone les dio carácter de ley (permanentes).

Agrega que cuando el artículo 698 del Código de Procedimiento Civil (Decreto Extraordinario 1400 de 1970) derogó expresamente la Ley 105 de 1931, el inciso 1° del artículo 181 de esta ley, en lo atinente al lapso de vacaciones, ya había sido derogado tácitamente por la Ley 141 de 1961 al adoptar como legislación permanente el Decreto número 3664 de 1950. Por este aspecto el mencionado Código de Procedimiento Civil no introduce norma nueva que pueda infringir canon superior.

Aunque las normas acusadas se refieren también a las vacaciones del Ministerio Público, el señor Procurador General de la Nación expone que no se considera impedido para emitir concepto puesto que la decisión de la Corte no lo afectará, ya

que se tomará después del vencimiento de su período constitucional, lo cual ha sido así en realidad.

Como consecuencia de su exposición, la Procuraduría General de la Nación pide que se esté a lo resuelto en sentencia del 28 de junio de 1956 respecto del Decreto número 3664 de 1950, y que se declaren exequibles las demás disposiciones legales acusadas.

6. *Consideraciones de la Corte*

Primera. Habrá de estarse a lo resuelto por esta Corporación, en su sentencia de 28 de junio de 1956 en relación con la constitucionalidad del Decreto número 3664 de 1950, conforme lo solicita el concepto fiscal.

Segunda. Este decreto y las demás normas acusadas han sido enjuiciadas en primer lugar, por violación del artículo 30 de la Constitución y por desconocer derechos adquiridos. En el caso se trataría del derecho a 30 días de vacaciones, que tendrían los funcionarios judiciales y del Ministerio Público con anterioridad al Decreto Legislativo 3664 de 1950. Según el demamdante este derecho lo tendrían inclusive los funcionarios judiciales y del Ministerio Público que hubieren ingresado a sus cargos después de que las vacaciones se hallaban disminuidas a 20 días.

No obstante, esta última es una hipótesis extrema que no cabe dentro de las discusiones de los denominados derechos adquiridos. Ellos provienen o pueden provenir de una legislación por lo que no pueden predicarse respecto de aquellos funcionarios que ingresen a un servicio cuando la ley que se invoca en su favor ya no esté vigente; no se da, pues, el presupuesto básico de la teoría. Quienes entraron a los cargos judiciales o del Ministerio Público cuando las vacaciones legalmente eran de 20 días y no de 30 no pueden alegar derecho a este último término.

En cuanto a la sucesión de leyes en el tiempo, las que comienzan su vigencia a partir de su expedición no suelen afectar prestaciones o beneficios periódicos; aquéllas o éstos, configurados en derechos, debieron ser, como las vacaciones de que se trata, disfrutados en su oportunidad.

Queda por examinar si el simple cambio de legislación, pasando vacaciones de 30 a 20 días, puede erigirse en violación de derechos adquiridos. No incurre la ley en desconocimiento de éstos cuando los que se alegan no tiene en verdad tal carácter, sino son simples expectativas. Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 3 de octubre de 1985 (Radicación número 1314) en relación con pensiones de jubilación cuando no se hubiera cumplido la edad requerida o el tiempo de servicio exigido, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 33 de 1985 "por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público".

Puede decirse, entonces, que las vacaciones futuras de funcionarios no son derechos adquiridos que deban respetar una ley; al dictar ésta, recortando su tiempo, por ejemplo, el Congreso de la República sólo esta poniendo en marcha su facultad de regular el servicio público, conforme a la atribución constitucional que le corresponde (artículo 76-100).

Conviene advertir que en el caso estudiado la posibilidad de la violación del artículo 30 no puede ser atribuida a las normas legales acusadas dictadas con posterioridad a la Ley 141 de 1961, pues ésta derogó la legislación anterior de 30 días de vacaciones. En cuanto a ésta la adopción del término de 20 días de vacaciones, a que ella conduce, no significa, conforme se ha analizado, cosa distinta de la regulación del servicio público de la justicia, sin desconocimientos de derechos adquiridos como se alega por el demandante.

Tercera. El otro fundamento de la demanda es la desmejora en el sistema de vacaciones judiciales y del Ministerio Público, lo cual conduciría a violación del artículo 17 de la Constitución sobre protección del trabajo.

No considera de la Corte que este artículo deba interpretarse en el sentido matemático en una contabilidad de días o de pesos. La disposición del artículo 17 contiene un principio de política estatal de protección al trabajo que se desarrolla en la legislación que al respecto existe cuya evolución en su conjunto ha venido beneficiando a los trabajadores públicos y privados. Este criterio también se examinó con ocasión de la sentencia de 3 de octubre de 1985, ya citada; por tal virtud no se aceptó el cargo de inconstitucionalidad lanzado contra la Ley 33 de 1985 sobre la base de que desmejoraba la pensión de jubilación.

No se olvide que las disposiciones constitucionales deben interpretarse armónicamente, no en forma individualizada. Ya se expresó cómo el Congreso Nacional tiene el deber de regular el servicio público. También corresponde a los propósitos del Estado, y no solamente a los del ejecutivo, velar porque se administre pronta y cumplida justicia (artículo 119, 2° de la Constitución), para lo cual, es evidente, puede influir el término de las vacaciones judiciales.

No se juzga necesario entrar a examinar con más profundidad el artículo 17 de la Constitución, dentro del cual está consagrado la obligación del trabajo. Esto porque las situaciones de los colombianos no pueden ser miradas en términos de su único beneficio, de derechos a su favor, sin tomar en cuenta que sobre ellos recaen también deberes sociales, como lo expone el artículo 16 de la Constitución Nacional, que tienen origen en derechos de la comunidad que determinan conductas ciudadanas.

No es procedente, por tanto, aceptar la acusación contra las disposiciones legales anunciadas con apoyo en el artículo 17 de la Constitución.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, con base en el estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación.

RESUELVE:

1° Estar a lo resuelto en la sentencia de 28 de junio de 1956, en cuanto a la exequibilidad declarada entonces del Decreto Legislativo número 3664 de 1950, ya que ha hecho tránsito a cosa juzgada.

2° Declarar exequibles las siguientes disposiciones legales: la Ley 141 de 1961 en cuanto adoptó como normas legales permanentes los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto

Legislativo número 3664 de 1950; el artículo 698 del Decreto Extraordinario número 1400 de 1970, en cuanto derogó el artículo 181 de la Ley 105 de 1931; el artículo 2° del Decreto Extraordinario número 546 de 1971 y el artículo 1° de la Ley 31 de 1971.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Presidente, *Oscar Peña Alzate,* Conjuez, *Juan Benavides Patrón,* Conjuez, *Pablo Cárdenas Pérez,* Conjuez, *Ismael Coral Guerrero,* Conjuez, *Anselmo Chaves Narváez,* Conjuez, *José Gregorio Díaz Granados,* Conjuez, *Hernando Morales Molina,* Conjuez, *Humberto Murcia Ballén,* Conjuez, *Leonel Olívar Bonilla,* Conjuez, *Tarcisio Roldán Palacio,* Conjuez, *Alfonso Suárez de Castro,* Conjuez, *Hernando Tapias Rocha,* Conjuez, *Miguel Zornosa Falla,* Conjuez, *Luis Córdoba Mariño,* Conjuez, *Alejandro Córdoba Medina,* Conjuez, *Alvaro Díaz Granados,* Conjuez, *César Gómez Estrada,* Conjuez, *Ramón Madriñán de la Torre,* Conjuez, *Rafael Osorio Rodríguez,* Conjuez, *Jairo Parra Quijano,* Conjuez, *Julio Rozo Rozo,* Conjuez, *Alvaro Tafur Galvis,* Conjuez, *Carlos Upegui Zapata,* Conjuez.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONJUEZ TARCISIO ROLDAN PALACIO

Respeto la anterior decisión de la Sala Plena de Conjueces, de la Corte Suprema de Justicia, pero no la comparto, por las razones que, en síntesis, anoto a continuación.

A. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en sede de control judicial de la constitucionalidad de proyectos de ley, de leyes y decretos ley y legislativos, son sentencias, y son definitivas, en la medida en que oigan al demandante y acaten sus alegaciones, o lo convenzan de que carece de razón, con argumentos expresos, jurídicamente atendibles y lógicamente elaborados.

Las que declaran la inconstitucionalidad tienen fuerza de cosa juzgada *erga omnes.*

Las de exequibilidad no pueden producir efectos de cosa juzgada *erga-omnes,* sino en relación con la *causa petendi* juzgada y las disposiciones constitucionales tenidas en cuenta en la confrontación, confrontación que, según lo ya escrito, debe ser siempre expresa, pues como enseña *Sáchica* "no basta con la verificación mecánica de que se juzgó una norma con respecto a su validez constitucional para que se rechace de plano todo nuevo examen de ella; a tal decisión debe preceder un estudio sobre si el nuevo planteamiento que se pretende incluye o no aspectos y elementos nuevos que puedan conducir a una decisión más actual, más eficaz y más justa" (Vid. Sáchica, Luis Carlos, El Control de Constitucionalidad).

Y,

si el fallo, del que disiento, resolvió "estar a lo dispuesto en la sentencia del 28 de junio de 1956, en cuanto a la exequibilidad declarada entonces del Decreto Legislati-

vo número 3664 de 1950, ya que ha hecho tránsito a cosa juzgada" sobre la sola consideración de que "habrá de estarse a lo resuelto por esta Corporación en su sentencia del 28 de junio de 1956 en relación con la constitucionalidad del Decreto número 3664 de 1950, conforme lo solicita el concepto fiscal", y la escueta referencia de que los párrafos de la sentencia en su vista cita "marcan la relación entre la perturbación del orden público y el recorte de tiempo de las vacaciones judiciales",

Resulta claro que carece de la motivación exigida por el artículo 163 de la Carta.

Debieron examinarse, cuanto menos, por quienes suscriben mayoritariamente la presente decisión, las alegaciones del demandante del Decreto Legislativo número 3664 de 1950 y la sentencia de la Corte del 28 de junio de 1956 a la luz de los artículos 17, 30 y 121, invocados por el demandante en este proceso, y, desde luego, del numeral 6° del artículo 122 de la Codificación actual de la Carta y no dejar sin estudiar dos puntos fundamentales implicados en la nueva acción, a saber, el de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de medidas de estado de sitio con vocación de permanencia como la tomada por el primero de los decretos acusados y la imposibilidad de desmejorar los derechos sociales consagrados en leyes anteriores durante el estado de sitio pues, como se sabe, el actual estado de emergencia económica vino a ser una escisión de la perturbación del orden público que es político y económico y social y que antes se cobijaba con uno y otros.

B. Reitero la ineludible necesidad de distinguir entre derechos adquiridos, meras expectativas y derechos sociales del trabajador, instituciones jurídicas distintas, consagradas todas de manera expresa por la propia Constitución, de las cuales no puede predicarse mutua incompatibilidad como no sea confundiendo su significado. Los derechos adquiridos, las meras expectativas y los derechos sociales del trabajador, son situaciones jurídicas, concretas los primeros y abstractas los dos últimos.

Tanto los derechos adquiridos como las meras expectativas son situaciones jurídicas individuales, pertenecientes a la órbita de los denominados "derechos civiles" garantizados por el Título III de la Carta, a los cuales se refiere, en concreto, el artículo 30 de la Constitución en relación con el 17 de la Ley 153 de 1887 y que mandan la invulnerabilidad e irretroactividad de parte de la ley respecto de situaciones jurídicas individuales consolidadas y, *contrario sensu* permiten la vulnerabilidad retroactiva de las no consolidadas en los individuos.

Y no pretendo dar a entender que las situaciones jurídicas individuales reconocidas por el artículo 30 de la Carta sean incompatibles con los "derechos sociales", o sea con "las garantías sociales" laborales de que dan cuenta, entre otros, los artículos 17, 32 y 122 de la Constitución, sino que simplemente son distintas a las situaciones jurídicas sociales reconocidas en las últimas normas citadas. No es que yo afirme, contra toda evidencia constitucional, que las denominadas por quienes mayoritariamente suscriben este fallo, 'expectativas laborales' hayan sido erigidas por la Carta en excepción de su artículo 30, al preconizar en relación con ellas que son invulnerables retroactivamente por la ley, y, desde luego, por un decreto de estado de sitio, sino que, simplemente, esas situaciones jurídicas no son expectativas individuales, sino *derechos sociales del trabajador,* susceptibles de tratamiento distinto pero no exceptivo.

O sea que las "garantías sociales" de que habla el Título III de la Constitución no son incompatibles con los "derechos civiles" a que se refiere el mismo Título, sino que hay que entender apenas que aquéllas hacen relación a los derechos sociales, sin atender a su concreción o consolidación individual, y que en materia laboral tales derechos, *qué son las leyes sociales,* son irreversibles, sin parar mientes en su "adquisición individual", ni en su "justo Título con arreglo a las leyes civiles".

De otra parte, considero que los derechos sociales del trabajador son irreversibles en virtud del principio de la mayor favorabilidad normativa en materia laboral cuya proyección nace de los textos 17, 32 y 122 ya citados de la Carta en cuanto consagran como deber social y no como potestad facultativa del Estado, la protección de quien trabaja, consagrando, para que se le mejore armónica y progresivamente, su intervención y, prohibiendo, aún en tiempo de emergencia económica, su desmejora, lo que nada tiene que ver con los derechos individuales a que se refiere el artículo 30.

"En realidad, y el concepto es del doctor Misael Pastrana Borrero, Ministro de Gobierno, cuando en el Congreso constituyente de 1968 se discutía la reforma de ese año, lo que era un poco limitativo en el artículo 32 que decía sólo para darle al trabajador su justa protección a que tiene derecho, se integra aquí con todo un concepto económico de una política de ingresos y salarios que de otro lado forma parte de las tesis del cambio social... cuando pone la economía al servicio del bien común en el sector privado, cuando pone la economía en el sector público para el mejoramiento de los trabajadores, ... llegada la economía humanista que consagran las encíclicas... sin que sea necesario hablar de mejoramiento armónico y progresivo, porque en realidad... el mejoramiento tiende precisamente a eso" (Cfr. Anales, Año XIV, No. 69, págs. 1065, 2ª col. y col. 2ª de la 1066).

Ya el maestro Darío Echandía había dicho desde 1936:

"La intervención es para proteger al proletariado".

(Cfr. Anales del Congreso, Año X, No. 63, pág. 962, 2ª col.; Año X, No. 64, pág. 975, 3ª col.; Año X, No. 69, pág. 1061, cols. 2ª y 3ª, págs. 1062, 1064, cols. 2ª y 3ª, 1065, cols. 2ª y 3ª, especialmente).

Con todo, no basta, como en su ponencia para segundo debate en el Senado del Acto Legislativo número 46, base del 1 de 1968, de 1966, lo advirtió el doctor Carlos Restrepo Piedrahíta, la bondad intrínseca de las instituciones para que por tal sola virtud sobrevenga el bienestar social. Las leyes son mandamientos de conducta dirigidos a los hombres: a los detentadores del poder o gobernantes y a los destinatarios del poder o gobernados. Solamente cuando el derecho es puesto en acción por los hombres se convierte en vida. La vida del derecho puede ser patológica o saludable, según la conducta activadora de los hombres que lo realizan.

(Cfr. Anales del Congreso, No. 37, de 1967).

Y causa desazón, que en los albores del siglo veintiuno, nuestra Constitución siga siendo apenas para los propietarios.

Por todo lo cual soy de la opinión de que la Corte debió de haber declarado inconstitucionales, por ser contrarias a la Constitución, particularmente a sus artículos 17, 32 y 122, las normas acusadas por el demandante.

Fecha ut supra.

Tarcisio Roldán Palacio



SE OTORGA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE POLICIA JUDICIAL EN FORMA COMPLETAMENTE GENERICA Y ABIERTA, NO SE ESTABLECE LA COMPETENCIA SOBRE DETERMINADOS TIPOS DE DELITOS QUEDANDO COMPRENDIDAS SITUACIONES QUE NADA TUVIERON QUE VER CON LA CRISIS, EXCEDIENDO ASI LOS PRECISOS LIMITES A LOS CUALES DEBE CEÑIRSE EL PRESIDENTE PARA EXPEDIR LAS MEDIDAS DE EXCEPCION. CUERPOS ESPECIALIZADOS EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. *ESTADO DE SITIO.*

Inexequible el Decreto número 155 de 1987.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 31

Referencia: Expediente número 1574 (237-E).

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo número 155 de 1987.

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según Acta número 12.

Bogotá, D. E., diecinueve (19) de marzo de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

En el mismo día de su expedición, el Secretario General de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación, el Decreto Legislativo número 155 de 1987 para su revisión constitucional.

Oportunamente se ordenó la fijación en lista del negocio y se dio traslado al Procurador General de la Nación para el concepto de rigor, obtenido el cual, entra la Corte a adoptar la decisión de fondo.

II. Texto del decreto

De acuerdo con la copia enviada por la Presidencia de la República, el texto del decreto es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 155 DE 1987
(enero 27)

"Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto número en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

"Que es necesario contar con cuerpos especializados en la lucha contra la delincuencia organizada.

"Que se están adelantando los estudios necesarios para poner en funcionamiento el cuerpo técnico de policía judicial previsto en los Decretos números 50 y 54 del presente año.

"Que es indispensable dictar las normas que garanticen una adecuada defensa de los intereses ciudadanos y que sirvan para erradicar los hechos que perturban el orden público, para lo cual el Estado debe contar, en épocas de excepción, con toda clase de organismos especializados,

D E C R E T A:

"Artículo 1° La Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación ejercerá funciones de Policía Judicial en la misma forma que el artículo 331 del Decreto número 50 de 1987 lo establece para la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

"Artículo 2° El Procurador General de la Nación, o por designación suya, el Procurador Delegado para la Policía Judicial, coordinará las actividades del Personal de Policía Judicial a que se refiere el artículo anterior con el Director Nacional de Instrucción Criminal.

"Artículo 3° El porte de armas por el personal de la Procuraduría delegada para la Policía Judicial, estará subordinado a la expedición del salvoconducto respectivo, la cual se hará a petición del Procurador Delegado para la Policía Judicial.

"Artículo 4° De conformidad con el Decreto número 1663 de 1979, artículo 4°, la adquisición y abastecimiento de armas, municiones y material de guerra para servicio de la Procuraduría General de la Nación, estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, así como el control de sus existencias y conservación, que se efectuará a través del Comando General de las Fuerzas Militares y la Industria Militar, como empresa vinculada a dicho Ministerio.

"Artículo 5° Los gastos que demande el cumplimiento de este decreto serán sufragados con cargo al Presupuesto de la Procuraduría General de la Nación.

"Artículo 6° Este decreto rige desde su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, a 27 de enero de 1987.

"Fernando Cepeda Ulloa, Ministro de Gobierno; *Julio Londoño Paredes,* Ministro de Relaciones Exteriores; *Eduardo Suescún Monroy,* Ministro de Justicia; *César Gaviria Trujillo,* Ministro de Hacienda y Crédito Público; *Rafael Samudio Molina,* Ministro de Defensa Nacional; *Luis Guillermo Parra Dussán,* Ministro de Agricultura; *Guillermo Perry Rubio,* Ministro de Minas y Energía; *Marina Uribe de Eusse,* Ministra de Educación Nacional; *José Name Terán,* Ministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado del Ministerio de Desarrollo Económico; *César Esmeral Barros,* Ministro de Salud, *Edmundo López Gómez,* Ministro de Comunicaciones; *Luis Fernando Jaramillo Correa,* Ministro de Obras Públicas y Transporte".

III. Concepto del Procurador

Una vez que la Sala rechazó el impedimento oportunamente manifestado por el Procurador General de la Nación, para intervenir en este proceso, el Jefe del Ministerio Público rindió el concepto de rigor en el que solicita que la Corte declare exequible el decreto bajo examen por estar ceñido a la Carta Fundamental. Apoya su tesis en las siguientes reflexiones:

1. El decreto reúne los requisitos formales que exige el artículo 121 de la Constitución Nacional y tiene clara relación de conexidad con las causas que determinaron la declaratoria de estado de sitio.

2. El artículo 1° del decreto al conferir a la Procuraduría General de la Nación las mismas funciones de Policía Judicial que establece el artículo 331 del Decreto número 050 de 1987, para la Policía Nacional y el DAS "no contraría mandato superior alguno; simplemente dota a esa entidad de un instrumento eficaz para el cumplimiento de un esencial deber constitucional que le incumbe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Carta, que la faculta para perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social".

3. Sobre los restantes artículos del ordenamiento expresa que tampoco quebrantan ningún principio constitucional; coinciden simplemente con lo dispuesto en la legislación ordinaria respecto de la coordinación de las labores de Policía Judicial por parte de la Dirección General de Instrucción Criminal y la adquisición, abastecimiento y control de armas a través del Ministerio de Defensa Nacional.

Finalmente, encuentra lógico que se disponga en el artículo 5° que los gastos que demande el cumplimiento del decreto estén a cargo de la Procuraduría puesto que las labores deberán desarrollarse con el personal de planta de ese organismo.

IV. La intervención ciudadana

De acuerdo con la constancia de la Secretaría General de la Corte el término de fijación en lista transcurrió sin que ningún ciudadano impugnara o coadyuvara la constitucionalidad del acto objeto del presente proceso constitucional.

V. Consideraciones de la Corte

Primera. La Corte es competente para examinar y decidir sobre la constitucionalidad del Decreto número 155 de 1987, por haber sido expedido por el Presidente en ejercicio de las facultades que le confiere el estado de sitio. Así lo estatuyen los artículos 121 y 214 del Estatuto Superior.

Segunda. El decreto expedido por el Presidente y con la firma de todos los Ministros, no tiene vocación de permanencia pues se limita a suspender las disposiciones que le sean contrarias. Por lo tanto en este aspecto se ciñe a lo que prescribe el artículo 121 de la Constitución para los ordenamientos dictados al amparo del régimen de excepción.

Tercera. El artículo 121 de la Constitución Nacional habilita al Presidente para que con la firma de todos los Ministros dicte decretos transitorios con fueza de ley; pero tal facultad no es omnímoda ni sustituye la potestad legislativa propia del Congreso, sino que debe ejercerse dentro de "precisos límites" como lo ha señalado la Corte reiteradamente y se desprende de las mismas voces de aquella disposición; tales son en primer lugar los que fluyen de los acontecimientos que determinaron la implantación de las medidas que se adopten, dirigidas a conjurar la crisis contrarrestando, hasta donde sea posible, los hechos perturbadores de la tranquilidad pública para permitir el retorno a la normalidad institucional.

Es por tanto presupuesto básico para el análisis de constitucionalidad de los decretos de estado de sitio, verificar su necesaria relación de causalidad con los motivos invocados por el Gobierno al declararlo y que deben conducir al restablecimiento del orden público. Para estos fines importa destacar los motivos que sustentaron el Decreto número 1038 de 1984, en cuyo desarrollo se expidió la normatividad sujeta a revisión. Son los siguientes:

"Que en diversos lugares del país han venido operando reiteradamente grupos armados que han atentado contra el régimen constitucional, mediante lamentables hechos de perturbación del orden público y suscitando ostensible alarma en los habitantes;

"Que para conjurar la grave situación especialmente en los departamentos de Caquetá, Huila, Meta y Cauca, el gobierno declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio de dichos departamentos por medio del Decreto número 615 de 14 de marzo anterior;

"Que el gobierno ha utilizado para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales los medios que le atribuye la legislación ordinaria, sin que haya bastado su efecto para recobrar la normalidad;

"Que con posterioridad a la expedición del Decreto número 615 de 1984, han tenido lugar asaltos a poblaciones por obra de grupos armados, entre ellos los ocurridos sobre Acevedo en el departamento del Huila, Corinto en el departamento del Cauca, Sucre y Jordán Bajo en el departamento de Santander, Giraldo en el departamento de Antioquia y Miraflores en la comisaría del Guaviare;

"Que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las institucionaes en

desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional;

"Que recientemente ocurrieron actos terroristas en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, causantes de la destrucción de numerosos vehículos de transporte colectivo;

"Que al anochecer del día de ayer fue asesinado el señor Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla;

"Que en general, hechos de violencia provocados por las circunstancias antes mencionadas han ocasionado sensibles bajas de personal de las Fuerzas Militares y de la Policía, lo mismo que víctimas en la población civil;

"Que se hace necesario, ante la gravedad de la situación, adoptar las medidas de excepción contempladas en el artículo 121 de la Constitución Política".

Ahora bien, el Decreto número 155 de 1987 aparece motivado en la necesidad de contar con "cuerpos especializados en la lucha contra la delincuencia organizada" y en "que se hace indispensable dictar normas que garanticen una adecuada defensa de los intereses ciudadanos y que sirvan para erradicar los hechos que perturban el orden público para lo cual el Estado debe contar, en épocas de excepción con toda clase de organismos especializados".

Cuarta. A pesar de que aparentemente el decreto que se revisa guarda estrecha relación con los motivos que adujo el gobierno en el decreto originario por el cual se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República, encuentra la Corte que se le ha otorgado a la Procuraduría General de la Nación competencia y atribuciones en materia de Policía Judicial en forma completamente genérica y abierta, ya que no se establece ninguna restricción respecto del tipo de delito, ni en cuanto al manejo mismo de las actividades de Policía Judicial, quedando entonces comprendidas situaciones que nada tuvieron que ver con la crisis ni con los hechos que han continuado causando perturbación. Por lo tanto se ha roto por excedencia el nexo causal directo o inmediato que debe existir entre el decreto legislativo y las razones o motivos expuestos por el Gobierno desbordando así, en forma manifiesta, los precisos límites a los cuales debe ceñirse el Presidente para expedir esas medidas de excepción.

Los fundamentos que determinan la expedición de un decreto dictado con base en las facultades del artículo 121 de la Constitución, no pueden ser distintos, sino que deben coincidir con los que el Gobierno tuvo en consideración para decretar el estado de sitio; por lo tanto, devienen en inconstitucionales las disposiciones que se refieren a hechos o fenómenos desligados causalmente de aquéllos que generan la declaratoria, ya que no existe relación de causa a efecto entre las medidas adoptadas y el deber de mantener el orden.

Cabe señalar que las anteriores consideraciones las hace la Corte sin entrar a juzgar la eficacia u operatividad de las medidas que adopta el gobierno en ejercicio de las atribuciones del estado de sitio por ser extrañas al juicio de constitucionalidad de un decreto legislativo en el que sólo se examina la conformidad o incompatibilidad entre el acto que revisa y la carta.

Como lo ha sostenido la Corte en jurisprudencia reiterada en torno a la revisión de los decretos dictados bajo el régimen de estado de sitio:

"Lo que determina la validez constitucional de los decretos referidos es la relación entre las materias que contengan y la turbación del orden. Ese cancel encierra la capacidad gubernamental, en cuanto a decretos legislativos dados en estado de sitio, cuanto así se ordene con mérito de ley tendrá respaldo constitucional siempre que guarde relación con la tranquilidad pública, sea para mantenerla o prevenir su alteración, sea para restablecerla, y siempre desde luego, que no se contrarien textos de la Carta que deben regir aun en estado de sitio.

El estudio de constitucionalidad que se confía a la Corte debe atenerse por lo común, previamente y de manera principal, al examen objetivo de vinculación que exista entre las providencias decretadas por el gobierno y las necesidades del orden público turbado" (Sentencia de marzo 23 de 1971, Magistrado ponente José Gabriel de la Vega, G.J. No. 2340-41-42, pág. 114).

Cabe anotar finalmente, sin que esto implique caprichosa injerencia de la Corte en las funciones del Ejecutivo, que la norma cuya revisión es objeto de la presente confrontación constitucional tiende a restarle vigor a una norma o mandato que hace parte del Decreto número 050 de 1987, recientemente adoptado por el Presidente en ejercicio de las especiales atribuciones de que fue investido por la Ley número 52 de 1984 cuando en el momento de su adopción regían ya las circunstancias que se invocan para deshacer lo que se creía ceñido a la realidad fáctica del país y a las específicas materias señaladas por la ley de investidura. Esto revela inequívocamente un desfase de la motivación con que se pretende amparar el Decreto número 155 de 1987, materia de este proceso.

VI. Decisión

En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional, oído el concepto del Procurador General de la Nación y en desacuerdo con él,

Resuelve:

Declarar Inexequible el Decreto número 155 de 1987 "por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público".

Cópiese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zuñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

MODIFICACIONES AL REGIMEN DEL SUBSIDIO FAMILIAR. EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO, DENTRO DE LOS LIMITES DE LA CONSTITUCION, PARA LA EMPRESA DE CUALQUIER NATURALEZA JURIDICA, Y EN LA INICIATIVA PRIVADA, SIEMPRE QUE SE ASEGURE LA LIBERTAD DE ESTAS. *LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR Y SU NATURALEZA LEGAL;* SON ENTES JURIDICOS DE NATURALEZA ESPECIALISIMA, SE CONSTITUYEN BAJO LAS REGLAS DEL DERECHO PRIVADO COMO CORPORACIONES, SIN ANIMO DE LUCRO Y CUMPLIENDO FUNCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

Exequibles las normas demandadas de la Ley 21 de 1982.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 32.

Referencia: Expediente número 1530.

Acción de inexequibilidad contra los artículos: 54, numerales 2° y 3°; 62, numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y parágrafo; 63 parágrafo, y 64 de la Ley 21 de 1982. Cajas de Compensación Familiar. Obras y Programas.

Actor: *Alvaro Copete Lizarralde.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobada por Acta Número 12.

Bogotá, D. E., marzo diecinueve (19) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Alvaro Copete Lizarralde, presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra los artículos 54, numerales 2° y 3°; 62, numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y parágrafo; 63 parágrafo, y 64 de la Ley 21 de 1982. Se admitió la demanda, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien se declaró impedido para conceptuar dentro de este proceso. La Sala Constitucional de esta Corporación aceptó dicho impedimento y corrió traslado al Viceprocurador General de la Nación quien emitió concepto. Procede ahora la Corte a resolver el asunto.

II. Texto de las normas acusadas

"LEY 21 DE 1982
(enero 22)

"Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones.

"El Congreso de Colombia,

D E C R E T A:

".....

"Artículo 54. ...

"2° Aprobar, en consonancia con el orden de prioridades fijadas por la presente ley, los planes y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales.

"Los planes y programas antedichos serán sometidos al estudio y aprobación de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

"3° Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y someterlos a la aprobación de la autoridad competente.

".....

"Artículo 62. Las obras y programas sociales que emprendan las cajas de compensación con el fin de atender el pago del subsidio en servicios o especie, se realizarán exclusivamente en los campos y en el orden de prioridades que a continuación se señala:

"1° Salud.

"2° Programas de nutrición y mercadeo de productos alimenticios y otros que compongan la canasta familiar para ingresos bajos (obreros), definida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

"3° Educación integral y continuada; capacitación y servicios de biblioteca.

"4° Vivienda.

"5° Crédito de fomento para industrias familiares.

"6° Recreación social.

"7° Mercadeo de productos diferentes a los enunciados en el ordinal 2°, el cual se hará de acuerdo con la reglamentación que expida posteriormente el Gobierno Nacional.

"Parágrafo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo visto bueno del Consejo Superior del Subsidio Familiar, teniendo en cuenta las condiciones de vida familiar de los trabajadores beneficiarios y las circunstancias económicas y sociales que imperen en la respectiva zona territorial podrá modificar el anterior orden de prioridades.

"Artículo 63. La Superintendencia del Subsidio Familiar tendrá en cuenta el orden de prioridades señalado en el artículo anterior para aprobar obras y programas sociales de las cajas de compensación.

"Parágrafo. Las inversiones en obras y programas sociales y las que se hagan con los recursos destinados a atender gastos de instalación, administración y funcionamiento, realizadas o que se realicen por las Cajas de Compensación Familiar sin la debida aprobación oficial o en contravención de disposiciones legales y que no cumplan los objetivos del subsidio, deberán adecuarse, en un término prudencial a las normas legales y reglamentarias pertinentes. Si la adaptación no se efectuare en el término señalado o no fuere posible, se ordenará la venta de las obras realizadas.

"Artículo 64. Los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar podrán fijar tarifas diferenciales progresivas, teniendo en cuenta los niveles de remuneración de los trabajadores beneficiarios, para todas aquellas obras y programas sociales desarrollados de conformidad con el artículo 62, de tal manera que las tarifas sean más bajas para aquellos trabajadores que reciban los menores ingresos.

"Las tarifas de los servicios que se presten a personas distintas de las enunciadas en el artículo 27 y del trabajador beneficiario, no serán subsidiadas. Tales tarifas se determinarán teniendo como base los costos reales de operación y mantenimiento, y serán controladas por la Superintendencia de Subsidio Familiar".

III. Normas que se consideran infringidas

Considera el actor que resultan violados los artículos 30, 39, 44, 120, ordinal 19, y 135 de la Constitución Nacional.

IV. Fundamentaciones de la demanda

En criterio de la demanda, las normas acusadas resultan inconstitucionales por las siguientes razones:

1. Las cajas de compensación son personas jurídicas de derecho privado y de utilidad común, que se sitúan dentro de los límites precisos que cubren las funciones de inspección y vigilancia que para ellas dispone la Constitución en el numeral 19 del artículo 120.

2. El 2 de septiembre de 1982, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se declaró inexequible el ordinal f) del artículo 6° de la Ley 25 de 1981. En la citada providencia se indica que "la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común que el artículo 120, ordinal 19 de la Constitución atribuye al Presidente de la República, no lo faculta para administrarlas, desplazando a sus directores pues a ello equivale aprobar o improbar los planes y programas de inversión para obras y servicios sociales de las cajas de compensación familiar. Las normas acusadas reproducen esencialmente la norma declarada inexequible por el fallo de la Corte, el 2 de septiembre de 1982".

3. Determinar legislativamente las prioridades de inversión, constituye, según el actor, una injerencia en la administración de las cajas, tanto más si el artículo 61 las autoriza para "organizar conjuntamente obras y programas sociales con el fin de lograr una mejor y más económica atención a los trabajadores beneficiarios y las personas a su cargo". Así, insiste el demandante, se viola ostensiblemente el artículo 30 de la Carta.

4. Dado que el pago de prestaciones sociales a cargo de los empleadores no es un servicio público, y sí, el artículo 39 de la Constitución autoriza al legislador para que ordene la revisión y fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas de servicios públicos, resultaría inconstitucional la norma acusada, pues somete a la Superintendencia de Subsidio Familiar, el control de ciertas tarifas de las cajas, sin tener el Congreso competencia para hacerlo.

V. Concepto del Viceprocurador

El señor Viceprocurador General de la Nación manifestó sus consideraciones, así:

A. 1. Son inexequibles algunas normas de las que acusa el actor pues el intervencionismo, previo mandato legal, corresponde al Ejecutivo que lo desarrolla mediante decretos con fuerza de ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, numerales 4 y 11, en concordancia con el 118-8 de la Constitución.

2. El segundo inciso del numeral 2° del artículo 54, el primer inciso del artículo 63 y el parágrafo del mismo artículo en la parte que consagra la "aprobación oficial", de la Ley 21 de 1982, resultan inconstitucionales en tanto que al repetir el contenido del artículo 6° ordinal f) de la Ley 25 de 1981, debe aplicárseles el mismo criterio que a éste. Puesto que la Corte consideró que la ley no podía otorgar al superintendente la atribución de aprobar o improbar los planes y programas de inversión para obras o servicios sociales, debe imponerse la misma tesis anterior.

3. Resulta que el contenido del parágrafo del artículo 63 que se demanda, constituye desconocimiento no sólo de la libre administración y disposición que tiene una entidad privada, como lo son las cajas de compensación familiar, sobre sus bienes, sino de los derechos adquiridos que ampara el artículo 30 de la Constitución Nacional.

4. Así, concluye el señor Viceprocurador, son inexequibles las disposiciones siguientes: el inciso 2° numeral del artículo 54, el primer inciso del artículo 63 y en el parágrafo del mismo las expresiones "realizadas o", "sin la debida aprobación oficial o", y la frase final: "si tal adaptación no se efectuare en el término señalado o no fuere posible, se ordenará la venta de las obras realizadas".

B. 1. Respecto del numeral 3° del artículo 54 de la ley que se demanda, considera el Viceprocurador General que se ajusta a la Constitución Nacional pues, la aprobación de la autoridad competente al presupuesto anual de ingresos y egresos, constituye un acto de inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común. Esta facultad corresponde al Presidente de la República de conformidad con lo señalado por el artículo 120-19 de la Constitución, y en el caso en estudio, insiste el Viceprocurador, al Superintendente del Subsidio Familiar, en virtud de la delegación otorgada por medio del Decreto 062 de 1976.

2. El artículo 62 que se acusa, señala el concepto fiscal, armoniza con los objetivos sociales consagrados en el artículo 32 de la Constitución, que autoriza la intervención del Estado, y con la protección del trabajo de que trata el artículo 17 de la norma fundamental. Por el contrario, el parágrafo del artículo sobre el que así conceptúa, resulta inconstitucional por infracción de los artículos 76-11, 118-8 y 135 de la Carta, ya que la

delegación contenida en esa norma no podría hacerla el legislador, pues éstas le pertenecen al Presidente por los artículos citados de la Carta, incurriendo en indebida delegación de funciones presidenciales.

3. Sobre el control de las tarifas que autoriza el artículo 64 que se demanda, opina el Viceprocurador, también procede la tacha de inexequibilidad pues contiene, al igual que el 62, vicios constitucionales por indebida delegación de facultades presidenciales en la expresión que dice: "y serán controladas por la Superintendencia de Subsidio Familiar".

VI. Consideraciones de la Corte

Primera. *La competencia*

De conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la demanda que acusa algunos preceptos de la Ley 21 de 1982.

Segunda. *El subsidio familiar y el intervencionismo de Estado*

Las reglas de la Constitución dentro de las estructuras del Estado de Derecho, no son sólo un catálogo de libertades absolutas o limitadas en cada caso y de garantías sociales genéricas, sino además el conjunto de las facultades comprendidas en normas de superior categoría, que permiten, la intervención de los poderes públicos en la economía, entre otros fines, para indicar el uso racional de los bienes y servicios y para que se ejerza especial rectoría en la necesidad de asegurar el mejoramiento armónico e integrado de la Comunidad y de las clases proletarias en particular.

La previsión consagrada en el segundo inciso del artículo 32 de la Carta despeja toda duda sobre el contenido de las normas acusadas. En efecto, esta norma prevé la posible intervención del Estado por mandato de la ley, dentro de los límites del texto constitucional, en la empresa de cualquier naturaleza jurídica, y en la iniciativa privada, siempre que se asegure la libertad de éstas; la dirección de la economía está evidentemente a cargo del Estado, no sólo con el fin de lograr el desarrollo integral, racionalizando y planificando los factores de producción y consumo, sino en procura del pleno empleo de los recursos humanos y naturales.

Según este dispositivo constitucional, ha sostenido la Corte, es a la ley a la que le corresponde "determinar las formas de intervención del Estado en el proceso económico y en el control de las actividades privadas de dicho proceso, sin perjuicio de que, por mandato suyo, el Estado se valga del Estado para poder cumplir los cometidos de la intervención, es decir que por medio de la ley el Estado acuda a su organización administrativa para ejercer y hacer posible la intervención, con tal de que se respete la libertad de empresa, la iniciativa y la propiedad privada" (sentencia de mayo 27 de 1982, Magistrado ponente, doctor Manuel Gaona Cruz).

En desarrollo del artículo 32 de la Carta, el legislador decidió señalar los fines y los procedimientos que se han de seguir para realizar la intervención del Estado de manera directa dentro del sistema económico, en particular en uno de los campos más complejos de la vida social moderna como es el de las relaciones entre el capital, el trabajo y la

seguridad social. Así, las cajas de compensación familiar son una clase de instituciones de origen legal lo que basta para que la ley organice así mismo su funcionamiento en tal forma que exista armónica correspondencia en este aspecto.

Además, las cajas de compensación familiar son entes de especial naturaleza que manejan una prestación social inalienable que surge de la relación entre empleadores y trabajadores y que beneficia a estos últimos y a sus familias. Así se constituye el patrimonio que administran estos entes; por lo mismo, se concluye, el artículo 17 constitucional, que ordena al Estado que ejerza especial protección al trabajo, autoriza a los poderes públicos, en concordancia con el inciso segundo del artículo 32, para que intervenga, por mandato de la ley, para hacer que este factor económico goce de especial protección en procura de su mejoramiento integrado y armónico dentro de la comunidad.

Pero hay más, no es una actividad privada la que cumplen, ni son los bienes que le pertenezcan en la forma de propiedad privada adquirida con justo título, lo que hace a las Cajas entes de derecho privado; todo lo contrario, son las actividades de interés general y los bienes que están destinados a lograr el bienestar de los trabajadores y sus familias lo que las configura como entes de origen legal, y de naturaleza especial que se organizan bajo reglas del derecho privado. Existe en el presente caso interés público de que a través de reglas especiales se organice el pago de una prestación social de origen laboral. No es, pues, cierto que los motivos de utilidad pública o social que informan a la Ley 21 de 1982 se contrapongan con derechos de ningún particular, es todo lo contrario; *el interés público* de la Ley 21 de 1982, complementa y protege los bienes sociales que se conforman con la administración de la prestación social que surge del pago del subsidio familiar a los trabajadores beneficiarios y a sus familias.

Al sostener que a través de la vigilancia y la inspección que ejerce el Presidente de la República sobre instituciones de utilidad común, para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y que se cumpla en todo la voluntad de sus fundadores, como lo hace la demanda y la Procuraduría, se concluye en la exclusión de toda otra facultad o autoridad e injerencia de los poderes públicos sobre las cajas de compensación familiar y se contraría el sentido armónico e integral de la Constitución que permite la intervención de aquéllos en las actividades privadas para la racionalización y planificación de la economía.

Se tornaría en excluyente mecanismo el que contiene el artículo 120-19 de la Constitución, colocando en situación de privilegio a estos entes de naturaleza especialísima frente a los demás que se organicen o puedan organizarse bajo el vigor del orden jurídico-colombiano; por esto es que las leyes no han determinado que sean instituciones de utilidad común, sino entidades de naturaleza especialísima que se hallen sometidos al control y vigilancia en la forma establecida por la ley, los que administren el subsidio familiar de los trabajadores.

La vigilancia y el control de sus actividades, pueden ser organizados por medio de la ley con fundamento en el intervencionismo de Estado en el proceso económico, tanto más, cuanto que la Constitución defiere a aquélla la competencia para determinar el régimen general de las personas jurídicas. Así mismo, lo dispuesto por los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional, significa que dentro del ámbito de una economía de capital

se autoriza a las ramas del poder público para que desplieguen su acción en nombre del Estado sobre los asuntos económicos que de manera excepcional interesen a su funcionamiento y desarrollo.

Es precisamente porque no le es propio a los poderes públicos el intervenir ordinariamente en el desarrollo de las actividades económicas privadas, que esta normatividad constitucional permite al Congreso establecer de manera excepcional los mecanismos legales de carácter instrumental y operativo, dentro de una economía de mercado, para asegurar el cumplimiento y logro de los fines fundamentales que informan el texto constitucional.

Estas normas permiten canalizar los intereses de los distintos grupos sociales, procurando su armonización al coordinar –racionalizando y planificando la economía– los recursos humanos y naturales contrapuestos, dentro de una política de ingresos y salarios. Para ello, resulta necesario desarrollar las instituciones constitucionales que tutelen dichos intereses y, se estima por la Corte en consecuencia, que las normas que se demandan forman parte fundamental de uno de esos propósitos.

Tercera. *Las cajas de compensación familiar y su naturaleza legal*

Por mandato legal las cajas de compensación familiar deben organizarse como corporaciones y obtener el reconocimiento de personería jurídica otorgado por el Poder Ejecutivo; su finalidad predeterminada es el pago del subsidio familiar como una prestación social que nace del vínculo económico entre patronos y trabajadores. Precisamente porque realizan fines sociales que no pueden ser variados sin que la persona jurídica pierda su existencia moral, son entes jurídicos de naturaleza especialísima.

Es el subsidio familiar una prestación social que constituye un valioso instrumento para la consecución de fundamentales fines de política laboral y social del Estado; los beneficios que con él se obtienen no dependen del tipo, modalidad, condiciones o forma de trabajo, sino del vínculo de trabajo en sí mismo considerado. El subsidio familiar es, desde otro punto de vista, un mecanismo para la redistribución de los ingresos, fundamentado en principios universales de bienestar y solidaridad; los entes que lo atienden, son y deben ser corporaciones, no por la voluntad de sus constituyentes sino por mandato de la ley que los organiza y tienen una finalidad que ha sido también impuesta por la ley. No pagar el subsidio o desviar de cualquier manera la atención de su pago, es finalidad que no permite el legislador, pues el patrimonio de las Cajas está vinculado irrevocablemente a la realización del fin que se les señala y que es de trascendencia colectiva frente a los dictados del artículo 17 de la Constitución.

La naturaleza jurídica de las cajas de compensación familiar, aspecto principal de la demanda que ha dado lugar al presente proceso, gira en torno a la definición de esta principal cuestión, que con arreglo a las normas vigentes les corresponde.

Se han señalado ya las características legales de tales entidades que de conformidad con el artículo 39 de la Ley 21 de 1982 "Son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia en la forma establecida por la ley".

Se trata, como sostuvo la Corte en la sentencia del 12 de agosto de 1976, de entidades de naturaleza especialísima que por ministerio de la ley puedan crear los particulares con fines eminentemente sociales y sin ánimo de lucro.

Ahora bien, definida explícitamente por la ley la naturaleza, las funciones y el régimen propio de las Cajas de Compensación no corresponde a la Corte deducir su asimilación a otras categorías jurídicas y no es ello necesario teniendo presente el mandato del artículo 39 de la Ley 21 de 1982, en cuanto determina que el control y vigilancia que sobre ellas compete a la organización estatal se ejercerá en la forma establecida por la ley. En este sentido cabe indicar que la ordenación del control sobre las Cajas se contiene primordialmente en disposiciones de las Leyes 25 de 1981, 21 de 1982, y Decreto-ley 062 de 1976, entre ellas las que se encuentran *sub-judice*.

Cuarta. *Las normas acusadas*

1. El numeral 2° del artículo 54 es la manifestación expresa y directa de la intervención operativa del Estado en un especial campo de las relaciones económicas de la sociedad colombiana; no trata la norma de marginar a los administradores o gestores de la actividad desarrollada por estas especiales entidades, pues establece un mecanismo práctico e instrumental del ejercicio de la intervención que no desborda la libre iniciativa ni limita la libertad de estas empresas para constituirse bajo las reglas del derecho privado, como corporaciones, siempre que lo hagan sin ánimo de lucro y que cumplan funciones de seguridad social. Todo porque es ésta su naturaleza propia y además así lo dispuso el legislador, en tanto que el constituyente le ordena intervenir también para lograr que el desarrollo económico tenga como objetivo principal precisamente la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular.

Dispone esta norma que sean los planes y programas de inversión y de organización de los servicios sociales, no la inversión ni la ejecución de estos planes y programas, los que deban someterse, adoptados previamente por los Consejos Directivos de cada caja, a la aprobación de la Superintendencia de Subsidio Familiar, en acatamiento de la ley que ordena la intervención. La Superintendencia debe estudiar, de conformidad con esta norma, los planes y programas que se señalan, en lo concerniente al cumplimiento estricto del orden de prioridades que indica el mismo artículo 62, también demandado, y que se estudia más adelante. Entender de otra manera la voluntad del legislador tuerce el sentido de la norma que se analiza; la facultad de la Superintendencia para aprobar o improbar los planes y programas a que se refiere el numeral 2° del artículo 54, es exclusivamente de control del uso y destino de la prestación y a este punto debe ceñirse la interpretación que de él se haga.

En consecuencia, se entiende que esta facultad no desplaza de la administración a los directores de las Cajas de Compensación Familiar, pues estos conservan la iniciativa, el impulso y el manejo de la entidad, sólo que en materia de planes y programas de inversión y en la organización de los servicios sociales, deben someterse a la aprobación de la Superintendencia en el preciso punto del acatamiento del orden de actividades generales establecido. Las funciones de seguridad social, laboral y familiar que cumplen las cajas de compensación familiar, son autorizadas e intervenidas por el Estado, para

asegurar que éstas se desarrollen por unos caminos y hacia unos fines predeterminados por la misma ley de intervención, siempre en procura de la protección al trabajo de la justicia social y del mejoramiento armónico de la comunidad y de los trabajadores en particular.

El someter al estudio y aprobación de la Superintendencia de Subsidio Familiar los planes y programas a que deben ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales, que previamente hayan adoptado los Consejos Directivos de las Cajas en consonancia con el orden de prioridades que fija la misma ley, no convierte al ente público que ejecuta la intervención, en coadministrador; sólo ejerce funciones de rectoría o tutoría social la Superintendencia, cuando aprueba o imprueba los planes y programas adoptados.

Tanto el actor como el señor Viceprocurador se refieren en sus escritos al ordinal f) del artículo 6° de la Ley 25 de 1981, declarado inexequible por fallo de la Corte de fecha 2 de septiembre de 1982, y consideran que debe imponerse la misma tesis anterior en relación con el numeral 2° del artículo 54 de la Ley 21 de 1982. Sin embargo, la Corte considera ahora exequible esta última norma por el nuevo entendimiento que tiene sobre la naturaleza especialísima de las cajas de compensación familiar y sobre las facultades de la ley de intervención económica que se han analizado en los puntos anteriores.

La función propia del Ejecutivo que consagra el artículo 135 de la Carta en materia de delegación de funciones, tampoco puede limitarse por la intervención ni ésta por aquélla, ya que estas figuras no se contraponen sino se complementan, pues de otra manera el legislador no podría ejercer el mandato de intervención, que le compete constitucionalmente, si estuviese limitado a que el Ejecutivo ordenase discrecionalmente y a voluntad, por decreto, la mentada delegación, sin que sea ésta la voluntad constituyente que inspira el contenido de los artículos 19 y 32 de la Constitución.

El mandato de la ley en materia de intervención es precisamente una potestad que se advierte con mayor fuerza en el campo de la administración pública, en virtud de que ésta cuenta con los instrumentos adecuados para obtener los objetivos de la justicia social, porque se ha desarrollado de manera paulatina y compleja, ya que comprende hoy no sólo a las dependencias tradicionales de la administración centralizada, sino también a un número creciente de los organismos públicos descentralizados, adscritos o vinculados a ella y así ejerce control sobre un conjunto amplio de actividades de interés y utilidad públicos. El Congreso a través de la ley puede desarrollar los principios de la justicia social con la creación y fomento de los instrumentos operativos, de carácter administrativo, que les den aplicación a esos principios fundamentales.

2. No comparte la Corte, el criterio del señor Viceprocurador General de la Nación, en lo que respecta al numeral 3° del artículo 54 que se acusa y considera que éste resulta también exequible, pues la aprobación al presupuesto anual de ingresos y egresos de las cajas de compensación familiar que ordena la Ley 21 de 1983, es parte de las funciones que la ley agrega a la Superintendencia del Subsidio Familiar. En armonía con el sentido de este fallo, la asignación de estas funciones no contraviene el principio de separación y colaboración armónica de los poderes públicos, pues lo complementa en este caso.

Las funciones de inspección y de vigilancia que sobre estas entidades ejerce el Superintendente de Subsidio Familiar, de conformidad con las Leyes 25 de 1981 y 21 de 1982, las realiza por mandato de estas leyes de intervención; por lo que la disposición

contenida en el numeral 3° del artículo 54 que se analiza, no invade la esfera de competencia del Ejecutivo. En consecuencia, también se declara constitucional esta norma, como en efecto se hará.

3. El artículo 62 de la Ley 21 de 1982, establece los campos exclusivos de realización de las *obras y programas sociales* y el orden de prioridades de los mismos, que deben cumplir las cajas de compensación cuando se trate de atender el pago del subsidio en especie o en servicios.

Con el mismo predicamento anterior, entiende la Corte que es competencia propia del legislador la de intervenir en este campo de la vida económico-social, encauzando un particular ejercicio de utilización, distribución y consumo de bienes para racionalizar la economía, con el fin de lograr el desarrollo integral y la protección especial al trabajo. La decisión legislativa que en este sentido contiene la norma que se examina, no atenta contra el artículo 30 de la Carta, pues no es precisamente la propiedad privada la que se vería afectada con este señalamiento racionalizador de la utilización de bienes y servicios sociales.

Es cierto que algunos bienes de origen distinto al de la misma prestación, pueden engrosar el patrimonio de la persona moral que administra la prestación, empero este es asunto bien diverso del que aquí se examina; se trata precisamente de las obras y programas sociales que tengan como fin el atender el pago en servicios o especie del subsidio familiar y no de otro tipo de planes y programas del ente jurídico o del funcionamiento del mismo, ni de otro tipo de bienes distintos de los que provienen del derecho económico social del trabajo.

En esta norma el legislador señala el orden de prioridades de atención de ciertas necesidades fundamentales de los trabajadores en armonía con el artículo 32 de la Carta y en acatamiento del artículo 17 de la misma, dentro del campo de su competencia interventora, por lo que no se afecta ni se desbordan los límites de estas disposiciones constitucionales.

4. Respecto del parágrafo que se acusa, cabe mencionar la ausencia del concepto de la violación en el escrito de la demanda, aunque parece que se quiere hacer extensivo a toda la norma objeto de reparo, el que consiste en señalar como ostensible violación del artículo 30 de la Carta la indebida injerencia de la ley en la administración de las cajas como personas jurídicas de derecho privado, al señalar el orden de prioridades de inversión. La Corte considera que la figura jurídica del parágrafo del artículo *sub examine*, es sólo la adscripción legal de las funciones y deberes que de manera autónoma el legislador encarga a una dependencia administrativa, dentro de su potestad de ordenarlo, en la ley de intervención y que autoriza el artículo 32 constitucional. Como se repite, es una norma que procura, como fin propio, la racionalización de la economía dentro de los límites del bien común, por medio de la cual el legislador determinó una forma de intervención del Estado y en la que acude a la administración para señalar deberes y funciones públicos de contenido administrativo que ésta necesita en acatamiento del mandato de aquélla; pues, utilizar un organismo técnico-administrativo dentro de la estructura general de la administración, para racionalizar aspectos particulares de los factores del proceso productivo, no requiere delegación presidencial dentro de la intervención del Estado, siempre que sea la ley la que ordene dichos cometidos como ocurre en la norma que se cuestiona.

5. El artículo 63 resulta, a juicio de la Corte, exequible; corresponde el análisis que sobre éste se realiza a los mismos criterios que se exponen para el artículo 59 de la Ley 21 de 1982. De esta forma el legislador fija unos límites a la intervención que ordena pues, con ella se reglamenta la facultad de aprobar o improbar los programas y obras sociales y la limita a la verificación del cumplimiento del orden de prioridades que establece el artículo 62. Ciertamente esta es una consecuencia de la facultad interventora de los poderes públicos, empero no se desplaza con ella de la administración a los encargados de la misma. En tanto que la facultad a la que se refiere esta norma se ve así limitada, no es discrecional sino reglada; señala cómo debe ser la intervención en este caso, pues, no se propone suplir ni la iniciativa ni la orientación propiamente administrativa, sino establecer los caminos y los principios de la actividad que se interviene. Cabe pues, el juicio de exequibilidad también a la parte inicial del artículo 63, ya que no puede pensarse que esta facultad implique atribuciones sobre la administración interna que podrían suponerse, de no limitarse ésta a la verificación del cumplimiento del orden de prioridades que señala la ley.

6. Respecto del parágrafo del artículo 63, la Corte no encuentra reparo de constitucionalidad por las razones que también se exponen en este fallo. Se observa que no consiste este dispositivo legal en el desconocimiento de la administración de los bienes de que gozan las personas privadas, sino un instrumento de regularización de la mala administración en la que pueden incurrir estas entidades. Se trata de la limitación a la libre empresa e iniciativa privadas, pero dentro del bien común tal como lo ordena el inciso primero del artículo 32; bien común que surge de la Constitución Nacional, de la ley y de la actividad misma que se atiende.

Sin duda el bien común que las configura se fundamenta en el objeto y la finalidad, en el origen y destino de los bienes, en la naturaleza del patrimonio, en el carácter prestacional del servicio que atienden, en el origen legal de su organización, en la utilidad social que las conforma, en el propósito social que persiguen y en el interés que deben atender las cajas de compensación familiar, en el orden jurídico colombiano.

Además, se dispone que las inversiones en obras y programas sociales y las realizadas o que se realicen con los recursos destinados a atender gastos de instalación, administración y funcionamiento por las cajas de compensación familiar, sin la debida aprobación oficial o en contravención de disposiciones legales y que no cumplen con los objetivos del subsidio, deben, atendiendo al bien común y dentro de los límites constitucionales propios de la intervención en la economía, adecuarse a las normas legales y reglamentarias. La Corte estima que esta parte inicial del parágrafo en examen no contraviene la Constitución y por lo mismo habrá de declararla constitucional.

La parte final del mismo exige mayor análisis, así: esta norma preceptúa que si la adaptación a las normas legales y reglamentarias no se efectuare en el término señalado por la Superintendencia, o no pudiese efectuarse, se ordenará la venta de las obras realizadas. También aparece como constitucional el texto que en particular se analiza, pues se tiene aceptado por la Corte, que las cajas de compensación familiar son instituciones para las que se ordena asignar los recursos necesarios con el fin de satisfacer las necesidades de las familias de los trabajadores. En cuanto estos bienes constituyen, por mandato de la ley y de la Constitución un derecho social adquirido, circunscrito en

beneficio exclusivo de los trabajadores, la Carta de manera incontrovertible prohíbe su desmejora, incluso al Ejecutivo cuando en desarrollo del Estado de Emergenciaeconómica expida los decretos legislativos que le compete.

Así mismo, la Corte entiende que esta disposición antes que desmejora es garantía y protección pública a ese derecho social adquirido, que debe cuidarse de desvíos y usos contrarios a su naturaleza. El patrimonio de estas entidades es un conjunto de bienes con la finalidad referida, son pues, particulares derechos de contenido social que no entran en conflicto con el interés social. La orden de venta de las obras realizadas en contravención de las leyes y los reglamentos o sin la debida aprobación oficial, con los recursos destinados a atender gastos de instalación, administración y funcionamiento, o para cubrir inversiones en obras y programas sociales *siempre* que no cumplan los objetivos del subsidio, dispuesta por la Superintendencia de Subsidio Familiar, no atenta contra la propiedad privada, por el contrario, no conduce la norma *sub examine* a desmejora alguna de la propiedad; supone violación y desvíos en la afectación pública que la ley ha hecho de las actividades de estas entidades, que deben corregirse incluso con la venta de las citadas obras, para conservar y proteger el derecho y el interés social que ellos representan y traducen.

Todo desvío del interés social que afecte las actividades y los cometidos legales de la función a que están destinados los bienes que se forman con la prestación social en las cajas de compensación familiar, porque no cumpla con los objetivos del subsidio, atenta contra los fines de la intervención que ordena la Ley 21 de 1982, por lo que debe evitarse o eliminarse. La norma establece con precisión los casos en los que el desvío del fin público por el destino indebido de las obras afectadas al subsidio debe frenarse, y señala el procedimiento legal para eliminar la perturbación. De no proceder la venta de las obras indebidamente realizadas, en el concreto sentido que le da la ley a esta situación probable, éstas frustarían la inversión o se constituirían en una singular y gravosa carga en contra de la prestación social misma, así como de su uso y goce. Se propone corregir esta norma, el uso indebido de los bienes que tienen por definición un contenido jurídico distinto del que señala la ley civil para los bienes de los particulares y procura asegurar que el manejo de los mismos por estas entidades jurídicas de origen legal, sea siempre controlado por el organismo administrativo competente.

Por lo anterior entiende la Corte que no existe ninguna limitación al derecho de propiedad en la norma que se analiza, sino que por el contrario, ella conforma otro mecanismo operativo de la administración, que ejecuta el mandato interventor del Estado, y en consecuencia, declarará constitucional la norma estudiada.

7. El artículo 64 que también se acusa, merece así mismo el análisis suficiente que despeje la tacha de inconstitucionalidad que le atribuye el actor. Considera la Corte que esta norma es también el resultado de una solución racional producto de la actividad interventora del Estado en la economía, de conformidad con los artículos 32 y 17 de la Carta; el permitir que los Consejos Directivos de las Cajas de Compensación Familiar fijen tarifas diferenciales progresivas para las obras y programas sociales, teniendo como base los niveles de remuneración y haciendo que los más bajos sean para aquellos trabajadores beneficiarios que reciban menos ingresos, constituye una fórmula racional que intervienen en la distribución y el consumo de una parte de los bienes y servicios de la comunidad, con el fin de lograr el desarrollo integral. Aunque en principio no todo el

público pueda acceder a ellos en la misma proporción que los trabajadores afiliados, precisamente por ser programas sociales los que atienden las cajas, sus servicios se abren al público y existe el interés público definido en la ley de que estos sean sociales y no privados. Al señalar que las tarifas de los servicios sociales que se prestan a los beneficiarios del subsidio, pueden ser diferenciales, no impone la ley control de tarifas de servicio alguno y por lo mismo no se trata de la figura del artículo 39 de la Constitución Nacional sino de la de 32 y del 17, la que permite al legislador intervenir en la economía, con la indicación que contiene el inciso primero de la norma que se analiza, por lo que se declarará constitucional.

Así mismo, el inciso segundo del artículo 64 resulta constitucional de conformidad con el análisis que en este fallo se hace dentro del esquema de la intervención del Estado. El legislador establece en esta norma un instrumento que quiere evitar el desvío y el uso o destino indebido de los recursos que se constituyen con la prestación. Al extenderse los servicios sociales que se presten con los recursos del subsidio familiar a particulares distintos de los trabajdores y demás beneficiarios, no puede extenderse también el subsidio que pertenece al trabajador y a su familia; esta norma protege el derecho al subsidio y asegura su integridad.

En la norma *sub examine,* la Superintendencia de Subsidio Familiar no controla las tarifas sino en cuanto que éstas se determinen teniendo como base los costos de operación y mantenimiento y en que no sean subsidiadas. No se controlan los precios en el sentido del artículo 39 constitucional, sino que se evita que los subsidios se extiendan a no beneficiarios y que se conduzca a desvíos en el manejo y en el fin del subsidio como prestación social y derecho inalienable de los trabajadores. Esta norma no constituye un mecanismo orientador y regulador de la economía en general; establece sólo un instrumento de control del ejercicio y del manejo de la prestación para evitar que se le dé un uso que no forma parte de su naturaleza. Se evita que se extiendan los beneficios a quienes no son titulares del derecho y que con ello se distorsione el goce del mismo como tal. Se encuentra que procede la declaratoria de su constitucionalidad.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Viceprocurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar EXEQUIBLES los artículos 54, numerales 2° y 3°; 62 numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y parágrafo; 63 parágrafo y 64 de la Ley 21 de 1982.

Cópiese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez.

ESTATUTO SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ABOGACIA, ENTIDADES ENCARGADAS DE SANCIONAR LAS FALTAS EN EL EJERCICIO DE LA MISMA. TRIBUNAL DISCIPLINARIO. TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL. EL PRINCIPIO DE LA SEPARACION DE PODERES NO ES ABSOLUTA Y SE VE ATENUADO POR LA COLABORACION ARMONICA QUE LA CONSTITUCION ORDENA ENTRE LAS DISTINTAS RAMAS DEL PODER PUBLICO.

Exequible el artículo 66 de la Ley 196 de 1971.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 33.

Referencia: Expediente número 1540.

Norma acusada: Decreto número 196 de 1971. Artículo 66.

Actor: *Vicente Noguera Paz.*

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobada por Acta número 13.

Bogotá, D. E., marzo veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano Vicente Noguera Paz, presentó demanda de inexequibilidad contra el artículo 66 del Decreto Legislativo número 196 de 1971. Una vez admitida se corrió traslado de ella al Procurador General de la Nación quien ha emitido su concepto por lo cual la Corte va a decidir lo que corresponda.

I. Texto de la norma acusada

El artículo 66 del Decreto número 196 de 1971, dice lo siguiente:

"Artículo 66. La jurisdicción disciplinaria se ejerce:

1. Por el Tribunal Disciplinario creado por el artículo 217 de la Constitución, que conocerá en segunda instancia por apelación o consulta, y

2. Por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, que conocerán en primera instancia de las infracciones cometidas por los abogados en el territorio de su jurisdicción".

II. Concepto de la violación

El demandante sostiene que se violaron los artículos 217 y 141-3 de la Constitución, porque:

El texto cuestionado atribuyó al Tribunal Disciplinario una competencia que no está prevista en el artículo 217 de la Constitución y además desconoció la competencia exclusiva que el artículo 141 numeral 3° de la Carta asigna al Consejo de Estado como Tribunal de lo contencioso-administrativo.

Dice el actor que la jurisprudencia y la doctrina tienen establecido que las faltas y sanciones disciplinarias son de carácter administrativo, por lo cual no es jurídico que la competencia para investigar y fallar se atribuya a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial.

III. Concepto del Procurador

El Procurador General de la Nación considera que el texto acusado es exequible y solicita de la Corporación que así lo declare; para lo cual argumenta que en la sentencia del 4 de abril de 1974, la Corte al referirse a la expresión "demás funciones" de que trata el artículo 217 de la Constitución, sostuvo que ellas pueden ser las relacionadas con el procedimiento, forma de deliberar e inclusive la actuación en otros campos no reservados constitucionalmente a competencias distintas, por ejemplo, las faltas de los abogados en su desempeño profesional. De manera que no hay duda de que la disposición demandada no infringe el canon superior citado cuando atribuye competencia al Tribunal Disciplinario para el conocimiento en segunda instancia de dichas faltas contra los deberes profesionales.

Si bien es cierto, dice el Procurador, que la acción disciplinaria es de carácter administrativo, esto no significa que sea necesariamente de competencia de la justicia contencioso-administrativa, porque su campo de aplicación debe determinarlo la ley, y porque la actuación contencioso-administrativa también es jurisdiccional y no administrativa como lo supone el actor. Aunque la norma debatida asigne competencia a los Tribunales Superiores de Distrito, por ese hecho la acción disciplinaria no se convierte en judicial, ya que los tribunales efectúan también actos administrativos.

V. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

El texto legal acusado integra un decreto ley expedido en ejercicio de las facultades legislativas conferidas al ejecutivo, ante lo cual a la Corte corresponde decidir sobre su cuestionada constitucionalidad.

2. *Temporalidad*

El Congreso mediante la Ley 16 de 1968 facultó al Presidente, por tres años, entre otras materias, según el numeral 7° de su artículo 20, para "dictar un estatuto sobre el

ejercicio profesional de la abogacía, faltas de ética, sanciones y procedimientos ya para crear o señalar las entidades competentes para imponerlas". Ellas comenzaron a regir el 29 de marzo de 1969, día de la promulgación de la ley en el Diario Oficial número 32467, del 1° de marzo de ese año. En ese aspecto el artículo 66 no viola la Constitución.

3. *Materialidad*

El Título VI del Decreto Legislativo número 196 de 1971, regula el régimen disciplinario de la abogacía y su capítulo III indica que los entes que en nombre del Estado conocen de la acción disciplinaria, sirven la jurisdicción disciplinaria según la competencia legal atribuida. De este capítulo hace parte el artículo demandado, el cual encaja materialmente dentro de las facultades extraordinarias, sin infracción, de la Constitución en tal sentido.

4. *Función jurisdiccional y estatuto disciplinario*

Dice el artículo 55 de la Constitución Nacional: "Son ramas del Poder Público, la Legislativa, la Ejecutiva y la Jurisdiccional.

"EL Congreso, el Gobierno y los jueces tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado".

El principio de la separación de poderes que consagra la Constitución en el texto que acaba de transcribirse y en otros concordantes, da lugar a que por regla general la función legislativa sea tarea del Congreso; la Ejecutiva, en sus distintos aspectos, corresponde a autoridades gubernamentales y administrativas cuya suprema autoridad es el Presidente de la República; y la Jurisdiccional, a la Administración de Justicia.

Este principio no es absoluto y se ve atenuado por la colaboración armónica que la propia Constitución ordena que se dé entre las distintas ramas del Poder Público. Por ello, de modo excepcional, en los términos precisos que la Constitución establece, cada rama del poder realiza funciones diferentes a las que por su naturaleza le competen.

Es así como las autoridades judiciales cumplen, en efecto, funciones administrativas que han sido directamente asignadas por la Constitución, tales como el nombramiento de magistrados o jueces, o por la ley, en desarrollo de atribuciones que aquélla le ha señalado para organizar su composición y funcionamiento.

Considera la Corte que las atribuciones administrativas que se vienen mencionando tienen que ver con la administración de la función, ya que la actividad de los jueces no puede circunscribirse de modo exclusivo a producir actos jurisdiccionales sino que ellos deben cumplir otros actos tendientes a realizar lo que por naturaleza les corresponde. Dichos actos se hallan en relación de medio a fin respecto de la función jurisdiccional. Ello significa que la ley sólo puede asignarles a las autoridades judiciales las atribuciones necesarias para el cabal ejercicio de sus funciones y no otras que competen a las autoridades ejecutivas.

Hechas estas consideraciones, es menester examinar la naturaleza jurídica de las atribuciones conferidas por la disposición acusada a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y al Tribunal Disciplinario, así como la ubicación de éste último dentro de las ramas del poder público del Estado colombiano.

Considera la Corte que las sanciones disciplinarias que aplican los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Disciplinario, en virtud de la norma acusada, tienen claro sentido jurisdiccional, pues no son susceptibles de controversia jurídica, dado que tienen efecto de cosa juzgada. Es por ello que el artículo 82 C.C.A. ha excluido del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa "las sanciones que imponga el Tribunal Disciplinario".

Dicho Tribunal, por la índole de las funciones que le asigna el artículo 217 de la Carta, debe ser considerado como una autoridad jurisdiccional, aunque no forme parte de la estructura que prevé el Título XV de la Constitución, que versa sobre la Administración de Justicia, como tampoco está ahí comprendido el Consejo de Estado, cuyo carácter jurisdiccional, es inobjetable, así cumpla determinadas funciones de orden administrativo como las de consulta.

No sobra advertir que el artículo 152 de la Constitución autoriza a la ley para determinar las funciones de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y que lo mismo prevé el artículo 217 ídem, respecto del Tribunal Disciplinario, entendiéndose desde luego que se trata de funciones jurisdiccionales o las administrativas necesarias para la realización de aquéllas y que no hayan sido atribuidas por la Constitución a otras autoridades.

Ha dicho la Corte respecto de esta última disposición, que las "demás funciones" que por ley sea posible asignar al Tribunal Disciplinario son, por ejemplo, "las que tocan con el procedimiento, forma de deliberar, e inclusive en la actuación en otros campos no reservados constitucionalmente a competencias distintas, por ejemplo, las faltas de los abogados en su desempeño profesional" (sentencia abril 4 de 1974, por Luis C. Pérez, G.J.T. CXLIX-CL Nos. 2340-2341, pág. 343; y sentencia noviembre 13 de 1985, ponente Aurelio Camacho Rueda, G.J.T. CLII y CLIII Nos. 2393 y 2394, pág. 227).

Siendo la potestad disciplinaria respecto de los profesionales del derecho en los términos en que la han desarrollado el Decreto número 196 de 1971 y el Código Contencioso-Administrativo, un aspecto de la función jurisdiccional del Estado, no ve razón la Corte para considerar que es contrario a la Constitución el haberla adjudicado a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en primera instancia y en segunda al Tribunal Disciplinario.

Lo dicho no se opone a que las autoridades administrativas apliquen, dentro de la órbita de sus funciones, medidas disciplinarias que, desde luego, deben ser siempre susceptibles de revisión por parte de las autoridades jurisdiccionales, que son las llamadas a decir la última palabra en lo atinente a las controversias que se susciten por la aplicación de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico.

VI. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído en concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 66 del Decreto-ley número 196 de 1971.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

LA MANIFESTACION DE QUE EL ARTE INDIGENA PERTENECE AL PATRIMONIO CULTURAL, AFIRMA LOS VALORES DE LA NACIONALIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS DE DOMINIO QUE SOBRE LA CREACION ARTISTICA LES CORRESPONDAN A SUS AUTORES. EL ARTE INDIGENA, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES INCLUSIVE DANZAS, CANTO, ARTESANIAS, DIBUJOS, ESCULTURAS PERTENECE AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION.

Exequible el artículo 189 de la Ley 23 de 1982.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 34.

Referencia: Expediente número 1537.

Acción de inexequibilidad contra el artículo 189 de la Ley 23 de 1982.

Actor: *Miguel Gil.*

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según Acta número 14.

Bogotá, D. E., abril dos (2) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. ANTECENDENTES:

El ciudadano Miguel Gil en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional solicita a la Corte que declare inexequible el artículo 189 de la Ley 23 de 1982.

De la demanda se dio traslado al Procurador General de la Nación, quien se declaró impedido para conceptuar por haber participado en su calidad de representante a la Cámara, en la elaboración y expedición de la Ley 23 de 1982. La Sala Constitucional aceptó el impedimento y de conformidad con lo previsto en el numeral 1° del artículo 4° de la Ley 25 de 1974 pasó el libelo a concepto del

Viceprocurador General de la Nación y una vez rendido entra la Corte a resolver sobre la petición incoada, previas las siguientes consideraciones.

II. Norma acusada

El texto literal de la disposición acusada es como sigue:

"LEY 23 DE 1982
(enero 28)
"Sobre derechos de autor

".....

"Artículo 189. El arte indígena, en todas sus manifestaciones, inclusive danzas, canto, artesanías, dibujos y esculturas, pertenece al patrimonio cultural".

III. Textos constitucionales que se dicen violados y razones de la violación

Considera el actor que la disposición transcrita viola los artículos 16, 17, 30 y 35 de la Constitución Política conforme a los siguientes razonamientos:

1. El artículo 35 porque: "todos los nacionales colombianos tienen el derecho a ser reconocidos autores y por lo tanto, de ese derecho deben gozar los indígenas en su calidad de nacionales colombianos"; y la ley transfiere la propiedad literaria y artística de los indígenas y en general las manifestaciones culturales de los aborígenes al nebuloso patrimonio cultural, privándolos del derecho que les reconoce la Constitución.

2. La violación del artículo 16 de la Carta se configura porque al establecer la norma acusada que las obras de arte indígena pertenecen al patrimonio cultural quebranta el principio de igualdad de las personas frente a la ley que se deriva de los artículos 16, 17 y 30 de la Constitución.

IV. Concepto del Viceprocurador General de la Nación

El Viceprocurador General de la Nación considera que el precepto demandado es exequible y solicita a la Corte que así lo declare.

Para arribar a la anterior conclusión analiza el significado etimológico de las expresiones "patrimonio cultural" y "arte indígena" contenidas en la disposición impugnada y su connotación sociológica y humanística, para decudir que el patrimonio cultural "no es una creación legal sino una realidad social, pues existe independientemente de su reconocimiento normativo y, por tal razón, el artículo demandado, no tiene efectos diferentes a los de reivindicar los valores ancestrales de los diferentes grupos étnicos que tipifican nuestra nacionalidad".

Y no obstante que la disposición acusada se encuentra dentro del capítulo denominado *"del dominio público"* esto no significa, como lo sostiene el demandante, que el arte indígena haya dejado de ser propiedad privada de cada uno de sus

autores, si estos son conocidos, puesto que una cosa son las obras que pertenecen al dominio público, taxativamente enunciadas en el artículo 187 de la misma ley y otra es el reconocimiento del arte indígena como patrimonio cultural que hace el precepto demandado, el cual como se dijo, no implica limitación de ninguna naturaleza.

Finalmente, con apoyo en las reglas generales de interpretación de la ley contenidas en los artículos 28 y 29 del Código Civil, anota el Colaborador Fiscal que las expresiones "patrimonio cultural" son de contenido y significación sociológicos y así deben entenderse sin que sea dable atribuirles el sentido jurídico de bienes de la Nación de uso público definidos por el artículo 674 del Código Civil como parece entenderlo el actor.

V. Consideraciones de la Corte

La norma demandada forma parte de una ley, por lo tanto, la Corte es competente para conocer de la demanda y decidir definitivamente sobre su exequibilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 214 de la Constitución Nacional.

El ataque central del acusador se basa en un supuesto desconocimiento de los derechos de autor de los indígenas como consecuencia de haber dispuesto la norma objeto de impugnación que sus obras pertenecen al patrimonio cultural, contrariando así, flagrantemente, el artículo 35 que tutela la propiedad literaria y artística. Para la Corte el anterior cargo carece de consistencia pues la ley, en la disposición acusada, no regula dicha propiedad, sino que sin perjuicio de los derechos que de ella se derivan para sus titulares, declara solamente que el arte indígena pertenece al patrimonio cultural, afirmación de los valores de la nacionalidad, pero con independencia de los derechos de dominio que sobre la creación artística les corresponden a sus autores; de cierta manera esta declaración es superflua dado que todo lo que el hombre crea material o espiritualmente pertenece a la cultura que viene a abarcar así la totalidad de las significaciones (conocimientos), valores y normas gestados en el seno del grupo humano que conforma y que se manifiestan a través del arte, literatura, religión, filosofía y ciencia en general.

No puede dársele pues, a las expresiones que utilice el legislador, la connotación económica que le asigna el actor, como pasa a explicarse.

Para entender su significado y alcance, debe partirse del análisis de lo que es la cultura, término estrictamente técnico de la sociología contemporánea, como suma de ideologías, conocimientos, actos u obras humanas en sus múltiples manifestaciones y normas de conducta creadas en el proceso de socialización, al punto de poderse afirmar que todo lo que el hombre hace es parte de su cultura y está ligado con la vida y supervivencia del grupo social y determina a la vez la personalidad social permitiendo establecer diferencias entre una sociedad y otra.

Entendido el patrimonio cultural como el conjunto de significaciones que manifiestan y simbolizan los valores de una sociedad, resulta ajeno al concepto de los derechos susceptibles de valoración económica. Por lo tanto la declaración de que el arte indígena pertenece al patrimonio cultural sólo constituye exaltación de los

valores de la nacionalidad con implicaciones respecto de su conservación y aprecio, más no implica entrega o traspaso de los derechos de autor a persona distinta de sus creadores, pues no es el patrimonio cultural persona jurídica que pueda adquirir derechos y contraer obligaciones.

El artículo 35 de la Constitución Nacional consagra la propiedad literaria y artística como propiedad transferible por el tiempo de vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades que prescriba la ley y ofrece igual garantía a los propietarios de obras publicadas en países de lengua española, sin que haya necesidad de celebrar para el efecto convenios internacionales.

La Ley 23 de 1982 de la cual forma parte el artículo materia del cuestionamiento, es desarrollo del anterior principio, en ella se establece la protección de todas las creaciones del talento humano en el campo científico, literario y artístico.

En orden a la efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual la ley ampara la exclusividad temporal de los derechos patrimoniales y la perpetua de los derechos morales que consagra como inalienable e irrenunciables; los cuales comprenden entre otros la facultad de exigir la fidelidad del texto y título de la obra o de oponerse a que la obra se altere o modifique. Regulaciones éstas que plasman criterios doctrinarios universales sobre la propiedad intelectual, que la distinguen del derecho común de dominio que recae solamente sobre bienes materiales, es perpetua y el derecho que confiere es estrictamente patrimonial.

Ahora bien, frente a los postulados constitucionales que protegen la propiedad (artículos 30 y 35), no se advierte en qué medida puedan resultar quebrantados por la disposición acusada, pues ella no transfiere o desplaza el dominio de sus titulares al "patrimonio cultural", ni les niega tampoco la facultad de reivindicarlos.

Analizado el precepto frente al artículo 30 de la Constitución es evidente que no puede interpretarse como una declaración de utilidad pública o de interés social que hace el legislador como primer paso o requisito de la expropiación del dominio a los autores indígenas, puesto que debe tenerse en cuenta que ella sólo puede tener cabida mediante la concurrencia de ley que declare de utilidad pública o interés social la adquisición del dominio, acto condición de la administración referido a un bien determinado y sentencia judicial que fije el importe de la indemnización.

Como lo hace notar el colaborador fiscal, el artículo 189 acusado se encuentra dentro del Capítulo XIV que se titula *"Del dominio público"*. Empero ello no es suficiente para que se configure su inconstitucionalidad, puesto que las diferentes expresiones del arte indígena no fueron relacionadas en el artículo 187 de la Ley 23 de 1982 entre las obras que pertenecen al dominio público, sin desconocer que existan obras del arte indígena que pueden eventualmente transformarse en dominio público por expirar el término de su protección que fijan la Constitución y la ley, o de creaciones folclóricas o tradicionales cuya autoría es difícil de establecer, como la literatura indígena de tradición oral, etc.

De otra parte, de la consulta de los antecedentes de la ley y de la interpretación del precepto acusado dentro del contexto de la misma, abundan razones que ponen de manifiesto la inconsistencia del cargo.

En efecto, revisando la exposición de motivos en que el Gobierno apoyó su iniciativa se encuentra consignado en forma enfática que "el espíritu del presente proyecto no ha sido otro que el de establecer una expresa y efectiva protección del autor en todas sus manifestaciones creativas"; por lo tanto, no resulta lógico que se haya querido incluir, dentro de un cuerpo normativo inspirado y orientado en el principio anterior, una disposición que desconozca los derechos de propiedad intelectual a los indígenas.

Finalmente, por no advertirse la discriminación que anota el demandante en contra de los autores indígenas, ya que la norma impugnada no interfiere ni afecta los derechos de propiedad intelectual que les corresponde como creadores de obras artísticas, quedan sin piso las tachas de inconstitucionalidad por presunta violación de los artículos 16, 17 y 30 de la Carta.

V. Decisión

Con apoyo en las precedentes consideraciones la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de su Sala Constitucional y acorde con el concepto fiscal,

Resuelve

Declárase EXEQUIBLE el artículo 189 de la Ley 23 de 1982.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia,

DEJA CONSTANCIA:

Que el Magistrado Nemesio Camacho Rodríguez, no asistió a la Sala Plena celebrada el día dos (2) de abril de mil novecientos ochenta y siete (1987), por encontrarse con excusa justificada.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

ESTATUTO CONTRACTUAL DE LAS INTENDENCIAS Y COMISARIAS. UN REGIMEN O ESTATUTO FISCAL ABARCA TODOS LOS ASPECTOS QUE INTERESAN A LOS BIENES, RENTAS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION, AL MANEJO, DESTINO Y UTILIZACION DE LOS MISMOS, LA CONTRATACION Y OBVIAMENTE EL DEBIDO CONTROL SOBRE TODAS LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES. EXCLUIR DE ESE CONJUNTO LA *GESTION DE VIGILANCIA* IMPLICA SUPONER, QUE ELLA ES AJENA A LAS FINANZAS DE ESTADO, LO CUAL RIÑE ABIERTAMENTE CON LOS MAS ELEMENTALES PRINCIPIOS DE LA HACIENDA PUBLICA.

Exequible artículo 12 del Decreto número 468 de 1986.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 35.

Referencia: Expediente número 1542.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12 del Decreto-ley número 468 de 1986.

Actor: *Luis Enrique Carrillo Sarmiento.*

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 14 de abril 2 de 1987.

Bogotá, D. E., abril dos (2) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

El ciudadano Luis Enrique Carrillo Sarmiento, en uso del derecho consagrado por el artículo 214 de la Constitución Política, ha presentado demanda de inexequibilidad en contra del artículo 12 del Decreto-ley número 468 de 1986, cuyo texto se transcribe a continuación:

"DECRETO NUMERO 0468
(febrero 11)

"Por el cual se adopta el Estatuto Contractual de las Intendencias y Comisarías.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 22 de 1985 y oído el concepto de la Comisión Asesora a que ella se refiere,

D E C R E T A:

".....

"Artículo 12. Intervención de la Contraloría. Los funcionarios de la Contraloría General de la República ejercerán exclusivamente el control posterior de la contratación y su función será la de verificar el cumplimiento de las normas fiscales. No intervendrán ni en la elaboración de pliegos, ni en los estudios de propuestas, ni en la adjudicación de los contratos, ni en las diligencias de perfeccionamiento, ni en la aplicación de las cláusulas de la contratación administrativa, ni en la liquidación del mismo.

"El control se realizará una vez se encuentre ejecutado y liquidado el contrato. Las autoridades correspondientes les enviarán los documentos que se requieran.

"En ningún caso podrán establecerse prácticas o procedimientos que signifiquen la participación de los funcionarios de la Contraloría en el manejo del contrato, en el proceso de selección del contratista o en el desarrollo de las relaciones entre la entidad pública y el contratista".

La demanda

El demandante considera violados los artículos 20, 55, 59 inciso primero; 76 ordinal 1° y 118 ordinal 8° de la Constitución Nacional, por las siguientes razones:

1. El artículo acusado fue expedido sin que para ello tuviera competencia el Presidente de la República, pues éste se extralimitó en el ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 22 de 1985. Se viola por eso el artículo 20 de la Carta, pues los funcionarios públicos no pueden hacer sino aquello que expresamente les permita la ley, y el 55, en cuanto se rompió la separación de funciones en él prevista.

2. Por las mismas razones, el actor estima vulnerados los artículos 76, ordinal 1° y 118, ordinal 8° de la Constitución y, además en forma específica el 59, a cuyo tenor la vigilancia de la gestión fiscal de la administración corresponde a la Contraloría General de la República y se ejercerá conforme a la ley.

3. Expresa el demandante que el legislador, al otorgar las facultades extraordinarias, buscó que la ley directamente regulara lo atienente al control o vigilancia de la gestión fiscal de las intendencias, comisarías y sus municipios, intención que está plasmada en el capítulo séptimo de la exposición de motivos del Proyecto de Ley número 22 de 1983 y que fue mantenida en las ponencias para primer debate en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes.

En consecuencia –agrega– el espíritu de la Ley 22 de 1985 fue el de conservar la facultad del legislador al respecto y nunca el de revestir al Presidente de la República de dichas atribuciones, razón por la cual el Jefe del Estado no podía establecer un nuevo sistema de gestión fiscal en el caso de la contratación administrativa de dichos entes territoriales.

Este argumento del demandante contraviene lo dispuesto en el artículo 27 del C.C. sobre interpretación de la ley, conforme al cual "cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu".

Dice el actor que "el hecho de habérsele otorgado atribuciones (al Presidente) para modificar el régimen contractual y fiscal, no conlleva implícitamente hacerlas extensivas a la materia de la vigilancia o control de la gestión fiscal de la contratación, ya que es de conocimiento general que las atribuciones se conceden en forma expresa y precisa".

No se trata de facultad implícita sino de parte de una facultad explícita, el todo, es modificar el régimen fiscal y él incluye el control fiscal.

4. En cuanto a la ley de facultades, señala la demanda:

"El artículo 12 del Decreto-ley número 468 del 11 de febrero de 1986, es violatorio del artículo 13 de la Ley 22 de 1985, por cuanto rebasó las precisas facultades en él contenidas, ya que dentro de éstas, no se le atribuyó la de modificar la vigilancia o control de la gestión fiscal que por la ley le corresponde a la Contraloría General de la República, ello es así, por cuanto al analizar detenidamente el artículo 13 de la Ley 22 de 1985, encontramos que dicha disposición en su literal b) dijo: 'Modificar dentro de los términos de la presente ley, el estatuto administrativo, contractual y *fiscal*, de las intendencias y comisarías', entendiéndose por 'fiscal' en los términos del diccionario de la Real Academia Española, lo perteneciente al fisco, que según Cabanellas, en su diccionario de Derecho usual, consiste: fisco; erario o tesoro público".

"Hacienda Pública o Nacional; por extensión constituye sinónimo de Estado o autoridad pública en materia económica". La palabra *fisco*, proviene del latín *fisus*, cesta de mimbre, por la costumbre romana de guarda (sic) en ella el dinero. Luego pasó a designar el tesoro del Príncipe a diferencia del Tesoro Público que también se llamaba *'erario'*.

"De conformidad con lo anterior, a lo que se refirió la ley de facultades en el literal b) del artículo 13 fue a la modificación del sistema fiscal y presupuestal de las intendencias y comisarías, creando estímulos fiscales a dichas entidades, y no, para modificar la vigilancia de la gestión fiscal de esos entes territoriales que compete a la Contraloría General de la República, por prescripción constitucional, ejercido conforme a la ley".

Concepto del Procurador General de la Nación

Mediante oficio número 1102 del 13 de enero de 1987, el señor Procurador General emitió concepto, solicitando a la Corte declarar exequible el artículo 12 del Decreto número 468 de 1986.

En su opinión, el Presidente de la República no excedió las facultades extraordinarias, ya que la Ley 22 de 1985, al conferirlas en asuntos fiscales, solamente las limitó en el sentido de que el control fiscal debería continuar a cargo de la Contraloría General de la República, dejando en los demás aspectos plena libertad al legislador extraordinario.

Añade:

"Respecto del artículo 59 de la Carta, al demandante no fundamenta su pretendida violación; pero el Procurador General considera que la norma acusada, lejos de infringirla, la desarrolla, ya que al determinar que la Contraloría ejercerá 'exclusivamente el control posterior de la contratación' y que no podrá participar 'en el manejo del contrato, en el proceso de selección del contratista o en el desarrollo de las relaciones entre la entidad pública y el contratista', reafirma el principio constitucional consagrado en dicha norma en el sentido de que 'la contraloría no ejercerá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización' ".

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Por pertenecer la norma acusada a un decreto expedido con fundamento en el ordinal 12 del artículo 76 de la Carta, es competente la Corte Suprema de Justicia para fallar acerca de su constitucionalidad.

El Decreto número 468 de 1986 (febrero 11), fue dictado por el Gobierno dentro del término previsto por la Ley 22 de 1985 (doce meses contados desde su vigencia), y por tanto, en este aspecto, es constitucional.

Controvierte el actor el ajuste material del artículo demandado a la ley de facultades, por entender que la facultad para legislar sobre el estatuto fiscal de las intendencias y comisarías (artículo 13, literal b) de la Ley 22 de 1985, no incluye atribución para modificar lo relativo a la gestión fiscal que respecto de la contratación administrativa de esas entidades ejerce la Contraloría General de la República.

La facultad mencionada se confirió al Gobierno por el artículo que se acaba de citar en los siguientes términos:

"Artículo 13. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de doce (12) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, para los siguientes fines:

".....

"b) Modificar, dentro de los términos de la presente ley, el estatuto administrativo, contractual y fiscal de las intendencias y comisarías.

"c) Dictar el régimen especial de orden fiscal, presupuestal, tributario y de fomento de las intendencias y comisarías".

Estima la Corte que la locución "fiscal", utilizada por la ley en los ordinales transcritos, comprende tanto el régimen relativo a los bienes y rentas de las intendencias y comisarías y las actuaciones administrativas que afectan unos y otras, como la materia propia de la vigilancia que sobre esas gestiones ejerce la Contraloría General de la República.

En efecto, nada en los textos legales referidos permite deducir una distinción entre tales conceptos a la manera como lo pretende el demandante. Por el contrario, se hace alusión expresa y aun redundante al "régimen fiscal especial" (subraya la

Corte) y al "estatuto fiscal" de las mencionadas entidades territoriales sin excluir ningún aspecto y sin que del contexto sea factible colegir que, al otorgar las facultades extraordinarias, el Congreso Nacional se hubiera reservado lo relativo a la forma en que la Contraloría General de la República deba desempeñar sus funciones en cuanto a dichos entes.

En el criterio de la Corte, un régimen o estatuto fiscal abarca todos los aspectos que interesen a los bienes, rentas y gastos de la administración, al manejo, destino y utilización de los mismos, la contratación y obviamente el debido control sobre todas las gestiones correspondientes. Excluir de ese conjunto la *gestión de vigilancia* implica suponer, sin que para hacerlo exista apoyo constitucional ni legal alguno, que ella es ajena a las finanzas del Estado, lo cual riñe abiertamente con los más elementales principios de la Hacienda Pública.

En el terreno constitucional, cabe recordar que el artículo 59 de la Carta confía la vigilancia de la gestión fiscal de la administración a la Contraloría General de la República, la que se ejercerá "conforme a la ley". Es decir, que la forma –para el caso en estudio, previa, concomitante o posterior– en que haya de cumplirse esa vigilancia es algo que el constituyente ha dejado en manos del legislador y éste puede ser el Congreso de la República o el Gobierno Nacional revestido de facultades excepcionales. Con base en los razonamientos anteriores, no se observa que la Ley 22 de 1985 haya limitado las atribuciones del Gobierno en la materia fiscal, pues no estableció distinciones. Es necesario concluir que no hubo extralimitación en el uso de las facultades extraordinarias y que, por ende, el artículo acusado no infringió las disposiciones constitucionales indicadas por el demandante.

DECISIÓN

Con fundamento en lo dicho la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y conocido el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE, por no ser contrario a la Constitución, el artículo 12 del Decreto número 468 de 1986.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

LIBERTAD DE EMPRESA. PROTECCION DE LA FAMA COMERCIAL. ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. ELEMENTOS.

Exequible el numeral 6° del artículo 516 del C. de C.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 36.

Referencia: Expediente número 1543.

Norma acusada: Artículo 516, parcialmente, del Código de Comercio.

Demandante: *Miguel Gil.*

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobada por Acta número 14.

Bogotá, D. E., dos (2) de abril de mil novecientos ochenta y siete (1987).

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano Miguel Gil, presentó demanda de inexequibilidad contra el artículo 516, parcialmente, del Código de Comercio. Una vez admitida, se corrió traslado de ella al Procurador General de la Nación, quien ha emitido el correspondiente concepto, por lo cual la Corte se ocupará de fallar sobre el asunto.

I. Texto de la norma acusada

La parte acusada del artículo 516 del Código de Comercio, es la que se subraya:

"Artículo 516. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio:

".....

"6° El derecho *a impedir la desviación de la clientela y* a la protección de la fama comercial, y

".....".

II. Concepto de la violación

Dice el acusante que ese texto subrayado viola los artículos 32 y 49 (sic) de la Constitución. El primero consagratorio de la libertad de empresa para dedicarse a la actividad que más le convenga y como en ella van a coincidir más de una persona, habrá competencia en materia mercantil, que es aspirar a buscar la clientela ajena, lo que implica que no puede haber un derecho a impedir la desviación de la clientela por parte del dueño de un establecimiento de comercio, sin desconocer la libertad de empresa y el derecho a escoger profesión u oficio que la Constitución garantiza. Como la norma establece un interés sobre la clientela se aparta del régimen de libre competencia.

El texto acusado, prosigue el actor, no constituye un desarrollo de las excepciones de las garantías de libertad de empresa y de escogencia de profesión u oficio, según el artículo 39 de la Constitución, sino que "dichas normas no limitan en absoluto la concurrencia sino que garantizan su efectivo cumplimiento sancionando el derecho de cada uno a la lealtad de la misma".

En su sentir no puede haber un bien consistente en el derecho a impedir la desviación de la clientela.

III. Concepto del Procurador

Las consideraciones del Procurador son, en síntesis, las siguientes:

1. Es competente la Corte para conocer de la norma acusada por cuanto ésta forma parte del Decreto-ley número 410 de 1971, expedido por el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el Congreso.

2. El concepto de violación previsto en la demanda indica que las normas que el actor estima vulneradas son los artículos 32 y 39, y no el 49 de la Constitución Nacional, como equivocadamente se dice en dicho memorial.

3. La garantía de la libertad de empresa que consagra el artículo 32 de la Carta debe entenderse dentro de los límites que traza el bien común, esto es, el interés público o social.

4. El legislador, al consagrar como parte integrante de los establecimientos de comercio el derecho de que no se desvíe la clientela, se refirió a la desviación de esta última que se encuentra prohibida, o sea a la que se efectúe mediante procedimientos ilegales o tortuosos, como la competencia desleal (artículo 75 y ss. del Código de Comercio).

5. Tampoco hay infracción del canon 39 constitucional, dado que la norma acusada no da lugar a que se impida a las personas naturales o jurídicas el ejercicio de la actividad mercantil sino a prohibir la desviación de la clientela por actos desleales o ilegales.

6. En conclusión, el colaborador fiscal solicita a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la disposición parcialmente acusada.

IV. Consideraciones de la Corte

Las consideraciones del Procurador General de la Nación que se reseñan atrás son suficientemente sólidas para fundamentar la decisión de exequibilidad que solicita el agente fiscal respecto de la norma acusada.

Conviene agregar que las limitaciones a las libertades de empresa y de escoger profesión u oficio que pueden derivarse del texto acusado son razonables y no recortan indebidamente esos derechos ni, muchos menos, los hacen nugatorios.

En el fondo, lo que la norma acusada otorga no es un derecho sobre la clientela concebido en términos feudales, lo cual desde luego sería contrario a la Constitución sino el derecho de cada uno a la lealtad de la libre concurrencia, la cual debe realizarse en los términos que establezca la ley.

V. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar exequible, el numeral 6° del artículo 516 del Código de Comercio, en la parte demandada y que dice:

".....

"6° El derecho *a impedir la desviación de la clientela y...*".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia,

DEJA CONSTANCIA:

Que el Magistrado Nemesio Camacho Rodríguez, no asistió a la Sala Plena celebrada el día dos (2) de abril de mil novecientos ochenta y siete (1987), por encontrarse con excusa justificada.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

EL OTORGAMIENTO DE FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL A OFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES ES INCONSTITUCIONAL. PRINCIPIO DE SEPARACION DE LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCION NACIONAL.

Inexequible el Decreto número 340 de 1987.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 37.

Referencia: Expediente número 1590 (238-E).

Revisión oficiosa del Decreto número 340 de 1987 "por el cual se atribuyen funciones de Policía Judicial a Oficiales de las Fuerzas Militares".

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según Acta número 15.

Bogotá, D. E., veintitrés (23) de abril de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

En cumplimiento de lo ordenado en el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, el Secretario General de la Presidencia de la República envió a la Corte fotocopia auténtica del Decreto número 340 de 1987 para la revisión de su constitucionalidad.

Cumplidos a cabalidad los trámites pertinentes entra la Corte a adoptar la decisión de mérito.

II. Texto del decreto

El texto del Decreto es como sigue:

"DECRETO NUMERO 340 DE 1987
(febrero 18)

"Por el cual se atribuyen funciones de Policía Judicial a Oficiales de las Fuerzas militares.

"El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

"Que mediante el Decreto número 3664 del 17 de diciembre de 1986, se atribuyó a los Comandantes de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea, la aplicación de las sanciones para las infracciones contempladas en los artículos 1° y 2° de ese Decreto;

"Que por el Decreto número 3671 del 19 de diciembre de 1986 se atribuyó a la Justicia Penal Militar el conocimiento de los delitos a que se refieren los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes);

"Que para la investigación de las infracciones penales atribuidas a la Justicia Penal Militar es necesario conferir funciones de Policía Judicial a Oficiales de las Fuerzas Militares;

"Que es indispensable reglamentar dichas atribuciones para que se cumplan en acuerdo con los restantes organismos de Policía Judicial,

DECRETA:

"Artículo 1° Mientras se halle turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional y para efecto de los procesos atribuidos a la Justicia Penal Militar por los Decretos números 3664 y 3671 de 1986, se inviste de funciones de Policía Judicial a los Oficiales de las Fuerzas Militares que las autoridades competentes indiquen.

"El Director Nacional de Instrucción Criminal indicará mediante resolución los Oficiales de las Fuerzas Militares que asumen las funciones de Policía Judicial, dentro de los procesos atribuidos a la Justicia Penal Militar en el presente artículo.

"Artículo 2° Los Oficiales de las Fuerzas Militares con funciones de Policía Judicial, las ejercerán en casos de urgencia y cuando por cualquier circunstancia no intervenga inmediatamente el funcionario de instrucción o la Policía Judicial a que se refiere el artículo 285 del Código de Procedimiento Penal hasta el 30 de junio de 1987, y el Decreto número 50 de 1987 a partir del 1° de julio del mismo año.

"Artículo 3° Los Oficiales de las Fuerzas Militares con funciones de Policía Judicial, las ejercerán con sujeción a las disposiciones que al respecto contempla el Código de Procedimiento Penal en su Libro Segundo, Título I. Y a partir del 1° de julio de 1987 conforme a las normas establecidas en el Decreto número 50 de 1987 para la Policía Judicial.

"Artículo 4° Atribúyese el conocimiento de las infracciones a que se refiere el Decreto número 3664 de 1986, además de los Comandos señalados en el artículo 4° del mismo decreto, al Comando Unificado del Sur C.U.S. y al Comando Aéreo de Combate No. 1.

"Artículo 5° Atribúyese el conocimiento de las infracciones a que se refiere el Decreto número 3671 de 1986, además de los Comandos señalados en el artículo 1° del mismo decreto, al Comando Aéreo de Combate No. 1.

"Artículo 6° El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende todas las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a dieciocho (18) de febrero de mil novecientos ochenta y siete (1987).

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Gobierno, *Fernando Cepeda Ulloa;* el Ministro de Relaciones Exteriores, *Julio Londoño Paredes;* el Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* el Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo;* el Ministro de Defensa Nacional, *G. Rafael Samudio Molina;* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* el Ministro de Trabajo, *José Name Terán;* el Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo;* el Ministro de Salud, *César Esmeral Barros;* el Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio;* la Ministra de Educación, *Marina Uribe de Eusse;* el Ministro de Comunicación, *Edmundo López Gómez;* el Ministro de Obras Públicas, *Luis Fernando Jaramillo Correa*".

III. La intervención ciudadana

Para efectos de la intervención ciudadana el negocio se fijó en lista por el término de tres días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto número 432 de 1969. Dicho término transcurrió sin que ningún ciudadano acudiera a defender o a impugnar el decreto materia de revisión.

IV. Concepto del Procurador General

Según el jefe del Ministerio Público el decreto que se examina es inexequible en su integridad y solicita a la Corte declaración en ese sentido.

Para sustentar su petición argumenta así:

Las facultades de Policía Judicial que el decreto le confiere a las Fuerzas Militares tiene por fin auxiliar los procesos atribuidos a la Justicia Penal Militar por los Decretos números 3664 y 3671 de 1986 que no se refieren a militares sino a civiles, por lo cual fueron declarados inexequibles por la Corte mediante sentencias del 12 y 5 de marzo de 1987 y en consecuencia la inexequibilidad del artículo 1° no se genera en el hecho de investir a Oficiales de las Fuerzas Militares de funciones de Policía Judicial, sino en que tales atribuciones le fueron otorgadas "directa y exclusivamente" en relación con los procesos por delitos cuyo conocimiento fue trasladado a la Justicia Penal Militar por los decretos en referencia.

A su juicio los artículos 2° y 3° del Decreto bajo examen, adolecen del mismo vicio de inconstitucionalidad que afecta el artículo 1° por tener una estrecha relación de dependencia con éste que impide su aplicación aislada.

Considera inexequibles los artículos 4° y 5° por hacer extensivo el conocimiento de las infracciones a que se refieren los Decretos números 3664 y 3671 de 1986 al Comando Aéreo de Combate número 1, "por los mismos motivos que tuvo la Corte para declarar inconstitucionales los decretos citados".

V. Consideraciones de la Corte

Primera. La competencia para revisar la constitucionalidad del Decreto Legislativo número 340 de 18 de febrero de 1987, le ha sido señalada a la Corte por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional.

Segunda. Debe advertirse, que la normatividad objeto de la presente confrontación constitucional se dictó por el Presidente de la República en Desarrollo del Decreto número 1038 de 1984 por el cual se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional.

Tercera. Es ostensible el ajuste formal del decreto a las exigencias constitucionales que la norma superior, precedentemente invocada, fija en cuanto a la firma del Presidente y de todos los Ministros.

Cuarta. Examen material. Como bien lo dispone el artículo 1° "se inviste de funciones de Policía Judicial a los Oficiales de las Fuerzas Militares" "para los efectos de los procesos atribuidos a la justicia penal militar por los Decretos números 3664 y 3671 de 1986".

Quinta. Cabe tener en cuenta que la corte en Sala Plena y mediante sentencia del 12 de marzo del año en curso (Expediente número 1557-231-E) declaró inexequibles los artículos 4° y 5° del Decreto número 3664 que le asignaban competencia a los Comandos de Brigada, Fuerza Naval o Base Aérea, para conocer de las conductas ilícitas que tipificaba el artículo 1°, cuando estos hechos se perpetraran por particulares.

A la vez en fallo de 20 de febrero del presente año (Expediente 1562 235-E), la Corporación declaró inexequible en su integridad el Decreto número 3671 de 1986 por cuyo artículo 1° le adscribía competencia a los Comandantes de Brigada, Fuerza Naval, Base Aérea "Germán Olano" y Comando Unificado del Sur para que conociera de los delitos a que se refieren los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986.

Las precitadas declaraciones de *inexequibilidad* echan por tierra consecuencialmente, los artículos 1°, 2° y 3°, del Decreto número 340 de 1987 por virtud de la necesaria subordinación de sus disposiciones con la norma que se revisa a tal punto que rigurosamente haría innecesario un pronunciamiento expreso de la Corte, que sólo se justifica en el presente caso, por la misión que le corresponde de pronunciarse oficiosamente sobre la constitucionalidad de los Decretos Legislativos que el Presidente dicte en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución. Pero aún así la decisión de la Corte, a diferencia de la que adopta cuando decide sobre las demandas de inexequibilidad de las leyes o decretos de los numerales 11 y 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional o sobre las objeciones presidenciales a los proyectos tachados de inconstitucionalidad una vez que las Cámaras legislativas las declaren infundadas, es meramente declarativa, ya que la inconstitucionalidad de estos actos fluye o emerge necesariamente de la inexequibilidad declarada de la norma en que toman apoyo o fundamento.

En el caso sub-análisis, la inconstitucionalidad consecuencial de que da cuenta el precedente parágrafo, no se extiende a la atribución de Policía Judicial a los Oficiales de las Fuerzas Militares siempre y cuando se desarrollen para colaborar con la Justicia Penal Militar en los procesos de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 170 de la Constitución Nacional. Por esto acoge la Corte el criterio de la Procuraduría General de la Nación según el cual "la inexequibilidad del artículo 1° del decreto que se examina no se motiva en el hecho de investir a Oficiales de las Fuerzas Militares de funciones de Policía Judicial, sino en que esa norma encauza tales atribuciones directa y exclusivamente a los procesos por los delitos cuyo conocimiento fue trasladado a la Justicia Penal Militar por los citados Decretos números 3664 y 3671 de 1986".

No se cuestiona, desde luego, que las funciones de Policía Judicial que desarrollan las Fuerzas Militares a través de sus organismos de inteligencia constituyan un importante auxilio a los jueces ordinarios y especiales en la investigación de los ilícitos a ellos atribuidos.

Sin embargo, la decisión que habrá de recaer sobre los artículos 1°, 2° y 3° será de inexequibilidad por haber dispuesto el legislador de excepción en el ejercicio temporal de funciones de Policía Judicial por parte de los Oficiales Militares tendrá la finalidad exclusiva de colaborar en las investigaciones relativas a los procesos atribuidos a la Justicia Penal Militar por los Decretos números 3664 y 3671 de 1986, vale decir que la medida se dictó como complemento necesario de las nuevas competencias asignadas, generándose entre las disposiciones que fueron ya declaradas contrarias a la Constitución y los artículos arriba mencionados, una unidad normativa inescindible que exige el mismo proncunciamiento.

Con respecto a la atribución de competencia que los artículos 4° y 5° del decreto hacen al Comando Unificado del Sur C.U.S. y al Comando Aéreo de Combate No. 1, para conocer de las infracciones a que se refirió el Decreto número 3664 de 1986; y al Comando Aéreo de Combate No. 1, para el conocimiento de las infracciones a que se refirió el Decreto número 3671 de 1986, encuentra la Corte que no fueron declarados inexequibles en los prealudidos fallos de inconstitucionalidad y por ende, respecto a estas disposiciones no se generan efectos de "cosa juzgada".

Pero sí es predicable de estas normas lo que la Corte dejó consignado en el siguiente párrafo de la sentencia de inexequibilidad del Decreto número 3671 de 1986, y que por sí solo constituye argumento suficiente para declarar su *inconstitucionalidad:*

"Los Tribunales Militares son competentes para juzgar delitos cometidos por militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, pero no hay texto alguno de la Constitución que otorgue una facultad precisa, según el artículo 121 de la misma, para asignarles el carácter de Tribunal Competente respecto de delitos cometidos por civiles. Y no se diga que la ley y por ende los Decretos Legislativos pueden establecer libremente Tribunales y juzgados que administren justicia, al tenor del artículo 58 de la Constitución, de donde resultaría viable una medida como la que se revisa, porque el principio de separación de las ramas del poder público que consagra el artículo 55 de la Constitución Nacional exige que los jueces ejerzan

funciones separadas, esto es, independientes respecto del Congreso y de la Rama Ejecutiva. Y los Tribunales Militares no pertenecen a la Rama Jurisdiccional sino a la organización jerárquica de las Fuerzas Armadas, por lo cual no cabe predicar de ellos las notas de independencia y de especialización que, según los principios del Estado de Derecho, deben caracterizar a la administración de justicia".

VI. Decisión

En mérito a las anteriores consideraciones la Corte Suprema de Justicia en –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y acorde con el parecer del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar INEXEQUIBLE el Decreto número 340 de 1987 "por el cual se atribuyen funciones de Policía Judicial a Oficiales de las Fuerzas Militares".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia

DEJA CONSTANCIA:

Que los Magistrados Héctor Marín Naranjo y Héctor Gómez Uribe, no asistieron a la Sala Plena celebrada el día veintitrés (23) de abril de mil novecientos ochenta y siete (1987), por encontrarse con excusa justificada.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

LIMITACIONES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR... ES LICITA LA REPRODUCCION, DE UNA OBRA LITERARIA O CIENTIFICA, ORDENADA U OBTENIDA POR EL INTERESADO EN UN SOLO EJEMPLAR PARA USO PRIVADO Y SIN FINES DE LUCRO. LA CONSTITUCION NO LE IMPONE AL LEGISLADOR EL DEBER DE TUTELAR DE SIMILAR MANERA, LAS DISTINTAS FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION. FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD, LA CUAL IMPONE QUE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA DEBEN CUMPLIRSE CON ESTRICTO RIGOR.

Exequible el artículo 37 de la Ley 23 de 1982.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 38.

Referencia: Expediente número 1544.

Acción de inexequibilidad parcial contra el artículo 37 de la Ley 23 de 1982.

Actor: *Miguel Gil.*

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según Acta número 15.

Bogotá, D. E., abril veintitrés (23) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Miguel Gil en uso del derecho que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, solicita a la Corte que declare inexequible una parte del artículo 37 de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor.

Ante el impedimento manifestado por el señor Procurador General de la Nación y aceptado por la Sala Constitucional, se corrió traslado de la demanda al Viceprocurador quien emitió el concepto de rigor.

Cumplidas las ritualidades propias del proceso de inexequibilidad señaladas por el Reglamento Constitucional número 432 de 1969, entra la Corte a resolver sobre el fondo de la petición.

II. Norma acusada

El texto de la disposición acusada con el correspondiente acápite, subrayándose la parte objeto de la impugnación, es el siguiente:

"LEY 23 DE 1982
(enero 28)

"Sobre derechos de autor.

"El Congreso de Colombia,

D E C R E T A:

".....

"CAPITULO III
"De las limitaciones y excepciones al derecho de autor.

"Artículo 37. Es lícita la reproducción por cualquier medio, de una obra *literaria o científica,* ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para uso privativo y sin fines de lucro".

III. Normas constitucionales que se dicen violadas y concepto de la violación

A juicio del actor el precepto parcialmente acusado infringe los artículos 11, 16, 17, 20, 22, 23, 26,30, 39, 45 y 46 de la Constitución Nacional, "que en su conjunto o aisladamente considerados consagran el principio conocido con el nombre de igualdad de las personas ante la ley".

Son razones de su apreciación las siguientes:

La norma acusada al regular las limitaciones a los derechos del autor establece dos tipos de discriminaciones:

a) Una discriminación "entre autores" que se deriva del trato preferencial que otorga a los autores de obras artísticas pues los excluye de la limitación que tienen que soportar los titulares de una obra literaria o científica, que consiste en permitir la copia en un solo ejemplar de sus obras para uso privado y sin fines de lucro;

b) Una discriminación "entre autores y no autores" que atenta contra la igualdad de los individuos, porque les confiere el derecho a copiar las obras literarias y científicas, pero se lo niega respecto de las manifestaciones artísticas.

IV. Concepto del Viceprocurador General de la Nación

El Colaborador Fiscal por el contrario, considera que las expresiones acusadas del artículo 37 de la Ley 23 de 1982, son exequibles; su concepto puede resumirse así:

Analiza en primer término el principio de igualdad de las personas ante la ley con apoyo en criterios jurisprudenciales, para concluir que éste sólo puede darse cuando se regulen situaciones iguales, lo que no ocurre en el caso bajo examen

porque las obras literarias, científicas y artísticas comprenden variadísimas formas de expresión "lo cual impide que la ley pueda regular uniformemente los derechos de autor".

Observa que "las obras literarias y científicas a diferencia de las artísticas, se plasman simplemente mediante la impresión escrita, la cual con gran frecuencia es reproducida individualmente para efectos de estudio, lo que explicaría la razón de que el artículo acusado reglamentara en forma especial esta situación. Con lo anterior sin embargo el legislador no se apartó de la norma general, ni estableció una excepción limitante de la propiedad literaria y científica, pues en varios artículos de la Ley 23 de 1982, se consagra y reitera el principio de que la reproducción de las obras amparadas por el derecho de autor se prohíben en cuanto éstas se hagan públicas, con fundamento en el presupuesto de que no pueden limitarse las actividades de los individuos que se desarrollan en la privacidad de su domicilio, a menos de que éstas trasciendan al público".

Finalmente, señala que la reproducción de una obra literaria o científica en un solo ejemplar y sin ánimo de lucro conforme lo dispone el artículo 37 es acorde con el criterio que informa a la Ley 23 de 1982, especialmente con los artículos 44, 139, 158 y 178, respecto de la utilización de las obras protegidas por derechos de autor.

V. Consideraciones de la Corte

1. *La competencia*

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 214 de la Constitución Nacional la Corte tiene competencia para conocer y decidir la presente demanda, por referirse a la inexequibilidad de vocablos que forman parte de un precepto legal.

2. *Los derechos de autor*

Para el examen de la norma impugnada parcialmente, importa tener en cuenta en primer término que el constituyente consagra en el artículo 35 una protección especial para la propiedad literaria y artística por el tiempo de vida del autor y ochenta años más, y defiere a la ley señalar las formalidades para su efectividad sin que pueda en desarrollo del anterior principio, conculcarlo ni desconocerlo so pretexto de su regulación.

Ahora bien, la Ley 23 de 1982 desarrollo del citado artículo de la Carta, responde a la necesidad de modificar y actualizar la legislación que existía sobre la materia, en especial la Ley 86 de 1946, que se había quedado corta ante el avance de las técnicas gráficas y de comunicaciones que permiten nuevas formas de expresión de la creatividad y talento humanos. En orden a la eficaz protección de las diversas manifestaciones del arte consagró la ley citada para sus titulares, derechos patrimoniales temporales que se concretan en facultades de disposición y aprovechamiento económico y derechos morales perpetuos y como tales inalienables e irrenunciables para conservar y reivindicar en todo tiempo la integridad de la obra.

El precepto tachado parcialmente de inexequibilidad establece una simple limitación a los derechos de autor que no desconoce y responde a la necesidad de que el interés privado ceda ante el interés social, razón por la cual está orientado a asegurar que los autores de obras literarias o científicas cumplan con los deberes sociales que su calidad les impone como miembros del grupo social; por ello la ley autoriza la reproducción por cualquier medio de las obras literarias y artísticas pero sin fines de lucro y en un solo ejemplar dándose así cabal aplicación al principio de función social que tiene la propiedad, lo cual impone que las limitaciones establecidas en la norma deben cumplirse con estricto rigor so pena de que su desconocimiento comprometa la responsabilidad de su transgresor.

3. *Análisis del cargo que plantea la demanda*

El actor contrae su acusación de los adjetivos "literaria o científica" contenidos en el artículo 37 y su pretensión se basa en la supuesta discriminación que se establece por obra de los citados vocablos entre autores y no autores. Ciertamente las expresiones impugnadas tienen una connotación técnica específica dentro de las manifestaciones del talento del hombre, aunque dentro de la Ley 23 de 1982 no se les asigne una definición y contenido propios, pues se ha limitado el legislador a consagrar los derechos de autor respecto de obras literarias, artísticas o científicas, como las tres clases de producciones del intelecto dentro de las que figuran todas las creaciones del espíritu, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y su destinación.

Tanto el demandante como el colaborador fiscal consideran que la disposición acusada encuentra apoyo constitucional en la función social que debe cumplir la propiedad. No obstante, a juicio del actor, el legislador estaba obligado a hacer extensivos los efectos jurídicos de la norma a las obras artísticas; y el no haberlo hecho es la razón de inconstitucionalidad que alega. La Corte en cambio estima que esa omisión no determina la inexequibilidad de las expresiones acusadas, toda vez que el artículo 35 le confiere al legislador la facultad de prescribir las formas de protección de la propiedad intelectual sin sujeción a parámetros distintos de los estrictamente constitucionales; por ello puede expedir regulaciones que protejan de manera distinta y con alcance diferente las variadas producciones del ingenio, que por sus características especiales lo requieran, dado que ningún precepto constitucional se lo prohíbe.

Tampoco se está, en el caso bajo examen, ante la causal de "inconstitucionalidad por omisión", admitida por la Corte en reiteradas decisiones, ya que aquella norma constitucional no le impone al legislador el deber de tutelar de similar manera, las distintas formas de la propiedad intelectual, pues como lo advierte la vista fiscal "las obras literarias y científicas a diferencia de las artísticas se plasman simplemente mediante la impresión escrita" razón por la cual pueden ser objeto de una regulación especial como acontece en el caso *sub judice*.

Téngase en cuenta finalmente, que la reproducción de obras de arte no está expresamente prohibida en la norma acusada y por el contrario, a sus más usuales formas o modalidades alude el artículo 39 de la ley conforme al cual "será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se

refiere a las obras de arquitectura esta disposición sólo es aplicable a su aspecto exterior", disposición que igualmente debe entenderse en el sentido que permita conciliar el interés del autor de la obra artística con la función social del derecho de que es titular.

VI. Decisión

En mérito de las precedentes consideraciones la Corte Suprema de Justicia en –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y acorde con el concepto de su Colaborador Fiscal,

Resuelve

Declarar exequible el artículo 37 de la Ley 23 de 1982, en las expresiones que han sido materia de impugnación constitucional en este proceso.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Jorge Enrique Gutiérrez Anzola,* Conjuez, *Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIAS DE NARCOTRAFICO. GARANTIA ADECUADA PARA LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS. PARA ESTE TIPO DE DELITOS, LOS INCRIMINADOS, NO TENDRAN DERECHO A LA LIBERTAD PROVISIONAL NI A LA CONDENA CONDICIONAL. ESTADO DE SITIO. FAVORABILIDAD DE LA LEY PENAL.

Exequible en su totalidad el Decreto número 468 de 1987.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 39.

Referencia: Expediente número 1614 (240-E).

Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 468 del 11 de marzo de 1987 "por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico".

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobada por Acta número 16.

Bogotá, D. E., abril treinta (30) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El 11 de marzo del presente año el Secretario General de la Presidencia de la República, dando cumplimiento a lo ordenado por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, envió a esta Corporación copia auténtica del Decreto Legislativo número 468, de la misma fecha, para que procediera a su revisión constitucional.

Por auto de 20 de marzo este despacho avocó el conocimiento del asunto y ordenó la fijación en lista pertinente, para la efectividad de la intervención ciudadana. Transcurrido dicho término sin que nadie se presentara a coadyuvar o impugnar el decreto, se corrió el traslado de rigor a la Procuraduría General de la Nación, la que rindió concepto el 7 de abril último.

Procede ahora la Corte a pronunciar el fallo correspondiente.

II. El decreto que se revisa

El texto del Decreto Legislativo número 468 de 1987 es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 468 DE 1987
(marzo 11)

"*Por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico.*

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

"Que mediante Decreto número 3671 de 1986, se atribuyó a la Justicia Penal Militar el conocimiento de algunos delitos previstos en la Ley 30 de 1986;

"Que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 5 de marzo de 1986, declaró la inexequibilidad del citado decreto;

"Que uno de los motivos que tuvo el Gobierno para declarar turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional fue la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico;

"Que la Ley 2ª de 1984 creó doscientos cargos de jueces especializados, con competencia para investigar y fallar los delitos de secuestro, extorsión, terrorismo y conexos;

"Que mediante Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987, se autorizó la designación de jueces especializados de los creados en la Ley 2ª de 1984,

DECRETA:

"Artículo 1° Mientras subsista el actual estado de sitio, el conocimiento de los delitos previstos en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986, y conexos, será de competencia de los jueces especializados a que se refieren los Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987.

"Artículo 2° La competencia que se atribuye por el artículo anterior a los jueces especializados, se ejercerá sin perjuicio de la competencia que les asigna la Ley 2ª de 1984.

"Artículo 3° Las infracciones a que se refiere el artículo 1° de este decreto, se tramitarán y fallarán por el procedimiento especial señalado en el Capítulo II de la Ley 2ª de 1984.

"Artículo 4° Los procesados por los delitos indicados en el artículo 1° de este decreto, no tendrán derecho a la libertad provisional ni a la condena condicional.

"Artículo 5° Las disposiciones anteriores se aplicarán a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia de este decreto.

"Artículo 6° El Ministerio Público ante los jueces especializados a que se refiere este decreto, será ejercido por los correspondientes fiscales de circuito.

"Artículo 7° Los artículos anteriores entrarán en vigencia a partir del 1° de mayo de 1987.

"Artículo 8° Los procesos relacionados con los delitos indicados en el artículo 1° de este decreto que estén siendo conocidos por la Justicia Penal Militar, serán repartidos en el estado en que se encuentren entre los jueces penales del Circuito, conforme a las disposiciones vigentes en materia de reparto, en coordinación con la respectiva Dirección Seccional de Instrucción Criminal.

"Artículo 9° La designación de los jueces especializados a que se refieren los Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987, deberá producirse por los Tribunales Superiores respectivos, a más tardar el 10 de abril de 1987.

"Artículo 10. Salvo lo dispuesto en el artículo 7°, este decreto rige a partir de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, a 11 de marzo de 1987.

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Gobierno, *César Gaviria Trujillo*. El Jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, encargado de las funciones del Ministro de Relaciones Exteriores, *Germán Montoya Vélez*. El Ministro de Defensa Nacional, *Rafael Samudio Molina*. El Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán*. El Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo*. El Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio*. La Ministra de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse*. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, *José Name Terán*. El Ministro de Salud, *César Esmeral Barros*. El Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez*. El Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo Correa*. El Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy*".

III. Concepto del Procurador General de la Nación

Considera el señor Procurador que el decreto en revisión es exequible, por las siguientes razones:

1. Satisface los requisitos formales que exige la Constitución para esta clase de actos.

2. Hay estrecha relación entre el contenido del decreto y el quinto considerando del Decreto número 1038 de 1984, que declaró turbado el orden público, todavía en vigencia.

3. Los artículos 1° y 2°, que asignan competencia a jueces especializados creados por la Ley 2ª de 1984, para conocer, además, de los delitos previstos en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de 1986 y conexos, que tipifican conductas

relacionadas con estupefacientes, no violan la Constitución pues corresponde al legislador fijar o asignar competencia para el juzgamiento de los delitos.

4. El artículo 3° tampoco contraría la Constitución, pues se limita a disponer sobre el procedimiento a seguir para el trámite y fallo de procesos por estos delitos, dejando a salvo los principios fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa.

5. Tampoco lesionan la Carta Política los artículos 4° y 5° que niegan a los procesados por estos delitos los derechos a la libertad y a la condena condicional, y disponen la aplicación del decreto solamente a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia del mismo.

6. Igual conclusión se impone respecto de los artículos 6°, 8° y 9°, pues en el 6° se determina qué funcionarios del Ministerio Público actuarán como agentes de la entidad ante aquellos jueces; el 8° consagra el reparto de los negocios relacionados con los delitos a que se refiere el decreto y que están siendo conocidos por los jueces penales militares, entre los jueces penales del circuito, de acuerdo con las normas vigentes sobre reparto, y el artículo 9° ordena el nombramiento de los jueces especializados a que hacen referencia los Decretos número 1806 de 1985 y 466 de 1987 antes del 10 de abril de 1987.

7. El artículo 10 obedece a las facultades de que trata el inciso 3° del artículo 121 de la Constitución Nacional.

IV. Consideraciones de la Corte

1. El decreto que se revisa aparece firmado por el Presidente y todos los Ministros; luego, desde el punto de vista formal, satisface las exigencias que prevé el artículo 121 de la Constitución Nacional para los que se dicten dentro del régimen del Estado de Sitio.

2. El artículo 121 de la Constitución Nacional confiere al Gobierno dentro del Estado de Sitio, precisas facultades para suspender las leyes que sean incompatibles con esta emergencia tomando disposiciones provisionales que las reemplacen mientras persista la turbación del orden público y encaminadas al restablecimiento del mismo. Tales disposiciones no sólo deben ser conexas con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Sitio sino congruentes con la Constitución.

3. Hay evidente conexidad entre el contenido general del decreto que se revisa y el quinto considerando del Decreto Legislativo número 1038 de 1984, que en lo pertinente dice: "que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional". En efecto, por este decreto se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de narcotráfico.

4. Los artículos 1° y 2° del decreto en revisión atribuyen a los jueces especializados a que se refieren los Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987 la competencia para conocer de los delitos previstos en los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 30 de

1986, y los conexos con los mismos, sin perjuicio de la que ya les había asignado la Ley 2ª de 1984.

El Gobierno, obrando como legislador extraordinario de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 121 de la Constitución Nacional, puede modificar parcialmente la competencia de los despachos judiciales, redistribuyéndola entre los existentes o creando otros nuevos que satisfagan los requisitos de jerarquización, independencia y autonomía de los órganos adscritos a la rama jurisdiccional del poder público, y sin vulnerar la estructura que para ésta ha señalado la Constitución.

En el caso a estudio el Gobierno ha utilizado la primera de tales alternativas, asignándoles a jueces especializados cuya creación había sido dispuesta por normas anteriores, el conocimiento de ciertos delitos relacionados con el narcotráfico. Dichos jueces, al tenor del artículo 10 del Decreto número 468, han debido ser nombrados, a más tardar el 10 de abril del año en curso, por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a quienes precisamente corresponde esta atribución según el artículo 157 de la Constitución Nacional.

Son, pues, exequibles estos artículos.

5. Los artículos 3°, 4°, 6° y 8° se refieren a aspectos procedimentales.

Dentro del régimen de Estado de Sitio puede el Gobierno dictar normas transitorias sobre procedimientos judiciales, ciñéndose a los principios fundamentales que prevé la Constitución sobre todo en el artículo 26, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa.

En el caso a estudio no se ha creado un procedimiento nuevo sino que se ha remitido al especial que prevén los artículos 13 a 35 de la Ley 2ª de 1984, el cual garantiza adecuadamente la defensa de los procesados.

El artículo 4° priva a los procesados por los delitos que indica el artículo 1° de los beneficios de la libertad provisional y la condena de ejecución condicional, lo que es aplicable según el artículo 5° sólo a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia del decreto. No se suscita entonces discusión alguna sobre favorabilidad de la ley penal, al tenor del artículo 26 de la Constitución Nacional, pues es claro que el legislador ordinario o extraordinario puede modificar hacia el futuro los beneficios de la ley penal, tanto de la sustantiva como de la procedimental, sin desconocer, desde luego, el derecho de defensa. Tal no es el caso que se examina. Luego, son exequibles estos artículos.

El artículo 6° sobre atribución de las funciones del Ministerio Público ante los jueces especializados que se vienen mencionando a los fiscales de Circuito, está de acuerdo con el artículo 144 de la Constitución Nacional. Es también exequible. Observa la Corte que esta disposición fue modificada posteriormente por el Decreto número 735 de 1987, que ordenó la creación de fiscalías especiales para estos casos.

El artículo 8° dispone sobre el reparto de los procesos que a la fecha de entrar en vigencia el decreto estuviesen en manos de la Justicia Penal Militar, a los jueces penales de Circuito, conforme a las disposiciones vigentes en materia de reparto y en coordinación con la respectiva Dirección Seccional de Instrucción Criminal. Ello

está en consonancia con fallo que esta Corporación profirió el 5 de marzo último acerca de la inexequibilidad Decreto número 2671 de 1986. Este artículo es, desde luego, exequible.

6. Los artículos 5°, 7° y 10, regulan la vigencia temporal del decreto.

El artículo 5°, ya citado, dispone la aplicación de las disposiciones que lo anteceden "a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia de este decreto", satisfaciendo, como se dijo, la garantía de favorabilidad de la ley penal que trae el artículo 26 de la Constitución Nacional y en consonancia con doctrina reiterada de esta Corporación acerca de las disposiciones que en materia penal se dicten dentro del Estado de Sitio.

El artículo 7° dice que "los artículos anteriores entrarán en vigencia a partir del 1° de mayo de 1987" y el 10 señala que "salvo lo dispuesto en el artículo 7°, este decreto rige a partir de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias".

Se sigue de ahí que los artículos 1° a 6° sólo entran a regir a partir del 1° de mayo y que los artículos 8° y 9° rigen desde la publicación.

No hay glosa alguna al respecto, como tampoco para el texto del artículo 10, según el cual este decreto suspende las disposiciones que le sean contrarias, pues tal es precisamente el efecto que se prevé para los decretos legislativos fundados en el artículo 121 de la Constitución Nacional.

V. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar exequible, en su totalidad, el Decreto Legislativo número 468 de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia

DEJA CONSTANCIA:

Que los Magistrados Rodolfo Mantilla Jácome y Edgar Saavedra Rojas, no asistieron a la Sala Plena celebrada el día treinta (30) de abril de mil novecientos ochenta y siete (1987), por encontrarse con excusa justificada.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

AGRUPACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONTROL DE SUBSTANCIAS QUE CAUSAN ADICCION Y EL SERVICIO AEREO DE LA POLICIA NACIONAL. *ESTADO DE SITIO*. RELACION DIRECTA ENTRE EL CONTENIDO DEL DECRETO Y LAS CAUSAS DE PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO.

Constitucionalidad del Decreto número 423 de 1987.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia numero 40.

Referencia: Expediente número 1605 (239-E).

Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 423 del 3 de marzo de 1987, "Por el cual se agrupan los Servicios Especializados de Policía de Control de Substancias que producen Adicción Física o Psíquica y el Servicio Aéreo de la Policía Nacional".

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 16.

Bogotá, D. E., abril treinta (30) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría General de la Presidencia de la República, a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Política, ha remitido a la Corte para la revisión definitiva de su constitucionalidad, el Decreto Legislativo número 423 del 3 de marzo de 1987 "por el cual se agrupan los Servicios Especializados de Policía de Control de Substancias que producen Adicción Física o Psíquica y el Servicio Aéreo de la Policía Nacional".

Repartido el expediente, se ordenó su fijación en lista por el término de tres (3) días para efectos de la intervención ciudadana, sin que durante dicho lapso se hubiera recibido en la Corte escrito alguno que impugne o defienda la constitucionalidad de las normas sometidas a revisión.

Cumplidos los demás trámites ordenados por el Decreto número 0432 de 1969, se procede a decidir de fondo.

II. Texto

El texto del decreto que se examina es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 423 DE 1987
(marzo 3)

"Por el cual se agrupan los Servicios Especializados de Policía de Control de Sustancias que producen Adicción Física o Psíquica y el Servicio Aéreo de la Policía Nacional

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, y en desarrollo del Decreto número 1038 del 1° de mayo de 1984, y

CONSIDERANDO:

"Que por Decreto número 1038 del 1° de mayo de 1984, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

"Que para la efectividad de las políticas trazadas por el Gobierno Nacional, para el control del tráfico y procesamiento de estupefacientes y para la prevención de la farmacodependencia, se hace necesario reagrupar los medios humanos, materiales y técnicos, dedicados a estas funciones;

"Que el Decreto número 2137 del 29 de julio de 1983, Estatuto Orgánico de la Policía Nacional creó los Servicios Especializados de Policía de Control de Sustancias que producen Adicción Física o Psíquica y el Servicio Aéreo de Policía;

"Que se hace necesario integrar bajo una misma Dirección los Servicios Especializados mencionados anteriormente, con el fin de obtener unidad de mando en el empleo de sus recursos,

DECRETA:

"Artículo 1° Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, agrúpanse en la Dirección de Policía Antinarcóticos los Servicios Especializados de Policía de Control de Sustancias que producen Adicción Física o Psíquica y el Servicio Aéreo de la Policía Nacional.

"Parágrafo. La dirección de Policía Antinarcóticos a que se refiere el presente artículo para efectos directivos y de mando dependerá de la Dirección General de la Policía Nacional.

"Artículo 2° La Dirección de Policía Antinarcóticos de la Policía Nacional tendrá a su cargo el planeamiento y dirección de las operaciones policiales tendientes a la prevención y represión, en el territorio nacional, de las conductas delictivas o contravencionales relacionadas con la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales éstos se produzcan, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1986 y demás disposiciones que la adicionen o reformen.

"Artículo 3° El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 3 de marzo de 1987.

"(Firmados). Virgilio Barco. El Ministro de Gobierno, *Fernando Cepeda Ulloa.* El Ministro de Relaciones Exteriores, *Julio Londoño Paredes.* El Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy.* El Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo.* El Ministro de Defensa Nacional, *General Rafael Samudio Molina.* El Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán.* El Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo.* El Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio.* La Ministra de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse.* El Ministro de Comunicaciones, Encargado de las funciones del despacho del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, *Edmundo López Gómez.* El Ministro de Salud, *César Esmeral Barros.* El Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez.* El Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo Correa".*

III. Concepto del Procurador General de la Nación

El señor Procurador General, mediante oficio número 1136 del 3 de abril de 1987, rindió concepto en el cual solicita que la Corte Suprema declare que la integridad del decreto transcrito es exequible.

Afirma que, además de cumplir a cabalidad los requisitos de forma exigidos por la Constitución, el decreto guarda una clara relación de conexidad con las causales que motivaron la declaratoria del Estado de Sitio (Decreto número 1038 de 1984), pues la medida primordialmente adoptada por el Gobierno en las normas objeto de análisis (reagrupación de los servicios especializados de control de sustancias que causan adicción y el servicio aéreo de la Policía Nacional), es necesaria para lograr el retorno a la normalidad en relación con el problema del narcotráfico, pues la unidad de mando supone mayor eficiencia en la prestación de servicios policiales a cargo de esas oficinas.

No encuentra el Procurador que el artículo 1° infrinja mandato superior alguno, pues se consagra la creación de la Dirección de Policía Antinarcóticos como dependencia de la Policía Nacional, la cual tendrá a su cargo los servicios especializados de Policía de Control de Sustancias que producen Adicción Física o Psíquica y el Servicio Aéreo de la Policía, oficinas éstas que existen en dicha Institución desde la vigencia del Decreto número 2137 de 1983 que reorganizó la Policía Nacional.

Finalmente, sobre los artículos 2° y 3° sostiene:

"En el artículo 2° se le asignan funciones específicas a la Dirección que se crea, todas destinadas a prevenir y reprimir las conductas delictivas y contravencionales relacionadas con la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes; lo cual hace operativa y funcional la Dirección de Antinarcóticos, objetivos éstos que tampoco contrarían canon constitucional.

"En el artículo 3°, se señala la vigencia y ordena la suspensión de las disposiciones que le sean contrarias, confirmando de esta manera la transitoriedad del Decreto número 423 de 1987, como corresponde a la legislación de estado de sitio".

Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Deriva la Corte su competencia para proferir el presente fallo del artículo 121, parágrafo de la Constitución Nacional, a cuyo tenor tiene ella la obligación de pronunciarse definitivamente sobre la exequibilidad de los decretos que, como el 423 de 1987, se expidan al amparo del Estado de Sitio.

2. *Revisión formal*

El Decreto número 423 de 1987, lleva las firmas del señor Presidente y las de todos los Ministros del Despacho, acatando así lo dispuesto por el artículo 121 de la Carta.

3. *El fondo del decreto*

a) *Conexidad*

De la lectura de los artículos 1° y 2° del decreto examinado surge sin dificultad la relación entre su contenido y las causas de perturbación del orden público.

En efecto, las mencionadas normas se limitan a agrupar bajo la dirección de la Policía Antinarcóticos los Servicios Especializados de Control de Sustancias que producen Adicción Física o Psíquica y el Servicio Aéreo de la Policía Nacional, "con el fin de obtener unidad de mando en el empleo de sus recursos", según expresa el gobierno en la motivación del decreto.

A nadie escapa que, siendo causa de la perturbación del orden público la actividad misma del narcotráfico y la acción persistente de grupos armados relacionados con ella, como lo manifiesta el Decreto número 1038 de 1984, por medio del cual se declaró el Estado de Sitio en todo el territorio nacional, el control que ejerce la policía en cuanto a las sustancias que producen dependencia en cualquiera de sus formas –física o psíquica–, corresponde a una función necesariamente vinculada con el logro de los fines de restauración del orden público, y que también lo es el conjunto de actividades propias del servicio aéreo que presta la Policía Nacional, pues constituye instrumento invaluable para alcanzar dichos fines. De tal modo que la agrupación de los servicios bajo una misma unidad de mando busca obtener una mayor eficacia de las políticas trazadas por el Gobierno en ejercicio de su función de guarda y restauración del orden público, como lo advierte el segundo considerando del decreto que se revisa.

Lo propio puede afirmarse de la adscripción de la Policía Antinarcóticos a la Dirección General de la Policía Nacional (parágrafo del artículo 1°) y del señalamiento de funciones específicas a esa dependencia, tales como la de planear y dirigir las operaciones policiales tendientes a la prevención y represión, en el territorio

nacional, de las conductas delictivas o contravencionales que configuran el proceso del tráfico de estupefacientes y el cultivo de las plantas con base en las cuales ellos se producen (artículo 2º).

De tal modo que no halla la corte motivo alguno para desestimar la conexión existente entre las causas que han dado lugar a la perturbación del orden público interno y las medidas adoptadas, de lo cual resulta que el decreto sometido a examen fue expedido dentro de los límites fijados al Presidente de la República por el artículo 121 de la Carta.

El decreto *sub examine* no viola ni desconoce ninguna norma constitucional y, por ende, habrá de declararse su exequibilidad.

DECISIÓN

Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto emitido por el Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declárase CONSTITUCIONAL en todas sus partes el Decreto Legislativo número 423 del 3 de marzo de 1987 "por el cual se agrupan los Servicios Especializados de Policía de Control de Sustancias que producen Adicción Física o Psíquica y el Servicio Aéreo de la Policía Nacional".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia,

DEJA CONSTANCIA:

Que los Magistrados Rodolfo Mantilla Jácome y Edgar Saavedra Rojas, no asistieron a la Sala Plena celebrada el día treinta (30) de abril de mil novecientos ochenta y siete (1987), por encontrarse con excusa justificada.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

INTERRUPCION CIVIL, ES TODA ACCION O PRETENSION DEDUCIDA POR EL DUEÑO CONTRA EL POSEEDOR, MEDIANTE LA CUAL ESTE QUEDA ADVERTIDO DEL INEQUIVOCO PROPOSITO DE AQUEL DE PONER TERMINO A SU RENUENCIA O DEJADEZ EN EL EJERCICIO DEL DERECHO, AUN CUANDO NO SEA NECESARIAMENTE LA ACCION DE DOMINIO O REIVINDICATORIA. *ANIMUS SIBI HABENDI*. "INEXEQUIBILIDAD EN PARTE DEL NUMERAL 4° DEL ARTICULO 413 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL".

Inexequible el numeral 4° del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 41.

Referencia: Expediente número 1546.

Acción de inexequibilidad del numeral 4° del artículo 413 del Decreto número 1400 de 1970 Código de Procedimiento Civil.

Actor: *Héctor Enrique Quiroga Cubillos.*

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según Acta número 21.

Bogotá, D. E., mayo catorce (14) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

Procede la Corte a resolver la petición de inexequibilidad incoada por el ciudadano Héctor Enrique Quiroga Cubillos, contra una parte del numeral 4° del artículo 413 del Decreto número 1400 de 1970 Código de Procedimiento Civil.

La demanda fue admitida y el Procurador General de la Nación rindió oportunamente el concepto de rigor, con lo cual se han agotado los trámites previstos en el Decreto número 432 de 1969 para la decisión final.

II. Norma acusada

A continuación se transcribe el fragmento acusado con los acápites pertinentes:

"DECRETO NUMERO 1400 DE 1970

"Artículo 413. *Declaración de pertenencia.* En las demandas sobre declaración de pertenencia se aplicarán las siguientes reglas:

"4° No procede la declaración de pertenencia *si antes de consumarse la prescripción estaba en curso un proceso de división del bien común,* ni respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público".

III. Razones de la demanda

Sostiene el actor que la parte subrayada del artículo transcrito, viola los textos 16, 26 y 30 de la Constitución Nacional.

Para sustentar la alegada violación se detiene en el análisis de la evolución de la regulación legislativa de la prescripción adquisitiva entre comuneros con citas jurisprudenciales, para concretar de esta manera el concepto de las violaciones constitucionales.

a) El artículo 26 de la Carta se infringe porque el texto acusado establece una forma de interrupción de la posesión *sui generis* que desconoce el derecho de defensa del condómine toda vez que dentro de un proceso divisorio no podrá discutir su posesión haciéndola valer como excepción aunque dicho proceso tenga el efecto de interrumpirla.

Dentro de la misma línea argumental sostiene que lo acusado "es contrario a los postulados de ineficacia de interrupción de la prescripción en detrimento del derecho de defensa" puesto que el comunero demandado no tiene las oportunidades que la ley procesal le reconoce a un tercero poseedor, como serían las de pedir la perención del proceso, pues esta institución está fuera de su alcance de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; termina la sustentación de este cargo afirmando que de acuerdo con la norma acusada bastaría que se halle en curso un proceso divisorio sin importar su resultado para que el comunero no pueda adquirir el bien común por prescripción;

b) El artículo 30 de la Constitución se vulnera porque esta norma, a la vez que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, le atribuye el carácter de función social, lo cual impone al propietario la obligación de invertir trabajo y esfuerzo para hacerla productiva. De este atributo surgen para el actor, las regulaciones legales relativas a la prescripción, que si bien desconocen el derecho privado como sanción a los titulares por el abandono o no ejercicio mediante actos idóneos de posesión económica, están inspiradas en beneficio de la comunidad.

Apoyado en las anteriores bases infiere que el legislador a pesar de reconocer al comunero el derecho de adquirir la cosa común por prescripción ante el abandono o renuncia de los demás copropietarios, esta facultad jurídica se frustra porque la misma ley establece una forma discriminatoria de interrupción de la prescripción

permitiendo que los comuneros simplemente ejerzan "una acción divisoria de la comunidad" logrando así detener el curso de la prescripción y descontar el término de la posesión cumplido con anterioridad a dicha demanda. A este respecto cita y transcribe un párrafo de la obra del profesor Luis Felipe Latorre para quien "la demanda de división de la comunidad *no entraña la interrupción de la prescripción*, pues en este juicio no se discute dominio".

Esta referencia doctrinaria le permite al demandante opinar que para que se interrumpa la usucapión de quien posee exclusivamente la cosa común, es necesario que el comunero o los demás comuneros contra quienes posee aquél, demanden al poseedor en acción *reivindicatoria* tendiente a recuperar la posesión perdida; acción ésta que es la más vigorosa demostración del derecho o atributo persecutorio del dominio. Solo a través de ella o de la posesoria que contempla el artículo 972 del C. C., o del amparo posesorio, podrá el *comunero* interrumpir la prescripción del condómine o del tercero que pretende adquirir por prescripción, el dominio total de la cosa común.

Bajo ninguna consideración en sentir del impugnante, el ejercicio de la acción divisoria alcanza esa finalidad "ya que de ninguna manera *puede utilizarse el proceso divisorio para recuperar la posesión perdida* frente a un comunero poseedor" pues este proceso "tiene un objeto específico: la división material de la cosa común o su venta en pública subasta con el objeto de distribuir su producto".

Por todo lo anterior concluye que la disposición acusada torna nugatorio el derecho del comunero a adquirir por prescripción el dominio de la comunidad pues, como lo advierte el profesor en cita refiriéndose a la época en que entró en vigencia la Ley 51 de 1943 "en la república ya están iniciados los juicios de división de la mayor parte de las llamadas grandes comunidades; juicios que están pendientes, a pesar de haberse instaurado muchos de ellos desde hace más de cincuenta años";

c) Sin dar una concreta motivación del específico quebranto del artículo 16 de la Constitución, se remite a las razones anteriores para aseverar que la norma acusada también quebranta el principio de igualdad de las personas ante la ley consagrado por ese canon.

IV. Concepto del Procurador General

El señor Procurador transcribe y reitera el concepto Fiscal número 947 de septiembre 20 de 1985, que rindió en anterior proceso con ocasión de una demanda similar instaurada por el actor y que fue destruido dentro de los trágicos hechos del Palacio de Justicia, en el cual solicita la exequibilidad de las frases del numeral 4° del artículo 413 acusado. Las reflexiones en que apoya su pedimento son en síntesis las siguientes:

1. La usucapión "no tiene ninguna relación con el concepto de función social de la propiedad introducido en la Reforma Constitucional de 1936 'sino que obedece a un criterio individualista del derecho de propiedad de usar y abusar del bien y también de abandonarlo en beneficio del poseedor' ".

2. Partiendo del análisis de la regulación del proceso divisorio señala que éste no limita el derecho de defensa del comunero poseedor "sino que por el contrario le otorga, respecto de las mejoras, mayor opción de la que puede tener en un proceso reivindicatorio, ya que en el primero tiene la posibilidad de ser adjudicatario de la parte del bien poseído, mientras que en el segundo sólo puede pedir el reconocimiento de las mejoras útiles".

En torno a la interrupción de la prescripción expresa que resulta apenas obvio que ella se origine por "cualquier acción del propietario tendiente a hacer valer su derecho contra el poseedor sea ésta divisoria, reivindicatoria, posesoria o de amparo".

4. Considera que si bien el proceso divisorio del bien común no interrumpe la prescripción de un tercero poseedor, la diferencia de tratamiento no constituye un privilegio, debido a que dicho tercero y los comuneros se encuentran en distintas circunstancias procesales, ya que los copropietarios son parte en el proceso divisorio en tanto que el tercero no lo es; por ello su posesión continúa sin interrupción hasta que los comuneros o el adjudicatario la impugnen por medio de una acción reivindicatoria dirigida contra el poseedor, lo cual para el Procurador constituye respeto del derecho de defensa y del debido proceso.

5. Justicia que la perención no sea aplicable a los procesos divisorios, "porque afectaría el derecho de todos los comuneros de no permanecer en la indivisión salvo el caso excepcional de la propiedad horizontal".

No comparte finalmente, la apreciación del actor sobre la supuesta violación del artículo 30, pues no se desconocen derechos adquiridos ni se patrocina la "holgazanería"; simplemente se ampara la sociedad privada otorgándole a todos los comuneros "justos medios de defensa, contra el poseedor, cuando éste todavía no ha cumplido el lapso necesario para adquirir mejor derecho".

V. Consideraciones de la Corte

1. El legislador por medio de la Ley 51 de 1943, interpretativa del estatuto general de la comunidad, puso término a las dudas que se habían suscitado en torno a la procedencia de la prescripción entre comuneros y la reconoció expresamente: tanto la *ordinaria* como la *extraordinaria* sobre la parte del predio común o sobre toda la comunidad que haya sido poseída por el condómine en forma legal y no solo contra "terceros extraños", sino también contra "los demás comuneros". Dicha usucapión podía ser alegada por el copropietario como acción o excepción; como acción en proceso ordinario que debía someterse a los trámites de los artículos 6°, 7° y 8° por la Ley 120 de 1928.

La sentencia que se dictaba en dicho juicio cuando se incoaba contra persona determinada, solo producía efectos entre las partes; cuando no se demandaba a determinada persona, sino a "todo el mundo" en cabeza del Ministerio Público, los producía *erga omnes*.

El artículo 690 del Código de Procedimiento Civil derogó expresamente tanto la Ley 120 de 1928 como la 51 de 1943 y en su artículo 413 regula el proceso de pertenencia y lo somete como regla general a los trámites del proceso ordinario.

El texto en mención reconoce al comunero el derecho de pedir la declaración de pertenencia cuando con exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, posea materialmente el bien común o parte de él, siempre que la explotación económica de éste no se haya producido de acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad.

La misma disposición en el numeral cuarto estatuye que "*no procede la declaración de pertenencia si antes de consumarse la prescripción estaba en curso un proceso de división del bien común*", norma ésta que es precisamente la que se impugna de inconstitucionalidad por el demandante.

2. Demandada la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 53 de 1941, esta Corporación en fallo de 2 de noviembre de 1944 en el cual negó dicha pretensión, dijo:

"Cuando el artículo 1° de la Ley 51 de 1943, faculta al comunero para hacer valer en su favor la prescripción adquisitiva del dominio del lote poseído y explotado económicamente, por un tiempo equivalente a la tercera parte de la duración de la vida del hombre en estas latitudes, está aplicando un criterio lógico o en consonancia con el pensamiento expreso del Constituyente Colombiano, de estimular especialmente el trabajo. Con eso no ha hecho otra cosa que estimular y apoyar el esfuerzo de quien incorpora a la tierra capital y energías físicas. Al establecer la ley que quien ha explotado económicamente durante veinte años determinada parte de la comunidad, puede pedir judicialmente se declare dueño, hace algo análogo a lo que se produce con la división de la comunidad, pues en ésta el juez reconoce a cada comunero la propiedad del área laborada por quien tuvo el ánimo de que su esfuerzo se viera recompensado en la medida en que lo realizó, obteniendo merecidamente la protección del Estado" (G.J. No. 2016, pág. 7).

Conviene tener en cuenta para salvar equívocos, que la Ley 51 de 1943 en el parágrafo 1°, del artículo 2°, dispuso que "la acción para obtener la declaración judicial de dominio podrá instaurarse aunque anteriormente se haya demandado la división de la comunidad, de acuerdo con las disposiciones del C.J.", norma ésta derogada por la que es objeto del presente proceso.

3. La ley civil en el artículo 2539 del Código de la materia, dispone que se "interrumpe civilmente la prescripción por demanda judicial; salvo los casos del artículo 2524 del C.C.", hoy 90 del Código de Procedimiento Civil.

La interrupción de la prescripción es un fenómeno o hecho jurídico que todas las legislaciones regulan y consiste en todo hecho apto para destruir las condiciones o requisitos fundamentales de la prescripción (posesión en el tercero e inactividad del propietario); y si se trata de la denominada interrupción *civil*, es toda acción o pretensión judicial deducida por el dueño contra el poseedor, mediante la cual éste queda advertido del inequívoco propósito de aquél de poner término a su renuencia o dejadez en el ejercicio del derecho, aun cuando no sea necesariamente la *acción de dominio o reivindicatoria* que si ciertamente es el instrumento jurídico que mejor revela la voluntad del propietario de recuperar la posesión del bien y ejercer los atributos propios de dueño principalmente el de persecución, no es la única o

exclusiva para exteriorizar el poder jurídico anexo al derecho que el comunero pretende adquirir por usucapión, ya que también cumple esta finalidad la acción posesoria de recuperación que el poseedor puede incoar para readquirir la posesión dentro del año siguiente a la fecha en que la perdió.

4. Con el propósito de constatar que las legislaciones civiles más avanzadas no circunscriben al solo ejercicio de la acción reivindicatoria la interrupción civil de la prescripción, la Corte cita y transcribe algunos textos de ellas, así como opiniones de connotados tratadistas que han influido en la interpretación de nuestras instituciones civiles.

Según Arturo Alessandri Rodríguez, "para que se produzca la interrupción civil de la prescripción es preciso que se entable un *recurso judicial,* esto es una acción ante los tribunales de justicia *cualquiera que ella sea,* pues los términos de la ley son amplios, como quiera que se refieren a todo *recurso judicial,* a todo medio de hacer valer judicialmente el derecho que se cree tener. Nada influye que la acción se ejerza por vía de demanda o reconvención" (Curso de Derecho Civil, Los Bienes. Tomo II, pág. 539).

En el Código Civil español la interrupción civil de la prescripción se produce por una *"citación judicial hecha al poseedor"* (artículo 1945 de ese estatuto).

Para el Código Francés la interrupción acaece por la *Citación en justicia* (artículo 2244), y es, al decir Díez Picazo "un acto de la parte litigante, que es precisamente el acto inicial del juicio. Por ello los autores franceses desde Troplog, interpretan la idea de la *citación en justicia* en materia de prescripción *'de la manera más amplia posible', comprendiendo en ella todas las demandas judiciales"*. Esta es la interpretación que ha sido también acogida por el artículo 2225 del Código Civil Italiano, conforme al cual *"la prescripción se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aun presentada ante un juez incompetente"*.

Para *Colin y Capitant,* se llama interrupción de la prescripción a los "hechos que ponen fin al efecto útil de la prescripción; ésta supone la posesión prolongada de hecho y sin reclamación del propietario. Habrá, por lo tanto, dos clases de interrupción: la *interrupción natural,* que procede de la no prolongación de la posesión y la interrupción civil que procede de la reclamación del propietario".

Consideran dichos autores que de acuerdo con los artículos 2244 y 2248 del Código Civil Francés, hay dos órdenes de hechos que interrumpen civilmente la prescripción: *la interpelación* hecha por el verdadero propietario y el reconocimiento por parte del poseedor del derecho de aquél contra quien prescribe. Este reconocimiento le hace perder el *animus sibi habendi* (D. Civil Francés, pág. 597. Tomo II).

Para Planiol la única forma de interrupción de la prescripción adquisitiva es la *citación judicial,* único acto de persecución que tiene ese efecto. Dice textualmente: *"La ley exige una interpelación particularmente enérgica que no deje lugar a duda de ninguna clase en cuanto a la voluntad del propietario de ejercitar su derecho"*.

Según las voces del abrogado artículo 2524 del C.C. Colombiano, la interrupción civil es "todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño

de la cosa, contra el poseedor". A pesar del sentido tan amplio de la palabra "recurso" la jurisprudencia consideró que con esa expresión la ley se refería a la acción de dominio o posesoria por el que se cree titular del derecho contra el poseedor de la cosa sobre la cual recae ese derecho.

Pero frente al artículo 698 del Código de Procedimiento Civil que derogó el texto citado, puede decirse que la interrupción civil se produce por el ejercicio de cualquier acción que revele el inequívoco propósito del dueño de recuperar la posesión y/o ejercitar su derecho.

Si se contemplare el asunto materia de examen constitucional según las anteriores perspectivas, no se advierte infracción alguna al ordenamiento fundamental, ya que las causales de *interrupción de la prescripción* pertenecen a la órbita del legislador como se desprende del artículo 29 de la Ley 153 de 1987 conforme al cual "la posesión constituida bajo una ley anterior, no se retiene, pierde o recupera bajo el imperio de una ley posterior, sino por los medios y con los requisitos señalados en la nueva ley". Pero un análisis más detenido del asunto conduce a la inexequibilidad de la norma acusada, como pasa a hacerse.

5. Tanto el demandante como el Procurador consideran que la parte acusada del numeral 4° del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil, consagra una simple causal de interrupción de la posesión que el comunero ejerce sobre la comunidad y por lo tanto, aceptan implícitamente que produce el efecto que le es propio a este hecho jurídico consistente en hacer desaparecer el tiempo de posesión transcurrido con anterioridad a la demanda de partición; sin embargo, una atenta consideración de este texto legal permite sostener que lejos de consagrar una mera causal de *interrupción* de la prescripción, la demanda de partición de la copropiedad incoada antes de que se consume el término de la prescripción, produce un efecto más drástico que la sola interrupción, ya que se convierte en insalvable escollo para que el comunero adquiera el dominio por ese modo originario pues tal demanda sería suficiente para que el condómine no pudiera adquirir el dominio de la comunidad aun transcurriendo un término nuevo de prescripción a partir de la notificación de la citada demanda pues mientras esté pendiente dicho proceso el comunero no puede adquirir según lo manda la parte acusada del numeral 4° artículo 413 del Código de Procedimiento Civil.

Esta situación, que conduce al desconocimiento del derecho que al comunero le otorga el numeral 3° del artículo 413 de la obra en cita, no se presentaba bajo la vigencia de la Ley 51 de 1943, porque el parágrafo 1° del artículo 2° de este estatuto le permitía instaurar la acción de pertenencia aun cuando anteriormente se hubiera demandando la división de la comunidad.

De lo anterior se infiere que la demanda de partición incoada antes de consumarse la prescripción convierte la comunidad en bien imprescriptible y por tanto, el trabajo ingente que el comunero poseedor exclusivo ha incorporado a ella por actos de posesión realizados con el inequívoco propósito de adquirir el dominio, resultan fallidos a la postre por carencia de protección legal como lo manda el artículo 17 de la Constitución Nacional.

La sola demanda de partición enerva o hace írrito el ejercicio de la acción de pertenencia y no le permite al comunero prescribir contra los demás condueños, a pesar de que su posesión es independiente y exclusiva y se ciñe a las demás exigencias de la ley. De esta manera la ley lejos de estimular y apoyar el esfuerzo de quien "incorpora a la tierra capital y energía físicos", finalidad que inspiró la Ley 51 de 1943, como lo dijo esta Corporación en el fallo citado en anteriores párrafos, los desconoce con evidente quebranto del artículo 17 de la Constitución Nacional.

Y no se puede justificar la derogatoria del parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 51 de 1943 y desde luego de la norma acusada (numeral 4° del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil) con el peregrino argumento de que la demanda de partición pone término como por ensalmo a la posesión del comunero sobre la comunidad y desaparece así la base de la prescripción, ya que a pesar de ella nada obsta para que el comunero poseedor continúe realizando actos posesorios por su exclusiva cuenta aun a sabiendas del propósito de los demás comuneros de obtener la partición de la cosa común.

Si por la intervención del título de poseedor de su cuota el comunero se convierte en poseedor de la cosa total transformando la coposesión en una posesión exclusiva, puede adquirir válidamente la cosa entera sin que la relación posesoria en que se encuentra con respecto al bien común se altere en lo más mínimo por la demanda de partición; el *animus* y el *corpus* siguen unidos en el condómine hasta que por sentencia el actor logre la recuperación del bien, momento en el cual termina o se extingue la posesión del demandado.

Si se tiene pues que la demanda de división del bien común presentada antes de consumarse el tiempo de la prescripción, es causal de interrupción de la posesión del comunero que lo viene poseyendo en nombre propio; su duración no puede ser indefinida como se desprende de la parte acusada del numeral 4° del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil sino limitada al término que la ley fija para la prescripción entre comuneros y siempre que no se presente ninguno de los eventos contemplados por el artículo 91 del mismo estatuto.

Al desaparecer, con la declaración de inexequibilidad del aludido texto, el obstáculo que para la adquisición del dominio por ese modo originario establece la disposición acusada, la prescripción cumple su benéfica finalidad de dar estabilidad a las relaciones jurídicas otorgándole al comunero la totalidad del bien común, derecho que los demás copropietarios pierden en sus respectivas cuotas, por su renuencia en ejercer los atributos propios del dominio en la forma en que la ley lo exige.

Lejos de ser un desueto rezago individualista opuesto a la función social de la propiedad como lo afirma con ligereza el Procurador, la prescripción adquisitiva es la más efectiva sanción a la renuencia del propietario de imprimirle a su derecho la finalidad social que está llamado a cumplir; la función social permeabiliza el derecho de propiedad y lo vincula a los no propietarios lo que precisamente alcanza la usucapión ya que una vez que ese derecho ha cumplido una función personal en el anterior dueño, lo desplaza de su patrimonio al del poseedor, quien por virtud del trabajo que realizó en el bien, lo incorpora definitivamente a su haber. Consumada la

prescripción cesa la función personal de la propiedad, y adquiere relevancia su función social ya que los fines de la propiedad son dos: el bien personal y el social; desaparecido el primero entra el otro en plena operancia.

Como la impugnación de inconstitucionalidad cimentada en los artículos 17 y 30 de la Constitución está plenamente configurada, resulta del todo inane que la Corte se refiera a las otras causales invocadas por el actor, razón por la cual está relevada de su análisis o consideración.

7. Es de advertir finalmente, que el caso objeto de esta decisión no está amparado por el principio de la cosa juzgada que fluye de la sentencia número 44 de 16 de noviembre de 1978, dictada en el proceso que se adelantó contra el mismo numeral 4° del Código de Procedimiento que ahora se acusa; ya que esa decisión declaró la exequibilidad "de la parte final de la regla 4ª de este texto, adoptado por el Decreto número 1400 de 1970; en cuanto dice: '... o de propiedad de las entidades de derecho público' ". No hay pues identidad entre la parte de la norma que es materia de este proceso y la que fue objeto de decisión en la aludida sentencia.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en –Sala Plena– previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar INEXEQUIBLE el numeral 4° del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil en las siguientes expresiones: "... si antes de consumarse la prescripción estaba en curso un proceso de división del bien común, ni...".

Cópiese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente (Con salvamento de voto), *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández* (Con salvamento de voto), *Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento* (Con salvamento de voto), *Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome* (Con salvamento de voto), *Héctor Marín Naranjo* (Con salvamento de voto), *Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero* (Con salvamento de voto), *Jorge Iván Palacio Palacio* (Con salvamento de voto), *Jacobo Pérez Escobar* (Con salvamento de voto), *Rafael Romero Sierra* (Con salvamento de voto), *Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO

Como no compartimos la decisión adoptada, por cuanto juzgamos que el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil (Decreto número 1400 de 1970), en la parte acusada, es exequible, consignamos nuestro disentimiento en los términos siguientes:

1. Ciertamente la doctrina de la Corte, con fundamento en la ley (artículo 2512 del C. C.), ha sostenido de manera reiterada que la prescripción, en la vida jurídica de las personas y en procura de consolidar los derechos y asegurar la paz social, contempla dos especies: adquisitiva y extintiva. La primera que también se le denomina usucapión, tiene su radio de acción en la adquisición de los derechos reales y, la segunda, que igualmente se le conoce con el nombre de liberatoria, tiene su órbita en la extinción de las obligaciones y acciones en general. Y aunque la prescripción adquisitiva registra un efecto extintivo correlativo, una y otra especie registran perfiles propios que ponen de presente su diferencia, puesto que la usucapión tiene como soporte necesario la actividad o posesión del prescribiente; la prescripción liberatoria, por el contrario, tiene como presupuesto *sine qua non* la inactividad del acreedor o titular de la acción.

2. En lo tocante con la prescripción adquisitiva, señala la ley procedimental, entre los legitimados para pedirla, al comunero, pues concretamente establece el numeral 3° del artículo 413 del C. de P.C. que "podrá también pedir la declaración de pertenencia el comunero que con exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, haya poseído materialmente el bien común o parte de él, siempre que su explotación económica no se haya producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad".

De suerte que no existe hoy la duda que existió otrora, sobre si un comunero podía o no prescribir contra los demás comuneros, pues para ponerle fin a la incertidumbre doctrinal y jurisprudencial que se venía presentando en el punto, se expidió la Ley 51 de 1943, que consagró su permisibilidad legal y que hoy mantiene el estatuto procedimental, con las particularidades que él mismo señala, o sea, que el comunero posea o haya poseído materialmente el bien común o parte de él con exclusión de los demás comuneros; que la explotación del bien común o de parte de él no se haya producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad; y, que la posesión del comunero cubra el término de la prescripción extraordinaria.

3. Pero otra particularidad que registra la usucapión entre comuneros es la consagrada en el numeral 4° del artículo 413 del C. de P.C., en cuanto dispone que "no procede la declaración de pertenencia si antes de consumarse la prescripción estaba en curso un proceso de división del bien común".

El aparte que se acaba de transcribir permite observar que tal regla exige los presupuestos siguientes: a) que exista en curso un proceso de división del bien común; b) que al iniciarse el proceso divisorio, el comunero prescribiente aún no había adquirido por usucapión el bien común, o sea, que apenas se encontraba en expectativa de adquirirlo.

Lo anterior, con claridad, se traduce en un enfrentamiento entre derecho que tiene el comunero para salir de la indivisión mediante los trámites de un proceso divisorio y el comunero prescribiente que al ejercicio del derecho de aquél apenas estaba en camino de prescribir. Nada de inconstitucional puede tener un precepto legal cuando en esas circunstancias protege el ejercicio de un derecho en frente de quien a la sazón no había consolidado el derecho. Precisamente, la jurisprudencia constitucional de la Corte ha afirmado lo siguiente: "No, quienes tienen que aguardar el transcurso de un término para adquirir derechos, durante la espera no son titulares de ninguna facultad jurídica, constituida plenamente, con objeto cierto sobre el cual ejercerla. En tales circunstancias las esperanzas todavía no se han transformado en derecho, éste no ha surgido, no forma parte de ningún patrimonio, y, en suma, por inexistente, se halla fuera de la protección del artículo 30 de la Carta, el cual apenas concierne a 'derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes civiles' " (G. J. CXLIV, 97).

4. Si mirado el precepto acusado, con el rigor que se acaba de analizar, se tiene que no infringe la Constitución menos resulta desconocerla al precisar los alcances que tiene aquél, como quiera que la improcedencia de la declaración de pertenencia obedece a que la demanda divisoria del bien común produce el efecto de interrumpir la prescripción, interrupción que se da en los términos del artículo 90 del C. de P. C. Y las causas de interrupción de la prescripción como la forma como se cumple, pertenecen al legislador, tal como se desprende del artículo 29 de la Ley 153 de 1887, en cuanto enseña que todo lo atinente a retención, pérdida o recuperación de la posesión se rige por la ley y, aún más, por los medios y con los requisitos que señale la nueva ley.

5. Algo más, el numeral 4° del artículo 413 del C. de P. C., en la parte acusada, de entenderse como lo entiende la decisión adoptada por mayoría, o sea, que a toda costa impedía la usucapión por el comunero del bien común en el evento de que antes de consumarse la prescripción se hubiera iniciado un proceso de división del referido bien, es una cuestión o punto que bien podía disponerlo así el legislador, porque en dicha hipótesis no se lesionaba ningún derecho para el prescribiente, pues aún no lo tenía y, porque la mencionada norma apenas desarrollaba constitucional y legalmente el artículo 42 de la Ley 153 de 1887, que a la letra dice: "Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no podrá ganarse bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiere principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción".

Y esto último es obvio, porque no vulnera ningún derecho adquirido; simplemente, como es propio, subestima o desconoce una mera expectativa. Y, en pos de este criterio estaba la norma declarada inexequible.

6. En este orden de ideas, tampoco es entendible y aceptable que en el fallo se afirme que resulta injustificada la derogatoria del parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 51 de 1943, porque siendo el fenómeno que se contemplaba en dicho parágrafo de la órbita propia del legislador, bien podía abolirlo, como bien hizo al derogar la totalidad de la mencionada ley, sin que al actuar así hubiera quebrantado la Constitución y menos los artículos 17 y 30 de la misma, pues ningún derecho definido o consolidado afectaba el precepto declarado inexequible.

En virtud de las consideraciones que anteceden, encontramos que la parte acusada del numeral 4° del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil (Decreto número 1400 de 1970), se ajusta a la Constitución.

Fecha *ut supra.*

Juan Hernández Sáenz, Alberto Ospina Botero, Héctor Marín Naranjo, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, José Alejandro Bonivento Fernández, Eduardo García Sarmiento, Jacobo Pérez Escobar, Rodolfo Mantilla Jácome.

213-249

DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO DE DERECHO SEGUN EL CUAL *TODA NORMA EXCEPCIONAL ES DE INTERPRETACION ESTRICTA*. NO SE AJUSTAN A LA CARTA LOS ACTOS DE GOBIERNO QUE, INVOCANDO LAS ESPECIALISIMAS FACULTADES PROPIAS DEL *ESTADO DE SITIO*. PRETENDEN REGULAR ASUNTOS AJENOS AL ESPECIFICO OBJETIVO DE RESTABLECER EL ORDEN QUEBRADO, O LOS QUE, BAJO PRETEXTO DE HACERLO, CONSAGREN DISPOSICIONES CUYA MATERIA APENAS INDIRECTAMENTE GUARDA RELACION CON LOS MISMOS FINES.

Inexequible el Decreto número 555 de 1987.

Corte suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 42.

Referencia: Expediente número 1628 (241-E).

Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 555 del 24 de marzo de 1987, "Por el cual se dictan normas tendientes al restablecimiento del orden público".

Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 22 de 19 de mayo de 1987.

Bogotá, D. E., mayo diez y nueve (19) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría General de la Presidencia de la República, ha remitido a la Corte, para su revisión constitucional, el Decreto Legislativo número 555 del 24 de marzo de 1987, "por el cual se dictan normas tendientes al restablecimiento del orden público".

Su texto es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 555 DE 1987
(marzo 24)

"Por el cual se dictan normas tendientes al restablecimiento del orden público.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

"Que mediante Decreto número 1038 de 1984, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República;

"Que la declaratoria de turbación del orden público tuvo como fundamentación esencial la actividad de grupos armados que han atentado reiteradamente contra el régimen constitucional, mediante hechos perturbadores del orden público;

"Que la carencia del servicio de telecomunicaciones o la prestación deficiente del mismo, además de facilitar la acción perturbadora del orden público de los grupos alzados en armas, le impide a un numeroso sector de la población disfrutar de un servicio esencial, lo cual genera malestar social y entorpece la eficacia de los programas de normalización, rehabilitación y reconciliación a través de los cuales se busca crear las condiciones básicas para obtener el restablecimiento del orden público;

"Que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Comunicaciones, debe prestar exclusivamente, por mandato de la ley, los servicios de telefonía, telegrafía, télex y transmisión de datos, tanto dentro del territorio nacional como en conexión con el exterior;

"Que el desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno por el artículo 121 de la Constitución Política, concede las prerrogativas necesarias para enfrentar los actos perturbadores del orden público, para evitar la propagación de los mismos y para propiciar el restablecimiento de la paz interna;

"Que la prestación de un servicio esencial como lo es el de las telecomunicaciones, constituye un elemento básico para enfrentar la acción de los grupos armados y para fundamentar la presencia institucional del Estado en todas aquellas regiones del territorio nacional que se han visto privadas de los más elementales servicios públicos, con lo cual se crearán las condiciones indispensables para restablecer el orden público;

"Que por ser la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, un establecimiento público del orden nacional, se encuentra sujeta en su actividad contractual a la observancia de todos los trámites y requisitos establecidos en el Estatuto de Contratación Administrativa Nacional (Decreto número 222 de 1983 y sus reglamentos);

"Que las disposiciones del mencionado estatuto contienen las normas reguladoras de la actividad contractual aplicables a las entidades públicas en circunstancias de

normalidad institucional. Por el contrario, cuando dicha actividad contractual está encaminada a enfrentar hechos perturbadores del orden público y a fundamentar las condiciones esenciales para su restablecimiento, es indispensable expedir disposiciones excepcionales que permitan adquirir con agilidad y prontitud los bienes y equipos necesarios para extender o mejorar los servicios de telecomunicaciones en las zonas afectadas por enfrentamientos armados;

"Que existen precedentes jurisprudenciales en el sentido de que las facultades de que queda investido el Gobierno por el artículo 121 de la Constitución Política, comprenden la expedición de normas especiales en materia de contratación aplicables a las entidades de la administración pública. Así, en sentencia de mayo 10 de 1982, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró exequible, por encontrarlo ajustado a la Constitución, el Decreto Legislativo número 693 del 8 de marzo del mismo año, mediante el cual se dictaron normas especiales facultando al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, para celebrar contratos de adquisición directa de tierras o mejoras, con el fin de facilitar el cumplimiento de programas de normalización, y para atender las necesidades de las regiones afectadas por las actividades contrarias al orden público,

DECRETA:

"Artículo 1° Mientras dure turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, los contratos administrativos y de derecho privado de la administración que celebre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, con el único objeto de construir, diseñar, adquirir, instalar, poner en funcionamiento, operar, reparar o mantener los equipos o redes de telecomunicaciones requeridos para la correcta prestación de los servicios correspondientes en las zonas afectadas por enfrentamientos armados y en aquéllas en las cuales se requiera adelantar programas indispensables para obtener el restablecimiento del orden público, se sujetarán al cumplimiento de los requisitos, trámites y formalidades establecidos en el presente decreto.

"Artículo 2° La celebración de contratos, escritos administrativos y de derecho privado de la administración, sólo estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

"a) Presentación por el oferente o contratista, según el caso, del Certificado de Paz y Salvo, por concepto de Impuesto sobre la Renta y Complementarios, en el momento de la celebración del contrato;

"b) Licitación o concurso de méritos, para todos los casos en que no exista excepción legal;

"c) Registro presupuestal;

"d) Constitución y aprobación de garantías;

"e) Revisión de legalidad por parte del Consejo de Estado, en los casos señalados en el artículo 4° del presente decreto;

"f) Publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto de timbre.

"Artículo 3° En los casos especiales previstos en el Decreto número 222 de 1983, y en sus reglamentos, no se podrá adjudicar o celebrar contratos con personas naturales o jurídicas que no se hallaren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el registro correspondiente.

"La inscripción deberá hacerse con anterioridad a la adjudicación de la Licitación o Concurso o a la celebración del contrato, según el caso, y con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 44 del Decreto número 222 de 1983 y en sus reglamentos.

"Artículo 4° Además de los requisitos previstos en el artículo 2° del presente decreto, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, deberá someter los contratos que celebre a la aprobación del Ministro de Comunicaciones, cuando la cuantía exceda de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000), en todos los casos en que el Ministro no hubiere intervenido en la sesión de la Junta Directiva que haya autorizado su celebración.

"Una vez producida la aprobación del Ministro de Comunicaciones, o la aprobación de las garantías contractuales, según el caso, los contratos que no fueren de empréstito se someterán, directamente, a la revisión de legalidad por parte del Consejo de Estado, de conformidad con lo preceptuado por el Código Contencioso Administrativo.

"Artículo 5° Los contratos de empréstito externo cuya cuantía sea igual o superior a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000.000), o su equivalente en otra moneda extranjera, requerirán para su celebración o validez, la autorización previa para iniciar gestiones, otorgada por resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual sólo podrá expedirse después de la presentación y estudio de los siguientes documentos:

"a) Solicitud presentada a través del Ministro de Comunicaciones, en la cual se especificarán las condiciones generales de la negociación y las garantías reales o personales con las cuales la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, respaldará el empréstito;

"b) Autorización expedida por la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM;

"c) Los documentos demostrativos de la situación financiera de la entidad;

"d) Concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, emitido con fundamento en la justificación técnica, económica y social del proyecto, su plan de financiación por fuentes de recursos y el cronograma de gastos anuales en moneda local o extranjera, en el cual se evalúe el proyecto.

"Artículo 6° Para emitir el concepto de que trata la letra d) del artículo 5° del presente decreto, el Departamento Nacional de Planeación, contará con un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la correspondiente solicitud.

"La resolución en virtud de la cual se imparta la autorización previa para iniciar gestiones, será dictada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de los documentos previstos en el artículo anterior.

"El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación se abstendrán de recibir solicitudes presentadas sin la totalidad de los documentos exigidos en el artículo anterior.

"El incumplimiento de los términos señalados en esta disposición se entenderá como silencio administrativo positivo respecto de la solicitud, siempre que se compruebe la observancia de todos los requisitos exigidos en la respectiva etapa del procedimiento.

"Artículo 7° El empréstito gestionado de conformidad con la autorización previa impartida en los términos del artículo 5° del presente decreto, podrá contratarse con fundamento en la minuta, aprobada por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

"Esta autorización será impartida o negada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la correspondiente solicitud suscrita por el presidente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM.

"Impartida la aprobación o transcurrido el término previsto en el inciso anterior sin que la Dirección General de Crédito Público se haya pronunciado respecto de la solicitud, se celebrará el contrato de empréstito. En este último evento, el contrato sólo podrá ejecutarse si las condiciones financieras pactadas se encuentran comprendidas dentro de la autorización otorgada para su gestión.

"Artículo 8° Cuando se trate de empréstitos externos de cuantía inferior a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000.000), o su equivalente en otra moneda extranjera, deberá obtenerse la autorización a que se refiere el artículo 5° del presente decreto, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales a), b) y c) de la misma disposición.

"El empréstito así gestionado podrá contratarse con fundamento en la autorización previa, que para este efecto tendrá también el carácter de definitiva, y sólo podrá ejecutarse si las condiciones financieras pactadas se encuentran comprendidas dentro de la autorización otorgada.

"La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito Público, la celebración de los contratos de empréstito de conformidad con lo dispuesto en este artículo, mediante la inmediata remisión de una copia del contrato respectivo.

"Artículo 9° La celebración de empréstitos internos sin garantía de la Nación, cualquiera que fuere su cuantía, solo requerirá la autorización previa otorgada por la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM.

"Dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de celebración del contrato de empréstito, el presidente de la Empresa Nacional de

Telecomunicaciones, TELECOM, por conducto del Ministro de Comunicaciones, enviará copia del contrato respectivo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito Público, y al Departamento Nacional de Planeación.

"Artículo 10. Las disposiciones contenidas en el presente decreto sobre la celebración de contratos de empréstito interno y externo, se aplicarán a los créditos de proveedores que contengan plazos para el pago mayores de un (1) año.

"Artículo 11. Los contratos de empréstito celebrados con arreglo al procedimiento previsto en este decreto, se perfeccionarán mediante su publicación en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido en la fecha de pago de los derechos correspondientes o de la orden impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

"Artículo 12. Para efectos del cumplimiento de la regla 3, del artículo 30 del Decreto número 222 de 1983, en las licitaciones públicas nacionales la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, dentro de los diez (10) días calendario anteriores a la fecha de su apertura, publicará dos (2) avisos, con un intervalo no inferior a tres (3) días calendario, en uno o más periódicos de amplia circulación nacional.

"Cuando la licitación fuere internacional o su cuantía excediere de quinientos millones de pesos ($500.000.000), dentro de los quince (15) días calendario anteriores a la fecha de apertura deberán publicarse tres (3) avisos con el mismo intervalo señalado en el inciso anterior. El último aviso deberá ser publicado con antelación no inferior a tres (3) días calendario a la apertura de la licitación.

"Artículo 13. El Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX, aprobará dentro del término de un (1) mes contado a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud acompañada de los documentos exigidos por las normas y reglamentos vigentes, las licencias de importación de los bienes de origen extranjero adquiridos por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, en desarrollo del procedimiento de excepción establecido en el presente decreto.

"Vencido el término previsto en el inciso anterior sin la existencia de pronunciamiento por parte del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX, la correspondiente solicitud, presentada de conformidad con los requisitos legales y reglamentarios vigentes, surtirá todos los efectos fiscales y aduaneros de la licencia de importación.

"Artículo 14. Los contratos que celebre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, para los fines previstos en el artículo 1° de este decreto, no requerirán del estudio previo del Consejo Coordinador del Sector Telefónico.

"Artículo 15. La Secretaría de Administración Pública de la Presidencia de la República, sólo deberá pronunciarse previamente respecto de los contratos de prestación de servicios que proyecte celebrar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, para los fines previstos en el artículo 1° del presente decreto, cuya cuantía fuere igual o superior a cincuenta millones de pesos ($50.000.000).

"Artículo 16. Estarán exentos del requisito de la licitación, los contratos de compraventa o suministro de bienes muebles que celebre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, para la adquisición de repuestos de las centrales telefónicas y de las estaciones terrenas, destinados al cumplimiento de los fines señalados en el artículo 1° del presente decreto.

"En estos casos, será necesaria la autorización previa de la junta directiva de la entidad.

"Artículo 17. Facúltase a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, para imponer todas las servidumbres legales que sean necesarias para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de las centrales y estaciones telefónicas, y las redes de transmisión, destinadas al cumplimiento de las finalidades previstas en el artículo 1° del presente decreto.

"En estos casos, la imposición de servidumbres se efectuará por mutuo acuerdo con los propietarios de los predios afectados pero el precio no podrá exceder del avalúo que para el efecto practique el Instituto Geográfico 'Agustín Codazzi'.

"Si el propietario del predio afectado no aceptare el avalúo practicado por el Instituto Geográfico 'Agustín Codazzi', la imposición de la servidumbre se efectuará mediante el procedimiento judicial previsto en el artículo 111 del Decreto número 222 de 1983.

"Artículo 18. Con el único propósito de agilizar la celebración y ejecución de los contratos a que hace referencia el artículo 1° de este decreto, la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, podrá autorizar traslados presupuestales disponiendo la adición de la apropiación con la correspondiente disminución de otra, siempre que tales modificaciones se refieran a rubros financiados con recursos propios de la entidad y no excedan el monto máximo del presupuesto aprobado para la respectiva vigencia fiscal.

"De las autorizaciones que imparta la Junta Directiva en desarrollo de lo previsto en el inciso anterior, deberá darse inmediata noticia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto, y al Departamento Administrativo de Planeación Nacional.

"Estos mismos contratos, cuando tengan por objeto la adquisición de bienes muebles, tampoco estarán sujetos al cumplimiento de las normas contenidas en el artículo 137 del Decreto número 222 de 1983, y en el Decreto número 751 de 1984 sobre programas generales de compras.

"Artículo 19. Las autorizaciones de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, a que hace referencia el presente decreto, deberán impartirse con el voto favorable e indelegable del Ministro de Comunicaciones.

"Artículo 20. Considérase como un desarrollo del control de tutela la calificación de que una determinada contratación está dirigida al cumplimiento de los objetivos del presente decreto.

"Por consiguiente, le corresponderá al Ministro de Comunicaciones, en cada caso y mediante resolución motivada, autorizar a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, la tramitación del respectivo contrato en los términos establecidos en las normas de carácter excepcional contenidas en el presente decreto.

"Artículo 21. En lo no previsto en el presente decreto, los contratos administrativos y de derecho privado de la administración que proyecte celebrar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, para el cumplimiento de los fines contemplados en el artículo 1° se sujetarán a las disposiciones del Decreto número 222 de 1983 y de sus reglamentos.

"Artículo 22. Este decreto rige a partir de su publicación y suspende la aplicación de las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, a 24 de marzo de 1987.

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Gobierno, *Fernando Cepeda Ulloa.* El Ministro de Relaciones Exteriores, *Julio Londoño Paredes.* El Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy.* El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público, *Luis Fernando Alarcón.* El Ministro de Defensa Nacional, *Rafael Samudio Molina.* El Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán.* El Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo.* El Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio.* La Ministra de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse.* El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, *Diego Younes Moreno.* El Ministro de Salud, *José Granada Rodríguez.* El Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez.* El Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo Correa*".

II. Coadyuvancias

Repartido el expediente y ordenada su fijación en lista, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 0432 de 1969, las ciudadanas María Consuelo Reyes de Rodríguez y Nancy Velasco Parrado presentaron en tiempo sendos escritos enderezados a defender la constitucionalidad del decreto sometido a revisión. La primera de las mencionadas sostiene principalmente:

"El servicio público de las telecomunicaciones no sólo es indispensable para el desarrollo socio-económico de un país, sino que constituye el medio más eficaz para que los pueblos de uno o varios continentes puedan conocerse, comprenderse y cooperarse y que a pesar de compartir costumbres o usos sociales, han estado aislados a través de la historia. El adecuado y eficiente servicio de telecomunicaciones contribuye a la correcta guarda de las fronteras de un país, acerca a los habitantes de poblaciones y vastos territorios dentro de la misma nación, propicia el oportuno y ágil intercambio de información sobre la ocurrencia de hechos que ponen en peligro el orden público y la seguridad nacional, genera sensación de seguridad y por ende de protección en los habitantes de sitios apartados de las grandes ciudades que son

aquellos que generalmente se ven afectados no sólo por las condiciones precarias en que permanecen sino porque es allí donde se gestan los enfrentamientos de los grupos armados.

"Vistas las numerosas condiciones que genera la prestación del servicio de comunicaciones, se advierte cómo la materia atinente al presente decreto guarda relación esencial tanto con las razones expuestas por el Gobierno en el Decreto número 1038 de 1984, por medio del cual se declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, como con aquellos hechos sobrevinientes cuya persistencia ha impedido restablecerlo.

"El Decreto número 555 de 1987 tiene por finalidad afianzar los procesos de rehabilitación y reconciliación propuestos por el Gobierno para recobrar la tranquilidad y seguridad pública, permitiendo a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, quien por mandato legal presta en forma exclusiva los servicios de telecomunicaciones dentro del territorio nacional y en conexión con el exterior, atender con la agilidad y prontitud que la situación demanda la adquisición de los equipos necesarios para mejorar y extender los servicios en las zonas afectadas por enfrentamientos armados y mientras dure turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional.

"Las disposiciones contenidas en el Decreto número 555 de 1987, como medidas de carácter excepcional y urgente, suspenden ciertos trámites que, aun en circunstancias de normalidad, la experiencia ha demostrado que son innecesarios y que por lo dilatorios constituyen un obstáculo para la eficiente gestión de las funciones a cargo de TELECOM y en otros casos reduce términos con el indispensable y único propósito de facilitar el cumplimiento de los programas de normalización propuestos, conservando siempre procedimientos tan evidentemente sanos como la licitación pública que garantiza por una parte moralidad de la administración y por la otra la libre concurrencia e igualdad de oportunidades a los administrados.

"……

"Las normas excepcionales y transitorias que el Decreto número 555 de 1987, contiene no atentan ni vulneran los derechos civiles ni las garantías sociales de que trata el Título III de nuestra Carta Fundamental, toda vez que no impiden el ejercicio de los derechos ni el cumplimiento de los deberes constitucionales de los habitantes. Por el contrario, mediante el presente decreto, el ejecutivo se hace presente velando porque los servicios públicos instituidos por leyes y reglamentos se utilicen como herramienta para enfrentar la acción de grupos armados que menguan las condiciones de tranquilidad y seguridad públicas necesarias para la buena marcha de la comunidad.

"Como lo ha advertido la Corte en fallos anteriores, el artículo 16 de la Constitución, señala el fin supremo del Estado al decir que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes y para asegurar el cumplimiento de todos los deberes sociales del Estado y de los particulares y una de las maneras de realizar esta protección esencial debe ser precisamente la organización adecuada y la prestación eficaz de los servicios públicos, manteniendo así el orden y garantizando el imperio de la juricidad (sic).

"Ahora bien, si la preservación del orden público interno y externo es una labor que atañe al Estado y que en principio se cumple sólo a través de los organismos de seguridad y de las Fuerzas Armadas es claro que para prevenir o reprimir las actividades que atentan contra ese orden público es necesario también contar con la participación de la ciudadanía toda, para lo cual deben entregársele herramientas tales como permitir la oportuna y ágil comunicación con las autoridades facilitando así su valiosa intención de coadyuvar en esta tarea. El Gobierno Nacional ha exhortado reiteramente (sic) a la ciudadanía sobre este aspecto, que no sólo es un derecho sino también una obligación civil.

"Finalmente, conviene insistir en que –mediante el Decreto número 555 de 1987 expedido por el Gobierno Nacional con arreglo a las formalidades exigidas por el artículo 121 de la Constitución Nacional y en desarrollo de éste, con el único efecto de reducir algunos requisitos que dificultan la contratación por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, del cual depende en muchos casos el mantenimiento o el restablecimiento del orden público– no está violando precepto alguno de la Constitución Nacional que es en últimas lo único que debe examinar esa honorable Corporación al cumplir con el mandato de guardar la integridad de la Carta".

La ciudadana Velasco Parrado manifiesta:

"El aspecto esencial del control de la Corte Suprema se circunscribe a verificar si las medidas que dictó el Gobierno, como legislador excepcional, se ajustan en su forma y contenido al ordenamiento constitucional o si por el contrario lo infringen; por ende, considero evidente que la normatividad objeto de revisión guarda conexidad directa con las causas que motivaron la implantación del Estado de Sitio, por cuanto el Ejecutivo dejó expreso que por la acción persistente de los grupos armados venía perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las Instituciones, con secuelas en la seguridad, la tranquilidad y salubridad públicas. Las disposiciones del Decreto número 555 de 1987, están dirigidas a ejercer control y a precaver la comisión de conductas relacionadas con la perturbación del orden público, por parte de los grupos alzados en armas, mediante el desarrollo de Programas de Normalización, Rehabilitación y Reconciliación, que sólo es posible efectuar mediante la expedición de disposiciones excepcionales, como las del *sub lite*, que permite adquirir con agilidad y prontitud los bienes y equipos necesarios para extender, desarrollar o mejorar los servicios de telecomunicaciones en las zonas afectadas por enfrentamientos armados.

"Para abundar en consideraciones, es preciso señalar que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, tiene como finalidad, por mandato de la ley, la prestación de los servicios públicos de comunicaciones telefónicas y telegráficas, eléctricas y radioeléctricas, dentro y fuera del territorio nacional y en conexión con el exterior, ejerciendo en nombre del Estado el monopolio de las telecomunicaciones que fue instituido como tal por leyes de vieja data, entre otras razones, porque ese concepto involucra en su manejo importantes aspectos que tocan con la soberanía y la seguridad nacionales. Por tanto, es a todas luces explicable la necesidad de proteger, controlar y precaver, su normal funcionamiento de cualquier acción perturbadora, para así garantizar y desarrollar la prestación de los servicios de las

comunicaciones dentro y fuera del territorio nacional, contrarrestando la acción de grupos armados, con miras al cumplimiento del servicio en los términos descritos.

"Así las cosas, las medidas adoptadas por el Ejecutivo conducen al restablecimiento del orden público, pues la verificación que hace la honorable Corte, se limita a examinar si las disposiciones están orientadas a superar la crisis, esto es, de ellas puede esperarse razonablemente que se precaven, controlen e incluso contrarresten las causas de perturbación, con independencia de sus resultados reales.

"Es manifiestamente cierto lo expuesto, si observamos, que se propende por la agilización en la celebración de los contratos administrativos y de derecho privado efectuados por TELECOM, sin pretermitir los términos establecidos por la ley para la contratación, sin restringir las facultades propias de los organismos que intervienen en el desarrollo de tales actuaciones, guardando el principio de igualdad entre los contratantes y los principios básicos de la contratación administrativa, sin vulnerar las garantías civiles establecidas en la Constitución y del mismo modo, sin ser violatorias de normas de carácter superior".

III. Concepto del Procurador General de la Nación

El señor Procurador General, mediante Oficio número 1153 del 29 de abril de 1987, emitió concepto favorable a la exequibilidad del Decreto Legislativo objeto de este fallo, apoyándose en que, según su criterio, existe la debida relación de conexidad entre dicho estatuto y las causas que originaron la declaratoria del Estado de Sitio (Decreto número 1038 de 1984). Al respecto señala el Ministerio Público:

"Resulta indudable la relación de conexidad en la medida en que siendo el servicio de telecomunicación esencial para enfrentar la actividad de grupos armados, especialmente en zonas apartadas del país, su carencia o la deficiente prestación del mismo dificulta la labor que las autoridades políticas o militares deben adelantar para prevenir o contrarrestar y aun para restablecer la alteración del orden público ocasionada por dichos grupos, por lo que cuando el Decreto número 555 de 1987, agiliza la contratación administrativa por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, esencialmente busca garantizar una eficiente prestación del servicio de telecomunicaciones, dando las herramientas necesarias para este fin.

"En torno al contenido del decreto mismo, no encuentra el despacho que vulnere disposición alguna de la Carta Política, ya que se establece con precisión que los objetivos de los contratos administrativos o de derecho privado que habrá de celebrar TELECOM son, entro otros, la construcción, instalación y reparación de los equipos y redes de telecomunicaciones en 'las zonas afectadas por enfrentamientos armados y en aquéllas en las cuales se requiere adelantar programas indispensables para obtener el restablecimiento del orden público' como lo indica el artículo 1°.

"Para la consecución de los fines establecidos en dicho artículo, el decreto revisado suspende y modifica transitoriamente el cumplimiento de ciertos trámites y requisitos exigidos por el Estatuto Contractual de la Administración Pública (Decreto número 222 de 1983), para determinados contratos, buscando así celeridad, sin que por ello pueda afirmarse que se hayan dejado de lado los controles necesarios en orden a un correcto manejo de los dineros del Estado, porque tanto el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Secretaría de Administración Pública de la Presidencia de la República y el Consejo de Estado, cada uno en lo de su competencia, velará por el cumplimiento de la ley, teniendo en cuenta la cuantía y la clase de contrato que vaya a realizarse.

"Los artículos 2° a 20 del Decreto bajo examen no causan agravio alguno a la Carta, ya que contienen normas de procedimiento en materia de contratación, lo cual es prerrogativa del legislador ordinario o extraordinario. Nótese que en dichos preceptos se está modificando la legislación ordinaria vigente sobre este tópico y en relación exclusivamente con los contratos administrativos y de derecho privado que vaya a celebrar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM.

"El artículo 21 establece que los aspectos no contemplados en el decreto que se analiza, deben suplirse con las normas del Decreto número 222 de 1983 y sus reglamentos, lo que no contraría ningún precepto superior.

"El canon 22 del estatuto que se revisa establece su vigencia y 'suspende la aplicación de las disposiciones que le sean contrarias', con lo cual se aviene a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 121 de la Constitución Nacional".

IV. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Dado que el Decreto número 555 de 1987 fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, es la Corte Suprema de Justicia el Tribunal competente para su revisión definitiva en materia de constitucionalidad.

2. *Requisitos de forma*

El decreto materia de la sentencia lleva las firmas del Presidente de la República y las de todos los Ministros del Despacho, tal como lo exige el artículo 121 de la Carta y en consecuencia, por sus aspectos formales no presenta ningún vicio de inconstitucionalidad.

3. *Alcance de las atribuciones presidenciales durante el Estado de Sitio*

Como lo ha señalado la Corte en reiterada jurisprudencia, el Estado de Sitio es una institución excepcional, concebida únicamente para restablecer el orden público cuanto éste resulta gravemente perturbado como consecuencia de guerra exterior o conmoción interna, de tal manera que para recobrar la paz no son suficientes las atribuciones ordinarias del Gobierno. Precisamente dado ese carácter extraordinario, cuando el Presidente declara la turbación del orden público en todo o en parte del territorio nacional, operando el mecanismo previsto por el artículo 121 de la Constitución, queda revestido de un conjunto de atribuciones también extraordinarias, en cuanto de ellas no podría hacer uso en épocas normales.

Por idéntica razón, de conformidad con el principio de derecho según el cual toda norma excepcional es de interpretación estricta, no se ajustan a la Carta los actos de Gobierno que, invocando las especialísimas facultades propias del Estado de Sitio, pretendan regular asuntos ajenos al específico objetivo de restablecer el orden

quebrantado, o los que, bajo pretexto de hacerlo, consagren disposiciones cuya materia apenas indirectamente guarda relación con los mismos fines.

El artículo 121 de la Constitución Nacional resulta quebrantado cuando se lo interpreta y aplica en el sentido de que, durante el Estado de Sitio, está facultado el Presidente para suspender cualquier ley de la República o decreto con fuerza de tal.

La facultad, perentoria y claramente delimitada por el Constituyente, se reduce a suspender algunas leyes: las que sean incompatibles con el Estado de Sitio, no las demás.

En otros términos, las leyes vigentes, para que sean susceptibles de suspensión por la vía excepcional que se comenta, deben chocar con la vigencia misma del Estado de Sitio en términos tales que su aplicación no pueda ser simultánea o compatible con las medidas que se haga urgente adoptar para sortear la crisis de orden público que afecta a la Nación. Una norma legal que no se vea en esta concreta y precisa situación no podría ser suspendida al amparo del artículo 121 de la Carta, y si así sucediere, sería inconstitucional el decreto legislativo que hubiere ordenado la suspensión o preceptuado en contra de su contenido.

4. *El caso del decreto en revisión*

El Decreto número 555 de 1987, establece un régimen especial para los contratos administrativos y de derecho privado de la administración que celebre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, con el único objeto de construir, diseñar, adquirir, instalar, poner en funcionamiento, operar, reparar o mantener los equipos o redes de telecomunicaciones requeridos para la correcta prestación de los servicios correspondientes en las zonas afectadas por enfrentamientos armados y en aquéllas en las cuales se requiera adelantar programas indispensables para obtener el restablecimiento del orden público.

En cuanto hace referencia a los mencionados contratos, resultan, por virtud del decreto que se examina, suspendidos o temporalmente modificados varios preceptos integrantes del Decreto-ley número 222 de 1983, al cual está sujeta normalmente la contratación que adelante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica.

Aun a pesar de la extensa motivación del decreto revisado, no se encuentra la conexidad directa y específica entre el tratamiento especial de la contratación administrativa y de derecho privado en el caso de TELECOM, por una parte, y las causales que motivaron la declaratoria del Estado de Sitio (Decreto Legislativo número 1038 de 1984) y por cuya persistencia aún no se ha podido levantar.

Dichas causas, como lo recuerda el propio Gobierno en el segundo considerando del Decreto número 555 de 1987, tuvieron "como fundamentación esencial la actividad de grupos armados que han atentado reiteradamente contra el régimen constitucional, mediante hechos perturbadores del orden público".

Menos aún puede afirmarse que la vigencia de las normas legales sobre contratación administrativa sean incompatibles con el Estado de Sitio.

A ese respecto, no se puede fundar la suspensión de las mencionadas disposiciones en el requerimiento de "adquirir con agilidad y prontitud los bienes y equipos necesarios para extender o mejorar los servicios de telecomunicaciones en las zonas afectadas por enfrentamientos armados" (Considerando octavo del Decreto número 555 de 1987), ni tampoco en la circunstancia de que aquellas regiones del territorio nacional se hayan visto privadas de servicios públicos de telecomunicaciones, "lo cual genera malestar social y entorpece los Programas de Normalización, Rehabilitación y Reconciliación a través de los cuales se busca crear las condiciones básicas para obtener el restablecimiento del orden público" (considerandos tercero y sexto del decreto revisado).

La Corte no acoge el concepto del señor Procurador General de la Nación ni los argumentos de las cuidadanas defensoras, ya que en el Estado de Derecho, especialmente tratándose de instituciones excepcionales como aquélla de la que se ocupa este fallo, las competencias no pueden extenderse o ampliarse sobre la base de males crónicos o permanentes y de viejo origen que considerados en sí mismos no configuran la crisis del orden público que se pretende conjurar.

Juzga la Corte, como ya lo expresó en sentencia del ocho (8) de mayo de 1986, que al aplicar las medidas excepcionales para las cuales se halla facultado el Gobierno durante el Estado de Sitio y el Estado de Emergencia, no se puede hacer valer el encadenamiento infinito de efectos-causas, causas-efectos, con el fin de asumir el Ejecutivo poderes universales, pues ello implica desconocimiento de los exigentes límites que la Carta traza para el uso de dichas figuras y resquebraja el régimen democrático que ella ha establecido. En esa oportunidad, refiriéndose a los trágicos sucesos de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, subrayó la Corte un principio que ahora se reitera:

"En la hipótesis que contemplamos, por ejemplo, podría alegarse que siendo a su vez la toma del Palacio de Justicia, efecto del desempleo, o de insuficientes herramientas represivas para luchar contra el crimen, podría el Gobierno legislar sobre todas estas materias, y sobre sus causas, con claro detrimento del artículo 55 de la Constitución que consagra el principio de la separación de las Ramas del Poder Público, dentro de la colaboración necesaria para el logro de los fines del Estado".

Por tanto, no admite la Constitución que las atribuciones especialísimas y claramente delimitadas en el propio texto del artículo 121 puedan crecer indefinidamente en cabeza del Ejecutivo con apoyo en la peregrina tesis de que las circunstancias concomitantes a la perturbación del orden público posibilitan transitiva e indirectamente, la suspensión del régimen jurídico general.

"A juicio de la Corte, la exigencia constitucional para suspender leyes incompatibles con el Estado de Sitio y para ejercer los poderes excepcionales que prevé el artículo 121, radica en una relación de causalidad *directa y específica* entre la perturbación y las medidas que se adopten. Se trata, pues, de causas eficientes y próximas de la crisis de orden público, pero en modo alguno de las remotas o intermedias o de meras concausas.

"Hay que observar que, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Nacional de la declaratoria del Estado de Sitio confiere al Presidente tres tipos de

facultades: las legales, las constitucionales y las que, conforme a las reglas aceptadas en el Derecho de Gentes, rigen dentro de la guerra entre naciones".

Pues bien, aunque el legislador ha sido parco en lo relativo a la regulación de las facultades presidenciales para este tipo de emergencia, no obstante que en la atribución original del constituyente de 1886 al Congreso le correspondía delinear el ámbito de dichos poderes jurídicos, precisamente mediante las facultades extraordinarias previstas en el artículo 76, el Decreto número 222 de 1983, contempla en el ordinal 16 de su artículo 43 procedimientos especiales de que puede hacer uso el Gobierno para agilizar la contratación administrativa en la hipótesis de perturbación del orden público. En consecuencia, el Gobierno ha debido, en el caso que se examina, obrar en uso de las facultades legales conferidas en dicha disposición.

De lo cual se infiere que el objetivo perseguido por el Gobierno podía alcanzarse acudiendo a la legislación vigente, sin necesidad de apelar al estado de sitio. Además, disposiciones legales como la transcrita, lejos de ser incompatibles con el régimen de excepción, pueden perfectamente aplicarse durante la época de perturbación del orden público (están concebidas precisamente para eso) y no se ve cuál pueda ser el fundamento constitucional de su suspensión o modificación con apoyo en el artículo 121 de la Carta.

Siendo ello así, el Decreto número 555 de 1987, en cuanto pretende legislar sobre una materia que directamente no guarda conexidad con la ruptura del orden público y en cuanto suspende o modifica las disposiciones generales de contratación administrativa estatuidas por el Decreto número 222 de 1983, cuya aplicación en modo alguno es incompatible con el Estado de Sitio, quebranta de manera flagrante y ostensible el artículo 121 de la Constitución Nacional.

Además, viola sus artículos 2°, 55 y 118-8, toda vez que implica el ejercicio del poder por fuera de los términos constitucionales, invasión de la órbita propia del legislativo e indebido uso de la fuerza de ley que la Carta confiere a los decretos expedidos al amparo del Estado de Sitio.

V. Decisión

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declárase INEXEQUIBLE en todas sus partes el Decreto Legislativo número 555 de 1987 (marzo 24), "por el cual se dictan normas tendientes al restablecimiento del orden público".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández,*

Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

ESTADO DE SITIO. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. EL GOBIERNO, OBRANDO COMO LEGISLADOR EXTRAORDINARIO DE ACUERDO CON LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO 121 C. N. PUEDE MODIFICAR LA COMPETENCIA DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, REDISTRIBUYENDOLA ENTRE LOS EXISTENTES O CREANDO OTROS NUEVOS QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE JERARQUIZACION, INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA QUE LA CONSTITUCION DETERMINA.

Exequible en su totalidad, el Decreto Legislativo número 565 de 1987.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 43.

Referencia: Expediente número 1629 (242-E).

Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 565 del 26 de marzo de 1987 "por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia penal".

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobada por Acta número 22.

Bogotá, D. E., mayo diez y nueve (19) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El 27 de marzo del presente año el Secretario General de la Presidencia de la República, dando cumplimiento a lo ordenado por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, envió a esta Corporación copia auténtica del Decreto Legislativo número 565 de la misma fecha, para que procediere a su revisión constitucional.

Por auto de 2 de abril, este Despacho avocó el conocimiento del asunto y ordenó la fijación en lista pertinente para la efectividad de la intervención ciudadana.

Transcurrido dicho término sin que nadie se presentara a coadyuvar o impugnar el decreto, se corrió traslado de rigor a la Procuraduría General de la Nación, la que rindió concepto el 28 de abril último.

Procede ahora la Corte a pronunciar el fallo correspondiente.

II. El decreto que se revisa

El texto del Decreto Legislativo número 565 de 1987, es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 565 DE 1987
(marzo 26)

"*Por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia penal.*

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

"Que mediante Decreto número 3664 de 1986, se atribuyó a la Justicia Penal Militar el conocimiento del delito de 'Fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas';

"Que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de marzo de 1987, declaró inexequibles los artículos 4° y 5° del citado decreto;

"Que mediante Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987, se autorizó la designación de jueces especializados de los creados en la Ley 2ª de 1984,

DECRETA:

"Artículo 1° Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, los delitos de que trata el artículo 2° del Decreto Legislativo número 3664 de 1986, serán de competencia de los jueces especializados a que se refieren los Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987.

"Artículo 2° La competencia que se atribuye por el artículo anterior a los jueces especializados, se ejercerá sin perjuicio de la competencia que les asigna la Ley 2ª de 1984.

"Artículo 3° Los delitos señalados en el artículo 1° de este decreto se tramitarán y fallarán por el procedimiento especial señalado en el Capítulo II de la Ley 2ª de 1984.

"Artículo 4° Los procesados por los delitos indicados en el artículo 1° de este decreto no tendrán derecho a la libertad provisional ni a la condena condicional.

"Artículo 5° Las disposiciones anteriores se aplicarán a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia de este decreto.

"Artículo 6° Mientras se autoriza la designación de algunos de los fiscales previstos en la Ley 2ª de 1984, para los efectos de este decreto y del 468 de 1987, el

Ministerio Público ante los jueces especializados será ejercido por los correspondientes fiscales de circuito.

"Artículo 7° Los artículos anteriores entrarán en vigencia a partir del 1° de mayo de 1987.

Artículo 8° Los procesos relacionados con los delitos indicados en el artículo 1° del presente decreto que estén siendo conocidos por la Justicia Penal Militar, serán repartidos en el estado en que se encuentren entre los Jueces Penales del Circuito, conforme a las disposiciones vigentes en materia de reparto, en coordinación con la respectiva Dirección Seccional de Instrucción Criminal.

"Artículo 9° Salvo lo dispuesto en el artículo 7° este decreto rige a partir de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, a 26 de marzo de 1987.

VIRGIRLIO BARCO

"El Ministro de Gobierno, *Fernando Cepeda Ulloa.* El Ministro de Relaciones Exteriores, *Julio Londoño Paredes.* El Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy.* El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del Ministro, *Luis Fernando Alarcón.* El Ministro de Defensa Nacional, *Rafael Samudio Molina.* El Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán.* El Ministro de Desarrollo Económico, *Miguel Alfonso Merino Gordillo.* El Viceministro de Minas y Energía, encargado de las funciones del Despacho del Ministro, *Gabriel Turbay Marulanda.* La Ministra de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse.* El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, *Diego Younes Moreno.* El Ministro de Salud, *José Granada Rodríguez.* El Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez.* El Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo Correa".*

III. Consideraciones del Procurador General de la Nación

Considera el señor Procurador que el decreto en revisión es exequible, por las siguientes razones:

1. Satisface los requisitos formales que exige la Constitución para esta clase de actos.

2. Hay estrecha relación entre el contenido de este decreto y varios de los considerandos del Decreto Legislativo número 1038 de 1984, todavía en vigencia, que declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio el territorio nacional.

3. Los artículos 1° y 2°, que se limitan a ampliar la competencia de los jueces especializados creados por la Ley 2ª de 1984, en el sentido de asignarles el conocimiento de los delitos de que trata el artículo 2° del Decreto número 3664 de 1986, no violan la Constitución, pues corresponde al legislador ordinario o extraordinario, fijar o asignar competencias para el juzgamiento de delitos.

4. No encuentra objeciones contra los artículos 3° y 4°, que fijan normas de procedimiento, pues se dejan a salvo los principios del debido proceso y el derecho de defensa y, en cuanto a la represión del derecho a la libertad provisional y a la condena condicional, ello corresponde regularlo al legislador.

5. Tampoco glosa el artículo 6°, que estatuye sobre funciones de Ministerio Público ante los jueces especializados, ni el 7° sobre vigencia, ni el 8° sobre reparto de procesos, ni el 9°, también sobre vigencia y suspensión de las normas que sean contrarias.

IV. Consideraciones de la Corte

1. El decreto que se revisa aparece firmado por el Presidente y todos los ministros; luego, desde el punto de vista formal, satisface las exigencias que prevé el artículo 121 Constitución Nacional, para los que se dicten dentro del régimen del Estado de Sitio.

2. El artículo 121 de la Constitución Nacional confiere al Gobierno dentro del Estado de Sitio, precisas facultades para suspender las leyes que sean incompatibles con esta emergencia, tomando disposiciones provisionales que las reemplacen mientras persista la turbación del orden público y encaminadas al restablecimiento del mismo. Tales disposiciones no sólo deben ser conexas con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Sitio sino congruentes con la Constitución.

3. Hay evidente conexidad entre el contenido general del decreto que se revisa y algunos considerandos del Decreto Legislativo número 1038 de 1984, que al respecto dicen: "Que en diversos lugares del país han venido operando reiteradamente grupos armados que han atentado contra el régimen constitucional, mediante lamentables hechos de perturbación del orden público y suscitado ostensible alarma entre los habitantes...": y, "que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y salubridad públicas y en la economía nacional". En efecto, por este decreto se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento en materia de fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

4. Los artículos 1° y 2° del decreto en revisión atribuyen a los jueces especializados a que se refieren los Decretos números 1806 de 1985 y 466 de 1987, la competencia para conocer de los delitos de que trata el artículo 2° del Decreto Legislativo número 3664 de 1986, sin perjuicio de la que ya les había asignado la Ley 2ª de 1984.

"El Gobierno, obrando como legislador extraordinario de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 121 de la Constitución Nacional, puede modificar la competencia de los despachos judiciales, redistribuyéndola entre los existentes o creando otros nuevos que satisfagan los requisitos de jerarquización, independencia y autonomía que la Constitución prevé para los órganos adscritos a la rama jurisdiccional del poder público, y sin vulnerar la estructura que para ésta ha señalado la Constitución".

En el caso a estudio el Gobierno ha utilizado la primera de tales alternativas, asignándoles a jueces especializados cuya creación había sido dispuesta por normas anteriores al conocimiento de ciertos delitos relacionados con el porte de armas. Dichos jueces, al tenor del artículo 10, del Decreto número 568, han debido ser nombrados, a más tardar el 10 de abril del año en curso, por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a quienes precisamente corresponde esta atribución según el artículo 157 de la Constitución Nacional.

Son pues, exequibles estos artículos.

Sin embargo, observa la Corte la impropiedad en que se incurrió en el artículo 1° al transferir a los jueces especializados una competencia prevista en el artículo 2° del Decreto número 3664 de 1986, que fue declarado inexequible por esta Corporación. Luego, en el fondo, se les está adscribiendo una competencia inexistente.

5. Los artículos 3°, 4°, 6° y 8° se refieren a aspectos procedimentales.

Dentro del régimen del Estado de Sitio puede el Gobierno dictar normas transitorias sobre procedimientos judiciales, ciñéndose a los principios fundamentales que prevé la Constitución sobre todo el artículo 6°, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa.

En el caso a estudio no se ha creado un procedimiento nuevo sino que se ha remitido al especial que prevén los artículos 13 a 35 de la Ley 2ª de 1984.

El artículo 4° priva a los procesados por los delitos que indica el artículo 1° de los beneficios de la libertad provisional y de la condena de ejecución condicional, lo que aplicable según el artículo 5° sólo a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia del decreto. No se suscita entonces discusión alguna sobre la favorabilidad de la ley penal, al tenor del artículo 26 de la Constitución Nacional, pues es claro que el legislador ordinario o extraordinario puede modificar hacia el futuro los beneficios de la ley penal, tanto de la sustantiva como de la procedimental, sin desconocer, desde luego, el derecho de defensa. Tal no es el caso que se examina. Luego, son exequibles estos artículos.

El artículo 6° sobre atribución de las funciones del Ministerio Público ante los jueces especializados que se vienen mencionando a los fiscales de circuito, está de acuerdo con el artículo 144 de la Constitución Nacional. Es también exequible. Observa la Corte que esta disposición fue modificada posteriormente por el Decreto número 735 de 1987, que ordenó la creación de fiscalías para estos casos.

El artículo 8° dispone el reparto de los procesos que a la fecha de entrar en vigencia el decreto estuviesen en manos de la justicia penal militar, a los Jueces Penales de Circuito, conforme a las disposiciones vigentes en materia de reparto y en coordinación con la respectiva Dirección Seccional de Instrucción Criminal. Ello está en consonancia con fallo que esta Corporación profirió el 5 de marzo último acerca de la inexequibilidad del Decreto número 3671 de 1986. Este artículo es desde luego, exequible.

6. Los artículos 5°, 7° y 9°, regulan la vigencia temporal del decreto.

El artículo 5°, ya citado, dispone la aplicación de las disposiciones que lo anteceden "a los hechos que tengan lugar a partir de la vigencia de este decreto", satisfaciendo, como se dijo, la garantía de favorabilidad de la ley penal de que trata el artículo 26 de la Constitución Nacional, y en consonancia con la doctrina reiterada de esta Corporación acerca de las disposiciones que en materia penal se dicten dentro del Estado de Sitio.

El artículo 7° dice que "los artículos anteriores entrarán en vigencia a partir del 1° de mayo de 1987" y el 9° señala que "salvo lo dispuesto en el artículo 7°, este decreto rige a partir de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias".

Se sigue de ahí que los artículos 1° a 6° sólo entran a regir desde el 1° de mayo y que el artículo 8° rige desde la publicación.

No hay glosa alguna al respecto, como tampoco para el texto del artículo 9° según el cual este decreto suspende las disposiciones que le sean contrarias, pues tal es precisamente el efecto que se prevé para los decretos legislativos fundados en el artículo 121 de la Constitución Nacional.

V. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar exequible en su totalidad, el Decreto Legislativo número 565 de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

MEDIDAS TENDIENTES AL ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS DEL ESTADO, LIQUIDACION AL IMPORTE DE IMPUESTOS INDIRECTOS. RENTA, PATRIMONIO Y GANANCIAS OCASIONALES, A CARGO DE AQUELLOS ASALARIADOS NO OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION DE RENTA. LAS DEDUCCIONES HECHAS A LAS PERSONAS NO OBLIGADAS A DECLARAR NO PODRAN SER OBJETO DE DEVOLUCION YA QUE POR SER HECHAS A TITULO DE ABONO O PAGO DEL IMPUESTO TIENEN CARACTER DEFINITIVO, CONFORME A LA CONSTITUCION, EL LEGISLADOR ES AUTONOMO PARA ADOPTAR EL SISTEMA DE TRIBUTACION QUE A BIEN TENGA PROVEER A SU EFECTIVIDAD.

Exequible el artículo 37 de la Ley 55 de 1985.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 44.

Referencia: Expediente número 1508.

Acción de inexequibilidad contra el artículo 37 de la Ley 55 de 1985.

Actor: *Alfonso Marín Morales.*

Magistrado sustanciador: *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobado según Acta número 22.

Bogotá, D. E., mayo diecinueve (19) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

Haciendo uso del derecho que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional el ciudadano Alfonso Marín Morales, formuló acción de inexequibilidad contra los artículos 40 y 37 de la Ley 55 de 1985.

La demanda fue admitida parcialmente, ya que solo se encontró formalmente apta respecto del artículo 37 de la mencionada ley y de ella se dio traslado al Procurador General de la Nación, quien manifestó estar impedido para conceptuar por haber participado, en su calidad de Representante a la Cámara, en la elaboración y expedición de la Ley 55 de 1985.

La Sala Constitucional aceptó el impedimento invocado y corrió traslado de la demanda al Viceprocurador General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° ordinal 1°, de la Ley 25 de 1974. Dicho funcionario rindió la vista fiscal de rigor.

Agotados los trámites del proceso de constitucionalidad entre la Corte a resolver la petición incoada, previas las siguientes consideraciones:

II. Norma acusada

El texto literal de la disposición acusada, incluidos los acápites de la ley a que pertenece es como sigue:

"LEY 55 DE 1985
(junio 18)

"Por medio de la cual se dictan normas tendientes al ordenamiento de las finanzas del Estado y se dictan otras disposiciones".

".....

"Artículo 37. El impuesto de renta, patrimonio y ganancia ocasional a cargo de los asalariados no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los ingresos realizados por el contribuyente dentro del respectivo año gravable".

III. Razones de la demanda

Aunque la redacción de la demanda no es lo suficientemente clara y la circunstancia de su admisión parcial dificulta concretar con toda precisión el concepto de violación que esgrime el actor y las normas constitucionales presuntamente infringidas por el precepto legal contenido en el artículo 37, hasta el punto que el Viceprocurador estima en su concepto que debe proferirse decisión inhibitoria; considera la Corte que del contexto general del libelo se deduce que el actor invoca como violadas por la referida norma legal los artículos 77 y 92 de la Carta y que dicha violación acontece porque la norma acusada no guarda relación con el título de la Ley 55 de 1985.

Adicionalmente argumenta el demandante que la disposición impugnada –artículo 37– "crea un nuevo impuesto contrariando la ley de exenciones".

IV. Concepto del Viceprocurador General de la Nación

Mediante oficio número 1086 de noviembre 7 de 1986 el Viceprocurador General de la Nación solicita a la Corte que se inhiba para proferir decisión de fondo "por ineptitud sustancial de la demanda", o en su defecto "declare EXEQUIBLE el artículo 37 de la Ley 55 de 1985".

El colaborador fiscal fundamenta su petición principalmente en lo siguiente:

En primer término observa que "el actor no señala concepto de violación, pues simplemente dice que 'crea un nuevo impuesto contrariando la ley de exenciones' y

tampoco indica la disposición constitucional que considera infringe tal norma", por lo cual concluye en la ineptitud sustantiva de la demanda.

Para el caso en que la Corte opte por pronunciarse sobre el fondo de la impugnación considera "que no se ha creado un nuevo impuesto, como lo afirma el actor, pues la norma alude a los de renta, patrimonio y ganancia ocasional los cuales ya existían" y que además "el Congreso de la República está facultado constitucionalmente para crear nuevos impuestos, sin que este hecho implique violación a mandato superior alguno".

Finalmente y con la advertencia de que se trata de un asunto ajeno al debate de exequibilidad, plantea la vista fiscal, en relación con la retención en la fuente del impuesto de ganancia ocasional que se genera por la enajenación de activos fijos que puede presentarse el caso de que el asalariado, "tenga dificultades o se vea en la imposibilidad de demostrar la ausencia de aquella ganancia ocasional que motivó la retención del impuesto por tal concepto, resultando con ello el pago de un impuesto no causado realmente".

V. Consideraciones de la Corte

Primera. La norma acusada forma parte de una ley, por lo tanto la Corte es competente para conocer de la demanda, conforme lo dispone el ordinal 2° del artículo 214 de la Constitución Nacional.

Segunda. Conforme se dejó sentado en el Capítulo III que antecede, esta Corporación habrá de proferir fallo de mérito sobre la petición incoada, por considerar que no le está vedado al juez de constitucionalidad interpretar la demanda con amplitud, ya que no puede dejar de lado la intención del demandante al proponerla, so pretexto de la obscura redacción del memorial, pues no le falta ninguno de los requisitos que exige el artículo 16 del Decreto número 432 de 1969. Procediendo así la Corte no quebranta los principios rectores de la acción de inexequibilidad, sino que por el contrario atendiendo a su carácter de acción pública, morigera su riguroso tecnicismo más propio del recurso extraordinario de casación y no de una acción ciudadana incoada por quien colabora en la tutela del ordenamiento constitucional.

Reitera la Corte su tesis tradicional de no exigir para el ejercicio de la acción pública de inexequibilidad una "rigurosa ortodoxia procesalista que podría llevar a hacer nugatorio tan preciso atributo ciudadano" como lo dijo en su sentencia de 6 de septiembre de 1979 de la Sala Plena.

Tercera. Después de presentada la demanda y antes de su reparto, el ciudadano Pablo Acuña Fergusson, invocando además su condición de Asesor Jurídico de la Dirección de Impuestos Nacionales, presentó un memorial para defender la constitucionalidad de los preceptos acusados.

Cabe recordar que la Corte tiene definido desde la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo número 1 de 1969, que la intervención ciudadana de impugnación o coadyuvancia de la demanda no está expresamente consagrada en las acciones de inexequibilidad, ya que el constituyente solo la contempla para los casos de revisión forzosa de los decretos legislativos que expide el Gobierno en virtud de las

facultades extraordinarias que le confieren los artículos 121 y 122 de la Constitución, no se opone a la índole de la acción pública del artículo 214 de la Carta.

Cuarta. La violación de los artículos 77 y 92 se presenta, conforme a la argumentación del actor, porque la disposición acusada no constituye ordenamiento de las finanzas del Estado, sino que es "un nuevo impuesto", toda vez que después de exonerar a algunos asalariados de la obligación de presentar declaración de renta y complementarios "nos sale con el cuento de que el impuesto a la renta, patrimonio y ganancia ocasional, de lo que había eximido *'es el que resulte de sumar las retenciones por todo concepto...'* " (subraya el actor).

Los artículos de la Constitución que considera infringidos el acusador corresponden a la reforma constitucional de 1968 y mediante ellos se buscó la sistematización y perfeccionamiento de la tarea legislativa.

El artículo 77 prescribe que todo proyecto debe referirse a una misma materia, a fin de precaver las agregaciones sorpresivas o extrañas al tema de éste; en concordancia con lo allí dispuesto, el artículo 92 ordena que "el título de las leyes deberá corresponder al contenido del proyecto y a su texto".

Aunque el constituyente previó que el correctivo para el desacato de lo normado en el artículo 77 corresponde imponerlo al Presidente de la respectiva comisión mediante el rechazo de las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con la materia específica de cada proyecto, es doctrina de esta Corporación, adoptada en el fallo de su Sala Plena de 26 de octubre de 1982 que el control parlamentario no excluye el jurisdiccional confiado a la Corte, cuando aquél no se verificó o cuando la correspondiente decisión carece de fundamento constitucional.

Con sujeción al anterior parámetro jurisprudencial, se procede a confrontar la norma impugnada:

La Ley 55 de 1985 fue expedida con el propósito de adoptar medidas tendientes al ordenamiento de las finanzas del Estado y expedir otras disposiciones, según reza su acápite:

"Consta de 5 Capítulos y de varias secciones que tratan diferentes temas relacionados con los fondos de Estado, así:

" *Capítulo I.* De las rentas de la destinación especial.

"Sección Primera: Normas generales.

"Sección Segunda: SENA e ICBF.

"*Capítulo II.* De los recursos de capital.

"Sección Primera: Créditos con el Banco de la República.

"Sección Segunda: Títulos de Ahorro Nacional, TAN.

"Sección Tercera: Bonos para la Paz.

"Sección Cuarta: Bonos de Deuda Pública Externa.

"Sección Quinta: Disposiciones comunes a las Secciones segunda, tercera y cuarta.

"*Capítulo III*. De los ingresos tributarios.

"*Capítulo IV*. Consolidación de la deuda pública.

"*Capítulo V*. Otras disposiciones".

Resulta evidente, la relación de conexidad que existe entre la materia y título de la ley con la norma acusada, ya que mediante ésta el legislador señaló la forma en que se liquidaría el importe de los impuestos directos –renta, patrimonio y ganancias ocasionales– a cargo de aquellos asalariados no obligados a presentar declaración de renta. Esa prescripción hace parte del capítulo de la ley denominado ingresos tributarios y obedece a la necesidad de determinar los impuestos y darle certeza a los recaudos hechos por el sistema de retención en la fuente, como pago parcial (anticipo) de los impuestos, disposición que aparece racional y lógica si se tiene en cuenta que se trata de personas a las que la ley, bajo determinadas condiciones, las ha exonerado de la obligación de presentar declaración de renta, pero no de la sustancial de pagar los impuestos cuando se realicen los hechos generadores del gravamen, causantes a la vez de "retenciones en la fuente". Estas deducciones no podrán ser objeto de devolución o compensación legal ya que por ser hechas a título de abono a pago del impuesto tienen carácter definitivo y no se restituirán al contribuyente, cumpliéndose así uno de los requisitos fundamentales del impuesto, siendo los otros el carácter forzoso y la falta de "contrapartida" entre el pago del impuesto y determinados beneficios para el contribuyente, requisitos éstos que también se cumplen en el tributo a que alude el mencionado artículo 37 acusado.

Lo anterior indica que la materia objeto de la norma que se revisa no es extraña a los temas de la economía nacional a que se refiere la ley e indudablemente guarda la debida correspondencia y armonía con el título de ésta que se refiere al ordenamiento de las finanzas del Estado, uno de cuyos aspectos lo constituye precisamente, la determinación y recaudo de los tributos.

Así las cosas, es dable concluir que la norma bajo examen cumple a plenitud las exigencias constitucionales previstas en las disposiciones que el actor estima vulneradas.

Quinta. La facultad impositiva como expresión de la soberanía del Estado fue consagrada por el constituyente y su ejercicio se confía al legislador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 76-13-14, 204, 207 y 210 de la Carta, sin que de estas normas se derive condicionamiento alguno del ejercicio de esa potestad, en cuanto a la determinación de los elementos esenciales que integran el concepto de impuesto o en relación con su recaudo. Esto es decir, el legislador tiene un poder amplio para el señalamiento, modificación o extinción de las obligaciones tributarias; aun la facultad de señalar las rentas, que corresponde a las entidades territoriales, se debe desarrollar por éstas con sujeción a las directrices que establezca la ley.

Conforme a las autorizaciones constitucionales que se citan, el legislador es autónomo para adoptar el sistema de tributación que a bien tenga proveer a su efectividad, según lo aconsejen las circunstancias del momento. Es obligado inferir

entonces, que una previsión como la contemplada en la disposición que se revisa, no puede resultar contraria al ordenamiento constitucional, pues sólo establece un mecanismo para calcular los impuestos sobre la base de la retención en la fuente, para aquellas personas naturales a quienes exonera de presentar declaración de renta pero no del deber de contribuir de alguna manera al sostenimiento del aparato estatal.

Sexta. Para la Corte no es atendible el argumento del actor según el cual el artículo 37 acusado resulta contrario a la ley de exenciones, pues aunque así se considerara contra todo lo precedentemente dicho, se trata de normas de igual jerarquía, y por consiguiente la incompatibilidad entre ellas, no constituye vicio de inconstitucionalidad, es una forma de derogación de la ley.

Séptima. La inquietud que plantea el Viceprocurador, como él mismo lo advierte, es un asunto extraño dentro del proceso de constitucionalidad, no obstante, respecto de ella cabe anotar, que si bien, la declaración de renta es un medio eficaz de prueba y se halla amparado por la presunción legal de veracidad, la norma acusada no impide o limita que los asalariados que se hallen en las condiciones contempladas en la ley puedan valerse de cualquier medio probatorio para demostrar que el incremento patrimonial que supone el impuesto de ganancia ocasional no se causó, o que a pesar de haberse causado la ley no lo considera objeto de ese gravamen.

Octava. Debe advertirse finalmente que la norma acusada una vez que fue admitida la demanda que originó el presente proceso, se subrogó por el artículo 5° de la Ley 075 de 23 de diciembre de 1986 a pesar de ello la Corporación decidirá pronunciarse de fondo ya que en fallo de la Sala Plena de 3 de marzo de 1987 (Expediente número 1534) dijo, y es pertinente reiterarlo, que "según el artículo 214 a ella corresponde decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y de los decretos-ley que allí se indican *'cuando fueren acusados* ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano' de tal modo que si habiéndose incoado y admitido la demanda durante la vigencia de la norma, se sucede la derogatoria de ella antes del fallo, no puede la Corte Suprema de Justicia dejar de pronunciarse, toda vez que en su cabeza se ha radicado ya la competencia".

VI. Decisión

En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional, y oído el concepto del Viceprocurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar EXEQUIBLE el artículo 37 de la Ley 55 de 1985.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera* (Con salvamento de voto), *Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor*

Marín Naranjo (Con salvamento de voto), *Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra* (Con salvamento de voto), *Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Oscar Peña Alzate,* Conjuez, *Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero* (Con salvamento de voto), *Jacobo Pérez Escobar* (Con salvamento de voto), *Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO

Nuestro disentimiento se concreta al hecho de haberse pronunciado la Corte, mediante decisión de fondo, sobre normas derogadas o no vigentes al momento de la decisión, pues consideramos que en tal evento el pronunciamiento a tomar debió ser meramente formal o inhibitorio.

El criterio precedente, lo apoyamos en las razones que hemos sentado para casos semejantes y que son las siguientes:

1ª De manera constante y reiterada, por más de cincuenta años, ha sostenido la Corte que el fallo de inexequibilidad tiene el importante y singular efecto de dejar insubsistente la norma declarada como contraria a la Constitución, o en otros términos, la decisión de inexequibilidad no es otra cosa que la declaración jurisdiccional de que la ley acusada, por vulnerar o ser incompatible con la constitución, no puede ejecutarse en lo sucesivo, pues de inmediato se produce su retiro del ordenamiento jurídico.

2ª Según el planteamiento precedente, la acción de inexequibilidad supone el cotejo de la Constitución con una norma vigente al momento de decidir la Corte, pues fuera de que los efectos del fallo en esta materia se proyectan sobre el futuro y no sobre pasado, de no existir norma vigente al momento del fallo, no habría objeto sobre qué decidir, porque no resulta ser lógico que se ordene retirar de la normatividad lo que no existe, lo que con antelación fue retirado o había desaparecido.

Precisamente, la Corte, en fallo de 26 de abril de 1979, cuando abordó el tema de la acción de inexequibilidad de normas derogadas afirmó lo siguiente:

"En consecuencia, el objeto fundamental buscado con este control y, por tanto, de la acción de inexequibilidad, no es otro que hacer inaplicable la regla jurídica inconstitucional.

"Por lo mismo, la confrontación normativa en que consiste este control solo es posible entre normas vigentes, una constitucional y otra legislativa. Y, no es lógico, pues carece de objeto, y no puede haber acción sin interés jurídico actual que la justifique, el que la Corte se pronuncie sobre validez de una norma derogada.

"Carecería de efecto un fallo teórico, de alcances puramente morales o docentes, extra-jurídicos, declarativos de la inconstitucionalidad de una disposición ya inexistente, inaplicable de suyo por estar derogada.

"De otra parte, cabe preguntarse si una tal declaración destruiría la seguridad jurídica que la Corte ha protegido con sus decisiones inhibitorias.

"En Colombia, la ley se presume constitucional e intangibles los efectos de su aplicación, como derechos bien adquiridos, mientras la Corte no la juzgue inconstitucional. Por eso, sus sentencias en este campo sólo puede tener efectos futuros, que no son sino la inaplicabilidad de la norma inexequible, como sanción jurídica del indebido ejercicio de la competencia constitucional del Gobierno o del Congreso, pero dejando a salvo las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de aquélla, en defensa de la seguridad jurídica y de la buena fe de los gobernados.

"La función de la Corte como guardiana de la Constitución es específica y exclusivamente judicial, aunque con implicaciones políticas, y no puede transformarse en la de un poder moral, directivo, que la Constitución no le atribuye. La excepción del Estado de Sitio, como lo dijo la Corte en fallo de octubre 20 de 1977, obedeció a razones distintas.

"Unicamente con esta interpretación se logra deslindar la inexequibilidad de fenómenos como la derogatoria y la declaración de nulidad a los cuales se la ha querido asimilar.

"Hay que agregar que la acción de inconstitucionalidad es una garantía efectiva, la garantía de las garantías, un poder correctivo y conservador de la constitución y no una simple facultad moderadora del ejercicio de las demás competencias. De lo que se trata en el juicio de validez constitucional es de contener dentro de sus competencias al Ejecutivo y al Legislativo, prescindiendo de los actos que las desbordan, no por amonestaciones orientadoras sino con decisiones con efecto inmediato y no meramente declarativas de principios, de modo que la norma constitucional violada recobre o tenga la plenitud de su eficacia.

"El juez constitucional representa la voluntad del constituyente, sobrepuesta a la de los órganos que deben darle aplicación y desarrollo.

"De lo cual se desprende que la acción de inexequibilidad caduca o precluye respecto de las normas derogadas, pues pierde su razón de ser, su naturaleza de garantía, al perder actualidad la posible lesión sufrida por el orden jurídico que aquellos transgredieron. Los efectos de la derogación eliminan dicha acción por innecesaria a los fines que le asigna la Constitución que es la de mantener su integridad".

Más adelante la Corte, en fallo de octubre 4/84, insistiendo en su posición y procurando hacer mayor claridad y precisión, sentó las reflexiones siguientes:

"*Segundo.* Con sus especiales características, que lo distinguen a otros modelos, el proceso de constitucionalidad de una norma legal tiene en ésta su específico objeto. Sobre él recae la correspondiente decisión judicial, y es él también uno de los elementos de la cosa juzgada, porque ésta se produce precisamente cuando se da la repetición del mismo objeto (*eadem res*), luego de haber sido materia de juicio y fallo anteriores, sobre su constitucionalidad.

"Consecuencia directa de la sentencia que declara la exequibilidad de una disposición legal, como resultado de su fidelidad a los preceptos constitucionales, es la permanencia de aquélla en la normatividad, para que produzca o siga produciendo todos sus efectos jurídicos. *Contrario sensu* la inexequibilidad de la norma objeto del juicio conduce inexorablemente a su retiro inmediato del ordenamiento jurídico, sus efectos cesan *ipso jure,* su entidad legal desaparece automáticamente, aunque como muchas veces se ha explicado, tales resultados ocurren *ex nunc.*

"Apenas elemental resulta, entonces, el presupuesto procesal de la existencia del objeto del juicio, esto es, que exista la norma sobre cuya constitucionalidad éste versará, y que habrá de recibir los efectos del fallo, para desaparecer o para subsistir, según el caso. Mal podría ser retirada de la ordenación legal una disposición que ya no forma parte de ella. Mal se podría decidir la extinción de una norma inexistente. Tal sería el caso de la declaratoria de inexequibilidad de un precepto legal desaparecido como consecuencia de derogación o figura de semejantes efectos. En ese sentido dícese que no hay objeto del proceso, ni del fallo, por lo tanto. De ahí la inevitable inhibición de la entidad sentenciadora, la cual no es otra cosa que su abstención para decidir acerca de la constitucionalidad de un objeto que ya no puede ser ni constitucional ni inconstitucional sencillamente porque no existe. En gracia del llamado magisterio moral podría pensarse en un simple dictamen sobre si la norma, en su momento, tuvo o no esa virtud, pero jamás en providencia que le permitiera seguir ejecutándose o dejar de ejecutarse, ya que ello significaría un resultado imposible por la inexistencia actual del objeto. Lo que el artículo 214 de la Carta ordena no es solo que la Corte declare si la norma sujeta a su jurisdicción se ajusta o no a la preceptiva constitucional, sino que, además, resuelva su exequibilidad o su inexequibilidad y esto no puede ocurrir cuando no hay objeto para hacerlo.

"En este un antiguo criterio de la Corte en el que se han apoyado numerosas decisiones de inhibición por el mismo motivo. Los casos en que pudiera pensarse que la Corporación ha introducido excepciones, por el contrario confirman su tradicional posición jurisprudencial al respecto. Tales serían:

"a) Las decisiones sobre exequibilidad de normas contenidas en decretos legislativos, porque han ocurrido solo cuando éstas han adquirido permanencia en virtud de ley que así lo determina. Hay, pues, objeto actual en esas decisiones;

"b) Los fallos sobre preceptos de leyes o de códigos cuya vigencia haya sido aplazada por el legislador, porque esta circunstancia temporal no significa que aquéllas no existan como entidades legales. De ahí su condición de objeto actual para el pronunciamiento de la Corte;

"c) Las sentencias sobre normas transitoriamente suspendidas por decretos legislativos de estado de sitio, por la misma razón;

"d) Las decisiones relativas a proyectos de ley, ya que si bien éstos aún no tienen naturaleza ni fuerza legal, es la propia carta la que establece su juzgamiento por la Corte, como excepción expresamente determinada;

"e) Los fallos sobre normas derogadas o subrogadas que habiendo sido materia de anterior inhibición por tal razón, revivan, ya que este hecho las determina como objetos de decisión, precisamente en cuanto vuelven a ser".

3ª Ahora bien, como se dijo *ab initio,* para que la Corte pueda decidir de fondo la acción de inexequibilidad contra una norma, ésta debe estar vigente al momento de producirse el fallo. Por consiguiente, si con antelación a la decisión por la Corte la norma ha sido derogada, como ya no existe sobre qué decidir, o sea, ya no es posible retirar del derecho positivo lo que ciertamente ya está retirado, la decisión que corresponde tomar en esta hipótesis, es la inhibitoria.

El criterio que se acaba de exponer también lo ha sostenido la Corte de vieja data, como quiera que en fallo de 3 de noviembre de 1950, reiterado posteriormente en múltiples decisiones, ha afirmado, respecto de la acción de inexequibilidad, que "si al tiempo de fallar no están en vigor la ley o el decreto acusados, el orden constitucional si bien temporalmente quebrantado, se ha restablecido automáticamente, ya que el acto violatorio no tendrá fuerza ni eficacia en el porvenir, y en tal evento, no persistiendo el menoscabo de la Norma Suprema, el fallo de la Corte no vendría a restablecer el imperio de la Carta y no se cumpliría así la misión que ésta le señala. Podría decirse que cualquier decisión en tales condiciones no se dirigía a demostrar que el acto acusado es o no inconstitucional, sino que fue o no fue inconstitucional, lo cual... no se ajustaría al objeto que en sí tiene la acción de inexequibilidad".

4ª De conformidad con los planteamientos precedentes, no compartimos la decisión tomada por la Corte en el específico de haber decidido de fondo respecto de una norma derogada o que no estaba vigente al momento de pronunciarse el fallo.

Fecha *ut supra.*

Alberto Ospina Botero, Rafael Baquero Herrera, Jacobo Pérez Escobar, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra.

PROPOSICION JURIDICA COMPLETA. SISTEMAS Y DIRECTRICES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN LA REPUBLICA. "RESULTARIA A TODAS LUCES EXCESIVO QUE EL CONTROL FISCAL SE EJERCIERA SOBRE TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES PRIVADAS, SIN DISTINCION ALGUNA, AUN EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES NO CUMPLEN FUNCIONES DE GESTION FISCAL PROPIAMENTE DICHA, PUES ELLO SIGNIFICARIA EXTENDER LAS FUNCIONES DEL CONTRALOR MUCHO MAS ALLA DEL AMBITO ESPECIFICO QUE LE HA SEÑALADO LA CARTA.

Inexequible el artículo 2º de la Ley 20 de 1975, la expresión a cualquier título".

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 45.

Referencia: Expediente número 1571.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley 20 de 1975 (parcialmente).

Actor: *Eduardo Laverde Toscano.*

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 22 de mayo 19 de 1987.

Bogotá, D. E., mayo diez y nueve (19) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. La demanda

El ciudadano Eduardo Laverde Toscano, haciendo uso del derecho constitucional que le asiste, ha acudido a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que ésta declare la inexequibilidad de la frase que se subraya del artículo 2º de la Ley 20 de 1975, cuyo texto es el siguiente:

"LEY 20 DE 1975
(abril 28)

"Por la cual se modifican y adicionan las normas orgánicas de la Contraloría General de la República, se fijan sistemas y directrices para el ejercicio del control fiscal y se dictan otras disposiciones.

"El Congreso de colombia,

DECRETA:

".....

"Artículo 2° El Contralor General de la República, ejercerá sobre las entidades *o personas que a cualquier título* reciban, manejen o dispongan de bienes o ingresos de la Nación, la vigilancia y el control fiscal que le garanticen al Estado su conservación y adecuado rendimiento".

Dice el actor que la frase acusada vulnera nuestra estructura jurídico-política en cuanto "pretende desdibujar" los ámbitos de acción pública de cada uno de los órganos establecidos por el constituyente.

Agrega que resultan desbordados los límites de las funciones que la Carta ha asignado al Contralor (artículo 60) y que, además se usurpa una función presidencial cual es la prevista en el ordinal 11 del artículo 120.

Expresa que al Contralor corresponde "cuidar que el Presidente cuide" la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos, pero que no le compete "cuidar directamente" como lo autoriza la frase demandada.

Refiriéndose a los antecedentes de la norma, manifiesta el demandante que "el legislador no se ocupó –no era tampoco su función aunque sí su deber– en establecer en qué medida el propósito del legislador, traducido en ley de la República, se enmarcaba –ahí sí– en el ámbito de las funciones que el Constituyente asignó a la Contraloría". Y al respecto afirma que de esta omisión resulta la incompatibilidad con la Carta cuya declaratoria solicita.

II. Concepto del Procurador General de la Nación

El señor Procurador General, por medio del Oficio número 1116 de marzo 2, conceptúa sobre la exequibilidad de la frase demandada en los términos:

"Es indudable que los actos que el artículo 2° de la Ley 20 de 1975 dice realizados por personas o entidades (privadas), son por esencia, actos de gestión fiscal y, por lo tanto, están sujetos a la vigilancia de la Contraloría. Pero, no puede compartir el Despacho el concepto de que la expresión 'vigilancia de la gestión fiscal *de la administración*' (subrayado), contenida en el precepto 59 de la Constitución que estima vulnerado el demandante, debe entenderse exclusivamente referida a la administración pública, propiamente dicha, pues, si bien los actos de gestión fiscal, en estricto sentido, son inherentes y propios de la actividad administrativa de los entes públicos, debe considerarse que siempre que se trata de recibir, manejar y disponer de bienes y caudales públicos, se estarán ejecutando actos de gestión fiscal que, por

serlo, no sólo no pueden entenderse desligados de la administración pública por el hecho de que, eventualmente, se ejerzan por personas de carácter privado, sino que éstas, en virtud de la actividad realizada, participan en el ejercicio de la función administrativa del Estado. Es lo que se conoce como descentralización por colaboración".

"En este entendimiento, la previsión de la ley que se analiza no puede resultar extraña al precepto constitucional que se ha considerado vulnerado por el hecho de que el control fiscal que corresponde a la Contraloría se extienda a las entidades o personas particulares que cumplan actos de gestión fiscal, por cuanto el control aludido se halla perfectamente delimitado tanto en su objeto: bienes o ingresos de la Nación, como en su finalidad, cual es la de garantizar al Estado la conservación y adecuado rendimiento de los mismos.

"El Despacho considera, pues, que la vigilancia y control fiscales pueden recaer sobre personas particulares, siempre que se den los presupuestos señalados en la norma. Tal es el caso de la Federación Nacional de Cafeteros, que no obstante ser una persona jurídica de derecho privado, en virtud de un contrato celebrado con el Estado, recibe y maneja los dineros del erario público, provenientes del impuesto de exportación de café, con lo cual, en esta materia, ejerce actividades que constituyen verdadera gestión fiscal sujetos a la vigilancia de la Contraloría, como lo dejó definido la Corte en Sentencia de octubre 14 de 1970.

"Tampoco se comparte la tesis según la cual la función atribuida al ente fiscalizador sobre las personas que, a cualquier título, reciban manejen y dispongan del patrimonio del Estado, sea incompatible con la función del Presidente de la República prevista en el canon 120-11 de la Carta; 'cuidar de la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo a las leyes', pues, las funciones presidenciales descritas en el citado canon constitucional y las de control fiscal que cumple el Contralor General, son totalmente independientes. En efecto: una es la tarea de administrar y otra la de controlar fiscalmente la labor administrativa como que ésta última se reduce a confrontar la contabilidad de las cuentas y el manejo de los caudales públicos en orden a verificar si el administrado se ha ajustado a las leyes sobre apropiaciones y autorizaciones, para efectos de aprobar o improbar las cuentas. Dicho en otras palabras: se contrae el ejercicio de una revisión numérica contable de la actividad administrativa".

"Así las cosas, estima el Despacho que la norma impugnada no puede interpretarse como una forma de autorizar a la Contraloría General de la República para el ejercicio de una función administrativa sino como la simple determinación de sujetos sobre los cuales debe recaer la vigilancia y el control fiscal propios de la Contraloría, conforme a la norma superior.

"En razón de no tratarse de una función de Gobierno atribuida al Organismo de Control, no se ve cómo podría resultar lesionado el artículo 57 de la Carta que define y explica qué debe entenderse por 'Gobierno' y establece los requisitos indispensables para la expedición de sus actos, al tiempo que determina la responsabilidad del Ministro del Ramo respectivo, por la refrendación de los mismos.

"Ahora bien: aunque el Despacho entiende las razones del actor referidas a las posibilidades de exceso en la función asignada al Contralor por la norma en estudio, como, por ejemplo, la expedición de resoluciones que desvirtúen la naturaleza de la función que nos ocupa, tal circunstancia, sin embargo, no puede aceptarse como fundamento de la inconstitucionalidad alegada, por cuanto ella no depende de la eventual aplicación incorrecta de la ley".

III. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Es claro que tratándose de una norma legal, es la Corte Suprema de Justicia el Tribunal competente para conocer y decidir de manera definitiva sobre su constitucionalidad.

2. *Proposición jurídica*

La demanda versa sobre una frase. Este tipo de acusaciones tiene, entre múltiples desventajas, la dificultad para precisar su objeto, en este caso concreto, el motivo exacto por el cual juzga el actor que no puede ejercerse la vigilancia de la Contraloría General de la República sobre las entidades o personas que "a cualquier título" reciban, manejen o dispongan de bienes o ingresos de la Nación.

"En efecto, la frase acusada puede significar dos cosas: que no interesa el título específico con base en el cual se haya hecho la transferencia de bienes o de ingresos públicos, sino el simple hecho del recibo de ellos por una persona o entidad, para que ésta quede sometida a la vigilancia del Contralor; pero también, la frase en cuestión puede significar que quien recibe el ingreso o el bien, puede hacerlo como parte de la administración o como persona privada y en ambos casos será objeto de la aludida vigilancia. Debe, entonces, entrarse a interpretar tanto la norma acusada, en su conjunto, como aquéllas de la Constitución que el actor considera violadas, para definir el objeto del proceso, o desechar la acción con base en la doctrina de la inhibición por proposición jurídica incompleta. Si bien esta doctrina ha sido aceptada por la Corte, se ha aplicado con suma discreción y parquedad, reservándola para aquellos casos en los cuales el esfuerzo interpretativo resulta vano o muy riesgoso.

De allí que se haya escogido la vía interpretativa en el presente caso, como puede apreciarse en el siguiente numeral de estas consideraciones.

3. *Competencia del Contralor según la Constitución y según la norma demandada*

Existe amplia jurisprudencia a propósito de las normas constitucionales sobre *control fiscal*. Muy útil es la de 24 de febrero de 1977, cuyo ponente fue el honorable Magistrado Eustorgio Sarria, que al referirse sobre lo que debe entenderse por gestión fiscal, dice:

"El artículo 59 de la Constitución ordena: 'La vigilancia de la gestión fiscal de la Administración corresponde a la Contraloría General de la República y se ejercerá conforme a la ley...

"……

"La 'gestión fiscal de la administración' se inicia con los actos de adquisición o integración de un patrimonio del Estado que se destina a satisfacer las necesidades del servicio público; prosigue con los actos propios a su conservación, mejora y explotación; y concluye con la afectación, disposición o inversión de los bienes muebles e inmuebles que de él hacen parte, para el mismo fin que le dio origen y lo justifica.

"Estos actos caen bajo la vigilancia y están dentro de la actividad o función administrativa propia de la Contraloría y de los organismos de que se vale para su desarrollo y cumplimiento. Los modos o sistemas de vigilancia, su oportunidad y extensión, los determina la ley a través de normaciones de carácter objetivo, como las de los Códigos Fiscal de Contratación Administrativa, etc.".

Así se definió el primer parámetro que precisa la órbita de competencia de la Contraloría General de la República, conforme al artículo 59 de la Carta. Pero este menciona otro elemento esencial para configurar dicha órbita de competencia.

Resultaría a todas luces excesivo que el Control Fiscal se ejerciera sobre todas las personas y entidades privadas, sin distinción alguna, aun en aquellos casos en los cuales no cumplen funciones de gestión fiscal propiamente dicha, pues ello significaría extender las atribuciones del Contralor mucho más allá del ámbito específico que le ha señalado la Carta.

Esa indefinición de competencia contraría el Estado de Derecho por cuanto es de naturaleza el que estén determinadas previamente, por el orden jurídico, las atribuciones de cada funcionario y puesto que es principio tutelar de ese sistema la certeza de los gobernados sobre el campo de acción de cada autoridad.

En consecuencia, una expresión tan amplia como la frase "a cualquier título" implica la posibilidad de vigilancia fiscal no solamente sobre los particulares que ejercen una verdadera gestión fiscal (v. gr.: Federación Nacional de Cafeteros) sino también respecto de personas que detentan precariamente dineros o bienes públicos, como es el caso de las obligadas a retener impuestos.

Siendo ello así, la aplicación de la citada frase a percepciones o recibos que no corresponden a una gestión fiscal es una generalización inconstitucional de atribuciones pues excede la órbita señalada al Contralor en el artículo 59 de la Carta, y por tal motivo debe declararse inexequible.

IV. Decisión

Con fundamento en las consideraciones que se dejan expuestas, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y conocido el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declárase INEXEQUIBLE, del artículo 2° de la Ley 20 de 1975, la expresión "a cualquier título".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

COSA JUZGADA. NORMAS DE CARACTER LEGAL SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

La Corte remite a sentencia del 13 de noviembre de 1986.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 46.

Referencia: Expediente número 1573.

Acción de inexequibilidad contra el artículo 385 del Decreto número 1333 de 1986. Organización y funcionamiento de la Administración Municipal.

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Actor: *Rubén A. Serna R.*

Aprobada por Acta número 22.

Bogotá, D. E., mayo diecinueve (19) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

Ante esta Corporación el ciudadano Rubén Antonio Serna Ramírez, presentó demanda de inexequibilidad contra el artículo 385 del Decreto-ley número 1333 de 1986. La demanda fue admitida, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien emitió el concepto de rigor. Procede la Corte a resolver el asunto.

II. Texto de la norma acusada

El texto de la norma acusada es del siguiente tenor:

"Artículo 385. Conforme a lo dispuesto en el artículo 76 literal b) de la Ley 11 de 1986, están derogadas las normas de carácter legal sobre organización y funcionamiento de la administración municipal no codificadas en este estatuto".

III. Normas que se consideran infringidas

Estima el demandante como normas infringidas los artículos 2°, 55, 76 ordinales 1°, 12 y 118 ordinal 8°.

IV. Argumentos de la demanda

Las fundamentaciones de la demanda son las siguientes:

1. La Carta en el artículo 2° dispone que los poderes públicos se deben ejercer en los términos que la misma establece, por lo que a las autoridades públicas se les impone la obligación de actuar, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, sometidas a la Constitución y a la ley. En la norma que acusa, apreció el actor que el Presidente de la República no estuvo autorizado por la ley de facultades, artículo 76, literal b) de la Ley 11 de 1986, para disponer la derogatoria de las normas no codificadas. De lo anterior concluye que el contenido del artículo 385 del Decreto-Ley 1333 de 1986, manifiesta una evidente extralimitación de funciones en violación del artículo 2° de la Carta.

2. Como al Congreso de la República se le asignó por la Constitución la facultad de hacer la ley, no puede el Ejecutivo, sin incurrir en violación del artículo 55 de la Carta, sustituir al legislador sino en los casos excepcionales que ella misma ha señalado. Así, todo exceso en los límites que señalan, tanto la Constitución como la ley a la función legislativa del Ejecutivo, vulnera la garantía que se indica.

De otra parte, el artículo 76, ordinal 1° de la Carta asigna al Congreso la facultad derogatoria de las leyes por lo que para que el Presidente pueda decretar la derogatoria de normas legales debe estar expresa y precisamente facultado para ello, pues de lo contrario se invaden las órbitas de competencia del legislador, en violación de la Carta Fundamental como ocurre en la norma que demanda.

3. La acción de codificar tiene un alcance diverso de la de derogar, y como al expedirse el artículo 385 del Decreto 1333 de 1986 se dispuso la derogatoria de las disposiciones no codificadas, el Presidente de la República desconoció el mandato del artículo 118, ordinal 8° de la Constitución Nacional, pues fue facultado precisamente sólo para codificar las disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la organización de la Administración Municipal y no para derogarlas.

V. Concepto del Procurador General de la Nación

El Procurador General de la Nación en su concepto de fecha 3 de marzo de 1987, considera que ante la demanda que se estudia procede la aplicación del principio de cosa juzgada, en atención a que en sentencia de 13 de noviembre de 1986 la Corte Suprema de Justicia declaró la exequibilidad de la disposición acusada.

Así, debe la Corte ordenar que en el proceso que tramita se esté a lo resuelto en la mencionada sentencia.

VI. Consideraciones de la Corte

Como lo advierte el Procurador General de la Nación, efectivamente, la Corte ya decidió acerca de la constitucionalidad del artículo 385 del Decreto número 1333 de 1986, mediante fallo número 101 de la Sala Plena de noviembre 13 de 1986, dentro del proceso número 1507 declarándolo exequible por encontrarlo conforme con la Constitución Nacional.

Advierte la Corte, que en sentencia número 9 de 5 de febrero de 1987, dentro del expediente número 1513, demanda de Simón Castro Benítez, contra la misma norma objeto de la acusación que se estudia, la Sala Plena de esta Corporación ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia antes citada, como debe ordenarlo en este caso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de la Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE

ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia número 101 de noviembre 13 de 1986 (expediente número 1507), respecto del artículo 385 del Decreto número 1333 de 1986.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

COSA JUZGADA. DERECHOS DE AUTOR.

Remite a sentencia del 21 de octubre de 1982.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 47.

Referencia: Expediente número 1549.

Acción de inexequibilidad del artículo 161 de la Ley 23 de 1982. Autoridades administrativas. Autoridades de Policía. Derechos de autor.

Actor: *Edgar Sixto Tafur Jiménez.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobada por Acta número 22.

Bogotá, D. E., mayo diecinueve (19) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. ANTECEDENTES

El ciudadano Edgar Sixto Tafur Jiménez, presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra el artículo 161 de la Ley 23 de 1982. Se admitió la demanda, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien se declaró impedido para conceptuar dentro de este proceso. La Sala Constitucional de esta Corporación aceptó dicho impedimento y corrió traslado al Viceprocurador General de la Nación quien emitió concepto. Procede ahora la Corte a resolver el asunto.

II. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS

El texto de la norma acusada es del siguiente tenor:

"LEY 23 DE 1982
(enero 28)

"*Sobre derechos de autor.*

"El Congreso de Colombia,

DECRETA:

".....

"CAPITULO XI
"*Ejecución pública de obras musicales*

"Artículo 158. ...

"Artículo 161. Las autoridades administrativas de todos los órdenes, se abstendrán de expedir la licencia de funcionamiento, para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales, hasta cuando el solicitante de la referida licencia, presente el comprobante respectivo, de haber cancelado a los autores, representantes o causahabientes, los correspondientes derechos de autor.

".....".

III. Normas que se consideran violadas

El actor afirma que la norma objeto de su acusación viola los artículos 17 y 39 de la Carta.

Fundamentos de la acción

El actor fundamenta su petición en las siguientes consideraciones:

a) El artículo 161 de la Ley 23 de 1982, dejó en manos de los particulares las funciones y competencia que les corresponden a los agentes del Estado como encargados de la inspección al trabajo; este desprendimiento de funciones públicas propias de las autoridades de policía deja en manos de los autores, de sus representantes o de sus causahabientes, los deberes relativos al orden público interno, pues, se subordinan las competencias públicas a la previa expedición particular de un documento privado denominado "paz y salvo". Esta norma condiciona, de manera indebida la expedición de la licencia de funcionamiento de los establecimientos públicos de espectáculo musical por fuera de las competencias propias de las autoridades públicas que protegen el trabajo e inspeccionan las profesiones y oficios;

b) El contenido de las obligaciones civiles provenientes de las relaciones entre autores y sus derechos frente a los consumidores, no puede ser objeto de la coacción policiva puesta en manos de los particulares, pues no siempre es claro, expreso y actualmente exigible, mucho más en cuanto asigna la competencia para el conocimiento de estos asuntos a los jueces civiles;

c) La Ley 23 de 1982 adjudicó, a personas naturales o jurídicas del orden privado, el deber de proteger el trabajo como obligación social, limitando de esta manera las facultades y deberes propios del Estado, además transformó una obligación de carácter civil en una conducta objeto de regulación policiva, desbordando la naturaleza de esta última noción que debe circunscribirse a las cuestiones propias del orden público interno basado en los únicos motivos específicamente señalados para la tranquilidad pública: moralidad, seguridad y salubridad;

d) Como los autores y compositores no son las autoridades encargadas de regular las profesiones u oficios, pues no están atribuidos constitucionalmente de jerarquía, el artículo que se acusa contradice el contenido del artículo 17 constitucional, favoreciendo el desamparo de trabajadores y empresarios.

IV. La vista fiscal

Ante el impedimento del señor Procurador General de la Nación y la consecuente separación de ese Despacho del conocimiento del proceso, el señor Viceprocurador General de la Nación rindió el concepto fiscal correspondiente, en el que

solicita a la Corte Suprema de Justicia, que se esté a lo resuelto en la sentencia que sobre la misma norma profirió esta Corporación el 21 de octubre de 1982.

La vista fiscal recuerda que la Corte sentenció en otros dos procesos contra la misma norma, el uno fallado el 23 de noviembre de 1982 y el otro el 13 de febrero de 1984, ordenando estarse a lo resuelto, invocando el principio de la cosa juzgada, por lo que solicita se reitere la declaración de exequibilidad.

V. Cosa juzgada

1. De conformidad con lo dispuesto por la Carta en el artículo 214, la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer la demanda de inconstitucionalidad contra la norma que por este proceso se estudia, para determinar su conformidad o no con la Carta.

2. La Corte Suprema de Justicia previos los trámites de la acción pública de inexequibilidad que consagra la Carta, declaró la conformidad de la norma objeto del presente proceso, con la Constitución Nacional en sentencia de 21 de octubre de 1982.

Los argumentos señalados por el actor en el proceso que se resuelve, repite los que ha tenido oportunidad de conocer esta Corporación y en ejecución del principio de la cosa juzgada, debe la Corte ordenar que se esté a lo resuelto en la sentencia de 21 de octubre de 1982, al igual que lo ordena en las sentencias de noviembre 23 de 1982 y 13 de febrero de 1984.

Decisión

En mérito de lo expuesto y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–,

Resuelve

Estése a lo resuelto en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de octubre 21 de 1982 número 80 (Expediente 984).

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Alvaro Tafur Galvis, conjuez, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

COSA JUZGADA. RECURSOS DENTRO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. LAS DOS INSTANCIAS.

La Corte remite a sentencia de marzo 31 de 1984.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 48.

Referencia: Expediente número 1568.

Norma acusada: Artículo 57 de la Ley 2ª de 1984.

Actor: *Alfonso López Carrascal.*

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobada por Acta número 22.

Bogotá, D. E., mayo diecinueve (19) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Alfonso López Carrascal, presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984. Se admitió la demanda, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien se declaró impedido para conceptuar dentro de este proceso. La Sala Constitucional de esta Corporación aceptó dicho impedimento y corrió traslado al Viceprocurador General de la Nación, quien emitió concepto. Procede ahora la Corte a resolver sobre el asunto.

II. Texto de la norma acusada

El siguiente es el texto que se acusa:

"LEY 2ª DE 1984
(enero 16)

"Por la cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal.

"……

"Artículo 57. Quien interponga el recurso de apelación en proceso civil, penal o laboral deberá sustentarlo por escrito ante el juez que haya proferido la decisión

correspondiente, antes de que se venza el término para resolver la petición de apelación. Si el recurrente no sustenta la apelación en el término legal, el juez, mediante auto que solo admite el recurso de reposición, lo declarará desierto. No obstante la parte interesada podrá recurrir de hecho.

"Sustentado oportunamente, se concederá el recurso y se enviará el proceso al superior para su conocimiento".

III. Fundamentos de la demanda

Considera el actor que el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 viola ostensiblemente los artículos 16, 26, 45, 55 y 76-18 de la Constitución Nacional.

Funda la violación del artículo 16 de la Constitución Nacional, en que la norma acusada desconoce uno de los "bienes defensables de la persona" cual es el derecho de defensa en materia penal, que no le puede ser recortado exigiéndole al acusado que sustente el recurso de apelación cuando se le agravie en ese campo, amén de que tampoco puede ser discriminado quien como acusado no tiene medios para contratar en su defensa un abogado que,

Considera que, por lo mismo, se viola además el artículo 26 de la Constitución Nacional.

Agrega que el derecho procesal de apelar en materia penal conlleva el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 45 de la Constitución Nacional, y que dicho derecho se ve coartado por la exigencia que contiene la norma acusada.

Dicho requisito va también contra el artículo 55 de la Constitución Nacional, según el cual la justicia es un servicio público de cargo de la Nación, pues sería un contrasentido que la rama jurisdiccional negara un derecho del procesado penal que no pudiese sustentar el recurso de apelación impetrado.

Por último, manifiesta que ha habido violación del artículo 76-18 de la Constitución Nacional que faculta al Congreso para aprobar o improbar los tratados o convenios que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de Derecho Internacional, ya que a su entender la disposición acusada viola el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 8°, 24 y 25 del Pacto de San José.

IV. La vista fiscal

Ante el impedimento del señor Procurador General de la Nación y la consecuente separación de ese Despacho del conocimiento del proceso, el señor Viceprocurador General de la Nación rindió el concepto fiscal correspondiente, en el que solicita a la Corte Suprema de Justicia que se esté a lo resuelto en la sentencia que sobre la misma disposición profirió esta Corporación el 31 de mayo de 1984.

V. Consideraciones de la Corte

Si bien esta Corporación es competente para conocer de demandas de inexequibilidad contra las leyes y decretos que expida el Gobierno en ejercicio de las

facultades que prevén los artículos 76, ordinales 11 y 12, y 80 de la Constitución cuando fueren acusados por cualquier ciudadano, según lo establece el artículo 214 de la Constitución Nacional, sobre el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 ya ha recaído un fallo definitivo de exequibilidad, conforme lo recuerda el señor Viceprocurador General de la Nación, en el concepto atrás mencionado.

En efecto, en fallo de 31 de mayo de 1984 esta Corte tomó la siguiente decisión respecto del artículo sobre el que versa este proceso:

"Novena. *Las dos instancias.*

"1. Según el artículo 57 de la Ley 2ª, también acusado, no basta interponer dentro del término y por escrito el recurso de apelación en procesos de naturaleza civil, laboral o penal, para concederlo, sino que es además necesario sustentar en tiempo la apelación interpuesta, a riesgo de que si no se hace esto, se declarará desierto el recurso, salvo eventual reposición en contrario.

"2. Halla la Corte en primer término que dicho precepto no niega sino que apenas encausa el derecho a la segunda instancia, es decir, a que un juez de mayor jerarquía y garantía, generalmente de carácter plural y más experimentado, tenga la oportunidad de volver a examinar el proceso del inferior y de reiterar o de rectificar la decisión tomada. Así se reitera sin contradicción alguna en el artículo 14-5 del artículo único de la Ley 74 de 1968, por la que se incorporó a nuestro ordenamiento, entre otros, el 'Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos'.

"3. Obsérvese además que de conformidad con el actual régimen jurídico procesal penal no puede darse el caso de un sindicado que carezca de defensa o de apoderado de oficio, el cual es cargo de obligatoria aceptación (artículo 117 C.P.P.). Y en cuanto a los procesos judiciales de naturaleza civil o laboral se tiene establecida también la indefectible asistencia de apoderado. Adviértese que según la Corte (Sala Penal) la falta de defensa efectiva genera nulidad del proceso; agrégase que con la norma acusada se busca también que los abogados cumplan a cabalidad con su deber de defender sus poderdantes y de interponer los recursos reconocidos en favor de sus clientes. Por último, no es sostenible que siempre que se exija en cualquier procedimiento la necesidad de sustentar o justificar un recurso, se esté desconociendo el derecho de defensa.

"Dado que lo predicable del proceso penal lo es también de los procesos civil y laboral, no hay reparo alguno adicional a su respecto.

"Por lo tanto, para la Corte este precepto es también constitucional".

VI. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del señor Viceprocurador General de la Nación.

RESUELVE

ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia número 43 de 31 de marzo de 1984, que declaró la exequibilidad del artículo 57 de la Ley 2ª de 1984.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Oscar Peña Alzate,* conjuez, *Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

El suscrito secretario general de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR:

Que el magistrado Héctor Marín Naranjo, no asistió a la Sala Plena celebrada el día diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y siete, por encontrarse con excusa justificada.

Que el Conjuez Oscar Peña Alzate, no participó en la discusión de este proceso.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

ACCION DE INEXEQUIBILIDAD CONTRA EL NUEVO *CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL*. ALCANCE DE FALLO, SE ACUSA LA TOTALIDAD DEL DECRETO NUMERO 050 DE 1987, CON EL UNICO CARGO DE QUE EL EJECUTIVO SE EXCEDIO EN EL USO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS. INTEGRACION DE LA COMISION ASESORA. LIMITE TEMPORAL DE LA HABILITACION LEGISLATIVA. FALLOS DEFINITIVOS, PERO NO ABSOLUTOS.

Exequible el Decreto número 050 de 1987, en cuanto su expedición y vigencia se cumplieron dentro del término previsto de la Ley 52 de 1984.

Corte Suprema de Justicia
Sala Plena

Sentencia número 49.

Referencia: Expediente número 1582.

Acción de inexequibilidad contra el Decreto número 050 de 1987.

Actor: *Guillermo Romero García.*

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según Acta número 23.

Bogotá, D. E., mayo veintiuno (21) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

Procede la Corte a decidir sobre el fondo de la petición de inexequibilidad incoada por el ciudadano Guillermo Romero García contra el Decreto-ley número 050 de 1987.

La demanda fue admitida oportunamente, obtuvo el concepto del Procurador General de la Nación y se encuentra en estado de ser decidida definitivamente por haberse agotado los trámites que el Decreto número 432 de 1969 consagra para el proceso constitucional.

II. La norma acusada

El texto del Decreto acusado es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 050 DE 1987
(enero 13)

"Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal

"El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1° de la Ley 52 de 1984, y consultada la Comisión Asesora que ella estableció,

DECRETA:

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

TITULO PRELIMINAR

PRINCIPIOS RECTORES

"Artículo 1° *Debido proceso.* Nadie podrá ser procesado sino conforme a las leyes preexistentes al hecho punible que se impute, ante juez competente previamente establecido y observando la plenitud de las formas propias de cada proceso.

"Artículo 2° *Reconocimiento de la dignidad humana.* Toda persona a quien se atribuya un hecho punible, tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

"Artículo 3° *Presunción de inocencia.* Toda persona a quien se atribuya un hecho punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoriada.

"Artículo 4° *Libertad personal.* Toda persona tiene derecho a la libertad. Sólo procederá la privación de ésta por las causas y en las condiciones preestablecidas en la ley.

"Artículo 5° *Favorabilidad.* La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia, a la restrictiva o desfavorable, pero la que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso, se aplicará desde que entre a regir.

"Artículo 6° *Lealtad.* Todas las personas que intervienen en el proceso penal están en el deber de actuar con absoluta lealtad.

"Artículo 7° *Oficiosidad.* La acción penal se iniciará y adelantará de oficio, salvo las excepciones legales.

"Artículo 8° *Gratuidad.* El proceso no causará erogación alguna a quienes en él intervienen.

"Artículo 9° *Publicidad.* Los procesos serán públicos, salvo lo previsto sobre reserva sumarial.

"Artículo 10. *Contradicción.* En el desarrollo del proceso, regirá el principio de contradicción.

"Artículo 11. *Finalidad del procedimiento.* En la interpretación de la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que la finalidad del procedimiento es la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que en él intervienen.

"Artículo 12. *Integración.* En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este Código o en leyes especiales, son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, siempre que no se opongan a la naturaleza del Procedimiento Penal.

"Artículo 13. *Ambito de la jurisdicción común.* Los hechos punibles descritos en la ley penal común serán investigados y fallados por la jurisdicción penal ordinaria, mediante los procedimientos establecidos en este Código.

"Artículo 14. *Unidad de proceso.* Salvo los casos de conexidad y las excepciones constitucionales y legales, por cada hecho punible se hará un solo proceso, cualquiera que sea el número de autores o partícipes. Sin embargo, la ruptura de la unidad procesal, no genera nulidad, siempre que no afecte el derecho de defensa.

"Artículo 15. *Doble instancia.* El proceso tendrá dos instancias, salvo las excepciones legales.

"Artículo 16. *Restablecimiento del derecho.* El juez resolverá las cuestiones extrapenales que surjan en el proceso, de modo que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de la comisión del hecho punible, cuando por su naturaleza sea posible.

"Artículo 17. *Cosa juzgada.* La persona cuya situación procesal haya sido definida por sentencia ejecutoriada o por auto que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nuevo proceso por el mismo hecho, aunque a éste se le dé una denominación distinta, excepto lo previsto para el recurso extraordinario de revisión.

"Tampoco podrá hacerse nuevo juzgamiento en Colombia cuando la sentencia haya sido proferida por juez extranjero, salvo las excepciones legales.

LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I
De las acciones
CAPITULO I
Acción penal

"Artículo 18. *Titularidad de la acción penal.* La acción penal corresponde al Estado y se ejerce por la Rama Jurisdiccional del Poder Público.

"Artículo 19. *Deber de denunciar.* Todo habitante del territorio colombiano mayor de dieciséis años, con las excepciones establecidas en este Código, debe denunciar inmediatamente a la autoridad los hechos punibles de que tenga conocimiento y cuya investigación deba iniciarse de oficio.

"El empleado oficial que por cualquier medio tenga conocimiento de un hecho punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación, si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente.

"Artículo 20. *Exoneración del deber de dar noticia del hecho punible.* Nadie está obligado a dar noticia o a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente, o contra sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni a denunciar los hechos punibles que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente secreto profesional.

"Artículo 21. *Requisitos de la denuncia.* La denuncia se hará bajo juramento y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Podrá hacerse verbalmente o por escrito, dejando constancia del día y la hora de su presentación.

"El denunciante deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos han sido puestos en conocimiento de otro juez.

"Artículo 22. *Querella y petición.* Cuando la ley exija querella o petición especial para iniciar el proceso, bastará que quien tenga derecho a presentarla formule la respectiva denuncia ante la autoridad competente.

"Artículo 23. *Querellante legítimo.* Salvo los casos especialmente previstos en el Código Penal, la querella puede ser presentada únicamente por el sujeto pasivo del hecho punible. Si éste fuere incapaz o una persona jurídica, la querella debe ser formulada por su representante legal.

"Cuando el incapaz carezca de representante legal, la querella puede presentarse por aquél con la coadyuvancia del defensor de menores o del respectivo Agente del Ministerio Público.

"Cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado para formular la querella, o el autor o partícipe del hecho fuere representante legal del incapaz, los perjudicados directos estarán legitimados para formularla.

"En los delitos de inasistencia alimentaria será también querellante legítimo el defensor de menores.

"Artículo 24. *Caducidad de la querella.* La querella debe presentarse dentro del término de seis (6) meses, contados a partir de la comisión del hecho punible, salvo disposición en contrario.

"Artículo 25. *Hechos punibles que requieren querella.* Además de los casos señalados en el Código Penal y en el artículo 4° de la Ley 55 de 1984, para la iniciación del sumario será necesaria querella o petición de parte en los siguientes casos: violación y permanencia ilícita en lugar de trabajo (artículo 287), violación de comunicaciones (artículo 288) y sustracción de bien propio (artículo 363).

"Artículo 26. *Desarrollo del proceso por querella.* Cuando para investigar un hecho punible se requiera querella, ésta sólo es necesaria para iniciar la investigación, pero en el trámite del proceso se procederá como si se tratará de un hecho punible que se persigue de oficio.

"Artículo 27. *Ampliación de denuncia o querella.* El denunciante o querellante puede ampliar su denuncia y suministrar a las autoridades competentes los informes que sean conducentes.

"Artículo 28. *Extensión de la querella.* La querella se extiende de derecho contra todos los que hubieren tomado parte en el hecho punible.

"Artículo 29. *Desistimiento de la acción.* El querellante podrá desistir de la acción penal, con el consentimiento del procesado, mediante manifestación escrita presentada ante el juez. Si se tratare de un incapaz, el desistimiento deberá ser autorizado por su representante legal o por el defensor de menores o el Agente del Ministerio Público que hubiere coadyuvado la querella.

"El desistimiento presentado en favor de un procesado comprende a los demás que lo acepten.

"Artículo 30. *Extinción de la acción penal.* La acción penal se extingue en los casos previstos en el Código Penal y en los demás contemplados en este Código.

"Artículo 31. *Desistimiento y extinción de la acción penal.* En los procesos por delitos de lesiones personales, la acción penal se extinguirá por desistimiento del ofendido, cuando el procesado hubiere indemnizado los perjuicios ocasionados. En los procesos por delitos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado y la extorsión, la acción penal se extinguirá por desistimiento del ofendido, cuando el procesado hubiere restituido el objeto materia del delito o su valor, e indemnizado a la víctima, si a ello hubiere lugar.

"El desistimiento en favor de un procesado comprenderá a los demás que lo acepten.

"La extinción a que se refiere este artículo no podrá decretarse en un nuevo proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya aceptado dentro de los cinco (5) años anteriores.

"Artículo 32. *Oportunidad e irretractabilidad.* El desistimiento podrá presentarse en cualquier estado del proceso, antes de proferir sentencia de primera o única instancia y no admite retractación.

"Artículo 33. *Renuncia a la prescripción.* El procesado podrá renunciar a la prescripción de la acción penal antes de la ejecutoria de la providencia que la declare.

"Artículo 34. *Cesación de procedimiento.* Salvo lo previsto en el artículo 503, en cualquier momento del proceso en que aparezca plenamente comprobado que el hecho imputado no ha existido, o que el procesado no lo ha cometido, o que la conducta es atípica, o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad, o que el proceso no podía iniciarse o no puede proseguirse, el juez, mediante auto interlocutorio así lo declarará.

"Artículo 35. *Prejudicialidad.* La competencia del juez se extiende a las cuestiones extrapenales que surjan en el proceso penal; pero si las cuestiones extrapenales que se juzguen en otro proceso, son a la vez elementos constitutivos del hecho que se investiga y sobre ellas estuviere pendiente decisión jurisdiccional al tiempo de cometerse, no se calificará la investigación mientras dicha decisión no se haya producido.

"No obstante, si transcurrido un año desde la oportunidad para la calificación de la investigación, no se hubiere decidido definitivamente las cuestiones que determinaron la suspensión, se reanudará la actuación procesal.

"Artículo 36. *Remisión a otros procedimientos.* En todos los casos en que el juez penal deba decidir cuestiones extrapenales, apreciará las pruebas de acuerdo con la correspondiente legislación.

CAPITULO II
Acción civil en el proceso penal

"Artículo 37. *Titulares de la acción civil.* La acción civil para el resarcimiento del daño causado por el delito, podrá ejercerse en el proceso penal por las personas naturales o jurídicas perjudicadas o por los herederos de aquéllas, o por el Ministerio Público.

"Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes, se constituirá parte en la forma prescrita en la ley civil para la comparecencia en juicio de los incapaces.

"Artículo 38. *Quiénes deben indemnizar.* Están obligados a resarcir los perjuicios causados por el hecho punible, los penalmente responsables en forma solidaria, y quienes de acuerdo con la ley están obligados a reparar.

"Artículo 39. *Oportunidad para la constitución de parte civil.* La constitución de parte civil podrá intentarse en cualquier momento, a partir del auto cabeza de proceso y hasta el día en que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública.

"Artículo 40. *Requisitos.* Quien pretenda constituirse parte civil dentro del proceso penal, si no fuere abogado titulado, deberá otorgar poder para tal efecto.

"Presentado el poder en forma legal, el abogado podrá conocer el proceso, siempre que esté acreditada sumariamente la legitimidad de la personería del poderdante.

"El escrito de parte civil deberá consignar el nombre de la persona perjudicada con el delito, su domicilio y vecindad; los hechos en virtud de los cuales se hubieren producido los perjuicios cuya indemnización se reclama y su cuantía, y el nombre de la persona contra quien se dirige la acción, si fuere conocida.

"Artículo 41. *Prueba de la personería.* Si quien pretende constituirse parte civil fuere una persona jurídica, deberá demostrar su existencia y la personería de su representante legal. Si se trata de un heredero de la persona perjudicada con el delito, debe demostrar tal condición.

"Artículo 42. *Pluralidad de perjudicados y su representación.* Cuando las personas perjudicadas fueren varias, podrán constituirse parte civil separada o conjuntamente.

"Artículo 43. *Decisión sobre la demanda.* Dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que se presente el escrito de demanda, el funcionario que conoce del proceso dictará auto interlocutorio en que admita o rechace la solicitud de constitución de parte civil.

"El auto que resuelve sobre la demanda de parte civil será apelable en el efecto devolutivo.

"Artículo 44. *Inadmisibilidad de la demanda.* La no admisión de la demanda sólo podrá fundarse en ilegitimidad de la personería del demandante.

"La providencia que así lo disponga se notificará al demandante, quien podrá interponer contra ella recursos ordinarios, a lo cual quedará limitada su actuación.

"De oficio, o a petición del interesado, el juez admitirá la demanda, si posteriormente apareciere comprobada la legitimidad de la personería, decisión que se comunicará a aquél.

"De igual modo procederá a revocar el auto admisorio si se modificare la prueba sobre la legitimidad de la misma.

"Artículo 45. *Devolución de la demanda.* Si en la demanda faltare alguno de los requisitos establecidos en el artículo 40, el juez, mediante auto en el cual exprese clara y precisamente las condiciones que faltan, la devolverá al interesado para su corrección.

"Artículo 46. *Facultades de la parte civil.* La parte civil, por intermedio de su apoderado, podrá solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia del hecho investigado, la identidad de sus autores o cómplices, su responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. Podrá igualmente denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, e interponer recursos contra las providencias que resuelvan sobre las materias de que trata este artículo.

"Artículo 47. *Embargo y secuestro de bienes.* En el mismo auto en que imponga medida de aseguramiento, el juez decretará el embargo preventivo de los bienes inmuebles y el embargo y secuestro preventivo de los bienes muebles de propiedad del procesado, en cuantía que considere suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, y designará secuestre.

"Si no se conocieren en concreto bienes, o los embargados no fueren suficientes, la parte civil, previa caución, o el Ministerio Público, podrá denunciarlos en cualquier momento y el juez decretará su embargo y secuestro en la medida que considere necesaria.

"Artículo 48. *Desembargo en caso de exceso.* En cualquier estado del proceso podrá solicitarse desembargo parcial de bienes por exceso en el embargo. En tal caso, la solicitud permanecerá en la Secretaría a disposición de las partes por dos (2) días, y el juez decidirá dentro de los tres (3) días siguientes.

"La resolución de desembargo se cumplirá una vez ejecutoriada.

"Artículo 49. *Desembargo.* En el auto de cesación de procedimiento y en la sentencia absolutoria, se decretará el desembargo de los bienes embargados o secuestrados.

"El desembargo a que se refiere el inciso anterior se cumplirá una vez ejecutoriada la respectiva providencia.

"Artículo 50. *Condenación al pago de perjuicios.* En todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el juez procederá a liquidarlos, para lo cual podrá disponer la intervención de perito según la complejidad del asunto, y condenará al responsable de los daños en la sentencia.

"En los casos de perjuicios materiales o morales no valorables pecuniariamente, la indemnización se fijará en la forma prevista en los artículos 106 y 107 del Código Penal.

"La sentencia que condena al pago de perjuicios, una vez ejecutoriada, prestará mérito ejecutivo ante los jueces civiles, cuando no hubiere bienes embargados o secuestrados. En caso contrario, se enviará, sin dilación al juez civil competente, copia auténtica de la misma y de las diligencias de embargo y secuestro a fin de que proceda al remate a que se refiere el artículo 521 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

"Para rematar bienes inmuebles no se requiere el secuestro previo.

"Artículo 51. *Prohibición de enajenar.* El autor o partícipe de un hecho punible no podrá enajenar bienes sujetos a registro dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de comisión del delito, a menos que esté garantizada la indemnización de perjuicios.

"Artículo 52. *Acción restitutoria del objeto material.* El dueño, poseedor o tenedor legítimo del objeto material del hecho punible, podrá demandar su devolución ante el funcionario que esté conociendo en ese momento del proceso.

"Artículo 53. *Cancelación de registros falsos.* Demostrada la tipicidad del hecho punible que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, el juez que esté conociendo del proceso ordenará inmediatamente la cancelación de los títulos espúreos y del registro correspondiente.

"Artículo 54. *Extinción de la acción civil.* El pago de la indemnización, aceptado por el perjudicado, dará lugar a la extinción de la acción civil.

"Artículo 55. *Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria.* La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando en el proceso penal se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que éste obró en cumplimiento de un deber o en legítima defensa.

"Artículo 56. *Prescripción de la acción civil.* La acción civil proveniente del delito prescribe en veinte (20) años, si se ejercita independientemente del proceso penal, y en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, si se adelanta dentro de éste.

"Artículo 57. *Remisión a normas civiles.* Las disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil se aplicarán al embargo y secuestro preventivos en el proceso penal, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en el presente capítulo.

CAPITULO III

El tercero civilmente responsable

"Artículo 58. *Demanda.* En la demanda de constitución de parte civil, o en su adición, los titulares de la acción civil podrán pretender la indemnización de perjuicios contra los terceros civilmente responsables por causa del delito conforme a la ley.

"No podrán ser demandados en virtud de esta disposición las entidades o personas de derecho público cuya responsabilidad solo pueda determinarse por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

"Artículo 59. *Prueba.* Con la demanda o adición deberá presentarse prueba sumaria de la relación jurídica en la que se funda la pretensión contra los terceros civilmente responsables.

"Si no se presentare o no existiere en el proceso la prueba, de que trata el inciso anterior, el juez inadmitirá la demanda en cuanto concierne a los terceros civilmente responsables.

"Artículo 60. *Auto admisorio.* En la providencia en que se acepte la demanda de constitución de parte civil o su adición, el juez ordenará notificar personalmente a los terceros presuntamente responsables mencionados en la misma.

"Artículo 61. *Emplazamiento y nombramiento de apoderado.* Si el demandado no compareciere en la fecha señalada o no fuere posible la citación, previo informe del notificador rendido bajo juramento, se le emplazará de la siguiente manera: se fijará edicto por el término de cinco (5) días, vencidos los cuales se le declarará persona ausente y se le designará apoderado con quien se surtirá la notificación.

"Artículo 62. *Apoderado.* El tercero civilmente responsable deberá designar apoderado. De no hacerlo, se le nombrará de oficio.

"Artículo 63. *Calidad de parte.* A partir de la notificación del auto admisorio de la demanda contra el tercero civilmente responsable, éste tendrá la calidad de parte.

"Artículo 64. *Facultades.* Podrá solicitar y presentar las pruebas que sean conducentes a demostrar su no responsabilidad civil, y participar en todas aquellas que se relacionen con ésta, e interponer recursos contra las providencias que lo afecten como tercero.

"Artículo 65. *Desembargo.* El juez ordenará el levantamiento de las medidas cautelares cuando se encontrare ejecutoriada alguna de las providencias mencionadas en el artículo 49.

"Artículo 66. *Remisión.* Para los aspectos no previstos en este capítulo se aplicarán las normas del de parte civil en cuanto fueren compatibles con éste.

TITULO II

Jurisdicción y competencia

CAPITULO I

Disposiciones generales

"Artículo 67. *Quiénes administran justicia penal.* La administración de justicia en el ramo penal se ejerce por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Decisión Penal de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, el Tribunal Superior de Aduanas, los Jueces Superiores, los Jueces de Circuito, de Instrucción, Municipales, Territoriales, de Menores, Penales y Promiscuos y los Jueces de Distrito Penal Aduanero. En casos especiales se ejerce por el Congreso.

"Los Tribunales Militares conocerán de los procesos por hechos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

"Las autoridades de policía conocerán de las contravenciones.

CAPITULO II

De la competencia funcional y por razón de la naturaleza del hecho punible y la calidad de los procesados

"Artículo 68. *Competencia de la Corte Suprema de Justicia.* La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:

"1. Del recurso extraordinario de casación.

"2. Del recurso extraordinario de revisión.

"3. Del recurso de hecho, cuando se deniegue el recurso de casación.

"4. De los recursos de apelación y de hecho, en los procesos de que conocen en primera instancia los Tribunales Superiores.

"5. De los conflictos de competencia que se susciten en asuntos penales entre Tribunales de dos o más Distritos Judiciales; entre un Tribunal y un Juzgado de otro Distrito Judicial; o entre dos Juzgados de distintos Distritos Judiciales.

"6. De los conflictos de competencia que se susciten entre funcionarios de la jurisdicción penal ordinaria y los de una especial.

"7. De los procesos por delitos cometidos por los funcionarios a que se refieren los ordinales cuarto y segundo de los artículos 102 y 151 de la Constitución Nacional respectivamente, conforme a lo previsto en el artículo 97 de la misma Carta.

"8. De los procesos que se sigan contra el Registrador Nacional del Estado Civil, los intendentes y comisarios, los procuradores delegados y regionales, el Viceprocurador General de la Nación, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Tribunales Contencioso-Administrativos, los Magistrados del Tribu-

nal Superior Militar y del Tribunal Superior de Aduanas; los fiscales de los Tribunales mencionados y los Directores Nacionales y Seccionales de Instrucción Criminal, por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

"9. De las causas de responsabilidad por hechos punibles cometidos por los Senadores y Representantes, en el caso del artículo 75 de la Constitución Nacional, y

"10. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un Distrito Judicial a otro.

"Parágrafo. En Sala de Gobierno, la Corte Suprema de Justicia conocerá de los conflictos de competencia que se susciten entre funcionarios penales y civiles o penales y laborales de distintos distritos judiciales.

"Artículo 69. *Competencia de los Tribunales Superiores.* Las Salas Penales de Decisión de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocen:

"1. En segunda instancia, de los recursos de apelación y de hecho en los procesos de que conocen en primera instancia los Jueces Superiores, de Circuito y de Instrucción Criminal.

"2. En primera instancia, de los procesos que se sigan a los Jueces Superiores, de Circuito, de Instrucción, de Menores, de Distrito Penal Aduanero, Municipales y Territoriales, a los Fiscales y a los Jefes de Oficinas Seccionales y Abogados de la Procuraduría General de la Nación por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas y a los Personeros Municipales cuando actúen como Ministerio Público.

"3. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales dentro del mismo distrito.

"Parágrafo. En Sala de Gobierno, corresponde a los Tribunales Superiores dirimir las colisiones de competencia que se susciten entre los Jueces Penales y Civiles, o entre los Jueces Penales y Laborales que actúen en territorio de su jurisdicción.

"Artículo 70. *Competencia de los Jueces Superiores.* Los Jueces Superiores de Distrito Judicial, conocen:

"1. En primera instancia:

"a) De los procesos por los delitos contra la existencia y seguridad del Estado; por los delitos de rebelión y sedición, y por los delitos contra la vida, el concierto para delinquir, el terrorismo y el secuestro;

"b) De los hechos punibles cometidos por clérigos y religiosos, con excepción de los obispos y de quienes estén asimilados a éstos, de acuerdo con la Ley 20 de 1974;

"c) De los hechos punibles cometidos por los alcaldes en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

"2. En segunda instancia, de los procesos por lesiones personales.

"Artículo 71. *Competencia de los Jueces de Circuito.* Los Jueces de Circuito conocen:

"1. En primera instancia, de los procesos por delitos contra el patrimonio económico cuya cuantía sea superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales; contra la fe pública y aquellos cuyo conocimiento no aparezca atribuido a otras autoridades, o cuando tratándose de delitos contra el patrimonio económico, no sea posible determinar su cuantía.

"2. En segunda instancia, de los procesos penales que sean de conocimiento de los Jueces Municipales, con excepción de los procesos por lesiones personales.

"3. Dirimir las colisiones de competencia que se susciten entre los Jueces Penales Municipales del mismo circuito.

"Artículo 72. *Competencia de los Jueces Municipales.* Los Jueces Municipales conocen, en primera instancia:

"1. De los procesos por delitos contra el patrimonio económico cuya cuantía no exceda de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.

"2. De los procesos por delitos cuya investigación requiera querella de parte.

"3. De los procesos por delitos de lesiones personales.

"Parágrafo. La competencia por la cuantía se fijará definitivamente teniendo en cuenta la cuantía de los salarios mínimos legales vigentes al momento de la comisión del hecho.

"Cuando en el lugar donde se cometa el hecho punible no fuere posible que el Juez de Instrucción Criminal avoque inmediatamente la investigación, lo hará mientras la asume aquél.

"Artículo 73. *Competencia de los Jueces de Instrucción.* Los Jueces de Instrucción investigarán y calificarán los procesos por los delitos de competencia, de los Jueces de Circuito y Superiores.

CAPITULO III

Competencia territorial

"Artículo 74. *Competencia territorial.* Es competente, el Juez del territorio donde se realizó el hecho punible.

"Artículo 75. *Competencia a prevención.* Cuando el hecho punible se haya realizado en varios sitios o en lugar incierto o en el extranjero, conocerá del respectivo proceso el Juez competente por la naturaleza del hecho del territorio en el cual primero se formule la denuncia o el que primero haya iniciado la investigación. Si se hubiere iniciado simultáneamente en varios sitios, será competente el Juez del lugar en el cual fuere aprehendido el procesado y si fueren varios los capturados el del lugar en que se llevó a cabo la primera aprehensión.

"Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará cuando se trate de delitos conexos.

"Las reglas enunciadas en el inciso primero se aplicarán cuando existan dudas sobre la delimitación territorial.

CAPITULO IV
Comisiones

"Artículo 76. *Comisiones.* La Corte Suprema de Justicia podrá comisionar a cualquier autoridad jurisdiccional dentro del territorio de la República.

"Los Tribunales de Distrito Judicial podrán comisionar a cualquier Juez de la República.

"Los Jueces Superiores y de Circuito podrán comisionar a jueces de igual o inferior categoría para la práctica de diligencias que deban realizarse fuera de su sede.

"Los Jueces de Instrucción podrán comisionar a funcionarios de la misma categoría para la práctica de diligencias fuera de su sede.

"Los Jueces Municipales podrán comisionar a funcionarios de la misma categoría o de policía para la práctica de diligencias fuera de su sede.

"Artículo 77. *Investigación simultánea.* Cuando se investiguen delitos conexos o cuando fuere necesario practicar pruebas simultáneamente, el Juez de Instrucción a quien le hubiere correspondido el proceso por reparto, podrá comisionar a otros Jueces de Instrucción, previa autorización del Director Seccional de Instrucción Criminal de la sede de los comisionados.

CAPITULO V
Cambio de radicación

"Artículo 78. *Finalidad y procedencia.* El cambio de radicación podrá disponerse cuando en el territorio donde se esté adelantando el juzgamiento, existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento o la seguridad del procesado.

"Artículo 79. *Solicitud de cambio.* El cambio de radicación podrá solicitarse por el Juez del conocimiento o por cualquiera de los sujetos procesales, en cualquier estado del juzgamiento, antes que se profiera fallo de segunda instancia, ante el funcionario que esté conociendo del proceso, quien enviará la solicitud, con sus anexos, a la Corporación a la cual corresponda decidirlo.

"Artículo 80. *Trámite.* La solicitud deberá ser motivada y a ella se acompañarán las pruebas en que se funda. El Magistrado ponente tendrá tres (3) días para registrar el proyecto y la Sala decidirá dentro de los tres (3) días siguientes, por auto contra el cual no procede recurso alguno.

"Artículo 81. *Cambio de radicación especial.* El Ministro de Justicia, cuando existan serios motivos para deducir que está en peligro la integridad personal del procesado, podrá variar el lugar de privación de la libertad o la radicación del juzgamiento que se siga contra los oficiales, suboficiales o agentes de la Policía

Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad o del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, aun cuando no se reúnan las condiciones generales establecidas para el cambio de radicación.

"Para este cambio no podrá ser escogida sino una ciudad donde exista más de un Juzgado Superior, de Circuito o Municipal, según el caso.

"El Ministerio de Justicia, procederá a dar aviso inmediato al Juez que tenga en ese momento el proceso.

"Artículo 82. *Fijación del sitio para continuar el juzgamiento.* La Corte Suprema de Justicia o el Tribunal, al disponer el cambio de radicación, señalarán el lugar en donde debe continuar el juzgamiento. Cuando el cambio obedezca a razones de orden público, se obtendrá del Gobierno Nacional o Departamental, si fuere necesario, informe sobre los diferentes sitios donde sea conveniente la radicación.

"Artículo 83. *Traslado de competencia.* Si el Tribunal Superior, al conocer la solicitud de cambio de radicación, estima conveniente que ésta se haga a otro distrito, pasará la actuación a la Corte Suprema de Justicia para que decida. Negado el cambio por la Corte, podrá el Tribunal Superior disponer lo conveniente dentro del territorio de su competencia.

CAPITULO VI
Competencia por razón de la conexidad

"Artículo 84. *Competencia por razón de la conexidad.* Cuando en un mismo proceso deban investigarse y fallarse varios hechos punibles, sometidos a diversas competencias, conocerá del mismo, mientras subsista la conexidad, el juez de mayor jerarquía.

"Si uno de los delitos está sometido al jurado y el otro u otros no lo están, se seguirá el trámite correspondiente a aquél.

"Para todos los efectos relacionados con el conocimiento de delitos conexos, el Juez Superior será el de mayor jerarquía.

"Artículo 85. *Conservación de la unidad.* En los procesos sometidos a la jurisdicción ordinaria, la unidad del proceso se conservará. En el caso de que figure como procesado alguna persona que goce de fuero, conocerá el juez de mayor jerarquía.

CAPITULO VII
Acumulaciones

"Artículo 86. *Procedencia.* Salvo las excepciones legales, a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación o del auto sobre control de legalidad, habrá lugar a la acumulación de procesos penales, en las siguientes situaciones:

"1. Cuando contra una misma persona se estuvieren siguiendo dos o más procesos aunque en éstos figuren otros procesados.

"2. Cuando estén cursando dos o más procesos penales y no pueda decidirse sobre uno de ellos, sin que se haya fallado el otro u otros.

"Artículo 87. *Improcedencia.* No procede la acumulación en los siguientes casos:

"1. Cuando en uno de los procesos se hubiere proferido sentencia de primera o única instancia.

"2. Cuando uno de los procesos deba tramitarse por procedimiento abreviado, salvo que éste se encuentre para sentencia y se den los presupuestos del artículo anterior.

"Artículo 88. *Suspensión de procesos adelantados.* Decretada la acumulación, se suspenderá el proceso o procesos que se hallaren más adelantados, hasta ponerlos todos en estado de seguirlos a la vez.

"Artículo 89. *Petición de informes.* El juez que conozca de un proceso y tenga noticia de que en un juzgado cursan otro u otros procesos de aquellos que deban acumularse, pedirá informes al juez respectivo, quien deberá contestar dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que reciba la petición.

"Dicho informe contendrá todos los datos necesarios para establecer la procedencia de la acumulación.

"Artículo 90. *Decisión sobre la acumulación.* La acumulación se decretará de oficio o a petición de parte.

"Recibida la solicitud o los informes correspondientes, el juez decidirá dentro de los tres (3) días siguientes, mediante auto interlocutorio.

"Artículo 91. *Apelación del auto que resuelve la acumulación.* La apelación del auto que decrete o niegue la acumulación se resolverá de plano, por el respectivo superior, dentro del término de tres (3) días.

"Artículo 92. *Procedimiento por incompetencia.* Si al estudiar el informe solicitado, el juez considera que no es competente para conocer de los procesos por acumular, dispondrá que se envíe al juez correspondiente para que decida.

"Artículo 93. *Competencia.* Si los procesos estuvieren sometidos a diversas competencias penales, la acumulación será decretada por el juez de mayor jerarquía. Si fueren de la misma competencia, la decretará el juez del proceso en que primero se hubiere ejecutoriado la resolución de acusación o el auto sobre control de legalidad.

Si en cualquiera de los casos a que se refiere este artículo, alguna o algunas de las personas procesadas estuvieren sometidas a jurisdicción especial, ésta conocerá exclusivamente con respecto a ellas. El juez respectivo sacará copia de lo actuado, la enviará a la autoridad competente y pondrá a disposición de los jueces ordinarios el proceso original.

"Artículo 94. *Informes secretariales.* En los primeros cinco (5) días de cada mes, los secretarios de los juzgados deberán pasar a la Secretaría del Tribunal Superior respectivo, una lista de los procesos en los cuales haya quedado en firme la resolución de acusación o la citación a audiencia pública, durante el mes inmediatamente anterior, indicando el nombre y apellido de los procesados, el delito o delitos que se les imputa y el lugar y fecha en que se realizaron los hechos.

"El secretario del Tribunal deberá examinar las listas que le hayan sido enviadas con el fin de cerciorarse si hay procesos que deban acumularse, y, en caso afirmativo, procederá a dar inmediatamente el informe al juez que, en su concepto, deba conocer de los procesos acumulables.

CAPITULO VIII
Colisión de competencias

"Artículo 95. *Concepto.* Hay colisión de competencias cuando dos o más jueces o tribunales consideran que a cada uno de ellos corresponde adelantar o conocer un proceso penal, o cuando se niegan a conocer por estimar que no es de competencia de ninguno de ellos.

"También procede cuando, tratándose de delitos conexos, se adelanten varias investigaciones simultáneamente.

"Artículo 96. *Improcedencia.* No puede haber colisión de competencias entre un juez o tribunal y otro que le esté subordinado por factor funcional, ni entre magistrados de una misma corporación judicial, ni entre jueces de igual categoría que tengan la misma competencia, excepto lo dispuesto en el inciso segundo del artículo anterior.

"Artículo 97. *Procedimiento.* La colisión puede ser provocada de oficio o a solicitud de parte.

"Quien la proponga se dirigirá al otro juez o Tribunal ante quien se promueva, exponiéndole los motivos que tiene para conocer o no del caso concreto. Si este juez o magistrado no lo aceptare, contestará dando la razón de su renuencia, y en tal caso dará cuenta al juez o tribunal inmediatamente superior para que, dentro de los tres (3) días siguientes, decida de plano la colisión.

"Los Tribunales Superiores dirimirán el conflicto en sala de decisión.

"Artículo 98. *Cómo se promueve.* Cualquiera de los sujetos procesales puede suscitar la colisión de competencias, por medio de memorial dirigido al juez que esté conociendo del proceso o al que considere competente para dicho conocimiento. Si el juez ante quien se formula la solicitud la hallare fundada, provocará la colisión de competencias.

"Artículo 99. *Colisión durante la investigación y el juzgamiento.* Si la colisión de competencias se provoca durante la investigación, no se suspenderá ésta ni se anulará lo actuado, cualquiera que sea la decisión.

"Si la colisión se provoca durante el juzgamiento, se suspenderá éste, mientras se decide aquélla, pero las nulidades a que hubiere lugar solo podrán ser decretadas por el funcionario en quien quede radicada la competencia.

"Artículo 100. *Continuidad de la investigación.* Si se suscitare colisión de competencias entre varios jueces para conocer o no de un mismo proceso penal, mientras no sea dirimida dicha colisión, todos ellos están obligados a practicar, dentro del territorio de su respectiva jurisdicción, las diligencias de investigación.

"Lo referente a la medida de aseguramiento o a la libertad del procesado, será resuelto por el juez que tuviere el proceso en el momento en que deba tomarse la respectiva decisión.

"Artículo 101. *Discusión de competencias.* En caso de discusión de competencia entre una autoridad de policía y una autoridad jurisdiccional, decidirá el superior funcional del juez.

"Artículo 102. *Conflictos por reparto.* Los conflictos que por razón del reparto de procesos penales se susciten entre magistrados o entre jueces de igual categoría con la misma competencia territorial, serán resueltos de plano y en única instancia por el presidente de la respectiva Sala Penal o por el juez que esté de reparto, según el caso.

CAPITULO IX
Impedimentos y recusaciones

"Artículo 103. *Causales de impedimento.* Son causales de impedimento:

"1. Tener el juez, el magistrado, el cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés en el proceso.

"2. Ser el juez o magistrado acreedor o deudor de alguno de los sujetos procesales.

"3. Ser el juez o magistrado, o su cónyuge o compañero o compañera permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales.

"4. Haber sido el juez o magistrado apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales, o ser o haber sido contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.

"5. Existir enemistad grave o amistad íntima entre alguno de los sujetos procesales y el juez o magistrado.

"6. Ser o haber sido el juez, tutor, curador o pupilo de alguno de los sujetos procesales.

"7. Haber dictado la providencia de cuya revisión se trata, o ser el juez pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, del inferior que dictó la providencia que se va a revisar.

"8. Ser el juez, o su cónyuge o compañero o compañera permanente, o su hijo, adoptante o adoptado de alguno de los sujetos procesales.

"9. Dejar el juez vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada.

"10. Ser alguno de los sujetos procesales, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus hijos, dependiente del juez.

"11. Ser el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, socio de alguno de los sujetos procesales en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho.

"12. Estar el juez instituido heredero o legatario por alguno de los sujetos procesales o estarlo su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus ascendientes o descendientes.

"13. Haber estado el juez o magistrado vinculado legalmente a una investigación penal por denuncia formulada, antes de que se inicie el proceso, por alguno de los sujetos procesales.

"Artículo 104. *Requisitos y forma de la recusación.* Si el juez o magistrado en quien concurra alguna de las causales de impedimento no lo declare, cualquiera de los sujetos procesales podrá recusarlo.

"La recusación se propondrá por escrito, ante el juez que conoce del asunto, acompañando las pruebas y exponiendo los motivos en que se funde.

"Artículo 105. *Declaración de impedimento.* Los jueces, magistrados y conjueces deben declararse impedidos para conocer de procesos penales, cuando exista respecto de ellos alguna causal de impedimento, tan pronto como adviertan su existencia, o a más tardar, dentro de los cinco (5) días siguientes.

"Artículo 106. *Procedimiento en caso de impedimento.* En el mismo auto en que el juez manifieste el impedimento, ordenará pasar el proceso al juez que le siga en turno.

"Si se tratare de juez superior, de circuito o de instrucción, únicos, conocerá del impedimento el tribunal superior respectivo, en Sala de Decisión Penal, y si de juez penal municipal o promiscuo, únicos, conocerá el respectivo juez del circuito.

"Artículo 107. *Actuación del juez que conozca del impedimento.* Si el juez a quien por turno le hubiere correspondido conocer del impedimento, lo hallare fundado, aprehenderá el conocimiento.

"En caso contrario, con auto razonado, enviará el expediente al inmediato superior, quien decidirá de plano la cuestión en providencia motivada.

"Artículo 108. *Aceptación del impedimento.* Si el superior aceptare el impedimento, en las mismas providencias atribuirá el asunto:

"1. Al juez que no aceptó el impedimento.

"2. A otro juez superior, de circuito, o de instrucción, de Distrito o de Circuito limítrofe, cuando en el lugar no hubiere más que uno, o todos estuvieren impedidos, y

"3. A otro juez municipal, penal o promiscuo, del mismo circuito o de circuitos limítrofes, cuando en el lugar no hubiere más que uno o todos estuvieren impedidos.

"Artículo 109. *No aceptación del impedimento.* Si el superior considera infundado el impedimento, devolverá el proceso al juez que se había abstenido, para que siga conociendo.

"Artículo 110. *Impedimento de magistrado.* Del impedimento manifestado por el magistrado conocen los demás que forman la Sala respectiva.

Aceptado el impedimento del magistrado, se complementará la Sala con quien le siga en turno y, si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez.

"Si no aceptare el impedimento, tratándose de magistrado la Sala con quien le siga en turno y, si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez.

"Si no se aceptare el impedimento, tratándose de magistrado de tribunal superior, se pasará el proceso a la Corte Suprema de Justicia, para que dirima de plano la cuestión.

"Si el magistrado fuere de la Corte Suprema de Justicia y la Sala rechazare el impedimento, la decisión de ésta lo obligará.

Artículo 111. *Impedimento conjunto.* Si la causal de impedimento se extiende a varios integrantes de la Sala, el trámite se hará conjuntamente.

"Artículo 112. *Recusación aceptada o rechazada por el recusado. Procedimiento en cada caso.* Si el juez o magistrado recusado aceptare como ciertos los hechos en que la recusación se funda, pasará el expediente a quien corresponda, y se seguirá el procedimiento señalado en los artículos anteriores, como si se hubiere declarado impedido.

"Si no lo aceptare, enviará el proceso al superior, quien resolverá de plano la cuestión en vista de lo alegado; si la recusación versa sobre magistrado de la Corte Suprema de Justicia y el recusado no la aceptare, decidirán los restantes magistrados de la Sala. Si éstos no la encontraren fundada, continuará en el conocimiento del asunto el magistrado recusado. En caso contrario, se sorteará conjuez.

"En todo caso, para aceptar o rechazar la recusación, el funcionario resolverá con auto motivado, tan pronto como ésta se presente.

"Artículo 113. *Improcedencia de impedimento y recusación.* No están impedidos, ni son recusables los funcionarios a quienes corresponda decidir el incidente. No habrá lugar a recusación cuando el motivo de impedimento surja del cambio de defensor o apoderado de uno de los sujetos procesales, a menos que la formule la parte contraria o el Ministerio Público.

"Artículo 114. *Continuación de la instrucción y suspensión del juicio.* Desde cuando se presente la recusación, o se manifieste el impedimento, hasta cuando se resuelva definitivamente el incidente, se suspenderá el proceso. Pero si se hallare en etapa de sumario, podrán ejecutarse los actos de instrucción.

"Lo referente a la definición de situación jurídica o a la libertad del procesado, será resuelto por el juez que tenga el proceso en el momento que se formule la solicitud.

"Artículo 115. *Impedimento o recusación de otros funcionarios.* Las causales de impedimento y las sanciones, son aplicables a los agentes del Ministerio Público y a los secretarios de los juzgados y tribunales, quienes pondrán en conocimiento del

magistrado o juez correspondiente el impedimento que exista, sin perjuicio de que los interesados puedan recusarlos, si no lo manifiestan dentro del término señalado en el artículo 105.

"Del impedimento manifestado o de la recusación propuesta, conocerá el juez del proceso o la respectiva Sala de Decisión, los cuales, si hallaren fundada la causal, declararán separado el agente del Ministerio Público o secretario impedido. Al mismo tiempo, nombrarán un secretario *ad hoc*, para el asunto en que se ha reconocido el impedimento, cuando se trate de este empleado.

"Separado el Agente del Ministerio Público, será reemplazado por quien le siga en turno, si en el lugar hubiere varios de la misma categoría. Si no lo hubiere, se dará aviso inmediatamente al procurador del distrito, quien designará el Agente que deba intervenir en el proceso.

"Si el impedimento concurre en todos los procuradores delegados en lo penal, el aviso se dará al Procurador General de la Nación, para el fin anteriormente indicado.

"Artículo 116. *Sanción al recusante temerario.* Si al decidir la recusación se encuentra que ella fue ostensiblemente infundada, se sancionará al recusante con una multa hasta el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales a favor del Tesoro Nacional. Si fuere el caso, se ordenará expedir las copias pertinentes para la investigación penal o disciplinaria a que hubiere lugar.

Artículo 117. *Sanción al funcionario que omita declararse impedido.* Cuando prospere la causal de recusación, se impondrá el juez que no se declaró impedido, dentro del término de que trata el artículo 105, una multa hasta el equivalente a un mes de salario, impuesta de plano por su respectivo superior jerárquico, sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar.

"Si se tratare de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la sanción será impuesta por los demás miembros de la Sala.

"Artículo 118. *Ejecución de sanciones.* Las sanciones a que se refieren los artículos anteriores, se aplicarán por auto interlocutorio, contra el cual sólo procede el recurso de reposición y se harán efectivas una vez esté ejecutoriada.

"Artículo 119. *Desaparición de la causal.* En ningún caso se recuperará la competencia por la desaparición de la causal de impedimento.

"Artículo 120. *Improcedencia de la impugnación.* Las decisiones que se profieran en el trámite de un impedimento o recusación no tendrán recurso alguno.

TITULO III
Sujetos procesales
CAPITULO I
Ministerio Público

"Artículo 121. *Quiénes lo ejercen.* El Ministerio Público en la rama penal se ejerce por el Procurador General de la Nación, por los delegados en lo penal, por los

Fiscales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por los Agentes Especiales que designe el Procurador General de la Nación, por los Fiscales de los Juzgados Superiores y de los Juzgados de Circuito y por los Personeros Municipales.

"La Cámara de Representantes ejerce determinadas funciones fiscales.

"Artículo 122. *Funciones.* El Ministerio Público debe ejercer rigurosamente las siguientes funciones:

"1. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, debe procurar la sanción de los infractores de la ley penal, la defensa de las personas acusadas sin justa causa y la indemnización de los perjuicios causados por la infracción.

"En cumplimiento de esos deberes, el Ministerio Público pedirá la práctica de las pruebas conducentes al esclarecimiento de la verdad, las medidas de aseguramiento o la libertad del procesado, interpondrá recursos y, en general, intervendrá en todas las diligencias de investigación preliminar y actuaciones del proceso penal.

"2. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones impuestas en los casos de conminación, caución, libertad provisional, condena de ejecución condicional o libertad condicional, arresto domiciliario y la detención parcial en el propio lugar de trabajo o estudio, y pedir la aplicación de las sanciones respectivas o su revocatoria en caso de incumplimiento. Para lo anterior el Agente del Ministerio Público podrá solicitar al Cuerpo Técnico de Policía Judicial la colaboración necesaria y al juez la práctica de pruebas.

"3. Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación siquiátrica, a fin de que los reclusos sean tratados con el respeto debido a su dignidad, no sean sometidos a tratos crueles, degradantes e inhumanos y tengan oportuna asistencia médica y hospitalaria.

"4. Visitar al menos cada mes los establecimientos carcelarios y de internación siquiátrica donde haya reclusos vinculados a los procesos en que intervenga, para conocer su situación personal y jurídica, y para solicitar la libertad de quienes considere con derecho a ella.

"5. Ejercer la vigilancia de la ejecución de las medidas de seguridad a fin de garantizar su adecuado cumplimiento.

"6. Ejercer la vigilancia judicial en los despachos ante los cuales actúe. El Procurador General de la Nación, por sí o por intermedio de los Procuradores Delegados, la ejercerá en la Corte Suprema de Justicia.

"Parágrafo. En caso de que los representantes del Ministerio Público no ejerzan estas funciones, el juez correspondiente dará aviso a la Procuraduría General de la Nación, para las sanciones a que hubiere lugar.

"Artículo 123. *Ministerio Público ante Jueces Penales y de Instrucción Criminal.* En los procesos penales de competencia de los jueces municipales y en los sumarios que éstos instruyan, el Ministerio Público será ejercido por el correspondiente Personero Municipal.

"Ante los jueces de Instrucción Criminal, el Ministerio Público será ejercido por el Personero Municipal del lugar donde ocurrieron los hechos que son materia de la investigación.

"Artículo 124. *Desplazamiento del Personero Municipal.* En cualquier estado del proceso, el personero podrá ser desplazado por el fiscal del juzgado de conocimiento.

"En casos especiales el Fiscal correspondiente podrá ser desplazado por el Agente Especial del Ministerio Público que para el efecto designe el Procurador General de la Nación o el funcionario en quien éste delegue dicha atribución.

CAPITULO II

Procesado

"Artículo 125. *Sujeto pasivo de la acción penal.* El sujeto pasivo de la acción penal tiene la calidad de procesado. Dicha calidad se adquiere a partir de la indagatoria o de la declaración de ausente para la misma.

"Artículo 126. *Facultades del procesado en su defensa.* El procesado, para los fines de su defensa, tiene los mismos derechos de su defensor, excepto, sustentar los recursos de casación y de revisión, si no fuere abogado titulado. Cuando existan pretensiones contradictorias entre el procesado y su defensor, prevalecerán estas últimas.

"Artículo 127. *Deber de establecer su identidad.* Si en cualquier estado del sumario surgieren dudas acerca de la identidad del procesado, el funcionario de instrucción ordenará de preferencia la práctica de las pruebas conducentes a establecerla.

"Artículo 128. *Individualización.* La imposibilidad de identificar al procesado con su verdadero nombre y apellido o con sus otras generalidades, no retardará ni suspenderá la instrucción, el juicio ni la ejecución de la sentencia, cuando no exista duda sobre su individualización física.

CAPITULO III

Defensor

"Artículo 129. *Abogado inscrito.* Para actuar como defensor en el proceso penal se requiere ser abogado inscrito, salvo las excepciones legales.

"Artículo 130. *Vigencia y oportunidad del nombramiento de defensor.* El cargo de defensor hecho desde la indagatoria o en cualquier otro momento posterior, se entenderá hasta la finalización del proceso.

"La persona que haya sido legalmente vinculada a proceso penal, cualquiera que sea su situación jurídica, podrá en cualquier momento designar defensor, mediante poder debidamente autenticado ante autoridad competente y dirigido al juez respectivo.

"Artículo 131. *Defensoría pública.* El servicio de defensoría pública, bajo la dirección y organización del Ministerio de Justicia, se prestará en favor de quienes carecen de recursos económicos para proveer su propia defensa.

"Artículo 132. *Defensoría de oficio.* Cuando en el lugar donde se adelante el proceso no exista defensor público, o fuere imposible designarlo inmediatamente, se nombrará defensor de oficio.

"Artículo 133. *Desplazamiento del defensor.* El defensor designado por el procesado desplazará al público o de oficio que estuviere actuando, desde el momento en que tome posesión.

"Artículo 134. *Incompatibilidad de la defensa.* El defensor no podrá representar a dos o más procesados cuando entre ellos existieren intereses contrarios o incompatibles.

"El juez o magistrado procederá de oficio a declarar la incompatibilidad, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso. Dicho auto será notificado personalmente a los procesados privados de la libertad y se le comunicará al defensor.

"Si notificados no se subsanare la irregularidad, el juez o magistrado proveerá a que cada uno de los procesados tenga su propio defensor, dejando a quien venía ejerciendo el cargo la facultad de elegir a quienquiera seguir representando; pero en caso de no hacerlo, lo hará el juez y se compulsarán copias para las investigaciones a que haya lugar. Si los demás procesados no designaren defensor, el juez lo hará de oficio.

"Artículo 135. *Defensor principal y suplente.* Todo procesado tiene derecho a nombrar un defensor principal, y éste a designar un suplente bajo su responsabilidad, quienes se posesionarán inmediatamente y a partir de este momento podrán intervenir dentro del proceso de una manera alternativa, sin ninguna otra formalidad.

"Cuando una investigación estuviere siendo adelantada simultáneamente por varios jueces, el procesado tendrá derecho a nombrar un defensor ante cada uno de los funcionarios. De no hacerlo se le nombrará de oficio.

"Artículo 136. *Sustitución del poder.* El defensor principal podrá sustituir con expresa autorización del procesado.

"Artículo 137. *Posesión y facultades.* Posesionado el defensor, mediante juramento, tendrá derecho de asistir al procesado en las diligencias en que la presencia de éste sea prescrita por la ley, lo representará en todos los demás actos del proceso y ejercerá todos los derechos tendientes a una adecuada defensa.

"Artículo 138. *Obligatoriedad del cargo de defensor de oficio.* El cargo de defensor de oficio es de forzosa aceptación; en consecuencia, el nombrado estará obligado a aceptar y desempeñar el cargo, sin que pueda excusarse sino por enfermedad grave o habitual, por grave perjuicio de sus intereses o por ser empleado público, o ser mayor de sesenta años, o por tener a su cargo dos o más defensas de oficio.

"El defensor designado de oficio, o que hubiere aceptado el nombramiento hecho por el procesado, que sin justa causa no cumpla con los deberes que el cargo le impone, será requerido por el juez para que lo ejerza o desempeñe, conminándolo con multa hasta de dos salarios mensuales mínimos, que impondrá el juez cada vez que haya renuencia, sin perjuicio de las otras sanciones establecidas en la ley.

"Artículo 139. *Personas habilitadas para la defensa del procesado.* El cargo de defensor para la indagatoria del sindicado, cuando no hubiere abogado inscrito que lo asista en ella, podrá ser confiado a cualquier ciudadano honorable siempre que no sea empleado público.

"Los estudiantes de derecho, pertenecientes a consultorios jurídicos o los egresados, podrán intervenir en los procesos penales, en las condiciones previstas en los Estatutos de la profesión de abogado y de la defensoría pública.

CAPITULO IV
Tercero incidental

"Artículo 140. *Definición.* Tercero Incidental es toda persona, natural o jurídica, que conforme al régimen de Derecho Penal y Civil, sin estar obligada a responder patrimonialmente por razón del hecho punible, tenga un derecho económico afectado dentro del proceso.

"El tercero incidental podrá personalmente o por intermedio de abogado, ejercer las pretensiones que le correspondan dentro del proceso penal.

"Artículo 141. *Oportunidad.* Los incidentes procesales podrán promoverse en cualquier estado del proceso.

"Artículo 142. *Facultades.* El tercero incidental podrá solicitar la práctica de pruebas relacionadas con su pretensión, intervenir en la realización de las mismas, interponer recursos contra la providencia que decida el incidente y contra las demás que se profieran en su trámite, así como formular alegaciones de conclusión cuando sea el caso. Su actuación queda limitada al trámite del incidente.

CAPITULO V
Trámite de los incidentes procesales

"Artículo 143. *Preclusión.* El incidente procesal deberá proponerse con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se funde en hechos ocurridos con posterioridad a la solicitud.

"Artículo 144. *Proposición, trámite y decisión.* Salvo disposición legal en contrario, los incidentes procesales especiales se propondrán y tramitarán en cuaderno separado, de la siguiente manera:

"1. El escrito deberá contener lo que se solicite, los hechos en que se funde y las pruebas con las cuales se pretende demostrar.

"2. Del escrito y las pruebas se dará traslado por el término común de cinco (5) días, el cual se surtirá en la Secretaría.

"Dentro de este término deberá contestarse aportando las pruebas en que se funde la oposición; si se aceptare la petición, deberá manifestarse expresamente.

"La no contestación se entenderá como aceptación de lo pedido.

"3. Al día siguiente al vencimiento del término anterior, el juez decidirá de acuerdo con lo alegado y probado. Pero si se tratare de devolución de cosas, armas, instrumentos y efectos aprehendidos durante el proceso, y que no interesen a éste, se determinará de plano la entrega provisional con la obligación de presentarlos en cualquier momento que el juez lo solicite.

"Si deben pasar a poder del Estado, se ordenará su decomiso, en la correspondiente sentencia, si fuere el caso.

"Artículo 145. *Oposición.* Cuando se tratare de oposición al embargo o secuestro, deberá manifestarse en el acto de la diligencia, la cual de todas maneras se llevará a cabo.

"El opositor dispondrá de dos (2) días, a partir de la terminación de la diligencia, para demostrar los hechos en que fundamenta su oposición; el juez decidirá al día siguiente.

"En el evento de prosperar la oposición, se levantarán las medidas cautelares.

"La apelación interpuesta contra el auto que niega el levantamiento de la medida cautelar, se concederá en el efecto devolutivo; el que ordena el levantamiento de las mismas, se concederá en el efecto diferido.

"Artículo 146. *Incidentes procesales.* Se tramitan como incidentes procesales:

"1. La solicitud de desembargo o levantamiento del secuestro, así como la oposición a tal medida cautelar.

"2. La solicitud de restitución de bienes muebles e inmuebles, o cauciones, cuando es formulada por persona distinta de los sujetos procesales.

"3. Las cuestiones análogas a las anteriores.

TITULO IV
Actuación procesal

CAPITULO I
Disposiciones generales

"Artículo 147. *Utilización de medios técnicos.* En la actuación procesal se podrán utilizar los medios mecánicos, electrónicos y técnicos en general que la ciencia ofrezca a la investigación y que no atenten contra la dignidad humana.

"Así mismo podrán aplicarse a la parte administrativa de la actividad, las técnicas de la informática judicial.

"Artículo 148. *Ininterrupción de la actuación sumaria.* Todos los días y horas son hábiles para practicar actuaciones en la investigación sumaria y los términos legales y judiciales no se suspenden por la interposición de día feriado durante ella.

"Artículo 149. *Actuación escrita y en español.* Toda actuación debe extenderse por escrito en duplicado y en idioma español. La persona que no supiere expresarse en dicho idioma, lo hará por medio de intérprete. Lo anterior no obsta para que las

diligencias puedan ser recogidas y conservadas en sistemas de audio o video y si fuere necesario, el contenido de las mismas se llevará por escrito al proceso, previa certificación del juez.

"Artículo 150. *Oralidad.* La persona a quien interrogue el juez, bien sea como procesado o como testigo, debe responder oralmente sin leer ni dictar declaraciones escritas. Con todo, el juez o funcionario le puede permitir, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las circunstancias de la investigación y haciendo de ello mención en el acta, que antes de contestar verbalmente, consulte documentos que puedan facilitar el recuerdo de los hechos.

"Artículo 151. *Firma de las actas o documentos.* Toda acta debe contener las firmas autógrafas de las personas que hayan intervenido. Si la persona no sabe, no puede o no quiere firmar, se le tomará impresión digital y en todo caso firmará por ella un testigo, de lo cual se dejará constancia.

"Si la diligencia fuere grabada, se levantará acta en que conste fecha y hora de la misma, la que será suscrita por quienes tomaron parte en ella.

"Artículo 152. *Requisitos formales de la actuación.* Toda actuación en el proceso penal debe empezar con el nombre de la entidad o juzgado que la practica, e indicar el lugar, hora, día, mes y año en que se verifique, si se trata de diligencia; o en que sea firmada por el funcionario o juez y su secretario, si se trata de auto o sentencia.

"Artículo 153. *Fórmula del juramento.* La fórmula del juramento, según los casos, será la siguiente:

"Para los testigos: '¿A sabiendas de la responsabilidad penal que asume con el juramento, jura usted decir toda la verdad en la declaración que va a rendir?'.

"Para intérpretes, peritos, defensores, conjueces y demás personas que deban prestar juramento: '¿A sabiendas de la responsabilidad penal que asume con el juramento, jura usted proceder bien y fielmente en el cumplimiento de los deberes del cargo que se le confía?'.

"Artículo 154. *Amonestación previa al juramento.* Toda autoridad a quien corresponda tomar juramento, amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y de las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones.

"Artículo 155. *Actas.* De todo acto procesal se extenderá acta que se escribirá a medida que se vaya practicando, salvo las previsiones especiales.

"Antes de firmar la diligencia, será leída por las personas que deben suscribirla o por el secretario, si alguna de ellas no supiere leer.

"Si se observare inexactitud, oscuridad, adición o deficiencia, se hará constar, con las recitificaciones y aclaraciones pertinentes.

En las actuaciones escritas no deberán dejarse espacios, ni hacerse enmiendas, abreviaturas o raspaduras.

"Los errores o faltas que se observen se salvarán al terminarla.

"Artículo 156. *Negativa del procesado.* Cuando el procesado se negare a firmar cualquier diligencia practicada en su presencia o a recibir alguna notificación personal, lo hará un testigo presente en el momento o en su defecto, se dejará de ello constancia escrita.

Artículo 157. *Reconstrucción de expedientes perdidos o destruidos.* Cuando se perdiere o destruyere un expediente penal en curso, el juez o magistrado donde ello sucediere, o quien fuere designado para su reconstrucción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para lograrla.

"Con el auxilio de los sujetos procesales, se allegarán copias de las diligencias o providencias que se les hubiere expedido; de la misma manera se solicitarán a las entidades oficiales a las que se les hubieren enviado.

"Con base en los datos que así puedan ser obtenidos, y de los archivos del despacho, se practicarán las diligencias indispensables para su reconstrucción.

"Artículo 158. *Copias auténticas.* La copia auténtica o la no objetada, de acto procesal realizado en un expediente por reconstruir, probará su contenido.

"Artículo 159. *Presunción.* Las copias de las providencias judiciales hacen presumir la existencia de la actuación a que ellas se refieren y de las pruebas en que se fundan.

"Artículo 160. *Proceso con detenido.* Quien estuviere privado de la libertad, en proceso perdido o destruido, continuará en tal situación con fundamento en la providencia que así lo hubiere dispuesto.

"Artículo 161. *Imposibilidad de reconstrucción.* El proceso que no pudiere ser reconstruido, podrá ser reiniciado oficiosamente o por petición del querellante, quien deberá aportar copia de la querella.

"Artículo 162. *Excarcelación.* Los procesados en expedientes por reconstruir que continuaren detenidos por disposición de providencia que así lo hubiere dispuesto, podrán solicitar su excarcelación si pasados ciento sesenta (160) días de privación efectiva de la libertad, no se ha dictado resolución de acusación.

"Artículo 163. *Práctica de diligencia por juez o funcionario.* En todas las diligencias judiciales es obligatoria la presencia o dirección del juez o funcionario que la suscriba.

"Artículo 164. *Suspensión de la diligencia.* Cuando haya causa que lo justifique, el juez podrá suspender el desarrollo de la actuación procesal, y al ordenar la suspensión señalará el día y hora en que deba continuarla.

"Artículo 165. *Inexistencia de diligencias.* Se considerará inexistente, para todos los efectos procesales, la diligencia practicada con la asistencia e intervención del procesado sin la de su defensor. El juez le comunicará a éste oportunamente el día y hora de las diligencias y si no compareciere, se designará defensor de oficio.

"Cuando esté en peligro de muerte el imputado y sea indispensable realizar diligencia con su intervención, el juez puede omitir la comunicación a su defensor y nombrar de oficio a cualquier persona.

"Artículo 166. *Obligación de comparecer.* Salvo las excepciones legales, toda persona está obligada a comparecer ante el juez, cuando sea citada por escrito o personalmente por un funcionario judicial para la práctica de diligencia en el proceso penal. En caso de desobediencia, el juez podrá sancionarlo de conformidad con el artículo 418.

"Artículo 167. *Formas de citaciones.* Las citaciones podrán hacerse por los medios y en la forma que el funcionario considere eficaces, indicando la fecha y hora en que deba concurrir, con advertencia de las sanciones previstas en caso de desobediencia.

CAPITULO II
Términos

"Artículo 168. *Duración.* Los términos procesales serán de horas, días, meses y años y se computarán de acuerdo con el calendario.

"Para efectos de este Código, el término de la distancia será el necesario para la movilización de las personas y las cosas.

"Artículo 169. *Prórroga.* Los términos legales o judiciales no pueden ser prorrogados sino a petición de parte, hecha antes de su vencimiento, por causa grave y justificada.

"El juez, por una sola vez, concederá la prórroga que en ningún caso puede exceder en otro tanto el término ordinario.

"Artículo 170. *Trámite de la prórroga.* En caso de prórroga del término, la secretaría registrará en el respectivo expediente el día en que hubiere comenzado la prórroga y el día en que se termina.

"Artículo 171. *Término judicial.* El juez señalará término en los casos en que la ley no lo haya hecho.

"Artículo 172. *Suspensión.* Los términos se suspenderán, salvo disposición en contrario:

"1. Durante las vacaciones colectivas.

"2. Durante los días domingos, festivos y de Semana Santa.

"3. Cuando no haya despacho al público, por fuerza mayor o caso fortuito.

"Artículo 173. *Renuncia a término.* Los sujetos procesales en cuyo favor se consagren términos para el ejercicio de un derecho, podrán renunciar a ellos.

CAPITULO III
Notificaciones

"Artículo 174. *Providencias que se notifican.* Además de las señaladas expresamente en este Código, se notificarán las siguientes providencias: El auto que pone en conocimiento de las partes la prueba trasladada, el dictamen de peritos, el que cierra la investigación, el que abre el juicio a prueba, el que señala día y hora para sorteo de jurados, el que ordena la práctica de pruebas en el juicio, el que señala el día y hora para la celebración de la audiencia, el que ordena el traslado para pruebas dentro del recurso de revisión, los que deniegan los recursos de apelación y de casación, los autos interlocutorios y las sentencias.

"Los autos de sustanciación no enumerados en el inciso anterior o no previstos de manera especial, serán de cumplimiento inmediato y contra ellos no procede recurso alguno.

"Artículo 175. *Clasificación.* Las notificaciones se clasifican en: personal, por estado, por conducta concluyente y en estrados.

"Artículo 176. *Notificación a persona detenida.* Las notificaciones al procesado privado de la libertad, se harán personalmente y si se trata de providencias inimpugnables, se le dará aviso a través del establecimiento carcelario.

"Artículo 177. *Notificación personal al procesado no privado de la libertad y al Ministerio Público.* Al procesado que no esté privado de la libertad y al Ministerio Público, para notificarle personalmente los autos de cesación de procedimiento, el que dispone el cierre de la investigación, la resolución de acusación y la sentencia, se le citará inmediatamente por cualquier medio eficaz para que se presente dentro de los tres (3) días siguientes a partir de la fecha de citación. Si no comparece o si el lugar de residencia o de su actividad es desconocido, se le notificará por edicto.

"Artículo 178. *Notificación personal.* La notificación personal se hará por secretaría leyendo íntegramente el auto o sentencia a la persona a quien se notifique, o permitiendo que ésta lo haga.

"Artículo 179. *Notificación por estado y por edicto.* Los autos se notificarán por estado salvo las excepciones establecidas en este Código.

"La notificación por estado se hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil.

"Las sentencias se notificarán por edicto, que se fijará en lugar visible de la secretaría, cuando no hayan sido notificadas personalmente dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de su pronunciamiento. El edicto deberá contener:

"1. La palabra *edicto,* en letras mayúsculas en su parte superior.

"2. La designación del proceso de que se trata, del sujeto pasivo, en cuanto fuere posible, y de todos los procesados.

"3. El encabezamiento y la parte resolutiva de la providencia.

"4. La fecha y la hora en que se fije y la firma del secretario.

"El edicto permanecerá fijado por tres (3) días, al término de los cuales se entenderá surtida la notificación.

"Artículo 180. *Fijación y desfijación.* El secretario fijará el edicto al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y lo desfijará al finalizar la última hora hábil de aquel en que termine la notificación.

"Artículo 181. *Notificación por conducta concluyente.* Cuando se hubiere omitido notificación, o se hubiere hecho en forma irregular a quien debió hacerse personalmente, se entenderá cumplida para todos los efectos, si la persona hubiere actuado en diligencia o trámite a que se refiere la decisión, o interpuesto recurso contra ella.

"Artículo 182. *Notificación en estrados.* Las providencias que se dicten en el curso de cualquier diligencia relacionada con ésta, se considerarán notificadas en ella aunque no hayan concurrido las partes.

"Artículo 183. *Notificación por funcionario comisionado.* Cuando la notificación deba hacerse en forma personal a quien se halle privado de libertad en lugar diferente de aquel en que se adelanta el proceso, se practicará por medio de funcionario comisionado. Para ello se podrá comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, a la autoriad encargada del establecimiento carcelario o al alcalde municipal.

"Artículo 184. *Notificación en establecimiento carcelario.* La notificación de todo auto o sentencia a una persona que se halle detenida o esté cumpliendo condena, se realizará en el respectivo establecimiento de detención o de pena, de lo cual se dejará constancia en la Dirección o Asesoría Jurídica y en el proceso.

CAPITULO IV

Autos y sentencias

"Artículo 185. *Clasificación.* Las providencias que se dictan en el proceso penal, se denominan así:

"1. Sentencias, si deciden el objeto del proceso, previo el agotamiento del trámite de la instancia o de la casación.

"2. Autos interlocutorios, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial de la actuación, y

"3. Autos de sustanciación, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación.

"Artículo 186. *Redacción de la sentencia.* Toda sentencia contendrá:

"1. Un resumen de los hechos investigados.

"2. La identidad o individualización del procesado.

"3. Un resumen de los alegatos presentados por los sujetos procesales.

"4. El análisis y valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión.

"5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado.

"6. Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios.

"7. La resolución de condena a la pena principal y accesorias que correspondan, o de absolución, y la condena en concreto al pago de perjuicios a que hubiere lugar.

"8. La suspensión condicional de la sentencia, cuando a ella hubiere lugar.

"La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: 'Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley'.

"Artículo 187. *Condena en concreto.* En toda sentencia condenatoria el juez deberá señalar el monto de los perjuicios ocasionados por el hecho punible.

"Si no fuere posible la individualización del perjudicado o perjudicados, la condenación se hará en beneficio del Estado, con destino a la Defensoría Pública.

"Artículo 188. *Redacción de los autos interlocutorios.* Los autos interlocutorios contendrán una breve exposición del punto de que se trata los fundamentos legales y la resolución que corresponda.

"Artículo 189. *Resoluciones de juez colegiado.* Los autos de sustanciación serán dictados por el magistrado ponente; los autos interlocutorios y las sentencias serán proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte y por la Sala de Decisión Penal de los Tribunales.

"Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos. El magistrado disidente tiene la obligación de salvar su voto, dentro de los dos (2) días siguientes a la firma, tanto respecto de la parte motiva como de la resolutiva de la providencia.

"Si el disidente fuere quien presentó la ponencia, su proyecto constituirá el salvamento de voto.

"Si no estuviere presente algún miembro de la Corporación, se dejará constancia del motivo de su inasistencia.

"Artículo 190. *Copia auténtica de providencia para archivo.* De todas las sentencias y autos interlocutorios que se dicten en el proceso, se dejará copia o duplicado autenticados en el respectivo despacho judicial.

"Artículo 191. *Actuación procesal por duplicado.* Todo proceso penal se adelantará por duplicado, y sobre el original se surtirá el recurso de apelación cualquiera que sea el efecto en que se conceda.

"La investigación continuará en el cuaderno de copias.

"Para los efectos anteriores todos los documentos se solicitarán o aportarán por duplicado. Cuando en el proceso obren documentos originales y únicos, se llevarán al duplicado del proceso en copia o fotocopia autenticada por el respectivo secretario.

"El secretario está obligado a mantener debidamente separados y foliados los cuadernos del proceso y en ningún momento se remitirán conjuntamente.

"Por secretaría se dejará constancia o copia de las diligencias surtidas en el otro cuaderno.

"El secretario del respectivo despacho que incumpliere estas obligaciones, será sancionado con multa hasta de cinco (5) días de su salario, que será impuesta por el superior.

"Artículo 192. *Reposición de providencias originales.* Cuando se destruyan, pierdan o sustraigan originales de sentencias o autos interlocutorios de los cuales sea necesario hacer uso y no fuere posible recuperarlos, por disposición del juez, el secretario tomará copia auténtica de los que hubieren quedado en cumplimiento de lo previsto en el artículo 191 y la colocará en el lugar correspondiente en donde hará de original.

"Artículo 193. Prohibición de transcripciones. En las providencias no se podrá hacer la transcripción de las diligencias judiciales, decisiones o conceptos que obren en el proceso.

"Artículo 194. *Prohibición de calificaciones ofensivas.* En ningún caso le será permitido al juez ni a los sujetos procesales, hacer calificaciones ofensivas respecto de las personas que intervienen, debiendo limitarse al examen de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de ellos se derivaren.

CAPITULO V
Recursos ordinarios

"Artículo 195. *Recursos ordinarios.* Contra las providencias judiciales en materia penal, proceden los siguientes recursos: el de reposición, el de apelación y el de hecho, que se interpondrán por escrito, salvo disposición en contrario.

"Artículo 196. *Oportunidad para interponerlos.* Los recursos ordinarios podrán interponerse por quien tenga interés jurídico, desde la fecha en que se haya hecho el pronunciamiento jurisdiccional hasta cuando hayan transcurrido tres (3) días, contados a partir de la última notificación.

"Artículo 197. *Ejecutoria de las providencias.* Las providencias judiciales quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, si no se han interpuesto los recursos, pero la que decide el recurso de casación o lo declara desierto, la que decide los recursos de revisión, de apelación y de hecho, y las inimpugnables, quedan ejecutoriadas una vez sean suscritas por el funcionario correspondiente.

"Salvo la sentencia, las providencias proferidas en audiencia o diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la sesión en que hubiere sido proferida.

"Artículo 198. *Cumplimiento inmediato.* Las resoluciones relativas a la libertad y detención y las que ordenan medidas preventivas, aun cuando estén contenidas en providencias apelables en el efecto suspensivo, se cumplirán de inmediato.

"Artículo 199. *Reposición.* Salvo las excepciones legales, el recurso de reposición procede contra los autos de sustanciación que deban notificarse y contra los autos interlocutorios de primera o única instancia.

"Artículo 200. *Inimpugnabilidad.* El auto que decide la reposición no es susceptible de recurso alguno, salvo que contenga puntos que no hayan sido decididos en el anterior, caso en el cual podrá interponerse recurso respecto de los puntos nuevos, o cuando algunos de los sujetos procesales, a consecuencia de la reposición, adquiera interés jurídico para recurrir.

"Artículo 201. *Manera de interponerlo.* El recurso de reposición deberá interponerse expresando las razones que lo sustenten.

"Si la providencia es proferida en audiencia o diligencia, la reposición se interpondrá y sustentará oralmente.

"Artículo 202. *Trámite.* Cuando el recurso de reposición se formule por escrito, vencido el término para impugnar la decisión, la solicitud se mantendrá en secretaría por dos (2) días en traslado a las partes, de lo que se dejará constancia. Surtido el traslado se decidirá el recurso.

"La reposición interpuesta en audiencia o diligencia se decidirá allí mismo, una vez oídos los demás sujetos procesales.

"Artículo 203. *Procedencia de la apelación.* Salvo disposición en contrario, el recurso de apelación procede contra la sentencia y los autos interlocutorios de primera instancia.

"Artículo 204. *Forma de interponerlo.* El recurso de apelación puede interponerse como principal, o como subsidiario del de reposición.

"Artículo 205. *Efectos.* La apelación de las providencias que se profieran en el proceso penal se surtirá en uno de los siguientes efectos:

"1. Suspensivo: En cuyo caso la competencia del inferior se suspenderá desde cuando se profiera el auto que la concede, hasta cuando regrese el cuaderno al juzgado de origen.

"2. Diferido: En cuyo caso se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, excepto en lo relativo a la libertad de las personas, pero continuará el curso del proceso ante el inferior en aquello que no dependa necesariamente de ella, y

"3. Devolutivo: Caso en el cual no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso.

"Artículo 206. *Providencias apelables.* Son apelables:

"a) En efecto suspensivo:

"1. La sentencia.

"2. El auto mediante el cual se corrige error aritmético en la sentencia.

"3. La decisión que decreta la nulidad en la etapa del juzgamiento.

"4. El auto que ordena la cesación de procedimiento, cuando la decisión comprenda todos los hechos punibles y a todos los copartícipes.

"5. El auto inhibitorio.

"6. Las providencias proferidas con posterioridad a la decisión ejecutoriada que ponga fin al proceso.

"7. El auto que decide sobre la acumulación del proceso.

"b) En el efecto diferido:

"1. El auto que deniegue la admisión o práctica de alguna prueba solicitada oportunamente en el juicio.

"2. La orden de cesación de procedimiento cuando no comprenda todos los hechos punibles investigados y a todos los copartícipes.

"3. La orden de desembargo de bienes o de la reducción de embargo, a menos que esté comprendida en providencia cuya apelación deba surtirse en el efecto suspensivo.

"4. La orden de entrega de bienes a una de las partes o a terceros cuando haya oposición o las partes sustenten pretensiones diferentes sobre dichos bienes.

"5. El auto que revoque la parte civil.

"c) En el efecto devolutivo.

"Las providencias no enumeradas en los literales anteriores serán apelables en el efecto devolutivo, salvo que la ley prevea otra cosa.

"Artículo 207. *Sustentación.* Antes del vencimiento del término de ejecutoria de la providencia, quien interponga el recurso de apelación deberá exponer por escrito las razones de la impugnación, ante el juez que profirió la providencia de primera instancia. En caso contrario, no se concederá.

"Cuando el recurso de apelación se interponga como subsidiario del de reposición, la apelación se entenderá sustentada con los argumentos que sirvieron de fundamento al recurso de reposición.

"El recurso de apelación contra los autos interlocutorios proferidos en audencia o diligencia, se interpondrá y sustentará oralmente.

"Artículo 208. *Decisión.* Si el recurso fuese viable, se concederá en forma inmediata según los artículos precedentes, mediante auto de sustanciación.

"Artículo 209. *Consulta.* Algunas providencias tienen grado de jurisdicción llamado de consulta.

"Artículo 210. *Providencias consultables.* Son consultables, cuando contra ellas no se hubiere interpuesto recurso de apelación, las siguientes providencias:

"1. La sentencia y el auto de cesación de procedimiento, cuando el delito porque se procede tuviere señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de cinco (5) años.

"2. La providencia por medio de la cual se concede la libertad condicional, cuando la pena impuesta sea mayor de cinco (5) años.

"No habrá lugar a consulta, en los casos anteriores, cuando la providencia ha sido notificada personalmente al procesado o su defensor, o cuando haya parte civil reconocida.

"Artículo 211. *Procedencia del recurso de hecho.* Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de hecho ante el superior para que éste lo conceda, si fuere procedente.

"El mismo recurso procede contra la providencia que deniegue el de casación.

"Artículo 212. *Interposición.* Negado el recurso de apelación o el recurso extraordinario de casación, el interesado solicitará copia de la providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes del proceso, las cuales se compulsarán dentro del improrrogable término de un (1) día y se enviarán inmediatamente al superior.

"Artículo 213. *Trámite.* Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las copias deberá sustentarse el recurso, con la expresión de los fundamentos para que se conceda el denegado. Vencido este término se resolverá de plano.

"Si el recurso no se sustenta dentro del término indicado, se desechará.

"Si el superior necesitare copia de otras piezas del proceso para formarse juicio, ordenará al inferior que las remita a la mayor brevedad posible.

"Artículo 214. *Decisión del recurso.* Si el superior concede la apelación, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior, quien procederá en la forma establecida en el artículo 205. En caso contrario, así lo declarará y enviará la actuación al inferior para que forme parte del expediente.

"Cuando la Corte Suprema de Justicia declare la procedencia del recurso de casación, lo comunicará al Tribunal respectivo y reclamará el expediente a fin de darle trámite. En caso contrario, se procederá conforme a lo previsto en el inciso precedente.

"Artículo 215. *Desistimiento de los recursos.* El recurrente podrá desistir de los recursos antes de que el proceso entre a despacho para decidir.

"Artículo 216. *Irreformabilidad.* La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo el caso de error aritmético, o en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva, en que el juez procederá a corregirla, aclararla o adicionarla dentro del término de ejecutoria.

"Artículo 217. *Cumplimiento de providencia en el juicio.* Las providencias se cumplirán cuando estén ejecutoriadas, salvo lo establecido en este Código.

CAPITULO VI

Recurso extraordinario de casación

"Artículo 218. *Procedencia.* Habrá recurso de casación contra las sentencias de segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por los

delitos que tengan señalada sanción privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de cinco (5) años.

"Artículo 219. *Titulares del recurso de casación.* El recurso de casación podrá ser interpuesto por el procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil o el fiscal.

"Artículo 220. *Cuantía para recurrir.* Cuando el recurso de casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía para recurrir, establecidas en las normas que regulan la casación civil.

"Artículo 221. *Oportunidad para interponer el recurso.* El recurso de casación podrá interponerse, por escrito, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la notificación de la sentencia.

"Artículo 222. *Concesión del recurso.* Propuesto el recurso oportunamente por quien tenga derecho a ello, el Magistrado ponente de la sentencia recurrida lo concederá mediante auto de sustanciación una vez vencido el término para recurrir, y ordenará el envío del proceso a la Corte, previa citación de las partes.

"Artículo 223. *Resolución sobre admisibilidad del recurso.* Repartido el proceso en la Corte, el Magistrado sustanciador decidirá dentro de los diez (10) días siguientes si es o no admisible el recurso. Si fuere admitido, ordenará el traslado al recurrente o recurrentes por treinta (30) días a cada uno, para que dentro de este término presente la demanda de casación. En caso contrario ordenará que se devuelva el proceso al Tribunal de origen.

"Artículo 224. *Requisitos de la demanda.* La demanda de casación se formulará por escrito y deberá contener:

"1. La identificación de las partes.

"2. Un resumen de los hechos materia de juzgamiento.

"3. La causal que se aduzca para pedir la infirmación del fallo, indicando en forma clara y precisa los fundamentos de ella, citando las normas sustanciales que el recurrente estime infringidas.

"Si fueren varias las causales invocadas, se expresarán en capítulos separados los fundamentos relativos a cada una, sin que puedan plantearse cargos incompatibles entre sí.

"4. La conclusión de sus premisas y la petición que formule en relación con la sentencia recurrida.

"Artículo 225. *Resolución sobre la demanda.* Si la demanda se ajusta a los requisitos exigidos en el artículo anterior, se ordenará correr traslado del proceso al Procurador General por veinte (20) días para que emita su concepto y por quince (15) días comunes a las demás partes para alegar.

"Si la demanda no reúne los requisitos, se declarará desierto el recurso y se devolverá el proceso al Tribunal de origen.

"Artículo 226. *Causales.* En materia penal el recurso de casación procede por los siguientes motivos:

"1. Cuando la sentencia sea violatoria de la ley sustancial, por infracción directa o aplicación indebida o interpretación errónea.

"Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en error de derecho o error de hecho que aparezca manifiesto en los autos.

"2. Cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación.

"3. Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad.

"Parágrafo. En los juicios en que interviene el jurado, haber incurrido el juez de derecho en alguna de las causales consagradas en los numerales anteriores, al declarar o dejar de hacerlo, cualquier circunstancia modificadora de la culpabilidad o de la punibilidad.

"Artículo 227. *Limitación del recurso.* La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de aquellas que han sido expresamente alegadas por las partes.

"Pero tratándose de la causal prevista en el numeral tercero del artículo anterior, la Corte podrá declararla de oficio.

"Artículo 228. *Aceptación de causales. Procedimiento.* Cuando la Corte aceptare como demostrado alguna o algunas de las causales propuestas, procederá así:

"1. Si la causal aceptada fuere la primera o la segunda, casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo.

"2. Si la causal aceptada fuere la tercera, declarará en qué estado queda el proceso y dispondrá que se envíe al Tribunal de origen para que proceda con arreglo a lo resuelto por la Corte.

"Artículo 229. *Término para decidir el recurso.* El Magistrado ponente tendrá treinta (30) días para registrar el proyecto y la Sala decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes.

"Artículo 230. *Desestimación del recurso.* Si la Corte no encontrare justificada ninguna de las causales aducidas, desechará el recurso y ordenará devolver el expediente al Tribunal de origen.

CAPITULO VII
Recurso extraordinario de revisión

"Artículo 231. *Causales.* Hay lugar a recurso de revisión contra las sentencias ejecutoriadas en los siguientes casos:

"1. Cuando en virtud de sentencia contradictoria hayan sido condenadas dos o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.

"2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción o por falta de querella válidamente formulada.

"3. Cuando después de la condenación aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado o condenados.

"4. Cuando con posterioridad a la sentencia absolutoria o condenatoria se demuestre que tal decisión fue determinada por un hecho delictivo del juez o de un tercero.

"5. Cuando se demuestre que la sentencia absolutoria o condenatoria se fundamentó en testimonio, peritación, documento o cualquiera otra prueba falsa.

"Artículo 232. *Titulares de recurso.* El recurso de revisión podrá ser interpuesto, mediante apoderado, por el condenado o por los titulares de la acción civil dentro del proceso penal o por el Ministerio Público.

"Artículo 233. *Forma de interponer el recurso.* El recurso se interpondrá por medio de escrito dirigido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y deberá contener:

"1. La determinación clara y precisa del proceso cuya revisión se demanda con la identificación de los juzgados que lo hubieren fallado.

"2. El hecho o hechos punibles que motivaron el proceso y el fallo, así como la pena que se impuso.

"3. Los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoyare la solicitud.

"4. La relación de las pruebas aportadas para demostrar los hechos básicos de la petición.

"Artículo 234. *Trámite.* Recibida la solicitud, la Sala examinará si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior; en caso afirmativo la admitirá. En el mismo auto en que lo haga solicitará el proceso de cuya revisión se trata.

"Artículo 235. *Impedimento especial.* No podrá intervenir en el trámite y decisión del recurso de revisión ningún Magistrado que haya suscrito la sentencia objeto del mismo.

"Artículo 236. *Apertura a prueba.* Recibido el proceso, se abrirá a prueba por el término de treinta (30) días para que las partes soliciten las que estimen conducentes.

"Una vez decretadas las pruebas, se practicarán dentro de los quince (15) días siguientes.

"Artículo 237. *Traslado.* Vencido el término probatorio, se dará traslado común por quince (15) días al recurrente o al Agente del Ministerio Público y demás que hubieren intervenido en el proceso.

"Artículo 238. *Término para decidir.* Vencido el término previsto en el artículo anterior, la Sala decidirá dentro de los términos señalados en el artículo 229.

"Artículo 239. *Revisión de la sentencia.* Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, procederá de la siguiente manera:

"a) Declarará sin valor la sentencia motivo del recurso y dictará la providencia que corresponda, cuando se trate de la prescripción de la acción penal y de ilegitimidad o caducidad de la querella;

"b) En los demás casos, el proceso será devuelto al juzgado de la misma categoría, pero diferente de aquel que profirió el fallo, a fin de que se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indique.

"Si la revisión fuere negada, se devolverá el proceso al juzgado que corresponda, dejando en la Sala copia de la actuación.

"Artículo 240. *Libertad del procesado.* En el mismo fallo en que se ordene la revisión, la Sala podrá decretar la libertad provisional del procesado, mediante caución, o adoptar las medidas de aseguramiento que fueren del caso.

"Artículo 241. *Consecuencia del fallo absolutorio.* Si la sentencia que se dictare en la causa revisada fuere absolutoria, el procesado será puesto en libertad, y él o sus herederos podrán demandar lo pagado como sanción o como perjuicio.

CAPITULO VIII

Disposiciones comunes a los recursos extraordinarios

"Artículo 242. *Aplicación extensiva.* La decisión del recurso extraordinario se extenderá a los no recurrentes, según el caso.

"Artículo 243. *Desistimiento.* No se podrá desistir del recurso cuando el expediente ya esté al despacho para decidir.

"Artículo 244. *Indemnización de perjuicios a favor del absuelto.* Los condenados a quienes se absolviere en virtud de los recursos de revisión y casación, o sus herederos, tendrán derecho a exigir de los Magistrados o jueces, testigos, peritos o abogados que hubieren determinado la condena, la indemnización de los perjuicios sufridos con ella, de acuerdo con las normas civiles correspondientes.

"Artículo 245. *Notificación a los no recurrentes.* Los no recurrentes, en los recursos extraordinarios, serán notificados personalmente del auto admisorio de la demanda; de no ser posible, se les notificará por estado. Si se tratare del absuelto, se le declarará ausente y se le designará defensor de oficio, con quien se surtirá el recurso.

TITULO V
Pruebas
CAPITULO I
Principios generales

"Artículo 246. *Necesidad de la prueba.* Toda decisión judicial debe fundarse en pruebas legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso.

"Artículo 247. *Prueba para condenar.* No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del acusado.

"Artículo 248. *In dubio pro reo.* En los procesos penales toda duda se debe resolver a favor del procesado, cuando no haya modo de eliminarla.

"Artículo 249. *Petición de pruebas y términos para decidir.* Las partes podrán pedir la práctica de las pruebas que estimen conducentes, y el funcionario resolverá lo que sea del caso dentro de los dos (2) días siguientes.

"Las partes tienen derecho a intervenir en la práctica de pruebas, salvo las excepciones legales.

"Artículo 250. *Reserva.* Salvo las excepciones previstas en este Código, la investigación sólo podrá ser conocida por los funcionarios y empleados que la adelanten, los peritos cuando la necesiten para rendir su dictamen, las partes que intervienen en el proceso, el Director Nacional de Instrucción Criminal y los Directores Seccionales, para el cumplimiento de sus deberes.

"Artículo 251. *Pruebas inconducentes.* Las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos que sean materia de investigación, no se admitirán.

"Artículo 252. *Legalidad de la prueba.* Ninguna prueba podrá ser apreciada sin auto en que haya sido ordenada o admitida. Las pruebas allegadas o aportadas al proceso serán legalizadas mediante auto en que se indique su conducencia.

"Artículo 253. *Apreciación de las pruebas.* Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

"Artículo 254. *Libertad de prueba.* Los elementos constitutivos del hecho punible, la responsabilidad o inocencia del procesado y la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba previstos en este Código.

"Artículo 255. *Utilización de medios técnicos.* Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, de Instrucción y de Conocimiento, para la práctica de cualquier prueba, podrán utilizar los medios técnicos adecuados, dejando constancia de haber sido recepcionada directamente por él. Dichas pruebas serán valoradas por el funcionario en la misma forma que las de carácter documental.

"Artículo 256. *Prueba trasladada.* Las pruebas practicadas válidamente en un proceso, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este Código para la naturaleza de cada medio.

"Si se hubieren producido en otro idioma, las copias deberán ser vertidas al español por un traductor oficial.

"Artículo 257. *Validez de la prueba practicada en el exterior.* Salvo lo previsto en tratados internacionales, las pruebas consagradas en este Título pueden practicarse en el exterior, de acuerdo con el artículo 645.

"Artículo 258. *Medios de prueba.* Son medios probatorios: la inspección, la peritación, los documentos, el testimonio, la confesión y los indicios.

"Artículo 259. *Aseguramiento de la prueba.* En el desarrollo de la actividad probatoria el juez deberá tomar las medidas tendientes a garantizar que los elementos materiales de prueba no sean alterados, ocultados o destruidos para lo cual podrá ordenar vigilancia especial de las personas o los inmuebles, el sellamiento de éstos, la retención de medios de transporte, la incautación de papeles, libros y otros documentos, y efectuar todas las actuaciones que considere necesarias para el aseguramiento de las pruebas.

"Artículo 260. *Asesores especializados.* Podrá el juez solicitar, de entidades oficiales, la designación de expertos en determinada ciencia o técnica cuando quiera que la naturaleza de los hechos que se investigan requiera de la ilustración de tales expertos. Los asesores designados tomarán posesión como los peritos y tendrán acceso al expediente en la medida en que su función lo exija.

"Artículo 261. *Sanciones.* A quien impida, obstaculice o no preste la colaboración para la realización de cualquier prueba en el proceso, el funcionario impondrá, por resolución motivada, arresto inconmutable de uno (1) a treinta (30) días según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para lograr la práctica inmediata de la prueba. La decisión no será susceptible de recurso alguno y tendrá cumplimiento inmediato.

CAPITULO II
Inspección

"Artículo 262. *Definición.* La inspección es el examen que hace el funcionario acompañado de su secretario, de hechos que son materia del proceso.

"En el mismo auto que ordene la inspección se dispondrá el allanamiento, si a ello hubiere lugar.

"Artículo 263. *Requisitos.* La inspección se decretará por auto que exprese con claridad los puntos materia de la diligencia, el lugar, la fecha y la hora.

"Cuando fuere necesario, el juez designará perito en la misma resolución, o en el momento de realizarla.

"Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá ampliar en el momento de la diligencia los puntos que han de ser objeto de la inspección.

"Artículo 264. *Procedimiento.* Cuando fuere necesario, el funcionario procederá a examinar los hechos, materia de la inspección, con todas sus circunstancias.

"Simultáneamente extenderá el acta correspondiente en la que se relacionarán las cosas, los hechos examinados, y las manifestaciones que sobre ellos hagan las personas que intervengan en la diligencia.

"Artículo 265. *Intervención de peritos.* El funcionario determinará los puntos materia del dictamen pericial, los cuales podrá, de oficio o a petición de los interesados, modificar o ampliar durante la diligencia.

"El perito deberá dar respuesta al cuestionario que a su consideración someta el juez en el mismo acto de la diligencia de inspección, a menos que por la complejidad del tema solicite algún término mayor, el cual señalará el juez prudencialmente.

CAPITULO III
Prueba pericial

"Artículo 266. *Su procedencia.* Cuando la investigación de un hecho requiera conocimientos especiales de determinadas ciencias o artes, o exija avalúos, el juez decretará la prueba pericial.

"Artículo 267. *Prestación de servicios de peritos.* Cuando sea solicitado judicialmente el servicio de peritos se prestará por los expertos del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Medicina Legal y demás funcionarios de la Administración Pública que no tengan interés en el proceso.

"Artículo 268. *Nombramiento especial de peritos.* Cuando no sea posible utilizar el servicio de peritos previsto en el artículo anterior, el funcionario designará al perito o peritos que deban intervenir, de las listas de auxiliares de la justicia elaboradas para la actuación en los procesos civiles. La no prestación del servicio demandado, lo hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 261 de este Código y al retiro definitivo de las listas en que aparezca.

"Artículo 269. *Quiénes no pueden ser peritos.* No pueden desempeñar las funciones de peritos:

"1. El menor de dieciséis (16) años, el interdicto y el enfermo de la mente.

"2. Los que tienen derecho a abstenerse de declarar, quienes como testigos han declarado en el proceso, y los citados para tal fin.

"3. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delito doloso.

"Artículo 270.. *Impedimentos y recusaciones.* Respecto de los peritos, serán aplicables las mismas causales de impedimento y recusación señaladas para los funcionarios.

"Del impedimento o recusación conocerá el funcionario que haya dispuesto la prueba y resolverá de plano.

"Artículo 271. *Posesión de peritos no oficiales.* El perito por nombramiento especial tomará posesión del cargo prestando el juramento legal.

"Artículo 272. *Dictamen.* El dictamen de los peritos ha de expresar clara y precisamente las razones en que se funda.

"Cuando haya más de un perito, juntos practicarán las diligencias y harán los estudios o investigaciones conducentes para emitir el dictamen. Cuando hubiere discrepancia, cada uno extenderá su dictamen por separado. En todos los casos, a los peritos se les advertirá sobre la prohibición absoluta de emitir en el dictamen cualquier juicio de responsabilidad penal.

"Artículo 273. *Cuestionario.* El juez, en el auto que decrete la práctica de la prueba pericial, formulará los cuestionarios que hayan de ser absueltos por el perito.

"Antes de practicarse la prueba pericial, también propondrá el juez al perito los cuestionarios que con el mismo fin hayan presentado las partes y que el juez considere conducentes.

"Artículo 274. *Examen del procesado.* Cuando se trate de exámenes en la persona del procesado, el juez puede ordenar que éste sea colocado con las seguridades debidas en un establecimiento que facilite las investigaciones del perito, por el tiempo que estime necesario.

"Artículo 275. *Término para rendir el dictamen.* El perito presentará su dictamen por escrito dentro del término que el juez le haya fijado, el cual puede ser prorrogado a petición del mismo perito.

"Si no presentare su dictamen dentro del término respectivo, se le reemplazará y aplicará las sanciones previstas en el presente título.

"Artículo 276. *Conocimiento del dictamen.* El dictamen del perito se pondrá en conocimiento de las partes por el término de tres (3) días para que, durante él, puedan pedir que lo amplíe, lo complete o lo aclare, lo que hará dentro del término que prudencialmente fije el juez.

"Oficiosamente el juez podrá ordenar igual cosa, en cualquier momento antes de la calificación o de la sentencia.

"Artículo 277. *Objeción.* En cualquier tiempo, antes de que se dicte el veredicto del jurado en los juicios que se ventilan con intervención de éste, o antes de que un asunto entre al despacho del juez para sentencia, en los demás casos, cualquiera de las partes puede objetar el dictamen por error, violencia o dolo.

"Artículo 278. *Procedimiento.* La objeción se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 144. Si se declarare fundada, el juez designará otro perito para que rinda el respectivo dictamen, y compulsará las copias con destino a la autoridad correspondiente.

CAPITULO IV
Documentos

"Artículo 279. *Noción.* Es documento toda expresión de persona conocida o conocible, recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso como los planos, dibujos, cuadros, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas y fonópticas y archivos electromagnéticos que tengan capacidad probatoria.

"Artículo 280. *Clases de documentos.* Los documentos son públicos y privados. Documento público es el expedido con las formalidades legales por empleado oficial en ejercicio de sus funciones.

"Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documento público.

"Artículo 281. *Aporte de documentos.* Los documentos se aportarán en original o copia auténtica. En caso de no ser posible, se reconocerán en inspección, dentro de la cual se obtendrá copia. Si fuere indispensable para la investigación, se tomará el original y se dejará copia auténtica.

"Artículo 282. *Obligación de entregar documentos.* Quien tenga en su poder documentos que se requieran en una investigación penal, tiene la obligación de entregarlos o permitir su conocimiento al funcionario que lo solicite, salvo las excepciones legales.

"El funcionario decomisará los documentos, cuya entrega o conocimiento le fuere negado e impondrá las mismas sanciones previstas para el testigo renuente.

"No están sujetas a las sanciones previstas en el inciso anterior, las personas exentas del deber de denunciar o de declarar.

"Artículo 283. *Documento redargüido de falso.* Cuando el documento redargüido de falso se hallare en otro proceso, el funcionario ordenará que se le envíe el original y lo agregará al expediente.

"Lo decidido sobre el documento redargüido de falso se comunicará al funcionario que conozca del proceso en que se encontraba dicho documento.

"Artículo 284. *Autenticidad.* El documento público es auténtico mientras no se demuestre su falsedad.

"La autenticidad del documento privado se establecerá por los medios legales.

CAPITULO V
Testimonio

"Artículo 285. *Deber de rendir testimonio.* Toda persona está en la obligación de rendir bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el proceso, salvo las excepciones legales.

"Artículo 286. *Excepción al deber de declarar.* Nadie podrá ser obligado, en asunto penal o de policía, a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil.

"Este derecho se le hará conocer por el funcionario respectivo a todo sindicado que vaya a ser indagado, y a toda persona que vaya a rendir testimonio.

"Artículo 287. *Excepciones por oficio o profesión.* No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, profesión u oficio:

"1. Los ministros de cualquier culto admitido en la República, y

"2. Cualquiera otra persona, que por disposición legal deba guardar secreto.

"Artículo 288. *Testimonio del impedido por enfermedad.* A las personas que por enfermedad estén impedidas de concurrir al despacho a rendir declaración, se les recibirá en el lugar donde se encuentren recluidas.

"Artículo 289. *Testimonio por certificación jurada.* El Presidente de la República, los Ministros del Despacho, los Senadores y Representantes, mientras gocen de inmunidad, el Designado a la Presidencia de la República, el Procurador General de la Nación, los procuradores delegados, y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y sus fiscales, los Magistrados de los Tribunales Superiores y de lo Contencioso-Administrativo y sus fiscales, los Gobernadores de Departamento, los intendentes y comisarios de Territorios Nacionales, los Generales en servicio activo, los Arzobispos, Obispos, los Agentes Diplomáticos y Consulares de Colombia en el exterior, el Contralor General de la Nación, los Jefes de Departamento Administrativo, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Director Nacional de Instrucción Criminal, rendirán su testimonio por medio de certificación jurada, y con este objeto se les pasará copia de lo conducente.

"Artículo 290. *Testimonio del Agente Diplomático.* Cuando se requiera el testimonio de un Ministro o Agente Diplomático de nación extranjera, acreditado en Colombia, o de una persona de su comitiva o familia, se le pasará al Embajador o Agente, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria con copia de lo conducente para que, si tiene a bien, declare por medio de certificación jurada o permita declarar en la misma forma a la persona solicitada.

"Artículo 291. *Examen separado de testigos.* Los testigos serán examinados separadamente, de modo que el uno no oiga ni pueda saber lo que el otro ha declarado. Para tal fin, a quienes han rendido su declaración, no se les permitirá que hablen con quienes aún no han declarado.

"Artículo 292. *Prohibición.* El juez se abstendrá de sugerir respuestas, de formular preguntas capciosas y de ejercer violencia sobre el testigo.

"Las respuestas se consignarán tal como las suministrare el testigo.

"Artículo 293. *Testimonios en audiencia pública.* Los testimonios que hubieren de ser recibidos en la audiencia pública, los serán oralmente, pudiendo ser recogidos y conservados por cualquier medio electrónico, mecánico o técnico en general, de tal manera que facilite su examen cuantas veces sea necesario, todo lo cual se hará constar en el acta.

"Artículo 294. *Interrogatorio sobre la identidad del imputado.* Cuando el testigo incrimine a una persona, deberá describirla con el mayor número de detalles, principalmente en relación con su edad aproximada, estatura, color de la piel y señales particulares.

"También se le preguntará si la conocía con anterioridad y por qué motivo, si la ha vuelto a ver con posterioridad a los hechos, dónde y cuándo, y si la ha visto en retrato o imagen en algún medio de comunicación.

"Artículo 295. *Apreciación del testimonio.* Corresponde al juez apreciar la credibilidad del testimonio, teniendo en cuenta los principios de la sana crítica, entre ellos las condiciones del objeto a que se refiere el testimonio, las personales y sociales del testigo, las circunstancias en que haya sido percibido el hecho y en que haya rendido la declaración.

"Las condiciones y circunstancias que pueden ser conducentes para apreciar la credibilidad del testigo, se harán constar en el acta.

CAPITULO VI
Confesión

"Artículo 296. *Confesión simple.* Confesión simple es la declaración del procesado, en la cual admite haber participado en el hecho que se investiga sin la manifestación de haber obrado en circunstancias de justificación o inculpabilidad, o cualquiera otra que modifique el grado de su participación, o específicamente atenúe la penalidad, siempre que reúna las condiciones siguientes:

"1ª Que sea hecha ante el juez competente.

"2ª Que el procesado esté asistido por defensor.

"3ª Que el procesado haya sido informado del derecho a no declarar contra sí mismo.

"4ª Que se haga espontánea, consciente y voluntariamente.

"Artículo 297. *Confesión calificada.* La confesión calificada es la declaración del procesado, en la que admite el hecho que se investiga, manifestando a la vez que obró conforme a una causal de justificación o inculpabilidad, o de alguna otra circunstancia que modifique el grado de su participación o que específicamente atenúe la penalidad. Esta declaración debe reunir las mismas condiciones previstas en el artículo anterior.

"Artículo 298. *Confesión extraprocesal simple, o calificada.* Es la rendida ante un funcionario distinto del competente con los requisitos consagrados en el numeral 4° del artículo 296.

"Artículo 299. *Procedimiento en caso de confesión.* Si el procesado reconociere su participación en el hecho que se investiga, el juez competente continuará practicando las diligencias conducentes para adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y averiguar las circunstancias del hecho.

"Artículo 300. *Criterios para apreciar la confesión.* Para apreciar la confesión y determinar su mérito probatorio, el juez tendrá en cuenta los principios de la sana crítica sobre el testimonio.

"Artículo 301. *Reducción de pena en caso de confesión.* A quien fuera de los casos de flagrancia, durante su primera versión confesare el hecho, en caso de condena se le reducirá la pena en una tercera parte, si dicha confesión fuere el fundamento de la sentencia.

CAPITULO VII
Indicios

"Artículo 302. *Elementos.* Todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone la existencia de un hecho indicador, del cual el juez infiere lógicamente otro hecho.

"Artículo 303. *Unidad de indicios.* El hecho indicador es indivisible. Sus elementos constitutivos no pueden tomarse separadamente como hechos indicadores.

"Artículo 304. *Prueba del hecho indicador.* El hecho indicador debe estar probado.

TITULO VI
CAPITULO I
Nulidades

"Artículo 305. *Causales.* Son causales de nulidad en el proceso penal:

"1ª La incompetencia del juez.

"2ª La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

"3ª La violación del derecho a la defensa.

"Artículo 306. *En los juicios con jurado.* En los juicios en que interviene el jurado, son causales de nulidad, además de las expresadas en el artículo anterior, las siguientes:

"1ª Reemplazar ilegalmente, en el acto de sorteo, a alguno de los designados o no reemplazarlo si existía causa legal para hacerlo. En ambos casos es necesario que quien alegue la nulidad haya hecho el reclamo correspondiente en el acto del sorteo o dentro de los cinco días siguientes.

"2ª Figurar como miembro del jurado una persona que no aparezca en la lista correspondiente, y

"3ª haberse incurrido en la diligencia de sorteo en una equivocación tal, que no pueda saberse exactamente quiénes fueron las personas designadas que debían formar el jurado.

"Artículo 307. *Declaratoria de oficio.* Cuando el juez advierta que existe alguna de las causales previstas en los artículos anteriores, decretará la nulidad de lo actuado desde que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto.

"Artículo 308. *Solicitud.* La parte que alegue una nulidad, deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular nueva solicitud de nulidad, sino por causal diferente o por hechos posteriores, salvo en el recurso de casación.

"Artículo 309. *Nulidad de providencias.* Cuando la nulidad alegada se refiera exclusivamente a un auto, sólo podrá decretarse si no es procedente la revocación de la providencia.

"Artículo 310. *Inexistencia del acto procesal.* Cuando no se observen las formalidades esenciales para la validez del acto procesal, el funcionario lo desestimará.

LIBRO SEGUNDO

Investigación, Cuerpo Técnico de Policía Judicial y Sumario

TITULO I
Investigación

"Artículo 311. *Quiénes son funcionarios de instrucción.* Son funcionarios de instrucción:

"1. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que integran la Sala Penal.

"2. Los Magistrados de las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

"3. Los jueces superiores y los de instrucción.

"4. Los jueces penales y promiscuos de circuito, los jueces de distrito penal aduanero y los de menores.

"5. Los jueces penales y promiscuos municipales.

"6. El Senado de la República y la Cámara de Representantes, en los casos determinados por la Constitución.

"7. Los demás funcionarios señalados por la ley para las jurisdicciones especiales, y

"8. Los funcionarios que legalmente pueden ser comisionados para la práctica de diligencias.

"Artículo 312. *Auxiliares de los funcionarios de instrucción.* Son auxiliares de los funcionarios de instrucción:

"a) Los miembros del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y quienes transitoriamente ejerzan esas funciones;

"b) El personal técnico del Instituto de Medicina Legal, y

"c) Las demás personas que por sus conocimientos sean llamadas a colaborar dentro de la investigación.

"Artículo 313. *Clases de jueces de instrucción.* Los jueces de instrucción criminal serán radicados, ambulantes y permanentes.

"Artículo 314. *Jueces radicados.* Los jueces radicados tendrán su sede en la cabecera del respectivo Distrito Judicial o en la cabecera de circuito. El lugar de radicación y el número de jueces por radicar será determinado por la Dirección Seccional de Instrucción Criminal, con un mes de anticipación a la fecha que se fije para la elección general de jueces y lo comunicará a la Sala Penal del respectivo Tribunal Superior.

"Artículo 315. *Reparto de negocios.* La Sala de Gobierno del respectivo Tribunal Superior, reglamentará el reparto de los procesos que correspondan a los jueces de instrucción criminal radicados.

"Artículo 316. *Jueces ambulantes.* Los jueces ambulantes tendrán su sede en la cabecera del respectivo Distrito Judicial; pero, el Director Seccional podrá enviarlos a cualquier municipio dentro del respectivo Distrito Judicial para iniciar o proseguir la investigación de un delito de su competencia.

"Corresponde a los jueces ambulantes, la instrucción de cualquier proceso por delito de competencia de los jueces superiores o de circuito.

"Artículo 317. *Reparto de negocios.* Las investigaciones que deban adelantar los jueces ambulantes se asignarán por sorteo que efectúe el respectivo Director Seccional de Instrucción Criminal entre los disponibles, de lo cual se dejará constancia.

"Artículo 318. *Jueces permanentes.* Son los jueces de instrucción que tienen a su cargo y bajo su exclusiva dirección, con la colaboración del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el adelantamiento de las primeras diligencias en la investigación de los delitos que sean de la competencia de los juzgados superiores y de circuito, quienes al terminar su respectivo turno, las pasarán a reparto de los jueces radicados, o al ambulante que designe la Dirección Seccional respectiva. Igualmente, adelantarán las primeras diligencias relacionadas con cualquier otro delito, cuya urgente investigación haga necesaria la inmediata intervención del funcionario de instrucción, en cuyo evento, al terminar su turno, las enviará a reparto de los jueces correspondientes.

"Artículo 319. *Sede de los jueces permanentes.* Los jueces permanentes tendrán su sede en la cabecera del respectivo Distrito Judicial o en la cabecera del circuito que determine la Dirección Seccional de Instrucción, previo concepto favorable de la Dirección Nacional.

"Corresponde a las Direcciones Seccionales de Instrucción organizar los turnos y la forma de prestación de los mismos, de acuerdo con las necesidades del servicio.

"Artículo 320. *Investigación permanente.* Los Juzgados de Instrucción Criminal permanente y los auxiliares mencionados en los literales a) y b) del artículo 312, se organizarán de modo que la función que cumplan se desarrolle en forma continua, en todos los días y a todas las horas.

"Artículo 321. *Informe sobre instrucción criminal.* Para fines estadísticos y de coordinación administrativa, los Jueces de Instrucción Criminal deben rendir información escrita dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, al Director Seccional de Instrucción Criminal acerca de sus labores, y éste a los respectivos Tribunales Superiores y a la Dirección Nacional, en relación con las de la oficina a su cargo.

"Artículo 322. *Requisitos para ocupar el cargo de Juez de Instrucción.* Los Jueces de Instrucción Criminal serán postulados por la Sala Penal del Tribunal Superior correspondiente. Para su designación, además de las condiciones exigidas por la Constitución Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial preferi-

rán a quienes hubieren aprobado cursos académicos de especialización en ciencias penales o criminológicas por un lapso no menor de un (1) año, o desempeñado con reconocida idoneidad el cargo de Juez de Instrucción o de funcionario de instrucción, por tiempo no inferior a dos (2) años.

"Artículo 323. *Otros requisitos.* Además de los requisitos señalados en los artículos anteriores, para desempeñar el cargo de Juez de Instrucción Criminal o el de subalterno, se requerirá haber observado intachable conducta personal y social, no haber sido sancionado con suspensión o más de una vez, con multa, ni haber sido desvinculado del servicio público por mala conducta o ineptitud.

"Artículo 324. *Nomenclatura.* Los Jueces de Instrucción Criminal serán distinguidos con un número de orden. Tal nomenclatura se llevará en forma independiente para cada Distrito Judicial, y la asignará el respectivo Tribunal Superior al hacer los nombramientos.

"Artículo 325. *Zonificación.* El Director Seccional de Instrucción Criminal podrá dividir el territorio de los distritos y de las ciudades, cuyo volumen de población lo amerite en zonas, para que sobre ellas ejerzan sus funciones uno o varios jueces de instrucción, atendiendo las necesidades de la Administración de Justicia.

"Los conflictos sobre la distribución de procesos que, se susciten entre jueces asignados a distintas zonas de un distrito, o ciudad, serán dirimidos de plano por el mismo Director Seccional de Instrucción Criminal.

"Parágrafo. De igual forma, cuando fuere necesario para el correcto y oportuno desarrollo de la investigación, el Director Seccional de Instrucción Criminal organizará unidades móviles de investigación conformadas por uno o varios Jueces de Instrucción Criminal, secretario o secretarios, escribientes y personal técnico del Cuerpo de Policía Judicial.

TITULO II
Cuerpo Técnico de Policía Judicial

"Artículo 326. *Cuerpo Técnico de Policía Judicial.* Créase el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial destinado a prestar a los jueces la colaboración investigativa que sea necesaria.

"Artículo 327. *Dirección.* El Cuerpo Técnico de Policía Judicial ejercerá sus funciones bajo la dirección y coordinación del Director Nacional de Instrucción Criminal y de los Directores Seccionales de Instrucción Criminal.

"Artículo 328. *Organismos del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.* En cada Distrito Judicial y bajo la dirección del Director Seccional de Instrucción Criminal, se conformarán dependencias del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, de acuerdo con las necesidades del servicio. La Dirección Nacional podrá crear también unidades de investigación.

"Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial designados para colaborar en las investigaciones, cuando no estén adscritos permanentemente a la unidad de investigación, prestarán sus servicios bajo la dirección operativa del juez correspondiente y por el tiempo que éste determine.

"Artículo 329. *Integración.* Corresponde al Director Nacional de Instrucción Criminal directamente o por medio de los Directores Seccionales de Instrucción Criminal nombrar e integrar los Cuerpos Técnicos de Policía Judicial que han de cumplir tales funciones dentro del territorio de la República.

"Artículo 330. *Composición.* El Cuerpo Técnico de Policía Judicial está compuesto por el personal directivo, técnico y científico que el Director Nacional de Instrucción Criminal designe.

"Artículo 331. *Funcionamiento transitorio.* Hasta tanto no se reglamente el funcionamiento del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, continuarán desarrollando esta actividad la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

"De todas maneras, a partir de la vigencia de este Código, la dirección y coordinación de las distintas actividades y funciones de la Policía Judicial será ejercida, a nivel nacional, por el Director Nacional de Instrucción Criminal y, a nivel seccional por el respectivo Director Seccional de Instrucción Criminal.

"Artículo 332. *Otras autoridades del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.* Ejercen eventualmente las funciones del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en caso de urgencia, o cuando por cualquier circunstancia no intervenga inmediatamente el funcionario de instrucción o el Cuerpo Técnico de Policía Judicial:

"a) El Director General de Aduanas, los funcionarios de la División de Investigaciones Especiales de la Dirección General de Aduanas, los Administradores de Aduanas, los Comandantes y Agentes del Resguardo Nacional, en relación con el delito de contrabando y conexos;

"b) Los funcionarios del Instituto de Medicina Legal, en lo que se relacione con las pruebas técnicas;

"c) Los abogados de la Procuraduría General de la Nación, cuando en ejercicio de la vigilancia judicial o administrativa encuentren hechos punibles imputables a funcionarios públicos;

"d) Las autoridades de Circulación y Tránsito, cuando se trate de hechos punibles causados con vehículos de transporte;

"e) Los Alcaldes Municipales, los Inspectores Departamentales y Municipales de Policía, los miembros de la Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad que no estén incorporados al Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

"Artículo 333. *Empleo de laboratorios y medios técnicos.* El Director Nacional de Instrucción Criminal, los Directores Seccionales o los Jueces de Instrucción podrán utilizar los laboratorios y medios técnicos de investigación que tengan las entidades de carácter público.

"Excepcionalmente y por la necesidad del servicio, podrán utilizarse laboratorios y medios técnicos privados, previa autorización de quien tenga la disponibilidad.

"Artículo 334. *Atribuciones del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.* Por propia iniciativa, y únicamente por motivos de urgencia o fuerza mayor acreditada, si no puede el Juez de Instrucción, iniciar la investigación preliminar, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial o quien ejerza estas funciones podrá practicar con las formalidades legales las siguientes diligencias:

"1. Recibir las denuncias por hechos punibles que le sean presentadas y dar aviso inmediato de ello al funcionario de investigación correspondiente.

"2. En el caso anterior y en los demás en que por los medios legales tenga conocimiento de un hecho punible, proceder a proteger y conservar el lugar de los hechos mientras se hace presente el funcionario de investigación. Si éste no concurriere, practicará la diligencia de inspección y la identificación de dicho lugar y recogerá técnicamente todos los elementos que puedan servir de prueba.

"3. Practicar el levantamiento del cadáver y remitir los elementos de prueba a los laboratorios oficiales para su examen científico y técnico.

"4. Practicar el registro de personas y de bienes muebles e inmuebles.

"5. Practicar todas las diligencias legales para la identificación física de los autores y partícipes y recibir su versión.

"6. Recibir testimonio, bajo la gravedad del juramento, de las personas que hayan presenciado los hechos y de las demás cuya declaración interese a la investigación, excepto a los posibles autores o partícipes. Relacionar los nombres, direcciones y documentos de los testigos que no fueren interrogados. Con este fin podrá impedir, hasta por seis (6) horas, que los testigos se ausenten sin rendir el testimonio o dar los informes correspondientes.

"7. En caso de flagrancia, capturar al presunto autor o partícipe, a quien impondrá de sus derechos, avisará a la persona que deba enterarse de la aprehensión y citará al defensor que haya sido designado. Si el capturado no designa defensor, se le nombrará de oficio, para recibirle versión libre y espontánea sobre los hechos.

"8. De conformidad con el Estatuto Nacional de Estupefacientes, proceder al decomiso y aprehensión de las sustancias y elementos a que aquél se refiere.

"Artículo 335. *Aviso al Juez de Instrucción y al Ministerio Público.* Iniciada la investigación por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en las condiciones previstas en el artículo anterior, inmediatamente o en la primera hora hábil del día siguiente, dará aviso al Juez de Instrucción correspondiente para que asuma el conocimiento de las diligencias o establezca el control y dirección de la investigación que se adelanta.

"Así mismo, el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial dará aviso al funcionario del Ministerio Público respectivo para que intervenga en la investigación.

"Artículo 336. *Informes del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial.* Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, rendirán sus informes mediante certificación jurada al juez de instrucción, los que suscribirán con sus nombres y apellidos y el número del documento que los identifique como miembros del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

"No obstante, si el Director Seccional de Instrucción Criminal considera que debe protegerse la identidad del funcionario, podrá autorizar que en el informe éste se identifique sólo con el número asignado por la institución. En este caso, el Director Seccional certificará que tal número corresponde a un funcionario de la institución y que prestó juramento sobre la autenticidad del documento.

"Artículo 337. *Requerimiento como testigos.* Quienes ejerzan funciones del Cuerpo Técnico de Policía Judicial podrán ser llamados a declarar en el proceso como testigos.

"Artículo 338. *Valor probatorio de las diligencias.* Las diligencias practicadas por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial serán apreciadas por el juez conforme a las normas generales establecidas en este Código, para la aducción y crítica de la prueba.

"Artículo 339. *Entrega de diligencias.* Dentro de las 24 horas siguientes, a partir de la identificación del presunto infractor, el funcionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial que hubiere realizado las diligencias a que se refieren los artículos anteriores, las entregará o enviará al funcionario de instrucción junto con las armas y efectos con los cuales se haya cometido el delito o que provengan de su ejecución. Al término anterior se agregará el de la distancia cuando en el lugar en que se cometa el hecho punible no hubiere juez de instrucción.

"En los lugares donde hubiere varios funcionarios de instrucción competentes para adelantar la investigación, el reparto de las diligencias se hará inmediatamente y, a partir de este momento, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial sólo actuará por orden del instructor.

"Cuando el autor o partícipe no estuviere identificado, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial entregará o enviará las diligencias al funcionario instructor dentro de los diez días siguientes a su iniciación, término dentro del cual practicará todas las diligencias conducentes a tal fin, excepto cuando sean requeridas por el juez antes del vencimiento de este término.

"Artículo 340. *Utilización de organismos oficiales.* Los organismos oficiales que cumplan funciones utilizables para atender actividades de Policía Judicial, estarán obligados a prestar la colaboración que solicite el Director Nacional o los Directores Seccionales de Instrucción Criminal para el servicio de la Administración de Justicia.

TITULO III
Indagación preliminar

"Artículo 341. *Finalidades de la indagación.* En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la investigación, la indagación preliminar tiene como finalidades: determinar si ha tenido ocurrencia el hecho que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades; si éste está descrito en la ley penal como punible, y aportar las pruebas indispensables en relación con la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho.

"Artículo 342. *Funcionarios que intervienen en la indagación preliminar.* Es competente para realizar indagación preliminar el funcionario de instrucción que haya tenido conocimiento de la comisión del hecho punible o aquel a quien se

repartan las diligencias practicadas. El Cuerpo Técnico de Policía Judicial podrá realizar diligencias de indagación preliminar en los casos de urgencia acreditada en que el juez de instrucción no lo haga y sus funciones quedarán limitadas a las previstas en los artículos anteriores.

"La actividad del Cuerpo Técnico de Policía Judicial en la indagación preliminar, estará siempre sometida a la dirección del Juez de Instrucción.

"Siempre que el Cuerpo Técnico de Policía Judicial inicie indagación preliminar, dará aviso al respectivo Juez de Instrucción.

"En cualquier momento durante la indagación preliminar, el juez de instrucción podrá solicitar del Cuerpo Técnico de Policía Judicial el envío o entrega de las diligencias.

"Artículo 343. *Reserva de las diligencias preliminares.* Las diligencias de indagación preliminar son reservadas, pero posesionado legalmente el defensor, podrá conocerlas, cuando se le haya recibido versión al imputado.

"Artículo 344. *Versión del imputado en indagación preliminar.* Cuando sea indispensable tomar versión al imputado durante la indagación preliminar, para efectos de la identificación del autor o partícipe del delito, o para determinarse si existió el hecho, o si éste es violatorio de la ley penal, dicha versión sólo podrá ser recibida por el juez instructor y con la asistencia del defensor.

"Sólo podrá recibirse versión del imputado sin asistencia del defensor, en los mismos casos en que la ley lo permita para la diligencia de indagatoria. La aceptación del hecho por parte del imputado en la versión rendida dentro de la investigación preliminar, tendrá valor de confesión.

"El imputado podrá solicitar que se le reciba versión.

"Artículo 345. *Pruebas que se pueden practicar en la indagación preliminar.* El juez de instrucción podrá practicar cualquier prueba durante la indagación preliminar; el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, únicamente aquéllas para las cuales está taxativamente autorizado por la ley.

"Artículo 346. *Duración de la indagación preliminar.* La indagación preliminar cuando exista persona identificada, sólo podrá extenderse por un término máximo de quince (15) días, más el de la distancia, vencido el cual el juez determinará, si es del caso, abrir investigación o dictar auto inhibitorio.

"Cuando no exista prueba de identificación o de individualización del posible autor o partícipe del hecho, el juez determinará las pruebas que sean necesarias para tal fin las que se llevarán a cabo en un término máximo de sesenta (60) días, directamente por el juez o mediante comisión.

"Si antes del vencimiento de este término se aportaren pruebas de identificación o individualización del autor o partícipe del hecho, el juez decidirá si abre o no investigación.

"Artículo 347. *Suspensión de la indagación preliminar en caso de no identificación.* Si vencido el término de sesenta (60) días no se hubiere logrado la individualiza-

ción o identidad física del presunto infractor, el juez de instrucción mediante auto de sustanciación que notificará al Ministerio Público y contra el cual sólo procede recurso de reposición, ordenará suspender las diligencias y las remitirá al Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

"El Cuerpo Técnico de Policía Judicial reanudará las diligencias, con el objeto de hallar prueba de la identidad del presunto infractor.

"En tal caso, dará aviso inmediato al funcionario que hubiere ordenado la suspensión y los términos de que dispone son los previstos en este Capítulo.

"Artículo 348. *Validez de la actuación cuando haya cambio de competencia por el factor territorial.* Las diligencias practicadas por cualquier juez de instrucción son válidas aunque se produzca cambio de competencia.

"Artículo 349. *Comisiones.* El juez de instrucción, cuando personalmente haga la indagación preliminar, podrá excepcionalmente comisionar a autoridades del Cuerpo Técnico de Policía Judicial para lo cual precisará, en auto de sustanciación, las diligencias que deban practicarse y señalará el término de la comisión.

"Artículo 350. *Terminación de la indagación preliminar.* La indagación preliminar se dará por terminada con el auto cabeza de proceso o el auto inhibitorio, dictado por el juez de instrucción.

"Artículo 351. *Funcionario competente para dictar auto cabeza de proceso.* El juez que haya hecho directamente la indagación preliminar o que haya dirigido la realizada por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, es el funcionario competente para dictar auto cabeza de proceso o auto inhibitorio.

"En caso de que dicte auto cabeza de proceso hará toda la instrucción del sumario, excepto si se trata de juez de instrucción permanente.

"Lo dispuesto en el inciso primero no se aplicará, cuando de la indagación preliminar surjan incompetencias, caso en el cual se enviará al funcionario o corporación correspondiente para que decida sobre la apertura de la investigación.

"Artículo 352. *Auto inhibitorio.* El funcionario de instrucción se abstendrá de iniciar el proceso cuando de las diligencias practicadas apareciere que el hecho no ha existido o que la conducta es atípica o que la acción penal no puede iniciarse.

"Tal decisión se tomará en auto interlocutorio contra el cual proceden los recursos ordinarios por parte del Ministerio Público y del denunciante o querellante.

"La persona en cuyo favor se haya dictado auto inhibitorio, o el denunciante o querellante, podrán designar abogado que los represente en el trámite de los recursos que se hayan interpuesto, quienes tendrán derecho a conocer las diligencias practicadas.

"Artículo 353. *Revocación del auto inhibitorio.* El auto inhibitorio podrá ser revocado de oficio o a petición del denunciante o querellante aunque se encuentre ejecutoriado.

"El denunciante o querellante podrá insistir en la apertura de la investigación solamente ante el juzgado que profirió el auto inhibitorio, siempre que desvirtúe probatoriamente los fundamentos que sirvieron de base para proferirlo.

TITULO IV
Sumario

CAPITULO I
Disposiciones generales

"Artículo 354. *Término para la instrucción.* El juez que haya dirigido o realizado la indagación preliminar, si fuere competente, será él mismo que abra y adelante la investigación, lo que ordenará mediante auto cabeza de proceso.

"Para el perfeccionamiento de la investigación dispondrá de un término máximo de treinta (30) días, cuando exista persona privada de libertad.

"Si las personas privadas de su libertad o los delitos investigados fueren más de dos, el término podrá extenderse hasta sesenta (60) días.

"Cuando no existan personas privadas de libertad, los términos anteriores se duplicarán.

"Artículo 355. *Facultades del juez.* El juez durante el proceso tendrá amplias facultades y poderes para lograr el éxito de la investigación y asegurar la comparecencia de los autores o partícipes del hecho punible; en consecuencia, todas las autoridades y los particulares están obligados a acatar cualquier decisión que tome de acuerdo con la ley.

"Artículo 356. *Prohibición.* Durante la investigación ningún funcionario puede expedir copias de las diligencias practicadas, salvo que las solicite la autoridad competente para investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso de hecho.

"Los abogados que intervienen en el proceso tienen derecho a que se les expida copia autorizada de la actuación para su uso exclusivo y para cumplimiento de sus funciones.

"Firmada la diligencia de reserva, el compromiso se entenderá prestado para todo el proceso, y las copias se expedirán a solicitud de cualquiera de las partes, dejando constancia secretarial de su expedición.

"Artículo 357. *Sanciones.* Quien violare la reserva de la investigación, incurrirá en multa de uno a cinco salarios mínimos mensuales, impuesta por el funcionario que conoce del proceso.

"Si quien incurre en esta falta es el funcionario, conocerá del hecho el respectivo superior, y la sanción será la suspensión del cargo de ocho (8) días a dos (2) meses.

"Las sanciones previstas en los incisos anteriores se impondrán de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 418.

CAPITULO II
Investigación de los hechos

"Artículo 358. *Investigación tanto de lo favorable como de lo desfavorable al procesado.* El funcionario de instrucción debe investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven la responsabilidad del procesado, sino también los que lo eximan de ella, la extingan o atenúen.

"Artículo 359. *Práctica inmediata de inspección.* En la búsqueda de los rastros o señales que haya dejado la infracción, y para la comprobación de los elementos constitutivos de la misma, el instructor, cuando considere que el hecho sea susceptible de tal prueba, decretará inmediatamente una inspección judicial.

"Si los rastros o señales del delito continuaren en territorio distinto al de la jurisdicción del juez, éste podrá entrar en él, siempre que sea dentro del territorio de la República.

"Artículo 360. *Objeto de la investigación.* El funcionario de instrucción ordenará y practicará las pruebas conducentes al esclarecimiento de la verdad sobre los hecho materia de investigación especialmente respecto de las siguientes cuestiones:

"1. Si se ha infringido la ley penal.

"2. Quién o quiénes son los autores o partícipes del hecho.

"3. Los motivos determinantes y demás factores que influyeron en la violación de la ley penal.

"4. Las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se realizó el hecho.

"5. Las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del procesado, su conducta anterior, sus antecedentes judiciales, de policía, sus condiciones de vida, y

"6. Los daños y perjuicios de orden moral y material que causó el hecho punible.

"Artículo 361. *Identidad del occiso.* En caso de homicidio no podrá ser movido el cadáver mientras el funcionario de instrucción o el Cuerpo Técnico de Policía Judicial practique una inspección para examinarlo detenidamente y establecer la situación en que se encuentre y los signos externos de violencia que presente.

"En seguida procederá a identificarlo y ordenará que se practique la necropsia, para que se determine la causa de la muerte, sin lo cual no se inhumará.

"En caso de accidente ferroviario en lugar alejado, la diligencia de identidad del occiso, cuando no fuere posible la presencia del funcionario instructor o del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, se hará por cualquier funcionario público o en su defecto por cualquier ciudadano, de lo cual se levantará un acta que entregará a la autoridad más próxima.

"Artículo 362. *Aviso de ingreso de lesionados.* Quien en hospital, puesto de salud, clínica u otro establecimiento similar, sea público o particular, reciba o dé

entrada a persona a la cual se le hubiere ocasionado daño en el cuerpo o la salud, dará aviso inmediatamente a la autoridad respectiva.

"El incumplimiento de lo previsto en este artículo, acarreará multa de cinco a veinte salarios legales mínimos mensuales, la cual se impondrá de acuerdo con el artículo 418.

"Artículo 363. *Reconocimiento en caso de lesiones.* Al iniciarse la investigación por el delito de lesiones personales, el juez ordenará de inmediato el reconocimiento médico del lesionado para determinar la naturaleza de aquéllas, el instrumento con que fueron causadas y el pronóstico sobre duración de la enfermedad y de la incapacidad laboral que puedan producir. En el curso de la investigación se ordenará la práctica de tantos reconocimientos como fueren necesarios para establecer las consecuencias definitivas. Las decisiones se tomarán en su momento procesal, con base en el último reconocimiento que obrare en el proceso.

"En el primer dictamen que se solicite se exigirá que a la mayor brevedad posible se determine la incapacidad y las secuelas definitivas.

"Artículo 364. *Avalúo de los bienes en hechos punibles contra el patrimonio económico.* En los hechos punibles contra el patrimonio económico, la cuantía y el monto de la indemnización, será la que fije el perjudicado bajo la gravedad del juramento, siempre y cuando no sea impugnada durante la etapa de la investigación por cualquiera de los sujetos procesales, caso en el cual el juez decretará la prueba pericial para establecerla.

"Artículo 365. *Comiso.* Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido el delito o que provengan de su ejecución, que no tengan libre comercio, pasarán a poder del Estado a menos que la ley disponga su destrucción. En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, se someterán a los experticios técnicos y se entregarán en depósito a su propietario o tenedor legítimo, salvo el derecho de terceros o de normas que dispongan lo contrario.

"La entrega será definitiva cuando se paguen o garanticen en cualquier momento procesal los daños materiales y morales, fijados mediante avalúo pericial, o cuando se dicte sentencia absolutoria, o cesación de procedimiento.

"Si no se ha pagado o garantizado el pago de los perjuicios el juez en la sentencia condenatoria ordenará el decomiso de los mencionados elementos, para los efectos de la indemnización.

"Artículo 366. *Caso especial de embargo.* Cuando se investiguen hechos punibles de falsedad en los títulos de propiedad de un bien inmueble o bienes muebles sometidos a registro, o de estafa o de otro delito que haya tenido por objeto bienes de esa naturaleza, y que pueda influir en la propiedad de los mismos, el funcionario de instrucción o el juez de conocimiento podrá decretar el embargo por el tiempo que sea necesario.

"Artículo 367. *Diligencias especiales reservadas.* Los autos motivados mediante los cuales se disponga el allanamiento y el registro, la retención de correspondencia

postal o telegráfica o la interceptación de comunicaciones telefónicas, no se darán a conocer a las partes hasta tanto el juez considere que ello puede interferir el desarrollo de la respectiva diligencia. Contra dichos autos no procede recurso alguno.

"Artículo 368. *Allanamiento, procedencia y requisitos.* Cuando haya serios motivos para presumir que en un bien inmueble o nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra orden de captura o que habiendo sido víctima de un delito deba ser rescatada, o las armas, instrumentos o efectos con que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución, el funcionario de instrucción ordenará, en auto motivado, el correspondiente allanamiento y registro.

"El auto a que se refiere el inciso anterior no requiere notificación.

"Artículo 369. *Allanamientos especiales.* Para el allanamiento y registro de las casas y naves, que conforme al Derecho Internacional gozan de inmunidad diplomática, el funcionario de instrucción pedirá su venia al respectivo Agente Diplomático mediante oficio, en el cual rogará que conteste dentro de 24 horas. Ese oficio será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"En caso de registro de residencia u oficinas de los Cónsules se dará aviso al Cónsul respectivo y en su defecto a la persona a cuyo cargo estuviere el inmueble objeto de registro.

"Artículo 370. *Acta de la diligencia.* En el acta de la diligencia de allanamiento y registro deben identificarse y describirse todas las cosas que hayan sido examinadas o incautadas y dejarse las constancias que soliciten las personas que en ella intervengan. Los propietarios, poseedores o tenedores tendrán derecho a que se les expida copia del acta si la solicitan.

"Artículo 371. *Retención de correspondencia.* El funcionario de instrucción podrá ordenar la retención de la correspondencia privada, postal o telegráfica que el procesado reciba o remita, excepto la que envíe a su defensor o reciba de éste.

"La decisión del funcionario se hará saber en forma reservada a los jefes de las oficinas de correos y telégrafos y a los directores de establecimientos carcelarios, para que lleven a efecto la retención de la correspondencia y la entreguen bajo recibo al investigador.

"Artículo 372. *Solicitud de comunicaciones telegráficas.* El funcionario de instrucción podrá así mismo ordenar que en las oficinas telegráficas se le faciliten copias de los mensajes transmitidos o recibidos, si fueren conducentes al descubrimiento o comprobación de los hechos que se investigan.

"Artículo 373. *Apertura de correspondencia.* La apertura de correspondencia interceptada se dispondrá por medio de auto motivado y se practicará con la presencia del sindicado o su defensor.

"Artículo 374. *Devolución de la correspondencia.* El funcionario abrirá por sí mismo la correspondencia y, después de leerla, aportará al proceso lo que haga referencia a los hechos que se investigan y cuya conservación considere necesaria.

"La correspondencia que no se relacione con los hechos que se investigan será entregada o enviada en el acto a la persona a quien corresponde.

"Artículo 375. *Interceptación de comunicaciones telefónicas.* El funcionario de instrucción podrá ordenar con el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se intercepten mediante grabación magnetofónica, las comunicaciones que se hagan o reciban en determinado teléfono y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para los fines del proceso.

"Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.

"El instructor dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica llevada al proceso de grabación.

"Tales grabaciones se trasladarán al expediente por medio de escrito certificado por el juez.

CAPITULO III
Investigación de autores y partícipes

"Artículo 376. *A quién se recibe indagatoria.* Se recibirá declaración de indagatoria al que en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en el proceso, o por haber sido sorprendido en flagrante delito, considere el funcionario autor de la infracción penal o participe de ella.

"Artículo 377. *Derecho a solicitar su propia indagatoria.* Quien tenga noticia de la existencia de un proceso en el cual obren imputaciones penales contra él, tiene derecho a solicitar al correspondiente funcionario de instrucción que le reciba indagatoria.

"Artículo 378. *Emplazamiento para indagatoria.* Cuando no hubiere sido posible hacer comparecer a la persona que deba rendir indagatoria, se le emplazara por edicto que permanecerá fijado durante cinco (5) días en un lugar visible del juzgado. Si vencido este plazo no hubiere comparecido, se le declarará persona ausente y se le designará defensor de oficio.

"Si la comparecencia para rendir indagatoria se intenta a través de orden de captura, vencidos diez (10) días, contados a partir de la fecha en que la orden haya sido recibida por las autoridades que deban ejecutar la aprehensión sin obtener respuesta, se procederá conforme al inciso anterior.

"Artículo 379. *Prohibición de juramentar al indagado. Excepciones.* La indagatoria no podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a exhortar al procesado a que diga la verdad, advirtiéndole que debe responder de una manera clara y precisa a las preguntas que se le hagan. Pero si el procesado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo.

"Artículo 380. *Advertencias previas al indagado.* Previamente al interrogatorio de los artículos siguientes se le advertirá al indagado que se le va a recibir una

declaración sin juramento que es voluntaria y libre de todo apremio; que no tiene obligación de declarar contra sí mismo ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, ni contra su cónyuge, o compañero o compañera permanente; que tiene derecho a nombrar un defensor que lo asista procesalmente, y que en caso de no hacerlo, se le designará de oficio.

"Si la persona se niega a rendir indagatoria, se tendrá por vinculada procesalmente y el funcionario le advertirá que su actitud la podrá privar de medios de defensa.

"De todo esto se dejará expresa y clara constancia desde el comienzo de la diligencia.

"Artículo 381. *Reglas para la recepción de indagatoria.* En la iniciación de la indagatoria, se interrogará al sindicado por su nombre y apellidos, apodos si los tuviere, los nombres de sus padres, edad, lugar de nacimiento, documentos de identificación y su origen; establecimientos donde ha estudiado y duración de los respectivos cursos; lugares o establecimientos donde ha trabajado, con indicación de las épocas respectivas y el sueldo o salario que devenga actualmente; qué obligaciones patrimoniales tiene; si es casado o hace vida marital, debe informar el nombre de su cónyuge o compañero o compañera permanente y de sus hijos, suministrando la edad de los mismos y su ocupación; los bienes muebles o inmuebles que posea; sus antecedentes judiciales o de policía, con indicación del despacho que conoció o conoce del proceso, el estado en que se encuentra, y si en el mismo se impuso medida de aseguramiento o término con cesación de procedimiento o sentencia.

"Igualmente el juez dejará constancia de las características morfológicas del indagado.

"Artículo 382. *Preguntas al indagado en relación con los hechos.* Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, el juez interrogará al procesado en relación con los hechos que originaron su vinculación.

"Artículo 383. *Ampliación de indagatoria.* El funcionario de instrucción tomará al procesado las ampliaciones de indagatoria que considere convenientes.

"Así mismo, el procesado podrá solicitar cuantas ampliaciones de indagatoria considere necesarias, ante el funcionario de instrucción o juez de la causa, quien las recibirá en el menor término posible.

"Artículo 384. *Constancias y verificación de citas al indagado.* No podrá limitarse al procesado el derecho de hacer constar cuanto tenga por conveniente para su defensa o para la explicación de los hechos y se verificarán con urgencia las citas que hiciere y las demás diligencias que propusiere para comprobar sus aseveraciones.

"Artículo 385. *Interrogatorio al indagado.* En la recepción de indagatoria sólo el funcionario de instrucción podrá dirigir preguntas al procesado.

"La intervención del defensor en ella no le dará derecho para insinuar al sindicado las respuestas que debe dar pero podrá objetar al funcionario las interrogaciones que no haga en forma legal y correcta.

"Artículo 386. *Examen del imputado y del testigo en el lugar de los hechos.* El funcionario podrá ordenar que se conduzca al imputado o al testigo al lugar en que hubieren ocurrido los hechos, a fin de examinarlos allí y poner en su presencia los objetos sobre los cuales hubiere de versar la declaración.

"Podrá también hacer que el testigo describa detalladamente dichos objetos y que los reconozca entre otros semejantes o adoptar las medidas que su prudencia le sugiera para asegurarse de la exactitud de la declaración.

"Artículo 387. *Reconocimiento de objetos por el indagado.* Durante la indagatoria se le pondrán de presente al imputado los objetos aprehendidos durante la investigación y que provengan de la realización del hecho punible o hayan servido para su ejecución. Se le interrogará sobre si los ha visto antes y porqué razón. En caso de haberlos encontrado en su poder, se le solicitará una explicación sobre el particular.

"Artículo 388. *Procedimiento en caso de falsedad de documentos.* Cuando se trate de una investigación sobre falsedad material en documentos, se solicitará al procesado, si el juez lo considera necesario, que escriba dentro de la misma diligencia las palabras o textos que le fueren dictados para tal fin.

"En este caso a los peritos grafólogos sólo se les enviará los documentos originales cuya falsedad se investiga y aquéllos con los que se hará el cotejo grafológico.

"Artículo 389. *Reconocimiento en fila de personas.* Todo aquél que incrimine a una persona determinada deberá reconocerla judicialmente cuando ello sea necesario, a fin de que no pueda dudarse sobre su identidad.

"Artículo 390. *Cómo se hace el reconocimiento.* Previamente a la formación de la fila para el reconocimiento, se le advertirá al imputado el derecho que tiene a escoger el lugar que quiera dentro de la misma. Inmediatamente se practicará la diligencia poniendo a la vista del testigo la persona que haya de ser reconocida, vestida, si fuere posible, con el mismo traje que llevaba en el momento en que se dice fue cometido el delito, y acompañada de seis (6) o más personas de características morfológicas semejantes.

"Desde un punto en que no pueda ser visto, el que fuere a hacer el reconocimiento, juramentado de antemano, manifestará si se encuentra entre las personas que forman el grupo aquélla a quien se hubiere referido en sus declaraciones y la señalará.

"En la diligencia se dejarán los nombres de las demás personas integrantes de la fila, y de quien hubiere sido reconocido.

"Artículo 391. *Reconocimiento a través de fotografías.* Cuando fuere el caso de un reconocimiento por medio de fotografías, por no estar capturada la persona que debe ser sometida a reconocimiento, la diligencia se hará sobre un número no inferior a seis fotografías cuando se tratare de un solo sindicado, y en lo posible se

aumentarán en la misma proporción, según el número de personas a reconocer. En la diligencia se tendrán las mismas precauciones de los reconocimientos en fila de personas, de todo lo cual se dejará expresa constancia.

"Si de la diligencia resultare algún reconocimiento, las fotografías que sirvieron para la diligencia se agregarán al proceso.

"Artículo 392. *Recursos procedentes contra el auto que niega la vinculación al proceso.* Contra el auto que niega la vinculación al proceso de autores o partícipes, proceden los recursos de reposición y apelación.

TITULO V

Captura, medidas de aseguramiento, libertad provisional de inimputables y habeas corpus

CAPITULO I

Captura

"Artículo 393. *Flagrancia.* Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundamentalmente que momentos antes ha cometido un hecho punible o participado en él, o cuando es perseguida por la autoridad, o cuando por voces de auxilio se pide su captura.

"Artículo 394. *Captura en flagrancia.* Quien sea sorprendido en flagrancia será capturado por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial o por cualquiera otra autoridad o persona y conducido en el acto, o a más tardar en el término de la distancia, ante el juez competente para iniciar la investigación, a quien deberá rendir informe sobre las causas de la captura. De este informe, se dejará constancia en un acta que suscribirán el juez y quien haya realizado la captura.

"Cuando por cualquier circunstancia no atribuida a quien hubiere realizado la captura, el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente ante el juez, será recluido en la cárcel del lugar o en otro establecimiento oficial destinado al efecto, debiéndose poner a disposición del juez dentro de la primera hora hábil del día siguiente, con el informe de que trata el inciso anterior.

"Cuando el hecho punible tenga señalada pena no privativa de la libertad o pena de arresto, una vez el capturado haya rendido indagatoria se le dejará en libertad, firmando un acta de compromiso de presentación al juzgado cuando se le solicite.

"Artículo 395. *Captura de empleado oficial.* Cuando un empleado oficial sea capturado en flagrancia, el juez recibirá inmediatamente la indagatoria, y si no fuere posible lo citará para recibirla en fecha posterior.

"Después de la diligencia de indagatoria será puesto inmediatamente en libertad y se tomarán las medidas necesarias para impedir que eluda la acción de la justicia.

"Artículo 396. *Inmunidad de congresistas.* Mientras subsista la inmunidad reconocida por la Constitución Nacional, ningún miembro del Congreso podrá ser capturado, ni detenido provisionalmente en virtud de auto de detención, ni sometido a juicio por infracción a la ley penal, ni privado de libertad por pronunciamiento de

sentencia, sino con autorización de la Cámara a que pertenezca, a solicitud del juez instructor o de la causa.

"Si hubiere sido sorprendido en flagrancia y aprehendido, será enviado inmediatamente a juez instructor o de la causa, quien, previa calificación provisional y sumaria que deberá hacer de la flagrancia dentro de las veinticuatro horas siguientes a la captura, lo pondrá a disposición de la Cámara respectiva para que ella decida sobre el levantamiento de la inmunidad. Si el juez no hallare establecida la flagrancia pero sí mérito para iniciar el proceso, actuará en la forma que se establece para las infracciones no flagrantes.

"Cuando la aprehensión se produzca estando en receso el Congreso, el juez instructor o de la causa calificará provisionalmente los hechos, y si estimare que en realidad hubo flagrancia, previa disposición de las medidas cautelares necesarias para que el sindicado no se sustraiga a la acción de la justicia, lo pondrá en libertad vigilada durante las veinticuatro horas siguientes a la captura. Tales medidas cautelares, también se adoptarán por el juez, para la efectividad de la detención o de la pena, mientras dure la inmunidad.

"Artículo 397. *Trámite y efectos del levantamiento de la inmunidad.* La petición del levantamiento de la inmunidad, se hará por medio de oficio motivado, dirigido al Presidente de la respectiva Cámara en el que se debe expresar el hecho que se investiga en el proceso, la calificación legal que se le hubiere dado en el auto de detención, en el de proceder o su equivalente o en el de citación de audiencia si se tratare de contravención, según el caso, con las circunstancias especificadoras de la infracción que se hubiere reconocido, la pena que la ley establece para ella, la fecha de la providencia, y la indicación del juez o Tribunal que la profirió.

"Una vez levantada la inmunidad a un congresista, esta decisión surtirá efectos durante el proceso.

"Artículo 398. *Continuación del proceso cuando alguno de los sindicados goce de inmunidad.* Cuando se adelante un proceso contra varias personas, alguna de las cuales goza de inmunidad, el juez continuará la actuación, pudiendo inclusive tramitar el juicio contra los sindicados restantes, mientras se decide sobre el levantamiento de la inmunidad o se vence el término de duración de ésta.

"Artículo 399. *Captura facultativa.* En los procesos por delitos sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años, podrá librarse orden escrita de captura contra el imputado para efectos de la indagatoria.

"De la misma forma se procederá cuando en contra de la persona que deba ser indagada se haya proferido en otro proceso medida de aseguramiento de caución o detención.

"Artículo 400. *Citación para indagatoria.* El imputado será citado para indagatoria en los siguientes casos:

"1. Cuando el delito porque se procede tenga señalada pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años y el juez considere que no es necesaria la orden de captura.

"2. Cuando el hecho punible por el que se procede tenga pena no privativa de la libertad, pena de arresto, o pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a dos (2) años.

"3. Cuando la prueba indique que el imputado actuó en cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 29 y 40 del Código Penal.

"4. Cuando el hecho punible investigado se atribuya a un empleado oficial.

"Si en cualquiera de los casos anteriores el imputado no compareciere a rendir indagatoria, será capturado para el cumplimiento de dicha diligencia.

"Recibida la indagatoria, en los casos de los numerales 2, 3 y 4 de este artículo, será puesto inmediatamente en libertad por auto de sustanciación.

"Artículo 401. *Captura por parte del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.* Las facultades de captura que tiene el Cuerpo Técnico de Policía Judicial quedan circunscritas a los casos de hechos punibles en estado de flagrancia y a lo previsto en el artículo siguiente.

"Artículo 402. *Captura públicamente requerida.* Cualquiera podrá aprehender a la persona cuya captura haya sido públicamente requerida por autoridad competente. En estos casos, se aplicará lo dispuesto para las situaciones de flagrancia.

"Artículo 403. *Derechos del capturado.* A toda persona capturada se le hará saber en forma inmediata y se dejará constancia escrita:

"1. Sobre los motivos de la captura y funcionario que la ha impartido.

"2. El derecho a entrevistarse con un abogado.

"3. El derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su aprehensión. Quien esté responsabilizado de la captura, inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que se indique.

"4. El derecho que tiene, cuando se trate de indagación preliminar, de rendir ante el juez instructor versión espontánea sobre los hechos que se le imputan, con la advertencia de que puede guardar silencio sobre la incriminación hecha.

"La versión sólo podrá rendirse en presencia de un defensor.

"Artículo 404. *Orden escrita de captura.* El oficio de captura que se libre a las autoridades deberá contener todos los datos necesarios para la identificación o individualización del imputado y el motivo de la captura.

"Copia del oficio se enviará al Director Nacional de Instrucción Criminal.

"Artículo 405. *Remisión de la persona capturada.* El capturado mediante orden escrita será puesto inmediata y directamente a disposición del funcionario que ordenó la aprehensión. De no poderse hacer, se pondrá a su disposición en la cárcel del lugar y el director informará de ello por escrito al funcionario competente, en la primera hora hábil siguiente.

"Artículo 406. *Legalización de la captura.* Cuando el capturado, según las previsiones legales, deba ser recluido en la cárcel del lugar, el juez bajo cuyas órdenes

se encuentre, dispondrá de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas para legalizar dicha situación, contadas a partir del momento en que tenga noticia de la referida captura. En tal caso, expedirá mandamiento escrito al director del respectivo establecimiento de detención, para que en dicho lugar se le mantenga privado de su libertad. En dicha orden se expresará el motivo de la captura y la fecha en que ésta se hubiere producido.

"Vencido el término anterior sin que el director del establecimiento de reclusión hubiere recibido la orden de encarcelación, procederá a poner en libertad al capturado, bajo la responsabilidad del funcionario que debió impartirla.

"El incumplimiento de la obligación prevista en el inciso anterior, dará lugar a la responsabilidad penal correspondiente.

"Artículo 407. *Presentación voluntaria a rendir indagatoria.* Si el juez considera necesario vincular a quien se ha presentado voluntariamente a rendir indagatoria y no existiere orden de captura en su contra, le recibirá inmediatamente la indagatoria, y si no es posible hacerlo lo citará para tal efecto en fecha posterior. Si existiere orden de captura en contra del imputado, podrá hacerla efectiva o revocarla para que en su lugar se practique inmediatamente la diligencia o se fije día y hora para hacerlo.

"Artículo 408. *Privación de la libertad para resolver situación jurídica.* Cuando la persona se presente voluntariamente, o por citación que le haya hecho el juez a rendir indagatoria y después de recepcionada ésta, surgiere prueba para dictar auto de detención sin que concurriere causal de libertad provisional, el juez podrá privarlo de su libertad para resolver la situación jurídica.

"Artículo 409. *Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad.* Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el juez a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad.

"Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando la persona sea aprehendida en flagrancia por hecho punible que exigiere querella y ésta no se hubiere formulado.

"La persona liberada deberá firmar un acta de compromiso en la que conste nombre, domicilio, lugar de trabajo y la obligación de concurrir ante la autoridad que lo requiera.

"Artículo 410. *Cancelación de las órdenes de captura.* El funcionario que haya impartido la orden de captura está en la obligación de cancelarla inmediatamente cesen los motivos que dieron lugar a ella, so pena de incurrir en causal de mala conducta, sancionable con suspensión hasta de treinta (30) días impuesta por el respectivo superior, previo el trámite previsto en el artículo 418 de este Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.

"De la misma manera se procederá en caso de que el imputado haya sido declarado ausente por delito que tenga pena no privativa de la libertad, o pena de arresto, o de prisión, cuyo mínimo sea inferior a dos (2) años.

"Si la pena mínima del delito investigado es o excede de dos (2) años de prisión, se cancelarán las órdenes de captura cuando el juez no profiera auto de detención o no resuelva la situación jurídica dentro del término legal.

CAPITULO II

Medidas de aseguramiento

"Artículo 411. *Vinculación previa a la resolución de la situación jurídica.* No podrá resolverse situación jurídica sin que previamente se haya recibido indagatoria al imputado, o declarado persona ausente.

"Artículo 412. *Términos para recibir indagatoria.* La indagatoria deberá recibirse a la mayor brevedad posible dentro de los tres (3) días siguientes a aquél en que el capturado haya sido puesto a disposición del juez. Este término se duplicará si hubiere más de dos capturados en el mismo proceso, y si la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha.

"Artículo 413. *Definición de la situación jurídica.* Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria o vencido el término anterior, la situación jurídica deberá definirse por auto interlocutorio, dentro de los cinco (5) días siguientes, con medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique, u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el procesado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante el juzgado cuando se le solicite.

"Si el procesado fuere dejado en libertad al terminar la indagatoria, o hubiere sido declarado ausente, el plazo para resolver su situación jurídica será hasta de diez (10) días. El juez dispondrá del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas ellas se hubiere realizado el mismo día.

"Artículo 414. *Requisitos sustanciales.* Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra el procesado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

"Artículo 415. *Requisitos formales.* Las medidas de aseguramiento se dictarán en virtud de auto interlocutorio en que se exprese:

"1. Los hechos que se investigan, su calificación jurídica y la pena correspondiente.

"2. Los elementos probatorios sobre la existencia del hecho y de la probable responsabilidad como autor o partícipe.

"Artículo 416. *De la conminación.* La conminación consiste en el compromiso del procesado de cumplir las obligaciones que le imponga el juez al resolver su situación jurídica. Sólo procede para delitos sancionados con arresto o pena no privativa de la libertad.

"Artículo 417. *Sanción por renuencia.* El juez podrá:

"1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por treinta (30) días al procesado que se negare a suscribir diligencia de conminación.

"El arresto cesará cuando el procesado suscriba la diligencia.

"2. Sancionar con arresto inconmutable hasta por treinta (30) días al procesado que injustificadamente incumpla las obligaciones impuestas en el acta de conminación.

"Las sanciones de que trata este artículo, podrán imponerse sucesivamente por nuevos incumplimientos del procesado.

"Artículo 418. *Procedimiento en caso de renuencia.* Rendido el informe secretarial, el juez podrá disponer la conducción de la persona para que formule sus descargos. Seguidamente el juez, en auto motivado contra el que no procede ningún recurso, decidirá lo pertinente.

"Artículo 419. *De la caución.* La caución es juratoria o prendaria y se aplica en relación con los delitos cuya pena mínima sea inferior a dos (2) años de prisión, excepto lo previsto en el numeral segundo del artículo 421.

"La caución juratoria constará en acta en donde el procesado bajo juramento, prometa cumplir las obligaciones que le hayan sido impuestas. Procederá, cuando a juicio del juez, el procesado carezca de recursos económicos para constituir caución prendaria.

"La caución prendaria consiste en el depósito de dinero, en cuantía de cinco mil pesos ($5.000.00) a cien (100) salarios mínimos mensuales legales y se fijará teniendo en cuenta las condiciones económicas del procesado y la gravedad del hecho.

"Artículo 420. *Contenido de las actas.* En las actas de conminación y de cauciones juratoria y prendaria se consignarán las obligaciones que el procesado debe cumplir, de conformidad con el artículo 443, dentro del término señalado por el juez y con la advertencia expresa de las consecuencias legales de su incumplimiento.

"Artículo 421. *De la detención.* La detención preventiva procede en los siguientes casos:

"1. cuando el delito que se imputa al procesado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años.

"2. En los procesos por los siguientes delitos:

"– Cohecho propio (artículo 141);

"– Cohecho impropio (artículo 142);

"– Enriquecimiento ilícito (artículo 148);

"– Prevaricato por acción (artículo 149);

"– Receptación (artículo 177);

"– Fuga de presos (artículo 178);

"– Favorecimiento de la fuga (artículo 179);

"– Fraude procesal (artículo 182);

"– Incendio (artículo 189);

"– Provocación de inundación o derrumbe (artículo 191);

"– Siniestro o daño de nave (artículo 193);

"– Pánico (artículo 194);

"– Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos (artículo 197);

"– Fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones (artículo 201);

"– Falsificación de moneda nacional o extranjera (artículo 207);

"– Tráfico de moneda falsificada (artículo 208);

"– Emisiones ilegales (artículo 209);

"– Acaparamiento (artículo 229);

"– Especulación (artículo 230);

"– Pánico económico (artículo 232);

"– Ilícita explotación comercial (artículo 233);

"– Privación ilegal de libertad (artículo 272);

"– Constreñimiento para delinquir (artículo 277);

"– Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar (artículo 278);

"– Tortura (artículo 279);

"– Acceso carnal abusivo con menor de catorce años (artículo 303);

"– Lesiones personales con deformidad (artículo 333);

"– Lesiones personales con perturbación funcional (artículo 334);

"– Lesiones personales con perturbación síquica (artículo 335);

"– Hurto agravado (artículos 351), y los contemplados en el Decreto número 2920 de 1982.

"3. Cuando el procesado tuviere auto de detención o caución vigente, por delito doloso o preterintencional en otro proceso, aunque el delito por el cual se proceda tenga pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a dos (2) años, o pena de arresto.

"4. Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión.

"5. Cuando el procesado injustificadamente, no otorgue la caución prendaria o juratoria dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que la disponga o del que resuelva el recurso de reposición, o cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el acta de caución, caso en el cual perderá también la caución prendaria que hubiere prestado.

"Artículo 422. *Formalización de la detención preventiva.* Cuando transcurridos ocho (8) días de privación de libertad no hubiere llegado la orden de libertad o detención, el director la reclamará al juez encargado de resolver la situación jurídica del sindicado. Este término se duplicará cuando hubiere más de cinco (5) capturados en el mismo proceso y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha.

"Si dentro de las doce (12) horas siguientes no llegare la orden de detención con la indicación de la fecha del auto y del hecho punible que lo motivó, se pondrá en libertad al encarcelado bajo la responsabilidad del funcionario renuente. Si el director de la cárcel o quien haga sus veces no lo hiciere así, incurrirá en la responsabilidad penal a que haya lugar.

"Artículo 423. *Detención de los empleados oficiales.* En el mismo auto de detención contra empleado oficial, se solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo. Mientras se cumple la suspensión se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el imputado eluda la acción de la justicia.

"Si pasados cinco (5) días desde la fecha en que se solicite la suspensión ésta no se hubiere producido, se dispondrá la captura del imputado.

"Igualmente se procederá para hacer efectiva la setencia condenatoria.

"Artículo 424. *Establecimiento para cumplir la detención.* La detención preventiva a que se refieren las disposiciones anteriores, debe cumplirse en la respectiva cárcel del circuito o distrito y, en su defecto, en la cárcel municipal correspondiente. Ninguna persona podrá ser recluida en establecimiento para cumplimiento de pena, mientras no exista sentencia condenatoria ejecutoriada.

"Artículo 425. *Cárcel con las debidas seguridades.* Cuando en el lugar de la comisión del hecho punible no hubiere establecimiento de detención con las debidas seguridades para impedir la evasión del recluso y para la protección de su vida o integridad personal, el juez dispondrá el traslado del detenido a la cárcel más cercana, que reúna las condiciones expresadas.

"Artículo 426. *Lugar de detención para determinados empleados oficiales.* Los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público y Cuerpo Técnico de Policía Judicial, serán detenidos en establecimientos distintos a los carcelarios.

"Lo mismo podrá disponer el juez para los exfuncionarios de los organismos mencionados.

"Artículo 427. *Lugar de detención para miembros de los cuerpos armados.* Los miembros de los cuerpos armados cumplirán la medida de privación de la libertad en el cuartel de la unidad a que pertenezcan. A falta de ésta, en el respectivo comando donde se adelante la investigación. De lo resuelto se comunicará por escrito al superior jerárquico del procesado.

"El personal de prisiones cumplirá la detención preventiva en cárcel distinta al lugar donde hubiere prestado sus servicios.

"Artículo 428. *Lugar de detención para clérigos y religiosos.* Los clérigos y religiosos a quienes se refiere el artículo 20 de la Ley 20 de 1974, cumplirán la medida de privación de la libertad en sus respectivas casas parroquiales, en casa o convento de comunidades religiosas.

"Artículo 429. *Lugar de detención para menores de edad.* Los menores comprendidos entre los dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad, cumplirán la privación de su libertad en pabellones o establecimientos especiales.

"Artículo 430. *Traslado de la persona privada de la libertad.* En cualquier estado del proceso, el Ministerio de Justicia podrá ordenar el traslado de persona privada de libertad a lugar diferente de aquél en que esté detenido, cuando su estado de salud así lo requiera, previo dictamen de perito de Medicina Legal o, en su defecto, de médico oficial. En igual forma podrá proceder cuando corra peligro la integridad física del procesado.

"Artículo 431. *Cómputo de la detención preventiva en otro proceso penal.* Cuando simultáneamente se sigan dos o más procesos penales contra una misma persona, el tiempo de detención preventiva cumplido en uno de ellos y en el que se le hubiere absuelto o decretado cesación de procedimiento, se tendrá como parte de la pena cumplida en cualquiera de los otros procesos en que se le condene a pena privativa de la libertad.

"Artículo 432. *Suspensión de la detención preventiva.* La privación de la libertad se suspenderá en los siguientes casos:

"1. Cuando el procesado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años o menor de dieciocho (18) años, siempre que su personalidad y la naturaleza y modalidad del hecho punible hagan aconsejable la medida.

"2. Cuando a la procesada le falten menos de dos (2) meses para el parto o si no han transcurrido seis (6) meses desde la fecha en que dio a luz.

"3. Cuando el procesado sufriere grave enfermedad, previo dictamen de los médicos oficiales.

"En estos casos, el juez determinará si el sindicado debe permanecer en su domicilio, en clínica u hospital, en el lugar de trabajo o en el estudio. El beneficiado suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, el cual no podrá cambiar sin previa autorización y a presentarse al juzgado cuando fuere requerido.

"Estas obligaciones se garantizarán mediante fianza.

"Su incumplimiento dará lugar a la revocatoria de la medida y a la pérdida de la caución.

"Artículo 433. *Derechos del aprehendido.* Todo sindicado privado de su libertad tendrá derecho a recibir en el lugar de reclusión un tratamiento acorde con el respeto a todos los derechos humanos compatibles con su situación de encarcelamiento, como los de no ser víctima de tratos crueles, degradantes o inhumanos; a ser visitado por un médico oficial y en su defecto por un particular, cuando lo necesite; a tener

una adecuada alimentación, a que se le faciliten todos los medios y oportunidades de ocuparse en el trabajo y el estudio; a tener un intérprete de su lengua, si lo necesitare al momento de recibir notificación personal de toda providencia, todo lo cual se compendia en el respeto por su dignidad humana.

"Artículo 434. *Improcedencia de medida de aseguramiento.* No procede medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el procesado pudo haber actuado en cualquiera de las circunstancias excluyentes de antijuridicidad o de culpabilidad.

"Artículo 435. *Sustitución de medidas.* El juez, de oficio o a solicitud de parte, deberá sustituir la medida de aseguramiento que haya proferido, por la que corresponda, de conformidad con la prueba aportada.

"Artículo 436. *Revocación de medidas de aseguramiento.* En cualquier momento procesal, de oficio o a solicitud de parte, el juez revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen.

"Artículo 437. *Excepciones.* Las prerrogativas concedidas a los empleados oficiales en los anteriores capítulos, no se tendrán en cuenta cuando a juicio del juez, la aprehensión no afecte la buena marcha de la administración.

"Artículo 438. *Informe sobre medidas de aseguramiento.* Todos los jueces deben informar inmediatamente a la Dirección Seccional de Instrucción Criminal correspondiente, sobre las medidas de aseguramiento que profieran, sustituyan o revoquen.

CAPITULO III
Libertad del procesado

"Artículo 439. Causales de la libertad provisional. Además de lo establecido en otras disposiciones, el procesado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria para asegurar su eventual comparecencia al proceso y la ejecución de la sentencia, si hubiere lugar a ella:

"1. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados los requisitos establecidos para suspender condicionalmente la ejecución de la sentencia. En este caso la libertad no podrá negarse con base en que el detenido provisionalmente necesita tratamiento penitenciario.

"2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el procesado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por el delito que se le imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele.

"Se considerará que ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.

"La rebaja de pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción.

"La libertad provisional a que se refiere este numeral, será concedida por la autoridad que esté conociendo del proceso al momento de presentarse la causal aquí prevista.

"3. Cuando se dicte en primera instancia cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.

"4. Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de privación efectiva de libertad, no se hubiere calificado el mérito del sumario. Este término se ampliará a ciento ochenta (180) días cuando sean tres (3) o más los procesados contra quienes estuviere vigente auto de detención. Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.

"5. Cuando haya transcurrido más de un (1) año a partir de la ejecutoria de la resolución acusatoria sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública con jurado, o más de seis (6) meses si no se hubiere celebrado la respectiva audiencia sin jurado.

"No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, así ésta se encuentre suspendida por cualquier causa y cuando, habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuida al procesado o a su defensor.

"6. Cuando la infracción se hubiere realizado en exceso de las causales de justificación.

"7. En los delitos contra el patrimonio económico cuando el procesado, antes de dictarse sentencia, restituya el objeto material del delito o su valor e indemnice los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.

"8. En las eventualidades del inciso 1° del artículo 139 del Código Penal, siempre que la cesación del mal uso, la reparación de lo dañado o el reintegro de lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor, se haga antes de que se dicte sentencia de primera instancia.

"9. Cuando proferido por el jurado veredicto absolutorio, no fuere declarado contraevidente por el juez superior dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, o cuando el tribunal revoque el auto por el cual se declaró el veredicto contrario a la evidencia de los hechos.

"10. Cuando al calificar el mérito del sumario se decrete la reapertura de la investigación.

"Artículo 440. *Momento de la libertad bajo fianza.* La libertad provisional se hará efectiva después de otorgada la fianza y suscrita la diligencia de compromiso.

CAPITULO IV

Prohibición y revocación de la libertad provisional

"Artículo 441. *Prohibiciones de libertad provisional.* No tendrán derecho a la libertad provisional con fundamento en el numeral 1° del artículo 439 de este Código:

"1. Los procesados a quienes se hubieren dictado auto de detención preventiva conforme a lo previsto en el numeral 5° del artículo 421 de este Código, antes de la calificación del mérito del sumario.

"2. Cuando se trate de homicidio o lesiones personales en accidentes de tránsito y se compruebe que el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica o si el agente abandona, sin justa causa, el lugar de la comisión de hecho.

"3. Cuando aparezca demostrado que en contra del sindicado se ha proferido en otro proceso medida de aseguramiento de detención o caución por delito doloso o preterintencional, que se encuentre vigente.

"4. En todos aquellos delitos que tengan señalada una pena privativa de la libertad cuyo mínimo sea de tres (3) años y además, en los siguientes delitos:

"– Peculado por apropiación (artículo 133);

"– Concusión (artículo 140);

"– Cohecho propio (artículo 141);

"– Enriquecimiento ilícito (artículo 148);

"– Prevaricato por acción (artículo 149);

"– Receptación (artículo 177);

"– Fuga de presos (artículo 178);

"– Favorecimiento de la fuga (artículo 179);

"– Fraude procesal (artículo 182);

"– Incendio (artículo 189);

"– Daños en obras de defensa común (artículo 190);

"– Provocación de inundación o derrumbe (artículo 191);

"– Siniestro o daño de nave (artículo 193);

"– Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos (artículo 197);

"– Fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones (artículo 201);

"– Fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas (artículo 202);

"– Falsificación de moneda nacional o extranjera (artículo 207);

"– Tráfico de moneda falsificada (artículo 208);

"– Emisiones ilegales (artículo 209);

"– Acaparamiento (artículo 229);

"– Especulación (artículo 230);

"– Pánico económico (artículo 232);

"– Ilícita explotación comercial (artículo 233);

"– Privación ilegal de libertad (artículo 272);

"– Constreñimiento para delinquir (artículo 277);

"– Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar (artículo 278);

"– Tortura (artículo 279);

"– Acceso carnal abusivo con menor de catorce años (artículo 303);

"– Acceso carnal abusivo con incapaz de resistir (artículo 304);

"– Lesiones con perturbación funcional (artículo 334);

"– Lesiones con perturbación síquica (artículo 335);

"– Hurto calificado (artículo 350);

"– Hurto agravado (artículo 351);

"– Extorsión (artículo 355), y los delitos contemplados en el Decreto número 2920 de 1982.

"Parágrafo. Los procesados por lesiones culposas en los casos de los artículos 333, 334 y 335 del Código Penal tienen derecho a la libertad provisional, excepto en los previstos en el numeral 2 de este artículo.

"Artículo 442. *Revocación de la libertad provisional.* En cualquier momento se podrá revocar la libertad provisional, de oficio, a solicitud del Ministerio Público, cuando el procesado violare cualquiera de las obligaciones contraídas en la diligencia que imponga la caución.

"En este caso, no podrá otorgársele nuevamente en el mismo asunto, salvo que apareciere alguna de las situaciones previstas en los numerales 2, 3 y 10 del artículo 439 de este Código.

CAPITULO V
Disposiciones comunes

"Artículo 443. *Obligaciones del procesado.* En los casos de conminación, caución y libertad provisional, se le impondrán las siguientes obligaciones:

"1. Presentarse cuando el juez lo solicite.

"2. Observar buena conducta individual familiar y social.

"3. Informar todo cambio de residencia.

"Artículo 444. *Cancelación de las cauciones.* La caución se cancelará al cumplir el procesado las obligaciones impuestas o cuando se revoque la medida que la originó, o cuando termine el proceso por causa legal. Cancelada la caución se devolverá la prenda.

"Artículo 445. *Pago de multas.* Las cauciones que deben hacerse efectivas y las multas que se impongan en le proceso penal se depositarán en dinero a órdenes de los despachos de la Rama Jurisdiccional, en el Banco Popular de la localidad del depositante, y en el lugar donde no exista oficina del Banco Popular se hará en las oficinas de la Caja Agraria del respectivo municipio, dentro del plazo fijado por el juez.

"Artículo 446. *Destino de las obligaciones y multas prendarias.* El valor de las cauciones y multas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, ingresen al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, se destinarán al sostenimiento del servicio de Defensoría Pública.

"Artículo 447. *Procedimiento para el cobro de las multas.* El cobro de las multas se hará por el procedimiento previsto en el artículo 418 de este Código.

CAPITULO VI
Medidas de aseguramiento y libertad para inimputables

"Artículo 448. *Internación preventiva.* Cuando estén demostrados los presupuestos probatorios y formales para dictar medida de aseguramiento, el juez ordenará la internación preventiva del inimputable.

"Artículo 449. *Lugar de internación.* La internación se cumplirá en los establecimientos mencionados en los artículos 94 y 95, inciso 1° del Código Penal.

"Artículo 450. *Internamiento en establecimientos privados.* Cuando los peritos oficiales lo aconsejen, el juez podrá disponer que el inimputable sea trasladado a establecimiento adecuado, siempre y cuando la persona de la cual dependa se comprometa a ejercer la vigilancia correspondiente y a rendir los informes que solicite el funcionario.

"Artículo 451. *Libertad vigilada para inimputables por trastorno mental permanente.* En los casos de trastorno mental permanente, cumplido el tiempo mínimo de medida de seguridad, podrá otorgarse libertad vigilada cuando el perito médico oficial aconseje dicha medida.

"En este caso se advertirá a los familiares o personas de quien dependa el liberado, velar por el cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Código Penal.

"En cualquier momento el juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá revocar la libertad vigilada y disponer nuevamente el internamiento cuando el perito médico oficial lo aconseje.

"Artículo 452. *Cómputo de detención.* El tiempo que haya permanecido el inimputable detenido en establecimiento carcelario, se le computará como parte del tiempo requerido para el cumplimiento y suspensión de la medida de seguridad.

"Artículo 453. *Medida de aseguramiento para inimputables por trastorno mental transitorio sin secuelas.* Cuando se trate de la situación prevista en el artículo 33, inciso 2 del Código Penal, el juez proferirá medida de aseguramiento de conminación, siempre y cuando concurran los presupuestos probatorios y formales para tomarla.

CAPITULO VII
Habeas Corpus

"Artículo 454. *Consagración.* El Habeas Corpus es un derecho que procede en amparo de la libertad personal contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad que tienda a restringirla.

"Artículo 455. *Procedencia.* Cuando una persona sea capturada con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilícitamente la privación de su libertad, puede invocar el derecho de Habeas Corpus. La petición se tramitará inmediatamente según el procedimiento que a continuación se establece.

"Artículo 456. *Funcionarios competentes.* El derecho de Habeas Corpus puede invocarse ante cualquier juez penal del lugar donde se encuentre el aprehendido, o ante el juez penal del municipio más próximo cuando la captura ha sido ordenada por el único juez penal que labora en el municipio. De la misma manera se procederá durante la vacancia judicial.

"Artículo 457. *Recusación improcedente.* En ningún caso podrá ser recusado el funcionario que tramita el Habeas Corpus.

"Artículo 458. *Personas facultadas para invocarlo.* La petición de Habeas Corpus podrá ser presentada por el mismo capturado, por cualquier otra persona en su nombre sin necesidad de poder para tal efecto, o por el Ministerio Público.

"Artículo 459. *Contenido de la petición.* La petición de Habeas Corpus deberá contener el nombre de la persona en cuyo favor se interviene, las razones por las cuales considera que con la privación de su libertad se está violando la Constitución o la ley, la fecha de reclusión y lugar donde se encuentre el capturado, y en lo posible el nombre del funcionario que ha ordenado la captura y el cargo que desempeña.

"Además, bajo la gravedad del juramento que se considera prestado por la presentación de la petición, deberá afirmarse que ningún otro juez penal ha asumido el conocimiento de la solicitud de Habeas Corpus o decidido sobre la misma.

"Artículo 460. *Trámite.* Recibida la solicitud, el funcionario decretará inmediatamente una inspección a las diligencias que pudieren existir en el asunto que dio lugar a la petición, que deberá practicarse a más tardar dentro de las doce (12) horas siguientes.

"En ningún caso se someterá a reparto la petición y conocerá de ella privativamente el funcionario ante quien se formule.

"Artículo 461. *Informe sobre captura.* Si la autoridad que hubiere decretado la captura no fuere del mismo lugar del juez que tramita la petición del Habeas Corpus y éste no pudiere trasladarse a la sede de aquélla, solicitará por el medio más rápido,

información completa sobre la situación que dio origen a la petición. A esta solicitud se dará respuesta inmediata, remitiendo copia de las diligencias adelantadas contra el capturado.

"Se podrá solicitar del respectivo Director de la cárcel una información urgente sobre todo lo concerniente a la captura.

"El juez podrá interrogar directamente a la persona capturada.

"Artículo 462. *Decisión.* Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, el juez ordenará la libertad de la persona capturada a más tardar dentro de las cuatro (4) horas siguientes, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.

"Salvo el término de la distancia, en ningún caso el trámite y la decisión sobre el Habeas Corpus pueden exceder de cuarenta y ocho (48) horas.

"Artículo 463. *Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad.* La persona capturada con violación de las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de su libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del derecho de Habeas Corpus.

"Artículo 464. *Improcedencia del Habeas Corpus.* En los casos de prolongación ilícita de privación de libertad no procederá el Habeas Corpus cuando, con anterioridad a la petición, se haya proferido auto de detención o sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario.

"Artículo 465. *Días y horas hábiles.* Recibida la petición de Habeas Corpus, en días y horas de despacho judicial, la actuación que corresponda no podrá suspenderse o aplazarse por la interposición de días festivos o de vacancia judicial.

"Artículo 466. *Iniciación de proceso penal.* Reconocido el Habeas Corpus, el juez compulsará copias para que el funcionario competente inicie las investigaciones a que haya lugar.

TITULO VI
Calificación

"Artículo 467. *Funcionarios competentes para calificar.* En los procesos por delitos de competencia de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores y de los Juzgados Municipales, el mérito del sumario será calificado por la Corporación o juez municipal correspondiente.

"En los procesos por delitos de competencia de los jueces de circuito y superiores, el mérito del sumario será calificado por el juez de instrucción criminal.

"Artículo 468. *Clausura de la investigación.* Vencidos los términos previstos en el artículo 354, o perfeccionada la investigación aun antes de dicho vencimiento, el juez o Magistrado, mediante auto de sustanciación contra el cual únicamente

procede el recurso de reposición, cerrará la investigación y ordenará que el proceso quede en secretaría a disposición de las partes por el término de ocho (8) días para alegar.

"Artículo 469. *Formas de calificación.* Vencido el término de traslado el funcionario dispondrá de cinco (5) días para calificar el mérito del sumario, profiriendo resolución de acusación, cesación de procedimiento o reapertura de la investigación.

"Artículo 470. *Resolución de acusación.* El funcionario dictará resolución de acusación cuando esté demostrada la tipicidad del hecho y exista un testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad o indicios graves de responsabilidad.

"Artículo 471. *Requisitos formales de la resolución de acusación.* La resolución de acusación se hará por auto interlocutorio contra el cual proceden los recursos ordinarios y contendrá:

"1. La narración sucinta de los hechos investigados, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los especifiquen.

"2. La indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la investigación.

"3. La calificación jurídica provisional, con señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal.

"4. Respuesta a los alegatos de las partes.

"Artículo 472. *Notificación de la resolución de acusación al imputado.* La resolución de acusación debe notificarse personalmente al procesado que estuviere detenido. Si estuviere en libertad, se citará a su última dirección conocida en el proceso por el medio más eficaz. Si transcurridos ocho (8) días desde la fecha de la comunicación no comparece, la notificación se hará personalmente al defensor y con él continuará el proceso. En caso de excusa válida se nombrará un defensor de oficio.

"Artículo 473. *Reapertura.* Cuando no exista prueba para ordenar cesación de procedimiento o para formular resolución de acusación, el juez ordenará reapertura de la investigación por término que no podrá exceder de sesenta (60) días y señalará las pruebas que deban practicarse.

"Vencido este término, cerrará la investigación, correrá traslado a las partes, luego del cual, decretará cesación de procedimiento, si no hubiere mérito para formular resolución de acusación.

TITULO VII

CAPITULO UNICO

Procedimiento abreviado

"Artículo 474. *Casos que se tramitan por este procedimiento.* El procedimiento establecido en este capítulo se aplicará cuando el imputado sea capturado en flagrancia, o exista confesión simple de su parte.

"Si fueren varios los imputados o los delitos, sólo se aplicará este procedimiento cuando respecto de todos ellos concurriere cualquiera de las circunstancias previstas en el inciso anterior.

"Artículo 475. *Recepción de indagatoria.* Dentro de los términos señalados en este Código se oirá en indagatoria a la persona capturada y se resolverá su situación jurídica.

"Artículo 476. *Fijación de procedimiento.* Recibida la indagatoria el juez determinará si se trata de situación de flagrancia o confesión simple, en cuyo caso dictará inmediatamente auto interlocutorio que así lo declare. Contra esta providencia proceden los recursos ordinarios.

"Artículo 477. *Definición de situación jurídica.* Al resolver situación jurídica, el juez ordenará las pruebas que deban practicarse en audiencia pública. Las partes podrán pedirlas hasta el día de la ejecutoria formal de esta providencia.

"Cuando no sea posible practicarlas en audiencia pública, se adelantarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria formal del auto.

"En firme el auto o vencido el término anterior, según el caso, el juez fijará fecha para la celebración de audiencia que se realizará dentro de los ocho (8) días siguientes.

"Artículo 478. *Audiencia pública.* Llegado el día y la hora señalados, el juez instalará la audiencia pública y leerá por secretaría la providencia que resolvió la situación jurídica.

"Concluida la práctica de pruebas, oirá a las partes en la forma prevista en el artículo 496 de este Código.

"Artículo 479. *Sentencia.* La sentencia se dictará terminadas las intervenciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 500, pero los términos allí previstos se reducirán a la mitad.

"Artículo 480. *Procedimiento a seguir cuando la competencia esté atribuida a juez superior o de circuito.* Cuando se trate de delitos cuya competencia esté atribuida a juez superior o de circuito, el juez de instrucción criminal al proferir medida de aseguramiento, enviará el expediente al respectivo juez, solicitándole citación a audiencia pública. El juez de conocimiento seguirá el procedimiento señalado en los artículos anteriores.

"Artículo 481. *Conservación del procedimiento.* Si el procedimiento se ha venido adelantando por la vía ordinaria y se produjere, en ampliación de indagatoria, confesión simple, no habrá lugar al cambio de procedimiento.

"Artículo 482. *Cambio de procedimiento.* Desvirtuados los supuestos que dieron origen al procedimiento abreviado, se aplicará el ordinario. La actuación anterior tendrá validez.

"Artículo 483. *Libertad provisional.* El procesado tendrá derecho a la libertad provisional cuando no se haya dictado sentencia dentro de los sesenta (60) días siguientes a la definición de su situación jurídica.

"Artículo 484. *Aplicación de normas sobre procedimiento ordinario.* Las normas sobre procedimiento ordinario se aplicarán, en lo no previsto para el abreviado, siempre y cuando no exista incompatibilidad.

"Artículo 485. *Excepciones a este procedimiento.* El procedimiento abreviado no se aplicará, cuando el delito sea de competencia de los jueces superiores con intervención de jurado o se trate de inimputable.

LIBRO TERCERO
Juicio
TITULO I
Disposiciones generales

"Artículo 486. *Auto de control de legalidad.* Recibida la resolución de acusación, el juez de conocimiento revisará, dentro de los tres (3) días siguientes, la actuación procesal.

"En caso de considerar que no está afectada por alguna causal de nulidad, así lo declarará por auto interlocutorio. Una vez en firme sólo podrán plantearse nulidades que no hayan sido alegadas en la investigación.

"Artículo 487. *Etapa de juzgamiento.* Con la ejecutoria del auto sobre control de legalidad o de la resolución de acusación, según el caso, se inicia la etapa de juzgamiento.

"Artículo 488. *Fijación de competencia.* Si al examinar la legalidad de lo actuado, el juez encontrare que no tiene competencia para el juzgamiento, lo enviará al que corresponda.

"Artículo 489. *Recurso contra las decisiones anteriores.* El auto mediante el cual el juez de conocimiento determina la legalidad del proceso y su competencia, es susceptible de los recursos ordinarios.

"Si el juez invalida el proceso o se declara incompetente, el recurso se concederá en el efecto suspensivo.

"Artículo 490. *Apertura a prueba.* Iniciada la etapa de juzgamiento, el proceso quedará en secretaría a disposición de los sujetos procesales, por el término de tres (3) días, dentro de los cuales podrán pedir las pruebas pertinentes y conducentes.

"Artículo 491. *Requisitos de la solicitud.* Las pruebas deberán pedirse con indicación clara y precisa de lo que se quiere acreditar con cada una de ellas, así como de su conducencia, por la relación que tengan con los hechos materia del debate.

"Artículo 492. *Decreto y práctica de pruebas.* Vencido el término de que trata el artículo 490, el juez dispondrá de dos (2) días para decretar la práctica de las pruebas que fueren admisibles y de aquéllas que, solicitadas en la etapa de investigación, no se hubieren practicado y se estimaren necesarias. Las pruebas así ordenadas se practicarán en la audiencia pública.

"De oficio, el juez podrá decretar las pruebas que considere necesarias.

"Si las pruebas no se pudiesen practicar en la audiencia pública porque su realización debe hacerse fuera de la sede del juzgado, o porque requieran de estudios previos, se practicarán en el término de quince (15) días, más el de la distancia, en su caso.

"Artículo 493. *Señalamiento de día y hora para la audiencia.* En firme el auto por el cual se ordena o niega la práctica de pruebas, o transcurrido el término a que se refiere el inciso final del artículo anterior, el juez señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia pública, la que se realizará dentro de los diez (10) días siguientes.

"Artículo 494. *Celebración de la audiencia.* Llegado el día y la hora para la vista pública, se dará lectura a la resolución de acusación y a las demás piezas del proceso que soliciten las partes o que el juez considere necesarias.

"Acto seguido, el juez interrogará personalmente al procesado acerca del hecho y sobre todo aquello que conduzca a revelar su personalidad. Los sujetos procesales podrán interrogar al procesado, e inmediatamente se procederá a la práctica de las pruebas, de lo cual se dejará constancia en acta, pudiendo utilizarse los medios mecánicos autorizados en este Código.

"Artículo 495. *Medidas respecto de testigos.* Los testimonios no pueden ser recibidos en presencia de quienes aún no hubieren declarado en la audiencia. Con este fin el juez puede ordenar que se retiren de la sala las personas que no hubieren rendido testimonio y tomará las medidas necesarias para evitar que reciban informes al respecto.

"Artículo 496. *Intervención de las partes en audiencia.* Concluida la práctica de las pruebas, el juez concederá por una sola vez la palabra en el siguiente orden: fiscal, apoderado de la parte civil, procesado y defensor, quienes podrán presentar una vez terminada su intervención, resumen escrito de las razones aducidas y de las peticiones hechas.

"En la audiencia pública no podrá actuar un número mayor de apoderados de la parte civil que el de defensores. Si para ello no se pusieren de acuerdo los interesados, corresponderá el derecho a quienes primero hubieren sido reconocidos como tales en el proceso penal.

"El procesado tiene derecho a nombrar un vocero cuando personalmente no quiera hacer uso de la palabra. El vocero, deberá ser abogado inscrito, salvo las excepciones legales.

"Artículo 497. *Asistencia obligatoria.* Será obligatoria la asistencia del defensor, del Ministerio Público y del procesado, si se encuentra privado de la libertad.

"Artículo 498. *Dirección de la audiencia.* Corresponde al juez la dirección de la audiencia pública. En el curso de ella tendrá amplias facultades para tomar las determinaciones que considere necesarias con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos y evitar que las partes traten temas inconducentes a los intereses que

representan o que prolonguen innecesariamente sus intervenciones con perjuicio de la administración de justicia. Si es el caso amonestará al infractor y le limitará prudencialmente el término de su intervención.

"Así mismo, podrá ordenar el retiro del recinto de quienes alteren el desarrollo de la diligencia y si considera conveniente, el arresto inconmutable hasta por cuarenta y ocho (48) horas, decisión contra la cual no procede recurso alguno.

"Artículo 499. *Decisiones diferidas.* A menos que se trate de la libertad, de la detención del acusado, o de la práctica de pruebas, el juez podrá diferir para el momento de dictar sentencia, las decisiones que deba tomar respecto de las peticiones hechas por las partes en el curso del juicio, cuando éstas no afecten sustancialmente el trámite. La determinación de diferir la tomará mediante auto de sustanciación.

"Artículo 500. *Sentencia.* El juez dictará sentencia dentro de la misma audiencia. Si lo estimare necesario, decretará un receso hasta por seis (6) horas hábiles para prepararla. En este caso, la notificación se hará en estrados.

"Si no se dictare la sentencia en la oportunidad prevista en el inciso anterior, lo hará dentro de los diez (10) días siguientes a la conclusión de la audiencia.

"Artículo 501. *Variación de la calificación provisional.* Cuando de las diligencias practicadas en el término probatorio del juicio o en la audiencia pública, varíe la adecuación típica del hecho punible, dentro del correspondiente Capítulo del Código Penal, el juez dictará el fallo con base en dicha variación.

"En este caso la audiencia se suspenderá por el término de dos (2) días para que las partes soliciten las pruebas que tengan relación con la nueva adecuación.

"La anterior determinación se tomará por auto de sustanciación motivado, una vez que se hayan practicado las pruebas.

"Artículo 502. *Cambio de competencia.* Cuando de la prueba aportada en el juicio se concluya que el juzgamiento de los hechos punibles o de las personas vinculadas corresponde a otro juez, se le enviará el expediente. En caso de que éste acepte la competencia, aplicará el trámite correspondiente.

"Artículo 503. *Cesación de procedimiento en la etapa de juzgamiento.* De oficio o a solicitud de parte, el juez ordenará la cesación del procedimiento cuando esté demostrada cualquiera de las causales objetivas de improseguibilidad.

TITULO II

CAPITULO I

Juicio con intervención de jurado de conciencia

"Artículo 504. *Sorteo de jurados.* Vencido el término probatorio a que se refiere el artículo 492, el juez, dentro de los dos (2) días siguientes señalará día y hora para la celebración de sorteo de jurados, el cual deberá efectuarse dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto.

"Artículo 505. *Audiencia ante el jurado de conciencia.* Cuando se trate de los delitos de homicidio, rebelión o sedición y los conexos con éstos, el juez superior al

que haya correspondido el proceso, notificados todos los jurados, dentro de los tres (3) días siguientes, señalará día y hora para la celebración de la audiencia, la que se llevará a cabo dentro de los veinte (20) días siguientes. Desde el momento de tal notificación el expediente quedará en la secretaría a disposición de las partes para su estudio.

"Artículo 506. *Formación de listas.* Anualmente, cada juez superior elaborará una lista de jurados de conciencia, en número que determinará previamente la Sala Penal del respectivo Tribunal Superior y la enviará a ésta en el mes de octubre.

"El primero de diciembre, la Sala Penal del Tribunal Superior respectivo seleccionará por sorteo, de entre todas las listas enviadas a ella, la correspondiente para cada uno de los juzgados y el Presidente la enviará inmediatamente.

"Artículo 507. *Requisitos para ser jurado.* Para ser jurado se necesita ser ciudadano colombiano, persona de reconocida y notoria honorabilidad, poseer por lo menos una cultura media y desempeñar una profesión u oficio de aquellos que exijan capacidades intelectuales, y de preferencia a quienes no tengan formación jurídica.

"Artículo 508. *Quiénes no pueden ser jurados.* En ningún caso podrán ser jurados las siguientes personas: el Presidente de la República, los funcionarios de cualquier categoría de la Rama Jurisdiccional; los Ministros del Despacho; los Gobernadores y los Alcaldes; los miembros del servicio activo de las Fuerzas Militares y de la Policía; los miembros del Clero Católico; los Senadores y Representantes; el Contralor General de la República; el Registrador Nacional del Estado Civil; los Jefes de Departamentos Administrativos; los funcionarios del Ministerio Público y los del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; los que padecieren anomalía psíquica o se hallaren en estado de interdicción; los que hubieren sufrido una condena penal, y los que no supieren leer ni escribir.

"Artículo 509. *Obligatoriedad del cargo.* El cargo de jurado es de forzosa aceptación y su duración será de un (1) año;

"Artículo 510. *Excusas.* Para no servir el cargo de jurado, hay dos (2) clases de excusas: absolutas y relativas. Las primeras se alegarán ante la Sala Penal de los respectivos Tribunales Superiores; y las segundas, ante el respectivo juzgado.

"Artículo 511. *Excusa absoluta.* Hay excusa absoluta cuando se pruebe tener más de sesenta (60) años o se padezca de enfermedad permanente, ya sea continua o episódica, que impida desempeñar el cargo.

"Artículo 512. *Excusa relativa.* Constituye motivo de excusa relativa para ser jurado, haber desempeñado el cargo en el mismo mes, o sufrir, al tiempo de la notificación, enfermedad que imposibilite su ejercicio.

"Artículo 513. *Impedimento especial para ser jurado.* No podrán ser jurados en determinada causa: los que hubieren formado parte de otro jurado en que se haya debatido el mismo proceso; los parientes dentro del sexto grado de consanguinidad o tercero de afinidad de cualquiera de las personas que intervinieren en la audiencia; los que hubieren sido jueces, fiscales, defensores o voceros del procesado o de la parte civil, o los que en cualquier forma tuvieren interés directo o indirecto en la resolu-

ción del asunto; los amigos íntimos o los enemigos notorios del procesado, de su defensor o su vocero, del fiscal o del apoderado de la parte civil y los que hubieren sido testigos o peritos en el mismo proceso.

"No podrá haber en un jurado dos o más individuos que sean, uno respecto del otro, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, cónyuge, compañero o compañera permanente.

"Artículo 514. *Composición y sorteo de jurados.* El jurado se compondrá de tres (3) personas, designadas por sorteo de la lista enviada por el Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior respectivo.

"Llegado el día y la hora del sorteo se procederá de la siguiente manera para cada asunto: el juez pondrá de presente a las personas que hayan concurrido la lista de los jurados y las fichas correspondientes, numeradas a partir de la unidad. En seguida ordenará al secretario que las deposite en una urna para que sean revueltas por el fiscal. Este procederá a extraer seis (6) fichas una a una, cuyo número será leído en voz alta por el secretario.

"Serán jurados principales aquéllos cuyos nombres correspondan a las tres (3) primeras fichas extraídas, y suplentes numéricos aquéllos cuyos nombres correspondan a las tres (3) últimas.

"Del acta de sorteo de jurado para cada juicio, se sacará copia en un libro especial llevado al efecto.

"Artículo 515. *Sorteo parcial.* Dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración del sorteo, las partes, hayan concurrido o no al mismo, tendrán derecho de pedir el reemplazo de los jurados que se hallaren legalmente impedidos. El juez, si encontrare justificada la petición, ordenará que mediante sorteo parcial sean reemplazados. Igualmente, dentro de los tres (3) días siguientes al sorteo, el juez podrá decretar de oficio el reemplazo de los jurados que estén impedidos legalmente.

"En todo caso, el juez debe tener presente como norma invariable, que la ley exige la absoluta imparcialidad de los jueces de hecho y que es necesario evitar que haya en ellos cualquier motivo que perturbe la imparcialidad de su conciencia.

"Artículo 516. *Manifestación del impedimento legal.* Cuando alguno de los jurados sorteados tuviere impedimento legal para desempeñar el cargo, deberá manifestarlo en el acto mismo de la notificación o de su elección; pero la prueba podrá ser presentada dentro de los tres (3) días siguientes.

"Artículo 517. *Citación para sorteo parcial.* En el mismo auto en que el juez ordene el reemplazo del jurado o jurados impedidos, señalará día y hora para el sorteo parcial, el cual deberá llevarse a efecto el día siguiente.

"Artículo 518. *Procedimiento del sorteo parcial.* Para el sorteo parcial se procederá en la forma indicada en el artículo 514, extrayendo únicamente las fichas correspondientes a los jurados que se traten de reemplazar.

"Artículo 519. *Reconocimiento de jurados y notificación.* Agregada al expediente el acta, el juez ordenará tener como jurados a los seis (6) ciudadanos sorteados, y dispondrá la notificación personal de dicha designación.

"En el acto de notificación se les hará entrega de una copia de la resolución de acusación.

"Artículo 520. *Sorteo parcial por ausencia de jurado.* Si practicadas las diligencias necesarias para la notificación de la designación, de lo cual quedará constancia en el expediente, no se encontrare alguno de los jurados, el juez ordenará un sorteo parcial para reemplazarlo.

"Artículo 521. *Sanción al jurado renuente.* Cuando la persona designada como jurado se ausentare para no ser notificada, o en cualquier otra forma tratare de rehuir la notificación, el juez, previo el informe correspondiente del secretario, la declarará renuente y le impondrá la sanción establecida en el artículo 418.

"Artículo 522. *Sanción por inasistencia.* El fiscal, el defensor o el jurado que dejaren de concurrir a la audiencia pública incurrirán en multa de cinco (5) salarios mensuales mínimos legales a favor del Estado y con destino a la Defensoría Pública.

"El juez aplicará la sanción en resolución motivada, contra la cual sólo procede el recurso de reposición, y una vez ejecutoriada oficiará a la Administración de Hacienda respectiva, para que dicha suma sea cobrada por los procedimientos legales del Ministerio de Hacienda y trasladada inmediatamente a la entidad encargada de manejar los fondos de la Defensoría Pública.

"Copia de la resolución se enviará a la Defensoría Pública.

"Artículo 523. *Reemplazo del jurado en la audiencia.* Llegado el día y la hora de la celebración de la audiencia, deberán comparecer los seis (6) jurados sorteados. Si faltare uno principal, se reemplazará por el suplente siguiendo el orden señalado en el acta del sorteo.

"El jurado con el cual se inicie la audiencia continuará hasta la terminación de ella, salvo que ocurriere la muerte o le sobrevenga enfermedad grave que imposibilite su presencia, antes de que inicie el debate oral, en cuyo evento uno de los restantes sorteados lo reemplazará. Si la muerte o enfermedad se produjere cuando se hubiere adelantado el debate oral, se llamará como jurado a los tres restantes sorteados y con ellos se realizará la audiencia.

"Artículo 524. *Condiciones del local para la audiencia.* La audiencia pública con intervención del jurado se verificará en una sala decorosamente arreglada, la cual deberá estar dotada de tribunas separadas par el juez de derecho, los jurados, el apoderado de la parte civil, los defensores, el secretario y los procesados.

"Artículo 525. *Ubicación del público en la audiencia.* El sitio destinado a las personas enumeradas en el artículo anterior, estará separado del reservado al público; por ningún motivo se permitirá a él la entrada de otras personas, a no ser que se tratare de aquéllas que hubieren sido citadas para diligencias referentes a la audiencia misma, caso en el cual sólo podrán permanecer por el tiempo indispensable.

"Artículo 526. *Juramento.* Reunido el jurado, puestos de pie todos los concurrentes, el juez exigirá juramento a los miembros de aquél, con la siguiente fórmula: '¿Juráis y prometéis delante de Dios y de los hombres examinar con la más escrupulosa atención tanto los cargos como la defensa que va a hacerse al acusado; no traicionar ni los intereses de éste, ni los de la sociedad que lo juzga; no escuchar en el desempeño de vuestra misión ni el odio, ni el temor, ni el afecto; decidir con la imparcialidad y firmeza que corresponde a todo varón honrado, sin atender voz distinta de la de vuestra personal conciencia y no hacerlo jamás si la convicción íntima sobre los hechos respecto de los cuales se interroga; no comunicaros con nadie sobre la causa sometida a vuestro veredicto, y no olvidar que la sociedad os ha confiado la más sagrada de las misiones y la de mayores responsabilidades presentes y futuras, cual es la de administrar justicia entre los hombres?'.

"Cada uno de los jurados responderá en voz clara: 'Sí lo juro'.

"Artículo 527. *Prohibición a los jurados.* Desde el momento de ser notificados de la designación, aun cuando la audiencia ya hubiere concluido, los jurados no podrán tener conversación de ninguna naturaleza con persona alguna sobre el juicio en que les correspondiere o hubiere correspondido intervenir como jueces de conciencia. La violación de lo anterior lo hará incurrir en la responsabilidad penal correspondiente.

"Artículo 528. *Límite a la interrupción de la audiencia.* La audiencia en los juicios en que interviene el jurado, no podrá interrumpirse por lapsos mayores de dos (2) días.

"Artículo 529. *Cuestionario al jurado.* El cuestionario que el juez someterá en sendas copias al jurado, al terminar el debate oral, versará exclusivamente sobre la responsabilidad que en los hechos tenga el acusado, se formulará así: El acusado N. N. es responsable, 'sí' o 'no' de los hechos (aquí se determinará el hecho o hechos materia de la causa, con indicación de las circunstancias objetivas del lugar, tiempo y modo).

"Artículo 530. *Formulación separada de cuestionarios.* Cuando sean varios los delitos por los cuales se hubiere proferido resolución acusatoria contra un mismo procesado, se formularán separadamente los cuestionarios sobre cada uno de aquéllos, como si se tratare de acusados distintos. Cuando el delito sea el mismo y varios los sindicados, también se propondrán separadamente los cuestionarios respecto de cada uno de ellos.

"Artículo 531. *Decisión del jurado.* Terminado el debate oral, el juez exhortará a los jurados acerca de la gravedad del juramento que prestaron y los separará para que contesten el cuestionario o cuestinarios respectivos, que se les entregará inmediatamente a fin de que emitan su veredicto.

"Cada uno de los jurados deberá contestar los cuestionarios que le hayan sido entregados con un 'si' o un 'no' exclusivamente. Cualquier agregado a la respuesta se entenderá como no escrito.

"La decisión de la mayoría constituye el veredicto. El escrutinio de la decisión constará en acta que suscribirán inmediatamente el juez, los jurados y el secretario.

"Artículo 532. *Contraevidencia del veredicto.* Si de autos apareciere que el veredicto es claramente contrario a la evidencia de los hechos, así lo declarará el juez mediante auto interlocutorio.

"Ejecutoriado dicho auto, se convocará inmediatamente un nuevo jurado.

"El veredicto del segundo jurado es definitivo.

"Artículo 533. *Concordancia de la sentencia con el veredicto.* En los procesos con intervención del jurado, el juez dictará la sentencia de acuerdo con el veredicto, con la resolución de acusación, con las pruebas aportadas en el juicio y con el debate oral de la audiencia pública.

"Podrá, por tanto, variar la denominación del delito dentro del género del capítulo correspondiente del Código Penal y declarar cualquier otra circunstancia modificadora de la culpabilidad y de la punibilidad. En todo caso se consignarán con claridad las razones que el juez ha tenido para acoger o rechazar los planteamientos del debate oral.

"Artículo 534. *Decisión del superior sobre veredicto.* Si fuere apelado el auto que declara la contraevidencia, y el Tribunal Superior lo confirmare, el juez convocará nuevo jurado. En caso contrario ordenará devolver el expediente para que se dicte sentencia de acuerdo con el veredicto.

TITULO III

CAPITULO UNICO

Trámite en segunda instancia

"Artículo 535. *Trámite en segunda instancia.* Repartido el proceso, se dará traslado al fiscal por el término de cinco (5) días, después de los cuales si no hubiere emitido concepto estará obligado a devolverle inmediatamente al despacho de origen en donde se fijará en lista por cinco (5) días, para que las partes presenten sus alegatos. Vencido éste, el juez tendrá diez (10) días para decidir. Si se tratare de juez colegiado, el magistrado sustanciador tendrá diez (10) días para presentar proyecto y la Sala dispondrá del mismo término para su estudio y decisión. El término será de quince (15) días en uno y otro caso si se tratare de sentencia.

"Las apelaciones que se surtan en la etapa de investigación por delitos cuyo conocimiento corresponde en segunda instancia a los tribunales, se decidirán por la Sala respectiva, la cual quedará impedida para conocer en ese mismo proceso de cualquier providencia en la etapa de juzgamiento.

"Cuando se trate de tribunal con Sala única, se aplicará lo dispuesto en el artículo 110.

"En igual forma se procederá si se tratare de consulta.

"Artículo 536. *Apelación contra las providencias que decidan sobre la detención o libertad del procesado.* La apelación contra las providencias que decidan sobre la detención o libertad del procesado, salvo cuando la primera se decrete en la misma resolución de acusación, se tramitará así:

"Interpuesto el recurso se concederá a más tardar al día siguiente de la ejecutoria formal del auto impugnado y en el acto se enviarán los originales al superior. El reparto, cuando hubiere lugar a él, se verificará el mismo día del recibo del expediente, tanto al juez o magistrado como al Ministerio Público. Efectuado el reparto se pondrá el expediente en la Secretaría a disposición común de las partes por tres (3) días, vencidos los cuales se correrá traslado al fiscal por el mismo término. El superior resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes.

"Los autos que se dicten para conceder y tramitar este recurso no se notificarán y serán de inmediato cumplimiento.

"Artículo 537. *Segunda instancia en los procesos abreviados.* La segunda instancia para los procedimientos abreviados, se tramitará y decidirá en la forma señalada en el artículo anterior.

"Artículo 538. *Competencia del superior.* El recurso de apelación otorga competencia al juez o Tribunal de segunda instancia para decidir sin limitación alguna, sobre la providencia impugnada.

TITULO IV
Juicios especiales
CAPITULO I
Juicios ante el Senado

"Artículo 539. *Acusación de la Cámara de Representantes.* El juzgamiento de los funcionarios públicos, que de acuerdo con la Constitución Nacional, son justiciables por el Senado, se hará siempre mediante acusación de la Cámara de Representantes, que en tal caso actúa como fiscal.

"Cualquier ciudadano puede denunciar ante la Cámara de Representantes las infracciones de la ley penal cometidas por los empleados públicos que sean justiciables ante el Senado.

"Artículo 540. *Informes a la Cámara.* Cuando en la investigación de algún delito el funcionario de instrucción o juez descubriere que en él ha tenido participación cualquiera de las personas que deban ser juzgadas por el Senado, pasará inmediatamente las diligencias informativas a la Cámara de Representantes, para que decida si es o no del caso proponer acusación ante el Senado.

"Artículo 541. *Indagación oficiosa de la Cámara de Representantes.* La Cámara de Representantes, en ejercicio del carácter de fiscal que la Constitución le da, puede inquirir, por sí o por medio de una comisión de su seno y para los efectos de acusar o abstenerse de hacerlo los hechos criminosos y la conducta oficial de los funcionarios respectivos.

"Artículo 542. *Nombramiento de acusador.* Cuando la Cámara de Representantes resuelva hacer uso de la facultad de acusar a algún funcionario público, elegirá por mayoría absoluta de votos a un miembro de su seno para que, en calidad de acusador introduzca y sostenga la acusación ante el Senado. El Presidente de la Cámara de Representantes comunicará al Senado la resolución de acusación y el nombramiento de acusador.

"Artículo 543. *Presentación de la acusación.* A virtud de la comunicación de que trata el artículo precedente, se señalará en el Senado según lo establecido en su reglamento interior el día en que deba oírse la acusación, la que presentará personalmente el acusador, leyéndola en alta voz y entregándola al Presidente con los documentos que sirvan de fundamento.

"Artículo 544. *Impedimentos de Senadores.* Presentada la acusación, el Presidente advertirá a los Senadores el deber en que están de manifestar si tienen algún impedimento para conocer como jueces en aquel negocio.

"Si alguno o algunos de los Senadores manifestaren estar impedidos, el Senado tomará en consideración los impedimentos que aleguen y resolverá sobre ellos.

"Artículo 545. *Causales de impedimento.* Son únicos impedimentos para conocer en estos juicios:

"1. Haber tenido parte en los hechos sobre que versare la acusación.

"2. Tener interés personal y directo en el acto materia de acusación.

"3. Tener parentesco dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad con el acusador, o con el que haya hecho o promovido la denuncia ante la Cámara de Representantes.

"4. Haber declarado como testigo en el mismo negocio o en favor o en contra del acusado, y

"5. Haber votado en la Cámara de Representantes en favor o en contra de la acusación.

"Artículo 546. *Comisión para estudio de la acusación.* El Senado, si no quisiere instruir por sí mismo, pasará la acusación que corresponda, según su reglamento, para que dentro de un término que no pase de seis (6) días, informe si debe aceptarse o no la acusación.

"Artículo 547. *Concepto sobre viabilidad de la acusación.* La comisión individualizará en su informe las personas acusadas y los cargos que se hacen a cada una, y emitirá concepto sobre si la acusación es admisible en su totalidad o parcialmente.

"Artículo 548. *Citación para estudio del informe.* Presentado el informe de la comisión, se señalará día para verlo en el Senado y resolver sobre la admisión de la acusación, dando previo aviso a la Cámara de Representantes y citándose al acusador nombrado por ella.

"Artículo 549. *Lectura, discusión y votación del informe.* El día señalado, que no podrá ser para después de tres, se leerá ante el Senado el informe de la Comisión y los documentos que el acusador y los Senadores pidan que se lean. El acusador podrá tomar parte en la discusión del informe; pero cerrada ésta se retirará, y el Senado votará las proposiciones de la comisión y las que hayan sido materia de discusión.

"Artículo 550. *Trámite para discusión y votación.* En la discusión y votación de las citadas proposiciones se procederá según lo establecido en el reglamento del

Senado, adoptándose las decisiones por la mayoría absoluta de votos de los Senadores que concurran a la votación.

"Artículo 551. *Resolución sobre resultado de la votación.* El resultado de la votación o votaciones del Senado sobre admisión de la acusación se pondrá en los autos, expresando contra qué personas y por qué cargos se admite, y firmando el Presidente y el Secretario. Esta resolución se pasará a la Cámara de Representantes y se notificará al acusado o acusados.

"Artículo 552. *Cesación de procedimiento.* Todo procedimiento por parte del Senado cesará respecto de los individuos contra quienes no se haya admitido; cesará también por los cargos desechados, debiendo continuar solamente contra las personas y por los cargos aceptados.

"Artículo 553. *Suspensión de funcionarios por acusación admitida.* Siempre que una acusación sea públicamente admitida, el acusado queda de hecho suspendido de su empleo.

"Si la acusación admitida fuere contra el encargado del Poder Ejecutivo, el Presidente del Senado le avisará al que, conforme a la Constitución y a la ley, debe entrar en su lugar; si fuere contra otro funcionario público se avisará a quien corresponda.

"Artículo 554. *Instrucción y calificación del sumario.* El Senado, por sí o por medio de una comisión de su seno, instruirá el sumario hasta decidir si hay mérito o no para llamar a juicio.

"Si el Senado resolviere no llamar a juicio, se archivará el proceso.

"Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa, y en caso afirmativo pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema.

"Si el llamamiento a juicio fuere por infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones públicas o so pretexto de ejercerlas, se señalará el día en que deba celebrarse la audiencia pública. Esta resolución se comunicará a la Cámara de Representantes, se notificará personalmente al acusador y al acusado, haciendo saber a éste el derecho que tiene de nombrar un defensor y que la audiencia se celebrará aunque no compareciere.

"Si el acusado estuviere ausente, la notificación se hará por medio de una orden firmada por el Presidente del Senado y dirigida al Gobernador o Intendente del lugar donde residiere el acusado.

"Artículo 555. *Detención preventiva y libertad provisional.* Si la acusación admitida fuere por infracciones que tengan señalada pena de prisión, se aplicarán las disposiciones sobre detención preventiva y libertad con caución.

"Artículo 556. *Audiencia.* El día que se señalare para la celebración de la audiencia, no podrá ser ni para antes de veinte (20) ni para después de setenta (70) días, contados a partir de la fecha del señalamiento.

"Artículo 557. *Práctica de pruebas en audiencia.* Mientras se celebra la audiencia pública, la comisión del Senado ordenará la práctica de las pruebas conducentes que le soliciten las partes o que ella misma considere necesarias.

"Artículo 558. *Conducencia de la prueba.* Cuando la comisión instructora declare no ser conducente alguna de las pruebas que las partes soliciten, podrán éstas concurrir al Senado para que se declare si son o no conducentes.

"Artículo 559. *Recusación de Senadores.* Hasta el día en que principie la audiencia pública, podrán las partes proponer las recusaciones de los Senadores que sean recusables.

"Los Senadores no son recusables sino por los impedimentos expresados en el artículo 545.

"Artículo 560. *Decisión sobre las recusaciones.* Corresponde al Senado decidir sobre las recusaciones propuestas, para cuya prueba se concederá al interesado el término de seis (6) días. Si el proceso se instruyere por comisión, ante ésta se ventilará el incidente; concluido el término de seis (6) días de que se ha hablado, la comisión dará cuenta al Senado para que éste resuelva.

"Artículo 561. *La Cámara como fiscal.* En estos procesos la Cámara ejerce únicamente funciones de fiscal.

"Artículo 562. *Declaración de testigos.* Los testigos que se hallen a menos de cinco (5) leguas del lugar donde resida el Congreso, darán sus declaraciones ante el Senado o su Presidente, si así lo dispusiere aquél cuando se haya reservado la instrucción del proceso, o ante la comisión instructora, cuando se le haya conferido dicha instrucción. Los testigos que se hallen a cinco o más leguas de distancia, lo mismo que los impedidos declararán ante la autoridad a quien designe el Senado o la Comisión instructora esta diligencia.

"Artículo 563. *Ordenes en el proceso.* Las órdenes para hacer comparecer a los testigos o para examinar los ausentes, o para que se den los documentos o copias que se pidan las dará el Senado, cuando se haya reservado la instrucción del proceso, y las comunicará el secretario; cuando el proceso se instruyere por comisión, ella expedirá dichas órdenes, por medio del Secretario del Senado.

"Artículo 564. *Aplazamiento de la audiencia.* Si las pruebas solicitadas oportunamente no se hubieren evacuado por algún impedimento ocurrido sin culpa del que las hubiere pedido, podrá el Senado, a solicitud de la misma parte, señalar otro día para la celebración de la audiencia.

"Artículo 565. *Oportunidad para alegar.* Antes de la celebración de la audiencia se entregarán a las partes los autos, hasta por seis (6) días a cada una, para que formulen sus alegatos.

"Artículo 566. *Devolución de autos.* El Presidente del Senado, cuando éste instruya el proceso, o la comisión instructora, en su caso, cumplido que sea el término por el cual se hubieren entregado los autos, exigirá su devolución, pudiendo usar para ello los apremios de multa o arresto.

"Artículo 567. *Celebración de la audiencia.* Llegados el día y la hora fijados para la celebración de la audiencia, el Senado dará principio a ésta con la lectura de las piezas del proceso que los Senadores o las partes solicitaren que sean leídas.

"Artículo 568. *Interrogatorio al acusado. Uso de la palabra.* Los Senadores podrán interrogar al acusado o acusados sobre cuestiones relacionadas con el debate.

"En seguida se concederá la palabra al acusador, al acusado y al defensor de éste, quienes podrán hablar hasta dos veces en el mismo orden.

"Artículo 569. *Conferencia privada y cuestionarios.* Concluidos los alegatos, se retirarán del recinto del Senado el acusador, el acusado y el defensor, y principiará la conferencia, durante la cual podrá pedirse, por cualquier Senador, la lectura de las piezas del proceso que considere convenientes.

"Al iniciarse la conferencia privada, el Presidente de la Corporación someterá al estudio del Senado un cuestionario acerca de la responsabilidad del acusado por el cargo o cargos formulados en el auto de proceder.

"Si el auto de proceder contuviere varios cargos, para cada uno de ellos se formularán cuestionarios separados.

"Artículo 570. *Decisión del Senado.* Adoptada la decisión del Senado por la mayoría de votos señalada en el artículo 97 de la Constitución Nacional, se restablecerá la sesión Pública para hacerla conocer y se pasará el proceso a la comisión que lo instruyó para que formule un proyecto de sentencia, de conformidad con las respuestas dadas a los cuestionarios. Esta sentencia será dictada en el término improrrogable de cinco días.

"Artículo 571. *Proyecto de sentencia.* Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, la comisión presentará su trabajo al Senado para que lo discuta y vote. Si, en concepto del Senado, el proyecto adoleciere de defectos, errores o deficiencias que no fuere posible modificar en la sesión, podrá elegir una nueva comisión a la que se pasará el proceso por un término de tres (3) días, para que elabore el nuevo proyecto de sentencia.

"Devuelto el expediente por la nueva comisión, el Senado considerará el proyecto de sentencia aprobándolo o improbándolo.

"Artículo 572. *Adopción de la sentencia.* Adoptada la sentencia será firmada por el Presidente y Secretario del Senado y agregada al expediente.

"Artículo 573. *Cumplimiento de la sentencia.* Copia de la sentencia firmada por el Presidente de la Corporación, será enviada a la Cámara de Representantes, y a la Rama Ejecutiva para que la haga cumplir.

CAPITULO II
Juicio ante los jueces de menores

"Artículo 574. *Presentación del menor al juez. Investigación.* En caso de que un menor de dieciséis (16) años sea sorprendido en flagrante delito o aparezca plenamente comprobada la materialidad del delito y resultare por lo menos una declaración de

testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad, conforme a las reglas de la crítica del testimonio, o graves indicios de que el menor es autor o partícipe del hecho que se investiga, será presentado ante el juez de menores en el menor tiempo posible, si el hecho ocurrió en el municipio en donde reside este funcionario.

"Si el hecho ocurrió en otro municipio o en cualquier corregimiento, el funcionario de policía iniciará inmediatamente la investigación de la infracción. En este caso deberá el funcionario:

"1. Dar noticia inmediata por medio de telégrafo, o si no lo hubiere, por correo, al juez de menores sobre la iniciación de las diligencias.

"2. Allegar a las diligencias la copia del acta de nacimiento.

"3. Asegurar la comparecencia del menor, al que nunca podrá detenerse en las cárceles comunes, si no que será depositado bajo fianza, en poder de sus padres o parientes o de otras personas que quieran recibirlo y,

"4. Alojarlo convenientemente, si no fuere posible el depósito anterior, en lugar seguro e independiente de las cárceles comunes.

"Artículo 575. *Investigación oficiosa o por comisión.* En cualquier momento podrá el Juez de Menores avocar él mismo la investigación, o comisionar a los funcionarios de que trata el artículo 578 de este Código.

"Artículo 576. *Lugar de detención. Prohibiciones.* Prohíbese detener a un menor de dieciséis (16) años en lugar distinto de los expresados en el artículo 574 o de los establecimientos especiales para menores. La violación de esta prohibición hará incurrir al funcionario que dé la orden de detención y al alcaide o jefe del respectivo establecimiento, en la pérdida del empleo y en la interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas durante un año, sanción que le será impuesta sumariamente por el superior respectivo, con la sola vista de la prueba de que se ha incurrido en la infracción.

"Prohíbese conducir a los menores de que trate este capítulo, con esposas, o amarrados o usando maltratamientos de obra. La violación a esta prohibición hace incurrir al infractor en la interdicción del ejercicio de funciones públicas durante un año, sanción que será impuesta sumariamente por el superior respectivo, de acuerdo con lo preceptuado en el anterior inciso.

"Artículo 577. *Envío de diligencias. Comparecencia del menor.* Si la infracción del menor ocurrió en otro municipio o en cualquier corregimiento, una vez perfeccionadas las diligencias sumarias, serán enviadas al juez de menores, quien resolverá lo conveniente al menor.

"En caso de que el juez solicite la presencia del menor, el funcionario de policía podrá conceder fianza suficiente que garantice la comparecencia del menor, a fin de que no sea conducido por la policía.

"Artículo 578. *Funcionarios comisionados.* Las autoridades de policía, los jueces de instrucción, los jueces municipales y los jueces de circuito, ejecutarán las diligencias y comisiones que les fueren confiadas por los jueces de menores.

"Artículo 579. *Fines de la investigación.* En las diligencias que se levanten con ocasión de la infracción penal de un menor de dieciséis años, deberá investigarse todo lo relacionado con la materia de dichas diligencias, y especialmente:

"1. Si realmente se ha infringido la ley penal.

"2. Quién o quiénes son los autores o partícipes de la infracción.

"3. Los motivos determinantes y los demás factores que influyeron en la violación de la ley penal.

"4. El actual estado físico-psíquico del menor y sus antecedentes de la misma especie, así como los de sus ascendientes y hermanos.

"5. La conducta anterior del menor en la escuela, en la familia, en el trabajo, etc.

"6. Las condiciones de vida del menor en la familia y en el medio, su ocupación, la de sus padres y personas con quienes viva, haya vivido y trabajado.

"7. La capacidad económica del menor, la de sus padres y parientes o personas de quien legalmente dependa o deba depender el menor.

"8. Qué perjuicios de orden material o moral causó la infracción, y

"9. Si se trata o no de un menor moralmente abandonado o en estado de peligro moral o físico.

"Artículo 580. *Investigación de antecedentes personales y familiares.* El juez de menores es funcionario de instrucción. La investigación de los datos concernientes al menor, o a su familia o al medio en que ha actuado el menor podrá hacerla el juez por sí mismo, o por medio de los delegados de estudio y vigilancia.

"Artículo 581. *Examen médico o envío a casa de observación.* El juez resuelve, en cada caso, después de hablar personalmente con el menor, si lo somete a un examen médico mental sumario, o si lo envía a la casa de observación; mas para hacerlo en este último caso, es preciso que se trate de un menor en estado de abandono o de peligro moral o físico, de un menor acusado de infracción penal y contra quien exista por lo menos una declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad conforme a las reglas de crítica del testimonio, o graves indicios de que es autor o partícipe de la infracción. En ningún caso podrá el juez de menores mezclar delincuentes con menores de simple protección.

"Artículo 582. *Estudio del menor en casa de observación.* Cada juzgado de menores dispondrá de una casa de observación, cuya finalidad no es corregir al menor, sino estudiarlo, que funcionará independientemente de las escuelas hogares, escuelas de trabajo o reformatorios especiales.

"En la casa de observación, y por un término máximo de noventa días se estudiará al menor integralmente en sus aspectos fisiológico, mental y moral, en sus reacciones individuales y sociales y se consignarán las observaciones en una ficha que habrá de terminar con un dictamen sobre el tratamiento médico-pedagógico que deba aplicarse al menor.

"Artículo 583. *Audiencia.* Cuando se haya terminado la investigación referente a la comprobación de la responsabilidad del menor y esté levantada la encuesta sobre él mismo, sobre sus padres o personas de quienes dependa, sobre el ambiente en que ha vivido, y cuando hayan llegado los estudios de la casa de observación, en caso de que ésta se hubiere realizado, citará el juez día y hora para que tenga lugar la audiencia en que se estudiará la suerte del menor.

"La audiencia se verificará privadamente con la asistencia del médico del juzgado, del defensor de menores, del delegado que hubiere sido encargado de la encuesta sobre el menor, y de los padres o parientes más próximos, si concurriere, así como de las personas interesadas en la protección de menores, a juicio del juez. También podrá asistir el director de la casa de observación.

"El menor no asistirá a su propia audiencia.

"Artículo 584. *Representación del menor. Intervención de abogados.* El menor comparecerá personalmente ante el juez de menores; podrán acompañarlo sus padres o personas de quienes dependa. En este acto, así como en lo relacionado con la defensa del menor, puede nombrarse apoderado, pero su actuación atenderá a los fines de esta justicia, es decir, a la aplicación de la medida que más convenga al menor y no exclusivamente al factor probatorio en lo que hace relación con la participación en la infracción.

"Artículo 585. *Práctica de pruebas.* Antes de la celebración de la audiencia, el juez ordenará que se practiquen todas las pruebas que estime convenientes, o que los interesados soliciten respecto de los hechos que se investiguen.

"Artículo 586. *Fallo.* Oído el concepto de las personas que asistan a la audiencia, en el mismo acto o dentro de los ocho (8) días siguientes, dictará el juez el fallo más conveniente para el menor.

"Artículo 587. *Procedimiento en audiencia y acta.* El procedimiento será breve y sumario, pero el secretario llevará por escrito una relación sucinta de todo lo actuado. De las declaraciones de los testigos y peritos dejará un acta que se concretará a la identificación de las personas y las respuestas sintéticas dadas por ellas. Lo mismo se hará con las respuestas del menor inculpado. Las actas serán firmadas por el juez, por el secretario y por las personas que intervengan en la diligencia.

"Artículo 588. *Contenido de la sentencia.* En la sentencia, el juez establecerá, sin formulismo y con brevedad:

"1. Los hechos que han quedado probados.

"2. Las cuestiones de derecho que considere necesarias al caso, en especial a lo referente a la calificación legal del delito.

"3. Las conclusiones sacadas de los estudios hechos sobre la personalidad del menor.

"4. La orden de pasar al juez ordinario lo que resulte contra mayores, y

"5. Las medidas que se adopten para la salvación del menor.

"Artículo 589. *Actuación secreta.* Todas las actuaciones relacionadas con menores sometidos a la jurisdicción del juez de menores serán secretas, y queda prohibida la información al público sobre tales actos.

"Artículo 590. *Prohibición de informaciones.* Cuando un menor de dieciséis (16) años aparezca como autor, partícipe o víctima de un delito, queda prohibida, cualquier información hecha por la prensa, por radio o por cualquier otro medio, en la que se dé el nombre del menor o aun señales que traten de individualizarlo ante el público.

"Artículo 591. *Sanciones.* Las infracciones a lo dispuesto en los dos artículos anteriores serán sancionadas sumariamente por el juez de menores, con la sola prueba de que se ha incurrido en la infracción, con multas de cien a cien mil pesos, por cada vez convertibles en arresto, a razón de un día por cada cinco pesos.

"Contra las resoluciones dictadas por el juez en virtud de este artículo no habrá otro recurso que el de reposición de la providencia.

"Tales resoluciones serán comunicadas al Administrador de Hacienda Nacional del respectivo departamento, para que las haga efectivas y envíe al juzgado el comprobante.

"Artículo 592. *Prohibición de expedir certificaciones. Excepción.* No podrán expedirse certificaciones de las diligencias practicadas por el juzgado de menores en las actuaciones relacionadas con menores; pero los juzgados civiles podrán solicitar copia de la parte pertinente de una sentencia del juzgado de menores, en la que se declare autor o partícipe de una infracción penal a un menor, y con el solo objeto de fundamentar la acción civil correspondiente.

"Artículo 593. *Prohibición de constitución de parte civil.* La acción civil no podrá ejercitarse ante el juez de menores, pero los interesados en ella podrán solicitar por sí o por medio de abogados, al juez de menores, y por escrito, la práctica de pruebas.

"Artículo 594. *Comparecencia del menor.* El menor comparecerá personalmente ante el juez de menores; podrán acompañarlo los padres o personas de quienes dependa.

"Artículo 595. *Irrespeto a la autoridad. Sanciones.* Cuando los que comparezcan ante el juez de menores falten, de palabra o por escrito, al respeto, consideración y obediencia debidos a la autoridad, después de amonestados, si insistieren, podrán ser sancionados con multa hasta de cinco mil pesos y con arresto hasta de cinco días.

"Artículo 596. *Sanción por incumplimiento de cita judicial.* Cuando los que sean citados al despacho para la práctica de alguna diligencia, no concurran sin causa justa, podrán ser conminados con multa hasta de cinco mil pesos, que se hará efectiva en caso de segunda desobediencia, sin perjuicio de hacerlos concurrir por medio de la policía.

"Artículo 597. *Expedición de copias para juez de menores.* Cuando en la investigación de un delito, seguida por las autoridades ordinarias, resulte compro-

tido un menor, el funcionario ordenará sacar copia de lo pertinente para enviarla, si fuere el caso, de acuerdo con el artículo 577, inmediatamente ante el juez de menores. Esta diligencia tendrá prelación sobre cualquier otra.

"Artículo 598. *Ficha médico-social.* Cada menor tendrá en el juzgado de menores una ficha médico-social. En ella figurarán el retrato y las impresiones dactiloscópicas, y se anotarán los datos y hechos más importantes de la personalidad del menor. Esta reseña tendrá el carácter de reservada y queda prohibida cualquier información sobre su contenido, mientras el menor no haya cumplido los dieciséis (16) años.

"La violación de esta prohibición hace incurrir al funcionario en la pena establecida en el artículo 154 del Código Penal.

"Cuando un menor de dieciséis (16) a dieciocho (18) años comparezca ante las autoridades judiciales ordinarias por razón de algún delito, éstas no podrán solicitar los antecedentes de los juzgados de menores sino se llenan estos requisitos:

"1. Que esté llamado el sindicado a juicio, y

"2. Que el delito por el cual se le haya llamado a juicio merezca la pena de prisión.

"Artículo 599. *Medidas que pueden adoptarse en el fallo.* El fallo del juez de menores puede consistir en las siguientes medidas:

"1. Absolución plena, cuando el hecho delictuoso no se hubiere comprobado.

"2. Simple amonestación, cuando la falta hubiere sido ocasional o leve y el menor se hallare en un medio familiar sano y apto para su educación. La detención preventiva en este caso no tendrá lugar o será lo más breve, a fin de conservar el sentimiento del honor en el menor.

"3. Libertad vigilada.

"4. Entrega del menor a una persona o institución idónea, a fin de lograr su educación, bajo condiciones.

"5. Internamiento del menor en una escuela de trabajo, pública o privada, o en una granja agrícola especial para menores, pública o privada, y

"6. Internamiento del menor en un reformatorio especial para menores, por tiempo indeterminado, hasta cuando se obtenga la reeducación del menor o la formación de su sentido moral y social.

"Artículo 600. *Reforma, sustitución y cesación de la medida.* El juez podrá en cualquier tiempo reformar, sustituir y hacer cesar la medida impuesta a un menor; pero para hacerlo necesitará, en caso de que el menor se halle en establecimiento de educación, del concepto favorable del director respectivo, o el del consejo de disciplina del establecimiento, si se tratare de un establecimiento de reeducación.

"Artículo 601. *Libertad vigilada.* La libertad vigilada consiste en confiar el menor a su propia familia, o a una extraña honorable, o a un establecimiento

industrial o agrícola, bajo las condiciones que el juez señale, mediante caución suficiente, si lo juzga necesario, y bajo la vigilancia del juez o de los delegados de estudio y vigilancia.

"Artículo 602. *Vigilancia discreta y prudente.* La vigilancia de los menores se ejercerá en forma tan discreta y prudente, que no se ocasione ningún perjuicio al menor, ni se enajene su confianza.

"Artículo 603. *Mayoría de edad del internado.* Cuando el menor al cumplir los dieciocho años, se encuentre internado en un establecimiento de los contemplados en este capítulo, en virtud de infracción penal, se hubiere reformado, será puesto en libertad.

"Si no se hubiere reformado, pasará a la penitenciaría o al establecimiento que determine el Ministerio de Justicia, por el tiempo necesario para completar su reforma, el que no podrá pasar de la fecha en que el menor cumpla veinticinco (25) años.

"Las resoluciones respectivas serán dictadas por el juez de menores que conoció del asunto.

"Artículo 604. *Absolución.* En caso de que el juez de menores deba absolver a un menor por carencia de pruebas, pero respecto del cual se hubiere comprobado en el juicio que se halla en estado de abandono o de peligro físico o moral, tomará el funcionario todas las medidas encaminadas a la preservación del menor.

"Artículo 605. *Guarda confiada a persona distinta a los padres.* Siempre que el juez de menores considere que los padres no son aptos para ejercer la guarda de sus hijos menores y resuelva confiarla a otras personas o a establecimientos públicos o privados, determinará en la sentencia la cuota mensual con que deberán contribuir aquéllos, la que deberá fijarse teniendo en cuenta la responsabilidad de los padres y principalmente la capacidad económica de los mismos.

"Artículo 606. *Destino de la cuota mensual.* Estas sumas ingresarán a las cajas de los respectivos establecimientos en donde el menor sea recluido.

"Artículo 607. *Pago coercitivo de la multa.* Para hacer efectiva la contribución señalada por el juez bastará la orden librada al habilitado de la oficina en que preste sus servicios el padre. El habilitado o patrón de la oficina responderá personalmente si no cumplieren la orden respectiva.

"Cuando hubiere que perseguir ejecutivamente el pago en bienes de los padres, adelantará la acción ante el juzgado competente el defensor curador de menores.

"La actuación se hará en papel común y servirá de título ejecutivo la copia autorizada por el juez de menores de la parte pertinente de la sentencia.

"Artículo 608. *Inimputabilidad.* Para todos lo efectos de este Código se considerará que el menor de dieciséis (16) años que hubiere incurrido en infracción penal es inimputable.

LIBRO CUARTO
Ejecución de la sentencia
TITULO I
Ejecución de las penas y medidas de seguridad
CAPITULO I
Disposiciones generales

"Artículo 609. *A quiénes corresponde la ejecución de la sentencia.* La ejecución de la sentencia ejecutoriada, proferida por juez colombiano, corresponde al juez que conoció del proceso en primera o única instancia, mediante orden impartida a los funcionarios administrativos encargados del cumplimiento de la pena o medida de seguridad.

"Artículo 610. *Orden de ejecución de las sentencias.* Si contra la misma persona se hubieren dictado varias sentencias en diferentes procesos, se ejecutarán en el orden en que se hayan proferido. Si los pocesos se han adelantado simultáneamente, el tiempo durante el cual hubiere permanecido privado de la libertad por cualquiera de ellos, se tendrá como parte cumplida de la pena impuesta en la sentencia condenatoria que primero se ejecute.

"Si se tratare de inimputables el tiempo que hubiere permanecido bajo la debida medida de seguridad, se computará conforme al artículo 102 del Código Penal.

"Artículo 611. *Copias de sentencia.* Ejecutoriada la sentencia que imponga una sanción privativa de la libertad, el juez enviará copia auténtica al Director General de Prisiones, al Director Nacional de Instrucción Criminal y al Fiscal respectivo de única o primera instancia para la vigilancia de la ejecución de las penas y medidas de seguridad.

"Artículo 612. *Lugar donde debe cumplirse la sanción.* Recibidas las copias de la sentencia, el Director General de Prisiones, señalará el establecimiento donde el condenado debe cumplir la sanción y dará aviso de ello al funcionario sentenciador y al fiscal respectivo, quienes vigilarán el cumplimiento de ella o comisionarán al juez o fiscal de la misma categoría, del lugar donde se hallare el respectivo establecimiento, para los fines del presente artículo.

"Artículo 613. *Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena.* El juez podrá aplazar o suspender, previa caución, la ejecución de la pena, en los mismos casos del artículo 432 de este Código.

"Artículo 614. *Aplicación de las penas señaladas en el artículo 42 del Código Penal.* Cuando se trate de las penas establecidas como accesorias en el Código Penal, se procederá de acuerdo con las siguientes normas:

"1. Si se tratare de restricción domiciliaria, se enviará copia de la sentencia a la autoridad judicial y policiva del lugar en donde la residencia se prohíba o donde el sentenciado debe residir. También oficiará al fiscal respectivo para su control.

"2. Cuando se ejecuten sentencias en las cuales se decrete la interdicción de derechos y funciones públicas, se remitirá a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación copias de la sentencia ejecutoriada.

"3. Si se trata de la pérdida del empleo público u oficial, se comunicará a quien haya hecho el nombramiento o la elección y a la Procuraduría General de la Nación.

"4. Si de la prohibición de ejercer una industria, arte, profesión u oficio, se ordenará la cancelación del documento que lo autoriza para ejercerlo y se oficiará a la autoridad que lo expidió.

"5. En caso de la expulsión del territorio nacional para extranjeros, se procederá así:

"a) El juez, una vez cumplida la pena privativa de la libertad, lo pondrá a disposición del Departamento Administrativo de Seguridad para que lo expulse del territorio nacional;

"b) En el auto que decrete la libertad definitiva de que trata el artículo 75 del Código Penal, se ordenará la captura y obtenida ésta se oficiará al Departamento Administrativo de Seguridad para su expulsión del territorio nacional.

"6. Si de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, se comunicará a las autoridades policivas del lugar de residencia del setenciado para que tome las medidas necesarias para el cumplimiento de esta sanción, oficiando al fiscal respectivo para su control.

"7. Si de la suspensión de la patria potestad, se oficiará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al fiscal respectivo.

"Artículo 615. *Amortización de la multa mediante trabajo.* Cuando se imponga como sanción principal y única la pena de multa, ella deberá hacerse efectiva dentro del plazo que la resolución indique, o, en su defecto, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria.

"Empero, dentro del mismo término podrá el condenado solicitar su amortización mediante trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del Código Penal, para lo cual deberá pedir al juez su aprobación, respecto a la actividad no remunerada escogida para tal fin. El juez señalará la forma de comprobación y control, calculando además el tiempo que habrá de prestar ese servicio de acuerdo con el valor asignado a esa actividad en el lugar donde se realice.

"En caso de que no la pagare o amortizare, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal.

"Artículo 616. *Autoridad que concede la rebaja de pena.* La providencia que haga cesar o que rebaje con arreglo a una ley nueva, una pena o medida de seguridad impuesta de acuerdo con leyes anteriores, será dictada por el juez que conoció del proceso en primera o única instancia, de oficio o a solicitud de parte, a no ser que exista cambio de competencia de jurisdicciones especiales a la ordinaria, en cuyo caso esta última será la competente.

CAPITULO II

Ejecución de medidas de seguridad

"Artículo 617. *Internación para enfermo mental permanente o transitoria con secuela.* Cuando se imponga la medida de seguridad correspondiente a un inimputa-

ble por enfermedad mental permanente o transitoria con secuela, el juez oficiará al Director del Establecimiento Psiquiátrico, para que se proceda al tratamiento adecuado.

"Artículo 618. *Internación de inmaduro psicológico.* Si se tratare de inmaduro psicológico, el juez ordenará su internación en establecimiento público, para que se le suministre educación o adiestramiento industrial, artesanal o agrícola para buscar su adaptación al medio social. Si sus parientes, mediante otorgamiento de caución que fije el juez, garantizan los fines señalados anteriormente, podrá ordenarse su internación en establecimiento particular aprobado oficialmente.

"Artículo 619. *Medida de seguridad para indígena inimputable.* Cuando se trate de indígena inimputable por inmadurez psicológica y se le imponga como medida de seguridad su reintegro al medio ambiente natural, se oficiará a la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, para que provea su regreso a la región a que pertenece.

"Artículo 620. *Libertad vigilada.* Cuando se imponga la libertad vigilada, deberá el juez comunicar esta decisión a las autoridades policivas del lugar, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Código Penal.

"Artículo 621. *Suspensión o cesación de la medida de seguridad.* El juez que haya impuesto en primera o única instancia una medida de seguridad, podrá de oficio o a solicitud de parte, previo concepto de los peritos de Medicina Legal y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 y 101 del Código Penal:

"1. Suspender condicionalmente la medida de seguridad.

"2. Sustituirla por otra más adecuada, si así lo estimare conveniente.

"3. Ordenar la cesación de tal medida.

"La persona beneficiada con la suspensión condicional, o con su cambio por una de libertad vigilada, deberá constituir personalmente o por intermedio de su representante legal, caución en la forma prevista en este Código.

"Artículo 622. *Revocación de la suspensión condicional.* En cualquier momento podrá el juez revocar la suspensión condicional de la medida de seguridad o la medida sustitutiva, cuando se incumplan las obligaciones fijadas en la caución, o cuando los peritos conceptúen que es necesaria la continuación de la medida.

CAPITULO III

Condena de ejecución condicional

"Artículo 623. ***Otorgamiento de la condena de ejecución condicional.*** Se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe reparar los daños ocasionados con el hecho punible.

"Cuando existan bienes secuestrados, decomisados o embargados, que garanticen íntegramente la indemnización, no se fijará término para la reparación de los daños.

"Artículo 624. *Ejecución de la pena por no reparación de los daños.* Si el beneficiado con la condena de ejecución condicional no reparare los daños dentro del término que le haya fijado el juez, se ordenará inmediatamente la ejecución de la pena y se procederá como si la sentencia no se hubiere suspendido.

"Artículo 625. *Extinción de la condena y cancelación de la caución.* Cuando se declare la extinción de la condena conforme al artículo 71 del Código Penal, se cancelará la caución.

"Artículo 626. *Comunicación sobre extinción de la condena.* La providencia que declare extinguida la condena, se comunicará a las mismas personas o entidades a quienes se comunicó la sentencia de condena condicional.

CAPITULO IV
Libertad condicional

"Artículo 627. *Quién la concede.* El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el artículo 72 del Código Penal, podrá solicitar al juez que profirió sentencia de primera o única instancia, la libertad condicional.

"Artículo 628. *Anexos a la solicitud.* La solicitud de libertad condicional debe ir acompañada de la resolución favorable del Consejo de Disciplina, o en su defecto del Director del respectivo establecimiento carcelario, de la copia de la cartilla biográfica y de los demás documentos que prueben los requisitos exigidos por el Código Penal.

"Artículo 629. *Decisión.* Recibida la solicitud, el juez resolverá dentro de los tres (3) días siguientes, mediante auto interlocutorio en el cual se impondrán las obligaciones a que se refiere el artículo 73 del Código Penal, las cuales se garantizarán mediante caución.

"El tiempo necesario para otorgar la libertad condicional se determinará con base en la pena impuesta en la sentencia.

"La reducción de las penas por trabajo y estudio, lo mismo que cualquier otra rebaja de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como parte cumplida de la pena impuesta o que pudiere imponerse.

"Artículo 630. *Copias.* Copia de la resolución que otorgue la libertad condicional se enviará al Agente del Ministerio Público correspondiente, para lo de su cargo.

"Artículo 631. *Condición para aplicar el artículo 74 del Código Penal.* Para los efectos del artículo 74 del Código Penal, se considerará que el liberado condicionalmente ha cometido un nuevo delito, una vez que se halle en firme la sentencia que lo declare responsable.

"La revocación podrá decretarse de oficio o a petición de los encargados de la vigilancia.

"Artículo 632. *Remisión.* Lo previsto en los artículos 663 y 664 de este Código es aplicable a la libertad condicional.

CAPITULO V

Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores

"Artículo 633. *Prórroga para el pago de perjuicios.* Cuando al beneficiado con la condena de ejecución condicional o la libertad condicional le hubiere sido imposible cumplir la obligación de reparar los daños dentro del término señalado, el juez, a petición justificada de parte, podrá prorrogar el plazo por una sola vez y por un término no mayor de ciento veinte (120) días. Si no cumpliere, se ejecutará la pena.

"Artículo 634. *Exoneración del pago de perjuicios.* La obligación de pagar los perjuicios provenientes de un hecho punible, en los términos señalados por el juez, conforme a este Código, para gozar de la condena de ejecución condicional o de la libertad condicional, no será exigida cuando el condenado demuestre que se encuentra en imposibilidad de hacerlo.

CAPITULO VI

De la rehabilitación

"Artículo 635. *La que concede el Tribunal.* La concesión de la rehabilitación de derechos y funciones públicas corresponde al Tribunal Superior (Sala Penal), por la correspondiente sala de decisión del Distrito Judicial en donde se hubiere dictado la sentencia de primera instancia, previa solicitud del condenado hecha de acuerdo con las normas del presente capítulo y dentro de los plazos determinados por el artículo 92 del Código Penal.

"La providencia que concede la rehabilitación será publicada en la gaceta oficial del respectivo departamento.

"Artículo 636. *La que concede el juez.* La rehabilitación de las demás penas referidas en el artículo 92 del Código Penal, corresponde al juez que dictó la sentencia de primera instancia.

"Artículo 637. *Anexos a la solicitud de rehabilitación.* Con la solicitud de rehabilitación se presentará:

"1. Copias de la sentencia de primera y segunda instancia, y de casación si fuere el caso.

"2. Copia de la cartilla biográfica.

"3. Dos declaraciones, por lo menos, de personas reconocidamente honorables, sobre la conducta observada después de la condena.

"4. Certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada, si fuere el caso.

"5. Comprobación del pago de los perjuicios civiles.

"Artículo 638. *Comunicaciones.* La providencia que concede la rehabilitación de derechos y funciones públicas, se comunicará a las mismas entidades a quienes se comunicó la sentencia y, especialmente, al Alcalde del domicilio del rehabilitado y a los registradores municipal, departamental y nacional del Estado Civil, para que hagan las anotaciones del caso.

"Artículo 639. *Ampliación de pruebas.* La entidad que debe resolver la solicitud de rehabilitación puede pedir ampliación o rectificación, dentro de un plazo no mayor de diez (10) días, de las pruebas acompañadas al memorial respectivo.

"Artículo 640. *Aplazamiento.* Si la conducta del solicitante no lo hiciere acreedor a la rehabilitación, según los documentos presentados, se aplazará la concesión de ella por un período no mayor del determinado en el artículo 92 del Código Penal. La providencia respectiva será comunicada a las mismas entidades mencionadas en el artículo 638.

LIBRO QUINTO

TITULO I

Relaciones jurisdiccionales con autoridades extranjeras

CAPITULO I

Disposiciones generales

"Artículo 641. *Normas aplicables.* Las relaciones de las autoridades colombianas con las extranjeras, para todo lo relacionado con la aplicación de la ley penal, se regirán por lo que dispongan los tratados públicos, las convenciones internacionales y los usos internacionalmente consagrados. A falta de ellos, se aplicará lo dispuesto en el presente título.

CAPITULO II

Exhortos

"Artículo 642. *De las autoridades extranjeras.* Los exhortos de las autoridades judiciales extranjeras en solicitud de colaboración para la práctica de diligencias por parte de funcionarios judiciales colombianos, se tramitarán por la vía diplomática.

"Artículo 643. *Trámite.* El Ministerio de Relaciones Exteriores hará llegar las solicitudes tramitadas por la vía diplomática al Tribunal Superior del Distrito, en Sala de Decisión Penal, en donde deban practicarse las diligencias, en el menor término posible para que éste autorice y designe el juez o funcionario que deba practicarlas.

"Artículo 644. *Legalidad.* El Tribunal no podrá autorizar la práctica de diligencias que sean contrarias a la Constitución y a las leyes de la República.

"Artículo 645. *Ritos procesales.* Si la autoridad extranjera solicitare la práctica de alguna diligencia bajo ciertas formalidades precisas, el juez o autoridad colombiana comisionados para ello la practicarán de conformidad con lo pedido, siempre que las formalidades no contraríen los principios y garantías consagrados por la Constitución o las leyes colombianas.

CAPITULO III

Diligencias en el exterior

"Artículo 646. *Práctica.* Cuando el proceso penal exija la práctica de diligencias en territorio extranjero, el juez, según la naturaleza de la actuación y la urgencia de la misma podrá:

"1. Enviar carta rogatoria a una de las autoridades judiciales del país donde han de practicarse las diligencias por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que las practique y devuelva por conducto del Agente diplomático o consular de Colombia o el de un país amigo.

"2. Comisionar por medio de exhorto directamente al Cónsul o Agente Diplomático de Colombia en el país respectivo, para que practique las diligencias de conformidad con las leyes nacionales y las devuelva directamente. Los Cónsules y Agentes Diplomáticos de Colombia en el exterior quedan facultados para practicar todas las diligencias judiciales en materia penal para las cuales sean comisionados, salvo la indagatoria.

CAPITULO IV
De la extradición

"Artículo 647. *A quien corresponde.* Corresponde al Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia, ofrecer o conceder la extradición de una persona condenada o procesada en el exterior, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal.

"Artículo 648. *Extradición facultativa.* La oferta o concesión de la extradición es facultativa del Gobierno; pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia.

"Artículo 649. *Requisitos para concederla u ofrecerla.* Para que pueda ofrecerse o concederse la extradición se requiere, además:

"1. Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad no inferior a cuatro años, y

"2. Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente.

"Artículo 650. *Condiciones para el ofrecimiento o concesión.* El Gobierno podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas; pero en todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena.

"Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena.

"Artículo 651. *Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento.* La solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de un procesado o condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes documentos:

"1. Copia o transcripción auténtica de la sentencia, si se trata de un condenado, o copia de la resolución de acusación o su equivalente si se trata de un procesado.

"2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.

"3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la identidad del individuo reclamado.

"4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso.

"Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al español, si fuere el caso.

"Artículo 652. *Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Traslado de la documentación al Ministerio de Justicia.* Recibida la documentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenará que pasen las diligencias al Ministerio de Justicia junto con el concepto que exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones o usos internacionales o si se debe obrar de acuerdo con las normas de este Código.

"Artículo 653. *Estudio de la documentación.* El Ministerio de Justicia examinará la documentación, y si encuentra que faltan piezas sustanciales en el expediente, lo devolverá al Ministerio de Relaciones Exteriores, con indicación detallada de los nuevos elementos de juicio que sean indispensables.

"Artículo 654. *Perfeccionamiento de la documentación.* El Ministerio de Relaciones Exteriores adelantará las gestiones que fueren necesarias ante el Gobierno extranjero, a fin de que la documentación se complete con los elementos a que se refiere el artículo anterior.

"Artículo 655. *Envío del expediente a la Corte.* Una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio de Justicia lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que esta corporación emita el concepto de que tratan los artículos 17 del Código Penal y 657 de este Código.

"Artículo 656. *Trámite.* Recibido el expediente por la Corte, se dará traslado a la persona requerida, o a su defensor por el término de tres (3) días para que soliciten las pruebas que consideren necesarias. Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días más el de la distancia, dentro del cual se practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte sean indispensables para emitir concepto.

"Practicadas las pruebas, el proceso se dejará en Secretaría por cinco (5) días para alegar.

"Artículo 657. *Concepto de la Corte.* Vencido el término anterior, la Corte emitirá concepto.

"El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al Gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.

"Artículo 658. *Fundamentos.* La Corte fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada; en la demostración plena de la identidad del solicitado; en el principio de la doble incriminación; en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.

"Artículo 659. *Resolución que niega o concede la extradición.* Recibido el expediente con concepto de la Corte Suprema de Justicia, tendrá el Ministerio de Justicia un término de quince (15) días para dictar la resolución en que se conceda o se niegue la extradición solicitada.

"Artículo 660. *Diferimiento de la entrega.* Cuando con anterioridad al recibo de la solicitud, el procesado o condenado haya delinquido en Colombia, el Gobierno, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla la pena, o hasta que, por cesación de procedimiento o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.

"En el caso previsto en este artículo, el juez de conocimiento o el Director del establecimiento donde estuviere recluido el acusado, pondrá a órdenes del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, al solicitado en extradición, para los efectos del artículo anterior, tan pronto como cese el motivo para la detención en Colombia.

"Artículo 661. *Prelación en la concesión.* Si una misma persona fuere objeto de solicitudes de extradición por parte de dos o más Estados, será preferida, tratándose de un mismo hecho, la solicitud del país en cuyo territorio fue cometida la infracción; y si se tratare de hechos diversos, la solicitud que versare sobre la infracción más grave. En caso de igual gravedad, será preferido el Estado que presentó la primera solicitud de extradición.

"Corresponde al Gobierno establecer el orden de precedencia cuando hubiere varias demandas de extradición.

"Artículo 662. *Entrega del extraditado.* Si la extradición fuere concedida, al procesado se le detendrá y se entregará en la frontera o en un puerto colombiano a los Agentes del país que lo hubiere solicitado.

"Si fuere rechazada la petición, en la misma providencia se ordenará poner en libertad al detenido.

"Artículo 663. *Entrega de objetos.* Junto con la persona reclamada, o posteriormente, se entregarán todos los objetos y artículos encontrados en su poder, o depositados o escondidos en el país y que estén relacionados con la perpetración del hecho punible, así como aquellos que puedan servir como elementos de prueba.

"Artículo 664. *Gastos.* Los gastos de extradición serán sufragados por cada Estado dentro de los límites de su territorio.

"Artículo 665. *Casos en que no procede la extradición.* No habrá lugar a la extradición cuando por el mismo delito la persona, cuya entrega se solicita, esté procesada o haya sido juzgada en Colombia.

"Artículo 666. *Detención preventiva. Nota diplomática.* El Ministerio de Justicia decretará la detención de la persona requerida tan pronto reciba la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria o auto de comparecencia en juicio y la urgencia de tal medida.

"Artículo 667. *Derecho de defensa.* Desde el momento en que se inicie el trámite de extradición la persona tendrá derecho a designar un defensor. Si al llegar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, no lo hubiere hecho, se le nombrará uno de oficio.

"Artículo 668. *Causales de libertad.* La persona reclamada será puesta en libertad incondicional si dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su detención no se hubiere formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término de treinta (30) días desde cuando fue puesta a disposición del Estado requirente éste no procedió a su traslado.

"En los casos aquí previstos, la persona no podrá ser detenida nuevamente por el mismo motivo.

"Artículo 669. *Requisitos para solicitarla.* Cuando contra una persona que se encuentre en el exterior, se haya proferido resolución de acusación en firme o sentencia condenatoria por delito que tuviere pena privativa de la libertad no inferior a cuatro (4) años de prisión, el juez o tribunal que conociere del proceso en primera o única instancia, pedirá al Ministerio de Justicia, que se solicite la extradición del procesado o condenado, para lo cual remitirá copia de la providencia respectiva y demás documentos que considere conducentes.

"Artículo 670. *Examen de la documentación.* El Ministerio de Justicia examinará la documentación presentada, y si advirtiere que faltan en ella algunos documentos importantes, la devolverá al juez o tribunal con una nota en que se indiquen los nuevos elementos de juicio que deban allegarse al expediente.

"Artículo 671. *Gestiones diplomáticas para obtener la extradición.* Una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio de Justicia lo remitirá al de Relaciones Exteriores para que éste, sujetándose a los convenios o usos internacionales, adelante las gestiones diplomáticas necesarias para obtener del Gobierno extranjero la extradición del procesado.

"Artículo 672. *Aumento prudencial de plazos.* Según las circunstancias, los plazos señalados en los artículos anteriores podrán ser aumentados prudencialmente por el Ministerio de Justicia.

TITULO II
Disposiciones finales y vigencia

"Artículo 673. *Medidas especiales.* Los Directores Seccionales de Instrucción Criminal podrán solicitar del Gobierno, en casos especiales, la adopción de las medidas que, según su criterio, sean necesarias para la seguridad de un testigo.

"Artículo 674. *Ajuste de cuantía.* Las cuantías señaladas en los artículos 71 y 72 de este Código se empezarán a aplicar a partir del primero (1°) de enero de 1988, sin que en ningún tiempo se afecte la competencia en los procesos iniciados. Cuando se determinen las cifras previstas para la fijación de la cuantía, se aproximarán a la menor decena de mil pesos más cercana.

"Artículo 675. *Sistematización.* Por un término de seis (6) meses los juzgados penales y promiscuos municipales utilizarán los servicios de sistematización del Ministerio de Justicia para aplicar un procedimiento especial de radicación y el de la subsiguiente actuación, a que haya lugar en los procesos que por razón de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 1° de la Ley 2ª de 1984 hicieron tránsito a la jurisdicción penal.

"Para los efectos señalados en el presente artículo no tendrá lugar la reserva sumarial respecto a los funcionarios del Ministerio de Justicia.

"Artículo 676. *Vigencia del procedimiento abreviado.* El procedimiento abreviado consagrado en este Código se aplicará a los hechos ocurridos con posterioridad a la vigencia de este Código.

"Artículo 677. *Aplicación del procedimiento anterior.* El Código de Procedimiento Penal anterior se aplicará a los procesos que para la vigencia de este Decreto estén con auto de cierre de investigación ejecutoriado.

"Artículo 678. *Derogatoria.* Derógase la Ley 2ª de 1982 por la cual se adoptó el Código de Procedimiento Penal expedido mediante Decreto número 409 de 1971, y todas las disposiciones que sean contrarias al presente Decreto.

"Artículo 679. *Aplicación de normas especiales.* Las normas del capítulo segundo de la Ley 2ª de 1984 continuarán vigentes hasta el término señalado en el artículo 74 de dicha ley.

"Artículo 680. *Vigencia.* El presente Código entrará en vigencia el primero (1°) de julio de mil novecientos ochenta y siete (1987), con excepción del artículo 331 que regirá desde la fecha de su publicación.

"Comuníquese y publíquese.

"Dado en Bogotá, D. E., a 13 de enero de 1987.

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Justicia,

Eduardo Suescún Monroy".

III. Razones de la demanda

Estima el demandante que el ordenamiento procesal, en su integridad o unidad normativa, infringe en forma manifiesta los artículos 2°, 55 y 76-12 de la Constitución Nacional.

Comienza el actor por precisar los términos en que el Congreso invistió al Presidente de facultades extraordinarias mediante la Ley 52 de 1984 en lo relativo a "elaborar y poner en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal", y a la exigencia de estar asesorado por una comisión integrada por dos senadores, dos representantes y tres expertos en Derecho Procesal Penal y concreta así los cargos de inconstitucionalidad:

1. El presidente violó en forma manifiesta la ley de facultades "al disponer en el artículo 680 del Decreto acusado, que éste entraría en vigencia el 1° de julio de 1987, cinco meses y dos semanas después de haber expirado las facultades", pues pasó por alto "a sabiendas" que el Congreso lo facultó para expedir el Código y ponerlo en vigencia.

Aduce que la comisión creada por el Decreto número 3150 de 1986 para revisar el proyecto elaborado por la comisión de creación legal consideró que "poner en vigencia el estatuto meses después de agotadas las facultades para expedirlo no implicaba vicio legal alguno", con base en que el Código Penal (Decreto número 100 de 1980) entró en vigencia un año después de haber expirado las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5ª de 1979, sin embargo, a su juicio este argumento no es válido, por cuanto la ley citada dispuso en su artículo 3° que el Código entraría en vigencia un año después de expedido y en cambio la Ley 52 de 1984 no consignó una "circunstancia" similar.

2. Basa el segundo cargo en que el Gobierno mediante decreto ejecutivo integró una comisión asesora de catorce miembros con el propósito de enmendar el proyecto inicial, pero sostiene que esta comisión carecía de aptitud legal para modificar lo realizado por la comisión legal y que una interpretación distinta llevaría al "absurdo de que las facultades ejecutivas ordinarias pudieran utilizarse para reformar lo establecido en desarrollo de facultades legislativas".

Razonando así concluye el demandante que se ha violado el artículo 76-12 de la Constitución Nacional que define las facultades extraordinarias y el artículo 118-8 que impone al Presidente la forma de ejercerlas".

IV. Concepto del Procurador General

El Colaborador Fiscal en su concepto número 1140 de abril 9 de 1987, solicita a la Corte que declare inconstitucional el Decreto acusado y en caso de que la Corporación se haya pronunciado sobre idéntica demanda que actualmente cursa en la misma contra el mismo Decreto, que falle ordenando estarse a lo decidido.

Refiriéndose en concreto a los cargos de la demanda expresa su criterio así:

1. Contra lo afirmado por el demandante considera que la comisión asesora fue integrada debidamente y del mismo modo evacuó su encargo en relación con el anteproyecto de Código de Procedimiento Penal que entregó oportunamente; por lo tanto el Gobierno Nacional se ciñó con rigor a "lo señalado en la Ley 52 de 1984".

2. En cambio acoge los argumentos del actor para sostener con éste que el Presidente excedió el límite la ley de facultades extraordinarias al haber dispuesto, en el artículo 680 del Decreto en estudio, que este estatuto procesal entrará en vigencia el 1° de julio de 1987; ello porque la Ley 52 de 1984 lo facultó para que en el término de dos años elaborara y pusiera en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal, "mas no lo facultó para que lo pusiera en vigencia aproximadamente seis meses después de agotado el plazo de las facultades temporalmente transferidas".

Para el Procurador resulta pues incuestionable que el "Gobierno Nacional, al prorrogar la vigencia de la Ley 2ª de 1982 y enervar la del nuevo Código, ha escedido (sic) las precisas facultades que solamente por dos (2) años le transfirió el legislador, y no se ha regido por el principio según el cual el Ejecutivo en estas materias debe hacer únicamente lo permitido, y por ende ha acudido a 'facultades o poderes inherentes o implícitos' (implied powers, inherent powers del Derecho Anglosajón), al autoprorrogar la vigencia de la actual codificación Procesal Penal que debía desaparecer al expedirse la nueva. No desconozco que la ley de habilitación autoriza al Presidente de la República para extender las facultades en la medida reclamada por la lógica de la función legislativa desarrollada y que guarde relación de causalidad con las materias en aquélla contenida. Pero tampoco desconozco que dicha habilitación no otorga tácitamente la potestad discrecional, inherente o implícita de que se fije al capricho del legislador extraordinario la vigencia del o de los decretos extraordinarios que expida, puesto que la potestad legislativa *pro tempore* es reglada, precisa y jamás discrecional. Admitir las facultades implícitas y discrecionales como en el asunto *sub-examine,* equivale a tolerar fraude al constituyente en cuanto a los requisitos de precisión y temporalidad (numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional) y hacer flexible el principio de la juridicidad, plasmado en la regla que le permite al legislador extraordinario reglamentar sólo lo que materialmente le fue diferido temporalmente".

V. Consideraciones de la Corte

Primera. La competencia.

Como la acusación de inexequibilidad se dirige contra un decreto extraordinario expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de facultades que el Congreso le otorgó por medio de la Ley 52 de 1984, a la Corte le corresponde conocer de la acción de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Carta Fundamental.

Segunda. Fallo de mérito y no inhibitorio.

Si bien el artículo 680 del Decreto acusado señala que el estatuto procesal que se revisa entrará a regir el 1° de julio de 1987, con excepción de su artículo 331 que rige desde la fecha de su publicación, esta circunstancia no impide que la Corte se pronuncie sobre su exequibilidad, pues en reiteradas decisiones la Corporación ha reconocido que existe "objeto para fallo de fondo, cuando la acción se dirige contra normas que, no estando vigentes al momento de la decisión, tienen sin embargo vocación de vigencia inminente", como sucede en el caso *sub-examine.*

Así lo decidió entre otras en las sentencias del 9 de marzo de 1971, 10 y 14 de diciembre del mismo año sobre la demanda de inconstitucionalidad del Código de Comercio que entró en vigor precisamente el 1° de enero de 1972, es decir, aproximadamente un año y cuatro meses después de expedido.

Tercera. Alcance del fallo.

Aunque se acusa la totalidad del Decreto número 050 de 1987, el único cargo que se formula consiste en que el Ejecutivo excedió las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 52 de 1984, pero el actor lo ha dividido en dos aspectos: el relativo a

la integración de una comisión asesora distinta de la prevista en la ley y la extralimitación del límite temporal de la habilitación legislativa.

No formula el actor tacha diferente de inconstitucionalidad contra todo el decreto, ni acusa en forma singular ninguna de sus disposiciones; por lo tanto la Corte limitará su pronunciamiento a los aspectos cuestionados reiterando su jurisprudencia tradicional de proferir fallos definitivos pero no absolutos cuando el objeto de la demanda es la totalidad de un código o un estatuto, dado que sería tarea imposible de realizar la de confrontar todos y cada uno de los artículos (680 en este caso) con la totalidad de los textos constitucionales, dentro de los cortos y perentorios términos que le señala la Constitución para resolver sobre las demandas de inexequibilidad.

La jurisprudencia que ahora se reitera y que relativiza las decisiones de la Corte en estos casos excepcionales tiene la finalidad de evitar pronunciamientos definitivos y absolutos que amparen con la fuerza de cosa juzgada, la exequibilidad de normas que no pudieron ser suficientemente analizadas y consideradas y eventualmente pudieran ser objeto de un pronunciamiento distinto.

Este criterio jurisprudencial lo ha aplicado la Corte en las sentencias de mayo seis de 1971, sobre el Código de Procedimiento Civil, agosto 30 de 1984, sobre el Código Contencioso Administrativo; julio 14 de 1983 y 19 de septiembre de 1985, sobre el Decreto número 222 de 1983.

Cuarta. Las facultades extraordinarias y su ejercicio.

El Decreto Extraordinario 050 de 1987, fue expedido por el Presidente invocando las facultades que le confirió la Ley 52 de 1984, cuyo contenido en lo pertinente al caso *sub-judice,* se precisa en seguida:

"LEY 52 DE 1984
(diciembre 28)

"*Por la cual se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República*

"Artículo 1° De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese el Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de dos (2) años para:

"1. Elaborar y poner en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal, que deberá seguir la orientación filosófica del Código penal y adecuarse a sus prescripciones sobre las siguientes precisas y específicas bases:

a) Creación, organización, reglamentación institucional y dotación técnica de un cuerpo de Policía Judicial;

b) Reglamentación de la captura, detención y libertad provisional, teniendo en cuenta la presunción de inocencia, sin desproteger los intereses de la sociedad, particularmente en relación con los delitos más graves, para los cuales no podrá haber excarcelación. Se establecerá preponderadamente la fianza, en la cuantía que el juez estime conveniente, según la gravedad del hecho, como medio de garantizar la presencia del sindicado en el proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia;

"c) Creación, organización y reglamentación de la defensoría de oficio;

"d) Creación de un sistema de actuación procesal que elimine en lo posible la escrita, incorpore todas las posibilidades que ofrece la tecnología moderna y permita concretar los actos procesales en síntesis documentales, como casetes, videocasetes, fonogramas, cintas fonópticas, etc., teniendo en cuenta ante todo la eficacia de la investigación, la preservación de la verdad histórica y la intangibilidad del debido proceso;

"e) Reglamentación de los medios de impugnación en orden a garantizar el sistema de la doble instancia, con la obligación de sustentar los recursos;

"f) Revisar la calificación del sumario para mantenerlo, modificarlo, sustituirlo o adicionarlo de acuerdo con las necesidades de la justicia.

"g) Reglamentación de la actuación procesal (recursos, términos, nulidades, instancias, etc.);

"h) Creación de un sistema probatorio que permita la libre y racional convicción del juez, sin sujeción a tarifa legal alguna, con base en cualquier medio probatorio legalmente aducido al proceso;

"i) Establecimiento de la información jurídica y la gestión judicial;

"j) Creación de procedimiento o procedimientos abreviados de acuerdo a la naturaleza del hecho, de la prueba, de las condiciones personales, del agente, de los requerimientos sociales y judiciales. Determinar los mecanismos necesarios para la agilización de la Justicia Penal;

"k) Reglamentar, suprimir, adicionar, modificar lo relacionado con la indagación preliminar, etapas procesales y actuaciones posteriores. Determinar la actuación de las personas que puedan intervenir en tales oportunidades procesales;

"l) Revisar y modificar la competencia para instrucción y juzgamiento, teniendo en cuenta todos los factores que lo determinan.

"……

"Artículo 3° Para el ejercicio de las facultades que por esta ley se le confieren, el Presidente de la República estará asesorado por sendas comisiones integradas por dos Senadores y dos Representantes en cada una de ellas, designados por la Mesa Directiva de las Comisiones Primeras de ambas Cámaras y por tres expertos en Derecho Procesal y Derecho Penal Aduanero, para cada una de ellas, nombradas por el Gobierno.

"Artículo 4° ...".

Mediante sentencia de septiembre 19 de 1985 (Proceso 1317) la Corte declaró exequible los artículos 1° numeral 1°, literales a) a l) y el artículo 2), esto es, los mismos que consagran las facultades para expedir el Código de Procedimiento Penal y el Estatuto Penal Aduanero.

A. *La comisión asesora*

Como es tradicional en las leyes que confieren facultades extraordinarias al Ejecutivo para la expedición de Códigos, en esta ocasión el Congreso dispuso que el Gobierno estuviera asesorado por una comisión integrada por miembros de la Cámara, del Senado y de expertos en Derecho Procesal Penal, como "garantía de la presencia y participación del Congreso en la elaboración del nuevo Código", según se dijo en la exposición de motivos y se mantuvo como propósito legislativo hasta convertirse en ley.

La Comisión quedó integrada así:

Por medio de la Resolución número 001 de 1985 la Comisión Primera Constitucional permanente designó como sus representantes en la comisión asesora del Gobierno a los Senadores Federico Estrada Vélez y José María Velasco Guerrero.

Mediante la Resolución número 001 de 1985, la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes nombró como miembros de la Comisión Asesora a los Representantes Orlando Vásquez Velásquez y Gustavo Duque Ramírez.

Para cumplir con el requisito que se analiza el Gobierno nombró a los doctores Alfonso Reyes Echandía, Hernando Londoño Jiménez y Jaime Bernal Cuéllar, y por muerte del doctor Reyes Echandía, fue designado el doctor Edgar Saavedra Rojas, en reemplazo del jurista sacrificado, mediante el Decreto número 254 de 23 de marzo de 1986.

Conviene señalar que antes de la vigencia de la Ley 52 de 1984, el Ministerio de Justicia en ejercicio de las funciones que le son propias venía laborando en diversos proyectos de reforma a la administración de justicia y para el efecto había integrado varias comisiones, entre ellas las de "Reforma al Régimen Penal", encargada de estudiar modificaciones al procedimiento penal, la cual se instaló el 19 de septiembre de 1984.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 52 de 1984, la comisión asesora prevista en su artículo 3° se integró en parte con las personas que estaban trabajando en el proyecto anterior entre ellas los doctores Federico Estrada Vélez (por cuya iniciativa se expidió la ley citada), José María Velasco Guerrero, Alfonso Reyes Echandía, Jaime Bernal Cuéllar y Hernando Londoño Jiménez, siendo evidente que quienes no quedaron incluidos en la comisión asesora siguieron participando en las deliberaciones, cristalizándose así la idea que expresó el Ministro de Justicia en la sesión que se efectuó el 30 de enero de 1985 (Acta número 12), de no desintegrar la comisión inicial para que actuara a nombre del Gobierno prestando asesoría a la comisión creada dentro del marco de la ley de facultades.

En el Acta número 69 de agosto 5 de 1986, aparece constancia de que en esa fecha la comisión asesora entregó al Gobierno el proyecto de Código de Procedimiento Penal.

Mediante el Decreto número 3150 de octubre 7 de 1986, el Gobierno creó una comisión de estudios y evaluación del proyecto del Código de Procedimiento Penal

como resultado de las observaciones de distinto orden que se habían hecho en torno a éste y en la conveniencia de que un grupo de juristas las analizara y evaluara.

Para el actor resulta contraria a la Constitución la actuación de esta nueva comisión por cuanto considera que ésta carecía "de capacidad para modificar lo actuado por la comisión de creación legal", apreciación que resulta equivocada porque no consulta la verdadera naturaleza, ni el carácter de la función que le correspondía cumplir a la comisión asesora, pues implícitamente le está otorgando la condición de colegisladora ya que considera inmodificable el proyecto que ésta presentara. Debe aclarar la Corte que esa no pudo haber sido la intención del Congreso, ni era legítimo que lo fuera, toda vez que la función legislativa sólo puede desplazarse temporalmente por mandato constitucional, al Presidente de la República cuando se le inviste de facultades extraordinarias para que expida normas sobre materias determinadas y dentro de un término fijo.

El artículo 3° de la ley de facultades no puede entonces tener el alcance que le señala el demandante, pues ello equivaldría a aceptar que la función legislativa le fue atribuida a la comisión asesora y no a su destinatario constitucional, el Presidente de la República, pues según el demandante éste tenía que haber aceptado el proyecto tal como lo presentó la comisión sin poder rechazarlo, modificarlo ni consultarlo con personas distintas también versadas en la materia, quedando así sustituido como legislador extraordinario. La misión de la comisión asesora no podía ser otra que la de simple auxiliar y consultor del Gobierno en la tarea que le fue confiada.

No prospera entonces el cargo de inconstitucionalidad pues el Presidente de la República estuvo asesorado para la expedición del Código de Procedimiento Penal por una comisión que se integró conforme a las exigencias de la ley de facultades y además por lo que se constituyó por decreto posterior para estudiar y evaluar el proyecto presentado. No sobra agregar que estas comisiones cumplen un papel de mera asesoría técnica-jurídica; y no de "participación del Congreso en la elaboración del Código" dado que el desplazamiento de materias del legislador al Ejecutivo por la institución de las facultades extraordinarias del numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional es incondicionado y por ello sólo el Presidente de la República adquiere la privativa competencia para utilizarlas dentro de los límites materiales y temporales fijados por el mandato constitucional. De ninguna manera el Congreso directamente y por comisión de su seno puede reservarse la facultad de ser copartícipe en ejercicio de tales facultades.

B. *La vigencia del decreto acusado.*

En ejercicio de las atribuciones que le otorgó la Ley 52 de 1984 el Presidente de la República expidió el Decreto número 050 el 13 de enero de 1987 que fue publicado en el Diario Oficial número 37754 de la misma fecha.

El artículo 5° de la ley de facultades antes citada dispuso que ella debía regir a partir de su promulgación, la cual aconteció el 14 de enero de 1985 mediante inserción en el Diario Oficial número 36830. El término para el ejercicio de las facultades extraordinarias fue de dos (2) años a partir de la referida promulgación, es decir hasta el 14 de enero de 1987 inclusive, pues de acuerdo con lo prescrito en el Código Civil –artículo 67– "el primero y último día de un plazo de meses o años

deberá tener un mismo número en los respectivos meses". Como el decreto fue expedido el 13 de enero de 1987 el término para expedirlo y determinar su obligatoriedad se cumplió con exactitud.

Como cuestión previa al análisis del cargo atinente a la vigencia del decreto, es importante señalar que ningún texto constitucional regula lo relativo a la vigencia de las leyes y sólo excepcionalmente condiciona el momento en que puede comenzar a aplicarse una ley (artículo 31) o se refiere al tema para deferir a la ley el señalamiento de la fecha en que pueden empezar a cobrarse los tributos indirectos (artículo 204) o facultar al gobierno para determinar la vigencia de las normas que impliquen variación de las tarifas de aduanas (artículo 205). Por fuera de los enunciados casos el constituyente no se ocupa de la aplicación o la vigencia de las normas; por lo tanto esta es materia que queda sometida a la decisión del legislador.

Por vía general el legislador ha dispuesto sobre la publicidad y vigencia de los actos oficiales en la Ley 57 de 1985 estableciendo que los actos legislativos, las leyes y los decretos del gobierno "sólo regirán desde la fecha de su publicación" (artículo 8° en concordancia con el 2°), lo cual obedece desde luego al cumplimiento de la exigencia constitucional de promulgar la ley y a la necesidad de que ésta sea conocida oportunamente por los asociados. Ello no obsta sin embargo, para que el legislador ordinario o el extraordinario en su caso, señale el día en que debe regir la ley.

La Ley 52 de 1984 facultó al presidente para elaborar y poner en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal. No obstante que el actor interpreta el anterior mandato en el sentido de que la iniciación de la vigencia debería darse antes del vencimiento del término de habilitación legislativa, considera la Corte que ello no es así, pues tal facultad que es amplia le confiere la potestad de señalar la fecha a partir de la cual entrarían en vigor las normas del nuevo ordenamiento procesal, ya que la ley de facultades no se ocupó de esta materia.

Si en efecto la Ley 5ª de 1979 en virtud de la cual se expidió el Código Penal (Decreto número 100 de 1980) dispuso en su artículo 3° que ésta entraría en vigencia un año después de su expedición previa divulgación del mismo por el Ministerio de Justicia; lo anterior no evidencia como lo afirma el señor Procurador, que el legislador ordinario estaba autorizando al extraordinario para postergar la vigencia del Código; por el contrario, lo que aparece inequívocamente del texto de la citada ley, es que en esa ocasión el Congreso se reservó la facultad inherente a la función legislativa de poner en vigencia el Código Penal estatuyendo imperativamente que éste "entrará en vigencia un año después de su expedición", razón por la cual el Presidente no podía regular de manera diferente lo concerniente al vigor y observancia del citado ordenamiento, pues carecía de la atribución para hacerlo por voluntad expresa del Congreso.

Como en el caso bajo examen la facultad no fue restringida o condicionada por el órgano legislativo, podía el presidente actuar con la amplitud con que hubiera podido hacerlo el propio legislador; por lo tanto, debe colegirse que en este aspecto la competencia se ejerció con sujeción a la ley de facultades y en consecuencia no se quebrantó el ordenamiento constitucional en los artículos señalados.

Indagando sobre el alcance que quiso darle el legislador a la facultad que se analiza encuentra la Corte que no fue distinto al que se ha indicado. Así se advierte con toda nitidez en la ponencia para segundo debate presentada por el Representante Alberto Villamizar en la que se consignó lo siguiente:

"El estudio mismo del nuevo Código de Procedimiento Penal implica una serie de condiciones que lo hagan posible en un término razonable. Considero que el lapso de dos años que propone el proyecto es un tiempo suficiente para que el Gobierno pueda darle forma y contenido al nuevo estatuto".

Cabe recordar finalmente, que el criterio expresado es consecuente con la jurisprudencia de esta Corporación reiterada en diversos fallos según la cual el aplazamiento de la vigencia de un Código no entraña vicio de inconstitucionalidad, cuando las facultades se han precisado en la forma en que lo hizo la Ley 52 de 1984.

En efecto, la Corte en sentencia de diciembre 10 de 1971, declaratoria de la exequibilidad del artículo 2038 del Código de Comercio, dijo:

"En el presente caso la ley de facultades extraordinarias autorizó al Gobierno para expedir y poner en vigencia, previa una revisión hecha por expertos, el Código de Comercio. La misión se cumplió y el estatuto dictado recibió una fecha para entrar en vigor, que es la del primero de enero de 1972, con la salvedad que pasa a estudiarse. Por este aspecto no existe quebrantamiento alguno de los artículos 76-12 y 120-2 de la Constitución".

Así mismo, la Corte declaró exequible el Código de Procedimiento Civil mediante sentencia de mayo 6 de 1971, cuya vigencia fue aplazada con base en facultades de similar contenido a las que ahora ocupan la atención de la Corporación.

VI. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional, y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarar exequible el Decreto número 050 de 1987, en cuanto su expedición y vigencia se cumplieron dentro de los términos previstos en la Ley 52 de 1984.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Jaime Giraldo Angel, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia,

HACE CONSTAR:

1. Que el Magistrado Edgar Saavedra Rojas, se retiró, con excusa justificada, antes de iniciarse la discusión del proyecto de sentencia que fue aprobado en la sesión del 19 de mayo en este proceso.

2. Que el Magistrado Jorge Carreño Luengas, no asistió a la Sala Plena celebrada el día diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y siete, por encontrarse con excusa justificada.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

RES IUDICATA. COSA JUZGADA. CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS, ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, SU EJECUTABILIDAD ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA, DURANTE LOS DIECIOCHO MESES SIGUIENTES A SU EJECUTORIA.

Estése a lo dispuesto en sentencia del 2 de agosto de 1984.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 50.

Referencia: Expediente número 1583.

Demanda de inconstitucionalidad contra parte del inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso-Administrativo adoptado por Decreto-ley número 01 de 1984.

Demandante: *José Ríos Trujillo.*

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobado por Acta número 23 de 21 de mayo de 1987.

Bogotá, D. E., mayo veintiuno (21) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano José Ríos Trujillo, en ejercicio de la acción pública prevista por el artículo 214 de la Constitución, ha presentado ante la Corte, demanda contra el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso-Administrativo, adoptado por el Decreto-ley número 01 de 1984, en el fragmento que dice: "Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria".

Repartido el expediente, remitido al Procurador para lo de su cargo, emitido el concepto fiscal y surtidos todos los demás trámites que contempla el Decreto número 0432 de 1969, procede la Corte a adoptar la decisión definitiva.

II. Texto

El texto completo del artículo 177 del Código Contencioso-Administrativo es el siguiente (se subraya la parte demandada):

"DECRETO NUMERO 01 DE 1984
(enero 2)

"Por el cual se reforma el Código Contencioso-Administrativo.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 11 de la Ley 58 de 1982 y oída la Comisión Asesora creada por el artículo 12 de la misma ley,

D E C R E T A:

"Artículo 177. *Efectividad de condenas contra entidades públicas.*

"Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

"El agente del Ministerio Público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.

"El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la República, los Contralores Departamentales, Municipales y Distritales, el Consejo de Estado y los Tribunales Contencioso-Administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender el pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.

"Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. *Tales condenas, además serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.*

"Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de ese término".

III. La Demanda

Estima el actor que por medio del artículo transcrito, en cuanto hace referencia a las palabras acusadas, el Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le habían sido conferidas por la Ley 58 de 1982

(artículo 11), toda vez que el ámbito de las mismas era tan solo la expedición de un nuevo Código Contencioso-Administrativo, pero no para tocar asuntos propios de los Códigos de Procedimiento Civil y Procesal del Trabajo.

Al respecto, dice la demanda:

"Como se puede apreciar, y ello por obvio mecanismo de enfoque de la cuestión sobre que versa lo acotado, además de la propia calificación que el mismo texto le da a la cuestión, 'ejecutables ante la justicia ordinaria', la materia sobre que versa la cuestión impugnada es enteramente ajena al Código Contencioso-Administrativo. Traspasa su campo de acción e invade otras esferas distintas a éste, cuales son el Código de Procedimiento Civil y el Código Procesal de Trabajo que, en lo atinente a exigibilidad de obligaciones, por el lado de su ejecución, configuran la llamada justicia ordinaria, entidades éstas que son ajenas al Código Contencioso-Administrativo o a la Justicia Contenciosa-Administrativa. La ejecución de las providencias judiciales en el Código de Procedimiento Civil están reguladas por el Capítulo II del Título XVI del Código de Procedimiento Civil y el juicio ejecutivo, en materia laboral, está regulado por el Capítulo XVI del Código Procesal de Trabajo. Así, pues, las obligaciones que presten mérito ejecutivo en el ámbito del derecho Civil o Procesal Civil, mejor, y en el Procesal Laboral, se hallan reguladas por normas propias de cada una de estas materias, según el carácter que tengan, y en forma alguna pueden ser materia del Código Contencioso-Administrativo. En otras palabras, el Código Administrativo no puede ocuparse de la manera como puedan ser exigidas obligaciones emanadas del Estado en forma ejecutiva, determinando el mecanismo, imponiendo la materia o fijando el plazo, porque esto es del resorte de las normas de procedimiento previstas, según la materia, en el Código de Procedimiento Civil o en el Código de Procedimiento Laboral o Código Procesal de Trabajo, que es lo mismo".

Por tanto, en opinión del demandante, con la norma acusada se violaron los artículos 76, ordinal 12 de la Constitución y el 11 de la Ley 58 de 1982.

IV. Concepto del Procurador General

El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 1127 del 19 de marzo de 1987, expresa:

"El inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso-Administrativo, en la frase que hoy se impugna, ya fue objeto de demanda de inconstitucionalidad por quebranto de los artículos 2°, 16, 17, 30, 32, 55, 76-2, 76-12, 118-8, 143 y 164 de la ley superior, incoada dentro del proceso 1151, y declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia No. 76 del 2 de agosto de 1984, con ponencia del Magistrado Ricardo Medina Moyano (q.e.p.d.)" (.....).

"En este orden de ideas, dado que esa Corporación examinó el precepto parcialmente demandado y encontró que no era contrario a la Constitución Nacional, el Despacho considera que respecto de él se ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, siendo improcedente cualquier reexamen de la norma impugnada".

En consecuencia, la Vista Fiscal termina solicitando a la Corte estar a lo resuelto mediante la mencionada sentencia.

V. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia.*

Por tratarse de uno de los artículos integrantes del Decreto número 01 de 1984, que se expidió por el Gobierno Nacional en desarrollo de facultades extraordinarias (art. 76, ordinal 12 C.N.), es competente esta Corte para fallar sobre su constitucionalidad de manera definitiva (art. 214 C.N.).

2. *Cosa Juzgada.*

Como lo apunta el señor Procurador, ya el asunto que se plantea en el presente proceso de constitucionalidad había sido objeto de la decisión definitiva de la Corte contenida en sentencia número 76 del 2 de agosto de 1984 (Magistrado Ponente: doctor Ricardo Medina Moyano), a través de la cual se declaró que los apartes acusados –exactamente los mismos que ahora de nuevo se impugnan– eran exequibles por no contrariar el Estatuto Fundamental.

En el fallo citado la Corte Suprema decidió sobre cargos de inconstitucionalidad iguales a los que expone en esta oportunidad el actor y sobre algunos otros sometidos entonces a su consideración. En guarda del principio de la cosa juzgada, que impide a la Corte volver sobre los mismos puntos que ya había resuelto cuando ellos recaen sobre las mismas normas, no puede decidirse nada diferente y, en consecuencia, se ha de estar a lo ya fallado.

VI. Decisión

Con fundamento en las razones que anteceden la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y una vez conocido el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Estése a lo resuelto por la Corte según fallo número 76 del 2 de agosto de 1984, respecto a la exequibilidad de la última parte del cuarto inciso del artículo 117 del Código Contencioso-Administrativo adoptado por el artículo 1° del Decreto-ley número 01 de 1984, que dice:

"Tales condenas, además serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando*

Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

LA NATURALEZA CONTRAVENCIONAL DE LA INFRACCION DE TRANSITO Y SU CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO. "CONTRA EL INFORME DEL AGENTE DE CIRCULACION FIRMADO POR UN TESTIGO, SOLAMENTE PROCEDE LA TACHA DE FALSEDAD". CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE. LAS AUTORIDADES CIVILES DE POLICIA CONOCEN DE LAS INFRACCIONES CONTRAVENCIONALES DE TRANSITO.

Exequible la norma demandada.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 51.

Referencia: Expediente número 1547.

Acción de inexequibilidad contra el artículo 92 de la Ley 33 de 1986. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Tacha de Falsedad-Procedencia.

Actor: *Rafael Antonio Quintero G.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobado por Acta número 24.

Bogotá, D. E., mayo veintiocho (28) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Rafael Antonio Quintero González, presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra el artículo 92 de la Ley 33 de 1986. Se admitió la demanda y dentro del traslado, el Procurador General de la Nación expuso su impedimento para rendir concepto, el cual fue aceptado por la Sala Constitucional, ordenando correr traslado al Viceprocurador General de la Nación, quien rindió el concepto de rigor y procede la Corte ahora a decidir sobre el asunto.

II. Texto de la norma acusada

El texto de la norma que se revisa es del siguiente tenor:

"LEY 33 DE 1986

"Por la cual se modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

"El Congreso de Colombia,

D E C R E T A:

"Artículo 1° .....

"Artículo 92. El artículo 238 del Decreto-ley número 1344 de 1970, quedará así:

"Artículo 238. La autoridad de Tránsito que presencie la comisión de una contravencion a las normas establecidas en este Código, ordenará detener la marcha del vehículo y previa amonestación al conductor lo anotará en una orden de comparendo que para tal fin llevará consigo en la que ordenará al infractor presentarse ante las autoridades de tránsito competentes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.

"Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada hasta por el doble de su valor, en cuyo caso deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la infracción. Si no se presenta en la fecha señalada, el proceso seguirá su curso.

"La orden de comparendo deberá estar siempre firmada por el conductor. Se entenderá firmada por el solo calco de la licencia de conducción en la respectiva orden. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo. *Contra el informe del Agente de Circulación firmado por un testigo solamente procede la tacha de falsedad.*

"El INTRA determinará las características del formulario de comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En él se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si lo desea, y que en la audiencia para que se le cite, se practicarán las pruebas que solicite.

"Parágrafo. La autoridad de tránsito entregará dentro de las doce (12) horas siguientes, al funcionario competente, la copia de la orden de comparendo, sopena de incurrir en causal de mala conducta.

"Cuando se trate de Agente de Policía Vial, la entrega de esta copia se hará por conducto del Comandante de la ruta, o el Comandante Director del Servicio" (Lo subrayado es lo demandado).

III. La Demanda

1. *Normas constitucionales que se consideran infringidas.*

El actor considera que la norma acusada viola los artículos 55, 58 y 61 de la Constitución Nacional.

2. *Fundamentos de la acción.*

La demanda consigna como fundamentos de su acción las siguientes consideraciones:

a) La norma acusada ha facultado, no solamente a las autoridades administrativas de tránsito, sino a las demás autoridades administrativas gubernamentales y de policía, para hacer justicia en violación de la Constitución Nacional, pues esta función es atribuida en forma única y exclusiva a la Rama Jurisdiccional;

b) El procedimiento para conocer de la tacha de falsedad ha sido definido como propio de la jurisdicción civil, de conformidad con los artículos 289, 290 y 291 del Código de Procedimiento Civil, normas éstas que señalan el trámite, el fallo y el valor del documento objeto de la valoración judicial en el incidente de tacha. Por esto, y dada la naturaleza jurisdiccional del asunto que se debate por la tacha de falsedad del documento, es una materia cuyo conocimiento corresponde a los jueces y no a las autoridades administrativas como lo ordena la Ley 33 de 1986;

c) Como la norma acusada dispone que contra el Informe de Comparendo que elabore el agente de tránsito firmado por un testigo, sólo procede la tacha de falsedad, se elimina la posibilidad de iniciar la acción penal que permite el Código Penal al establecer como delito la falsedad ideológica en el artículo 219.

IV. El concepto fiscal

Ante el impedimento del señor Procurador General de la Nación y la consecuente separación de ese Despacho del conocimiento del proceso, el señor Viceprocurador General de la Nación rindió el correspondiente concepto fiscal en el que solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare la conformidad del precepto acusado con el texto de la Constitución Nacional.

Considera la Vista Fiscal que el contenido de la norma acusada no constituye una indebida injerencia de la Rama Jurisdiccional, pues ciertos funcionarios administrativos se encuentran investidos de autoridad para impartir justicia respecto de faltas de carácter contravencional, y como las infracciones de tránsito son faltas meramente contravencionales no le queda duda sobre la constitucionalidad del precepto acusado.

Agrega el señor Viceprocurador que "si bien la ley no fijó el trámite a seguirse para la resolución del incidente propuesto dentro del proceso administrativo allí señalado, de ninguna manera implica, de suyo, la inexistencia del procedimiento en este punto, toda vez que es indudable que éste habrá de regirse por las normas que regulan la Tacha de Falsedad, las cuales se encuentran fijadas en el Código de

Procedimiento Civil, artículos 289 a 293". Sostiene que el principio general que señalan las normas del procedimiento civil, respecto de los trámites para el conocimiento de la tacha de falsedad, es el que asigna la competencia sobre este punto a la autoridad ante la cual se presenta el documento, que no es exclusiva y solamente el juez civil, como ocurre en la previsión legal que señala la norma acusada, dado que el incidente no constituye en sí mismo una decisión judicial sino sólo una forma de evaluar una prueba documental dentro de un proceso administrativo por parte del funcionario competente para conocer del mismo.

Concluye señalando que la norma examinada deja a salvo la competencia del juez penal como lo dice el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil y pide en consecuencia a esta Corporación que declare que la frase: "contra el informe del Agente de Circulación firmado por un testigo solamente procede la Tacha de Falsedad", del artículo 92 de la Ley 33 de 1986, es exequible porque no existe violación a la Constitución Nacional.

V. Consideraciones de la Corte

Primera: *La competencia.*

La Corte Suprema de Justicia es competente para el conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad que contra las leyes presenten los ciudadanos en ejercicio de la acción que consagra el artículo 214 de la Carta. Como la frase demandada hace parte de una ley de la República, previos los trámites correspondientes, se procede a fallar el caso *subexamine.*

Segunda: *La Naturaleza Contravencional de la Infracción de Tránsito y su Conocimiento Administrativo.*

Bien definido tiene esta Corte el campo de aplicación de las normas que asignan el conocimiento de las faltas contravencionales a algunas autoridades administrativas, pues es facultad legislativa la de atribuir el conocimiento de éstas a las autoridades administrativas de policía sólo en razón de la naturaleza preventiva y correctiva de las prohibiciones de este tipo de normas no penales. Se trata de la corrección disciplinaria de comportamientos de menos entidad que interesan al desarrollo de las actividades normales de la comunidad y que pueden poner en peligro algunos bienes jurídicos de la misma o lesionarlos de tal manera que ameriten un tratamiento procedimental sancionatorio desprovisto de la ritualidad y los principios propios para la conducta penalizable.

El tratamiento preventivo y aun correctivo de algunas conductas de menos entidad que puedan suscitarse en el desarrollo de las actividades de tránsito, obliga al legislador a erigirlas como meramente contravencionales y asignar el conocimiento de las infracciones a las normas que así lo prevén a las autoridades administrativas que deban ocuparse de esta clase de asuntos, como es el caso de la Ley 33 de 1986.

Esta ley señala las autoridades civiles de policía que conocen de las infracciones contravencionales de tránsito, en forma que no se modifican las facultades jurisdiccionales de las autoridades a las que se le atribuye la función de juzgar los delitos, ni se alteran los límites de las competencias en el orden contravencional de las autoridades civiles de policía, pues estas últimas siguen siendo administrativas.

Además, la Corte ya se ha pronunciado al respecto de esta materia en sentencia de mayo 31 de 1984, así:

"...La Corte ha venido sosteniendo en forma nítida y reiterada el principio incólume de la competencia judicial ordinaria en materia delictiva y que además con antelación a aquélla ya había dejado establecido el origen y rango constitucional y no simplemente legal del juez constitucional-penal.

".....

"...saca en claro la Corte que al legislador le está prohibido, a riesgo de ser declarada inexequible su decisión en contrario, no sólo otorgar competencias de juzgamiento penal a quienes no tengan la calidad de jueces ordinarios, sino también cambiar la organización judicial común, bien sea suprimiendo las categorías de jueces instituidos en la propia Constitución, o aún creando otras (como acontece precisamente en los casos regulados en los numerales 2 y 3 del artículo 1° de la Ley 2ª de 1984, y desarrollados en lo pertinente en los artículos 2° y 3° de la misma), que fuera de no formar parte del poder judicial sino del Ejecutivo, pues son "autoridades de policía", tampoco están expresamente reconocidas en ellas como competentes con jurisdicción excepcional o especial, ni mucho menos general y ordinaria, para conocer y juzgar delitos de ninguna naturaleza.

".....".

Hace ver la Corte que la norma acusada consagra ni otorga ninguna nueva facultad de juzgamiento sobre la conducta penalmente reprochable que pudiese configurarse y que describen los artículos 218 a 235 del Código Penal, y que así no modifica o traslada funciones de la organización jurisdiccional, para colocarlas en cabeza de las autoridades de policía, ya que el consagrar la tacha de falsedad sobre un documento emanado de la propia autoridad administrativa con la participación de un particular como testigo, dentro del proceso administrativo, no constituye cosa distinta que la estimación del valor probatorio del documento y nada más. La responsabilidad penal y sus consecuencias, así como los efectos civiles que se desprendan del uso o aprovechamiento procesal o extra-procesal del documento tachado son, por definición legal, asunto de competencia jurisdiccional y esto no cambia ni se altera por la alegación en el trámite administrativo de la Tacha de Falsedad del informe de comparendo sin la firma del infractor.

Para evitar la ineficacia de la actuación correctiva en el evento que señala la norma bajo examen y con el propósito de asegurar la agilidad que debe caracterizar a toda actuación administrativa, el legislador estableció, dentro de sus competencias constitucionales, algunos aspectos del procedimiento que en aquélla se debe seguir, sin perjuicio de las demás atribuciones y competencias jurisdiccionales que puedan ejercerse sobre otras conductas relacionadas con la infracción y su juzgamiento.

Se consagra desde otro punto de vista, un derecho y una función administrativa sobre el trámite del juzgamiento contravencional de las conductas que violan las prohibiciones señaladas por el Decreto-ley número 1344 de 1970 (Código de Tránsito) y la Ley 33 de 1986, cuando el Informe de Comparendo no sea suscrito por el infractor. Ello es de competencia del legislador y por tal razón, en ausencia de

violación constitucional se declarará conforme a la Carta el establecimiento de este proceder administrativo probatorio especial; en la consideración de una conducta contravencional, como ocurre con la norma que acusa el actor.

Además, la norma en cuestión no permite ni pretende el juzgamiento de la falsedad como conducta punible sino sólo el análisis del valor y del mérito probatorio administrativo del citado informe, para los meros efectos de la tramitación policiva del conocimiento de la infracción y nada más. Todo lo demás, de existir, será de competencia de los jueces penales.

Pero, se agrega, el Informe de Comparendo con la firma del testigo, al registrar y consignar la ocurrencia de una infracción al Código Nacional de Tránsito, es una especie de acto administrativo investido de la presunción de legalidad que sólo puede verse disminuido, en tal condición, finalmente, por un acto jurisdiccional que le quite dicho valor no sólo al acto administrativo en sí mismo considerado, sino a toda actuación administrativa. Dicho acto puede verse enervado en sus efectos de decisión contravencional por la Tacha de Falsedad permitida por la norma *subexamine*, la que deberá surtirse por el trámite incidental que señala el procedimiento civil en ausencia de previsión normativa especial, ante la autoridad policiva competente a la luz de las normas arriba transcritas.

Es pues de la naturaleza propia de la actuación administrativa de decisión contravencional, que el valor de las pruebas se discuta también en lo de su competencia, ante la misma autoridad administrativa que debe considerar la conducta, sin perjuicio del aviso al juez penal competente con el envío de las copias necesarias para la correspondiente investigación, todo de conformidad con el procedimiento civil supletivo. Así las cosas, también se puede enervar la actuación administrativa por fuerza de la naturaleza prejudicial que le impondría a la tramitación del juzgamiento contravencional, que no el del incidente de Tacha de Falsedad, la decisión penal de avocar el conocimiento del eventual delito de falsedad documental, pues la competencia sobre la responsabilidad penal sigue en manos del juez penal respectivo.

VI. Decisión

En atención a lo expuesto y oído el concepto fiscal, previo estudio de la Sala Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,

Resuelve:

Declarar EXEQUIBLE la parte que se acusó del artículo 92 de la Ley 33 de 1986, la cual dice: "Contra el informe del Agente de Circulación firmado por un testigo solamente procede la Tacha de Falsedad".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez,*

Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Oscar Peña Alzate, Conjuez, *Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

REMUNERACION A JUECES ESPECIALIZADOS, CON RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE TRABAJO Y SU CORRESPONDIENTE ESTIMULO. ESTOS JUECES ESPECIALIZADOS TENDRAN A SU CARGO EL CONOCIMIENTO DE CIERTOS DELITOS RELACIONADOS CON EL NARCOTRAFICO, LA FABRICACION Y TRAFICO DE ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS MILITARES, CONEXIDAD FORMAL Y MATERIAL. *ESTADO DE SITIO.*

Constitucional el Decreto Legislativo número 735 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 52.

Referencia: Expediente número 1649 (244-E).

Revisión Constitucional del Decreto número 735/87 "por el cual se determina la remuneración de unos cargos de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público".

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobado por Acta número 25.

Bogotá, D. E., junio cuatro (4) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El Secretario General de la Presidencia de la República remitió a la Corte para la revisión constitucional, el día siguiente a su expedición, el Decreto Legislativo número 735 del 23 de abril de 1987, en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Decreto número 432 de 1969.

Para los efectos de la intervención ciudadana se dispuso la fijación en lista y el traslado al señor Procurador General de la Nación para su concepto, todo lo cual se cumplió en su debido término.

II. Texto del Decreto

El texto del Decreto que se revisa es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 735 DE 1987
(abril 23)

"Por el cual se determina la remuneración de unos cargos de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y,

CONSIDERANDO:

"Que mediante Decretos números 1807 de 1985, 468 y 565 de 1987 se atribuyó a algunos jueces especializados el conocimiento de ciertos delitos relacionados con el narcotráfico, la fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares;

"Que el juzgamiento oportuno de esos delitos contribuye de manera eficaz al restablecimiento del orden público;

"Que la competencia atribuida a los jueces especializados se hizo sin perjuicio de la ordinaria que les asignó la Ley 2ª de 1984;

"Que el conjunto de delitos atribuidos al conocimiento de estos jueces especializados implica responsabilidades adicionales de trabajo que debe reflejarse en la remuneración de sus cargos;

"Que los fiscales deben tener la misma categoría y remuneración que los jueces ante quienes ejercen su cargo, de conformidad con el artículo 142 de la Constitución Política,

DECRETA:

"Artículo 1° Mientras subsista el actual Estado de Sitio, los jueces especializados a que se refieren los Decretos números 1807 de 1985; 468 y 565 de 1987, así como los fiscales cuya designación fue autorizada mediante Decreto número 707 de 1987, tendrán la misma remuneración de los Magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial.

"Artículo 2° El Gobierno queda autorizado para efectuar las operaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto.

"Artículo 3° Este Decreto rige desde su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dada en Bogotá a 23 días del mes de abril de 1987.

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Gobierno, *Fernando Cepeda Ulloa;* el Ministro de Relaciones Exteriores, *Julio Londoño Paredes;* El Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* el Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo;* el Ministro de Defensa Nacional, General *Rafael Samudio Molina;* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* El Viceministro de Desarrollo Económico, encargado de las funciones del despacho del Ministro, *Fernando Panesso Serna;* el Ministro de Minas y Energía, y encargado de las funciones del despacho del Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Guillermo Perry Rubio;* la Ministra de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse;* el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, *Diego Younes Moreno;* el Ministro de Salud, *José Granada Rodríguez;* el Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez*".

III. Intervención ciudadana

Fijado el asunto en lista por la Secretaría General de esta Corporación, no se conoció ningún escrito de impugnación sobre la norma que se revisa.

IV. Concepto del Procurador General de la Nación

Dentro del término y ante esta Corporación, el señor Procurador presentó el escrito correspondiente a su concepto en el que solicita a la Corte declarar exequible el Decreto número 735 del 23 de abril de 1987, fundado en los razonamientos que siguen:

1. Que el Decreto que se revisa guarda relación de conexidad con el Estado de Sitio, pues las medidas adoptadas son desarrollo directo y complementario de los Decretos números 1038 de 1984, 1806 de 1985, 466 de 1987 y 707 de 1987.

2. Que dada la delicada misión que deben cumplir los jueces especializados así como sus correspondientes fiscales y el objeto de fijar una remuneración superior a dichos funcionarios, que responda directamente al peligro que deben asumir en relación con sus funciones, existe relación de conexidad entre la norma bajo examen y el decreto que declaró el Estado de Sitio.

3. Que a los mencionados jueces se les aumentó el cúmulo de trabajo, pues mientras subsista el Estado de Sitio deben conocer de los delitos de narcotráfico y conexos, de los de fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y conexos, a más de los señalados en la Ley 2ª de 1987, a lo que debe corresponder directamente un aumento proporcional en su remuneración.

Por lo tanto, el artículo 1° como el 2° del Decreto que se revisa no contrarían la Constitución. El objeto que pretenden es el restablecimiento de la normalidad y éste tiene obvia relación con las causas invocadas por el Decreto número 1038 de 1983. Además esta disposición se encuentra en el ámbito de las facultades que le corresponden al Gobierno por mando del artículo 121 de la Carta Fundamental.

V. Consideraciones de la Corte

1. *La competencia.*

De conformidad con el parágrafo del artículo 121 y con el artículo 214 de la Constitución Nacional, corresponde a la Corte Suprema de Justicia el control automático de constitucionalidad de los decretos expedidos por el Presidente de la República dentro de las competencias señaladas por el Estado de Sitio que prevé el artículo 121 de la Carta.

Por tratarse de un Decreto expedido en ejercicio de las facultades señaladas, la Corte Suprema de Justicia procede a revisar la constitucionalidad del Decreto número 735 de abril 23 de 1987 "por el cual se determina la remuneración de unos cargos de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público".

2. *Los requisitos formales.*

a) El Decreto Legislativo número 735 fue expedido por el Gobierno Nacional con fundamento en competencias que confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984;

b) El Decreto que se somete al examen automático de esta Corporación, lleva la firma del Presidente de la República y de todos sus Ministros;

c) El Decreto número 735 de 1987, según lo dispone el artículo 3° del mismo, rige a partir de la fecha de su publicación, la que se efectuó el 23 de abril de 1987 en el Diario Oficial número 37855;

d) De conformidad con la parte final del artículo 3° del Decreto en revisión se entiende con claridad que la norma es transitoria y no tiene vocación de permanencia pues, como lo indica, sólo suspende las disposiciones que le sean contrarias;

e) Además, el carácter transitorio de esta norma se desprende del enunciado con el que la condiciona el artículo 1° de la misma y que consiste en su aplicación "mientras subsista el actual Estado de Sitio".

El Decreto número 735 de 1987 cumple así con las exigencias formales señaladas para determinar su validez constitucional de conformidad con el artículo 121 de la Carta. Son constitucionales en consecuencia por este aspecto los artículos 1°, 2° y 3° de la norma revisada.

3. *La conexidad.*

Encuentra la Corte que existe conexidad formal y material entre lo dispuesto por la norma que se revisa y el Decreto número 1038 de 1984 ya que el propósito de remunerar adicionalmente a los jueces especializados y a los correspondientes fiscales a los que se les atribuyó mediante los Decretos números 1807 de 1985; 468, 565 y 707 de 1987 el conocimiento de ciertos delitos relacionados con el narcotráfico, la fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, todo sin perjuicio de la competencia que les señala la Ley 2ª de 1984, tiene como finalidad atender las necesidades, responsabilidades y funciones públicas; estas actividades jurisdiccionales adicionales, tienden al restablecimiento del orden público turbado y por lo mismo para su eficaz cumplimiento puede aumentarse su remuneración en la medida en la que se corresponda al incremento de las mismas. En tanto que este

aumento en la remuneración para los citados funcionarios jurisdiccionales y del Ministerio Público expresa la relación de conexidad exigida para las normas que desarrollen la declaratoria del Estado de Sitio, resulta constitucional el Decreto número 735 de 1987.

Se advierte además que esta Corporación revisó definitivamente la constitucionalidad de los Decretos números 1807 de 1985; 468, 565 de 1987 y los estimó ajustados a la Carta en Sentencias números 65 de agosto 27 de 1985, 39 del 30 de abril de 1987 y 43 del 19 de mayo de 1987, respectivamente, por lo que no se vuelve al estudio de este aspecto y se consideran como elementos de la parte motiva de este fallo.

Aunque corresponde en tiempos de paz al Congreso de la República fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de la Rama Jurisdiccional y hacer que las de los funcionarios del Ministerio Público correspondan a las mismas que señale para Magistrados y Jueces ante los que ejercen su cargo, según lo ordena el artículo 142 de la Carta, dentro de las competencias excepcionales que le atribuye al Presidente de la República el artículo 121 constitucional, están comprendidas las de dictar las normas legislativas que sin desbordar los límites precisos de la Constitución conduzcan al restablecimiento del orden público turbado. En desarrollo de estas competencias señaladas por la Constitución Nacional, el Presidente de la República fijó, con carácter transitorio, la escala de remuneración para los jueces especializados y fiscales que actúan ante ellos y, dentro del ejercicio de las facultades legales que asume el Presidente en Estado de Sitio, expidió el Decreto que se revisa sin que la Corte encuentre reparo alguno que hacerle por lo que lo declara constitucional.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declarar CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo número 735 de abril 23 de 1987, "por el cual se determina la remuneración de unos cargos de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

CARACTER EXCEPCIONAL DE LA INSTITUCION PREVISTA EN EL ARTICULO 121 C.N. LA CONEXIDAD QUE PREVE EL REFERIDO ARTICULO EXCLUYE TODA MEDIDA AJENA A LAS CAUSAS DE PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO Y, DESDE LUEGO, TAMBIEN AQUELLOS TENDIENTES A REMEDIAR CAUSAS REMOTAS O INDIRECTAS DE LA SITUACION ANORMAL QUE SE PRETENDE CONJURAR. NORMAS CONDUCENTES AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO EN LA ZONA GEOGRAFICA DE URABA. ESTADO DE SITIO.

Constitucional en todas sus partes el Decreto número 666 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 53.

Referencia: Expediente número 1638 (243-E).

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo número 666 de 1987 (abril 13). "Por el cual se dictan normas conducentes al restablecimiento del orden público en la zona geográfica de Urabá".

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobado por Acta número 25 de 4 de junio de 1987.

Bogotá, D. E., junio cuatro (4) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría General de la Presidencia de la República, ha remitido a la Corte copia auténtica del Decreto número 666 del 13 de abril de 1987 "Por el cual se dictan normas conducentes al restablecimiento del orden público en la zona geográfica de Urabá", expedido en desarrollo de las facultades excepcionales que otorga al Jefe del Estado el artículo 121 de la Constitución Política.

Procede la Corte a la revisión de su constitucionalidad, en acatamiento a lo dispuesto en el parágrafo del referido precepto.

II. Texto del Decreto

El decreto en revisión dice textualmente:

"DECRETO NUMERO 666 DE 1987
(abril 13)

"Por el cual se dictan normas conducentes al restablecimiento del orden público en la zona geográfica de Urabá.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y,

CONSIDERANDO:

"Que mediante Decreto número 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio de la República;

"Que la declaratoria de turbación del orden público tuvo como fundamentación esencial la actividad de grupos armados que han venido atentando reiteradamente contra el régimen constitucional;

"Que los habitantes de la zona geográfica de Urabá y las actividades económicas que se llevan a cabo en dicha región, se han visto gravemente afectados por el recrudecimiento de los hechos perturbadores del orden público;

"Que estos hechos atentatorios contra la vida y seguridad de los habitantes de la zona geográfica de Urabá, han afectado seriamente las actividades sociales, políticas y económicas de la región, lo cual ha creado condiciones propicias para la agudización de las causas perturbadoras del orden público;

"Que la zona geográfica de Urabá se caracteriza por una deficiente presencia de los instrumentos institucionales a través de los cuales el Estado puede desarrollar eficazmente sus fines de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y de prestar los servicios públicos que creen las condiciones mínimas que aseguren niveles adecuados de calidad de vida para sus habitantes;

"Que la deficiente presencia de los instrumentos institucionales del Estado, además de facilitar la ocurrencia de hechos perturbadores del orden público, agrava las causas perturbadoras del mismo por el malestar social que genera entre los habitantes al verse privados del acceso a los más elementales servicios públicos;

"Que el inciso segundo del artículo 7° de la Constitución Política, prevé el establecimiento de divisiones territoriales especiales para el desarrollo económico y social, lo cual constituye el fundamento de la creación de las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de las cuales se dota al Estado de un instrumento institucional de vital importancia para diseñar y ejecutar programas de desarrollo regional;

"Que la Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, creada y organizada por la Ley 65 de 1968 y el Decreto número 1100 de 1969, cumple

funciones de planeación, programáticas, decisorias y operativas fundamentales para el desarrollo de la región;

"Que el artículo 198 de la Constitución Política, consagra un instrumento institucional de vital importancia para la eficaz prestación de los servicios públicos, consistente en la asociación de los municipios bajo las condiciones que establezca la ley;

"Que el Decreto Extraordinario número 3448 de 1983, configura un estatuto especial que contempla el otorgamiento de estímulos e incentivos para las zonas fronterizas, en las cuales se encuentran comprendidos municipios de la región geográfica de Urabá;

"Que la Ley 76 de 1985 y el Decreto Extraordinario número 3085 de 1986, crearon la región de planificación del Occidente colombiano, como una división del territorio nacional para la planificación del desarrollo económico y social cuya cobertura comprende igualmente la zona geográfica de Urabá;

"Que la deficiente prestación de los servicios públicos de justicia, notariado y registro que es patente en Urabá, es uno de los obstáculos que dificultan la paz social en el área;

D E C R E T A:

CAPITULO I

De la Rehabilitación Económica y Social de la zona geográfica de Urabá

"Artículo 1° La zona geográfica de Urabá comprende los territorios de los municipios de Arboletes, Turbo, Necoclí, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá, Carepa, San Pedro de Urabá, Uramita, Dabeiba y Frontino en el Departamento de Antioquia; Acandí, Unguía y Riosucio en el Departamento del Chocó, y los Córdobas, Valencia, Tierralta y Canalete en el Departamento de Córdoba.

"Artículo 2° Además de las funciones que actualmente ejerce por mandato de la ley que la creó, sus reglamentos y sus estatutos, la Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, es la entidad descentralizada del orden nacional que coordinará la ejecución de la inversión pública en la zona geográfica de Urabá.

"Artículo 3° Los ministerios, departamentos administrativos, entidades descentralizadas del orden nacional, departamentos y sus entidades descentralizadas y la región de planificación del Occidente colombiano, remitirán previamente a la Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, los planes generales que proyecten realizar en la zona geográfica de Urabá.

"Artículo 4° El Departamento Nacional de Planeación y los organismos de planeación de los Departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, vigilarán que las entidades ejecutoras de la inversión pública en la región se sometan a la función coordinadora ejercida por Corpourabá.

"Artículo 5° Mientras dure turbado el orden público, las operaciones de crédito interno y externo que celebre la Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, para financiar los objetivos de los programas de rehabilitación económica y social de la zona geográfica de Urabá, contarán con la garantía solidaria de la Nación.

"Los contratos de empréstito correspondientes, sólo requerirán para su validez la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y firma de las partes.

"La garantía solidaria de la Nación sólo requerirá la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES–, y firma del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda y Crédito Público.

"Artículo 6° Con el fin de asegurar la financiación de los programas de rehabilitación económica y social en la zona geográfica de Urabá, la Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, podrá emitir bonos de deuda pública interna, en la cuantía y condiciones financieras que establezca la Junta Monetaria para el efecto.

"Artículo 7° Los contratos que celebre la Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, para la ejecución de los programas de rehabilitación económica y social, estarán sujetos a las normas que la Ley 19 de 1982 y el Decreto Extraordinario número 222 de 1983, y sus reglamentos, establecen para los contratos de los establecimientos públicos del orden nacional.

"No obstante lo anterior, tales contratos estarán exentos del requisito de aprobación del Consejo de Ministros y de la Secretaría de Administración Pública, en los casos en que este requisito se encuentra contemplado en las disposiciones citadas en el inciso anterior.

"Artículo 8° La Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, podrá imponer todas las servidumbres legales que sean necesarias para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de las obras contempladas en los programas de rehabilitación económica y social.

"En estos casos, la imposición de servidumbres se efectuará por mutuo acuerdo con los propietarios de los predios afectados, pero el precio no podrá exceder del avalúo que para el efecto practique el Instituto Geográfico 'Agustín Codazzi', el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA– o la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, según lo determinen las partes.

"Si el propietario del predio afectado no acepta el avalúo practicado, la imposición de la servidumbre se efectuará mediante el procedimiento judicial de que trata el artículo 111 del Decreto Extraordinario número 222 de 1983.

"Artículo 9° La Corporación Regional de Desarrollo de Urabá, podrá celebrar convenios con la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó y con la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, con el fin de ejecutar programas de rehabilitación económica y social.

"Artículo 10. Exclusivamente para los fines del presente decreto, modifícase la jurisdicción de la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó y de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge".

CAPITULO II

De la Asociación de municipios de Urabá

"Artículo 11. Con observancia de los requisitos previstos en el Título XVI del Código de Régimen Municipal, los municipios comprendidos dentro de la zona geográfica de Urabá, podrán asociarse para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos fundamentales para el cumplimiento de los programas de rehabilitación económica y social.

"La Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, podrá participar en la financiación de los proyectos que acometa esa Asociación sin las restricciones establecidas por el Decreto número 77 de 1987, artículos 57 y 58.

"Artículo 12. La participación de la Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, en los convenios que celebre con la Asociación de Municipios de Urabá, será financiada con sus recursos ordinarios, con los extraordinarios contemplados en el presente decreto, con los provenientes del Fondo de Regulación de Precios del Banano de Urabá, con los aportes especiales que se destinen en el presupuesto nacional y con los recursos del crédito interno y externo.

"Artículo 13. En lo no previsto en el presente capítulo, la Asociación de Municipios de Urabá se regirá por las disposiciones contenidas en el Título XVI del Código de Régimen Municipal.

CAPITULO III

De la Región Fronteriza de Urabá

"Artículo 14. La zona geográfica de Urabá, definida en el artículo 1° del presente decreto, tendrá el carácZer de región fronteriza.

"Artículo 15. Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, la zona geográfica de Urabá gozará de los estímulos e incentivos consagrados en el Decreto Extraordinario número 3448 de 1983.

CAPITULO IV

Fortalecimiento de la Administración de Justicia

"Artículo 16. Créase un Juzgado Penal Superior con sede en Turbo, el cual tendrá competencia sobre el Circuito de Turbo.

"Artículo 17. Créase un Juzgado Laboral del Circuito con sede en Apartadó, el cual tendrá competencia en los siguientes municipios: Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá. En consecuencia, el Juzgado Laboral del Circuito de Turbo tendrá competencia en los municipios de Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá.

"Artículo 18. Establécese un Juzgado de Menores en Turbo con competencia en todos los municipios a que refiere el artículo anterior.

CAPITULO V

Mejoramiento de los servicios públicos de Notariado y Registro

"Artículo 19. Establécese el Círculo Notarial y Registral de Apartadó, constituido por sendas oficinas de notariado y registro, con competencia en los municipios mencionados en el artículo 17. Por consiguiente, el Círculo Notarial y Registral de Turbo, comprenderá los mismos municipios sobre los que tiene competencia el Juzgado Laboral del Circuito de Turbo.

"Artículo 20. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 13 días del mes de abril de 1987.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Gobierno, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, *Fernando Cepeda Ulloa;* el Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* el Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo;* el Ministro de Defensa Nacional, General *Rafael Samudio Molina;* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* el Ministro de Desarrollo, *Miguel Alfonso Merino Gordillo;* el Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio;* la Ministra de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse;* el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, *Diego Younes Moreno;* el Ministro de Salud, *José Granada Rodríguez;* el Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez;* el Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo Correa;* el Jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, *Germán Montoya;* la Jefe del Departamento Nacional de Planeación, *María Mercedes de Martínez*".

III. Impugnaciones

Según informe de la Secretaría General de la Corte (folio 15 del expediente), fijado el proceso en lista por el término de tres (3) días, éste transcurrió en silencio.

No se considera, por extemporáneo, el escrito de impugnación presentado a la Corte el 7 de mayo de 1987 por el ciudadano Luis Javier Caicedo Pérez.

IV. Concepto del Procurador

Mediante oficio 1170 del 1° de mayo de 1987, el señor Procurador General de la Nación emitió concepto sobre la constitucionalidad del decreto en revisión. Señala el Ministerio Público que, en su sentir, dicho decreto es Exequible, por cuanto existe relación de conexidad entre su contenido y las razones de perturbación del orden público que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Sitio (Decreto número 1038 de 1984).

Sostiene además la Procuraduría:

"En punto al contenido del articulado del Decreto número 666 de 1987, no encuentra el Procurador que vulnere precepto alguno de la Constitución. En efecto, el artículo 1°, al establecer qué municipios conforman la zona geográfica de Urabá, no hace cosa distinta a actuar dentro de los lineamientos fijados por el inciso segundo del canon 7° Superior, en cuanto a que 'las divisiones relativas a la planificación y el desarrollo económico y social', pueden 'no coincidir con la división general (del territorio)'.

"Los artículos 2° a 10, del Decreto Legislativo número 666 de 1987, tampoco causan agravio a la Carta, porque contienen normas procedimentales y de atribución de funciones tanto en materia de contratos que habrá de celebrar la Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, en orden a la búsqueda de la rehabilitación social y económica de esa zona, como para la emisión de bonos de deuda pública, todo lo cual es prerrogativa del legislador, ordinario o extraordinario. Teniendo en cuenta las diversas actividades atribuidas a la Corporación Regional de Desarrollo de Urabá (Ley 65/68 y D.L. 908/73), la labor de coordinación de la inversión pública en la región, que le otorgó el decreto bajo examen, no es sino una ampliación de funciones que bien puede entregar el legislador sin afectar la Carta.

"Las demás medidas sobre remisión de documentos a Corpourabá para planes de desarrollo en la zona (artículo 3°), así como la vigilancia de las entidades que ejecuten dichos planes, por parte de organismos nacionales y departamentales (artículo 4°), son de mero trámite y no vulneran precepto constitucional alguno.

"Igual afirmación puede hacerse en torno a los requisitos fijados para la celebración de contratos de empréstitos y convenios, emisión de bonos de deuda pública e imposición de servidumbres, por cuanto la reducción de trámites busca, sin lugar a dudas, hacer más ágiles los mecanismos en estas materias, en procura de la pronta y efectiva puesta en marcha de los planes de rehabilitación de la zona de Urabá, a fin de restablecer la paz social y económica de la región.

"Respecto de los artículos 11 a 13 del decreto revisado, vale la pena anotar que como la propia Constitución Nacional en su canon 198 permite la Asociación de Municipios, habiendo deferido a la ley, y así ésta lo hizo, la fijación de las condiciones y parámetros dentro de los cuales habrá de celebrarse dicha Asociación, bien podía el legislador extraordinario modificarlos o adicionarlos, máxime si se tiene en cuenta que el fin supremo de estas medidas es el restablecimiento del orden público alterado, especialmente en la región de Urabá. Cabe anotar que la participación de Corpourabá en los proyectos que realice la Asociación de Municipios es otra atribución de funciones de orden legal, la cual deberá efectuarse, en lo no previsto, bajo las disposiciones del Decreto-ley número 1333 de 1987 (Código de Régimen Municipal).

"Los preceptos 14 y 15 del Decreto número 666 de 1987, al elevar a la categoría de región fronteriza a la zona geográfica de Urabá, buscan fundamentalmente darle un régimen preferencial con el fin de que pueda obtener recursos e incentivos que permitan el restablecimiento de la paz en la zona.

"El fortalecimiento de la Administración de Justicia, previsto en las disposiciones 16 a 18, es indudablemente exequible toda vez que con la creación de los juzgados allí señalados se busca acabar o, por lo menos, minimizar los efectos de la falta de una de las tres ramas del Poder Público (la Jurisdiccional) en la región, que ha traído de contera un clima de malestar social cuya incubación afecta el orden público, por la carencia de una justicia actuante.

"La creación del Círculo Notarial y Registral de Apartadó (artículo 19) va dirigida a obtener una eficiente prestación de ese servicio público, en una región como la de Urabá, en la que los problemas de toda índole, en especial de tierras, son semilla de numerosas y graves situaciones cuya acumulación sin solución, indudablemente afectan en forma directa el orden público. Siendo la ley la encargada de establecer los círculos notariales (artículo 188 C.N.), no cabe duda que no se vulneró la Carta, además de que existe la debida relación de conexidad entre este artículo y las causas que originaron la declaratoria de estado de sitio.

"El precepto 20 del Estatuto revisado determina su vigencia y 'suspende las disposiciones que le sean contrarias', con lo cual se aviene a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 121 de la Constitución Política".

V. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia.*

Por haberse expedido el Decreto número 666 de 1987 al amparo del artículo 121 de la Constitución, es la Corte Suprema competente para decidir en forma definitiva sobre su exequibilidad.

2. *Aspectos formales.*

Ya que el decreto materia del proceso lleva las firmas del señor Presidente y las de todos los Ministros del Despacho, cumple a cabalidad el requisito de forma que de manera expresa exige la Constitución y, por tanto, en este aspecto no viola el Estatuto Fundamental.

3. *El contenido del decreto.*

El decreto sometido a la revisión de la Corte define, indicando los municipios que la componen, la zona geográfica de Urabá y consagra una serie de disposiciones tendientes a su rehabilitación económica y social.

Se determina la naturaleza jurídica de la Corporación Regional de Desarrollo de Urabá –Corpourabá–, como entidad descentralizada del orden nacional y se ordena a los ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas del orden nacional que remitan previamente a dicha Corporación los planes generales que proyectan realizar en la zona geográfica de Urabá. Las entidades ejecutoras de la inversión pública en la región estarán sometidas, según dispone el decreto, a la función coordinadora ejercida por Corpourabá.

Por el artículo 5° del decreto se dispone que mientras dure turbado el orden público, todas las operaciones de crédito externo que celebre Corpourabá para

financiar los objetivos de rehabilitación económica y social de la zona, contarán con la garantía solidaria de la Nación, la cual únicamente requerirá la aprobación previa del CONPES y las firmas del Presidente de la República y el Ministro de Hacienda.

Se autoriza a Corpourabá para emitir bonos de deuda pública dentro de las condiciones que establezca la Junta Monetaria y se establece que los contratos administrativos que celebre la Corporación estarán exentos del requisito de aprobación del Consejo de Ministros y de la Secretaría de Administración Pública de la Presidencia en los casos que las disposiciones ordinarias exijan tales requisitos.

Mediante el artículo 8° se autoriza a Corpourabá para imponer todas las servidumbres legales que sean necesarias para llevar a cabo las obras contempladas en los programas de rehabilitación económica y social, por mutuo acuerdo con los propietarios de los predios afectados, pero se indica que el precio no podrá exceder del avalúo que para el efecto practique el Instituto Geográfico 'Agustín Codazzi', el Incora o la Caja de Crédito Agrario, según lo determinen las partes.

La Corporación Regional de Desarrollo de Urabá podrá celebrar convenios con las corporaciones autónomas del Chocó y de los Valles del Sinú y San Jorge, con el fin de ejecutar programas de rehabilitación económica y social. Dispone el artículo 10 que exclusivamente para los fines del decreto, se modifica la jurisdicción de dichas corporaciones.

Igualmente, se autoriza la asociación de municipios para ejecución de obras y la prestación de servicios públicos fundamentales para el cumplimiento de los programas de rehabilitación económica y social.

Se define la zona geográfica de Urabá como región fronteriza y, por tanto, se ordena que goce de los estímulos e incentivos consagrados en el Decreto Extraordinario número 3448 de 1983.

En materia de administración de justicia, se crea un Juzgado Penal Superior con sede en Turbo y competencia sobre el Circuito de Turbo, un Juzgado Laboral de Circuito con sede en Apartadó y un Juzgado de Menores en Turbo.

Finalmente, se establece el Círculo Notarial y Registral de Apartadó, constituido por sendas oficinas de notariado y registro, con competencia en varios municipios y se suspenden todas las disposiciones contrarias al decreto..

4. *Carácter excepcional de la institución prevista en el artículo 121 C.N.*

La declaratoria del Estado de Sitio otorga al Presidente de la República una serie de atribuciones adicionales o extraordinarias tendientes a enfrentar la crisis del orden público que ha dado lugar a ella.

Precisa el artículo 121 de la Constitución que gozará el Presidente en tales casos, además de las facultades legales, de aquellas que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación y de las que el Derecho de Gentes permite para la guerra entre naciones.

Los decretos que dicte el Jefe del Estado, si llevan las firmas de todos los Ministros son obligatorios y pueden suspender las leyes que resulten incompatibles con el Estado de Sitio.

Pero según lo ha subrayado la Corte varias veces, conforme se indicará más adelante, por tratarse de atribuciones excepcionales, no pueden entenderse ilimitadas sino, al contrario, su ejercicio es constitucionalmente admisible tan solo en relación directa e inmediata con las causas de la perturbación del orden público.

La conexidad que prevé el referido artículo excluye toda medida ajena a las causas de perturbación del orden público y, desde luego, también aquéllas tendientes a remediar causas remotas o indirectas de la situación anormal que se pretende conjurar. En reciente sentencia, relativa al Decreto número 555 de 1987 a través del cual se modificaban por la vía del Estado de Sitio algunas disposiciones sobre contratación administrativa en el caso de Telecom, expresó la Corte:

"(....) de conformidad con el principio de derecho según el cual toda norma excepcional es de interpretación estricta, no se ajustan a la Carta los actos de gobierno que, invocando las especialísimas facultades propias del Estado de Sitio, pretendan regular asuntos ajenos al específico objetivo de restablecer el orden quebrantado, o los que, bajo pretexto de hacerlo, consagren disposiciones cuya materia apenas indirectamente guarda relación con los mismos fines.

"El artículo 121 C.N. resulta quebrantado cuando se lo interpreta y aplica en el sentido de que, durante el Estado de Sitio, está facultado el Presidente para suspender cualquier ley de la República o decreto con fuerza de tal.

"La facultad, perentoria y claramente delimitada por el Constituyente, se reduce a suspender algunas leyes; las que sean incompatibles con el Estado de Sitio, no las demás.

"En otros términos, las leyes vigentes, para que sean susceptibles de suspensión por la vía excepcional que se comenta, deben chocar con la vigencia misma del Estado de Sitio en términos tales que su aplicación no pueda ser simultánea o compatible con las medidas que se haga urgente adoptar para sortear la crisis de orden público que afecta a la Nación. Una norma legal que no se vea en esta concreta y precisa situación no podría ser suspendida al amparo del artículo 121 de la Carta y, si así sucediere, sería inconstitucional el decreto legislativo que hubiere ordenado la suspensión o preceptuado en contra de su contenido".

Es más: el artículo 121 C.N. habla de los *"precisos límites"* que le trazan a la acción gubernamental dentro del Estado de Sitio las leyes, la Constitución y el Derecho de Gentes, de donde se sigue que la competencia legislativa del Gobierno al amparo de dicho régimen no tiene el mismo alcance que la ordinaria del Congreso, sino que debe fundarse en atribuciones que fluyan de los ordenamientos referidos.

Por otra parte, después de la Reforma Constitucional de 1968, una de cuyas innovaciones fundamentales consistió en distinguir los conceptos de orden público político y orden público económico y social, no es de recibo la utilización de las facultades previstas por el artículo 121 de la Carta para dictar normas relativas a

materias socio-económicas cuyo tratamiento, ante la presencia de hechos sobrevinientes que representan crisis o amenazas de crisis, está regulado por el artículo 122 de la Constitución.

Precisamente uno de los motivos que llevaron al Constituyente del 68 a introducir la expresada distinción fue el continuo y extensivo uso del artículo 121 para poner en vigencia disposiciones de carácter económico, por razón de cuya misma naturaleza se hacía imposible levantar el Estado de Sitio con la consiguiente pérdida de vigencia de esas normas, lo cual originaba a su vez la necesidad de que ellas fueran adoptadas como legislación permanente por el Congreso de la República. De allí también que, según señala el artículo 122, los decretos que se dicten durante el Estado de Emergencia tienen vigencia aún después de expiradas las atribuciones de excepción, al paso que los del Estado de Sitio la pierden automáticamente cuando éste se levanta.

En este orden de ideas, el Decreto Legislativo número 666 de 1987, objeto del presente proceso, incurre en violación del estatuto constitucional, ya que las medidas que por él se adoptan no han sido precisamente autorizadas por la ley, la Constitución o el Derecho de Gentes, así pudiera considerarse en gracia de discusión, que guardan relación directa e inmediata con la perturbación del orden público.

En el caso del Decreto número 666 de 1987, las medidas por medio de él adoptadas son todas de la competencia general y ordinaria del Congreso de la República; así sucede con la definición de una zona geográfica y su posterior clasificación como región fronteriza (art. 76, ordinal 5° C.N.); las modificaciones o adiciones a los estatutos básicos de las corporaciones autónomas regionales (art. 76, ordinal 10 C.N.); las modificaciones al régimen legal de contratación administrativa (art. 76, ordinal 2° C.N.); las normas sobre imposición de servidumbres (art. 76, ordinal 2° C.N.); las disposiciones sobre asociación de municipios (art. 198, inciso 2° C.N.); la ampliación de los estímulos e incentivos consagrados en el Decreto Extraordinario número 3448 de 1983 (art. 76, ordinal 2° C.N.); la creación de Juzgados (art. 58 C.N.) y el establecimiento de un Círculo Notarial y Registral (art. 188 C.N.).

Todas estas materias corresponden al ejercicio de la función legislativa ordinaria y mal puede asumirlas el Gobierno Nacional por vía extraordinaria (art. 121 C.N.) si como sucede en esta oportunidad, no ha sido autorizado para regularlas en la forma precisa que exige el artículo 121 C.N.

Decisión

Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarar INCONSTITUCIONAL en todas sus partes el Decreto Legislativo número 666 (abril 13) de 1987, "por el cual se dictan normas conducentes al restablecimiento del orden público en la zona geográfica de Urabá".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia,

HACE CONSTAR:

Que el Magistrado Fabio Morón Díaz, se retiró de la sesión de la Sala Plena en la cual se discutió y aprobó la sentencia anterior, antes de iniciarse el estudio de la ponencia respectiva.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

EXPLICACION DE VOTO

Expediente número 1638 (243-E).

D.L. 666 de 1987.

Dada la importancia del fallo que antecede, considero oportuno hacer algunas consideraciones complementarias respecto de las tesis que allí se enuncian.

La sentencia parte de la base de que son dos los límites de los poderes gubernamentales dentrro del Estado de Sitio, a saber: la *precisión* de las facultades de que puede hacer uso el Gobierno y la *conexidad* que las medidas que tome para conjurar la crisis tengan con los motivos que hayan dado lugar a la declaratoria de dicha situación de emergencia.

La doctrina y la jurisprudencia colombianas han sido tradicionalmente laxas al estudiar esas facultades, hasta el punto de que en la práctica suele considerarse que el texto del artículo 121, que permite la suspensión de las leyes que sean incompatibles con el Estado de Sitio, de hecho pone en manos del Presidente toda la competencia legislativa del Congreso, con la salvedad de que esa atribución es transitoria y limitada por la conexidad referida. Pocas veces se lee con cuidado el primer inciso del artículo,

que muestra sin lugar a dudas que no hay tal traspaso global de competencia legislativa a favor del Gobierno, pues éste, en virtud del decreto de Estado de Sitio, sólo entra a gozar de las facultades que le señalan las leyes, la propia Constitución y el Derecho de Gentes o Derecho Internacional Público "para tiempos de guerra o de perturbación del orden público", a lo que agrega el inciso segundo que esas facultades "trazan precisos límites" a la acción gubernamental.

Se ha observado, con razón, la diferencia tan notable que desde este punto de vista se da entre el Estado de Sitio y el Estado de Emergencia Económica, pues en éste las atribuciones legislativas del Gobierno sólo están limitadas por algunas prohibiciones constitucionales (la de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores y la de establecer tributos permanentes) y por la conexidad con los motivos de su declaración. El texto del artículo 121 dispone, en cambio, sobre la precisión de las facultades legislativas del Gobierno, las cuales pueden proceder, en primer término, de la propia *ley*. La investigación histórica ha demostrado con buenos argumentos que a ello se refiere precisamente la institución de las facultades extraordinarias, que por una mutación constitucional ha tomado desde hace años otro giro, desconectándose de la del Estado de Sitio a la que estuvo subordinada en sus orígenes. Ahora se habla más bien de la posibilidad de una "Ley Marco" que señale las atribuciones legales del gobierno en Estado de Sitio y le permita al Congreso ejercer el control que desde un principio se consideró que le correspondía para impedir desbordamientos dentro de ese régimen de excepción.

En la Reforma de 1968 se introdujo una modificación de fondo al ordenamiento del Estado de Sitio, destinada a señalar que bajo su vigencia no se suspende la Constitución, sino que entra a regir una normatividad especial que permite aplicar todas aquellas disposiciones constitucionales previstas para "tiempo" o "caso de guerra", y dejar de hacerlo respecto de las concebidas exclusivamente para "tiempo de paz".

En la ponencia para primer debate en el Senado, rendida sobre el proyecto de Acto Legislativo número 46-5-66, se precisaron las facultades que la *Constitución* autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público, en términos que conviene reproducir aquí:

"Estas facultades están enumeradas en la Constitución misma y son: el artículo 28, que autoriza retener a las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública y cuando existan graves motivos para temer perturbación del orden público; el artículo 33 sobre decretos e indemnizaciones para expropiaciones en tiempo de guerra; el artículo 38 sobre circulación de impresos por los correos; el artículo 42, de restricciones a la libertad de prensa; el 43 sobre imposición de contribuciones por autoridades distintas al Congreso, las Asambleas y los Concejos; el 61, sobre acumulación de la autoridad política o civil y la judicial o la militar y el artículo 206, que faculta para percibir impuestos o contribuciones y hacer erogaciones que no figuren en el Presupuesto.

"Estas facultades, y las anteriores, son las que, por los casos más frecuentes de orden público, empleará el Gobierno. De su lectura se desprenden poderes concretos y limitados del Ejecutivo y la imposibilidad de abordar otros campos de legislación"

(Historia de la Reforma Constitucional de 1968, Imprenta Nacional, Bogotá, pág. 487. Lo subrayado no es textual).

Es claro, entonces, que el Estado de Sitio no abre campo a las facultades implícitas de que se habló en otras épocas; ni le permite al Gobierno tomar medidas que el propio Congreso no podría adoptar, según se sostuvo por la Corte en 1945; como tampoco le traslada a aquél la competencia legislativa del Congreso, pues las disposiciones que tome tienen que encontrar apoyo preciso e inequívoco en leyes especiales, en los textos constitucionales referidos o en el *Derecho Internacional Público*. Pocas veces se ha explorado este último campo, en el que, al contrario de lo que creyó el Gobierno de 1928, que lo invocó para extender la jurisdicción militar o los tristemente célebres episodios de las Bananeras, es más lo que limita que lo que le amplía los poderes ejecutivos, pues el Derecho Internacional Humanitario y el de los Derechos Humanos, evidentemente aplicables a los casos de turbación del orden público interno, precisamente buscan moderar los poderes militares y policivos para proteger unos derechos básicos que se consideran como patrimonio irrenunciable de la civilización.

La Corte, a partir de la sentencia de 5 de marzo último que declaró la inexequibilidad del Decreto Legislativo número 3671 de 1986, ha dado un viraje fundamental en su interpretación de las facultades de Estado de Sitio, que ahora reafirma con el fallo que motiva estas explicaciones. Puede decirse que de este modo le está dando aplicación estricta a la Reforma Constitucional de 1968, pues el artículo 121 venía siendo interpretado, en este tema de las facultades, a la luz de criterios amplios que prevalecieron antes de ese año y contra los que en tal oportunidad se reaccionó expresamente, por el desorden institucional a que condujeron en el pasado.

Sobre el segundo parámetro con que deben juzgarse las medidas de Estado de Sitio, ha habido abundante jurisprudencia de esta Corporación en los últimos años. Pero este fallo y el reciente de 19 de mayo último, que declaró la inexequibilidad del D. L. número 555 de 1987, hacen un importante aporte doctrinario consistente en destacar que la *conexidad* de las medidas con los motivos que han dado lugar a la declaratoria de Estado de Sitio debe ser *directa*, referida a tales motivos y no a otros que pueden catalogarse como concausas, o causas ajenas o posteriores.

Evidentemente, la situación social y económica del país; el desempleo; los déficit de las finanzas estatales; la inadecuada prestación de los servicios públicos esenciales; la inequitativa distribución de los ingresos; la deficiente asignación de los recursos para atender las necesidades colectivas; el desequilibrio estructural de la balanza de pagos; el endeudamiento interno y externo; etc., con factores que inciden en la perturbación del orden público en el territorio nacional y especialmente en algunas regiones del país en las que, por distintas circunstancias, entra en juego un cuadro clínico alarmante. Pero, si al amparo del artículo 121, se aceptase la posibilidad de establecer un plan o programa de desarrollo regional, ¿en qué quedarían el artículo 122 de la Constitución y la preocupación del Constituyente de 1968 por limitar los poderes excepcionales del Estado de Sitio y darles a los fenómenos socio-económicos un tratamiento diferente que no ponga en cuestión las libertades públicas?

De acuerdo con el análisis precedente, la mayor parte del articulado del Decreto Sub-judice peca por no encontrar el apoyo *preciso* en facultades legales, constitucionales o internacionales que el artículo 121 C. N. exige para este tipo de medidas, algunas de las cuales, como la creación de Asociaciones de Municipios o la de Círculos de Notariado y Registro tienen una clara vocación de permanencia que contradice la transitoriedad propia de las disposiciones de Estado de Sitio.

Cierto es que la Corte ha aceptado, incluso recientemente, que este régimen de excepción le permite al Gobierno crear juzgados, lo que puede encontrar base constitucional en el artículo 61 de la Carta, pues si éste permite trasladar competencias jurisdiccionales a autoridades civiles, es lógico que dé lugar también a modificar la competencia de las autoridades judiciales y aún a la creación de nuevos juzgados.

Pero en el caso a estudio, la falla ha radicado en la *conexidad*. En efecto el D.L. número 1038 de 1984, que declaró el Estado de Sitio aún vigente, se fundó en dos consideraciones especiales: la existencia de grupos armados que han atentado contra el orden constitucional y la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico. Entonces, si se tratase de crear juzgados para conocer exclusivamente de delitos relacionados con tales fenómenos, el decreto estaría en este punto ajustado a la Carta. Pero los juzgados superiores conocen además de otros delitos que nada tienen que ver con la motivación de Estado de Sitio, más lejos aún de la cual se encuentran los laborales y los promiscuos de menores.

Quizás pueda considerarse por algunos que la Constitución, cuando se la interpreta de esta manera, se convierte en una camisa de fuerza que ata las manos al Gobierno y le impide actuar prontamente para resolver los problemas públicos más acuciantes. *Dura lex sed lex*, decían los romanos con muy buenas razones, pues la laxitud en la aplicación de las reglas fundamentales termina distorsionando el sentido de éstas, y abre el camino para que las instituciones se desquicien y la sociedad arriesgue caer bajo coyundas menos soportables que las del ordenamiento constitucional, a saber: la del despotismo o la de la anarquía.

Fecha *ut supra*.

Jesús Vallejo Mejía.

SALVAMENTO DE VOTO

Referencia: Expediente número 1638 (243-E).

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo número 666 de 1987 (abril 13). "Por el cual se dictan normas conducentes al restablecimiento del orden público en la zona geográfica de Urabá".

Con el respeto que nos merece la decisión mayoritaria, expresamos nuestra discrepancia con el fallo que puso fin a la revisión constitucional de la referencia, en cuanto considera que absolutamente todas las disposiciones del Decreto Legislativo número 666 de 1987 son inconstitucionales. Pues los suscritos estimamos que los artículos 17, 18 y 19 del expresado decreto, que crean un Juzgado Penal Superior con sede en Turbo, un Juzgado Laboral del Circuito con sede en Apartadó y un Juzgado de Menores con sede también en Turbo, se avienen con los preceptos de la Carta Fundamental.

En efecto, el artículo 61 de la Constitución Política permite al Gobierno en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 121 del citado estatuto establecer que autoridades políticas o civiles ejerzan simultáneamente la autoridad judicial. Puede también, con mayor razón por satisfacer el principio de la especialidad, crear juzgados, especialmente penales, que investiguen y conozcan de los hechos que produzcan graves perturbaciones del orden público en una zona geográfica específica del país.

Si bien es cierto, como se ha afirmado, que al comparar los hechos que sirvieron de causa a la declaratoria del Estado de Sitio en toda la República mediante el Decreto número 1038 de 1984 con las motivaciones del Decreto número 666 de 1987 declarado inexequible, se observa que podrían no armonizar completamente, no obstante nosotros consideramos que ello no es óbice para que el Gobierno pueda tomar medidas como las contenidas en los citados artículos 17, 18 y 19.

Ha sido tesis reiterada de la Corte que las medidas que adopte el Gobierno en ejercicio de las facultades de excepción que le confiere el artículo 121 de la Constitución deben conservar el necesario nexo de causalidad con los hechos que originaron la perturbación del orden público. Sin embargo, estimamos que lo dicho debe entenderse en el sentido de que las medidas tomadas por el Ejecutivo sean pertinentes a conjurar las causas que perturban gravemente el orden público. Es nuestra opinión que si declarado turbado el orden público y en Estado de Sitio toda la República o parte de ella, a causa de determinados hechos que justificaban tal declaratoria, éstos siempre serán puntos de referencia para deducir si existe el nexo de causalidad de las medidas tomadas con dichos hechos; pero si luego de la declaratoria del Estado de Sitio y durante su vigencia *sobrevienen* nuevos hechos perturbadores del orden público, que desde luego no fueron tenidos en cuenta en el decreto de declaratoria, puede entonces el Gobierno tomar todas las providencias que tengan por objeto combatir las nuevas causas de perturbación grave o de conmoción interior sin que para ello se requiera de un decreto complementario de declaratoria del Estado de Sitio que señale los nuevos motivos, porque el Presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa tiene en todo tiempo la atribución que le da el ordinal 7° del artículo 120 de la Carta Política de "conservar en todo el territorio el orden público, y *restablecerlo donde fuere turbado* (se subraya)". No necesita, pues, para hacer uso de las facultades excepcionales del artículo 121 tal declaratoria complementaria sino verificar que las medidas que adopte para restablecer el orden público gravemente perturbado por los nuevos hechos tengan el necesario nexo de causalidad con ellos (art. 120 inciso 7° C.P.).

Es evidente que en la zona geográfica de Urabá la falta de Jueces suficientes, particularmente penales y de menores, es una de las causas de impunidad, la que a su vez ha venido estimulando el estado grave de violencia que allí se vive. Por esta razón los Juzgados que se creaban hubieran podido ser un instrumento adecuado de orden institucional para combatir la impunidad o normalizar las relaciones creadoras de conflictos, que tanta alarma han creado en la región y aun en el país.

Bogotá, junio 11 de 1987.

Jacobo Pérez Escobar, José Alejandro Bonivento Fernández, Lisandro Martínez Zúñiga.

SALVAMENTO DE VOTO

Referencia: Expediente número 1638 (243-E).

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo número 666 de 1987.

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Cuando se advierte el contenido y alcance de este decreto y las razones que ha ofrecido la mayoría de la Sala Plena para declarar su constitucionalidad, no puede menos que traducirse el malestar de ésta en esta exclamación: por Dios, ¡quién ayuda al Gobierno en la elaboración de sus normas! Y viene al caso, entonces, propugnar por una solución que se apoya en una reforma de la Carta (C.N. 141-1). Qué bueno, para bien de todos, que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado desapareciera como organismo vicariante del Gobierno y se la reemplazara, dentro del Consejo de Estado, por una Sala de Asuntos Electorales, y, dentro del Gobierno, por un gran departamento jurídico que concentrara e irradiara acción unitaria en todos estos menesteres jurídicos, administrativos y legislativos. Todos saldríamos ganando en eficacia. La Corporación Contencioso-Administrativa, borrando el malestar que denuncian estos cuatro interrogantes: a) ¿Será conveniente que la contratación administrativa, que contiene tantos intríngulis, tantas subterráneas corrientes, tantas sorpresas, comprometa el juicio histórico de una entidad que sólo ha podido mirar con rapidez la notoriedad jurídica?; b) ¿Será deseable que en posteriores juicios de reclamación, la parte que se dice perjudicada tenga que luchar de entrada con el *nihil obstat* que en su oportunidad impartió la Sala de Consulta?; c) ¿Será alentador el espectáculo de una Sala del Consejo de Estado afirmando la procedencia de un acto de la administración y otra diciendo que no debió hacerse como aquélla lo indicó y deduciendo múltiples consecuencias jurídico-patrimoniales?, y d) No es alarmante el que según se quiera la respuesta se pregunte y que a título de consulta se invadan terrenos no sólo prohibidos sino inconvenientes y perjudiciales?

Y en cuanto al Gobierno, qué alivio traería a la técnica de la legislación ordinaria o extraordinaria, y también a la gestión colegisladora, unificar toda esta actividad dispersa en un gran organismo de labor y consulta jurídica, sin que se observe el caótico espectáculo de cada ministerio inventando y acudiendo a una forma *sui generis* de legislar, sin que nadie diga la última palabra, pula y unifique criterios y haga las cosas inteligibles. No es que se pretenda que cada sector de la administración central pierda iniciativa. Lo que se insinúa es que cada dependencia, después de madurar ideas y de concretar pretensiones, se someta a un organismo gubernamental de alta jerarquía intelectual, para que cribe intereses y precipitudes, y decida lo que debe hacerse y cómo debe hacerse técnicamente, en este terreno de estricta juridicidad. Para qué ponderar los beneficios de una institución de esta naturaleza. Qué gran ayuda sería para el Gobernante y qué excepcional estabilidad se reflejaría en sus programas. Lo peor que está ocurriendo, y la cuestión viene desde muchos años atrás, es que los desaciertos, en este campo, truncan magníficas realizaciones, empeoran los problemas y la comunidad advierte estupefacta un constante avanzar, retroceder y parar.

Analizando ya el decreto mismo, se debe glosar la decisión de la mayoría en la siguiente forma:

A. La motivación de la sentencia adoptada por mayoría, no obstante que mejoró notablemente después de la discusión suscitada en Plenaria, especialmente en lo de advertir al Gobierno que las medidas decretadas se relacionaban con el elenco de las atribuciones del artículo 122 de la C.N., es susceptible de no pocas críticas.

Al efecto se comenta:

a.1. Resulta impertinente aludir a los "precisos límites" que traza el artículo 121, pues esta conminación y tutela vienen al caso si la actividad de excepción realizada por el Gobierno puede enmarcarse dentro de lo que prevé este artículo. Si está por fuera del mismo, no hay para qué aludir a la posibilidad de cumplir con un requisito que, por sustracción de materia, no puede satisfacerse;

a.2. Igual consideración merece lo atinente a la "relación directa e inmediata con la perturbación del orden público", porque si de entrada la naturaleza de las medidas corresponden al artículo 122, no hay para qué imaginar lo que se tendría que hacer si las mismas correspondieran al citado artículo 121;

a.3. Mencionar lo de "la competencia general y ordinaria del Congreso de la República" constituye una distinción que no tiene característica de tal. Si lo que puede hacer éste, como lo supone inadmisiblemente la mayoría de la sala, resulta incompatible con el ámbito de las facultades del artículo 121, quedará menos que imposible hallar alguna perspectiva de aplicación del mismo y, también, del artículo 122. En uno y otro evento, el Gobierno asume temporal y excepcionalmente atribuciones que corresponden al Congreso, pero que aquél retiene y cumple por motivos de "guerra exterior o conmoción interior" o la perturbación o amenaza del orden económico o social. Es un campo de actividad común que sólo difiere en cuanto a las circunstancias que la autorizan y el efecto que concretamente la Constitución le asigna. No es ésta, pues, una diferencia específica, que sí podría marcarse para unas cuantas atribuciones propias del Congreso, reservadas a él aún en tiempo de excepción o de emergencia, pero que no se rozan ni siquiera tangencialmente con el contenido y alcance de este Decreto.

B. Es innegable que el abuso de las facultades concedidas por el artículo 121 llevó a su reforma, mediante el Acto Legislativo número 1 de 1968, para distinguir lo que era propio de este precepto (los aspectos policivos y políticos del orden público) y lo que correspondía a otra institución, la que vino a acuñarse en el artículo 122 (los aspectos sociales y económicos). Tampoco se remite a duda que bajo los efectos de lo que un Expresidente de la República llamó la "fiebre obsidional", propia de los que están bajo cerco (primigenia matriz del llamado Estado de Sitio), se pretendía remediar toda clase de males, dificultades y satisfacer todos los deseos. De ahí la ilimitada extensión de esas atribuciones. Pero ahora también puede decirse que la "fiebre obsidional" ha cambiado de paciente y proyecta sus consecuencias en dirección distinta pero igualmente nociva. Para preservar la pureza del artículo 121 ya se descarta implacablemente toda medida que tenga asomo económico o que insinúa

cualquier matiz social. Por eso algunos mandatos del comentado Decreto, que se ajustan plenamente al artículo 121, resultan inconstitucionales por el adarme económico que pueden contener. No hemos salido, entonces, de la convalecencia y el terror de la "fiebre obsidional" se ha trasladado a quienes deben ejercer el control constitucional. En este ambiente es casi imposible acudir a cualquier clase de dialéctica para denunciar esta especie de deformaciones y arbitrar una solución más racional. Conviene recordar que los extremos, a fuerza de tocarse se confunden e identifican, siendo por tanto tan criticable la permisión de los abusos del artículo 121 (antes se podía todo) como la rigidez e intolerancia que pretende volver la norma absolutamente inflexible (ahora nada se puede), al punto que no encuentra acomodo en la realidad nacional. No puede perderse de vista que "el orden es integral, uno solo, y sus distintos aspectos son interdependientes y se influyen recíprocamente".

De ahí, entonces, que en el artículo 121 sea dable distinguir dos facetas: 1. Lo que podría llamarse el orden público puro, que suele emparentarse con medidas de carácter exclusivamente policivo y que suscitan remedios de represión; y, 2. Un orden público con connotaciones económicas, pero sin pretenderse una intervención fundamental en la economía o en la organización social. Estos aspectos, de aparecer, tienen un perfil meramente accidental y secundario. No es el objetivo principal ni trascendente de la medida. Surge como ingrediente propio y consustancial de la medida que tiene que ver con ese perturbado orden público, cuyo nervio lo conforman elementos policivos y políticos.

Lo que importa, en estos últimos, es que la conmoción interior o el estado de guerra sigue destacándose como la causa que es necesario reducir.

En cambio, el artículo 122 apunta directamente a una intervención económico-social, que bien puede haberse suscitado de manera sorpresiva o imprevista, o en factores estructurales o situaciones crónicas, pero que los remedios legales disponibles y ordinarios no alcanzan a conjurar ni siquiera en forma transitoria hasta tanto aparezca la renovación legislativa por sus cauces naturales.

Con base en estas reflexiones juzgo que la mayoría de las normas contenidas en los Capítulos I, II, III y V del Decreto número 666 de 1987, resultan viables y no pueden llevarse fatalmente al artículo 122, porque sería conjurar una explicable extensión de las situaciones del artículo 121, por las razones apuntadas, con un remedio más heroico y devastador en el plano institucional, pues el muy delicado instituto que consagra el citado artículo 122, se vería desbordado y en manifiesto desajuste.

La tesis del artículo 121 con relativas y obligadas referencias económicas, todavía resulta más plausible cuando se advierte que no es lo mismo la creación de entes u organismos económicos o la instauración de todo un sistema de servicios que la ampliación de los existentes o la implementación de su mayor cobertura y eficiencia, cometidos estos últimos del decreto analizado. Lo que cuenta, entonces, es que se trata de soluciones que guardan una esencial relación con el orden público perturbado en los marcos geográficos en él indicados, que, obligadamente, se tienen que mirar como benéficos y efectivos, y, que requieren de esos correlatos económicos.

Finalmente, en cuanto a los juzgados allí creados, las razones que en salvamento aparte suscriben otros magistrados, me merecen toda aceptación. Basta, entonces, agregar estos ligeros comentarios: alguien podrá dudar que la delincuencia (entre ella el narcotráfico y las acciones dirigidas a desestabilizar institucionalmente al país [rebelión, sedición, asonada]) y los atentados contra la vida, señorean de tal modo en la región de Urabá y las zonas aledañas de Chocó y Córdoba, que ciertamente se la han tomado. La inseguridad es total y su auge se muestra incontenible. Para saber todo esto basta la lectura de cualquier periódico, la audición de cualquier noticiero o las voces angustiadas de los que allí moran y tratan de trabajar y sobrevivir. Esta es una evidencia nacional y aceptarla constituye no una "gracia" de la discusión, sino el sometimiento a la realidad. Esta es la razón de ser del Juzgado Superior que allí se ha intentado crear, remedio corto pero necesario. Que ese Juzgado, en el cual merece advertirse la suspensión del jurado de conciencia, ya que no se prevé su inmediata integración, lo cual le daría mayor eficacia y se prestaría a menos entrabamientos originados en la constante y calificada amenaza, pueda en un momento determinado conocer de otras varias infracciones (un homicidio culposo, una falsedad documental, un aborto o un abandono o exposición de niños –artículo 34 C. de P.P.–), no es motivo para descartar el nexo causal con la conmoción interior ya especificada y que refluye de manera ostensible sobre atentados a la vida o desconocimiento de los órganos de expresión de la soberanía. Lo que correspondía hacer era la creación con toda la plenitud de sus atributos. Lo grave hubiera sido que se le hubiera cercenado a dicho juzgado sus otras competencias. Seguramente que de haberse presentado esa alternativa, la inconstitucionalidad habría aparecido a expensas de esta mutilación o discriminante regulación. El Gobierno en vez de trasladar uno de los tantos juzgados superiores concentrados en la ciudad de Medellín, a la localidad de Turbo, lo cual indudablemente habría dado lugar a mayores censuras, ha creado uno más y le ha señalado su territorio, conforme a los requerimientos de su creación. Tal vez lo único que en este particular merece reparo, es la avaricia gubernamental al no disponer mayor número de juzgados superiores, de circuito y municipales, en ese y otros lugares de conmoción y desborde delincuencial, en donde la impunidad aumenta y también la inseguridad, porque no hay jueces, ni policía judicial, ni establecimientos de reclusión suficientes para enfrentar este flagelo nacional.

Otro tanto debe decirse del juzgado de menores, pues la delincuencia en esa región, así solo se considerase la relacionada con el auge y potencia de la actividad criminosa que dio lugar al actual Estado de Sitio, está en cabeza de menores de edad, constituyendo problema judicial que empeora el trastornado orden público, la ausencia de jueces de esta categoría y de instituciones de reacondicionamiento social que puedan frenar en parte esta crítica situación.

Así mismo el juzgado laboral es otra previsión nítidamente procedente. A nadie escapa que la falta de jueces de esta índole, en tan convulsionada región, que lleven pronta y expedita solución a los problemas laborales suscitados entre patronos y trabajadores, influidos unos y otros por las más disímiles fuerzas e intereses, que desembocan siempre en las vías de hecho, es una circunstancia muy calificada del perturbado orden público que padece esa región. La medida, que no desestructura la administración de justicia, que no le resta autonomía e independencia a la rama jurisdiccional, que no quebranta órdenes jerárquicos, que no introduce juzgamien-

tos abusivos y representa todo un sistema de legalidad, no puede mirarse como contraria a la Constitución sino plenamente ajustada a la misma en cuanto toca a un legítimo ejercicio de su artículo 121.

Mientras llega una actividad legislativa normal, que tenga el buen sentido de responder a una eficaz y sensata reforma territorial y se decida a crear los organismos judiciales y los institutos afines a éstos, necesarios al estado actual de avanzada de la delincuencia, el Gobierno hace bien y se le debería exigir más en este campo, al crear nuevos juzgados y tribunales, iguales a los existentes o especiales, significando esto último apenas una singular dedicación a actividades instructoras o de juzgamiento o al desempeño en un determinado territorio o para una clase de delitos, pero todo dentro del orden institucional mencionado de integración en la rama jurisdiccional.

Lástima que esta realidad no pueda ser observada bajo los efectos de la "fiebre obsidional".

Con el debido respeto.

Gustavo Gómez Velásquez.

Salvamento de voto

Referencia: Expediente número 1638 (243-E).

Revisión Constitucional del Decreto Legislativo número 666 de 1987.

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Es evidente que las facultades concedidas al Gobierno Nacional por el artículo 121 de la Constitución Nacional son precisas y limitadas, pero la interpretación que ha de darse al contenido gramatical de la mencionada norma, no puede ser tan exegético que desconozca la realidad de guerra que en este momento vive el país y que obligan al Gobierno Nacional a tomar medidas excepcionales que tiendan al restablecimiento del orden público, precisamente afectado por circunstancias de especial violencia.

El Gobierno está instituido para velar por la vida, honra y bienes de sus súbditos y en el cumplimiento de esta misión constitucional y legal, debe adoptar las medidas que la Carta y la ley le permitan y no puede afirmarse tan ligeramente que algunas de las medidas adoptadas en el Decreto número 666 de 1987 hubieran podido tomarse por medio de una ley ordinaria y no por medio de las facultades concedidas por el 121, porque debe recordarse que la acción gubernativa debe ejercerse día a día y que precisamente por las circunstancias extraordinarias que se viven, es imposible que muchas de esas medidas, puedan dar espera, como sería en el caso concreto esperar la reunión ordinaria del Congreso Nacional, en receso en el momento en que se hizo indispensable la toma de estas medidas.

Es cierto que en las últimas décadas los Gobiernos han abusado de las facultades del Estado de Sitio y es igualmente cierto que de manera lamentable casi siempre ha sido utilizado para reprimir, como si equivocadamente se hubiese pensado que la

única manera de lucha contra la delincuencia debe ser por la vía de la represión. El contenido del Decreto número 666 es de los casos excepcionales, en los que se trata de buscar la causa generadora de la situación de perturbación del orden público y se toman una serie de medidas de carácter preventivo, con el propósito de buscar la solución al problema de la violencia, por caminos más adecuados, porque obviamente es más aconsejable la solución de la problemática de la delincuencia por el lado de su prevención, que de su represión.

No podemos compartir las afirmaciones de la Sala mayoritaria cuando se sostiene que el ejercicio constitucional de las facultades del Estado de Sitio son solo admisibles cuando exista una relación directa e inmediata con las causas de la perturbación del orden público, como queriéndose indicar que las medidas adoptadas en el decreto que mayoritariamente se declara inexequible, no tienen esa relación directa e inmediata que se exige en el canon constitucional; evidentemente que la afirmación anterior significa un claro desconocimiento del fenómeno delictivo, que constituye una complejidad de situaciones en las que se involucran problemas económicos, políticos, sociales y culturales y que por la misma razón se dan fenómenos delictivos y conflictos sociales de la más diversa naturaleza y es imposible pretender que con posterioridad a la declaratoria del Estado de Sitio, no se puedan llegar a presentar fenómenos delictivos de naturaleza diferente a la que fue causa directa de la declaratoria del Estado de Sitio, pero que no por ello podría llegar a afirmarse que por ser de naturaleza diferente no se puedan tomar medidas preventivas o represivas por medio de esas facultades que concede el artículo 121 de la Constitución Nacional; porque el hecho de que haya sido el narcotráfico el que originó la declaratoria de perturbación del orden público, no quiere decir que paralelamente con esta forma de delincuencia, aparecieran otras medidas con posterioridad de la declaratoria de perturbación de orden público, que exigen igualmente que el Gobierno cumpla su misión histórica con la utilización de esas facultades excepcionales que le concede el Estado de Sitio.

Es un desconocimiento de la realidad el siquiera pensar que los juzgados creados para la zona de Urabá no pueden tener piso constitucional, porque tienen una competencia general que no se restringe a la investigación y fallos de los hechos delictivos que originaron la declaratoria de perturbación del orden público. Es imposible que la compleja realidad delictiva no evolucione, que las mismas medidas tomadas dentro del ejercicio del Estado de Sitio, en un momento determinado obliguen a los violentos a modificar sus técnicas y formas de actuación o que busquen incluso nuevas modalidades delictivas, precisamente tratando de esquivar las medidas que excepcionalmente se hayan tomado por parte del Gobierno; sería tanto como pretender que dentro del Estado de Sitio y con la presentación de fenomenologías delictivas nuevas, el Gobierno tuviese que ir decretando nuevos Estados de Sitio parciales para enfrentar las nuevas situaciones.

Tampoco puede alegarse que por parte del Gobierno se haya apelado a las especialísimas facultades propias del Estado de Sitio, para regular asuntos ajenos al específico objetivo del restablecimiento del orden público perturbado, porque la evidencia de la compleja actividad criminal, involucra obviamente problemas de la más diversa naturaleza y es lógico que no puede pensarse que sólo por medio de la

represión se restablezca el orden público perturbado, sino que deben tomarse todas las medidas sociales o económicas que fueran necesarias para tratar de aliviar la situación de injusticia social que se vive, que es la que directamente ocasiona la situación de perturbación.

Son las razones anteriores, las que respetuosamente nos llevan a discrepar de la decisión mayoritaria de la Sala.

Jorge Iván Palacio Palacio, Edgar Saavedra Rojas.

INHIBICION PARA QUE EL ORGANO DEFENSOR DE LA CARTA FUNDAMENTAL PROFIERA SENTENCIA EN CUALQUIER SENTIDO SOBRE LA VALIDEZ JURIDICA DEL PRONUNCIAMIENTO NACIONAL, POR SER UNA MANIFESTACION DEL CONSTITUYENTE PRIMARIO A TRAVES DE LA VOLUNTAD CIUDADANA. ACTO PLEBISCITARIO DEL 1° DE DICIEMBRE DE 1957.

La Corte se declara inhibida para proferir decisión en la presente demanda.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 54.

Referencia: Expediente número 1566.

Demanda de inconstitucionalidad contra los Decretos números 247 y 251 de 1957 y contra el Acto Plebiscitario del 1° de diciembre de 1957.

Demandante: *Alfonso López Carrascal.*

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobado por Acta número 26 de 9 de junio de 1987.

Bogotá, D. E., junio nueve (9) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. La Demanda

El ciudadano Alfonso López Carrascal, en ejercicio del derecho reconocido por el artículo 214 de la Constitución Política, ha solicitado a la Corte que declare inexequibles los Decretos Legislativos números 247, "Sobre plebiscito para una reforma constitucional" y 251 "Por el cual se sustituye el artículo 12 del texto indivisible sobre Reforma a la Constitución Nacional, sometido a plesbiscito mediante el Decreto Legislativo número 0247 de 1957", ambos expedidos por la Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia, el primero con fecha 4 de octubre y el segundo el 9 de octubre de 1957, así como el propio Acto Plebiscitario aprobado mediante voto de los ciudadanos el día 1° de diciembre del mismo año.

Solicita el demandante que, en subsidio de la declaratoria de inconstitucionalidad de los actos demandados, se declare la inaplicabilidad de la norma, con apoyo en el artículo 215 de la Carta, a cuyo tenor "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales".

Los textos de los decretos acusados se transcriben a continuación. El del Acto Plebiscitario está incluido en ellos, pues el texto indivisible fue aprobado en las urnas el 1° de diciembre del año de 1957.

"DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 0247 DE 1957
(octubre 4)

"Sobre Plebiscito para una reforma constitucional

"Reforma Constitucional aprobada por el Plebiscito de 1° de diciembre de 1957.

"La Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia, interpretando la opinión nacional expresada en los acuerdos suscritos por los partidos políticos,

D E C R E T A:

"Artículo único. Convócase, para el primer domingo del mes de diciembre de 1957, a los varones y mujeres colombianos, mayores de 21 años, que no estén privados del voto por sentencia judicial, para que expresen su aprobación o improbación al siguiente texto indivisible:

" 'En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación, y que como tal, los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social y para asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, el pueblo colombiano, en plebiscito nacional,

D E C R E T A:

" 'La Constitución Política de Colombia es la de 1886, con las reformas de carácter permanente, introducidas hasta el Acto Legislativo número 1 de 1947 inclusive, y con las siguientes modificaciones:

" '1ª Las mujeres tendrán los mismos derechos políticos de los varones.

" '2ª En las elecciones populares que se efectúen para elegir corporaciones públicas hasta el año de 1968 inclusive, los puestos correspondientes a cada circunscripción electoral se adjudicarán por mitad a los partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal. Si hubiere dos o más listas de un mismo partido, y los puestos que a éste correspondieren, fuesen más de dos, se aplicarán para adjudicarlos el sistema del cuociente electoral, pero teniendo en cuenta únicamente los votos emitidos por las listas de tal partido. En las elecciones que se hagan durante el período a que se refiere este artículo, en todas las circunscripciones electorales, se elegirá un número par de

miembros de las corporaciones públicas. Para obtener ese resultado, se observarán las normas constitucionales que fijan el número de miembros de tales entidades, pero aumentando un puesto cuando quiera que él sea impar. Ningún Departamento con más de un millón de habitantes podrá tener menos de seis senadores ni menos de doce representantes.

" '3ª En las corporaciones públicas a que se refiere el artículo anterior, la mayoría para todos los efectos legales, será de los dos tercios de los votos; pero el Congreso, por medio de ley votada por las dos terceras partes de los miembros de una y otra Cámara, podrá señalar, para períodos no mayores de dos años, las materias respecto de las cuales bastará la aprobación de la simple mayoría absoluta.

" '4ª Los Ministros del Despacho serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, quien, sin embargo, estará obligado a dar participación en el Ministerio a los partidos políticos en la misma proporción en que estén representados en las Cámaras Legislativas.

" 'Como el objeto de la presente reforma constitucional es el de que los dos partidos políticos, el Conservador y el Liberal, colocados en un pie de igualdad, dentro de un amplio y permanente acuerdo, tengan conjuntamente la responsabilidad del Gobierno, y que éste se ejerza a nombre de los dos, la designación de los funcionarios y empleados que no pertenezcan a la Carrera Administrativa, se hará de manera tal que las distintas esferas de la rama ejecutiva reflejen equilibradamente la composición política del Congreso.

" 'Lo anterior no obsta para que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan ser llamados a desempeñar cargos en la Administración Pública.

" '5ª El Presidente de la República, los Gobernadores, los Alcaldes, y en general todos los funcionarios que tengan facultad de nombrar y remover empleados administrativos, no podrán ejercerla, sino dentro de las normas que expida el Congreso, para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio público, de ascensos por mérito y antigüedad, y de jubilación, retiro o despido.

" '6ª A los empleados y funcionarios públicos de la Carrera Administrativa les estará prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho de sufragio. El quebrantamiento de esta prohibición constituye causal de mala conducta.

" '7ª En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo o cargo público de la Carrera Administrativa, o su destitución o promoción.

" '8ª Los miembros del Congreso y de las Asambleas Departamentales no tendrán sueldo permanente, sino asignaciones diarias durante el término de las sesiones.

" '9ª Las primeras elecciones bajo estas normas para Presidente de la República, Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales se realizarán durante el primer semestre de 1958.

" '10ª El Presidente de la República tomará posesión de su cargo el 7 de agosto de 1958, y hasta esta fecha continuará ejerciendo la Presidencia de la República, la Junta de Gobierno integrada por el Mayor General Gabriel París, el Mayor General Deogracias Fonseca, el Contraalmirante Rubén Piedrahíta, el Brigadier General Rafael Navas Pardo y el Brigadier General Luis E. Ordóñez.

" 'El período del Congreso se iniciará el 20 de julio de 1958, y los de las Asambleas y Concejos, cuando lo determine el Congreso.

" '11ª A partir del 1° de enero de 1958, el Gobierno Nacional invertirá no menos del diez por ciento de su presupuesto general de gastos, en la educación pública.

" '12ª La Corte Suprema de Justicia estará integrada por el número de Magistrador que determine la ley y los cargos serán distribuidos entre los partidos políticos en la misma proporcion en que estén representados en las Cámaras Legislativas.

" 'Los Magistrados de la Corte serán inamovibles a menos que ocurra destitución por causa legal o retiro por jubilación. La ley determinará las causas de destitución y organizará la carrera judicial.

" '13ª En adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el artículo 218 de la Constitución.

" '14ª Esta reforma empezará a regir inmediatamente después de conocido el resultado oficial de la votacion'.

"Parágrafo del artículo único. Las votaciones a que se refiere el artículo único de este Decreto se reglamentarán por decreto separado.

"Este Decreto rige desde la fecha de su expedición.

"Comuníquese, publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, a 4 de octubre de 1957".

"DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 0251 DE 1957
(octubre 9)

"Por el cual se sustituye el artículo 12 del texto indivisible sobre reforma a la Constitución Nacional, sometido a plebiscito mediante el Decreto Legislativo número 0247.

"La Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia,

DECRETA:

"Artículo 1° El artículo 12 del texto indivisible incluido en el Decreto Legislativo número 0247 de 1957, quedará así:

"Artículo 12. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán paritarios.

"Los Magistrados de la Corte Suprema y los Consejeros de Estado permanecerán en sus cargos mientras observen buena conducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso.

"Las vacantes serán llenadas por la respectiva Corporación.

"La ley reglamentará la presente disposición y organizará la carrera judicial.

"Artículo 2° Este decreto rige desde la fecha de su expedición.

"Comuníquese, publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 9 de octubre de 1957".

Después de sostener que la Corte es competente para conocer sobre esta acción de inconstitucionalidad, aduciendo que el artículo 214 le confiere la guarda de la integridad de la Carta y que desde la sentencia del 5 de mayo de 1978 la propia Corte asumió el papel de "contralor constitucional", señala que también goza de competencia para dejar de aplicar el Acto Plebiscitario por vía de excepción", por cuanto se trata de una forma extraconstitucional de reformar la Carta y no se puede alegar que sea un estado especial de hecho por cuanto el referido acto se remite en sujeción (sic) a la Constitución de 1886 con las reformas comprendidas (sic) hasta el Acto Legislativo número 1 de 1947".

Distingue luego entre el "poder constitutivo" y el poder de reforma de la Constitución, diciendo:

"Una cosa es el poder constitutivo de hacer una nueva constitución cuyo poder político y suprajurídico no están limitados y otros (sic) la facultad constituyente de reformar la Carta que debe estar sometida (sic) a reglas que la misma Carta señala. Nadie impugna que la Constitución de 1886 no haya sido (sic) directa o indirectamente la decisión popular de las urnas. Los miembros del Consejo Nacional de Delegatarias fueron escogidos al dedo por el Gobernador de cada Estado. Dos delegados, un liberal independiente y un conservador y así vimos a Miguel Antonio Caro asistiendo por el viejo Estado de Panamá. En ese momento no había limitante política o suprajurídica, como sí cuando el poder constituyente quiere modificar o reformar la Carta, porque de inmediato se debe someter a la cláusula general de competencia y de reforma la supremacía de la constitución impone la 'función constituyente de anulación' (sic) asignada a la Corte Suprema de Justicia como guardiana de su integridad.

"Manifiesta más adelante que la función constituyente corresponde en forma exclusiva al Congreso y éste no puede delegarla en otro organismo ni el Ejecutivo está facultado para dictar decretos destinados a ese fin, como los demandados.

"Dichos decretos, en el sentir del actor, no tienen categoría constitucional y no puede llamárselos 'decretos legislativos', ya que no se dictaron con base en los artículos 121 y 122 de la Carta.

"Señala que los expresados decretos son de carácter 'extraconstitucional' y que no puede seguir el país teniendo como reforma constitucional el Acto Plebiscitario del 57, ya que no tenía atribuciones el Gobierno para acudir a un 'texto indivisible', en que el elector no podía distinguir.

"Se pregunta de dónde 'se saca' que una votación de 4.169.294 votos afirmativos, 206.804 negativos y 20.738 en blanco 'sea suficiente número para hacer una reforma constitucional y menos cuando esa autorización plebiscitaria no la disponía el Congreso'.

"Sostiene la demanda que hubo extralimitación de funciones por parte de la Junta Militar a la que denomina 'Ejecutivo Múltiple', pues como militares y en cumplimiento de sus cargos habían jurado cumplir la constitución y las leyes de la República".

"Además, en su opinión, hubo vicios en el procedimiento porque la reforma tenía que sujetarse al sistema reglado por la Carta, ya que el poder a desarrollarse era el de constituyente y no el ejercicio de un poder constitutivo que entonces no tenía ni podía tener limitación política y suprajurídica (sic).

Agrega, sobre las razones de violación:

"*Artículo 2° De la Carta.* Esta norma que es original de la Carta y en cien años de vigencia no se le ha variado una coma, establece a las claras que la soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece.

"Se trata, pues, de poderes *derivados* y *reglados,* ya que el carácter político o primigenio le pertenece exclusivamente a la Nación. Cada una de esas ramas cumple funciones separadas en desarrollo de la llamada Soberanía Nacional, que no puede confundirse con consultas populares para reformar la Carta, como lo hace el Acto Plebiscitario de diciembre 1° de 1957.

"Dentro de esas funciones del Congreso está la de ser institucionalmente un Poder Constituyente, cuando reforma la Carta, y la de un poder legislativo cuando hace las leyes. La Carta de 1886 confundía el llamado Acto Legislativo con la ley misma, y sólo a partir del Acto Legislativo número 3 de 1910 es cuando se delimita esa concepción, pero de todas maneras, sigue siendo cualquiera la forma que adapte un poder derivado y reglado. A diferencia del poder de establecer la constitución, que no conoce límites por ser un acto político y suprajurídico y que corresponde a la facultad constituyente y está por lo tanto sujeto a restricciones, en desarrollo de la cláusula general de competencia y reforma. Si vemos el Poder Constituyente de 1886 ella fue apenas la voluntad de unos delegatarios escogidos al dedo por cada gobernador de Estado, pero sin que la voluntad popular haya sido Poder Constitutivo. El Congreso, el Gobierno y los Jueces tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado. Entonces, si la soberanía reside en la Nación y la misma Carta señala las funciones del Congreso de acuerdo con una cláusula de reforma, de que ella cumple tanto funciones de reformador de la Carta como legislador, ¿de dónde se saca que mediante decretos sin categoría constitucional, dado su carácter extraconstitucional se puede convocar a un Acto Plebiscitario para reformar la Carta? Esa reforma dentro del Poder Constituyente tiene limitaciones y restricciones en la misma Carta, que no hubiera sido igual que ese poder haya sido Constitutivo.

"....

"Tampoco se podía apelar a la intervención del constituyente primario en la reforma de la Constitución, porque sería violar la cláusula de reforma que esa misma Carta imponía y además no fue el constituyente primario quien hiciera nacer a la vida jurídica del Estado dicha Carta, y de contera una flagrante violación del artículo 2° de la Carta. El concepto mismo de soberanía radica en la Nación y no en el pueblo y de allí que el sufragio sea una simple función constitucional que no impone obligaciones. La población es apenas un elemento de la Nación, mejor del Estado-Nación, como lo es el territorio y el gobierno. El pueblo ciudadano no es titular de ninguna de las ramas del Poder Público, ya que no pertenece al gobierno, a los jueces o a la Rama Legislativa (....).

"Artículo 218 de la Constitución Nacional.

El artículo 218 de la Carta dispone que 'La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, sólo podrá ser reformada por un Acto Legislativo, discutido primero y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobierno, para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por ésta nuevamente debatido y, últimamente aprobado por la mayoría absoluta de los individuos que componen cada Cámara. Si el Gobierno no publicare oportunamente el Proyecto del Acto Legislativo, lo hará el Presidente del Congreso'.

"....

"Fuera del Acto Legislativo que constituye una ley extraordinaria, y que debe someterse al procedimiento de la formación de las leyes, corridas a dos legislaturas ordinarias, no es posible la facultad de reforma de la misma. El Título VII de la Constitución (art. 79 y ss), habla de la formación de las leyes y el Acto Plebiscitario de diciembre 1° de 1957 no conlleva ese carácter de Acto Legislativo ni su formación obedeció al Título VII de la Carta. Y ese fue el espíritu de la cláusula de reforma desde 1910 hasta 1968, que solo el Acto Legislativo emanado del Congreso es el conducente para que opere cualquier sentido de reforma de la misma.

"La Constitución de 1886 con sus reformas históricas no contempla en ninguno de sus cánones la existencia de Decretos Legislativos tales como los números 0247 y 0251 de 1957. Los decretos legislativos se definen en la doctrina como aquellos que tienen fuerza de ley, y que en nuestra Carta, tienen su piso en los artículos 121 y 122 de la Carta.

"Los decretos de marras son simples decretos ejecutivos, sin ninguna fuerza constitucional para convocar y someter a Acto Plebiscitario un texto acumulado de pretensiones en forma indivisible, y menos considerar que 4.161.294 votos afirmativos sea la voluntad de una nación en la que descansa la soberanía, y menos cuando el sufragio es una simple función constitucional que no conlleva obligaciones para con el elector, dado el régimen imperante. Nuestra democracia es de carácter representativa y la misma Constitución del 86 no fue fruto del constituyente primario sino de delegatarios escogidos por el Gobernador de cada Estado. Tampoco sería de la esencia de la misma, por su naturaleza en el origen. Hasta sus principios fundamen-

tales fueron alterados y sería bueno volver por los fueros de la Carta, para que en el futuro no se repita teniendo ese antecedente funesto dentro de la justicia constitucional.

"El 'solo podrá' excluye otra posibilidad de reforma, y el Acto Legislativo número 1 de 1945 lo establecía con claridad de medio día, sin lugar a equívocos o distintas interpretaciones momentáneas. La constitución no estaba en vacaciones y menos había sido desconocida por otra nueva que la derogara. Tampoco puede alegarse que no hubiese congreso, para que cumpliera con esa función legislativa, puesto que si la constitución reinaba ninguna de sus ramas podía estar suspensa o en vacaciones, para citar el término de algún constitucionalista de la época y para más señas expresidente de la República.

"Por consiguiente, y ante lo expuesto, es pertinente pedir que se declare inexequible, por ser inconstitucional, debido a vicios de forma en su origen, aprobación y expedición, el Acto Plebiscitario de diciembre 1° de 1957, integrado al texto de los Decretos 'Legislativos' números 0247 y 0251 de octubre 4 y 9 de 1957, promulgados en el Diario Oficial No. 294.517 del lunes 21 de octubre de 1957, y por el cual se trata de reformar la Constitución Nacional de 1886, con sus modificaciones introducidas hasta el Acto Legislativo número 1 de 1986, por haberse quebrantado el trámite o procedimiento impuesto por la misma constitución para reformarla" (Decreto número 432/69, art. 16).

II. El concepto del Procurador General

El señor Procurador General de la Nación, mediante oficio 1119 del 3 de marzo de 1987, conceptuó sobre la improcedencia de un fallo de fondo sobre el asunto planteado, solicitando a la Corte que se declare inhibida para proferir decisión definitiva.

Al efecto, la Vista Fiscal transcribe varios párrafos de la Sentencia de la Corte fechada el 28 de noviembre de 1957, y manifiesta:

"Este Despacho comparte íntegramente las argumentaciones expuestas por esa honorable Corporación en la sentencia acabada de citar, pues ciertamente cualquier revolución siempre atenta contra el orden jurídico existente, puesto que si no fuera así, dejaría de ser movimiento perturbatorio y encajaría dentro del sistema constitucional imperante. No cabe la menor duda que el gobierno surgido como producto de la dejación del mando por parte del General Rojas Pinilla y la sustitución de éste por la Junta Militar de Gobierno, fue un Gobierno de Facto, ya que dicho cambio del Estado ocurrió por medios no previstos en la constitución, por lo que sus actos no son de aquéllos comprendidos en el artículo 214 que le otorga competencia a la Corte para decidir sobre las acciones de inexequibilidad, por lo que deberá declararse inhibida para conocer de la presente acusación".

Dice el Procurador que acoge íntegramente estas razones y solicita a la Corte que en el presente proceso se declare inhibida para conocer de la acusación.

III. Consideraciones de la Corte

Aunque ninguno de los textos aplicables alude expresamente a los Actos Legislativos por medio de los cuales se reforma la Constitución, ha entendido la jurisprudencia que la guarda de la integridad de la Carta incluye la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de ellos cuando sean demandados ante la Corte Suprema por cualquier ciudadano.

Pero, desde luego, dicha competencia se circunscribe a los motivos que pudieran implicar desconocimiento o pretermisión de los requisitos procedimentales que indica el artículo 218 y concordantes para introducir modificaciones a los textos de la Carta lo cual es lógico por cuanto mal podría guardarse la integridad de un Estatuto si sus propias normas fueran susceptibles de cambio, sin sujeción a los trámites, mayorías y exigencias formales que el propio ordenamiento contempla y sin posibilidad alguna de control.

Es así como la Corte se ha pronunciado sobre los Actos Legislativos números 2 de 1977, 1 de 1979 y 1 de 1981, acusados en ejercicio de la acción ciudadana prevista por el artículo 214 de la Constitución.

De la doctrina a la que se acaba de hacer referencia no se concluye que goce la Corte Suprema de Justicia de competencia para fallar, ya no sobre actos reformatorios de la Carta, sino según lo pide en este caso el demandante, respecto de actos emanados del constituyente orginario, como lo es el llamado Plebiscito de 1957.

Cuando la Nación, en ejercicio de su poder soberano e inalienable, decide pronunciarse sobre el estatuto constitucional que habrá de regir sus destinos, no está ni puede estar sometida a la normatividad jurídica que antecede a su decisión. El acto constituyente primario es en tal sentido, la expresión de la máxima voluntad política, cuyo ámbito de acción por su misma naturaleza, escapa a cualquier delimitación establecida por el orden jurídico anterior y, por ende, se sustrae también a todo tipo de juicio que pretenda compararlo con los preceptos de ese orden.

Siendo constituido el órgano al cual se encomienda la guarda de la integridad de la Constitución, su competencia depende del marco trazado por el mismo constituyente, de modo que no podría desbordarlo ubicándose en posición de juzgar los actos de ese constituyente a la luz del derecho antiguo, salvo lo dicho en cuanto al poder secundario y tan sólo por razones de procedimiento.

La Nación constituyente, no por razón de autorizaciones de naturaleza jurídica que la hayan habilitado para actuar sino por la misma fuerza y efectividad de su poder político, goza de la mayor autonomía para adoptar las decisiones que a bien tenga en relación con su estructura política fundamental.

Cuando se apela a la Nación y ésta, en efecto, hace sentir su voz para constituir o reconstituir dicha estructura, adopta una decisión de carácter político que, por serlo, es inapelable y no susceptible de revisión jurídica.

Aun en el caso de posibles violaciones del orden precedente por parte de quienes hubieren convocado al constituyente originario, la manifestación de éste hace inútil e improcedente todo posterior pronunciamiento jurisdiccional en torno a la validez de la convocatoria.

En efecto: Siendo la Constitución (en sentido jurídico-positivo) la cúpula del orden jurídico interno, no puede juzgarse su validez, pues este proceso implica la confrontación de una norma con la de grado superior. Su validez debe suponerse, como presupuesto gnoseológico, por quien quiera conocer el orden jurídico de un país; es lo que Kelsen denomina la "norma fundamental" o "constitución en sentido lógico-formal", cuyo contenido tiene en cuenta el grado de eficacia interna, su conformidad con principios jurídicos básicos que la razón natural indica y la aceptación internacional que posea la respectiva Constitución (en sentido jurídico-positivo). En el caso presente, el Plebiscito Colombiano de 1957.

Bien hizo la Corte, entonces, en declararse inhibida para conocer de las primeras demandas contra los Decretos que convocaron el Plebiscito de 1957 (Sentencia de noviembre 28 de 1957, G.J.T. LXXXVI Nos. 2188, 2189 y 2190, páginas 442-448), como recuerda el señor Procurador.

Puesto que la Corte estima que el 1° de diciembre de 1957 se produjo en Colombia una manifestación del constituyente primario a través de la votación ciudadana que aprobó el texto único sometido a su consideración por el Gobierno de entonces, se configura un caso patente de inhibición para que el órgano defensor de la Carta Fundamental profiera sentencia en cualquier sentido sobre la validez jurídica de ese pronunciamiento nacional. Por las razones anotadas, también resulta improcedente toda decisión sobre constitucionalidad de los actos por medio de los cuales se convocó a la Nación para que votara.

Con fundamento en lo anterior, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE

Declárase INHIBIDA para proferir decisión de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el Acto Plebiscitario de diciembre 1° de 1957 y contra los Decretos Legislativos números 0247 y 0251 del mismo año.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

EN EJERCICIO DE LA MISION QUE A LA CORTE LE CONCIERNE DE SER GUARDIAN INTEGRAL DE LA CONSTITUCION, LE CORRESPONDE SEÑALAR O FIJAR EL SENTIDO Y ALCANCE DE LA NORMA QUE ANTE ELLA SE IMPUGNA A FIN DE ADECUARLA AL ESTATUTO FUNDAMENTAL. POR EL PRINCIPIO DE LA UNIVERSALIDAD DE LAS PRUEBAS Y DE LA UNIDAD PROBATORIA, LOS DISTINTOS MEDIOS DE CONVICCION QUE OBRAN EN EL PROCESO FAVORECEN O PERJUDICAN A TODAS LAS PARTES AUNQUE SEAN PEDIDAS SOLO POR UNA. DESCONOCIMIENTO SOBRE EL DERECHO DEL SINDICADO A PEDIR LA REAPERTURA DE LA INVESTIGACION: *ESTATUTO PENAL ADUANERO* DEL DEBIDO PROCESO.

Inexequible las expresiones *"del Ministerio Público"* del inciso 3° del artículo 53 del Decreto-ley número 955 de 1970.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 55.

Referencia: Expediente número 1567.

Acción de inexequibilidad contra el inciso 3° del artículo 53 del Decreto-ley número 955 de 1970.

Actor: *Alfonso López Carrascal.*

Magistrado sustanciador: doctor *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según Acta número 26.

Bogotá, D. E., junio nueve (9) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

Procede la Corte a decidir sobre la demanda de inexequibilidad que el ciudadano Alfonso López Carrascal con apoyo en el artículo 214 de la Constitución Nacional, incoó contra el inciso 3° del artículo 53 del Decreto número 955 de 1970.

El correspondiente libelo fue admitido oportunamente y el Procurador General de la Nación rindió en tiempo el concepto de rigor, con el cual se agotó el trámite propio del proceso constitucional; siendo oportuno entonces el pronunciamiento de mérito de la Corporación.

II. Norma acusada

La disposición objeto de la impugnación constitucional y su correspondiente acápite, es la siguiente:

"DECRETO NUMERO 955 DE 1970
(junio 18)

"Por el cual se expide el Estatuto Penal Aduanero.

"El Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confirió la Ley 16 de 1968, y atendiendo el concepto de la comisión asesora establecida en la misma,

DECRETA:

"Artículo 53. Archivo del sumario. El Juez dispondrá el archivo del sumario cuando después de ampliado el término de instrucción, no exista la prueba necesaria para llamar a juicio al sindicado o para sobreseerlo definitivamente. Esta determinación debe tomarse dentro de los quince días siguientes al recibo del proceso, que será enviado luego a la Policía Judicial para que continúe la averiguación, dejando la copia en el juzgado.

"El Juez, al decretar el archivo del expediente, ordenará la libertad caucionada del sindicado o sindicados que se encuentren detenidos.

"Dentro del año siguiente al archivo del sumario, el juez de oficio o a solicitud fundamentada del Ministerio Público, podrá disponer que se reabra la investigación y se practiquen las pruebas que se le pidan o que considere necesarias, en término no mayor de veinte días, al cabo de los cuales ordenará la cesación del procedimiento contra el sindicado o lo llamará a juicio, según el caso. Otro tanto hará una vez expirado el año sin que se haya reabierto la investigación" (se subraya el inciso materia de la acusación).

III. Razones de la demanda

El actor apoya el concepto de violación en que la figura del *"archivo del sumario"* equivale en el procedimiento penal ordinario al *"sobreseimiento temporal"*, ya que es procedente cuando no existe mérito para llamar a juicio al sindicado ni se den los presupuestos del sobreseimiento definitivo.

Bajo esta premisa encuentra que el inciso de la disposición objeto de la impugnación, desconoce el derecho de defensa del acusado y el debido proceso para su juzgamiento, ya que no le da oportunidad a éste ni a su apoderado para pedir que se reabra la investigación y se practiquen las pruebas conducentes para obtener una calificación definitiva de su mérito.

Del razonamiento anterior infiere el demandante que se han quebrantado los artículos 16 y 26 de la Constitución Nacional así:

El primero que declara que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. No podía el Presidente de la República según la norma anterior "ir más allá de las facultades... y negarle al procesado o a su apoderado un derecho procesal como era el de pedir la reapertura de la investigación y el decreto y práctica de pruebas en su favor".

El segundo artículo que establece el principio del debido proceso y el derecho de defensa se quebranta porque considera al acusado como un extraño al proceso y no se le permite pedir la reapertura de la investigación y por ende, el decreto de pruebas sobre su inculpabilidad no obstante que la investigación sigue su marcha progresiva.

IV. Concepto del Procurador General

En contra de lo que sostiene el demandante, el Procurador General de la Nación considera que el inciso acusado es exequible y solicita a la Corte que así lo declare. Expresa que la disposición cuestionada no conculca el derecho de defensa ni viola el debido proceso, porque no descarta de plano la actuación del sindicado para procurar que se le declare exento de responsabilidad, pues no existe ninguna disposición que le impida solicitar al juez o al Ministerio Público las pruebas o informaciones que puedan determinar la reapertura de la investigación; anota que la acción oficiosa del juez "proviene de denuncias y aporte de pruebas por parte de terceras personas y aun, del implicado en la comisión de delitos".

Considera así mismo, que dadas las funciones constitucionales encomendadas al Ministerio Público en orden a "promover la ejecución de las leyes... y perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social" es lógico que el sindicado pueda suministrar las pruebas que demuestren su inocencia a través del agente de ese organismo que actúe dentro del proceso.

V. Consideraciones de la Corte

Primera. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Constitución Nacional, la Corte tiene competencia para decidir la presente demanda por referirse a un precepto de un decreto expedido por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias a que se refiere el numeral 12 del artículo 76 del estatuto superior.

Segunda. El ejercicio de las facultades extraordinarias.

Debe advertirse que la Ley 16 de 1968 invistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de tres años a partir de su sanción para entre otras materias, reorganizar la jurisdicción Penal Aduanera sobre las siguientes bases:

"Mantener el carácter de delito que al contrabando atribuyen las leyes vigentes y reorganizar de conformidad la Jurisdicción penal aduanera o para darle el mismo carácter de contravención, señalando y organizando las autoridades competentes para su prevención y represión, las sanciones correspondientes y las normas de procedimiento pertinentes, o para suprimir la jurisdicción especial de aduanas, todo de acuerdo con la recomendación que haga una comisión especial de expertos sobre la materia, que se integrará de la manera señalada en el artículo 22 de esta Ley".

Como la sanción de la ley tuvo ocurrencia el 28 de mayo de 1968 y el Decreto número 955 de 1970, al cual pertenece la disposición acusada, se dictó el 18 de junio y su vigencia se inició a partir del 1° de septiembre de 1970, por el aspecto temporal no hay exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias.

Examinando el inciso acusado por el aspecto material encuentra la Corte que lo allí normado constituye cabal desarrollo de la atribución de señalar las normas de procedimiento, a las cuales debe ceñirse la jurisdicción penal aduanera en el ejercicio de su competencia.

Tercera. La norma que se acusa resulta inexequible si se la interpreta en el sentido de que únicamente el Juez y el Ministerio Público pueden solicitar la reapertura de la investigación privando de igual derecho al sindicado para elevar directamente o por conducto de su apoderado la misma solicitud, y reabierta la investigación, pedir la práctica de pruebas conducentes a demostrar la inimputabilidad o falta de culpabilidad en los hechos que se investigan o cualquiera circunstancia que conduzca al sobreseimiento definitivo o a la cesación del procedimiento.

En ejercicio de la misión que a la Corte le concierne de ser guardián integral de la Constitución, le corresponde señalar o fijar el sentido y alcance de la norma que ante ella se impugna a fin de adecuarla al Estatuto Fundamental. Es así como debe declarar la constitucionalidad de la ley objeto de impugnación, siempre que se interprete conforme a la Constitución de acuerdo con el significado por ella señalado y viceversa, se impone la declaración de inexequibilidad cuando la interpretación conduzca a la transgresión de la Carta Fundamental en uno cualquiera de sus textos o de los principios que de éstos fluyen; de este modo se logra fijar el sentido y alcance de la norma acusada en forma tal que solo se aplique en el sentido constitucional.

La Corte se viene orientando por este criterio como lo consignó en los fallos de su Sala Plena de 14 de mayo y 14 de octubre de 1970 (G.J. 2338 bis, Tomo 137 bis) en el primero de los cuales dijo: "En los juicios de exequibilidad lo que se examina es la conformidad de la ley con los textos constitucionales, y aunque la Corte debe examinar todas las interpretaciones posibles de la norma acusada, para medir su significado y aplicar sus consecuencias frente a las normas del Estatuto Fundamental, sólo si encuentra que a virtud de texto expreso y claro, o de eventuales interpretaciones, el precepto acusado adolece de vicio de inconstitucionalidad, así lo declara, afectado el texto en lo que de por sí sea opuesto a la carta, o en cuanto su interpretación en cierto sentido pueda hallarse en idéntica oposición".

Ahora bien: siguiendo el precedente parámetro es dable considerar que la disposición que es materia de la presente confrontación constitucional, si se interpreta restrictivamente, negándole al sindicado el derecho a pedir la reapertura de la

investigación, quebranta ostensiblemente el debido proceso, o la plenitud de las formas propias del juicio penal, principio que la doctrina jurisprudencial de la Corte ha venido consagrando y del que ha destacado en lo atinente al derecho de defensa, la facultad que tiene la persona acusada "de participar en el proceso por sí o por medio de apoderado o conjuntamente, para impugnar las pruebas de cargo y para pedir y hacer practicar las de descargo" (sentencia Sala Plena, 5 de noviembre de 1979).

No sobra recordar que tanto en el Código de Procedimiento Penal como en el Penal Aduanero, las partes del proceso pueden intervenir en la práctica de las pruebas con el fin de purificarlas y que en virtud del principio de la publicidad que rige en ambos estatutos, el juez está obligado a decretar las pruebas que soliciten las partes y solo puede negar las que sean notoriamente inconducentes y que las partes no sólo tienen el derecho de solicitarlas sino el de intervenir en ellas a fin de contradecirlas.

Igualmente y por efecto del principio de la universalidad de las pruebas y de la unidad probatoria, los distintos medios de convicción que obran en el proceso favorecen o perjudican a todas las partes aunque sean pedidas por una sola; y las pruebas que se acopien por iniciativa del juez o de cualquiera de las partes, o las que éstas aporten para sustentar sus pretensiones, forman un todo indivisible y pueden ser aprovechadas por el juez o por las partes que no las aportaron o solicitaron, pues lo que interesa al proceso penal en sus distintas modalidades o especies, es la verdad cierta, histórica y real.

Para no dejar pendiente la constitucionalidad de la norma acusada a la interpretación que el juez haga de ella según las directrices que este fallo le traza, considera la Corte que se precave suficientemente la violación del debido proceso con la declaración de inexequibilidad de las expresiones *"del Ministerio Público"*, que son las que restringen o desconocen el derecho del sindicado a pedir la reapertura de la investigación. Así se dispondrá.

Anota finalmente la Corporación que no es óbice para la decisión de fondo, el haber sido derogado por el nuevo estatuto penal aduanero, el Decreto número 955 de 1970 del que forma parte la disposición acusada, ya que el Decreto-ley número 051 de 1987 no ha iniciado aún su vigencia.

VI. Decisión

Apoyada en las anteriores consideraciones la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar INEXEQUIBLES por ser violatorias del debido proceso, las expresiones *"del Ministerio Público"*, empleadas en el inciso tercero del artículo 53 del Decreto-ley número 955 de 1970.

Cópiese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia,

HACE CONSTAR:

Que el Magistrado Héctor Marín Naranjo, no asistió a la Sala Plena celebrada el día nueve de junio de mil novecientos ochenta y siete, por encontrarse con excusa justificada.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

LA MONEDA Y SUS MANIFESTACIONES INSTITUCIONALES. ACTIVIDADES ECONOMICAS OBJETO DE INTERVENCION ESTATAL. *FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS*. SI PUEDE EL GOBIERNO A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA, DICTAR NORMAS ECONOMICAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIANZA GENERAL EN EL SECTOR FINANCIERO, POR VIA EXCEPCIONAL DEL ARTICULO 122 DE LA C.N. LO ESTA TANTO MAS.

En cuando al artículo 16 remite a sentencia de marzo 10 de 1987. (Ley 117/85). Inexequible el artículo 11 de la Ley 117 de 1985. Exequibles las restantes normas demandadas.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 56.

Referencia: Expediente No. 1541.

Acción de inexequibilidad contra la Ley 117 de 1985. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.

Actor: *Mario Iván Algarra Lobo.*

Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobada por Acta número 26.

Bogotá, D. E., junio nueve (9) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Mario Iván Algarra Lobo, presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra la Ley 117 de 1985, simultáneamente pretendió ejercer acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 1° del Decreto número 59 de 1986 y los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto número 32 de 1986. Por auto del 12 de noviembre de 1986 la Sala Constitucional inadmitió la acusación relacionada con los decretos nombrados, por no ser de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Consiguientemente procede el estudio de la acusación relacionada con la Ley 117 de 1985, cumplidos como se encuentran los requisitos procesales para adoptar una decisión al respecto.

II. Texto de la norma acusada

El texto de la norma acusada es el siguiente:

"LEY 117 DE 1985
(diciembre 20)

"Por la cual se crea el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, se determina su estructura y se dictan otras disposiciones.

"El Congreso de Colombia,

DECRETA:

"Artículo 1° *Creación.* Créase el 'Fondo de Garantías de Instituciones Financieras' como persona jurídica autónoma de derecho público y de naturaleza única, sometida a la vigilancia del Superintendente Bancario, el cual funcionará anexo al Banco de la República, mediante contrato celebrado entre éste y el Gobierno Nacional, en términos similares al que existe para Proexpo, con contabilidades separadas y durante un plazo máximo de cinco años.

"Parágrafo. Las operaciones del Fondo se regirán únicamente por esta Ley y por las normas de derecho privado.

"Artículo 2° *Objeto.* El objeto general del Fondo consistirá en la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza de los accionistas y administradores causantes de perjuicios a las instituciones financieras.

"Dentro de este objeto general, el Fondo tendrá las siguientes funciones:

"a) Servir de instrumento para el fortalecimiento patrimonial de las instituciones inscritas;

"b) Participar transitoriamente en el capital de las instituciones inscritas;

"c) Procurar que las instituciones inscritas tengan medios para otorgar liquidez a los activos financieros y a los bienes recibidos en pago;

"d) Organizar y desarrollar el sistema de seguro de depósito y, como complemento de aquél, el de compra de obligaciones a cargo de las instituciones inscritas en liquidación o el de financiamiento a los ahorradores de las mismas;

"e) Colaborar con las autoridades en la liquidación de instituciones financieras intervenidas;

"f) Asumir temporalmente la administración de instituciones financieras, para lograr su recuperación económica.

"Artículo 3° *Instituciones participantes.* Para los efectos de esta Ley deberán inscribirse obligatoriamente en el Fondo, previa calificación hecha por éste, las instituciones financieras distintas del Banco de la República.

"Inicialmente y mientras la Junta Directiva del Fondo no determine otra cosa, podrán inscribirse en el mismo los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial. La Junta Directiva establecerá los criterios, prioridades y plazos de afiliación de las demás instituciones.

"Artículo 4° *Recursos del Fondo.* El Fondo contará con los siguientes recursos que destinará al objeto señalado en el artículo 2°.

"a) El producto de los créditos que le otorgue al Banco de la República, mediante el uso de las autorizaciones que para tal fin disponga la Junta Monetaria.

"La Junta Monetaria regulará de modo general los límites, condiciones, garantías y requisitos para la utilización de los cupos de crédito resultantes de la autorización a que se refiere este literal;

"b) El producto de la suscripción, por parte de las instituciones financieras, de bonos emitidos por el Fondo en una cuantía equivalente al medio punto por ciento anual del encaje legal sobre sus exigibilidades a la vista y a término. La inversión del encaje que en cumplimiento de lo previsto en este literal realicen las instituciones financieras se efectuará por un término no superior a ocho años, con sujeción a la reglamentación que dicte la Junta Monetaria, en la cual se señalará el interés que se reconocerá por los bonos;

"La inversión a que se refiere este literal se hará con base en las cifras que registren las exigibilidades respectivas en la fecha más inmediata a la de la sanción de esta Ley. En los años 1987 y siguientes la fecha que se tomará para hacer la inversión será la del cierre del balance de las instituciones financieras el último día del año inmediatamente anterior;

"Dicha inversión podrá reducirse o eliminarse por decreto del Gobierno, cuando se considere que los recursos financieros del Fondo son suficientes para su normal funcionamiento;

"c) El producto de los derechos de inscripción de las entidades financieras distintas del Banco de la República, que se causarán por una vez y serán fijados por la Junta Directiva del Fondo;

"d) El producto de los préstamos internos externos que obtenga y de los títulos que emita;

"e) Los aportes del Presupuesto Nacional, hasta por una cuantía igual al recaudo anual por concepto de las multas impuestas por la Superintendencia Bancaria a las instituciones financieras, a los directores, funcionarios, administradores y revisores fiscales de las mismas;

"f) Los beneficios, comisiones, honorarios, intereses y rendimiento que generen las operaciones que efectúe el Fondo;

"g) Las demás que obtenga a cualquier título, con aprobación de su Junta Directiva.

"Artículo 5° *Operaciones autorizadas.* Con el único propósito de desarrollar el objeto previsto en esta Ley, el Fondo podrá realizar las siguientes actividades:

"a) Efectuar aportes de capital en las instituciones financieras y adquirir, enajenar y gravar acciones de las instituciones inscritas, en los casos previstos en el artículo 6°;

"b) Realizar actos y negocios jurídicos para una ágil y eficaz recuperación de activos financieros, propios o de las instituciones inscritas;

"c) Celebrar convenios con las instituciones financieras inscritas, con el objeto de facilitar la cancelación oportuna de las obligaciones a cargo de ellas;

"d) Coadyuvar en la liquidación de instituciones financieras por encargo de la Superintendencia Bancaria; para este efecto, podrá adquirir acreencias contra tales instituciones o asumir obligaciones a favor de las mismas;

"e) Otorgar préstamos a las instituciones inscritas, o en circunstancias especiales, que definirá la Junta Directiva, a los acreedores de aquéllas;

"f) Adquirir los activos de las instituciones financieras inscritas que señale la Junta Directiva del Fondo, que puedan ser recuperables a juicio de la misma Junta;

"g) Invertir sus recursos en los activos que señale la Junta Directiva;

"Cuando se trate de la inversión en títulos de deuda pública o emitidos por entidades oficiales distintas de las del sector financiero, tales operaciones deberán realizarse con sujeción a los objetivos propios del Fondo y con el propósito específico de distribuirlas de acuerdo con criterios de rentabilidad y eficiencia;

"h) Contratar y recibir créditos internos y externos;

"i) Recibir y otorgar avales y garantías. Estas operaciones sólo se efectuarán respecto de instituciones inscritas;

"j) Recibir valores en custodia y efectuar negocios fiduciarios, y en particular celebrar contratos de fiducia mercantil;

"k) En general realizar todos los actos y negocios jurídicos necesarios para desarrollar su objeto social y para remunerar los servicios que reciba del Banco de la República.

"Artículo 6° *Participación en el capital de entidades financieras.* El Fondo podrá suscribir las ampliaciones del capital que aprueban las entidades financieras requeridas al efecto por la Superintendencia Bancaria para restablecer su situación patrimonial, en el supuesto de que las mismas no sean cubiertas por los accionistas de la entidad.

"En tal evento si la inversión del Fondo llegare a representar más del 50% del capital de la institución inscrita, ésta adquirirá el carácter de oficial.

"De no haberse producido fusión o absorción por otras entidades, en un plazo razonable, contado desde la suscripción o adquisición por el Fondo de las acciones de una institución financiera y en condiciones suficientes de publicidad y concurrencia

y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de esta Ley, el Fondo ofrecerá en venta las acciones adquiridas, decidiendo a favor de quien presente condiciones de adquisición más ventajosas. En este caso no habrá lugar a la aplicación de las limitaciones que establecen las normas sobre democratización del capital accionario de la institución financiera respectiva.

"Artículo 7° La Junta Directiva del Fondo, previo informe de la Superintendencia Bancaria, podrá ordenar la reducción simplemente nominal de capital social de una institución inscrita, y ésta se hará sin necesidad de recurrir a su asamblea o a la aceptación de los acreedores.

"Artículo 8° *Junta Directiva.* La Junta Directiva del Fondo estará compuesta así: por el Ministro de Hacienda o el Viceministro del mismo ramo como su delegado; por el Gerente General del Banco de la República o el Subgerente Técnico como su delegado; por el Presidente de la Comisión Nacional de Valores; por dos representantes designados por el Presidente de la República entre personas provenientes del sector financiero, una de las cuales, al menos, del sector privado.

"El Superintendente Bancario asistirá a las reuniones de la Junta Directiva.

"Artículo 9° *Funciones de la Junta Directiva.* La Junta estará presidida por el Ministro de Hacienda o su Delegado y tendrá las siguientes funciones:

"a) Regular, por vía general, las condiciones en las cuales se pueden comprar créditos a cargo de las instituciones financieras o hacer préstamos a los acreedores de éstas;

"b) Fijar las comisiones, primas, tasas y precios que cobre por todos sus servicios;

"c) Regular el seguro de depósitos cuando decida crear éste;

"d) Fijar las condiciones generales de los activos que puedan ser adquiridos o negociados por el Fondo, incluyendo créditos de dudoso recaudo;

"e) Informar a la Superintendencia Bancaria cuando considere que existen situaciones en las cuales algunas instituciones financieras inscritas ponen en peligro la confianza en el sistema financiero o incumplen cualquiera de las obligaciones previstas en la ley, para que la Superintendencia tome las medidas que le corresponden;

"f) Fijar las características de los bonos y demás títulos que emita el Fondo o de las inversiones que pueda realizar;

"g) Autorizar la constitución de aprobaciones y reservas necesarias para el fortalecimiento patrimonial del Fondo;

"h) Aprobar el presupuesto anual y los contratos que determinen los estatutos;

"i) Aprobar los estados financieros anuales;

"j) Presentar al Gobierno un proyecto de estatutos para su aprobación, el cual deberá incorporarse y formar parte del contrato celebrado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1° de esta Ley;

"k) Las demás que le señale la Ley.

"Parágrafo. Todas las decisiones de la Junta Directiva se adoptarán con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

"Artículo 10. *Seguro de Depósitos.* La Junta Directiva podrá organizar el seguro de depósitos con base en los siguientes principios:

"a) Ofrecer una garantía adecuada a ahorradores y depositantes de buena fe, dentro de los topes que señale la Junta Directiva. La garantía no podrá exceder del 75% de los topes fijados;

"b) Cumplir con los postulados de austeridad y eficiencia en la asunción del riesgo;

"c) Las primas se establecerán de manera diferencial o se preverá un sistema de devoluciones, atendiendo en ambos casos a los indicadores financieros y de solvencia de cada entidad inscrita con base en los criterios técnicos que periódicamente determine la Junta Directiva;

"d) Cuando existan circunstancias que demuestren la relación o participación de algún depositante con las causas motivadoras de quebrantamiento de la entidad financiera, podrá dejarse en suspenso el reembolso de los respectivos depósitos, mientras se declare judicialmente, a instancia de la parte, tal relación o participación;

"e) Las primas a cargo de las entidades financieras inscritas no podrán pasar de una suma equivalente al cero punto cinco por mil (0.5/1.000) del monto de sus depósitos a la vista de ahorro o a término, según el caso.

"Artículo 11. *Representación Legal.* El Gerente General del Banco de la República será el representante legal del Fondo y tendrá entre otras las siguientes funciones:

"a) Llevar la representación legal del Fondo y firmar todos los actos, contratos o documentos para el cumplimiento de los objetivos que se determinan en esta Ley, con sujeción a lo que se disponga en los estatutos, que podrán prever la delegación en el Director de dichas facultades;

"b) Someter a la consideración de la Junta Directiva los planes e iniciativas tendientes a lograr los objetivos del Fondo y su adecuada ejecución;

"c) Las demás que se establezcan en los estatutos del Fondo y las que se desprendan del contrato que se celebre entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República, según lo dispuesto en el artículo 1° de esta Ley.

"Artículo 12. *Director del Fondo.* Habrá un Director del Fondo que será el administrador del mismo y tendrá a su cargo el desarrollo de sus actividades y la ejecución de sus objetivos, de acuerdo con las previsiones de esta Ley y de los estatutos; será designado por la Junta Directiva del Banco de la República con la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, previa selección que de aquél haga la Junta Directiva del Fondo.

"El Director ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones que le asigne la Junta Directiva o las que con aprobación de ésta le sean delegadas por el representante legal del Fondo.

"Artículo 13. *Prerrogativas del Fondo.* Para el conveniente y eficaz logro de sus objetivos, el Fondo gozará de las siguientes prerrogativas:

"a) Para todos los efectos tributarios, el Fondo será considerado como entidad sin ánimo de lucro;

"b) Exención de impuestos de timbre, registro y anotación e impuestos nacionales, no cedidos a entidades territoriales;

"c) Igualmente, estará exento de inversiones forzosas.

"Artículo 14. *Limitaciones del Fondo.* El Fondo tendrá las siguientes limitaciones:

"a) No podrá otorgar préstamos a personas naturales o jurídicas distintas de las instituciones financieras inscritas, salvo lo previsto en el literal e) del artículo 5° de esta Ley, cuando se trate de complementar el sistema de seguro de depósito;

"b) No podrá recibir depósitos a la vista, a término, de ahorro o abrir cartas de crédito;

"c) Sólo podrá conceder préstamos a las instituciones financieras inscritas, en desarrollo de programas específicos concertados con las entidades beneficiarias, orientados a mejorar o restablecer la solidez patrimonial de aquéllas, cuando las circunstancias lo aconsejen a juicio de la Junta Directiva.

"Artículo 15. *Facultades de la Junta Monetaria.* En relación con las funciones del Fondo, la Junta Monetaria tendrá las siguientes facultades:

"a) Establecer límites, condiciones, garantías y requisitos generales para la utilización de los cupos de crédito del Fondo en el Banco de la República, destinadas a atender las situaciones de quebranto patrimonial de las instituciones inscritas;

"b) Rendir concepto previo favorable sobre las características de los títulos que emita el Fondo y las operaciones financieras que vaya a realizar cuando no estuvieren contempladas en la presente Ley;

"c) Señalar, si lo estima conveniente, límites al endeudamiento del Fondo, o al otorgamiento de avales o garantías por parte del mismo.

"Artículo 16. *Inspección, vigilancia y régimen disciplinario.* La inspección, control, vigilancia y régimen disciplinario del Fondo estarán a cargo de la Superintendencia Bancaria. Se ejercerán en lo pertinente, de acuerdo con las facultades que le otorga la ley en lo referente a las instituciones financieras, teniendo en cuenta la naturaleza especial del Fondo.

"El Banco de la República por conducto de su Auditoría Interna, y sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Superintendencia Bancaria vigilará la correcta aplicación de los recursos del Fondo, el debido mantenimiento y utilización de los bienes del mismo y la observancia de los estatutos.

"Parágrafo. Facúltase al Gobierno Nacional, por el término de seis meses, contados a partir de la sanción de la presente Ley para dictar normas sobre estructura, funciones y contratación de la Superintendencia Bancaria para facilitar la revisión de las actividades de las instituciones vigiladas.

"Artículo 17. *Reserva de Información.* El Fondo estará obligado a guardar reserva sobre las informaciones que exija a las instituciones financieras inscritas, salvo los casos previstos en la Constitución y la Ley. En general, el Fondo gozará de reserva sobre sus papeles, libros y correspondencia.

"Artículo 18. *Pago de acreencias en liquidaciones.* El pago de las obligaciones a favor del Fondo y de aquéllas derivadas de la utilización de operaciones de préstamo o de redescuento con el Banco de la República, y de las obligaciones en moneda extranjera derivadas de depósitos constituidos por dicha entidad en los establecimientos de crédito, gozarán del derecho de ser excluidos de la masa de la liquidación de instituciones financieras y del Fondo.

"Artículo 19. *Fusión de instituciones financieras.* Siempre que, a juicio del Superintendente Bancario, tal medida se haga necesaria para evitar la toma de posesión de los haberes y negocios de la institución financiera o su nacionalización, dicho funcionario podrá ordenar la fusión con otra u otras instituciones financieras que así lo consientan sea mediante la creación de instituciones nuevas que agrupen el patrimonio y los accionistas de la primera, o bien, según lo aconsejen las circunstancias, determinando que otra institución financiera preexistente la absorba.

"Para los efectos del presente artículo, el Superintendente Bancario dispondrá la reunión inmediata de las asambleas correspondientes para que, mediante la adopción de los planes y aprobación de los convenios que exija cada situación en particular, adelanten todas las actuaciones necesarias para la rápida y progresiva formalización de la fusión decretada.

"En los casos en que se persista en descuidar o en rehusar el cumplimiento de las órdenes que al respecto expida la Superintendencia Bancaria, se procederá en la forma que indica el artículo 48 de la Ley 45 de 1923 y las normas que lo adicionan.

"Parágrafo 1° La resolución por la cual se ordena la fusión y se dispongan las disoluciones que correspondan según los casos, será de cumplimiento inmediato y contra ella únicamente procederá el recurso de reposición

"Con tales resoluciones, una vez ejecutoriadas se otorgarán las escrituras necesarias y se efectuarán los registros de rigor, sin la necesidad de más permisos y formalidades adicionales.

"Parágrafo 2° El Fondo de Garantías presentará a la Superintendencia Bancaria, a manera de recomendación, un plan en el cual se refleje la condición económica de cada una de las entidades agrupadas, señalando las garantías que deberían darse a los acreedores, las cuotas o acciones que en lo sucesivo les corresponderán y el pasivo interno y externo que asumirá la absorbente o la nueva institución que sea creada. Así mismo, podrá recomendar que todas estas actuaciones se sometan a un procedimiento de información pública razonablemente adecuado desde el momento en que, a juicio del Superintendente Bancario, la nueva agrupación de instituciones

financieras esté en condiciones de actuar en el mercado como una sola unidad oferente. De ser acogido el plan por la Superintendencia o con las modificaciones que ésta introduzca, se someterá a Asambleas respectivas y, de no obtenerse la aprobación prevista, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 45 de 1923 y las normas que la adicionan, si es que no hay lugar a tomar otro tipo de providencias, de acuerdo con la ley.

"Artículo 20. *Capital de garantía.* El Gobierno Nacional podrá otorgar garantía de pago de las obligaciones de instituciones financieras cuyo capital pertenezca en parte o totalmente al Estado, como aporte de capital, a través del Banco de la República. En este caso el aporte estatal se determinará conforme al valor nominal de la garantía.

"Facúltase al Gobierno Nacional para celebrar con el Banco de la República los contratos que sean necesarios para el desarrollo del presente artículo.

"Artículo 21. *Régimen contractual.* El contrato que celebre la Nación con el Banco de la República, para el desarrollo de las disposiciones contenidas en esta Ley, únicamente requerirá para su formalización la firma del Presidente de la República, previo concepto favorable del Consejo de Ministros, así como su publicación en el Diario Oficial.

"Artículo 22. Esta Ley rige desde su sanción.

"Bogotá, D. E.,

"El Presidente del Honorable Senado de la República, *Alvaro Villegas Moreno,* el Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, *Miguel Pinedo Vidal,* el Secretario General del Honorable Senado de la República, *Crispín Villazón de Armas,* el Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes, *Julio Enrique Olaya Rincón.*

"República de Colombia - Gobierno Nacional.

"Publíquese y ejecútese.

"Bogotá, D. E., 20 de diciembre de 1985.

"BELISARIO BETANCUR

"El Ministro de Hacienda y Crédito público, *Hugo Palacios Mejía*".

III. La Demanda

1. *Normas que se consideran violadas.*

Estima el actor que la norma que acusa viola los artículos 120, numerales 14, 55; 76, numerales 9° y 10; 77 y 78 numeral 2 de la Constitución.

2. *Fundamentos de la acción.*

El actor fundamenta su acción en los razonamientos que siguen:

a) Apoyar, canalizar recursos, etc., a entidades cuya actividad es la del manejo del ahorro institucional dentro de la órbita reservada exclusivamente al Presidente de

la República por el artículo 120-14 de la Carta, resulta violatorio de la Constitución, si es la ley la que pretende regular estos fenómenos;

b) Como la norma acusada dispone que deberán inscribirse obligatoriamente, para los efectos del objeto de fondo, las Instituciones Financieras distintas del Banco de la República, incluye necesariamente a las que se dedican al manejo del ahorro privado en violación del artículo 120-14 de la Constitución;

c) Estima que las facultades y los instrumentos que la ley confiere al Fondo para la realización de su objeto son de intervención en las entidades inscritas y entre éstas se encuentran necesariamente las que manejan el ahorro privado, en particular los establecimientos bancarios, en sus secciones de ahorros, por lo cual se produce intromisión en la facultad autónoma de regular las que establece el artículo 120, numeral 14 de la Carta y que se consagra como poder propio, autónomo e igual al de la ley en cabeza del Presidente de la República, no compartible con el Congreso;

d) Además, el actor fundamenta su acción en la presunta violación de los artículos 55 y 78-2, porque en tanto el primero dispone la separación de funciones de las ramas del poder y el segundo la prohibición de interferencia entre ellas, la norma acusada permite que el Fondo extienda sus "facultades intervencionistas hasta las personas que manejan y aprovechan el ahorro privado cuya competencia corresponde constitucionalmente al Ejecutivo";

e) Al crearse por la Ley 117 de 1985 una entidad sui-géneris de derecho público, de naturaleza única no reconocida por la Constitución se viola ésta en el artículo 76 numerales 9° y 10.

f) El artículo 77 de la Carta se infringe porque las materias reguladas por la Ley 117 de 1985 son diversas, pues de una parte la Ley establece un plan económico y de otra crea una renta al señalar que uno de los recursos del Fondo será el proveniente de los derechos de inscripción por lo que estas materias deben tramitarse en proyectos de ley distintos.

IV. Concepto fiscal

a) El señor Viceprocurador ante el impedimento aceptado del señor Procurador General de la Nación, sostiene que el inciso 1° del artículo 3° de la Ley 117 de 1985 es inexequible por haber establecido la obligatoria inscripción de todas las instituciones financieras ante el Fondo ya que éstas también comprenden a las que manejan ahorro privado.

Sólo en casos excepcionales la propia Constitución le ha entregado al Presidente la facultad de expedir actos jurídicos sin subordinación a la ley preexistente como son los eventos que regulan los numerales 7°, 9°, 12 y 14 del artículo 120 entre otros, a través de normas que le son propias y que tienen la misma fuerza de las leyes. Son los decretos que la jurisprudencia y la doctrina llaman "Decretos Autónomos o Reglamentos Constitucionales".

Afirma el señor Viceprocurador, que la intervención sobre las personas que manejen, aprovechen o inviertan los fondos del ahorro privado es atribución exclusiva del Presidente de la República por lo que no le cabe duda de que cualquier

disposición emanada del Congreso en este campo, constituye intromisión del legislador no querida por el Constituyente. Como la obligación señalada de inscribirse, no distingue entre las instituciones financieras que se constituyen con objeto principal del manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro privado, se configura la inconstitucionalidad del inciso señalado.

b) Sobre infracción a los numerales 9° y 10 del artículo 76 de la Carta por la creación de un organismo no autorizado por la Constitución, señala que el actor no tuvo en cuenta que el mismo numeral 10 le atribuyó al legislador la facultad de regular otros aspectos del servicio público, con todas las implicaciones que de ella puedan surgir. En consecuencia, estima como constitucional la creación de Fondos de Garantías.

Estima además, que no existe violación del artículo 77 constitucional, pues las normas de la Ley 117 de 1985 guardan armonía con la materia de que trata, por lo que pide se declare la constitucionalidad de toda la norma con exclusión del inciso 1° del artículo 3°.

V. Consideraciones de la Corte

Compete a la Corte el conocimiento de la acción contra la Ley 117 de 1985 por disposición del artículo 214 de la Constitución Nacional.

Procede la Corte a estudiar la totalidad de la norma acusada y a confrontarla con el texto de la Constitución.

Primera. *La moneda y sus manifestaciones institucionales.*

La Ley 117 de 1985 es el Estatuto Jurídico de las garantías que cubren el funcionamiento del sector financiero institucional en el país; el campo de su aplicación es el ámbito general de las actividades financieras de las instituciones que, dentro de la estructura económico nacional, participan como fundamental instrumento de la regulación del proceso de circulación de la riqueza. Su finalidad es la de preservar el equilibrio y la equidad sobre los beneficios económicos provenientes de la actividad financiera general que de ella se desprenden y que además se deben asegurar racionalmente dentro del fin propio del Estado Colombiano cuando atiende las tareas del desarrollo integral ordenadas por el artículo 32 de la Carta.

Es pues, una norma que regula y ordena el funcionamiento de esta parte del servicio público concedido de la moneda, originario del Estado y que además, prevé la intervención de éste en algunas manifestaciones anormales de aquel servicio que por su gravedad, afectan la existencia de todo el sistema económico nacional.

El buen funcionamiento de las instituciones financieras forma parte integral del régimen monetario y de la prestación de este servicio público en toda economía que se desarrolle dentro de los sistemas de la libertad de empresa y de la iniciativa privada. Por ello precisamente, la ordenación y el regular funcionamiento de uno de sus elementos estructurales –las garantías para las instituciones financieras que existan o que puedan existir dentro de la economía nacional– en razón de la importancia definitiva que ellas tienen para todo el proceso económico (producción, distribución, utilización y consumo de bienes y prestación de servicios), es competencia especial del Congreso de la República de conformidad con el artículo 39 de la Carta.

Las instituciones financieras y sus actividades generales, forman parte sustantiva del ordenado funcionamiento de los sistemas económicos demoliberales y de sus regímenes monetarios, en tanto que son la expresión externa y democrática de una de las funciones inherentes al Estado moderno: la función pública monetaria. Por esto, existe unidad de materia entre el servicio público de la moneda y los procesos de circulación de la riqueza en los sistemas económicos, fundados sobre un régimen de libertades públicas como es el nuestro.

De otra parte, el manejo de la moneda y el crédito, independiente del origen de los recursos que lo permiten, hacen que la actividad financiera constituya, en el actual estadio del desarrollo los sistemas económicos, fundamental servicio público originariamente atribuido al Estado, además de regulable por éste en sus manifestaciones públicas y privadas que se relacionen con el funcionamiento general de la economía de la sociedad.

Por eso, también es evidente la estrecha relación de dependencia que existe entre el régimen monetario y las instituciones financieras sin que sus elementos puedan separarse y hasta el punto de que no pueda comprenderse la existencia del régimen económico-social sin el regular y ordenado funcionamiento de ellas.

El manejo de la moneda y la prestación del servicio público concedido con ella relacionado, alcanzan sustanciales desarrollos institucionales y es evidente que la actividad financiera compromete la soberanía monetaria del Estado que corresponde por disposición del numeral 15 del artículo 76 de nuestra Constitución, al Congreso de la República. Las diversas manifestaciones de dicho manejo se entrelazan con las demás manifestaciones económicas en tanto que para que éstas puedan existir de manera regular y continua, ha de asegurarse el sólido funcionamiento de las instituciones que prestan el servicio público financiero derivado y complementario de la moneda, concedido por el Estado, como son las del crédito y la intermediación financiera.

Es evidente en consecuencia, la unidad de materia entre las competencias del Congreso de la República y la regulación general de la actividad financiera; por lo que la ordenación de los elementos que determinan su existencia, y la regulación general del funcionamiento de las instituciones financieras en el campo de las garantías económicas, así como el fortalecimiento patrimonial de las mismas, es competencia del legislador, de conformidad con los artículos 39 y 76-15, que se citan.

Sobre el primer aspecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de junio 12 de 1969, con ponencia del Magistrado Hernán Toro Agudelo, se pronunció sobre este punto, así:

"...en cuanto la Banca ejerce funciones monetarias, como las de emisión, o la creación de depósitos, que son sucedáneos de la moneda; en cuanto el objeto principal de sus negocios es la explotación de crédito social o de la comunidad; y en cuanto, de modo general, la actividad bancaria en Colombia constituye un servicio público, temporalmente concedido por el Estado para su prestación por los particulares, cualquier normación de dicha actividad que toque con los aspectos referidos... no configura intervención de la prevista en el artículo 32 de la Carta, sino ejercicio de atribuciones directas y, por así decirlo, tradicionales del legislador, según las conside-

raciones de la Corte que anteceden derivadas de preceptos como el artículo 39 inciso final, sobre revisión de tarifas y en especial de los reglamentos de los servicios públicos: artículo 76 numeral 10, sobre regulación general del servicio público, y numeral 17 sobre sistema monetario o el artículo 120 numeral 15 que autoriza la reglamentación legal... de los demás establecimientos de crédito, precisamente como base para la inspección ejecutiva allí creada, todo ello según la codificación anterior.

"...las regulaciones sobre cuestiones monetarias, cambiarias y crediticias, y específicamente sobre depósitos bancarios y el manejo del crédito por la Banca privada no constituyen actos de intervención del Estado en la industria privada, de la clase de intervención que contempla y autoriza el artículo 32 (texto anterior a 1968) de la Carta, sino ejercicio de atributos de soberanía del Estado, que son de competencia directa del legislador y lo eran antes de que se introdujera tal concepto de intervención, aparte de que configuran regulación de un servicio público que los particulares prestan sólo por concesión temporal del Estado, sometido así a un régimen de derecho público que para dictarse y expresarse no está sujeto a calificaciones especiales en la Carta... ni a limitaciones como la de que se requiera siempre mandato directo del legislador...

"Los establecimientos privados de crédito prestan un servicio público concedido; en su actividad crean moneda, en su sentido económico que por ende lleva a su asimilación jurídica, y en todo caso tienen como objeto principal la explotación del crédito... pues el sistema monetario y de crédito está sujeto a las regulaciones soberanas del Estado, conforme al numeral 17 del artículo 76 de la Carta, según la anterior codificiación; y porque a la ley compete, de igual modo, la normación de los establecimientos de crédito, según el numeral 15 del artículo 120 de la misma codificación, y porque puede disponer la revisión de los reglamentos de las empresas de servicio público, al tenor del artículo 39, y porque, además tratándose de servicio público concedido, tiene también competencia para regular con amplitud, en sus diversos aspectos, a la luz del numeral 10 del artículo 76 de la misma codificación".

Pero además, las instituciones financieras cumplen funciones económicas que tienden a satisfacer necesidades generales de la comunidad de manera regular y continua que tienen origen en el elemento monetario y sus diversas manifestaciones complementarias, sucedáneas y derivadas, de manifestación también regular o institucional dentro del sistema económico general. Por esto, la credibilidad, la confianza, la solidez y respaldo material de las instituciones que participan como intermediarias y agentes financieros, independientemente del origen de los recursos, en las actividades económicas, es materia de competencia de la ley, y ésta podrá señalar las reglas generales a las que se deban someter aquéllas. En este sentido, la Ley 117 de 1985 regula aspectos relacionados con la atención a la cartera y la confianza sobre las instituciones financieras, conceptos que se extienden a las actividades generales de estas entidades que conforman el sector financiero dentro del sistema económico general del que forma parte el servicio público monetario.

Segunda. *Actividades objeto de intervención.*

Como el Estatuto que se analiza, contiene instrumentos jurídicos que permiten el ejercicio de la acción directa de algunos organismos administrativos del Estado –el

Fondo que con ella se crea y la Superintendencia Bancaria– para lograr el ordenamiento de situaciones patrimoniales anómalas, en que incurran las instituciones financieras, dictando y ejecutando precisas medidas correctivas, no puede considerarse como si fuese sólo y nada más una Ley de regulación del servicio público que se señala, sino que además de esto, es la Ley 117 de 1985 un instrumento de intervención en la economía general del país.

Es pues, la Ley 117 de 1985 una norma con multiplicidad de objetos, uno general y otros especiales, íntimamente relacionados, que permite al Estado asegurar el ordenado y regular funcionamiento del sistema financiero institucional, como servicio público concedido, protegiendo la confianza de los depositantes y acreedores de las instituciones inscritas. También permite este Instituto Jurídico intervenir, en determinados casos señalados por la ley, en las instituciones financieras –que primero deben inscribirse ante el Fondo–, para preservar el equilibrio y la equidad económica e impedir o corregir los perjuicios que puedan causarse tanto a los acreedores como a los deudores y por lo mismo a la economía en general por los injustificados beneficios, principalmente económicos, en favor de accionistas y administradores causantes de aquéllos. Son pues funciones especiales las que consagran los literales b), d), e) y f) del artículo 2° de la Ley 117 de 1985, complementadas por los artículos 6°, 10 y 19 del mismo Estatuto que se expresan como previsiones o mandatos de la Ley para la intervención del Estado en la distribución y utilización de los bienes para racionalizar la economía a fin de lograr el desarrollo integral y evitar o corregir los factores y las conductas que sean contrarias a este principio constitucional. Este tipo de intervención es también propio de los mandatos de la ley, pues se dirige a un radio de acción mucho más amplio que aquel que señala el ordinal 14 del artículo 120. Por su fin y por el objeto general al que se refieren, no interfiere las facultades del Ejecutivo, pues no se dirige a las actividades específicas de las personas que manejan, aprovechan o invierten el ahorro privado sino a las generales de las instituciones financieras.

No cabe pues, en el caso sub-exámine, distinción alguna, como se plantea por el actor y en la vista fiscal, que se relacione con el origen o modalidades de los recursos o con la especial actividad material que desarrollan las instituciones si éstas son financieras, porque lo que quiere hacer el legislador al establecer el régimen económico de garantías, a través de la creación de una persona jurídica autónoma de Derecho Público, es regular un aspecto estructural del que se deriva la existencia y el funcionamiento del sistema financiero nacional con la exclusión expresa del Banco de la República, que cumple funciones especiales de Banca Central y para el que se prevé un régimen también especial.

Tercera. *Es Constitucional la creación del Instituto Jurídico de las Garantías del Sistema Financiero.*

Como se dejó dicho, algunas de las funciones que se le asignan al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, obedecen a las competencias de dirección general de la economía otorgadas por el artículo 32 de la Constitución, en cabeza del Estado por mandato de la ley, y a las potestades de policía –artículo 39 incisos 2° y 4°– y de soberanía monetaria –artículo 76 numeral 15– que corresponden al Congreso de la República sin sujeción a la naturaleza pública o privada de los recursos que manejen o inviertan las instituciones sobre las que actúa. Esta atribución constitucio-

nal del Congreso se relaciona natural y necesariamente con la estructura financiera general de la economía pero especialmente con las funciones derivadas de carácter general y sucedáneo de la moneda y no con las actividades propias del ahorro privado, o cualquier otra forma de actividad financiera institucional. Por este aspecto resulta constitucional la norma que se examina.

Así las cosas, la regulación que por vía general establezca el Congreso de la República, encaminada a lograr el fortalecimiento de la estructura financiera nacional, no conduce, dado el ámbito material que debe cubrir, a injerencia alguna en las actividades propias de las personas que manejan e invierten el ahorro privado. Estas actividades ni se limitan ni se restringen ni mucho menos se orientan o se encauzan con el establecimiento y la creación de organismos administrativos de derecho público que respalden los créditos, los débitos y en general las obligaciones de estas instituciones financieras, las que pueden ser intervenidas por el ejecutivo con base en el numeral 14 del artículo 120 de la Carta.

En este orden de ideas, *actividad* es la facultad de obrar, operar y de realizar tareas propias y, además, en su plural, nos indica el conjunto de operaciones o tareas también *propias* de la entidad; lo que no quiere decir que la persona que obre, opere o realice actos y gestiones –*manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro privado*– se sustraiga al poder y vigor de las leyes, o que sólo pueda ejecutar aquellas actividades que le son propias y nada más, o sólo estar sometidas a los decretos que intervienen esas mismas actividades.

Existe un ámbito material y objetivo del alcance del numeral 14 del artículo 120 de la Carta, pues ni todas las actividades de las personas que aprovechen, manejen o inviertan fondos provenientes del ahorro privado constituyen el exclusivo campo de aplicación de esta norma de la Constitución, ni el desarrollo de ésta puede abarcarlas a todas materialmente, inclusive a las que no le son propias a estas personas. Mucho menos puede imaginarse que las personas que tengan como objeto las mismas actividades sujetas a la intervención presidencial, deben su existencia y la posibilidad legal del cumplimiento de las mismas, o de cualquier otras, sólo a las normas de intervención especial que se dictan en ejercicio de esta especial atribución del Jefe Supremo de la Administración, tal como se desprende de las argumentaciones de la demanda.

Pero hay más, porque el artículo 120, ordinal 14 de la Carta, defiera al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, la atribución constitucional de intervenir en las actividades de las personas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado, no se puede pensar ni admitir que la voluntad del constituyente llegase hasta el extremo de excluirlas del vigor y de la fuerza de las leyes a las que en todo momento deben sometimiento colectivo, incluso a las que prevén la intervención general de la economía de acuerdo con el artículo 32 de la Carta; tal idea sería absurda y a ese extremo llegaría la argumentación del actor de aceptarse su fundamentación, por lo que se descarta.

Tampoco cabe restricción, en el preciso punto que se estudia, a la facultad legislativa en razón de las atribuciones constitucionales del Ejecutivo que se señalan,

puesto que éste las conserva plenamente pero sólo sobre las actividades propias que indica con claridad el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución, que son precisamente las actividades profesionales de las personas que manejan el ahorro privado.

Además, el deber de inscripción ante el Fondo, que se impone a las instituciones financieras y que se extiende a las que manejan, aprovechan o invierten el ahorro privado, no depende ni afecta a las actividades propias de las mismas sino que obedece a la estructura general y al funcionamiento del sistema financiero institucional.

Es éste, se repite, un deber general exigible, como cualquier otro de origen legal, a todas las instituciones que tengan como objeto de su actividad el manejar dineros o recursos financieros ya sea como agentes, corredores, intermediarios o colocadores financieros, en razón de las actividades generales de financiación y no por las actividades propias del manejo, inversión o aprovechamiento del ahorro privado, que pueden o no cumplir. En consecuencia, resulta constitucional el artículo 3° de la ley acusada por no ser violatorio del artículo 120, numeral 14 de la Carta, ni de canon constitucional alguno.

Cuarta: *Estructura y Funciones del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.*

1. Sobre la creación y estructuración administrativa del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras como persona jurídica autónoma de Derecho Público por los artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 13, 14, 16, 17, 18 y 21 de la Ley 117 de 1985, se estima que no existe violación de la Constitución pues es de competencia del Congreso esta facultad, según el artículo 76, numerales 9° y 10; así no podría pensarse en violación de la Constitución, en los artículos que se indican cuando, por el contrario, es a la ley a la que le corresponde la creación de dicha figura, a iniciativa del Gobierno de conformidad con el artículo 79, inciso 2° de la Carta, como en efecto ocurrió con las disposiciones citadas. La composición y las funciones de la Junta Directiva propias de la entidad creada como se señala por los artículos 8° y 9°, corresponde también a las facultades del Congreso a la luz del artículo 76 numeral 10.

Ahora bien, el legislador, en ejercicio de su competencia para crear entidades públicas de la administración nacional al ordenar los elementos característicos de cada una de ellas, debe observar el contexto general fijado por la Carta.

Al respecto, el Magistrado Carlos Medellín en salvamento de voto formulado en relación con la sentencia de 28 de abril de 1981, señaló con claridad el alcance de la competencia del legislador sobre la creación de entidades administrativas:

"...En la práctica a veces ocurre que el legislador, al dar origen a nuevos organismos de la Administración, los distingue con nombres diferentes a los utilizados por la Constitución. En tales casos su identidad no depende de las denominaciones con que se les llame, sino de la identificación de los elementos constitutivos atinentes a la naturaleza jurídica, los objetivos, las funciones, el grado de autonomía, la personería, el patrimonio, y demás aspectos propios de cada tipo de entidad. El Decreto número 1050 de 1968 precisamente hace la especificación de tales elemen-

tos, por ejemplo cuando se refiere a los establecimientos públicos (artículo 5°) de los cuales dice que deben tener personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. *Et sic de caeteris*. Por manera que en los casos a que se hace referencia, las dudas que surjan acerca de la índole de una dependencia o entidad administrativa deben resolverse mediante la confrontación de sus elementos constitutivos con los propios de cada tipo de organismo, a la luz de los preceptos constitucionales y las normas legales que los desarrollan. Un organismo llamado con nombre distinto a los que en éstos se utilizan, bien puede ser establecimiento público, verbi gracia, como lo son la mayoría de los denominados institutos, y hasta ciertas universidades.

"Lo que importa verdaderamente al interés constitucional es que todo organismo de la Administración Pública corresponda al esquema de ella trazado por el constituyente, a fin de evitar que se creen y organicen cuerpos extraños, con detrimento de la unidad orgánica y técnica en el ente administrativo general que la Carta contempla. Justamente la necesidad sentida de que el Estado pudiera tener para determinados fines corporaciones autónomas regionales y otros establecimientos públicos, sociedades de economía mixta y empresas industriales o comerciales, requirió de toda una reforma constitucional, porque el anterior esquema estructural de la administración, tal como la Carta lo tenía establecido, no le permitía al legislador crear estas clases de organismos...".

En efecto, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras fue creado por el legislador como una entidad autónoma de derecho público y su objeto principal es el de atender funciones administrativas tal como lo señala el artículo 2° de la Ley 117 de 1985, que dice:

"Artículo 2° *Objeto*. El objeto general del Fondo consistirá en la *protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquiera otra naturaleza* de los accionistas y administradores causantes de perjuicios a las instituciones financieras" (se subraya).

Lo anterior se complementa por los literales a), c), d), e) y f) del mismo artículo que le ordenan al Fondo servir de instrumento para el fortalecimiento patrimonial de las instituciones inscritas; procurar que éstas tengan medios para otorgar liquidez a los activos financieros y a los bienes recibidos en pago; *organizar y desarrollar el sistema de seguro* de depósito y el de compra de obligaciones a cargo de las instituciones inscritas en liquidación o el de financiamiento a los ahorradores de las mismas y, principalmente colaborar con las autoridades en la liquidación de las instituciones financieras intervenidas y asumir temporalmente la administración de éstas para lograr su recuperación económica. También el literal d) del artículo 5°, de la Ley que le permite al Fondo coadyuvar en la liquidación de instituciones financieras por encargo de la Superintendencia Bancaria, así como los artículos 6° y 7° de la Ley, que le permiten al Fondo participar en el capital de las entidades financieras requeridas por la Superintendencia Bancaria y la reducción meramente nominal del capital de las instituciones inscritas son disposiciones que imponen al Fondo el deber de atender actividades principalmente administrativas.

Conforme al criterio expuesto, la Corte estima que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras es una persona jurídica de Derecho Público, que por voluntad soberana del legislador ostenta especiales características administrativas, funcionales y patrimoniales. Empero, la denominación y el particular régimen aplicable acogidos por el legislador no pueden tener la virtualidad de ocultar su real naturaleza jurídica y su ubicación en el contexto de la organización administrativa, y mucho menos, significar la inaplicabilidad de los preceptos constitucionales pertinentes en razón de las reales características asignadas por la ley de creación. Evidentemente, el conjunto de las características propias señaladas en la Ley 117 de 1985, imponen concluir que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras corresponde en sus elementos a las entidades que la ley, en desarrollo de las previsiones constitucionales, califica como establecimientos públicos y por ello en cuanto dice tener relación con el examen de su constitucionalidad, deben conformarse a las precisas facultades y condicionamientos que en esa materia consagra la Carta.

En sentido contrario a la Constitución Nacional, la Ley 117 de 1985, en sus artículos 11 y 12, establece unos mecanismos especiales para el nombramiento de Director y para el ejercicio de la representación legal del Fondo que, aun cuando se acepte la naturaleza sui-géneris o única del ente que se crea, exigen la declaratoria de inexequibilidad en algunos de sus apartes, pues como se dejó dicho, no se avienen con el querer del constituyente respecto a la organización y funcionamiento de las entidades públicas nacionales resultado de la descentralización administrativa.

En efecto, aunque los numerales 9° y 10 del artículo 76 de la Carta disponen que corresponde al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas, como ocurre en el caso que se examina, crear y expedir los estatutos básicos de los establecimientos públicos para determinar la estructura de la Administración Nacional, es también cierto que el numeral 1° del artículo 120 constitucional dispone que sea el Presidente de la República el encargado de nombrar y separar libremente a los directores de los establecimientos públicos nacionales. Resulta así evidente la violación de este texto constitucional en que incurre el artículo 12 de la Ley 117 de 1985, en la parte que señala la designación del Director del Fondo es competencia de la Junta Directiva del Banco de la República, con aprobación que de aquél haga la Junta Directiva del mismo, por lo que se declara inconstitucional como se señalará en la parte resolutiva de este fallo.

En el mismo sentido debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley, que atenta contra la Carta al asignarle al Gerente del Banco de la República la función de representante legal del Fondo, pues, se quiebra la unidad de gestión y jerarquía que son caracteres propios de toda persona jurídica de Derecho Público de la Administración Nacional, cuya suprema autoridad tutelar es, en nuestro ordenamiento constitucional, el Presidente de la República. Así, conforme a las normas constitucionales, la representacion legal del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, le corresponde a su Director, nombrado por el Presidente de la República, como fluye de la lógica interpretación del numeral 1° del artículo 120 de la Carta.

Los artículos 13, 14, 16, 17, 18 y 21, que señalan las características sui-géneris del ente y contienen las regulaciones especiales sobre las prerrogativas del Fondo para el eficaz logro de sus objetivos, las limitaciones contractuales y financieras al Fondo,

los instrumentos de inspección y vigilancia disciplinarias del Fondo a cargo de la Superintendencia Bancaria, el deber de reserva de información a que está obligado el Fondo y las prerrogativas que sobre sus papeles, libros y correspondencia de que goza esta entidad, y el régimen especial para el pago de las obligaciones y acreencias a favor del Fondo –las que gozarán del derecho de ser excluidas de la masa de la liquidación de las instituciones financieras y del Fondo mismo–, el régimen especial a que debe someterse el contrato con el Banco de la República para el desarrollo de las disposiciones que la misma ley contiene, no contravienen norma constitucional alguna y por el contrario, son el resultado del ejercicio de las funciones constitucionales propias del legislador que consagran el artículo 76, numeral 9° y 10 de la Carta, y que le permiten determinar la estructura de la Administración Nacional y regular los otros aspectos del servicio público. Por lo anterior deben declararse constitucionales, como en efecto se hará.

La tarea legislativa sobre la materia de que se ocupa el estatuto acusado no escapa al criterio que se señala por el artículo 16 de la Constitución para las autoridades del Estado, cuando dispone que éstas han sido instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. En cuanto a estos últimos, aprecia la Corte la evidente y necesaria relación de correspondencia directa que existe entre esa materia constitucionalmente ordenada y las normas legales que estructuran la vigilancia estatal y aun el apoyo público al patrimonio de las instituciones financieras, pues se trata de señalar medios eficientes que busquen la debida defensa de los intereses económicos de los acreedores y depositantes, cuyos bienes se hallan comprometidos en el éxito o el fracaso de la gestión que adelantan dichas entidades. En ello está de por medio también, como ya lo advirtió la Corte en su sentencia del 2 de diciembre de 1982, el interés común y el conjunto de la economía nacional.

No puede invocarse, para sostener la inconstitucionalidad de la ley demandada, una supuesta violación del artículo 55 de la Carta, toda vez que la enunciada función de protección sobre los bienes de las personas no es en modo alguno atribución exclusiva ni excluyente del Ejecutivo, sino propósito común de los órganos estatales, los cuales –dentro de los límites y las competencias fijadas por la Constitución– cumplen sus funciones en colaboración armónica e integral. Es que, si bien el ordinal 14 del artículo 120 confió al Presidente de la República como atribución constitucional propia la intervención en las actividades de personas que manejan, aprovechan o invierten los fondos provenientes del ahorro privado, y ha dicho la Corte que esa tarea específica no es compartible con el Congreso –lo cual ahora se reitera–, mal puede entenderse que dicha exclusividad puede ampliarse a asuntos diversos de la intervención misma, como sería la creación de personas jurídicas de Derecho Público para alcanzar los objetivos atrás expuestos, a la estructuración de sus funciones concretas, o al señalamiento de sus organismos de dirección y administración, temas todos éstos que atañen al legislador. Predicamento éste que se extiende al contenido de los artículos 4°, 5°, 10 y 15 de la Ley que se examina, pues éstos establecen los recursos del Fondo, las operaciones financieras contractuales y administrativas que puede realizar, la creación de un seguro de depósito organizado por su Junta Directiva y, además, las facultades de la Junta Monetaria en relación con el Fondo mismo. La composición del patrimonio del Fondo de Garantías de Institucio-

nes Financieras se integra con créditos que le otorga el Banco de la República, según reglamentación que de modo general debe expedir la Junta Monetaria también en desarrollo de la soberanía monetaria; con aportes del Presupuesto Nacional en igual monto al recaudo por concepto de multas que imponga la Superintendencia Bancaria a las instituciones financieras y sus funcionarios, además por los dineros provenientes de las entidades inscritas ante el Fondo por concepto de los derechos correspondientes y por la inversión obligatoria en bonos emitidos por el Fondo y reglamentados por la Junta Monetaria; por los préstamos internos y externos que se obtengan y los beneficios, comisiones, honorarios, intereses y rendimientos generales en su inversión, asuntos éstos propios de la competencia del legislador.

Por otra parte, el legislador le asigna a la Junta Monetaria la facultad de autorizar el uso de los créditos para el fin de atender los objetivos generales señalados por el artículo 2°, de establecer los límites, las condiciones, garantías y requisitos para la utilización de los cupos de crédito.

El artículo 7° del Estatuto que se analiza concede a la Junta Directiva del Fondo la posibilidad de ordenar la reducción meramente nominal del capital social de una entidad inscrita sin necesidad de recurrir a la Asamblea de ésta o a la aceptación de los acreedores de la misma, todo siempre previo informe de la Superintendencia Bancaria; esta orden se encamina al restablecimiento de la situación patrimonial anómala de la entidad objeto de la intervención operativa del Estado, pues es la ley la que en desarrollo del artículo 39 de la Carta, ordena la revisión y fiscalización del servicio público de la Banca al que pertenece estructuralmente el sistema financiero institucional, como bien lo tienen definido la doctrina y la jurisprudencia constitucionales del país, desde la sentencia de diciembre 12 de 1925 sobre la Ley 45 de 1923. En ese fallo dijo la Corporación:

"...el Legislador común puede reglamentar el ejercicio de las industrias permitidas, para salvaguardia de la moralidad y seguridad públicas y que no viola la Constitución con las medidas que establece en persecución de ese objetivo".

"Esta alta potestad de policía, que corresponde al Estado, se extiende, como es obvio, a aquellas medidas que sean razonables y equitativas, y tengan una relación apropiada con el asunto materia de la regulación, de modo que aparezca claramente que la ley respectiva tiende al bienestar público o a la prevención de alguna ofensa o peligro social...".

Es una operación aritmética y contable que no desconoce derecho patrimonial alguno sino que por el contrario, pone orden a una relación que debe ser cierta y consolidada para asegurar la confianza del público que utiliza el servicio y además fortalece la solidez patrimonial del sistema financiero. Es una reducción meramente nominal y no supone desplazamiento en la titularidad de los bienes, es pues un mecanismo de corrección y prevención de situaciones anormales de carácter contable que atentan contra la confianza de los depositantes y acreedores y que se encamina a favorecer el fortalecimiento patrimonial de la institución financiera como sujeto de la actividad monetaria y crediticia.

Los artículos 6° y 19 prevén los eventos en los que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras participa en el capital y en la fusión de las entidades

financieras, supeditando la intervención de éste a los requerimientos y órdenes que expida el Superintendente Bancario para restablecer la situación patrimonial o para evitar la toma de posesión de los haberes y negocios de las instituciones financieras o su nacionalización. Es también de competencia del legislador el señalamiento de la organización administrativa de la Superintendencia así como de sus funciones generales y además, la previsión consagrada en el segundo inciso del artículo 32 de la Carta, despeja toda duda respecto del contenido de los dos últimos artículos citados.

En efecto, esta norma prevé la posible intervención del Estado por mandato de la ley, dentro de los límites del texto constitucional, en la empresa de cualquier naturaleza jurídica, y en la iniciativa privada, siempre que se asegure la libertad de éstas; la dirección de la economía está evidentemente a cargo del Estado, no sólo con el fin de lograr el desarrollo integral, racionalizando y planificando los factores de producción y consumo, sino en procura del pleno empleo de los recursos humanos y naturales.

Según esta normatividad constitucional, ha sostenido la Corte, es a la ley a la que le corresponde "determinar las formas de intervención del Estado en el proceso económico y en el control de las actividades privadas de dicho proceso, sin perjuicio de que por mandato suyo, el Estado se valga del Estado para poder cumplir los cometidos de la intervención..." (Sentencia de mayo 27 de 1982, Magistrado Ponente Dr. Manuel Gaona Cruz). Todo lo anterior se reafirma por las facultades propias del legislador contenidas en el artículo 76, numeral 9°, 10 y 15 de la Constitución Nacional y en el parágrafo del artículo 122 de la misma. Aspectos estos últimos que se analizaron detalladamente por la Corte en las sentencias de exequibilidad de la Ley 32 de 1979 y del Decreto número 2920 de 1982, por lo que se reitera la ausencia de tacha de inconstitucionalidad sobre las normas que se examinan.

De otra parte, las principales funciones del Fondo que son cuestionadas por el actor, consisten en la facultad de informar a la Superintendencia Bancaria de la existencia de situaciones en las cuales algunas instituciones financieras inscritas ponen en peligro la confianza en el sistema financiero o incumplen cualquiera de las obligaciones legales, y las de participación en la administración y procesos de liquidación ordenados por el Superintendente Bancario y corresponden a la estructuración legal de las competencias propias de la Superintendencia Bancaria a las que les sirve el Fondo como instrumento estabilizador y compensatorio. Corresponde a la ley el señalamiento de las facultades de los entes de la administración pública y por lo tanto las que le asigna al Fondo como persona jurídica de Derecho Público, son de naturaleza operativa e instrumental de carácter complementario, pues así lo requiere la Administración para cumplir sus cometidos.

Quinta: *El artículo 122 de la Carta.*

1. Es claro que la norma que aquí se estudia por atender al conjunto general de la economía y no en forma específica a las actividades profesionales de ciertas personas o entidades especializadas de las que menciona el numeral 14 del artículo 120, atañe al legislador, en lo que no aparece contrario a la Carta, bien sea este ordinario o extraordinario como ya lo reconoció la Corte en sentencias de mayo 25 de 1981 y diciembre 2 de 1982; la primera en relación con la declaratoria de exequibili-

dad de la Ley 32 de 1979 y la segunda sobre la constitucionalidad del Decreto número 2920 de 1982, expedido en desarrollo de las atribuciones propias del Estado de Emergencia Económica.

2. En efecto, si constitucionalmente le es posible al Gobierno, a la luz de la jurisprudencia que se cita, dictar normas, inclusive represivas e interventoras, encaminadas al restablecimiento de la confianza general en el sector financiero, por la vía excepcional del artículo 122 de la Carta, tanto más está facultado el legislador ordinario para actuar en el mismo sentido, máxime si por otra parte se tiene en cuenta lo preceptuado en el citado canon constitucional sobre competencia del Congreso, en todo tiempo y a iniciativa propia, para legislar sobre las materias específicas objeto de los Decretos de Emergencia.

Como según se desprende de la Ley 117 de 1985, su finalidad corresponde a los mismos propósitos que inspiraron el Decreto número 2920 de 1982, debe entenderse que también por este aspecto se hallaba el legislador ordinario en pleno uso de sus facultades, sin que sea factible contradicción alguna de contenido y por la materia con el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución, a la luz de la parte final del inciso 3° del artículo 122.

Sexta: *Cosa juzgada.*

Sobre las facultades extraordinarias que confiere el parágrafo del artículo 16 de la norma bajo examen, esta Corte pronunció en sentencia de marzo 10 de 1987, fallo de exequibilidad por no encontrarlo contrario al texto constitucional. En consecuencia ordenará estarse a lo resuelto sobre este punto.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

Resuelve

Primero. Estése a lo resuelto en sentencia de marzo 10 de 1987 de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al parágrafo del artículo 16 de la Ley 117 de 1985.

Segundo. Declarar inexequibles el artículo 11 de la Ley 117 de 1985 en cuanto le asigna la representación legal del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras al Gerente General del Banco de la República, y el artículo 12 de la misma ley en la parte que dispone que el Director del Fondo "será designado por la Junta Directiva del Banco de la República con la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público previa selección que de aquél haga la Junta Directiva del Fondo.

"El Director ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones que le asigne la Junta Directiva o las que con aprobación de ésta le sean delegadas por el representante legal del Fondo".

Tercero. DECLARAR EXEQUIBLES las restantes normas de la Ley 117 de 1985.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Ramón Zúñiga Valverde, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Alvaro Tafur Galvis,* Conjuez; , *Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

EVOLUCION DEL SISTEMA POLITICO NACIONAL. SISTEMAS FEDERAL Y UNITARIO. LA IGUALDAD DE DERECHOS POLITICOS. CALIDADES PARA SER ELEGIDO ALCALDE.

Exequible la parte acusada del artículo 2° de la Ley 78 de 1986.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 57.

Referencia: Expediente número 1578.

Acción de inexequibilidad contra el artículo 2° (parcialmente) de la Ley 78 de 1986. Calidades para ser elegido Alcalde.

Actor: *Jaime Orlando Santofimio.*

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobada por Acta número 27.

Bogotá, D. E., junio once (11) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

Ante esta Corporación el ciudadano Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presentó demanda de inexequibilidad contra una parte del artículo 2° de la Ley 78 de 1986. La demanda fue admitida, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien emitió en término el concepto de rigor. Procede la Corte Suprema de Justicia a resolver el asunto.

II. Texto de la norma acusada

El texto de la norma acusada es el siguiente:

"Artículo 2° *Calidades*. Para ser elegido Alcalde se requiere, ser ciudadano en ejercicio y *haber nacido o haber sido vecino del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana, durante el año anterior a la fecha de su inscripción como candidato*" (lo subrayado es la parte demandada).

III. La Demanda

A. *Normas que se consideran infringidas.*

El demandante estima como normas infringidas los artículos 1°; 11, inciso 3°; 15 y 62 de la Carta, y el artículo 3° inciso 4° del Acto Legislativo número 1 de 1986.

B. *Fundamentaciones.*

Los argumentos con los que el actor fundamenta su demanda son los siguientes:

1. La Norma acusada viola el artículo 1° de la Constitución Nacional porque la organización unitaria del Estado implica respecto de los nacionales colombianos, que éstos sean para efectos del ejercicio de los derechos políticos iguales en cualquiera de las secciones político administrativas en que se ha dividido el país para efectos de la prestación de servicios públicos, las entidades territoriales de la República de ninguna manera dentro de nuestra estructura unitaria pueden considerarse como entes determinantes para el ejercicio de los derechos políticos de los colombianos que hubieran nacido o se encontraren domiciliados o residenciados en sus territorios".

2. Argumenta el actor que en concordancia con el artículo 1° de la Carta, también resulta violado el artículo 11 inciso 3° en tanto que los derechos políticos se otorgan todos a los nacionales, no sólo en relación con los extranjeros –en la medida en que se excluye del ejercicio de los derechos políticos–, sino porque en sentido amplio esta norma "otorga sin diferenciación o limitación alguna, el ejercicio de los derechos políticos por igual en todo el territorio colombiano", así "...es claro el deseo del constituyente de que sea igualitario el desarrollo de los derechos políticos de los colombianos sin distinción en razón del lugar de nacimiento o residencia".

3. Según el actor, de la norma acusada resulta la violación de los artículos 15 y 62 de la Constitución Nacional, ya que al establecerse la limitante sobre la ciudadanía que es condición previa e indispensable para elegir y ser elegido Alcalde Municipal o Distrital, y que consiste en el deber de ser oriundo o residente en el respectivo municipio o Distrito, el legislador impone una distinción no querida mi permitida por el constituyente pues éste ya se había ocupado de manera genérica sobre ésta. De igual manera resulta la violación del artículo 62 de la Carta "en el sentido de ocuparse de calidades sobre las cuales ya el constituyente se ocupa, precisamente en el mentado artículo 15 de la Constitución Política".

La norma que se acusa, desborda los límites de la Constitución pues los preceptos del Acto Legislativo número 1 de 1986 no autorizan al legislador para determinar un régimen de calidades diverso del establecido en la Carta sino para hacerlo según sus propios lineamientos.

IV. La vista fiscal

El señor Procurador General de la Nación rindió su concepto, en él solicitó a esta Corporación que declare que la parte demandada del artículo 2° de la Ley 78 de 1986 es exequible.

Son consideraciones de la vista fiscal las siguientes:

1. Que la norma acusada no tiene incidencia en la forma del Estado Colombiano que establece el artículo 1° de la Carta ya que "las calidades legales que deben tener las personas para poder ser elegidos alcaldes, no modifican de ninguna manera la naturaleza del Estado y su relación con el territorio, pues no cambia el sistema de unidad política con descentralización administrativa adoptado por la Constitución de 1886".

2. Los requisitos que exige el artículo 2° de la Ley 78 de 1985, no otorgan la prerrogativa a ser elegidas alcaldes a personas diferentes a los ciudadanos colombianos, con lo cual se cumple lo dispuesto por el inciso 3° del artículo 11 y por el artículo 15 de la Constitución.

3. El artículo 15 constitucional "es una norma genérica aplicable a todos los cargos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, por lo que de ninguna manera puede interpretarse que con el ordenamiento de ese requisito, se agoten las condiciones para ser elegidos o nombrados". Acompaña la vista fiscal este razonamiento con la afirmación según la cual el artículo 62 de la Carta le asigna a la ley la competencia que precisamente se ejerció en la norma acusada que consiste en la facultad de señalar las calidades y antecedentes para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución. En ese sentido advierte el Procurador General de la Nación que en la Constitución no existe disposición que establezca las condiciones para ser alcalde y al contrario, es el artículo 202 (artículo 3° del Acto Legislativo número 1 de 1986) el que ordena expresamente que sea la ley la que determine "las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes".

Así, concluye el Procurador, la norma acusada le da exacto cumplimiento a los preceptos constitucionales señalados: además porque se están "señalando unas exigencias apenas obvias, pues si una persona no tiene ninguna vinculación con el municipio para el cual quiere ser elegida, ni por nacimiento ni por la residencia de un año que exige la ley, desconoce las necesidades y los recursos de la localidad, por lo que carece de las condiciones mínimas para gobernarla".

V. Consideraciones de la Corte

A. *Competencia.*

Es competente esta Corporación para conocer de demandas de inexequibilidad de las leyes, cuando fueren presentadas por cualquier ciudadano (art. 214 C.N.).

B. *Examen de los cargos de la demanda.*

1. El Sistema Unitario y la Ley acusada:

El artículo 1° de la Constitución proclama el principio de que la Nación Colombiana forma una República Unitaria:

Tradicionalmente se ha considerado que la forma unitaria se opone a la federal y que ambas corresponden a maneras diferentes de distribuir el poder estatal entre las autoridades superiores y las regionales y locales.

El criterio decisivo para precisar estos conceptos se refiere a la organización territorial del poder dentro del Estado. Así, la forma unitaria implica la mayor concentración posible de poderes en manos de las autoridades centrales; la federal, en cambio, busca robustecer la autonomía de las autoridades regionales y locales hasta donde lo permita la subsistencia de la unidad soberana del Estado.

En el siglo pasado era frecuente la contraposición de estas dos formas de organización política, sobre la base, precisamente del análisis de la soberanía, de modo que el sistema unitario se caracteriza por la unidad soberana radicada en los poderes centrales, en tanto que el federal implicaba un reparto de la soberanía entre el Estado federal o central y los Estados federados o periféricos. Por eso se creía que esta clasificación tenía que ver con la forma misma del Estado. Pero un análisis más certero de la soberanía y la unidad del orden estatal ha conducido a superar ese punto de vista. Hoy se ve claro que los Estados Federados no son soberanos y que esta calidad sólo puede ostentarla el Estado Central; así mismo, se acepta que en las Federaciones se da la unidad del orden jurídico-político, sin la cual no podría hablarse de la existencia del Estado.

Aunque la Constitución no lo dice en esos términos, la fórmula que se adoptó en 1886 y que aún subsiste, matizada con la elección popular de alcaldes que estableció el Acto Legislativo número 1 de 1986, es la que había enunciado Núñez en otra oportunidad: centralización política y descentralización administrativa.

La experiencia que tuvo el país con las instituciones federales en la segunda mitad del siglo XIX mostró los puntos débiles de que adolecían, como los siguientes: La diversidad de legislaciones en los distintos ramos, pues variaban de Estado a Estado, introdujo confusiones en el ordenamiento jurídico; la falta de autoridad del presidente de la Unión sobre los presidentes de los Estados y la autonomía tan amplia que a éstos se había otorgado, que llegaba hasta la posibilidad de que cada uno tuviera su propio ejército y entrara en guerra con otros estados, hacía sumamente difícil el manejo del orden público; en fin, la penuria a que se sometió al fisco de la Unión condebana a las autoridades centrales a la impotencia.

Con todo, las instituciones federales satisfacían las aspiraciones regionales y locales respecto del autogobierno, y hacían posible adaptar la acción estatal a las necesidades de las diferentes secciones del país.

Habida consideración de lo arraigado que estaba en la conciencia colectiva el sentimiento federal, cuando se trató de sustituir la Constitución de 1863 a raíz de la derrota del radicalismo en la guerra de 1885, inicialmente se quiso moderar las instituciones federales, más no suprimirlas. Fue por la influencia de Miguel Antonio Caro en el Consejo Nacional de Delegatarios que se optó a la postre por una solución unitaria que destacara la autoridad política de los poderes centrales, sin perjuicio de mantener cierto grado de autonomía administrativa en cabeza de los entes regionales y locales.

Esta referencia a los antecedentes históricos de la fórmula unitaria adoptada en 1886 es importante para fijar su sentido político y jurídico, que en síntesis corresponde a lo siguiente: a) A la proclamación de la unidad soberana del Estado, que nadie discute en la actualidad pero que era tema litigioso hace 100 años; b) a la búsqueda de

la unidad legislativa para todo el territorio nacional; c) al robustecimiento de la autoridad presidencial respecto del manejo del orden público; y d) a la conservación de la división política regional (departamentos y territorios nacionales) y local (municipios), restringida al ámbito administrativo; limitada por el carácter de agentes del Presidente asignado a los Gobernadores y el de agentes de éstos asignado a los Alcaldes (lo que ya no subsiste, al tenor del actual art. 200 C.N.); pero actuante en razón de la independencia otorgada a los departamentos para administrar los asuntos seccionales, de la garantía acordada a los bienes y rentas de las entidades territoriales y de la elección popular de las Asambleas y Concejos, así como ahora, de los Alcaldes.

El demandante pretende en este proceso que el sistema unitario implica, además, que los nacionales colombianos sean iguales respecto de los derechos políticos en cualquiera de las secciones político-administrativas en que se ha dividido el país. Considera que dicha división se ha establecido para efectos de la prestación de servicios públicos y que "las entidades territoriales de la República de ninguna manera dentro de nuestra estructura unitaria pueden considerarse como entes determinantes para el ejercicio de los derechos políticos de los colombianos que hubieran nacido o se encontraren domiciliados o residenciados en sus territorios".

Tal como se ha visto, la adopción del sistema unitario no tiene relación directa con la igualdad de derechos políticos entre los colombianos. Tanto es así que la propia Constitución de 1886 que lo estableció no les daba los mismos derechos políticos a todos los ciudadanos. Estos elegían directamente Concejeros Municipales y Diputados a las Asambleas Departamentales (art. 172), pero sólo los que supieran leer y escribir o tuvieran renta anual de quinientos pesos, o propiedad inmueble de mil quinientos podían votar para electores y elegir directamente Representantes a la Cámara.

No es exacta la aseveración de que las entidades territoriales han sido establecidas para la prestación de servicios públicos, a menos de darle a esta expresión un sentido tan amplio que cubra toda la actividad administrativa, incluyendo la de policía y la de fomento. Cierto es, según se observó, que la división territorial es administrativa, no legislativa; pero ello no obsta para afirmar su sentido político, no sólo por la circunstancia ya anotada de que las Asambleas, los Concejos y los Alcaldes son de elección popular, sino porque la base para la integración del Congreso de la República son las circunscripciones electorales que, al tenor de los artículos 176 y 177 C.N., corresponden a los departamentos, fuera de las circunscripciones especiales que para los territorios nacionales prevé el inciso 2° de esta última disposición.

No se sigue, entonces, del tipo de división territorial que rige en el país una clara incompatibilidad con disposiciones como la que se acusa en este proceso.

Tampoco es atendible la tesis de que el haber nacido o estar domiciliado en alguna de las entidades territoriales no pueda ser criterio determinante para el ejercicio de los derechos políticos y, concretamente, el de ser elegido alcalde municipal, pues el artículo 3°. A.L. número 1 de 1986 dice, entre otras cosas, que la ley "determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los Alcaldes", sin señalar de qué calidades se trata, por lo que hay qué entender que el legislador

dispone de atribuciones amplias al respecto, desde que no exija calidades o determine inhabilidades e incompatibilidades que pugnen con principios fundamentales de la Constitución.

Como no es tal es supuesto que se examina, hay qué desechar este primer argumento de la demanda.

2. *La igualdad de derechos políticos (art. 11 inciso 3º)*

De acuerdo con la norma que cita el demandante en su segundo argumento "los derechos políticos se reservarán a los nacionales".

Pero de ahí no se sigue la igualdad total de derechos para todos ellos.

Dicha igualdad ha sido proclamada para el ejercicio del sufragio, dado que el artículo 171 C.N. con las modificaciones que le introdujeron el Plebiscito de 1957 y el A.L. número 1 de 1986, dispone que todos los ciudadanos eligen directamente Alcaldes, Concejales, Diputados, Representantes, Senadores y Presidente de la República.

También ha sido consagrada la igualdad para el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, que al tenor del artículo 214 C.N. puede ser intentada "por cualquier ciudadano".

No es, en cambio, igual para todos el derecho a ser elegido. En efecto, la Constitución establece requisitos especiales para ocupar ciertos cargos y, en el caso concreto de los Alcaldes ha facultado a la ley para señalar sus calidades, tal como atrás se dijo.

Tampoco es atendible, entonces, este argumento.

3. *Violación de los artículos 15 y 62 C.N.*

El artículo 15 C.N. dice que "la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa, indispensable para elegir y ser elegido y para desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad y jurisdicción".

No dice la Carta que sea, como parece pretenderlo el actor, condición única para el ejercicio de todos esos derechos. Lo es, como se observó, para el de elegir, pero no para el de ser elegido.

En cuanto al artículo 62 C.N., alega el demandante que la ley no puede ocuparse de establecer calidades sobre las cuales ya el constituyente se ocupa. Pero este argumento se desvanece ante el texto expreso del artículo 3º A.L. número 1 de 1986 que precisamente delegó en el legislador el señalamiento de las calidades necesarias para ser elegido Alcalde.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE

DECLARAR EXEQUIBLE la parte acusada del artículo 2° de la Ley 78 de 1986, que dice:

"Artículo 2° *Calidades.* Para ser elegido alcalde se requiere, ser ciudadano en ejercicio y *haber nacido o haber sido vecino del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante el año anterior a la fecha de su inscripción como candidato*" (la parte subrayada fue la acusada).

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Guillermo Dávila Muñoz, Jorge Carreño Luengas, Jairo E. Duque Pérez, Manuel Enrique Daza Alvarez.*

AUNQUE NO SE TRATA DE LA CREACION DE UNA JURISDICCION ESPECIALIZADA, DIFERENTE DE LA ORDINARIA, DE LA QUE FORMARIA PARTE EL *TRIBUNAL ESPECIAL* DE INSTRUCCION, ESTE NO SE INTEGRA ADECUADAMENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA RAMA JURISDICCIONAL, PUES NO SE SITUA DENTRO DEL ENGRANAJE JURIDICO EXISTENTE. ESTADO DE SITIO. CONEXIDAD.

Inconstitucional en todas sus partes el Decreto número 750 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 58.

Referencia: Expediente número 1650 (245-E).

Revisión constitucional del Decreto número 750 de abril 25 de 1987 "por el cual se dictan medidas para combatir graves delitos contra la vida y la integridad personal".

Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.*

Aprobada por Acta número 28.

Bogotá, D. E., junio dieciséis (16) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

En oficio fechado el 27 de abril de 1987, el Secretario General de la Presidencia de la República procedió a enviar a esta Corporación copia auténtica del Decreto Legislativo número 750 del 25 de los mismos mes y año, para su revisión constitucional, de acuerdo con lo que ordena el artículo 121 de la Constitución Nacional.

Durante el término de la fijación en lista se presentaron impugnaciones de parte de los ciudadanos Antonio José Cancino M., Fabio Espitia Garzón, Martha Lucía Zamora Avila, Diego Corredor, Luis C. Lyons, Vicente Noguera Paz, Santiago Uribe Ortiz, Marco Aurelio Villamizar, Héctor M. Barragán, Alejandro Bañol, Luz Adriana Pulido, Fernando J. Escobar M., Luis Alberto Gil, Edgar M. Ruiz, Carlos A. Toro L. y Fernando Duarte Polo.

Del negocio se corrió traslado al Procurador General de la Nación, quien emitió concepto oportunamente.

Surtidos los trámites que la Constitución y el Decreto número 432 de 1969 prevén para esta clase de actuaciones, procede decidir sobre el fondo del asunto.

II. Texto del Decreto que se revisa

El texto del Decreto que se revisa es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 750 DE 1987
(abril 25)

"Por el cual se dictan medidas para combatir graves delitos contra la vida y la integridad personal.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984 y,

CONSIDERANDO

"Que en diversas partes del territorio nacional se han venido cometiendo hechos criminales que causan un grave traumatismo social y crean dificultades adicionales para el restablecimiento del orden público;

"Que es indispensable fortalecer los organismos de investigación del Estado con la creación de un Tribunal Especial de la más alta jerarquía que contribuya al esclarecimiento de esa perturbadora modalidad delictiva;

"Que es deber del Gobierno velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia,

DECRETA

"Artículo 1° Créase un Tribunal Especial de Instrucción integrado por tres (3) Magistrados, elegidos por la Corte Suprema de Justicia, con competencia en todo el territorio nacional, que funcionará mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional.

"Artículo 2° Corresponde al Tribunal Especial de Instrucción investigar los delitos contra la vida y la integridad personal que causan una especial conmoción social, de modo tal que agravan la perturbación del orden público y dificultan su restablecimiento.

"Artículo 3° Los Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción deberán acreditar las mismas calidades que la Constitución Política exige para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tendrán el mismo régimen salarial y prestacional de éstos y se posesionarán ante el Presidente de la República.

"Artículo 4° El Ministerio Público ante el Tribunal será ejercido por un Fiscal Especial designado por el Procurador General de la Nación, el cual tendrá la misma categoría y remuneración de los Magistrados ante los cuales actúa.

"Artículo 5° El Tribunal Especial de Instrucción tendrá todas las atribuciones que las normas vigentes contemplan en materia de instrucción criminal.

"La Dirección Nacional de Instrucción Criminal y sus Direcciones Seccionales, pondrán a disposición del Tribunal que se crea los Jueces de Instrucción necesarios para atender las comisiones que sus Magistrados les confieran.

"Las diligencias instructivas serán ordenadas por el Magistrado a quien por reparto le haya correspondido el asunto y podrán ser practicadas directamente por él o por el Juez o Jueces de Instrucción Criminal que comisione para el efecto.

"La Policía Judicial despachará, con prioridad sobre cualquier otro asunto, las solicitudes que formulen el Tribunal Especial o los jueces de instrucción por él comisionados.

"Artículo 6° La providencia mediante la cual el Tribunal asume la investigación de un delito o delitos, tiene el efecto de desplazar a cualquiera otra autoridad judicial que viniere conociendo del asunto. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deben remitirse al Tribunal las diligencias que ya se hubieren practicado.

"La notificación de esta providencia se efectuará de acuerdo con las normas procesales ordinarias, pero simultáneamente se publicará en un diario de amplia circulación nacional. Contra ella cabe recurso de reposición.

"Esta disposición no se aplicará cuando de acuerdo con la Constitución o las leyes el sindicado deba ser juzgado por un tribunal o juez especial.

"Artículo 7° Los empleados oficiales están obligados a prestar su colaboración a los Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción y a los Jueces de Instrucción, en forma preferencial y directa. Para tal fin todas las entidades públicas tomarán las medidas administrativas necesarias.

"No podrá oponerse reserva alguna respecto de los documentos, informes y declaraciones que requieran el Tribunal y los Jueces de Instrucción.

"Artículo 8° Incurrirá en causal de mala conducta, sancionable con destitución, que impondrá el respectivo superior previa audiencia del inculpado, el empleado oficial que no preste la colaboración que de él se requiera o que sin justa causa la retarde.

"Artículo 9° Las entidades públicas, de cualquier orden, suministrarán a sus propias expensas, la colaboración que el Tribunal les demande, en campos tales como: medicina legal, criminalística, balística, toxicología y, en general, cualquiera otros que sirvan para el esclarecimiento de los hechos investigados.

"Así mismo, atenderán de inmediato los requerimientos que el Tribunal les formulen en relación con medios de transporte y comunicaciones para el adecuado ejercicio de sus funciones.

"Artículo 10. Las actuaciones del Tribunal se cumplirán en Sala Unitaria, salvo para la adopción de la providencia con que concluye la investigación, que será adoptada, en Sala Plena, por la mayoría de sus integrantes.

"Artículo 11. Concluida la investigación, y efectuada la calificación correspondiente, el expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal–, para que ésta, como juez de única instancia, decida sobre el proceso.

"Una vez ejecutoriada, esta providencia se hará pública.

"Artículo 12. La Corte Suprema de Justicia, –Sala de Casación Penal–, o el juez o tribunal especial competente para fallar el proceso, podrán disponer la ampliación de la investigación por un término máximo de treinta (30) días.

"Artículo 13. El Tribunal Especial de Instrucción, tendrá la siguiente planta de personal:

Número	Cargo	Grado
3	Magistrado de Tribunal Especial de Instrucción	
6	Magistrado Auxiliar	
1	Secretario	20
3	Oficial Mayor	09
10	Escribiente	08
3	Citador	04
6	Chofer	05

"Artículo 14. La Fiscalía Especial ante el Tribunal Especial de Instrucción, tendrá la siguiente planta de personal:

Número	Cargo	Grado
1	Fiscal Especial de Instrucción	
1	Abogado Asesor	20
1	Secretario	18
1	Sustanciador	11
1	Citador	04
1	Chofer	05

"Artículo 15. En lo no previsto por este Decreto, se aplicarán al Tribunal Especial de Instrucción las normas contempladas en el Código de Procedimiento Penal.

"Artículo 16. Autorízase al Gobierno para realizar todas las operaciones presupuestales necesarias para el debido cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto.

"Los contratos que deba celebrar el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia para el adecuado funcionamiento del Tribunal Especial de Instrucción, sólo requerirán para su celebración y validez de la firma de las partes y registro presupuestal.

"Artículo 17. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá a los 25 días del mes de abril de 1987.

"VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Gobierno, *Fernando Cepeda Ulloa;* el Ministro de Relaciones Exteriores, *Julio Londoño Paredes;* El Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* el Ministro de Hacienda y Crédito Público, *César Gaviria Trujillo;* el Ministro de Defensa Nacional, General *Rafael Samudio Molina;* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* El Viceministro de Desarrollo Económico, encargado de las funciones del despacho del Ministro, *Fernando Panesso Serna;* el Ministro de Minas y Energía, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Guillermo Perry Rubio;* la Ministra de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse;* el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, encargado del despacho del Ministro de Salud, *Diego Younes Moreno;* el Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez*".

III. Intervención ciudadana

Las impugnaciones presentadas oportunamente y a las cuales se hará referencia en este fallo en el capítulo de consideraciones de la Corte, son en síntesis las siguientes, según resumen que ofrece la vista fiscal:

"1. Los ciudadanos Antonio José Cancino Moreno, Fabio Espitia Garzón, Martha Lucía Zamora Avila, Diego Corredor, Luis Lyons, sostienen básicamente que el Decreto número 750 viola los artículos 55, 120-7, 121, 26 y 25 de la Constitución Nacional, sintetizando sus argumentos en los puntos que a continuación se enumeran:

"El Tribunal Especial no soluciona problemas creados por miembros de las Fuerzas Militares, porque los exceptúa.

"Existen delitos que a pesar de ser iguales, son más graves que otros.

"Se hace necesario determinar si el delito causa o no conmoción social.

"Se viola el artículo 26 de la Constitución Nacional, pues no existen las dos instancias.

"Se infringen los artículos 55, 120-7, 121 y 25 de la Carta sobre oposición de reserva.

"Finalmente aducen razones de conveniencia.

"2. El ciudadano Vicente Noguera Paz acusa los artículos 1°, 6°, 11 y 12 del Decreto número 750, por violación del artículo 121 de la Carta Política y por suspensión del Código de Procedimiento Penal. Igualmente aduce algunas razones de conveniencia y expresa que dicho Decreto crea impunidad. Y agrega que al

sancionarse a alguien con normas temporales, al levantarse el estado de sitio, debe liberarse a los condenados.

"3. El ciudadano Santiago Uribe Ortiz expresa que se violan los artículos 147 a 164 de la Constitución Nacional. La Carta no autoriza la creación de categorías de Tribunales, además de que el creado es un Tribunal de Instrucción y no un Tribunal fallador.

"Que según el artículo 63 constitucional todo cargo debe tener sus funciones claramente definidas y el Tribunal Especial no las tiene, pues ellos deciden cuándo tienen o no competencia.

"Agrega que se viola el debido proceso, el principio de las dos instancias, se crean privilegios, y se infringe el principio de la igualdad de las personas ante la Ley.

"Expresa que no existe relación de conexidad entre el Decreto número 750 y las causales de perturbación del orden público, pues en nada busca restaurar el orden perturbado.

"Señala que en cada circunscripción judicial debe haber un Tribunal.

"4. El ciudadano Marco Aurelio Villamizar Rondón, simplemente se limita a aducir razones de conveniencia y de desigualdad.

"5. El ciudadano Héctor Manuel Barragán Collazos, expresa que: se establece preferencia entre los Tribunales del país. Que determinar la estructura de la administración pública es atribución del Congreso y no del Presidente de la República.

"Expresa que se discrimina a las personas.

"Se infringe el artículo 207 de la Constitución Nacional pues el gasto público solamente corresponde efectuarlo al Congreso mas no al Presidente de la República.

"6. El ciudadano Alejandro Augusto Bañol Betancur, sostiene que:

"Sólo la ley puede crear Tribunales y no los decretos legislativos, pues si bien son iguales en sus efectos, una ley no es decreto y viceversa.

"El Decreto número 750 viola los artículos 58, 76, 55 y 121 de la Carta Política.

"7. Los ciudadanos Luz Adriana Pulido Díaz y Fernando Javier Escobar Moncada, expresan que el Decreto número 750 viola los artículos 2°, 55, 16 y 58 de la Constitución Nacional, porque:

"El poder ejecutivo asume funciones del poder jurisdiccional.

"Es injusto gastar tanto dinero en pagar el Tribunal, cuando los Juzgados no tienen elementos para trabajar.

"El derecho a la protección es para todos y no para unos cuantos.

"El Congreso es el único que podía crear el Tribunal y no el Presidente de la República.

"8. Los ciudadanos Luis Alejandro Díaz, Luis Alberto Gil Zamora y Edgar Mauricio Ruiz Rodríguez manifiestan que el Decreto número 750 viola los artículos

2º, 55, 76-9, 26, 16, 116 y 119-2 del Estatuto Fundamental por cuanto: Se invadió la órbita de la rama jurisdiccional. El Presidente debe velar porque se administre justicia. El Tribunal viola la estructura jurisdiccional del país.

El Congreso es el que crea a los Tribunales.

"No hay relación de conexidad entre el Decreto número 750 y las causales que invocó el gobierno para declarar turbado el orden público.

"El Decreto número 750 afecta el principio de las dos instancias y establece diferencias entre los ciudadanos por cuanto los divide.

"9. El ciudadano Carlos Arturo Toro López, señala que: Falta la debida relación de causalidad entre el Decreto número 750 y el Estado de Sitio.

"Se viola el principio de las dos instancias y se suspende el Código de Procedimiento Penal.

"El Nuevo Código de Procedimiento Penal deroga tácitamente el Decreto Legislativo número 750 de 1987.

"Por la forma como está concebido el Decreto número 750 de 1987, faltan las firmas de dos ministros del Despacho. También aduce razones de ilegalidad.

"Pide acumular Decretos números 750 y 790 de 1987.

"10. El ciudadano Hernando Duarte Polo dice que se vulneran los artículos 2º, 10, 20, 22, 26, 55, 121, 150, 152, 153 y casi todo el Título III de la Constitución Nacional, y agrega que:

"El Ejecutivo no puede desquiciar caprichosamente la Rama Jurisdiccional.

"Si la Constitución sólo permite operar un solo Tribunal en cada Distrito Judicial, no puede el Gobierno crear 'Tribunalitos', porque ello implica violar la Carta. Este es un Tribunal de mejor Entidad que los demás lo que viola el artículo 153.

"Los Decretos de Estado de Sitio no pueden derogar la ley. El Decreto número 750 crea discriminaciones e infringe el principio de igualdad.

"Desconoce el principio de las dos instancias".

IV. Concepto del Procurador

El Procurador General de la Nación solicita la declaratoria de exequibilidad del Decreto en revisión.

Considera que no es susceptible de glosa alguna por su forma ni por su conexidad con los motivos que dieron lugar al establecimiento del Estado de Sitio. En su opinión, no se da en este caso acumulación alguna de la autoridad judicial y la política, ni ha habido creación de categorías entre los Tribunales del país. Tampoco encuentra en el Decreto violación al principio del debido proceso, por cuanto la Constitución no garantiza las dos instancias, ni al de igualdad de las personas frente a la ley, que no puede entenderse en sentido matemático.

Se refiere en particular a la elección del Fiscal del Tribunal Especial para concluir "que no siendo de creación constitucional el Fiscal Especial del Tribunal a que hace referencia el Decreto número 750 de 1987, puede el legislador de excepción sin traba alguna señalar su forma de designación, categoría y remuneración sin violar canon constitucional alguno". Por último, dice que no se ha incurrido en desconocimiento de las normas sobre gasto público, "por cuanto en Estado de Sitio el gobierno actúa como legislador de excepción y por ello puede proceder, con las autorizaciones concedidas por el artículo 16 del Decreto que se estudia a hacer las correspondientes operaciones presupuestales, siempre y cuando que las medidas que al respecto adopte, conserven el necesario nexo de causalidad con los hechos que originaron la perturbación".

V. Consideraciones de la Corte

1. Como se trata de un Decreto Legislativo expedido por el gobierno en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 121 de la Constitución Nacional, es competente la Corte para decidir oficiosamente sobre su constitucionalidad, al tenor de dicho artículo y del 214 de la Constitución.

2. Exige el inciso 2° del artículo 121 C.N. que los Decretos Legislativos que dicte el Presidente dentro del Estado de Sitio lleven la firma de todos los ministros.

El Decreto que se revisa aparece firmado por el Presidente de la República y por los ministros que integran el gabinete ejecutivo, pero dos de ellos lo hacen como encargados de otros ministerios. En efecto, el de Minas y Energía suscribe como encargado del despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y el de Trabajo y Seguridad Social lo hace como encargado del despacho del Ministerio de Salud. Así mismo el Viceministro de Desarrollo Económico firma como encargado de las funciones del despacho del ministro.

Esto ha dado pie para uno de los motivos de impugnación formulados por el ciudadano Carlos Arturo Toro López, quien considera que los viceministros no pueden ejercer las funciones asignadas por la Constitución a los ministros titulares, y que tampoco es posible que éstos deleguen en los titulares de otras carteras las funciones que les son propias, o que un ministro sea a la vez titular de varias carteras.

No hay norma constitucional alguna que prohíba a los ministros ocuparse de otros despachos que los que les corresponden, por encargo que les asigne el Presidente de la República, a quien el artículo 120-1 C.N. le otorga precisamente la facultad de nombrarlos libremente.

Desde el punto de vista legal, el artículo 76 de la Ley 4ª de 1913 estipula que el Presidente puede confiar el despacho de un ministerio a otro de los ministros o al secretario respectivo, en caso de falta del respectivo titular.

Tampoco prohíbe la Constitución que los viceministros reemplacen transitoriamente a los respectivos ministros. Incluso, una de las funciones que legalmente competen a aquéllos es la de "suplir las faltas accidentales del ministro, cuando así lo disponga el Presidente de la República" (D. L. número 1050 de 1968, art. 13-a).

El Decreto no es susceptible, por lo dicho, de glosas de orden formal.

3. Uno de los aspectos fundamentales del control de constitucionalidad de los Decretos Legislativos es el de su conexidad con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Sitio.

Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de que dicho examen es ante todo de carácter formal o aparente, pues el juicio sobre sí, en el fondo, una medida conduce o no a superar la alteración del orden público y a procurar su restablecimiento, versa sobre cuestiones de hecho extrañas a este tipo de procesos, amén de que implicaría pronunciarse sobre la conveniencia de las medidas adoptadas, que es asunto que debe ser decidido por el Presidente de acuerdo con los elementos de juicio de que disponga.

Sólo en casos extremos, en los que se viera de bulto la falta de conexidad material de un Decreto Legislativo con los motivos invocados por el Gobierno para decretar el Estado de Sitio, o su evidente inconducencia para lograr el fin propuesto, estaría legitimada la Corte para declarar su inexequibilidad por tal concepto.

En el caso de autos se tiene que el Decreto número 1038 de 1984, por medio del cual se decretó el Estado de Sitio hoy vigente, tuvo en consideración "...que en diversos lugares del país han venido operando reiteradamente grupos armados que han atentado contra el régimen constitucional, mediante lamentables hechos de perturbación del orden público y suscitado ostensible alarma entre los habitantes...", "...que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional..." y "...que en general hechos de violencia provocados por las circunstancias mencionadas han ocasionado sensibles bajas del personal de las Fuerzas Militares, de la Policía, lo mismo que víctimas en la población civil".

Una aplicación estricta del criterio de conexidad formal llevaría a considerar que las medidas que se tomaran dentro del Estado de Sitio vigente tuviesen que referirse exclusivamente al control de los grupos armados y de los grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, y que, en consecuencia, la creación de nuevos organismos jurisdiccionales y la redistribución de competencias entre los mismos, tuviera que ceñirse a estas materias y no a otras. Con todo, la Corte ha considerado en otras oportunidades, y lo reitera en ésta, que puede darse el caso de motivos de turbación del orden público sobrevinientes a la declaratoria de Estado de Sitio, cuyo tratamiento con medidas de excepción no supone necesariamente que se adicione el Decreto Legislativo que lo haya declarado, tal como acontece en la hipótesis que se examina.

4. Considera la Corte que debe examinar ante todo, el tema mismo de la creación de un Tribunal Especial de Instrucción, tal como lo diseñan los artículos 1° y 2° del Decreto en revisión, no obstante que el 2° fue modificado por el 1° del Decreto número 790 de 1987, pues el control oficioso que le asignan los artículos 121 y 214 C. N. hace que deba pronunciarse sobre todos los Decretos Legislativos, así hayan sido derogados o modificados al momento de producirse el fallo, o hayan perdido su vigencia.

De la constitucionalidad de estas disposiciones depende necesariamente, en principio, la del resto del Decreto.

5. En sentencias del 30 de abril y de 19 de mayo últimos, sostuvo esta Corporación que "el Gobierno, actuando como legislador extraordinario de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 121 C.N., puede modificar la competencia de los despachos judiciales, redistribuyéndola entre los existentes o creando otros nuevos que satisfagan los requisitos de jerarquización, independencia y autonomía que la Constitución prevé para los órganos adscritos a la Rama Jurisdiccional del, poder público, y sin vulnerar la estructura que para ésta ha señalado la Constitución".

Se considera, en efecto, que el artículo 61 C.N., que permite que una misma persona o Corporación ejerza simultáneamente dentro del Estado de Sitio, la autoridad política o civil y la judicial, autoriza a tomar medidas como las que se mencionan, dado que si es posible traspasar competencias judiciales a autoridades civiles, también debe ser posible asignarlas a otras autoridades jurisdiccionales, siempre que ello guarde la conexidad con los motivos de turbación del orden público que exige el artículo 121 C.N. y no pugne con el ordenamiento superior.

Para este análisis conviene destacar dos principios fundamentales que presiden el ejercicio de las facultades del legislador, sea ordinario o extraordinario, en materia de creación de organismos jurisdiccionales: el de que las distintas *jurisdicciones* deben tener base en la misma Constitución y no simplemente en la ley, y el de que hay una *jerarquía* de la Rama Jurisdiccional integrada, en orden descendente, en esta forma, tal como lo señaló esta Corporación en fallo del 28 de junio de 1965, en tesis muchas veces reiterada, incluso hace poco en fallo del 3 de marzo último: "a) Corte Suprema de Justicia; b) Tribunales; c) Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal y Especializados, de igual o superior categoría a los indicados y d) Jueces Municipales".

Cierto es que el art. 58 C.N. ha dispuesto que "la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito y demás Tribunales y Juzgados que establezca la ley, administran justicia..."; pero, como lo señaló la Corte en el fallo que se viene citando, la ley sólo puede establecer tribunales y juzgados en armonía con los artículos 155, 157 y 158, que desarrollan el enunciado general del artículo 58.

La Constitución prevé en el artículo 157 los Jueces de Instrucción Criminal y los Especializados pero en parte alguna habla de tribunales especiales. No obstante, es posible considerar que lo mismo es establecer juzgados que tribunales de instrucción o especializados, pero siempre y cuando dichos tribunales se sitúen dentro del nivel que la Carta les ha asignado.

Aunque en el caso de autos no se trata de la creación de una jurisdicción especializada, diferente a la ordinaria, de la que formaría parte el Tribunal Especial de Instrucción, éste no se integra adecuadamente dentro de la estructura de la Rama Jurisdiccional y viene a ser, por así decirlo, como una rueda suelta dentro de dicho engranaje. Es claro que no se lo sitúa al nivel de los jueces de Instrucción, ni al de los especializados, como tampoco al de los restantes tribunales que operan en el país. De hecho, aparece colocado al nivel de la Corte Suprema de Justicia, cuya competencia

para conocer en única instancia de ciertos delitos quedaría condicionada por decisiones del citado Tribunal.

Conviene señalar que este Tribunal es muy distinto, en el fondo, al que se creó para investigar hechos fatídicos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia y cuya constitucionalidad fue admitida por esta Corporación en fallo del 8 de mayo de 1986. En efecto, dicho Tribunal se creó para llevar a cabo prácticamente las diligencias preliminares de investigación de esos hechos y presentar un informe a los funcionarios judiciales competentes de acuerdo con la ley ordinaria para conocer de estos procesos y emitir los fallos correspondientes. En cambio, el Tribunal Especial de Instrucción que motiva esta providencia va mucho más allá, pues no sólo desplaza a las demás autoridades judiciales del conocimiento de los casos que decida abordar, sino que modifica sustancialmente el procedimiento a seguir en tales casos y la competencia misma de la Corte Suprema de Justicia y de los demás Tribunales y Juzgados.

No hay, por lo dicho, base constitucional para crear Tribunales de este tipo.

6. Respecto del artículo 2º del Decreto que se revisa, según el cual "corresponde al Tribunal Especial de Instrucción, investigar los delitos contra la vida y la integridad personal que causen una especial conmoción social, de modo tal que agravan la perturbación del orden público y dificultan su restablecimiento", y que fue sustituido como se dijo por el artículo 1º del Decreto Legislativo número 790 de 1987, hay que observar lo siguiente:

Según el artículo 63 C.N., "no habrá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento". Esta disposición es corolario de sendos principios que consagran el artículo 2º y el 20 C.N.: el de que "la soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación y de ella emanan los poderes públicos que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece", y el de que los funcionarios públicos son responsables por violación de la Constitución y de las Leyes, así como por "extralimitación de sus funciones, o por omisión en el ejercicio de éstas".

Si bien la ley puede otorgar competencias de variada índole (reglada, discrecional, concurrente, a prevención, etc.), considera la Corte que la garantía de juzgamiento ante Tribunal competente que consagra el artículo 26 C.N., no da lugar a que en el ámbito jurisdiccional haya la misma flexibilidad que para otros, como el administrativo.

Al referirse el artículo 26 C.N., al Tribunal competente, está defiriendo según todo nuestro ordenamiento constitucional, la determinación de tal Tribunal al previo señalamiento de la ley y no a la voluntad de otra autoridad jurisdiccional. Esto es, que la determinación del Tribunal competente y del funcionario instructor la funde el legislador en criterios de la ciencia procesal, tales como los factores territorial, objetivo, funcional, etc., que tienen en común la circunstancia de ser determinados y existentes antes de la comisión del hecho punible.

La norma que se revisa es una innovación al derecho procesal e incrusta un criticable factor para la determinación de la competencia, no preexistente al hecho punible, sino indiscutiblemente posterior a él: "causar una grave conmoción social,

de modo tal que se agrave la perturbación del orden público y se dificulte su restablecimiento".

Se trata de una expresión vaga, gaseosa, de connotaciones extrajurídicas, ampliamente variables y de predominante valoración subjetiva, no ceñida a parámetros normativos previos. Ya no son las circunstancias del hecho mismo ni sus causas, sino sus efectos, apreciados éstos discrecionalmente, las bases para la determinación de la competencia del juez, en este caso el Tribunal Especial de Instrucción.

Por ende, la competencia no queda fijada por ley preexistente, sino por decisión judicial, contrariándose el principio de que las leyes sobre competencia deben ser claras, precisas y que produzcan una seguridad, un conocimiento previo a los asociados, para que éstos puedan conocer con exactitud quién será el juez competente en cada caso.

No se oculta la gravedad de este sistema, de conformidad con el cual no sabrían los asociados, antes de la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal, quién pudiera ser el juez competente para conocer y juzgar de los mismos, duda que subsistiría aún después de acaecidos los hechos.

En el fondo, este tipo de asignación de competencias judiciales es contrario al principio de igualdad de las personas ante las autoridades jurisdiccionales, pues hace depender el tipo de procedimiento a seguir, el Tribunal competente y la eventualidad de la segunda instancia, del criterio subjetivo de los Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción. De ese modo, se vulnera el artículo 16 C.N. y el 26 C.N.

Es más, la competencia discrecional y a prevención que se le ha atribuido, que como viene observándose no se adecua nítidamente a las exigencias de la organización judicial, crea un peligroso precedente que, si se lo considerase admisible, podría extenderse a otros aspectos de la administración de justicia, haciéndole perder a ésta la fisonomía que ha querido imprimirle el Constituyente.

7. Habida consideración de la inconstitucionalidad de las disposiciones fundamentales del Decreto que se revisa, todas las demás que giran en torno suyo tendrán que ser declaradas consecuencialmente inexequibles, de acuerdo con la doctrina que ha sentado esta Corporación, entre otras, en fallo de 5 de marzo del año en curso.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declárase inconstitucional en todas sus partes el Decreto Legislativo número 750 de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento, Guillermo Dávila Muñoz, Jorge Carreño Luengas, Jairo E. Duque Pérez, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez* (Con salvamento de voto), *Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía* (Con salvamento de voto), *Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

ACLARACIÓN DE VOTO
Expediente 1650 (245-E)

Comoquiera que en el seno de la opinión pública se discutió el tema de una posible inconstitucionalidad del Decreto número 750 de 1987 por haber desconocido el principio de las dos instancias, particularmente en materia penal y no de poca monta, como la que ahí se reguló, consideré que era oportuno un pronunciamiento expreso de la Corte sobre ese particular, lo que a mi modo de ver, no compartido por los honorables colegas de Sala, reforzaría la conclusión de la ponencia sobre inconstitucionalidad del Decreto.

Aunque la Corte ha dicho en varias oportunidades que el principio de las dos instancias no es de orden constitucional sino legal, por lo que el legislador puede o no establecerlo en los distintos procesos según lo considere pertinente, porque el artículo 26 C.N. no lo menciona, pienso que a esta importantísima disposición de nuestro ordenamiento constitucional no puede dársele una lectura literal y que la garantía del derecho de defensa debe examinarse a la luz de las soluciones que la civilización ha elaborado de acuerdo con la experiencia adquirida respecto de la protección y, desde luego, de la violación de los Derechos Humanos.

Conviene recordar que la Corte ha considerado en otras oportunidades que el requisito constitucional del juzgamiento en el que se observe "la plenitud de las formas propias de cada juicio" se refiere no sólo a que la ley regule distintos procedimientos sino que lo haga de conformidad con los principios axiológicos del debido proceso y el derecho de defensa (ver sentencia de 2 de octubre de 1981).

En la sentencia que se cita aludió la Corte a las soluciones sobre derecho de defensa adoptadas en Pactos Internacionales como el de los Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General de la ONU en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 y el de San José de Costa Rica firmado en dicha ciudad el 22 de noviembre de 1969.

Dice el artículo 14-5 del primero de ellos: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior conforme a lo prescrito por la ley".

Y el artículo 8° del Pacto de San José, contempla entre las garantías judiciales fundamentales el "derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior" cuando

se trate de cualquier acusación penal e incluso para la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter.

Los Tratados Internacionales tienen un rango superior al de la legislación ordinaria, dado que no pueden ser modificados libremente por ésta, sino mediante otros Tratados que el Presidente celebre, someta a la aprobación del Congreso y ratifique correctamente. Por lo tanto, tampoco pueden ser desconocidos ni contrariados sino por ese mismo medio.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado por la Ley 74 de 1968 y ratificado el 29 de octubre de 1969. El de San José se aprobó por la Ley 16 de 1972 y su ratificación se produjo el 31 de julio de 1973. Luego, rigen plenamente en el ámbito interno y en el externo del país, y deben ser observados tanto por el legislador ordinario como por el extraordinario.

Es más, las convenciones que se citan están colocadas prácticamente al mismo nivel que la Constitución, por dos razones:

a) Porque, según se dijo, los textos que consagran garantías fundamentales, como el caso del art. 26 C.N., deben interpretarse en consonancia con el desarrollo jurídico de la civilización;

b) Porque el artículo 121 C.N. alude expresamente al Derecho de Gentes, que es hoy el Derecho Internacional Público, para determinar el alcance de las facultades del Gobierno dentro del Estado de Sitio, por lo que hay que considerar que su competencia se abre pero también se limita no sólo por la ley y la Constitución sino por lo que, en definitiva, aspira a ser el Derecho Común de la Humanidad.

En consecuencia, salvedad hecha de los casos a que se refieren los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 151 C.N., que son de aplicación restrictiva, es un deber jurídico que pesa sobre el Estado y, por ende, sobre sus órganos legislativos, el de observar el principio de las dos instancias en los procedimientos judiciales.

Es verdad que el ordenamiento internacional permite suspender esta garantía básica, junto con otras, pero "en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente" y "en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación" (art. 4° Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos) o "en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado" y "en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación" (art. 27 Pacto de San José).

Considero que, no obstante la gravedad de la situación que vive el país en la hora presente, no se dan los supuestos enunciados y que, por el contrario, "las exigencias de la situación" a que aluden estas normas, indica que se debe reforzar la institucionalización de la justicia y no desestabilizarla con medidas como las que se analizan, por bien intencionadas que sean.

El trato desigual para el juzgamiento de delitos contra la vida y la integridad personal, que hace depender el tipo de procedimiento a seguir y la eventualidad de la segunda instancia, del criterio subjetivo de los magistrados del Tribunal Especial de

Instrucción, es contrario al principio de igualdad que consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional y no contribuye a afianzar la credibilidad de las instituciones.

Fecha *ut supra*

Jesús Vallejo Mejía.

Ref. Expedientes 1650 (246-E) y 1654 (247-E).

Revisión Constitucional de los Decretos números 750 de abril 25/87 y 790 de mayo 4/87.

M.P. Dr. Jesús Vallejo Mejía

M.P. Hernando Gómez Otálora.

SALVAMENTO DE VOTO

En las democracias la verdad la constituye un determinado número de votos. En la Sala Plena ésta aparece cuando hay trece magistrados acordes en una tesis. Lo que quiere decir, en el caso de los Decretos números 750 y 790 de 1987 (Tribunal Especial de Instrucción), donde se dieron 23 votos en un mismo sentido, que hubo votación casi para dos verdades. De otro lado, en estos asuntos, los fallos hacen de lo blanco negro y de lo recto curvo. Ya se sabe, entonces, dónde está la verdad, el exacto color y la dirección de las líneas. Lo que voy a expresar es solamente una opinión, la cual trataré de indicar en forma esquemática:

1. La decisión tomada es una muestra más de lo que en el salvamento de voto agregado al expediente número 1638 (243-E), relacionado con la inexequibilidad del Decreto número 666 de 1987, calibré como los efectos residuales de la "fiebre obsidional", mudándose ésta de paciente y de contenido. Así como la primera fase de ella, en el sitiado, le permite hacer todo y así se hizo con la aplicación del art. 121 hasta la Reforma de 1968, ahora no se puede hacer nada. Es el mismo problema con doble apreciación, ambas igualmente desenfocadas y perjudiciales: hacerlo todo sin limitación alguna, o negar que se pueda hacer algo por horror al abuso del artículo 121.

2. El aforismo "a igual razón igual disposición", debe entenderse hoy con una variante muy substancial: a igual razón distinta explicación.

La creación del Tribunal Especial de Instrucción, para investigar los hechos del Palacio de Justicia, declarado en su momento exequible, tiene tantas coincidencias con el Tribunal Especial de Instrucción para investigar delitos contra la vida (artículos 323 y 324 C. P) y contra la integridad personal (salvo la previsión punitiva del artículo 340 *ibidem),* que resultan idénticos: surgen de los apremios de la grave perturbación del orden público, conmovido por la acción devastadora de la delincuencia; los dos se insertan en la clase de los tribunales que cumplen una tarea específica, se aplican a un fin determinado y de manera excepcional; ambos cumplen una función de instrucción y a nadie juzgan pues ni siquiera le está permitido proferir un auto de enjuiciamiento ya que su labor termina con un informe sobre lo realizado, esto es sobre sus "diligencias preliminares de investigación", el cual no está sujeto a reserva sumarial; obedecen a las mismas normas de instrucción, las propias a

todo juez natural y permanente de esta especialidad; cuentan con los mismos recursos de la Policía Judicial y la colaboración de todos los funcionarios públicos; los dos se integran con personas que deben tener calidades, condiciones, remuneración y asistencia prestacional propia de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual, para asegurar su independencia, autonomía e imparcialidad, debe hacer el nombramiento, indicándose así que pertenecen a la órbita jurisdiccional, ante la cual responden; están, así mismo, totalmente emancipados de tutelas del Ejecutivo, del Legislativo o de cualquier organismo foráneo particular o público; aquél y éste exhiben la misma competencia territorial, o sea, todo el país; son asistidos por un veedor de mérito, pues su fiscal lo nombra directamente el Procurador General de la Nación; y, finalmente, desembocan toda su actividad hacia los jueces ordinarios, así: El Tribunal Especial de Instrucción de 1985, hacia jueces municipales, de Circuito, Superiores (en un radio de acción amplísimo puesto que estaba facultado para investigar toda clase de delitos cometidos en la toma del Palacio de Justicia), y el Especial de Instrucción de 1987, que debe remitir toda su actuación, a la Sala de Casación Penal de la Corte, único organismo que puede realizar la atribución de juzgamiento (auto de proceder, audiencia y sentencia).

Son estos aspectos tan substanciales que no pueden desmerecer por obra de secundarias consideraciones sobre la competencia, las cuales carecen de la trascendencia que el fallo les adjudica.

En estas condiciones ¿cómo aceptar que con el uno se mantuvo incólume la Constitución y con el otro se la destrozó? ¿Cómo admitir pacíficamente, con tan significativo antecedente e igualdad de características, que el uno no establece categorías entre los tribunales, ni ofrece peligro para las instituciones judiciales, ni las arruina, ni desestructura la administración de justicia, y, el otro por el contrario muestra todos estos vicios e imperfecciones?

3. No resulta atinado señalar como motivo de inconstitucionalidad, considerar al Tribunal Especial de Instrucción como "rueda suelta" dentro del engranaje y estructura de la administración de justicia, reducida ésta a la Corte Suprema de Justicia, Tribunales, Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal, Especializados y Jueces Municipales.

En efecto, se incurre en varios desenfoques:

a) Se yerra al pensar que cuando se utiliza la expresión Tribunal obligadamente se tiene que hacer referencia a los Tribunales de Distrito; de donde para no romper esta organización debe otorgarse una igual caracterización.

La Carta permite la creación de jueces de Instrucción Criminal o especializados con categoría igual o *superior* a los que indica en la parte inicial el artículo 155, o sea, juez de Circuito, Juez Superior y Tribunal de Distrito. De donde el Tribunal Especial de Instrucción, en denominación que no equivale a Tribunal de Distrito, ni a Tribunal Militar –artículo 170–, ni a tribunal disciplinario –artículo 217–, ni a Tribunal de Aduanas, ni a Tribunal de Arbitramento, etc., sino a organismo (juez) especializado de Instrucción, puede tener la categoría que quiera deducírsele sin que ello implique vicio esencial de inconstitucionalidad. El análisis no debe centrarse en

una denominación, que puede llegar a ser de valor entendido, figurado o que busca destacar la importancia o su inserción en la Rama Jurisdiccional, sino en su propia naturaleza y funciones. Y este Tribunal, tanto por su designación como por sus explícitas funciones, revela su valor indiscutible de entidad judicial de Instrucción. Guarda por tanto más afinidad con los organismos que atienden este cometido que con aquellos que tienen, como los Tribunales de Distrito, una potestad de pleno conocimiento.

Todavía aparece como inaceptable un intento por establecer una especie de derecho marcario constitucional, en el cual no es dable mencionar el vocablo "tribunal" sin que la referencia apunte a corporación distinta del Tribunal Superior de Distrito. Los artículos 58 y 155 permiten establecer entidades especializadas o de Instrucción que pueden recibir el nombre de Tribunales o utilizar, para librarlas de la nimia objeción de la Corte, otro similar pero igualmente significativo, así, Unidad Especial de Instrucción, Consejo Especial de Averiguación, Juzgado Nacional Especial de Instrucción, Tribunal Extraordinario de Instrucción, etc.

Los estatutos modernos de procedimiento penal deben prever, para circunstancias excepcionales de delincuencia que desborde los recursos normales y las posibilidades existentes de la administración de justicia, el funcionamiento, por decisión de la Corte a iniciativa propia o requerimiento del Gobierno o de la Procuraduría General de la Nación (o la entidad que haga sus veces), de esta clase de cuerpos especiales de Instrucción. Así podrá enfrentarse una lucha eficaz contra la delincuencia, sin que nadie sea sorprendido o discriminado, ya que las regulaciones legales de actuación y las competencias que se deben asumir en circunstancias tales, se conocen de antemano, pues preexiste el juez y las normas legales de actuación a los hechos criminosos, con exacta aplicación del artículo 26 de la C.N. De paso conviene anotar que todas las inquietudes y aspavientos relacionados con este Tribunal y que involucran el mencionado artículo, se disipan cuando se piensa que el mismo está destinado a cubrir conductas punibles posteriores a su conformación legal;

b) También se desacierta cuando para fundamentar una declaratoria de inconstitucionalidad por ruptura del esquema y estructura de la Rama Jurisdiccional, cuando a este Tribunal Especial se le coloca "al nivel de la Corte Suprema de Justicia, cuya competencia para conocer en única instancia de ciertos delitos quedaría condicionada por decisiones del citado Tribunal". Ni esta consideración, que como se verá no representa la validez que se le supone, ni la identidad de calidades permite esta asimilación para tratar de demostrar una categoría superior a los tribunales de Distrito.

Con este singular raciocinio, los jueces de Instrucción comunes o especiales merecerían la misma (inocua) observación, pues al servir como tales a varios entes judiciales, tendrían el simultáneo nivel de jueces de Circuito, de jueces Superiores y hasta de Magistrados de Tribunal de Distrito o de Corte Suprema de Justicia, sin perder la propia de juez de Instrucción;

c) Constituye contradicción manifiesta señalar como correctivo de una insuficiencia funcional de uno o varios organismos de justicia, mediante las facultades del artículo 121, el que se tenga que reproducir los institutos que exhiben esas limitacio-

nes o defectos, so pena de atentarse contra la organización de la Rama Jurisdiccional. En otras palabras, se recomienda conjurar el mal con las mismas soluciones que no han logrado erradicarlo o que han podido agravarlo. La Constitución no incurre en tamaño dislate. Lo que sí manda en sus artículos 58 y 155 es que, de llegarse a crear Tribunales de Distrito, deben respetarse las garantías que les cubren, pero si se trata de organismos totalmente diferentes, es posible introducir otras modalidades como por ejemplo si la restricción territorial pesa como gravamen de ineficacia –estar circunscrita la actividad investigadora a un Distrito Judicial– puede conformarse un cuerpo de Instrucción que la excluya y que pueda actuar en toda la Nación. El criterio de interpretación tendrá entonces que ser distinto porque disímiles son los elementos de comparación. Lo especial no puede confundirse con lo común para deducir desajustes institucionales. Los elementos de cotejación son heterogéneos y la Carta establece reglas diferentes para uno y otro caso.

El Tribunal Especial de Instrucción debe ser tratado como excepcional organismo de investigación, sin que entre en juego la consideración de ser superior al Tribunal de Distrito o no encajar, por tratarse de una "rueda suelta", en la administración de justicia, a la cual desestructura. Ese Tribunal Extraordinario se vincula es a los organismos especiales destinados a la indagación penal, y ostenta una relación inmediata, directa y completa con la Corte Suprema de Justicia, al igual que la tienen, por otro factor de organización, los Tribunales de Distrito, el Tribunal Militar o el Tribunal de Aduanas.

4. La competencia es asunto de rango legal y por tanto, si se dan las condiciones del artículo 121, pueden introducirse modificaciones a las mismas, a título transitorio y excepcional. La restringida aunque muy importante potestad que se señala para el Tribunal Especial de Instrucción (*dos* de los varios delitos contra la vida y *algunos* contra la integridad personal) no destituye de sus funciones a los jueces o tribunales ordinarios. Estos siguen actuando en una proporción que, sin mucho optimismo, está en un 95% de sus normales atribuciones.

Obliga recordar el sentido verdadero de las previsiones doctrinales que dos fallos emitidos por la Corte, hicieron al respecto. En referencia general se impedía la instrucción por parte de los fiscales por pertenecer éstos al Ministerio Público y al Ejecutivo, desplazándose una función propia de la Rama Jurisdiccional; y se suprimía una entidad de creación constitucional, los juzgados de Circuito. Interpretación acertada y benéfica es la que se dirige a evitar burlas de esta concepción en el sentido de dejar nominalmente existentes los órganos judiciales, pero menguar indebida y desproporcionadamente sus competencias. Ninguno de estos casos es el del Tribunal Especial de Instrucción, porque fuera de ser transitorio, encajado dentro de la Rama Jurisdiccional, dispuesto sólo para algunos eventos de averiguación, mantiene en debido y completo funcionamiento todos los demás entes judiciales, desde el juzgado municipal hasta la Corte Suprema de Justicia.

5. Finalmente conviene comentar, así sea de paso, lo de la competencia que se reputa en su determinación, "vaga, gaseosa, de connotaciones extrajurídicas, ampliamente variables y de predominante valoración subjetiva".

Sobre este particular se dice, al menos por el ponente, que se trata de un tribunal que ha eliminado la garantía de la doble instancia. En este punto hay que preguntarse

si la Constitución o los Tratados señalan su cumplimiento en forma absoluta y fatal o para algunos casos. La Constitución nada dice en concreto y puede deducirse que no impone esta obligación procedimental. La especialidad de un asunto o la *calidad* del juzgador puede hacerla inoperante. Por eso existen múltiples procesos de toda clase de materias que consagran el fallo de única instancia. Por lo mismo la Corte juzga en una sola y exclusiva instancia a los altos funcionarios del Estado. La doble instancia se exige cuando los niveles de jerarquización la tienen establecida y es posible realizarla. Sería inconstitucional, por este aspecto, si los procesos asignados a este Tribunal Especial de Instrucción, debieran ir a conocimiento de los juzgados Municipales, de Circuito o Superiores y se le suprimiera exclusivamente para ellos el segundo grado de conocimiento. Pero si su actividad desemboca en la Corte Suprema de Justicia, ¿cúal segundo grado puede establecerse? La máxima garantía que existe desde el punto de vista procesal en Colombia es que intervenga la Corte. Y en los casos contemplados por el Decreto número 750 de 1987 ésta debe ser la que actúa.

6. Y de la violación de la igualdad ante la ley sí que se trata de reflexión bien impertinente. Empezando porque debe preguntarse cuáles son los discriminados, si los que quedan bajo la jurisdicción de este Tribunal, o los que están por fuera de él, o los que en razón de sus altos cargos están sometidos a juzgamiento por la Corte. La sentencia resuelve el problema y dice que son los primeros y todo por "criterio subjetivo de los Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción". Entonces, el tratamiento discriminatorio consiste en que debiéndolos juzgar un juez Municipal, un juez de Circuito o un juez Superior, los juzga la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal y les investiga un Tribunal Especial de Instrucción, cuyos integrantes tienen que tener las mismas calidades que los miembros de aquella Corporación, asistida, en cuanto al Ministerio Público respecta, por un fiscal directamente designado por el Procurador General de la Nación, que también debe cumplir con los mismos requisitos. ¿Qué contrariedad: se les da el tratamiento procedimental reservado a Presidentes de la República, Magistrados de la Corte, Ministros del Despacho, Consejeros de Estado, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, etc., y resulta que se les agravia, se les discrimina, veja y expone a riesgos de condena inauditos. Bien miradas las cosas, y por eso la inicial pregunta, los que debieran sentirse lesionados serían todos los mencionados funcionarios aforados ante la Corte y todos aquellos otros ciudadanos incursos en un delito de homicidio o lesiones personales que no causan "grave traumatismo social y no crean dificultades adicionales para el restablecimiento del orden público", a quienes se les deja por fuera del juzgamiento de la Corte, porque dígase lo que se quiera de esta institución y piénsese de ella lo que venga en gana, sigue constituyendo un deseo insatisfecho para todo el que tenga un problema con la justicia, que se lo diriman los magistrados que la integran.

7. Lo que se dice de las dudas y vicisitudes de un posible sindicado de estas infracciones (Decreto número 750/87, art. 2°) en cuanto al juez que conocerá de su proceso, también cuentan para cualquier infracción y aun para los propios funcionarios, a quienes corresponde este conocimiento y definición y no a los procesados, pues es frecuente pensar que se trata de un determinado delito y de una determinada competencia, y, a la postre, no resultar ni lo uno ni lo otro. De ahí de los conflictos

procesales de esta índole. Pero, además, el incriminado al idear y cometer su delito advierte la repercusión social de las mismas puesto que está dentro de la economía de su producción y de la finalidad perseguida, esta consecuencia que, por su connotación, dará lugar a esta competencia especial de instrucción.

Cuando se ejecuta el delito en esta su realización van envueltas todas sus características y consecuencias que puedan servir para establecer la competencia, conózcalas el delincuente por su versación jurídica o ignórelas o sea cuestión indiferente para él. ¿Acaso siempre sabe o preocupa al hurtador el valor exacto del bien del cual se ha apoderado, el mismo que, como factor de cuantía, servirá para señalar los jueces de investigación o de sentencia? La situación del Tribunal Especial, a este respecto, consulta dos valiosos elementos, uno absoluto y fijo y otro más flexible, pero igualmente determinable. ¿Qué duda puede darse en cuanto al primero y que se refiere a si se trata de un homicidio o de unas lesiones personales? Ninguna. Y del segundo ya se verá que la imprecisión es más imaginaria que real.

Lo criticable no es esta forma de regular la competencia que ha buscado consultar la realidad nacional, pues sólo se procuraba establecer las conductas criminosas más salientes y más substancialmente conexas con la perturbación del orden público o con la acentuación de su deterioro. Tuvo en cuenta que el narcotráfico y la acción de grupos en armas desembocaban en esa clase de atentados y que algunos de ellos podían refluir más intensamente en la desestabilización de las instituciones básicas del Estado, en el creciente pánico de la inseguridad, etc., y de ahí que escogiera esta zona delincuencial para volverla objetivo de instrucción de dicho Tribunal. Lo realmente grave habría sido que, abandonando estos necesarios condicionamientos, le hubiera adscrito, para procurar la certidumbre que la Corte echa de menos, *todos* los delitos contra la vida y la integridad personal, ocurridos en *todo* el territorio nacional. Entonces sí la inconstitucionalidad habría sido montada, en forma sugestiva, sobre el desconocimiento de las reales necesidades del Estado de Sitio y, además, por haberse acabado con los jueces superiores y, también, en buena parte, con los de Circuito y hasta con los municipales, afectando de manera sensible a los Tribunales de Distrito.

8. La competencia señalada para el Tribunal se la tiene por aleatoria, difusa, impregnada de subjetivismo y que, conforme al talante de sus integrantes, se puede escoger el área de trabajo, por el particularismo que implica lo de "grave traumatismo social y dificultades adicionales para el restablecimiento del orden público". También, que se establece una clasificación de delitos importantes y no importantes.

Digamos algo sobre esto último: todas las normas sobre competencia realizan esta clasificación, porque si todos los delitos fueran iguales, existiría un solo organismo de juzgamiento, un idéntico trámite, una misma forma de instrucción y una sola pena. Hay delitos de menor entidad, aun dentro de un mismo género y otros más graves, ¿o será lo mismo el asesinato, para recurrir a la antigua locución, tan expresiva, que un homicidio culposo? ¿será lo mismo un atentado corporal, por una riña, en un apartado lugar, que el fusilamiento de varios campesinos, o la eliminación, como acto de todo un programa de desestabilización institucional, de uno de los tantos altos funcionarios que dirigen la República, o que orientan su opinión, o que constituyen su avanzada en el campo empresarial, estudiantil o sindical? etc.

Obvio que hay delitos de homicidio que causan un impacto social devastador y que la fementida igualdad es un sofisma de distracción y una imposibilidad de señalamiento que no existe en la práctica.

De los *trescientos* o más delitos que existen en la legislación penal, se escogieron para ser *investigados* por el Tribunal Especial de Instrucción, unos *siete* y dentro de estos últimos sólo los que pueden tener una connotación de causar un grave traumatismo social o un mayor deterioro del orden público. Por su denominación y número ya es un señalamiento bastante concreto y un vigoroso obstáculo para el desvío de funciones. Pero sin embargo se dice todo lo contrario, a base de suposiciones, pues es lo cierto que la administración de justicia, en su estructura básica y su esencial organización, sigue intacta.

9. Pero se exagera y distorsiona lo del subjetivismo e ideas afines. En efecto, no es extraño en el campo del derecho, como ciencia axiológica, el manejo de conceptos que pueden representar cierta dificultad, pero lo espinoso de los problemas no es motivo de inconstitucionalidad sino de acicate de la inteligencia. Podrían darse múltiples ejemplos, que inciden en competencias constitucionales, legales y en definiciones de pena que pueden tener este matiz y sin embargo a nadie se le ocurre, al menos hasta la fecha de esta sentencia de la Corte, declarar su inconstitucionalidad. A la ligera se me ocurre mencionar: "conmoción interior" –art. 121– amenaza de perturbación grave e inminente del orden económico o social del país –art. 122–, indignidad por mala conducta –97-2 C. N.–, conexidad, posición distinguida del delincuente en la sociedad, atrocidad, combate, devastación, habitualidad, conveniencia nacional para negar o conceder la extradición, barbarie, y así toda una lista de muy buenas proporciones.

No creo que sea más difícil señalar un delito de homicidio agravado con repercusiones de verdadero traumatismo social y con incidencias en el orden público, que determinar entre la pléyade de funcionarios de la Hacienda de la Nación, ¿cuáles son los "jefe superiores de las oficinas principales", como reza el artículo 32-6 del C. de P. P., sabiéndose como se sabe que el trópico y la vía hacia el desarrollo no dan empleados sino de este tamaño e importancia. Será difícil advertir si un homicidio contra un líder político, tiene esas características tan especiales, o es una una infracción corriente y vulgar? Otro tanto las masacres de los representantes de la autoridad civil, policiva y militar, o la eliminación de los voceros de la opinión nacional, en esta lucha irracional llevada a todos los niveles y a todas las zonas, que involucra a toda clase de personas, y llega a emplear como medio de supremacía, la supresión de la vida. Basta recordar la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, y de otros destacados hombres tan necesarios a la Patria, para saber que estos aspectos que podrían ofrecer discusiones en la teoría, en la realidad se resuelven con la aplicación de uno cualquiera de los sentidos.

Y los ejemplos brotan a espuertas. Pero para qué tratar de llevar nociones claras a quienes quieren ser academistas, retóricos o sofistas.

10. Es cuestión importante, también, señalar que la decisión del Tribunal Especial de Instrucción sobre una calificación de "alarma social" de un homicidio determinado, se toma por auto y admite el recurso de reposición. No es definición

gratuita ni caprichosa. Ni es irreversible, porque el mismo organismo puede revocar su inicial apreciación si la investigación convence de lo contrario; y aun es posible que la Sala de Casación Penal, al llegar las diligencias a su conocimiento tome una determinación no coincidente con lo primeramente apreciado por el Tribunal Especial de Instrucción. Y, aún más, podría darse una colisión de competencias (fenómeno para el cual se consagran instituciones procesales adecuadas, que hablan por sí de la natural ocurrencia del incidente, así tenga la competencia por definición un hecho objetivo y hasta físico como el territorio) que daría lugar a la intervención del Tribunal Disciplinario. Nada dice contra esta sana interpretación, que fija el Decreto en sus justos términos, lo de la competencia preventiva (art. 3 D. número 790/87), tan propia y necesaria a los fines de estimular una inmediata investigación, pero dejando libre ulteriores resoluciones de los jueces de pleno conocimiento. Así ocurre en todo proceso penal. Esto refuta aquello de querer entender que la competencia de la Sala de Casación Penal "para conocer en única instancia de ciertos delitos quedaría condicionada por decisiones del citado Tribunal Especial de Instrucción".

No hay falta de controles, pues abundan y la facultad no es *ad libitum* ni abusiva sino discrecional, y por lo tanto regida por el buen tino, el juicio equilibrado, la ponderación, etc. Precisamente, por manejar esta clase de conceptos, como garantía adicional se exigió de sus integrantes capacidades especiales, las propias de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se levantó, para aprovechar al máximo la experiencia, los límites de edad como condicionantes del retiro forzoso.

11. Pero aceptemos que, inopinadamente, surja algún desvío en el alcance de esta competencia, suceso que también puede presentarse en la intervención de cualquier juez, así trabaje sobre singulares factores de manifiesta y hasta indiscutible objetividad. ¿Qué ocurre? La ley de procedimiento no declara nulo lo actuado y se reduce a fijar a quien, en definitiva, debe corresponderle. Pero para el Tribunal Especial, el exceso posible de instrucción (la muerte de alguien con capacidad para suscitar reacciones en cadena, sembrar el pánico, incrementar los límites ya desesperantes de la inseguridad, etc., no tenía esos atributos) que ha podido llevar al descubrimiento de un homicida, lo trata de controlar la Corte con la declaratoria de inconstitucionalidad. Cualquiera pensaría, en el estado aflictivo que enfrenta Colombia, que lo grave es que no se investigue, que se quede en la impunidad un crimen, que no se disuelva un programa universitario de sicarios, etc. Pero con interpretaciones de este jaez, se podría incurrir en la torpeza mental de creer que lo inquietante es que de pronto, y por exceso, ocurra lo contrario.

Con esta clase de prejuicios y enfoques, resulta apenas lógico que se hable de desigualdades procedimentales, y que se tenga a un Tribunal de estirpe tan depurado en su integración y funciones, al cual el gobierno se aprestaba a darle una infraestructura operante, para aliviar en algo las dificultades y hasta las imposibilidades de los jueces de instrucción, los juzgados y tribunales, como de "peligroso precedente que, si se lo considera admisible, podría extenderse a otros aspectos de la administración de justicia, haciéndole perder a ésta la fisonomía que ha querido imprimirle el Constituyente".

No conviene alargar más estas disquisiciones pues si la extensa intervención realizada en la Plena apenas logró autoconvencerme y ganar mi propio voto, y obtener la supresión de algunas expresiones infortunadas como calificación de la labor de creación del Tribunal, es estéril pormenorizar más el análisis de esta decisión, tan atractiva a su examen por las tantas facetas de discusión que ofrece.

Son suficientes la expuestas para fundamentar mi disentimiento de la verdad que la Corte ha determinado en este punto.

Concluyo, simplemente, manifestando que considero tan constitucional este Tribunal Especial de Instrucción, como lo fue el de 1985, instituido para investigar los malhadados hechos del Palacio de Justicia, y que si éste así fue reconocido, esperaba encontrar otra idéntica valoración para los Decretos números 750 y 790 de 1987.

Con el debido respeto y el imprescindible distanciamiento conceptual.

Gustavo Gómez Velásquez
Magistrado

LA FIGURA ADMINISTRATIVA DEL "ENCARGO" DE UNA POSICION, EN ESTE CASO LA DE MINISTRO DE ESTADO, INVISTE DE LA PLENITUD DE ATRIBUCIONES PROPIAS DEL CARGO Y POR ENDE FACULTADES PARA CONSTITUIR GOBIERNO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. TRIBUNAL ESPECIAL PARA GRAVES DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, INCONSTITUCIONALIDAD. *ESTADO DE SITIO.*

Inconstitucional del Decreto número 790 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 59.

Referencia: Expediente número 1654 (247-E).

Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 790 de mayo 4 de 1987, "por el cual se dictan medidas para combatir graves delitos contra la vida y la integridad personal y se reforma el Decreto número 750 de 1987".

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 28 de junio dieciséis (16) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Bogotá, D. E., junio dieciséis (16) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Política, la Secretaría General de la Presidencia de la República, mediante oficio de fecha 4 de mayo de 1987, remitió a la Corte copia auténtica del Decreto número 790 de 1987, "por el cual se dictan medidas para combatir graves delitos contra la vida y la integridad personal y se reforma el Decreto número 750 de 1987", dictado por el Gobierno Nacional con invocación de las facultades que le otorga la Carta durante la vigencia del Estado de Sitio. Una vez surtidos todos los trámites previstos en el Decreto número 0432 de 1969, se procede a decidir de fondo.

II. Texto del Decreto en revisión

El Decreto que se revisa dice textualmente:

"DECRETO NUMERO 790 DE 1987
(mayo 4)

"Por el cual se dictan medidas para combatir graves delitos contra la vida y la integridad personal y se reforma el Decreto número 750 de 1987

"El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984,

D E C R E T A:

"Artículo 1° El Decreto número 750 de 1987, artículo 2°, quedará así:

"Corresponde al Tribunal Especial de Instrucción investigar los delitos de homicidio previstos en los artículos 323 y 324 del Código Penal; los de lesiones personales, con excepción de los contemplados en el artículo 340 del mismo Código; y los conexos con éstos, cuando su ocurrencia causa una especial conmoción social que agrava la perturbación del orden público y dificulta su restablecimiento.

"Artículo 2° El Decreto número 750 de 1987, artículo 3°, quedará así:

"Los Magistrados del Tribunal Especial de Instrucción deberán acreditar las mismas calidades que la Constitución Política exige para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tendrán el mismo régimen salarial y prestacional de éstos y se posesionarán ante el Presidente de la República.

"Para el nombramiento y permanencia de estos magistrados en sus cargos, no se tendrá en cuenta la edad de retiro forzoso.

"Artículo 3° El Decreto número 750 de 1987, artículo 6°, quedará así:

"El Tribunal Especial de Instrucción actuará de oficio. La providencia mediante la cual asume, a prevención, la investigación tiene el efecto de desplazar del conocimiento a cualquier otra autoridad judicial. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deben remitirse al Tribunal las diligencias que ya se hubieren practicado.

"La notificación de esta providencia se efectuará de acuerdo con las normas procesales ordinarias, pero simultáneamente se publicará en un diario de amplia circulación nacional. Contra la citada providencia cabe el recurso de reposición.

"Esta disposición no se aplicará cuando de acuerdo con la Constitución o las leyes el sindicado deba ser juzgado por un Tribunal o juez especial. Si como consecuencia de las diligencias practicadas el Tribunal hallare que el presunto responsable se encuentra en estas circunstancias, remitirá el expediente a la autoridad competente.

"Artículo 4° El Decreto número 750 de 1987, artículo 11 quedará así:

"De los resultados de la investigación el Tribunal rendirá un informe que se hará público, el cual remitirá, junto con las diligencias practicadas, a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que ésta, como juez de única instancia y sin la intervención de jurado de conciencia, decida sobre el proceso.

"Artículo 5° El Decreto número 750 de 1987, artículo 12, quedará así: La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, podrá ordenar al Tribunal la práctica de pruebas adicionales. Esta comisión deberá cumplirse dentro del plazo máximo de treinta (30) días.

"Artículo 6° Este Decreto rige a partir de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase

"Dado en Bogotá a, cuatro (4) de mayo de mil novecientos ochenta y siete (1987).

"(Firmados)

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Gobierno, *Fernando Cepeda Ulloa;* el Ministro de Relaciones Exteriores, *Julio Londoño Paredes,* el Ministro de Justicia, *Eduardo Suescún Monroy;* el viceMinistro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del Ministro, *Luis Fernando Alarcón Mantilla;* el Ministro de Defensa Nacional, *Rafael Samudio Molina;* el Ministro de Agricultura, *Luis Guillermo Parra Dussán;* el viceMinistro de Desarrollo Económico encargado de las funciones del despacho del Ministro, *Fernando Panesso Serna;* el Ministro de Minas y Energía, *Guillermo Perry Rubio;* la Ministra de Educación Nacional, *Marina Uribe de Eusse;* el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y encargado del despacho del Ministro de Salud, *Diego Younes Moreno;* el Ministro de Comunicaciones, *Edmundo López Gómez;* el Ministro de Obras Públicas y Transporte, *Luis Fernando Jaramillo Correa".*

III. Impugnaciones

Dentro del término legal, los ciudadanos Santiago Uribe Ortiz y Carlos Arturo López presentaron sendas impugnaciones contra el Decreto objeto de revisión. Dice el primero de ellos que el artículo 4° del Decreto número 790 de 1987, puesto en relación con el artículo 1° del mismo estatuto, hace de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un juez de única instancia para el conocimiento y fallo de los delitos previstos en los artículo 323 y 324 del Código Penal, sin intervención del jurado de conciencia y siempre que la ocurrencia de tales delitos cause una especial conmoción social que agrava la perturbación del orden público y dificulta su restablecimiento.

La proposición así establecida, en sentir del impugnador, viola los artículos 26, 28, 58, 63, 121-3 y 143 a 164 de la Constitución Nacional, pues solamente el legislador ordinario puede crear tribunales que administren justicia, los cuales han de aplicar la plenitud de las formas propias de cada juicio, de modo general e impersonal.

Agrega que, al hacer de la Sala Penal de la Corte un tribunal de conocimiento de única instancia, para ciertos delitos y sin consideración a un fuero constitucional, se fragmenta la estructura de la administración de justicia, introduciéndose la atipicidad en los procedimientos de Instrucción y fallo de determinados delitos y, además, se conculca la estricta sujeción de las funciones a la existencia previa del reglamento que las disponga.

Expresa, además, que el juzgamiento, por la Sala Penal de la Corte Suprema, de ciertos homicidios y sin intervención de jurado crea en el ordenamiento jurídico una paradoja según la cual para algunos casos, la ley que organiza el juicio de homicidios con la intervención de jurado de conciencia va a estar vigente; y para otros casos, simultáneamente, esa ley no va a estar vigente, ni siquiera suspendida, sino que el juicio se llevará a cabo sin dicha intervención. Esta discriminación no parece posible según el impugnador, si se observa que el inciso 3° del artículo 121 de la Carta prohíbe la derogación de las leyes.

En cuanto a la disposición contenida en el artículo 2° del Decreto, señala que al estar integrado el Tribunal por tres magistrados, "la asimilación de sus miembros a las calidades de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hace imposible su constitución, como no sea violando la paridad política que ha de existir si se atribuye pleno efecto a dicha asimilación.

Dice también que el artículo 3° del Decreto equivale en la práctica a dejar sin efecto los artículos 147 a 164 de la Constitución Política pues se habilita al Tribunal Especial para desplazar "a cualquiera otra autoridad judicial", usurpando así las reglas de competencia territorial que la propia Constitución ha señalado a los Tribunales Superiores en los departamentos y a los demás jueces en sus respectivos distritos.

En concepto del impugnador, la creación del Tribunal Especial y la designación en el mismo de los magistrados que menciona el artículo 2° del Decreto número 790 de 1987 va a hacer imposible su "desmontamiento" (sic) posterior porque se levante el Estado de Sitio, dada la estabilidad prevista en el artículo 160 de la Constitución, que consagra un régimen de estabilidad relativa para los magistrados y jueces, sin distinción alguna.

Por otra parte sostiene que el artículo 3° del Decreto resulta inexequible al discriminar la aplicación del procedimiento especial allí previsto a ciertas personas, y no a todas las que estén hipotéticamente en la situación abstracta prevista por la norma que describe el tipo penal, y porque no prevé la forma como podría el acusado hacer efectiva su defensa, mediante la "controversión" (sic) jurídica de las imputaciones que se le formulen, con quebranto del derecho a su defensa.

El otro ciudadano impugnador, señor Toro López señala como norma principalmente violada la del artículo 121 de la Carta.

Expresa que, desde el punto de vista formal, el Decreto no lleva las firmas de todos los ministros, ya que aparece suscrito por los viceministros de Hacienda y Desarrollo Económico y por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social como encargado del Ministerio de Salud. Afirma al respecto que la función de los ministros

en el caso del artículo 121 es absolutamente indelegable, irrenunciable e insustituible dada la responsabilidad "subjetiva" y "cualificada" que el mismo artículo constitucional consagra.

También alega que el Decreto número 790 no guarda relación alguna de conexidad con el Decreto número 1038 de 1984, por el cual se declaró el Estado de Sitio, ya que el acto sometido a examen constitucional "lleva implícita una nueva declaración de perturbación del orden público, toda vez que aduce motivos distintos de los que originalmente se tuvieron en cuenta para tal declaración".

Recuerda el impugnador que el Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los decretos de Estado de Sitio. Que solamente pueden ellos suspender las normas incompatibles con el Estado de excepción y que la legislación ordinaria no puede ser acusada de incompatibilidad en este caso, pues ella no ha podido regir y demostrar su eficacia en virtud de 30 años de aplicación ininterrumpida del artículo 121.

Señala igualmente que, al tenor del artículo 92 de la Constitución, el título de las leyes debe corresponder "precisamente" al contenido y que ello no ocurre con el Decreto número 790 de 1987 pues no establece las medidas que se anuncian en su encabezamiento, sino que apenas reforma el Decreto número 750 que creó el Tribunal Especial.

Por último, el ciudadano solicita que se decrete la acumulación de este proceso con el relativo al Decreto número 750 de 1987, dada la identidad de materias, para que se produzca una decisión unitaria, congruente y jurídica.

IV. El Procurador

Mediante oficio 1176 del 26 de mayo, el Señor Procurador emitió concepto sobre la exequibilidad del Decreto revisado, con fundamento en las siguientes razones:

"El Decreto Legislativo número 790 de 1987, fue dictado por el Gobierno en uso de las facultades conferidas por el artículo 121 de la Carta y, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del canon citado, está sujeto a la revisión automática de su constitucionalidad, por parte de la Corte Suprema de Justicia.

"El Decreto bajo revisión cumple con los requisitos de forma exigidos por el artículo 121 de la Constitución. En efecto, lleva la firma del Presidente de la República y la de todos los ministros del Despacho. En criterio del Procurador no le asiste razón al ciudadano Carlos Arturo Toro López, sobre la no firma del Decreto, por parte de los señores ministros de Hacienda, Desarrollo y Salud, ya que siendo la figura del encargo una situación administrativa legalmente reconocida, los viceministros y el ministro que se encontraban encargados de los despachos respectivos, estaban ejerciendo válidamente las funciones de los ministros correspondientes, por decisión del Presidente de la República y, en consecuencia, podían firmar los decretos dictados por el Gobierno como legislador de excepción.

"Respecto a la temporalidad, dicho requisito se encuentra previsto en el artículo 6°, con la expresión: 'y suspende las disposiciones que le sean contrarias', cumpliéndose

dose así con los requisitos exigidos por los decretos expedidos con ocasión del Estado de Sitio.

"En relación con la conexidad, cabe anotar que como el Decreto bajo examen modifica el 750 de 1987, le son predicables las mismas consideraciones hechas sobre este último en concepto No. 1175 de mayo 26 de 1987, en donde se sostuvo que 'El gobierno al expedir el Decreto que se revisa, señaló la existencia de hechos criminales que causan grave traumatismo social y crean dificultades adicionales para el restablecimiento del orden público', lo cual hacía necesario 'fortalecer los organismos de investigación del Estado con la creación de un Tribunal Especial de la más alta jerarquía que contribuya al esclarecimiento de esa perturbadora modalidad delictiva', por cuanto 'es deber del gobierno velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia'.

"La confrontación de las anteriores consideraciones con las causas que originaron la declaratoria del Estado de Sitio, llevan a este Despacho al convencimiento de que la medida adoptada por el Decreto número 750 de 1987 –creación del Tribunal Especial de Instrucción– guarda la debida relación de conexidad con las causas que han perturbado la paz social de la República, porque son precisamente los hechos delictivos que han causado grave traumatismo en la tranquilidad ciudadana, los que han ocasionado una mayor perturbación del orden público.

"Lo anterior es precisamente lo que ha movido al gobierno a crear dicho Tribunal Especial, con el cual se busca obtener celeridad en las investigaciones que debe adelantar, por cuanto la ciudadanía así lo exige por las hondas repercusiones que han producido esos hechos criminales en la tranquilidad social".

V. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Por tratarse de un Decreto expedido al amparo del artículo 121 de la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia el Tribunal competente para decidir en forma definitiva, previa su revisión, acerca de la constitucionalidad del mismo.

2. *Aspectos formales*

Considera la Corte que el Decreto sujeto a estudio es constitucional por este aspecto, ya que aparece firmado por el señor Presidente de la República y por todos los ministros del Despacho, tal como lo exige el artículo 121 de la Carta.

No es admisible la glosa que al respecto formula una de las impugnaciones, en cuanto una posible invalidez de las firmas de dos viceministros y un ministro encargados de funciones ministeriales, ya que, como bien lo advierte el concepto del Procurador, tales funcionarios –en virtud de la figura administrativa del encargo, que no delegación como erróneamente la denomina el impugnador– se hallaban investidos de la plenitud de atribuciones propias del cargo de ministro y, por ende, facultados para constituir *gobierno* con el Presidente de la República (art. 57 C. N.) y firmar en esa condición el Decreto que ahora se examina.

Como ya lo ha recordado la Corte en fallo relativo al Decreto número 750 de 1987, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 4ª de 1913, el Jefe del Estado puede confiar el despacho de un ministro a otro por falta del titular y, en cuanto a los viceministros, una de sus funciones legales consiste en suplir las faltas accidentales del Ministro cuando así lo disponga el Presidente de la República.

Por todo ello, carece de fundamento el cargo referido.

3. *Contenido del Decreto*

El Decreto materia del proceso debe ser analizado en armonía con el 750 de 1987, a través del cual se creó el Tribunal Especial de Instrucción, dada la íntima conexión jurídica existente entre los dos.

Si, como ha dicho esta Corporación en fallo de esta misma fecha respecto del Decreto citado, no podía el gobierno crear el Tribunal aludido, las disposiciones que fijaban su competencia, las calidades y requisitos exigidos a sus integrantes, el procedimiento de sus actuaciones y las características del juzgamiento de las conductas por él investigadas, siendo accesorias a la existencia misma del Tribunal, carecían de vida propia y son, por ende, igualmente inexequibles.

Lo propio se predica de las normas contenidas en el Decreto número 790 de 1987, pues todas ellas están destinadas a modificar los mencionados preceptos y no podría sostenerse su vigencia, menos aún su posible aplicación, si la creación del Tribunal al que se refieren ha sido hallada contraria al Estatuto Constitucional.

Esto es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de todo el Decreto en revisión, como en efecto lo hará la Corte.

V. Decisión

Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar INCONSTITUCIONAL en todas sus partes el Decreto Legislativo número 790 (mayo 4) de 1987, "por el cual se dictan medidas para combatir graves delitos contra la vida y la integridad personal y se reforma el Decreto número 750 de 1987".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez,* (salvedad de voto: ver el agregado al expediente número 1650/24 D. 750/87. *Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo,*

Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES AL EJECUTIVO PARA ADHERIR A LOS TRATADOS FIRMADOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MONTEVIDEO DE 1889 SOBRE DERECHO CIVIL INTERNACIONAL Y SOBRE DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL: LA DECISION JURISDICCIONAL SOBRE EL PUNTO ANTERIOR, EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD, CUALQUIERA QUE SEA SU SENTIDO, EN NADA REPERCUTIRA DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO SOBRE LOS EXPRESADOS ACTOS DE DERECHO INTERNACIONAL, NI AFECTARA EL COMPROMISO CONTRAIDO, POR COLOMBIA CON LOS DEMAS ESTADOS FIRMANTES O ADHERENTES.

Inexequible la Ley 40 de 1933.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 60.

Referencia: Expediente número 1565.

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 40 de 1933, "por la cual se autoriza al gobierno para adherir a los tratados firmados en el Congreso Internacional de Montevideo de 1889 sobre Derecho Civil Internacional y sobre Derecho Comercial Internacional".

Demandante: *Santiago Uribe Ortiz.*

Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 29 de junio 18 de 1987

Bogotá, D. E., junio dieciocho (18) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. La demanda

El ciudadano Santiago Uribe Ortiz, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 214 de la Constitución Política, ha demandado ante la Corte, por estimarla contraria a los preceptos superiores, la integridad de la Ley 40 de 1933 –Noviembre 23–, cuyo texto se transcribe a continuación:

"LEY 40 DE 1933
(Noviembre 23)

"Por la cual se autoriza al Gobierno para adherir a los tratados firmados en el Congreso Internacional de Montevideo de 1889, sobre Derecho Civil Internacional y sobre Derecho Comercial Internacional.

"El Congreso de Colombia,

D E C R E T A:

"Artículo 1° Autorízase al Gobierno para que adhiera, en nombre de la República de manera definitiva, al Tratado sobre Derecho Civil Internacional, firmado en el Congreso Internacional Suramericano de Montevideo el 12 de febrero de 1889.

"Artículo 2° Igualmente se autoriza al Gobierno de la República para que adhiera, en las mismas condiciones, al Tratado sobre Derecho Comercial Internacional, firmado así mismo en Montevideo el 12 de febrero de 1889.

"Dada en Bogotá, a diez y siete de noviembre de mil novecientos treinta y tres.

"El presidente del Senado, *Max Duque Gómez;* el presidente de la Cámara de Representantes, *Eduardo López Pumarejo,* el secretario del Senado, *Odilio Vargas,* el secretario de la Cámara de Representantes, *Carlos Samper Sordo.*

"Poder Ejecutivo. Bogotá, noviembre 23 de 1933.

"Publíquese y ejecútese.

"El Ministro de Educación Nacional, encargado del Despacho de Relaciones Exteriores, *Pedro M. Carreño*".

El actor funda sus pretensiones en los siguientes motivos:

– Considera que la autorización otorgada por esa ley al gobierno para adherir a los tratados suscritos en Montevideo el 12 de febrero de 1889 es violatoria de disposiciones de la Constitución vigente en 1933, año de su expedición.

– La razón fundamental del ataque a dicha autorización radica en que ella se otorgó al Ejecutivo para realizar un acto propio del Congreso, indelegable según los artículos 58, inciso 1°, y 76 numeral 19 de la Constitución de 1886, hoy el artículo 76, numeral 18, de la Constitución vigente.

– Agrega el demandante que, por otro lado, dicha autorización no fue hecha de manera precisa, indicando el contenido de los Tratados.

– Dice que la autorización no se confirió con el límite temporal que exigía el artículo 76, numeral 9° (hoy 12) de la Carta.

– Además, las disposiciones de tales tratados eran en ciertos casos incompatibles con normas del Código Civil, "creándose así un problema de derogatoria".

– Señala también que, "para colmar el absurdo, el Gobierno Nacional, en desarrollo de la 'autorización' que recibió por virtud de la Ley 40 de 1933 *no expidió*

ningún decreto adhiriendo a los dichos tratados, sino que mediante una simple 'nota' de Cancillería, comunicó o notificó la adhesión de Colombia a los mismos.

II. Concepto del Procurador General de la Nación

Mediante oficio 1117 del 2 de marzo de 1987, el señor Procurador General emitió el concepto de rigor, remitiéndose a lo ya expresado por la misma Procuraduría el 28 de enero de 1985 en torno a demandas instauradas contra la Ley 27 de 1980, al reiterar que la Corte Suprema de Justicia sí es competente, en todo tiempo, para fallar de manera definitiva sobre la constitucionalidad de leyes aprobatorias de tratados públicos, ya que así sean especiales o hagan parte de un acto complejo, no dejan de ser leyes y están sujetas al control jurisdiccional que a la Corte se confía.

En cuanto al caso de la Ley 40 de 1933 considerado específicamente, afirma:

"De conformidad con las disposiciones constitucionales vigentes para la época en que se expidió la Ley acusada (artículos 76-20 y 120-10 C.N., modificado por el artículo 34 del A.L. No. 3 de 1910), así como de las existentes en la actualidad (artículos 76-18 y 120-20 C.N.) el Presidente de la República, en su calidad de suprema autoridad administrativa, puede celebrar tratados públicos con otras entidades de Derecho Internacional, en tanto que es función del Congreso la aprobación o no de dichos tratados.

"Si bien la redacción de la Ley 40 de 1933 es poco afortunada, no por ello puede afirmarse que el Congreso se despojó de una atribución constitucional que le es propia, con el fin de entregársela al Ejecutivo. Es necesario observar que el Legislador colombiano autorizó al gobierno para adherirse a dos tratados celebrados en la ciudad de Montevideo en 1889, con lo cual indudablemente partía del supuesto de que dichos pactos internacionales merecían y obtenían su aprobación. No otro puede ser el sentido de la Ley, porque sería completamente absurdo considerar que el Congreso no aprobaba esos Tratados pero sí autorizaba al gobierno para que se adhiriera a ellos. En la medida en que autorizó la adhesión, incuestionablemente estaba aprobando los Tratados.

".....

"No siendo (...) la Ley 40 de 1933 una ley de facultades sino una ley especial, mal puede afirmarse que exista infracción del precepto 76-12 del Estatuto Superior.

De igual manera, no encuentra el Procurador que haya violación del artículo 120-2°-3° constitucional, porque la Ley 40 de 1933 fue publicada en el *Diario Oficial* No. 22452 de diciembre 1° de 1933 y el gobierno dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en su articulado, mediante la entrega de la nota diplomática de fecha octubre 25 de 1934, firmada por el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia, Baldomero Sanín Cano, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Carlos Saavedra Lamas, en la cual le informaba sobre la aprobación de los Tratados por parte del Congreso colombiano, al tiempo que adjuntaba el instrumento de ratificación 'para que sea depositado de conformidad con los procedimientos usuales'.

"Respecto de la presunta violación del artículo 120-20 del Estatuto Superior, es necesario entender que cuando el gobierno solicitó la autorización del Congreso, sin lugar a dudas estaba expresando su clara voluntad de adherirse a los Tratados de Derecho Civil Internacional y Derecho Comercial Internacional, por lo que no existió, por parte del Congreso Nacional, usurpación de las facultades presidenciales en esta materia, en la medida en que fue el propio Ejecutivo el que pidió al Organo Legislativo esa autorización.

"Sobre la pretendida derogación tácita de las normas internas del país, por parte de los Tratados atrás citados, en especial de disposiciones del Código Civil colombiano, debe anotarse que los Tratados sí pueden derogar o modificar disposiciones internas, porque no puede olvidarse que ellos se convierten en Ley de la República, una vez son aprobados por el Congreso; y para el caso de la incompatibilidad entre los artículos 11 del Tratado de Derecho Civil Internacional y 19 del Código Civil Colombiano, concretamente citada por el actor, no observa el Despacho que ella exista, porque de su confrontación se encuentra que el artículo 11 del Tratado no modifica el precepto mencionado del Código Civil y armoniza con las demás disposiciones del mismo".

III. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

De conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución, habiéndose demandado una ley expedida por el Congreso de la República, corresponde el fallo definitivo sobre su exequibilidad a la Corte Suprema de Justicia.

A los efectos de este proceso, se observa, además, que no obstante ser objeto de la ley acusada el otorgamiento de autorizaciones al Ejecutivo para adherir a unos Tratados Públicos, la decisión jurisdiccional sobre constitucionalidad –cualquiera que sea su sentido– en nada repercutirá desde el punto de vista jurídico sobre los expresados actos de Derecho Internacional, ni afectará el compromiso contraído por Colombia con los demás Estados firmantes o adherentes, ya que, por una parte, dichas autorizaciones no correspondían a un paso necesario para que se perfeccionara el acuerdo de voluntades en cuanto el Derecho interno no las exigía como requisito previo y, por otra, el contenido de los tratados en cuestión no quedó incorporado al texto de la mencionada ley.

Por todo lo anterior, no se estiman aplicables al presente juicio de constitucionalidad las consideraciones que ha tenido en cuenta la jurisprudencia en relación con leyes aprobatorias de tratados internacionales.

En consecuencia, conocerá la Corte sobre el fondo de la demanda.

2. Las funciones constitucionales del Congreso y del gobierno respecto de las relaciones internacionales.

Sea lo primero afirmar que, por lo atinente al deslinde de competencias entre Legislativo y Ejecutivo sobre esta materia, en nada ha cambiado el sistema constitucional colombiano desde 1886, salvo algunas mutaciones relativas a formas de

expresión y a numeración de artículos y ordinales, por lo cual la normatividad vigente para la época en que fue expedida la Ley 40 de 1933, era, en su contenido, la misma hoy imperante.

En efecto, el artículo 76, ordinal 20 de la Constitución de 1886 expresaba que correspondía al Congreso "aprobar o desaprobar los tratados que el gobierno celebre con potencias extranjeras", al paso que el artículo 120, ordinal 10, señalaba al Presidente de la República la atribución de "dirigir las relaciones diplomáticas o comerciales con las demás potencias o soberanos: nombrar libremente y recibir los agentes respectivos, y celebrar con potencias extranjeras tratados y convenios". Así permanecieron tales funciones, sin ser tocadas por las reformas de 1910 y 1936, e inclusive en la de 1945, cuando apenas hubo variaciones en el orden de codificación hasta cuando, mediante el Acto Legislativo número 1 de 1968, se adoptó la numeración y redacción actualmente en vigencia.

Es función del Presidente de la República como Jefe del Estado, la de dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con los demás Estados y entidades de derecho internacional y la de celebrar tratados o convenios que se someterán a la posterior aprobación del Congreso (art. 120, ord. 20 C.N.). Correlativamente, atañe al Congreso la aprobación o improbación, por medio de ley, de los tratados o convenios que celebre el Ejecutivo en los términos de la norma mencionada.

Son funciones distintas que, si bien se orientan en forma coordinada al logro de los fines del Estado colombiano en el plano internacional, por su misma naturaleza no pueden confundirse ni amalgamarse y deben ejercerse sin interferir una en la otra (Art. Ord. 13 C.N.).

De donde se colige que mal podría el Congreso asumir la función de celebrar tratados o la de impartir instrucciones al Presidente sobre su celebración, o el Gobierno aprobarse los que él mismo ha celebrado.

La Constitución exige la aprobación posterior del Congreso respecto de los Tratados sobre la base de que éste conoce a cabalidad el contenido de aquéllos, pues la ley aprobatoria busca no solamente el cumplimiento de uno de los trámites propios del acto complejo de Derecho Internacional, sino la incorporación del Tratado a la legislación colombiana, de tal modo que obligue en el plano interno.

Pero las normas constitucionales no ordenan al Gobierno pedir autorización previa al Congreso ni para celebrar tratados ni para adherir a ellos cuando Colombia no ha sido parte inicialmente, pues la potestad de hacerlo es plena y propia del Ejecutivo, cuyos actos corresponden al manejo autónomo de las relaciones internacionales que ha sido confiado al Presidente de la República. Cosa distinta es que se requiera, respecto de los tratados ya celebrados por el Gobierno o a los que haya adherido, la aprobación del Congreso, la cual sí constituye indispensable trámite desde el punto de vista interno y, por consiguiente, ante el Derecho Internacional; no así la autorización anterior.

La adhesión a tratados públicos ha sido corrientemente entendida como el acto a través del cual un Estado que no era parte en un Convenio o Tratado Internacional

presta su consentimiento respecto del mismo, contrayendo en consecuencia las obligaciones que el Tratado impone a los firmantes. Ante el Derecho Internacional, la adhesión necesita de la previa autorización del Congreso o Parlamento del Estado adherente tan solo cuando *su* derecho interno la exige, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que el interés en ella es del Estado considerado en su interior, mas no de las otras partes contratantes. El Derecho Internacional se limita a garantizar que los Estados o entidades den previo cumplimiento a los requisitos de sus respectivos sistemas jurídicos internos, pero no llega hasta requerir formalidades adicionales en el ámbito propio de cada Estado, si él mismo no las ha establecido.

En ese orden de ideas, si el Congreso de la República expidió la Ley 40 de 1933, autorizando al Ejecutivo para ejercer funciones que constitucionalmente le correspondían sin necesidad de ley, asumió una competencia que la Carta Política no le había otorgado y que el Derecho Internacional tampoco le exigía, e invadió así la órbita propia de otra rama del poder público.

La usurpación aparece todavía más clara en este caso cuando se observa que la autorización conferida, lejos de ser amplia, restringió la autonomía del Presidente, pues se le otorgó para adherir, "en nombre de la República de manera definitiva" a los Tratados, impidiéndole hacer reservas o establecer condiciones.

Resultó violado, entonces, el artículo 2º de la Constitución, por cuanto el Congreso ejerció sus funciones en términos diferentes de los indicados en la Carta, y el 55, dado que se rompió el equilibrio de competencias que dicho canon tiene establecido.

No estima la Corte que, como lo expresa el concepto de Procuraduría, quede purgada tal inconstitucionalidad por la circunstancia de haber solicitado el propio gobierno la autorización legislativa, ya que la usurpación de facultades no requiere, para contravenir el orden jurídico, que haya oposición o resistencia del órgano cuya órbita se usurpa, pues el equilibrio funcional ha sido concebido para garantía de los gobernados y no en interés de las ramas del poder público ni de quienes accidentalmente pertenecen a ellas.

Desecha la Corte, por infundados, los cargos que formula la demanda respecto de una inconstitucional delegación de funciones legislativas ya que, como se deja expuesto, la facultad de celebrar tratados o adherir a ellos corresponde privativamente según la Carta al Presidente de la República.

Por último, es importante reiterar que no se cuestiona en este proceso la constitucionalidad de una ley aprobatoria de Tratado Internacional, por lo cual no es el caso aplicar la tesis de la inhibición, reiterada hace poco por esta Corporación, al pronunciarse sobre el Acto del Congreso Nacional que aprobó el Concordato con la Santa Sede.

En efecto, la Ley 40 de 23 de noviembre de 1933 no puede considerarse como aprobatoria de un Tratado que aún no había celebrado Colombia, pues su adhesión a él se produjo el 2 de diciembre del mismo año.

Además, juzga la Corte que aún en el caso de poderse calificar dicha ley como aprobatoria, adolecería de un vicio de forma, por haberse expedido antes de la

celebración del Tratado y que ha sido doctrina de esta Corporación decidir sobre los vicios de forma de los cuales pueden adolecer las leyes aprobatorias de Tratados Internacionales, a diferencia de los vicios materiales, respecto de los cuales sí se ha aplicado la mencionada tesis de la inhibición.

Por otra parte, las normas constitucionales que señalan para la vigencia de los tratados públicos el orden de celebración y posterior aprobación del Congreso, contenidas en los artículos 76, ordinal 18 y 120, ordinal 20, de la Carta, estaban vigentes cuando el Gobierno colombiano adhirió a los Tratados de Montevideo de 1889 y cuando el Congreso de la República expidió el acto en el cual se autorizaba al gobierno a adherir a ellos.

DECISIÓN

Con apoyo en las razones anteriores, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLÁRASE INEXEQUIBLE, por ser contraria a la Constitución, la Ley 40 de 1933 en su totalidad.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera* (Con salvamento de voto), *José Alejandro Bonivento Fernández* (Con salvamento de voto), *Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento* (Con salvamento de voto), *Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo* (Con salvamento de voto), *Lisandro Martínez Zúñiga* (Con salvamento de voto), *Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero* (Con salvamento de voto), *Jorgé Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar* (Con salvamento de voto), *Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR:

Que el Magistrado Edgar Saavedra Rojas, no asistió a la sesión de Sala Plena celebrada el día dieciocho de junio del presente año, por encontrarse con excusa justificada.

Bogotá, catorce de julio de mil novecientos ochenta y siete.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PLENA

Ref.: Expediente número 1565

Nuestro disentimiento radica fundamentalmente en que la sentencia ha debido ser inhibitoria puesto que la ley acusada, por estar atada a un tratado internacional y no adolecer de vicios de forma alguno, no permite un juzgamiento de fondo, tal como la Corte lo ha venido sosteniendo de vieja data.

Si bien es cierto que la ley no es un dechado de claridad en sus enunciados, puesto que habla de autorización para aprobar el tratado de Montevideo de 12 de febrero de 1889, sobre Derecho Civil Internacional y Derecho Comercial Internacional, si se interpreta con un criterio científico, acorde con la época, se puede concluir que, en realidad, la voluntad del legislador no era la de inmiscuirse en el campo de competencia propio del Ejecutivo sino, por el conocimiento previo y total de dicho tratado, conceder la aprobación. Así lo entendió el Gobierno de entonces cuando produjo el depósito de notas ante el Ministro de Relaciones de la República de Argentina, una vez cumplida con la adhesión. Entonces, si se le da a la ley revisada ese alcance, el Tratado entró de lleno al ordenamiento nacional en virtud de la fuerza normativa de esa clase de acuerdos internacionales.

Si Colombia, pues, se adhirió al referido tratado y lo hizo por conducto de la autoridad competente, con apoyo en una ley que convino era aprobatoria de aquél, no puede la Corte, en su condición de guardiana de la Constitución, que le concede el artículo 214 de la Carta Fundamental, juzgarla en el fondo.

El tránsito que hizo el tratado lo convierte en invulnerable, por cuanto supone que su revisión es la del tratado mismo.

La afirmación que se hace en la sentencia de que si se puede revisar en el fondo la Ley 40 de 1933 porque adolece de vicio de forma "por haberse expedido antes de la celebración del tratado", nos parece que no se ajusta a la noción constitucional sobre esta clase de defectos, porque en parte alguna se advierte irregularidad en la tramitación, expedición y sanción de la ley. El cuestionamiento o reparo que se podría hacer es sobre los pasos de vigencia del tratado en el ordenamiento interno, pero jamás por defectos de forma en la ley declarada inexequible.

Por lo dicho, brevemente, la inhibición era la decisión que correspondía al asunto examinado.

José Alejandro Bonivento Fernández, Héctor Marín Naranjo, Eduardo García Sarmiento, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Baquero Herrera.

SALVAMENTO DE VOTO
Exp. 1565

Respetuosamente fundamento mi disentimiento en torno a la providencia mayoritaria, mediante las siguientes razones:

1. Aun cuando estimo que la Corte sí puede conocer siempre sobre las demandas de inconstitucionalidad sobre los Tratados Públicos por no existir limitación en la

Carta al respecto, creo que en el caso presente es exagerada la conclusión de inconstitucionalidad.

2. Pero igualmente sostengo que el procedimiento empleado por el legislador de 1933 al autorizar al gobierno para adherir a los Tratados de Montevideo de 1889, es un caso especial autorizado por los usos y costumbres internacionales vigentes para la época.

Debe partirse de la perspectiva histórica indiscutible cronológicamente de que los Tratados a los cuales se autorizaba adherir por Colombia, habían sido firmados cuarenta y cuatro (44) años antes de que se promulgase la ley demandada.

Por ende eran notoriamente conocidos si se acudió al sistema de autorizar por el legislativo al Gobierno para adherir a ellos se estaba por razones de economía procesal por así decirlo aprobando algo ampliamente conocido.

Esto es, que la ley acusada, sí cumple las finalidades que busca, sin traspasar los límites constitucionales.

3. Los argumentos que esbozo no serían obviamente valederos, en el supuesto de que se autorizase para adherir a algo no existente, pero sí para este evento excepcional de Tratados suscritos y avalados por el transcurso del tiempo.

Es cierto que son funciones distintas las de celebrar Tratados y Convenios a adherir a ellos por una parte o aprobarlos e improbarlos, por la otra; que la primera corresponde al Ejecutivo y la segunda al Legislativo. Pero no viola tal división de funciones este proceder excepcional, para un caso excepcional.

Es posible que el sistema contemplado en la ley acusada, no sea el ortodoxo, pero al otorgarse una autorización que la Constitución acepta, no se está violando la Carta.

Por tanto y por razones diferentes a las planteadas por los demás magistrados disidentes pongo de presente que las razones de la mayoría, no son personalmente convincentes para fundamentar el trascendental paso dado.

Honorables Magistrados,

Lisandro Martínez Z.

COSA JUZGADA. MEDIDAS SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE URBANO Y METROPOLITANO DE PASAJEROS

Estése a lo resuelto en la sentencia número 29, de marzo 12 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 61.

Referencia: Expediente número 1593.

Acción de inexequibilidad contra el Decreto número 2454 de 1986.

Actor: *José María del Castillo A.*

Magistrado sustanciador: *Jairo E. Duque Pérez.*

Aprobada según Acta número 29

Bogotá, D. E., junio dieciocho (18) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano José María del Castillo Abella ha acusado por inconstitucional el Decreto número 2454 de 1986, haciendo uso del derecho que consagra para todo ciudadano el artículo 214 de la Constitución Nacional.

Como quiera que se han cumplido los trámites propios del proceso de constitucionalidad y el Procurador General de la Nación ha emitido su concepto, entra la Corte a decidir sobre el fondo de la petición que se formula.

II. Norma acusada

El texto del Decreto objeto de la acusación dice así:

"DECRETO NUMERO 2454 DE 1986
(julio 31)

"Por el cual se dictan medidas sobre el servicio público de transporte terrestre urbano y metropolitano de pasajeros

"El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 15 de 1959,

"D E C R E T A:

"Artículo 1° Serán sancionadas con multas equivalentes a tres (3) salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Bogotá, las empresas de transporte urbano y metropolitano que incurran en las siguientes infracciones:

"a) No entregar al Instituto Nacional del Transporte los datos que según las normas vigentes deba suministrar con fines de informacion o de estudio;

"b) No portar en los vehículos el extintor de incendios, botiquín de primeros auxilios o equipo de carretera.

"Artículo 2° Serán sancionadas con multas de tres (3) y seis (6) salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Bogotá, las empresas de transporte urbano y metropolitano que incurran en las siguientes infracciones:

"a) Permitir la circulación de vehículos de las empresas sin sus colores distintivos o sin portar su razón social en aviso visible;

"b) Permitir la operación de vehículos sin las necesarias condiciones de seguridad;

"c) Utilizar vehículos de otra empresa sin el previo cumplimiento de los requisitos legales;

"d) Carecer de un sistema de mantenimiento para sus vehículos o no facilitar los medios para hacerlo a los propietarios de los vehículos vinculados a la empresa;

"e) Retener o no tramitar oportunamente las tarjetas de operación de los vehículos vinculados a la empresa;

"f) Permitir la operación de vehículos sin tarjeta de operación;

"g) Alterar los horarios autorizados;

"h) Operar sin diligenciar la correspondiente planilla de despacho;

"i) Operar sin el seguro de responsabilidad expedido conforme con las disposiciones sobre la materia;

"j) Prestar el servicio de transporte de pasajeros en buses o busetas que no tengan puerta de seguridad o salida de emergencia;

"k) Prestar el servicio de transporte de pasajeros en buses que no tengan puerta trasera.

"Artículo 3° Serán sancionadas con multa entre tres (3) y cincuenta y cinco (55) salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Bogotá, las empresas de transporte urbano y metropolitano que incurran en las siguientes faltas:

"a) Prestar el servicio de transporte en zonas de operación o rutas no autorizadas;

"b) Aumentar o disminuir las tarifas autorizadas por autoridad competente;

"c) Permitir a personas no idóneas, embriagadas o bajo el efecto de drogas, la conducción de vehículos que presten el servicio público de transporte;

"d) Permitir el transporte de pasajeros ubicándolos entre la registradora y la puerta delantera de los vehículos;

"e) Transportar pasajeros excediendo la capacidad de los vehículos determinada por el INTRA para el servicio especial, de lujo o para los taxis;

"f) Alterar la capacidad transportadora determinada y autorizada por el INTRA;

"g) Utilizar conductores asalariados no contratados directamente por la empresa;

"h) Fijar a los conductores jornadas de trabajo superiores a la legalmente autorizadas;

"i) Abstenerse de utilizar las terminales de transporte, debiendo hacerlo;

"j) Suspender parcialmente el servicio.

"Artículo 4° El abandono total o injustificado del servicio dará lugar a la cancelación del permiso o a la caducidad de la concesión según el caso.

"Artículo 5° Habrá lugar a duplicar la sanción correspondiente cuando la empresa incurra en la misma infracción, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga.

"Artículo 6° Las sanciones a que se refiere este acuerdo se impondrán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, los antecedentes de la empresa y las implicaciones del hecho en la prestación del servicio público de transporte.

"Artículo 7° Cuando se tenga conocimiento de la posible comisión de una infracción de las sancionables por este decreto, la autoridad competente abrirá la investigación mediante resolución motivada contra la cual no procede recurso alguno. Los hechos constitutivos de la infracción podrán demostrarse por cualquier medio de prueba.

"Artículo 8° Cuando en el desarrollo de la investigación se establezca que una empresa de transporte pudo incurrir en una infracción, el funcionario competente dictará una resolución motivada que deberá contener como mínimo:

"– Relación de los hechos objeto de la investigación.

"– Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de tales hechos.

"– Cita de las disposiciones presuntamente infringidas con los hechos investigados.

"– Término dentro del cual la empresa debe presentar por escrito sus explicaciones y justificaciones, así como la solicitud de pruebas. Dicho término será de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de su notificación.

"Artículo 9° La notificación de la resolución a que se refiere el artículo anterior se hará de acuerdo con lo indicado en el Código Contencioso-Administrativo.

"Artículo 10. Presentado el escrito de explicaciones por la empresa, el INTRA tendrá treinta (30) días calendario para decidir mediante resolución motivada contra la cual proceden los recursos legales. En el evento en que se deban practicar pruebas, dicho término podrá ampliarse hasta en quince (15) días calendario. Al procedimiento subsiguiente se aplicarán las normas del Código Contencioso-Administrativo.

"Artículo 11. Los recursos contra una resolución que imponga sanción de multa sólo serán concedidos previo depósito de su valor en la Tesorería del INTRA.

"Artículo 12. Las alteraciones en la prestación del servicio público de transporte o en las tarifas autorizadas que pongan en grave peligro el orden público, serán sancionadas de acuerdo con lo establecido por el Decreto número 2624 de 1983.

"Artículo 13. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

"Comuníquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 31 de julio de 1986.

BELISARIO BETANCUR C.

"*Rodolfo Segovia Salas,* Ministro de Obras Públicas y Transporte".

III. Fundamentos de la demanda

Para el actor el ordenamiento que impugna quebranta los artículos 2°, 16, 20, 26, 30, 32, 39, 55, 76-11, 120 y 135 de la Constitución Nacional, y las Leyes 15 de 1969; 33 de 1986; el artículo 11 de la Ley 58 de 1982; los Decretos números 1344 y 1393 de 1970; los artículos 1°, 55 y 140 del Código Contencioso-Administrativo, 3° del Código Sustantivo del Trabajo y 1° y 2° del Código Procesal del Trabajo, por considerar que las normas legales citadas tienen jerarquía superior a la del Decreto acusado.

El aspecto central de la tacha de inconstitucionalidad que señala el actor radica en que el Gobierno Nacional en uso de las facultades que le confirió la Ley 15 de 1959 expidió mediante el Decreto número 2454 de 1986 un código de tránsito para las empresas de transporte urbano y metropolitano sin autorización legal, ya que la ley de facultades citada autorizó al Ejecutivo "para intervenir en la industria del transporte y no para atribuirse competencias propias del órgano legislativo" como es la de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformarlos.

IV. Concepto del Procurador General

El Jefe del Ministerio Público señala en su concepto que la Corte ya examinó el Decreto acusado y lo encontró ajustado a la Constitución, por lo tanto solicita estar a lo resuelto en la Sentencia No. 29 de marzo 12 de 1987, que así lo decidió.

V. Consideraciones de la Corte

Como lo observa la Procuraduría, el Decreto número 3454 de 1986 fue demandado dentro del proceso 1535 y en punto a definir su constitucionalidad señaló la Corte, en la sentencia a que alude el concepto fiscal lo siguiente:

"Estas disposiciones son exequibles, si como ya se ha determinado competen al ejercicio de una parte de la facultad intervencionista del Estado con la mira de hacer efectivas las normas y medidas para la prestación del servicio público del transporte, dan a los investigados la garantía de su defensa dentro de la averiguación gubernamental y no desconocen su posterior decisión Contencioso-Administrativa".

Significa lo anterior que sobre el Decreto que es materia de esta nueva demanda, ya se pronunció esta Corporación con autoridad de cosa juzgada y efectos *erga omnes*, por lo cual no hay lugar a proveer de nuevo sobre dicha cuestión toda vez que la inmutabilidad del fallo lo torna inalterable por haber agotado la Corte su jurisdicción.

VI. Decisión

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Estése a lo resuelto en la Sentencia No. 29, de marzo 12 de 1987, (Expediente No. 1535) en cuanto declaró exequible el Decreto número 2454 de 1986.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia

DEJA CONSTANCIA:

Que el Magistrado Edgar Saavedra Rojas, no asistió a la sesión de Sala Plena celebrada el día dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y siete, por encontrarse con excusa justificada.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

COSA JUZGADA. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE. PRESTACION DEL SERVICIO.

Estése a lo resuelto en sentencia de 12 de marzo de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 62.

Referencia: Expediente número 1592.

Acción de inexequibilidad contra los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto número 2440 de 1986. Servicio Público de Transporte. Prestación del Servicio.

Actor: *José María del Castillo A.*

Magistrado Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobada por Acta número 29

Bogotá, D. E., junio dieciocho (18) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano José María del Castillo Abella, presentó ante esta Corporación, en ejercicio de la acción que consagra el artículo 214 de la Carta, demanda contra los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto número 2440 de 1986. Se admitió la demanda y se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación quien rindió su concepto de rigor. Procede la Corte Suprema de Justicia a resolver el asunto.

II. Texto de la norma acusada

El texto de la norma acusada es el siguiente:

"Artículo 1° El artículo segundo del Decreto número 2624 de 1983, quedará así:

" 'Artículo 2° Las empresas que alteren o permitan la alteración en la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en buses, busetas, microbuses o automóviles o modifiquen de cualquier manera sus tarifas, serán sancionadas con

multa equivale (sic) al valor de diez (10) hasta trescientos (300) salarios mínimos mensuales vigentes en la ciudad de Bogotá'.

"Artículo 2° El artículo octavo del Decreto número 2624 de 1983, quedará así:

" 'Artículo 8° Una vez recibido el informe oficial, el Instituto Nacional del Transporte solicitará mediante providencia no recurrible los descargos correspondientes, los cuales deberán ser presentados por escrito dentro de las ocho (8) horas siguientes, contadas a partir de la notificación personal de dicha providencia.

"Parágrafo. La citación para efectos de la notificación personal de los cargos, se efectuará mediante comunicación telegráfica dirigida a la sede de la empresa.

"Si transcurridas dieciocho (18) horas, no se ha efectuado la notificación personal, se procederá a notificarla por edicto que se fijará por dos (2) días en la Secretaría correspondiente del INTRA, transcurrido dicho término se entenderá surtida la notificación'.

"Artículo 3° Cuando a juicio del Instituto Nacional del Transporte el servicio público pueda sufrir perjuicios con la cancelación de la licencia de funcionamiento, se pondrá el hecho en conocimiento del Alcalde de la respectiva ciudad quien impondrá al representante legal de la empresa una multa de trescientos (300) salarios mínimos mensuales convertibles en arresto a razón de un día por cada quinientos pesos ($500.00), cuando no sea cancelada dentro del mes siguiente a su imposición, sin que en ningún caso el arresto pueda exceder de seis (6) meses.

"Igual conversión se podrá hacer cuando sin justa causa las multas aludidas en el Decreto número 2624 de 1983 no sean canceladas dentro del mismo término.

"....."

III. La demanda

A. *Normas constitucionales que se consideran infringidas*

El actor considera que las normas acusadas infringen los artículos 2°, 16, 20, 26, 30, 32, 39, 55, 76 ordinal 11, 120 y 135 de la Constitución Nacional.

B. *Fundamentos de la acción*

Para fundamentar su demanda, el actor propone las siguientes consideraciones:

1. El Decreto acusado viola la Constitución ya que se dictó por fuera de lo preceptuado por la Ley 15 de 1959. Esta Ley no autorizó al Ejecutivo para legislar como lo hizo en el artículo 1° del Decreto número 2440 de 1986 al consagrar una conducta ilícita para la cual se prevé una especial sanción.

2. El procedimiento gubernativo especial que fue creado por el artículo 2° del Decreto que se acusa, desconoció lo preceptuado por el artículo 26 de la Constitución pues dispuso que algunas providencias no son objeto de recursos en violación del Derecho de Defensa. Además, el Ejecutivo no podía modificar el procedimiento gubernativo general que regula el Código Contencioso-Administrativo sin desconocer lo preceptuado por la Carta como ocurrió en el artículo acusado pues para ello ni siquiera fue autorizado por la ley de intervención.

3. El artículo 3º de la misma norma es inconstitucional, pues el Presidente de la República también desbordó el campo de las autorizaciones conferidas por la ley de intervención ya que delegó en los Alcaldes la facultad de imponer multas convertibles en arresto sin estar facultado por el Congreso para crear un régimen de sanciones, ni para delegar al alcalde autorizaciones que sólo se le conceden al Presidente de la República.

IV. El concepto fiscal

El señor Procurador General de la Nación observa que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció sobre la constitucionalidad de las normas acusadas en sentencia No. 29 del 12 de marzo de 1987 y solicita que esta Corporación, en acatamiento de la fuerza de la cosa juzgada, ordene estarse a lo resuelto en la citada sentencia.

V. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

El Decreto acusado fue expedido por el Presidente de la República con invocación de las facultades conferidas por la Ley 15 de 1959, la que es una norma que impone el mandato legislativo que prevé el artículo 32 de la Constitución Nacional.

Al respecto ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia que este tipo de normas corresponden a las que se expiden en desarrollo de autorizaciones legislativas concedidas al Gobierno para ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional de sus competencias, según el numeral 11 del artículo 76 de la Carta. Además la Corte considera que las normas así expedidas tienen fuerza de ley y por lo mismo compete a la Corte decidir sobre la acusación de inexequibilidad.

2. *Cosa juzgada*

Como queda visto, el caso en cuestión ha sido examinado y resuelto definitivamente por esta Corporación en sentencia No. 29 del 12 de marzo de 1987, dictada dentro del proceso No. 1535. La Corte declaró exequible todo el Decreto número 2440 de 1986 lo que para el caso que se resuelve produce efectos de cosa juzgada. Por lo anterior se resuelve ordenar estarse a lo decidido en el fallo que se cita.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, –Sala Plena–, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Estése a lo resuelto en sentencia No. 29 del 12 de marzo de 1987, proferida por esta Corporación.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el Expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento F., Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorgé Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia

DEJA CONSTANCIA:

Que el Magistrado Edgar Saavedra Rojas, no asistió a la sesión de Sala Plena celebrada el día dieciocho de junio de 1987, por encontrarse con excusa justificada.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY QUE APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LAS REPUBLICAS DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EN LA LEY 68 DE 1986, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SANCIONO Y PROMULGO EL PROYECTO DE LEY QUE YA HABIA SIDO SANCIONADO Y PROMULGADO COMO LEY DE LA REPUBLICA POR EL MINISTRO DE GOBIERNO, DELEGATORIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES, O SEA LA LEY ACUSADA NO TUVO TRAMITE LEGISLATIVO DISTINTO DE LA LEY 27 DE 1980 QUE FUE DECLARADA INEXEQUIBLE.

Inexequible la Ley 68 de 1986, por vicios en su formación y trámite.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 63.

Referencia: Expediente número 1558.

Acción de inexequibilidad contra la Ley 68 de 1986 "por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Actor: *Miguel Romero Gómez.*

Magistrado Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.*

Aprobada por Acta número 30

Bogotá, D. E., junio veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

Ante esta Corporación el ciudadano Miguel Romero Gómez, presentó demanda de inexequibilidad contra la Ley 68 de diciembre 14 de 1986. Admitida la demanda, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación quien emitió el concepto de rigor. Procede ahora la Corte a resolver el asunto.

II. Norma demanda

El texto de la norma acusada es del siguiente tenor:

"LEY 68 DE 1986
(diciembre 14)

"Por medio de la cual se aprueba el 'Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América' firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979.

"El Congreso de Colombia,

"D E C R E T A:

"Artículo 1° Apruébase el 'Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América' firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, cuyo texto es:

"Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América

"El gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América;

"Animados por el deseo de hacer más eficaz la cooperación entre los dos Estados para la represión de delitos, y

"Animados por el deseo de concertar un nuevo tratado para la recíproca extradición de delincuentes;

"Han convenido lo siguiente:

"Artículo 1°

"Obligación de conceder la extradición

"1. Las partes contratantes acuerdan la entrega recíproca, conforme a las disposiciones estipuladas en el presente Tratado, de las personas que se hallen en el territorio de una de las partes contratantes que hayan sido procesadas por un delito, declaradas responsables de cometer un delito, o que sean reclamadas por la otra parte contratante para cumplir una sentencia que lleve consigo la privación de la libertad, dictada por las autoridades judiciales por un delito cometido dentro del territorio del Estado requirente.

"2. Cuando el delito se haya cometido fuera del Estado requirente, el Estado requerido concederá la extradición, conforme a las disposiciones del presente tratado, si:

"a) Sus leyes disponen la sanción de tal delito en circunstancias similares, o similares, o

"b) La persona reclamada es nacional del Estado requirente y dicho Estado tiene jurisdicción para juzgarla.

"Artículo 2°

"Delitos que darán lugar a la Extradición

"1. Los delitos que darán lugar a la Extradición con arreglo al presente Tratado son:

"a) Los delitos descritos en el Apéndice de este Tratado que sean punibles según las leyes de ambas Partes Contratantes, o

"b) Los delitos que sean punibles conforme a las leyes de la República de Colombia y las leyes federales de los Estados Unidos, figuren o no en el Apéndice de este Tratado.

"2. Para lo previsto en este artículo, será indiferente el que las leyes de las partes contratantes clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo.

"3. Se concederá la extradición por un delito sujeto a la misma sólo si el delito es punible según las leyes de ambas partes contratantes con privación de la libertad por un período superior a un año. Sin embargo, cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona que haya sido condenada y sentenciada, se concederá dicha extradición únicamente si la duración de la pena que aún queda por cumplir es de un mínimo de seis (6) meses.

"4. Sujeto a las condiciones estipuladas en los párrafos 1, 2 y 3 la extradición también se concederá:

"a) Por intentar cometer un delito o participar en la comisión de un delito. También se concederá por la asociación para delinquir contemplada en la legislación colombiana y por la conspiración prevista en la legislación de los Estados Unidos de América;

"b) Por cualquier delito que dé lugar a extradición, cuando, para el reconocimiento de la jurisdicción de cualquiera de las Partes Contratantes, el transporte de personas o bienes, el uso del correo u otros medios de realizar operaciones de comercio interestatal o con el extranjero, constituye también un elemento del delito.

"5. Cuando se haya concedido la extradición por un delito extraditable, se concederá igualmente por cualquier otro delito especificado en la petición de extradición que reúna todos los requisitos para ser extraditable, salvo el previsto en el párrafo 3 de este artículo.

"Artículo 3°

"Ambito territorial de aplicación

"Para fines del presente Tratado, el territorio de una parte contratante comprenderá todo el territorio sometido a la jurisdicción de dicha parte contratante, incluyendo su espacio aéreo y sus aguas territoriales.

"Artículo 4°

"Delitos políticos y militares

"1. No se concederá la extradición cuando el delito por el que se solicita sea de carácter político o tenga conexión con un delito de carácter político, o cuando la

persona reclamada pruebe que la extradición se solicita con el exclusivo propósito de que se la juzgue o condene por un delito de ese carácter.

"2. No se concederá la extradición cuando el delito por el que se solicita sea de naturaleza estrictamente militar.

"3. Corresponde al poder ejecutivo del Estado requerido decidir sobre la aplicación de este artículo, salvo que su legislación disponga otra cosa.

"Artículo 5°

"Non bis in idem

"1. No se concederá la extradición cuando la persona reclamada haya sido juzgada y condenada o absuelta por el Estado requerido por el mismo delito que motive la solicitud de extradición.

"2. El que las autoridades competentes del Estado requerido hayan decidido no procesar a la persona reclamada por el hecho que motiva la solicitud de extradición, o suspender cualquier acción penal que se hubiere incoada, no impedirá la extradición.

"Artículo 6°

"Prescripción

"No se concederá la extradición cuando la acción penal o la aplicación de la pena por el delito que motiva la solicitud de extradición hayan prescrito según las leyes del Estado requirente.

"Artículo 7°

"Pena de muerte

"Cuando el delito por el que se solicita la extradición sea punible con la pena de muerte con arreglo a las leyes del Estado requirente, y las leyes del Estado requerido no permitan la imposición de dicha sanción por tal delito, se podrá rehusar la extradición a menos que, antes de concederse la extradición, el Estado requirente dé las garantías que el Estado requerido considere suficientes de que no impondrá la pena de muerte o de que, en caso de imponerse, no será ejecutada.

"Artículo 8°

"Extradición de nacionales

"1. Ninguna de las partes contratantes estará obligada a entregar a sus propios nacionales, pero el Poder Ejecutivo del Estado requerido podrá entregarlos si lo considera conveniente. Sin embargo, se concederá la extradición de nacionales, de conformidad con las disposiciones del presente tratado, en los siguientes casos:

"a) Cuando el delito comprenda actos que se hayan realizado en el territorio de ambos Estados con la intención de que sea consumado en el Estado requirente, o

"b) Cuando la persona cuya extradición se solicita haya sido condenada en el Estado requirente por el delito por el cual se solicita la extradición.

"2. Si la extradición no se concede de conformidad con el parágrafo 1 de este artículo, el Estado requerido someterá el caso a sus autoridades judiciales competentes con el objeto de iniciar la investigación o para adelantar el respectivo proceso, siempre que el Estado requerido tenga jurisdicción sobre el delito.

"Artículo 9º

"Tramitación de la extradición y documentos requeridos

"1. La extradición se solicitará por vía diplomática.

"2. La solicitud de extradición irá acompañada de:

"a) Documentos, declaraciones u otras pruebas que identifiquen a la persona reclamada y el lugar donde probablemente se encuentra;

"b) Una relación de los hechos;

"c) Los textos de las disposiciones legales que establezcan los elementos esenciales y la denominación del delito por el cual se solicita la extradición;

"d) Los textos de las disposiciones legales que establezcan la pena correspondiente al delito, y

"e) Los textos de las disposiciones legales relativas a la prescripción de la acción penal o de la pena correspondiente al delito.

"3. Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona que aún no haya sido condenada, deberá ir acompañada de:

"a) Una copia del auto de proceder o su equivalente emitido por un juez u otra autoridad judicial del Estado requirente;

"b) Pruebas fehacientes de que la persona reclamada es la misma a la que se refiere el auto de proceder o su equivalente, y

"c) Las pruebas que, según las leyes del Estado requerido, constituyan motivo fundado para afirmar que la persona reclamada ha cometido el delito por el que se solicita la extradición.

"4. Cuando la solicitud de extradición se refiere a una persona condenada deberá ir acompañada de:

"a) Una copia de la sentencia condenatoria dictada por un Tribunal del Estado requirente, y

"b) Pruebas que demuestren que la persona reclamada es la misma a la que se refiere la sentencia condenatoria.

"Si la persona hubiere sido declarada responsable, pero no sentenciada, la solicitud de extradición deberá, además, ir acompañada de una prueba de ello y de una copia de la orden de detención.

"Si la persona hubiere sido sentenciada, la solicitud de extradición deberá, además, ir acompañada de una copia de la sentencia y una declaración en la que se haga constar la parte de la pena que no se hubiere cumplido.

"5. Todos los documentos que deberá presentar el Estado requirente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 10 de este Tratado, serán traducidos al idioma del Estado requerido.

"6. Los documentos que acompañan la solicitud de extradición serán admitidos como medio de prueba cuando:

"a) En el caso de una solicitud proveniente de los Estados Unidos, estén firmados por un juez, un magistrado u otro funcionario judicial, legalizados por el sello oficial del Departamento de Estado y certificados por un agente diplomático o consular de la República de Colombia en los Estados Unidos, y

"b) En el caso de una solicitud proveniente de la República de Colombia, estén firmados por un juez u otra autoridad judicial y hayan sido certificados por el principal agente diplomático o consular de los Estados Unidos en la República de Colombia.

"7. El Estado requerido estudiará la documentación presentada en apoyo de la solicitud de extradición para determinar si reúne los requisitos legales, antes de someterla a las autoridades judiciales, y proveerá la representación legal para proteger los intereses del Estado requirente ante las autoridades competentes del Estado requerido.

"Artículo 10.

"Pruebas adicionales

"1. Si el Poder Ejecutivo del Estado requerido considera que las pruebas presentadas en apoyo de la solicitud de extradición de una persona reclamada no son suficientes para satisfacer los requerimientos del presente tratado, dicho Estado solicitará la presentación de las pruebas adicionales que estime necesarias. El Estado requerido podrá establecer una fecha límite para la presentación de las mismas, y podrá conceder una prórroga razonable del plazo a petición del Estado requirente, el cual expresará las razones que lo mueven a ello.

"2. Si la persona reclamada se encuentra privada de la libertad y las pruebas adicionales o la información presentada no son suficientes, o si dichas pruebas o información no se reciben dentro del plazo estipulado por el Estado requerido, será puesta en libertad. No obstante, dicha libertad no impedirá la presentación de una solicitud de extradición posterior por el mismo delito, y la persona reclamada podrá ser detenida nuevamente. A este respecto, bastará con que en la solicitud subsiguiente se haga mención de los documentos previamente presentados, siempre que estén disponibles al momento de incoarse el nuevo procedimiento de extradición.

"Artículo 11.

"Detención provisional

"1. En caso de urgencia, cualquiera de las partes contratantes podrá solicitar, por vía diplomática, la detención provisional de una persona procesada o condenada. La petición deberá contener la identificación de la persona reclamada, una declaración de intención de presentar la solicitud de extradición de la persona reclamada y

una declaración de la existencia de una orden de detención o un veredicto o sentencia condenatorios contra dicha persona.

"2. Al recibir dicha solicitud, el Estado requerido tomará las medidas necesarias para asegurar la detención de la persona reclamada.

"3. La detención provisional se dará por terminada si, dentro de un plazo de sesenta días a partir de la fecha de la aprehensión de la persona reclamada, el Poder Ejecutivo del Estado requerido no ha recibido la solicitud oficial de extradición y los documentos mencionados en el artículo 9º.

"4. La terminación de la detención provisional con arreglo al párrafo 3º no impedirá la extradición de la persona reclamada si la solicitud de extradición y los documentos de pruebas mencionados en el artículo 9º se entregan en una fecha posterior.

"Artículo 12.

"Resolución y entrega

"1. El Estado requerido comunicará al requirente, lo antes posible, su resolución sobre la solicitud de extradición.

"2. El Estado requerido consignará las razones de la denegación total o parcial de la solicitud de extradición.

"3. Si la extradición ha sido concedida, la entrega de la persona reclamada se efectuará dentro del plazo establecido por las leyes del Estado requerido. Las autoridades competentes de las partes contratantes acordarán la fecha y lugar de la entrega de la persona reclamada.

"4. Si las autoridades competentes han emitido un mandamiento o una orden de extradición contra una persona reclamada y ésta no ha sido retirada del territorio del Estado requerido dentro del plazo establecido por las leyes de dicho Estado, o dentro de 60 días de comunicada la orden de extradición al Estado requirente si las leyes del Estado requerido no establecen dicho plazo, será puesta en libertad y, posteriormente, se podrá rehusar su extradición por el mismo delito.

"Artículo 13.

"Entrega aplazada

"Una vez concedida la extradición de una persona, el Estado requerido podrá aplazar su entrega, cuando la persona esté sometida a un proceso o se halle cumpliendo condena en el territorio del Estado requerido por un delito diferente del que ha dado lugar a la extradición, hasta que concluya el proceso o cumpla la totalidad de la pena que le pueda ser o le haya sido impuesta.

"Artículo 14.

"Solicitudes de extradición presentadas por varios Estados

"El Poder Ejecutivo del Estado requerido, al recibir solicitudes de la otra parte contratante y de un tercer Estado o de otros estados para la extradición de la misma

persona, bien sea por el mismo delito o por distintos delitos, decidirá a cual de los Estados requirentes entregará dicha persona.

"Artículo 15.

"Reglas de especialidad

"1. La persona extraditada en virtud del presente Tratado no será detenida, juzgada o sancionada en el territorio del Estado requirente por un delito distinto de aquél por el cual se ha concedido la extradición, ni será objeto de extradición por dicho Estado a un tercer Estado, a menos que:

"a) Haya abandonado el territorio del Estado requirente después de su extradición y haya regresado a él voluntariamente;

"b) No haya abandonado el territorio del Estado requirente dentro de los 60 días después de tener libertad para hacerlo, o

"c) El Poder Ejecutivo del Estado requerido haya consentido su detención, juicio o sanción por otro delito; o su extradición a un tercer Estado siempre que se observen los principios del artículo 4 de este Tratado.

"Estas disposiciones no serán aplicables a los delitos cometidos después de la extradición.

"2. Si en el curso del procedimiento se alterare la denominación del delito que motivó la extradición de una persona, ésta podrá ser procesada o sentenciada siempre que:

"a) El delito, según su nueva denominación, legal, esté basado en los mismos hechos que figuran en la solicitud de extradición y sus documentos de apoyo, y

"b) El acusado puede ser condenado a una pena privativa de la libertad que no exceda la prevista para el delito que motive la extradición.

"Artículo 16.

"Extradición simplificada

"Si las leyes del Estado requerido no prohíben específicamente la extradición de la persona reclamada, y siempre y cuando dicha persona acceda por escrito y de manera irrevocable a su extradición después de haber sido informada personalmente por un juez o magistrado competente acerca de sus derechos a un procedimiento formal y de la protección que éste le brinda, el Estado requerido podrá conceder su extradición sin que se lleve a cabo el procedimiento formal.

"Artículo 17.

"Entrega de elementos, instrumentos, objetos y documentos

"1. En la medida en que lo permitan las leyes del Estado requerido y sin perjuicio de los derechos de terceros, que serán debidamente respetados, todos los elementos, instrumentos, objetos de valor o documentos concernientes al delito, se hayan usado o nó en la comisión del mismo, o que de cualquier otro modo revistan el

carácter de piezas de convicción, podrán ser entregados una vez concedida la extradición, aunque ésta no puede hacerse efectiva debido a la muerte, desaparición o evasión del acusado.

"2. El Estado requerido podrá exigir del Estado requirente como condición para la entrega, garantías satisfactorias de que los elementos, instrumentos, objetos de valor o documentos serán devueltos al Estado requerido tan pronto como sea posible o cuando concluya el proceso penal.

"Artículo 18.

"Tránsito

"1. El derecho a transportar por el territorio de una de las partes contratantes a una persona entregada por un tercer Estado a la otra parte contratante, será concedido cuando se solicite por vía diplomática, siempre que no haya razones de orden público que se opongan a ello.

"2. La parte a la que ha sido entregada la persona, reembolsará a la parte a través de cuyo territorio se transporta a tal persona, cualquier gasto que esta última haya hecho con motivo de dicho transporte.

"Artículo 19.

"Gastos

"Los gastos concernientes a la traducción de documentos y al transporte de la persona reclamada correrán a cargo del Estado requirente. Todos los demás gastos concernientes a la solicitud y al procedimiento de extradición recaerán sobre el Estado requerido. La parte requerida no presentará a la parte requirente ninguna reclamación pecuniaria derivada del arresto, custodia, interrogación y entrega de las personas reclamadas de acuerdo con las disposiciones de ese tratado.

"Artículo 20.

"Alcance de la aplicación

"Este Tratado se aplicará a los delitos previstos en el artículo 2°, cometidos antes y después de la fecha de entrada en vigor del presente tratado. Sin embargo, no se concederá la extradición por hechos realizados antes de dicha fecha, que según las leyes de ambas partes contratantes no constituían delito al momento de su comisión.

"Artículo 21.

"Ratificación, entrada en vigor, denuncia

"1. El presente Tratado estará sujeto a su ratificación; los instrumentos de ratificación serán canjeados en Washington tan pronto como sea posible.

"2. El presente Tratado entrará en vigor en la fecha de canje de los instrumentos de ratificación.

"3. Al entrar en vigor este Tratado quedarán derogadas la Convención de Extradición Recíproca de Delincuentes, firmada el 7 de mayo de 1888 y la Conven-

ción Adicional de Extradición, firmada el 9 de septiembre de 1940, entre la República de Colombia, y los Estados Unidos de América; pero si un procedimiento de extradición está pendiente en el Estado requerido en la fecha en que el presente Tratado entre en vigor, continuará sujeto a los Tratados anteriores.

"4. Cada una de las partes contratantes podrá dar por terminado este Tratado en cualquier momento, previa comunicación a la otra parte contratante y la terminación tendrá efecto seis meses después de la fecha de recepción de dicha comunicación.

"En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han suscrito el presente Tratado.

"Hecho en Washington, en duplicado, en los idiomas español e inglés siendo ambos textos igualmente auténticos, el catorce de septiembre de 1979.

"Por el Gobierno de la República de Colombia,

"(Firma ilegible)

"Por el Gobierno de los Estados Unidos de América,

"(Firma ilegible)

"Apéndice

"Lista de delitos

"1. Asesinatos: agresión con intención de cometer asesinato.

"2. Homicidio.

"3. Lesiones dolosas; ocasionar graves daños corporales.

"4. Violencia carnal; abusos deshonestos.

"5. Actos sexuales ilícitos cometidos con menores de la edad especificada en las legislaciones penales de cada una de las partes contratantes.

"6. Abandono deliberado de un menor u otro familiar a cargo, cuando la vida de dicho menor o familiar a cargo corra o pueda correr peligro.

"7. Secuestro con o sin rescate; detención ilegal.

"8. Extorsión; chantaje.

"9. Robo; robo con escalamiento o fractura; hurto.

"10. Estafa, que incluye la obtención de bienes, dinero o valores por medio de imposturas, defraudando al público o a cualquier persona con engaños o falsedades u otros medios fraudulentos, aun cuando dichos engaños, falsedades o medios fraudulentos constituyan o no impostura.

"11. Desfalco, abuso de confianza, peculado.

"12. Cualquier delito relativo a la falsificación o a la falsedad.

"13. Receptación o transporte de dinero, valores u otros bienes, a sabiendas de que han sido obtenidos ilícitamente.

"14. Delito de incendio.

"15. Daños intencionales cometidos contra la propiedad.

"16. Delitos que pongan en peligro la seguridad pública por medio de explosión, inundación u otros medios destructivos.

"17. Piratería, según la definen las leyes o el derecho de gentes; motín o rebelión a bordo de un avión o nave, contra la autoridad del capitán o comandante de dicho avión o nave.

"18. Apoderamiento ilícito de barcos o aviones.

"19. Todo acto intencional que atente contra la seguridad de las personas que viajen en tren, avión, barco, omnibús u otro medio de transporte.

"20. Delitos relativos a la legislación sobre armas de fuego, municiones, explosivos, dispositivos incendiarios o material nuclear.

"21. Delitos contra las leyes relativas al tráfico, la posesión, la producción o la elaboración de estupefacientes, cannabis, drogas alucinógenas, cocaína y sus derivados u otras substancias que producen dependencia física o psíquica.

"22. Delitos contra la salud pública como la elaboración o el tráfico ilícitos de productos químicos o substancias nocivas para la salud.

"23. Cualquier delito relativo a las leyes o régimen de importación, exportación o tránsito de bienes, personas, artículos o mercancías incluyendo las infracciones relativas a la legislación de aduanas.

"24. Delitos relativos a la deliberada evasión del pago de impuestos y derechos.

"25. Proxenetismo.

"26. Cualquier delito relativo al falso testimonio, perjurio o perjurio por soborno.

"27. Afirmaciones falsas ante una entidad oficial o un funcionario público.

"28. Delitos contra las leyes relativas a la administración u obstrucción de la justicia.

"29. Concusión y cohecho, que comprenden al que solicita, al que ofrece y al que acepta la dádiva.

"30. Delitos relativos a las leyes que regulan la administración pública o abusos de la autoridad pública.

"31. Delitos relativos a la legislación sobre control de compañías, corporaciones u otras personas jurídicas.

"32. Delitos relativos a la legislación sobre control de monopolios particulares y competencia desleal.

"33. Delitos contra la economía nacional, o sea delitos relativos a los productos básicos, valores o intereses similares, incluidos su emisión, registro, comercialización, negociación o venta.

"34. Delitos relativos a la legislación sobre quiebra.

"35. Cualquier delito relativo a la legislación sobre comercio internacional y transferencia de fondos.

"Rama Ejecutiva del Poder Público.

"Presidencia de la República.

"Bogotá, D. E., octubre 1979.

"Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

"(Fdo.)

JULIO CESAR TURBAY AYALA

"El Ministro de Relaciones Exteriores

"(Fdo.) *Diego Uribe Vargas.*

"Es fiel copia del texto original del 'Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América', firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"(Fdo.)

"Julio Londoño Paredes

"Secretario General

"Bogotá, D. E., octubre de 1979.

"Artículo 2° Esta ley entrará en vigencia una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en relación con el Tratado que por esta misma Ley se aprueba.

"Dada en Bogotá, D. E., a los catorce días del mes de octubre de mil novecientos ochenta.

"El Presidente del Senado de la República,
"José Ignacio Díaz Granados Alzamora

"El Presidente de la Cámara de Representantes,
"Hernando Turbay Turbay

"El Secretario General del Senado de la República,
"Amaury Guerrero

"El Secretario General de la Cámara de Representantes,
"Jairo Morera Lizcano

"República de Colombia-Gobierno Nacional.

"Bogotá, D. E., 3 de noviembre de 1980.

"Publíquese y ejecútese.

"El Ministro de Gobierno, Delegatorio de Funciones Presidenciales,
"Germán Zea Hernández

"El Ministro de Relaciones Exteriores, Encargado,
"Julio Londoño Paredes.

"El Ministro de Justicia,
"Felio Andrade Manrique.

"República de Colombia. Gobierno Nacional.

"Publíquese y ejecútese.

"Bogotá, D. E., 14 de diciembre de 1986.

"En la fecha se sanciona el proyecto de la Ley número 76 de 1979 (Senado) y número 168 de 1979 (Cámara), 'por medio de la cual se aprueba el 'Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América' firmado el 14 de septiembre de 1979'. Esta determinación ha sido adoptada en acatamiento a la sentencia proferida por la honorable Corte Suprema de Justicia el 12 de diciembre de 1986 (expediente número 5-R).

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Gobierno, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,

"Fernando Cepeda Ulloa.

"El Ministro de Justicia,

"Eduardo Suescún Monroy".

III. Fundamentos de la demanda

A. El actor considera como normas violadas los artículos 118, numeral 7° y 120, numeral 2° de la Constitución Nacional.

B. En sentir del actor, la Ley acusada es violatoria del artículo 118 numeral 7° de la Constitución "porque el Presidente de la República sancionó una ley cuya existencia había desaparecido". Además, "la interpretación que el Gobierno Nacional tiene sobre el sentido y alcance del fallo de la H. Corte es equivocada porque lo que la Corporación hizo fue sencillamente declarar la inexequibilidad de la Ley 27 de 1980 en su totalidad, como un conjunto de normas y no declaró la pugna con la Constitución de una parte del proceso formativo de esa misma Ley".

Igualmente manifiesta el actor que el Presidente de la República sancionó nuevamente y promulgó una Ley que para el orden jurídico no existía, en quebranto

del numeral 2° del artículo 120 de la Carta, ya que se trató "de una ley que aunque tenía formalmente la apariencia de tal no lo era, simplemente porque nunca existió, porque la Corte con su sentencia la había hecho desaparecer del orden jurídico nacional".

IV. Concepto del Procurador General de la Nación

El Procurador General de la Nación considera que la Ley 68 de 1986 es inexequible y solicita a la Corte Suprema de Justicia que así lo declare. Los fundamentos de su solicitud son los siguientes:

1. En primer lugar sostiene que en la formación de la Ley objeto de examen no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 81 de la Constitución Nacional, salvo la sanción pues la norma carece de proyecto, de los debates y de las aprobaciones en cada cámara como lo exige la Carta.

Para el concepto fiscal el proceso de formación de las leyes es unitario, complejo e inescindible aunque se compone de diversos actos o etapas de rigurosa ejecución, de tal suerte que la falta de alguno de ellos vicia de manera irreparable a la ley porque la Constitución no prevé la forma de subsanar las omisiones cometidas en él, una vez ésta se encuentra publicada.

Así mismo, manifiesta que la sanción del gobierno y la promulgación del texto como ley, aunque es la última etapa en su formación, de conformidad con los artículos 81 y 85 de la Carta, es uno de los requisitos esenciales de ese proceso no menos importante que los primeros ya que estos artículos constitucionales no hacen ninguna diferencia entre las obligaciones formales allí consagradas.

2. Sobre los alcances de la declaratoria de inexequibilidad que profiere la Corte, sostiene que estos dependen de cómo fue concebida la acción pública de inconstitucionalidad y de su estructuración en nuestro ordenamiento. Esta acción persigue un fin de caracter eminente jurídico que consiste en eliminar el orden normativo una decisión política materializada en ley o en decreto, precisamente porque contraría una o varias disposiciones constitucionales.

La acción que consagra el artículo 214 de la Constitución fue estructurada y concebida para la defensa de la Constitución y no busca corregir sino hacer perder la vigencia de la norma afectada por el vicio; así, la decisión de la Corte, cuando se le confía la guarda de la integridad de la Constitución es de naturaleza definitiva, preclusiva e inmutable, pues tiene carácter de cosa juzgada absoluta.

Sostiene además el Procurador que en "apoyo de lo anterior bastaría observar la consecuencia que conforme al artículo 90 de la Carta se impone cuando la Corte decide definitivamente sobre la exequibilidad o inexequibilidad de los proyectos que el Ejecutivo objeta por violentar la integridad de la Constitución". Como en este evento se dispone archivar el proyecto no está prevista la reconstrucción del trámite o la repetición de los actos formalmente viciados o la corrección del contenido en cuanto aparezca contrario a la Carta, con mayor razón será insubsanable el vicio cuando su declaratoria sea consecuencia de una acción ciudadana.

La sentencia de la Corte proferida el 12 de diciembre de 1986, declaró la inexequibilidad de la Ley 27 de 1980, tuvo su origen en un defecto de forma consistente en no haberse ejecutado la sanción de la ley con arreglo a la Constitución como lo exige el artículo 118-7° porque falta uno de los requisitos señalados en el proceso de su formación como lo señala el artículo 81 de la Carta. El efecto de esta declaratoria no es parcial sino que cubre a toda la Ley 27 de 1980 y su consecuencia no puede ser otra que el hacerla desaparecer como ley, por lo que, en relación con el asunto materia de este proceso "es apenas natural y lógico que el Presidente de la República tampoco pueda sancionar un proyecto de ley que no ha cumplido los requisitos previstos en el artículo 81 de la Carta...".

V. Consideraciones de la Corte

a) *Competencia*

Ha dicho la Corte, en su más reciente jurisprudencia, que es competente para conocer las demandas de inexequibilidad, en cualquier tiempo, contra las leyes aprobatorias de tratados internacionales cuando se refieran a los vicios de trámite en la formación de la ley, que es lo que ocurre en el caso de autos (sentencia de 12 de diciembre de 1986).

Como la presente demanda se reduce a acusar la Ley 68 de 1986 por un vicio de forma, se procede al estudio correspondiente.

Violación de los artículos 118, numeral 7° y 120, numeral 2° de la Constitución Nacional.

Dice el actor que la Ley 68 de 1986 corresponde en su formación o trámite legislativo al mismo de la Ley 27 de 1980, que fue declarada inexequible en sentencia del 12 de diciembre de 1986 por la Corte Suprema de Justicia "en cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República", porque los proyectos de Ley número 76 de 1979 del Senado y número 168 de 1979 de la Cámara, son o constituyen en ambos casos el soporte que permitió la sanción de las dos leyes. Agrega que el Presidente de la República al sancionar la Ley 68 de 1986 tomó en cuenta una ley que habría desaparecido como consecuencia de la sentencia de inexequibilidad, que comprende toda la etapa de formación de la misma por lo que la nueva sanción de la ley a la que simplemente se le cambió el número –de 27 de 1980 pasó a ser 68 de 1986–, es también inconstitucional y así debe declararlo la Corte.

b) *El Trámite de la Ley 68 de 1986*

Como se aprecia en el "Diario Oficial" número 37.733 del 14 de diciembre de 1986, el texto de la ley acusada es el mismo que corresponde a la Ley 27 de 1980. La actuación oficial consta en los siguientes términos:

"República de Colombia. Gobierno Nacional

"Publíquese y ejecútese.

"Bogotá, D. E., 14 de diciembre de 1986.

"En la fecha se sanciona el proyecto de ley Número 76 de 1979 (Senado) y número 168 de 1979 (Cámara), 'por medio de la cual se aprueba el 'Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América' firmado el 14 de septiembre de 1979'. Esta determinación ha sido adoptada en acatamiento a la sentencia proferida por la honorable Corte Suprema de Justicia el 12 de diciembre de 1986 (expediente número 5-R).

"....."

En la Ley 68 de 1986, el Presidente de la República sancionó y promulgó el proyecto de ley que ya había sido sancionado y promulgado como ley de la República por el Ministro de Gobierno, Delegatario de funciones presidenciales, el 3 de noviembre de 1980 y que lleva el número 27 de 1980.

Se concluye de lo anterior, que el proyecto de ley que se sancionó como Ley No. 68 de 1986 es el mismo que se tramitó y aprobó en ambas cámaras legislativas y que se sancionó y promulgó el 3 de noviembre de 1980 como Ley 27 de 1980; así la ley acusada no tuvo un trámite legislativo distinto del de la Ley 27 de 1980 que fue declarada inexequible por esta Corte en el fallo de 12 de diciembre de 1986.

c) *El Proceso de Formación de las Leyes*

Es preciso tener en cuenta el texto del artículo 81 de la Constitución Nacional que dice así en su parte pertinente:

"Artículo 81. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:

"1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva.

"2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara, salvo lo dispuesto en el artículo 80.

"3. Haber sido aprobado en cada cámara, en segundo debate.

"4. Haber obtenido la sanción del gobierno.

"....."

La jurisprudencia de la Corte ha examinado el tema en diversas oportunidades. En sentencia de 25 de mayo de 1981 dijo:

"...el Título VII 'De la formación de las leyes' –que prosigue en orden lógico al 'de la reunión y atribuciones del Congreso'– regula desde la iniciativa de las leyes hasta su fórmula inicial, es decir, todo el proceso que ha de seguirse en la elaboración de las leyes, específicamente en los artículos 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89 y 92, preceptos dentro de los cuales se halla la sanción de la ley por parte del Presidente de la República, y por medio de la cual este atestigua sobre la idoneidad del acto y la regularidad en cuanto al cumplimiento de los trámites cumplidos en su expedición. Etapa última que puede considerarse como participación del Ejecutivo en la tarea legislativa del Congreso, como la promulgación, colaboración del primero con el segundo, al poner la ley en condiciones de su conocimiento y ejecución".

"Y sobre la importancia y el alcance de la "sanción constitucional", dijo la Corte en sentencia de junio 23 de 1976:

"La sanción es elemento esencial, requisito que pone fin al proceso formativo de la ley, la cual, por adquirir así su carácter de soberana expresión de la voluntad del legislador, gana desde ese punto eficacia, o como dice la disposición copiada, 'será ley'" (Subraya el Despacho).

De todo lo cual se concluye que la sanción es un elemento o requisito esencial que integra la voluntad legislativa, en los términos del artículo 81 de la Carta. La sanción constitucional corresponde al proceso de formación de la ley por mandato de la norma suprema, por lo cual si resulta viciada no puede revestirse a proyecto el expediente legislativo cuando ese vicio es declarado por sentencia de inexequibilidad de la Corte. La inexequibilidad de la ley apareja no sólo la desaparición de ella del ordenamiento jurídico, en este caso por un vicio en su sanción constitucional, sino que afecta también todo el proceso formativo de la ley, por falta de un requisito esencial en tal proceso, como evidentemente lo señala el citado artículo 81.

En este caso de la sanción constitucional el constituyente asignó al Presidente de la República una función colegisladora, en el propio proceso formativo de la ley, como en tantos otros casos en que se produce la colaboración armónica entre la Rama Legislativa y la Ejecutiva.

De modo que por este aspecto prospera el cargo de inexequibilidad, en cuanto que es cierto que la sentencia del 12 de diciembte de 1986 recayó sobre la totalidad de la Ley 27 de 1980, por vicio de forma en su sanción, y no solamente sobre este último ciclo del proceso formativo de la ley que le hubiera permitido al Presidente de la República revivir con una nueva sanción la ley declarada inexequible.

d) *Alcance del fallo de inexequibilidad*

Es sabido que no existe un texto expreso de la Constitución que defina los alcances del fallo de inexequibilidad de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual ha sido tarea de la doctrina y de la jurisprudencia nacionales el señalamiento de tales efectos jurídicos. Es sabido así mismo, que existen varias posiciones doctrinarias sobre el particular, y que tanto la Corte como el Consejo de Estado, en notables jurisprudencias, han examinado esta delicada cuestión.

El ex magistrado de esta Corporación y eminente tratadista doctor Eustorgio Sarria resume la jurisprudencia sobre este particular en la siguiente forma:

"a) *Declaración de inexequibilidad y abrogación de la norma.* Su equiparación no es aceptable entre otras, por las siguientes razones:

"j) La Constitución sólo adscribe a la Corte Suprema de Justicia la función de la guarda de su integridad, función jurisdiccional, y en ningún caso facultad normativa; ésta corresponde al Congreso, como órgano principal de la rama legislativa del poder; la sentencia de inexequibilidad se limita a la declaración pertinente, sin que le sea dado a la Corte proveer o sustituir el precepto que deja de regir;

"ii) La pretendida equiparación conduciría al absurdo jurídico del vacío normativo, puesto que si la Corte no puede dictar la disposición que sustituya a la que

declara inexequible, y las leyes abrogadas no reviven sino en virtud de la reproducción de su texto en una nueva ley, fatalmente desaparece toda regulación sobre la materia.

"b) *Sentencia de inexequibilidad y declaración de nulidad.* Conforme a esta teoría, la sentencia de inexequibilidad como la declaración de nulidad eliminan del ámbito jurídico el acto respectivo, con efecto absoluto hacia el futuro, o sea que aquél se reputa inexistente a partir del fallo; y respecto al pasado, acaece igual evento. No es difícil imaginar la serie de conflictos que la praxis de esta concepción suscitaría; además, su consecuencia inmediata no sería otra que la de inestabilidad jurídica, adversa al ordenamiento institucional y al regular ejercicio de las actividades públicas y privadas.

"c) *Efectos específicos de la sentencia de inexequibilidad.* Esta teoría, al parecer la más viable, descansa y se desarrolla sobre la base de una presunción general de conformidad de la ley con la Constitución, y por ende de su imperio; o sea que, en abstracto, se le considera acorde con ella y por lo mismo *ejecutable* hasta el momento de la decisión jurisdiccional en contrario. "Aclara la opinión precedente, la del Consejo de Estado del siguiente tenor: 'El fenómeno de la vigencia simultánea del precepto que intrínsecamente pueda adolecer de inconstitucionalidad y de la norma de la Carta en contrario, no entraña contradicción del orden jurídico, ni quebranto de su unidad, como dice Kelsen, por la fuerza que le comunica la norma superior a la inferior en una especie de crédito general de conformidad con ella, al cual sólo puede poner fin la sentencia de inexequibilidad, vale decir la decisión por la cual se dispone, que la segunda *no puede ser ejecutada ni aplicada en lo sucesivo,* así sea en relación con situaciones surgidas o creadas bajo su vigencia" (sentencia de 22 de mayo de 1974. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección I).

".....

"En armonía con lo expuesto, se definen las siguientes reglas que gobiernan los efectos jurídicos del fallo de inexequibilidad:

"Primera. Son *erga omnes,* es decir, se refieren a todas las personas y situaciones; a la inversa de lo que sucede con los fallos emanados de la aplicación del artículo 215 de la Constitución, que únicamente comprenden a las partes, en determinado negocio.

"Segunda. Son *absolutos,* respecto de todas las disposiciones constitucionales. En consecuencia no se puede acusar una ley varias veces ante la Corte cuando ha habido decisión de fondo (La Corte en jurisprudencia que adelante se reproduce, hace distinción, *en un caso excepcional,* entre fallo *absoluto* y fallo *definitivo.*

"Tercera. La declaración de inexequibilidad impide seguir 'ejecutando' la norma respectiva. En relación con sus efectos pretéritos debe estarse a lo ya dicho.

"Cuarta. La interpretación constitucional que hace la Corte obliga a toda persona u órgano del Estado. En consecuencia, no puede ser desconocida, controvertida o abrogada por éstos.

"Quinta. La Corte, en ejercicio de la jurisdicción constitucional, debe propender por la realización del 'Estado de Derecho Moderno', o sea el que garantice,

mediante su organización jurídica, la libertad humana cimentada en la seguridad económica, social y cultural".

En la sentencia de 12 de diciembre de 1986, la Corte pronunció la siguiente decisión:

"Declarar INEXEQUIBLE la Ley 27 de noviembre 3 de 1980, por la cual se aprobó el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, firmada en Washington el 14 de septiembre de 1979, en cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República".

Tal inexequibilidad se fundó en el vicio de forma consistente en que no se llevó a cabo la sanción de la ley con arreglo a la Constitución, en los términos previstos en el artículo 118-7.

Dicha inexequibilidad comprende el texto de la Ley 27 de 1980, y no sólo una de las partes –la sanción– en forma tal que dicha ley desapareció del ordenamiento jurídico.

Sobre el mismo tema de los efectos del fallo de inexequibilidad, en sentencia de 9 de mayo de 1983 el Consejo de Estado hace estas precisiones:

"Dentro del contexto de una sana lógica jurídica los fallos de inexequibilidad, proferidos por la Corte Suprema de Justicia, hacen desaparecer la norma jurídica, objeto del fallo, con un efecto absoluto hacia el futuro.

"Pero la extinción que se deriva de la inexequibilidad, dada su naturaleza específica distinta de la derogatoria, conduce a que recobre vigencia la norma que regía con anterioridad a la expedición del acto declarado inexequible y que ocasionó su aparente desaparición de la vida jurídica".

La Corte por su parte, en sentencia de 15 de junio de 1981, hace las siguientes precisiones que determinan muy bien para este caso el alcance del fallo de inexequibilidad, cuyo objeto es una ley y no un proyecto de ley:

"El acto no se ha terminado de formar o de perfeccionar (v. gr.: un proyecto de ley, una ley no sancionada, un decreto sin las correspondientes firmas, etc.)., su confrontación de exequibilidad constitucional se hace imposible, y la demanda que en esa prematura eventualidad se presenta sólo puede ocasionar un proveimiento de inhibición por parte de la Corte. La razón es obvia: la Corte no puede examinar la 'validez' de una norma que todavía 'no vale', por hallarse apenas en vía de formación o perfeccionamiento, y que, por ello, aún no forma parte, como regla con validez absoluta, del repertorio de normas en pleno vigor que integran el acervo del ordenamiento".

Entonces, en los términos de este fallo, si "la Corte no puede examinar la 'validez' de una norma que todavía no vale, por hallarse apena en vía de formación o de perfeccionamiento", fluye como conclusión lógica que el Presidente de la República no puede sancionar constitucionalmente un proyecto de ley que no ha cumplido los requisitos de formación ordenados por el 81 de la Carta.

En efecto la Corte, en su sentencia de 12 de diciembre de 1986, declaró inexequible la Ley 27 de 1980, como una unidad jurídica inescindible, y no una

parte de ella, por un vicio de forma. No importa que en su parte motiva haya dicho que "es necesario que el proyecto pase al Presidente para que se cumplan los trámites que aún faltan para que sea ley de la República", considerando que llevó al Gobierno a estimar que con una nueva sanción revivía la Ley.

La sugerencia que puede desprenderse del párrafo transcrito, no implicaba una orden que el Juez Constitucional le diera al Ejecutivo, sino que meramente formó parte de la motivación de la sentencia, y no tuvo alcance distinto del que la Corte le da al término motivar, según el cual esta expresión significa "dar, manifestar, expresar o explicar la causa que tuvo para decidir" (sentencia de julio 28 de 1977); pero sin que tal motivación forme parte de la decisión de la sentencia (parte dispositiva), por ser simple elemento de convicción que, como la misma corporación lo ha dicho, "pudiendo ser erróneo en ocasiones, no afecta sin embargo la decisión misma" (Gaceta Judicial Tomo XXV, p. 250).

De todo lo cual es dable concluir que tal sugerencia no obliga al Juez hacia el futuro, motivo por el cual sí se convence de que es errónea "debe tener la suficiente entereza moral para recoger el error y modificar el criterio interpretativo, según lo declaró la Sala unitaria de esta Corporación en decisión del 21 de abril de 1955, con ponencia del Magistrado doctor Néstor Pineda Pineda. Abundando en este criterio la Corte tiene establecido de antigua data que "toda sentencia tiene una parte motiva y una resolutiva, que forman una unidad, en que la segunda no es ni puede ser una consecuencia de la primera. La parte resolutiva es la que vincula, o mejor, la que produce efectos en el mundo jurídico; por eso todo motivo que no vaya enderezado a la decisión, excede del ministerio encomendado al juzgador. En tal virtud, en un fallo se debe exponer todo lo necesario para la resolución final, pero nada más que lo necesario o conducente" (9 de diciembre de 1955, G.J., t. LXXXI, p. 597).

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y de acuerdo con él,

Resuelve:

Declarar INEXEQUIBLE la Ley 68 de 1986, por vicios en su formación o trámite.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente (Con salvamento de voto), *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Ramón Zúñiga Valverde, Jorge Carreño Luengas* (Con salvamento de voto), *Guillermo Dávila Muñoz* (Con salvamento de voto), *Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz (Con salvamento de voto), Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel* (Con salvamento de voto), *Oscar Peña Alzate,* Conjuez, *Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome* (Con salvamento de voto), *Héctor Marín Naranjo* (Con salvamento de voto), *Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez*

Escobar (Con salvamento de voto), *Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas* (Con salvamento de voto), *Jesús Vallejo Mejía* (Con salvamento de voto), *Alfonso Suárez de Castro,* Conjuez.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR:

Que los magistrados Gustavo Gómez Velásquez y Lisandro Martínez Zúñiga, participaron en la discusión y votaron el proyecto de sentencia en este proceso según consta en las actas Nos. 24, de mayo 28 de 1987 y 25 de junio, 4 del mismo año, pero no firmaron esta sentencia, por cuanto no estuvieron presentes en la sesión de Sala Plena del jueves 25 de junio de 1987, por encontrarse en comisión especial fuera del país. En la sesión del 25 de junio del año en curso votó el Conjuez Dr. Alfonso Suárez de Castro y se suscribió la sentencia por los restantes Magistrados.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

EXPLICACIÓN DEL VOTO DEL CONJUEZ ALFONSO SUÁREZ DE CASTRO

En lo atañadero a la competencia, como Conjuez dirimente del empate presentado en la Corte, el 3 de noviembre de 1983 sostuve la tesis de la incompetencia de la Corte para conocer de acciones de inconstitucionalidad contra las leyes aprobatorias de tratados públicos. Hoy continúo compartiendo esa tesis.

Sin embargo, la Corte resolvió su competencia en cuanto a la forma en fallo de diciembre 12 de 1986 y ahora hay unanimidad en lo concerniente a la adopción de la competencia, lo que importa que, por ya decidida, no es materia acerca de la cual me competa pronunciarme.

La antinomia que hallan algunos entre la aserción de la parte motiva: "es necesario que el proyecto pase al Presidente para que se cumplan los trámites que aún faltan para que sea ley de la República" y la parte resolutiva: "Declarar inexequible la ley 27 de noviembre 3 de 1980, por la cual se aprobó el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, en cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República", produjo estos hechos:

1. El señor Presidente de la República acató la sentencia dizque sancionando "nuevamente la ley" y promulgándola.

2. Tal nueva sanción el señor Presidente la realizó en la Ley 68 de 1986.

3. La Ley 68 de 1986 se forma trasladando el tenor de la Ley 27 de 1980 tomado del "ejemplar original que reposa en los archivos de la Presidencia de la República".

4. El número 68 correspondiente a 1986, surge del orden de sanción de las leyes proferidas por el Congreso en 1986 y sancionadas por el Presidente.

De estos hechos emergen estas circunstancias:

a) La Ley 68 de 1986 (diciembre 14), en sentido substancial o material, en su contenido, corresponde a la propia Ley 27 de 1980 (noviembre 3);

b) La numeración y año de una y otra son diferentes;

c) La Ley 68 de 1986 no emana del Congreso de ese año;

ch) La Ley 27 de 1980, al momento de ser trasladada, estaba declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia "en cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República".

La concatenación de los hechos y circunstancias precedentes imponen las siguientes consideraciones:

La pretendida identidad de la Ley 27/80 y la supuesta 86/68 no es válida, porque cada ley debe ser numerada en el año de su expedición y, por consiguiente, nada tienen que ver una y otra, sin embargo de su igualdad substancial o material, trasunto la segunda de la primera, porque la Ley debe numerarse en el año en que se dictó.

En efecto, la Ley 1ª de 1873 (febrero 21), "sobre numeración i cita (sic) de las leyes", no derogada ni expresa ni tácitamente, dispone en su artículo 2º: "Las leyes que el Congreso expida en cada año, serán numeradas de modo que las de cada uno formen una serie ordinal que comience por el número 1; y la cita de ellas se hará así: 'Lei 1 (2 y c.)' "de tal año".

El artículo 46 del C. de R. P. y M., idéntico al 47 de la Ley 149 de 1888, manda en su artículo 46, en lo pertinente: "Las leyes se citan por su número, el año en que se expidieron y la materia de que tratan...".

La doctrina del Consejo de Estado, consulta de 20-IV-65, Sala de Negocios Generales, consejero informante Dr. Guillermo González Charry es:

"Se hace referencia, para efectos de la nomenclatura, exclusivamente a la actividad del legislador al cumplir su función de dictar las leyes, *sin tener en cuenta la fecha de la sanción ejecutiva.* Habida consideración de que tal función debe cumplirse, según mandato constitucional, dentro de las sesiones ordinarias o extraordinarias, y de que particularmente las primeras se llevan a cabo dentro de fechas ciertas del año, se comprende que el legislador haya tomado esos elementos reales para disponer cómo deben señalarse, indicarse o citarse los actos de carácter general expedidos por el Congreso. Así, bien puede ocurrir que por razones especiales, el Presidente no alcance a impartir la sanción ejecutiva a una ley dentro del mismo año en que se dictó por el Congreso, sin que por esto pueda considerarse que la ley así sancionada corresponde a un año distinto del que fue dictada" (subrayado fuera de texto).

Por lo tanto, no es pertinente tratar de identificar una ley dictada por el Congreso y numerada en el año de su expedición, con otra ley emanada del Presidente de la República y numerada en año diverso de la primera.

Por si lo dicho fuese poco, agrégase que la Ley 68/86 no ha sido dictada por el Congreso, no cumple requisito alguno, salvo la pretensa sanción, de los exigidos por el artículo 81 de la Constitución Política para ser ley, sin que la equipare a la 27/80 ni

purgue su condición de espuria, el hecho de que el Presidente de la República, en la errada creencia de ser la misma 27/80, en virtud de insertarse fielmente en el texto de aquélla el contenido literal de ésta, la sancione y la publique.

Por otro aspecto, en sentencia de diciembre 12 de 1986 la Corte, en consideración de la ineficiencia de la sanción impartida por el Ministro delegatorio a la Ley 27/80, conceptuó en la parte motiva ser "necesario que el proyecto pase al Presidente para que se cumplan los trámites que aún faltan para que sea ley de la República" y a renglón seguido resolvió: "Declarar inexequible la ley 27 de noviembre 3 de 1980, por la cual se aprobó el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, en cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República".

El concepto de la parte motiva es impertinente por lo que se dice escuetamente enseguida:

La división constitucional del Poder Público en tres ramas separadas pero colaborantes armónicamente para la realización de los fines del Estado (art. 55), prohíbe al Organo legislativo dirigir excitaciones a funcionarios públicos (art. 78), precepto que analógicamente se aplica a la Corte respecto al Presidente de la República.

"La Corte no puede pronunciarse por vía de consejo o a manera de concepto porque ésta no es su función", ha dicho la propia Corporación.

El conceptuado cumplimiento de trámites que aún faltan no es viable por preclusión de los "términos" o lapso de tiempo para realizarlos válidamente, motivo que enerva el concepto y excitación.

La cuestionada limitación de la declaratoria de inexequibilidad, cuya estribadura es la frase "en cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República", no cabe ni es de recibo porque:

El modo adverbial *en cuanto* debe entenderse, para que tenga sentido y produzca algún efecto, sin valor limitativo y denotando, según R.J. Cuervo en el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana "la condición que determina la existencia de lo que se dice, o sea su causa, como si se pusiera: por el hecho de". Es decir, la condición determinante, la causa de la inexequibilidad es la carencia de sanción.

La inexequibilidad originada en vicios de forma tiene como efecto, para el futuro y desde su pronunciamiento, sustraer la totalidad de la ley de la órbita del ordenamiento jurídico, dejándola sin que pueda ejecutarse o cumplirse.

La función de guardar la integridad de la Constitución la atribuye el artículo 214 a la Corte para "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes", por modo que la decisión en esta materia es absoluta, general, *erga omnes*, y "en todas las sociedades cultas la autoridad de los fallos definitivos, que han sido regularmente dictados, se mantiene y conserva por razones de orden jurídico y por motivos de estabilidad social".

La expedición de la ley es acto complejo en la que, por mandato de la Constitución (art. 81), concurren las voluntades del Organo Legislativo y del Organo Ejecutivo con la finalidad única de formarla regular y legítimamente, de manera que cada paso, etapa o pieza co-formadores de ella son indefectibles, necesarios para su nacimiento: falte uno cualquiera y la ley es nonata.

Del propio modo, realizada una etapa sin sujeción a las normas constitucionales, vicia la ley, y declarado el vicio es inexequible toda, con extensión de la inejecutoriedad al conjunto del proceso, hasta la raíz y elemento primigenio.

Finalmente, si fue valedera la excitación de la parte motiva y restringida la resolución de inexequibilidad, párense mientes en el hecho inexcusable e irreparable de que la sanción se hace no a la Ley 27 de noviembre 3 de 1980 emanada del Congreso regular, constitucionalmente, sino sobre una ley creada por el Presidente de la República, carente de elemento formal, inconstitucional hasta la médula, la cual debe declararse inexequible en guarda de la Constitución y en ejercicio de una función ineludible de la Corte.

Lo expuesto me lleva a adoptar la tesis de ser inexequible la Ley 68 de 1986 (diciembre 14) por vicios de forma.

Alfonso Suárez de Castro

SALVAMENTO DE VOTO
(Expediente No. 1558)

Aunque respetamos profundamente los conceptos que, en conciencia y en derecho, han servido de sustento de la providencia que antecede, los suscritos Magistrados consideramos oportuno manifestar las razones de nuestro desacuerdo con la decisión mayoritaria.

Para analizar la cuestión conviene recapitular los hechos principales que han servido de antecedentes de este proceso, para luego hacer referencia al contenido del citado fallo del 12 de diciembre de 1986 y a la regulación constitucional de los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad.

El 14 de octubre de 1979 el Gobierno presentó al Senado, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el proyecto No. 76 que, tras haber sufrido los debates de rigor en el seno del Congreso, fue sancionado el 3 de noviembre de 1980 por el Ministro Delegatario encargado de atender funciones presidenciales en ausencia del Jefe de Estado, y se convirtió en la Ley 27 del mismo año. Dicha Ley fue demandada ante esta Corte, que en fallo de 12 de diciembre de 1986 la declaró inexequible por cuanto no había sido sancionada por el Presidente de la República. Este, en consecuencia, procedió a sancionarla el 14 de los mismos mes y año, y a distinguirla con el número 68 de 1986.

Al final de la parte motiva del fallo en mención, después de considerar que el Presidente de la República no podía delegar en uno de los ministros las atribuciones que le competen como Jefe o Director de las Relaciones Diplomáticas o Comerciales con los demás Estados, y por tanto la de sancionar leyes aprobatorias de tratados, la Corte expresó:

"De todo lo dicho es forzoso concluir que la sanción que el Ministro Delegatario Doctor Germán Zea Hernández le impartió a la Ley 27 de 1980, objeto de la presente impugnación, no se cumplió *'con arreglo a la Constitución'* como lo exige el artículo 118 ordinal 7° de la Carta Fundamental, por consiguiente, es necesario que el proyecto pase al Presidente para que se cumplan los trámites que aún faltan para que sea ley de la República".

Acto seguido procedió a hacer el pronunciamiento correspondiente, en los siguientes términos:

"Declarar inexequible la Ley 27 de Noviembre 3 de 1980, por la cual se aprobó el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, en cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República".

Puede observarse que la Corte, en tal oportunidad, no profirió un fallo puro y simple de inexequibilidad, sino que puntualizó el motivo concreto que dio lugar a tal declaración y señaló que era necesario que el proyecto volviera al Presidente de la República para que se cumpliera el trámite de la sanción, que quedaba faltando por llenar en virtud de la providencia tomada por esta Corporación.

Se sigue de lo anterior que, si bien la Ley 27 de 3 de noviembre de 1980 fue declarada inexequible como tal, la Corte consideró que el proyecto estaba ajustado a la Constitución en lo concerniente a la etapa legislativa y que sólo faltaba la sanción presidencial para que se convirtiera en ley de la República.

No puede interpretarse de otra manera la frase final de la parte motiva de la providencia, pues si su propósito hubiera sido el de que el proyecto volviera al Congreso no habría habido necesidad de hacer referencia específica del asunto.

Han dicho la Corte y el Consejo de Estado que en un fallo de inexequibilidad, como en cualquier otra sentencia, hace tránsito a cosa juzgada no sólo lo decidido explícitamente, vale decir, lo expresado en la parte resolutiva, sino también lo implícito en ella .

Son estas palabras de la Corte:

"La cosa juzgada se halla por lo general en la parte dispositiva de la sentencia, los motivos de ésta carecen de fuerza de fallo, son simples elementos de convicción del juez, que pudiendo ser errores en ocasiones, no afectan sin embargo la decisión misma. Pero cuando los motivos son, no ya simples móviles de la determinación del juez, sino que se ligan íntimamente al dispositivo y son como el alma y el nervio de la sentencia, constituyen entonces un todo con la parte resolutiva y participan de la fuerza de ésta" (G. J. XXV, p. 250, vid además G. J. T. XXXV p. 550; G. J. T. LXXXVI, p. 142-143 Anales C. de E., T. CI p. 210 a 211).

No puede ser de otra manera, pues la regla del art. 163 C.N. que ordena que toda sentencia deberá ser motivada, muestra a las claras la conexión tan estrecha que existe entre la parte motiva y la resolutiva de los fallos. Afirmar lo contrario equivaldría a decir que la decisión judicial flota en el vacío y es arbitraria.

En consecuencia, el Gobierno no interpretó mal el fallo de la Corte Suprema de Justicia, según lo dice el demandante, sino que le dio aplicación, de conformidad a lo que en él mismo se manifestó.

Se ha dicho por algunos que la sanción se verificó extemporáneamente, pues ya habían vencido los términos que el art. 86 C.N., le señala al Presidente para llevarla a cabo, por lo que entonces debió haberlo hecho el Presidente del Senado.

Nótese además que la inexequibilidad de la ley fue declarada "en cuanto no fue constitucionalmente sancionada" lo que guarde consonancia con las consideraciones que se hicieron en la parte motiva.

No ordenó la Corte el archivo del proyecto, medida ésta que prevé el art. 90 C.N. para el caso de que prosperen ante aquélla las objeciones de inconstitucionalidad que formule el Presidente respecto de un proyecto de ley, y que por su carácter especial no necesariamente es susceptible de aplicación analógica al caso de autos como lo sostiene el Procurador en su concepto.

Contrariamente a lo que suele creerse, no existe norma positiva ni principio lógico alguno de donde se desprenda inequívocamente que el efecto necesario de las sentencias de inexequibilidad es la desaparición en el universo jurídico no sólo de la ley sino de cada uno de sus momentos o etapas. La ley, desde luego, ya no valdrá como tal, pero no es absurdo ni contrario a derecho reconocerle a lo válidamente actuado el carácter de proyecto, como lo hizo la Corte en el fallo citado, al tenor del cual, lo que se debe examinar en esta oportunidad es si el Gobierno obró en el sentido de que se le había indicado con fuerza de cosa juzgada o si, por el contrario incurrió en nuevas transgresiones al ordenamiento constitucional.

Consta en lo autos que su proceder se limitó, efectivamente, a sancionar el proyecto que había aprobado el Congreso, estampando en el cuerpo del documento original las firmas del Presidente de la República y de los Ministros de Relaciones Exteriores (encargado) y de Justicia, así como asignándole nuevo número de acuerdo con la fecha en que lo hizo por tratarse sin lugar a dudas de una nueva ley.

Este razonamiento parte de la base de que los términos que establece dicha disposición son preclusivos y, una vez transcurridos, tienen el efecto de sustraer de la competencia del Presidente de la República la sanción de los proyectos de que se trata, para asignársela al Presidente del Senado.

Pero tal no es el sentido del texto que se considera, pues lo que de ahí se sigue inequívocamente es que, por el transcurso de los términos que establece, pierde el Presidente la atribución del *objetar* los proyectos de ley, pero no la de sancionarlos. En efecto, el inciso 2° dice que "si el Presidente una vez *transcurridos los indicados términos,* según el caso, hubiere devuelto el proyecto con objeciones deberá *sancionarlo y promulgarlo*" (Subraya la Sala).

Es claro entonces, que en tales hipótesis la sanción presidencial se produce con posterioridad al vencimiento de los términos para formular objeciones.

No señala la Constitución el plazo de que dispone el Presidente para sancionar las leyes. Simplemente agrega, en el art. 89, que "si el Gobierno no cumpliere el

deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que este título establece, las sancionará y promulgará el Presidente del Congreso".

Ello significa, no que el Presidente queda relevado del deber de sancionar las leyes, sino que, ante el incumplimiento de ese deber, también queda con atribuciones para cumplirlo el Presidente del Congreso, que lo es el del Senado, y en su defecto, el de la Cámara de Representantes (art. 74 C.N).

Los razonamientos que dejamos expuestos nos llevan a la conclusión de que, no obstante los poderosos argumentos jurídicos que se invocan en la sentencia, ésta debió haberse orientado por la exequibilidad de la ley.

Dejamos constancia de que este criterio lo comparten los Honorables Magistrados Gustavo Gómez Velásquez y Lisandro Martínez Zúñiga, quienes están ausentes del país en comisión especial.

Fecha *ut supra,*

Jesús Vallejo Mejía, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Jaime Giraldo Angel, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Guillermo Duque Ruiz.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL "LAS DISPOSICIONES QUE DEFINEN LAS MODALIDADES DE LA CARRERA JUDICIAL DIFIEREN DE LAS DEL DECRETO NUMERO 2400 DE 1986, PUES MIENTRAS EN ESTE SE ESTRUCTURABA LA CARRERA BAJO LA DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL, ENTIDAD DEPENDIENTE DEL EJECUTIVO, SE CONFUNDEN CLAROS MANDATOS CONSTITUCIONALES SOBRE LA SEPARACION DE LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO. DEFINIDA, DOBLEMENTE POR EL LEGISLADOR ORDINARIO LA ESFERA DEL EXTRAORDINARIO. NO TIENE ESTE, PARA ALCANZAR SU COMETIDO, OTRAS LIMITACIONES ADICIONALES DISTINTAS DE LA PROPIA CONSTITUCION. COMISION ASESORA.

Inexequibles los arts. 79, literal a); 87, inciso 2°; 114, 118, 119, 121, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 138 del Decreto número 052 de 1987. Exequibles las siguientes normas: el art. 3° en parte. El art. 9° en parte. El art. 15 en parte. El art. 29 en parte. Los arts. 40 y 41 en parte. El art. 47 en parte. Y además todas las demás normas del mencionado Decreto.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 64.

Referencia: Expediente número 1587.

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto número 0052 de 1987 (enero 13) "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial".

Demandante: *Arturo Parrado Gutiérrez.*

Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 30 de junio 25 de 1987.

Bogotá, D. E., junio veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Arturo Parrado Gutiérrez, haciendo uso del derecho que le confiere el artículo 214 de la Carta ha presentado ante la Corte demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto número 0052 de 1987, "por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la Carrera Judicial", cuyo texto dice:

II. Texto del Decreto demandado

(Ver anexo No. 1).

III. La demanda

Afirma el actor que el Estatuto acusado se redactó por una comisión ilegalmente constituída mediante Decreto número 3150 del 7 de octubre de 1986, puesto que en ella no fueron incluidos los miembros del Congreso indicados en el artículo 3° de la Ley 52 de 1984 (Ley de facultades).

Añade que el Gobierno, al dictar el Estatuto de la Carrera Judicial y parte del Ministerio Público, se excedió en el uso de las facultades extraordinarias, pues éstas para nada se referían a este último y menos para que se legislara en forma parcial como se hizo.

También se excedieron las facultades, en concepto del demandante, por cuanto el Gobierno en cambio de revisar y reformar el Estatuto de la Carrera Judicial, que era el Decreto número 250 de 1970, elaboró uno nuevo en el decreto acusado.

Por otra parte, señala que cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 0052 de 1987, estaba agotada la facultad del artículo 1° de la Ley 52 de 1984, "porque con base en ella dictó el Decreto número 2400 de 1986".

En cuanto a algunas normas del Decreto número 0052, consideradas individualmente, dice el actor:

"El artículo 4° del Estatuto demandado dice:

"El nombramiento en Carrera Judicial únicamente podrá recaer en persona seleccionada mediante el sistema de méritos".

"La norma anteriormente transcrita, excede y viola los artículos 119-1° 144 incisos 2°, 3°, 4° y 5°, 155, 156, 157 y 158 de la Constitución Nacional, porque limita al señor Presidente de la República para nombrar a los Fiscales de los Tribunales de las listas presentadas por el señor Procurador General de la Nación, dado que con la calificación en la práctica hay un prenombramiento; al señor Procurador para nombrar los Fiscales de los Juzgados Superiores y de Circuito; a los señores Magistrados de la Honorable Corte y el Honorable Consejo de Estado para nombrar Magistrados de los Tribunales y a éstos para nombrar a los señores Jueces.

"Además de limitar y hacer dispendioso los nombramientos inclusive de los empleados colaboradores de los funcionarios, como se dice que únicamente podrá recaer en personas seleccionadas por el método del Decreto demandado, le restringe el derecho al trabajo a quienes satisfagan los requisitos constitucionales para los

diversos cargos, pero no estén inscritos y seleccionados mediante la Carrera, artículos 17 y 39 Constitución Nacional, y claramente excede los requisitos establecidos por la Constitución para cada cargo de creación y período constitucional.

"El artículo 6° del Decreto número 0052 demandado dice:

"El nombramiento en período de prueba será de dos años para magistrados, un año para jueces y ocho meses para empleados".

"Viola los artículos 157 y 158 de la Constitución Nacional porque modifica los períodos allí establecidos".

En su criterio, los artículos 7°, 8°, 9°, 23, 24 y 48 del Decreto son igualmente inconstitucionales, por vulnerar el artículo 55 de la Constitución –dado que se invade la órbita de la Rama Jurisdiccional– y el 119-2° en cuanto impiden administrar pronta y cumplida justicia.

También resulta inconstitucional el Título XIII, por abuso de las facultades extraordinarias, las cuales no autorizaban al Ejecutivo para estatuir la carrera a las fiscalías. Ese mismo título, viola según el demandante, los artículos 17, 39, 144, incisos 2°, 3°, 4° y 5°, en concordancia con los artículos 155 y 157 de la Constitución, por cuanto está exigiendo inscripción, selección, clasificación, concursos, etc., excediendo los requisitos constitucionales establecidos para el nombramiento y ejercicio de cargos de Fiscales de Tribunales Superiores y Juzgados.

Finalmente, sostiene la demanda que el artículo 141 del Decreto tantas veces mencionado, es extemporáneo por deferir la aplicación de algunas de sus normas hasta el 1° de mayo de 1987. Al respecto, según la demanda, las facultades extraordinarias vencieron el 13 de enero, de manera que la vigencia del artículo 141 a partir del 1° de mayo infringe el artículo 76, ordinal 12, de la Constitución.

IV. Concepto del Procurador General de la Nación

Mediante oficio número 1133 del 1° de abril de 1987, el señor Procurador General emitió el concepto de rigor, del cual se destacan los siguientes apartes:

1. Refiriéndose al cargo según el cual se habría desconocido por el Gobierno lo dispuesto en la Ley 52 de 1984 sobre constitución de una Comisión Asesora que incluyera dos senadores y dos representantes designados por las mesas directivas de las comisiones primeras de ambas Cámaras para el ejercicio de las facultades, señala el Procurador que ella sí estuvo integrada por Congresistas y que tenía la misión de asesorar al Gobierno Nacional, por lo cual carece de fundamento el cargo de inconstitucionalidad formulada por el demandante.

2. A la afirmación del actor sobre agotamiento de las facultades extraordinarias por razón de su ejercicio, responde la Procuraduría diciendo que en toda ley de facultades queda implícita la atribución de derogar, modificar o sustituir sus propias normas, siempre y cuando se expidan las disposiciones dentro del plazo que la ley le haya señalado. Añade que el actor incurre en contradicción pues en otra parte de su escrito admite que no estaba agotada la facultad, ya que el término *venció* el 13 de enero del presente año.

Dice el Procurador que la facultad de revisar y reformar necesariamente supone la de derogar, subrogar, sustituir y modificar la legislación preexistente, pues se trata de una adaptación, modernización y funcionalidad del Estatuto de carrera judicial, y que los límites se encuentran en la Ley de Habilitación Legislativa y en la Constitución Política.

3. En lo atinente a la carrera que el Decreto número 052 de 1987 introduce en las Fiscalías y el Ministerio Público, expresa el Procurador General, entre otras cosas, las siguientes:

"a) El Poder Judicial (mal denominada Rama Jurisdiccional) está integrado por la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito y demás Tribunales y Juzgados que establezca la ley (artículo 58 *ibidem)*, quienes administran justicia. Además, se encuentra la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el Consejo de Estado a la cabeza y los Tribunales Administrativos de Departamento. Nada más. Ampliar esa composición orgánica al Ministerio Público –como lo ha hecho el Legislador Extraordinario de 1987–, es tanto como extender la potestad de administrar justicia para los civiles, a la llamada Justicia Penal Militar, y desnaturalizar y romper la estructura del Poder Político y desconocer el derecho constitucional ciudadano al juez natural (civil) y a no ser juzgados por tribunales o jueces de excepción.

"b) El Ministerio Público, orgánicamente integrado por la Procuraduría General de la Nación, por las Fiscalías y las Personerías. De cualquier suerte, las garantías o prerrogativas establecidas en el artículo 142 Superior solamente comprende a quienes efectivamente ejercen sus cargos ante los organismos judiciales colegiados y juzgadores singulares. Interpretar la prerrogativa o garantía en el sentido de que por ella la Carrera Judicial o la habilitación legislativa para reglamentar ésta comprende a funcionarios y empleados del Ministerio Público, vulnera precisas normas constitucionales, más cuando el artículo 58, entre los administradores de justicia (y para ningún efecto lo hace norma alguna) incluye a las Fiscalías o sus empleados, porque no administran justicia son menos colaboradores en la búsqueda permanente de su realización y sus vistas fiscales no vinculan al juzgador singular o colegiado.

"En conclusión, para ningún efecto el Ministerio Público, particularmente las Fiscalías, forman parte de la Administración de Justicia".

Tocando otro aspecto relativo a la carrera en el Ministerio Público, hace énfasis en la autonomía de tal función y al respecto cita apartes de la sentencia proferida por la Corte el 8 de marzo de 1984 en relación con la Ley 25 de 1974, para concluir diciendo:

"En ese orden de ideas, la Carta Fundamental garantiza y protege la independencia y la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, según lo precisado arriba, y especialmente deslinda la función judicial de la función fiscalizadora y establece la Carrera Judicial y el sistema de concurso para la selección de los candidatos que hayan de desempeñar los cargos judiciales y los del Ministerio Público (artículo 162).

En torno a diferencias constitucionales entre la Carrera Judicial y la del Ministerio Público, observa:

"(...) Inequívocamente, la Constitución se refiere a la Carrera Judicial como un sistema que garantiza la estabilidad, permanencia... del empleado inscrito en ella y que forma parte y desempeña alguno de los empleos del Poder Judicial, sistema que exceptúa a los Magistrados, Consejeros, Jueces y Fiscales, por el mecanismo de elección (cooptación) y de períodos fijos señalados por la misma Carta. En ella encontramos las siguientes preceptivas que diferencian la Carrera Judicial (para los servidores de los Administradores de Justicia) de la del Ministerio Público: a) El artículo 162, expresa que corresponde a la Ley establecer la Carrera Judicial y "reglamentar los sistemas de concurso para la selección de los candidatos que hayan de desempeñar los cargos judiciales y los del Ministerio Público"; b) Artículo 159, "las calidades exigidas a los funcionarios del Orden Judicial, del Ministerio Público y de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se acreditarán en la forma que la ley determine"; c) El canon 145, especifica entre las atribuciones del Procurador General de la Nación, la de "cuidar de que los demás funcionarios del Ministerio Público desempeñen fielmente su encargo..."; mientras que el artículo 160, dice que los Magistrados y Jueces estarán sujetos a sanciones disciplinarias impuestas por el respectivo superior; d) Por su parte, el canon 161, precisa que "el personal subalterno en los organismos jurisdiccionales, en lo Contencioso-Administrativo, y en el Ministerio Público se designará conforme a las leyes"; e) En relación con la organización del Consejo de Estado, el artículo 136 faculta a la ley para reglamentar esta disposición y "organizará la Carrera Judicial"; f) Los artículos 58 y 142, señalan quienes pueden desempeñar por excepción funciones judiciales (El Senado) y funciones fiscales (Cámara de Representantes); g) El numeral 3° del artículo 119, faculta al Presidente de la República, para que por medio del respectivo Agente del Ministerio Público, o de un abogado fiscal nombrado al efecto, mande acusar ante el Tribunal competente a funcionarios del *orden judicial*, y h) El numeral 10 del artículo 76, otorga al Congreso Nacional la facultad de dictar las normas correspondientes a las carreras administrativas, judicial y militar. No sobra señalar que la cláusula general de competencias legislativas la tiene este órgano del Poder Público.

"Así las cosas, lo preceptuado en el artículo constitucional 162, mantiene el contexto y los principios del ejercicio del poder judicial (Administración de Justicia) y de Fiscalización (sobre la conducta oficial de los empleados oficiales), al señalar con base en el principio de la división funcional del poder político (artículos 55 ss., 58 y 143) y reafirmar esta directriz demo-liberal, que el Legislador (Ordinario o el Extraordinario habilitado para el efecto), establezca la Carrera Judicial y a renglón seguido, reglamente los sistemas (no sistema) para la selección de los candidatos que hayan de desempeñar *los cargos judiciales* y los del *Ministerio Público.*

"De cualquier suerte, el Presidente de la República al dictar el Decreto número 052 de enero 13 de 1987, contentivo del Estatuto de la Carrera Judicial, no estaba habilitado para reglamentar aspecto alguno de los empleados y Fiscales del Ministerio Público, como está demostrado con el análisis precedente, sin incurrir en transgresión a los artículos 2°., 55, 58, 144 en concordancia con el 155 y 157. Ni para incluir en el sistema de carrera judicial a funcionarios (Magistrados y Jueces) de la Administración de Justicia".

4. Explora también el alcance de la ley de facultades, para concluir que en 1984 (Ley 52), dentro del ámbito de la Carrera no se incluyó al Ministerio Público, como sí

lo hizo el legislador de 1968 (Ley 16), oportunidad en la cual se mencionó expresamente a los funcionarios a su servicio (art. 20, ordinales 4° y 6°).

Como consecuencia de estas razones concluye:

"En virtud de lo expuesto, son contrarios a la Constitución Política, las proposiciones (parcial o totalmente) que se relacionan a continuación:

"Artículo 2° ... y fiscales de la República... y en las fiscalías...".

"Artículo 7° ... y de las fiscalías...

Fiscal del Consejo de Estado.

...".

"Artículo 10. ...

"...

"8°... y el Ministerio Público".

"Artículo 4° ... y de las fiscalías:

...".

"Artículo 41. ... y fiscalías:

...".

"Artículo 42. ... y de fiscalías:

a) ... y Fiscal...

b) ... y Fiscales de Juzgados Superiores y de Circuito.

"Artículo 43. ... y de fiscalías:

...

e) ... Auxiliar Judicial de Fiscalía del Consejo de Estado y de Tribunal;

...

g) ... Asistente Judicial de Fiscalías de Juzgados Superiores, Aduanas y de Circuito..."

"Artículo 45. ...y del Ministerio Público...".

Artículo 47. ... la que además calificará todos los aspectos de los funcionarios y empleados de las fiscalías".

"Artículo 48. ... y de las fiscalías...".

...

... o fiscal...

...".

"Artículo 50. ... y de las fiscalías...".

"Artículo 53. ... y en las fiscalías...".

"Artículo 54. ... o de las fiscalías...".

"Artículo 58. ... o de las fiscalías...".

"Artículo 59. ... y de las fiscalías...".

"Artículo 79. ...

b) De los adelantados contra los fiscales del Consejo de Estado y de los tribunales.

...

De los resueltos por el Procurador General de la Nación contra los fiscales de juzgados".

"Artículo 84. ... y los fiscales...".

"Artículo 86. El Procurador General de la Nación conoce en primera instancia de los procesos adelantados contra los fiscales de juzgados y en segunda instancia de los adelantados contra los empleados de las fiscalías cuando procede la apelación".

"Artículo 87. ...

Las investigaciones y procesos contra los fiscales de competencia del Procurador General de la Nación los adelantará directamente o por intermedio de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público, la cual podrá comisionar para la práctica de diligencias a los Procuradores Regionales y a los Jefes de las Oficinas Seccionales".

"Artículo 88. ... y de fiscalías...".

"Artículo 93. ... y al Ministerio Público".

"Artículo 94. ... y del Ministerio Público...

...".

"Artículo 101. ...

1ª ... y del Ministerio Público.

...

3ª ... y del Ministerio Público.

...".

El Título XIII, Carrera en las Fiscalías, artículos 104 a 113 en su totalidad.

"Artículo 116. ... y al Ministerio Público".

"Artículo 117. ... y del Ministerio Público...".

"Artículo 118. ... y a las fiscalías..."

"Artículo 119. ... y del Ministerio Público..."

"Artículo 123. ... y de las fiscalías...".

"Artículo 130. ... y de las fiscalías...".

"Artículo 136. ...

c) ...

... y del Ministerio Público

...

e) ...

En el Consejo Superior de la Carrera del Ministerio Público, el Fiscal Primero del Consejo de Estado, en representación de los Fiscales de esa Corporación; el Fiscal del Juzgado Primero Superior de Bogotá, en representación de los demás fiscales; y el auxiliar Judicial del Fiscal Primero del Tribunal Superior de Aduanas, en representación de los empleados de fiscalías".

5. Estima el Procurador que es constitucional la calificación anual de los funcionarios judiciales y dice que en nada se opone ni enerva la atribución constitucional del Presidente de la República de velar porque se administre pronta y cumplida justicia. La Constitución, al contrario de lo supuesto por el demandante, no fija la fecha ni el momento en que debe hacerse la calificación de los empleados y funcionarios como uno de los factores importantes en la elección y ascenso. Por lo tanto compete al legislador (Ordinario o Extraordinario) determinar la oportunidad en que deba realizarse tal calificación.

Respecto a la Carrera Judicial aplicada a Magistrados y Jueces, señala:

"Es evidente que al confrontar todas las proposiciones jurídicas que se refieren a *funcionarios*, a *magistrados* y *jueces* vulneran flagrantemente los requisitos, calidades y el sistema de elección (cooptación) consagrado en los artículos 148, 150, 154, 155, 156, 157, 158 de la Constitución Política, en cuanto condicionan y restringen a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso-Administrativo de Departamento y de Aduanas, en sus atribuciones constitucionales para efectos de la designación de Magistrados y Jueces, para los cuales la misma Constitución en los preceptos arriba citados señala los requisitos, período y sistema de elección y entrega a esos Cuerpos Judiciales período durante el cual se desempeñarán sus cargos.

"El ingreso a la Carrera Judicial, determina que solamente a quienes se encuentren inscritos o hayan sido seleccionados pueden ser nombrados para ocupar los cargos de Magistrados de Tribunales y de Jueces, no obstante que la Carta determina los requisitos, período y sistema de elección y entrega a esos Cuerpos Judiciales Colegiados la designación de quienes reúnan los requisitos constitucionales y éticos. Así mismo, se condiciona la elección pues solamente pueden ser nombrados quienes aparezcan inscritos en la Carrera Judicial con lo cual puede vulnerarse la libertad de trabajo. La Carrera Judicial además le garantizá al funcionario la estabilidad en el cargo (art. 1º), que solamente establece la Constitución por el período para el cual es designado un Magistrado o Juez, pero que no puede ser permanente o vitalicia, mientras no se reformen las disposiciones constitucionales precitadas.

"Por lo expuesto, en el acápite 3° del presente concepto, resultan contrarios a las normas ya citadas, las siguientes proposiciones del Decreto número 052 de 1987 (Incluído el exceso en el desarrollo de las facultades otorgadas).

"Artículo 1° ... funcionarios y...

Artículo 2° Son funcionarios los magistrados, jueces...".

"Artículo 6° ... un año para jueces...".

"El artículo 7° En cuanto incluye todos los cargos de la Rama Judicial en la Carrera y no excluye a los jueces sin distinción de categorías.

"Artículo 10. ...

2ª ... la provisión de cargos de Magistrados de Tribunal y de...

"...".

"Artículo 13. ...

6. ...y funcionarios...".

"Artículo 17. ...

2. ...de jueces...

...

4. ...los jueces...

...

6. ...de jueces...

...".

"Artículo 35. ... funcionarios y...".

"Artículo 39. ... funcionarios...".

"El Artículo 42 al establecer el escalafón de la Carrera para los funcionarios judiciales.

"Artículo 44. ... y funcionarios

...".

"Artículo 45. ...funcionarios...".

"Artículo 120. ... funcionarios y ...".

"Artículo 132. ... funcionarios y..."

"Artículo 133. ... y respectivos magistrados ... a los jueces ...".

6. En torno a la administración de la Carrera Judicial expresa:

"El Estatuto de la Carrera Judicial prevé que el Consejo Superior de la Administración sea presidido por el Ministro de Justicia y que en caso de empate en las

decisiones sobre carrera tenga voto decisorio (art. 9º); en el nivel de los Distritos Judiciales, aparece previsión similar para los Consejos Seccionales de la Carrera, para el Delegado del Ministro (art. 15), y el órgano de Administración de la Escuela Judicial, también debe ser presidido por el Ministro de Justicia (art. 96). Tales disposiciones vulneran el mandato contenido en el artículo 55 Constitucional (separación de las Ramas del Poder Público), pues quien preside también tiene poder de decisión, en los asuntos que debe administrar, manejar y decidir el Poder Judicial, lo cual constituye una intromisión indebida del Ejecutivo. En consecuencia, los artículos 9º, 15 y 96 del Decreto número 052 de 1987, en cuanto se refieren al Ministro de Justicia y a su Delegado, son inconstitucionales.

7. Sobre la derogatoria del Decreto número 2400 de 1986 advierte el Procurador que, en virtud del fallo del 3 de marzo de 1987, los artículos 67, 206 y 207 de ese Estatuto (que siguieron vigentes por expresa disposición del Decreto número 052 de 1987), ya no existen en nuestro ordenamiento jurídico, pues admitir lo contrario sería desconocer dicho fallo.

"El Estatuto de la Carrera Judicial prevé que el Consejo Superior de la Administración sea presidido por el Ministro de Justicia y que en caso de empate en las decisiones sobre carrera tenga voto decisorio (art. 9º); en el nivel de los Distritos Judiciales, aparece previsión similar para los Consejos Seccionales de la Carrera, para el Delegado del Ministro (art. 15), y el órgano de Administración de la Escuela Judicial, también debe ser presidido por el Ministro de Justicia (art. 96). Tales disposiciones vulneran el mandato contenido en el artículo 55 Constitucional (separación de las Ramas del Poder Público), pues quien preside también tiene poder de decisión, en los *asuntos que debe administrar, manejar y decidir* el Poder Judicial, lo cual constituye una intromisión indebida del Ejecutivo. En consecuencia, los artículos 9º, 15 y 96 del Decreto número 052 de 1987, en cuanto se refieren al Ministro de Justicia y a su Delegado, son inconstitucionales.

El Procurador pide a la Corte que haga las siguientes declaraciones:

"a) Que son parcialmente inexequibles los siguientes artículos del Decreto Extraordinario número 052 de 1987; 2º, 7º, 10-8º, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 58, 59, 79, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 101, 116, 117, 118, 119, 123, 130 y 136, de conformidad con lo analizado en el punto 3.2; 1º, 2º, 6º, 7º, 10, 13, 17, 35, 39, 42, 44, 45, 120, 132 y 133, según lo examinado en el punto 4º, 9º, 15 y 96 con base en lo esbozado en el punto 7;

"b) Que son inconstitucionales los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 23 y 24, con base en lo presentado en los puntos 9 y 10; y

"c) Que por no resultar contrarios a la Constitución Política, son exequibles los demás preceptos (parcial y totalmente)".

V. Consideraciones de la Corte:

1. *Competencia.*

Puesto que el acto demandado es un decreto expedido por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por el Congreso (art.

76, ord. 12 C.N.), es la Corte Suprema de Justicia el Tribunal competente para fallar de modo definitivo sobre su exequibilidad.

2. *El límite temporal de las facultades extraordinarias*

El Gobierno tenía, según la Ley de facultades, dos (2) años contados a partir de su promulgación (enero 14 de 1985 "Diario Oficial" No. 36830), para dictar los decretos con la fuerza legislativa prevista en los artículos 76, ordinal 12 y 118-8° de la Carta Política.

El Decreto número 052 de 1984 se expidió el día 13 de enero de 1987 y se promulgó en la misma fecha ("Diario Oficial" número 37755), luego las facultades extraordinarias fueron ejercidas dentro del término señalado por el Congreso y, en consecuencia, no hay en este sentido tacha alguna de inconstitucionalidad.

La Corte no acoge el criterio expuesto por el demandante, cuando afirma que el término otorgado al Gobierno para legislar extraordinariamente se extingue o se agota automáticamente por el solo uso que de las facultades hubiere hecho el Ejecutivo al expedir un decreto que pretenda desarrollarlas.

Cuando el Congreso reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias lo hace, según perentorio mandato constitucional, estableciendo límites temporales y materiales tendientes a evitar que pueda desempeñar la función legislativa indefinidamente, pues ella no es de su resorte ordinario.

Pero, definida doblemente por el legislador ordinario la esfera del extraordinario, no tiene éste, para alcanzar su cometido, otras limitaciones adicionales distintas de la propia Constitución. De tal modo que le es posible legislar durante todo el tiempo de las facultades y sobre toda la materia que ellas cobijan, pudiendo modificar, ampliar y aún derogar las normas de carácter legal preexistentes, tal como lo subraya el señor Procurador en su concepto.

No es cierto, entonces, que el uso de las facultades implique por sí solo el agotamiento de las mismas, pues en tal caso, sería inoficiosa la indicación del tiempo dentro del cual pueden ser utilizadas. Por lo tanto, no está llamada a prosperar por este concepto la declaratoria de inexequibilidad impetrada en la demanda.

Sobre este particular advierte la Corte una vez más que el caso en estudio es bien distinto del analizado cuando se falló la inexequibilidad del Decreto número 1853 de 1985, según ya se dijo en sentencia número 15 de marzo 3 de 1987, a propósito de demanda instaurada contra el Decreto número 2400 de 1986, también relativo a la Carrera Judicial. Manifestó la Corporación en ese caso:

"(...) El ataque fundamental contra la integridad del Decreto número 2400 de 1986 consiste en afirmar que las facultades se otorgaron al Presidente de la República para que revisara, reformara y pusiera en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial y que ello ha debido hacerse a través de un solo cuerpo normativo, pero que el Gobierno extralimitó esas autorizaciones al dictar varios decretos, uno de los cuales es el demandado.

"Arguye el actor que en esta ocasión se dan idénticos motivos a los que se tuvieron en cuenta por la Corte para declarar la inexequibilidad de los decretos

números 1853 de 1985 y 056 de 1986, por medio de las cuales el Gobierno había desarrollado parcialmente las facultades extraordinarias que le concedió la misma Ley 52 de 1984 para expedir un Código de Procedimiento Penal.

"Empero, esta Corporación no encuentra que puedan asimilarse los dos tipos de facultades, los cuales presentan ostensibles diferencias. En el caso que se invoca como precedente por el demandante, se hacía expresa referencia a la expedición de un código, al paso que en materia de carrera judicial, la atribución otorgada al Ejecutivo incluyó tanto la posibilidad de 'revisar' y 'reformar' un estatuto, como la de 'ponerlo en funcionamiento', todo lo cual puede requerir, dada su misma amplitud y diversidad, la expedición de varios actos.

Nótese, además, cómo en el asunto que ahora estudia la Corte, el legislador ordinario para nada habló de expedir un Código sobre Carrera Judicial, sino de la revisión y reforma de un estatuto sobre ella. Es claro que tales conceptos (código y estatuto) no son sinónimos ni equivalentes, pues mientras el Código, según criterio que ha venido sentando la jurisprudencia constitucional, es un conjunto coherente y armónico de disposiciones sobre una materia, que se ordena en un solo cuerpo, el estatuto es el régimen jurídico que gobierna una determinada actividad o un ramo especializado, el cual puede estar integrado por normas de distintas leyes, decretos u otros textos jurídicos, sin que deban necesariamente estar compendiadas en un solo texto. Lo esencial es que todas ellas, aunque sean de distinta jerarquía, guarden entre sí homogeneidad, no en su pertenencia a un mismo Código, sino en su referencia o relación con el área de que se trata. Así pues, el concepto de 'estatuto' es bastante más amplio que el de Código y, por ende, no se deben confundir como evidentemente lo hace la demanda".

Tampoco es admisible el argumento sostenido por el demandante según el cual viola la Constitución por el solo hecho de indicar en el texto del Decreto-ley la fecha a partir de la cual comenzarán a aplicarse algunas de sus normas, como lo hace el artículo 141 del estatuto demandado, así ella sea posterior al lapso de las facultades; pues este se refiere al término durante el cual puede el Ejecutivo *expedir* decretos con fuerza de ley y no significa un límite impuesto al comienzo de la vigencia de éstos.

Puede el legislador –y el Ejecutivo lo es cuando está revestido de facultades extraordinarias– deferir la observancia de las normas que expide: ello forma parte de la tarea legislativa. En cambio, mal podría la Corte asumir una función legislativa y pretender inconstitucional el mencionado señalamiento, pues su competencia en esta materia se circunscribe a determinar si el Presidente hizo uso de las facultades en tiempo, establecido lo cual no le es dable introducir limitaciones temporales que la Carta no establece.

3. *La Comisión Asesora*

Según afirma el demandante, la integridad del Decreto número 052 de 1987 es inconstitucional por cuanto se expidió con desconocimiento de la Ley de Facultades respecto de la integración, por ella ordenada, de una Comisión Asesora entre cuyos miembros deberían estar incluidos dos Senadores y dos Representantes designados por la Mesa Directiva de las Comisiones Primeras de ambas cámaras.

Sustenta el actor este cargo diciendo que mediante el Decreto número 3150 del 7 de octubre de 1986 el Gobierno constituyó la aludida comisión sin incluir a los congresistas indicados por el artículo 3° de la Ley 52 de 1984, en los términos a que se acaba de hacer referencia.

El señor Procurador, por su parte, también para referirse al acto constitutivo de la misma Comisión Asesora, menciona el Decreto número 3150 del 7 de octubre de 1985. Tanto el demandante como la Procuraduría citan equivocadamente la norma, como se deduce de lo siguiente:

a) La Comisión creada por el Decreto número 3150 de 1986 (octubre 7) al que se refiere el demandante, no es la Comisión Asesora prevista por el artículo 3° de la Ley 52 de 1984, sino que se trata de una "Comisión de Estudios y Evaluación de los Proyectos de Código de Procedimiento Penal y de Estatuto Penal Aduanero" ("Diario Oficial" 37665 de octubre 8 de 1986);

Como se ve por el mismo encabezamiento del Decreto y se corrobora mediante la lectura de su texto, para nada se hace referencia al Estatuto de la Carrera Judicial, razón por la cual ningún objeto tenía, para los efectos de este proceso, decretar las pruebas pedidas en la demanda, ya que las dos hacían referencia a la Comisión creada por ese Decreto, factor que las hacía inconducentes para los fines de este proceso;

b) El Decreto número 3150 de 1985, citado por el señor Procurador (Folio 57 del expediente) tampoco guarda relación con el tema, pues se limita a conferir unas comisiones al exterior respecto de empleados de la Empresa Colombiana de Petróleos –Ecopetrol–, materia que desde luego carece de todo contacto con el Estatuto de la Carrera Judicial;

c) Por ninguno de los dos decretos señalados se estructuró ni se reestructuró la Comisión Asesora para los efectos de la Carrera Judicial, como lo expresan el demandante y el Procurador.

Dado lo anterior y, no siendo suficiente para la decisión los datos aportados en las piezas procesales referidas, el Magistrado Ponente ordenó oficiar a la Secretaría General de la Presidencia de la República, a las Secretarías Generales de Senado y Cámara y a las Secretarías de las comisiones primeras de las Cámaras, con el objeto de conocer los actos por medio de los cuales se constituyó la Comisión Asesora prevista en el artículo 3° de la Ley 52 de 1984 específicamente en lo relacionado con la Carrera Judicial.

Las pruebas allegadas son las siguientes:

1. Mediante Oficio C.P.O.F. No. 008 del 21 de abril de 1987, la Secretaría de la Comisión Primera del Senado remitió copia auténtica de la Resolución 001 de 1985 (enero 28), "por la cual se designa una sub-comisión".

Por medio del mencionado acto, la Mesa Directiva de la Comisión resolvió "designar a los Honorables Senadores Federico Estrada Vélez y José María Velasco Guerrero, miembros de la Comisión Asesora del Gobierno, que crea el artículo 3° de la Ley 52 de 1984, *para elaborar y poner en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal*" (Folio 93 del Expediente, Subraya la Corte).

Llama la atención de la Corte que, entre las pruebas remitidas por la Secretaría General de la Presidencia de la República, aparece copia auténtica de otra Resolución de la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado con igual número, la misma fecha y el mismo propósito (designar la Comisión Asesora), pero diferente texto. Dice así su artículo 1°: "Designar a los Honorables Senadores Federico Estrada Vélez y José María Velasco Guerrero, *miembros de la Comisión Asesora del Gobierno, que crea el artículo 2° de la Ley 52 de 1984*" (Folio 145 del expediente. Ha subrayado la Corte).

2. Por oficio CI-121 de abril 22 de 1987, la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, envió copia auténtica de la Resolución No. 001 de 1985 (febrero 27), expedida por la Mesa Directiva, en la cual consta que fueron designados "como miembros de la Comisión Asesora *para desarrollar las facultades extraordinarias conferidas al señor Presidente de la República por el artículo 1° de la Ley 52 de 1984* (...) los Honorables Representantes Orlando Vásquez Velásquez y Gustavo Duque Ramírez" e informó que también fueron nombrados "como miembros de la Comisión Asesora *para la elaboración del Estatuto Penal Aduanero,* de que tratan las facultades extraordinarias conferidas por el art. 2° de la Ley 52 de 1984 (...) los Honorables Representantes Jorge Ramón Elías Nader y Héctor Horacio Hernández Amézquita" (Folio 95 Expediente. Subraya la Corte).

3. La Secretaría General de la Cámara de Representantes remitió copia auténtica de la Resolución últimamente citada (Folio 97), en tanto que la Secretaría General del Senado envió los Anales del Congreso contentivos de algunos antecedentes y del texto definitivo de la Ley 52 de 1984.

4. Mediante comunicación No. 5211 del 30 de abril de 1987, la Secretaría General de la Presidencia de la República envió a la Secretaría de la Sala Constitucional varios documentos tendientes a aportar las pruebas solicitadas.

Dichas pruebas debieron ser trasladadas (Auto del 7 de mayo de 1987), para que obraran dentro del presente proceso, ya que se habían recibido en relación con el Proceso No. 1572, mas no con el 1587 aunque habían sido solicitadas en los dos.

En el oficio de la referencia, el señor Secretario General de la Presidencia dice expresamente:

"Para dar cumplimiento a la citada disposición (artículo 3° de la Ley 52 de 1984), que ordenó la integración de "sendas comisiones", esto es, *una para cada facultad conferida,* se integraron dos comisiones encargadas de asesorar al Gobierno: la primera con el fin de asesorar los asuntos (sic) a que se refirió el artículo 1° de la Ley y que se denominó "para la elaboración de un nuevo Código de Procedimiento Penal". La segunda, en los términos del artículo 2°, para elaborar el nuevo Estatuto Penal Aduanero" (Folio 134 Expediente. El subrayado es de la Corte).

5. Al Folio 140 del expediente obra copia auténtica del Decreto número 728 del 12 de marzo de 1985, "Por el cual se nombran los representantes del Gobierno en las Comisiones Asesoras *para la Reforma del Código de Procedimiento Penal y el Estatuto Penal Aduanero*" (Subraya la Corte).

Allí consta que fueron designados los doctores Alfonso Reyes Echandía, Hernando Londoño Jiménez y Jaime Bernal Cuéllar, en calidad de expertos en lo relacionado con el nuevo Código de Procedimiento Penal, y los doctores Luis Enrique Aldana Rozo, Rafael Poveda Alfonso y Humberto Fernández Vega, para asesorar al Gobierno Nacional en la elaboración de un nuevo Estatuto Penal Aduanero.

6. Según la copia remitida a la Corte, el Decreto número 728 de 1985 no tiene artículo 3°. En el 4°, que hace sus veces, se dice: "Las personas designadas por el Ministerio de Justicia mediante Resoluciones Nos. 1683 y 2938 de 1984, que no figuran en el artículo primero del presente decreto, continuarán prestando su concurso a la Comisión Asesora *para la elaboración del Código de Procedimiento Penal,* en las mismas condiciones establecidas en dichas Resoluciones" (Subraya la Corte).

7. En el Folio 160 del expediente aparece copia de la Resolución Ministerial número 1683 del 1° de agosto de 1984, "Por la cual se crean unas comisiones asesoras para la Administración de Justicia". Una de esas comisiones (art. 1°), se denomina "Comisión sobre Carrera y Escuela Judiciales", encargada –al tenor de la Resolución– "del estudio de los proyectos existentes sobre la materia y de los que considere necesario proponer, y está integrada así: "El viceministro de Justicia, Coordinador: un Delegado del Departamento Administrativo del Servicio Civil; un Delegado de la Escuela Superior de Administración Pública; un Delegado del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior; un delegado de la Procuraduría General de la Nación; un delegado de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Asonal).

8. La Presidencia de la República remitió también (Folio 165 del expediente), copia del Acta No. 11 del 19 de Diciembre de 1986, de la Comisión Asesora para la Reforma del Código de Procedimiento Penal, la cual, "atendiendo el llamado del señor Ministro de Justicia doctor Eduardo Suescún Monroy emitió concepto "sobre el tema de la Carrera Judicial".

Análisis constitucional

Del material probatorio en referencia se concluye:

A. Las personas designadas para asesorar al Gobierno a nombre de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes gozaban de plena competencia para actuar en relación con el ejercicio de *todas* las facultades conferidas por la Ley 52 de 1984, tanto en su artículo 1° como en su artículo 2°, según el texto de la Resolución ya mencionada.

B. No sucedió lo mismo con la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado, la cual –según el material allegado– designó dos veces la misma Comisión mediante resoluciones con igual número e idéntica fecha, aunque con diferente competencia, según los dos diversos textos que obran en el expediente (Ver Folios 93 y 145).

¿Cuál de las dos resoluciones hizo la designación?

No corresponde a la Corte decidirlo, pues ello es competencia de la jurisdicción

en lo Contencioso-Administrativo, pero, a los efectos de este proceso, es relevante el hecho de que en ninguna de las dos resoluciones nombradas se hizo referencia expresa a las facultades extraordinarias relacionadas con la Carrera Judicial.

C. Las personas designadas por el Gobierno Nacional, tampoco lo fueron con competencia específica para asesorarlo en la expedición del Estatuto de Carrera Judicial.

A la Comisión nombrada para elaborar el proyecto de Código de Procedimiento Penal se sometió, para su estudio, el Proyecto de Estatuto de la Carrera Judicial.

D. La Comisión creada mediante Resolución 1683 de 1984, expedida por el Ministerio de Justicia, no es ni puede ser la que ordenó el artículo 3° de la Ley 52 de 1984, por dos razones:

– Tal resolución fue dictada el 1° de agosto de 1984, cuando ni siquiera se había expedido la Ley 52, cuya fecha de sanción es 28 de diciembre de 1984.

– La ley 52 exigía que los expertos de las comisiones fuesen designados por *El gobierno,* integrado según el artículo 57 de la Constitución por el Presidente de la República y el Ministro del Ramo correspondiente y no tan sólo por este último.

E. Es evidente la difícil interpretación de la Ley de Facultades, como aparece al estudiar el texto del artículo 3°, cuyo tenor literal puede ser entendido tanto en el sentido de que se requería una comisión para cada facultad conferida, consideradas ellas en forma individual, como en el de necesitarse tan solo dos comisiones: una para las facultades previstas en el artículo 1° y otra para las del artículo 2°. Esta última interpretación parece acomodarse más a los antecedentes legislativos de los proyectos que luego se convirtieron en la Ley 52 de 1984, pero tropieza con la dificultad inherente a la peculiar redacción de su artículo 2°, que no deja certeza acerca de su autonomía en cuanto al otorgamiento de facultades extrarodinarias, lo cual a su vez llevaría a fijar el alcance de la expresión "sendas" y de las palabras "en cada una de ellas" y "para cada una de ellas", usadas en forma redundante por el artículo 3°, como una comisión para cada facultad de las contempladas en el artículo 1°.

De lo expuesto concluye la Corte que, si bien las personas integrantes de la Comisión prevista por el artículo 3° de la Ley de Facultades no fueron todas designadas con la competencia expresa para asesorar al Gobierno en la materia específica de la Carrera Judicial, como puede colegirse del Decreto número 728 de 1985 y de la Resolución 001 del mismo año de la Comisión Primera del Senado de la República, ello es atribuible a la confusa redacción de la Ley 52 de 1984, cuyos equívocos términos dieron lugar a dificultades de interpretación sobre su verdadero alcance. Esto ha quedado suficientemente demostrado tanto en el análisis del material probatorio como en las deliberaciones de las Salas Constitucional y Plena de la Corte.

Siendo oscuro el texto de la ley, el Gobierno podía escoger entre las varias alternativas de interpretación. Por tanto, considera la Corte que no hay lugar a una declaratoria de inexequibilidad por este motivo y pasará a resolver sobre el fondo de las demás acusaciones que formula el actor contra el decreto acusado.

4. *El Decreto número 052 de 1987 frente a los cargos de la demanda*

De conformidad con el artículo 1° de la Ley 52 de 1984, estaba facultado el Ejecutivo para "revisar, reformar y poner en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial".

Cree la Corte que, siendo ésta una función del legislador, de acuerdo con lo indicado en los artículos 76-10 y 162 de la Constitución, podía el Gobierno ejercerla revestido de facultades extraordinarias (art. 76, ord. 12 C.N.) y que tal ejercicio es constitucional siempre y cuando, de una parte, se hayan respetado los límites de tiempo y materia señalados por el Congreso y, de otra, no hayan sido desconocidos ni vulnerados, por motivos diferentes, los preceptos del Código Fundamental.

Ya se dijo que el requisito de la temporalidad se cumplió debidamente en el presente caso.

Por cuanto se refiere al contenido del decreto impugnado, la Corte distinguirá varios temas:

1. Las disposiciones que definan los objetivos, modalidades y mecanismos de operación de la Carrera Judicial, difieren de las del Decreto número 2400 de 1986, pues mientras en éste se estructuraba la Carrera bajo la dirección y administración de la Escuela Judicial, organismo perteneciente a la Administración, desconociéndose así claros mandatos constitucionales sobre la separación de las ramas del Poder Público, según ya lo expresó la Corte en fallo del 3 de marzo de 1987, el Decreto que ahora se estudia deja el manejo de la Carrera Judicial (artículo 8°), en manos del Consejo Superior de la Administración de Justicia, los Consejos Seccionales de la Carrera, las Corporaciones Judiciales y los Jueces. Integrado el Consejo Superior de la Administración de Justicia por sendos delegados de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Tribunal Disciplinario, un representante de los funcionarios y otro de los empleados de la Rama Jurisdiccional (art. 9°), y los Consejos Seccionales por delegados de los Tribunales Superiores, de los Tribunales Administrativos y de los Jueces (art. 15), no se ve que el Estatuto de lugar a una indebida injerencia del Ejecutivo en la carrera misma ni tampoco en su forma de operación, excepto en cuanto prevé que los Consejos estarán conformados también por el Ministro de Justicia y el Procurador General de la Nación o sus delegados, y que serán presididos por los representantes del Ejecutivo, pues en esos aspectos resulta conculcada la autonomía de la Rama Jurisdiccional y violados, por tanto, los artículos 2° y 55 de la Constitución Nacional. En cuanto al Procurador se refiere, su presencia dentro del Consejo no sería inexequible si el Decreto hubiera previsto una sola carrera, común para servidores judiciales y del Ministerio Público, ya que se justificaría su intervención dada la unidad del proceso, en la escogencia de estos últimos. Pero los artículos 104 a 113 consagran la carrera en las fiscalías en forma totalmente autónoma e independiente de la propiamente judicial, bajo la orientación del Consejo Superior de la Carrera de las Fiscalías, presidido por el Procurador General de la Nación o su delegado. Por eso no se explica constitucionalmente que, en tales circunstancias dicho funcionario haga parte de un cuerpo encargado de seleccionar a los servidores de la Rama Jurisdiccional y, por el contrario, es patente la inconstitucionalidad de la norma en cuanto instituye una participación del Ministerio Público en el ejercicio de

atribuciones propias y autónomas de las corporaciones y nominadores que integran dicha Rama.

Por otro lado, los artículos 9º y 15 señalan que, en las decisiones sobre la carrera, el Ministro de Justicia y sus delegados únicamente tendrán derecho a voto en caso de empate, lo que, si bien hace eventual y no permanente el poder decisorio en cabeza del Ejecutivo, implica una intervención que coarta la autonomía nominadora de la Rama Jurisdiccional, como bien lo advierte el concepto de la Procuraduría, con clara violación del artículo 55 del Estatuto Fundamental.

En cuanto atañe a la Escuela Judicial, el Título XII del Decreto la define como organismo especial de carácter docente, cuyos objetivos son la enseñanza, formación y adiestramiento de funcionarios y empleados, así como la investigación y difusión de las ciencias jurídicas y de las técnicas requeridas para el desarrollo y perfeccionamiento de las funciones asignadas a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio Público, con labores de capacitación, actualización y adiestramiento. Estas disposiciones, que organizan una Escuela Judicial ajena a las tareas nominadoras y de administración de personal que le otorgaba el Decreto número 2400 de 1986, en nada riñen con la Carta Política ni exceden las facultades extraordinarias, ya que encajan perfectamente dentro del ámbito por ellas señalado.

En efecto, no se asigna a la Escuela Judicial la función de trazar políticas y programas para la Carrera, ni le corresponde efectuar las convocatorias a concurso para la provisión de cargos, ni tampoco elaborar listas de aspirantes, atribuciones todas ellas que los artículos 10 y 17 del Decreto han dejado a cargo del Consejo Superior de la Administración de Justicia y de los Consejos Seccionales. Esto, con las salvedades que más adelante se hacen, no quebranta el orden constitucional.

2. Tampoco han sido desconocidas las normas superiores en virtud del procedimiento que, para la selección e ingreso a la Carrera Judicial señalan los artículos 21 a 39 del Decreto número 052 de 1987, ya que la convocatoria a los concursos correspondientes, para los casos de vacancia o proximidad del vencimiento del período, habrá de verificarse previo acuerdo entre el Consejo de la Carrera y el nominador. Posteriormente, realizadas las pruebas, compete su calificación al nominador o a las comisiones designadas al efecto por las Corporaciones Judiciales. En firme la calificación, se procede al nombramiento del ganador o ganadores en orden de resultado según el número de cargos.

En modo alguno puede pensarse que a través de esta normatividad haya excedido el gobierno las facultades extraordinarias con las que lo invistió el legislativo, pues se trataba cabalmente de "establecer los sistemas de concurso para la selección de candidatos", según las voces del artículo 162 de la Carta, punto primordial para "poner en funcionamiento" la Carrera al tenor de las autorizaciones concedidas por la Ley 52 de 1984. Despojados ya esos sistemas de la inconstitucional intervención de organismos y funcionarios extraños a la Rama Jurisdiccional, bien podía el legislador extraordinario señalar cualquiera de las distintas posibles modalidades para la operación de los mismos, pues el Constituyente no tomó partido acerca de los métodos concretos de selección y concurso, aspectos que dejó a la libre determinación de la ley.

En el criterio de la Corte, siendo objetivo de toda carrera la posibilidad de ascenso dentro de la misma con base en los méritos logrados en el desempeño de cargos inferiores y el ingreso a ella previa selección de los aspirantes según su preparación, es apenas natural que se establezcan medios y procedimientos para alcanzar esos fines. Tal como lo expresa el artículo 162 de la Constitución, es el legislador el competente para determinarlos, razón por la cual se hallaba facultado el Ejecutivo para hacerlo, a la luz de la Ley tantas veces mencionada.

No obstante, vulnera las disposiciones constitucionales el artículo 29, inciso 1° del Decreto, en cuanto dispone que, una vez en firme la calificación, se procederá al nombramiento del ganador o ganadores "en estricto orden de resultado", lo cual elimina la posibilidad de elección por parte del nominador. Lo propio puede afirmarse de las expresiones "en riguroso orden de méritos" contenidas en el segundo inciso del mismo artículo.

En uno y otro caso resulta distorsionado el objeto del concurso, al que da lugar el artículo 162 de la Constitución, pero que se establece como medio para seleccionar los elegibles, *entre los cuales* el nominador –dentro de la autonomía que la Carta le otorga (artículos 156, 157 y 158 en cuanto a la Administración de Justicia, 144 y 146 respecto del Ministerio Público)– escogerá a quien haya de nombrar.

En todo caso, aunque las indicadas expresiones riñen con el estatuto constitucional por la razón que se deja expuesta y, por tanto, declarada su inexequibilidad no será obligatoria para los nominadores la designación de funcionarios y empleados con absoluta sujeción al orden de resultado de los concursos, sí sería conveniente y aconsejable que lo hicieran en beneficio de la mejor administración de justicia.

3) Las normas que regulan la carrera para funcionarios de la Rama Jurisdiccional (Magistrados de Tribunal y Jueces) no vulneran las previsiones constitucionales sobre la elección de éstos, pues en nada contraría ésta última facultad el que ellas establezcan las condiciones en que dicha elección debe realizarse.

La Carta Política ha previsto que la designación de Magistrados y Jueces no es un acto discrecional sino reglado, sujeto a los requisitos que ella misma impone y a los que señale la ley cuando desarrolle la autorización constitucional de establecer la carrera judicial (Art. 162 C.N.)

Por otra parte, no es incompatible la existencia de períodos como los previstos por la misma Constitución en el Título XV (artículos 157 y 158), con un estatuto de carrera para los funcionarios, pues ambas instituciones están consagradas en normas de la misma jerarquía que deben ser interpretadas armónicamente, complementando una con otra, y no en forma que se excluyan, pues esto último llevaría a la solución jurídicamente inaceptable de anular o desconocer una de las dos. Si se dice que no puede existir carrera porque la Constitución prevé que los jueces tienen período, igualmente podría decirse que éste no puede tenerse en cuenta por razón del establecimiento de aquélla.

En sentir de la Corte, las normas jurídicas deben interpretarse de manera que generan algún efecto y no de modo estéril o que conduzca al absurdo. Para el caso concreto, se trata de una carrera que contempla estabilidad por el tiempo del período,

el derecho al ascenso a cargo de rango superior (artículo 1° del Estatuto) e implícitamente el derecho a la reelección, cuando el inciso 2° del artículo 51 dispone que "dos calificaciones insatisfactorias darán lugar a la insubsistencia tratándose de empleados, y si se tratare de funcionario, no será reelegido".

Esa vocación a la reelección que armoniza perfectamente tanto con la figura de la carrera como con el período, está plasmada en el Decreto acusado por reenvío que él hace al artículo 67 del Decreto número 2400 de 1986, el que a su vez decía textualmente:

"Artículo 67. El funcionario judicial inscrito en la carrera, al vencimiento del período correspondiente, tendrá derecho a ser nuevamente designado mediante nombramiento en propiedad por la respectiva autoridad nominadora, siempre que dentro de dicho período no haya tenido calificaciones de servicio insatisfactorias o recibido sanciones disciplinarias, de conformidad con el reglamento que se expida.

"Parágrafo. Para dar efectividad a lo dispuesto en el presente artículo, el presidente de la respectiva corporación judicial deberá someter a consideración de la entidad en pleno, el nombre de los funcionarios que se encuentren inscritos en carrera".

Esta última norma fue declarada inexequible por la Corte en sentencia del 3 de marzo de 1987, pero no por desconocer el período sino porque su aplicación había sido confiada a un órgano de la Rama Ejecutiva. Por ello, si vamos al espíritu del legislador en el Decreto número 052 de 1987, hemos de concluir que es el de asegurar a la persona que al final de su período tendrá vocación a ser reelegido siempre que su comportamiento y rendimiento, calificado en forma legal, sea satisfactorio, sistema a todas luces compatible con la carrera judicial, a que se refiere el artículo 162 de la Constitución.

4. Juzga la Corte que una cosa es la carrera judicial, entendida como sistema tendiente a preservar la estabilidad en los empleos y la promoción y ascenso dentro de las diferentes escalas, lo cual conforma un conjunto de garantías a favor de los funcionarios y empleados que a ella pertenecen, y otra muy distinta es la función pública de la administración de justicia y el ejercicio de los cargos creados por la Constitución y la Ley para desarrollarla. Esta última es un servicio público a cargo del Estado y abarca tanto la actividad de las personas inscritas en carrera, como la de quienes no lo están; unos y otros tienen ante el derecho colombiano el carácter de servidores de la administración de justicia y sus funciones así como los requisitos para acceder a los cargos correspondientes y el estatuto que los rigen deben ser determinados por la ley de manera independiente a la carrera judicial.

Por tanto, no puede entenderse que dictar normas sobre la carrera sea lo mismo que regular los distintos aspectos de la Administración de Justicia. Ni puede creerse que ingresar a la Carrera Judicial sea igual que ingresar al servicio de la Rama Jurisdiccional.

La Ley 52 de 1984 autorizó al Presidente para legislar sobre Carrera Judicial pero esa facultad no incluía la de establecer normas generales sobre la administración de justicia, ni la de señalar cuáles son las funciones correspondientes a todos los

servidores de la misma, y menos aún la de regular el ejercicio de los cargos de libre designación, los cuales, por definición, no son de carrera.

Por ende, siendo más amplio el ámbito de la función pública de administrar justicia que el de la carrera judicial, tanto por su materia y naturaleza como por las personas a que una y otra se refiere, se considera que violan la Carta Política por exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias, todas aquellas disposiciones del Decreto número 052 de 1987 encaminadas a legislar de modo general sobre la justicia o el régimen de sus empleados en cuanto no toquen con la carrera judicial. Es el caso de los artículos 3°, 6°, 40, 41, 50, 79, literal a), 87, inciso 2°, 114, 117, 119, 121, 123, 124 y 126 a 130, en cuanto hacen previsiones que afectan bien a la Rama Jurisdiccional en sí misma considerada, bien a funcionarios o empleados de libre designación y que, por tanto, escapaban a la expresa competencia legislativa del Gobierno en lo no relacionado con la Carrera.

5. Salvo la función que se atribuye al Procurador General en el sentido de calificar la conducta, organización y rendimiento de los funcionarios y empleados judiciales (art. 47), que desborda las atribuciones constitucionales del Ministerio Público e invade la autonomía de la Rama Jurisdiccional, las demás disposiciones sobre calificación de servicios (artículo 44 a 52 del decreto demandado) se ajustan a las facultades que se otorgaron al Gobierno, pues la función de evaluar la conducta y actividad de los funcionarios y empleados de carrera es uno de los elementos fundamentales para que ésta funcione. Tampoco la descripción de atribuciones (art. 40) ni el señalamiento de requisitos para desempeñar los cargos (art. 41), en lo referente a empleados y funcionarios de carrera, ya que son disposiciones que permiten, la una establecer el marco de referencia funcional para la calificación de servicios y el cumplimiento de los deberes, y la otra estructurar la carrera judicial según nomenclatura y clasificación para ingreso y ascenso dentro de ella, respecto de todo lo cual podía legislar el Ejecutivo en el marco de las autorizaciones que se le concedieron.

6. Afirman el demandante y el señor Procurador que todas las disposiciones del Decreto número 052 por medio de las cuales se introdujo la Carrera en las fiscalías, vulneran la Constitución por no hallarse incluidas dentro de la órbita de las facultades extraordinarias.

Empero, se advierte que el numeral 10 del artículo 76 de la Constitución contempla tan solo tres tipos de carrera: la administrativa, la judicial y la militar. El artículo 162 por su parte, ordena a la Ley el establecimiento de la carrera judicial y de los sistemas de concurso "para la selección de los candidatos que hayan de desempeñar los cargos judiciales *y los del Ministerio Público*" (subraya la Corte), de donde se colige que, cuando la Ley 52 de 1984, facultó al Ejecutivo para reformar, revisar y poner en funcionamiento la carrera judicial, estaba refiriéndose tanto a la relacionada con los cargos judiciales como a los del Ministerio Público.

Ello armoniza también con la previsión del artículo 142, inciso 3° de la Carta, a cuyo tenor "los funcionarios del Ministerio Público tendrán la misma categoría, remuneración, privilegios y prestaciones que los Magistrados y Jueces ante quienes ejercen su cargo". De todo lo dicho se concluye en la constitucionalidad del Capítulo

correspondiente a la Carrera en las Fiscalías, en cuanto no representa un desbordamiento de las facultades excepcionales, sino que, al contrario, forma parte del desarrollo de las mismas.

También en torno al tema de la Carrera Judicial en las fiscalías, dice el artículo 110 del Decreto demandado que los procuradores regionales efectuarán las convocatorias y elaborarán las listas de los admitidos a concurso para la integración de las ternas de fiscales de Juzgados. Agrega que lo propio harán en cuanto a las listas de los candidatos admitidos a concurso para la provisión de cargos de empleados en las fiscalías de tribunales y juzgados.

Tampoco en este caso encuentra la Corte infracción de las disposiciones constitucionales, específicamente de las contenidas en el artículo 144, inciso 3°, según el cual los fiscales de los Juzgados Superiores y de los Juzgados de Circuito serán designados por el Procurador General de la Nación "de listas presentadas por los fiscales de los respectivos tribunales superiores".

En efecto, aunque pudiera parecer que lo ordenado por el artículo 110 del Decreto número 052 contradice el precepto superior que se acaba de citar, ello no es así, ya que la labor encomendada a los procuradores regionales no es la de elaborar ni la de presentar las listas para la elección de fiscales, sino que consiste en efectuar las convocatorias y elaborar listas *"de los admitidos a concurso* para la integración de las ternas" (subraya la Corte). De tal modo que no resulta usurpada la función de los fiscales sobre elaboración de listas de elegibles para que el Procurador escoja, pues tales listas no se hacen según el artículo 110 sino de acuerdo con el 113 del Decreto, que dice: "La elaboración y calificación de pruebas le corresponde al Procurador General de la Nación cuando se trate de los fiscales de los tribunales, a los fiscales de Tribunales las de fiscales de juzgados superiores y de Circuito y a los fiscales las de sus empleados".

En consecuencia, no está contrariada la disposición constitucional aludida, ni puede afirmarse tampoco que el establecimiento de previsiones sobre concurso y listas en el Ministerio Público lesione el artículo 118, ordinal 8°, de la Constitución por posible exceso en el uso de las facultades extraordinarias, teniendo en cuenta lo ya explicado en relación con la generalidad del Título XIII.

7) Igualmente se encuentran ajustados a la Carta, por cuanto no exceden las facultades extraordinarias, dada su íntima relación con el funcionamiento de la Carrera Judicial, ni desconocen preceptos superiores, los títulos VI (Derecho y Deberes), VII (Inhabilidades e incompatibilidades), VIII (Faltas disciplinarias), IX (Régimen disciplinario), X (Procesos Disciplinarios) y XI (Estímulos) del Decreto cuya constitucionalidad se estudia, razón por la cual serán declarados exequibles salvo lo ya dicho respecto de algunos de sus artículos en particular.

8. Los artículos 131 y 138 del Decreto demandado consagran disposiciones relativas al Presupuesto Nacional, tales como apropiaciones, traslados, créditos y contracréditos, materias éstas pertenecientes al ramo del Ministro de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con el artículo 57 de la Constitución, integran el Gobierno el Presidente de la República y el Ministro del ramo o el Jefe del Departamento Administrativo correspondiente, y ningún acto del Presidente, excepto el nombramiento de dichos funcionarios, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea refrendado y comunicado por el respectivo Ministro o Jefe de Departamento Administrativo.

Aunque el tema de la carrera judicial es de la incumbencia del Ministro de Justicia, único de los Ministros que firmó el Decreto objeto de la acción, las aludidas materias presupuestales requerían la firma del titular de Hacienda, quien, en cuanto a ellas, es "el Ministro del ramo" según la Constitución.

Por tanto, los dos artículos citados carecen de validez constitucional.

9. Los demás artículos del Decreto objeto de acción se ajustan a la Ley de Facultades, pero todos tienden a la reforma, revisión y puesta en funcionamiento de la Carrera Judicial, tal como lo autorizó la Ley 52 de 1984 y lo contempla la propia Constitución en su artículo 162.

5. *Alcance del fallo*

El objeto de esta providencia, tomando en consideración los ataques que contra el Decreto acusado se formulan en la demanda, es el de resolver acerca de la constitucionalidad del mismo *en su integridad,* por dos aspectos primordiales: consulta previa a la Comisión Asesora y sujeción a la ley de facultades.

Empero, aunque la decisión en torno a la totalidad del Decreto número 052 de 1987 habrá de referirse únicamente a los indicados cargos, cabe advertir que, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 29 del Decreto número 432 de 1969, dado que la Corte ha encontrado desde ahora que algunas de sus normas son claramente violatorias de la Carta, aun por motivos distintos de los que alega el actor, hará la correspondiente declaración de inexequibilidad.

Como no escapa a la Corte la extensión y complejidad del Decreto en estudio y teniendo en cuenta que el carácter definitivo de las sentencias no hace de ellas pronunciamientos absolutos, en el sentido de que comprendan la totalidad de su análisis constitucional, mal puede cerrarse la puerta a futuras demandas sobre distintos aspectos de las disposiciones de aquél, consideradas individualmente. En consecuencia, analizados los cargos generales y detectadas algunas normas ostensiblemente contrarias al estatuto constitucional, serán ellas declaradas inexequibles por las razones expuestas. La exequibilidad de las restantes se limitará, en la parte resolutiva de esta sentencia, al aspecto formal propuesto en la demanda (Consulta a una Comisión Asesora integrada conforme a la Ley 52 de 1984), y al sometimiento del Estatuto a la ley de facultades extraordinarias.

VI. Decisión

Con apoyo en la motivación que antecede, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

1. Declárase INEXEQUIBLES los artículos 79, literal a); 87, inciso 2°; 114, 118, 119, 121, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 138 del Decreto-ley número 052 de 1987. "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial".

2. Declárase EXEQUIBLES las siguientes normas del mencionado Decreto:

a) El artículo 3° del Decreto-ley número 052 de 1987, excepto en la parte que dice: "para los empleados de libre designación", la cual se declara inexequible.

b) El artículo 9°, excepto las siguientes partes, las cuales se declaran inexequibles:

– "El Ministro de Justicia o su delegado quien lo presidirá";

– "El Procurador General de la Nación o su Delegado";

– "En decisiones sobre la carrera, el Ministro de Justicia sólo tendrá voto en caso de empate".

c) El artículo 15, salvo en las siguientes expresiones, las cuales se declaran inexequibles:

– "Un delegado del Ministro de Justicia, quien lo presidirá";

– "En decisiones sobre la Carrera el Delegado del Ministro sólo tendrá voto en caso de empate".

d) El artículo 29, con excepción de las frases en estricto orden de resultado y "en riguroso orden de mérito", las cuales se declaran inexequibles.

e) Los artículos 40 y 41, excepción hecha de las secciones referentes a los siguientes cargos, las cuales se declaran inexequibles:

– Auxiliar de Magistrado y Abogado Asistente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

– Auxiliar Judicial de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

– Chofer.

f) El artículo 47, salvo en la parte que autoriza al Procurador General de la Nación para calificar la conducta, organización y rendimiento de los funcionarios y empleados judiciales, la cual se declara inexequible.

3. Declárase EXEQUIBLES todas las demás normas del mencionado Decreto, en cuanto la Comisión Asesora dispuesta por el artículo 3° de la Ley 52 de 1984 fue consultada y en cuanto el Presidente de la República no excedió las facultades extraordinarias que le confirió la misma Ley.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

El suscrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia,

HACE CONSTAR:

Que los magistrados Gustavo Gómez Velásquez y Lisandro Martínez Zúñiga no participaron en la discusión y aprobación de la Sentencia que antecede por cuanto se encuentran fuera del país en una comisión especial.

Expedida en Bogotá, a los dos días del mes de julio de mil novecientos ochenta y siete.

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

ANEXO No. 1 EXPEDIENTE No. 1587

DECRETO NUMERO 52 DE 1987
(enero 13)

"Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la Carrera Judicial

"El Presidente de la República de Colombia en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 1° ordinal 3° de la Ley 52 de 1984 y previo concepto de la Comisión Asesora creada por dicha ley,

"D E C R E T A:

"TITULO I

Normas Generales

"Artículo 1° La carrera Judicial tiene por objeto garantizar la eficiente Administración de Justicia y, con base en el sistema de méritos, asegurar en igualdad de oportunidades el ingreso y ascenso en el servicio de funcionarios y empleados con estabilidad e independencia.

"Artículo 2° Son funcionarios los magistrados, jueces y fiscales de la República. Las demás personas que ocupen cargos en la Rama Jurisdiccional y en las fiscalías tienen la calidad de empleados.

"Artículo 3° El ingreso al servicio de la Administración de Justicia se hará en propiedad, en interinidad o por encargo para los empleados de libre designación. Por nombramiento en propiedad, en período de prueba o en provisionalidad para los de carrera. En todo caso la provisión de los cargos se hará con el lleno de los requisitos constitucionales y legales exigidos para el ejercicio de los mismos.

"Artículo 4° El nombramiento en carrera judicial únicamente podrá recaer en persona seleccionada mediante el sistema de méritos.

"Artículo 5° El sistema de méritos se establece con la finalidad de asegurar el ingreso y promoción en la Administración de Justicia, de las personas más idóneas, mediante el análisis y evaluación de sus calidades, conocimientos, capacidad, vocación y experiencia.

"Artículo 6° El nombramiento en período de prueba será de dos años para magistrados, un año para jueces y ocho meses para empleados.

"No habrá período de prueba en casos de ascenso ni para las personas que hubieren prestado servicios en la jurisdicción, durante más de un año.

"Artículo 7° Todos los cargos de la Rama Jurisdiccional y de las fiscalías son de carrera y deberán ser provistos por el sistema de méritos contemplado en el presente decreto.

"No pertenecen a la carrera y son de libre designación los siguientes;

"– Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Consejero de Estado.

"– Fiscal del Consejo de Estado.

"– Auxiliar de magistrado y Abogado asistente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

"– Auxiliar judicial de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

"– Chofer.

"TITULO II

"Administración de la Carrera

"Artículo 8° La Carrera Judicial será administrada por el Consejo Superior de la Administración de Justicia, los Consejos Seccionales de la Carrera, las Corporaciones Judiciales y los Jueces, con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional y de las Oficinas Seccionales de la Carrera.

"Artículo 9° El Consejo Superior de la Administración de Justicia quedará integrado así:

"– El Ministro de Justicia o su delegado quien lo presidirá.

"– Un delegado de la Corte Suprema de Justicia.

"– Un delegado del Consejo de Estado.

"–Un delegado del Tribunal Disciplinario.

"– El Procurador General de la Nación o su delegado.

"– Un representante de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional.

"– Un representante de los empleados judiciales.

"En decisiones sobre la carrera, el Ministro de Justicia, sólo tendrá voto en caso de empate. El Director Nacional de la Carrera actuará como secretario.

"Artículo 10. Además de las funciones señaladas por la ley, el Consejo tendrá las siguientes:

"1. Fijar políticas y programas para convocatorias, selección, ingreso y ascenso en la carrera.

"2. Efectuar las convocatorias a concurso para la provisión de cargos de magistrados de Tribunal y de empleados de la Corte Suprema de Justicia.

"3. Elaborar las listas de aspirantes admitidos a concursos para magistrados de tribunales, y empleados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, con calificación de antecedentes, y remitirlas a sus nominadores.

"4. Inscribir en la carrera a magistrados de tribunales y empleados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

"5. Resolver los recursos de reposición.

"6. Elegir al Director Nacional de la Carrera Judicial.

"7. Formular la política de capacitación para los cursos de selección y los concursos para el ingreso a la carrera.

"8. Asesorar y recomendar políticas de capacitación para la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público.

"Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos y funciones del Consejo Superior de la Administración de Justicia, créase la Dirección Nacional de la Carrera Judicial con la siguiente estructura:

"1. *Director Nacional de la Carrera Judicial*

"1.1 División de carrera judicial y de Coordinación Administrativa.

"2. *Oficinas seccionales de carrera*

"2.1 Jefaturas seccionales

"Artículo 12. Para ser Director Nacional de la Carrera Judicial se requiere título de abogado, diez (10) años de experiencia jurisdiccional, administrativa o docente en educación superior y gozar de amplia reputación personal y reconocido prestigio profesional.

"Artículo 13° Son funciones del Director Nacional de la Carrera Judicial:

"1. Coordinar y controlar el régimen de convocatorias.

"2. Presentar a la consideración del Consejo Superior los proyectos para el desarrollo y correcto funcionamiento de la carrera.

"3. Divulgar las políticas y programas adoptados por el Consejo Superior y coordinar y controlar su aplicación.

"4. Rendir informe anual al Consejo Superior y los demás que éste le solicite.

"5. Proyectar para consideración del Consejo las decisiones de inscripción en la carrera judicial.

"6. Llevar el escalafón nacional de empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional.

"7. Instruir a los jefes seccionales de la carrera y asesorar a los Consejos Seccionales.

"8. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección a su cargo.

"9. Las demás que le asigne el Consejo Superior.

"Artículo 14. Corresponden a la División de Carrera y Coordinación Administrativa las funciones de:

"1. Clasificación, inspección y control de la carrera.

"2. Llevar el registro de inscripción y el escalafón de la carrera.

"3. Proyectar resoluciones para la consideración y aprobación del Consejo Superior.

"4. La provisión de los servicios generales y administrativos al Consejo Superior, a la Dirección Nacional y a los Consejos y jefes seccionales.

"5. Suministrar a los nominadores los medios y ayudas necesarias para la realización de las pruebas y su calificación.

"6. Efectuar por orden del Consejo Superior y del Director las convocatorias y demás actuaciones pertinentes.

"Artículo 15° Los Consejos Seccionales de la carrera funcionarán en cada uno de los distritos judiciales con sede en capital de departamento y estarán integrados así:

"– Un delegado del Ministro de Justicia quien lo presidirá.

"– Un delegado por cada uno de los tribunales superiores con sede en el respectivo departamento.

"– Un delegado del Tribunal Administrativo.

"– Un representante de los jueces.

"En decisiones sobre la carrera, el delegado del Ministro sólo tendrá voto en caso de empate.

"Parágrafo 1° En el Consejo Seccional de Cundinamarca el Tribunal Superior de Aduanas tendrá un representante.

"Parágrafo 2° En los departamentos que tengan un solo Tribunal Superior de Distrito Judicial, este tendrá dos representantes en dicho consejo.

"Artículo 16° Los representantes de las corporaciones, funcionarios, jueces y de los empleados en el Consejo Superior y en los Seccionales, serán elegidos por mayoría para períodos de cuatro años con sus respectivos suplentes, en fecha y según reglamento que expida el Consejo Superior de la Administración de Justicia.

"Artículo 17° Los Consejos Seccionales funcionarán bajo la orientación del Consejo Superior de la Administración de Justicia y tendrán las siguientes funciones dentro del ámbito de su territorio:

"1. Desarrollar las políticas y programas fijados por el Consejo Superior de la Administración de Justicia para administrar la carrera judicial.

"2. Efectuar las convocatorias a concursos para la provisión de cargos de jueces, de empleados de tribunales y de juzgados.

"3. Elaborar y remitir a las entidades nominadoras las listas de aspirantes admitidos a concursos para los cargos anteriores con sus respectivas calificaciones.

"4. Inscribir en la carrera a los jueces y empleados señalados.

"5. Resolver los recursos de reposición.

"6. Remitir a la Dirección Nacional de la carrera los documentos para el escalafón nacional de jueces y empleados y todos los demás que le sean requeridos.

"7. Recomendar la realización de cursos de capacitación para el personal al servicio de la Rama Jurisdiccional.

"Artículo 18. Para ser Jefe Seccional de la carrera se requiere título de abogado y tener cinco (5) años de experiencia administrativa, jurisdiccional o docente en educación superior.

"Artículo 19. El Jefe Seccional de la carrera judicial ejercerá las mismas funciones del Director Nacional que le resulten pertinentes, en el ámbito de su competencia y bajo la orientación del Director y del Consejo Seccional de la carrera.

"Artículo 20. A las entidades y autoridades nominadoras les corresponde, en cuanto a la selección de personal elegible para el ingreso y ascenso en la carrera, la realización y calificación de pruebas, que pueden consistir en cuestionarios, test, cursos, concurso, entrevistas y otras que estimen pertinentes.

"TITULO III

"Proceso de selección e ingreso

"Artículo 21. La selección para el ingreso o ascenso en la carrera se hará por el sistema de méritos y comprende la convocatoria, el concurso y el período de prueba.

"Todo concurso será abierto y podrán participar quienes pertenecen a la carrera, al servicio o personas ajenas a ellos.

"Artículo 22° La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de todo concurso y se divulgará mediante aviso que deberá contener las generalidades del empleo, requisitos, documentos exigidos, características y demás informaciones pertinentes.

"Artículo 23. Producida una vacante o ante la proximidad del vencimiento del período, el nominador informará inmediatamente en el primer caso y coordinará, en ambos, con los consejos, las fechas, modalidades y bases del concurso para efectos de la convocatoria.

"Artículo 24. Efectuada la inscripción el Consejo de la Carrera determinará, previa revisión de requisitos y antecedentes, cuáles de los aspirantes pueden participar en el concurso.

"Esta decisión será notificada mediante aviso que se fijará por ocho días; los aspirantes no admitidos podrán interponer recurso de reposición motivado, dentro de los tres (3) días siguientes y resolverá en los diez (10) días posteriores.

"Cumplido lo anterior se remitirá la lista con las calificaciones al nominador.

"Artículo 25. La realización de pruebas, exámenes, entrevistas, concursos u otros para la selección de personal, se hará con el apoyo técnico, operativo y administrativo de la Dirección Nacional y Seccionales de la carrera u otras entidades especializadas en la materia, y serán calificadas por el nominador o las comisiones designadas al efecto por las Corporaciones Judiciales.

"En ningún caso la entrevista podrá utilizarse como única modalidad de concurso.

"Artículo 26. El concurso podrá realizarse por grupos de participantes cuando fuere conveniente por el número de concursantes, cargos a proveer u otras razones, En este caso para cada uno de los grupos deberá elaborarse la lista de admisibles con sus respectivas calificaciones de antecedentes.

"Artículo 27. El nominador, o la comisión designada, elaborará la lista de los resultados por riguroso orden de méritos, entre quienes hubieren aprobado el concurso.

"Este resultado con indicación de puntajes se notificará por aviso fijado en la secretaría correspondiente durante ocho (8) días.

"Desfijado el aviso cualquier concursante dentro de los tres (3) días siguientes podrá interponer recurso de reposición motivado que se resolverá en ocho (8) días.

"Artículo 28. Será causal de retiro de la lista el fraude comprobado en la realización del concurso o el error evidente en el proceso de selección.

"Artículo 29. En firme la calificación, se procederá al nombramiento del ganador o ganadores en estricto orden de resultado, según el número de cargos.

"Quienes hubieren aprobado el concurso, y se encuentren ubicados dentro de los cinco primeros puestos, si no fueren nombrados permanecerán en lista de elegibles, en riguroso orden de méritos, por el lapso de dos (2) años y podrán ser designados en cargos de igual naturaleza y categoría en el mismo distrito.

"Artículo 30. En la calificación de antecedentes la experiencia judicial tendrá valoración preponderante, según escala de puntaje que establezca el Consejo Superior de la Administración de Justicia.

"Realizado el concurso y en igualdad de resultados, se designará al inscrito en la carrera; en su defecto a quien se encuentre en el servicio.

"Si se presenta empate entre personas ajenas al servicio la designación será discrecional.

"Artículo 31. Cuando el concurso fuere declarado desierto porque ninguno de los aspirantes hubiere obtenido calificación aprobatoria o por otras causas, se procederá a realizar una nueva convocatoria y selección.

"Artículo 32. En caso de declararse irregular la totalidad del concurso, éste deberá repetirse entre los mismos participantes sin necesidad de nueva convocatoria.

Si es parcial, el concurso podrá rehacerse a partir del momento en que se presentó la irregularidad.

"Artículo 33. En caso de vacancia definitiva cuando las necesidades del servicio lo exijan y no se pudiere proveer el cargo por el sistema de méritos, la designación se hará con carácter provisional e inmediatamente el nominador informará al respectivo Consejo de la Carrera para efectos de la convocatoria.

"Las vacancias transitorias se proveerán, igualmente, en provisionalidad o encargo.

"Artículo 34. Realizado el concurso quienes ingresen al servicio serán nombrados en período de prueba y quienes hubieren prestado el servicio, en situación distinta de provisionalidad, serán designados en propiedad sin período de prueba siempre y cuando se trate del mismo escalafón.

"Quienes obtengan calificaciones satisfactorias durante el período de prueba y no tuvieron sanciones disciplinarias, serán nombrados en propiedad.

"Artículo 35. Durante el período de prueba los funcionarios y empleados serán calificados en tres oportunidades. Dos calificaciones insatisfactorias darán lugar al retiro del servicio mediante declaratoria de insubsistencia motivada.

"Artículo 36. Las calificaciones insatisfactorias se notificarán personalmente o por correo certificado y contra ellas procede el recurso de reposición motivado dentro de los tres días siguientes, más las distancias, y deberá resolverse en un término de ocho (8) días.

"Artículo 37. La declaración de insubsistencia será motivada y contra ella proceden, en efecto suspensivo, el recurso de reposición ante la Corte y el Consejo de Estado y el de apelación o en subsidio el de queja en los demás casos.

"Estos recursos serán resueltos en el término de quince días.

"Artículo 38. Se podrá promover el ingreso o el ascenso en la carrera mediante la realización de cursos de selección, con la designación entre quienes lo aprobaren con los mejores puntajes, según reglamento que establezcan los organismos administradores de la Carrera Judicial.

"Artículo 39. Los funcionarios y empleados ingresan a la carrera con la designación en propiedad y las calificaciones satisfactorias en período de prueba, cuando este se exija de conformidad con normas del presente estatuto.

"TITULO IV

"Funciones y requisitos de los empleos

"Artículo 40. Fíjanse las siguientes funciones para el ejercicio de los empleos de la Rama Jurisdiccional y de las fiscalías:

"*Auxiliar de magistrado*

"Colaborar bajo la orientación y responsabilidad del Magistrado o Consejero en la realización de estudios y trabajos propios de las funciones que le corresponden a éstos.

"*Abogado asistente*

"Colaborar bajo la orientación y responsabilidad de los magistrados de la respectiva sala o sección, en la realización de estudios y trabajos de la función que a éstas corresponde.

"*Secretario*

"Las establecidas en el artículo 14 del Decreto-ley número 1265 de 1970 y las demás que le asigne la ley.

"*Relator*

"Clasificar, titular y extractar las providencias de la Corporación; preparar las publicaciones y los extractos de jurisprudencia y elaborar los índices de las providencias.

"*Contador liquidador de Impuestos*

"Efectuar las operaciones matemáticas para las liquidaciones de impuestos, tasas y contribuciones y las demás que se le ordenen.

"*Bibliotecólogo*

"Organizar y clasificar libros, revistas y documentos de la respectiva biblioteca; elaborar los ficheros bibliográficos y atender al público.

"*Oficial Mayor*

"Colaborar bajo la orientación de sus superiores en las labores propias del Despacho o de la secretaría y las asignadas en el artículo 14 del Decreto-ley número 1265 de 1970.

"*Auxiliar Judicial*

"Desempeñar labores generales y asistenciales propias del Despacho como mecanografía, radicación, organización y archivo de expedientes y las demás que le asigne el superior o el reglamento.

"*Archivero*

"Clasificación, actualización, manejo y conservación de libros, documentos y expedientes en archivo.

"Asistente Social

"Colaborar con el juez de menores en la realización de visitas, encuestas y en la orientación sicológica y social del menor y sus familiares.

"Escribiente

"Ejecución de diversos trabajos como mecanografía, registro, manejo de archivo, revisión de expedientes, elaboración y clasificación de oficios y documentos, elaboración de estadísticas y atención al público.

"Oficinista

"Realización de trabajos auxiliares tales como mecanografía, clasificación y archivo de oficios y documentos y atención al público.

"Citador

"Efectuar notificaciones autorizadas por el secretario, entregar correspondencia y realizar los trabajos auxiliares que se le asignen.

"Chofer

"Conducción, mantenimiento, aseo y reparaciones menores de los vehículos asignados.

"Auxiliar de servicios generales

"Desarrollar labores auxiliares encaminadas a facilitar la prestación del servicio.

"Artículo 41. Fíjanse los siguientes requisitos mínimos para el ejercicio de cargos de empleados en la Rama Jurisdiccional y fiscalías:

Nombre del cargo	Grado	Requisitos
Auxiliar y abogado asistente de Corte y Consejo de Estado	21	Los mismos requisitos exigidos para el desempeño del empleo de Magistrado de Tribunal (art. 155 C.N.).
Secretario y Relator de la Corte y del Consejo de Estado	20	Poseer título de abogado y tener tres (3) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Contador liquidador de impuestos	17	Poseer título de contador público y dos (2) años de experiencia como contador o liquidador de impuestos.

Nombre del cargo	Grado	Requisitos
Secretario de Tribunal	13	Poseer título de abogado y un (1) año de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Oficial Mayor	12	Tener cuatro (4) años de estudios de derecho y dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Bibliotecólogo	12	Haber terminado estudios de licenciatura de bibliotecología y tener un (1) año de experiencia relacionada.
Relator de Tribunal	11	Haber aprobado cuatro (4) años de estudios de derecho y tener un (1) año de experiencia en la Rama Jurisdiccional o dos (2) años de estudios superiores y tres (3) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Auxiliar Judicial y Oficial Mayor	11	Haber terminado tres (3) años de estudios de derecho y tener dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional o dos (2) años de estudios superiores y tres (3) años de experiencia en Rama Jurisdiccional.
Secretario de Juzgado y Auxiliar Judicial en cabecera de Circuito	10	Haber aprobado un (1) año estudios de derecho y tener dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional o diploma en educación media y tres (3) de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Secretario de Juzgado y Auxiliar Judicial en cabecera de Distrito	10	Haber aprobado dos (2) años de estudios en derecho y tener dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional o un (1) año de estudios superiores y tres (3) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.

Nombre del cargo	Grado	Requisitos
Secretario, Oficial Mayor, Auxiliar Judicial y escribiente en cabecera de Distrito.	09	Haber aprobado un (1) año de estudios en derecho y tener dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional o dos (2) años de estudios superiores y un (1) año de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Secretario, Oficial Mayor, Auxiliar Judicial y escribiente en cabecera de Circuito y Juzgado Territorial.	09	Tener diploma en educación media y dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Archivero	09	Haber aprobado dos (2) años de estudios de bibliotecología o haber aprobado curso técnico sobre la materia y tener un (1) año de experiencia relacionada.
Oficial Mayor y Auxiliar Judicial	08	Diploma en educación media y tener un (1) año de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Asistente Social	07	Haber aprobado un (1) año de estudios superiores y tener un (1) año de experiencia como oficinista.
Oficial Mayor.	07	Tener diploma en educación media y dos (2) años de experiencia como oficinista.
Escribiente.	07	Tener diploma en educación media.
Escribiente y oficinista	06	Tener cinco (5) años de estudios de educación media y dos (2) años de experiencia como oficinista.
Chofer.	06	Haber aprobado dos (2) años de educación media, un curso de conducción refrendado por el Departamento Administrativo de

Nombre del cargo	Grado	Requisitos
		Tránsito y Transportes y tener dos (2) años de experiencia relacionada.
Oficinista y Escribiente.	05	Haber aprobado cuatro (4) años de educación media y tener dos (2) años de experiencia como oficinista.
Escribiente	04	Haber aprobado cuatro (4) años de estudios de educación media y tener un (1) año de experiencia como oficinista.
Auxiliar de Servicios Generales.	04	Haber aprobado cinco (5) años de estudios de educación primaria y tener dos (2) años de experiencia no relacionada.
Citador.	03	Haber aprobado dos (2) años de estudios en educación media.
Auxiliar de Servicios Generales	03	Haber aprobado cinco (5) años de estudios en educación primaria.

"Parágrafo. A quienes no reúnan los requisitos exigidos en este artículo se les aplicará las siguientes equivalencias:

"Un (1) año de educación superior por dos (2) años de experiencia relacionada y viceversa.

"Un (1) año de educación media por un (1) año de experiencia relacionada y viceversa.

"Artículo 42. Establécese el siguiente escalafón de la carrera para los funcionarios judiciales y de fiscalías:

"a) Magistrado y Fiscal de Tribunal Superior de Distrito Judicial, Contencioso-Administrativo y Superior de Aduanas;

"b) Juez Superior, Juez Superior de Aduanas, Juez de Circuito, de Menores, de Instrucción Penal Aduanera, de Instrucción Criminal y Fiscales de Juzgados Superiores y de Circuito;

"c) Juez Municipal, Juez de Distrito Penal Aduanero y Territorial.

"Artículo 43. Establécese el siguiente escalafón para los empleados de la carrera de la Rama Jurisdiccional y de fiscalías:

"a) Secretario y Relator de la Corte y del Consejo de Estado, Secretario de Fiscalía del Consejo de Estado;

"b) Contador liquidador de impuestos;

"c) Secretario de Tribunal;

"d) Oficial Mayor y Bibliotecólogo de la Corte y del Consejo de Estado;

"e) Oficial Mayor, Relator y Auxiliar Judicial de Tribunal; Auxiliar Judicial de Fiscalía del Consejo de Estado y de Tribunal;

"f) Secretario de Juzgado Superior y Superior de Aduanas, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal, de Instrucción Penal Aduanera y Auxiliar Judicial de la Corte, todos de grado 10;

"g) Oficial Mayor y Secretario de Juzgado, Archivero y Auxiliar Judicial de la Corte y del Consejo, Asistente Judicial de Fiscalías de Juzgados Superiores, Aduanas y de Circuito, todos de grado 09;

"h) Oficial Mayor de Juzgado Municipal y Distrito Penal Aduanero y Auxiliar Judicial de la Relatoría de la Corte, todos de grado 08;

"i) Escribiente del Consejo de Estado, de Tribunales y Asistente Social de Juzgado de Menores, todos de grado 07;

"j) Oficinista del Consejo de Estado y de la Corte; Escribiente de Juzgado de Instrucción Criminal, de Instrucción Penal Aduanera, de Tribunal Superior y Superior de Aduanas, de Juzgado Superior de Circuito y menores, todos de grado 06;

"k) Oficinista de Tribunal y Escribiente de Juzgado Superior, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal, de Instrucción Penal Aduanera, de Distrito Penal Aduanero y de Municipal, todos de grado 05;

"l) Escribiente de Juzgado Municipal y Penal Aduanero; Citador de Juzgado Superior y Superior de Aduanas, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal; de Instrucción Penal Aduanera, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y Auxiliares de Servicios Generales de la Corte, del Consejo y de los Tribunales, todos de grado 04.

"TITULO V

"Calificación de servicios

"Artículo 44. La calificación de los servicios de empleados y funcionarios tiene por fin:

"a) Determinar el ingreso, permanencia o retiro del servicio y del escalafón de la carrera;

"b) Determinar su participación en los cursos y concursos de ascenso;

"c) Promover su participación en los programas de capacitación;

"d) El otorgamiento de becas y estímulos.

"Artículo 45. Todos los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público que ocupen cargos de la carrera deben ser calificados formal y periódicamente.

"Artículo 46. La calificación será motivada y comprenderá los siguientes aspectos: Conducta, dedicación al trabajo; calidad y organización del trabajo; actualización de conocimientos. Al impartirla se tendrá en cuenta el comportamiento público del calificado, su puntualidad, la atención al público y en fin todo lo que contribuya al análisis de su idoneidad para el servicio.

"Artículo 47. La calificación de la calidad de trabajo y de la actualización de conocimientos de los funcionarios y empleados judiciales corresponde hacerla a los respectivos superiores jerárquicos o funcionarios y de la conducta, organización y rendimiento a la Procuraduría General de la Nación, la que además calificará todos los aspectos de los funcionarios y empleados de las fiscalías.

"Artículo 48. En los meses de abril y mayo de cada año se procederá a la calificación de los funcionarios y empleados judiciales y de fiscalías, así:

"– La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado calificarán a los Magistrados de los Tribunales respectivos.

"– Los Tribunales Superiores a jueces superiores y de Circuito de su Distrito.

"– El Tribunal Superior de Aduanas a todos los jueces del ramo.

"– Los jueces superiores a los jueces de Instrucción.

"– Los jueces de Circuito a los jueces Municipales del respectivo circuito.

"– Cada corporación calificará a sus empleados y cada juez o fiscal a los suyos.

"La calificación se fundará en el propio conocimiento y apreciación y en los resultados de las visitas reglamentarias.

"Cuando la calificación corresponde a una Corporación, ésta se integrará en Salas de Decisión atendiendo a la especialidad del calificado, en cuanto fuere posible.

"Si la calificación de un juez corresponde a otro se hará previo reparto equitativo coordinado por el primero en orden numérico.

"Artículo 49. La nota comprenderá todos los aspectos dentro de la siguiente escala: excelente, bueno, regular y malo.

"Se tendrá para todos los efectos como insatisfactorias las calificaciones de regular y malo.

"Artículo 50° Los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y de las fiscalías deben ser calificados una vez al año.

"Artículo 51. Una calificación insatisfactoria dará lugar a la suspensión en el escalafón por el término de un año con pérdida de las prerrogativas del mismo, salvo la capacitación.

"Dos calificaciones insatisfactorias darán lugar a la insubsistencia, tratándose de empleados, y si se tratare de funcionario no será reelegido.

"Artículo 52. Contra la calificación insatisfactoria y la declaración de insubsistencia proceden los recursos en la forma y los términos establecidos en los artículos 36 y 37.

"Artículo 53. La declaración de insubsistencia será causal de inhabilidad para desempeñar cargos jurisdiccionales y en las fiscalías, por el término de dos años.

"TITULO VI

"Derechos y deberes

"Artículo 54. Todo funcionario y empleado judicial o de las fiscalías tendrá derecho a recibir capacitación adecuada para el mejor desempeño de las funciones propias de su cargo; o la oportunidad de ascenso en el servicio; a percibir puntualmente la remuneración y prestaciones sociales que le corresponda; a la asociación con fines de apoyo mutuo, de carácter cultural, asistencial, cooperativo y otros similares; a obtener permisos y licencias según las normas legales; a participar en los programas de bienestar social y a gozar de estímulos; a la prevención de los riesgos en su trabajo; a la protección de las autoridades competentes en caso de amenazas, violencia, injuria y demás ofensas de que pueda ser víctima con ocasión del servicio; a solicitar traslado en cargos equivalentes al que desempeña, y a todos los demás beneficios que se establezcan a su favor por ley o reglamento.

"Artículo 55. Son deberes de los funcionarios y empleados:

"a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos;

"b) Desempeñar con honorabilidad, solicitud e imparcialidad las funciones de su cargo;

"c) Obedecer y respetar a sus superiores;

"d) Permanecer en el desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo;

"e) Observar en sus relaciones con el público y sus compañeros de labores toda la consideración y cortesía debidas;

"f) Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder del uso de la autoridad que le ha sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puedan impartir, sin que en ningún caso queden exentos de la responsabilidad que les incumbe por la que corresponde a sus subordinados;

"g) Guardar la reserva que, requieran los asuntos relacionados con su trabajo;

"h) Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones que les han sido encomendadas;

"i) Responder por la conservación de los elementos, útiles, materiales, equipos, muebles y demás bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta de su utilización;

"j) Poner en conocimiento de los organismos de administración de la carrera los hechos que puedan perjudicar la administración de justicia y las iniciativas que estimen útiles para el mejoramiento del servicio.

"k) Las demás que la ley les señale.

"TITULO VII

"Inhabilidades e incompatibilidades

"Artículo 56. No podrán ser designados para cargo alguno de los regulados en este decreto:

"a) Quienes se hallen en interdicción judicial;

"b) Quienes padezcan cualquier afección física o mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo;

"c) Quienes se encuentren en detención preventiva, aunque gocen del beneficio de excarcelación y quienes hayan sido llamados a juicio mientras se resuelve su situación jurídica;

"d) Quienes hayan sido condenados por delito doloso;

"e) Quienes se encuentren excluidos del ejercicio de la profesión de abogado o hayan sido suspendidos por término superior a tres (3) meses;

"f) Quienes por falta disciplinaria hayan sido destituídos o suspendidos por segunda vez o se les haya impuesto por tres veces cualquier otro tipo de sanción.

"Artículo 57. En ninguna elección o nombramiento de funcionarios o empleados podrán designarse personas que sean cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de algunos de los funcionarios que intervienen en la elección o nombramiento, o de los que han participado en la elección o nombramiento de quienes deben hacer la designación.

"Artículo 58. No podrán ser designados para una misma corporación o Despacho Judicial o de las fiscalías ni para cargos entre los cuales haya dependencia funcional, quienes sean entre sí cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

"Artículo 59. Los cargos de la Rama Jurisdiccional y de fiscalías no son acumulables y son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo retribuido, con la gestión profesional de negocios ajenos, con los cargos de elección popular y los de representación política, con el ejercicio del comercio, con la milicia activa, con toda participación en el ejercicio de la abogacía, con los cargos de albacea, curador dativo y auxiliar de la justicia y con la dirección y fiscalización de sociedades comerciales. La prohibición de litigar y de ejercer albaceazgo y cargo de auxiliar se extiende aun a quien esté en uso de licencia.

"Se exceptúan de la presente disposición los cargos docentes hasta un límite de ocho horas semanales durante la jornada laboral, siempre que no se afecte la marcha regular del trabajo.

"TITULO VIII

"Faltas disciplinarias

"Artículo 60. Son faltas de los funcionarios y empleados contra la dignidad de la administración de justicia las siguientes:

"a) Embriaguez habitual; uso frecuente e injustificado de substancias que produzcan dependencia física o síquica y practicar juegos prohibidos;

"b) Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier funcionario o empleado o contra quienes intervienen en los procesos;

"c) Solicitar o fomentar publicidad de cualquier clase respecto de su persona o de sus actuaciones, sin perjuicio del derecho de rectificar informaciones o comentarios;

"d) Contraer obligaciones de manera directa o indirecta con alguna de las partes o sus apoderados o cualquier otro interesado en asuntos que se hallen a su conocimiento o en los cuales debe intervenir;

"e) Solicitar o recibir dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de lucro provenientes directa o indirectamente de alguna de las personas mencionadas en el literal anterior o de funcionario o empleado de su dependencia;

"f) Influir directa o indirectamente en el nombramiento o elección de funcionarios o empleados;

"g) Ejercer actividades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma afecte su dignidad.

"Artículo 61. Son faltas contra la eficacia de la administración de justicia:

"a) Omitir o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo o el trabajo que señale la ley o los reglamentos de la oficina, o dejar vencer sin justa causa los términos sin la actuación correspondiente;

"b) Omitir el reparto cuando sea obligatorio, hacerlo o tolerar su ejecución en forma irregular;

"c) Permitir que litigue en su despacho persona no autorizada para ello o mostrar los expedientes o parte de los mismos, fuera de los casos permitidos por la ley;

"d) Dejar de asistir a los actos o diligencias en que se requiera su presencia, o que la ley lo ordene o firmar las providencias sin haber participado en su discusión o pronunciamiento;

"e) Dejar de asistir a las audiencias o de practicar personalmente las pruebas o no dictar o dejar de notificar las providencias;

"f) Hacer constar en cualquier diligencia judicial hechos que no sucedieron o dejar de relacionar los que ocurrieron;

"g) Dar tratamiento a favor o de discriminación de cualquier naturaleza a las personas que intervienen en los procesos;

"h) Dejar de asistir injustificadamente a la oficina o cerrarla sin motivo legal o limitar indebidamente las horas de trabajo o de despacho al público;

"i) Ejercer influencias directas o indirectas sobre cualquier funcionario o empleado para que proceda en determinado sentido en los asuntos que este conoce o ha de conocer o que tramite;

"j) No dar noticia a la autoridad competente de delitos o faltas disciplinarias de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones;

"k) No suministrar oportunamente las informaciones que deba dar o suministrarlas con inexactitud, irrespeto o en forma incompleta;

"l) Tener a su servicio en forma estable o transitoria, para las labores de su Despacho, personas distintas de los empleados de la propia oficina, salvo las prácticas de estudiantes de facultades de derecho reconocidas;

"ll) No sancionar las faltas de los funcionarios o empleados u obrar con lenidad en la aplicación de las sanciones;

"m) Violar las normas sobre nombramientos, elección o remoción de los funcionarios o empleados y las que regulan la designación de auxiliares de la justicia;

"n) Contravenir las disposiciones sobre honorarios de los auxiliares de la justicia y sobre arancel judicial;

"ñ) Residir sin permiso fuera de la sede del despacho o realizar actividades laborales ajenas al ejercicio de las funciones durante la jornada de trabajo.

"Artículo 62. En general constituye falta disciplinaria el incumplimiento de los deberes, la infracción de incompatibilidades y la incursión en las inhabilidades y prohibiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

"TITULO IX

"Régimen disciplinario

"Artículo 63. Todo hecho constitutivo de falta disciplinaria origina acción de esta naturaleza que podrá iniciarse de oficio, o por queja o informe y no es incompatible con la responsabilidad civil o penal del infractor.

"La acción caduca en cinco (5) años y la iniciación del proceso la interrumpe.

"Artículo 64. Cuando se formule queja el investigador deberá solicitar la ratificación bajo juramento y si ésta no se obtiene podrá adelantarla sin esa formalidad.

"Artículo 65. La sanción disciplinaria se impondrá por la autoridad competente con arreglo al procedimiento y por hechos previstos en la Constitución y la Ley.

"Por un mismo hecho no podrá adelantarse más de una investigación disciplinaria.

"Artículo 66° La acción disciplinaria y las sanciones procederán aun cuando el funcionario o empleado haya hecho dejación del cargo.

"Cuando la suspensión o la destitución no pudieren hacerse efectivas por pérdida anterior del cargo, se anotarán en la hoja de vida del sancionado para que surtan sus efectos como antecedentes.

"Artículo 67. A los funcionarios y empleados que incurran en las faltas enumeradas en el presente estatuto se les aplicará según la naturaleza, efectos y modalidades del hecho, la gravedad de la infracción, los antecedentes personales y profesionales, una de las siguientes sanciones:

"a) Multa;

"b) Suspensión en el cargo;

"c) Destitución.

"Cuando la falta a juicio del superior no diere lugar a sanción, podrá de plano y por escrito amonestar al infractor. La amonestación consiste en la prevención de que una nueva falta acarreará sanción.

"Artículo 68. La multa no podrá ser inferior al valor de cinco días de sueldo que devengue el funcionario o empleado sin exceder al de un mes. Se aplicará en casò de falta leve.

"El concurso de faltas, la falta grave o la reincidencia en faltas leves darán lugar a la aplicación de las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por treinta días sin derecho a remuneración, o destitución.

"Artículo 69. El régimen de disciplina interna de cada despacho judicial y de las fiscalías estará a cargo del respectivo superior, quien para mantenerla podrá imponer de plano a los empleados multa hasta por tres (3) días de sueldo y suspensión sin remuneración hasta por el mismo término.

"Artículo 70. Antes de resolver la apertura de la investigación podrá ordenarse averiguación previa con el objeto de comprobar si el hecho es constitutivo de falta o si hay mérito para la investigación.

"Artículo 71. La investigación disciplinaria tendrá las siguientes etapas y términos:

"a) Instrucción en el término de treinta (30) días, dentro del cual se archivará el expediente o se formulará pliego de cargos en el que se precisará la infracción que imputa y las disposiciones legales presuntamente violadas;

"b) Presentación de descargos y petición de pruebas, en el término de seis (6) días;

"c) Práctica de pruebas, en el término de veinte (20) días;

"d) Cierre y calificación de la investigación, en el término de diez (10) días.

"Artículo 72. Cuando a juicio del nominador los hechos que se imputan al funcionario o empleado constituyen falta grave, aquél solicitará investigación a la Procuraduría la cual deberá adelantarla en forma prioritaria. En ese evento los términos señalados en el artículo anterior se reducirán a la mitad, salvo el de presentación de descargos.

"Artículo 73. Perfeccionada la investigación el funcionario que la adelantó informará de ello al competente, quien procederá a su calificación mediante providencia, en la cual formulará acusación con solicitud de sanción ante el nominador u ordenará el archivo del expediente.

"Contra esta decisión no proceden recursos.

"Artículo 74. El pliego de cargos se notificará personalmente al investigado, y si esto no fuere posible se emplazará por edicto que se fijará por cinco (5) días en la secretaría de la oficina investigadora y en su último lugar de trabajo o de residencia conocida.

"Pasados ocho (8) días de la desfijación si el acusado no comparece se le designará apoderado de oficio con quien proseguirá la actuación.

"Artículo 75. En las investigaciones y procesos disciplinarios se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas disciplinarias, las del código de procedimiento penal en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.

"TITULO X

"Procesos disciplinarios

"Artículo 76. Recibida la actuación del Ministerio Público por el juez de conocimiento y repartido, cuando sea el caso, el negocio se fijará en lista por el término de cinco (5) días dentro del cual el acusado podrá presentar alegatos por escrito y pedir las pruebas.

"El juez, o el sustanciador en las corporaciones, podrá decretar las solicitadas o las que de oficio estime convenientes, dentro de los cinco (5) días siguientes y para cuya práctica señalará término que no podrá exceder de diez (10) días.

"Vencido el término de fijación en lista, o el probatorio, según el caso, el juez dispondrá de quince (15) días para dictar el fallo. La corporación decidirá en veinte (20) días.

"Artículo 77. La providencia se notificará personalmente dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición. Si ello no fuere posible, se fijará edicto en la secretaría del respectivo despacho por el término de cinco (5) días. Procederán los mismos recursos a instancia de la Procuraduría cuando ésta considere que la sanción ha debido ser la de destitución.

"Si el sancionado se encuentra en lugar diferente a la sede del juzgado la notificación se hará por comisionado.

"Artículo 78. Contra las providencias que impongan a los empleados sanción de destitución procede el recurso de reposición cuando provienen de la Corte y del Consejo de Estado, y el de apelación cuando la destitución la ordenan otros nominadores.

"Los recursos se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de su notificación. El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo y si fuere denegado procede el recurso de queja.

"Artículo 79. El Tribunal Disciplinario conoce de los procesos así:

"En única instancia

"a) De los adelantados contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en cuanto no constituyan juicios de responsabilidad de competencia del Senado de la República;

"b) De los adelantados contra los fiscales del Consejo de Estado y de los tribunales.

"En segunda instancia

"De los resueltos por el Procurador General de la Nación contra los fiscales de juzgados.

"Artículo 8° La Corte Suprema de Justicia conoce de los procesos disciplinarios así:

"En única instancia

"De los adelantados contra sus propios empleados y contra los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito y Superiores de Aduanas.

"En segunda instancia

"De los resueltos en primera por los Tribunales Superiores de Distrito y de Aduanas contra sus propios empleados.

"Artículo 81. El Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra sus empleados y contra los magistrados de los Tribunales Contencioso-Administrativos, y en segunda instancia de los adelantados en primera contra los empleados de los mismos tribunales.

"Artículo 82. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de Aduanas conocen así:

"En única instancia

"a) De los procesos adelantados contra sus propios empleados cuando no procede la apelación;

"b) Contra los jueces cuyo nombramiento les corresponde.

"En primera instancia

"De los adelantados contra sus propios empleados cuando procede la apelación.

"En segunda instancia

"De los procesos adelantados en primera contra los empleados de los juzgados.

"Artículo 83. Los tribunales Contencioso-Administrativos conocen así:

"En única instancia

"De los procesos adelantados contra sus empleados cuando no procede la apelación.

"En primera instancia

"De los procesos adelantados contra sus empleados cuando procede la apelación.

"Artículo 84. Los jueces y los fiscales conocen en única instancia de los procesos adelantados contra sus empleados cuando no procede la apelación y en primera instancia cuando procede.

"Artículo 85. En las corporaciones judiciales los procesos disciplinarios los adelantará el magistrado, la sala o sección nominadora cuando el empleado es de su exclusiva designación.

"Artículo 86. El Procurador General de la Nación conoce en primera instancia de los procesos adelantados contra los fiscales de juzgados y en segunda instancia de los adelantados contra los empleados de las fiscalías cuando procede la apelación.

"Artículo 87. Para la función disciplinaria en las corporaciones se designará un magistrado ponente quien conformará la Sala con otros dos magistrados de distintas especialidades escogidos por orden alfabético.

"La investigación disciplinaria contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Consejeros de Estado la adelantará el Procurador General de la Nación quien podrá comisionar a los Procuradores Delegados.

"Las investigaciones y procesos contra los fiscales de competencia del Procurador General de la Nación los adelantará directamente o por intermedio de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público, la cual podrá comisionar para la práctica de diligencias a los Procuradores Regionales y a los jefes de las oficinas seccionales.

"Artículo 88. La vigilancia judicial y de fiscalías se ejercerá principalmente por medio de visitas generales y especiales que se ordenarán por auto.

"Las visitas generales se practicarán a cada despacho una vez al año y tienen por finalidad establecer la asistencia, el comportamiento y rendimiento de los funcionarios y empleados; el orden, actualidad, exactitud de los libros y expedientes; el cumplimiento de los términos, el manejo de los títulos de depósitos judiciales, la existencia de los efectos que pertenecen a cada asunto y las condiciones del trabajo. Las visitas especiales se practicarán de oficio o por queja.

"De cada visita se levantará un acta con las conclusiones del caso, sendas copias de ésta se enviarán al despacho visitado y al respectivo Consejo de la Carrera. En el

acta se consignarán las deficiencias y los aspectos positivos que merezcan ser destacados, si los hubiere.

"TITULO XI

"Estímulos

"Artículo 89. Los organismos administradores de la carrera deberán conceder los estímulos establecidos en la ley para funcionarios y empleados que se destaquen por sus méritos en la prestación del servicio conforme al reglamento que se expida.

"Artículo 90. Para tal efecto se tendrá en cuenta los puntajes obtenidos en la calificación de servicios, la publicación de trabajos, el aporte a la jurisprudencia y los demás que contribuyan a la mejor administración de justicia.

"Artículo 91. Tales estímulos pueden consistir en el otorgamiento de becas, comisión de estudios en el país o en el exterior, condecoraciones, publicación de trabajos meritorios y auxilios para vivienda y educación.

"TITULO XII

"Escuela Judicial

"Artículo 92. La Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", es un organismo especial de carácter docente y prestará sus servicios en todo el territorio nacional a los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público y a los particulares que aspiren a ingresar a dichos organismos.

"Artículo 93. La Escuela Judicial tendrá como objetivos la enseñanza, formación y adiestramiento de los funcionarios y empleados y la investigación y difusión de las ciencias jurídicas y de las técnicas requeridas para el desarrollo y perfeccionamiento de las funciones asignadas a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio Público.

"Artículo 94. Son funciones de la Escuela Judicial:

"1ª Formar, capacitar, actualizar y adiestar en materias jurídicas y en ciencias auxiliares y complementarias a los servidores de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, y a quienes deben ingresar a la carrera.

"2ª Desarrollar programas de enseñanza en técnicas de criminalística e investigación criminal tendientes a la modernización y eficiencia de la justicia.

"3ª Promover y realizar cursos y prácticas en las distintas regiones del país, directamente o por medio de convenios con universidades e institutos dedicados a la capacitación.

"4ª Proponer al Ministerio de Justicia la celebración de convenios con organismos nacionales e internacionales para la formación de jueces y empleados.

"5ª Desarrollar las políticas de formación profesional judicial trazadas por el Ministerio de Justicia y coordinar con los organismos de administración de la carrera la ejecución.

"6ª Definir sus propios programas de becas nacionales e internacionales para preparación de funcionarios, empleados y de sus profesores.

"7ª Expedir diplomas y certificados de aprobación o de asistencia a los participantes en los cursos, seminarios, coloquios u otras actividades docentes que realice.

"8ª Adelantar los cursos de selección de personal de conformidad con las políticas y bases señaladas por los organismos administradores de la carrera.

"9ª Promover, desarrollar y divulgar investigaciones científicas y técnicas para mejorar los métodos y sistemas de trabajo de los despachos judiciales y del Ministerio Público.

"10. Publicar, divulgar y distribuir investigaciones y obras jurídicas, jurisprudencia y otros documentos.

"11. Las demás que le señale la ley.

"Artículo 95. La Escuela Judicial será administrada por un Consejo Superior y por el Director General.

"Artículo 96. El Consejo Superior de la Escuela Judicial quedará integrado así:

"– El Ministro de Justicia o su delegado quien lo presidirá.

"– Un delegado de la Corte Suprema de Justicia.

"– Un delegado del Consejo de Estado.

"– Un delegado del Tribunal disciplinario.

"– Un delegado de los funcionarios judiciales.

"– El Rector de la Universidad Nacional de Colombia o su delegado.

"– El Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior o su delegado.

"– El Director de la Escuela Superior de Administración Pública o su delegado.

"El Director de la Escuela Judicial actuará como secretario del Consejo.

"Artículo 97. Son funciones del Consejo Superior de la Escuela Judicial:

"1ª Formular la política general y adoptar el modelo docente para la formación, capacitación, adiestramiento y especialización de los alumnos.

"2ª Aprobar los planes y programas de estudios docentes y administrativos, generales y específicos para el desarrollo de sus objetivos y propender por su implementación.

"3ª Controlar el funcionamiento de la Escuela y verificar el cumplimiento de sus planes y programas.

"4ª Poner en funcionamiento sus dependencias seccionales de acuerdo con las necesidades de la administración de justicia.

"5ª Aprobar la celebración de convenios educativos, de intercambio y de similar naturaleza con otras entidades u organismos nacionales e internacionales.

"6ª Adoptar los estatutos y reglamentos necesarios para el funcionamiento interno de la Escuela.

"7ª Proponer el proyecto de presupuesto anual a iniciativa del Director General.

"8ª Proponer la planta de personal de la Escuela y su reforma.

"Artículo 98. Para ser Director de la Escuela Judicial se requiere tener título de abogado, diez (10) años de experiencia docente en educación superior y gozar de amplia reputación personal y de reconocido prestigio profesional.

"Artículo 99. Son funciones del Director General de la Escuela Judicial:

"1ª Someter a la consideración y aprobación del Consejo Superior los planes y programas de capacitación, formación, adiestramiento y especialización que deben ejecutarse.

"2ª Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los planes y programas aprobados por el Consejo Superior de la Escuela.

"3ª Dirigir académica y administrativamente a la Escuela.

"4ª Presentar a la aprobación del Consejo Superior los reglamentos para el adecuado funcionamiento de la Escuela.

"5ª Refrendar con su firma los diplomas y certificados que confiera la Escuela.

"6ª Rendir al Consejo Superior informe anual y los demás que éste le solicite.

"7ª Las demás que le asigne o delegue el Consejo Superior de la Escuela.

"Artículo 100. Para el cumplimiento de los objetivos y funciones que le señalan en el presente decreto la Escuela Judicial contará con la siguiente estructura:

"1. Consejo Superior.

"2. Director General.

"2.1 División académica.

"2.2 División de Coordinación Administrativa y Desarrollo Institucional.

"2.3 Escuelas Seccionales.

"Artículo 101. Son funciones de la División Académica:

"1ª Programar y realizar estudios sobre las necesidades de capacitación, especialización, formación y adiestramiento de funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público.

"2ª Adelantar y fomentar investigaciones sobre la modernización y eficiencia de las actividades y gestión judicial.

"3ª Desarrollar cursos, seminarios, coloquios y conferencias de capacitación, de acuerdo con las necesidades de la Administración de Justicia y del Ministerio Público.

"4ª Realizar programas de enseñanza y actualización en ciencias y técnicas auxiliares y complementarias para la instrucción criminal.

"5ª Programar y establecer los programas de pensum de estudios de la Escuela Judicial.

"6ª Coordinar los convenios de asistencia educacional que se celebren con entidades nacionales y extranjeras.

"7ª Elaborar el reglamento académico, disciplinario y de régimen docente de la Escuela.

"8ª Las demás que le asigne el Director y el Consejo Superior de la Escuela.

"Artículo 102. Son funciones de la División de Coordinación Administrativa y Desarrollo Institucional:

"1ª Prestar los servicios generales y atender el suministro de bienes muebles, equipos, útiles, materiales y enseres para el funcionamiento de la Escuela y sus seccionales.

"2ª Proponer el presupuesto para la aprobación del Consejo Superior y coordinar y controlar su ejecución.

"3ª Atender las funciones de jefatura del personal administrativo y docente de la Escuela.

"4ª Llevar el archivo general de la Escuela y dirigir su centro de documentación e información.

"5ª Publicar y distribuir las investigaciones y documentos elaborados por la Escuela, y conferencias u obras jurídicas o docentes, de interés relacionadas con el servicio de la Administración de Justicia.

"6ª Las demás que le asigne el Consejo Superior y el Director General de la Escuela.

"Artículo 103. La vinculación y servicios de los profesores de la Escuela se regirá por las normas propias del estatuto oficial de personal docente de educación superior.

"TITULO XIII

"Carrera en las fiscalías

"Artículo 104. La Carrera en las fiscalías será administrada por el Consejo Superior de la Carrera de las fiscalías, el Procurador General de la Nación y los Fiscales, con el apoyo técnico, administrativo y operativo de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público y las Procuradurías Regionales.

"Artículo 105. Créase el Consejo Superior de la carrera de las fiscalías con la siguiente composición:

"– El Procurador General de la Nación o su delegado, quien lo presidirá.

"– El Procurador Delegado para el Ministerio Público.

"– Un representante de los fiscales del Consejo de Estado.

"– Un representante de los demás fiscales.

"– Un representante de los empleados de las fiscalías.

"Actuará como Secretario del Consejo el de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público.

"Artículo 106. Los representantes de los fiscales y de los empleados en el Consejo Superior de la Carrera de las Fiscalías, serán elegidos por mayoría para períodos de cuatro años, con sus respectivos suplentes, en fecha y según reglamento que expida dicho organismo.

"Artículo 107. Son funciones del Consejo Superior de Carrera de las fiscalías, las siguientes:

"1ª Fijar las políticas y programas para las convocatorias, selección, ingreso y ascenso en la carrera.

"2ª Efectuar las convocatorias a concursos para la integración de las listas de fiscales de tribunales y de empleados de las fiscalías del Consejo de Estado.

"3ª Elaborar las listas de aspirantes admitidos a concurso para fiscales de tribunales y empleados de fiscales de Consejo de Estado, con calificación de sus antecedentes y remitirlos a sus nominadores.

"4ª Inscribir en la carrera a los empleados.

"5ª Resolver los recursos de reposición.

"6ª Formular la política de capacitación, para los concursos de selección y los concursos de ingreso a la Carrera y para la conformación de listas.

"Artículo 108. A los empleados de las fiscalías se aplicarán las mismas normas de la carrera judicial previstas para los empleados de la Rama Jurisdiccional.

"A los fiscales se les aplicarán estas normas en lo pertinente, si no están reguladas en el presente título.

"Artículo 109. Los concursos para cargos de fiscales tienen por objeto seleccionar a las personas que deban conformar las listas para que el nominador proceda al nombramiento.

"En todo caso figurará en la lista la persona que desempeñe el cargo.

"Artículo 110. Los procuradores regionales efectuarán las convocatorias y elaborarán las listas de los admitidos a concurso para la integración de las ternas de

fiscales de juzgados; así mismo las listas de los candidatos admitidos a concurso para la provisión de cargos de empleados de fiscalías de tribunales y juzgados.

"Artículo 111. Contra las decisiones de inscripción, los resultados del concurso y de ingreso e inscripción en la carrera procede el recurso de reposición en la forma y dentro de los términos establecidos en los artículos 24, 36 y 37 de este decreto.

"Artículo 112. Los requisitos mínimos y funciones de los cargos de empleados de las fiscalías son los que corresponden a los empleos equivalentes de la Rama Jurisdiccional según lo establecido en los artículos 40 y 41 de este Decreto.

"Artículo 113. La elaboración y calificación de pruebas le corresponde al Procurador General de la Nación cuando se trate de los fiscales de los tribunales, a los fiscales de tribunales las de fiscales de juzgados Superiores y de Circuito y a los fiscales las de sus empleados.

"Cuando en un tribunal estuvieren asignados varios fiscales, para estos efectos la coordinación estará a cargo de la Fiscalía Primera.

"TITULO XIV

"Disposiciones varias

"Artículo 114. La elección de funcionarios y empleados a cargo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en pleno o en cualquiera de sus salas o secciones, requerirá el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros.

"En los tribunales la votación para elecciones será pública, con la participación de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros y el voto favorable de la mitad más uno de sus componentes y no será admisible el voto en blanco.

"Artículo 115. Los Consejos establecidos en el presente decreto sesionarán y decidirán con la mitad más uno de sus miembros.

"Los citados consejos se reunirán por derecho propio en sesiones ordinarias una vez al mes y en sesiones extraordinarias por convocatoria de su Presidente o a petición de por lo menos la mitad de sus componentes.

"Artículo 116. Para la realización de pruebas, cursos de selección, exámenes y otras pruebas para el ingreso o ascenso en la carrera, las autoridades nominadoras podrán requerir la colaboración técnica, operativa y administrativa de entidades públicas especializadas en estas materias, las cuales deberán prestar sus servicios como labor de asistencia a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio Público.

"Artículo 117. Para la formación, capacitación, especialización, investigación y adiestramiento de los servidores de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público las entidades públicas docentes o especializadas tendrán obligación de prestar su apoyo y concurso como labor de asistencia a la Rama Jurisdiccional, cuando así lo requiera la Escuela Judicial.

"Artículo 118. Los requisitos mínimos señalados en este decreto para el desempeño de cargos se exigirán a las personas que ingresen a la Rama Jurisdiccional y a las fiscalías a partir de la vigencia del presente estatuto.

"Artículo 119. Para el ingreso de empleados al servicio de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, a partir del 1° de marzo de 1989 será requisito aprobar un curso atinente adelantado en la Escuela Judicial o refrendado por ella.

"Artículo 120. Para el ingreso en la carrera de funcionarios y empleados de los territorios nacionales, el tiempo de experiencia exigido como requisito mínimo se reducirá a la mitad, así como el período de prueba.

"Artículo 121. La persona nombrada en propiedad en cargo de libre designación, para cuyo ejercicio se exijan requisitos constitucionales, deberá obtener su confirmación por la autoridad nominadora previa su comprobación.

"Para tal efecto el interesado dispondrá de un (1) mes contado desde el día en que se le comunique la designación, si reside en el país y tres (3) meses si reside en el exterior.

"Comunicada la confirmación dispondrá de diez (10) días para posesionarse, salvo fuerza mayor.

"Cuando se requiera únicamente requisitos legales deberá posesionarse dentro del mes siguiente a la comunicación del nombramiento acompañando la documentación que los acredita, de lo cual se dejará constancia en el acta.

"Artículo 122. El nombramiento en cargos de la carrera será comunicado y deberá aceptarse o rehusarse dentro de los diez (10) días siguientes.

"Aceptado el cargo, se dispondrá de veinte (20) días para tomar posesión.

"Artículo 123. Las novedades de personal de la Rama Jurisdiccional y de las fiscalías tales como nombramientos, remociones, traslados, comisiones, licencias, calificaciones de servicios y de concursos y sanciones, serán comunicados a los respectivos consejos de la Carrera dentro de los ocho (8) días siguientes.

"Artículo 124. Por razones de orden público, seguridad, necesidades del servicio y otras circunstancias, a discreción del nominador y por solicitud de interesado se podrán efectuar traslados de funcionarios y empleados para el desempeño de cargos de igual categoría en distinta localidad, sin menoscabo de los derechos de otros servidores.

"Artículo 125. El Director General de la Escuela Judicial y el Director Nacional de la Carrera tendrán la misma remuneración y prestaciones del Director Nacional de Instrucción Criminal.

"Artículo 126. Los funcionarios y empleados deben residir en la sede de su cargo, de la que no podrán ausentarse en las horas de trabajo sino con permiso. Sin embargo, el respectivo superior o el presidente de la corporación o sala nominadora podrán autorizar la residencia en lugar distinto de la sede por motivos justificados y siempre que no se perjudique la marcha del trabajo.

"Artículo 127. Los funcionarios y empleados tendrán derecho a licencia hasta por dos (2) años pero sólo para proseguir cursos de especialización, actividades de docencia o de investigación o asesoría al Estado.

"Las licencias serán concedidas por la sala de gobierno de la Corporación o por el funcionario nominador.

"Artículo 128. La comisión de estudios remunerada de funcionarios y empleados requerirá además, la aquiescencia del nominador y la aprobación del Gobierno, según la disponibilidad presupuestal se otorgará con el pago total o parcial de la remuneración y pasajes.

"También podrán los funcionarios y empleados recibir del Gobierno Nacional las comisiones previstas en el artículo 26 del Decreto-ley número 546 de 1971.

"Artículo 129. Los eventos previstos en el artículo anterior, con o sin remuneración, no interrumpen la solución de continuidad en el servicio para todos los efectos prestacionales y legales y en especial los de la carrera judicial.

"Artículo 130. Los servidores de la Rama Jurisdiccional y de las Fiscalías tendrán derecho a licencia no remunerada hasta por tres (3) meses en el año y cuando pasa a ejercer transitoriamente otro cargo, hasta el límite del período del que ejerza en propiedad.

"Artículo 131. El Gobierno Nacional proveerá en el presupuesto de la Escuela Judicial las partidas suficientes para financiar los programas de capacitación de funcionarios y empleados, así como las necesarias para su adecuado funcionamiento.

"También podrá ésta obtener recursos propios por la prestación de sus servicios y la venta de sus publicaciones.

"TITULO XV

"Disposiciones transitorias

"Artículo 132. Los funcionarios y empleados que a la fecha de expedición del presente Decreto presentaron oportunamente sus solicitudes de inscripción, podrán ingresar en la carrera judicial previo análisis de los documentos presentados para el efecto, de conformidad con los decretos números 1190 y 2400 de 1986.

"Artículo 133. La competencia que se le asignó al Ministerio de Justicia para inscribir en la carrera a los servidores de la Rama Jurisdiccional de conformidad con disposiciones anteriores, corresponde en adelante a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado en cuanto a sus propios empleados y respectivos magistrados y a los tribunales en cuanto a los jueces y demás empleados.

"La División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional remitirá inmediatamente a las citadas corporaciones las solicitudes recibidas.

"Artículo 134. Para decidir sobre las solicitudes de inscripción se conformarán, cuando resulte pertinente, salas de decisión por orden alfabético y se resolverá a más tardar dentro de los siguientes términos, contados a partir de la fecha de recepción de los documentos.

"a) Dentro de los tres (3) primeros meses, la de jueces y magistrados;

"b) Dentro de los seis (6) meses la de los empleados.

"Artículo 135. Quienes hubieren adquirido el derecho a solicitar la inscripción en la carrera en la oportunidad y condiciones previstas en los Decretos números 1190 y 2400 de 1986 y que posteriormente fueron designados provisionalmente, no perderán el derecho a ingresar a la carrera.

"Artículo 136. Mientras se eligen los delegados de las corporaciones y los representantes de los funcionarios y empleados a los consejos previstos en este Decreto, intervendrán como tales las siguientes personas:

"a) Los presidentes de las corporaciones;

"b) Los vicepresidentes de los tribunales superiores de Distrito Judicial en los consejos seccionales cuando estas corporaciones tengan dos representantes;

c) "En el Consejo Superior de la Administración de Justicia en representación de los funcionarios actuará el Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá;

"En representación de los empleados, el que designe la Asociación Nacional de funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público;

"d) En los consejos seccionales de la carrera, en representación de los jueces, el juez Primero Penal del Circuito de la capital de departamento;

"e) En el Consejo Superior de la Escuela Judicial, en representación de los funcionarios el Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá;

"En el Consejo Superior de la Carrera del Ministerio Público, el fiscal primero del Consejo de Estado en representación de los fiscales de esa corporación; el fiscal del Juzgado Primero Superior de Bogotá en representación de los demás fiscales y el auxiliar judicial del fiscal primero del Tribunal Superior de Aduanas en representación de los empleados de fiscalías.

"Artículo 137. Para el cabal funcionamiento de los organismos establecidos en el presente Decreto, se presentará la planta de personal requerida y será tramitada y autorizada como excepción a las disposiciones vigentes sobre racionalización del gasto público.

"Artículo 138. En desarrollo del artículo 4° de la Ley 52 de 1984, el Gobierno Nacional efectuará las apropiaciones, los traslados presupuestales y abrirá los créditos y contracréditos indispensables para el funcionamiento de los organismos contemplados en el presente Decreto.

"Artículo 139. La División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional prestará el apoyo técnico, operativo y administrativo, para el adecuado funcionamiento del Consejo Superior de la Administración de Justicia mientras se provee el personal de la Dirección Nacional de la Carrera.

"Igual servicio prestarán las Direcciones Seccionales de Instrucción Criminal en los consejos seccionales de la carrera, con la colaboración de las secretarías de los respectivos tribunales.

"Artículo 140. La Escuela Judicial comenzará a prestar sus servicios a partir de la provisión de la planta de personal que la conforme sin perjuicio de que el Consejo Superior de la misma sesione con el objeto de ejercer sus funciones y diseñar los planes, programas y reglamentos tendientes a implementar y poner en marcha su funcionamiento.

Artículo 141. Las normas de este Decreto sobre convocatoria, selección e ingreso en la carrera y sobre la calificación de servicios se aplicarán a partir del primero de mayo de 1987.

"Hasta esa fecha los nombramientos se harán en propiedad e interinidad o por encargo.

"Artículo 142. El presente Decreto rige a partir de su promulgación y modifica en lo pertinente el Decreto número 250 de 1970. Sustituye y deroga: el Decreto número 2400 de 1986, excepto los artículos 67, 188 a 194, 201, 206 y 207; los Decretos números 1768 y 1373 de 1986 y el Decreto número 1190 de 1986, excepto los artículos 2° y 4°.

"Comuníquese, publíquese y cúmplase.

VIRGILIO BARCO

"Dado en Bogotá, D. E., a enero 13 de 1987.

"El Ministro de Justicia,

"Eduardo Suescún Monroy"

COSA JUZGADA ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL.

Estése a lo resuelto por la Corte en fallo No. 64 de 25 de junio de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 65.

Referencia: Expediente número 1572.

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley número 0052 de 1987 (enero 13), "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial".

Demandante: *Héctor Jesús Rodríguez Cruz.*

Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 30 de 25 de junio de 1987

Bogotá, D. E., junio veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

El ciudadano Héctor Jesús Rodríguez Cruz, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 214 de la Constitución, ha presentado a la Corte demanda de inexequibilidad contra la totalidad del Decreto-ley número 052, expedido el 13 de enero de 1987, "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial".

Se procede a adoptar decisión de fondo, una vez surtidos los trámites ordenados por el Decreto número 0432 de 1969.

I. Texto del Decreto acusado

El decreto objeto de la acción dice textualmente:

(Ver anexo No. 1).

II. La demanda

Dice el actor que el Presidente de la República hizo uso de las facultades conferidas por la Ley 52 de 1984 cuando expidió el Decreto-ley número 2400 de 1986

y que en consecuencia las agotó, lo cual implica que la posterior expedición del Decreto número 052 de 1987 fue extemporánea aunque formalmente se hubiera puesto en vigencia dentro del término autorizado.

Agrega que, como resultado de esa extemporaneidad, el Decreto es íntegramente inconstitucional, por violar el artículo 76, ordinal 12 de la Constitución Política.

III. Concepto del Procurador

Por oficio No. 1123 del 12 de marzo de 1987, el señor Procurador General de la Nación emitió concepto en el cual expresa:

"Aunque no existen antecedentes sobre la derogatoria y sustitución por parte del Ejecutivo en uso de facultades extraordinarias de todo un Estatuto dictado en ejercicio de las mismas, como ocurre con el Decreto número 052 de 1987 –materia de acusación– que derogó el 2400 de 1986, la posibilidad planteada por la Corte Suprema de Justicia de dictar Decretos-leyes sucesivos hasta agotar la materia y el término, permite inferir que en toda ley de facultades queda implícita la atribución de derogar, modificar o sustituir sus propias normas, siempre y cuando se expidan las disposiciones dentro del plazo que la Ley le haya señalado.

"De otra parte cabe agregar que cuando el Congreso le confiere facultades extraordinarias al Presidente de la República le traslada toda su competencia, es decir, que en ese momento el Ejecutivo sustituye al Congreso y como tal puede dictar Decretos-leyes como también derogar, modificar y sustituir los que haya dictado con base en las mismas autorizaciones, pues ciertamente goza de todas las atribuciones que tiene el Congreso cuando dicta las Leyes.

"En consecuencia no encuentra este Despacho que el Ejecutivo al expedir el Decreto número 052 de 1987 por medio del cual derogó y sustituyó el Decreto número 2400 de 1986 y algunas otras disposiciones, haya excedido las atribuciones contenidas en el Artículo 1°, numeral 3°, de la Ley 52 de 1984, por lo que solicitará a la Corte Suprema de Justicia su exequibilidad pero sólo en cuanto a facultades se refiere".

IV. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Por la naturaleza del decreto objeto de la acción, es competente la Corte Suprema de Justicia para fallar definitivamente sobre su constitucionalidad.

2. *Cosa juzgada*

Dado que ya existe pronunciamiento de la Corte sobre la integridad del Decreto número 0052 de 1987, no puede decidir de nuevo en relación con la misma norma y con la misma materia, en guarda del principio que confiere a los fallos sobre constitucionalidad fuerza de *cosa juzgada,* por lo cual habrá de estarse a lo ya resuelto.

V. Decisión

Con fundamento en lo dicho, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena–, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Estése a lo resuelto por la Corte en fallo No. 64 del 25 de junio de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario

ANEXO No. 1 EXPEDIENTE No. 1572

"DECRETO NUMERO 52 DE 1987
(enero 13)

"Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial

"El Presidente de la República de Colombia en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 1° ordinal 3° de la Ley 52 de 1984 y previo concepto de la Comisión Asesora creada por dicha ley,

D E C R E T A:

TITULO I

"Normas Generales

"Artículo 1° La carrera Judicial tiene por objeto garantizar la eficiente Administración de Justicia y, con base en el sistema de méritos, asegurar en igualdad de oportunidades el ingreso y ascenso en el servicio de funcionarios y empleados con estabilidad e independencia.

"Artículo 2° Son funcionarios los magistrados, jueces y fiscales de la República. Las demás personas que ocupen cargos en la Rama Jurisdiccional y en las fiscalías tienen la calidad de empleados.

"Artículo 3° El ingreso al servicio de la Administración de Justicia se hará en propiedad, en interinidad o por encargo para los empleados de libre designación. Por nombramiento en propiedad, en período de prueba o en provisionalidad para los de carrera. En todo caso la provisión de los cargos se hará con el lleno de los requisitos constitucionales y legales exigidos para el ejercicio de los mismos.

"Artículo 4° El nombramiento en carrera judicial únicamente podrá recaer en persona seleccionada mediante el sistema de méritos.

"Artículo 5° El sistema de méritos se establece con la finalidad de asegurar el ingreso y promoción en la Administración de Justicia, de las personas más idóneas, mediante el análisis y evaluación de sus calidades, conocimientos, capacidad, vocación y experiencia.

"Artículo 6° El nombramiento en período de prueba será de dos años para magistrados, un año para jueces y ocho meses para empleados.

"No habrá período de prueba en casos de ascenso ni para las personas que hubieren prestado servicios en la jurisdicción, durante más de un año.

"Artículo 7° Todos los cargos de la Rama Jurisdiccional y de las fiscalías son de carrera y deberán ser provistos por el sistema de méritos contemplado en el presente decreto.

"No pertenecen a la carrera y son de libre designación los siguientes:

"– Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Consejero de Estado.

"– Fiscal del Consejo de Estado.

"– Auxiliar de magistrado y Abogado asistente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

"– Auxiliar judicial de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

"– Chofer.

TITULO II

"Administración de la Carrera

"Artículo 8° La Carrera Judicial será administrada por el Consejo Superior de la Administración de Justicia, los Consejos Seccionales de la Carrera, las Corporaciones Judiciales y los Jueces, con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional y de las Oficinas Seccionales de la Carrera.

"Artículo 9° El Consejo Superior de la Administración de Justicia quedará integrado así:

"– El Ministro de Justicia o su delegado quien lo presidirá.

"– Un delegado de la Corte Suprema de Justicia.

"– Un delegado del Consejo de Estado.

"– Un delegado del Tribunal Disciplinario.

"– El Procurador General de la Nación o su delegado.

"– Un representante de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional.

"– Un representante de los empleados judiciales.

"En decisiones sobre la carrera, el Ministro de Justicia, sólo tendrá voto en caso de empate. El Director Nacional de la Carrera actuará como secretario.

"Artículo 10. Además de las funciones señaladas por la ley, el Consejo tendrá las siguientes:

"1. Fijar políticas y programas para convocatorias, selección, ingreso y ascenso en la carrera.

"2. Efectuar las convocatorias a concurso para la provisión de cargos de magistrados de Tribunal y de empleados de la Corte Suprema de Justicia.

"3. Elaborar las listas de aspirantes admitidos a concursos para magistrados de tribunales, y empleados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, con calificación de antecedentes, y remitirlas a sus nominadores.

"4. Inscribir en la carrera a magistrados de tribunales y empleados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

"5. Resolver los recursos de reposición.

"6. Elegir al Director Nacional de la Carrera Judicial.

"7. Formular la política de capacitación para los cursos de selección y los concursos para el ingreso a la carrera.

"8. Asesorar y recomendar políticas de capacitación para la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público.

"Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos y funciones del Consejo Superior de la Administración de Justicia, créase la Dirección Nacional de la Carrera Judicial con la siguiente estructura:

"1. *Director Nacional de la Carrera Judicial*

"1.1 División de carrera judicial y de Coordinación Administrativa.

"2. *Oficinas seccionales de carrera*

"2.1 Jefaturas seccionales

"Artículo 12. Para ser Director Nacional de la Carrera Judicial se requiere título de abogado, diez (10) años de experiencia jurisdiccional, administrativa o docente en educación superior y gozar de amplia reputación personal y reconocido prestigio profesional.

"Artículo 13. Son funciones del Director Nacional de la Carrera Judicial:

"1. Coordinar y controlar el régimen de convocatorias.

"2. Presentar a la consideración del Consejo Superior los proyectos para el desarrollo y correcto funcionamiento de la carrera.

"3. Divulgar las políticas y programas adoptados por el Consejo Superior y coordinar y controlar su aplicación.

"4. Rendir informe anual al Consejo Superior y los demás que éste le solicite.

"5. Proyectar para consideración del Consejo las decisiones de inscripción en la carrera judicial.

"6. Llevar el escalafón nacional de empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional.

"7. Instruir a los jefes seccionales de la carrera y asesorar a los Consejos Seccionales.

"8. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección a su cargo.

"9. Las demás que le asigne el Consejo Superior.

"Artículo 14. Corresponden a la División de Carrera y Coordinación Administrativa las funciones de:

"1. Clasificación, inspección y control de normas de la carrera.

"2. Llevar el registro de inscripción y el escalafón de la carrera.

"3. Proyectar resoluciones para la consideración y aprobación del Consejo Superior.

"4. La provisión de los servicios generales y administrativos al Consejo Superior, a la Dirección Nacional y a los Consejos y jefes seccionales.

"5. Suministrar a los nominadores los medios y ayudas necesarias para la realización de las pruebas y su calificación.

"6. Efectuar por orden del Consejo Superior y del Director las convocatorias y demás actuaciones pertinentes.

"Artículo 15. Los Consejos Seccionales de la carrera funcionarán en cada uno de los distritos judiciales con sede en capital de departamento y estarán integrados así:

"– Un delegado del Ministro de Justicia quien lo presidirá.

"– Un delegado por cada uno de los tribunales superiores con sede en el respectivo departamento.

"– Un delegado del Tribunal Administrativo.

"– Un representante de los jueces.

"En decisiones sobre la carrera, el delegado del Ministro sólo tendrá voto en caso de empate.

"Parágrafo 1° En el Consejo Seccional de Cundinamarca el Tribunal Superior de Aduanas tendrá un representante.

"Parágrafo 2° En los departamentos que tengan un solo Tribunal Superior de Distrito Judicial, este tendrá dos representantes en dicho consejo.

"Artículo 16. Los representantes de las corporaciones, funcionarios, jueces y de los empleados en el Consejo Superior y en los Seccionales, serán elegidos por mayoría para períodos de cuatro años con sus respectivos suplentes, en fecha y según reglamento que expida el Consejo Superior de la Administración de Justicia.

"Artículo 17. Los Consejos Seccionales funcionarán bajo la orientación del Consejo Superior de la Administración de Justicia y tendrán las siguientes funciones dentro del ámbito de su territorio:

"1. Desarrollar las políticas y programas fijados por el Consejo Superior de la Administración de Justicia para administrar la carrera judicial.

"2. Efectuar las convocatorias a concursos para la provisión de cargos de jueces, de empleados de tribunales y de juzgados.

"3. Elaborar y remitir a las entidades nominadoras las listas de aspirantes admitidos a concursos para los cargos anteriores con sus respectivas calificaciones.

"4. Inscribir en la carrera a los jueces y empleados señalados.

"5. Resolver los recursos de reposición.

"6. Remitir a la Dirección Nacional de la carrera los documentos para el escalafón nacional de jueces y empleados y todos los demás que le sean requeridos.

"7. Recomendar la realización de cursos de capacitación para el personal al servicio de la Rama Jurisdiccional.

"Artículo 18. Para ser Jefe Seccional de la carrera se requiere título de abogado y tener cinco (5) años de experiencia administrativa, jurisdiccional o docente en educación superior.

"Artículo 19. El Jefe Seccional de la carrera judicial ejercerá las mismas funciones del Director Nacional que le resulten pertinentes, en el ámbito de su competencia y bajo la orientación del Director y del Consejo Seccional de la carrera.

"Artículo 20. A las entidades y autoridades nominadoras les corresponde, en cuanto a la selección de personal elegible para el ingreso y ascenso en la carrera, la realización y calificación de pruebas, que pueden consistir en cuestionarios, test, cursos concurso, entrevistas y otras que estimen pertinentes.

TITULO III

"Proceso de selección e ingreso

"Artículo 21. La selección para el ingreso o ascenso en la carrera se hará por el sistema de méritos y comprende la convocatoria, el concurso y el período de prueba.

"Todo concurso será abierto y podrán participar quienes pertenecen a la carrera, al servicio o personas ajenas a ellos.

"Artículo 22. La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de todo concurso y se divulgará mediante aviso que deberá contener las generalidades del empleo, requisitos, documentos exigidos, características y demás informaciones pertinentes.

"Artículo 23. Producida una vacante o ante la proximidad del vencimiento del período, el nominador informará inmediatamente en el primer caso y coordinará, en ambos, con los consejos, las fechas, modalidades y bases del concurso para efectos de la convocatoria.

"Artículo 24. Efectuada la inscripción el Consejo de la Carrera determinará, previa revisión de requisitos y antecedentes, cuáles de los aspirantes pueden participar en el concurso.

"Esta decisión será notificada mediante aviso que se fijará por ocho días; los aspirantes no admitidos podrán interponer recurso de reposición motivado, dentro de los tres (3) días siguientes y se resolverá en los diez (10) días posteriores.

"Cumplido lo anterior se remitirá la lista con las calificaciones al nominador.

"Artículo 25. La realización de pruebas, exámenes, entrevistas, concursos u otros para la selección de personal, se hará con el apoyo técnico, operativo y administrativo de la Dirección Nacional y Seccionales de la carrera u otras entidades especializadas en la materia, y serán calificadas por el nominador o las comisiones designadas al efecto por las Corporaciones Judiciales.

"En ningún caso la entrevista podrá utilizarse como única modalidad de concurso.

"Artículo 26. El concurso podrá realizarse por grupos de participantes cuando fuere conveniente por el número de concursantes, cargos a proveer u otras razones. En este caso para cada uno de los grupos deberá elaborarse la lista de admisibles con sus respectivas calificaciones de antecedentes.

"Artículo 27. El nominador, o la comisión designada, elaborará la lista de los resultados por riguroso orden de méritos, entre quienes hubieren aprobado el concurso.

"Este resultado con indicación de puntajes se notificará por aviso fijado en la secretaría correspondiente durante ocho (8) días.

"Desfijado el aviso cualquier concursante dentro de los tres (3) días siguientes podrá interponer recurso de reposición motivado que se resolverá en ocho (8) días.

"Artículo 28. Será causal de retiro de la lista el fraude comprobado en la realización del concurso o el error evidente en el proceso de selección.

"Artículo 29. En firme la calificación, se procederá al nombramiento del ganador o ganadores en estricto orden de resultado, según el número de cargos.

"Quienes hubieren aprobado el concurso, y se encuentren ubicados dentro de los cinco primeros puestos, si no fueren nombrados permanecerán en lista de elegibles, en riguroso orden de méritos, por el lapso de dos (2) años y podrán ser designados en cargos de igual naturaleza y categoría en el mismo distrito.

"Artículo 30. En la calificación de antecedentes la experiencia judicial tendrá valoración preponderante, según escala de puntaje que establezca el Consejo Superior de la Administración de Justicia.

"Realizado el concurso y en igualdad de resultados, se designará al inscrito en la carrera; en su defecto a quien se encuentre en el servicio.

"Si se presenta empate entre personas ajenas al servicio la designación será discrecional.

"Artículo 31. Cuando el concurso fuere declarado desierto porque ninguno de los aspirantes hubiere obtenido calificación aprobatoria o por otras causas, se procederá a realizar una nueva convocatoria y selección.

"Artículo 32. En caso de declararse irregular la totalidad del concurso, éste deberá repetirse entre los mismos participantes sin necesidad de nueva convocatoria.

Si es parcial, el concurso podrá rehacerse a partir del momento en que se presentó la irregularidad.

"Artículo 33. En caso de vacancia definitiva cuando las necesidades del servicio lo exijan y no se pudiere proveer el cargo por el sistema de méritos, la designación se hará con carácter provisional e inmediatamente el nominador informará al respectivo Consejo de la Carrera para efectos de la convocatoria.

"Las vacancias transitorias se proveerán, igualmente, en provisionalidad o encargo.

"Artículo 34. Realizado el concurso quienes ingresen al servicio serán nombrados en período de prueba y quienes hubieren prestado el servicio, en situación distinta de provisionalidad, serán designados en propiedad sin período de prueba siempre y cuando se trate del mismo escalafón.

"Quienes obtengan calificaciones satisfactorias durante el período de prueba y no tuvieron sanciones disciplinarias, serán nombrados en propiedad.

"Artículo 35. Durante el período de prueba los funcionarios y empleados serán calificados en tres oportunidades. Dos calificaciones insatisfactorias darán lugar al retiro del servicio mediante declaratoria de insubsistencia motivada.

"Artículo 36. Las calificaciones insatisfactorias se notificarán personalmente o por correo certificado y contra ellas procede el recurso de reposición motivado dentro de los tres días siguientes, más las distancias, y deberá resolverse en un término de ocho (8) días.

"Artículo 37. La declaración de insubsistencia será motivada y contra ella proceden, en efecto suspensivo, el recurso de reposición ante la Corte y el Consejo de Estado y el de apelación o en subsidio el de queja en los demás casos.

"Estos recursos serán resueltos en el término de quince días.

"Artículo 38. Se podrá promover el ingreso o el ascenso en la carrera mediante la realización de cursos de selección, con la designación entre quienes lo aprobaren con los mejores puntajes, según reglamento que establezcan los organismos administradores de la Carrera Judicial.

"Artículo 39. Los funcionarios y empleados ingresan a la carrera con la designación en propiedad y las calificaciones satisfactorias en período de prueba, cuando este se exija de conformidad con normas del presente estatuto.

TITULO IV

"Funciones y requisitos de los empleos

"Artículo 40. Fíjanse las siguientes funciones para el ejercicio de los empleos de la Rama Jurisdiccional y de las fiscalías:

"Auxiliar de magistrado

"Colaborar bajo la orientación y responsabilidad del Magistrado o Consejero en la realización de estudios y trabajos propios de las funciones que le corresponden a éstos.

"Abogado asistente

"Colaborar bajo la orientación y responsabilidad de los magistrados de la respectiva sala o sección, en la realización de estudios y trabajos de la función que a éstas corresponde.

"Secretario

"Las establecidas en el artículo 14 del Decreto-ley número 1265 de 1970 y las demás que le asigne la ley.

"Relator

"Clasificar, titular y extractar las providencias de la Corporación; preparar las publicaciones y los extractos de jurisprudencia y elaborar los índices de las providencias.

"Contador liquidador de impuestos

"Efectuar las operaciones matemáticas para las liquidaciones de impuestos, tasas y contribuciones y las demás que se le ordenen.

"Bibliotecólogo

"Organizar y clasificar libros, revistas y documentos de la respectiva biblioteca; elaborar los ficheros bibliográficos y atender al público.

"Oficial Mayor

"Colaborar bajo la orientación de sus superiores en las labores propias del Despacho o de la secretaría y las asignadas en el artículo 14 del Decreto-ley número 1265 de 1970.

"Auxiliar Judicial

"Desempeñar labores generales y asistenciales propias del Despacho como mecanografía, radicación, organización y archivo de expedientes y las demás que le asigne el superior o el reglamento.

"Archivero

"Clasificación, actualización, manejo y conservación de libros, documentos y expedientes en archivo.

"Asistente Social

"Colaborar con el juez de menores en la realización de visitas, encuestas y en la orientación sicológica y social del menor y sus familiares.

"Escribiente

"Ejecución de diversos trabajos como mecanografía, registro, manejo de archivo, revisión de expedientes, elaboración y clasificación de oficios y documentos, elaboración de estadísticas y atención al público.

"*Oficinista*

"Realización de trabajos auxiliares tales como mecanografía, clasificación y archivo de oficios y documentos y atención al público.

"*Citador*

"Efectuar notificaciones autorizadas por el secretario, entregar correspondencia y realizar los trabajos auxiliares que se le asignen.

"*Chofer*

"Conducción, mantenimiento, aseo y reparaciones menores de los vehículos asignados.

"*Auxiliar de servicios generales*

"Desarrollar labores auxiliares encaminadas a facilitar la prestación del servicio.

"Artículo 41. Fíjanse los siguientes requisitos mínimos para el ejercicio de cargos de empleados en la Rama Jurisdiccional y fiscalías:

Nombre del cargo	Grado	Requisitos
Auxiliar y abogado asistente de Corte y Consejo de Estado	21	Los mismos requisitos exigidos para el desempeño del empleo de Magistrado de Tribunal (art. 155 C.N.).
Secretario y Relator de la Corte y del Consejo de Estado	20	Poseer título de abogado y tener tres (3) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Contador liquidador de impuestos	17	Poseer título de contador público y dos (2) años de experiencia como contador o liquidador de impuestos.
Secretario de Tribunal	13	Poseer título de abogado y un (1) año de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Oficial Mayor	12	Tener cuatro (4) años de estudios de derecho y dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Bibliotecólogo	12	Haber terminado estudios de licenciatura de bibliotecología y tener un (1) año de experiencia relacionada.

Nombre del cargo	Grado	Requisitos
Relator de Tribunal	11	Haber aprobado cuatro (4) años de estudios de derecho y tener un (1) año de experiencia en la Rama Jurisdiccional o dos (2) años de estudios superiores y tres (3) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Auxiliar Judicial y Oficial Mayor	11	Haber terminado tres (3) años de estudios de derecho y tener dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional o dos (2) años de estudios superiores y tres (3) años de experiencia en Rama Jurisdiccional.
Secretario de Juzgado y Auxiliar Judicial en cabecera de Circuito	10	Haber aprobado un (1) año estudios de derecho y tener dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional o diploma en educación media y tres (3) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Secretario de Juzgado y Auxiliar Judicial en cabecera de Distrito	10	Haber aprobado dos (2) años de estudios en derecho y tener dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional o un (1) año de estudios superiores y tres (3) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Secretario, Oficial Mayor, Auxiliar Judicial y escribiente en cabecera de Distrito.	09	Haber aprobado un (1) año de estudios de derecho y tener dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional o dos (2) años de estudios superiores y un (1) año de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Secretario, Oficial Mayor, Auxiliar Judicial y escribiente en cabecera de Circuito y Juzgado Territorial	09	Tener diploma en educación media y dos (2) años de experiencia en la Rama Jurisdiccional.

Nombre del cargo	Grado	Requisitos
Archivero	09	Haber aprobado dos (2) años de estudios de bibliotecología o haber aprobado curso técnico sobre la materia y tener un (1) año de experiencia relacionada.
Oficial Mayor y Auxiliar Judicial	08	Diploma en educación media y tener un (1) año de experiencia en la Rama Jurisdiccional.
Asistente Social	07	Haber aprobado un (1) año de estudios superiores y tener un (1) año de experiencia como oficinista.
Oficial Mayor	07	Tener diploma en educación media y dos (2) años de experiencia como oficinista.
Escribiente	07	Tener diploma en educación media.
Escribiente y oficinista	06	Tener cinco (5) años de estudios de educación media y dos (2) años de experiencia como oficinista.
Chofer	06	Haber aprobado dos (2) años de educación media, un curso de conducción refrendado por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes y tener dos (2) años de experiencia relacionada.
Oficinista y Escribiente	05	Haber aprobado cuatro (4) años de educación media y tener dos (2) años de experiencia como oficinista.
Escribiente	04	Haber aprobado cuatro (4) años de estudios de educación media y tener un (1) año de experiencia como oficinista.

Nombre del cargo	Grado	Requisitos
Auxiliar de Servicios Generales	04	Haber aprobado cinco (5) años de estudios de educación primaria y tener dos (2) años de experiencia no relacionada.
Citador	03	Haber aprobado dos (2) años de estudios en educación media.
Auxiliar de Servicios Generales	03	Haber aprobado cinco (5) años de estudios en educación primaria.

"Parágrafo. A quienes no reúnan los requisitos exigidos en este artículo se les aplicará las siguientes equivalencias:

"Un (1) año de educación superior por dos (2) años de experiencia relacionada y viceversa.

"Un (1) año de educación media por un (1) año de experiencia relacionada y viceversa.

"Artículo 42. Establécese el siguiente escalafón de la carrera para los funcionarios judiciales y de fiscalías:

"a) Magistrado y Fiscal de Tribunal Superior de Distrito Judicial, Contencioso-Administrativo y Superior de Aduanas;

"b) Juez Superior, Juez Superior de Aduanas, Juez de Circuito, de Menores, de Instrucción Penal Aduanera, de Instrucción Criminal y Fiscales de Juzgados Superiores y de Circuito;

"c) Juez Municipal, Juez de Distrito Penal Aduanero y Territorial.

"Artículo 43. Establécese el siguiente escalafón para los empleados de la carrera de la Rama Jurisdiccional y de fiscalías:

"a) Secretario y Relator de la Corte y del Consejo de Estado, Secretario de Fiscalía del Consejo de Estado;

"b) Contador liquidador de impuestos;

"c) Secretario de Tribunal;

"d) Oficial Mayor y Bibliotecólogo de la Corte y del Consejo de Estado;

"e) Oficial Mayor, Relator y Auxiliar Judicial de Tribunal; Auxiliar Judicial de Fiscalía del Consejo de Estado y de Tribunal;

"f) Secretario de Juzgado Superior y Superior de Aduanas, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal, de Instrucción Penal Aduanera y Auxiliar Judicial de la Corte, todos de grado 10;

"g) Oficial Mayor y Secretario de Juzgado, Archivero y Auxiliar Judicial de la Corte y del Consejo, Asistente Judicial de Fiscalías de Juzgados Superiores, Aduanas y de Circuito, todos de grado 09;

"h) Oficial Mayor de Juzgado Municipal y Distrito Penal Aduanero y Auxiliar Judicial de la Relatoría de la Corte, todos de grado 08;

"i) Escribiente del Consejo de Estado, de Tribunales y Asistente Social de Juzgados de Menores, todos de grado 07;

"j) Oficinista del Consejo de Estado y de la Corte; Escribiente de Juzgado de Instrucción Criminal, de Instrucción Penal Aduanera, de Tribunal Superior y Superior de Aduanas, de Juzgado Superior de Circuito y menores, todos de grado 06;

"k) Oficinista de Tribunal y Escribiente de Juzgado Superior, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal, de Instrucción Penal Aduanera, de Distrito Penal Aduanero y de Municipal, todos de grado 05;

"l) Escribiente de Juzgado Municipal y Penal Aduanero; Citador de Juzgado Superior y Superior de Aduanas, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal; de Instrucción Penal Aduanera, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y Auxiliares de Servicios Generales de la Corte, del Consejo y de los Tribunales, todos de grado 04.

TITULO V

"Calificación de servicios

"Artículo 44. La calificación de los servicios de empleados y funcionarios tiene por fin:

"a) Determinar el ingreso, permanencia o retiro del servicio y del escalafón de la carrera;

"b) Determinar su participación en los cursos y concursos de ascenso;

"c) Promover su participación en los programas de capacitación;

"d) El otorgamiento de becas y estímulos.

"Artículo 45. Todos los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público que ocupen cargos de la carrera deben ser calificados formal y periódicamente.

"Artículo 46. La calificación será motivada y comprenderá los siguientes aspectos: Conducta, dedicación al trabajo; calidad y organización del trabajo; actualización de conocimientos. Al impartirla se tendrá en cuenta el comportamiento público del calificado, su puntualidad, la atención al público y en fin todo lo que contribuya al análisis de su idoneidad para el servicio.

"Artículo 47. La calificación de la calidad de trabajo y de la actualización de conocimientos de los funcionarios y empleados judiciales corresponde hacerla a los respectivos superiores jerárquicos o funcionales y de la conducta, organización y

rendimiento a la Procuraduría General de la Nación, la que además calificará todos los aspectos de los funcionarios y empleados de las fiscalías.

"Artículo 48. En los meses de abril y mayo de cada año se procederá a la calificación de los funcionarios y empleados judiciales y de fiscalías, así:

"– La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado calificarán a los Magistrados de los Tribunales respectivos.

"– Los Tribunales Superiores a jueces superiores y de Circuito de su Distrito.

"– El Tribunal Superior de Aduanas a todos los jueces del ramo.

"– Los jueces Superiores a los jueces de Instrucción.

"– Los jueces de Circuito a los jueces Municipales del respectivo circuito.

"– Cada Corporación calificará a sus empleados y cada juez o fiscal a los suyos.

"La calificación se fundará en el propio conocimiento y apreciación y en los resultados de las visitas reglamentarias.

"Cuando la calificación corresponde a una Corporación, ésta se integrará en Salas de Decisión atendiendo a la especialidad del calificado, en cuanto fuere posible.

"Si la calificación de un juez corresponde a otro se hará previo reparto equitativo coordinado por el primero en orden numérico.

"Artículo 49. La nota comprenderá todos los aspectos dentro de la siguiente escala: excelente, bueno, regular y malo.

"Se tendrá para todos los efectos como insatisfactorias las calificaciones de regular y malo.

"Artículo 50. Los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y de las fiscalías deben ser calificados una vez al año.

"Artículo 51. Una calificación insatisfactoria dará lugar a la suspensión en el escalafón por el término de un año con pérdida de las prerrogativas del mismo, salvo la capacitación.

"Dos calificaciones insatisfactorias darán lugar a la insubsistencia, tratándose de empleados, y si se tratare de funcionario no será reelegido.

"Artículo 52. Contra la calificación insatisfactoria y la declaración de insubsistencia proceden los recursos en la forma y los términos establecidos en los artículos 36 y 37.

"Artículo 53. La declaración de insubsistencia será causal de inhabilidad para desempeñar cargos jurisdiccionales y en las fiscalías, por el término de dos años.

TITULO VI

"Derechos y deberes

"Artículo 54. Todo funcionario y empleado judicial o de las fiscalías tendrá derecho a recibir capacitación adecuada para el mejor desempeño de las funciones

propias de su cargo; a la oportunidad de ascenso en el servicio; a percibir puntualmente la remuneración y prestaciones sociales que le corresponda; a la asociación con fines de apoyo mutuo, de carácter cultural, asistencial, cooperativo y otros similares; a obtener permisos y licencias según las normas legales; a participar en los programas de bienestar social y a gozar de estímulos; a la prevención de los riesgos en su trabajo; a la protección de las autoridades competentes en caso de amenazas, violencia, injuria y demás ofensas de que pueda ser víctima con ocasión del servicio; a solicitar traslado en cargos equivalentes al que desempeña, y a todos los demás beneficios que se establezcan a su favor por ley o reglamento.

"Artículo 55. Son deberes de los funcionarios y empleados:

"a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos;

"b) Desempeñar con honorabilidad, solicitud e imparcialidad las funciones de su cargo;

"c) Obedecer y respetar a sus superiores;

"d) Permanecer en el desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo;

"e) Observar en sus relaciones con el público y sus compañeros de labores toda la consideración y cortesía debidas;

"f) Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder del uso de la autoridad que le ha sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puedan impartir, sin que en ningún caso queden exentos de la responsabilidad que les incumbe por la que corresponda a sus subordinados;

"g) Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo;

"h) Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones que les han sido encomendadas;

"i) Responder por la conservación de los elementos, útiles, materiales, equipos, muebles y demás bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta de su utilización;

"j) Poner en conocimiento de los organismos de administración de la carrera los hechos que puedan perjudicar la administración de justicia y las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio.

"k) Las demás que la ley les señale.

TITULO VII

"Inhabilidades e incompatibilidades

"Artículo 56. No podrán ser designados para cargo alguno de los regulados en este decreto:

"a) Quienes se hallen en interdicción judicial;

"b) Quienes padezcan cualquier afección física o mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo;

"c) Quienes se encuentren en detención preventiva, aunque gocen del beneficio de excarcelación y quienes hayan sido llamados a juicio mientras se resuelve su situación jurídica;

"d) Quienes hayan sido condenados por delito doloso;

"e) Quienes se encuentren excluidos del ejercicio de la profesión de abogado o hayan sido suspendidos por término superior a tres (3) meses;

"f) Quienes por falta disciplinaria hayan sido destituidos o suspendidos por segunda vez o se les haya impuesto por tres veces cualquier otro tipo de sanción.

"Artículo 57. En ninguna elección o nombramiento de funcionarios o empleados podrán designarse personas que sean cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de algunos de los funcionarios que intervienen en la elección o nombramiento, o de los que han participado en la elección o nombramiento de quienes deben hacer la designación.

"Artículo 58. No podrán ser designados para una misma corporación o Despacho Judicial o de las fiscalías ni para cargos entre los cuales haya dependencia funcional, quienes sean entre sí cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

"Artículo 59. Los cargos de la Rama Jurisdiccional y de fiscalías no son acumulables y son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo retribuido, con la gestión profesional de negocios ajenos, con los cargos de elección popular y los de representación política, con el ejercicio del comercio, con la milicia activa, con toda participación en el ejercicio de la abogacía, con los cargos de albacea, curador dativo y auxiliar de la justicia y con la dirección y fiscalización de sociedades comerciales. La prohibición de litigar y de ejercer albaceazgo y cargo de auxiliar se extiende aun a quien esté en uso de licencia.

"Se exceptúan de la presente disposición los cargos docentes hasta un límite de ocho horas semanales durante la jornada laboral, siempre que no se afecte la marcha regular del trabajo.

TITULO VIII

"Faltas disciplinarias

"Artículo 60. Son faltas de los funcionarios y empleados contra la dignidad de la administración de justicia las siguientes:

"a) Embriaguez habitual; uso frecuente e injustificado de substancias que produzcan dependencia física o síquica y practicar juegos prohibidos;

"b) Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier funcionario o empleado o contra quienes intervienen en los procesos;

"c) Solicitar o fomentar publicidad de cualquier clase respecto de su persona o de sus actuaciones, sin perjuicio del derecho de rectificar informaciones o comentarios;

"d) Contraer obligaciones de manera directa o indirecta con alguna de las partes o sus apoderados o cualquier otro interesado en asuntos que se hallen a su conocimiento o en los cuales debe intervenir;

"e) Solicitar o recibir dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de lucro provenientes directa o indirectamente de alguna de las personas mencionadas en el literal anterior o de funcionario o empleado de su dependencia;

"f) Influir directa o indirectamente en el nombramiento o elección de funcionarios o empleados;

"g) Ejercer actividades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma afecte su dignidad.

"Artículo 61. Son faltas contra la eficacia de la administración de justicia:

"a) Omitir o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo o el trabajo que señale la ley o los reglamentos de la oficina, o dejar vencer sin justa causa los términos sin la actuación correspondiente;

"b) Omitir el reparto cuando sea obligatorio hacerlo o tolerar su ejecución en forma irregular;

"c) Permitir que litigue en su despacho persona no autorizada para ello o mostrar los expedientes o parte de los mismos, fuera de los casos permitidos por la ley;

"d) Dejar de asistir a los actos o diligencias en que se requiera su presencia, o que la ley lo ordene o firmar las providencias sin haber participado en su discusión o pronunciamiento;

"e) Dejar de asistir a las audiencias o de practicar personalmente las pruebas o no dictar o dejar de notificar las providencias;

"f) Hacer constar en cualquier diligencia judicial hechos que no sucedieron o dejar de relacionar los que ocurrieron;

"g) Dar tratamiento de favor o de discriminación de cualquier naturaleza a las personas que intervienen en los procesos;

"h) Dejar de asistir injustificadamente a la oficina o cerrarla sin motivo legal o limitar indebidamente las horas de trabajo o de despacho al público;

"i) Ejercer influencias directas o indirectas sobre cualquier funcionario o empleado para que proceda en determinado sentido en los asuntos que este conoce o ha de conocer o que tramite;

"j) No dar noticia a la autoridad competente de delitos o faltas disciplinarias de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones;

"k) No suministrar oportunamente las informaciones que deba dar o suministrarlas con inexactitud, irrespeto o en forma incompleta;

"l) Tener a su servicio en forma estable o transitoria, para las labores de su Despacho, personas distintas de los empleados de la propia oficina, salvo las prácticas de estudiantes de facultades de derecho reconocidas;

"ll) No sancionar las faltas de los funcionarios o empleados u obrar con lenidad en la aplicación de las sanciones;

"m) Violar las normas sobre nombramientos, elección o remoción de los funcionarios o empleados y las que regulan la designación de auxiliares de la justicia;

"n) Contravenir las disposiciones sobre honorarios de los auxiliares de la justicia y sobre arancel judicial;

"ñ) Residir sin permiso fuera de la sede del despacho o realizar actividades laborales ajenas al ejercicio de las funciones durante la jornada de trabajo.

"Artículo 62. En general constituye falta disciplinaria el incumplimiento de los deberes, la infracción de incompatibilidades y la incursión en las inhabilidades y prohibiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

TITULO IX

"Régimen disciplinario

"Artículo 63. Todo hecho constitutivo de falta disciplinaria origina acción de esta naturaleza que podrá iniciarse de oficio, o por queja o informe y no es incompatible con la responsabilidad civil o penal del infractor.

"La acción caduca en cinco (5) años y la iniciación del proceso la interrumpe.

"Artículo 64. Cuando se formule queja el investigador deberá solicitar la ratificación bajo juramento y si ésta no se obtiene podrá adelantarla sin esa formalidad.

"Artículo 65. La sanción disciplinaria se impondrá por la autoridad competente con arreglo al procedimiento y por hechos previstos en la Constitución y la Ley.

"Por un mismo hecho no podrá adelantarse más de una investigación disciplinaria.

"Artículo 66. La acción disciplinaria y las sanciones procederán aun cuando el funcionario o empleado haya hecho dejación del cargo.

"Cuando la suspensión o la destitución no pudieren hacerse efectivas por pérdida anterior del cargo, se anotarán en la hoja de vida del sancionado para que surtan sus efectos como antecedentes.

"Artículo 67. A los funcionarios y empleados que incurran en las faltas enumeradas en el presente estatuto se les aplicará según la naturaleza, efectos y modalidades del hecho, la gravedad de la infracción, los antecedentes personales y profesionales, una de las siguientes sanciones:

"a) Multa;

"b) Suspensión en el cargo;

"c) Destitución.

"Cuando la falta a juicio del superior no diere lugar a sanción, podrá de plano y por escrito amonestar al infractor. La amonestación consiste en la prevención de que una nueva falta acarreará sanción.

"Artículo 68. La multa no podrá ser inferior al valor de cinco (5) días de sueldo que devengue el funcionario o empleado sin exceder al de un mes. Se aplicará en caso de falta leve.

"El concurso de faltas, la falta grave o la reincidencia en faltas leves darán lugar a la aplicación de las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por treinta días sin derecho a remuneración, o de destitución.

"Artículo 69. El régimen de disciplina interna de cada despacho judicial y de las fiscalías estará a cargo del respectivo superior, quien para mantenerla podrá imponer de plano a los empleados multa hasta por tres (3) días de sueldo y suspensión sin remuneración hasta por el mismo término.

"Artículo 70. Antes de resolver la apertura de la investigación podrá ordenarse averiguación previa con el objeto de comprobar si el hecho es constitutivo de falta o si hay mérito para la investigación.

"Artículo 71. La investigación disciplinaria tendrá las siguientes etapas y términos:

"a) Instrucción en el término de treinta (30) días, dentro del cual se archivará el expediente o se formulará pliego de cargos en el que se precisará la infracción que imputa y las disposiciones legales presuntamente violadas;

"b) Presentación de descargos y petición de pruebas, en el término de seis (6) días;

"c) Práctica de pruebas, en el término de veinte (20) días;

"d) Cierre y calificación de la investigación, en el término de diez (10) días.

"Artículo 72. Cuando a juicio del nominador los hechos que se imputan al funcionario o empleado constituyen falta grave, aquél solicitará investigación a la Procuraduría la cual deberá adelantarla en forma prioritaria. En ese evento los términos señalados en el artículo anterior se reducirán a la mitad, salvo el de presentación de descargos.

"Artículo 73. Perfeccionada la investigación el funcionario que la adelantó informará de ello al competente, quien procederá a su calificación mediante providencia, en la cual formulará acusación con solicitud de sanción ante el nominador u ordenará el archivo del expediente.

"Contra esta decisión no proceden recursos.

"Artículo 74. El pliego de cargos se notificará personalmente al investigado, y si esto no fuere posible se emplazará por edicto que se fijará por cinco (5) días en la secretaría de la oficina investigadora y en su último lugar de trabajo o de residencia conocida.

"Pasados ocho (8) días de la desfijación si el acusado no comparece se le designará apoderado de oficio con quien proseguirá la actuación.

"Artículo 75. En las investigaciones y procesos disciplinarios se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas disciplinarias, las del código de procedimiento penal en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.

TITULO X

"Procesos disciplinarios

"Artículo 76. Recibida la actuación del Ministerio Público por el juez de conocimiento y repartido, cuando sea el caso, el negocio se fijará en lista por el término de cinco (5) días dentro del cual el acusado podrá presentar alegatos por escrito y pedir las pruebas.

"El juez, o el sustanciador en las corporaciones, podrá decretar las solicitadas o las que de oficio estime convenientes, dentro de los cinco (5) días siguientes y para cuya práctica señalará término que no podrá exceder de diez (10) días.

"Vencido el término de fijación en lista, o el probatorio, según el caso, el juez dispondrá de quince (15) días para dictar el fallo. La corporación decidirá en veinte (20) días.

"Artículo 77. La providencia se notificará personalmente dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición. Si ello no fuere posible, se fijará edicto en la secretaría del respectivo despacho por el término de cinco (5) días. Procederán los mismos recursos a instancia de la Procuraduría cuando ésta considere que la sanción ha debido ser la de destitución.

"Si el sancionado se encuentra en lugar diferente a la sede del juzgado la notificación se hará por comisionado.

"Artículo 78. Contra las providencias que impongan a los empleados sanción de destitución procede el recurso de reposición cuando provienen de la Corte y del Consejo de Estado, y el de apelación cuando la destitución la ordenan otros nominadores.

"Los recursos se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de su notificación. El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo y si fuere denegado procede el recurso de queja.

"Artículo 79. El Tribunal Disciplinario conoce de los procesos así:

"En única instancia

"a) De los adelantados contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en cuanto no constituyan juicios de responsabilidad de competencia del Senado de la República;

"b) De los adelantados contra los fiscales del Consejo de Estado y de los tribunales.

"En segunda instancia

"De los resueltos por el Procurador General de la Nación contra los fiscales de juzgados.

"Artículo 80. La Corte Suprema de Justicia conoce de los procesos disciplinarios así:

"En única instancia

"De los adelantados contra sus propios empleados y contra los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito y Superiores de Aduanas.

"En segunda instancia

"De los resueltos en primera por los Tribunales Superiores de Distrito y de Aduanas contra sus propios empleados.

"Artículo 81. El Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos disciplinarios adelantados contra sus empleados y contra los magistrados de los Tribunales Contencioso-Administrativos, y en segunda instancia de los adelantados en primera contra los empleados de los mismos tribunales.

"Artículo 82. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de Aduanas conocen así:

"En única instancia

"a) De los procesos adelantados contra sus propios empleados cuando no procede la apelación;

"b) Contra los jueces cuyo nombramiento les corresponde.

"En primera instancia

"De los adelantados contra sus propios empleados cuando procede la apelación.

"En segunda instancia

"De los procesos adelantados en primera contra los empleados de los juzgados.

"Artículo 83. Los tribunales Contencioso-Administrativos conocen así:

"En única instancia

"De los procesos adelantados contra sus empleados cuando no procede la apelación.

"En primera instancia

"De los procesos adelantados contra sus empleados cuando procede la apelación.

"Artículo 84. Los jueces y los fiscales conocen en única instancia de los procesos adelantados contra sus empleados cuando no procede la apelación y en primera instancia cuando procede.

"Artículo 85. En las corporaciones judiciales los procesos disciplinarios los adelantará el magistrado, la sala o sección nominadora cuando el empleado es de su exclusiva designación.

"Artículo 86. El Procurador General de la Nación conoce en primera instancia de los procesos adelantados contra los fiscales de juzgados y en segunda instancia de los adelantados contra los empleados de las fiscalías cuando procede la apelación.

"Artículo 87. Para la función disciplinaria en las corporaciones se designará un magistrado ponente quien conformará la Sala con otros dos magistrados de distintas especialidades escogidos por orden alfabético.

"La investigación disciplinaria contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Consejeros de Estado la adelantará el Procurador General de la Nación quien podrá comisionar a los Procuradores Delegados.

"Las investigaciones y procesos contra los fiscales de competencia del Procurador General de la Nación los adelantará directamente o por intermedio de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público, la cual podrá comisionar para la práctica de diligencias a los Procuradores Regionales y a los jefes de las oficinas seccionales.

"Artículo 88. La vigilancia judicial y de fiscalías se ejercerá principalmente por medio de visitas generales y especiales que se ordenarán por auto.

"Las visitas generales se practicarán a cada despacho una vez al año y tienen por finalidad establecer la asistencia, el comportamiento y rendimiento de los funcionarios y empleados; el orden, actualidad, exactitud de los libros y expedientes; el cumplimiento de los términos, el manejo de los títulos de depósitos judiciales, la existencia de los efectos que pertenecen a cada asunto y las condiciones del trabajo. Las visitas especiales se practicarán de oficio o por queja.

"De cada visita se levantará un acta con las conclusiones del caso, sendas copias de ésta se enviarán al despacho visitado y al respectivo Consejo de la Carrera. En el acta se consignarán las deficiencias y los aspectos positivos que merezcan ser destacados, si los hubiere.

TITULO XI

"Estímulos

"Artículo 89. Los organismos administradores de la carrera deberán conceder los estímulos establecidos en la ley para funcionarios y empleados que se destaquen por sus méritos en la prestación del servicio conforme al reglamento que se expida.

"Artículo 90. Para tal efecto se tendrá en cuenta los puntajes obtenidos en la calificación de servicios, la publicación de trabajos, el aporte a la jurisprudencia y los demás que contribuyan a la mejor administración de justicia.

"Artículo 91. Tales estímulos pueden consistir en el otorgamiento de becas, comisión de estudios en el país o en el exterior, condecoraciones, publicación de trabajos meritorios y auxilios para vivienda y educación.

TITULO XII

"Escuela Judicial

"Artículo 92. La Escuela Judicial 'Rodrigo Lara Bonilla', es un organismo especial de carácter docente y prestará sus servicios en todo el territorio nacional a los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público y a los particulares que aspiren a ingresar a dichos organismos.

"Artículo 93. La Escuela Judicial tendrá como objetivos la enseñanza, formación y adiestramiento de los funcionarios y empleados y la investigación y difusión de las ciencias jurídicas y de las técnicas requeridas para el desarrollo y perfeccionamiento de las funciones asignadas a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio Público.

"Artículo 94. Son funciones de la Escuela Judicial:

"1ª Formar, capacitar, actualizar y adiestrar en materias jurídicas y en ciencias auxiliares y complementarias a los servidores de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, y a quienes deben ingresar a la carrera.

"2ª Desarrollar programas de enseñanza en técnicas de criminalística e investigación criminal tendientes a la modernización y eficiencia de la justicia.

"3ª Promover y realizar cursos y prácticas en las distintas regiones del país, directamente o por medio de convenios con universidades e institutos dedicados a la capacitación.

"4ª Proponer al Ministerio de Justicia la celebración de convenios con organismos nacionales e internacionales para la formación de jueces y empleados.

"5ª Desarrollar las políticas de formación profesional judicial trazadas por el Ministerio de Justicia y coordinar con los organismos de administración de la carrera la ejecución.

"6ª Definir sus propios programas de becas nacionales e internacionales para preparación de funcionarios, empleados y de sus profesores.

"7ª Expedir diplomas y certificados de aprobación o de asistencia a los participantes en los cursos, seminarios, coloquios u otras actividades docentes que realice.

"8ª Adelantar los cursos de selección de personal de conformidad con las políticas y bases señaladas por los organismos administradores de la carrera.

"9ª Promover, desarrollar y divulgar investigaciones científicas y técnicas para mejorar los métodos y sistemas de trabajo de los despachos judiciales y del Ministerio Público.

"10. Publicar, divulgar y distribuir investigaciones y obras jurídicas, jurisprudencia y otros documentos.

"11. Las demás que le señale la ley.

"Artículo 95. La Escuela Judicial será administrada por un Consejo Superior y por el Director General.

"Artículo 96. El Consejo Superior de la Escuela Judicial quedará integrado así:

"– El Ministro de Justicia o su delegado quien lo presidirá.

"– Un delegado de la Corte Suprema de Justicia.

"– Un delegado del Consejo de Estado.

"– Un delegado del Tribunal disciplinario.

"– Un delegado de los funcionarios judiciales.

"– El Rector de la Universidad Nacional de Colombia o su delegado.

"– El Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior o su delegado.

"– El Director de la Escuela Superior de Administración Pública o su delegado.

"El Director de la Escuela Judicial actuará como secretario del Consejo.

"Artículo 97. Son funciones del Consejo Superior de la Escuela Judicial:

"1ª Formular la política general y adoptar el modelo docente para la formación, capacitación, adiestramiento y especialización de los alumnos.

"2ª Aprobar los planes y programas de estudios docentes y administrativos, generales y específicos para el desarrollo de sus objetivos y propender por su implementación.

"3ª Controlar el funcionamiento de la Escuela y verificar el cumplimiento de sus planes y programas.

"4ª Poner en funcionamiento sus dependencias seccionales de acuerdo con las necesidades de la administración de justicia.

"5ª Aprobar la celebración de convenios educativos, de intercambio y de similar naturaleza con otras entidades u organismos nacionales e internacionales.

"6ª Adoptar los estatutos y reglamentos necesarios para el funcionamiento interno de la Escuela.

"7ª Proponer el proyecto de presupuesto anual a iniciativa del Director General.

"8ª Proponer la planta de personal de la Escuela y su reforma.

"Artículo 98. Para ser Director de la Escuela Judicial se requiere tener título de abogado, diez (10) años de experiencia docente en educación superior y gozar de amplia reputación personal y de reconocido prestigio profesional.

"Artículo 99. Son funciones del Director General de la Escuela Judicial:

"1ª Someter a la consideración y aprobación del Consejo Superior los planes y programas de capacitación, formación, adiestramiento y especialización que deban ejecutarse.

"2ª Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los planes y programas aprobados por el Consejo Superior de la Escuela.

"3ª Dirigir académica y administrativamente a la Escuela.

"4ª Presentar a la aprobación del Consejo Superior los reglamentos para el adecuado funcionamiento de la Escuela.

"5ª Refrendar con su firma los diplomas y certificados que confiera la Escuela.

"6ª Rendir al Consejo Superior informe anual y los demás que éste le solicite.

"7ª Las demás que le asigne o delegue el Consejo Superior de la Escuela.

"Artículo 100. Para el cumplimiento de los objetivos y funciones que le señalan en el presente decreto la Escuela Judicial contará con la siguiente estructura:

"1. Consejo Superior.

"2. Director General.

"2.1 División académica.

"2.2 División de Coordinación Administrativa y Desarrollo Institucional.

"2.3 Escuelas Seccionales.

"Artículo 101. Son funciones de la División Académica:

"1ª Programar y realizar estudios sobre las necesidades de capacitación, especialización, formación y adiestramiento de funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público.

"2ª Adelantar y fomentar investigaciones sobre la modernización y eficiencia de las actividades y gestión judicial.

"3ª Desarrollar cursos, seminarios, coloquios y conferencias de capacitación, de acuerdo con las necesidades de la Administración de Justicia y del Ministerio Público.

"4ª Realizar programas de enseñanza y actualización en ciencias y técnicas auxiliares y complementarias para la instrucción criminal.

"5ª Programar y establecer los programas de *pensum* de estudios de la Escuela Judicial.

"6ª Coordinar los convenios de asistencia educacional que se celebren con entidades nacionales y extranjeras.

"7ª Elaborar el reglamento académico, disciplinario y de régimen docente de la Escuela.

"8ª Las demás que le asigne el Director y el Consejo Superior de la Escuela.

"Artículo 102. Son funciones de la División de Coordinación Administrativa y Desarrollo Institucional:

"1ª Prestar los servicios generales y atender el suministro de bienes muebles, equipos, útiles, materiales y enseres para el funcionamiento de la Escuela y sus seccionales.

"2ª Proponer el presupuesto para la aprobación del Consejo Superior y coordinar y controlar su ejecución.

"3ª Atender las funciones de jefatura del personal administrativo y docente de la Escuela.

"4ª Llevar el archivo general de la Escuela y dirigir su centro de documentación e información.

"5ª Publicar y distribuir las investigaciones y documentos elaborados por la Escuela, y conferencias u obras jurídicas o docentes, de interés relacionadas con el servicio de la Administración de Justicia.

"6ª Las demás que le asigne el Consejo Superior y el Director General de la Escuela.

"Artículo 103. La vinculación y servicios de los profesores de la Escuela se regirá por las normas propias del estatuto oficial de personal docente de educación superior.

TITULO XIII

"Carrera en las fiscalías

"Artículo 104. La Carrera en las fiscalías será administrada por el Consejo Superior de la Carrera de las fiscalías, el Procurador General de la Nación y los Fiscales, con el apoyo técnico, administrativo y operativo de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público y las Procuradurías Regionales.

"Artículo 105. Créase el Consejo Superior de la carrera de las fiscalías con la siguiente composición:

"– El Procurador General de la Nación o su delegado, quien lo presidirá.

"– El Procurador Delegado para el Ministerio Público.

"– Un representante de los fiscales del Consejo de Estado.

"– Un representante de los demás fiscales.

"– Un representante de los empleados de las fiscalías.

"Actuará como Secretario del Consejo el de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público.

"Artículo 106. Los representantes de los fiscales y de los empleados en el Consejo Superior de la Carrera de las Fiscalías, serán elegidos por mayoría para períodos de cuatro (4) años, con sus respectivos suplentes, en fecha y según reglamento que expida dicho organismo.

"Artículo 107. Son funciones del Consejo Superior de Carrera de las Fiscalías, las siguientes:

"1ª Fijar las políticas y programas para las convocatorias, selección, ingreso y ascenso en la carrera.

"2ª Efectuar las convocatorias a concursos para la integración de las listas de fiscales de tribunales y de empleados de las fiscalías del Consejo de Estado.

"3ª Elaborar las listas de aspirantes admitidos a concurso para fiscales de tribunales y empleados de fiscales de Consejo de Estado, con calificación de sus antecedentes y remitirlas a sus nominadores.

"4ª Inscribir en la carrera a los empleados.

"5ª Resolver los recursos de reposición.

"6ª Formular la política de capacitación, para los concursos de selección y los concursos de ingreso a la Carrera y para la conformación de listas.

"Artículo 108. A los empleados de las fiscalías se aplicarán las mismas normas de la carrera judicial previstas para los empleados de la Rama Jurisdiccional.

"A los fiscales se les aplicarán estas normas en lo pertinente, si no están reguladas en el presente título.

"Artículo 109. Los concursos para cargos de fiscales tienen por objeto seleccionar a las personas que deban conformar las listas para que el nominador proceda al nombramiento.

"En todo caso figurará en la lista la persona que desempeñe el cargo.

"Artículo 110. Los procuradores regionales efectuarán las convocatorias y elaborarán las listas de los admitidos a concurso para la integración de las ternas de fiscales de juzgados; así mismo las listas de los candidatos admitidos a concurso para la provisión de cargos de empleados de fiscalías de tribunales y juzgados.

"Artículo 111. Contra las decisiones de inscripción, los resultados del concurso y de ingreso e inscripción en la carrera procede el recurso de reposición en la forma y dentro de los términos establecidos en los artículos 24, 36 y 37 de este decreto.

"Artículo 112. Los requisitos mínimos y funciones de los cargos de empleados de las fiscalías son los que corresponden a los empleos equivalentes de la Rama Jurisdiccional según lo establecido en los artículos 40 y 41 de este Decreto.

"Artículo 113. La elaboración y calificación de pruebas le corresponde al Procurador General de la Nación cuando se trate de los fiscales de los tribunales, a los fiscales de tribunales las de fiscales de juzgados Superiores y de Circuito y a los fiscales las de sus empleados.

"Cuando en un tribunal estuvieren asignados varios fiscales, para estos efectos la coordinación estará a cargo de la Fiscalía Primera.

TITULO XIV

"Disposiciones varias

"Artículo 114. La elección de funcionarios y empleados a cargo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en pleno o en cualquiera de sus salas o secciones, requerirá el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros.

"En los tribunales la votación para elecciones será pública, con la participación de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros y el voto favorable de la mitad más uno de sus componentes y no será admisible el voto en blanco.

"Artículo 115. Los Consejos establecidos en el presente decreto sesionarán y decidirán con la mitad más uno de sus miembros.

"Los citados consejos se reunirán por derecho propio en sesiones ordinarias una vez al mes y en sesiones extraordinarias por convocatoria de su Presidente o a petición de por lo menos la mitad de sus componentes.

"Artículo 116. Para la realización de pruebas, cursos de selección, exámenes y otras pruebas para el ingreso o ascenso en la carrera, las autoridades nominadoras podrán requerir la colaboración técnica, operativa y administrativa de entidades públicas especializadas en estas materias, las cuales deberán prestar sus servicios como labor de asistencia a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio Público.

"Artículo 117. Para la formación, capacitación, especialización, investigación y adiestramiento de los servidores de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público las entidades públicas docentes o especializadas tendrán obligación de prestar su apoyo y concurso como labor de asistencia a la Rama Jurisdiccional, cuando así lo requiera la Escuela Judicial.

"Artículo 118. Los requisitos mínimos señalados en este decreto para el desempeño de cargos se exigirán a las personas que ingresen a la Rama Jurisdiccional y a las fiscalías a partir de la vigencia del presente estatuto.

"Artículo 119. Para el ingreso de empleados al servicio de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, a partir del 1° de marzo de 1989 será requisito aprobar un curso atinente adelantado en la Escuela Judicial o refrendado por ella.

"Artículo 120. Para el ingreso en la carrera de funcionarios y empleados de los territorios nacionales, el tiempo de experiencia exigido como requisito mínimo se reducirá a la mitad, así como el período de prueba.

"Artículo 121. La persona nombrada en propiedad en cargo de libre designación, para cuyo ejercicio se exijan requisitos constitucionales, deberá obtener su confirmación por la autoridad nominadora previa su comprobación.

"Para tal efecto el interesado dispondrá de un (1) mes contado desde el día en que se le comunique la designación, si reside en el país y tres (3) meses si reside en el exterior.

"Comunicada la confirmación dispondrá de diez (10) días para posesionarse, salvo fuerza mayor.

"Cuando se requiera únicamente requisitos legales deberá posesionarse dentro del mes siguiente a la comunicación del nombramiento acompañando la documentación que los acredita, de lo cual se dejará constancia en el acta.

"Artículo 122. El nombramiento en cargos de la carrera será comunicado y deberá aceptarse o rehusarse dentro de los diez (10) días siguientes.

"Aceptado el cargo, se dispondrá de veinte (20) días para tomar posesión.

"Artículo 123. Las novedades de personal de la Rama Jurisdiccional y de las fiscalías tales como nombramientos, remociones, traslados, comisiones, licencias, calificaciones de servicios y de concursos y sanciones, serán comunicados a los respectivos consejos de la Carrera dentro de los ocho (8) días siguientes.

"Artículo 124. Por razones de orden público, seguridad, necesidades del servicio y otras circunstancias, a discreción del nominador y por solicitud de interesado se podrán efectuar traslados de funcionarios y empleados para el desempeño de cargos de igual categoría en distinta localidad, sin menoscabo de los derechos de otros servidores.

"Artículo 125. El Director General de la Escuela Judicial y el Director Nacional de la Carrera tendrán la misma remuneración y prestaciones del Director Nacional de Instrucción Criminal.

"Artículo 126. Los funcionarios y empleados deben residir en la sede de su cargo, de la que no podrán ausentarse en las horas de trabajo sino con permiso. Sin embargo, el respectivo superior o el presidente de la corporación o sala nominadora podrán autorizar la residencia en lugar distinto de la sede por motivos justificados y siempre que no se perjudique la marcha del trabajo.

"Artículo 127. Los funcionarios y empleados tendrán derecho a licencia hasta por dos (2) años pero sólo para proseguir cursos de especialización, actividades de docencia o de investigación o asesoría al Estado.

"Las licencias serán concedidas por la sala de gobierno de la Corporación o por el funcionario nominador.

"Artículo 128. La comisión de estudios remunerada de funcionarios y empleados requerirá además, la aquiescencia del nominador y la aprobación del Gobierno, según la disponibilidad presupuestal se otorgará con el pago total o parcial de la remuneración y pasajes.

"También podrán los funcionarios y empleados recibir del Gobierno Nacional las comisiones previstas en el artículo 26 del Decreto-ley número 546 de 1971.

"Artículo 129. Los eventos previstos en el artículo anterior, con o sin remuneración, no interrumpen la solución de continuidad en el servicio para todos los efectos prestacionales y legales y en especial los de la carrera judicial.

"Artículo 130. Los servidores de la Rama Jurisdiccional y de las Fiscalías tendrán derecho a licencia no remunerada hasta por tres (3) meses en el año y cuando pasa a ejercer transitoriamente otro cargo, hasta el límite del período del que ejerza en propiedad.

"Artículo 131. El Gobierno Nacional proveerá en el presupuesto de la Escuela Judicial las partidas suficientes para financiar los programas de capacitación de funcionarios y empleados, así como las necesarias para su adecuado funcionamiento.

"También podrá ésta obtener recursos propios por la prestación de sus servicios y la venta de sus publicaciones.

TITULO XV

"Disposiciones transitorias

"Artículo 132. Los funcionarios y empleados que a la fecha de expedición del presente Decreto presentaron oportunamente sus solicitudes de inscripción, podrán ingresar en la carrera judicial previo análisis de los documentos presentados para el efecto, de conformidad con los Decretos números 1190 y 2400 de 1986.

"Artículo 133. La competencia que se le asignó al Ministerio de Justicia para inscribir en la carrera a los servidores de la Rama Jurisdiccional de conformidad con disposiciones anteriores, corresponde en adelante a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado en cuanto a sus propios empleados y respectivos magistrados y a los tribunales en cuanto a los jueces y demás empleados.

"La División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional remitirá inmediatamente a las citadas corporaciones las solicitudes recibidas.

"Artículo 134. Para decidir sobre las solicitudes de inscripción se conformarán, cuando resulte pertinente, salas de decisión por orden alfabético y se resolverá a más tardar dentro de los siguientes términos, contados a partir de la fecha de recepción de los documentos.

"a) Dentro de los tres (3) primeros meses, la de jueces y magistrados;

"b) Dentro de los seis (6) meses la de los empleados.

"Artículo 135. Quienes hubieren adquirido el derecho a solicitar la inscripción en la carrera en la oportunidad y condiciones previstas en los Decretos números 1190 y 2400 de 1986 y que posteriormente fueron designados provisionalmente, no perderán el derecho a ingresar a la carrera.

"Artículo 136. Mientras se eligen los delegados de las corporaciones y los representantes de los funcionarios y empleados a los consejos previstos en este Decreto, intervendrán como tales las siguientes personas:

"a) Los presidentes de las corporaciones;

"b) Los vicepresidentes de los tribunales superiores de Distrito Judicial en los consejos seccionales cuando estas corporaciones tengan dos representantes;

c) "En el Consejo Superior de la Administración de Justicia en representación de los funcionarios actuará el Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

"En representación de los empleados, el que designe la Asociación Nacional de funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público;

"d) En los consejos seccionales de la carrera, en representación de los jueces, el juez Primero Penal del Circuito de la capital de departamento;

"e) En el Consejo Superior de la Escuela Judicial, en representación de los funcionarios el Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

"En el Consejo Superior de la Carrera del Ministerio Público, el fiscal primero del Consejo de Estado en representación de los fiscales de esa corporación; el fiscal del Juzgado Primero Superior de Bogotá en representación de los demás fiscales y el auxiliar judicial del fiscal primero del Tribunal Superior de Aduanas en representación de los empleados de fiscalías.

"Artículo 137. Para el cabal funcionamiento de los organismos establecidos en el presente Decreto, se presentará la planta de personal requerida y será tramitada y autorizada como excepción a las disposiciones vigentes sobre racionalización del gasto público.

"Artículo 138. En desarrollo del artículo 4° de la Ley 52 de 1984, el Gobierno Nacional efectuará las apropiaciones, los traslados presupuestales y abrirá los créditos y contracréditos indispensables para el funcionamiento de los organismos contemplados en el presente Decreto.

"Artículo 139. La División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional prestará el apoyo técnico, operativo y administrativo, para el adecuado funcionamiento del Consejo Superior de la Administración de Justicia mientras se provee el personal de la Dirección Nacional de la Carrera.

"Igual servicio prestarán las Direcciones Seccionales de Instrucción Criminal en los consejos seccionales de la carrera, con la colaboración de las secretarías de los respectivos tribunales.

"Artículo 140. La Escuela Judicial comenzará a prestar sus servicios a partir de la provisión de la planta de personal que la conforme sin perjuicio de que el Consejo Superior de la misma sesione con el objeto de ejercer sus funciones y diseñar los planes, programas y reglamentos tendientes a implementar y poner en marcha su funcionamiento.

"Artículo 141. Las normas de este Decreto sobre convocatoria, selección e ingreso en la carrera y sobre la calificación de servicios se aplicarán a partir del primero de mayo de 1987.

"Hasta esa fecha los nombramientos se harán en propiedad e interinidad o por encargo.

"Artículo 142. El presente Decreto rige a partir de su promulgación y modifica en lo pertinente el Decreto número 250 de 1970. Sustituye y deroga: el Decreto número 2400 de 1986, excepto los artículos 67, 188 a 194, 201, 206 y 207; los

Decretos números 1768 y 1373 de 1986 y el Decreto número 1190 de 1986, excepto los artículos 2° y 4°.

"Comuníquese, publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a enero 13 de 1987.

VIRGILIO BARCO

"El Ministro de Justicia,

Eduardo Suescún Monroy"

COSA JUZGADA. DECRETO-LEY NUMERO 0052 DE 1987 "POR EL CUAL SE REVISA, REFORMA Y PONE EN FUNCIONAMIENTO LA CARRERA JUDICIAL".

Estése a lo resuelto por la Corte en fallo No. 64 del 25 de junio de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 66.

Referencia: Expediente número 1597.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 104, 105, 106, 107,108, 109, 110, 111, 112 y 113 del Decreto-ley número 0052 de 1987 "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento la carrera judicial".

Demandante: *Gerardo Delgado Silva.*

Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 30 de junio 25 de 1987.

Bogotá, D. E., junio veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Gerardo Delgado Silva, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, demanda ante la Corte, por considerarlos violatorios de la misma Carta, los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113 del Decreto-ley número 0052, "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento la carrera judicial".

II. Texto

Los artículos demandados dicen:

"DECRETO NUMERO 52 DE 1987
(enero 13)

"Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial

"

"Artículo 104. La carrera en las fiscalías será administrada por el Consejo Superior de la Carrera de las Fiscalías, el Procurador General de la Nación y los fiscales, con el apoyo técnico, administrativo y operativo de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público y las Procuradurías Regionales.

"Artículo 105. Créase el Consejo Superior de la Carrera de las Fiscalías con la siguiente composición:

"– El Procurador General de la Nación o su delegado, quien lo presidirá.

"– El Procurador Delegado para el Ministerio Público.

"– Un representante de los fiscales del Consejo de Estado.

"– Un representante de los demás fiscales.

"– Un representante de los empleados de las fiscalías.

"– Actuará como Secretario del Consejo el de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público.

"Artículo 106. Los representantes de los fiscales y de los empleados en el Consejo Superior de la Carrera de las Fiscalías, serán elegidos por mayoría para períodos de 4 años, con sus respectivos suplentes, en fecha y según reglamento que expida dicho organismo.

"Artículo 107. Son funciones del Consejo Superior de la Carrera de las Fiscalías, las siguientes:

"1ª Fijar las políticas y programas para las convocatorias, selección, ingreso y ascenso en la carrera.

"2ª Efectuar las convocatorias a concursos para la integración de las listas de fiscales de tribunales y de empleados de las fiscalías del Consejo de Estado.

"3ª Elaborar las listas de aspirantes admitidos a concurso para fiscales de tribunales y empleados de fiscales del Consejo de Estado, con calificación de sus antecedentes y remitirlas a sus nominadores.

"4ª Inscribir en la carrera a los empleados.

"5ª Resolver los recursos de reposición.

"6ª Formular la política de capacitación, para los concursos de selección y los concursos de ingreso a la carrera y para la conformación de listas.

"Artículo 108. A los empleados de las fiscalías se aplicarán las mismas normas de la carrera judicial previstas para los empleados de la Rama Jurisdiccional. 'A los

fiscales se les aplicarán estas normas en lo pertinente, si no están reguladas en el presente título'.

"Artículo 109. Los concursos para cargos de fiscales tienen por objeto seleccionar a las personas que deban conformar las listas para que el nominador proceda al nombramiento. 'En todo caso figurará en la lista la persona que desempeñe el cargo'.

"Artículo 110. Los Procuradores regionales efectuarán las convocatorias y elaborarán las listas de los admitidos a concurso para la integración de las ternas de fiscales de juzgados; así mismo las listas de los candidatos admitidos a concurso para la provisión de cargos de empleados de fiscalías de tribunales y juzgados.

"Artículo 111. Contra las decisiones de inscripción, los resultados del concurso y de ingreso e inscripción en la carrera procede el recurso de reposición en la forma y dentro de los términos establecidos en los artículos 24, 36 y 37 de este Decreto.

"Artículo 112. Los requisitos mínimos y funciones de los cargos de empleados de las fiscalías son los que corresponden a los empleos equivalentes de la Rama Jurisdiccional según lo establecido en los artículos 40 y 41 de este Decreto.

"Artículo 113. La elaboración y calificación de pruebas le corresponde al Procurador General de la Nación cuando se trate de los fiscales de tribunales las de fiscales de juzgados Superiores y de Circuito y a los fiscales las de sus empleados. 'Cuando en un tribunal estuvieren asignados varios fiscales, para estos efectos la coordinación estará a cargo de la Fiscalía Primera' ".

III. La demanda

Sostiene el actor que las normas transcritas, por medio de las cuales se instauró y reguló la Carrera Judicial en las Fiscalías violan los artículos 55 y 144, ordinal 3° de la Constitución, ya que por una parte a través de ellas el Gobierno Nacional excedió las facultades que se le habían conferido por la Ley 52 de 1984 –que para nada hacía referencia a la carrera en cuanto al Ministerio Público– y, por otra, resultó desconocido el principio superior a cuyo tenor los fiscales son elegidos por un período determinado, por las autoridades y de las listas que la Constitución define.

Añade que en un Estado de Derecho se busca racionalizar el ejercicio del poder y que, por ello, los llamados Decretos-leyes tienen que amoldarse a los preceptos constitucionales.

Dice además:

"La Ley 52 de 1984 de diciembre 28, en su artículo 1°, numeral 3°, invistió al Presidente de facultades extraordinarias para 'Revisar, reformar y poner en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial'. Con base en ello, el Decreto número 0052 de 1987 (enero 13), involucró en el Estatuto de la Carrera Judicial al Ministerio Público al referirse a los Fiscales de la República. Y, en el presente caso, 'Preciso' no equivale a necesario, significa como lo hemos dicho, puntual, fijo, exacto.

".....

"Participar en el órgano jurisdiccional en defensa de los intereses de la sociedad, no significa jamás que esté subsumido dentro de esa Rama Jurisdiccional, puesto que

también el Ministerio Público participa del órgano administrativo. En otras palabras, los Fiscales de la República no hacen parte integrante de la Rama Jurisdiccional, sino que ejercen las funciones que la Constitución y la Ley les atribuye.

"Es evidente la gran obra que le corresponde al Ministerio Público, precisamente para evitar la violación de la Ley, las providencias ilegales e inconstitucionales, en otras palabras, para mantener el Imperio de la Justicia, sin que por esto se presuma, inconstitucionalmente, desde luego, que las Fiscalías forman parte, repetimos, de la Rama Jurisdiccional del Poder Público.

"Porque la Cámara de Representantes ejerce funciones que le corresponden al Ministerio Público, a nadie se le ocurriría que forma parte del Ministerio Público como Fiscal. Al Senado se le han asignado determinadas funciones judiciales, sin que por esto se pueda afirmar que pertenece al Organo Jurisdiccional. Entonces, el gobierno excedió las facultades extraordinarias de la Ley 52 de 1984, en el numeral 3°, del artículo 1°, violando el ordinal 12 del artículo 76 y por ende, el artículo 55 de la Constitución Nacional.

"De manera pues, que el Decreto número 0052 de 1987 desde su Título I hasta su Título XV, se torna inconstitucional.

".....

"Por otra parte, el artículo 110 del Decreto en cita, viola directamente el artículo 144 de la Constitución Nacional, en su inciso 3°. En efecto, el Decreto dice: 'Los procuradores regionales efectuarán las convocatorias y elaborarán las listas de los admitidos a concurso para la integración de las ternas de fiscales de juzgados; así mismo las listas de los candidatos admitidos a concurso para la integración de las ternas de fiscales de juzgados; así mismo las listas de los candidatos admitidos a concurso para la provisión de cargos de empleados de fiscalías de tribunales y juzgados'. Así, pues, está oradando la norma constitucional, ya que allí se expresa: '... los fiscales de los juzgados Superiores y de los juzgados de Circuito serán designados para un período de tres (3) años, por el Procurador General de la Nación, de listas presentadas por los Fiscales de los respectivos Tribunales Superiores, y deberán reunir las mismas condiciones que para ser jueces Superiores o jueces de Circuito...' ".

"Como es ostensible las listas de los fiscales de los juzgados Superiores y juzgados de Circuito al tenor de la Constitución Nacional, deberán ser presentadas por los fiscales de los respectivos tribunales Superiores, y, arbitrariamente el Decreto pone esta labor en manos de los Procuradores Regionales, a quienes la Constitución en ninguna parte les consagra esta atribución".

IV. Concepto del Procurador

El señor Procurador General de la Nación, mediante oficio No. 1147 del 23 de abril de 1987, conceptuó, transcribiendo apartes de la Vista Fiscal 1133 de abril 1° del mismo año:

"De conformidad con lo expuesto en el punto 1 de este acápite, al confrontar el numeral 3° del artículo 1° de la Ley 52 de 1984, con las preceptivas constitucionales analizadas, se encuentra que el Legislador habilitó al Gobierno Nacional, para que revisara, reformara y pusiera en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial, es decir, procediera sobre las normas del Decreto número 250 de 1970, Estatuto vigente para la Carrera Judicial. No sobra observar que, esta reglamentación en su preámbulo dice: 'Por el cual se expide el Estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio Público'.

"Y, fue dictado con base en las facultades otorgadas mediante la Ley 16 de 1968, que habilitaron expresamente para la expedición de un conjunto de normas que establecieron diversas garantías para los funcionarios y empleados judiciales y los del Ministerio Público:

" '4° Introducir las reformas necesarias a las disposiciones vigentes *sobre Carrera Judicial*...

"....."

" '6° Establecer un régimen especial de seguridad social para los mismos funcionarios y sus familias, de modo que por el aspecto material se *cree un verdadero estímulo para ingresar y permanecer al servicio de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público*' (se destaca, artículo 20, *ibidem*).

"En consecuencia, expresamente el Legislador de 1968, transfirió precisas facultades al Gobierno Nacional, para dictar las normas necesarias sobre Carrera Judicial para los empleados de la Rama Correspondiente y para los del Ministerio Público.

"Mientras que el Legislador de 1984, solamente transfirió facultades protémpore para revisar, reformar y poner en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial, y no incluyó al Ministerio Público como lo hizo el de 1968. Esto corrobora la ostensible inconstitucionalidad de todas las normas que se refieren a las Fiscalías, a la Carrera en éstas y su Administración. Por tanto, las proposiciones que se relacionan a continuación transgreden los artículos 76-12, 55, 58 y 144 en concordancia con el 155 y 157 de la Carta Constitucional.

"A lo anterior se suma, la actitud del Legislador Extraordinario de 1986 al dictar el Decreto número 2400, que solamente dictó un Estatuto para la Carrera Judicial y no incluyó para nada a los Fiscales ni a sus empleados, ciñéndose por este solo aspecto a la Ley 52 de 1984. Posición contraria e inconstitucional asumió el Legislador Extraordinario de 1987, que sin encontrarse habilitado por el Congreso Nacional hizo extensivo el Estatuto a los Fiscales y sus subalternos y reglamentó la Carrera en las Fiscalías.

"En virtud de lo expuesto, son contrarios a la Constitución Política, las proposiciones (parcial o totalmente) que se relacionan a continuación:

" '.....

" 'El Título XIII, Carrera en las Fiscalías, artículos 104 a 113 en su totalidad'.

"....."

V. Consideraciones de la Corte

1. *Competencia*

Por haberse demandado disposiciones integrantes de un Decreto expedido por el Presidente de la República en desarrollo de facultades extraordinarias, corresponde a la Corte Suprema de Justicia la competencia para decidir definitivamente sobre su constitucionalidad, según lo establece el artículo 214 de la Constitución Política.

2. *Cosa juzgada*

Ya la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de la exequibilidad del Decreto número 0052 de 1987, del cual forman parte los preceptos objeto de esta acción, a propósito de demandas que versaban sobre la totalidad de su contenido.

Dado que, mediante Sentencia número 64 del 25 de junio de 1987 se falló de manera definitiva sobre una de tales acciones, en el presente caso debe acogerse lo allí resuelto, dada su autoridad de cosa juzgada.

VI. Decisión

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia –Sala Plena– previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Estése a lo resuelto por la Corte en Sentencia No. 64 del 25 de junio de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; *Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.*

Alfredo Beltrán Sierra
Secretario General

CONTENIDO GENERAL

Pág.

POR LA ESTRUCTURA MIXTA DE NUESTRO PROCEDIMIENTO PENAL QUE NO SIGUE EL SISTEMA ACUSATORIO EN EL QUE SE DEBATE, QUEDA CONCRETADO IRREMISIBLEMENTE A LOS TERMINOS EN QUE LAS PARTES LO PLANTEAN, SINO QUE SE INSPIRA EN EL PRINCIPIO INQUISITIVO, AL JUEZ COMO REPRESENTANTE EL ESTADO, ES A QUIEN CORRESPONDE LA AVERIGUACION Y REPRESION DE LOS DELITOS. EL RECURSO DE APELACION OTORGA *COMPETENCIA AL JUEZ O TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA* PARA DECIDIR SIN LIMITACION ALGUNA SOBRE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.
Norma demandada: art. 3°, Ley 17 de 1975 (art. 197 Bis del C. P. P.) Demandante: Alfonso López Carrascal. Ponente: doctor *Jairo E. Duque Pérez*. Sentencia del 22 de enero de 1987. Exequible el art. 3° de la Ley 17 de 1975 5

HAY PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA EN DOS CASOS DE OCURRENCIA ALTERNATIVA O SUMADA: A) CUANDO LA NORMA ACUSADA EN TODO O EN PARTE TORNE LOGICAMENTE IMPOSIBLE LA DECISION DEBIDO A IRREPARABLE RUPTURA ABSOLUTA DE LA CONTINENCIA NECESARIA DE LA *CAUSA PETENDI*, O B) CUANDO EL PRECEPTO DEMANDADO NO SEA AUTONOMO POR ENCONTRARSE EN UNA INESCINDIBLE RELACION DE DEPENDENCIA CON OTRO U OTROS NO IMPUGNADOS QUE CONDICIONAN SU SIGNIFICADO, SU VIGENCIA, SU VALIDEZ O SU EFICACIA. FALLO INHIBITORIO, PROPIEDAD HORIZONTAL.
Demandante: Jorge Hernán Gil. Norma demandada: art. 1° de la Ley 16 de 1985. Ponente: doctor *Jairo E. Duque Pérez*. Sentencia del 22 de enero de 1987. Por ineptitud sustantiva de la demanda la Corte se inhibe 12

LOS MANDATOS LEGISLATIVOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 32 DE LA CARTA, ENCAJAN DENTRO DEL CONCEPTO DE AUTORIZACIONES AL GOBIERNO "PARA EJERCER OTRAS FUNCIONES DENTRO DE LA ORBITA CONSTITUCIONAL", EN CONSECUENCIA LOS DECRETOS QUE SE DICTEN EN DESARROLLO DE DICHOS MANDATOS TIENEN FUERZA DE LEY Y SON COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. AUTORIZACIONES CONFERIDAS AL EJECUTIVO PARA INTERVENIR EN LA *INDUSTRIA DEL TRANSPORTE* Y OBTENER QUE ESTOS SERVICIOS SE PRESTEN EN FORMA ADECUADA Y SIN INTERRUPCIONES.
Norma demandada: Decreto numero 2624 de 1983. Demandante: Antonio Barrera Carbonell. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Sentencia del 22 de enero de 1987. Exequible el Decreto número 2624 de 1983 18

LAS DECISIONES EN ASUNTOS DE CONSTITUCIONALIDAD SON DEFINITIVAS Y ESTARAN REVESTIDAS DE LA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA CON EFECTOS *ERGA OMNES*. FACULTADES EXTRAORDINARIAS, LIMITES TEMPORAL Y MATE-

Pág.

RIAL FIJADOS POR EL LEGISLADOR, SEGURO QUE CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE QUIEN CAUSE DAÑO A UN TERCERO EN ACCIDENTE DE TRANSITO. ACCION DIRECTA FRENTE AL ASEGURADOR. LIBERTADES DE CONTRATACION Y LOCOMOCION. LAS LIBERTADES INDIVIDUALES, FUERON CONCEBIDAS COMO ABSOLUTAS POR LOS DOCTRINANTES DEL SIGLO XVIII, PARA OPONERLAS AL OMNIMODO PODER DEL MONARCA, AHORA SE ENTIENDEN COMO ESENCIALMENTE RELATIVAS.

Demandante: William F. León. Norma demandada: art. 96 Decreto número 1344 de 1970 y arts. 115, 116, 117, 118 de la Ley 33 de 1986. Sentencia del 29 de enero de 1986. Magistrado ponente: doctor *Jairo Duque Pérez*. Exequible los arts. 96 del Decreto número 1344 de 1970 y los arts. 115 y 116 de la Ley 33 de 1986. En cuanto a los arts. 117 y 118 de la Ley 33 de 1986, remite a sentencia del 21 de agosto de 1986..... 27

LOS DERECHOS DE AUTOR. OBRA DE ARTE DE CARACTER INDUSTRIAL, CUANDO LA OBRA DE ARTE HAGA PARTE DEL OBJETO INDUSTRIAL A QUE FUE APLICADA, NO SE PUEDE HABLAR DE DERECHOS DE AUTOR SINO POR EL CONTRARIO, CONSTITUIRIA UNA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE ESTA PROTEGIDA DE OTRA FORMA Y TIENE SU PROPIA REGLAMENTACION LEGAL. COSA JUZGADA.

Norma Demandada: art. 6°, 1er inciso, e inciso 3° de la Ley 23 de 1982. Demandante: Martín Carrizosa Calle. Sentencia del 29 de enero de 1987. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Exequible inciso 3° art. 6° Ley 23 de 1982, en cuanto a las demás normas remite a sentencia del 4 de julio de 1986. 38

FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO, NORMAS SOBRE EL ESCALAFON NACIONAL PARA EL SECTOR DOCENTE PUBLICO Y PRIVADO, DEMAS ASPECTOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS EDUCADORES. COSA JUZGADA.

Norma demandada: inciso 2° del art. 100 y art. 113 del Decreto número 080 de 1980. Demandante: Vicente Miranda. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Sentencia del 29 de enero de 1987. Exequible art. 113 del Decreto número 080 de 1980. En cuanto al art. 100, estése a lo resuelto en Sentencia del 13 de septiembre de 1984..... 44

ES MATERIA DE LA LEY OCUPARSE DEL HECHO DEL NACIMIENTO DE LAS PERSONAS Y RECONOCERLE LOS EFECTOS QUE NO ESTA RESERVADO HACERLO A UNA DISPOSICION CONSTITUCIONAL, FACULTAD LEGISLATIVA PROPIA DEL CONGRESO, DE LA CUAL PUEDE PRECISA Y TEMPORALMENTE REVESTIR AL EJECUTIVO PARA DISPONER LOS RESTANTES EFECTOS JURIDICOS. DEL REGISTRO DE NACIMIENTOS, OCURRIDOS EN TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO. FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

Demandante: Juan La Rotta y otro. Norma demandada: artículo 44, Decreto número 1260 de 1970. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía*. Sentencia del 29 de enero de 1987. Exequible numeral 3° artículo 44 del Decreto número 1260 de 1970..... 51

COSA JUZGADA, DEFINITIVA Y *ERGA OMNES*. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. FLAGRANCIA Y CUASIFLAGRANCIA, A QUIENES SE PUEDE CONCEDER LA LIBERTAD PROVISIONAL.

Norma demandada: Decretos números 1853 de 1985 y 56 de 1986. Demandante: José Gendry Mosos. Sentencia del 5 de febrero de 1987. Ponente: doctor *Jairo E. Duque Pérez*. Remite a sentencias del 9 de octubre de 1986 y 17 de julio de 1986..... 57

Pág.

NO EXISTE REPARO DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS COSA JUZGADA. CODIGO DE REGIMEN MUNICIPAL.

Norma demandada: art. 385, Decreto número 1333. Demandante: Simón Castro. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Sentencia del 5 de febrero de 1987. Estése a lo resuelto en la sentencia No. 101 de noviembre 13 de 1986. 66

LAS IMPUGNACIONES SOLO SE ADMITEN EN MATERIA DE CONTROL AUTOMATICO CONSTITUCIONAL DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 121 Y 122 DE LA CARTA, NUNCA EN LAS ACCIONES DE INEXEQUIBILIDAD CIUDADANA, COSA JUZGADA, CONTRATOS DE EMPRESTITO DE LA NACION Y SU EJECUCION EN EL EXTERIOR.

Demandante: Paul Lehouq. Norma demandada: art. 239, inciso segundo, Decreto número 222 de 1983. Sentencia del 5 de febrero de 1987. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Remite a sentencia No. 98 de 30 de octubre de 1986. 71

LEY APROBATORIA DEL CONCORDATO Y PROTOCOLO FINAL SUSCRITOS ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA SANTA SEDE. LO QUE SE EXIGE PARA EL DEBATE PARLAMENTARIO ES LA DISCUSION LIBRE Y PACIFICA PARA LLEGAR A UN ACUERDO, QUE CONSULTE UNICAMENTE LA JUSTICIA Y EL BIEN COMUN DE LA NACION. COLOMBIA NO PUEDE SER Y MENOS EN EL ACTUAL CONCIERTO DE NACIONES QUE ASPIRAN A VIVIR BAJO LOS SIGNOS DE LA SOLIDARIDAD Y LA INTEGRACION, UNA INSULA APARTE, AJENA A LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES QUE LE SEÑALEN SU CONDICION DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSAL. INHIBICION.

Demandante: Víctor Velásquez. Norma demandada: Ley 20 de 1974. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Sentencia del 12 de febrero de 1987. Constitucional la Ley 20 en cuanto no adolece de vicios en su formación. Inhibida para decidir sobre el fondo de la demanda instaurada contra la Ley 20 de 1974. Salvamento de voto de los doctores *Rodolfo Mantilla, Jaime Giraldo, Lisandro Martínez, Jorge I. Palacio, Guillermo Duque, Edgar Saavedra, Rafael Romero, Jairo E. Duque.* Salvamento de voto del doctor *Alejandro Bonivento, Eduardo García, Héctor Gómez y Héctor Marín y Alberto Ospina*..... 76

DECRETO DE ESTADO DE SITIO. FACULTADES A LOS COMANDANTES DE UNIDADES OPERATIVAS. BASES NAVALES Y AEREAS, PARA SUSPENDER LAS LICENCIAS AL PERSONAL AERONAUTICO, MARITIMO, FLUVIAL Y TERRESTRE, CUANDO ESTEN VINCULADOS AL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES, CONEXIDAD. DERECHO DE DEFENSA.

Decreto Legislativo número 3667 de 1986. Ponente: doctor *Jairo E. Duque Pérez*. Sentencia del 26 de febrero de 1987. Exequible el Decreto número 3667 de 1986. 107

DOTACION OPORTUNA A LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, TENDIENTES AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO TURBADO. LIBERACION DE CARGAS FISCALES AL MATERIAL DE GUERRA. DECRETO DE ESTADO DE SITIO.

Decreto Legislativo número 3670 de 1986. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Sentencia del 26 de febrero de 1987. Constitucional el Decreto número 3670 de 1986. Salvamento de voto de los doctores *Gustavo Gómez y Jaime Giraldo*. 113

Pág.

MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA COMERCIALIZACION, LOCOMOCION Y REGISTRO DE MOTOCICLETAS. *ESTADO DE SITIO*. OBLIGACION CONSTITUCIONAL QUE TIENE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CONSERVAR EL ORDEN PUBLICO Y DE RESTABLECERLO DONDE FUERE TURBADO Y ADEMAS DEL DEBER QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DE PROTEGER LA VIDA DE LOS GOBERNADOS. SUPREMA FINALIDAD DEL EJERCICIO DEL PODER PUBLICO.

Decreto Legislativo número 3669 de 1986. Ponente: doctor *Jairo E. Duque Pérez*. Exequible el Decreto número 3669 de 1986. 121

REVISION, REFORMA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA JUDICIAL. CODIGO ES UN CONJUNTO COHERENTE Y ARMONICO DE DISPOSICIONES SOBRE UNA MATERIA, QUE SE ORDENA EN UN SOLO CUERPO. ESTATUTO ES EL REGIMEN JURIDICO QUE GOBIERNA UNA DETERMINADA ACTIVIDAD O UN RAMO ESPECIALIZADO, EL CUAL PUEDE ESTAR INTEGRADO POR NORMAS DISTINTAS DE LEYES, DECRETOS U OTROS TEXTOS JURIDICOS, SIN QUE DEBAN NECESARIAMENTE ESTAR COMPRENDIDAS EN UN SOLO TEXTO. LA PROTECCION AL TRABAJO, LA AUTONOMIA DE LA RAMA JURISDICCIONAL. FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

Norma demandada: Decreto número 2400 de 1986. Demandante: Carlos Alberto Montoya y otro. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Sentencia del 3 de marzo de 1987. Inexequibles los artículos 1° a 72, inclusive, de los capítulos I a VI los artículos 79 y 81 del capítulo VII; los artículos 93 y 106 del capítulo VIII; el artículo 112 literal k), del capítulo X; los artículos 159 y 161 del capítulo XIII; los artículos 176 a 181 del capítulo XV; los artículos 184 y 185 del capítulo XVI; los artículos 199 y 200 del capítulo XVIII; los artículos 206, 207, 208, 209, 212 y 213 del capítulo XIX. Exequible las demás disposiciones acusadas 128

ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL. COSA JUZGADA.

Demandante: Orlando Alfonso Rodríguez. Norma demandada: artículo 69 del Decreto número 2400 de 1986. Sentencia del 3 de marzo de 1987. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Remite a sentencia del 3 de marzo de 1987 187

FUNCIONAMIENTO DEL ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL. COSA JUZGADA.

Norma demandada: artículos varios del Decreto número 2400 de 1986. Demandante: Héctor Rodríguez Cruz. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Sentencia del 3 de marzo de 1987. Estése a lo resuelto en la sentencia del 3 de marzo de 1987. 191

REAJUSTE SALARIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS EN EL ORDEN NACIONAL, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS POR EL CONGRESO, TEMPORALES Y PRECISAS. NO VULNERA LOS GRADOS NI LOS HONORES DE LA FUERZA PUBLICA. PUBLICACION DE LA NORMA EN EL "DIARIO OFICIAL".

Norma acusada: Decreto número 108 de 1986. Demandantes: Gerardo Ayerbe y otros. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía*. Exequible el Decreto número 108 de 1986. 199

COSA JUZGADA. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A LA CARRERA JUDICIAL. LA CORTE NO ES JUEZ DE LA CONVENIENCIA DE LAS NORMAS ACUSADAS SINO DE SU CONSTITUCIONALIDAD.

Decreto número 2400 artículo 65, norma demandada. Demandante: Ernesto Rey. Ponente: doctor

Pág.

Jesús Vallejo Mejía. Sentencia del 3 de marzo de 1987. Estése a lo resuelto en sentencia del 3 de marzo de 1987. 208

ORDEN PUBLICO MILITAR, POLICIVO, ORDEN PUBLICO ECONOMICO. PODERES JURIDICOS DEL GOBIERNO EN PERIODOS DE *ESTADO DE SITIO*. CON LAS FACULTADES EXCEPCIONALES DE QUE TRATA EL ARTICULO 121 DE LA CARTA SOLO SE PUEDEN TOMAR LAS MEDIDAS CUYA FINALIDAD SEA EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO. *INCOMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES MILITARES PARA CONOCER Y JUZGAR DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES*. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE NARCOTRAFICO.

Decreto Legislativo número 3671 de 1986. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía*. Sentencia del 5 de marzo de 1987. Inconstitucional el Decreto número 3671 de 1986. Salvamento de voto de los doctores *Jaime Giraldo, Alberto Ospina y Héctor Marín*. Salvamento de voto de los doctores *Gómez Otálora, Martínez Zúñiga, Gómez Uribe y Romero Sierra*. Salvamento de voto del doctor *Gustavo Gómez Velásquez*. 212

MEDIDAS TENDIENTES A COMBATIR LA IMPUNIDAD *ESTADO DE SITIO*. RECOMPENSA MONETARIA, A QUIEN SUMINISTRE DATOS PARA CAPTURAR RESPONSABLES DE LA COMISION DE DELITOS EN EL TERRITORIO NACIONAL O FUERA DE EL. PARA QUE LAS NORMAS LEGALES PUEDAN SER TACHADAS DE INCONSTITUCIONALIDAD DEBEN OPONERSE *ELLAS EN SI MISMAS* AL ORDEN SUPERIOR DE TAL MODO QUE LA INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE HACERSE CONSISTIR EN EL INDEBIDO USO QUE DE ESAS NORMAS LEGALES HAGAN LAS PERSONAS.

Revisión constitucional del Decreto número 3673 de 1986. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Sentencia del 10 de marzo de 1986. Constitucional el Decreto número 3673 de 1986. 225

NORMAS CONTRA EL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES. ELEVACION DE ALGUNAS CONDUCTAS PREVISTAS EN LA LEY 30 DE 1986 COMO CONTRAVENCIONES A LA CONDICION DE DELITOS. RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO. NO ES TAREA JURISDICCIONAL LA DE EXCLUIR NORMAS DEL ORDEN JURIDICO POR DIFICULTADES QUE PUEDAN EXISTIR EN SU CABAL ENTENDIMIENTO, SINO LA DE DECLARAR PREVIA INTERPRETACION DEL CONTENIDO NORMATIVO, SI ESTA SE AJUSTA A LA CARTA O SI DESCONOCE SUS PRECEPTOS. EL DERECHO DE PROPIEDAD.

Revisión constitucional del Decreto número 3665 de 1986. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Sentencia del 10 de marzo de 1986. Constitucional el Decreto número 3665 de 1987. 248

FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, INSPECCION, VIGILANCIA Y REGIMEN DISCIPLINARIO. LA CONEXIDAD PRETENDE IMPEDIR QUE LEYES QUE SEAN TRAMITADAS CON UN OBJETO ESPECIFICO REGULEN TEMAS O MATERIAS QUE NO TIENEN UNA ESTRECHA CONEXIDAD CON LA FINALIDAD DE LA LEY.

Norma demandada: Ley 117 de 1985 artículo 16. Demandante: Camilo Gutiérrez J. Sentencia del 10 de marzo de 1987. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Exequible la norma demandada.... 258

ESTIMACION DEL LIMITE MAXIMO DEL VALOR COMERCIAL DE LOS INMUEBLES QUE SEAN OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. LAS DECISIONES DE LA CORTE SON SIEMPRE SOBRE CONSTITUCIONALIDAD, NO SOBRE ILEGALI-

Pág.

DAD. EL REAJUSTE DEL CANON DE ARRENDAMIENTO SERA CADA DOCE MESES DE EJECUCION DEL CONTRATO BAJO LA MISMA RENTA, LUEGO NO ES EL ARRENDATARIO EL UNICO QUE PUEDE OBTENER REGULACION DEL PRECIO. DERECHO DE DEFENSA.

Norma demandada: artículos 2°, 5° a 10, 11 y 23 del Decreto-ley número 17 de 1986. Demandantes: Jaime Pulido y otros. Sentencia del 10 de marzo de 1987. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Exequibles por no ser contrarios a la Constitución los artículos 2°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 23 del Decreto-ley número 1919 de junio 17 de 1986. 265

AVALUOS DE INMUEBLES PARA DETERMINAR LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO. SI EL CONTEXTO O LA PARTE COMPLEMENTARIA DE LOS FRAGMENTOS ACUSADOS PERMITEN UNA APRECIACION DE CONJUNTO SOBRE EL CONTENIDO NORMATIVO DE ELLOS, PUEDE LA CORTE ENTRAR A FALLAR, SIN QUE SE PUEDA SOSTENER LA FALTA DE SENTIDO AUTONOMO QUE CARACTERIZA LAS PROPOSICIONES JURIDICAS INCOMPLETAS. LAS CONSIGNACIONES DE LA MULTA IMPUESTA PREVIAMENTE, ES EN SI MISMO INCONSTITUCIONAL, POR CUANTO COLOCA AL CIUDADANO EN LA IMPOSIBILIDAD DE EJERCER SU DERECHO, SI CARECE DE DINERO PARA EFECTUAR LA CONSIGNACION. COSA JUZGADA.

Norma acusada: artículo 2°, inciso 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 21 en parte del Decreto número 1919 de 1986. Demandante: Elisa Carrizosa T. Sentencia del 12 de marzo de 1978. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Exequibles las normas demandadas..... 275

FABRICACION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, VENTA, SUMINISTRO, REPARACION O PORTE DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL O DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS, SIN PERMISO DE AUTORIDAD COMPETENTE. SANCIONES. EL ARTICULO 121 DE LA C.N. AUTORIZA AL GOBIERNO, DENTRO DEL *ESTADO DE SITIO* PARA SUSPENDER LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SEAN INCOMPATIBLES CON LAS NORMAS DICTADAS TRANSITORIAMENTE, PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO.

Decreto Legislativo número 3664 de 1986. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía*. Sentencia del 12 de marzo de 1987. Inexequibles los artículos 4° y 5° del Decreto número 3664 de 1986. Exequibles los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7° y 8° del decreto revisado. Salvamento de voto de los doctores *Alberto Ospina, Héctor Marín, Rafael Romero y Jaime Giraldo*..... 284

EL LEGISLADOR PARA ERIGIR EN DELITO UNA CONDUCTA, ESTA OBLIGADO A DEFINIR, A PRECISAR SUS CONTORNOS Y A DETERMINAR *EL HECHO* EN FORMA QUE NO DEJE LUGAR A DUDAS SOBRE CUANDO SE DELINQUE Y CUANDO NO, Y LA CONSECUENCIA PUNITIVA CORRESPONDIENTE. PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD. CONTAMINACION AMBIENTAL. CODIGO PENAL. NORMA PENAL EN BLANCO.

Demandante: Fernando L. Moncaleano. Norma demandada: artículo 247 Decreto número 100 de 1980. Sentencia del 12 de marzo de 1987. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Exequible la norma acusada..... 291

LA POTESTAD REGLAMENTARIA, QUE ES EL MEDIO JURIDICO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION NACIONAL, PARA DARLE DESARROLLO, SENTIDO Y ALCANCE A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE POR SI MISMAS NO LOGREN REGULAR

Pág.

EFICIENTEMENTE UNA MATERIA, SE HA RADICADO POR PRINCIPIO, EN CABEZA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, COMO SUPREMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, PODRAN REGLAMENTAR DE ACUERDO A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO, EXCEPCION CONCEDIDA SOLO A ELLAS. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.
Demandante: Luis H. Van Stranlen. Norma demandada: artículo 45 Ley 11 de 1986 y artículo 296 Decreto número 1333 de 1986. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía*. Sentencia del 12 de marzo de 1987. Inexequible en parte el artículo 45 de la Ley 11 de 1986 y parte del artículo 296 del Decreto número 1333 de 1986. Exequible las demás normas demandadas. 298

ALTERACIONES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE O DE SUS TARIFAS, SANCIONES. LA CONSTITUCION NACIONAL RECONOCE LA LIBERTAD DE EMPRESA Y LA INICIATIVA PRIVADA DENTRO DE LOS LIMITES DEL BIEN COMUN AUNQUE LA DIRECCION GENERAL DE LA ECONOMIA ESTA A CARGO DEL ESTADO. POR MANDATO DE LA LEY SE INTERVENDRA SOBRE UNA Y OTRA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS. COSA JUZGADA.
Demandante: Orlando Ramírez. Norma demandada: Decretos números 2624 de 1983 y 2440 y 2454 de 1986. Sentencia del 12 de marzo de 1987. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía*. Exequible los Decretos números 2440 y 2454 de 1986. En cuanto al Decreto número 2624, la Corte remite a sentencia del de 1983, radicación 1515. 305

LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEBEN INTERPRETARSE ARMONICAMENTE, NO EN FORMA INDIVIDUALIZADA. VACACIONES JUDICIALES. LA REGULACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA REPUBLICA (ARTICULO 76-10). COSA JUZGADA.
Demandante: César Castro G. Norma demandada: Decreto número 3664 de 1950, Ley 141 de 1961, artículo 698 del Decreto número 1400 de 1970, artículo 2° del Decreto número 546 de 1971 y artículo 1° de la Ley 31 de 1971. Sentencia del 17 de marzo de 1987. Conjuez ponente: doctor *Oscar Alzate Peña*. Remite a sentencia del 28 de junio de 1956 en cuanto al Decreto número 3664 de 1950. Y declara exequible la Ley 141 de 1961; el artículo 698 del Decreto número 1400 de 1970 y el artículo 2° del Decreto número 546 de 1971 y el 1° de la Ley 31 de 1971. Salvamento de voto del doctor *Tarcisio Roldán Palacio*..... 317

SE OTORGA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE POLICIA JUDICIAL EN FORMA COMPLETAMENTE GENERICA Y ABIERTA, NO SE ESTABLECE LA COMPETENCIA SOBRE DETERMINADOS TIPOS DE DELITOS, QUEDANDO COMPRENDIDAS SITUACIONES QUE NADA TUVIERON QUE VER CON LA CRISIS, EXCEDIENDO ASI LOS PRECISOS LIMITES A LOS CUALES DEBE CEÑIRSE EL PRESIDENTE PARA EXPEDIR LAS MEDIDAS DE EXCEPCION. CUERPOS ESPECIALIZADOS EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. *ESTADO DE SITIO.*
Decreto Legislativo número 155 de 1987. Marzo 19 de 1987. Ponente: doctor *Jairo E. Duque P.*
Inexequible el Decreto número 155 de 1987 329

MODIFICACIONES AL REGIMEN DEL SUBSIDIO FAMILIAR. EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO, DENTRO DE LOS LIMITES DE LA CONSTITUCION, PARA LA

Pág.

EMPRESA DE CUALQUIER NATURALEZA JURIDICA, Y EN LA INICIATIVA PRIVADA, SIEMPRE QUE SE ASEGURE LA LIBERTAD DE ESTAS. *LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR Y SU NATURALEZA LEGAL:* SON ENTES JURIDICOS DE NATURALEZA ESPECIALISIMA, SE CONSTITUYEN BAJO LAS REGLAS DEL DERECHO PRIVADO COMO CORPORACIONES SIN ANIMO DE LUCRO Y CUMPLIENDO FUNCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

Demandante: Alvaro Copete. Norma demandada: varios artículos de la Ley 21 de 1982. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Sentencia del 19 de marzo de 1987. Exequibles las normas demandadas. 335

ESTATUTO SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ABOGACIA, ENTIDADES ENCARGADAS DE SANCIONAR LAS FALTAS EN EL EJERCICIO DE LA MISMA. TRIBUNAL DISCIPLINARIO. TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL. EL PRINCIPIO DE LA SEPARACION DE PODERES NO ES ABSOLUTA Y SE VE ATENUADO POR LA COLABORACION ARMONICA QUE LA CONSTITUCION ORDENA ENTRE LAS DISTINTAS RAMAS DEL PODER PUBLICO.

Demandante: Vicente Noguera. Norma demandada: artículo 66, Ley 196 de 1971. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía*. Sentencia del 26 de marzo de 1987. Exequible la norma demandada. 348

LA MANIFESTACION DE QUE EL ARTE INDIGENA PERTENECE AL PATRIMONIO CULTURAL, AFIRMA LOS VALORES DE LA NACIONALIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS DE DOMINIO QUE SOBRE LA CREACION ARTISTICA LES CORRESPONDAN A SUS AUTORES. EL ARTE INDIGENA, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES INCLUSIVE DANZAS, CANTO, ARTESANIAS, DIBUJOS, ESCULTURAS, PERTENECEN AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION.

Demandante: Miguel Gil. Norma demandada: artículo 189 de la Ley 23 de 1982. Ponente: doctor *Jairo E Duque Pérez*. Sentencia del 2 de abril de 1987..... 353

ESTATUTO CONTRACTUAL DE LAS INTENDENCIAS Y COMISARIAS. UN REGIMEN O ESTATUTO FISCAL ABARCA TODOS LOS ASPECTOS QUE INTERESAN A LOS BIENES, RENTAS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACION, AL MANEJO, DESTINO Y UTILIZACION DE LOS MISMOS, LA CONTRATACION Y OBVIAMENTE EL DEBIDO CONTROL SOBRE TODAS LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES. EXCLUIR DE ESE CONJUNTO LA GESTION DE VIGILANCIA IMPLICA SUPONER, QUE ELLA ES AJENA A LAS FINANZAS DE ESTADO, LO CUAL RIÑE ABIERTAMENTE CON LOS MAS ELEMENTALES PRINCIPIOS DE LA HACIENDA PUBLICA.

Demandante: Luis Enrique Carrillo. Norma demandada: artículo 12 del Decreto número 468 de 1986. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Sentencia del 2 de abril de 1987. Exequible el artículo 12 del Decreto número 468 de 1987..... 358

LIBERTAD DE EMPRESA. PROTECCION DE LA FAMA COMERCIAL. ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. ELEMENTOS.

Demandante: Miguel Gil. Norma demandada: artículo 516 numeral 6° del C. de C. Sentencia del 2 de abril de 1987. Ponente: doctor *Jesús Vallejo M*. Exequible la norma demandada..... 363

EL OTORGAMIENTO DE FUNCIONES DE LA POLICIA JUDICIAL A OFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES ES INCONSTITUCIONAL. PRINCIPIO DE SEPARACION DE LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO.

Ponente: doctor *Jairo Duque P*. Decreto Legislativo número 340 de 1987. Sentencia del 23 de abril de 1987. Inconstitucional el decreto revisado..... 366

Pág.

LIMITACIONES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR... ES LICITA LA REPRODUCCION, DE UNA OBRA LITERARIA O CIENTIFICA, ORDENADA U OBTENIDA POR EL INTERESADO EN UN SOLO EJEMPLAR PARA USO PRIVADO Y SIN FINES DE LUCRO. LA CONSTITUCION NO LE IMPONE AL LEGISLADOR EL DEBER DE TUTELAR DE SIMILAR MANERA, LAS DISTINTAS FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION. FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD, LA CUAL IMPONE QUE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA DEBEN CUMPLIRSE CON ESTRICTO RIGOR.

Norma demandada: artículo 37, Ley 23 de 1982. Demandante: Miguel Gil. Sentencia del 23 de abril de 1987. Ponente: doctor *Jairo E. Duque Pérez.* Exequible artículo 37 Ley 23 de 1982. 372

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIAS DE NARCOTRAFICO. GARANTIA ADECUADA PARA LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS. PARA ESTE TIPO DE DELITOS, LOS INCRIMINADOS, NO TENDRAN DERECHO A LA LIBERTAD PROVISIONAL NI A LA CONDENA CONDICIONAL. ESTADO DE SITIO. FAVORABILIDAD DE LA LEY PENAL.

Decreto número 468 de 1987. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.* Sentencia del 30 de abril de 1987. Exequible el decreto revisado. 377

AGRUPACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONTROL DE SUSTANCIAS QUE CAUSAN ADICION Y EL SERVICIO AEREO DE LA POLICIA NACIONAL. *ESTADO DE SITIO.* RELACION DIRECTA ENTRE EL CONTENIDO DEL DECRETO Y LAS CAUSAS DE PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO.

Decreto número 423 de 1987. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.* Sentencia del 30 de abril de 1987. Constitucional el decreto revisado..... 384

INTERRUPCION CIVIL, ES TODA ACCION O PRETENSION DEDUCIDA POR EL DUEÑO CONTRA EL POSEEDOR, MEDIANTE LA CUAL ESTE QUEDA ADVERTIDO DEL INEQUIVOCO PROPOSITO DE AQUEL DE PONER TERMINO A SU RENUENCIA O DEJADEZ EN EL EJERCICIO DEL DERECHO, AUN CUANDO NO SEA NECESARIAMENTE LA ACCION DE DOMINIO O REIVINDICATORIA. *"ANIMUS –SIBI– HABENDI".* INEXEQUIBILIDAD EN PARTE DEL NUMERAL 4° DEL ARTICULO 413 DEL C. DE P. C.

Norma demandada numeral 4° del artículo 413 del Decreto número 1400 de 1970. Demandante: Héctor Enrique Quiroga C. Sentencia del 14 de mayo de 1987. Ponente: doctor *Jairo E. Duque Pérez.* Inexequible el numeral 4° del artículo 413 del Decreto número 1400 de 1970..... 389

DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO DE DERECHO SEGUN EL CUAL *TODA NORMA EXCEPCIONAL ES DE INTERPRETACION ESTRICTA,* NO SE AJUSTAN A LA CARTA LOS ACTOS DE GOBIERNO QUE, INVOCANDO LAS ESPECIALISIMAS FACULTADES PROPIAS DEL *ESTADO DE SITIO,* PRETENDEN REGULAR ASUNTOS AJENOS AL ESPECIFICO OBJETIVO DE RESTABLECER EL ORDEN QUEBRADO, O LOS QUE, BAJO PRETEXTO DE HACERLO, CONSAGREN DISPOSICIONES CUYA MATERIA APENAS INDIRECTAMENTE GUARDA RELACION CON LOS MISMOS FINES.

Decreto número 555 de 1987. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.* Sentencia del 19 de mayo de 1987. Inexequible el Decreto número 555 de 1987..... 401

Pág.

ESTADO DE SITIO. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. EL GOBIERNO, OBRANDO COMO LEGISLADOR EXTRAORDINARIO DE ACUERDO CON LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO 121 C.N. PUEDE MODIFICAR LA COMPETENCIA DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, REDISTRIBUYENDOLA ENTRE LOS EXISTENTES O CREANDO OTROS NUEVOS QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE JERARQUIZACION, INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA QUE LA CONSTITUCION DETERMINA.

Decreto número 565 de 1987. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía*. Marzo 10 de 1987. Exequible el Decreto revisado 417

MEDIDAS TENDIENTES AL ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS DEL ESTADO, LIQUIDACION AL IMPORTE DE IMPUESTOS INDIRECTOS, RENTA, PATRIMONIO Y GANANCIAS OCASIONALES, A CARGO DE AQUELLOS ASALARIADOS NO OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION DE RENTA. LAS DEDUCCIONES HECHAS A LAS PERSONAS NO OBLIGADAS A DECLARAR NO PODRAN SER OBJETO DE DEVOLUCION YA QUE POR SER HECHAS A TITULO DE ABONO O PAGO DEL IMPUESTO TIENEN CARACTER DEFINITIVO. CONFORME A LA CONSTITUCION, EL LEGISLADOR ES AUTONOMO PARA ADOPTAR EL SISTEMA DE TRIBUTACION QUE A BIEN TENGA PROVEER A SU EFECTIVIDAD.

Norma demandada: artículo 37 de la Ley 55 de 1985. Demandante: Alfonso Marín Morales. Sentencia del 19 de mayo de 1987. Ponente: doctor *Jairo E. Duque Pérez*. Exequible la norma demandada 423

PROPOSICION JURIDICA COMPLETA. SISTEMAS Y DIRECTRICES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL EN LA REPUBLICA. RESULTARIA A TODAS LUCES EXCESIVO QUE EL CONTROL FISCAL SE EJERCIERA SOBRE TODAS LAS PERSONAS Y ENTIDADES PRIVADAS, SIN DISTINCION ALGUNA, AUN EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES NO CUMPLEN FUNCIONES DE GESTION FISCAL PROPIAMENTE DICHA, PUES ELLO SIGNIFICARIA EXTENDER LAS FUNCIONES DEL CONTRALOR MUCHO MAS ALLA DEL AMBITO ESPECIFICO QUE LE HA SEÑALADO LA CARTA.

Norma demandada: Ley 20 de 1975, artículo 2°. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Demandante: Eduardo Laverde. Sentencia del 19 de mayo de 1987. Inexequible el artículo 2° de la Ley 20 de 1975 en parte. 433

COSA JUZGADA. NORMAS DE CARACTER LEGAL SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Norma demandada: artículo 385 Decreto número 1333 de 1986. Demandante: Rubén A. Serna. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Sentencia del 19 de mayo de 1987. Remite a sentencia del 13 de noviembre de 1986. 439

COSA JUZGADA. DERECHOS DE AUTOR.

Demandante: Edgar Sixto Tafur. Norma demandada: Ley 23 de 1982. Sentencia del 19 de mayo de 1983. Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Remite a sentencia de 21 de octubre de 1982. 442

Pág.

COSA JUZGADA. RECURSOS DENTRO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. LAS DOS INSTANCIAS.
Norma demandada: artículo 57 de la Ley 2ª de 1984. Demandante: Alfonso López Carrascal. Magistrado ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía*. Sentencia del 19 de mayo de 1987. Remite a sentencia número 43 de 1984. 445

ACCION DE INEXEQUIBILIDAD CONTRA EL NUEVO *CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL*. ALCANCE DE FALLO. SE ACUSA LA TOTALIDAD DEL DECRETO NUMERO 050 DE 1987, CON EL UNICO CARGO DE QUE EL EJECUTIVO SE EXCEDIO EN EL USO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS. INTEGRACION DE LA COMISION ASESORA. LÍMITE TEMPORAL DE LA HABILITACION LEGISLATIVA. FALLOS DEFINITIVOS, PERO NO ABSOLUTOS.
Demandante: Guillermo Romero García. Norma demandada: Decreto número 050 de 1987. Ponente: doctor *Jairo E. Duque Pérez*. Sentencia del 21 de mayo de 1987. Exequible el Decreto número 050 de 1987, en cuanto su expedición y vigencia se cumplieron dentro del término previsto de la Ley 52 de 1984. 449

RES JUDICATA. COSA JUZGADA. CONDENAS CONTRA ENTIDADES PUBLICAS, ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, SU EJECUTABILIDAD ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA, DURANTE LOS DIECIOCHO MESES SIGUIENTES A SU EJECUTORIA.
Demandante: José Ríos Trujillo. Norma demandada: parte del inciso 4° del artículo 177 del C.C.A. Sentencia del 21 de mayo de 1987. Ponente: doctor *Hernando Gómez O.* Estése a lo dispuesto en sentencia de 2 de agosto de 1984. 568

LA NATURALEZA CONTRAVENCIONAL DE LA INFRACCION DE TRANSITO Y SU CONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO. "CONTRA EL INFORME DEL AGENTE DE CIRCULACION FIRMADO POR UN TESTIGO SOLAMENTE PROCEDE LA TACHA DE FALSEDAD". CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE, LAS AUTORIDADES CIVILES DE POLICIA CONOCEN DE LAS INFRACCIONES CONTRAVENCIONALES DE TRANSITO.
Demandante: Antonio Quintero. Norma demandada: artículo 92 Ley 33 de 1986. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Sentencia del 28 de mayo de 1987. Exequible la norma demandada. 573

REMUNERACION A JUECES ESPECIALIZADOS, CON RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE TRABAJO Y SU CORRESPONDIENTE ESTIMULO. ESTOS JUECES ESPECIALIZADOS TENDRAN A SU CARGO EL CONOCIMIENTO DE CIERTOS DELITOS RELACIONADOS CON EL NARCOTRAFICO, LA FABRICACION Y TRAFICO DE ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS MILITARES. CONEXIDAD FORMAL Y MATERIAL. *ESTADO DE SITIO*.
Decreto número 735 de 1987. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Sentencia del 4 de junio de 1987. Constitucional el Decreto número 735 de 1987. 580

CARACTER EXCEPCIONAL DE LA INSTITUCION PREVISTA EN EL ARTICULO 121 C.N. LA CONEXIDAD QUE PREVE EL REFERIDO ARTICULO EXCLUYE TODA MEDIDA AJENA A LAS CAUSAS DE PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO Y, DESDE LUEGO, TAMBIEN AQUELLAS TENDIENTES A REMEDIAR CAUSAS REMOTAS O INDIRECTAS DE LA SITUACION ANORMAL QUE SE PRETENDE CONJURAR. NOR-

Pág.

MAS CONDUCENTES AL RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO EN LA ZONA GEOGRAFICA DE URABA. ESTADO DE SITIO.
Decreto Legislativo número 666 de 1987. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.* Sentencia del 4 de junio de 1987. Inconstitucional el Decreto número 666 de 1987. Salvamento de voto del doctor *Gustavo Gómez V.* Salvamento de voto del doctor *Jorge Iván Palacio.* 585

INHIBICION PARA QUE EL ORGANO DEFENSOR DE LA CARTA FUNDAMENTAL PROFIERA SENTENCIA EN CUALQUIER SENTIDO SOBRE LA VALIDEZ JURIDICA DEL PRONUNCIAMIENTO NACIONAL, POR SER UNA MANIFESTACION DEL CONSTITUYENTE PRIMARIO A TRAVES DE LA VOLUNTAD CIUDADANA. ACTO PLEBISCITARIO DEL 1° DE DICIEMBRE DE 1957.
Demandante: Alfonso López Carrascal. Norma demandada: Acto plebiscitario de 1957 y decretos números 247 y 251 de 1957. Sentencia del 9 de junio de 1987. Magistrado ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.* Declárase inhibida para proferir decisión de fondo..... 608

EN EJERCICIO DE LA MISION QUE A LA CORTE LE CONCIERNE DE SER GUARDIAN INTEGRAL DE LA CONSTITUCION, LE CORRESPONDE SEÑALAR O FIJAR EL SENTIDO Y ALCANCE DE LA NORMA QUE ANTE ELLA SE IMPUGNA A FIN DE ADECUARLA AL ESTATUTO FUNDAMENTAL. POR EL PRINCIPIO DE LA UNIVERSALIDAD DE LAS PRUEBAS Y DE LA UNIDAD PROBATORIA, LOS DISTINTOS MEDIOS DE CONVICCION QUE OBRAN EN EL PROCESO FAVORECEN O PERJUDICAN A TODAS LAS PARTES AUNQUE SEAN PEDIDAS SOLO POR UNA, DESCONOCIMIENTO SOBRE EL DERECHO DEL SINDICADO A PEDIR LA REAPERTURA DE LA INVESTIGACION: *ESTATUTO PENAL ADUANERO.* EL DEBIDO PROCESO.
Demandante: Alfonso López Carrascal. Norma demandada: Inciso 3° del artículo 53 del Decreto número 955 de 1970. Sentencia del 9 de junio de 1987. Ponente: doctor *Jairo Duque Pérez.* Inexequible la norma demandada. 618

LA MONEDA Y SUS MANIFESTACIONES INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES ECONOMICAS OBJETO DE INTERVENCION ESTATAL. *FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.* SI PUEDE EL GOBIERNO A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA, DICTAR NORMAS ECONOMICAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIANZA GENERAL EN EL SECTOR FINANCIERO, POR VIA EXCEPCIONAL DEL ARTICULO 122 DE LA CONSTITUCION NACIONAL LO ESTA TANTO MAS.
Demandante: Mario Iván Algarra. Norma demandada: Ley 117 de 1985. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.* Sentencia del 9 de junio de 1987. Estése a lo resuelto en sentencia de marzo 10 de 1987, en cuanto al parágrafo del artículo 16 de la Ley 117 de 1985. Inexequibles parcialmente los artículos 11 y 12 de la Ley 117 de 1985. Exequible las restantes normas de la Ley 117 de 1985.. 624

EVOLUCION DEL SISTEMA POLITICO NACIONAL. SISTEMAS FEDERAL Y UNITARIO. LA IGUALDAD DE DERECHOS POLITICOS. CALIDADES PARA SER ELEGIDO ALCALDE.
Demandante: Jaime Orlando Santofimio. Norma demandada: artículo 2° (parcialmente) Ley 78 de 1986. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.* Sentencia del 11 de junio de 1987. Exequible la norma acusada. 647

AUNQUE NO SE TRATA DE CREACION DE UNA JURISDICCION ESPECIALIZADA, DIFERENTE DE LA ORDINARIA, DE LA QUE FORMARIA PARTE EL *TRIBUNAL*

Pág.

ESPECIAL DE INSTRUCCION, ESTE NO SE INTEGRA ADECUADAMENTE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA RAMA JURISDICCIONAL, PUES NO SE SITUA DENTRO DEL ENGRANAJE JURIDICO EXISTENTE. ESTADO DE SITIO. LA CONEXIDAD.
Decreto número 750 de 1987. Ponente: doctor *Jesús Vallejo Mejía.* Sentencia del 16 de junio de 1987. Inconstitucional el Decreto número 750 de 1987 654

LA FIGURA ADMINISTRATIVA DEL ENCARGO DE UNA POSISION EN ESTE CASO LA DE MINISTRO DE ESTADO, INVISTE DE LA PLENITUD DE ATRIBUCIONES PROPIAS DEL CARGO Y POR ENDE FACULTADES PARA CONSTITUIR GOBIERNO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. TRIBUNAL ESPECIAL PARA GRAVES DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL. INCONSTITUCIONALIDAD. *ESTADO DE SITIO.*
Decreto número 790 de 1987. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora.* Sentencia del 16 de junio de 1987. Inconstitucional el Decreto número 790 de 1984..... 677

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES AL EJECUTIVO PARA ADHERIR A LOS TRATADOS FIRMADOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MONTEVIDEO DE 1889 SOBRE DERECHO CIVIL INTERNACIONAL Y SOBRE DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL. LA DECISION JURISDICCIONAL, SOBRE EL PUNTO ANTERIOR, EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD CUALQUIERA QUE SEA SU SENTIDO, EN NADA REPERCUTIRA DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO SOBRE LOS EXPRESADOS ACTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL, NI AFECTARA EL COMPROMISO CONTRAIDO POR COLOMBIA CON LOS DEMAS ESTADOS FIRMANTES O ADHERENTES.
Demandante: Santiago Uribe. Norma demandada: Ley 40 de 1933. Sentencia del 18 de junio de 1987. Inexequible la Ley 40 de 1933. Salvamento de voto del doctor *José Alejandro Bonivento Fernández.* Salvamento de voto del doctor *Lisandro Martínez Zúñiga*..... 685

COSA JUZGADA. MEDIDAS SOBRE EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE URBANO Y METROPOLITANO DE PASAJEROS.
Demandante: José María del Castillo. Norma demandada: Decreto número 2454 de 1986. Sentencia del 18 de junio de 1987. Ponente doctor *Jairo E. Duque Pérez.* Estése a lo resuelto en sentencia del 12 de marzo de 1987. 694

COSA JUZGADA. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE. PRESTACION DEL SERVICIO.
Demandante: José María del Castillo. Norma demandada: artículos 1°, 2° y 3° del Decreto número 2440 de 1986. Sentencia del 18 de junio de 1987. Magistrado ponente: doctor *Fabio Morón Díaz.* 699

INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY QUE APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LAS REPUBLICAS DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EN LA LEY 68 DE 1986, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SANCIONO Y PROMULGO EL PROYECTO DE LEY QUE YA HABIA SIDO SANCIONADO Y PROMULGADO COMO LEY DE LA REPUBLICA POR EL MINISTRO DE GOBIERNO DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES, O SEA LA LEY ACUSADA NO TUVO TRAMITE LEGISLATIVO DISTINTO DE LA LEY 27 DE 1980 QUE FUE DECLARADO INEXEQUIBLE.

Pág.

Demandante: Miguel Romero Díaz. Norma demandada: Ley 68 de 1986. Sentencia del 25 de junio de 1987. Ponente: doctor *Fabio Morón Díaz*. Inexequible la Ley 68 de 1986. Salvamento de Voto del doctor *Alfonso Suárez de Castro*. Salvamento de voto de los doctores *Jesús Vallejo Mejía, Juan Hernández S. Jacobo Pérez, Rodolfo Mantilla, Héctor Marín, Jaime Giraldo, Edgar Saavedra, Jorge Carreño, Guillermo Dávila, Guillermo Duque*. 703

ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL. LAS DISPOSICIONES QUE DEFINEN LAS MODALIDADES DE LA CARRERA JUDICIAL DIFIEREN DE LAS DEL DECRETO NUMERO 2400 DE 1986, PUES MIENTRAS EN ESTE SE ESTRUCTURABA LA CARRERA BAJO LA DIRECCION DE LA ESCUELA JUDICIAL, ENTIDAD DEPENDIENTE DEL EJECUTIVO, SE CONFUNDEN CLAROS MANDATOS CONSTITUCIONALES SOBRE LA SEPARACION DE LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO. DEFINIDA, DOBLEMENTE POR EL LEGISLADOR ORDINARIO LA ESFERA DEL EXTRAORDINARIO. NO TIENE ESTE, PARA ALCANZAR SU COMETIDO, OTRAS LIMITACIONES ADICIONALES DISTINTAS DE LA PROPIA CONSTITUCION. COMISION ASESORA.
Demandante: Arturo Parrado Gutiérrez. Norma demandada: Decreto número 0052 de 1987. Sentencia del 25 de junio de 1987. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Inexequibles los artículos 79, literal a); 87, inciso 2º, 114, 118, 119, 121, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 138 del Decreto número 052 de 1987. Exequibles las siguientes normas: el artículo 3º en parte. El artículo 9º en parte. El artículo 15 en parte. El artículo 29 en parte. Los artículos 40 y 41 en parte. El artículo 47 en parte y las demás normas del mencionado Decreto. 730

COSA JUZGADA. ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL.
Demandante: Héctor Jesús Rodríguez. Norma demandada: Decreto número 52 de 1987. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Sentencia del 25 de junio de 1987. Estése a lo resuelto en sentencia del 25 de junio de 1987. 787

COSA JUZGADA. DECRETO-LEY NUMERO 0052 DE 1987 "POR EL CUAL SE REVISA, REFORMA Y PONE EN FUNCIONAMIENTO LA CARRERA JUDICIAL".
Demandante: Gerardo Delgado Silva. Norma demandada: Decreto número 052 de 1987. Sentencia del 25 de junio de 1987. Ponente: doctor *Hernando Gómez Otálora*. Estése a lo resuelto en sentencia del 25 de junio de 1987 822

En los Talleres Editoriales de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
se terminó el diseño e impresión de esta publicación.
Bogotá, D. E., septiembre de 1988.